

**UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID**

**FACULTAD DE DERECHO**

**Departamento de Derecho Penal**



**TESIS DOCTORAL**

**Bien jurídico protegido y tipicidad en el delito de blanqueo de capitales**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

**Carlos Castellanos Moreno**

Directores

**Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles  
Félix María Pedreira González**

**Madrid, 2017**

**UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID**

**FACULTAD DE DERECHO**

**Departamento de Derecho Penal**



**TESIS DOCTORAL**

**BIEN JURÍDICO PROTEGIDO Y TIPICIDAD EN  
EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITAL**

**AUTOR**

**Carlos Castellanos Moreno**

Bajo la dirección de los Profesores

Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles  
Félix María Pedreira González

**Madrid, 2015**

*A la memoria de Susana Huerta*

# INDICE

<b>ABREVIATURAS</b>	<b>5</b>
<b>AGRADECIMIENTOS</b>	<b>7</b>
<b>ABSTRACT</b>	<b>11</b>
<b>INTRODUCCIÓN</b>	<b>17</b>
<b>CAPÍTULO PRIMERO. EL FENÓMENO DEL BLANQUEO DE CAPITALS. FASES DEL BLANQUEO. NORMATIVA REGULADORA</b>	<b>23</b>
1.1 EL FENÓMENO DEL BLANQUEO DE CAPITALS	25
1.1.1. CONSIDERACIONES PREVIAS	25
1.1.2. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS FENOMENOLÓGICAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES	34
1.1.2.1. INTERNACIONALIZACIÓN. LA PROBLEMÁTICA DE LOS PARAÍSO FISCALES Y ZONAS <i>OFFSHORE</i>	40
1.1.2.2. DINAMISMO Y ADAPTABILIDAD	49
1.1.2.3. TENDENCIA A NUEVAS FÓRMULAS DE LAVADO Y A LA PROFESIONALIZACIÓN	50
1.1.2.4. VINCULACIÓN A LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA	52
1.2. FASES DEL BLANQUEO DE CAPITALS	66
1.2.1. FASE DE COLOCACIÓN	67
1.2.2. FASE DE CONVERSIÓN U OCULTACIÓN	71
1.2.3. FASE DE INTEGRACIÓN	73
1.3. NORMATIVA REGULADORA	75
1.3.1. NORMATIVA INTERNACIONAL	75
1.3.2. NORMATIVA DE DERECHO INTERNO	95
<b>CAPÍTULO SEGUNDO. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALS. EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO</b>	<b>117</b>
2.1 EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALS	119
2.1.1. INTRODUCCIÓN	119
2.1.1. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS	121
2.1.2. REGULACIÓN ACTUAL. CÓDIGO PENAL DEL 1995 Y SUS SUCESIVAS REFORMAS	127

2.1.3. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALS COMO MANIFESTACIÓN DE LA EXPANSIÓN DEL DERECHO PENAL. ¿EJEMPLO PARADIGMÁTICO DE LA INSTAURACIÓN DE UN “DERECHO PENAL DEL ENEMIGO”?	135
2.2. EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALS	151
2.2.1. CONCEPTO Y FUNCIONES DEL BIEN JURÍDICO	151
2.2.1.1 FUNCIÓN LEGITIMADORA	153
2.2.1.2. FUNCIÓN INTERPRETATIVA	160
2.2.2. PROBLEMÁTICA DEL BIEN JURÍDICO EN EL BLANQUEO DE CAPITALS	162
2.2.2.1. INTRODUCCIÓN	162
2.2.2.2. EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO POR EL DELITO PREVIO. LA TEORÍA DEL MANTENIMIENTO	165
2.2.2.4. LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	169
2.2.2.5. EL ORDEN SOCIOECONÓMICO	176
2.2.2.6. EL BLANQUEO COMO DELITO PLURIOFENSIVO	187
2.2.3. RECAPITULACIÓN Y TOMA DE POSICIÓN	196
<b>CAPÍTULO TERCERO. EL TIPO OBJETIVO EN EL DELITO BASICO DE BLANQUEO DE CAPITALS ( I )</b>	<b>207</b>
3.1 INTRODUCCIÓN. PROBLEMÁTICA EN TORNO A LA DESCRIPCIÓN DE LAS CONDUCTAS TÍPICAS	209
3.2. CONDUCTAS TIPIFICADAS EN EL ARTÍCULO 301.1 CP	214
3.2.1. INTERPRETACIONES RESTRICTIVA Y AMPLIA RESPECTO AL ALCANCE DE LAS FINALIDADES ESPECÍFICAMENTE PREVISTAS	214
3.2.1.1. INTERPRETACIÓN AMPLIA	214
3.2.1.2. INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA	219
3.2.1.3. TOMA DE POSICIÓN. CONDUCTAS TÍPICAS QUE CONFORMAN EL DELITO DE BLANQUEO	222
3.2.2. LA ADQUISICIÓN, POSESIÓN, UTILIZACIÓN, CONVERSIÓN O TRANSMISIÓN DE BIENES DE ORIGEN DELICTIVO	225
3.2.2.1. ADQUISICIÓN DE BIENES DE ORIGEN DELICTIVO	227
3.2.2.2. CONVERSIÓN DE BIENES DE ORIGEN DELICTIVO	229
3.2.2.3. TRANSMISIÓN DE BIENES DE ORIGEN DELICTIVO	231
3.2.2.4. POSESIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES DE ORIGEN DELICTIVO	234
3.2.3. LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRO ACTO PARA OCULTAR, ENCUBRIR O AYUDAR	252
3.3. CONDUCTAS TIPIFICADAS EN EL ARTÍCULO 301.2 CP	260
3.4. LA PUNICIÓN DEL AUTOBLANQUEO	274
3.4.1. INTRODUCCIÓN. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	274
3.4.2. EL DEBATE DOCTRINAL Y LAS DIFERENTES SOLUCIONES. INTERPRETACIONES JURISPRUDENCIALES CONTRADICTORIAS	275
3.4.3. LA PUNICIÓN EXPRESA DEL AUTOBLANQUEO	287
3.4.4. VALORACIÓN PERSONAL	294

## **CAPÍTULO CUARTO. EL TIPO OBJETIVO EN EL DELITO BASICO DE BLANQUEO DE CAPITALES ( II )**

**301**

4.1. PROBLEMAS PARTICULARES DE LA IMPUTACIÓN OBJETIVA EN LAS DIFERENTES CONDUCTAS DE BLANQUEO. CRITERIOS NORMATIVOS LIMITADORES DE LA TIPICIDAD	303
4.1.1. INTRODUCCIÓN. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	303
4.1.2. LA TEORÍA DE LA IMPUTACIÓN OBJETIVA	305
4.1.2.1. EVOLUCIÓN DE LA TEORÍA Y CONFIGURACIÓN DOGMÁTICA	305
4.1.2.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA IMPUTACIÓN OBJETIVA	313
4.1.3. OTRAS CATEGORÍAS DOGMÁTICAS DE CARÁCTER NORMATIVO	316
4.1.3.1. LA ADECUACIÓN SOCIAL	317
4.1.3.2. EL RIESGO PERMITIDO	321
4.1.3.3. EL PRINCIPIO DE CONFIANZA	326
4.1.3.4. LA PROHIBICIÓN DE REGRESO	328
4.1.3.5. LOS DENOMINADOS ACTOS NEUTRALES	331
4.1.4. TRATAMIENTO JURISPRUDENCIAL DE LA IMPUTACIÓN OBJETIVA Y DE OTRAS CATEGORÍAS DOGMÁTICAS NORMATIVAS	339
4.1.5. RESTRICCIÓN NORMATIVA DEL ÁMBITO OBJETIVO DEL TIPO DE BLANQUEO DE CAPITALES	345
4.1.6. CONCLUSIONES	358
4.2. EL BLANQUEO POR OMISIÓN	361
4.2.1. INTRODUCCIÓN	361
4.2.2. ACCIÓN Y OMISIÓN. OMISIÓN PURA Y COMISIÓN POR OMISIÓN. CONFIGURACIÓN DE LA OMISIÓN EN EL DELITO DE BLANQUEO	362
4.2.3. EXIGENCIAS TÍPICAS DEL DELITO DE BLANQUEO OMISIVO	368
4.2.3.1. LA INFRACCIÓN DE UN ESPECIAL DEBER JURÍDICO (POSICIÓN DE GARANTE)	369
4.2.3.2. LA EQUIVALENCIA ESTRUCTURAL O VALORATIVA	378
4.2.3.3. LA POSIBILIDAD DE EVITAR EL RESULTADO	381
4.2.4. CONCLUSIONES. MODALIDADES Y REQUISITOS DEL DELITO DE BLANQUEO OMISIVO	382
4.3. EL OBJETO MATERIAL DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES	387
4.3.1. INTRODUCCIÓN	387
4.3.2. ELEMENTOS DEFINITORIOS DEL OBJETO MATERIAL DEL DELITO	390
4.3.2.1. LOS BIENES	390
4.3.2.2. LA ACTIVIDAD DELICTIVA COMO HECHO DE REFERENCIA	395
<i>EL DELITO FISCAL COMO DELITO PREVIO DEL BLANQUEO DE CAPITALES. LA CUOTA TRIBUTARIA DEFRAUDADA COMO OBJETO DEL DELITO DE BLANQUEO</i>	404
<i>a) Tesis que rechazan la idoneidad de la cuota tributaria como objeto material del delito de blanqueo</i>	407
<i>b) Tesis que consideran idónea la cuota tributaria defraudada como objeto material del delito de blanqueo</i>	411
<i>c) Toma de posición y conclusiones</i>	414
4.3.2.3. “ORIGEN” Y “PROCEDENCIA DELICTIVA” COMO NEXO DE UNIÓN ENTRE EL BIEN Y EL DELITO PREVIO	418
4.3.3. LA EXTENSIÓN DEL BLANQUEO DE BIENES SUSTITUTIVOS. CRITERIOS RELATIVOS A LA DESCONTAMINACIÓN DEL BIEN	420

<b>CAPÍTULO QUINTO. EL TIPO SUBJETIVO EN EL DELITO BASICO</b>	<b>427</b>
<b>DE BLANQUEO DE CAPITALS</b>	
5.1 INTRODUCCIÓN. PROBLEMÁTICA RELATIVA AL TIPO DOLOSO	429
5.2 EL CONOCIMIENTO DE LA PROCEDENCIA DELICTIVA DEL BIEN	431
5.2.1 NATURALEZA JURÍDICA, OBJETO Y ALCANCE DEL CONOCIMIENTO	431
5.2.2. LA ACREDITACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL ORIGEN DELICTIVO DEL BIEN. LA PRUEBA INDICIARIA	436
5.2.3. GRADO DEL CONOCIMIENTO SOBRE EL ORIGEN DELICTIVO DEL BIEN. DOLO DIRECTO DE PRIMER GRADO, DOLO DIRECTO DE SEGUNDO GRADO Y DOLO EVENTUAL. LA IGNORANCIA DELIBERADA	445
5.3 LAS FINALIDADES DE ENCUBRIR, OCULTAR O AYUDAR A LAS QUE DEBE RESPONDER LA REALIZACIÓN DE “CUALQUIER OTRO ACTO”	461
5.4 CONCLUSIONES Y TOMA DE POSICIÓN	466
5.5. EL ERROR EN EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALS	467
5.5.1. INTRODUCCIÓN. FORMAS DE ERROR	467
5.5.2. ERROR RESPECTO AL ORIGEN DELICTIVO DEL BIEN	469
5.5.2. ERROR DE PROHIBICIÓN EN EL DELITO DE BLANQUEO	473
5.5.3. ERROR SOBRE LAS CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN	475
5.5.4. BREVE SÍNTESIS	475
5.6. EL TIPO IMPRUDENTE DE BLANQUEO DE CAPITALS. EL ARTÍCULO 301.3 CP	476
5.6.1. INTRODUCCIÓN. OPORTUNIDAD DE LA INCRIMINACIÓN DEL BLANQUEO IMPRUDENTE Y ÁMBITO DE EXTENSIÓN	476
5.6.2. ELEMENTOS TÍPICOS DEL DELITO IMPRUDENTE. ESPECIAL REFERENCIA A LA GRAVEDAD DE LA INFRACCIÓN DEL DEBER CUIDADO	484
5.6.3. CONFORMACIÓN DE LA TIPICIDAD EN EL BLANQUEO DE CAPITALS IMPRUDENTE	491
5.6.4. DISTINCIÓN ENTRE CULPA CONSCIENTE Y DOLO EVENTUAL	499
5.6.5. EL TIPO IMPRUDENTE DE BLANQUEO: ¿DELITO COMÚN O DELITO ESPECIAL?	506
5.6.6. CONCLUSIONES Y TOMA DE POSICIÓN	512
<b>CONCLUSIONES</b>	<b>517</b>
<b>ÍNDICE JURISPRUDENCIAL</b>	<b>547</b>
<b>ÍNDICE BIBLIOGRÁFICO</b>	<b>551</b>

## ABREVIATURAS

AAP	Auto de la Audiencia Provincial
ADPCP	Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales
ADPE	Anuario de Derecho penal económico y de la empresa
AJCI	Auto del Juzgado Central de Instrucción
ALD/CFT	régimen anti lavado de dinero y contra la financiación del terrorismo
AP	Actualidad Penal
APG	Group on Money Laundering,
art.	artículo
ATS	Auto del Tribunal Supremo
BOE	Boletín Oficial del Estado
CC	Código Civil
CE	Constitución Española
CFATF	Caribbean Financial Action Task Force
CGPJ	Consejo General del Poder Judicial
coord.	coordinador
CP	Código Penal
DGRN	Dirección General de los Registros y del Notariado
dir.	director
Ed.	Editorial
ESAAMLG	Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group
FATF	Financial Action Task Force (siglas del GAFI)
FJ	Fundamento Jurídico
FMI	Fondo Monetario Internacional
FSRB	Grupos Regionales Estilo GAFI
GAFI	Grupo de Acción Financiera
GAFISUD	Financial Action Task Force on Money Laundering in South America
ICAM	Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
IPC	Índice de Precios al Consumo
LECr	Ley de Enjuiciamiento Criminal
LO	Ley Orgánica
NCCT	Non-Cooperative Countries and Territories
OCI	órganos de control interno
OCT	organizaciones criminales transnacionales
pág.	página
PEP	personas expuestas políticamente
PIB	Producto Interior Bruto
PTNC	países o territorios no cooperantes
RD	Real Decreto
SAN	Sentencia de la Audiencia Nacional
SAP	Sentencia de la Audiencia Provincial
SEPBLAC	Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales
ss.	siguientes
STC	Sentencia del Tribunal Constitucional
STS	Sentencia del Tribunal Supremo



TC	Tribunal Constitucional
TFUE	Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
TIF	transferencias informales de fondos
TS	Tribunal Supremo
UAF	Unidad de Análisis Financiero
UE	Unión Europea
UIF	Unidad de Inteligencia Financiera

## AGRADECIMIENTOS

Quiero dedicar estas primeras líneas a dejar constancia de mi expreso reconocimiento y mis más especiales agradecimientos a la profesora Susana Huerta Tocildo, maestra, amiga y directora de esta tesis durante los cinco primeros años de su elaboración. A lo largo estos últimos años, a pesar de vivir unas circunstancias personales adversas, Susana me brindó su simpatía y su incondicional apoyo para continuar con la ardua tarea que compartíamos. Además de animarme en los momentos más desalentadores, contribuyó con sus acertadas observaciones, consejos y constructivas críticas de manera decisiva a conformar el contenido y la estructura de este trabajo. Sólo espero que la parte que de él me corresponde esté a la altura de sus brillantes aportaciones, y haber sido merecedor de la confianza que depositó en mí.

Susana, de forma inesperada para mí, nos dejó el 30 de abril de este año. Desde entonces, he echado y echaré de menos esas prolongadas y siempre enriquecedoras conversaciones en su despacho de la facultad, que trascendían con mucho el objeto de nuestro trabajo. Era un verdadero placer hablar de tú a tú con una persona tan erudita y, a la vez, tan sencilla. También se me hace extraño no encontrármela junto a su gran amigo, Manuel Abellán -a quien agradezco inmensamente el especial cariño que me dispensó en momentos difíciles-, en los entreactos de la ópera, y comentar la calidad de la representación, disfrutando de un cigarro. Sin la ayuda y la especial dedicación de Susana, este trabajo nunca se habría escrito, y a su memoria humildemente lo dedico.

También quiero dar las gracias de forma muy especial a los Profesores Javier Sánchez-Vera y Félix Pedreira por su generosidad y por haberse hecho cargo de la dirección de esta tesis tras el luctuoso acontecimiento. El presente trabajo de investigación se abordó por recomendación del Profesor Sánchez-Vera un día de verano, en el que tuvo la amabilidad de invitarnos a cenar a los que habíamos sido alumnos suyos en los cursos preparatorios de Doctorado. Javier me sugirió iniciar líneas de investigación para la tesis en materia de delito de blanqueo y Javier, junto a Félix, al

asumir desinteresadamente la dirección de esta tesis en complejas circunstancias, me han prestado una ayuda impagable para terminarla, sin la cual no habría sido ello posible. A los dos les estoy muy agradecido por el tiempo y la dedicación que me han prestado en estos últimos meses, tan decisivos.

Asimismo, es merecedora de especial mención la Profesora Araceli Manjón-Cabeza, que asumió la dirección de mi tesina, germen de lo que hoy es este trabajo de investigación. Sus atinados consejos y observaciones y las precisas revisiones de aquel incipiente texto asentaron sólidamente lo que, con el tiempo, pasó a conformar la presente tesis. Asimismo, agradezco al resto de profesores de Doctorado a cuyas clases tuve el privilegio de asistir sus sabios y valiosísimos consejos, que han sido de gran ayuda a la hora de abordar y desarrollar este trabajo. He de dar también las gracias al Profesor Rodríguez Mourullo, porque, con la exquisitez que le caracteriza y sin él saberlo, hizo despertar en mi, siendo un joven estudiante de 2º de Derecho, un singular interés por el Derecho penal, que me ha llevado después a dirigir mi carrera profesional hacia esta materia.

Quiero también dejar aquí constancia de mi más sincero agradecimiento a mis compañeros de despacho: Jaime Valera, Juan Carlos Jiménez-Mancha, Jorge Rabadán, Jesús Domingo, Carmen Liste, Teresa Semprún, Juan Egea, María Padín, Francisco Placer, Leopoldo Gandarias, Eduardo Núñez, Patricia Gutiérrez, Mabel Álvarez, Paz Mendoza, Elena Ortega, Pablo Gómez-Acebo, Sergio Montijano y Pablo Boyer, sin olvidar por supuesto a Roberto. Es de veras un auténtico placer tener como compañeros a cada uno de ellos. Además de haber creado un inmejorable ambiente de trabajo, he de agradecerles el apoyo que me han prestado en estos últimos años. La ayuda que de diferentes maneras me han ofrecido, las enriquecedoras charlas mantenidas, sus sabios consejos, así como sus palabras de apoyo en los momentos más difíciles, todo ello, ha contribuido en gran medida a que haya podido realizar la tesis de la forma más llevadera mientras trabajaba y a que finalmente la haya concluido.

Ya en el plano personal, he de agradecer a mi familia todo el cariño, comprensión y apoyo que siempre me ha brindado, muy especialmente durante los últimos años de elaboración de esta tesis. Quiero manifestar mi mayor gratitud y cariño

a mi abuela Carmen, mi otra madre, a las dos “Celias”, todo un ejemplo a seguir, a Vicente, a Hugo, y a la pequeña Olivia, a mi padre Carlos, a Vicenta, a Franklin y Susana, y a todos mis tíos, primos y primas. También merecen aquí mención especial mis abuelos Federico y Carlos, ya fallecidos y de quienes guardo un grato recuerdo, y mi otra abuela Carmen, que aún nos permite disfrutar de su compañía, a sus ya casi noventa y ocho años.

He de agradecer también el apoyo que me han brindado mis amigos, mi otra familia, con los que he compartido los mejores momentos de mi vida y las más divertidas experiencias. A mis amigos de Madrid, Ignacio, Carlos Redondo, Jaime, Gabriel, Enrique Alonso, Unai, Aitor, David Cámara, Rubén Luna, Antonio, Gil de Gilles, Javier Gudiño, Manolo, Enrique Robledo, Juan José Sánchez, Juan Carpintero, Tino, Fredo, Mauricio, Pablo y Sebastián. También a los miembros del núcleo duro: Gustavo, César, Juan y Rafa Zamora, Javi Gil y Paco. Por razones de espacio no puedo aquí dedicar las palabras que cada uno de ellos merece. Todos ellos saben lo que significan para mí. Y por último, pero no en último lugar, he de agradecer a mis amigos-colegas, más amigos que colegas, Julio González Soto, Elisa Hernández, Sara Moreno, Julio Sainz, Jaime Pérez de Sevilla, Alfredo y Jorge Mallea, las gratas experiencias con ellos compartidas tanto en lo profesional como fuera de este ámbito en los últimos años.

Mención especial merecen aquéllos que de uno u otro modo han contribuido de forma específica al desarrollo de este trabajo. En primer lugar, quiero agradecer a Jaime Valera, a Sinéad Galvin y a Gabriel González sus encomiables esfuerzos desarrollados en la traducción del texto al inglés, ello además en un tiempo record. A Vicente y a Celia “madre” las tantísimas horas dedicadas a la revisión de textos. También quiero mostrar mi gratitud a Juan José Sánchez y a Jorge Rabadán por su ayuda y notas a la hora de abordar cuestiones en materia fiscal, que resultan para mí tan complejas. Y a Sergio Montijano, por su siempre amable y atenta colaboración, y cuyo dominio de la informática y la ofimática ha hecho de éste un trabajo formalmente más presentable.



## **ABSTRACT**

The traditional forms of criminal conduct, which were essentially related to offences against individual interests, have given way in recent decades to new, more complex forms of criminal activity whose main objective is to obtain high economic benefits through more developed organised criminal structures that in many instances cross state borders. To effectively exploit the economic returns obtained through unlawful conduct, it is necessary to remove from them any trace of illicit origin and make them appear legitimate in order to covertly introduce them into the legitimate economic circuit. It can be said that the introduction of the proceeds of unlawful activities into the legitimate economic system is the culmination of the criminal plan of economic crime.

It has been established that one of the most efficient strategies to combat economic crime is to deprive the perpetrators of the high profits obtained from their criminal activities. The fight against money laundering thus constitutes an efficient means to deter and eradicate these new forms of criminal conduct on a large scale.

In the same way that the economy has become more globalised in recent decades, the phenomenon of money laundering has also seen a growing tendency towards internationalization. This has been clearly recognised by the international community who has responded with supranational measures to deal with this type of offence in a comprehensive manner, creating specialist entities and drafting increasingly more severe regulations on the subject of money laundering. The Spanish legislator has also progressively implemented more and more stringent legislation, which in the criminal field has resulted in a gradual broadening of the scope of the money laundering offence, thus setting a paradigmatic example of a process that SILVA SÁNCHEZ has described as “the expansion of criminal law”.

The different amendments made to the definition of the money laundering offence, which was originally created to fight organised crime, have resulted in it becoming, in the words of FABIÁN CAPARRÓS, “a kind of black hole, capable of swallowing up any behaviour that comes into contact with it”. This research work will

provide an in-depth analysis on the elements - both objective and subjective- that make up the crime of money laundering, and will also try to provide criteria to reduce the field of application of an offence that has been too broadly defined.

The first chapter broaches the subject of money laundering's international footprint, its strong link to organised crime and its dynamic and adaptive nature. This first chapter also studies other phenomena that are frequently linked to money laundering; offshore jurisdictions and tax havens whose financial and legal systems facilitate the laundering of the proceeds of crime and through which large-scale money laundering operations are often channelled. Additionally, particular attention is paid to organized crime, which in many occasions goes hand in hand with money laundering.

The first chapter also studies the coordinated actions launched at an international level to combat money laundering and the most relevant normative instruments that exist at the supranational level, which are aimed at coordinating and harmonising the policies of different states, including the Vienna Convention of 1988, FATF's "40 Recommendations" and to the various European Directives. Such legislation has determined to a great extent the administrative regulations on anti-money laundering, the detailed study of which closes the first chapter of this research work, as well as the configuration of the money laundering offence, as set forth in Article 301 of the Criminal Code.

The second chapter is organised into two different sections. The first section focuses on a historic analysis of the money laundering offence. The successive amendments to the legal definition of the offence show a progressive broadening of its scope, to the extent that the present configuration of the offence leads to the criminalisation of conducts which have little in common with the phenomenon that it is trying to eradicate.

The second section in the chapter broaches the subject of the legally protected interest by the money laundering offence. For an adequate interpretation and a limitation of the conducts that constitute the offence, it is essential to identify the legally interest that the offence is designed to protect. This is necessary to set the confines of the offence and to exclude therefrom conducts that do not impinge upon the aforementioned legally interest. Identifying the legally protected interest by money

laundering offences is far from being straight forward and is still the object of intense, polemic debate. After analysing the different doctrinal statements, we have reached the conclusion that the money laundering offence protects the socioeconomic order.

The third and fourth chapters are focused on the objective elements of the definition of the money laundering offence. The third chapter studies the various forms of willful conduct referred to in indent 1 (first paragraph) and indent 2 of Article 301 of the Criminal Code, which read as follows:

1. Whoever acquires, possesses, uses, converts, or conveys assets, knowing they originate from a criminal activity, committed by himself or by any third party, or who perpetrates any other act to hide or conceal their unlawful origin, or to aid the person who participated in the felony or felonies to avoid the legal consequences of his acts, shall be punished with a sentence of imprisonment of six months to six years and a fine from one to three times the value of the goods. In these cases, the Judges or Courts of Law, in view of the severity of the act and the personal circumstances of the criminal, may also sentence him to the punishment of special barring from exercise of his profession or industry for a term from one to three years, and order the measure of temporary or definitive closing of the establishment or premises. If the closing is temporary, its duration may not exceed five years.

2. The same penalties shall be used to punish, as appropriate, hiding or concealment of the true nature, origin, location, destination, movement or rights to the assets, or their ownership, knowing that they originate from any of the felonies described in the preceding Section or an act of participation therein.

The inadequate wording of the provision has led scholars to hold differing interpretations as to what specific conducts constitute the offence, the requirements of such conducts and how they relate to one another. Having analysed this problem, in our opinion the offence comprises three different conducts:

1. - The acquisition, possession, use, conversion or transfer of property derived from criminal activity, knowing that such property was derived from criminal activity, irrespective of the purpose pursued.

2. - The performance of any “other act” on the property aimed at concealing or disguising the unlawful provenance of such property or assisting those who have participated in the crime from which the property in question is derived to evade the legal consequences of their actions.



3. - The concealment or disguise of the true nature, source, location, destination, movement or ownership of property, knowing it is derived from criminal activity.

Each of the 3 different set of conducts referenced above and the problems that arise in respect to each one of them are analysed in depth later on in this work. In regards to the first such conduct, specific problems are encountered in connection with the possession and use of the property given that, as noted by the majority of scholars, these actions are not in themselves capable of concealing or disguising the proceeds derived from criminal activity.

This study proposes *de lege ferenda* to remove the reference to possession and use. The description of the second set of conducts is flawed by its imprecision, thus requiring strict interpretation to restrict its immense scope. Lastly, the conducts referred to in Article 301.2, are studied; these conform a “result” crime, which gives rise to certain implications that are duly examined.

In the final section of the third chapter addresses another question that is hotly debated by scholars and in case law, and on which no consensus has been reached: the punishment of money laundering committed by the perpetrator of the crime from which the proceeds derive. The reform of the Criminal Code in 2010 specifically introduced the notion of “self-laundering”, even though, when associated with some of the conducts outlined in Article 301, such “self-laundering” amounts to nothing other than the consummation of the previous criminal offence, the punishment of which is incompatible with the principle *non bis in idem*. *De lege ferenda* this study proposes to suppress the specific reference to “self-laundering” so as to allow the courts to decide, in view of the circumstances of each case, whether or not the conduct amounting to “self-laundering” should be punished.

The fourth chapter is arranged in three different sections. The first focuses on the analysis of various legal theories that can serve to limit the scope of the money laundering offence. As well as the objective imputation criteria and “allowed risk”, presently the doctrine on “neutral acts” allows a teleological reduction of the offence, excluding from it’s scope conducts that might fall within the confines of the offence but which do not present a significant risk of disguising criminal proceeds or of reintroducing them into the economic system.

The second section of the fourth chapter analyses the possibility of committing a money laundering offence via an omission. The conclusion is reached that only the conducts defined in Article 301.2 of the Criminal Code can be engaged in by means of an omission. For such an omission to be punishable the requirements of Article 11 of the Criminal Code must additionally be met, i.e. the offender must have a duty to prevent the money laundering from resulting; the omission and the active production of the result have to be equivalent from a structural and “value” view-point; and the offender must have been in a position to prevent the result from taking place.

The third section of the fourth chapter focuses on the analysis of the object of the money laundering offence. As well as the study of the different elements that are involved, it pays special attention to the question of whether or not tax liabilities can constitute the object of a money laundering offence. Contrary to the opinion of a majority of scholars, we hold the view that tax crimes generate a quantifiable pecuniary advantage (the tax liability that is not paid) and that, therefore, a money laundering offence can be committed in respect of the proceeds derived therefrom.

The fifth chapter focuses on the subjective elements of money laundering. Firstly, it analyses the requirement that the offender should have actual knowledge that a property is derived from criminal conduct, as a necessary condition for the wilful commission of a money laundering offence. Here special attention will be paid to issues regarding the proof of knowledge that such property is illegally derived, with special emphasis on preliminary evidence and the challenges arising therefrom. We conclude that any action aimed at concealing, disguising or providing assistance can only be criminally culpable if direct first degree intent is involved. *Dolus eventualis* would suffice for other forms of wilful conducts, although we reject the theory of willful blindness, in line with recent jurisprudence.

After analysing the question of error in connection with the money laundering offence, the subject of criminal negligence is analysed in detail. The legal configuration of criminal negligence in connection with money laundering is deeply flawed, and this has given rise to serious interpretative problems. We conclude that the performance of acts directed at concealing, disguising or aiding require intent, while the remaining conducts can be criminally culpable if attributable to negligence. This chapter also addresses the delicate question of distinction of *dolus eventualis* and conscious

negligence and, finally it studies whether or not money laundering should be configured as a common or special offence. Even though the issue remains unresolved by scholarly opinion and the jurisprudence, the conclusion is reached that negligent money laundering should be configured as a common offence.

## INTRODUCCIÓN

El fenómeno del blanqueo de capitales de origen delictivo es, en la actualidad, motivo básico de preocupación, tanto para los diferentes Estados que integran la comunidad internacional como para diversas instituciones que operan en la misma. Se afirma que el blanqueo de capitales provoca profundas alteraciones en el sistema económico-financiero a nivel mundial y que dicho fenómeno guarda una estrecha vinculación con otra realidad aún más preocupante: la criminalidad organizada.

En las últimas décadas han aparecido complejos fenómenos delictivos dirigidos a la obtención de altos rendimientos económicos, articulados frecuentemente a través de estructuras organizadas que, en sus formas más avanzadas, operan a nivel internacional. Para el aprovechamiento eficaz de los beneficios económicos ilícitamente obtenidos, resulta imprescindible hacer desaparecer de ellos cualquier rastro de su origen delictivo, facilitando así su incorporación disimulada al circuito económico legal. Se puede decir que con la reintegración de los fondos delictivos en los cauces financieros normalizados, se culmina el plan criminal de la delincuencia económica. Una de las estrategias más efectivas para combatir este tipo de delincuencia es obstaculizar la posibilidad de que sus integrantes disfruten de los cuantiosos beneficios que aquélla proporciona. La lucha contra el blanqueo de capitales constituye, de este modo, una eficaz medida disuasoria para la erradicación de la delincuencia económica a gran escala y de la criminalidad organizada.

De forma paralela al proceso de globalización de la economía operado en las últimas décadas, el fenómeno del blanqueo de capitales ha experimentado una marcada tendencia a la internacionalización. Consciente de ello, la comunidad internacional ha articulado medidas supranacionales para dar una adecuada respuesta a este tipo de delincuencia de forma integral, creando organismos especializados, diseñando políticas coordinadas y elaborando instrumentos normativos cada vez más exigentes en materia antiblanqueo. También el Legislador español ha implantado progresivamente una normativa más rigurosa, que en el ámbito penal se ha concretado en una continua ampliación del ámbito objetivo del tipo de blanqueo de capitales, constituyendo éste un ejemplo paradigmático del proceso que SILVA SÁNCHEZ calificó como “expansión del

Derecho penal”. El delito de blanqueo, que nació como un instrumento para combatir la criminalidad organizada, presenta en la actualidad unos contornos prácticamente inabarcables, dando cabida a conductas que poco tienen que ver con el fenómeno delictivo que se pretende erradicar.

Uno de los objetivos principales de este trabajo de investigación es precisamente indagar sobre las posibilidades que diversos recursos y criterios dogmáticos ofrecen para restringir el extraordinario ámbito de aplicación del delito de blanqueo. A esta labor de depuración contribuirá en gran medida la interpretación teleológica del tipo penal, así como la invocación de determinadas instituciones dogmáticas de carácter normativo que determinan la atipicidad de aquellas conductas que, aun coincidiendo formalmente con la descripción típica del precepto que incorpora el delito, no entrañan una lesión o puesta en peligro de suficiente entidad para el bien jurídico protegido por aquél, o no crean un riesgo jurídicamente desaprobado para el mismo. Del mismo modo, la diferente naturaleza que corresponde a cada una de modalidades típicas en que el delito de blanqueo se puede presentar, así como las exigencias que cada una de ellas precisa, permitirá acotar el ámbito de aplicación del blanqueo cometido por imprudencia y a través de comportamientos omisivos.

El presente trabajo se estructura en cinco capítulos. El primero de ellos comienza con el análisis del blanqueo desde una perspectiva fenomenológica, con el fin de aproximarnos a la realidad que incrimina el delito objeto de nuestro estudio. Veremos que el fenómeno del blanqueo se caracteriza por su naturaleza dinámica y su alta capacidad de adaptación para soslayar unas medidas antiblanqueo cada vez más rigurosas. Asimismo, en sus manifestaciones más perfeccionadas, el blanqueo aparece frecuentemente vinculado a la criminalidad organizada y tiende a desarrollarse a nivel internacional. También en este primer capítulo son objeto de estudio las diferentes acciones coordinadas que desde hace ya más de tres décadas se han emprendido por la comunidad internacional para combatir el blanqueo de capitales, así como los instrumentos normativos de ámbito supranacional más relevantes dirigidos a armonizar y coordinar las políticas de los diferentes Estados en materia antiblanqueo. Dicha normativa supranacional ha determinado en gran medida tanto la legislación administrativa española de prevención del blanqueo, cuyo estudio detallado cierra este primer capítulo, como la configuración del delito de blanqueo de capitales, tipificado en el artículo 301 de nuestro Código penal.

En el segundo capítulo, tras analizar la evolución histórica del delito de blanqueo, se aborda el estudio del bien jurídico protegido por el tipo penal. Como sabemos, tanto su adecuada interpretación como la delimitación de las conductas que incrimina precisa la identificación del bien jurídico que el delito está llamado a tutelar. Tras analizar las diferentes opiniones doctrinales ofrecidas al respecto, concluiremos que el bien jurídico protegido que justifica la incriminación del blanqueo de capitales y a la luz del cual ha de ser interpretado el tipo penal es el orden socioeconómico.

El tipo objetivo del delito de blanqueo precisa un análisis muy extenso, y para facilitar su exposición, su estudio se ha estructurado en dos capítulos, el capítulo III y el capítulo IV. El capítulo III da comienzo con el estudio de las diferentes conductas que conforman el delito doloso de blanqueo, previstas en los números 1 (primer párrafo) y 2 del artículo 301 CP. La defectuosa redacción del precepto ha originado en el seno de la doctrina discrepancias interpretativas respecto a cuáles son las conductas concretas que conforman el delito, sus requisitos y qué relación guardan entre sí. Una vez determinadas las diferentes conductas que, a nuestro juicio, integran el tipo doloso de blanqueo, se estudian en detalle las distintas modalidades típicas de acción así como la problemática que cada una de ellas suscita. Tras dicho análisis, se aborda otra cuestión muy debatida sobre la que, en absoluto, a día de hoy existe consenso: la punición del llamado “autoblanqueo”. Si bien la reforma del Código penal de 2010 introdujo expresamente esta espinosa figura en el artículo 301.1 CP, veremos que muchas de las conductas previstas en el precepto, cuando son realizadas por el autor del delito antecedente, no suponen sino el agotamiento de dicho delito previo, por lo que la punición del blanqueo junto a aquél presenta problemas de compatibilidad con el principio *non bis in idem*.

El capítulo IV se estructura en tres partes diferenciadas. En la primera de ellas, se indaga en qué medida la imputación objetiva y otros criterios normativos permiten limitar el extraordinario campo de la aplicación del blanqueo. Veremos que, en el ámbito de este delito, adquieren especial relevancia el riesgo permitido y la doctrina de los actos neutrales, instituciones jurídico-penales que se perfilan como correctores dogmáticos idóneos para reducir teleológicamente el tipo, excluyendo de su órbita conductas que, aun siendo formalmente subsumibles en el precepto, no crean un riesgo relevante de desencadenar el hecho penalmente lesivo (distanciar el bien de su origen ilícito o facilitar su reintegración en el tráfico económico normalizado).

En el segundo apartado de este capítulo se somete a discusión la posibilidad de que el delito de blanqueo se realice a través de conductas omisivas. Concluiremos que la única modalidad comisiva que admite la omisión es la contenida en el artículo 301.2 CP, que se configura como un delito de resultado. Para su incriminación, será preciso, además de la verificación de los requisitos típicos previstos en dicho precepto, que sean colmadas las exigencias contenidas en el artículo 11 CP: que el sujeto tenga algún deber especial de impedir el resultado de blanqueo, que exista equivalencia valorativa y estructural entre la omisión y la producción activa de dicho resultado, y que el sujeto hubiese tenido la posibilidad de evitarlo.

El tercer y último apartado del capítulo IV se dedica al análisis del objeto del delito de blanqueo. Además del estudio de los diferentes elementos que lo conforman, se presta especial atención a la cuota tributaria como posible objeto del delito. La cuestión esencial que se plantea, muy discutida en la actualidad, es si es posible que el delito contra la Hacienda Pública constituya el delito antecedente del blanqueo. A pesar de que voces muy autorizadas en la materia responden negativamente a este interrogante, veremos que el delito fiscal es una actividad delictiva generadora de beneficios económicamente cuantificables (la cuota tributaria dejada de ingresar) y que, por tanto, es posible que aquél sea delito previo del blanqueo de capitales.

El capítulo V se dedica al estudio del tipo subjetivo del delito de blanqueo. En los primeros apartados, se aborda el análisis de los elementos subjetivos que conforman el delito doloso de blanqueo: en primer lugar, se estudia el conocimiento de la procedencia delictiva de los bienes, exigencia común a todas las modalidades de comportamiento bajo las que puede presentarse el tipo doloso, así como su naturaleza jurídica y los requisitos que su acreditación precisa -con especial atención a la prueba indiciaria y a la problemática que esta plantea-. Tras analizar las finalidades de ocultar, encubrir o ayudar, requisito típico limitado a los actos indeterminados del segundo inciso del artículo 301.1 CP, se indaga sobre las formas de dolo admisibles en el marco del delito blanqueo. Como veremos, en la modalidad consistente en la realización de cualquier acto orientado a las finalidades de ocultar, encubrir o ayudar, será preciso que concorra dolo directo de primer grado. En las otras formas de acción dolosas es suficiente el dolo eventual, si bien ha de rechazarse el recurso a la teoría de la ignorancia deliberada como sustitutivo de dicha modalidad de dolo.

Tras analizar la cuestión del error en el delito de blanqueo de capitales, este último capítulo concluye con un estudio detallado de la modalidad imprudente de este delito, prevista en el artículo 301.3 CP. Su defectuosa configuración legal, una escueta remisión a los “hechos” -dolosos- descritos en los números 1 y 2 del precepto realizados por imprudencia grave, ha dado lugar a importantes problemas interpretativos. Además de tratar de resolverlos, en este apartado se indaga sobre qué variantes comisivas, de entre las contenidas en el artículo 301.1 y 2 CP, admiten la comisión por imprudencia grave, y se aborda la espinosa cuestión relativa a la distinción del dolo eventual y la culpa consciente. Para terminar, se somete a consideración si el blanqueo imprudente debe interpretarse como un delito común o como un delito especial; si bien esta cuestión no es en absoluto pacífica -ni en la doctrina ni en la jurisprudencia-, concluiremos que, de conformidad con el artículo 301.3 CP, el blanqueo imprudente es un delito común.





# **CAPÍTULO PRIMERO. EL FENÓMENO DEL BLANQUEO DE CAPITALES. FASES DEL BLANQUEO. NORMATIVA REGULADORA**



## 1.1 EL FENÓMENO DEL BLANQUEO DE CAPITALS

### 1.1.1. CONSIDERACIONES PREVIAS

Desde hace ya varias décadas, el fenómeno del blanqueo de capitales de origen delictivo es motivo básico de preocupación tanto para los diferentes Estados que integran la comunidad internacional como para diversas instituciones que operan en la misma, y ello debido tanto a las profundas alteraciones que a nivel mundial provoca en el sistema económico-financiero como a la estrecha vinculación que en muchas ocasiones tiene con la criminalidad organizada.

La delincuencia tradicional, representada fundamentalmente por aquellos delitos que atentan contra bienes jurídicos personales e individuales<sup>1</sup>, ha dado paso en las últimas décadas a nuevos comportamientos delictivos más complejos, cuyo objeto primordial es la explotación de mercados ilegales<sup>2</sup>, y que proporcionan ingentes beneficios. Para el aprovechamiento eficaz de dichos rendimientos, resulta imprescindible dotarles de “un ficticio barniz de licitud”<sup>3</sup> para su posterior incorporación al circuito económico legal. A través de las más variadas y sofisticadas técnicas, es preciso hacer desaparecer cualquier rastro del origen delictivo<sup>4</sup> del capital ilícito con el múltiple propósito de permitir su circulación con total libertad en el tráfico

---

<sup>1</sup> Vid. MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Algunas reflexiones sobre la moderna teoría del *big crunch* en la selección de bienes jurídico-penales (especial referencia al ámbito económico)”, *La Ciencia del Derecho Penal ante el nuevo siglo. Libro homenaje al Profesor Dr. D. José Cerezo Mir*. Ed. Tecnos, Madrid, 2002, págs. 396 y 397; MOLINA FERNÁNDEZ, F., “¿Qué se protege en el delito de blanqueo de capitales?: reflexiones sobre un bien jurídico problemático, y a la vez aproximación a la participación en el delito”, op. cit., págs. 96 y ss.; SILVA SÁNCHEZ, J. M., *La expansión de Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales. Segunda edición, revisada y ampliada*. Ed. Civitas. 2ª ed., Madrid, 2001, pág. 23.

<sup>2</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., “El blanqueo de capitales (Contexto, razones de su penalización, evolución en nuestro entorno de las iniciativas supranacionales)”, *El Sistema Penal frente a los retos de la nueva sociedad. Coords. Mª Rosario Diego Díaz Santos / Eduardo A. Fabián Caparrós*. Ed. Colex. Madrid, 2003, pág. 163; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, Aranzadi, 3ª edición, Cizur Menor, 2012, pág. 48.

<sup>3</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., “El blanqueo de capitales (Contexto, razones de su penalización, evolución en nuestro entorno de las iniciativas supranacionales)”, op. cit., pág. 164. En el mismo sentido, BLANCO CORDERO, I., “La lucha contra el blanqueo de capitales procedentes de las actividades delictivas en el marco de la U.E.”, *Eguzkilore. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología*, nº 15, San Sebastián, 2001, pág. 9.

<sup>4</sup> *Ibidem*, pág. 8.

normalizado<sup>5</sup>, de evitar su intervención y decomiso<sup>6</sup> así como de no levantar sospecha sobre la previa realización de actividades criminales<sup>7</sup>. Se puede decir que con la integración de los fondos ilícitamente obtenidos en el sistema económico legal, se culmina el plan criminal<sup>8</sup> de la delincuencia económica, cuyo objetivo final es satisfacer intereses lucrativos minimizando los riesgos de soportar las consecuencias derivadas del ilícito actuar. Por ello, en la lucha contra la criminalidad económicamente productiva, una de las estrategias más eficientes consiste en neutralizar las vías de legitimación de aquél capital que se trata de obtener mediante la actividad delictiva<sup>9</sup>. En efecto, se ha comprobado que combatir el blanqueo es una eficaz medida disuasoria y de erradicación de estos novedosos fenómenos delictivos a gran escala, en especial de la criminalidad organizada<sup>10</sup>.

Si bien los mecanismos de los que se sirve el blanqueo surgieron en un principio como herramienta vinculada al fraude fiscal para reintroducir en el sistema económico legal el dinero ocultado previamente a los sistemas públicos de recaudación de tributos<sup>11</sup>, pronto se reparó en la utilidad de aquellos mecanismos como medio para ocultar el origen ilícito de los beneficios de determinadas formas de delincuencia. La proliferación de las modernas técnicas de blanqueo para incorporar al tráfico lícito los bienes adquiridos a través de actividades delictivas, fundamentalmente vinculadas al

<sup>5</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, Ed. Colex. Madrid, 1998, págs. 69 y 70.

<sup>6</sup> Vid. SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, J. L., “Algunas cuestiones relativas a la regulación penal del blanqueo de capitales”, *Estudios Jurídicos en memoria del Profesor Dr. D. J. Ramón Casabó Ruiz*; vol. II. *Institut de Criminologia*. Valencia, 1997, pág. 772.

<sup>7</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 71; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 48.

<sup>8</sup> Como gráficamente expone GARCÍA NORIEGA, “blanquear no sirve de nada si el capital, una vez lavado, ha de permanecer oculto e improductivo”. (*Cómo se lava el dinero. Cómo se combate el lavado*, Ed. Difusión Jurídica. Madrid, 2010, pág. 22). Expresado de otro modo, “cuando no resulta posible disfrutar “legalmente” de los beneficios de actividades criminales quizá éstas dejen de realizarse porque ya no merezcan la pena”. (Vid. SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, J. L., “Algunas cuestiones relativas a la regulación penal del blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 772).

<sup>9</sup> Vid. GARZÓN REAL, B., “Cooperación jurídica internacional en el ámbito del blanqueo de dinero y espacio de seguridad, libertad y justicia en la Unión Europea”, *Estudios de derecho judicial n° 28, Prevención y represión del blanqueo de capitales* (Javier Alberto Zaragoza Aguado (dir.). CGPJ. Madrid, 2000, pág. 444; PÉREZ MANZANO, M., “Neutralidad delictiva y blanqueo de capitales: el ejercicio de la abogacía y la tipicidad del delito de blanqueo de capitales”, *Política criminal y blanqueo de capitales*, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2009, pág. 170; NÚÑEZ PAZ, M. A., “Criminalidad, capital y corrupción. Orígenes delincuenciales y precisiones contemporáneas”, op. cit., pág. 280; MARTÍNEZ-ARRIETA MÁRQUEZ DE PRADO, I., *El autoblanqueo. El delito fiscal como antecedente del blanqueo de capitales*. Tirant lo Blanch. Valencia, 2014, pág. 12.

<sup>10</sup> La idea fundamental, apunta BLANCO CORDERO, es “golpear a las organizaciones criminales en su patrimonio”, cumpliendo la máxima *follow the money* como mecanismo fundamental para investigar y perseguir la delincuencia organizada. (“La lucha contra el blanqueo de capitales procedentes de las actividades delictivas en el marco de la U.E.”, op. cit., pág. 10). En sentido similar, SUÁREZ-MIRA RODRÍGUEZ, C., *Manual de Derecho penal. Tomo II. Parte especial*. Thomson. 2ª edición, 2004, pág. 322.

<sup>11</sup> Vid. GARCÍA NORIEGA, A., *Cómo se lava el dinero. Cómo se combate el lavado*, op. cit., págs. 17 y 18.

tráfico de drogas<sup>12</sup>, se suele situar en los años 70 del siglo XX<sup>13</sup>. Desde entonces, ha sido constante el continuo perfeccionamiento de las fórmulas empleadas<sup>14</sup>. De forma paralela a este proceso de permanente renovación, se han instituido progresivamente diversos mecanismos para combatirlo, predominantemente por iniciativa internacional<sup>15</sup>, y ello debido a la creciente transnacionalización de los procesos de blanqueo<sup>16</sup>, que exige la coordinación y cooperación entre Estados para promover una lucha eficaz<sup>17</sup> contra un fenómeno tan nocivo y de tan amplia magnitud. Aunque sólo es

---

<sup>12</sup> Vid. MOLINA FERNÁNDEZ, F., “¿Qué se protege en el delito de blanqueo de capitales?: reflexiones sobre un bien jurídico problemático, y a la vez aproximación a la participación en el delito”, *Política criminal y blanqueo de capitales*, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2009, pág. 93; BAJO FERNÁNDEZ, M., “El desatinado delito de blanqueo de capitales”, *Política criminal y blanqueo de capitales*, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2009, pág. 11; SILVA SÁNCHEZ, J. M., “Expansión del derecho penal y blanqueo de capitales”, *II Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pág. 133; BLANCO CORDERO, I., “La cuota tributaria defraudada como objeto material del delito de blanqueo de capitales”, *II Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pág. 178; NÚÑEZ PAZ, M. A., “Criminalidad, capital y corrupción. Orígenes delincuenciales y precisiones contemporáneas”, *I Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, pág. 266; GAYÁ I ARJALAGUER, M./MOYANO BENITO, J. M., *Evolución de los delitos subyacente al blanqueo en el ámbito penal y en la normativa preventiva*, II Curso de Alta Especialización en Fiscalidad Financiera, Instituto de Estudios Fiscales, pág. 1, publicado en [http://www.ief.es/Publicaciones/Revistas/Cuadernos/05\\_2008/Colab\\_06\\_08.pdf](http://www.ief.es/Publicaciones/Revistas/Cuadernos/05_2008/Colab_06_08.pdf).

<sup>13</sup> Lo que, evidentemente, no significa que las maniobras para tratar de ocultar el origen de capitales obtenidos ilícitamente sea algo nuevo. Como afirman ÁLVAREZ PASTOR/EGUIDAZU PALACIOS, “en todas las épocas los delincuentes han tratado de ocultar los frutos de sus acciones delictivas, en la lógica suposición de que el descubrimiento de tales fondos por parte de las autoridades conduciría obviamente al descubrimiento de los delitos que generaron.” (*Manual de prevención del blanqueo de capitales*. Marcial Pons. Madrid, 2007, pág. 15). Asimismo, ABEL SOUTO, con cita de KERN, afirma que “la historia del blanqueo es tan antigua como el dinero mismo”, sirviéndose de la misma autora para explicar la procedencia de la clásica expresión *pecunia non olet*, cuyo origen se remonta a Roma. (*El blanqueo de dinero en la normativa internacional*, Monografías da USC, nº 209. Universidad de Santiago de Compostela, 2002, pág. 41.) En el mismo sentido, vid. CARPIO DELGADO, J. del, “*El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal*”. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 1997, pág. 23; NÚÑEZ PAZ, M. A., “Criminalidad, capital y corrupción. Orígenes delincuenciales y precisiones contemporáneas”, op. cit., pág. 266. FERNÁNDEZ STEINKO sitúa la intensificación de las estrategias represivas del blanqueo en los años 90, si bien a lo largo de la década fue debilitándose hasta los atentados del 11-S en Nueva York, acontecimiento que renovó los impulsos de represión del fenómeno. (“Blanqueo, narcotráfico y desregularización financiera”, *Delincuencia, finanzas y globalización*. CIS. Madrid, 2013, pág. 245).

<sup>14</sup> Vid. ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 25.

<sup>15</sup> Vid. BAJO FERNÁNDEZ, M., “El desatinado delito de blanqueo de capitales”, *Política criminal y blanqueo de capitales*, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2009, pág. 11; ARIAS HOLGUÍN, D. P., *Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales*. Ed. Iustel. Madrid, 2011, pág. 39; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 97 y ss.; TATO RODRÍGUEZ, M., “Estadísticas sobre la aplicación de la normativa administrativa en España hasta la Ley de 2010 de prevención del blanqueo”, *III Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pág. 64.

<sup>16</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., *El blanqueo de dinero en la normativa internacional*, op. cit., pág. 55; BLANCO CORDERO, I., “La lucha contra el blanqueo de capitales procedentes de las actividades delictivas en el marco de la U.E.”, op. cit., pág. 10.

<sup>17</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., “El blanqueo de capitales (Contexto, razones de su penalización, evolución en nuestro entorno de las iniciativas supranacionales)”, op. cit., págs. 166 y 167; ABEL SOUTO, M., *El blanqueo de dinero en la normativa internacional*, op. cit., págs. 55 y 56; AMBOS, K., “Internacionalización del Derecho penal: el ejemplo del “lavado de dinero”, *II Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, págs. 181 y ss.; NÚÑEZ PAZ, M. A., “Criminalidad, capital y corrupción. Orígenes

posible manejar cifras aproximadas obtenidas a través de métodos indirectos de estimación<sup>18</sup>, es sabido que son muy elevadas las cuantías de los capitales de origen ilícito que se introducen en el tráfico legal. El FMI maneja cifras entre un 2% y un 5% del PIB a nivel mundial<sup>19</sup>, y algún autor considera que dichas cifras podrían ser incluso superiores<sup>20</sup>.

Si algo caracteriza al blanqueo de capitales es su dinamismo y su capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias y a los nuevos modelos legislativos que, en materia de prevención de blanqueo, aumentan progresivamente las medidas de control<sup>21</sup>. En la actualidad, el fenómeno legitimador se ha beneficiado extraordinariamente del avance de las nuevas tecnologías, que ha facilitado de forma considerable el incremento de los flujos financieros e informativos a nivel supranacional. Como ha advertido ABEL SOUTO, el progresivo desarrollo de la informatización y el ciberespacio, la globalización de los mercados y las economías, así como la internacionalización y desregulación del sector financiero “han abierto un campo ideal de actuación para los delincuentes económicos en general, sobre todo mientras el Derecho penal siga organizándose nacionalmente<sup>22</sup>”. Tanto el constante dinamismo como la profesionalidad y la variabilidad que caracterizan a las técnicas de blanqueo han obligado a “mantener un continuo proceso de modificación” de las medidas de prevención del fenómeno

---

delincuenciales y precisiones contemporáneas”, op. cit., pág. 279; ARIAS HOLGUÍN, D. P., *Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 38 y 41.

<sup>18</sup> Vid. ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 20; VIDALES RODRÍGUEZ, C., “Introducción”, *Régimen Jurídico de la Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales*. Ed. Tirant lo Blanch. Madrid, 2015, pág. 16. En este sentido, advierte ABEL SOUTO de la dificultad de conocer “los flujos monetarios inherentes a la economía ilegal”, debido a la ausencia de elementos directos de valoración y a la aleatoriedad de los métodos indirectos de cuantificación, “ya que el cálculo de los beneficios se lleva a cabo atendiendo a la tasa de delitos conocidos, magnitud de escasa utilidad estadística dada la incidencia elevada de la “cifra negra.” (*El blanqueo de dinero en la normativa internacional*, op. cit., págs. 45 y ss.).

<sup>19</sup> Vid. ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 21. NÚÑEZ PAZ cifra el volumen, sólo de activos blanqueados producto del narcotráfico, en torno a un 5% del producto bruto mundial, si bien reconoce que “es prácticamente imposible realizar una estimación exacta, máxime si se baraja toda la gama de delitos incorporados en las legislaciones comparadas”. (“Criminalidad, capital y corrupción. Orígenes delincuenciales y precisiones contemporáneas”, op. cit., pág. 268).

<sup>20</sup> Vid., en detalle, ABEL SOUTO, M., “Volumen mundial del blanqueo de dinero, evolución del delito en España y jurisprudencia reciente sobre las últimas modificaciones del Código penal”, *Revista General de Derecho Penal*. Nº. 20, 2013. Ed. IUSTEL, págs. 2 y ss., disponible en el siguiente enlace: [http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle\\_revista.asp?id\\_noticia=413920](http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=413920).

<sup>21</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, Aranzadi, 2ª edición, Cizur Menor, 2002, pág. 31, nota a pie de página nº 5.

<sup>22</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., “Blanqueo, innovaciones tecnológicas, amnistía fiscal de 2012 y reforma penal”, *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 2012, núm. 14-14, pág. 2. Disponible en el siguiente enlace: [criminet.ugr.es/recpc/14/recpc14-14.pdf](http://criminet.ugr.es/recpc/14/recpc14-14.pdf).

legitimador<sup>23</sup>, si bien su detección y represión continúa presentando especiales dificultades.

Hay que insistir en que la progresiva internacionalización del fenómeno del blanqueo de capitales ha demandado una mayor coordinación supranacional que permita contener el fenómeno de manera eficaz<sup>24</sup>. Con elevada frecuencia, el blanqueo de capitales tiene lugar en un contexto internacional. Es por ello que las medidas limitadas al ámbito nacional suelen demostrar muy reducidos efectos. No en vano, las primeras iniciativas en materia de la lucha contra el blanqueo surgieron en el marco internacional. Con anticipación a muchos ordenamientos nacionales<sup>25</sup>, en la década de los años 80 surgieron los primeros instrumentos normativos relativos al fenómeno criminal que aquí se estudia. En 1988, en el marco de las Naciones Unidas, se aprobó la Convención contra el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias psicotrópicas, adoptada en Viena el 20 de diciembre de 1988, que impone a los Estados parte la obligación de tipificar como actividad delictiva el blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas<sup>26</sup>. Por su parte, el G-7 (grupo de los siete países más industrializados del mundo) creó en 1989 el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional que mayores iniciativas ha promovido en la lucha contra el blanqueo de capitales a nivel transnacional<sup>27</sup>. Sus 40 Recomendaciones, sometidas a periódicas revisiones, si bien carecen de fuerza jurídica vinculante<sup>28</sup>, constituyen como veremos el instrumento normativo internacional con mayor eficacia práctica en materia de prevención y represión del blanqueo<sup>29</sup>. También integran el marco normativo supranacional la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada, ratificada en Nueva York el 15 de noviembre de 2000 y aprobada en la ciudad de Palermo el 13 de diciembre del mismo año, así como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada en Mérida el 9 de diciembre de 2003<sup>30</sup>.

---

<sup>23</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., “El blanqueo de capitales (Contexto, razones de su penalización, evolución en nuestro entorno de las iniciativas supranacionales)”, op. cit., pág. 164.

<sup>24</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., *El blanqueo de dinero en la normativa internacional*, op. cit., págs. 55 y 56.

<sup>25</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 50.

<sup>26</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., “La lucha contra el blanqueo de capitales procedentes de las actividades delictivas en el marco de la U.E.”, op. cit., pág. 11.

<sup>27</sup> Ibidem.

<sup>28</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, Edersa, Madrid, 2000, págs. 44-46.

<sup>29</sup> Vid. ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 75.

<sup>30</sup> Vid. ZARAGOZA AGUADO, J. A., “Artículo 301”, op. cit., pág. 1154.



También en el marco europeo, desde finales de los años 70 se extendió la inquietud por los perniciosos efectos que para los países europeos implicaba el blanqueo del producto del delito<sup>31</sup>. Fruto de esta preocupación, el Comité de Ministros del Consejo de Europa dictó en 1980 una Recomendación para el fomento de la transparencia bancaria, sugiriendo a los Estados miembros la imposición de determinadas medidas en el marco regulador de sus sistemas bancarios con fin de prevenir el encubrimiento de capitales de origen criminal<sup>32</sup>. Una década más tarde, el Consejo de Europa aprobó el Convenio sobre blanqueo, identificación, embargo y comiso de los productos del delito, de 8 de noviembre de 1990, que obligaba a las partes contratantes a adoptar medidas legislativas para tipificar como delito el blanqueo de bienes procedentes de cualquier delito y no sólo el de aquellos relativos al tráfico de drogas que imponía la Convención de Viena. Con posterioridad, también en el marco de la Unión Europea, se han dictado sucesivas Directivas para prevenir el fenómeno legitimador: la Directiva 91/308 CEE, de 10 de junio, sobre prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales -modificada por la Directiva 2001/97/CE-, a la que sucedió la Directiva 2005/60/CE, aprobada en Junio de 2005, texto nuevo, completo y autónomo<sup>33</sup> que derogó la Directiva 91/308 CEE, y cuya transposición a nuestro Ordenamiento interno tuvo lugar a través de aprobación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, que sustituyó la anterior Ley 19/1993 sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, de 28 de diciembre<sup>34</sup>. El 20 de mayo de 2015, el Parlamento Europeo y el Consejo han aprobado la IV Directiva (UE 2015/849) relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, por la que se modifica el Reglamento (UE) n° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la

---

<sup>31</sup> Téngase en cuenta que la entonces denominada Comunidad Europea instituyó una serie de libertades básicas como sus pilares fundamentales: la libre circulación de personas y de mercancías, así como la liberalización de los movimientos de capitales, fenómeno este último que evidentemente también favorece al movimiento de capitales de origen delictivo entre Estados miembros. (Vid. BLANCO CORDERO, I., “La lucha contra el blanqueo de capitales procedentes de las actividades delictivas en el marco de la U.E.”, op. cit., pág. 9).

<sup>32</sup> También circunscrita al ámbito bancario, y con mayor repercusión que la Recomendación del Comité de Ministros, la Declaración de Principios de Basilea sobre prevención de la utilización del sistema bancario para el blanqueo de fondos de origen criminal, que recomienda la implantación de normas deontológicas y procedimientos para erradicar las operaciones de blanqueo de fondos mediante el sistema bancario nacional e internacional. (Vid. ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUÍDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 59).

<sup>33</sup> Ibidem, pág. 109.

<sup>34</sup> Ley que a su vez fue modificada por la Ley 19/2003, de 4 de julio. Ambas leyes se aprobaron como transposición de las Directivas 91/308 CEE y 2001/97/CE.

Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión.

De entre los perniciosos efectos que produce el blanqueo de capitales, la doctrina suele distinguir aquellos relacionados con el seguimiento del delito que origina los fondos de aquellos otros de carácter económico. Con relación a los primeros, ha de advertirse que el lavado de activos dificulta la detección y persecución de la actividad criminal de la que los fondos proceden, obstaculizando en muchos casos los esfuerzos desplegados para erradicar la criminalidad organizada. Además, incrementa en general el patrimonio de los delincuentes y, particularmente, el de los integrantes de las organizaciones delictivas, con el efecto criminógeno que esto supone<sup>35</sup>, y estimula la financiación de nuevas actividades criminales<sup>36</sup>.

Por otra parte, el fenómeno del blanqueo repercute negativamente en el orden económico-financiero de muy diversas formas. Los flujos de capitales ilícitos dañan la integridad y la estabilidad de diversas variables económicas y financieras. Dicho impacto tiene lugar tanto a nivel internacional como en la economía nacional de los diferentes Estados, especialmente en la de aquellos más débiles o inestables y en las economías emergentes. MOLINA MANSILLA revela la incidencia del blanqueo en el precio del dinero y en el tipo de cambio que opera en el mercado de divisas: la depreciación del dinero incide a su vez en el IPC del país, lo que implica negativas repercusiones deficitarias en su Balanza Económica, incrementando su déficit frente a terceros Estados<sup>37</sup>. Así, cuando afloran grandes cantidades de dinero, aumenta la masa monetaria en circulación. Ésta, a su vez, puede a continuación reducirse si dichos capitales son colocados en otros países, limitando la liquidez bancaria. Cuando la inestabilidad financiera afecta a Estados débiles, ésta suele acarrear la desconfianza de los ahorradores y un considerable deterioro de la imagen económico-financiera del país, lo que con toda probabilidad dificultará su crecimiento económico<sup>38</sup>.

---

<sup>35</sup> Pues las grandes organizaciones criminales desarrollan sus actividades delictivas persiguiendo fundamentalmente un claro objetivo: obtener grandes beneficios económicos; y dicha expectativa sólo adquiere sentido si es posible reintegrar dichos beneficios en el sistema económico-financiero legal.

<sup>36</sup> Vid. MOLINA MANSILLA, M. C./MOLINA MANSILLA, L., *El blanqueo de dinero*. Ed. Bosch. Barcelona, 2008, pág. 7.

<sup>37</sup> Ibidem, págs. 8 y ss.

<sup>38</sup> Ibidem. Por su parte, ZARAGOZA AGUADO, sirviéndose de un informe del GAFI, cita las “siguientes repercusiones macroeconómicas potenciales del blanqueo (...): variaciones en la demanda monetaria que aparentemente no guardan relación con los cambios observados en las variables económicas; volatilidad de los tipos de interés y de cambio a raíz de las transferencias transfronterizas inesperadas de fondos; mayor

Pero el fenómeno del blanqueo no sólo repercute negativamente en índices macroeconómicos. A la luz de los Informes del FMI que sirvieron de análisis para la elaboración de la Directiva comunitaria de 1991, BLANCO CORDERO incide en el hecho de que los agentes blanqueadores no aspiran a rentabilizar las ganancias ilícitas sino a hacerlas circular de la forma más beneficiosa para borrar su rastro delictivo, aun cuando ello suponga disminuir su rendimiento. Estos movimientos *contra natura* de los capitales, además de repercutir muy negativamente en variables macroeconómicas tales como los tipos de interés y cambio<sup>39</sup>, afectan a la economía de mercado y a la libre competencia. Téngase en cuenta, tal y como advierte el monografista, que la confianza de los agentes que participan en el desarrollo de mercados de capitales resulta fundamental para la marcha ordenada de éstos. “Si los mercados se vieses contaminados por dinero controlado por delincuentes, reaccionarían de forma más radical ante los rumores y las falsas estadísticas, generando mayor inestabilidad”<sup>40</sup>.

La lucha contra el blanqueo, tanto a nivel preventivo como represivo, ha experimentado notables transformaciones en los últimos años. En materia preventiva, paralelamente a la normativa internacional que la inspira, nuestra legislación administrativa ha impuesto progresivamente mayores mandatos a los sujetos a los que va destinada, ampliándose asimismo de forma notable el número de sujetos obligados<sup>41</sup>. También la persecución penal del blanqueo de capitales se ha visto intensificada: si el delito de blanqueo nació como un instrumento para erradicar el tráfico de drogas a gran escala y el crimen organizado<sup>42</sup>, progresivamente ha ido aquél ampliando su radio de

---

inestabilidad de los pasivos y mayores riesgos para la valoración de los activos de las entidades financieras, lo que origina un riesgo sistemático para la estabilidad del sector financiero y la evolución monetaria general; efectos adversos sobre la recaudación tributaria (...); desviaciones de precio de los activos debido a la existencia de dinero negro.” (“El blanqueo de bienes de origen criminal”, op. cit., pág. 377, nota a pie de página nº 7). Vid., asimismo, BLANCO CORDERO, I., “La lucha contra el blanqueo de capitales procedentes de las actividades delictivas en el marco de la U.E.”, op. cit., pág. 17.

<sup>39</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., “La lucha contra el blanqueo de capitales procedentes de las actividades delictivas en el marco de la U.E.”, op. cit., pág. 16.

<sup>40</sup> Ibidem, pág. 17.

<sup>41</sup> Vid. ALIAGA MÉNDEZ, J. A., *Normativa comentada de prevención del blanqueo de capitales*, Ed. La Ley. Madrid, 2010, pág. 39. Advierte MILANS DEL BOSCH de la ampliación “a locas” del ámbito de aplicación tanto a nivel objetivo como subjetivo que supone la nueva regulación de la prevención de blanqueo, tras la aprobación de la Ley 10/2010, de 28 de abril. (“Principales novedades que introduce la ley 10/2010, de 28 de abril, sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo”, *II Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pág. 49).

<sup>42</sup> Vid. QUINTERO OLIVARES, G., “Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil”, *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología* (en línea). 2010, núm.12-r2, p. r2:1-

actuación a otras figuras delictivas, de tal modo que tras la reforma del Código penal de 2003, el blanqueo se vincula a los beneficios derivados de cualquier actividad delictiva<sup>43</sup>. Un análisis conjunto de las sucesivas reformas del Código vigente permite comprobar que el delito de blanqueo ha sido objeto de una preocupante expansión, experimentado un radical aumento no sólo en su ámbito de aplicación<sup>44</sup>, sino también en las formas comisivas a través de las cuales aquél puede manifestarse<sup>45</sup>, así como en el círculo de sujetos activos (previsión expresa del autoblanqueo). No sin razón se ha afirmado que la actual configuración del tipo puede provocar “extrañas consecuencias” punitivas<sup>46</sup> que acaben provocando un total desprestigio la figura delictiva objeto de nuestro estudio, “trivializando su aplicación”<sup>47</sup>. A este fenómeno de capital trascendencia, censurado de manera general por la doctrina especializada<sup>48</sup> como

---

r2:20, pág. 9, disponible en el siguiente enlace: <http://criminet.ugr.es/recpc/12/recpc12-r2.pdf>; BLANCO CORDERO, I., “La cuota tributaria defraudada como objeto material del delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 178; MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Un matrimonio de conveniencia: blanqueo de capitales y delito fiscal”, *Revista de Derecho Penal*. N° 37, 2012. Ed. Lex Nova, 2012, pág. 10.

<sup>43</sup> La entrada en vigor del Código penal de 1995 ya supuso un incremento sustancial del ámbito de aplicación del delito de blanqueo respecto a la configuración del tipo en el Código anteriormente vigente, al ampliar el catálogo de delitos base a todos aquellos que tuvieran la consideración de grave. Tras la reforma del año 2003 (LO 15/2003), cualquier tipo penal pasó a ser idóneo como delito previo del blanqueo, quedando únicamente fuera de su radio de acción los beneficios económicos derivados de las antiguas faltas. (Vid. LANDROVE DÍAZ, G., “El blanqueo de capitales de procedencia delictiva”, *I Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, pág. 146).

<sup>44</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., “La cuota tributaria defraudada como objeto material del delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 178; ABEL SOUTO, M., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, *II Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coord. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, págs. 81 y ss.; OLIVA GARCÍA, H., “La defensa ante la acusación por blanqueo de dinero”, *I Congreso de prevención y represión del blanqueo de dinero* (coord. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, pág. 23.

<sup>45</sup> Vid. FERNÁNDEZ TERUELO, J. G., “El comiso con particular referencia a su incidencia en el delito del blanqueo de capitales (a raíz de la reforma del código penal operada por LO 5/2010)”, *II Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pág. 125; id., “El nuevo modelo de reacción penal frente al blanqueo de capitales (los nuevos tipos de blanqueo, la ampliación del comiso y la integración del blanqueo en el modelo de responsabilidad penal de las empresas)”, *Diario La Ley*, Sección Doctrina, 22 Jun. 2011, Año XXXII, n° 7657. Ed. La Ley, 2011, págs. 4 y ss.; BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I./ FABIÁN CAPARRÓS, E. A., “La emancipación del delito de blanqueo de capitales en el Derecho penal español”, *Un derecho penal comprometido: libro homenaje al Prof. Dr. Gerardo Landrove Díaz*. (VV. AA.) Francisco José Muñoz Conde (dir.), José Manuel Lorenzo Salgado (dir.), Juan Carlos Ferré Olivé (dir.), Emilio Cortés Bechiarelli (dir.), Miguel Ángel Núñez Paz (dir.). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, págs. 129 y ss.; MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Receptación y blanqueo de capitales (arts. 301 y 302)”, *Comentarios a la reforma penal de 2010*. Dirs. F.J. Álvarez García/J.L. González Cussac. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2010, pág. 340; ABEL SOUTO, M., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., págs. 81 y ss.

<sup>46</sup> Vid. QUINTERO OLIVARES, G., “Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil”, op. cit., pág. 13.

<sup>47</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., “La cuota tributaria defraudada como objeto material del delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 178.

<sup>48</sup> Vid. FERRÉ OLIVÉ, J. C., “Política criminal europea en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo”, *Financiación del terrorismo, blanqueo de capitales y secreto bancario: un análisis crítico* (dir. José Luis González Cussac; coord. Antonio Fernández Hernández). Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2009. También en *I Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y

manifestación paradigmática de la actual y no menos reproachable expansión del Derecho penal<sup>49</sup>, nos referiremos detenidamente a lo largo de este trabajo, anticipando ya nuestra adhesión a las orientaciones doctrinales más críticas.

### **1.1.2. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS FENOMENOLÓGICAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES**

La locución blanqueo de capitales comenzó a emplearse en América durante la década de los años 20 por grupos de pequeña delincuencia que se sirvieron de modestas empresas de servicios pagaderos en metálico -en numerosas ocasiones lavanderías- para dar apariencia de legitimidad a los beneficios derivados de sus actividades delictivas<sup>50</sup>. Desde entonces, y hasta la actualidad, esta expresión -con diferentes variantes terminológicas- se ha extendido a nivel internacional para referirse al fenómeno criminal del blanqueo. En efecto, aunque éste se designa formalmente de diversas maneras, todas ellas poseen una análoga significación. Si en algunos Estados, como en Francia, se emplea la expresión “blanqueo de dinero”, otros se refieren al “lavado de

---

Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, pág. 250; ABEL SOUTO, M., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., págs. 61 y ss.; MILANS DEL BOSCH, S., “Principales novedades que introduce la ley 10/2010, de 28 de abril, sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo”, op. cit., págs. 45 y ss.; FERNÁNDEZ TERUELO, J. G., “El comiso con particular referencia a su incidencia en el delito del blanqueo de capitales (a raíz de la reforma del código penal operada por LO 5/2010)”, op. cit., págs. 125 y 126; MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Receptación y blanqueo de capitales (arts. 301 y 302)”, op. cit., págs. 339 y 340; SÁNCHEZ STEWART, N., “Abogados y blanqueo de capitales”, *II Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, págs. 11 y ss.

<sup>49</sup> Vid. SILVA SÁNCHEZ, J. M., *La expansión de Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales*. Ed. Civitas. 1ª ed., Madrid, 1999, pág. 17; id., *La expansión de Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales. Segunda edición, revisada y ampliada*, op. cit., págs. 20 y ss.; id., *Aproximación al Derecho penal contemporáneo*. Ed. Bosch. Barcelona, 1992, págs. 16 y ss.; CESANO, J. D., *La política criminal argentina: ¿últimas imágenes del naufragio?*, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, 2008, págs. 2 y ss., disponible en el enlace siguiente: [www.acaderc.org.ar/doctrina/articulos/la-politica-criminal-argentina-ultimasimágenes?searchterm=Cesano](http://www.acaderc.org.ar/doctrina/articulos/la-politica-criminal-argentina-ultimasimágenes?searchterm=Cesano); ABEL SOUTO, M., *El blanqueo de dinero en la normativa internacional*, op. cit., pág. 52. En relación con el delito de blanqueo de capitales, vid. SILVA SÁNCHEZ, J. M., “Expansión del derecho penal y blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 132; ABEL SOUTO, M., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., págs. 61-64; BLANCO CORDERO, I., “La cuota tributaria defraudada como objeto material del delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 178; FERNÁNDEZ TERUELO, J. G., “El comiso con particular referencia a su incidencia en el delito del blanqueo de capitales (a raíz de la reforma del código penal operada por LO 5/2010)”, op. cit., págs. 125 y 126; MUÑOZ CONDE, F., “Consideraciones en torno al bien jurídico protegido del blanqueo de capitales”, *I Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, págs. 157 y 158.

<sup>50</sup> Con la finalidad, afirma ZARAGOZA AGUADO, de “mezclar fondos legales e ilegales, y declarar sus ingresos totales como ganancias de su negocio tapadera. Al hacerlo combinaban en una sola etapa las tres fases del ciclo normal del blanqueo de dinero: se distanciaba el dinero del delito, se ocultaba en un negocio legítimo y finalmente afloraba como ganancias de una empresa legal que justificaba la cantidad de dinero declarada”. (“El blanqueo de bienes de origen criminal”, *Manuales de Formación Continuada, Derecho penal económico*. n° 14 (año 2001), CGPJ. Madrid, 2001, pág. 368).

dinero” -del inglés “*money laundering*”- (países anglófonos, Alemania o la Suiza de habla germánica)<sup>51</sup>. En otros países es habitual el uso de términos como “reciclaje” (Italia) o “legitimación de capitales” (algunas legislaciones iberoamericanas)<sup>52</sup> y, en fin, en otros Estados se emplea la locución “blanqueo de capitales”<sup>53</sup>. Así ocurre en nuestro país, donde la jurisprudencia emplea dicha expresión habitualmente y tanto la normativa preventiva como el Código Penal hacen uso de ella<sup>54</sup>.

La doctrina tampoco maneja una expresión unívoca. Si bien la mayoría de los autores<sup>55</sup> suelen emplear la locución “blanqueo de capitales”, otros se decantan por expresiones diferentes: ABEL SOUTO se refiere al “blanqueo de dinero”<sup>56</sup>; CARPIO DELGADO<sup>57</sup> y ZARAGOZA AGUADO<sup>58</sup> hablan de “blanqueo de bienes”; VIDALES

<sup>51</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 84.

<sup>52</sup> Vid. ZARAGOZA AGUADO, J. A., “El blanqueo de bienes de origen criminal”, op. cit., pág. 368.

<sup>53</sup> Afirma ABEL SOUTO que el término “lavado” es el más extendido, ya que se emplea en países de anglófonos (Gran Bretaña, EE.UU. y, por proximidad geográfica, la mayor parte de países hispanoamericanos) y en aquellos de habla germánica (Alemania, Austria) y en otros, como Suiza. (*El blanqueo de dinero en la normativa internacional*, op. cit., pág. 33).

<sup>54</sup> El texto original del Código del 95, hasta la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, empleaba el recurso perifrástico “otras conductas afines” (a la receptación), cuya oportunidad había sido discutida acertadamente por diversos autores. (Vid. en este sentido, CALDERÓN CEREZO, A., “El marco jurídico del blanqueo de capitales: aspectos penales y administrativos”, esquema de ponencia publicado en datadiar.com, disponible en [http://www.datadiar.com/actual/novedades\\_05/penal/blanqueo/d\\_may\\_02c.htm](http://www.datadiar.com/actual/novedades_05/penal/blanqueo/d_may_02c.htm), pág. 2). MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., por su parte, llegó a señalar que la expresión “induce a confusión, puesto que (...) el blanqueo de bienes no es en rigor una conducta receptadora”. (“Blanqueo de Bienes”, *Derecho penal económico y de la empresa. Parte especial*. 2ª ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2005, pág. 495). En la última edición de dicha obra, posterior a la reforma del artículo 301 CP del año 2010, considera digna de elogio la incorporación del vocablo “blanqueo” por dicha reforma. (“Blanqueo de capitales”, *Derecho penal económico y de la empresa. Parte especial*. 3ª ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2011, pág. 477).

<sup>55</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 75 -si bien a lo largo de su monografía el autor emplea diferentes expresiones para referirse al fenómeno criminal que aquí se estudia-; ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*. Marcial Pons. Madrid, 2000, págs. 24 y ss.; GÓMEZ INIESTA, D. J., *El delito de blanqueo de capitales en Derecho Español*. Cedecs. Barcelona, 1996, pág. 20; DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, J., *El delito de blanqueo de capitales en Derecho Español*. Dykinson. Madrid, 1999, pág. 5; id., “Recepción de las propuestas del GAFI de las Directivas europeas sobre el blanqueo de capitales en el derecho español”, *Política criminal y blanqueo de capitales*, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2009, pág. 23; ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 40; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 87; CALDERÓN CEREZO, A., *Comentarios al Código penal*, vol. 3, Cándido Conde-Pumpido Tourón (dir.) Jacobo López Barja de Quiroga (coord.). BOSCH. Comte d’Urgell, 2007, pág. 2293; MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de Capitales”, 3ª ed., op. cit., pág. 477, si bien en ediciones anteriores del Manual rubricaba el capítulo dedicado al delito de blanqueo como “blanqueo de bienes”. (“Blanqueo de Bienes”, 2ª ed., op. cit., pág. 495); SUÁREZ-MIRA RODRÍGUEZ, C., *Manual de Derecho penal. Tomo II. Parte especial*. Thomson. 2º edición, 2004, pág. 323; ALFONSO LASO, D. de, *El abogado ante la comisión imprudente de blanqueo de capitales*, Diario La Ley, nº 7020, año XXIX, 25 sep. 2008, págs. 8 y ss.; HERNÁNDEZ PARDO, R., *Prevención del blanqueo de capitales: respuestas a las dudas de los profesionales jurídicos*, Diario La Ley-Actualidad, Año XXIX, nº 7020, 2008, pág. 2; MARTOS NÚÑEZ, J. A., “Receptación y blanqueo de capitales”, *Lecciones de derecho Penal. Parte Especial. Tomo II*. Dir. Miguel Polaino Navarrete. Ed. Tecnos. Madrid, 2011, pág. 208; ARIAS HOLGUÍN, D. P., *Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 33.

<sup>56</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., *El blanqueo de dinero en la normativa internacional*, op. cit., pág. 40; id., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., pág. 15.

<sup>57</sup> Vid. CARPIO DELGADO, J. del, *El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal*, op. cit., pág. 23.

RODRÍGUEZ<sup>59</sup> encuentra técnicamente más correcta la expresión “legitimación de capitales” y BAJO FERNÁNDEZ/BACIGALUPO SAGESSE consideran más acertado referirse a la “legitimación de activos”<sup>60</sup>. En este trabajo de investigación, salvo que motivos de estilo aconsejen el empleo de una expresión alternativa, se hará uso con carácter general de la locución “blanqueo de capitales”. A nuestro juicio está justificado el uso de este neologismo “de incuestionable carga semántica”<sup>61</sup>, ampliamente asumido en la doctrina, la jurisprudencia y la práctica forense, habitualmente empleado en los foros internacionales, y que, tras la reforma del Código penal de 2010, queda definitivamente consolidado en el Ordenamiento jurídico español.

Por otro lado, algunos autores han reparado en la conveniencia de distinguir un concepto amplio de blanqueo de capitales de otro estricto<sup>62</sup>. Según BLANCO CORDERO, el concepto amplio hace referencia a la reintroducción en el tráfico normalizado de activos o capitales que están “fuera de control de las instituciones tributarias”<sup>63</sup>, mientras el segundo se identifica con el proceso de integración en el circuito financiero legal de aquellos capitales que tienen un origen puramente delictivo, englobando el primer concepto al segundo y no a la inversa<sup>64</sup>. A este concepto restringido de blanqueo, único que precisa de la intervención penal, se circunscribe el presente trabajo de investigación. Cualquier referencia que aquí se haga al blanqueo de capitales debe entenderse circunscrita a dicho “concepto estricto”.

---

<sup>58</sup> Vid. ZARAGOZA AGUADO, J. A., “El blanqueo de bienes de origen criminal”, op. cit., págs. 365 y ss.; id., “Aspectos probatorios y técnicas de investigación en los procesos por lavado de dinero: medidas preventivas y cautelares, recomendaciones internacionales”, *Combate del lavado de activos desde el sistema judicial*. 3ª edición. Washington, DC: Organización de los Estados Americanos, República Bolivariana de Venezuela, y Banco Interamericano de Desarrollo, 2007, pág. 232; disponible en el siguiente enlace [http://www.cicad.oas.org/lavado\\_activos/pubs/Combate\\_Lavado\\_3ed.pdf](http://www.cicad.oas.org/lavado_activos/pubs/Combate_Lavado_3ed.pdf).

<sup>59</sup> Vid. VIDALES RODRÍGUEZ, C., *Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código penal de 1995*. Tirant lo Blanch. Valencia, 1997, pág. 74.

<sup>60</sup> Vid. BAJO FERNÁNDEZ, M./BACIGALUPO SAGESSE, S., “Blanqueo de capitales”, *Derecho penal económico*. Colección CEURAZ. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, 2ª Edición. Madrid, 2010, págs. 714 y 715. Los autores desautorizan la expresión “blanqueo de capitales”, tildándola de “desafortunada denominación”, no dotada de rigor técnico y ser más propia de la jerga de la criminalidad económica.

<sup>61</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 358. A juicio del autor, esta es la expresión que el legislador penal debería haber adoptado en relación al fenómeno criminal “en beneficio de la claridad que debe caracterizar a un cuerpo legal de tanta importancia como es un Código penal -el ciudadano sólo puede sentirse motivado por aquellas normas que comprende, y resulta innegable que sabe mucho mejor cuál es la realidad que subyace al «blanqueo de capitales», antes a que a una «conducta afín a la receptación»-”.

<sup>62</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, op. cit., págs. 89 y ss.; VIDALES RODRÍGUEZ, C., *Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código penal de 1995*, op. cit., pág. 75; MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de Capitales”, 3ª ed., op. cit., pág. 478.

<sup>63</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 88.

<sup>64</sup> Ibidem, págs. 87 y 88.

Coincidimos con FABIÁN CAPARRÓS<sup>65</sup> y BLANCO CORDERO en la conveniencia de partir de un análisis de los elementos que configuran el *blanqueo de capitales* para ofrecer una definición del mismo. Con arreglo al esquema propuesto por BLANCO, son cuatro los elementos que determinan el concepto de blanqueo de capitales<sup>66</sup>:

1. El blanqueo de capitales constituye un **proceso**, integrado por diferentes fases sucesivas llevadas a cabo con objeto de alcanzar el resultado perseguido.
2. Se trata de un proceso **de ocultación**, cuya finalidad es impedir que se conozca algo, el objeto de ocultación.
3. Su **objeto de ocultación** es la naturaleza u origen delictivo de los fondos<sup>67</sup>.
4. El proceso está dirigido a una **finalidad** concreta: dar apariencia de legalidad a los fondos ilícitamente obtenidos, para posibilitar su utilización en el circuito económico legal de un modo jurídicamente incuestionado<sup>68</sup>. Es decir, el blanqueo persigue culminar el plan criminal, facilitando el aprovechamiento económico de la actividad delictiva previamente desplegada.

Las diferentes definiciones del “blanqueo de capitales” propuestas en el seno de la doctrina, si bien se distinguen en mayor o menor medida en lo que a su formulación se refiere, son esencialmente coincidentes respecto de un contenido que, en general, contempla los elementos a los que se ha hecho referencia.

Así, FABIÁN CAPARRÓS define el blanqueo como “proceso tendente a obtener la aplicación en actividades económicas lícitas de una masa patrimonial derivada de cualquier género de conductas ilícitas, con independencia de cuál sea la forma que esa masa adopte, mediante la progresiva concesión a la misma de una apariencia de legalidad”<sup>69</sup>. MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ se refiere al “proceso de ocultación de bienes de

---

<sup>65</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 48 y ss.

<sup>66</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 88 y ss.

<sup>67</sup> Insistimos en la conveniencia de distinguir claramente el blanqueo de bienes derivados de delito de los procesos de reintegración de capitales fuera de control fiscal: el fenómeno de blanqueo que aquí se estudia tiene por objeto exclusivamente activos de procedencia delictiva. Vid. ampliamente FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 55 y ss.

<sup>68</sup> Vid. CALDERÓN CERESO, A., “Algunos aspectos críticos del blanqueo de capitales. Legislación y jurisprudencia”, *Las últimas reformas penales II, Cuadernos de Derecho Judicial* nº X, 2006. CGPJ. Madrid, 2006, pág. 71; id., “El marco jurídico del blanqueo de capitales: aspectos penales y administrativos”, op. cit., pág. 2.

<sup>69</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 76.



origen delictivo con el fin de dotarlos de una apariencia final de legitimidad”<sup>70</sup>. Similar definición aporta MARTOS NÚÑEZ, considerando que el blanqueo es un “proceso complejo por el que se da apariencia de legalidad al dinero o bienes procedentes de la comisión de un delito”<sup>71</sup>. Por su parte, ZARAGOZA AGUADO habla de “aquellas conductas orientadas (...) a la incorporación al tráfico económico de los bienes o dinero ilegalmente obtenido, o si se prefiere, a dar apariencia de licitud al producto o beneficio procedente del delito”<sup>72</sup>. Muy similar es la fórmula propuesta por CALDERÓN CEREZO, para quien el blanqueo integra “conductas que tienden a la incorporación al tráfico económico legal, de los bienes, dinero y beneficios en general, procedentes de actividades delictivas para hacer posible con la consiguiente apariencia de normalidad su disfrute jurídicamente incuestionado”<sup>73</sup>. DíEZ RIPOLLÉS define el blanqueo de capitales como “los diversos procedimientos por los que se aspira a introducir en el tráfico económico-financiero legal los cuantiosos beneficios obtenidos a partir de la realización de determinadas actividades delictivas especialmente lucrativas, posibilitando así un disfrute de aquellos jurídicamente incuestionado”<sup>74</sup>. Por su parte, BLANCO CORDERO conceptúa el blanqueo como aquel “proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita”<sup>75</sup>. HUERTA TOCILDO lo define como “procedimiento mediante el cual se pretende incorporar al tráfico económico financiero legal los beneficios obtenidos a raíz de la realización de ciertas actividades delictivas”<sup>76</sup>. Para GÓMEZ INIESTA el blanqueo hace referencia a “aquella operación a través de la cual el dinero de origen siempre ilícito (...) es invertido, ocultado, sustituido o transformado y restituido a los circuitos económicos legales, incorporándose a cualquier tipo de negocio como si se hubiera obtenido de forma lícita”<sup>77</sup>. DÍAZ-MAROTO considera que el blanqueo es aquel “proceso o conjunto de operaciones mediante el cual los bienes o el dinero resultante de actividades delictivas, ocultando tal procedencia, se integran en el

<sup>70</sup> Vid. MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de Capitales”, 3ª ed., op. cit., pág. 478.

<sup>71</sup> Vid. MARTOS NÚÑEZ, J. A., “Receptación y blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 208.

<sup>72</sup> Vid. ZARAGOZA AGUADO, J. A., “El blanqueo de bienes de origen criminal”, op. cit., pág. 638.

<sup>73</sup> Vid. CALDERÓN CEREZO, A., *Comentarios al Código penal*, vol. 3, op. cit., pág. 2293.

<sup>74</sup> Vid. DíEZ RIPOLLÉS, J. L., “El blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas. La recepción de la legislación internacional en el ordenamiento penal español”, *Cuadernos de derecho Judicial I*, 1994. CGPJ. Madrid, 1994, págs. 181 y 182.

<sup>75</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 92.

<sup>76</sup> Vid. HUERTA TOCILDO, S., “Aproximación crítica a la nueva regulación del delito de receptación y otras conductas afines”, *Cuadernos de Derecho Judicial* nº XX, 1996. CGPJ. Madrid, 1996, pág. 385.

<sup>77</sup> Vid. GÓMEZ INIESTA, D. J., *El delito de blanqueo de capitales en Derecho Español*, op. cit., pág. 21; id., “Recepción de las propuestas del GAFI de las Directivas europeas sobre el blanqueo de capitales en el derecho español”, op. cit., pág. 23.

proceso económico y financiero”<sup>78</sup>. Más escueta es la definición aportada por ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, para quien el blanqueo es “la incorporación de los capitales ilícitamente obtenidos a los círculos económicos legales”<sup>79</sup>. En fin, para VIDALES RODRÍGUEZ “el blanqueo o lavado de capitales (...) hace referencia al proceso por el que se da apariencia de legalidad al dinero o bienes procedentes de la comisión de un delito”<sup>80</sup>. También la jurisprudencia coincide básicamente, en cuanto al fondo, con las definiciones propuestas por la doctrina. Así, en la STS 1034/05, de 14 de septiembre, se afirma que “mediante las conductas que la doctrina y la jurisprudencia denomina de “blanqueo”, se tiende a incorporar al tráfico legal los bienes, dinero, y ganancias en general obtenidos en la realización de actividades delictivas, de manera que superado el proceso de lavado se hiciera posible su disfrute jurídicamente incuestionado”<sup>81</sup>.

Partiendo de los elementos que conforman el fenómeno del blanqueo de capitales, podríamos definirlo como aquel proceso de transformación de activos de origen delictivo, con el fin de proporcionarles una apariencia legítima y con ello posibilitar su reintegración en el tráfico económico-financiero legal de cara a su utilización de un modo jurídicamente incuestionado.

La doctrina y la jurisprudencia<sup>82</sup> han caracterizado al blanqueo de capitales como un fenómeno de implantación internacional, habitualmente vinculado a la criminalidad organizada, dotado de naturaleza fundamentalmente dinámica y con demostrada capacidad de adaptación, tendente a la evolución y a la incorporación de nuevas fórmulas de lavado, cada vez más sofisticadas y profesionalizadas, precisamente para eludir las consecuencias de la normativa antiblanqueo, también en constante evolución. Abundando en ello, resulta oportuno concluir el presente apartado haciendo una breve referencia a cada uno de los elementos que caracterizan el fenómeno del blanqueo, notas caracterizadoras que -como recuerda BLANCO CORDERO- “se encuentran

---

<sup>78</sup> Vid. DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, J., *El delito de blanqueo de capitales en Derecho Español*. op. cit., pág. 5.

<sup>79</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 35 y 36.

<sup>80</sup> Vid. VIDALES RODRÍGUEZ, C., *Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código penal de 1995*, op. cit., pág. 72.

<sup>81</sup> Recientemente, la jurisprudencia ha aportado una definición más amplia: en las SSTS 257/2014, de 1 de abril, y 83/2014, de 13 de febrero, se conceptúa el blanqueo de capitales como “toda conducta destinada a encubrir o enmascarar el origen ilícito de los bienes generados como consecuencia de una actividad delictiva previa”, y ello porque “los moldes históricos, cerrados en las ganancias obtenidas por el tráfico de drogas, han sido ya desbordados por una tendencia internacional expansiva en la que se sanciona, no sólo convertir o transmitir bienes, sino poseer o utilizar esos mismos bienes”.

<sup>82</sup> Vid. STS 165/2013, de 26 de marzo.

interrelacionadas y se potencian recíprocamente”<sup>83</sup>: su carácter transnacional, su dinamismo y progresiva profesionalización, su capacidad de adaptación, así como la estrecha vinculación que une al fenómeno con la criminalidad organizada.

#### **1.1.2.1. INTERNACIONALIZACIÓN. LA PROBLEMÁTICA DE LOS PARAÍDOS FISCALES Y ZONAS OFFSHORE**

De forma paralela al proceso de globalización de la economía operado en las últimas décadas<sup>84</sup>, el blanqueo de capitales ha experimentado una marcada tendencia internacional<sup>85</sup>, superando las fronteras nacionales de unos Estados que, al menos en el mundo occidental, cuentan con una normativa preventiva que dificulta eficazmente el desarrollo de los procesos de legitimación de activos<sup>86</sup>. Se ha constatado que, al igual que ocurre en el ámbito del comercio lícito, el flujo de bienes de procedencia delictiva suele caracterizarse por un distanciamiento geográfico entre el lugar de origen y su punto final de destino<sup>87</sup>. En efecto, es práctica habitual trasladar los activos ilícitos desde aquel Estado donde ha tenido lugar la actividad delictiva que los ha generado a otros territorios donde existe una normativa más laxa o unos controles administrativos menores o incluso nulos<sup>88</sup>, y que facilitan en muchos casos el anonimato de las transacciones<sup>89</sup>. A muchas de estas plazas se las identifica frecuentemente como

---

<sup>83</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 57; MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “La dimensión internacional del blanqueo de dinero”, op. cit., págs. 184 y ss.

<sup>84</sup> Vid. ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 25; FABIÁN CAPARRÓS, E. A., “El blanqueo de capitales (Contexto, razones de su penalización, evolución en nuestro entorno de las iniciativas supranacionales)”, op. cit., pág. 165; ESCRIBANO ÚBEDA-PORTUGUÉS, J., “Análisis de los efectos negativos de la delincuencia organizada en la sociedad internacional”, *Anales de la Universidad Metropolitana*, Vol. 9, nº 2 (Nueva Serie), 2009, págs. 76 y ss., disponible en el enlace [dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3623992.pdf](http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3623992.pdf).

<sup>85</sup> Vid., ampliamente, FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 80 y ss.; id. “Tipologías y lógica del lavado de dinero”, *Combate del lavado de activos desde el sistema judicial*. 3ª edición. Washington, DC: Organización de los Estados Americanos, República Bolivariana de Venezuela, y Banco Interamericano de Desarrollo, 2007, pág. 10, disponible en el siguiente enlace: [http://www.cicad.oas.org/lavado\\_activos/pubs/Combate\\_Lavado\\_3ed.pdf](http://www.cicad.oas.org/lavado_activos/pubs/Combate_Lavado_3ed.pdf).

<sup>86</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., “El blanqueo de capitales (Contexto, razones de su penalización, evolución en nuestro entorno de las iniciativas supranacionales)”, op. cit., págs. 166 y 167.

<sup>87</sup> Ibidem, pág. 164.

<sup>88</sup> Vid. ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 22; MATA LLÍN EVANGELIO, A., “El “autoblanqueo” de capitales”, *Revista General de Derecho Penal*, Nº. 20, 2013. Ed. Iustel, 2013, pág. 3.

<sup>89</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., “La lucha contra el blanqueo de capitales procedentes de las actividades delictivas en el marco de la U.E.”, op. cit., pág. 10.

“refugios financieros, paraísos fiscales y centros financieros extraterritoriales (*offshore*)”<sup>90</sup>.

Constatada la progresiva “globalización” de las actividades de blanqueo y el imponderable servicio que a este género de actividades prestan los paraísos del reciclaje<sup>91</sup>, se ha tomado consciencia de la necesidad de dar una respuesta transnacional al fenómeno, y de que sólo mediante acciones coordinadas y homogéneas de los diferentes Estados que conforman la comunidad internacional puede combatirse eficazmente el blanqueo de capitales<sup>92</sup>. Acciones que van desde la creación de organismos *ad hoc* y de instrumentos normativos internacionales encargados de la prevención y represión del blanqueo, hasta una armonización de las legislaciones internas de diferentes Estados sobre dichas materias<sup>93</sup>. La respuesta a la internacionalización del fenómeno se ha canalizado, como veremos, a través de acciones de diversas estructuras supranacionales<sup>94</sup> para erradicar el blanqueo y para facilitar el decomiso y recuperación de activos procedentes fundamentalmente de la delincuencia organizada<sup>95</sup>. Sobre ello volveremos con más detalle en el apartado dedicado a la normativa internacional sobre prevención y represión del blanqueo. En cualquier caso, conviene apuntar que las iniciativas adoptadas en el plano internacional se ven seriamente dificultadas por la existencia de los paraísos fiscales, territorios poco proclives a la cooperación en materia antiblanqueo, y que “suelen disfrazar su falta de colaboración bajo la falsa apariencia de problemas técnico-jurídicos”<sup>96</sup>.

Las notas que principalmente caracterizan a los paraísos fiscales y zonas *offshore* son la existencia de una baja fiscalidad y el desarrollo de una legislación muy

---

<sup>90</sup> Vid. ROSADO DOMÍNGUEZ, F., “El blanqueo de dinero. Deficiencias en zonas internacionales de riesgo”, *Prevención y represión del blanqueo de capitales, Estudios de Derecho Judicial* n° 28, 2000. CGPJ. Madrid, 2000, pág. 158. “La baja o nula fiscalidad junto con la no consideración como delito por muchas jurisdicciones de la evasión fiscal en un país extranjero, hacen que estos refugios financieros cumplan merecidamente con su calificativo de paraísos fiscales.” (Ibidem, pág. 159).

<sup>91</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 107.

<sup>92</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., *El blanqueo de dinero en la normativa internacional*, op. cit., pág. 56.

<sup>93</sup> Según AMBOS, el análisis comparativo de las regulaciones europeas relativas al delito de blanqueo permite afirmar que ni siquiera se ha visto satisfecha de manera plena la pretendida armonización a nivel europeo, “o por lo menos una cierta “sincronización” sobre las acciones previstas, los actos precedentes que deben ser considerados, ni las exigencias a nivel subjetivo.” (“Internacionalización del Derecho penal: el ejemplo del “lavado de dinero”, op. cit., pág. 198).

<sup>94</sup> Vid. MATALLÍN EVANGELIO, A., “El “autoblanqueo” de capitales”, op. cit., pág. 3.

<sup>95</sup> Vid., ampliamente, JIMÉNEZ-VILLAREJO FERNÁNDEZ, F., “Propuestas para mejorar la eficacia de la recuperación de activos criminales en un contexto de crisis económica”, *Revista de Derecho Penal*, n° 37, 2012. Ed. Lex Nova, 2012, págs. 105 y ss.

<sup>96</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., “El blanqueo de capitales (Contexto, razones de su penalización, evolución en nuestro entorno de las iniciativas supranacionales)”, op. cit., pág. 166.

laxa que proporciona a los agentes que operan en su territorio las garantías derivadas del secreto bancario y de la estricta confidencialidad. Como ha advertido FABIÁN CAPARRÓS, no es posible enunciar un concepto unívoco de paraíso fiscal, pues son muy diversos los factores que inciden en la calificación de un territorio como tal<sup>97</sup>. Podría en este sentido hablarse de jurisdicciones de más alto o menor riesgo, en función del grado de cooperación que ofrezcan con terceros países<sup>98</sup>. Aún con todo, el monografista revela determinados rasgos que en mayor o menor medida comparten los denominados “refugios fiscales”: a) la ausencia o bajo nivel de imposición de las rentas, el capital y las transacciones; b) la existencia de secreto bancario y comercial; c) el incumplimiento de convenciones fiscales que establecen el suministro de datos en materia fiscal a los Estados que se lo solicitan, bajo el pretexto de supuestos impedimentos derivados de su legalidad interna; d) la ausencia de un régimen de control de cambios; e) un elevado desarrollo del sector bancario e implementación de políticas de vigorización de actividades bancarias internacionales a través de la instauración de condiciones de inversión altamente beneficiosas y la atracción a su territorio de entidades extranjeras; f) facilidad comunicativa no tanto física como tecnológica, que permite realizar con rapidez transacciones comerciales o financieras; g) otros factores que benefician las prácticas comerciales y financieras opacas, tales como la previsibilidad de permanencia en un futuro de la laxitud en la normativa fiscal y bancaria del territorio<sup>99</sup>.

La reticencia de estas jurisdicciones a refrendar tratados o convenios de cooperación, fundamentalmente en materia fiscal, y las dificultades que suelen presentar frente a las demandas de colaboración y auxilio internacional, convierten a los paraísos fiscales en un espacio idóneo por donde hacer circular los activos ilícitos para difuminar su rastro delictivo<sup>100</sup>. Dichos territorios, integrados en el sistema financiero internacional, pasan a ser canales óptimos para que las organizaciones distribuyan los

---

<sup>97</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 90 y 91.

<sup>98</sup> Vid. FATF, *Las 40 Recomendaciones revisadas el 16 de febrero de 2012*, pág. 18, disponible en el siguiente enlace: [www.aranzadi.es/blanqueodecapitales/pdf/4.40recomendacionesgafi.pdf](http://www.aranzadi.es/blanqueodecapitales/pdf/4.40recomendacionesgafi.pdf).

<sup>99</sup> Vid., ampliamente, FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 90 y 91. En el mismo sentido, TORRES-DULCE LIFANTE, E., “El blanqueo de dinero en paraísos fiscales”, *Fenómenos delictivos complejos. Cuadernos de derecho judicial* n° IX, 1999 (Luis Román Puerta Luis, dir.), CGPJ, 1999, pág. 250.

<sup>100</sup> Vid. ROSADO DOMÍNGUEZ, F., “El blanqueo de dinero. Deficiencias en zonas internacionales de riesgo”, op. cit., pág. 158; FERRO VEIGA, J. M., *Delito fiscal y blanqueo de capital*. Ed. Formación Alcalá. Jaén, 2013, pág. 87.

activos ya lavados a los mercados financieros mundiales<sup>101</sup>. En cualquier caso, tal y como advierte ROSADO DOMÍNGUEZ, la estrecha vinculación entre estas jurisdicciones y el fenómeno del blanqueo no ha de conducir a considerar que en todos los casos los refugios financieros son “lavanderías de dinero de procedencia criminal”<sup>102</sup>. En efecto, los paraísos fiscales pueden ser utilizados con muy diversos fines y, en muchas ocasiones, los fondos desviados a estos centros no provienen de la comisión de delitos económicos, sino de operaciones de gran magnitud promovidas por grandes agentes económicos y financieros<sup>103</sup>. En estos casos, el recurso a estas jurisdicciones tiene “una motivación esencialmente fiscal”. También se recurre a estas plazas para ocultar y proteger grandes masas de caudales hereditarios y de patrimonios tanto de cargas impositivas como de eventuales responsabilidades civiles<sup>104</sup>. Es sin duda la opacidad fiscal y la posibilidad de situar grandes fortunas bajo el paraguas del anonimato<sup>105</sup> lo que hace tan atractivas las zonas *offshore* “para las estrategias financieras de las grandes multinacionales y otros grandes actores globales”. Dichas facilidades de las que se sirven fundamentalmente los más poderosos agentes económicos también parecen ser, denuncia FERNÁNDEZ STEINKO, el motivo por el que “la mayoría de los gobiernos occidentales son tan reticentes a «secar» estas jurisdicciones”<sup>106</sup>.

En cualquier caso, ha de advertirse la estrecha vinculación entre gran número de jurisdicciones *offshore* y el blanqueo de capitales. Las peculiaridades de su sistema financiero y jurídico<sup>107</sup> facilitan la actividad de blanqueo del producto del delito: el anonimato de las operaciones de las personas físicas o jurídicas que residen, de forma real o ficticia, en el territorio<sup>108</sup> -garantizado por un estricto secreto bancario y comercial-, la posibilidad de acudir a sociedades pantalla, *trust* (fideicomisos), titulares

---

<sup>101</sup> Vid. PAREDES GÁZQUEZ, J. D./RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J. M./CUESTA GONZÁLEZ, M. de la, “Los paraísos fiscales a discusión”, *XIV Jornadas De Economía Crítica*. Valladolid, 2014, pág. 73, disponible en el enlace [www5.uva.es/jec14/comunica/A\\_FEC/A\\_FEC\\_3.pdf](http://www5.uva.es/jec14/comunica/A_FEC/A_FEC_3.pdf).

<sup>102</sup> Vid. ROSADO DOMÍNGUEZ, F., “El blanqueo de dinero. Deficiencias en zonas internacionales de riesgo”, op. cit., pág. 159.

<sup>103</sup> Vid. FERNÁNDEZ STEINKO, A., “Delito y criminalización en una sociedad global”, *Delincuencia, finanzas y globalización*. CIS. Madrid, 2013, pág. 63.

<sup>104</sup> Vid. ROSADO DOMÍNGUEZ, F., “El blanqueo de dinero. Deficiencias en zonas internacionales de riesgo”, loc. cit.. En el mismo sentido, FABRA VALLS, M., “La lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales”, *Régimen Jurídico de la Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales*. Ed. Tirant lo Blanch. Madrid, 2015, pág. 303.

<sup>105</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 95.

<sup>106</sup> Vid. FERNÁNDEZ STEINKO, A., “Delito y criminalización en una sociedad global”, loc. cit.

<sup>107</sup> Vid. ROSADO DOMÍNGUEZ, F., “El blanqueo de dinero. Deficiencias en zonas internacionales de riesgo”, op. cit., pág. 160.

<sup>108</sup> Vid. PELÁEZ MARTOS, J. M., “El blanqueo de capitales en el sector inmobiliario”, *Fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción en el sector inmobiliario*, Valencia, Ediciones CISS. Valencia, 2009, pág. 326.

fiduciarios y testaferros, la negativa sistemática al suministro de cualquier dato en el marco de la cooperación policial o judicial internacional, así como la precariedad de los sistemas de supervisión bancaria, abonan el terreno para el desarrollo en los paraísos fiscales de este género de actividades y alcanzar más eficazmente el objetivo final de ocultación del origen delictivo de los activos<sup>109</sup>. De este modo, afirma FABIÁN CAPARRÓS, se podría hablar de verdaderos paraísos del blanqueo o del reciclaje, a través de los cuales se verifican en la actualidad la mayoría de las grandes operaciones de lavado, mediante “complicadas transacciones poligonales realizadas gracias a la valiosísima intermediación de entidades situadas en uno o varios *tax havens*”<sup>110</sup>.

La imposibilidad de definir con exactitud las notas que caracterizan los denominados paraísos fiscales impide a su vez establecer una relación precisa de las jurisdicciones que constituyen los denominados *haven tax*<sup>111</sup>. En cualquier caso, de acuerdo con ROSADO DOMÍNGUEZ, no es posible confeccionar una relación de dichas jurisdicciones de forma estática. Bien al contrario, “la oferta en el mundo de los centros financieros se encuentra en un proceso de cambio”<sup>112</sup>: por un lado, se constata la proliferación de ciertas plazas constituidas por pequeños Estados sin recursos que se prestan a prácticas opacas, y por otro, determinadas plazas financieras consolidadas cuya asistencia en materia de cooperación internacional era muy escasa o nula, están mostrando progresivamente una disposición más colaboradora. Es este el caso de Suiza

---

<sup>109</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 105 y ss.

<sup>110</sup> Ibidem, pág. 106. El procedimiento habitual, tal y como lo describe el monografista es el siguiente: “la riqueza sucia se remite líquida (...) a fin de acomodarla mediante la adquisición de activos financieros, en forma de depósitos bancarios o bajo la cobertura de una o varias sociedades instrumentales. Tras reiterar la operación tantas veces como sea preciso a través de tantos países como exija cada caso, esos rendimientos, ya reciclados, permanecerán congelados el tiempo necesario como si de otra clase de mercancía se tratase hasta que surja una buena ocasión para reinvertirlos en los cauces económicos oficiales sin levantar sospechas de su procedencia ilícita. Conforme a este método, las probabilidades de culminar el proceso de lavado con éxito son realmente elevadas: en la inmensa mayoría de las ocasiones, la falta de colaboración -o la imposibilidad material de prestarla- por parte de las autoridades de cualquiera de los territorios involucrados corta irreparablemente la cadena que une la comisión del hecho ilícito con el provecho económico que de él deriva, frustrando con ello las posibilidades de reconstrucción del *paper tracing*”. (Ibidem, pág. 107). Sobre la utilización de los paraísos fiscales para la realización de operaciones de blanqueo, vid., asimismo, BLANCO LOZANO, C., “El blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas en el ordenamiento penal español”, *Comentarios a la legislación penal. Delitos contra la salud pública. (Reformas sobre el tráfico de drogas, secreto de las comunicaciones y conducción de ciclomotores)*, Revista de derecho Público, Tomo XVII, Dir. M. Cobo del Rosal, Coord. M. Bajo Fernández. Edersa. Madrid, 1996, págs. 68 y 69.

<sup>111</sup> Vid. GARCÍA RAMONES, A./SANTAMARÍA CARRERAS, G., “Proceso de eliminación de paraísos fiscales”, *Cuadernos de formación. Escuela de la Hacienda Pública. Instituto de Estudios Fiscales*, 2ª época, vol. 11/2010. Ministerio de Economía y Hacienda. Madrid, 2010, pág. 155.

<sup>112</sup> Vid. ROSADO DOMÍNGUEZ, F., “El blanqueo de dinero. Deficiencias en zonas internacionales de riesgo”, op. cit., pág. 161. Como advierte FABIÁN CAPARRÓS, un sistema de listado de territorios considerados paraísos fiscales está abocado a un rápido anquilosamiento, debido a “la excesiva rigidez de [las] tablas, asociada a la rápida evolución de la fiscalidad”. (*El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 90 y 91).

que, al ampliar el espacio de asistencia judicial recíproca, ha hecho “desvanecerse el otrora hermetismo del secreto bancario suizo. Otros países como Panamá o las Bermudas han emprendido un viaje hacia el reconocimiento de su respetabilidad, introduciendo medidas que dificultan la utilización de sus sistemas para el lavado de activos procedentes del delito”<sup>113</sup>.

En el Ordenamiento jurídico español, el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, dispuso una relación de cuarenta y ocho países o territorios<sup>114</sup> que recibirían la consideración de paraísos fiscales a efectos de la legislación española<sup>115</sup>. Posteriormente, por mandato de la Orden del Ministerio de Economía de 3 de agosto de 2000, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) hubo de actualizar la relación con otras jurisdicciones no comprendidas en el Real Decreto 1080/1991, que fueron identificadas como países o territorios no cooperantes (PTNC) por el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre Blanqueo de Capitales (GAFI)<sup>116</sup>. Por su parte, la Ley 36/2006, de 26 de noviembre de medidas para la prevención de fraude fiscal, en su Disposición adicional primera (modificada por la Ley 26/2014, de 27 de noviembre), prevé que tendrán la consideración de paraísos fiscales aquellos países o territorios que se determinen reglamentariamente<sup>117</sup>, si bien la relación de territorios a los que se atribuya dicho carácter habrá de actualizarse atendiendo a los criterios que la propia norma prevé.

---

<sup>113</sup> Vid. ROSADO DOMÍNGUEZ, F., “El blanqueo de dinero. Deficiencias en zonas internacionales de riesgo”, loc. cit.

<sup>114</sup> Principado de Andorra, Antillas neerlandesas, Aruba, Emirato del Estado de Bahrein, Sultanato de Brunei, República de Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Gibraltar, Hong-Kong, Anguila, Antigua y Barbuda, Las Bahamas, Barbados, Bermuda, Islas Caimanes, Islas Cook, República de Dominica, Granada, Fiji, Islas de Guernesey y de Jersey (Islas del Canal), Jamaica, República de Malta, Islas Malvinas, Isla de Man, Islas Marianas, Mauricio, Montserrat, República de Nauru, Islas Salomón, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, República de Trinidad y Tobago, Islas Turks y Caicos, República de Vanuatu, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de Estados Unidos de América, Reino hachemita de Jordania, República libanesa, República de Liberia, Principado de Liechtenstein, Gran Ducado de Luxemburgo, por lo que respecta a las rentas percibidas por las sociedades a que se refiere el párrafo 1 del protocolo anexo al convenio, para evitar la doble imposición, de 3 de junio de 1986, Macao, Principado de Mónaco, Sultanato de Omán, República de Panamá, República de San Marino, República de Seychelles y República de Singapur.

<sup>115</sup> El RD 1080/1991 fue modificado por el RD 116/2003, añadiendo a aquél un segundo artículo, en virtud del cual los 48 países y territorios previstos en el artículo 1 (como paraísos fiscales) que firmasen con España un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria o un convenio para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de información dejarían de tener la consideración de paraísos fiscales en el momento en que dichos convenios o acuerdos entrasen en vigor.

<sup>116</sup> Vid. DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, J., “Recepción de las propuestas del GAFI de las Directivas europeas sobre el blanqueo de capitales en el derecho español”, op. cit., pág. 25.

<sup>117</sup> Ibidem, pág. 26.



La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha impulsado el compromiso a la colaboración de muchos de los territorios no cooperantes. Numerosas plazas, consideradas antaño como paraísos fiscales, en los últimos años han suscrito o se han comprometido a suscribir convenios fundamentalmente de intercambio de información en materia tributaria conforme a unos estándares marcados por la propia organización<sup>118</sup>. Desde el primer informe que la OCDE elaboró en 1998 (en el que se incluían 47 jurisdicciones como no cooperantes en materia de intercambio de información tributaria), se ha reducido de forma considerable el número de plazas que presentan deficiencias en materia de cooperación, integrando en la actualidad la lista gris sólo Niue y Nauru<sup>119</sup>. Ciertamente, la desaparición de la lista de la OCDE de muchas de las plazas clásicamente consideradas como territorios no cooperantes no permite augurar óptimas perspectivas respecto a la erradicación de los paraísos fiscales. En primer lugar, porque la mayoría de las jurisdicciones que han ido abandonando la lista siguen manteniendo unos regímenes de cooperación más bien limitada; y, por otro lado, los convenios de colaboración suscritos despliegan efectos muy limitados en la lucha contra el blanqueo de capitales<sup>120</sup>. Mayor interés tiene a los efectos de nuestro estudio la relación de territorios no cooperantes elaborada por el GAFI, sometida también a revisión periódica. Aunque las resoluciones del dicho organismo carecen de fuerza jurídica vinculante, el contenido de las mismas es de extraordinaria relevancia práctica, pues la no aplicación de las Cuarenta Recomendaciones por parte de un Estado implica su inclusión en la lista de países y territorios no cooperantes. Los efectos de dicha incorporación van desde el especial examen de cualquier operación realizada con entidades del Estado no cooperante a la aplicación de contramedidas contra dicho Estado<sup>121</sup>. Si bien en 2002, el organismo internacional incluyó como países no colaboradores a Filipinas, Guatemala, Indonesia, Myanmar, Nigeria, Egipto y Ucrania, estos dos últimos Estados han sido excluidos en febrero de 2004, Guatemala en julio del mismo año, Nigeria en junio de 2006 y Myanmar en octubre de dicho año<sup>122</sup>. En la relación que el GAFI publicó en junio de 2015, se incluyen como jurisdicciones respecto de las que los Estados miembros han de adoptar contramedidas para la

<sup>118</sup> Vid., ampliamente, FABRA VALLS, M., “La lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 306 y ss.

<sup>119</sup> Ibidem, pág. 313.

<sup>120</sup> Ibidem, págs. 315 y 316.

<sup>121</sup> Vid. ROSADO DOMÍNGUEZ, F., “El blanqueo de dinero. Deficiencias en zonas internacionales de riesgo”, op. cit., págs. 171 y 172.

<sup>122</sup> Vid. DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, J., “Recepción de las propuestas del GAFI de las Directivas europeas sobre el blanqueo de capitales en el derecho español”, op. cit., pág. 26.

protección del sistema financiero internacional Irán y Corea del Norte; y como jurisdicciones con deficiencias estratégicas en materia antiblanqueo y contra la financiación del terrorismo que no han progresado suficientemente en la dirección apuntada por GAFI o no han acometido un plan de acción desarrollado con dicho organismo para paliar sus carencias, y respecto a las cuales se proponen determinadas medidas, Argelia y Myanmar<sup>123</sup>.

Asimismo, en el ámbito europeo se proyecta la confección de una lista negra de territorios no cooperantes. En el Plan de Acción publicado el 17 junio 2015 por la Comisión Europea<sup>124</sup>, en el que se expone una serie de iniciativas para hacer frente a la elusión fiscal, se incluye una primera lista paneuropea de jurisdicciones de terceros países no cooperantes, entre los que se incluye Andorra<sup>125</sup>. Si bien, en principio, dicha lista tiene vocación de limitar sus efectos al ámbito fiscal, la iniciativa debe ser encomiada como un importante avance en la estrategia de lucha que debe ser abordada internacionalmente para erradicar los paraísos fiscales. No cabe duda de que la existencia de estas jurisdicciones no cooperantes supone una de las herramientas más efectivas de las que puede valerse el agente blanqueador. En muchas ocasiones, es precisamente el desplazamiento de los activos delictivos a un paraíso fiscal lo que impide seguir su rastro. Al entrar los mismos en la zona no cooperante, la imposibilidad de conocer la aplicación y el destino de los fondos delictivos impide definitivamente la prosecución de su seguimiento.

Sorprende el hecho de que, constituyendo la existencia de paraísos fiscales un gran obstáculo para la lucha eficaz contra el blanqueo de capitales, hayan sido y sigan siendo tan escasos los esfuerzos desplegados por la comunidad internacional para su

---

<sup>123</sup> Vid. FATF, *Public Statement*, 26 de junio de 2015, disponible en el siguiente enlace: <http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-june-2015.html>.

Asimismo, vid. *infra* apartado 1.3.1 de este capítulo, págs. 79 y ss.

<sup>124</sup> Vid. Comisión Europea, Comunicado de prensa de fecha 17 junio 2015, disponible en el enlace [http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-15-5188\\_es.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5188_es.htm). Vid., asimismo, la relación de las jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal en el siguiente enlace: [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/taxation/gen\\_info/good\\_governance\\_matters/lists\\_of\\_countries/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/good_governance_matters/lists_of_countries/index_en.htm).

<sup>125</sup> Téngase en cuenta el escándalo financiero que recientemente ha salpicado a la Banca Privada de Andorra (BPA), intervenida por el Instituto Nacional de Finanzas de Andorra tras la denuncia del Tesoro de EE UU, que ha acusado al grupo financiero del Principado de blanquear activos procedentes de organizaciones criminales de países como Venezuela, Rusia y China a cambio de comisiones. Las irregularidades han salpicado a su filial Banco Madrid, con la implicación directa de algunos de sus más altos directivos. (Cfr. Diario ABC, 11/3/2015, disponible en el enlace <http://www.abc.es/economia/20150310/abci-banca-privada-andorra-intervencion-201503101722.html>). Tras la intervención del Banco Madrid por parte del Banco de España y su posterior declaración de concurso, la cúpula de la entidad bancaria se enfrenta al correspondiente procedimiento penal iniciado por Juzgado Central de Instrucción 4 de Madrid. (Cfr. Diario El País, 28/3/2015, disponible en el siguiente enlace [http://economia.elpais.com/economia/2015/04/28/actualidad/1430213761\\_312136.html](http://economia.elpais.com/economia/2015/04/28/actualidad/1430213761_312136.html)).

erradicación. Con razón, algunos autores han denunciado la escasa voluntad real de la gran mayoría de los Estados y del resto de operadores internacionales para acabar definitivamente con los paraísos fiscales<sup>126</sup>. La firma en los últimos años de convenios de colaboración y de intercambio de información con algunas de estas plazas -hecho que ha supuesto, como hemos visto, la reducción de la relación de paraísos fiscales en listas como la elaborada por la OCDE- no resuelve el problema, pues, como advierte PELÁEZ MARTOS, la información que se han comprometido a suministrar dichos territorios suele ser muy restringida, y limitada a materia fiscal y a ámbitos muy específicos de delincuencia<sup>127</sup>. Resulta especialmente llamativo que algunos Estados que otrora impulsasen las primeras y más relevantes iniciativas internacionales antiblanqueo continúen tolerando la existencia de plazas que se prestan a prácticas opacas en su territorio soberano, como recientemente ha advertido el FMI<sup>128</sup>. También llama la atención el grado de permisividad mostrado por las instituciones europeas con las jurisdicciones *offshore* y los escasos esfuerzos hasta el momento desplegados para erradicarlas. No es admisible que la imposición a determinados sectores mercantiles y profesionales de una normativa cada día más estricta para combatir el fenómeno de blanqueo no vaya acompañada de medidas eficaces para cercar y aislar financieramente a las plazas no cooperantes<sup>129</sup>, y que incluso se permita su existencia en territorio comunitario o en localizaciones muy próximas a las fronteras de la Unión (Andorra, Gibraltar, Islas del Canal de la Mancha, Liechtenstein, Mónaco). Sería deseable que la firma de acuerdos para mejorar la transparencia fiscal con determinadas jurisdicciones opacas y la elaboración por parte de la Comisión de la lista paneuropea de terceros países no cooperantes dé inicio al desarrollo de políticas verdaderamente eficaces destinadas a acabar de forma definitiva con uno de los elementos que más dificulta la lucha efectiva contra el blanqueo de capitales: los paraísos fiscales.

---

<sup>126</sup> Vid. PELÁEZ MARTOS, J. M., “El blanqueo de capitales en el sector inmobiliario”, *Fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción en el sector inmobiliario*, Ediciones CISS. Valencia, 2009, págs. 327 y 328.

<sup>127</sup> Ibidem. Hasta 2010, España ha suscrito acuerdos de intercambio conforme al modelo de la OCDE con aproximadamente unos treinta paraísos fiscales, por cuya virtud se prevé la posibilidad de sanciones para los Estados no cooperantes. (Vid. GARCÍA RAMONES, A./SANTAMARÍA CARRERAS, G., “Proceso de eliminación de paraísos fiscales”, op. cit., págs. 162 y ss.).

<sup>128</sup> Vid. FMI, Technical note Anti-money laundering and combating the financing of terrorism (aml/cft), julio de 2015, disponible en el enlace <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:s1NyZxJMZhCJ:www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15174.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=es>.

<sup>129</sup> Vid. PELÁEZ MARTOS, J. M., “El blanqueo de capitales en el sector inmobiliario”, op. cit., pág. 327.

### **1.1.2.2. DINAMISMO Y ADAPTABILIDAD**

Dos de los aspectos que caracterizan al blanqueo de capitales son su dinamismo y su capacidad de adaptación para sortear las nuevas medidas y a los avances legislativos que, especialmente en materia de prevención de blanqueo, van progresivamente implantándose con objeto de erradicar el pernicioso fenómeno<sup>130</sup>. Así lo ha constatado el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en la revisión de 2003 de sus Cuarenta Recomendaciones, documento en el que se afirma que “los métodos y técnicas de lavado de activos cambian en respuesta al desarrollo de las contramedidas”.

En un principio, el sistema financiero se mostró como especialmente idóneo para los procesos de legalización de los activos de origen delictivo<sup>131</sup>. Si bien desde hace décadas el sector financiero se encuentra sometido a un elevado grado de regulación e intervención administrativa, inicialmente las medidas supervisoras se dirigieron a garantizar determinadas ratios de solvencia de las entidades integradas, y no a prevenir su utilización para canalizar actividades de blanqueo<sup>132</sup>. Sin embargo, constatada la idoneidad del sistema financiero para llevar a cabo este género de operaciones, desde hace años la normativa preventiva -tanto internacional como nacional- ha desplegado especiales esfuerzos en reforzar las medidas antiblanqueo en este sector, imponiendo progresivamente, como veremos, exigencias cada vez más rigurosas. Esta situación ha provocado que los agentes blanqueadores hayan acudido a mecanismos cada vez más sofisticados<sup>133</sup> y hayan reconducido su ilícita actividad a otros sectores económicos<sup>134</sup>, a los que la normativa preventiva ha ido ampliado gradualmente sus mecanismos de control. Como veremos al estudiar la legislación preventiva, si hay un factor que caracteriza su evolución, éste es el progresivo incremento de los sujetos vinculados y de las obligaciones a que a éstos se imponen.

---

<sup>130</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed. op. cit., pág. 61.

<sup>131</sup> A nadie se le escapa, como recuerda ALIAGA MÉNDEZ, el papel estratégico que ocupa el sector financiero en el sistema económico (*Normativa comentada de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 31), ni que el sistema financiero sea el más habitualmente empleado en los procesos de blanqueo, en la medida en que “en última instancia éstos desembocan en él”. (Vid. BLANCO CORDERO, I., “La lucha contra el blanqueo de capitales procedentes de las actividades delictivas en el marco de la U.E.”, op. cit., pág. 9). Asimismo, en este sentido, FERRÉ OLIVÉ, J. C., “Corrupción, crimen organizado y blanqueo de capitales en el mercado financiero”, *Blanqueo de dinero y corrupción en el sistema bancario*, Salamanca, 2002, pág. 13.

<sup>132</sup> Vid. ALIAGA MÉNDEZ, J. A., *Normativa comentada de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 32.

<sup>133</sup> Vid. MORILLAS CUEVA, L., “Aspectos dogmáticos y político-criminales del delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 54.

<sup>134</sup> Vid. ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 24.

### **1.1.2.3. TENDENCIA A NUEVAS FÓRMULAS DE LAVADO Y A LA PROFESIONALIZACIÓN**

Es sabido que las técnicas y procedimientos empleados por los blanqueadores han sido tradicionalmente de muy diversa índole. A las modalidades más tradicionales se han sumado en la actualidad novedosas y refinadas formas de blanqueo basadas en los más recientes avances tecnológicos de la información y las telecomunicaciones<sup>135</sup>, que se solapan y combinan con las formas tradicionales<sup>136</sup>. Se ha constatado que los métodos de blanqueo más sencillos (como las clásicas transacciones en metálico) han sido progresivamente sustituidos por otros medios “más ágiles y seguros, propiciados por los avances jurídicos y tecnológicos”<sup>137</sup>. El GAFI, en sus Cuarenta Recomendaciones (Revisión de 2003) ha constatado “el aumento de sofisticadas combinaciones de técnicas tales como el aumento de uso de personas jurídicas para encubrir la titularidad real y el control de los activos de procedencia ilegal, y un aumento del uso de los profesionales para obtener consejo y asistencia en el lavado de fondos delictivos”<sup>138</sup>.

En la actualidad, muchas de las estrategias empleadas por los blanqueadores se benefician de los permanentes avances tecnológicos que han fomentado la celeridad de las transacciones financieras. El progresivo desarrollo de la informática y del ciberespacio ha posibilitado la adaptación y la expansión de las operaciones de blanqueo. La aparición de novedosos sistemas de pago y la difusión de las

---

<sup>135</sup> Vid. VEGA SÁNCHEZ, M. V., *Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Nueva Ley 10/2010, de 20 de abril*. Editorial Universitaria Ramón Areces. Madrid, 2011, pág. 81. En cualquier caso, advierte ÁVILA SOLANA del ingenio, capacitación, flexibilidad y grado de iniciativa que caracterizan al “profesional del blanqueo”, que “dirige sus estrategias a buscar los intersticios y fisuras de los sistemas de prevención y represión del blanqueo”. De entre dichas fisuras, el autor destaca aquellas de carácter territorial (países o territorios no cooperantes), las legales (vacíos, lagunas y carencias legislativas) y las derivadas de la implantación de las nuevas tecnologías, especialmente Internet, “que permite la deslocalización de las personas y los hechos relacionados con el blanqueo”. (“Las tipologías del blanqueo en España (II): Casos prácticos específicos del blanqueo”, *Prevención y represión del blanqueo de capitales, Estudios de Derecho Judicial* n° 28, 2000. CGPJ. Madrid, 2000, págs. 88 y 89). Asimismo, GUTIERREZ FRANCÉS, M., “Las altas tecnologías de la información al servicio del blanqueo de capitales trasnacional”, *Blanqueo de dinero y corrupción en el sistema bancario*, Salamanca, 2002, pág. 195.

<sup>136</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 61; ABEL SOUTO, M., “Blanqueo, innovaciones tecnológicas, amnistía fiscal de 2012 y reforma penal”, op. cit., pág. 9.

<sup>137</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., “El blanqueo de capitales (Contexto, razones de su penalización, evolución en nuestro entorno de las iniciativas supranacionales)”, op. cit., pág. 167.

<sup>138</sup> Vid. ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 24. Los autores se hacen eco también del Informe anual de GAFI de junio de 2005, en el que se abordan “especialmente tres nuevos frentes: los denominados sistemas alternativos de remesa (...) sistemas de transferencia de fondos fuera de los canales bancarios ordinarios, la utilización del sector del seguro con fines de lavado de fondos, y las implicaciones en el fenómenos de la inmigración ilegal y del tráfico ilegal de inmigrantes”. (Ibidem, pág. 25).

transferencias electrónicas -que permiten en gran medida el establecimiento de relaciones negociales no presenciales y la intercomunicación anónima- han propiciado la aparición del llamado “ciberblanqueo”<sup>139</sup>. Ello, unido al proceso de globalización de los mercados y las economías, y a la internacionalización y desregulación del sector financiero, ha puesto a disposición de los agentes blanqueadores un amplio abanico de nuevas y sofisticadas fórmulas de reintegración de los activos delictivos en tráfico normalizado. De estas nuevas amenazas emergentes se ha hecho eco el GAFI, que en la revisión de sus Recomendaciones del año 2012, insta a los Estados firmantes y a las instituciones financieras a combatir los riesgos de blanqueo que se derivan de las nuevas tecnologías y los nuevos modelos de negocio (Recomendaciones 15 y 16)<sup>140</sup>.

Además de la constante evolución de los procedimientos de blanqueo<sup>141</sup>, se ha constatado una mayor profesionalización de las actividades regularizadoras, desarrolladas mediante técnicas complejas y revestidas de una cada vez mayor sofisticación, llevadas a cabo habitualmente por profesionales externos (contables, asesores fiscales y jurídicos fundamentalmente, que muchas veces se encargan, además de dar apariencia lícita a los fondos delictivos, de reinvertirlos y rentabilizarlos). Incluso se habla de organizaciones informales que prestan estos servicios a varias organizaciones delictivas<sup>142</sup>.

Quizá haya sido el desarrollo de la cada vez más asfixiante normativa al servicio de la prevención del blanqueo el factor decisivo para que el blanqueador se haya visto abocado a una permanente y constante búsqueda de nuevos medios que, de manera eficiente, permitan sortear la aplicación de la normativa preventiva para poner en práctica su ilícita actividad<sup>143</sup>. Es la prevención, sin duda, el mecanismo más eficaz para atajar el fenómeno delictivo del blanqueo<sup>144</sup>.

---

<sup>139</sup> Vid., con detalle, ABEL SOUTO, M., “Blanqueo, innovaciones tecnológicas, amnistía fiscal de 2012 y reforma penal”, op. cit., págs. 2-8.

<sup>140</sup> Vid. FATF, *Las 40 Recomendaciones revisadas el 16 de febrero de 2012*, págs. 16 y 17.

<sup>141</sup> Vid. ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 23; ABEL SOUTO, M., “Blanqueo, innovaciones tecnológicas, amnistía fiscal de 2012 y reforma penal”, op. cit., pág. 9.

<sup>142</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 60 y ss.

<sup>143</sup> Afirman ÁLVAREZ PASTOR y EGUIDAZU PALACIOS que las “técnicas y procedimientos (...) están en constante evolución en la medida en que los organismos dedicados a la represión de estas actividades localizan y desactivan, o al menos entorpecen, las vías existentes”. (*Manual de prevención del blanqueo de capitales*, loc. cit.).

<sup>144</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 229 y 230; FABIÁN CAPARRÓS, E. A., “El blanqueo de capitales (Contexto, razones de su penalización, evolución en nuestro entorno de las iniciativas supranacionales)”, op. cit., pág. 164.

#### 1.1.2.4. VINCULACIÓN A LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

De acuerdo con BLANCO CORDERO, la evolución de la delincuencia en las últimas décadas se ha caracterizado fundamentalmente por “el paso de una criminalidad individual, a otra más corporativa, organizada, dirigida a la obtención de beneficios económicos”<sup>145</sup>. Esta novedosa y peligrosa forma delincencial, advierte MARTÍNEZ-ARRIETA MÁRQUEZ DE PRADO, puede ejercer una perniciosa influencia política y económica y llegar a “debilitar el tejido social, las normas éticas colectivas y a la postre, las instituciones democráticas de la sociedad”<sup>146</sup>. En cualquier caso, los ingentes beneficios que las organizaciones delictivas generan, de difícil cuantificación<sup>147</sup>, han de ser “despojados de su origen criminal”<sup>148</sup>, reintroduciéndolos en los circuitos financieros legales para hacer posible su disfrute de un modo jurídico incuestionado<sup>149</sup>.

Por ello, en la actualidad, el fenómeno del blanqueo, principalmente en su nivel más avanzado<sup>150</sup>, aquél que se sirve de las técnicas más complejas y elaboradas, aparece con frecuencia vinculado a la criminalidad organizada a gran escala<sup>151</sup>. Señala la

---

<sup>145</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 48; id., “Principales instrumentos internacionales (de Naciones Unidas y la Unión Europea) relativos al crimen organizado: la definición de la participación en una organización criminal y los problemas de la aplicación de la Ley Penal en el espacio”, *Criminalidad organizada : reunión de la sección nacional española preparatoria del XVI Congreso de la AIDP en Budapest*, Castilla La Mancha, 1999, pág. 18, disponible en el siguiente enlace: [aidpespana.uclm.es/pdf/criminalidad/iblanco.pdf](http://aidpespana.uclm.es/pdf/criminalidad/iblanco.pdf). Si bien, como señala FABIÁN CAPARRÓS, la “delincuencia organizada ha existido en casi todas las culturas a lo largo de la Historia” (*El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 35), ha sido en las últimas décadas cuando el fenómeno delictivo ha adquirido identidad propia, dando lugar a un nuevo escenario criminológico y político-criminal especialmente grave y de marcado carácter internacional que supone “un desafío sin precedentes para el Estado y la Sociedad”. (Vid. MARTÍN PALLÍN, J. A., “Blanqueo de dinero, secreto profesional y criminalidad organizada”, *Liber amicorum en Homenaje al Profesor Antonio González-Cuéllar García*, Ed. Colex, Madrid, 2006, pág. 666).

<sup>146</sup> Vid. MARTÍNEZ-ARRIETA MÁRQUEZ DE PRADO, I., *El autoblanqueo. El delito fiscal como antecedente del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 15.

<sup>147</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 55; GIL DE LA FUENTE, J., “La criminalidad organizada y el delito de asociación ilícita: referencia al delito de blanqueo de capitales”, *La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario*, nº 20, 2005, pág. 27.

<sup>148</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed. op. cit., pág. 56.

<sup>149</sup> Vid. CALDERÓN CEREZO, A., “Algunos aspectos críticos del blanqueo de capitales. Legislación y jurisprudencia”, op. cit., pág. 71; id., “El marco jurídico del blanqueo de capitales: aspectos penales y administrativos”, op. cit., pág. 2.

<sup>150</sup> Vid. GARCÍA NORIEGA, A., *Cómo se lava el dinero. Cómo se combate el lavado*, op. cit., pág. 15.

<sup>151</sup> Vid. GARZÓN REAL, B., “Cooperación jurídica internacional en el ámbito del blanqueo de dinero y espacio de seguridad, libertad y justicia en la Unión Europea”, op. cit., pág. 444; FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 68; id., “Tipologías y lógica del lavado de dinero”, op. cit., pág. 83; PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 237; TIEDEMANN, K., *Manual de Derecho Penal Económico. Parte General y Especial*. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2010, pág. 343; CUESTA ARZAMENDI, J. L. de la, “El derecho penal ante la criminalidad organizada. Nuevos retos y límites”, *La cooperación internacional frente a la criminalidad organizada*, F. Gutiérrez-Alviz Conradi, M. Valcárcé López (Dir.), Sevilla, 2001, pág. 28; FERRÉ OLIVÉ, J. C., “Corrupción, crimen organizado y blanqueo de capitales en el mercado financiero”, op. cit., 2002, págs. 16 y ss.; id., “Política criminal europea en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo”, op. cit., pág. 247; ALONSO PÉREZ, F., “Conductas afines a la receptación”, *Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico*. Ed. Colex.

doctrina que la relación entre ambos fenómenos se ha acentuado en las últimas décadas, marcadas por el proceso de globalización económica, en las que han proliferado las variantes más graves de la criminalidad organizada<sup>152</sup>, aquéllas que operan a nivel internacional<sup>153</sup>. Esta novedosa manifestación delictiva ha contribuido a la propagación y al perfeccionamiento de los distintos mecanismos y técnicas al servicio de proporcionar apariencia legítima a los enormes beneficios económicos que obtiene ilícitamente. Sin embargo, ha de advertirse que no siempre el fenómeno del blanqueo está asociado a la delincuencia organizada. Tal y como ha indicado MANJÓN-CABEZA OLMEDA, si bien la política criminal que inspiró la incriminación del blanqueo concibió este delito como instrumento para combatir “el tráfico de drogas y posteriormente se orientó a afrontar la lacra del crimen organizado (...) hoy día se ha superado esta idea, y el delito de blanqueo ha expandido enormemente su campo de aplicación a cualquier

---

Madrid, 2003, pág. 485; FERNÁNDEZ TERUELO, J. G., “Blanqueo de capitales”, *Memento Penal Económico y de la Empresa 2011-2012* (coord. Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno). Ed. Francis Lefebvre. Madrid, 2011, marginal 7358; PÉREZ MANZANO, M., “Neutralidad delictiva y blanqueo de capitales: el ejercicio de la abogacía y la tipicidad del delito de blanqueo de capitales”, *La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario*, nº 53, 2008. También en *Política criminal y blanqueo de capitales*, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2009, pág. 170; OLMO GÁLVEZ, J. del, “El blanqueo desde la perspectiva del juez instructor”, *Prevención y represión del blanqueo de capitales, Estudios de Derecho Judicial* nº 28, 2000. CGPJ. Madrid, 2000, pág. 218; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 54; id., “La lucha contra el blanqueo de capitales procedentes de las actividades delictivas en el marco de la U.E.”, op. cit., pág. 8; BACIGALUPO ZAPATER, E., “Estudio comparativo del Derecho Penal de los Estados Miembros de la Unión Europea sobre la represión del reciclaje o blanqueo de dinero ilícitamente obtenido”, *España en la Europa Comunitaria: balance de diez años*, 1995, pág. 439; GARCÍA NORIEGA, A., *Cómo se lava el dinero. Cómo se combate el lavado*, op. cit., pág. 15; DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, J., “El blanqueo de capitales”, *Estudios sobre las reformas del Código Penal* (coord. Gonzalo Rodríguez Mourullo). Ed. Civitas. Madrid, 2011, pág. 457.

<sup>152</sup> Lo cual, como advierte FABIÁN CAPARRÓS, no significa que las propias organizaciones delictivas sean en todo caso las mismas que se encarguen de reconvertirlo: en ocasiones las complejas operaciones de lavado se externalizan y pasan a ser realizadas por *networks* dedicados sistemática y exclusivamente al blanqueo de los fondos obtenidos por la organización criminal a cambio de una comisión previamente estipulada. Esta solución es por lo demás, y a efectos de la finalidad pretendida, más acertada sobre todo cuando el proceso legitimador se lleva a cabo a través de compañías que operan bajo la apariencia del tráfico comercial honesto, toda vez que “el dinero sucio se transforma mejor a través de las manos limpias”. (*El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 72-74 *passim*). Por su parte, señala GIL DE LA FUENTE que dentro de las organizaciones dedicadas exclusivamente a blanquear cabe distinguir dos tipologías diferenciadas: aquellas estructuras cuyo único propósito es realizar operaciones de blanqueo, y aquellas otras que, junto a las actividades de legitimación de activos delictivos, desarrollan de forma paralela actividades legales, fundamentalmente en el marco del mercado financiero. Estas últimas, que aprovechan su infraestructura para, de manera solapada, realizar transformaciones de bienes de origen delictivo, no pueden a su juicio denominarse en puridad organizaciones criminales, pues “es lógico que (...) no puedan ser clandestinas, justamente porque deben hacer ostensibles sus actividades lícitas y es normal que intervengan distintos intermediarios en esas operaciones, como operadores financieros, economistas, abogados, etc.”. (“La criminalidad organizada y el delito de asociación ilícita: referencia al delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 36).

<sup>153</sup> Vid. ESCRIBANO ÚBEDA-PORTUGUÉS, J., “La lucha contra el blanqueo de capitales a nivel internacional”, *Tiempo de Gestión*, año 6, nº 9, 2010, pág. 94, disponible en el siguiente enlace: [dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4013226.pdf](http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4013226.pdf); MILITELLO, V., “Hacia un Derecho penal europeo contra el crimen organizado”, *IV Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, pág. 227.



actividad delictiva”<sup>154</sup>. No ha de identificarse en todos los casos, como desde determinados foros se pretende hacer creer para magnificar el propio delito de blanqueo de capitales, dicho delito con la criminalidad organizada<sup>155</sup>. Si bien las organizaciones criminales han de acudir regularmente a los más sofisticados métodos de blanqueo para transformar los elevados rendimientos de sus operaciones ilícitas y reintroducirlos en el tráfico lícito, no toda operación de blanqueo está relacionada con la criminalidad organizada. También los beneficios derivados de los hechos delictivos cometidos por agentes individuales, o por agrupaciones delincuenciales que estructuralmente no pueden identificarse con las más graves formas de asociación delictiva, han de ser reincorporadas a los cauces económicos legales para su pacífico disfrute.

La existencia de un excesivo alarmismo que advierte de la capacidad de las organizaciones delictivas para corromper las bases del tejido social y político<sup>156</sup> y de los supuestos perjuicios que aquélla provoca en los sistemas económico-financieros de los Estados<sup>157</sup> ha situado en las últimas décadas al blanqueo de capitales y a la criminalidad organizada en “un lugar central dentro de las nuevas políticas de seguridad de los países occidentales”<sup>158</sup>. A través de discursos excesivamente emocionales<sup>159</sup>, desde hace años se ha alertado de la creciente capacidad de ambos fenómenos delictivos para contaminar la economía lícita y minar las instituciones políticas<sup>160</sup>. Sin embargo, advierte FERNÁNDEZ STEINKO que los últimos acontecimientos demuestran que tanto las nuevas formas de delincuencia organizada asociadas a la globalización como el manejo por parte de éstas de fondos ilícitos no ha sido precisamente el “factor desestabilizador” del

---

<sup>154</sup> Vid. MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Ganancias criminales y ganancias no declaradas (El desbordamiento del delito fiscal y del blanqueo)”, op. cit., pág. 661.

<sup>155</sup> Vid. MORILLAS CUEVA, L., “Aspectos dogmáticos y político-criminales del delito de blanqueo de capitales”, *Revista Foro FICP*, nº 2, septiembre 2013, págs. 51 y 52, disponible en el siguiente enlace: <http://www.ficp.es/wp-content/uploads/Foro-FICP-2013-2.pdf>; FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 75.

<sup>156</sup> Vid., por todos, CUESTA ARZAMENDI, J. L., “El derecho penal ante la criminalidad organizada. Nuevos retos y límites”, op. cit., pág. 1; GARZÓN REAL, B., “Cooperación jurídica internacional en el ámbito del blanqueo de dinero y espacio de seguridad, libertad y justicia en la Unión Europea”, op. cit., pág. 430.

<sup>157</sup> Vid. MORENO, F., “Peligrosidad y daño directo del crimen organizado”, *Delincuencia, finanzas y globalización*. CIS. Madrid, 2013, pág. 188.

<sup>158</sup> Vid. FERNÁNDEZ STEINKO, A., “Delito y criminalización en una sociedad global”, op. cit., pág. 100.

<sup>159</sup> Vid. PAOLI, L., “Las paradojas del crimen organizado”, *Delincuencia, finanzas y globalización*. CIS. Madrid, 2013, pág. 135; FERNÁNDEZ STEINKO, A., “Delito y criminalización en una sociedad global”, op. cit., págs. 101 y 102.

<sup>160</sup> Vid. PAOLI, L., “Las paradojas del crimen organizado”, op. cit., pág. 133. Como ha afirmado F. MORENO, “las declaraciones políticas, las manifestaciones de estudiosos del crimen organizado y los medios de comunicación nos indican con claridad meridiana que el crimen organizado es una preocupante amenaza para la sociedad. Lo que no están tan claras son las características ni el volumen de la amenaza que nos muestran con recurrencia los titulares”. (“Peligrosidad y daño directo del crimen organizado”, op. cit., pág. 189).

sistema financiero que ha desencadenado la crisis de 2008<sup>161</sup>. Desde diversas instancias internacionales continúa alertándose sobre la “presunta existencia de un peligro económico-criminal de naturaleza exógena al sistema financiero. Se da por demostrado que blanqueadores y criminales disponen de enormes excedentes económicos gracias a una considerable capacidad de desarrollar métodos de blanqueo más y más sofisticados a medida en que la policía va destapando los viejos. (...) El blanqueo queda así fundido con el crimen organizado”. Sin embargo, denuncia el autor, estos postulados no están respaldados por metodologías de investigación solventes y científicas, y las conclusiones alcanzadas no se sustentan sobre bases empíricas sólidas<sup>162</sup>. A su juicio, las advertencias lanzadas no son más que «pistas falsas» para ocultar las verdaderas causas del colapso financiero de 2008: las políticas de desregulación del sistema financiero internacional<sup>163</sup>. Por virtud de dichas políticas, son las propias instituciones financieras las que han asumido funciones de autocontrol y autosupervisión de su propia actividad (Basilea II)<sup>164</sup>. La falta de separación entre controlados y controladores ha posibilitado un “fraude de control”<sup>165</sup> que ha desencadenado la proliferación de prácticas financieras de elevado riesgo, muchas de ellas alegales, que han conducido al desastre económico<sup>166</sup>. Lo más grave es que todo ello ha ocurrido, denuncia FERNÁNDEZ STEINKO, ante la inhibición de los poderes públicos, llamados a garantizar la buena

---

<sup>161</sup> Vid. FERNÁNDEZ STEINKO, A., “Delito y criminalización en una sociedad global”, op. cit., pág. 82.

<sup>162</sup> Vid. FERNÁNDEZ STEINKO, A., “Blanqueo, narcotráfico y desregulación financiera”, op. cit., págs. 268 y 269.

<sup>163</sup> Ibidem, pág. 270. La desregulación del sistema financiero “consiste en la aplicación de medidas destinadas a dejar que sean los propios actores los que definan el máximo número de reglas y procedimientos de funcionamiento. (...) Estas políticas tienen como objetivo elevar la rentabilidad de las inversiones financieras frente al negocio de concesión de créditos incentivando el desvío de inversiones hacia las operaciones especulativas que, si bien entrañan mayores riesgos, también van unidas a una mayor remuneración. (...) El resultado es el aumento de los riesgos financieros tanto para los actores individuales como para la economía y el sistema financiero en su conjunto, la acumulación de «riesgos sistémicos».” (Ibidem, pág. 271).

<sup>164</sup> Estas políticas no intervencionistas surgieron tras el fracaso de los Acuerdos de Basilea I, que imponían un “excesivo «intervencionismo» en la actividad bancaria internacional así como la «rigidez» de sus mecanismos de regulación.” Con los Acuerdos de Basilea II dieron comienzo los mecanismos de desregulación: éstos se han basado “en un sistema *interno* de valoración de riesgos (...) del que no participan de ninguna forma los reguladores públicos. La regulación de la actividad bancaria recae ahora exclusivamente en las propias instituciones financieras, que son las encargadas de valorar la exposición al riesgo de sus propios activos. El regulador no examina directamente las carteras de activos de los bancos, sino solo los procedimientos internos de control aplicados por los propios bancos sobre sus propios activos”. (Ibidem, págs. 278 y 279).

<sup>165</sup> Ibidem, págs. 280 y 281.

<sup>166</sup> Ibidem, pág. 286. Sobre un exhaustivo análisis sobre las causas y desarrollo de la crisis financiera internacional de 2008, con especial atención a las eventuales responsabilidades penales de los agentes que en ella intervinieron, vid. SCHÜNEMANN, B., “La llamada crisis financiera: ¿fracaso del sistema o crimen organizado global?”, *Delincuencia, finanzas y globalización*. CIS. Madrid, 2013, págs. 338 y ss. La lectura de este artículo permite comprobar que, también para el reputado penalista alemán, no poco peso han tenido en el colapso financiero las políticas de desregulación a las que nos estamos refiriendo.

marcha de los sistemas financieros de sus países, los mismos que han promovido numerosas iniciativas para combatir el blanqueo y el crimen organizado<sup>167</sup>.

No han sido, por tanto, “peligros exógenos al sistema financiero internacional”<sup>168</sup> con capacidad para desestabilizarlo y desnaturalizarlo (criminalidad organizada, blanqueo de capitales) los factores principales desencadenantes de la grave crisis de los últimos años, sino la propia desregulación del sistema financiero, paralela en el tiempo -comienzos de los años 90 del siglo pasado- a la proliferación de tratados e instrumentos internacionales para combatir la criminalidad organizada y el blanqueo de capitales, mecanismos nacidos de la “perspectiva norteamericana sobre seguridad”<sup>169</sup>.

Con todo, no puede ser desatendida la relación que habitualmente se constata entre el blanqueo de capitales, el crimen organizado y la corrupción<sup>170</sup>. Las organizaciones mafiosas tienden a implantarse en regiones donde mayores índices de corrupción presentan las instituciones públicas. La corrupción puede ser empleada por dichas organizaciones para influir y penetrar en las estructuras económicas, administrativas y políticas. Todo ello deteriora las estructuras básicas del Estado de Derecho, la democracia y la economía de mercado, impidiendo su normal desarrollo. GARRIDO JUNCAL ha advertido que, además de una crisis económica, estamos atravesando una crisis política, avanzando inexorablemente a un progresivo deterioro de las instituciones públicas<sup>171</sup>. Con razón ha afirmado FERRÉ OLIVE que la corrupción de funcionarios y cargos públicos constituye una de las mayores lacras de nuestro tiempo<sup>172</sup>. Prueba de ello es el alto índice de prácticas corruptas descubiertas en los últimos años en nuestro país, y la incesante incoación de procesos judiciales en los que

<sup>167</sup> Vid. FERNÁNDEZ STEINKO, A., “Blanqueo, narcotráfico y desregulación financiera”, op. cit., pág. 249.

<sup>168</sup> Ibidem.

<sup>169</sup> Ibidem. Como ha afirmado el autor, “la situación de emergencia financiera creada tras los sucesivos rescates bancarios, y que ha hecho aumentar el déficit público en la mayoría de los países occidentales, podría marcar un antes y un después en el discurso sobre blanqueo, pues obligaría a hacer una lectura más realista y completa del fenómeno de las finanzas ilegales.” (Ibidem, págs. 287 y 288).

<sup>170</sup> Vid. FERRÉ OLIVE, J. C., “Corrupción, crimen organizado y blanqueo de capitales en el mercado financiero”, op. cit., págs. 16 y ss.; DIEZ NICOLÁS, J., “Actitudes hacia la corrupción”, *Delincuencia, finanzas y globalización*. CIS. Madrid, 2013, págs. 215 y ss.; MORILLAS CUEVA, L., “Aspectos dogmáticos y político-criminales del delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 52; ALCALDE GUTIÉRREZ, E./RODRÍGUEZ SOLER, L., “Las personas expuestas políticamente y la prevención del blanqueo de capitales”, *Boletín de Información Comercial Española*. ICE-Ministerio de Economía y Competitividad. Madrid, 2014, págs. 47 y ss.; ABEL SOUTO, M., “Blanqueo, innovaciones tecnológicas, amnistía fiscal de 2012 y reforma penal”, op. cit., pág. 10. Vid., asimismo, STS 1597/2005, de 21 de diciembre.

<sup>171</sup> Vid. GARRIDO JUNCAL, A., “La transparencia de la vida pública en Francia. A propósito del caso Jérôme Cahuzac”, *IV Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, pág. 283.

<sup>172</sup> Vid. FERRÉ OLIVE, J. C., “Corrupción, crimen organizado y blanqueo de capitales en el mercado financiero”, op. cit., pág. 20.

numerosos políticos y cargos públicos -incluso familias enteras de éstos- son procesados por sendos delitos contra la Administración Pública y por el blanqueo de las elevadas comisiones y gabelas obtenidas por mor de sus actividades delictivas<sup>173</sup>. Ningún nivel institucional ni orientación política ha escapado al légamo de las corruptelas, desarrolladas en muchas ocasiones a través de complejas tramas organizadas, tanto en la implantación de mecanismos corruptos para la desviación de fondos públicos, como en la creación de intrincadas estructuras destinadas al lavado del producto del enriquecimiento ilícito de sus integrantes<sup>174</sup>. En lo que al blanqueo se refiere, la situación descrita ha obligado a “reforzar la vigilancia sobre aquellas operaciones financieras efectuadas por personas con responsabilidad pública”<sup>175</sup>. Como veremos, en esta dirección apunta el especial control al que son sometidas las PEP (personas expuestas políticamente, o sus familiares y allegados), canalizado fundamentalmente a través de medidas preventivas de transparencia (determinación del origen del patrimonio y de los fondos involucrados en las relaciones comerciales que se entablen con estos sujetos). También resulta especialmente atractiva la propuesta apuntada por GARRIDO JUNCAL en orden a crear una “Alta autoridad de transparencia de la vida pública”, cuyo objeto sea controlar a través de listas relativamente públicas la veracidad de las declaraciones de patrimonio e intereses que los responsables políticos se vean obligados a facilitar al comienzo y al final de su mandato<sup>176</sup>.

Las políticas de prevención de blanqueo han pasado a ser, según afirman ALCALDE GUTIÉRREZ/RODRÍGUEZ SOLER, “una de las piedras angulares” en la lucha

---

<sup>173</sup> F. MORENO ha llegado a afirmar que la relación entre la criminalidad organizada y la corrupción recorre más bien el sentido inverso: “una hipótesis alternativa es que el crimen organizado se gesta en el interior de la Administración Pública, a partir de cuyo nido se generan o atraen a las asociaciones de delincuentes. (...) La corrupción no se produce desde fuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera, salpicando a las actividades económicas que, de una forma u otra forma, tienen en la Administración un elemento presente en casi todas las fases de desarrollo del negocio”. Mientras se focaliza la atención social hacia “grupos delictivos más o menos peligrosos (...) pero que no tienen la capacidad real para afectar a las instituciones, (...) se presta menos atención a los focos reales de desestabilización política y económica. (...) Si esta hipótesis es correcta, la lucha contra el crimen organizado es, ante todo, la lucha contra la corrupción que se gesta dentro de las administraciones públicas por quienes ostentan el poder para gestionarlas y utilizan ese poder de forma torticera e interesada. Correcta o no, nadie puede negar que esta hipótesis es incómoda, muy incómoda”. (“Peligrosidad y daño directo del crimen organizado”, op. cit., págs. 209 y 210).

<sup>174</sup> Véase, a modo de ejemplo, el reciente Auto de 22 de julio de 2015 del Juzgado Central de Instrucción nº 6 (DP 85/2014), dictado en el marco de la Operación “Púnica”, en el que indiciariamente se detalla la compleja estructura organizada investigada, en cuyo seno, por un lado diversos políticos, ediles y funcionarios de diversos ayuntamientos y autonomías, participaban en la adjudicación amañada de contratos públicos a cambio de comisiones ilegales, y por otro, se blanqueaban las ganancias ilícitamente obtenidas a través de un entramado societario con numerosas cuentas bancarias radicadas en paraísos fiscales.

<sup>175</sup> Vid. GARRIDO JUNCAL, A. “La transparencia de la vida pública en Francia. A propósito del caso Jérôme Cahuzac”, op. cit., págs. 283 y ss.

<sup>176</sup> Ibidem, págs. 284 y 285.

contra la corrupción. Se constata, en este sentido, una relación bidireccional entre las medidas anticorrupción y aquellas otras implementadas en materia de prevención del blanqueo que supone importantes ventajas: un acertado diseño de las políticas de prevención contribuye a reducir la corrupción y, “al mismo tiempo, incluir en dichas políticas a las PEP como objetivo de especial seguimiento” favorece la lucha contra el blanqueo, contribuyendo con ello a proteger la integridad tanto del sector público como del sistema financiero<sup>177</sup>. Con todo, más allá de específicas medidas antiblanqueo, la lucha contra la corrupción precisa incrementar a todos los niveles la transparencia del sector público y de quienes en él operan. En cualquier caso, aunque los fenómenos de la corrupción, la criminalidad organizada y el blanqueo de capitales coinciden en muchas ocasiones, queremos insistir en la idea de que “no tienen por qué converger en todo caso”<sup>178</sup>: es cierto que tanto quienes se prestan a prácticas corruptas como las organizaciones delictivas, para ver colmadas sus expectativas lucrativas, han de someter al oportuno proceso de lavado el producto de sus operaciones delictivas con objeto de facilitar su reincorporación al tráfico legal<sup>179</sup>. Pero también lo es que el fenómeno del blanqueo no aparece ni mucho menos vinculado en todos los casos a la corrupción o a la criminalidad organizada.

Por lo que respecta al análisis fenomenológico de la criminalidad organizada, tanto su extremada complejidad como la falta de un conocimiento preciso del mismo<sup>180</sup> han dificultado la enunciación de un concepto unívoco de esta manifestación delictiva. Pese a los reiterados intentos de definirla<sup>181</sup>, a lo sumo se ha alcanzado a esbozar un concepto analítico de la criminalidad organizada, a través de la enumeración de los elementos que la caracterizan<sup>182</sup>.

---

<sup>177</sup> Vid. ALCALDE GUTIÉRREZ, E./RODRÍGUEZ SOLER, L., “Las personas expuestas políticamente y la prevención del blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 49.

<sup>178</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 74

<sup>179</sup> Ibidem.

<sup>180</sup> Vid. CUESTA ARZAMENDI, J. L., “El derecho penal ante la criminalidad organizada. Nuevos retos y límites”, op. cit., pág. 2.

<sup>181</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 37. Vid., asimismo, SILVA SÁNCHEZ, J. M., “¿«Pertenencia» o «Intervención»? Del delito de «pertenencia a una organización criminal» a la figura de la «participación a través de organización en el delito””, *Estudios penales en recuerdo del Profesor Ruiz Antón*, Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2004, pág. 1071.

<sup>182</sup> Considera FABIÁN que “resulta imposible enunciar un concepto unívoco de organización criminal que aúne al mismo tiempo la suficiente precisión y la necesaria generalidad; (...) la enumeración de de una serie más o menos extensa de rasgos por parte de cada uno de los que lo ha intentado no ha servido para definir esa realidad de una vez por todas. (...) Si el análisis aislado de cada propuesta revela ciertas omisiones, el estudio comparativo de las mismas pone de manifiesto frecuentes divergencias y contradicciones”. (Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 35-37 passim). Añade GIL DE LA FUENTE que a la dificultad de reducir a un concepto unívoco el complejo fenómeno de la criminalidad

En cuanto a la organización y estructura de las organizaciones criminales, MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ destaca la intervención en su seno de un colectivo de personas estructurado jerárquicamente, en el que existe una clara disociación espacio-temporal entre quienes planifican la actividad criminal y quienes la ejecutan materialmente<sup>183</sup>. FABIÁN CAPARRÓS caracteriza a las organizaciones criminales por la división y profesionalización del trabajo, su vocación de permanencia y la conexión que suelen establecer con otras redes delictivas. En dichas asociaciones, sus miembros son sometidos a un orden jerárquico y a una suerte de voto de silencio, y existen rígidas normas de funcionamiento interno acompañadas de un férreo sistema de sanciones. Asimismo, afirma el autor, las organizaciones criminales habitualmente se infiltran en instancias oficiales de control social, y suelen incorporar modelos de funcionamiento y de estructuración propios de las modernas sociedades mercantiles<sup>184</sup>. También en los objetivos que persigue, la delincuencia organizada se distingue por su dimensión económica<sup>185</sup>. Es, en efecto, el ánimo de lucro lo que mueve a aquéllas a actuar, si bien, en ocasiones, en el seno de una misma asociación los rendimientos derivan tanto de la ejecución de hechos delictivos como de actividades lucrativas lícitas, siendo precisamente la realización de las segundas las que sirven de tapadera para llevar a cabo las primeras de una forma más discreta. En este sentido, ha afirmado NÚÑEZ PAZ que las organizaciones criminales recurren a toda clase de medios (legales o no), “sirviéndose de la ley cuando puedan sacarle provecho, e infringiéndola frontalmente cuando se opone a sus propósitos”<sup>186</sup>. De hecho, afirma el autor, la alta eficacia en la consecución de sus objetivos suele partir de un agudo “conocimiento de la legalidad vigente que les

---

organizada, la diversidad de perspectivas con las que se aborda el intento de definirlo y las diferentes peculiaridades que caracterizan a las diferentes organizaciones criminales, “cada una con sus características, con modus operandi y tipologías criminales distintas aunque todas agrupables en la esencia común de ser empresas del crimen” impiden una individualización conceptual. Por eso, concluye el autor, más que su caracterización, resulta de utilidad la fijación de sus límites para su diferenciación de otros fenómenos delictivos grupales no tan graves, como pueden ser los actos delictivos puntuales con varios intervinientes o las bandas, especialmente las juveniles. (“La criminalidad organizada y el delito de asociación ilícita: referencia al delito de blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 28 y 29).

<sup>183</sup> Vid. MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “La dimensión internacional del blanqueo de dinero”, *Estudios de Derecho Judicial* nº 61, 2004. CGPJ. Madrid, 2004, págs. 184 y 185. En el mismo sentido, vid. MARTÍN PALLÍN, J. A., “Blanqueo de dinero, secreto profesional y criminalidad organizada”, op. cit., pág. 651.

<sup>184</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 37 y ss. En sentido similar, SUÁREZ GONZÁLEZ, C. J., “Organización delictiva, comisión concertada u organizada”, *Homenaje al Profesor Dr. Gonzalo Rodríguez Mourullo*. Thomson. Madrid, 2005, págs. 1774 y ss.; NÚÑEZ PAZ, M. A., “Delincuencia organizada y blanqueo de dinero. Algunos aspectos criminológicos (especial referencia a la situación española)”, *Blanqueo de dinero y corrupción en el sistema bancario*. Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca, 2002, pág. 154.

<sup>185</sup> Vid. SUÁREZ GONZÁLEZ, C. J., “Organización delictiva, comisión concertada u organizada”, op. cit., págs. 1772 y 1773.

<sup>186</sup> Vid. NÚÑEZ PAZ, M. A., “Delincuencia organizada y blanqueo de dinero. Algunos aspectos criminológicos (especial referencia a la situación española)”, op. cit., pág. 154.

permite saber hasta dónde puede llegar la actuación policial”<sup>187</sup>, y del diseño de refinados procedimientos para ocultar tras un manto de legalidad sus ilícitas actividades. Dicha particularidad tiene que ver con otra de las características que definen a las organizaciones criminales: la clandestinidad, al menos parcial, de sus actividades<sup>188</sup>. Han de ser destacadas, asimismo, ciertas notas que se dan en muchas organizaciones criminales: su internacionalidad, versatilidad y movilidad<sup>189</sup>. Por último, MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ ha puesto de relieve la dañosidad social que encierra este fenómeno delictivo: “al ser una delincuencia de sujetos poderosos, los efectos perjudiciales (básicamente económicos, pero también políticos y sociales) se multiplican hasta el punto que pueden provocar la desestabilización general de los mercados y la propia corrupción de funcionarios y comerciantes”<sup>190</sup>.

En cuanto a las actividades delictivas que las organizaciones criminales suelen llevar a cabo, destacan la producción y el tráfico de drogas, el robo de vehículos y su contrabando, el blanqueo de capitales y la participación en el tráfico ilícito de armas, de materiales nucleares, de personas -en ocasiones de mujeres y niños-, e incluso de órganos. El común denominador a todas ellas es la obtención de elevados beneficios -de muy difícil cuantificación- que han de ser reintroducidos en los circuitos financieros legales<sup>191</sup>. Con todo, la criminalidad organizada presenta una clara tendencia a la diversificación: como ha afirmado BLANCO CORDERO, la actuación de las organizaciones criminales no se circunscribe a una sola actividad o a un espacio físico; bien al contrario, aquéllas suelen operar en una amplia variedad de áreas delictivas -siempre económicamente muy rentables- que pueden variar en función de diversos factores<sup>192</sup>.

---

<sup>187</sup> Vid. NÚÑEZ PAZ, M. A., “Criminalidad, capital y corrupción. Orígenes delincuenciales y precisiones contemporáneas”, op. cit., pág. 276.

<sup>188</sup> Vid. FERRÉ OLIVÉ, J. C., “Corrupción, crimen organizado y blanqueo de capitales en el mercado financiero”, op. cit., pág. 17.

<sup>189</sup> Vid. OLMO GÁLVEZ, J. del, “El blanqueo desde la perspectiva del juez instructor”, op. cit., pág. 221; GIL DE LA FUENTE, J., “La criminalidad organizada y el delito de asociación ilícita: referencia al delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 27; ESCRIBANO ÚBEDA-PORTUGUÉS, J., “Análisis de los efectos negativos de la delincuencia organizada en la sociedad internacional”, op. cit., págs. 64 y ss.

<sup>190</sup> Vid. MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “La dimensión internacional del blanqueo de dinero”, op. cit., págs. 184 y 185. En el mismo sentido, vid. MARTÍN PALLÍN, J. A., “Blanqueo de dinero, secreto profesional y criminalidad organizada”, op. cit., pág. 651.

<sup>191</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 54 y ss.

<sup>192</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 2ª ed., op. cit., págs. 48 y 55; FUENTES GONZÁLEZ, G., “El proceso económico del tráfico de drogas”, *Prevención y represión del blanqueo de capitales. Estudios de derecho judicial* n° 28, 2000 (Dir. Javier Alberto Zaragoza Aguado). CGPJ. Madrid, 2000, pág. 20.

Ha advertido GIL DE LA FUENTE que, en la actualidad, el concepto de criminalidad organizada suele asociarse a grandes grupos asociados a nivel supranacional “que controlan amplios campos delictivos (drogas, prostitución, tráfico de personas, de armas, blanqueo de dinero...). Y, aún, en una acepción más compleja se incluyen los grupos que además cuentan con implicaciones de los poderes públicos de algunos países”<sup>193</sup>. Sin embargo, no todo grupo criminal responde a estas características. Asimismo, no toda agrupación corporativa dirigida a desarrollar actividades delictivas ha de conceptuarse como manifestación de la criminalidad organizada. Como ha señalado NÚÑEZ PAZ, existen otros fenómenos delictivos grupales de menor entidad que han de ser diferenciados de la criminalidad organizada, como pueden ser los actos delictivos puntuales en los que participan varios intervinientes o las bandas, especialmente las juveniles<sup>194</sup>.

Con elevada frecuencia existe una estrecha relación entre las grandes organizaciones criminales y el blanqueo de capitales<sup>195</sup>. Como hemos advertido, la

---

<sup>193</sup> Vid. GIL DE LA FUENTE, J., “La criminalidad organizada y el delito de asociación ilícita: referencia al delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 28.

<sup>194</sup> Vid. NÚÑEZ PAZ, M. A., “La criminalidad organizada y el delito de asociación ilícita: referencia al delito de blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 28 y 29. Dentro dicha delincuencia grupal, NÚÑEZ PAZ ha distinguido tres tipos de formaciones delictivas: a) Los grupos organizados, constituidos por un grupo más bien pequeño de delinquentes reunidos esporádicamente para la comisión de uno o varios hechos delictivos, que “suelen surgir en las barriadas de las grandes ciudades o por conocimientos que se hacen en las propias cárceles”. Los grupos organizados se caracterizan por un escaso nivel de organización y la juventud de sus integrantes. Se trata de una delincuencia muy peligrosa, dada la falta de preparación para afrontar situaciones peligrosas creadas por ellos mismos, que emplea de manera habitual la violencia innecesaria; b) Las bandas organizadas, similares a los grupos organizados pero con mayor grado de organización y con una “estabilidad más marcada en cuanto al tiempo de permanencia de sus miembros (...) y más cohesión entre ellos”. Éstas se caracterizan por perseguir un fin delictivo único, vinculado a una o varias especialidades delictivas, si bien presentan gran capacidad para cambiar a modalidades delictivas más propicias. Así por ejemplo, una banda dedicada a la defraudación a través de tarjetas de crédito, puede incorporar grupos dedicados a la sustracción de carteras para proveerse de los documentos de identidad y las tarjetas de crédito necesarias; otro diferente se encargará de la falsificación de la documentación sustraída; y otro distinto se dedicará a la negociación fraudulenta en las diferentes entidades de crédito (pasadores). Asimismo, las bandas organizadas presentan una estructura de organización más compleja, rígida y jerarquizada -con un jefe y mandos intermedios bien definidos-, y sus miembros, generalmente extranjeros, se someten a códigos de conducta estrictos, para evitar delaciones y traiciones. Sólo acuden a métodos violentos cuando es estrictamente necesario; c) Las organizaciones criminales, que suelen agrupar en su seno a varias bandas organizadas, presentan características similares a aquéllas, si bien presentan “mayor nivel de organización, número de componentes y variedades delictivas”. Se caracterizan por contar con una dirección única jerarquizada, con un alto número de responsables intermedios, y tienen un sistema de disciplina marcadamente rígido. El beneficio que obtienen de la actividad delictiva que desarrollan se destina a la dirección de la organización; los restantes integrantes reciben ayudas económicas por los actos delictivos que perpetran, “ayuda que se extiende a sus familiares en caso de detención, así como asistencia jurídica”. Las organizaciones criminales suelen contar con una infraestructura eficaz de blanqueo -integrada habitualmente por expertos financieros libres de sospecha-, que les permite invertir los beneficios ilícitos en negocios legales, y es habitual su vinculación con personas “pertenecientes a las grandes esferas de poder, al que corrompen para someterlo a las directrices de la organización”. (“Criminalidad, capital y corrupción. Orígenes delincuenciales y precisiones contemporáneas”, op. cit., págs. 274-276 *passim*).

<sup>195</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 54.



vinculación entre ambos fenómenos delictivos opera siempre en una dirección pero no necesariamente en la contraria: la delincuencia organizada ha de acudir regularmente al blanqueo para legalizar sus elevados beneficios, pero el blanqueo no en todo caso está asociado a la criminalidad organizada. En cualquier caso, las organizaciones criminales suelen acudir a las formas más sofisticadas de blanqueo, especialmente aquellas que operan a nivel internacional -denominadas organizaciones criminales transnacionales u OCT<sup>196</sup>-. Precisamente es esta tipología asociativa, dotada de una dimensión internacional, la que presenta mayores dificultades de erradicación. Para combatir eficazmente a las OCT, se ha potenciado en las últimas décadas la cooperación policial y judicial a nivel internacional, a través de la suscripción tanto convenios como tratados bilaterales en materia de extradición, de asistencia mutua entre diferentes Estados, y de embargo y confiscación de los bienes y productos del crimen organizado<sup>197</sup>.

En cuanto a la incidencia del fenómeno criminal asociativo en España, señala NÚÑEZ PAZ que en los últimos años se han implantado progresivamente en nuestro territorio organizaciones criminales de muy diverso signo<sup>198</sup>, dedicadas fundamentalmente al tráfico de drogas<sup>199</sup> y al blanqueo de los lícitos beneficios que aquél produce. Aunque se alerta de la afluencia de grupos organizados procedentes del

---

<sup>196</sup> Ibidem, pág. 55.

<sup>197</sup> Vid. GIL DE LA FUENTE, J., "La criminalidad organizada y el delito de asociación ilícita: referencia al delito de blanqueo de capitales", op. cit., págs. 27 y 28; SALAZAR ARÉVALO, J. L., "Cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia organizada", *Terrorismo y delincuencia organizada: un enfoque de derecho y economía*, Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas UANM. México, 2006, pág. 107. Sobre las notas que caracterizan la delincuencia organizada internacional y los instrumentos normativos internacionales para combatirla, vid., ampliamente, ESCRIBANO ÚBEDA-PORTUGUÉS, J., "Análisis de los efectos negativos de la delincuencia organizada en la sociedad internacional", op. cit., págs. 64 y ss. Para un estudio detallado sobre las diferentes técnicas de blanqueo de que se valen algunas organizaciones delictivas internacionales, vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 2ª ed., op. cit., págs. 40 y ss.

<sup>198</sup> Sitúa el autor la aparición en nuestro país de la delincuencia organizada en los años setenta, causada por "el auge del turismo, que hace surgir grandes negocios en las zonas costeras principalmente, con asentamiento de capitales y todo lo que ello conlleva", y en la transición a un sistema democrático, "que asegura libertades y respeta derechos" y que implica la implantación de reajustes en los medios de investigación hasta su adaptación a la nueva legalidad. ("Delincuencia organizada y blanqueo de dinero. Algunos aspectos criminológicos (especial referencia a la situación española)", op. cit., pág. 157; id., "Criminalidad, capital y corrupción. Orígenes delincuenciales y precisiones contemporáneas", op. cit., págs. 276 y 277).

<sup>199</sup> Si bien no sólo se dedican a este ámbito delincencial, pues también destacan las actividades ilícitas de defraudación con medios de pago, el tráfico ilegal de automóviles y armas, los robos, la falsificación de moneda, la prostitución e inmigración ilegal y la receptación. Las organizaciones criminales suelen asentarse en las grandes capitales de provincia -Madrid, Barcelona, Valencia, La Coruña y Málaga, si bien también es frecuente que operen en la Costa del Sol y el resto de Andalucía costa de levante, Costa Brava, y en regiones como Galicia, Cantabria y Zaragoza. Por nacionalidades, argentinos, italianos y uruguayos se han centrado en los robos con violencia (atracos), los colombianos en los robos a domicilio, los chilenos aparecen como expertos carteristas, los franceses destacan en los robos con violencia y en el proxenetismo, los portugueses se dedican fundamentalmente a actos de falsificación, los yugoslavos actúan en robos con fuerza a domicilios, los alemanes en delitos de proxenetismo y los asiáticos en el tráfico ilegal de drogas. (Ibidem, págs. 276 y 277).

exterior<sup>200</sup>, preocupa más al autor el incremento de las organizaciones “de carácter netamente nacional”<sup>201</sup>.

Tanto la doctrina como los diferentes operadores jurídicos han reclamado un marco de regulación específico que dé respuesta a la criminalidad organizada, como grave fenómeno delictivo merecedor de un tratamiento individualizado<sup>202</sup>. Si bien, como se acaba de señalar, en el plano internacional se han suscrito diversos Convenios en las últimas décadas para tratar de erradicar la criminalidad organizada, a nivel estatal no se ha dado un tratamiento normativo específico a este problemático fenómeno delictivo hasta fechas recientes. En efecto, hasta la entrada en vigor de la LO 5/2010 de reforma del texto punitivo, el Código penal no aportaba siquiera criterios de interpretación auténtica<sup>203</sup> que delimitasen el concepto delincuencia organizada. La redacción original de la Ley penal no daba una respuesta global a tan complejo fenómeno criminal, si bien preveía la pertenencia a una organización como cualificación específica de determinados delitos -entre ellos el blanqueo de capitales (artículo 302.1)-. Por su parte, en el orden procesal, la Ley de enjuiciamiento criminal incorporó en 1999 un concepto de delincuencia organizada<sup>204</sup> en su artículo 282 bis 4<sup>205</sup>, si bien sus efectos están

---

<sup>200</sup> Son especialmente problemáticos los grupos mafiosos italianos, las redes chinas y grupos procedentes de Rusia y del este de Europa, cuyas tendencias delictivas incluyen el tráfico de drogas, el tráfico ilícito de vehículos, los delitos relacionados con la prostitución e inmigración ilegal y la trata de blancas. (Ibidem, pág. 277).

<sup>201</sup> Y ello porque, “hasta hace pocos años, el papel del delincuente español integrado en organizaciones criminales era secundario, pero en la actualidad se puede afirmar, como novedad, que la delincuencia organizada española ha evolucionado, desgraciadamente, tanto profesional como organizativamente”. (Ibidem).

<sup>202</sup> Vid. CUESTA ARZAMENDI, J. L. de la, “El derecho penal ante la criminalidad organizada. Nuevos retos y límites”, op. cit., pág. 11. Constata el autor que se han formulado propuestas muy dispares que obedecen a “múltiples ópticas de política legislativa: desde cerrar los ojos e ignorar sus peculiaridades, continuando como si se tratara de una forma más de criminalidad tradicional, hasta la actitud opuesta, consistente en colocar como pilar fundamental la eficacia a toda costa, a costa incluso de la violación de los principios y garantías fundamentales del Derecho penal y procesal. Si la primera opción peca de “angelismo” y deja inerte a la sociedad frente a los nuevos fenómenos criminales, los riesgos inherentes a la segunda alternativa son muy graves: perfectamente conocida es la tendencia del sistema penal a asimilar con rapidez e integrar de manera normalizada los instrumentos y excepciones adoptados para hacer frente a situaciones especiales, que acaban aplicándose “también -y probablemente con mayor frecuencia- en la vida penal cotidiana”, sin ninguna garantía de que con ello se acabe con el crimen organizado.” Para el autor, la opción más razonable pasa por “buscar vías intermedias que, respetando los principios y garantías acuñados (principio de legalidad, principio del hecho, principio de culpabilidad, principio de proporcionalidad, in dubio pro reo...), faciliten el éxito de la intervención, adaptando si se quiere los principios a la nueva situación, pero sin merma de su contenido sustancial.” (Ibidem, págs. 11 y 12). Sobre los modelos de atribución de responsabilidad penal a los miembros de la organización criminal, vid. ampliamente SILVA SÁNCHEZ, J. M., “¿«Pertenencia» o «Intervención»? Del delito de «pertenencia a una organización criminal» a la figura de la «participación a través de organización en el delito»”, op. cit., págs. 1079 y ss.

<sup>203</sup> Vid. CUESTA ARZAMENDI, J. L. de la, “El derecho penal ante la criminalidad organizada. Nuevos retos y límites”, op. cit., pág. 6.

<sup>204</sup> El apartado 4 del art. 282 bis LECr ofrece, a los efectos de la norma procesal, una definición legal de la delincuencia organizada, considerando como tal la asociación de tres o más personas para realizar, de forma permanente o reiterada, conductas que tengan como fin cometer alguno o algunos de los delitos que el precepto enumera.

circunscritos al ámbito de la propia ley procesal y respecto a determinados delitos, entre los que se encuentra el blanqueo de capitales. Por todo ello, hasta la entrada en vigor de la LO 5/2010, la caracterización de la delincuencia organizada ha estado, en gran medida, en manos de la doctrina y la jurisprudencia<sup>206</sup>, habiendo sido asimismo determinante para su configuración conceptual la aparición de diversos instrumentos internacionales promovidos para erradicar el grave fenómeno delictivo.

El nuevo Capítulo VI, incorporado al Título XXII del Libro II del Código penal (en el marco de los delitos contra el orden público) por la LO 5/2010, satisface las demandas de una regulación específica de un fenómeno tan pernicioso y diferenciado como es la criminalidad organizada. El propio preámbulo de la LO 5/2010 reconoce “la incapacidad del actual delito de asociación ilícita para responder adecuadamente a los diferentes supuestos de agrupaciones u organizaciones criminales”, que no encontraban un encaje adecuado en el delito de asociación ilícita<sup>207</sup> por sus propias especificidades. Ello justifica, según su exposición de motivos, la incorporación del elenco de disposiciones que introduce la Ley relativas a los diferentes supuestos de agrupaciones y organizaciones criminales: los artículos 570 bis, 570 ter y 570 quater CP. Con todo, la reforma va más allá, pues no sólo crea un tipo penal específico, sino que además introduce subtipos cualificados en determinados ámbitos delictivos para aquellos casos en los que la infracción se cometa en el seno de una organización criminal. La fórmula legislativa empleada ha sido objeto de razonables críticas doctrinales, pues la actual regulación provoca problemas concursales entre los tipos específicos de pertenencia a asociaciones delictivas y las especiales agravaciones derivadas de la pertenencia a una organización criminal contenidas en los tipos de blanqueo y de tráfico de drogas<sup>208</sup>.

---

<sup>205</sup> Disposición introducida por la reforma operada por la LO 5/1999, de 14 de enero, relativa a la actuación del denominado “agente encubierto”.

<sup>206</sup> Vid. CUESTA ARZAMENDI, J. L. de la, “El derecho penal ante la criminalidad organizada. Nuevos retos y límites”, op. cit., pág. 6; GARZÓN REAL, B., “Cooperación jurídica internacional en el ámbito del blanqueo de dinero y espacio de seguridad, libertad y justicia en la Unión Europea”, op. cit., pág. 430. En el ámbito jurisprudencial, resulta paradigmática la STS de 18 de diciembre de 1996, en la que, como señala MARTÍN PALLÍN, la Sala Segunda acogía un concepto restrictivo de delincuencia organizada en relación al delito de blanqueo (“organización que lleva a cabo, a gran escala, con estructuras consolidadas, con capacidad corruptora y alcance internacional, actividades propias de la comunidad organizada o específicamente al blanqueo de capitales”). (“Blanqueo de dinero, secreto profesional y criminalidad organizada”, op. cit., pág. 669).

<sup>207</sup> Vid. VELASCO NÚÑEZ, E., *Crimen organizado, internet y nuevas tecnologías*, pág. 247, disponible en el enlace siguiente: [ruc.udc.es/dspace/.../1/ponencias\\_13\\_Velasco\\_Nunez\\_245-282.pdf](http://ruc.udc.es/dspace/.../1/ponencias_13_Velasco_Nunez_245-282.pdf).

<sup>208</sup> Vid. LORENZO SALGADO, J. M., “La modificación penal de 2010 en sede de organizaciones criminales internacionales, la justificación de la reforma en los medios de comunicación y sus conexiones con las drogas y el blanqueo de capitales”, *IV Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, págs. 325 y 326; VIDALES

La Ley de reforma del texto punitivo distingue dos tipologías diferenciadas de agrupaciones criminales<sup>209</sup>, a las que denomina organización criminal, regulada en el artículo 570 bis CP, y grupo criminal, regulado en el artículo 570 ter.

Conforme al artículo 570 bis, y a los efectos del Código penal, se entiende por organización criminal aquella agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, en la que, de manera concertada y coordinada, sus miembros se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos. De acuerdo con el artículo 570 ter, el grupo criminal queda definido, a los efectos antes referidos, como la unión de más de dos personas que, sin reunir alguna o algunas de las características de la organización criminal definida en el artículo anterior, tenga por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos<sup>210</sup>.

Por último, entre otras cuestiones, dispone el artículo 570 quater número 3 que las disposiciones contenidas en el Capítulo en el que el precepto se integra serán aplicables a toda organización o grupo criminal que lleve a cabo cualquier acto penalmente relevante en España, aunque se hayan constituido, estén asentados o desarrollen su actividad en el extranjero.

---

RODRÍGUEZ, C., “El fenómeno asociativo como actividad delictiva previa al delito de blanqueo de capitales (reflexiones a propósito de la Sentencia 25191/14, de 27 de febrero, de las Secciones Unidas Penales de la Corte Suprema de Casación italiana)”, *Estudios penales y criminológicos*, nº 35, 2015, págs. 90, 105 y 106, disponible en el siguiente enlace: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5016367>.

<sup>209</sup> Además de las asociaciones ilícitas (cuya peculiaridad específica es su marcado carácter ideológico) que siguen ubicándose en el artículo 515 CP, y las organizaciones y grupos terroristas y de los delitos de terrorismo, que tienen una regulación propia en el artículo 571, contenido en el Capítulo VII en el Título XXII del Libro II, también de nueva creación, referido a «las organizaciones y grupos terroristas y de los delitos de terrorismo». (Vid. VELASCO NÚÑEZ, E., *Crimen organizado, internet y nuevas tecnologías*, op. cit., págs. 249 y ss.).

<sup>210</sup> Señala VELASCO NÚÑEZ que “la estructura de ambas infracciones responde a un esquema similar sólo diferenciado por la mayor intensidad en la mella al orden público y en el carácter más complejo de la organización frente al grupo criminal, pues la primera debe responder al “deliberado propósito de constituir una amenaza cualitativa y cuantitativamente mayor para la seguridad y orden jurídico” y desde luego se define por su “estructura con vocación de permanencia”. (Ibidem, pág. 251).

## 1.2. FASES DEL BLANQUEO DE CAPITALS

Los procedimientos empleados para la transformación y posterior incorporación de capitales de origen delictivo al tráfico legal son ilimitados, están en constante evolución y suelen combinarse entre sí, dando lugar a complejos métodos, cada vez más perfeccionados<sup>211</sup>. Lo habitual es que desde que se genera el dinero sucio hasta que se coloca finalmente en el marco económico-legal, aquél pase por varias etapas o ciclos<sup>212</sup>, caracterizándose así la actividad de blanqueo como un genuino proceso<sup>213</sup>.

Como hemos visto, en todos los ámbitos de la criminalidad resulta necesario reintegrar en los circuitos financieros legales el producto de las actividades delictivas, tras un proceso de lavado más o menos complejo. En las operaciones a menor escala, no es habitual recurrir a formulas especialmente complicadas ni a sucesivas transformaciones en los bienes<sup>214</sup>. En cambio, cuando el proceso blanqueador está ligado a la reintroducción de grandes masas de activos, las técnicas utilizadas suelen ser mucho más complejas y diversificadas, siendo frecuente el recurso simultáneo a vías independientes de lavado<sup>215</sup>. En cualquier caso, observa GARCÍA NORIEGA, la complejidad del blanqueo no deriva de la sucesiva intervención de agentes y negocios para legitimar determinada cantidad de fondos, sino de la necesidad de fraccionar los

---

<sup>211</sup> La aparición, proliferación y masificación de las nuevas tecnologías -especialmente los medios telemáticos e informáticos- constituye un factor decisivo en el perfeccionamiento de los métodos de blanqueo. Sobre esta cuestión, vid., ampliamente, ABEL SOUTO, M, “Blanqueo, innovaciones tecnológicas, amnistía fiscal de 2012 y reforma penal”, op. cit., págs. 2 y ss. Resulta asimismo de gran interés el informe actualizado publicado por SEPBLAC sobre las diferentes técnicas empleadas para blanquear fondos de procedencia delictiva, disponible en el siguiente enlace [http://www.sepblac.es/espanol/informes\\_y\\_publicaciones/informe\\_sobre\\_tipologias.pdf](http://www.sepblac.es/espanol/informes_y_publicaciones/informe_sobre_tipologias.pdf).

<sup>212</sup> Vid. GARCÍA NORIEGA, A., *Cómo se lava el dinero. Cómo se combate el lavado*, op. cit., pág. 36; BLANCO LOZANO, C., “El blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas en el ordenamiento penal español, op. cit., págs. 65 y ss.

<sup>213</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 49 y ss.; id., “Tipologías y lógica del lavado de dinero”, op. cit., págs. 71 y ss.; ALONSO PÉREZ, F., “Conductas afines a la receptación”, op. cit., págs. 486 y ss.; MALLADA FERNÁNDEZ, C., *Fiscalidad y blanqueo de capitales* (Tesis doctoral, publicada en 2012), Repositorio de la Universidad de Oviedo (tesis doctorales), págs. 48 y ss., disponible en el enlace <http://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/12737>; FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y TORRES, J., *Blanqueo de capitales y principio de lesividad*, Ratio Legis Ediciones. Salamanca, 2014, pág. 105.

<sup>214</sup> Vid. GARCÍA NORIEGA, A., *Cómo se lava el dinero. Cómo se combate el lavado*, loc. cit. En muchos casos se tratará, en la medida de lo posible, de reducir el lavado a una sola operación de transformación, o “mediante una sola compañía o un único testaferro interpuestos”.

<sup>215</sup> Ibidem, pág. 39. Vid., asimismo, MARTÍN VELASCO, L., “La investigación policial en el blanqueo de capitales”, *Financiación del terrorismo, blanqueo de capitales y secreto bancario: un análisis crítico* (dir. José Luis González Cussac; coord. Antonio Fernández Hernández). Ed Tirant lo Blanch. Valencia, 2009, pág. 248.

activos y distribuirlos entre agentes y países diferentes con objeto de que las operaciones se realicen “unas estancas de otras” y así “diversificar el riesgo”<sup>216</sup>.

Doctrinalmente se han propuesto diferentes criterios para sistematizar las diferentes fases en que se estructura el proceso de blanqueo de capitales<sup>217</sup>. Por su exhaustividad, resulta de interés el estudio abordado por BLANCO CORDERO<sup>218</sup>, en el que enfatiza la tendencia general a utilizar mecanismos cada vez más sofisticados, especialmente en aquellos Estados en los que la normativa al servicio de la prevención del blanqueo es más rigurosa. En este trabajo vamos a tomar como referencia la esquematización más ampliamente asumida en actualidad por la doctrina<sup>219</sup>, propuesta en su momento por la administración aduanera de los Estados Unidos de América<sup>220</sup> y que ha servido al GAFI como modelo del esquema descrito en los anexos a sus 40 Recomendaciones.

### 1.2.1. FASE DE COLOCACIÓN

En esta primera fase, llamada de sustitución<sup>221</sup>, inserción<sup>222</sup>, introducción<sup>223</sup>, inversión o colocación<sup>224</sup>, los capitales ilícitamente obtenidos, generalmente grandes

<sup>216</sup> Vid. GARCÍA NORIEGA, A., *Cómo se lava el dinero. Cómo se combate el lavado*, op. cit., pág. 36.

<sup>217</sup> Algunos autores han considerado que los diversos intentos de sistematización no son sino meras “elucubraciones teóricas de difícil aplicación práctica”, pues los procedimientos que suelen describirse en cada una de sus fases podrían ubicarse indistintamente en unas o en otras, “sin que pueda establecerse una rígida distinción” entre las mismas. (Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 42; en sentido similar, FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 78).

<sup>218</sup> El autor analiza el modelo de fases y otros aportados por BERNASCONI, el modelo de ciclos de ZÜND, la formulación de objetivos propuesta por ACKERMANN, y el complejo modelo de los cuatro sectores, creado por MÜLLER, para finalmente conceder especial atención a la clasificación propuesta por el GAFI, más ampliamente asumida. Para una profundización sobre los diferentes modelos analizados por el autor, vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 2ª ed., op. cit., págs. 55 y ss. Aunque no de manera tan exhaustiva, también ARÁNGUEZ SÁNCHEZ dedica en su monografía una exposición relativamente detallada de los diferentes modelos propuestos. (*El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 37 y ss.).

<sup>219</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., *El blanqueo de dinero en la normativa internacional*, op. cit., pág. 30; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 61 y ss.; ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 40; ÁLVAREZ-SALA WALTER, J., *El blanqueo de capitales y las profesiones jurídicas*. Editado por el Consejo General del Notariado. Madrid, 2004. pág. 2; disponible en el siguiente enlace [http://www.sepblac.es/espanol/informes\\_y\\_publicaciones/documentos\\_sobre\\_blanqueo.htm](http://www.sepblac.es/espanol/informes_y_publicaciones/documentos_sobre_blanqueo.htm). El esquema referido, si bien resulta ilustrativo para ofrecer un análisis conceptual del fenómeno, “revela ciertas deficiencias” a la hora de trasladarlo a la práctica, pues las fases en que se estructura “se solapan con bastante frecuencia, llegando incluso a coincidir en no pocas ocasiones.” (Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., “El blanqueo de capitales (Contexto, razones de su penalización, evolución en nuestro entorno de las iniciativas supranacionales)”, op. cit., pág. 171).

<sup>220</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., *El blanqueo de dinero en la normativa internacional*, op. cit., pág. 30.

<sup>221</sup> Vid. MARTOS NÚÑEZ, J. A., “Receptación y blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 208.

<sup>222</sup> Vid. VIDALES RODRÍGUEZ, C., *Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código penal de 1995*, op. cit., pág. 72.

<sup>223</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 41.

sumas de dinero, en muchas ocasiones en efectivo y en billetes pequeños<sup>225</sup>, son trasladados físicamente del lugar donde fueron obtenidos a otros donde es más fácil la ocultación de su origen ilícito, con objeto de alejarlos del lugar en que se obtuvieron, y así evitar sospechas sobre su ilegítima procedencia<sup>226</sup>.

Las formas en las que la colocación de bienes puede llevarse a cabo son ilimitadas<sup>227</sup>. La doctrina suele clasificar los mecanismos de colocación en cuatro vías de acción<sup>228</sup>:

1. A través del recurso a las instituciones financieras tradicionales, ingresando el capital ilícitamente obtenido en cuentas bancarias, generalmente de forma fraccionada (*structuring* o *smurfing*)<sup>229</sup>, transfiriéndolo de unas cuentas a otras en sucesivas operaciones o, en fin, transformando el efectivo en otros instrumentos monetarios, generalmente títulos-valores que puedan transmitirse y ejecutarse con mayor facilidad<sup>230</sup>. Para soslayar las obligaciones que tienen las entidades financieras de identificación y comunicación, el agente blanqueador suele optar por el fraccionamiento monetario. También es frecuente en las operaciones de colocación el empleo de testaferros o la búsqueda de la oportuna complicidad con la entidad bancaria. Igualmente se ha constatado que, con relativa frecuencia, sobre todo en el blanqueo a pequeña escala, se acude a movimientos internacionales de dinero físico fraccionado<sup>231</sup>.

---

<sup>224</sup> Vid. ARIAS HOLGUÍN, D. P., *Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 36.

<sup>225</sup> Para SÁEZ PONTE, la vinculación del papel moneda con la economía sumergida en general, aconseja su relegación a transacciones cotidianas de escasa cuantía. (*La Energía oscura del dinero*. Ed. Netbiblo, Oleiros, 2007, págs. 43 y 44). Además de erradicar la economía sumergida en cualquiera de sus formas, la práctica desaparición de la circulación de efectivo supondría a juicio del autor considerables beneficios tanto para el sector público como para el sector privado y fomentaría un marco más justo del sistema impositivo. (Ibidem, págs. 86 y 87). Asimismo, la propuesta permitiría que “las transacciones económicas puedan registrarse en su totalidad” (Ibidem, pág. 93). Las alternativas al tradicional medio de pago, afirma el autor, ya han sido puestas en práctica con éxito en países como Islandia. En la actualidad podría recurrirse como nuevos medios de pago a un uso específico del teléfono o del carné de identidad e incluso, en un futuro, a medios tan complejos como el desarrollo tecnológico permita. (Ibidem, págs. 103 y ss.).

<sup>226</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 65 y 66.

<sup>227</sup> Vid. VIDALES RODRÍGUEZ, C., *Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código penal de 1995*, op. cit., pág. 72.

<sup>228</sup> Ibidem.

<sup>229</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 66; FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 115.

<sup>230</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., “El blanqueo de capitales (Contexto, razones de su penalización, evolución en nuestro entorno de las iniciativas supranacionales)”, op. cit., pág. 169.

<sup>231</sup> Vid. GARCÍA NORIEGA, A., *Cómo se lava el dinero. Cómo se combate el lavado*, op. cit., pág. 63. En operaciones de mayor envergadura, las transacciones en metálico están siendo progresivamente relegadas a favor de otros medios “más ágiles y seguros, propiciados por los avances jurídicos y tecnológicos”, de modo que aquellas se han visto reducidas a las transacciones más triviales y económicamente menos relevantes. (Vid.

Asimismo, la banca *on-line* y los modernos métodos de pago surgidos en los últimos años han servido para la colocación de capitales delictivos a través de diversos mecanismos, como el dinero electrónico o efectivo digital (*e-cash*, *e-money*)<sup>232</sup>, las tarjetas de prepago, o los servicios de pago a través de internet<sup>233</sup>, que permiten la realización de operaciones *on-line* de manera anónima<sup>234</sup>.

2. Mediante instituciones financieras no tradicionales, que proporcionan servicios similares a los bancarios pero sin estar sometidas a las estrictas obligaciones que afectan a las entidades financieras<sup>235</sup>. Es frecuente que el agente blanqueador recurra a negocios en los que el pago suele efectuarse en efectivo, como restaurantes, discotecas o casas de cambio, y a aquellas instituciones que permiten movimientos de fondos diluyendo la identidad de sus sucesivos tenedores, como son las gestoras de bolsa o las agencias de inversión<sup>236</sup>. La experiencia demuestra la preferencia por establecimientos de cambio de divisas, empresas de *import-export*, compañías de giros internacionales de dinero efectivo<sup>237</sup> y locutorios<sup>238</sup>, siendo también utilizados frecuentemente otros sectores, como las agencias de seguros, los casinos, los servicios postales, etc.<sup>239</sup>. También suelen citarse como ejemplo de estos procesos de colocación la adquisición de billetes de lotería premiados, los cambios de moneda, o la adquisición de metales, piedras preciosas y acciones negociadas en bolsa, bienes de alto valor y que pueden ser trasladados al extranjero fácilmente<sup>240</sup>.

3. A través de la introducción del capital ilícito en la actividad económica diaria<sup>241</sup>. Con frecuencia, el agente blanqueador opta por la adquisición de bienes,

---

FABIÁN CAPARRÓS, E. A., “El blanqueo de capitales (Contexto, razones de su penalización, evolución en nuestro entorno de las iniciativas supranacionales)”, op. cit., pág. 167.

<sup>232</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 68.

<sup>233</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., “Blanqueo, innovaciones tecnológicas, amnistía fiscal de 2012 y reforma penal”, op. cit., págs. 9 y 10.

<sup>234</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., loc. cit.; asimismo, con detalle, ABEL SOUTO, M., “Blanqueo, innovaciones tecnológicas, amnistía fiscal de 2012 y reforma penal”, op. cit., págs. 2 y ss.

<sup>235</sup> Si bien, a través de la normativa preventiva, han sido incorporadas progresivamente obligaciones que vinculan también a estos sectores no integrados en la actividad financiera, precisamente porque la experiencia ha demostrado que son frecuentemente utilizados para la realización de operaciones de blanqueo.

<sup>236</sup> Vid. GARCÍA NORIEGA, A., *Cómo se lava el dinero. Cómo se combate el lavado*, op. cit., pág. 45.

<sup>237</sup> Ibidem.

<sup>238</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 71. Afirma el monografista que en España se ha detectado que los locutorios blanquean el 80% del total blanqueado, lo que ocurre en muchas ocasiones con el desconocimiento del titular del propio establecimiento.

<sup>239</sup> Ibidem, pág. 72.

<sup>240</sup> Ibidem, pág. 71.

<sup>241</sup> Vid. VIDALES RODRÍGUEZ, C., *Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código penal de 1995*, op. cit., pág. 72.



generalmente de valor elevado o no objetivable<sup>242</sup> (inmuebles y otras propiedades de lujo, obras de arte, joyas o la más amplia variedad de artículos suntuarios). En ocasiones, cuando el valor del bien no es excesivamente elevado, el blanqueo suele materializarse mediante su adquisición con pago al contado. En otras ocasiones, la operación no es más que la primera de una serie de sucesivas y complejas maniobras de lavado<sup>243</sup>. También puede ocurrir que la inversión se formalice a través de participación en negocios -que en ocasiones operarán meramente como sociedades pantalla<sup>244</sup>- en los que resulte común el manejo de grandes sumas en metálico, para introducir los capitales ilícitos y mezclarlos con el producto natural de la actividad comercial legítima. Se constata la marcada preferencia para estos fines de los negocios de hostelería, tales como bares, cafeterías, restaurantes, discotecas, e incluso de otro tipo establecimientos vinculados a otros sectores, como los supermercados o las grandes superficies<sup>245</sup>.

4. Mediante la colocación de los capitales de origen delictivo en el extranjero, frecuentemente en paraísos fiscales y en jurisdicciones *offshore*, a través de operaciones que van desde el transporte físico del dinero en metálico, “un método (...) poco sofisticado, barato y relativamente bajo en riesgos”<sup>246</sup>, hasta las más complejas fórmulas de ingeniería financiera<sup>247</sup>.

---

<sup>242</sup> La preferencia por bienes de valor subjetivo responde a razones evidentes: “los valores de compra y de venta no pueden ser cuestionados al no existir referencias de tasación objetivas”. A través de este tipo de maniobras, se puede sospechar que determinada transacción encubre en realidad una operación de blanqueo, “pero será muy difícil demostrarlo”. (Vid. GARCÍA NORIEGA, A., *Cómo se lava el dinero. Cómo se combate el lavado*, op. cit., pág. 47).

<sup>243</sup> Así por ejemplo, la adquisición de inmuebles no siempre será el destino final del capital blanqueado, última etapa del tracto de blanqueo (colocación o integración). Por lo que aquí interesa, la operación inmobiliaria puede servir, en una fase inicial o intermedia “como medio para la justificación de las sucesivas plusvalías que se van documentando en también sucesivas compraventas ficticias, entre otras tantas empresas pantalla del blanqueador hasta la enajenación efectiva a un último comprador, ajeno al fraude.” (Ibidem, págs. 46 y 47).

<sup>244</sup> Entidades sin una actividad real, cuya única finalidad es servir de tapadera para facilitar la actividad blanqueadora. (Vid. ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 31).

<sup>245</sup> En dichos negocios, lo frecuente es que los clientes paguen con dinero en metálico, resultando así sencillo “inflar de forma artificial los ingresos recaudados incorporando a los mismos los beneficios procedentes de actividades ilícitas. Cualquier negocio que genere una gran cantidad de ingresos en efectivo y no emita factura pero sí tickets es un instrumento idóneo para blanquear.” (Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 72). En la materialización de este tipo de operaciones es frecuente la creación de grupos empresariales para hacer entre las diversas empresas que lo componen “negocios en cadena que difuminan el control de las operaciones, multiplicando los datos y haciendo compensaciones o negocios que vinculan a varias jurisdicciones nacionales”, lo que dificulta enormemente el rastreo y la investigación del dinero sucio por las Administraciones de los diversos Estados por los que aquél discurre. Es habitual también el recurso a “sucesivas operaciones, generalmente ficticias, entre empresas compinchadas, para aparentar movimientos de dinero o compraventas de mercancías”. (Vid. GARCÍA NORIEGA, A., *Cómo se lava el dinero. Cómo se combate el lavado*, op. cit., pág. 45).

<sup>246</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 2ª ed., op. cit., pág. 67.

<sup>247</sup> Vid. SILVA SÁNCHEZ, J. M., “Ingeniería financiera y derecho penal”, *Fenómenos delictivos complejos, Cuadernos de derecho judicial* nº 9, 1999. CGPJ, 1999, págs. 169 y ss.

La doctrina especializada incide en la importancia de detectar en esta fase la actividad de blanqueo, pues tras la misma, la agilidad de las sucesivas transformaciones y movimientos que se efectúen con el capital ilícito dificultará su detección<sup>248</sup>.

### **1.2.2. FASE DE CONVERSIÓN U OCULTACIÓN**

Esta fase, también denominada de enmascaramiento<sup>249</sup>, ensombrecimiento<sup>250</sup>, encubrimiento<sup>251</sup>, confusión<sup>252</sup>, estratificación o diversificación<sup>253</sup>, y calificada por FABIÁN CAPARRÓS como blanqueo en sentido estricto<sup>254</sup>, se materializa frecuentemente a través de la combinación de complejas y en ocasiones superpuestas operaciones financieras<sup>255</sup> con objeto de desvincular el capital ilícitamente obtenido y su origen delictivo<sup>256</sup>. Como se ha advertido, una vez iniciada esta fase, el complejo “laberinto de operaciones contables y financieras” a que se someterán los activos ilícitos dificultará progresivamente más la investigación y la persecución de los mismos, ello teniendo presente “la complejidad técnica que es inherente a esta fase del proceso legitimador”<sup>257</sup>.

Las operaciones que integran esta fase son de la más diversa índole, habiéndose demostrado muy eficaces, dentro del sector financiero tradicional, la conversión del metálico en otros instrumentos financieros o medios de pago más fácilmente transportables, o el sometimiento de activos a mecanismos de compensación entre

---

<sup>248</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 41; FABIÁN CAPARRÓS, E. A., “El blanqueo de capitales (Contexto, razones de su penalización, evolución en nuestro entorno de las iniciativas supranacionales)”, op. cit., pág. 168.

<sup>249</sup> Vid. ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 32.

<sup>250</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 72.

<sup>251</sup> Vid. HERNÁNDEZ PARDO, R., “Prevención del blanqueo de capitales: respuestas a las dudas de los profesionales jurídicos”, op. cit., pág. 2.

<sup>252</sup> Vid. ARIAS HOLGUÍN, D. P., *Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 36.

<sup>253</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 41.

<sup>254</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 133; id., “El blanqueo de capitales (Contexto, razones de su penalización, evolución en nuestro entorno de las iniciativas supranacionales)”, op. cit., pág. 168.

<sup>255</sup> Como gráficamente explica BLANCO CORDERO, las sucesivas operaciones, “al igual que capas, se irán amontonando unas tras otras”, dificultando cada vez más el descubrimiento de la procedencia delictiva de los activos. (*El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 73).

<sup>256</sup> Vid. HERNÁNDEZ PARDO, R., “Prevención del blanqueo de capitales: respuestas a las dudas de los profesionales jurídicos”, op. cit., pág. 2.

<sup>257</sup> Vid. VIDALES RODRÍGUEZ, C., *Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código penal de 1995*, op. cit., pág. 73.

varias oficinas de una misma institución financiera<sup>258</sup>, e incluso otras operaciones bancarias de la más diversa índole<sup>259</sup>. También en el ámbito financiero suele recurrirse a la realización de transacciones ficticias<sup>260</sup>, a la “creación de un rastro documental falso para ocultar la verdadera fuente, propiedad, localización o control sobre los fondos” de origen delictivo<sup>261</sup>, y a la “instrumentalización de núcleos de imputación jurídica”<sup>262</sup>, a través de la creación de sociedades pantalla y el empleo de testaferros con los mismos fines encubridores. Asimismo, en el sector bancario habitualmente se hace uso de transferencias electrónicas de los fondos previamente colocados, medio este último que, afirma el GAFI, es el más importante y frecuentemente empleado en la fase de conversión, pues facilita el anonimato, es rápido y prácticamente elimina los rastros contables<sup>263</sup>.

---

<sup>258</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 136.

<sup>259</sup> Resuelta especialmente interesante el exhaustivo análisis desarrollado por SÁNCHEZ ULLED en su trabajo relativo a las operaciones bancarias más frecuentemente utilizadas en procesos de blanqueo, en el que expone las fórmulas que mayores dificultades han presentado en el seguimiento del rastro de fondos delictivos. El autor menciona como mecanismos de blanqueo más frecuentes las operaciones de banca corresponsal: aquellas por las que una entidad de crédito -corresponsal- presta servicios a los clientes de una institución diferente, especialmente a través de operaciones de gestión de pagos y preferentemente en el ámbito internacional. La idoneidad de estas operaciones “*por orden de uno de nuestros clientes*” para blanquear fondos deriva del “escaso control que los bancos suelen prestar a las operaciones realizadas por otros bancos.” También son especialmente aptas para blanquear fondos las operaciones desarrolladas en el ámbito de la banca privada (aquella que presta servicios bancarios únicamente a clientes “preferenciales”, caracterizados por su alto nivel económico, su elevada actividad de comercio exterior, etc.), en muchas ocasiones a través de entidades filiales -radicadas en ocasiones en una jurisdicción *offshore*-. Como apunta el SÁNCHEZ ULLED, los servicios prestados por la banca privada se caracterizan por garantizar un “alto grado de confidencialidad” al cliente y consistir en una “gestión sumamente individualizada prestada por empleados específicos y altamente cualificados (ejecutivos de cuentas)”. Estos servicios, “altamente personalizados”, realmente ofrecen una “optimización fiscal, cuando no pura opacidad y evasión [y un] secreto extremo, pues se oculta la identidad del último beneficiario.” Asimismo, la banca *on-line*, que autoriza a realizar operaciones bancarias sin contacto directo entre el cliente y el personal de la entidad, reduce las posibilidades de control del banco y permite realizar las operaciones bancarias desde cualquier lugar del mundo. Todo ello hace de este tipo de servicio financiero un instrumento especialmente idóneo para legalizar fondos de origen criminal. Por su parte, el empleo de *special use accounts* o cuentas internas del propio banco, en las que “la información identificativa de los clientes se separa de las transacciones financieras realizadas”, dificulta la persecución del rastro de los fondos que en las mismas se depositan. Esta tipología de cuentas, que abarca las cuentas bancarias temporales y las cuentas escoba, “se prestan a un alto grado de abuso” por parte de los propios empleados de la entidad, para, en connivencia con el propio cliente, realizar transacciones “sospechosas”. Por último, suelen emplearse con fines legitimadores las cuentas numeradas y anónimas (cuya apertura “no exige declarar ningún tipo de identificación, por lo que en la práctica devienen prácticamente al portador”) y las operaciones realizadas a través de filiales de la entidad crediticia en el extranjero, especialmente cuando se encuentran radicadas en paraísos fiscales o en países no cooperadores (jurisdicciones *offshore*), que por lo común rechazan la comunicación de información fiscal a terceros países, y en los que se garantiza un estricto secreto bancario y societario. (“Blanqueo de capitales en el sector bancario y corrupción”, *Blanqueo de dinero y corrupción en el sistema bancario*, págs. 308-321 *passim*).

<sup>260</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 142 y ss.

<sup>261</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 73.

<sup>262</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., “El blanqueo de capitales (Contexto, razones de su penalización, evolución en nuestro entorno de las iniciativas supranacionales)”, op. cit., pág. 169.

<sup>263</sup> Vid. ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 32; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 74.

Esta fase de conversión suele implicar movimientos internacionales de los activos previamente colocados, especialmente cuando el Estado en el que se cometió el delito cuenta con un férreo sistema de prevención. Sus destinos, la mayoría de las veces, son paraísos fiscales, jurisdicciones *offshore* o plazas con laxos sistemas de control, que, como hemos visto, por lo común rechazan la comunicación de información fiscal a terceros países, y en los que suele estar garantizado legalmente un estricto secreto bancario y societario<sup>264</sup>. Especialmente en el ámbito de la criminalidad organizada, es habitual transferir a sociedades instrumentales, residenciadas en estas plazas no cooperantes, el producto de las actividades delictivas para revestirlo de apariencia lícita, o acudir a la banca radicada en estas jurisdicciones, por el beneficio que la mayoría de las veces confiere un ilimitado secreto bancario.

### **1.2.3. FASE DE INTEGRACIÓN**

La fase conclusiva del blanqueo tiene lugar a través de la reintegración de los activos reconvertidos al mercado legal, finalizando así la legalización definitiva de aquéllos. El capital de origen delictivo, ya transformado a través de diferentes formas, mezclado con otros capitales lícitos y ubicado en distintos lugares, cuenta ya con apariencia de legalidad<sup>265</sup>. Despojados su rastro delictivo, los activos pueden ya acceder fácilmente al sistema económico-financiero legal. Para ello, será necesario que los fondos aparezcan bien como beneficios de la lícita actividad de una empresa instrumental, bien como “inversiones normales, créditos o reinversiones de ahorros”<sup>266</sup>.

Las operaciones que se desarrollan en esta tercera fase de integración o “reinversión”<sup>267</sup> no tienen por qué constituir en todo caso inversiones en el sentido estricto del término<sup>268</sup>. Se trata más bien de desviar los capitales ya dotados de apariencia legítima hacia sectores en los que resulte menos sospechosa su vinculación

---

<sup>264</sup> Vid. SÁNCHEZ ULLED, E. J., “Blanqueo de capitales en el sector bancario y corrupción. Aspectos prácticos”, op. cit., pág. 322.

<sup>265</sup> Vid. MARTOS NUÑEZ, J. A., “Receptación y blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 208.

<sup>266</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 75.

<sup>267</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., “El blanqueo de capitales (Contexto, razones de su penalización, evolución en nuestro entorno de las iniciativas supranacionales)”, op. cit., pág. 170.

<sup>268</sup> No se trata en realidad de colocar los bienes en aplicaciones productivas, pues no se persigue maximizar la rentabilidad de la operación, sino dificultar la identificación del origen delictivo de los fondos. Por ello, constata FABIÁN, no son extrañas las operaciones de reinversión en “negocios que, si bien pueden ser absolutamente ruinosos, pueden operar a modo de magníficas lavadoras en las que dotar de apariencia lícita a cuantos beneficios ilegales se presenten. (...) El beneficio que implica el pacífico disfrute de unas rentas ilícitas puede compensar con creces los costes derivados de las pérdidas dinerarias en las que se incurre.” (Ibidem).

con actividades delictivas<sup>269</sup>. Para ello, suele acudirse a transacciones inmobiliarias con personas o sociedades interpuestas<sup>270</sup> y a la adquisición de empresas -generalmente a través de intermediarios- cuyo negocio implica el manejo de grandes cantidades de efectivo<sup>271</sup>, llegando a adquirirse incluso modestas entidades financieras<sup>272</sup>, casi siempre residenciadas en jurisdicciones no cooperantes. Otros métodos frecuentes mediante los que se instrumentaliza la reintegración de los fondos al tráfico lícito son la concesión de préstamos simulados o de regreso<sup>273</sup>, la expedición de facturas falsas de importación y exportación (sobrevaloradas o infravaloradas, según dónde quieran dirigirse los capitales blanqueados<sup>274</sup>), la formalización de operaciones de “inversión directa”<sup>275</sup> y “de comercio cruzado”<sup>276</sup>, así como el establecimiento de relaciones de complicidad con bancos extranjeros, clandestinos o irregulares, con compañías de seguros o con sujetos vinculados a ciertos sectores profesionales, como pueden ser agentes de bolsa, contables

---

<sup>269</sup> Ibidem.

<sup>270</sup> ÁLVAREZ PASTOR/ EGUIDAZU PALACIOS revelan que la compra-venta de inmuebles es una de las fórmulas más habituales de blanqueo tanto de activos de procedencia ilícita como de aquellos otros “sustraídos a la Hacienda Pública”. Explican dichos monografistas que los inmuebles “son bienes relativamente líquidos, y su valor real no es siempre fácil de estimar, de forma que no resulta sencillo para las autoridades fiscales determinar si el precio declarado por la compraventa coincide o no con el efectivamente pagado por el comprador. Esta dificultad de determinar el precio real hace posible declarar un precio inferior al efectivamente satisfecho (abonando el comprador la diferencia con dinero negro) o, inversamente, declarar un precio superior, trasvasándose así al comprador una plusvalía ficticia”. (*Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 33). Sin embargo, como ya se ha apuntado, la compra-venta de inmuebles no siempre destino final de los fondos lavados, pudiendo constituir también, dentro de fases iniciales o intermedias, un eslabón más en un complejo proceso legitimador: “el inmueble se utiliza (...) como medio para la justificación de las sucesivas plusvalías que se van documentando en también sucesivas compraventas ficticias, entre otras tantas empresas pantalla del blanqueador hasta la enajenación efectivas a un último comprador, ajeno al fraude”. (Vid. GARCÍA NORIEGA, A., *Cómo se lava el dinero. Cómo se combate el lavado*, op. cit., págs. 46 y 47).

<sup>271</sup> Nuevamente se constata la preferencia por negocios en los que se opera frecuentemente con grandes cantidades de efectivo: negocios de la rama hostelera (bares, restaurantes u hoteles), de venta de vehículos, agencias de viaje, empresas de construcción o joyerías -entre otras- en las que se solapan la actividad normal de la empresa y el lavado de fondos delictivos a través del recurso a “facturas falsas, empleados fantasma, gastos inflados y ganancias infladas [que] dejan un rastro documental que exige la involucración de contables y otras personas”. (Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 80 y 81).

<sup>272</sup> Ibidem, pág. 81.

<sup>273</sup> Se trata de préstamos concedidos por empresas pantalla, generalmente radicadas en plazas *offshore*, y cuya titularidad real corresponde a la propia organización criminal. A través de este instrumento, la persona o empresa se presta “a sí misma fondos de origen ilícito, (...) que aparecen legalmente como procedentes de un préstamo del exterior”. (Vid. ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 33; asimismo, BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 77).

<sup>274</sup> Vid. ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 34.

<sup>275</sup> Operación mediante la cual “el blanqueador invierte directamente el dinero que tiene en el extranjero en una empresa legítima de su país, apareciendo la empresa extranjera como compradora”. (Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., loc. cit.).

<sup>276</sup> Es uno de los “mecanismos más sofisticados de blanqueo (...) y funciona mediante la creación de una sociedad en el extranjero, de propiedad secreta, que va a ser la contraparte en la actividad comercial. Lo que pretende el blanqueador es repatriar el dinero sucio, actualmente propiedad de la sociedad que él mismo controla, en forma de beneficios comerciales legítimos ganados en el mercado libre”. (Ibidem, págs. 81 y 82).

y determinados profesionales del Derecho (abogados, notarios), con objeto de obtener su cooperación en las operaciones legitimadoras<sup>277</sup>.

### **1.3. NORMATIVA REGULADORA**

En nuestro país, la lucha contra el blanqueo se articula a través de una normativa administrativa de carácter esencialmente preventivo y de la legislación penal<sup>278</sup>. A su vez, dado el marcado carácter internacional del blanqueo de capitales, junto a las legislaciones internas de cada Estado coexisten instrumentos normativos internacionales de muy diversa índole. Por razones de claridad expositiva, comenzaremos refiriéndonos a la normativa internacional vigente en España.

#### **1.3.1. NORMATIVA INTERNACIONAL**

Como hemos visto, junto con el proceso de globalización de la economía operado en las últimas décadas, el fenómeno del blanqueo de capitales ha experimentado en los últimos años una marcada tendencia a la internacionalización<sup>279</sup>, superando las fronteras nacionales de los Estados. Ya en la década de los 80 del siglo pasado<sup>280</sup> se advirtió que sólo mediante una respuesta conjunta<sup>281</sup>, a través de *acciones coordinadas* de los diferentes Estados que conforman la comunidad internacional, podía combatirse eficazmente este fenómeno delictivo<sup>282</sup>. Estados Unidos promovió las primeras medidas para hacer frente a dicho fenómeno a nivel supranacional. Si bien ya en los años 70 dicho país contaba con normativa antiblanqueo -fundamentalmente

---

<sup>277</sup> Ibidem, págs. 78 y ss.

<sup>278</sup> Vid. FARIA COSTA, J. de, “A protecção penal contra o branqueamento de capitais em Portugal”, *IV Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, pág. 220.

<sup>279</sup> Vid. MATA LLÍN EVANGELIO, A., “El “autoblanqueo” de capitales”, op. cit., pág. 3.

<sup>280</sup> Vid. GÓMEZ INIESTA, D. J., *El delito de blanqueo de capitales en Derecho Español*, op. cit., págs. 17 y 18.

<sup>281</sup> Vid. MARTÍNEZ-ARRIETA MÁRQUEZ DE PRADO, I., *El autoblanqueo. El delito fiscal como antecedente del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 14.

<sup>282</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., “El blanqueo de capitales (Contexto, razones de su penalización, evolución en nuestro entorno de las iniciativas supranacionales)”, op. cit., pág. 167; GARCÍA VALDÉS, C., “Dos aspectos de la represión penal del tráfico de drogas: la teoría del agente provocador y del delito provocado y el blanqueo del dinero procedente del delito”, *Política criminal y reforma penal: homenaje a la memoria del Prof. Dr. D. Juan del Rosal*, Ed. Edersa. Madrid, 1993, pág. 571; VILABOY LOIS, L., “Aspectos procesales de la persecución penal del blanqueo de dinero”, *III Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pág. 383; MATA LLÍN EVANGELIO, A., “Cooperación internacional en materia penal”, *Auditoría, prevención y represión del blanqueo de capitales*, Ed. Liber Factory. Madrid, 2014, pág. 121.

dirigida a erradicar el delito fiscal-, la constatación de la progresiva tendencia que experimentaban tanto el blanqueo como la criminalidad organizada a superar las fronteras nacionales impulsó a la Administración norteamericana a procurar que sus socios europeos y diversos foros internacionales adoptasen medidas para prevenir y combatir el lavado de activos<sup>283</sup>. De este modo, en las últimas décadas han entrado en la escena internacional numerosos organismos<sup>284</sup> llamados a combatir la preocupante realidad a la que la comunidad internacional se enfrenta, y han sido adoptados diversos instrumentos normativos de ámbito supranacional dirigidos a armonizar y coordinar las políticas de los diferentes Estados, todo ello de cara a promover de manera eficaz la erradicación del blanqueo de capitales<sup>285</sup>. A continuación vamos a referirnos, sin extendernos demasiado, a aquellos que de ordinario son considerados los principales textos internacionales en la materia<sup>286</sup>, textos cuyo contenido ha determinado en gran medida los procesos legislativos que, en los Estados del mundo occidental, han ido conformando su normativa interna de prevención y represión del blanqueo.

Antes de abordar el estudio de los diferentes Tratados y Convenios internacionales, ha de advertirse que también se han aprobado instrumentos internacionales no vinculantes, con forma de declaraciones o recomendaciones, que o han tenido una marcada incidencia práctica o han servido de modelo a textos posteriores de naturaleza vinculante<sup>287</sup>. Es el caso de la **Declaración de Principios de Basilea** de 12 de diciembre de 1988, sobre la prevención de utilización del sistema bancario para el

---

<sup>283</sup> Vid. ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 328. Sobre el proceso de creación de medidas internacionales orientadas a erradicar el blanqueo de capitales, vid., detalladamente, BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 98 y ss.; id., “La lucha contra el blanqueo de capitales procedentes de las actividades delictivas en el marco de la U.E.”, op. cit., pág. 12; ZARAGOZA AGUADO, J. A., “Cooperación Judicial Internacional en la Lucha contra el Lavado de Dinero”, *Combate del lavado de activos desde el sistema judicial*. 3ª edición. Washington, DC. Organización de los Estados Americanos, República Bolivariana de Venezuela y Banco Interamericano de Desarrollo, 2007, págs. 425 y ss., disponible en el siguiente enlace [http://www.cicad.oas.org/lavado\\_activos/pubs/Combate\\_Lavado\\_3ed.pdf](http://www.cicad.oas.org/lavado_activos/pubs/Combate_Lavado_3ed.pdf).

<sup>284</sup> Vid., con detalle, TATO RODRÍGUEZ, M., “Estadísticas sobre la aplicación de la normativa administrativa de prevención del blanqueo en el campo internacional”, *IV Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, págs. 107 y ss.

<sup>285</sup> Vid. GUINARTE CABADA, G., “La política criminal de la Unión Europea en materia de blanqueo de capitales. Especial referencia a las nuevas propuestas de directivas de 2013”, *IV Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, pág. 245; FARALDO CABANA, P., “Antes y después de la tipificación expresa del autoblanqueo de capitales”, op. cit., pág. 43.

<sup>286</sup> Para una profundización sobre la cuestión, vid. ABEL SOUTO, M., *El blanqueo de dinero en la normativa internacional*, op. cit., págs. 41 y passim; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, op. cit., págs. 95 y ss.; ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 53 y ss.

<sup>287</sup> Vid. LOBO GONZÁLEZ, R./ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, M., *Código Penal. Parte especial. Tomo II. Vol. II*, op. cit., pág. 195.

blanqueo de fondos de origen criminal, aprobada por el Comité de Reglas y Prácticas de Control de Operaciones Bancarias, compuesto por los Bancos Centrales del Grupo de los Diez más Luxemburgo. Si bien la Declaración no tiene carácter vinculante -sino más bien deontológico-<sup>288</sup>, sus disposiciones han influido notablemente en el contenido de textos internacionales posteriores relativos a la prevención del blanqueo de capitales. La Declaración de Principios, dirigida a las instituciones financieras, propone a éstas la adopción de reglas y procedimientos para erradicar las operaciones de blanqueo de activos mediante el sistema bancario nacional e internacional. Sus normas se concretan fundamentalmente en la identificación de los clientes, el cumplimiento de las leyes (tanto por los propios agentes de entidad bancaria como por sus clientes) y en la cooperación con las autoridades encargadas de velar por dicho cumplimiento<sup>289</sup>. Con posterioridad a la Declaración de 1988, se aprobó en 2003 un nuevo acuerdo, conocido como Basilea II, con nuevas recomendaciones dirigidas a las entidades financieras para reactivar políticas anti-blanqueo<sup>290</sup>.

## **1. Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias psicotrópicas, dada en Viena en 1988**

Como hemos visto, durante los últimos años de la década de los 80 del siglo pasado aumentó notablemente la preocupación a nivel internacional respecto del fenómeno del blanqueo. Dicha inquietud, potenciada fundamentalmente por los Estados Unidos, se tradujo en una serie de medidas para neutralizar los fenómenos del blanqueo y de la delincuencia organizada asociada, fundamentalmente, el narcotráfico<sup>291</sup>. El primer instrumento normativo en el que las partes se obligaron en términos jurídicamente vinculantes<sup>292</sup> a adoptar medidas para erradicar el fenómeno legitimador, la Convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas - conocida como Convención de Viena-, se firmó en la capital austriaca el 20 de

---

<sup>288</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 33; FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 191.

<sup>289</sup> Vid. ÁLVAREZ PASTOR, D./ EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 59; ZARAGOZA AGUADO, J. A., "La prevención del blanqueo de capitales. La comisión culposa y las profesiones jurídicas", *I Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, pág. 64.

<sup>290</sup> Vid. LOBO GONZÁLEZ, R./ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, M., *Código Penal. Parte especial. Tomo II. Vol. II*, op. cit., pág. 195.

<sup>291</sup> Vid. MATA LLÍN EVANGELIO, A., "El "autoblanqueo" de capitales", op. cit., pág. 5.

<sup>292</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 193.



diciembre de 1988, en el seno de las Naciones Unidas<sup>293</sup>. Fue ratificada por España en 1990, y entró en vigor en nuestro país el 11 de noviembre de ese mismo año<sup>294</sup>.

La Convención, cuyo propósito fundamental fue crear un marco jurídico integral en la lucha contra el narcotráfico<sup>295</sup>, constituye aún en nuestros días un verdadero referente para la erradicación del blanqueo y ha sido fuente de inspiración para diversos instrumentos internacionales ratificados con posterioridad en dicha materia<sup>296</sup>. Además de constituir el primer texto internacional que definió el pernicioso fenómeno e instituyó medidas para combatirlo<sup>297</sup>, marcó “el camino que posteriormente transita[ron] las demás iniciativas internacionales”<sup>298</sup>. A través de las diferentes disposiciones que integran su articulado, el Convenio obligaba a los Estados firmantes a tipificar el blanqueo de capitales como delito en sus respectivos ordenamientos jurídicos internos, si bien limitando aquél a bienes o fondos procedentes de delitos relativos al tráfico de drogas<sup>299</sup>, y contemplando cláusulas de reserva a los principios constitucionales y conceptos fundamentales de los ordenamientos jurídicos de los Estados firmantes<sup>300</sup>.

---

<sup>293</sup> Parece conveniente hacer alusión, siquiera brevemente, a otros dos Convenios internacionales aprobados en el marco de las Naciones Unidas que inciden en el tema que nos ocupa. Nos referiremos en primer lugar a la **Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional**, aprobada en diciembre de 2000. Dicho instrumento normativo, más conocido como Convención de **Palermo**, plantea la necesidad de ampliar la lucha contra el narcotráfico a la erradicación de las diferentes formas en que puede manifestarse la delincuencia organizada, a través de líneas de actuación semejantes a las propuestas por la Convención de Viena. En virtud del Convenio, se conmina a los Estados miembros a ampliar el campo de aplicación del delito de blanqueo -cuya definición es prácticamente idéntica a la contenida en el Convenio de Viena-, a través de la ampliación del catálogo de delitos antecedentes (más allá del tráfico de estupefacientes), a incluir en sus ordenamientos el “autoblanqueo” de manera expresa -en la medida en que éste quepa conforme a los principios fundamentales del Derecho interno de cada Estado parte- y a desarrollar regímenes de control interno y supervisión financiera suficientemente adecuados para prevenir operaciones de lavado. (Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., “El blanqueo de capitales (Contexto, razones de su penalización, evolución en nuestro entorno de las iniciativas supranacionales)”, op. cit., pág. 186; id., “Tipologías y lógica del lavado de dinero”, op. cit., págs. 31-33; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 112 y ss.). Asimismo, en el marco de Naciones Unidas, se aprobó en 2003 el **Convenio de Mérida sobre Corrupción**. Su artículo 23 contempla la obligación de los Estados firmantes de tipificar el delito de blanqueo, cuya configuración nuevamente se inspira en el texto vienés, instando a aquéllos -como ya lo hiciera la Convención de Palermo- que el marco de delitos previos sea lo más amplio posible. También inspirado en este aspecto por la Convención de Palermo, “el tratamiento del fenómeno del blanqueo es doble: por una lado [refiere] la necesidad de adoptar medidas preventivas y, por otro, el deber de sancionar penalmente el blanqueo de capitales.” (Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., “Tipologías y lógica del lavado de dinero”, op. cit., págs. 33-35; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 114 y 115).

<sup>294</sup> Vid. MATA LLÍN EVANGELIO, A., “El “autoblanqueo” de capitales”, op. cit., pág. 5; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 109.

<sup>295</sup> Vid. MATA LLÍN EVANGELIO, A., “El “autoblanqueo” de capitales”, loc. cit.

<sup>296</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 193.

<sup>297</sup> Vid. ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 63; ZARAGOZA AGUADO, J. A., “El blanqueo de bienes de origen criminal”, op. cit., pág. 370.

<sup>298</sup> Vid. ARIAS HOLGUÍN, D. P., *Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 69.

<sup>299</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 105 y ss.

<sup>300</sup> Vid. MATA LLÍN EVANGELIO, A., “El “autoblanqueo” de capitales”, op. cit., pág. 5.

Las conductas cuya erradicación reclama la Convención, además de otras directamente relacionadas con el tráfico de drogas, abarcan la conversión o transferencia de bienes procedentes de dicho tráfico y aquellos otros actos que dificulten o impidan su identificación o localización, así como la demanda, la adquisición y la utilización o uso de dichos bienes. Además del amplio catálogo de conductas legitimadoras descrito, se impone la criminalización de diferentes formas de participación en los correspondientes delitos [artículos 3. 1. b) I) y II) y 3. 1. c) I)-IV]<sup>301</sup>.

## **2. Convenio del Consejo de Europa sobre blanqueo, identificación, embargo y comiso de los productos del delito, de Estrasburgo de 8 de noviembre de 1990**

Si bien ya a finales de los años 70 del siglo pasado el Consejo de Europa había comenzado a analizar los perniciosos efectos que para los países europeos implicaba el blanqueo de capitales de origen delictivo<sup>302</sup>, fue en 1990 cuando tuvo lugar la efectiva firma de un Convenio propuesto por el Consejo<sup>303</sup> con el propósito de “elaborar una política penal común contra los delitos graves, mediante el uso de métodos efectivos, como la privación del producto del delito, sobre la base de un eficaz sistema de cooperación internacional”<sup>304</sup>. El Convenio, “técnicamente más perfecto que la

---

<sup>301</sup> El artículo 3, sobre delitos y sanciones, dispone literalmente en su número 1: “Cada una de las Partes adoptará las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos penales en su derecho interno, cuando se cometan intencionalmente: (...) **b) I)** La conversión o la transferencia de bienes a sabiendas de que tales bienes proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados de conformidad con el inciso *a)* del presente párrafo, o de un acto de participación en tal delito o delitos, con objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tal delito o delitos a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones; **II)** La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad reales de bienes, o de derechos relativos a tales bienes, a sabiendas de que proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados de conformidad con el inciso *a)* del presente párrafo o de un acto de participación en tal delito o delitos; **c)** A reserva de sus principios constitucionales y de los conceptos fundamentales de su ordenamiento jurídico: **I)** La adquisición, la posesión o la utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de recibirlos, de que tales bienes proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados de conformidad con el inciso *a)* del presente párrafo o de un acto de participación en tal delito o delitos (...).”

<sup>302</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I, *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 116 y 117. Los referidos análisis concluyeron con la aprobación del que fue el primer texto europeo en materia antiblanqueo, la Recomendación nº (80) 10 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, aprobada el 27 de junio de 1980, sobre medidas contra la transferencia y encubrimiento de capitales de origen criminal. El texto sugería a los Estados miembros la adopción de ciertas medidas sobre identificación de clientes aplicables al sector bancario, con el fin de evitar la circulación de capitales de origen ilícito, circunstancia que sin duda favorecía al cada vez más preocupante fenómeno de la criminalidad organizada internacional. (Vid. LOBO GONZÁLEZ, R./ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, M., *Código Penal. Parte especial. Tomo II. Vol. II*, op. cit., pág. 195).

<sup>303</sup> El proyecto de convención se elaboró entre 1987 y 1990, fue concluido por el Comité europeo para los problemas criminales en su 39ª sesión plenaria (junio de 1990), y remitido al Comité de Ministros, que aprobó el texto y lo abrió a firma el 8 de noviembre del mismo año, día en que once Estados europeos procedieron a su firma. España lo ratificó en 1998. (Vid. BLANCO CORDERO, I, *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 118).

<sup>304</sup> Vid. MATA LLÍN EVANGELIO, A., “El “autoblanqueo” de capitales”, op. cit., pág. 6.

Convención de Viena”<sup>305</sup>, instaba a los Estados signatarios a adoptar las medidas legislativas necesarias para tipificar como delito el blanqueo de bienes de procedencia delictiva -de acuerdo con las definiciones que recoge dicho texto- así como a adoptar las medidas de carácter procesal oportunas para la identificación, embargo y comiso de los productos del delito.

El Convenio describe las conductas blanqueadoras en su artículo 6 en términos similares a la Convención de Viena, pero no limita los delitos subyacentes a aquellos vinculados al tráfico de estupefacientes. Por un lado, se prevé la conversión o transmisión de propiedades y bienes procedentes de delito; por otro lado, la ocultación o enmascaramiento de determinadas características de dichos bienes; y, por último, la adquisición, posesión o uso de los mismos, precisándose en todas las conductas el conocimiento, en el momento de realizar la conducta sobre el bien, de su ilícito origen. Respecto a los últimos comportamientos descritos, el Convenio incorpora una cláusula de reserva, y faculta a las partes para excluir la punición de las conductas que tipifiquen cuando sean realizadas por la persona que cometió el delito principal (el denominado “autoblanqueo”)<sup>306</sup>. De forma similar a lo previsto en la Convención de Viena de 1988, el catálogo de conductas blanqueadoras a incriminar se completa con las correspondientes formas de participación en el blanqueo diferentes a la autoría<sup>307</sup>.

En 2005, el Consejo de Europa ha actualizado el Convenio de 1990 ampliando sus objetivos a la lucha contra la financiación del terrorismo<sup>308</sup>. El texto resultante, bajo la denominación de **Convenio de Varsovia**<sup>309</sup>, introduce, como apunta BLANCO CORDERO, determinadas novedades relativas a las medidas que los Estados han de adoptar en relación con la tipificación interna del delito de blanqueo: se suprime en primer lugar la exigencia de que el autor del delito de blanqueo haya actuado con ánimo de lucro o con el fin de favorecer otras actividades delictivas; se admite de nuevo la posibilidad de tipificar el blanqueo imprudente; la apreciación del delito de blanqueo no

<sup>305</sup> Vid. ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 69.

<sup>306</sup> Vid. MATA LLÍN EVANGELIO, A., “El “autoblanqueo” de capitales”, op. cit., págs. 5 y 6.

<sup>307</sup> Para más detalle sobre las conductas que cada Estado signatario se compromete a tipificar penalmente, en términos muy similares a la Convención de Naciones Unidas, y las diferencias que existen entre ambos textos, vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 119 y ss.

<sup>308</sup> En realidad, el Convenio de Varsovia, apunta MATA LLÍN, surgió como Protocolo del Convenio de Estrasburgo para adaptar su contenido a la nueva realidad del momento, si bien, dado que el texto resultante incorporó modificaciones sustanciales respecto de aquél, “se procedió a elaborar un instrumento autónomo”. (“Derecho penal internacional y de la Unión Europea en la Prevención y Represión del blanqueo de capitales”, *Auditoría, prevención y represión del blanqueo de capitales*, Ed. Liber Factory. Madrid, 2014, pág. 115).

<sup>309</sup> Ratificado por España en 2009, entró en vigor el 1 de julio de 2010.

queda condicionada a la existencia de una condena previa o simultánea por el delito previo, ni resulta necesario la determinación precisa de éste; por último, se prevé expresamente el principio de doble incriminación respecto al delito previo, autorizando a los Estados signatarios que en sus legislaciones dispongan como condición para la punición del blanqueo de capitales procedentes de un delito cometido en el extranjero que éste también pueda calificarse como delito conforme a su legislación<sup>310</sup>.

### **3. Las Cuarenta Recomendaciones del grupo de Acción Financiera**

El Grupo de Acción Financiera (GAFI), también conocido como *Financial Action Task Force* (FATF), ente intergubernamental<sup>311</sup> creado en julio de 1989 por iniciativa del Grupo de los siete países más desarrollados del mundo (G-7)<sup>312</sup>, constituye el principal organismo internacional para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo<sup>313</sup>. En su primer informe, de abril de 1990, se recogieron las Cuarenta Recomendaciones, documento que, sin constituir en puridad una norma vinculante, ha sido considerado como el texto de “más incidencia en las legislaciones de los países miembros”<sup>314</sup> en materia antiblanqueo. Aunque carezca de fuerza jurídica vinculante, su contenido es de hecho el que mayor eficacia práctica ha desplegado en materia de lucha internacional contra el blanqueo<sup>315</sup>, pues la no aplicación de las Cuarenta Recomendaciones por un Estado, implica su inclusión en las listas que periódicamente elabora de países y territorios no cooperantes, cuyos efectos van desde el especial examen de cualquier operación realizada con entidades del Estado no cooperante a la aplicación de contramedidas contra dicho Estado.

<sup>310</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 125.

<sup>311</sup> Vid. MORILLAS CUEVA, L., “Aspectos dogmáticos y político-criminales del delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 62.

<sup>312</sup> Ibidem; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 167 y 168.

<sup>313</sup> Vid. ROLDÁN, J. M., “La cooperación en materia de lucha contra el blanqueo a nivel internacional: el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)”, *Prevención y represión del blanqueo de capitales, Estudios de Derecho Judicial* n° 28, 2000. CGPJ. Madrid, 2000, págs. 206 y 212; ABEL SOUTO, M., *El blanqueo de dinero en la normativa internacional*, op. cit., pág. 117; ALIAGA MÉNDEZ, J. A./BLANCO CORDERO, I., “La política contra el blanqueo en España: cómo nos ven los expertos”, *Escritura pública* n° 91, 2015, pág. 24, disponible en el enlace <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4970887>. Si inicialmente el principal objetivo del GAFI fue la erradicación del lavado de capitales procedente fundamentalmente del tráfico de drogas, hoy día el organismo ha extendido su ámbito de actuación al lavado de activos procedentes de todos los hechos considerados delictivos por los países miembros. (Vid. ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 74).

<sup>314</sup> Ibidem, pág. 75; MORILLAS CUEVA, L., “Aspectos dogmáticos y político-criminales del delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 62.

<sup>315</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 173; MATALLÍN EVANGELIO, A., “Cooperación internacional en materia penal”, op. cit., pág. 121.

Las Cuarenta Recomendaciones (1990) han sido complementadas por sucesivas revisiones y notas interpretativas. En el año 2001, el GAFI añadió ocho Recomendaciones específicas relativas a la prevención de la financiación del terrorismo (ampliadas con posterioridad a nueve)<sup>316</sup>, y en febrero de 2012<sup>317</sup> se ha aprobado una nueva redacción de las Cuarenta Recomendaciones<sup>318</sup>. Dicha reformulación, afirma MORILLAS CUEVA, “contempla modernas amenazas emergentes, clarifica para su mayor fortalecimiento muchas de las obligaciones existentes y, al mismo tiempo, mantiene la estabilidad necesaria y el rigor de las Recomendaciones”. La revisión tiene por objeto que los Estados focalicen su atención en aquellas áreas de más alto riesgo para el lavado de activos y financiación del terrorismo y en aquellos otros aspectos en los que se podría mejorar la aplicación de las medidas<sup>319</sup>. El texto de 2012 proyecta la implementación del “enfoque basado en riesgo”, que permite a los países adoptar medidas más flexibles para aplicar medidas preventivas acordes con la naturaleza de los riesgos y así focalizar sus recursos y esfuerzos de una manera más efectiva<sup>320</sup>. Las medidas establecidas en las normas GAFI deben ser implementadas por todos los miembros del organismo y de los FSRB (grupos regionales), y su ejecución por cada uno de los Estados es periódicamente examinada de forma rigurosa a través tanto de los procesos de Evaluación Mutua como de los procesos de evaluación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, sobre la base de la metodología de valoración común del GAFI<sup>321</sup>.

Respecto al contenido de las Recomendaciones, éstas establecen, de un lado, el reconocimiento de la necesidad de tipificar el delito de blanqueo de capitales<sup>322</sup> y, de

---

<sup>316</sup> Vid. ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 75; LOBO GONZÁLEZ, R./ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, M., *Código Penal. Parte especial. Tomo II. Vol. II*, op. cit., pág. 196.

<sup>317</sup> Vid. en detalle, sobre el proceso de revisión de las 40 recomendaciones, BLANCO CORDERO, I, *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 171 y ss.

<sup>318</sup> Cuyo texto íntegro puede consultarse en el siguiente enlace: [www.aranzadi.es/blanqueodecapitales/pdf/4.40recomendacionesgafi.pdf](http://www.aranzadi.es/blanqueodecapitales/pdf/4.40recomendacionesgafi.pdf).

<sup>319</sup> Vid. MORILLAS CUEVA, L., “Aspectos dogmáticos y político-criminales del delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 63.

<sup>320</sup> Vid., en este sentido, la 1ª recomendación, FATF, *Las 40 recomendaciones revisadas el 16 de febrero de 2012*, op. cit., pág. 9.

<sup>321</sup> Vid. FATF, *Las nuevas 40 recomendaciones*, op. cit., pág. 7.

<sup>322</sup> La 3ª Recomendación (en su versión de 2012) dispone que los países signatarios deben tipificar el lavado de activos sobre la base de la Convención de Viena y la Convención de Palermo. Los países deben aplicar el delito de lavado de activos a todos los delitos graves, con la finalidad de incluir la mayor gama posible de delitos determinantes. Por su parte, **la nota interpretativa de la 3ª Recomendación** prevé literalmente que “1. Los países deben tipificar como delito el blanqueo de dinero sobre la base de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, de 1988 (la Convención de Viena) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de 2000 (Convención de Palermo). 2. Los países deben aplicar el delito de blanqueo de capitales a todos los delitos graves, con el fin

otro, articulan determinadas medidas de prevención<sup>323</sup>. En relación con estas últimas, se prevén, por un lado, medidas que han de adoptar tanto las instituciones financieras y otras organizaciones para evitar el blanqueo y la financiación del terrorismo -diligencia debida y registros actualizados respecto a la identidad de los clientes y comunicación de operaciones sospechosas, sobre la base de un enfoque basado en el riesgo- como las administraciones de los Estados cooperantes, para su eficaz implementación. Por otro lado, se contemplan determinadas exigencias de cooperación internacional: aplicación de Tratados internacionales, asistencia legal mutua, cooperación en materia de extradición e intercambio de información entre los Estados cooperantes. Por último, como ya se ha dicho, desde el año 2001 han quedado incorporadas Recomendaciones específicas en materia de prevención de la financiación del terrorismo<sup>324</sup>, fenómeno que, en gran medida, comparte medios y métodos de acción con el blanqueo de capitales.

Además del GAFI, se han creado grupos regionales<sup>325</sup> de estructura similar a aquél, con el que comparten objetivos. En el ámbito regional se integran el Grupo

---

de incluir la más amplia gama de delitos. Delitos previos se pueden definir por referencia a todos los delitos o a un umbral vinculado con la categoría de delitos graves o penados con la prisión aplicable al delito previo (criterio del umbral) o bien a una lista de delitos determinados o una combinación de estos enfoques. 3. Cuando los países apliquen el criterio del umbral, los delitos deben, como mínimo, incluir todos los delitos que caen dentro de la categoría de delitos graves en virtud de su legislación nacional o deben incluir delitos que se castigan con una pena máxima de prisión de más de un año o , para aquellos países que tienen un umbral mínimo para los delitos en su ordenamiento jurídico, los delitos previos deben comprender a todos los delitos que se castigan con una pena mínima de más de seis meses de prisión. 4. Sea cual sea el enfoque que se adopte, cada país debería, como mínimo, incluir una serie de delitos dentro de cada una de las categorías designadas. El delito de blanqueo de capitales, debe hacerse extensivo a cualquier tipo de bienes, independientemente de su valor, que directa o indirectamente represente el producto del delito. Al probar que el bien es producto del delito, no debería ser necesario que una persona sea condenada por el delito. 5. Los delitos previos del blanqueo de capitales deben extenderse a las conductas que tuvieron lugar en otro país, que constituya un delito en ese país y que habría constituido un delito subyacente de haberse cometido en el país. Los países pueden establecer que el único requisito es que la conducta hubiera constituido un delito, de haber ocurrido en el país. 6. Los países pueden establecer que el delito de blanqueo de capitales no se aplica a las personas que hayan cometido el delito, cuando así lo requieran los principios fundamentales de su derecho interno. 7. Los países deben asegurar que: (a) La intención y el conocimiento requeridos para probar el delito de blanqueo de capitales puede inferirse de circunstancias fácticas objetivas; (b) Se aplican sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias a las personas físicas condenadas por blanqueo de capitales; (c) La responsabilidad penal y las sanciones y, en caso de que no sea posible (debido a los principios fundamentales del derecho interno), la responsabilidad civil o administrativa y las sanciones, deben aplicarse a las personas jurídicas. Esto no debería impedir que paralelamente se sigan procedimientos penales, civiles o administrativos en lo que respecta a las personas jurídicas en los países en que sea posible más de una forma de responsabilidad. Estas medidas deben entenderse sin perjuicio de la responsabilidad penal de las personas naturales. Todas las sanciones deben ser eficaces, proporcionadas y disuasorias; (d) Debe existir delitos conexos al delito de blanqueo de capitales, incluida la participación en, asociación o conspiración para la comisión, tentativa, complicidad e incitación, la facilitación o el asesoramiento para la comisión, a menos que esto no está permitido por los principios fundamentales de la ley nacional. (Vid. FATF, *Las 40 recomendaciones revisadas el 16 de febrero de 2012*, op. cit., págs. 34 y 35).

<sup>323</sup> Contenidas en las 40 recomendaciones en su apartado D, Recomendaciones 9 a 23.

<sup>324</sup> En el texto de 2012, vid. recomendaciones 5 a 8 y sus notas interpretativas. (FATF, *Las 40 recomendaciones revisadas el 16 de febrero de 2012*, op. cit., págs. 11, 12, 37 y ss.).

<sup>325</sup> Vid. OMAR PLÉE, R., "El lavado de dinero: un fenómeno transnacional de política criminal contemporánea", op. cit., pág. 441.

Asia/Pacífico (Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG), el Grupo de Acción Financiera del Caribe (Caribbean Financial Action Task Force, CFATF), el Grupo Antiblanqueo de África del Sur y del Este (Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group, ESAAMLG) y el Grupo de Acción Financiera de América del Sur (Financial Action Task Force on Money Laundering in South America, GAFISUD) que, si bien han asumido las Cuarenta Recomendaciones -complementadas en su caso con disposiciones propias derivadas de las particularidades de las jurisdicciones sobre las que actúan-, no son para el GAFI acreedoras de la suficiente confianza como para “aceptar como válidas para sus propios propósitos las evaluaciones por ellos practicadas”<sup>326</sup>.

El GAFI publica anualmente un Informe describiendo las nuevas formas bajo las que se manifiesta el blanqueo de capitales. A través de dicho informe se aborda una constante y renovada evaluación del fenómeno del blanqueo<sup>327</sup>, que en la práctica resulta de gran utilidad para verificar si “las medidas normativas adoptadas son suficientes para hacer frente a una realidad cambiante”<sup>328</sup>. Además, desde el año 2000, el GAFI elabora determinadas listas de jurisdicciones no cooperantes en materia de blanqueo (NCCTs). La inclusión de una jurisdicción en dichas listas obedece a la falta de implementación en su territorio de una normativa suficientemente eficaz para combatir el blanqueo o a la no aplicación diligente de dicha normativa. Como se ha advertido, la inclusión en estas listas supone en la práctica para la zona considerada no cooperante que se adopten contramedidas de orden financiero en el contexto internacional<sup>329</sup>.

A fecha de 26 de junio de 2015, **en la lista roja** (territorios respecto a los que GAFI llama a sus miembros y otras jurisdicciones a aplicar contramedidas para proteger sus sistemas financieros de los riesgos de lavado de dinero y de financiación del

---

<sup>326</sup> Ibidem.

<sup>327</sup> El Grupo de Acción Financiera continúa supervisando y mejorando los estándares y procedimientos de evaluación todas las cuestiones relativas a la implementación de las 40 Recomendaciones y de las 9 Recomendaciones Especiales, que son utilizadas no solo por el GAFI, sino también por los Grupos Regionales Estilo GAFI (FSRB), el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La supervisión de la eficacia de las Recomendaciones aspira a que en los informes no sólo quede reflejado el grado de cumplimiento formal de dichas Recomendaciones, sino también la verificación de la verdadera eficacia de las medidas implantadas en cada país. Se intenta, asimismo, asegurar la coherencia entre los resultados y las calificaciones reflejadas en los informes de evaluación mutua del GAFI y de los organismos e instituciones que las llevan a cabo. (Memoria Anual de 2008 del GAFI, op. cit., pág. 42).

<sup>328</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., “El blanqueo de capitales (Contexto, razones de su penalización, evolución en nuestro entorno de las iniciativas supranacionales)”, op. cit., pág. 182.

<sup>329</sup> Ibidem.

terrorismo) se incluyen Irán y Corea del Norte. **En la lista negra**, que refleja aquellos países con deficiencias en ALD/CFT que no han hecho progresos suficientes para solucionar las deficiencias previamente señaladas o que no se han comprometido con el GAFI a desarrollar un plan para solucionarlas, se incluyen Argelia y Myanmar. Por su parte, **la lista gris oscurecida** se refiere a países respecto a los cuales el GAFI no considera que hayan hecho un progreso suficiente en sus planes de acción acordados con la propia organización. En 2015, Iraq ha sido avisado del riesgo de pasar de la lista gris a la negra. Por su parte, en **la lista gris** se incluyen las jurisdicciones sometidas a proceso de revisión continuo. En junio de 2015 integran esta lista Afganistán, Angola, Bosnia-Herzegovina, Ecuador, Guyana, Lao PDR, Panamá, Nueva Guinea Papúa, Sudán, Siria, Uganda y Yemen<sup>330</sup>.

Respecto al grado de cumplimiento por España de las Recomendaciones, en el último informe de octubre de 2014 en el que nuestro país ha sido sometido a valoración junto a Noruega, se afirma que tanto en el marco normativo como en los resultados de la política estatal antiblanqueo, España obtiene una calificación más que aceptable -no se incumple ninguno de los criterios derivados de las 40 Recomendaciones-, si bien podrían apreciarse mejoras en determinados aspectos<sup>331</sup>. Como ha contrastado ROSADO DOMINGUEZ, los resultados de nuestro país “están por encima de la media del conjunto de países y presenta herramientas consolidadas de lucha contra el blanqueo que destacan en el contexto internacional. Así, un tipo penal expansivo que también incluye el autoblanqueo e integra como delito precedente al delito fiscal; una jurisprudencia asentada que permite condenar de manera fluida con base en la prueba indiciaria; fuentes de prevención e investigación inestimables de la mano del fichero de titularidades financieras y del órgano de prevención del Consejo General del Notariado; y un expertise acumulado desde la Ley de 1993 que convirtió a España en uno de los países pioneros en establecer un régimen preventivo global y una unidad de inteligencia

---

<sup>330</sup> Vid. FATF, *Public Statement*, 26 de junio de 2015, disponible en el siguiente enlace: <http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-june-2015.html>; M° DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD, *Lista Actualizada GAFI de las jurisdicciones no cooperadoras en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo*, disponible en el siguiente enlace <http://www.tesoro.es/sites/default/files/JURISDICCIONES%20NO%20COOPERADORAS%20%20Feb%202015%20.pdf>.

<sup>331</sup> Vid. ALIAGA MÉNDEZ, J. A./ BLANCO CORDERO, I., “La política contra el blanqueo en España: cómo nos ven los expertos”, op. cit., págs. 24 y 25.



financiera”<sup>332</sup>. En el informe, pese a constatar la presencia en nuestro país de un régimen penal y un sistema preventivo altamente meritorios, los resultados prácticos son considerados mejorables, tanto respecto al sistema procesal para la persecución del delito de blanqueo (lentitud, falta de especialización de los jueces), como, en aspecto preventivo, en cuanto a la insuficiente aplicación de la normativa por parte de los sujetos obligados, salvo en el caso de los notarios<sup>333</sup>.

#### **4. Marco jurídico de la Unión Europea**

La liberalización de los movimientos de capitales impuesta por la entonces denominada Comunidad Europea (Directiva 91/308/CEE) favoreció la proliferación de actividades de blanqueo dentro del territorio comunitario<sup>334</sup>. En este contexto, también en el ámbito comunitario se consideró necesario impulsar la adopción de medidas coordinadas para erradicar el blanqueo de capitales<sup>335</sup>, dictándose en 1991 la primera de una serie de directivas cuyo objeto fue combatir el blanqueo de capitales desde un enfoque preventivo<sup>336</sup>: la **Directiva 91/308 CEE**, de 10 de junio, **sobre prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales**, cuyo texto sería posteriormente modificado por la **Directiva 2001/97/CE**<sup>337</sup>, de 4 de diciembre.

---

<sup>332</sup> Vid. ROSADO DOMINGUEZ, F., *España y el informe de evaluación GAFI: riesgos y oportunidades*, en el enlace <http://www.controlcapital.net/noticia/2969/actualidad/espana-y-el-informe-de-evaluacion-gafi-riesgos-y-oportunidades.html>.

<sup>333</sup> Vid. ALIAGA MÉNDEZ, J. A./BLANCO CORDERO, I., “La política contra el blanqueo en España: cómo nos ven los expertos”, loc. cit.

<sup>334</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., *El blanqueo de dinero en la normativa internacional*, op. cit., pág. 276; GARZÓN REAL, B., “Cooperación jurídica internacional en el ámbito del blanqueo de dinero y espacio de seguridad, libertad y justicia en la Unión Europea”, op. cit., pág. 430; BLANCO CORDERO, I., “La lucha contra el blanqueo de capitales procedentes de las actividades delictivas en el marco de la U.E.”, op. cit., pág. 9; FERRÉ OLIVÉ, J. C., “Corrupción, crimen organizado y blanqueo de capitales en el mercado financiero”, op. cit., págs. 13 y 14.

<sup>335</sup> Vid. ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 88; MATALLÍN EVANGELIO, A., “Políticas de la Unión en la prevención y represión del blanqueo de capitales”, *Auditoría, prevención y represión del blanqueo de capitales*, Ed. Liber Factory. Madrid, 2014, pág. 135.

<sup>336</sup> Téngase en cuenta que la Unión Europea no tiene atribuidas competencias legislativas en materia de Derecho penal (vid. MATA BARRANCO, Norberto de la, “Criminalidad Organizada en la Unión Europea: criminalidad económica y criminalidad sexual”, *Eguzkilore. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología*, nº 15, San Sebastián, 2001, pág. 39), si bien dispone de instrumentos normativos de gran utilidad. Así, el Tratado de la Unión Europea, en su art. 31 e) impone la “adopción progresiva de medidas que establezcan normas mínimas relativas a los elementos constitutivos de los delitos y a las penas en los ámbitos de la delincuencia organizada, el terrorismo y el tráfico ilícito de drogas”. También tiene en este sentido su importancia el *Corpus Iuris*, al que más adelante haremos referencia.

<sup>337</sup> Caracterizada fundamentalmente por ampliar el círculo de los sujetos obligados. Si la primera directiva iba destinada fundamentalmente a las entidades financieras, la de 2001 amplió su ámbito de aplicación a otros profesionales y entidades no financieras pero cuya actividad se presenta también como vulnerable a ser

En cuanto al contenido de la Primera Directiva<sup>338</sup>, ésta obligaba a los Estados miembros a adoptar disposiciones normativas uniformes y eficaces en materia de prevención de blanqueo de capitales en un marco jurídico común, que comprendía la previsión de determinadas obligaciones para ciertos sujetos -fundamentalmente entidades financieras, pero también otras-. El elenco de deberes previstos en la Directiva (que los Estados miembros debían imponer a los sujetos obligados), se concretaba en la obligación de identificar de los clientes, la conservación de ciertos documentos, el especial examen de determinadas transacciones y la abstención de realizar concretas operaciones *per se* sospechosas de estar vinculadas al blanqueo. Asimismo, los sujetos vinculados debían cooperar con las autoridades competentes en materia de lucha contra el blanqueo, establecer determinados controles internos y adoptar medidas específicas respecto de las operaciones de mayor riesgo, tales como las realizadas a distancia<sup>339</sup>. Estas obligaciones habrían de ser matizadas y adaptadas para los diferentes sujetos obligados.

La **Directiva 2005/60/CE contra el blanqueo y la financiación del terrorismo**, de 26 de octubre, conocida como Tercera Directiva, se dictó como un texto autónomo, completo e independiente, que derogaba la Directiva 91/308 CEE<sup>340</sup>, aunque manteniendo y revitalizando “sus estrategias fundamentales”<sup>341</sup>. La Tercera Directiva, inspirada en la revisión de las Recomendaciones de GAFI de 2003<sup>342</sup>, impuso a los Estados miembros el mandato de incorporar a sus ordenamientos penales el delito de blanqueo así como el compromiso de adoptar medidas legislativas que previesen las obligaciones y sistemas de control oportunas en materia de prevención tanto del

---

utilizada en los procesos de blanqueo. (Vid. IGLESIAS RÍO, M. A./MEDINA ARNAIZ, T., *Herramientas preventivas en la lucha contra la corrupción en el ámbito de la Unión Europea*, pág. 934, disponible en el enlace [www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/.../pr23.pdf](http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/.../pr23.pdf)).

<sup>338</sup> Inspirado en la Recomendación nº (80) 10 del Consejo de Europa, la Declaración de Basilea de 1988, las 40 Recomendaciones del GAFI, la Convención de Viena de 1988 y el Convenio de Estrasburgo de 1990, instrumentos internacionales a los que ya nos hemos referido. (Vid. LOBO GONZÁLEZ, R./ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, M., *Código Penal. Parte especial. Tomo II. Vol. II*, op. cit., pág. 197).

<sup>339</sup> Para un análisis detallado de las referidas obligaciones, vid. ABEL SOUTO, M., *El blanqueo de dinero en la normativa internacional*, op. cit., págs. 258 y ss.; ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 99 y ss.; LOBO GONZÁLEZ, R./ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, M., *Código Penal. Parte especial. Tomo II. Vol. II*, op. cit., págs. 197 y 198.

<sup>340</sup> Vid. ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 120.

<sup>341</sup> Vid. FERRÉ OLIVÉ, J. C., “Política criminal europea en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo”, *I Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, pág. 253.

<sup>342</sup> Vid. ARIAS HOLGUÍN, D. P., *Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 86; BLASCO DÍAZ, J. L., “Diligencia debida”, *Régimen Jurídico de la Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales*. Ed. Tirant lo Blanch. Madrid, 2015, pág. 42.

blanqueo como de la financiación del terrorismo<sup>343</sup>. La Directiva era de obligado cumplimiento tanto para el sector financiero como para abogados, notarios, contables, corredores de la propiedad inmobiliaria, casinos, consorcios y otras empresas proveedoras de servicios susceptibles de ser empleadas para el lavado de activos, incluyéndose incluso obligaciones para los proveedores de bienes, cuando los pagos efectuados en metálico superasen los 15.000 euros.

Los deberes a los que la Directiva sometía a los sujetos vinculados se materializaron básicamente en las obligaciones tanto de identificar y comprobar la identidad de su cliente, como de efectuar un seguimiento de su relación económica con el mismo; el deber de notificar toda sospecha de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo a las autoridades públicas, habitualmente a la unidad nacional de información financiera; y el deber de adoptar medidas de apoyo, tales como facilitar una formación adecuada del personal y establecer políticas y procedimientos preventivos internos apropiados.

La Directiva 2005/60/CEE, junto con la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, de 1 de agosto de 2006, que dispuso la definición de personas del medio político y los criterios técnicos aplicables en los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente así como la exención por razones de actividad financiera ocasional o muy limitada, deberían haber sido transpuestas a nuestro Ordenamiento interno antes del 15 de diciembre de 2007. Sin embargo, la transposición no tuvo lugar hasta la aprobación, el 28 de abril de 2010, de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Muy recientemente, el 20 de mayo de 2015, se ha aprobado **la Cuarta Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo**. Por virtud de la nueva Directiva, se modifica el Reglamento (UE) 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Tercera Directiva) y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión. Sobre la base de un estudio de impacto sobre la Tercera Directiva<sup>344</sup> y las

---

<sup>343</sup> Vid. ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 109.

<sup>344</sup> De acuerdo con BLANCO CORDERO, los resultados del estudio no sugieren un cambio importante en el régimen comunitario de prevención del blanqueo, pero se destacan varias áreas en las que se sugieren mejoras

nuevas Recomendaciones del GAFI<sup>345</sup>, la Comisión elaboró un informe sobre la aplicación de la Directiva 2005/60/CE, de 11 de abril de 2002, en cuyas conclusiones consideró preciso revisar la Directiva para actualizarla de acuerdo con las recomendaciones revisadas por el GAFI en febrero de 2012<sup>346</sup>. Con fecha de 5 de febrero de 2013, la Comisión emitió la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo. Finalmente, el 20 de mayo del año presente se ha aprobado formalmente la Cuarta Directiva. En dicho texto, como decimos, se tienen particularmente en cuenta las últimas recomendaciones del GAFI, en especial, el llamado “enfoque basado en el riesgo” y la aplicación del principio de proporcionalidad (adopción de medidas ponderadas a los riesgos). La adopción del nuevo modelo se justifica en el hecho de que el riesgo de blanqueo no es el mismo en todos los casos<sup>347</sup>, y por ello se pretende que los sistemas de evaluación puedan conformarse con el grado necesario de flexibilidad para adaptarse a las distintas situaciones y agentes<sup>348</sup>.

A efectos de la Cuarta Directiva, se consideran constitutivas de blanqueo de capitales las siguientes conductas (artículo 1.3):

- a) la conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad o un hecho delictivo o de la participación en ese tipo de actividad, con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de

---

prácticas: a) aportar criterios más claros para aplicar el enfoque basado en el riesgo; b) garantizar un mejor acceso a la información sobre los beneficiarios finales o personas políticamente expuestas; y c) proporcionar un enfoque más ajustado para los pequeños negocios y los profesionales. (*El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 158 y 159. Vid., asimismo, *Control Capital*, Portal de noticias compliance y prevención del blanqueo de capitales, <http://www.controlcapital.net/noticia/985/EUROPASIA/nueva-directiva-anti-blanqueo-uni%C3%B3n-europea-2012.html>).

<sup>345</sup> Vid. MARTÍNEZ-ARRIETA MÁRQUEZ DE PRADO, I., *El autoblanqueo. El delito fiscal como antecedente del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 18.

<sup>346</sup> Vid. FISICARO, E., “La propuesta de la cuarta directiva de la UE y las recomendaciones GAFI”, *IV Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, pág. 63; GUINARTE CABADA, G., “La política criminal de la Unión Europea en materia de blanqueo de capitales. Especial referencia a las nuevas propuestas de directivas de 2013”, op. cit., pág. 264. El texto íntegro del Informe de la Comisión de 11 de abril de 2012 puede consultarse en el siguiente enlace: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/company/docs/financial-crime/20120411\\_report\\_es.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/financial-crime/20120411_report_es.pdf).

<sup>347</sup> Vid. MARTÍNEZ JIMÉNEZ, J. R., “La gestión del riesgo en la propuesta de la IV directiva”, *IV Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, pág. 293; CID GÓMEZ, J. M. del, “Detección del blanqueo y sus efectos socioeconómicos”, *III Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, págs. 50 y ss.

<sup>348</sup> Vid. Considerando núm. 22 y ss. de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo.

ayudar a personas que estén implicadas en dicha actividad a eludir las consecuencias jurídicas de su acto;

b) la ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad reales de bienes o de derechos sobre esos bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en ese tipo de actividad;

c) la adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de la recepción de los mismos, de que proceden de una actividad delictiva o de la participación en ese tipo de actividad;

d) la participación en alguna de las acciones a que se refieren las letras a), b) y c), la asociación para cometer ese tipo de acciones, las tentativas de perpetrarlas y el hecho de ayudar, instigar o aconsejar a alguien para realizarlas o de facilitar su ejecución.

De conformidad con el número 4 del artículo 1, las conductas referidas serán consideradas actos de blanqueo aun cuando las actividades que hayan generado los bienes que vayan a blanquearse se hayan desarrollado en el territorio de otro Estado miembro o en el de un tercer país.

El nuevo criterio del enfoque basado en el riesgo ha supuesto una regulación menos detallada en cuanto a las medidas concretas que deben adoptarse<sup>349</sup>. También ha contribuido a la reducción del número de sujetos obligados, si bien se incorporan como tales los proveedores de servicios de juegos de azar (que de conformidad con el artículo 11 d) habrán de extremar la diligencia debida en transacciones con un valor económico igual o superior a 2.000€), y se mantienen las obligaciones de quienes comercien con bienes cuando los pagos se efectúen o se reciban en efectivo y por importe igual o superior a 10.000€, ya se realicen en una transacción o en varias transacciones entre las que parezca existir algún tipo de relación (artículo 11 c). Asimismo han de ser destacadas como trascendentes novedades las específicas medidas relativas a la información sobre la titularidad real de las empresas. Además de la obligación que se

---

<sup>349</sup> Sin entrar en detalle por razones de espacio, en los artículos 10 y ss. de la Directiva se prevén las diferentes medidas que los Estados miembros deben implantar en su normativa interna de prevención. Aquéllas se estructuran en medidas de diligencia debida con respecto al cliente, medidas simplificadas, y medidas reforzadas, que habrán de aplicarse especialmente respecto a personas físicas o entidades jurídicas radicadas en jurisdicciones identificadas por la Comisión como terceros países de alto riesgo, respecto a las “personas de medio político” o sus familiares y allegados, y también en otros casos de elevado riesgo identificados como tales por los Estados miembros o por las entidades obligadas.

impone a las sociedades y otras personas jurídicas de conocer y facilitar a las autoridades competentes la información sobre la titularidad real de las mismas, los Estados han de disponer un registro central con dicha información actualizada, accesible tanto a las autoridades como a quienes ostenten un interés legítimo en su conocimiento (artículo 30 de la Directiva)<sup>350</sup>.

La implantación del enfoque basado en el riesgo impone a los Estados miembros, a las autoridades de supervisión y a los sujetos obligados el deber de evaluar los riesgos y a adoptar medidas de atenuación adecuadas y proporcionadas a aquéllos. De conformidad con el artículo 7 de la Directiva, cada Estado miembro habrá de adoptar las medidas adecuadas para detectar, evaluar, comprender y atenuar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que le afecten, así como cualquier problema que se plantee en relación con la protección de datos, debiendo asimismo mantener actualizada la evaluación de riesgos efectuada. También los Estados miembros, de acuerdo con el artículo 8, habrán de velar por que las entidades obligadas adopten medidas adecuadas -que habrán de ser proporcionadas con su naturaleza y tamaño- para detectar y evaluar sus riesgos, teniendo en cuenta factores relativos a clientes, países o zonas geográficas, productos, servicios, operaciones o canales de distribución<sup>351</sup>. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Directiva, la Comisión podrá determinar los “terceros países de alto riesgo”, aquéllos que presenten deficiencias estratégicas en sus sistemas de lucha contra el blanqueo que puedan suponer una amenaza importante para el sistema financiero de la Unión respecto a los que habrá de adoptarse medidas reforzadas.

Además de las sucesivas Directivas dictadas por la Unión Europea en materia de prevención de blanqueo<sup>352</sup>, en el ámbito comunitario se ha desarrollado durante la última década una ampliación progresiva de atribuciones en materias relacionadas con

---

<sup>350</sup> Vid., asimismo, el artículo 31, que regula la información sobre la titularidad real a que han de ser sometidos los fideicomisos.

<sup>351</sup> Vid. GUINARTE CABADA, G., “La política criminal de la Unión Europea en materia de blanqueo de capitales. Especial referencia a las nuevas propuestas de directivas de 2013”, op. cit., pág. 264; con detalle, FISICARO, E., “La propuesta de la cuarta directiva de la UE y las recomendaciones GAFI”, op. cit., págs. 64 y ss.

<sup>352</sup> Téngase en cuenta que no sólo las Directivas mencionadas han regulado sucesivamente el régimen preventivo comunitario: también en otras iniciativas normativas surgidas en el marco de la Unión Europea se incide en la prevención del blanqueo de capitales. (Vid., con detalle, ARIAS HOLGÍN, D. P., *Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 80, nota a pie de página nº 104; ZARAGOZA AGUADO, J. A., “La prevención del blanqueo de capitales. La comisión culpable y las profesiones jurídicas”, op. cit., págs. 64 y 65).

el ámbito penal, que también tienen cierta incidencia en la lucha contra el fenómeno legitimador<sup>353</sup>.

Hemos de referirnos, en primer lugar, al ***Corpus Iuris de disposiciones penales para la protección de los intereses financieros de la Unión Europea***<sup>354</sup>. Se trata de un informe realizado por juristas expertos en la materia<sup>355</sup> a iniciativa de la Comisión Europea, con objeto de promover un debate público sobre el papel del Derecho penal y del Derecho procesal penal en la integración europea y de alcanzar determinados objetivos con el fin último de “armonizar el Derecho penal de los Estados miembros en esta materia”<sup>356</sup>. Más que un proyecto de modelo de legislación penal, el texto pretende asentar las bases para lograr la armonización en materia penal entre los Estados miembros, de cara a alcanzar un espacio penal europeo común<sup>357</sup>. En el art. 3.1 del *Corpus Iuris* (antiguo art. 7) se recoge como uno de los “delitos comunes” el blanqueo de capitales, en los siguientes términos:

Constituye infracción penal el blanqueo del producto o de los beneficios obtenidos mediante las conductas previstas como infracciones en el *Corpus Iuris*. (Artículos 1 y 2 así como 4 a 8).

Se entiende por blanqueo:

a) la conversión o la transferencia de bienes procedentes de alguna de las infracciones mencionadas en el párrafo anterior, o la participación en una de ellas con la finalidad de disimular o de ocultar el origen ilícito de dichos bienes, o de ayudar a cualquier persona implicada en dicha actividad para que ésta eluda las consecuencias jurídicas de tales actos;

---

<sup>353</sup> Vid. MILITELLO, V., “Hacia un Derecho penal europeo contra el crimen organizado”, *IV Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, pág. 228; GUINARTE CABADA, G., “La política criminal de la Unión Europea en materia de blanqueo de capitales. Especial referencia a las nuevas propuestas de directivas de 2013”, op. cit., pág. 246.

<sup>354</sup> El texto íntegro y revisado de este instrumento normativo se encuentra publicado en el enlace [http://ec.europa.eu/anti\\_fraud/green\\_paper/corpus/es-revise.pdf](http://ec.europa.eu/anti_fraud/green_paper/corpus/es-revise.pdf).

<sup>355</sup> Conocido como informe Bacigalupo-Graso-Tiedemann. (Vid. MARTINOT, S., “Tráfico de drogas y blanqueo de dinero ¿una política criminal europea?”, AP n°42, 1997-2, pág. 947).

<sup>356</sup> Vid. MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “La dimensión internacional del blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 211.

<sup>357</sup> Vid. DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, J., “Recepción de las propuestas del GAFI de las Directivas europeas sobre el blanqueo de capitales en el derecho español”, op. cit., págs. 27 y 28.

b) la simulación o la ocultación de la naturaleza, origen, situación, colocación, disposición, movimiento o propiedad real de los bienes o derechos procedentes de una de las infracciones mencionadas en el párrafo anterior, o la participación en tales actividades.

*Disposición aplicativa:*

La infracción penal establecida en el art. 3 no es aplicable al autor, al inductor o al cómplice, cuando los beneficios o el producto de la infracción son blanqueados o receptados.

Por su parte, **el Tratado de Lisboa**, promulgado tras el fracaso del proyecto de Constitución Europea, implementa una explícita base jurídica para la armonización del Derecho interno de los Estados miembros en cuestiones de interés comunitario, incluyéndose la tutela penal<sup>358</sup>. De acuerdo con el Tratado, las instituciones europeas podrán dictar normas de armonización destinadas a los Estados miembros que establezcan la definición de determinadas infracciones penales -entre ellas el delito de blanqueo- y de las sanciones en ámbitos delictivos de especial gravedad y con dimensión transfronteriza<sup>359</sup>.

Uno de los objetivos prioritarios del Tratado es la creación y el establecimiento progresivo de un auténtico espacio de libertad, seguridad y justicia común<sup>360</sup>, y de conformidad con dicho objetivo, se pretende alcanzar “un nivel elevado de seguridad mediante medidas de prevención de la delincuencia, el racismo y la xenofobia y de lucha en contra de ellos, medidas de coordinación y cooperación entre autoridades policiales y judiciales y otras autoridades competentes, así como mediante el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia penal y, si es necesario, mediante la aproximación de las legislaciones penales (art. 67.3 TFUE).”<sup>361</sup>

---

<sup>358</sup> Vid. FOFFANI, L., “La evolución del Derecho penal europeo”, *IV Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, pág. 333.

<sup>359</sup> Vid. FOFFANI, L., “Bienes jurídicos de relevancia comunitaria y protección penal: el caso de las falsedades en las cuentas de sociedades mercantiles”, *Derecho penal del estado social y democrático de derecho. Libro homenaje a Santiago Mir Puig*. Diego Manuel Luzón Peña (dir.). Ed. La Ley. Madrid, 2010, pág. 795.

<sup>360</sup> Vid. ORTIZ VIDAL, M. D., *Espacio Judicial Europeo y Tratado De Lisboa: Hacia un nuevo Derecho Internacional Privado*, pág. 384, publicado en siguiente enlace: <http://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/viewFile/109/107>.

<sup>361</sup> Ibidem, págs. 385 y 386.



Por virtud del artículo 2 del Tratado de Lisboa, el que pasa a denominarse «Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea» incorpora el actual artículo 83, en el que se prevé la posibilidad de que tanto el Parlamento Europeo como el Consejo establezcan, a través de las correspondientes directivas, “normas mínimas relativas a la definición de las infracciones penales y de las sanciones en ámbitos delictivos que sean de especial gravedad y tengan una dimensión transfronteriza derivada del carácter o de las repercusiones de dichas infracciones o de una necesidad particular de combatirlas según criterios comunes. Estos ámbitos delictivos son los siguientes: el terrorismo, la trata de seres humanos y la explotación sexual de mujeres y niños, el tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilícito de armas, el blanqueo de capitales, la corrupción, la falsificación de medios de pago, la delincuencia informática y la delincuencia organizada.” Asimismo, de acuerdo con el artículo 84 TFUE, el Parlamento Europeo y el Consejo podrán establecer, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, medidas que impulsen y apoyen la actuación de los Estados miembros en el ámbito de la prevención de la delincuencia, con exclusión de toda armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros.

En el ejercicio de las nuevas competencias atribuidas, se han dictado determinadas directivas con incidencia en materia de delito de blanqueo: la Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigación en materia penal, y la Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de misma fecha, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea. Asimismo, como hemos visto, las sucesivas Directivas promulgadas en materia de prevención del blanqueo de capitales han previsto de ordinario definiciones muy precisas de las conductas blanqueadoras, que -al menos en nuestro país- han incidido decisivamente en la configuración que el legislador ha dado al delito de blanqueo de capitales el Código Penal. Como afirmara FOFFANI, “los tipos penales (...) podrán ser en el próximo futuro objeto de directivas europeas dirigidas a establecer «normas mínimas relativas a la definición de los delitos y de las sanciones».”<sup>362</sup>

---

<sup>362</sup> Vid. FOFFANI, L., “Bienes jurídicos de relevancia comunitaria y protección penal: el caso de las falsedades en las cuentas de sociedades mercantiles”, op. cit., pág. 796.

### **1.3.2. NORMATIVA DE DERECHO INTERNO**

En materia de blanqueo de capitales, en España coexisten una normativa administrativo-preventiva y la normativa penal, que tipifica y castiga el delito de blanqueo de capitales. La normativa administrativa básica en materia preventiva está conformada por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, que derogó la Ley 19/1993 sobre determinadas medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales, de 28 de diciembre<sup>363</sup>. Es asimismo de aplicación el Reglamento de desarrollo de la norma legal, aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, que sustituye al reglamento anteriormente vigente, aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de junio (modificado por Real Decreto 54/2005). Además del reglamento, existe normativa de desarrollo de rango inferior que “completa el marco regulatorio actualmente vigente”<sup>364</sup>, conformada por Órdenes Ministeriales y disposiciones reglamentarias en materia de control de cambios, además de diversa normativa de diferente rango que afecta directa o indirectamente a la prevención del blanqueo de capitales<sup>365</sup>.

---

<sup>363</sup> La nueva Ley preventiva no ha derogado la Ley 12/2003, de 21 de mayo, ahora denominada “de bloqueo de la financiación del terrorismo”, ni la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior, al considerar el legislador que su ámbito de aplicación viene a completar las disposiciones de la Ley de prevención. La ley preventiva derogada transponía las Directivas 91/308 CEE y 2001/97/CE (la segunda modificativa la primera). Recordemos que la Ley 10/2010 se dicta como transposición de la Directiva comunitaria 2005/60/CE contra el blanqueo y la financiación del terrorismo (Tercera Directiva), que derogaba a las anteriores Directivas dictadas en materia de prevención del fenómeno del lavado de activos. Si bien los Estados miembros debían poner en vigor las disposiciones normativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la directiva antes del 15 de diciembre de 2007, España no lo hizo hasta bien entrado el año 2010. Debido a este injustificable retraso, la Comisión Europea abrió en junio de 2008, procedimientos de infracción contra España y otros catorce Estados miembros. (Vid. SÁNCHEZ GARRIDO, J. A., *Marco legal previsor de las infracciones administrativas en materia de blanqueo*, La Ley 19196/2011, Año XXXII. Nº 7736, 15 de noviembre de 2011, págs. 1 y 2; GÓMEZ-REINO CARNOTA, E., “Aspectos administrativos de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo”, *IV Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, págs. 79 y 80).

<sup>364</sup> Vid. ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 124.

<sup>365</sup> Prevé el reglamento aprobado por RD 304/2014 que, de conformidad con su disposición derogatoria única, en todo aquello en que no se opongan a su contenido, continuarán vigentes la Orden EHA/2963/2005, de 20 de septiembre, reguladora del Órgano Centralizado de Prevención en materia de blanqueo de capitales en el Consejo General del Notariado; la Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo, reguladora de la declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales; la Orden EHA/2619/2006, de 28 de julio, por la que se desarrollan determinadas obligaciones de prevención del blanqueo de capitales de los sujetos obligados que realicen actividad de cambio de moneda o gestión de transferencias con el exterior; la Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, en relación con el informe de experto externo sobre los procedimientos y órganos de control interno y comunicación establecidos para prevenir el blanqueo de

En el presente apartado nos vamos a ocupar de la normativa administrativa básica -Ley 10/2010 y el Reglamento que la desarrolla-, posponiendo el análisis de la norma penal al capítulo siguiente, en el que se da ya inicio al estudio dogmático del delito de blanqueo de capitales.

De acuerdo con ÁLVAREZ PASTOR y EGUIDAZU PALACIOS, la legislación administrativa dictada en materia de prevención del blanqueo tiene por objeto “impedir la utilización del sistema financiero, o de otras personas o entidades vulnerables, para actividades de blanqueo de capitales de origen delictivo”. El propósito de la norma es imponer a los sujetos obligados una serie de obligaciones de información y colaboración con las autoridades competentes que permitan a éstas “combatir más eficazmente los delitos de blanqueo”<sup>366</sup>.

Como principal novedad de la Ley 10/2010, destaca el enfoque orientado al riesgo. Dicho concepto, inspirado en la revisión de las Cuarenta Recomendaciones del GAFI de febrero de 2012, y que encuentra el oportuno desarrollo en el reglamento aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, posee un doble propósito: incrementar la eficiencia de las medidas a aplicar, y a su vez flexibilizar una norma dirigida a un colectivo muy heterogéneo de sujetos. De acuerdo con el nuevo enfoque, se establecen unos requerimientos básicos y comunes para todos los sujetos obligados, permitiendo asimismo un margen de adaptación de la aplicación de la norma a la realidad específica de la actividad que cada sujeto desarrolla. Asimismo, se limitan las obligaciones procedimentales para los sujetos de tamaño más reducido, y se

---

capitales; y la Orden EHA/114/2008, 29 de enero, reguladora del cumplimiento de determinadas obligaciones de los notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales. Respecto a disposiciones normativas de carácter administrativo que inciden en sistema de prevención del blanqueo de capitales, vid. ALCARAZ LAMANA, C., “Derecho Administrativo Sancionador”, *Auditoría, prevención y represión del blanqueo de capitales*, Ed. Liber Factory. Madrid, 2014, págs. 179 y ss.; CALDERÓN CEREZO, A., “Algunos aspectos críticos del blanqueo de capitales. Legislación y jurisprudencial”, *Las últimas reformas penales II, Estudios de Derecho Judicial* nº 10. CGPJ. Madrid, 2006, págs. 67 y ss.; id., *Comentarios al Código penal*, vol. 3, op. cit., págs. 2291 y 2292; DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, J., “Recepción de las propuestas del GAFI de las Directivas europeas sobre el blanqueo de capitales en el derecho español”, op. cit., págs. 56 y ss.; ZARAGOZA AGUADO, J. A., “La prevención del blanqueo de capitales. La comisión culpable y las profesiones jurídicas”, op. cit., págs. 69 y ss.; LUZÓN CUESTA, J. M., *Compendio de derecho Penal. Parte Especial*, 17ª ed. Dykinson. Madrid, 2010, pág. 214; CONTELL LLIBEROS, A. J., “Panorámica sobre el blanqueo de capitales”, *III Curso de Alta Especialización en Fiscalidad Financiera celebrado en la Escuela de la Hacienda Pública del Instituto de Estudios Fiscales*, 2007, págs. 32 y ss., artículo disponible en el siguiente enlace: [http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/revistas/cuadernos\\_formacion/07\\_2009/03.pdf](http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/revistas/cuadernos_formacion/07_2009/03.pdf).

<sup>366</sup> Vid. ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 124. Las obligaciones administrativas, cada vez más extensas -advierte GUINARTE CABADA-, alcanzan a imponer a los sujetos vinculados “deberes auténticamente policiales, convirtiendo a esos operadores económicos o asesores de operadores económicos en colaboradores forzados del Estado”. (“La política criminal de la Unión Europea en materia de blanqueo de capitales. Especial referencia a las nuevas propuestas de directivas de 2013”, op. cit., pág. 262).

incrementan determinadas exigencias cuando la dimensión y volumen de negocio del sujeto obligado así lo precisen<sup>367</sup>.

De acuerdo con el artículo 1.1 de la Ley 10/2010, el **ámbito de aplicación** de la norma se extiende a “la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica mediante el establecimiento de obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo”. Por su parte, el número 2 del artículo 1 aporta una definición de blanqueo inspirada en los textos internacionales<sup>368</sup>, y por ello en exceso prolija, considerando constitutivas de blanqueo las siguientes actividades:

“a. La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva, con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a personas que estén implicadas a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos;

b. La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva;

c. La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de la recepción de los mismos, de que proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva;

d. La participación en alguna de las actividades mencionadas en las letras anteriores, la asociación para cometer este tipo de actos, las tentativas de perpetrarlas y el hecho de ayudar, instigar o aconsejar a alguien para realizarlas o facilitar su ejecución.”

---

<sup>367</sup> Vid. Exposición de motivos del Real Decreto 304/2014. (BOE, Martes, 6 de mayo de 2014, Sec. I, págs. 34775 y 34776). En aplicación del enfoque orientado al riesgo, los sujetos obligados han de evaluar el riesgo de las situaciones, productos o clientes con los que operen, haciendo especial hincapié en aquellos que presenten un nivel de riesgo superior. “Por ello el análisis de este nivel de riesgo es fundamental para “diseñar las políticas y procedimientos internos, de manera tal que estos se adapten al nivel de riesgo” existente, moderando o intensificando las medidas de diligencia debida según las características concretas del cliente y la operación”. (GARCÍA VALDECASAS, J. A., *Resumen del Reglamento de la Ley sobre Blanqueo de Capitales*, publicado en el enlace <http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/resumenes/2014-blanqueo-reglamento.htm>).

<sup>368</sup> Vid. VIDALES RODRÍGUEZ, C., “La ley de prevención del blanqueo en la legislación española: disposiciones generales”, *Régimen Jurídico de la Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales*. Ed. Tirant lo Blanch. Madrid, 2015, pág. 28.

Finaliza la disposición extendiendo la calificación de conductas blanqueadoras a las descritas en las letras precedentes incluso cuando sean realizadas por quien cometió la actividad delictiva que haya generado los bienes.

Por su parte, el número 1 del artículo 2 de la ley, emulando a su predecesora, establece el elenco de **sujetos obligados** al cumplimiento de las exigencias impuestas por la norma<sup>369</sup>. El precepto distingue dos categorías de sujetos: aquellos cuya actividad en su totalidad queda vinculada a los regímenes de control y los que sólo quedan obligados respecto a parte de sus actividades. En este último caso, observa ALIAGA MÉNDEZ, “sólo tendrán carácter de sujetos obligados en la medida que desarrollen las actividades señaladas”<sup>370</sup>. Resulta muy clarificador el esquema elaborado por el autor desarrollando diversos criterios para clasificar la extensa relación de sujetos obligados prevista en la norma. De acuerdo con dichos criterios, cabría hablar de cuatro tipologías de sujetos obligados: 1º. Sujetos obligados en parte de su actividad a algunas de las obligaciones previstas en la ley, como es el caso de los abogados o de aquellas personas físicas que realicen movimientos o medios de pago; 2º. Sujetos obligados en parte de su actividad a la totalidad de las obligaciones previstas en la ley, como es el caso de comerciantes que realicen movimientos de cobro o pago de cantidades superiores a los 15.000 euros; 3º. Sujetos que quedan obligados en la totalidad de su actividad a parte de las obligaciones contenidas en la ley preventiva, como son las fundaciones, las asociaciones y las entidades gestoras de sistemas de pago o de tarjetas; 4º. Sujetos obligados en la totalidad de su actividad a todas las obligaciones legalmente previstas,

---

<sup>369</sup> Es el apartado 1 de esta disposición la que recoge el catálogo de sujetos obligados, ampliando notablemente el cuadro de sujetos vinculados previsto en la ley preventiva anterior. Es de destacar, como novedad de la Ley 10/2010, el establecimiento de una categoría unitaria de sujetos obligados, sin distinguir, como hacía la norma anterior, entre los sujetos cuyas actividades quedaban en su conjunto vinculadas a la ley preventiva y aquellos otros que se consideraban obligados sólo en la medida en que desarrollasen determinadas actividades y únicamente en relación a éstas. (Vid. ALIAGA MÉNDEZ, J. A., *Normativa comentada de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 39). Asimismo, a diferencia de lo que ocurría en la ley de 1993, que distinguía dos categorías diferenciadas con un régimen de obligaciones distinto para cada una de ellas -entidades financieras y otras asimiladas por un lado, y personas físicas o jurídicas que ejerzan aquellas otras actividades profesionales o empresariales particularmente susceptibles de ser utilizadas para el blanqueo de capitales, por otro- desaparece nominalmente la distinción entre sujetos obligados de régimen general y de régimen simplificado. (Vid. VEGA SÁNCHEZ, M. V., *Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Nueva Ley 10/2010, de 20 de abril*. Editorial Universitaria Ramón Areces. Madrid, 2011, pág. 60). De este modo, la nueva Ley de prevención establece una única categoría de sujetos obligados, si bien recogiendo ciertas especificidades -generalmente limitativas- para los sistemas de obligaciones impuestas para algunos de los grupos de sujetos vinculados, como es el caso de los abogados o las personas físicas que comercien profesionalmente con bienes. (Vid. ALIAGA MÉNDEZ, J. A., *Normativa comentada de prevención del blanqueo de capitales*, loc. cit.). En sentido crítico con la nueva regulación, vid. MILANS DEL BOSCH, S., “Principales novedades que introduce la ley 10/2010, de 28 de abril, sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo”, op. cit., págs. 49 y ss.

<sup>370</sup> Vid. ALIAGA MÉNDEZ, J. A., *Normativa comentada de prevención del blanqueo de capitales*, loc. cit.

“situación más frecuente que ocurre en el resto de los casos”<sup>371</sup>. Por su parte, el segundo apartado del artículo 2 de la ley preventiva se refiere al régimen de responsabilidad de aquellas personas físicas que, como empleados de personas jurídicas obligadas, presten en ellas servicios profesionales. El tercer apartado del precepto prevé la posibilidad de que, a través del reglamento, sean excluidas de la categoría de sujeto obligado aquellas entidades que realicen ocasionalmente o de manera muy limitada actividades sometidas al régimen de control previsto en la ley. Y en su cuarto y último apartado, el precepto contempla el elenco de sujetos obligados que tienen, a los efectos de la ley preventiva, consideración de entidades financieras (aquellos sujetos obligados mencionados en las letras a) a i) del apartado primero).

De acuerdo con el artículo 2.1, son sujetos obligados los siguientes:

- a) Las entidades de crédito.
- b) Las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida y los corredores de seguros cuando actúen en relación con seguros de vida u otros servicios relacionados con inversiones, con las excepciones que se establezcan reglamentariamente.
- c) Las empresas de servicios de inversión.
- d) Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y las sociedades de inversión cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora.
- e) Las entidades gestoras de fondos de pensiones.
- f) Las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo y las sociedades de capital-riesgo cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora.
- g) Las sociedades de garantía recíproca.
- h) Las entidades de pago.
- i) Las personas que ejerzan profesionalmente actividades de cambio de moneda.
- j) Los servicios postales respecto de las actividades de giro o transferencia.
- k) Las personas dedicadas profesionalmente a la intermediación en la concesión de préstamos o créditos, así como las personas que, sin haber obtenido autorización como establecimientos financieros de crédito, desarrollen profesionalmente alguna de las actividades a que se refiere la Disposición adicional primera de la Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la legislación española en materia de Entidades de Crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al Sistema Financiero.
- l) Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles.

---

<sup>371</sup> Ibidem, págs. 39 y 40.

- m) Los auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales.
- n) Los notarios y los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.
- ñ) Los abogados, procuradores u otros profesionales independientes cuando participen en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, la gestión de fondos, valores u otros activos, la apertura o gestión de cuentas corrientes, cuentas de ahorros o cuentas de valores, la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de empresas o la creación, el funcionamiento o la gestión de fideicomisos («trusts»), sociedades o estructuras análogas, o cuando actúen por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria.
- o) Las personas que con carácter profesional y con arreglo a la normativa específica que en cada caso sea aplicable presten los siguientes servicios a terceros: constituir sociedades u otras personas jurídicas; ejercer funciones de dirección o secretaría de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos; ejercer funciones de fideicomisario en un fideicomiso («trust») expreso o instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; o ejercer funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado y estén sujetas a requisitos de información conformes con el derecho comunitario o a normas internacionales equivalentes, o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.
- p) Los casinos de juego.
- q) Las personas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o metales preciosos.
- r) Las personas que comercien profesionalmente con objetos de arte o antigüedades.
- s) Las personas que ejerzan profesionalmente las actividades a que se refiere el artículo 1 de la Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio.
- t) Las personas que ejerzan actividades de depósito, custodia o transporte profesional de fondos o medios de pago.
- u) Las personas responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar respecto de las operaciones de pago de premios.
- v) Las personas físicas que realicen movimientos de medios de pago, en los términos establecidos en el artículo 34.
- w) Las personas que comercien profesionalmente con bienes, en los términos establecidos en el artículo 38<sup>372</sup>.

---

<sup>372</sup> Las obligaciones a que está sometido este grupo de sujetos se limita a aquellas transacciones en que los cobros o pagos se efectúen con los medios de pago a que se refiere el artículo 34.2 de esta Ley y por importe superior a 15.000 euros, ya se realicen en una o en varias operaciones entre las que parezca existir algún tipo de relación. Sus obligaciones quedan circunscritas a aquellas referidas a la identificación al cliente, y a

- x) Las fundaciones y asociaciones, en los términos establecidos en el artículo 39.
- y) Los gestores de sistemas de pago y de compensación y liquidación de valores y productos financieros derivados, así como los gestores de tarjetas de crédito o débito emitidas por otras entidades, en los términos establecidos en el artículo 40.

Si comparamos el artículo 2.1 de la Ley 10/2010 con el artículo 2 de la derogada Ley 19/1993<sup>373</sup>, podremos comprobar que la nueva ley preventiva ha incrementado notablemente el número de sujetos obligados, y ello debido a que “la evolución de las medidas de prevención del blanqueo corre en paralelo con su extensión progresiva a más sectores de actividad”<sup>374</sup>. Pese a la ampliación del ámbito subjetivo de aplicación de la norma, el número 3 del artículo 2 prevé la posibilidad, como se ha dicho, de excluir del régimen de obligaciones mediante disposición reglamentaria a aquellas personas que realicen actividades financieras con carácter ocasional o de manera muy

---

determinadas obligaciones de información, prohibición de revelación y conservación de documentación, todo ello en los términos previstos en los artículos 3, 17, 18, 19, 21, 24 y 25 de la Ley.

<sup>373</sup> Como se ha dicho, la Ley 19/1993 distinguía dos categorías diferenciadas de sujetos obligados con un régimen de obligaciones distinto para cada una de ellas. Por un lado, las entidades financieras y otras asimiladas (artículo 2.1), y por otro, personas físicas o jurídicas que ejerzan aquellas otras actividades profesionales o empresariales particularmente susceptibles de ser utilizadas para el blanqueo de capitales, con las especialidades obligacionales que se desarrollaban reglamentariamente (artículo 2.2), entre las que se incluía a los casinos de juego; las actividades de promoción inmobiliaria, agencia, comisión o intermediación en la compraventa de inmuebles; la auditoría, la contabilidad externa y la asesoría fiscal (tanto llevada a cabo por personas físicas como jurídicas); los notarios, abogados y procuradores quedaban igualmente vinculados cuando participasen en la concepción, realización o asesoramiento de transacciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales; la gestión de fondos, valores u otros activos; la apertura o gestión de cuentas bancarias, cuentas de ahorros o cuentas de valores; la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de empresas o la creación, el funcionamiento o la gestión de fiducias (trust), sociedades o estructuras análogas, o cuando actuasen en nombre y por cuenta de clientes, en cualquier transacción financiera o inmobiliaria; por último, aquellas otras actividades que, atendiendo a la utilización habitual de billetes u otros instrumentos al portador como medio de cobro, al alto valor unitario de los objetos o servicios ofrecidos, al emplazamiento de los establecimientos o a otras circunstancias relevantes, se determinasen reglamentariamente. Es de destacar que, en relación a *auditores externos, contables, notarios, abogados y procuradores*, con el fin de no afectar a sus deberes de secreto profesional respecto a sus clientes, el artículo 3.4 *in fine* de la ley derogada disponía que no estaban sometidos a las obligaciones de información y de comunicaciones sospechosas al SEPBLAC respecto a la información que recibiesen de sus clientes u obtuviesen sobre los mismos “al determinar la posición jurídica en favor de su cliente, o desempeñar su misión de defender o representar a dicho cliente en procedimientos administrativos o judiciales o en relación con ellos, incluido el asesoramiento sobre la incoación o la forma de evitar un proceso, independientemente de si han recibido u obtenido dicha información antes, durante o después de tales procedimientos”. Se hacía asimismo una referencia expresa al deber de secreto profesional que amparaba a los abogados y procuradores “de conformidad con la legislación vigente”. Esta dispensa se mantiene en la Ley 10/2010, que, como veremos, prevé una cláusula de no sujeción similar en su artículo 22, limitada a las obligaciones establecidas en los artículos 7.3, 18 y 21 de la ley preventiva, pero que favorece sólo a abogados, y no ya a auditores externos, contables, notarios ni procuradores. Se introduce asimismo una pequeña matización respecto al secreto profesional, pues si en la ley derogada se imponía el mismo “de conformidad con la legislación vigente”, la nueva ley preventiva debilita esta exigencia al disponer, en términos ciertamente ambiguos, que la misma habrá de observarse “sin perjuicio de lo establecido en la presente Ley”.

<sup>374</sup> Vid. ALIAGA MÉNDEZ, J. A., *Normativa comentada de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 31; PORRES ORTIZ DE URBINA, E. de, “Técnicas de blanqueo de capitales”, *Judicatura y notariado ante los delitos económicos. Estudios de Derecho Judicial* n° 73, CGPJ. Madrid, 2006, pág. 224. En sentido crítico, MILANS DEL BOSCH, S., “Principales novedades que introduce la ley 10/2010, de 28 de abril, sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo”, op. cit., págs. 49 y ss.



limitada cuando exista escaso riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo<sup>375</sup>. Asimismo, como consecuencia de la política de enfoque orientado al riesgo, el Reglamento prevé pautas de exención del cumplimiento de determinadas obligaciones a ciertos sujetos *a priori* vinculados, pero que por su tamaño reducido -en función del número de empleados y del volumen de negocio-, quedan excusados de observar determinados deberes, esencialmente procedimentales<sup>376</sup>.

También respecto las **obligaciones** impuestas a los sujetos vinculados tanto la nueva Ley preventiva como su Reglamento de desarrollo han incorporado importantes novedades respecto a la legislación anterior. El propio Preámbulo de la Ley 10/2010 dispone que si bien “se ha mantenido, en la medida de lo posible, el régimen vigente, en cuanto no fuera contrario a la nueva ordenación comunitaria, con el fin de reducir los costes de adaptación de los sujetos obligados”, el marco obligacional que regula la nueva ley preventiva es notablemente más prolijo, hasta el punto de reconocerse en el Preámbulo que “desde un punto de vista crítico, podría tacharse de excesivamente reglamentista”<sup>377</sup>. Al igual que ocurre respecto a la relación de los sujetos obligados, la

---

<sup>375</sup> El artículo 3 del Reglamento regula las actividades excluidas. De acuerdo con dicha disposición, no estará sujeta a la normativa preventiva la actividad de cambio de moneda extranjera realizada con carácter accesorio a la actividad principal del titular, cuando concurren todas las circunstancias siguientes: a) que la actividad de cambio de moneda extranjera se verifique, exclusivamente, como servicio proporcionado a los clientes de la actividad principal; b) que la cantidad cambiada por cliente no exceda de 1.000 euros en cada trimestre natural; c) que la actividad de cambio de moneda extranjera sea limitada en términos absolutos, sin que pueda exceder la cifra de 100.000 euros anuales; d) que dicha actividad sea accesorio a la actividad principal, considerándose como tal aquella que no exceda del 5 por ciento de la facturación anual del negocio. Quedarán asimismo excluidos los actos notariales y registrales que carezcan de contenido económico o patrimonial o no sean relevantes a efectos de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. A tal efecto, mediante Orden del Ministro de Economía y Competitividad, previo informe del Ministerio de Justicia, se establecerá la relación de tales actos.

<sup>376</sup> Conforme al artículo 27.3 del Reglamento de desarrollo, quedan exceptuados de la obligación de comunicación sistemática los corredores de seguros a los que se refiere el artículo 2.1 b) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, las empresas de asesoramiento financiero, así como los sujetos obligados mencionados en los párrafos k) a y), ambos inclusive, del artículo 2.1 de la misma ley. El segundo párrafo del artículo 28.2 del Reglamento exime de la obligación de conservación de documentos de diligencia debida -no de los documentos y registros relativos a sus operaciones- a aquellos sujetos obligados que, con inclusión de los agentes, ocupen a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supere los 2 millones de euros, que podrán optar por mantener copias físicas de los documentos de identificación. Y de conformidad con el párrafo segundo del artículo 31.1 del Reglamento de desarrollo, no estarán sometidos a la aprobación y aplicación de políticas y procedimientos adecuados de prevención los corredores de comercio y los sujetos obligados comprendidos en el artículo 2.1 i) a u), ambos inclusive, que, con inclusión de los agentes, ocupen a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supere los 2 millones de euros. Dichos sujetos quedan exceptuados de las obligaciones referidas en este artículo y en los artículos 32, 33, 35, 38 y 39, si bien estas excepciones no serán aplicables en aquellos casos en los que los sujetos obligados estén integrados en un grupo empresarial que supere dichas cifras.

<sup>377</sup> Conforme a la derogada Ley 19/1993, se distinguían aquellas obligaciones dirigidas a las entidades de crédito y asimiladas (artículo 2.1) de aquellas otras que obligaban a los sujetos relacionados en el artículo 2.2. Respecto a las obligaciones que afectaban a las entidades de crédito y asimiladas, el artículo 3 de la Ley derogada y los artículos 3 al 12 de su Reglamento de ejecución contenían las siguientes obligaciones: a) Obligaciones de identificación y debida diligencia con los clientes (artículo 3.1 de la Ley y artículos 3 y 4 del Reglamento), ya fuesen aquellos habituales o no, y tanto al entablar relaciones de negocio como al realizar

doctrina ha llamado la atención sobre el importante incremento que ha experimentado el elenco de obligaciones impuestas por la norma. GUINARTE CABADA ha llegado a calificar al complejo abanico de exigencias de “deberes auténticamente policiales, convirtiendo a [los] operadores económicos o asesores de operadores económicos en colaboradores forzosos del Estado”. Según el autor, si dichas obligaciones, además, son entendidas en no pocas ocasiones como deberes de garante, su incumplimiento podría considerarse suficiente para fundamentar una responsabilidad penal por el tipo de blanqueo<sup>378</sup>. Las concretas obligaciones impuestas por la nueva Ley preventiva (que se clasifican en tres grupos: medidas normales, simplificadas y reforzadas)<sup>379</sup> aparecen recogidas en los Capítulos II a V de la Ley preventiva (artículos 3 a 41) y se desarrollan en los Capítulos II a V del Reglamento.

---

cualquier operación; b) Examen especial de determinadas operaciones (artículo 3.2 de la Ley y artículo 5 del Reglamento); aquellas que, con independencia de su cuantía, por su naturaleza pudieran ser sospechosas de tener alguna relación con una operación de blanqueo (operaciones complejas, inusuales o sin un propósito económico o lícito aparente); c) Conservación de documentos acreditativos de las operaciones (artículo 3.3 de la Ley y artículo 6 del Reglamento), durante 5 años o aquel periodo superior que reglamentariamente se determinase para determinados supuestos (periodo ampliado a 6 años por el artículo 6 del reglamento); d) Comunicación e información al SEPBLAC (artículo 3.4 de la Ley y artículos 7 y 8 del Reglamento) de aquellas operaciones respecto a las que existiese indicio o certeza de estar relacionadas con el blanqueo, de otras objetivamente determinadas (por naturaleza o cuantía, conforme a lo previsto en el reglamento) o de cualquier dato u operación que el Servicio Ejecutivo requiriese al sujeto obligado; e) Abstención de ejecución de ciertas operaciones sospechosas sin haberla comunicado previamente al SEPBLAC (artículo 3.5 de la Ley y artículo 9 del Reglamento); f) Deber de confidencialidad (artículo 3.6 de la Ley y artículo 10 del Reglamento), que impedía a las entidades obligadas revelar al cliente o a terceras personas las actuaciones que hubiesen de realizar en cumplimiento de sus obligaciones; y g) Medidas de control interno (artículo 3.7 de la Ley y artículos 12 a 14 del Reglamento), referidas al establecimiento de procedimientos y sistemas para cumplir las obligaciones impuestas por ambos textos normativos, y a la formación de personal en materia de prevención de blanqueo. Las obligaciones referidas a los sujetos previstos en el número 2 del artículo 2 de la Ley 19/1993 (personas físicas o jurídicas que ejercen actividades profesionales o empresariales particularmente susceptibles de ser utilizadas para el blanqueo de capitales, elenco de sujetos que era a su vez desarrollado por el artículo 2.2 del Reglamento) eran las mismas obligaciones previstas en el artículo 3, pero con las particularidades previstas en el número 4 del artículo 3 (respecto a auditores externos, contables, notarios, abogados y procuradores) y en el artículo 16 del Reglamento (*Régimen Especial*). Las obligaciones impuestas en virtud la disposición reglamentaria se traducían en la exigencia de aquellos documentos acreditativos de la identificación de los clientes que efectuasen operaciones por importes superiores a 8.000 euros o su contravalor en moneda extranjera (umbral que no era aplicable a auditores, contables externos o asesores fiscales, y a personas físicas o jurídicas dedicadas a la concesión de préstamos o créditos ni a notarios, abogados y procuradores, respecto a determinadas operaciones susceptibles de blanqueo. Los sujetos referidos habían de exigir, en todo caso, la correspondiente identificación a sus clientes). Además, de acuerdo con la referida disposición reglamentaria, habían de observarse determinadas especialidades: en relación con los notarios, esta obligación de identificación se aplicaría de conformidad con lo establecido en la legislación notarial. Si se apreciase que los clientes fraccionaban la operación en varias para eludir el deber de identificación, se sumaría el importe de todas ellas y se procedería a exigir su identificación. Con similares propósitos, para el caso de los casinos de juego, la obligación de identificación también estaba sujeta a determinadas especialidades. Como puede observarse, la nueva Ley preventiva no impone obligaciones específicas a categorías diferenciadas de sujetos vinculados, sino que se establecen deberes con carácter general para todos los sujetos, con las especificidades legalmente previstas y las exclusiones contenidas en el artículo 3 del Reglamento de prevención.

<sup>378</sup> Vid. GUINARTE CABADA, G., “La política criminal de la Unión Europea en materia de blanqueo de capitales. Especial referencia a las nuevas propuestas de directivas de 2013”, op. cit., pág. 262.

<sup>379</sup> Vid. GÓMEZ-REINO CARNOTA, E., “Aspectos administrativos de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo”, op. cit., pág. 84.

El **Capítulo II** de la Ley contempla las **obligaciones de diligencia debida** (*due diligence*) que los sujetos han de aplicar en las relaciones que establezcan con personas físicas, jurídicas, fideicomisos (*trust*) y otras masas patrimoniales que, pese a carecer de personalidad jurídica, puedan actuar en el tráfico económico<sup>380</sup>; en su **Sección 1ª**, se reconocen las “medidas normales de diligencia debida”, que contienen los deberes de identificación formal (artículo 3), de identificación del titular real de la relación negocial (artículo 4), la obligación de recabar información sobre el propósito e índole del negocio u operación (artículo 5), así como de su seguimiento continuo (artículo 6), y el deber de observar la aplicación de las medidas de diligencia debida tanto propias (artículo 7) como por terceros (artículo 8)<sup>381</sup>.

Debe destacarse que, de conformidad con el apartado segundo del artículo 4, a efectos de la ley preventiva se entenderá por titular real: a) la persona o personas físicas por cuya cuenta se pretenda establecer una relación de negocios o intervenir en cualesquiera operaciones; b) la persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25% del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de la gestión de una persona jurídica. Se exceptúan las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Unión Europea o de países terceros equivalentes; c) la persona o personas físicas que sean titulares o ejerzan el control del 25% o más de los bienes de un instrumento o persona jurídicos que administre o distribuya fondos, o, cuando los beneficiarios estén aún por designar, la categoría de personas en beneficio de la cual se ha creado o actúa principalmente la persona o instrumento jurídicos<sup>382</sup>. Y en su apartado tercero, el precepto prevé que los sujetos obligados recabarán información de los clientes para determinar si éstos actúan por cuenta propia o de terceros. Cuando existan indicios o certeza de que los clientes no actúan por cuenta propia, los sujetos obligados recabarán la información precisa a fin de conocer la identidad de las personas por cuenta de las cuales actúan aquéllos. Además, el apartado cuarto del precepto prohíbe a los sujetos obligados a establecer o mantener

<sup>380</sup> Vid. BLASCO DÍAZ, J. L., “Diligencia debida”, op. cit., págs. 44 y 45.

<sup>381</sup> El artículo 8 de la Ley habilita a los sujetos obligados a recurrir a terceros sometidos a la norma para la aplicación de las medidas de diligencia debida previstas en la norma, con excepción de la obligación de seguimiento continuo de la relación de negocios, a través de acuerdo escrito en el que se formalicen las obligaciones asumidas. En todo caso, conforme a esta disposición, los sujetos obligados conservarán la responsabilidad respecto a la concreta operación o relación de negocio.

<sup>382</sup> En similares términos define el Reglamento, en su artículo 8, al titular real, si bien el precepto prevé determinadas presunciones de titularidad real cuando no exista una persona física en los términos referidos, aunque dichas presunciones admitirán prueba en contrario.

relaciones de negocio con personas jurídicas cuya estructura de propiedad o de control no haya podido determinarse. Si se trata de sociedades cuyas acciones estén representadas mediante títulos al portador, se aplicará la prohibición anterior salvo que el sujeto obligado determine por otros medios la estructura de propiedad o de control. Esta prohibición no será aplicable a la conversión de los títulos al portador en títulos nominativos o en anotaciones en cuenta.

Las medidas de diligencia debida han de aplicarse tanto a los nuevos clientes -en los términos previstos en el artículo 7<sup>383</sup>- como a aquellos clientes existentes en el momento de la entrada en vigor de la Ley 10/2010<sup>384</sup>, en función de un análisis de riesgo; en todo caso, serán de obligada aplicación a los clientes existentes cuando se proceda a la contratación de nuevos productos o cuando se produzca una operación significativa por su volumen o complejidad (artículo 7.2, párrafo 2º), y en un plazo máximo de 5 años desde la entrada en vigor de la ley (Disposición Transitoria 7ª).

La **Sección 2ª** contiene las **medidas simplificadas de diligencia debida** respecto de determinados clientes (artículo 9)<sup>385</sup> y con relación a ciertos productos y operaciones (artículo 10) que entrañan menor riesgo. Por su parte, la **Sección 3ª** se dedica a regular las **medidas reforzadas de diligencia debida** aplicables a supuestos que presenten “un alto riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo”, bien determinados reglamentariamente<sup>386</sup> o por presentar el sujeto obligado de que se trate un riesgo más elevado de acuerdo con el “análisis del riesgo” al que la disposición se refiere (artículo 11). Se prevén por la propia Ley como de alto riesgo las operaciones

---

<sup>383</sup> Se establece con carácter general la obligación de aplicar cada una de las medidas de diligencia debida previstas en los artículos 3 a 6 de la Ley, si bien los sujetos obligados podrán modular el grado de aplicación de dichas medidas en función del riesgo y dependiendo del tipo de cliente, relación de negocios, producto u operación, recogiendo estos extremos en la política expresa de admisión de clientes a que se refiere el artículo 26. En todo caso, en los supuestos en los que concurren indicios de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, con independencia de cualquier excepción, exención o umbral, o cuando existan dudas sobre la veracidad o adecuación de los datos obtenidos con anterioridad, estarán los sujetos obligados a aplicar todas las medidas de diligencia debida (artículo 7.1, párrafos 1 y 3).

<sup>384</sup> Vid. MILANS DEL BOSCH, S., “Principales novedades que introduce la ley 10/2010, de 28 de abril, sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo”, op. cit., págs. 49 y ss.

<sup>385</sup> De acuerdo con este precepto, cabe la posibilidad de no aplicar las medidas de diligencia debida previstas en los artículos 3.2, 4, 5 y 6 respecto de determinada tipología de clientes: las entidades de derecho público de los Estados miembros de la Unión Europea o de países terceros equivalentes; las entidades financieras domiciliadas en la Unión Europea o en países terceros equivalentes que sean objeto de supervisión para garantizar el cumplimiento de las medidas de diligencia debida; las sociedades que coticen en bolsa cuyos valores se admitan a negociación en un mercado comunitario o residenciado en países terceros equivalentes.

<sup>386</sup> El Reglamento prevé una relación de operaciones de riesgo a las que habrá de aplicarse en todo caso las medidas reforzadas, destacando las relaciones de negocios y operaciones con clientes radicados en países, territorios o jurisdicciones de riesgo (artículo 19.2) o con aquéllos que reúnan un perfil de alto riesgo de acuerdo con los resultados de la aplicación de los procedimientos de control interno (artículo 19.3).

no presenciales (artículo 12), la corresponsalía bancaria transfronteriza (artículo 13)<sup>387</sup>, las relaciones de negocio u operaciones de personas con responsabilidad pública (artículos 14 y 15) y las operaciones propicias al anonimato o desarrolladas a través de nuevos desarrollos tecnológicos (artículo 16).

Según disponen los artículos 14 y 15, las obligaciones especiales o reforzadas -adicionales a las medidas normales de diligencia debida- que han de adoptarse en las operaciones en las que intervengan personas con responsabilidad pública a las que se refiere el artículo 14, o sus familiares o allegados, pasan por la aplicación de procedimientos adecuados que permitan determinar si el cliente o el titular real es una persona con responsabilidad pública. Asimismo, se ha de obtener la autorización del inmediato nivel directivo, como mínimo, para establecer relaciones de negocios con dichos sujetos, adoptar medidas adecuadas a fin de determinar el origen del patrimonio y de los fondos con los que se llevará a cabo la relación de negocios u operación, y llevar a cabo un seguimiento reforzado y permanente de la relación de negocios. Además, en su artículo 15, la norma autoriza la creación de ficheros donde se contengan los datos identificativos de las personas con responsabilidad pública, aun cuando no mantuvieran con las mismas una relación de negocios.

Por su parte, el Reglamento también prevé tres tipos de modalidades de diligencia debida: las denominadas “normales”, las “simplificadas” y las “reforzadas”. Las medidas normales de diligencia debida incluyen, por un lado, la obligación de identificación formal a través de documentación fehaciente -según los requisitos establecidos en el artículo 6- de aquellas personas físicas o jurídicas con las que el sujeto obligado pretenda establecer relaciones de negocio o intervenir en cualesquiera operaciones ocasionales cuyo importe sea igual o superior a 1.000 euros (artículo 4), con determinadas especificidades para las operaciones de seguro (artículo 5) y para aquellas otras en las que intervengan entidades gestoras de instituciones de inversión colectiva (artículo 7); y por otro, la obligación de identificar al titular real de la

---

<sup>387</sup> Pone de relieve VEGA SÁNCHEZ que la ley preventiva enfatiza la prohibición de realizar operaciones con bancos pantalla, entendiendo como tales “toda aquella entidad de crédito o similar constituida en un país donde no tenga presencia física, que permita ejercer una verdadera gestión y dirección y que no sea filial de un grupo financiero regulado”. (*Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Nueva Ley 10/2010, de 20 de abril*, op. cit., págs. 64 y 65). Vid., asimismo, la Guía para la prevención del riesgo de blanqueo de capitales en banca de corresponsales del SEPBLAC, disponible en el siguiente enlace: [http://www.sepblac.es/espanol/informes\\_y\\_publicaciones/otra\\_documentacion.htm](http://www.sepblac.es/espanol/informes_y_publicaciones/otra_documentacion.htm).

operación (en los términos previstos en su artículo 9<sup>388</sup>). Asimismo, el artículo 8 del Reglamento especifica qué sujetos serán considerados titulares reales en las operaciones con las que los sujetos vinculados operen<sup>389</sup>. Además, el Reglamento establece los procedimientos para que los sujetos obligados puedan controlar el propósito e índole de la relación negocial (artículo 10) y para hacer un adecuado seguimiento continuo de dicha relación (artículo 11), y prevé la posibilidad tanto de que recurran a terceros sujetos, también vinculados por la normativa preventiva, para dar cumplimiento a sus obligaciones de diligencia (artículo 13) como de acceder a información identificativa de personas con responsabilidad pública o vinculadas a éstas (artículo 14).

En cuanto a las medidas simplificadas de diligencia debida, el Reglamento determina qué clientes (artículo 15) y operaciones (artículo 16) son susceptibles de aplicación de estas medidas menos exigentes, especificando en su artículo 17 el contenido de las mismas, que en todo caso habrán de ser congruentes con el riesgo concreto del cliente o de la operación. Se recogen también determinadas cautelas para supuestos de compraventa minorista con clientes que no intervengan en su condición de profesionales, en establecimientos abiertos al público (artículo 18). Respecto a las

---

<sup>388</sup> De conformidad con el artículo 9.1 del Reglamento, los sujetos vinculados tienen la obligación de identificar al titular real y de adoptar medidas adecuadas en función del riesgo a fin de comprobar su identidad con carácter previo al establecimiento de relaciones de negocio, la ejecución de transferencias electrónicas por importe superior a 1.000 euros o a la ejecución de otras operaciones ocasionales por importe superior a 15.000 euros. En todo caso, de acuerdo con el número 2 del precepto, la acreditación de la titularidad real habrá de realizarse mediante la obtención de información documental o de fuentes fiables independientes en determinados supuestos, destacando aquéllos en los que el sujeto obligado posea indicios de que la identidad del titular real declarada por el cliente no es exacta o veraz, o cuando concurren circunstancias que determinen el examen especial de conformidad con el artículo 17 de la Ley preventiva o la comunicación por indicio de conformidad con el artículo 18 de dicho precepto. Los sujetos vinculados deberán en cualquier caso adoptar medidas adecuadas para determinar la estructura de propiedad o de control de las personas e instrumentos jurídicos y no establecerán o mantendrán relaciones de negocio con personas o instrumentos jurídicos cuya estructura de propiedad o de control no haya podido determinarse, esencialmente a través del requerimiento de la información y documentación que sean necesarias para determinar la estructura de propiedad o control; en el caso de fideicomisos anglosajones (*trusts*) o instrumentos jurídicos análogos, los sujetos obligados identificarán y adoptarán medidas adecuadas a fin de comprobar la identidad del fideicomitente, de los fideicomisarios, del protector, de los beneficiarios o clases de beneficiarios y de cualquier otra persona física que ejerza el control efectivo final sobre el fideicomiso, incluso a través de una cadena de control o propiedad. En el caso de beneficiarios designados por características o clases, deberá obtenerse la información necesaria para establecer la identidad del beneficiario en el momento del pago o cuando el beneficiario pretenda ejercer los derechos conferidos. Para cumplir estas obligaciones, el número 6 del precepto establece la posibilidad de que los sujetos obligados accedan a la base de datos de titularidad real del Consejo General del Notariado en los términos previstos por el artículo 8 de la Ley preventiva. Esta previsión normativa, afirma GARCÍA VALDECASAS, tendrá en la práctica efectos muy limitados, pues “infinidad de operaciones, sobre todo financieras o crediticias, o de movimientos de capitales, no exigen para su formalización escritura pública y en otras ocasiones aunque la operación lo exija, esa escritura puede ser realizada en el extranjero en donde los notarios quizás no estén obligados a la remisión de índices a sus colegios”. (*Resumen del Reglamento de la Ley sobre Blanqueo de Capitales*, op. cit.).

<sup>389</sup> En términos similares, como hemos visto, al artículo 4.2 de la Ley 10/2010, si bien el precepto reglamentario prevé determinadas presunciones de titularidad real cuando no exista una persona física en los términos referidos, presunciones que admitirán prueba en contrario.

medidas reforzadas de diligencia debida, el Reglamento regula los supuestos en que aquéllas han de ser aplicadas -en función del cliente o de la operación- (artículo 19), así como el contenido de dichas medidas (artículo 20). Específica atención presta la norma a las relaciones de negocio y operaciones no presenciales -llevadas a cabo fundamentalmente a través de medios telefónicos, electrónicos o telemáticos- que, como sabemos, son habitualmente utilizadas para llevar a cabo actos de blanqueo. Para dichas operaciones, el Reglamento prevé determinadas cautelas en su artículo 21; asimismo regula, en su artículo 22, las zonas con riesgo geográfico, determinando qué países, territorios o jurisdicciones habrán de ser consideradas por los sujetos obligados como zonas de riesgo a efectos de aplicar medidas reforzadas de diligencia.

El **Capítulo III** de la Ley 10/2010 desarrolla las **obligaciones de información**, previendo su artículo 17 el deber de realizar un examen especial en aquellas operaciones que, por su naturaleza, y con independencia de su cuantía, puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo<sup>390</sup>. Por su parte, el artículo 18 impone el deber de “comunicación por indicio”, esto es, la obligación de dar cuenta al Servicio Ejecutivo de la Comisión (SEPBLAC) de aquellas operaciones que “muestren una falta de correspondencia ostensible con la naturaleza, volumen de actividad o antecedentes operativos de los clientes”; y el artículo 19, la obligación de abstención de ejecución de las operaciones señaladas en el artículo precedente<sup>391</sup>.

El artículo 20 prevé la obligación de “comunicación sistemática” de forma periódica de aquellas operaciones que se determine reglamentariamente, en el soporte y con el formato que determine el Servicio Ejecutivo. El artículo 21 impone medidas de colaboración con la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y con sus órganos de apoyo. Por su parte, el artículo 22 desarrolla una cláusula de “no sujeción” para los abogados, previéndose expresamente que no estarán

---

<sup>390</sup> El último inciso de esta disposición dispone que “reglamentariamente, podrán determinarse operaciones que serán en todo caso objeto de examen especial por los sujetos obligados.” Las operaciones que han de ser sometidas a examen especial aparecen especificadas en el artículo 24 del Reglamento, destacando aquéllas en las que intervengan clientes radicados en países, territorios o jurisdicciones de riesgo (artículo 24.2 d). El precepto, en lugar de optar por un sistema de listas negras de territorios, determina que el riesgo del territorio ha de ser determinado por el propio sujeto obligado de acuerdo con los criterios reglamentariamente previstos. (Vid. FABRA VALLS, M., “Las obligaciones de información”, *Régimen Jurídico de la Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales*. Ed. Tirant lo Blanch. Madrid, 2015, pág. 100).

<sup>391</sup> No obstante, cuando dicha abstención no sea posible o pueda dificultar la investigación, los sujetos obligados podrán ejecutar la operación, efectuando inmediatamente una comunicación de conformidad con lo establecido en el artículo 18. La comunicación al SEPBLAC expondrá, además de la información a que se refiere el artículo 18.2, los motivos que justificaron la ejecución de la operación (2º párrafo del artículo 19.1 Ley 10/2010).

sometidos a las obligaciones establecidas en los artículos 7.3, 18 y 21 de la ley preventiva (deberes de abstención, de comunicación de operaciones con indicios de blanqueo y de atención a los requerimientos del SEPBLAC) respecto a la información que reciban de uno de sus clientes u obtengan sobre él al determinar la posición jurídica en favor de su cliente o desempeñar su misión de defender a dicho cliente en procesos judiciales o en relación con ellos, incluyéndose el asesoramiento sobre la incoación o la forma de evitar un proceso, independientemente de si han recibido u obtenido dicha información antes, durante o después de tales procesos. Se contempla expresamente la institución del secreto profesional para los abogados, “sin perjuicio de lo establecido en la presente Ley”,<sup>392</sup>.

Finalmente la Ley preventiva prevé una cláusula de exención de responsabilidad para los supuestos de comunicación de buena fe al Servicio Ejecutivo cuando, al proceder a la comunicación, los sujetos vinculados no hayan observado las restricciones sobre divulgación de información impuestas por vía contractual o por cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa (artículo 23). Se imponen, como cierre de las medidas de información, la prohibición de revelación al cliente ni a terceros (*tipping off* <sup>393</sup>) que se ha comunicado información al Servicio Ejecutivo (artículo 24) y la obligación de conservación de documentos asociados al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ley preventiva<sup>394</sup> durante el plazo de 10 años<sup>395</sup> (artículo 25).

---

<sup>392</sup> En similares términos se expresaba el último inciso del art. 3.4 de la Ley 19/1993 -si bien, amparando no sólo a los abogados, sino también a auditores externos, contables, notarios y procuradores-. Varía sin embargo la referencia al secreto profesional, pues si en la ley derogada se imponía el mismo “de conformidad con la legislación vigente”, la nueva Ley preventiva matiza esta exigencia en unos términos un tanto ambiguos, al disponer que el secreto profesional habrá de observarse “sin perjuicio de lo establecido en la presente Ley”. En este aspecto concreto, la Ley 10/2010 ha generado una intensa polémica doctrinal. (En un sentido crítico, vid. MILANS DEL BOSCH, S., “Principales novedades que introduce la ley 10/2010, de 28 de abril, sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo”, op. cit., págs. 56 y 58, y, más ampliamente, SÁNCHEZ STEWART, N., “Abogados y blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 13 y ss.).

<sup>393</sup> Vid. FABRA VALLS, M., “Las obligaciones de información”, op. cit., pág. 142.

<sup>394</sup> Deben ser conservados en soportes ópticos, magnéticos o electrónicos que garanticen su integridad, la correcta lectura de los datos, la imposibilidad de manipulación y su adecuada conservación y localización, los siguientes documentos: a) copia de los documentos exigibles en aplicación de las medidas de diligencia debida, durante un periodo mínimo de diez años desde la terminación de la relación de negocios o la ejecución de la operación; b) original o copia con fuerza probatoria de los documentos o registros que acrediten adecuadamente las operaciones, los intervinientes en las mismas y las relaciones de negocio, durante un periodo mínimo de diez años desde la ejecución de la operación o la terminación de la relación de negocios.

<sup>395</sup> Como puede observarse, la Ley 10/2010 amplía el plazo de conservación de documentos de los 6 años que imponía la anterior legislación preventiva a 10. (Vid. VEGA SÁNCHEZ, M. V., *Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Nueva Ley 10/2010, de 20 de abril*, op. cit., pág. 67).



Respecto a las obligaciones de información, el Reglamento de ejecución regula dos tipologías de medidas: por un lado, las obligaciones de comunicación para determinadas operaciones, bien las previstas en el artículo 24, bien aquellas otras especialmente susceptibles de ser utilizadas en procesos de blanqueo de acuerdo con el control interno que los sujetos obligados han de realizar (alertas adecuadas en función del riesgo que presente la concreta operación por su tipología, sus intervinientes o su cuantía, artículo 23); por otro lado, medidas relativas a la conservación de documentos (artículos 28 a 30 del Reglamento). En cuanto a las formas de comunicación, se regula la comunicación por indicio en el artículo 26, que procederá tras el examen especial previsto en el precepto anterior, cuando en determinada operación el sujeto obligado detecte indicios o certeza de estar relacionado con el blanqueo, y se especifican los supuestos en los que los sujetos vinculados están obligados a realizar, con una periodicidad mensual, la comunicación sistemática, así como los sujetos que quedan exceptuados de cumplimentar esta comunicación<sup>396</sup> (artículo 27).

En el **Capítulo IV** de la Ley preventiva se establecen las **medidas de control interno y de formación** que deben observar las entidades vinculadas. El artículo 26 contiene determinadas medidas de control interno que serán sometidas anualmente a exámenes realizados por un experto ajeno a la entidad vinculada (artículo 28). Asimismo, las entidades obligadas deben adoptar medidas de formación de sus empleados (artículo 29) y prever políticas de idoneidad de empleados, directivos y agentes (artículo 30), así como acordar medidas aseguradoras respecto a aquellas sucursales y filiales que tengan en terceros países (artículo 31). Además, habrán de adecuar el tratamiento de los datos que manejen a las disposiciones vigentes en materia de protección de datos de carácter personal (artículo 32), si bien el tratamiento de dichos datos con objeto de la prevención del blanqueo dispone un régimen específico, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley<sup>397</sup>. Los artículos 31 a 44 del Reglamento desarrollan las medidas de control interno, que habrán de aprobarse por escrito<sup>398</sup>, recogiendo políticas y procedimientos adecuados de prevención del blanqueo, y

---

<sup>396</sup> Los corredores de seguros a los que se refiere el artículo 2.1 b) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, las empresas de asesoramiento financiero, así como los sujetos obligados mencionados en los párrafos k) a y), ambos inclusive, del artículo 2.1 de la misma norma.

<sup>397</sup> Vid., con detalle, FABRA VALLS, M., “El control interno”, *Régimen Jurídico de la Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales*. Ed. Tirant lo Blanch. Madrid, 2015, págs. 181 y ss.

<sup>398</sup> Los procedimientos de control interno habrán de documentarse en el correspondiente manual de prevención, cuyo contenido mínimo se especifica en el artículo 33 del Reglamento, y que habrá de ser actualizado periódicamente.

estableciendo qué sujetos quedan exceptuados de su cumplimiento<sup>399</sup> (artículo 31). Debe destacarse el artículo 32 del Reglamento, que establece que los procedimientos de control interno deben fundamentarse en un previo análisis de riesgo documentado llevado a cabo por el sujeto obligado, en el que se identificarán y evaluarán los riesgos a los que se encuentra sometido en atención a la tipología de sus clientes, de los países o áreas geográficas con los que opera, teniendo asimismo en consideración los productos, servicios, operaciones y canales de distribución en que interviene, y otras variables relativas al cliente, “tales como el propósito de la relación de negocios, el nivel de activos del cliente, el volumen de las operaciones y la regularidad o duración de la relación de negocios”<sup>400</sup>. El Reglamento también regula medidas de formación (artículo 39), los estándares éticos que los sujetos obligados han de respetar en la contratación de empleados y directivos y agentes (artículo 40), la composición y funcionamiento de los órganos de control interno (OCI)<sup>401</sup> responsables de la aplicación de los procedimientos de prevención, así como la figura del representante ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión, que será responsable del cumplimiento de las obligaciones de información (artículo 35). En su artículo 38, el Reglamento desarrolla la intervención del experto externo al que se refiere el artículo 28 de la Ley, encargado de verificar las medidas de control interno y su cumplimiento por parte del sujeto obligado, y en los artículos 41 a 43, se prevén medidas de control específicas que habrán de aplicarse por determinadas tipologías de sujetos (fundaciones y asociaciones, y entidades que gestionen, exploten o comercialicen loterías u otros juegos de azar, que habrán de establecer procedimientos adecuados de control interno en relación con las operaciones de pago de los premios)<sup>402</sup>.

Por su parte, el **Capítulo V** de la Ley preventiva (“**De los medios de pago**”) contiene obligaciones genéricas de declaración previa de movimientos de medios de

---

<sup>399</sup> Los corredores de comercio y los sujetos obligados comprendidos en el artículo 2.1 i) a u), ambos inclusive, que, con inclusión de los agentes, ocupen a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supere los 2 millones de euros, quedan exceptuados de las obligaciones referidas en este artículo y en los artículos 32, 33, 35, 38 y 39. Estas excepciones no serán aplicables a los sujetos obligados integrados en un grupo empresarial que supere dichas cifras.

<sup>400</sup> El número 2 del precepto obliga a los sujetos vinculados a revisar periódicamente el análisis de riesgo y, en todo caso, cuando se verifique un cambio significativo que pudiera influir en el perfil de riesgo del sujeto obligado. Asimismo, será preceptiva la realización y documentación de un análisis de riesgo específico con carácter previo al lanzamiento de un nuevo producto, la prestación de un nuevo servicio, el empleo de un nuevo canal de distribución o el uso de una nueva tecnología por parte del sujeto obligado, debiendo aplicarse medidas adecuadas para gestionar y mitigar los riesgos identificados en el referido análisis.

<sup>401</sup> Vid. FABRA VALLS, M., “El control interno”, op. cit., pág. 162.

<sup>402</sup> Vid., con detalle, ALCARAZ LAMANA, C., “Examen y evaluación de la prevención del blanqueo de capitales”, *Auditoría, prevención y represión del blanqueo de capitales*, Ed. Liber Factory. Madrid, 2014, págs. 253 y ss.

pago<sup>403</sup> (aplicables a toda persona física<sup>404</sup>) sobre aquellos que superen determinado umbral, que varía en función de que la operación sea transfronteriza (10.000 €) o no lo sea (100.000 €)<sup>405</sup>. El Reglamento prevé en su artículo 45 que la omisión de la declaración (modelo S-1), cuando ésta sea preceptiva de acuerdo con el artículo 34 de la Ley 10/2010, o la falta de veracidad de datos relevantes declarados -incluso la existencia de “dudas racionales” sobre la veracidad de los mismos-, determinará la intervención por los funcionarios aduaneros o policiales actuantes de la totalidad de los medios de pago hallados, salvo el mínimo de supervivencia que pueda determinarse mediante la oportuna Orden ministerial. La intervención de los medios de pago podrá tener lugar también en los supuestos en los que se haya hecho la pertinente declaración, incluso cuando ésta no sea necesaria por no exceder el umbral de declaración, si existan indicios o certeza de que los movimientos de los medios de pago están relacionados con una operación de blanqueo<sup>406</sup>. Por último, y en capítulo aparte, el artículo 41 de la Ley establece los mecanismos y cautelas que deben observar las operaciones de envío de dinero a que se refiere el artículo 2 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago<sup>407</sup>.

En el artículo 46 de la Ley 10/2010 se prevé la creación de un fichero de titularidad pública denominado “**Fichero de Titularidades Financieras**”, a partir de los

---

<sup>403</sup> Estas obligaciones incumben a todas las personas físicas, ya actúen por cuenta propia o de tercero, que realicen los movimientos de pago establecidos fuera del domicilio del portador por encima de los umbrales legalmente previstos. Se consideran medios de pago el papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros, los cheques bancarios al portador denominados en cualquier moneda, y cualquier otro medio físico o electrónico concebido para ser utilizado como medio de pago al portador. (Vid. MERINO ESCARTÍN, J. F., *Resumen de la Ley sobre blanqueo de capitales y prevención del terrorismo*, publicado en el siguiente enlace <http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/resumenes/2010-blanqueo.htm>).

<sup>404</sup> La obligación de declaración previa, tal y como advierte URIOL EGIDO, afecta a la persona física que materialmente efectúe el movimiento, “con independencia de la relación jurídica que pueda tener con el propietario del medio de pago que se declara”. (“De los medios de pago”, *Régimen Jurídico de la Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales*. Ed. Tirant lo Blanch. Madrid, 2015, pág. 214).

<sup>405</sup> La Orden EHA/1439/2006 aprueba en su anexo I el modelo de declaración S-1, cuya presentación en los términos previstos en la norma permitirá considerar cumplimentada la obligación prevista en el artículo 34 de la ley preventiva. El modelo S-1, afirma ALCARAZ LAMANA, “es único, independientemente del tipo de movimiento efectuado, y válido para una única operación de transporte”. (“Derecho Administrativo Sancionador”, op. cit., pág. 227). Sobre el lugar y la forma de presentar la declaración, vid. ampliamente URIOL EGIDO, C., “De los medios de pago”, op. cit., págs. 218 y ss.

<sup>406</sup> El artículo 46 prevé igualmente la intervención de los medios de pago hallados en envíos postales en los supuestos referidos en el artículo 45.

<sup>407</sup> Según dispone este artículo, “las transferencias correspondientes deberán cursarse a través de cuentas abiertas en entidades de crédito, tanto en el país de destino de los fondos como en cualquier otro en el que operen los corresponsales en el extranjero o sistemas intermedios de compensación”. De esta forma, se evita la posibilidad de acudir a sistemas de transferencias informales de fondos (TIF) basados en la confianza entre los corresponsales que operen en los distintos países “que de forma anónima y mediante un sistema de compensación de saldos que impide el seguimiento de las operaciones, mueven internacionalmente importes considerables”. (Vid. FABRA VALLS, M. “Otras disposiciones”, *Régimen Jurídico de la Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales*. Ed. Tirant lo Blanch. Madrid, 2015, págs. 250 y 251).

datos aportados periódicamente por las entidades financieras sobre la apertura o cancelación de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuentas de valores y depósitos a plazo, conteniendo los identificativos de los titulares, representantes o autorizados, así como de cualesquiera otras personas con poderes de disposición, la fecha de apertura o cancelación, el tipo de cuenta o depósito y los datos identificativos de la entidad de crédito declarante. Previa solicitud motivada, y con objeto de investigar de delitos relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, podrán facilitarse los datos del fichero a los jueces de instrucción, el Ministerio Fiscal y, previa autorización judicial o del Ministerio Fiscal, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Los artículos 50 a 61 del Reglamento desarrollan el contenido del Fichero de Titularidades Financieras, los procedimientos de consulta y acceso al mismo, las medidas relativas a la protección de datos de carácter personal, así como las sanciones por un acceso irregular a los datos fichero.

Tras regular la organización institucional de los servicios de prevención del blanqueo de capitales y de su régimen de colaboración (Capítulo VII de la Ley<sup>408</sup>), el **Capítulo VIII** se ocupa del **régimen sancionador**, clasificándose las infracciones administrativas previstas en muy graves (artículo 51), graves (artículo 52) y leves<sup>409</sup>

---

<sup>408</sup> Las previsiones reglamentarias relativas a la organización institucional de los servicios de prevención del blanqueo se desarrollan en el Capítulo VI del Reglamento (artículos 62 a 69). Sin detenernos demasiado por razones de espacio, creemos conveniente hacer una breve referencia a la organización institucional prevista en la ley preventiva y en su reglamento de desarrollo, estructurada en diversos órganos. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias es el órgano que ostenta la máxima responsabilidad en el desarrollo de políticas preventivas y de lucha contra el blanqueo de capitales en España. Está integrado por altos representantes de diferentes ministerios y otras instituciones, como el Ministerio Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial, así como por representantes de las Comunidades Autónomas. Además del Pleno, la Comisión cuenta con un Comité Permanente con amplias competencias en materia supervisora. La Comisión recibe apoyo de dos órganos, la Secretaría de la Comisión y el Servicio Ejecutivo de la Comisión (SEPBLAC). La Secretaría tiene encomendadas funciones de impulso normativo en materia de prevención, además de instruir los procedimientos sancionadores a que hubiere lugar por infracción de las obligaciones previstas en la ley preventiva, así como formular al Comité Permanente la correspondiente propuesta de resolución. El SEPBLAC tiene asignadas competencias fundamentalmente en dos ámbitos diferenciados, pero interrelacionados: la inteligencia financiera y la supervisión e inspección. Como órgano de inteligencia financiera, el SEPBLAC recibe las comunicaciones de operaciones sospechosas que tienen que realizar los sujetos obligados. Tras su análisis, emite Informes de inteligencia financiera que remite a las autoridades policiales o al Ministerio Fiscal. En el ejercicio de las funciones de supervisión e inspección, el SEPBLAC verifica el cumplimiento de los deberes de prevención por parte de los sujetos obligados. Sobre el valor probatorio de los Informes de Inteligencia Financiera, vid. con detalle ALCARAZ LAMANA, C., “La investigación del blanqueo de capitales”, *Auditoría, prevención y represión del blanqueo de capitales*. Ed. Liber Factory. Madrid, 2014, págs. 376 y ss.

<sup>409</sup> Las infracciones leves se configuran de manera residual (serán consideradas infracciones leves “aquellos incumplimientos de obligaciones establecidas específicamente en la presente ley que no constituyan infracción muy grave o grave”). Asimismo, determinadas infracciones graves podrán calificarse como leves “cuando el incumplimiento del sujeto obligado deba considerarse como ocasional o aislado a la vista del porcentaje de incidencias de la muestra de incumplimiento”. (Vid. MILANS DEL BOSCH, S., “Régimen sancionador en materia de blanqueo de capitales. Conclusiones”, *III Congreso de prevención y represión del blanqueo de*

(artículo 53), disponiendo asimismo las sanciones aplicables a cada clase de infracción (artículos 56 a 58)<sup>410</sup>, los plazos de prescripción de las infracciones y las sanciones<sup>411</sup> y un régimen de graduación de las sanciones por cuya virtud se tienen en cuenta las circunstancias previstas en el artículo 59 de la Ley<sup>412</sup>. En cuanto al procedimiento sancionador, de acuerdo con GÓMEZ-REINO CARNOTA, son de aplicación los principios constitucionales y el régimen previsto en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común<sup>413</sup>. Debe destacarse asimismo que para fomentar la imparcialidad de la decisión en materia sancionadora, el artículo 134.2 de la Ley garantiza la separación entre el órgano de instrucción y el que esté llamado a adoptar la resolución sancionadora<sup>414</sup>.

---

*capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, págs. 359 y 360).

<sup>410</sup> Sanciones normalmente pecuniarias que pueden alcanzar hasta el 5% del patrimonio neto del sujeto obligado, el duplo del contenido económico de la operación, o 1.500.000 euros -para las infracciones más graves-, constituyendo las sanciones más leves meras amonestaciones privadas o multas de hasta 60.000 euros.

<sup>411</sup> Las infracciones muy graves y graves prescribirán a los cinco años, y las leves a los dos años desde la fecha en que la infracción hubiera sido cometida. Los plazos de prescripción de las sanciones son de tres años para las infracciones muy graves, dos para las graves, y uno para las infracciones leves, contados desde la fecha de notificación de la resolución sancionadora.

<sup>412</sup> Dispone el precepto referido que: 1. Las sanciones se graduarán atendiendo a las siguientes circunstancias: a) la cuantía de la operación o las ganancias obtenidas, en su caso, como consecuencia de las omisiones o actos constitutivos de la infracción; b) la circunstancia de haber procedido o no a la subsanación de la infracción por propia iniciativa; c) las sanciones firmes en vía administrativa por infracciones de distinto tipo impuestas al sujeto obligado en los últimos cinco años con arreglo a esta Ley. En todo caso, se graduará la sanción de modo que la comisión de las infracciones no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas. 2. Para determinar la sanción aplicable de entre las previstas en los artículos 56.2, 57.2 y 58, se tomarán en consideración las siguientes circunstancias: a) el grado de responsabilidad o intencionalidad en los hechos que concurra en el interesado; b) la conducta anterior del interesado, en la entidad inculpada o en otra, en relación con las exigencias previstas en esta Ley; c) el carácter de la representación que el interesado ostente; d) la capacidad económica del interesado, cuando la sanción sea multa. 3. Para determinar la sanción aplicable por incumplimiento de la obligación de declaración establecida en el artículo 34, se considerarán como agravantes las siguientes circunstancias: a) la notoria cuantía del movimiento, considerándose en todo caso como tal aquella que duplique el umbral de declaración; b) la falta de acreditación del origen lícito de los medios de pago; c) la incoherencia entre la actividad desarrollada por el interesado y la cuantía del movimiento; d) la circunstancia de ser hallados los medios de pago en lugar o situación que muestre una clara intención de ocultarlos; e) las sanciones firmes en vía administrativa por incumplimiento de la obligación de declaración impuestas al interesado en los últimos cinco años. Un detallado análisis de la jurisprudencia en materia de régimen disciplinario previsto en la Ley preventiva puede ser consultado en SÁNCHEZ GARRIDO, J. A., *Jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo sobre el régimen disciplinario en materia de blanqueo de capitales*, La Ley 19196/2011, Año XXXII. Nº 7736, 15 de noviembre de 2011, págs. 4 y ss.

<sup>413</sup> En general, la potestad sancionadora de la Administración ha de adecuarse a los principios de legalidad, culpabilidad, personalidad de las sanciones y principio del hecho. (Vid., ampliamente, BAJO FERNÁNDEZ, M./BACIGALUPO SAGESSE, S., “Las medidas administrativas y penales para la prevención del blanqueo de capitales”, *Política criminal y blanqueo de capitales*, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2009, págs. 142 y ss.; GÓMEZ-REINO CARNOTA, E., “Aspectos administrativos de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo”, op. cit., págs. 102 y 103.; OLLER RUBERT, M., “Régimen sancionador en la prevención y represión del blanqueo de capitales”, *Régimen Jurídico de la Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales*. Ed. Tirant lo Blanch. Madrid, 2015, págs. 275 y ss.

<sup>414</sup> Si bien, afirma GÓMEZ-REINO, “la práctica no se compadece con la garantía de imparcialidad (...) ya que los funcionarios encargados de la instrucción de expedientes se hallan en una relación de dependencia jerárquica de las autoridades decisorias, lo que propicia la intervención de éstas en los trabajos de instrucción y

Es de reseñar, por último, el régimen de concurrencia de sanciones y vinculación con el orden penal previsto en el artículo 62 de la Ley. En atención al principio constitucional que consagra la prohibición del *bis in idem*<sup>415</sup>, la norma referida dispone que “no podrán sancionarse con arreglo a esta Ley las conductas que lo hubieran sido penal o administrativamente cuando se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento jurídico” (artículo 62.2).

En cualquier momento del procedimiento administrativo sancionador en que se estime que los hechos pudieran ser constitutivos de ilícito penal, la Secretaría de la Comisión dará traslado de los mismos al Ministerio Fiscal, solicitándole testimonio sobre las actuaciones practicadas al efecto y acordará la suspensión de aquél hasta que se reciba la correspondiente comunicación o hasta que recaiga resolución judicial. Si el Ministerio Fiscal no encontrara méritos para proceder penalmente contra todos o alguno de los sujetos obligados, lo comunicará a la Secretaría de la Comisión para que pueda continuar el procedimiento administrativo sancionador. Si, por el contrario, el Ministerio Fiscal interpusiera denuncia o querella, comunicará dicha circunstancia a la Secretaría de la Comisión, así como el resultado de tales actuaciones. La resolución que se dicte en el procedimiento administrativo sancionador deberá respetar, en todo caso, los hechos declarados probados en la sentencia (apartados 3º, 4º y 5º del artículo 62 de la ley preventiva).

---

que en las parcelas en que la potestad sancionadora se ejerce en masa (...) la instrucción y la decisión se [realicen], de hecho, por las mismas personas”. (Ibidem, pág. 103).

<sup>415</sup> Vid., con detalle, GARCÍA-PABLOS MOLINA, A., Introducción al derecho penal. Centro de Estudios Ramón Areces, 4ª edición, Madrid, 2.006, pág. 113.



## **CAPÍTULO SEGUNDO. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO**





## **2.1 EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALS**

### **2.1.1. INTRODUCCIÓN**

En el primer capítulo hemos visto que, si bien el fenómeno del blanqueo de activos de origen delictivo no es algo novedoso, la tipificación del delito de blanqueo sí es de reciente aparición. Desde su incorporación al Código anteriormente vigente, el delito de blanqueo ha experimentado sucesivas modificaciones caracterizadas fundamentalmente por una progresiva ampliación del ámbito típico, constituyendo un ejemplo paradigmático del proceso que SILVA SÁNCHEZ calificó como “expansión del Derecho penal”<sup>1</sup>.

El legislador de 1995 configuró el delito de blanqueo de forma muy similar a la formulación contenida del artículo 344 bis h) del Texto refundido de 1973, precepto que introdujo el delito de blanqueo en el Ordenamiento penal español mediante una “transcripción cuasiliteral y mecánica”<sup>2</sup> de la Convención de Viena de 1988. La doctrina ha coincidido al afirmar que, como consecuencia de esta censurable técnica legislativa, el precepto que regula el delito de blanqueo es sumamente defectuoso y ambiguo. Como veremos, este delito se estructura a través de distintas modalidades comisivas dolosas, alguna de ellas conformada a su vez por otras tantas conductas alternativas, una modalidad imprudente y diversas modalidades agravadas. El artículo 301.1 CP, en vez de definir con precisión el comportamiento típico, refiriéndolo a lo que en esencia conforma el fenómeno de blanqueo (ocultación del origen o naturaleza ilícita de los beneficios derivados de hechos delictivos para facilitar su reintegración en el tráfico lícito), configura el delito a través de la enumeración casuística de diferentes comportamientos, muy dispares entre sí, integrándolos de una forma ciertamente confusa que provoca importantes interrogantes sobre la relación entre unas y otras modalidades de acción. Si la formulación inicial del artículo 301.1 CP no fue precisamente afortunada, las continuas reformas operadas en el precepto, lejos de

---

<sup>1</sup> Vid. SILVA SÁNCHEZ, J. M, *La expansión de Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales*, op. cit., págs. 17 y ss.

<sup>2</sup> Vid. HUERTA TOCILDO, S., “Aproximación crítica a la nueva regulación del delito de receptación y otras conductas afines”, op. cit., pág. 385.

perfeccionar la configuración del delito, dificultan aún más una comprensión unitaria del mismo, al incorporar nuevas conductas que muy poco tienen que ver con el blanqueo<sup>3</sup>.

Como tendremos ocasión de comprobar, las sucesivas modificaciones del tipo penal son expresión de una tendencia político-criminal manifiestamente expansiva que persigue una progresiva ampliación de su ámbito de aplicación. Al estudiar la evolución legislativa del delito, veremos que el fenómeno expansivo se ha desarrollado en diferentes ámbitos. En primer lugar, en lo que al objeto material del delito se refiere, si bien en el Texto refundido de 1973 el delito de blanqueo limitaba su ámbito a los bienes o activos procedentes de delitos relacionados con el tráfico ilegal de drogas, tras la entrada en vigor del Código de 1995 pasó a sancionarse toda reintegración de bienes que tuviera origen en los delitos considerados graves. A su vez, la reforma de 2003 extendió el objeto material a los bienes procedentes de cualquier delito. Asimismo, se ha ampliado considerablemente el elenco de conductas típicas: la reforma operada en el Código en el año 2010 introdujo la posesión y la utilización como nuevas modalidades comisivas e incriminó expresamente el autoblanqueo, posibilitando la sanción penal de conductas, como veremos, de dudoso merecimiento de pena<sup>4</sup>. Con todo, la orientación expansiva de que es expresiva la reforma de 2010 se ha manifestado en otros aspectos relacionados con el tipo de blanqueo, tales como el incremento de los subtipos agravados, la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ámbito de este delito y la ampliación del comiso.

En definitiva, la formulación actual del delito de blanqueo es fruto de una progresiva línea de expansión<sup>5</sup> caracterizada por una sucesiva ampliación del ámbito típico. Como veremos, esta tendencia no siempre ha estado justificada, y parece obedecer, más que a razones de necesidad, a las directrices de diversos instrumentos internacionales ratificados por España y a las exigencias comunitarias en materia de prevención y represión del blanqueo de capitales. En cualquier caso, como resultado de

---

<sup>3</sup> Vid. MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Prevención y sanción del blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 373; id., “Receptación y blanqueo de capitales (arts. 301 y 302)”, op. cit., págs. 342 y 343; CASTRO MORENO, A., “Reflexiones críticas sobre las nuevas conductas de posesión y utilización en el delito de blanqueo de capitales en la reforma del anteproyecto de 2008”, *La Ley*, n° 7277, 2009, op. cit., pág. 1388.

<sup>4</sup> Vid. ROBLES PLANAS, R./PASTOR MUÑOZ, N., *Lecciones de Derecho Penal. Parte Especial*, op. cit., pág. 252; MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Ganancias criminales y ganancias no declaradas (El desbordamiento del delito fiscal y del blanqueo)”, *Libro homenaje al Prof. Luis Rodríguez Ramos*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, págs. 662 y 663.

<sup>5</sup> Vid. VIDALES RODRÍGUEZ, C., “El delito de blanqueo de capitales”, *Régimen Jurídico de la Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales*. Ed. Tirant lo Blanch. Madrid, 2015, pág. 329.

las sucesivas reformas, la actual configuración del artículo 301 CP ha desbordado los límites de la figura del blanqueo<sup>6</sup> hasta presentar en la actualidad contornos casi inabarcables, conformando “un tipo de recogida que todo lo admite”<sup>7</sup>.

### **2.1.1. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS**

Si bien el Código penal unifica en un solo precepto, el artículo 301, todas las conductas constitutivas del delito de blanqueo, el texto punitivo anteriormente vigente tipificaba los diferentes comportamientos de blanqueo de forma separada y en diversos preceptos<sup>8</sup>. Los antecedentes de la actual regulación del delito de blanqueo se encuentran en una modalidad de receptación *sui generis* que incorporaba el artículo 546 bis f) del Texto refundido de 1973, introducido por la Ley Orgánica 1/1988, así como en los artículos 344 bis h) y 344 bis i) del referido cuerpo legal, incorporados por la Ley Orgánica 8/1992<sup>9</sup>.

#### **EL ARTÍCULO 546 BIS f), INTRODUCIDO POR LA LEY ORGÁNICA 1/1988**

El blanqueo de capitales se tipificó como delito por primera vez en España mediante la reforma del entonces vigente Código penal de 1973, operada por la Ley Orgánica 1/1988, que revisaba el texto punitivo fundamentalmente en materia de tráfico de drogas. A través de dicho texto legal -anterior a la aprobación de la Convención de Viena<sup>10</sup>- se introdujo el artículo 546 bis f), precepto que limitaba la actividad delictiva

---

<sup>6</sup> Vid. MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Prevención y sanción del blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 373.

<sup>7</sup> Vid. MATA LLÍN EVANGELIO, A., “El “autoblanqueo” de capitales”, op. cit., págs. 2 y 40.

<sup>8</sup> Vid. BLANCO LOZANO, C., “El blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas en el ordenamiento penal español”, op. cit., pág. 71; MORENO CÁNOVES, A./ RUIZ MARCO, F., *Delitos socioeconómicos*, Zaragoza, 2006, pág. 383; LOBO GONZÁLEZ, R./ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, M., *Código Penal. Parte especial. Tomo II. Vol. II*, op. cit., pág. 191.

<sup>9</sup> Vid. HUERTA TOCILDO, S., “Aproximación crítica a la nueva regulación del delito de receptación y otras conductas afines”, op. cit., pág. 384; VIVES ANTÓN, T. S./ GONZÁLEZ CUSSAC, J. L., *Comentarios al Código Penal de 1995, I*, op. cit., pág. 1462.

<sup>10</sup> Como vimos, la Convención de Viena, ratificada por España en 1990, fue el primer instrumento internacional que ordenó a los Estados firmantes tipificar como delito el blanqueo, si bien limitando su objeto a aquellos capitales o bienes procedentes de delitos relativos al tráfico de drogas. No obstante, como apunta DÍEZ RIPOLLÉS, el texto de la LO 1/1988 estuvo “directamente inspirad[o] en los últimos borradores” de la Convención de Viena, aprobada meses más tarde. (“El blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas. La recepción de la legislación internacional en el ordenamiento penal español”, *Cuadernos de derecho Judicial I*, 1994. CGPJ. Madrid, 1994, pág. 155).

al blanqueo de efectos o ganancias derivados del tráfico ilícito de drogas. Su tenor literal era el siguiente:

“El que con conocimiento de la comisión de alguno de los delitos regulados en los artículos 344 a 344 bis b) de este Código recibiere, adquiriere o de cualquier otro modo se aprovechara para sí o para un tercero de los efectos o ganancias del mismo, será castigado con prisión menor y multa de un millón a 100 millones de pesetas.

Se impondrán las penas superiores en grado a los reos habituales de este delito y a las personas que pertenecieren a una organización dedicada a los fines señalados en este artículo.

En los casos previstos en el párrafo anterior, así como cuando, a juicio del tribunal, los hechos contemplados en este artículo fueren de especial gravedad, se impondrá, además de la pena correspondiente, la inhabilitación del reo para el ejercicio de su profesión o industria y el cierre del establecimiento por tiempo de seis meses a seis años o con carácter definitivo.

Serán aplicables a los supuestos contemplados en este precepto las disposiciones contenidas en el artículo 344 bis e) del presente Código”.

Como se puede observar, el núcleo del comportamiento típico se estructuraba en torno al verbo “aprovechar”<sup>11</sup>. Por ello, la doctrina mayoritaria categorizó el tipo previsto en el artículo 546 bis f) como un supuesto de receptación específica<sup>12</sup>, en el que

---

<sup>11</sup> Vid. CARPIO DELGADO, J. del, “La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales”, *Revista General de Derecho Penal*, nº 15, 2011, pág. 8, disponible en el siguiente enlace: [http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/upo/profesores/jcardel/profesor/1353591812163\\_2011-la\\_posesion\\_y\\_utilizacion\\_como\\_nuevas\\_conductas\\_en\\_el\\_delito\\_de\\_blanqueo\\_de\\_capitales-revista\\_general\\_de\\_derecho\\_15.pdf](http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/upo/profesores/jcardel/profesor/1353591812163_2011-la_posesion_y_utilizacion_como_nuevas_conductas_en_el_delito_de_blanqueo_de_capitales-revista_general_de_derecho_15.pdf).

<sup>12</sup> Diferenciado del concepto tradicional de receptación, la estructura típica de la nueva modalidad mostraría que precepto no estaba llamado a proteger el patrimonio sino la salud pública, o todo lo más, la administración de justicia en sentido amplio. “Sólo razones ligadas a ciertas semejanzas externas con el comportamiento de la receptación, unidas a dificultades técnicas para encontrar un lugar sistemático adecuado” motivaron su ubicación junto a los delitos de receptación. (Vid. DÍEZ RIPOLLÉS, J. L., “El blanqueo de capitales precedente del tráfico de drogas. La recepción de la legislación internacional en el ordenamiento penal español”, op. cit., pág. 162). En el mismo sentido, considerando el tipo previsto en el art. 546 bis f) como un supuesto de receptación específica, vid. HUERTA TOCILDO, S., “Aproximación crítica a la nueva regulación del delito de receptación y otras conductas afines”, op. cit., pág. 383; CARPIO DELGADO, J. del, “La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 8; FARALDO CABANA, P., “Aspectos básicos del delito de blanqueo de bienes en el Código Penal de 1995”, op. cit., pág. 122; BACIGALUPO ZAPATER, E., “Estudio comparativo del Derecho Penal de los Estados Miembros de la Unión Europea sobre la represión del reciclaje o blanqueo de dinero ilícitamente obtenido”, op. cit., pág. 448; CALDERÓN CEREZO, A., *Comentarios al Código penal*, vol. 3, op. cit., pág. 2292; LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J./ALONSO GONZÁLEZ, A./ENCINAR DEL POZO, M. A., *Código Penal comentado con jurisprudencia sistematizada y concordancias*. Dir. Juan Saavedra Ruiz. Ed. El Derecho. 1ª edición, Madrid, 2010, pág. 935; VIDALES RODRÍGUEZ, C., “Blanqueo, ¿qué es blanqueo? (Estudio del artículo 301.1 del Código Penal Español tras la reforma de la LO 5/2010)”, *Revista General de Derecho Penal*,

el aprovechamiento de aquellos efectos o ganancias podía beneficiar tanto al partícipe en el delito antecedente como a un tercero y se extendía incluso a la mera posesión del efecto o ganancia<sup>13</sup>.

### **LOS ARTÍCULOS 344 BIS h) Y 344 BIS i), INTRODUCIDOS POR LA LEY ORGÁNICA 8/1992**

La Ley Orgánica 8/1992, dando cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por España por virtud de la Convención de Naciones Unidas de 1988 y de la Directiva Comunitaria 91/308 CEE<sup>14</sup>, instrumentó la segunda reforma penal en materia de blanqueo. Dicha norma, reproduciendo prácticamente de forma literal los textos internacionales referidos<sup>15</sup>, introdujo los artículos 344 bis h) y 344 bis i), por los que el delito de blanqueo seguía vinculado al tráfico de drogas como delito precedente, si bien confiriendo al tipo una estructura distinta a la contenida en el artículo 546 bis f)<sup>16</sup>, cuya vigencia se mantuvo.

En concreto fueron tipificadas las siguientes conductas:

---

nº 18, 2012. Ed. Iustel, 2013, pág. 8. En contra de esta interpretación mayoritaria, GÓMEZ PAVÓN consideró que el artículo 546 bis f) no tipificaba una forma de receptación, sino que constituía un supuesto *sui generis* de favorecimiento real, pues con la conducta blanqueadora “se intenta evitar u obstaculizar la identificación de lo obtenido previamente, ocultar su origen ilícito y por tanto, evitar el descubrimiento del delito”. (“El bien jurídico protegido en la receptación, blanqueo de dinero y encubrimiento”, *Estudios de Derecho Judicial nº 1*. CGPJ. Madrid, 1994, págs. 215 y 216).

<sup>13</sup> Vid. DÍEZ RIPOLLÉS, J. L., “El blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas. La recepción de la legislación internacional en el ordenamiento penal español”, op. cit., págs. 156-162; ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 330.

<sup>14</sup> Vid. DÍEZ RIPOLLÉS, J. L., “El blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas. La recepción de la legislación internacional en el ordenamiento penal español”, op. cit., pág. 170; HUERTA TOCILDO, S., “Aproximación crítica a la nueva regulación del delito de receptación y otras conductas afines”, op. cit., pág. 384; FARALDO CABANA, P., “Aspectos básicos del delito de blanqueo de bienes en el Código Penal de 1995”, op. cit., pág. 123; FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 199; SUÁREZ GONZÁLEZ, C. J., “Blanqueo de capitales y merecimiento de pena: consideraciones críticas a la luz de la legislación española”, *Cuadernos de Política Criminal* nº 58, 1996, pág. 133; ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 330; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 181 y 182.

<sup>15</sup> En sentido crítico con la “colonización jurídica” que supuso la incorporación los arts. 344 bis h) y 344 bis i) al texto punitivo entonces vigente, que se tradujo en “la aparición de preceptos sumamente defectuosos desde el punto de vista técnico”, vid. HUERTA TOCILDO, S., “Aproximación crítica a la nueva regulación del delito de receptación y otras conductas afines”, op. cit., pág. 385. Asimismo, DÍEZ RIPOLLÉS, J. L., “El blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas. La recepción de la legislación internacional en el ordenamiento penal español”, op. cit., págs. 172 y 173; FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 351; CALDERÓN CEREZO, A., “Algunos aspectos críticos del blanqueo de capitales. Legislación y jurisprudencia”, op. cit., pág. 67; BLANCO LOZANO, C., “El blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas en el ordenamiento penal español”, op. cit., págs. 86 y 87.

<sup>16</sup> Vid. CARPIO DELGADO, J. del, “La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 8.

1. Convertir o transferir bienes a sabiendas de que los mismos proceden de alguno o algunos de los delitos expresados en los artículos anteriores (delitos de narcotráfico), o realizar un acto de participación en tales delitos, con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tales delitos, a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones. (*Artículo 344 bis h) 1*).

2. Ocultar o encubrir la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad reales de bienes o derechos relativos a los mismos, a sabiendas de que proceden de alguno de los delitos expresados en los artículos anteriores o de un acto de participación en los mismos. (*Artículo 344 bis h) 2*).

3. Realizar las conductas anteriores por negligencia o ignorancia inexcusables. (*Artículo 344 bis h) 3*).

4. Adquirir, poseer o utilizar bienes, a sabiendas, en el momento de recibirlos, de que los mismos proceden de alguno de los delitos expresados en los artículos anteriores. (*Artículo 344 bis i*)).

De acuerdo con el riguroso análisis abordado por el Profesor DÍEZ RIPOLLÉS de los diferentes preceptos incorporados por la LO 8/1992, las letras h) e i) del artículo 344 bis del Texto refundido de 1973 pasarían a tipificar autónomamente diferentes supuestos de receptación y encubrimiento<sup>17</sup>.

En primer lugar, la conducta prevista en el artículo 344 bis h) 2 contenía “una estructura típica equivalente a la de una receptación específica”<sup>18</sup>. La segunda variante del artículo 344 bis h) 1, además de la receptación específica, tipificaba de manera autónoma un supuesto de favorecimiento real<sup>19</sup>. La primera variante del precepto señalado contenía una tentativa de la receptación aludida, tipificada autónomamente<sup>20</sup>.

---

<sup>17</sup> Vid. DÍEZ RIPOLLÉS, J. L., “El blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas. La recepción de la legislación internacional en el ordenamiento penal español”, op. cit., pág. 174; SUÁREZ GONZÁLEZ, C. J., “Blanqueo de capitales y merecimiento de pena: consideraciones críticas a la luz de la legislación española”, op. cit., pág. 134.

<sup>18</sup> Vid. DÍEZ RIPOLLÉS, J. L., “El blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas. La recepción de la legislación internacional en el ordenamiento penal español”, loc. cit. Receptación específica “en las que conductas delictivas de referencia son las de autoría o participación, y cuyas modalidades comisivas de aprovechamiento son las de ocultación o encubrimiento de los bienes de procedencia ilícita”, y que en el plano subjetivo exigen tanto conocimiento -incluido el eventual- del origen ilícito de los bienes como ánimo de lucro, propio o ajeno. (Ibidem, págs. 174 y 175).

<sup>19</sup> Ibidem, pág. 175.

<sup>20</sup> Ibidem.

Por su parte, el artículo 344 bis i) tipificaba una modalidad de receptación de características similares a la prevista en el artículo 344 bis h) 2, en la que el aprovechamiento se materializaba a través de la adquisición, posesión o utilización de bienes<sup>21</sup>.

La tercera variante del artículo 344 bis h) 1 contenía conductas de receptación y favorecimiento real “previamente pactados que ya [eran] punibles sin mayores problemas como supuestos de participación propia en los delitos de tráfico de drogas o precursores”<sup>22</sup>.

La modalidad comisiva imprudente del artículo 344 bis h) 3, fue objeto de intensas críticas doctrinales, censurándose aquélla como “extensión que va más lejos” de lo que proponían los instrumentos internacionales ratificados por España, esencialmente la Convención del Consejo de Europa, pues dicho texto internacional refería la imprudencia exclusivamente al desconocimiento de la procedencia ilícita de los bienes, y el legislador español la extendió a las propias conductas de ocultación y encubrimiento<sup>23</sup>. En cualquier caso, la doctrina más autorizada limitó la modalidad imprudente respecto a una de las dos modalidades de receptación consumada, la contenida en el artículo 344 bis h) 2, y ello debido a las especiales finalidades de ocultar, encubrir o de ayudar que el artículo 344 bis h) 1 precisaba como elementos subjetivos del tipo de obligada concurrencia<sup>24</sup>. Más discutible se consideró su extensión a las tentativas de receptación, de favorecimiento real, y sus homólogas previamente pactadas, del artículo 344 bis h) 1<sup>25</sup>.

En cualquier caso, los nuevos artículos no dejaron sin contenido el artículo 546 bis f), por lo que el blanqueo de capitales pasó a regularse en dos preceptos distintos del Código. El resultado de las sucesivas reformas del texto punitivo fue ampliamente censurado por la doctrina especializada, calificándolo de “auténtico galimatías jurídico”<sup>26</sup> fruto de técnicas legislativas más que dudosas<sup>27</sup>, que provocó una

---

<sup>21</sup> Ibidem, pág. 176.

<sup>22</sup> Ibidem, pág. 177.

<sup>23</sup> Ibidem, pág. 173.

<sup>24</sup> Ibidem, pág. 177.

<sup>25</sup> Ibidem, págs. 177 y 180.

<sup>26</sup> Ibidem, pág. 180.

<sup>27</sup> Vid. HUERTA TOCILDO, S., “Aproximación crítica a la nueva regulación del delito de receptación y otras conductas afines”, op. cit., pág. 386; DÍEZ RIPOLLÉS, J. L., “El blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas. La recepción de la legislación internacional en el ordenamiento penal español”, op. cit., pág. 180; SUÁREZ GONZÁLEZ, C. J., “Blanqueo de capitales y merecimiento de pena: consideraciones críticas a la luz de la legislación española”, op. cit., pág. 133; BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I./ FABIÁN



injustificable duplicidad de tipicidades causante de importantes problemas concursales<sup>28</sup>. Se dijo incluso que la reforma de 1992 introdujo en los artículos 344 bis h) y 344 bis i) “modalidades típicas que no eran precisamente de blanqueo”<sup>29</sup>.

En este contexto, un sector mayoritario de la doctrina celebró la nueva configuración del tipo de blanqueo en el Código penal de 1995 como delito autónomo<sup>30</sup>, desvinculado del tráfico de drogas como delito base<sup>31</sup>. Si bien inicialmente fue condición necesaria que el delito precedente fuera un delito grave (asociado entonces a penas privativas de libertad superiores a los 3 años), la exigencia cualificativa de la gravedad del delito previo desapareció con la reforma del Código del año 2003. En efecto, desde entrada en vigor de la LO 15/2003, cualquier tipo penal, con independencia de su gravedad, pasó a considerarse apto como delito antecedente. Consecuencia directa e inmediata de esta reforma fue la ampliación del ámbito de aplicación del delito de blanqueo<sup>32</sup>, ámbito de aplicación que ha vuelto a incrementarse recientemente, como más adelante veremos, con la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio.

---

CAPARRÓS, E. A., “La emancipación del delito de blanqueo de capitales en el Derecho penal español”, op. cit., pág. 119.

<sup>28</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Comentarios al Código Penal*, op. cit., pág. 661. En el mismo sentido crítico, DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, J., *El blanqueo de capitales en Derecho Español*, op. cit., pág. 11; DÍEZ RIPOLLÉS, J. L., “El blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas. La recepción de la legislación internacional en el ordenamiento penal español”, op. cit., pág. 180; VIDALES RODRÍGUEZ, C., “La última reforma del Código Penal en materia de drogas. (Novedades introducidas por la Ley Orgánica de 12 de noviembre de 1992)”, *Revista General de Derecho*, n° 583, 1993, pág. 2732; id., *Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código penal de 1995*, op. cit., pág. 84; MARTINOT, S., “Tráfico de drogas y blanqueo de dinero ¿una política criminal europea?”, op. cit., pág. 995.

<sup>29</sup> Vid. CARPIO DELGADO, J. del, “La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 9.

<sup>30</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., “El blanqueo de capitales (Contexto, razones de su penalización, evolución en nuestro entorno de las iniciativas supranacionales)”, op. cit., pág. 173; id., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 201 y ss.; SUÁREZ GONZÁLEZ, C. J., “Blanqueo de capitales y merecimiento de pena: consideraciones críticas a la luz de la legislación española”, op. cit., pág. 135.

<sup>31</sup> Teniendo en cuenta la naturaleza delictiva “de segundo grado” del tipo de blanqueo, “en la medida en que sólo existe si hay unos bienes que tengan su origen en un delito anterior” (vid. BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I. /FABIÁN CAPARRÓS, E. A., “La emancipación del delito de blanqueo de capitales en el Derecho penal español”, op.cit., pág. 126), se considera delito base o de referencia a aquél que origina los bienes que son objeto de la conducta típica de blanqueo. (Vid. GÓMEZ BENÍTEZ, J. M., “Reflexiones técnicas y de política criminal sobre el delito de blanqueo de bienes”, *Cuadernos de política criminal*, n° 91, 2007. Edersa. Madrid, 2007, pág. 5). Diferentes autores han identificado el delito de referencia como delito principal, base, subyacente, antecedente, previo, determinante, etc., expresiones todas ellas que, con un mismo significado, aluden comúnmente al delito del que proceden los bienes, aquél a cuyo beneficio económico se trata en definitiva de dar apariencia de licitud.

<sup>32</sup> Lo que a juicio de algunos autores supuso ya una desmesurada ampliación del tipo. (Vid. MUÑOZ CONDE, F., *Derecho Penal. Parte Especial*, op. cit., pág. 514; GIL DE LA FUENTE, J., “La criminalidad organizada y el delito de asociación ilícita: referencia al delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 35; VIDALES RODRÍGUEZ, C., “El delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 330).

## 2.1.2. REGULACIÓN ACTUAL. CÓDIGO PENAL DEL 1995 Y SUS SUCESIVAS REFORMAS

El Código penal vigente regula el delito de blanqueo de capitales en los artículos 301 a 304, contenidos en el Capítulo XIV, del Título XIII, del Libro II, bajo la rúbrica “De la receptación y el blanqueo de capitales”<sup>33</sup>.

Como ha puesto de manifiesto BLANCO CORDERO, la configuración típica del delito en el artículo 301 CP es similar, “salvo ciertas correcciones técnicas”, al artículo 344 bis h) del Código derogado, volviendo el legislador penal a hacer “una transposición casi textual de los Convenios internacionales relativos al blanqueo de capitales, fundamentalmente (...) el Convenio de Naciones Unidas de 1988”<sup>34</sup>. A pesar del acierto de unificar en un mismo precepto las diferentes modalidades de blanqueo<sup>35</sup>, la doctrina se ha mostrado convenientemente crítica con la formulación del tipo penal llevada a cabo por el legislador de 1995<sup>36</sup>. La enunciación actualmente vigente del

---

<sup>33</sup> Rubrica más acertada que la prevista en la redacción original del Código, “De la receptación y otras conductas afines”, pues como acertadamente había puesto de manifiesto la doctrina, “esa pretendida afinidad [era] muy discutida”. (Vid. HUERTA TOCILDO, S., “Aproximación crítica a la nueva regulación del delito de receptación y otras conductas afines”, op. cit., pág. 386). Tanto la doctrina como los diferentes operadores jurídicos han aplaudido en general este nuevo *nomen iuris*, incorporado por la Ley Orgánica 5/2010 de reforma del Código Penal. (Vid. MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Receptación y blanqueo de capitales (arts. 301 y 302)”, op. cit., pág. 340; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 185 y 186; FERNÁNDEZ TERUELO, J. G., “Blanqueo de capitales”, op. cit., marginal 2936).

<sup>34</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 191. En el mismo sentido, FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, pág. 359; DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, J., *El blanqueo de capitales en Derecho Español*, op. cit., págs. 11 y 12; id., “Recepción de las propuestas del GAFI de las Directivas europeas sobre el blanqueo de capitales en el derecho español”, op. cit., pág. 45; HUERTA TOCILDO, S., “Aproximación crítica a la nueva regulación del delito de receptación y otras conductas afines”, op. cit., pág. 387; FARALDO CABANA, P., “Aspectos básicos del delito de blanqueo de bienes en el Código Penal de 1995”, op. cit., pág. 123; id., “Los autores del delito de blanqueo de bienes en el Código Penal español de 1995. Especial alusión a los proveedores de bienes y/o servicios: el caso de los abogados y asesores fiscales”, ADPCP, LIX, 2006, pág. 137; id., “Los profesionales del derecho ante el blanqueo de bienes, prevención del blanqueo y secreto profesional: el ejercicio de la profesión como conducta típica de blanqueo”, *Revista de derecho y proceso penal*, nº 16, 2006, pág. 14; SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, J. L., “Algunas cuestiones relativas a la regulación penal del blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 779.

<sup>35</sup> Vid. HUERTA TOCILDO, S., “Aproximación crítica a la nueva regulación del delito de receptación y otras conductas afines”, op. cit., pág. 387; ABEL SOUTO, M., “Década y media de vertiginosa política criminal en la normativa penal española contra el blanqueo: análisis de los tipos penales contra el blanqueo desde su incorporación al Texto punitivo español en 1988 hasta la última reforma de 2003”, op. cit., págs. 19-21.

<sup>36</sup> Vid. VIDALES RODRÍGUEZ, C., *Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código penal de 1995*, op. cit., pág. 95; id., “El delito de blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 328 y 329; ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 220; FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 359 y 360; ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., pág. 91; CALDERÓN CEREZO, A., *Comentarios al Código penal*, vol. 3, op. cit., pág. 2295; ÁLVAREZ-SALA WALTER, J., *El blanqueo de capitales y las profesiones jurídicas*, op. cit., pág. 9; QUINTERO OLIVARES, G., *Comentarios a la Parte especial del Derecho penal*, op. cit., pág. 943; MARTÍNEZ DE SALINAS, L., “Últimas tendencias jurisprudenciales en materia de blanqueo de capitales”, *II Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez

delito de blanqueo de capitales es fruto de las reformas del Código Penal operadas por las Leyes Orgánicas 15/2003, de 25 de noviembre, y 5/2010, de 22 de junio, y en ella se recoge un tipo básico doloso integrado por diversas modalidades comisivas, un tipo imprudente y varios subtipos cualificados, por razón de la procedencia de los bienes (delitos de narcotráfico y aquellos comprendidos en los Capítulos V, VI, VII, VIII, IX y X del Título XIX, así como alguno de los delitos del Capítulo I del Título XVI), por la pertenencia de los culpables a una organización dedicada al blanqueo (artículo 302), o por la consideración personal del culpable (artículo 303)<sup>37</sup>.

El artículo 301 CP contiene el tipo básico de blanqueo, excepción hecha, como acabamos de ver, de los párrafos segundo y tercero del artículo 301.1, que prevén diversas modalidades agravadas. Su tenor literal es el siguiente:

**Artículo 301. 1.** El que adquiriera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. En estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años.

La pena se impondrá en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en alguno de los delitos relacionados con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas descritos en los artículos 368 a 372 de este Código. En estos supuestos se aplicarán las disposiciones contenidas en el artículo 374 de este Código.

También se impondrá la pena en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en alguno de los delitos comprendidos en los Capítulos V, VI, VII, VIII, IX y X del Título XIX o en alguno de los delitos del Capítulo I del Título XVI.

---

Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, págs. 32 y 33; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 447.

<sup>37</sup> Vid. CALDERÓN CERREZO, A., “Algunos aspectos críticos del blanqueo de capitales. Legislación y jurisprudencial”, op. cit., pág. 70.

2. Con las mismas penas se sancionará, según los casos, la ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos, a sabiendas de que proceden de alguno de los delitos expresados en el apartado anterior o de un acto de participación en ellos.

3. Si los hechos se realizasen por imprudencia grave, la pena será de prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al triplo.

4. El culpable será igualmente castigado aunque el delito del que provinieren los bienes, o los actos penados en los apartados anteriores hubiesen sido cometidos, total o parcialmente, en el extranjero.

5. Si el culpable hubiera obtenido ganancias, serán decomisadas conforme a las reglas del artículo 127 de este Código.

Los números 1 y 2 del precepto conforman el prolijo y confuso entramado de conductas típicas que integran el delito doloso<sup>38</sup>. La actual formulación del artículo 301.1 prevé cinco comportamientos expresamente determinados<sup>39</sup> (*adquisición, posesión, utilización, conversión o transmisión* de bienes a sabiendas de que tienen origen en una actividad delictiva), y una conducta genérica, *realizar cualquier otro acto*, delimitada por las tres finalidades específicamente previstas en el precepto. Muy diferentes interpretaciones doctrinales han tratado de clarificar el preciso contenido y la naturaleza de cada una de las modalidades típicas de conducta, específicas o genérica, previstas en el primer ordinal del artículo 301 (*adquisición, posesión, utilización, conversión o transmisión* de bienes a sabiendas de que tienen origen en un delito; *realización de cualquier otro acto* dirigido a *ocultar o encubrir* el origen ilícito de los

---

<sup>38</sup> La compleja y confusa redacción de los números 1 y 2 del artículo 301 CP ha sido ampliamente criticada por la doctrina. (Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 219 y 220; FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 360; ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 338 y ss.; CARPIO DELGADO, J. del, *El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal*, op. cit., pág. 165; VIDALES RODRÍGUEZ, C., *Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código penal de 1995*, op. cit., pág. 95; ABEL SOUTO, M., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, *I Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed: Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, págs. 175 y 176; QUINTERO OLIVARES, G., *Comentarios a la parte especial del Derecho penal*, Ed. Thomson. 8ª edición. Cizur Menor, 2.009, pág. 945; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 447).

<sup>39</sup> Vid. CARPIO DELGADO, J. del, “La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 10.

bienes o a *ayudar* al autor o partícipe del delito previo a eludir las consecuencias de sus actos), así como la relación de las referidas conductas entre sí y respecto a aquella otra contenida en el número 2 de dicho artículo -la *ocultación o encubrimiento* de la verdadera naturaleza origen, ubicación, destino o derechos sobre bienes de origen delictivo-. De estas cuestiones nos ocuparemos en profundidad más adelante, en el capítulo siguiente.

El número 3 del artículo 301 prevé el delito imprudente de blanqueo, que, a través de una fórmula muy criticada por la doctrina, castiga “los hechos” descritos en los dos números anteriores cuando se cometan por imprudencia grave. El número 4 del artículo referido consagra el principio de justicia universal<sup>40</sup> en materia de blanqueo, como excepción al principio de territorialidad: se prevé la punición del blanqueo aunque los delitos -tanto el precedente como el constitutivo de blanqueo- “hubiesen sido cometidos, total o parcialmente, en el extranjero.” En fin, el número 5 del precepto prevé el decomiso de los bienes que hayan sido objeto de blanqueo, conforme a lo dispuesto en el artículo 127 CP.

Los artículos 302 y 303 contemplan sendos subtipos agravados de blanqueo. El primero de ellos<sup>41</sup> prevé la pena privativa de libertad aplicada en su mitad superior cuando la conducta blanqueadora sea cometida por persona integrada en una organización dedicada al blanqueo, y pena superior en grado para sus “jefes, administradores o encargados”, así como determinadas penas en supuestos de responsabilidad penal de una persona jurídica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis del Código. Por su parte, el artículo 303 CP<sup>42</sup> castiga al “empresario,

---

<sup>40</sup> Vid. ESCRIBUELA CHUMILLA, F. J., “La Receptación y el Blanqueo de Capitales”, *Todo Penal*. Ed. La Ley, Madrid, 2011, pág. 1093.

<sup>41</sup> *Artículo 302*. “1. En los supuestos previstos en el artículo anterior se impondrán las penas privativas de libertad en su mitad superior a las personas que pertenezcan a una organización dedicada a los fines señalados en los mismos, y la pena superior en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones. 2. En tales casos, cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis sea responsable una persona jurídica, se le impondrán las siguientes penas: a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años. b) Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b a g del apartado 7 del artículo 33”.

<sup>42</sup> *Artículo 303*. “Si los hechos previstos en los artículos anteriores fueran realizados por empresario, intermediario en el sector financiero, facultativo, funcionario público, trabajador social, docente o educador, en el ejercicio de su cargo, profesión u oficio, se le impondrá, además de la pena correspondiente, la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, industria o comercio, de tres a 10 años. Se impondrá la pena de inhabilitación absoluta de diez a veinte años cuando los referidos hechos fueren realizados por autoridad o agente de la misma. A tal efecto, se entiende que son facultativos los médicos, psicólogos, las personas en posesión de títulos sanitarios, los veterinarios, los farmacéuticos y sus dependientes”.

intermediario en el sector financiero, facultativo, funcionario público, trabajador social, docente o educador” que cometa el delito de blanqueo “en el ejercicio de su cargo, profesión u oficio” adicionalmente con penas accesorias, bien de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, industria o comercio, bien de inhabilitación absoluta para supuestos de “autoridad o agente de la misma”.

El artículo 304 CP<sup>43</sup>, de conformidad con los efectos previstos en los artículos 17 y 18, recoge expresamente la punición de actos preparatorios en el tipo de blanqueo (la provocación, la conspiración y la proposición).

Como hemos apuntado, la formulación vigente en la actualidad del delito de blanqueo de capitales no es plenamente coincidente con la redacción original del Código de 1995. Las reformas del texto punitivo introducidas por las Leyes Orgánicas 15/2003, de 25 de noviembre y 5/2010, de 22 de junio, han supuesto una desmesurada ampliación del ámbito de aplicación del tipo<sup>44</sup>, tanto en lo que respecta al delito precedente y a los posibles sujetos activos del blanqueo, como en lo que a las conductas específicamente previstas se refiere, de tal modo que la actual configuración del delito altera aún más su ya de por sí compleja estructura y dificulta aún más una interpretación unitaria del mismo. Todo ello ha conducido a un importante sector doctrinal a censurar la evolución legislativa del delito cuyo estudio nos ocupa, considerándolo, como veremos, ejemplo paradigmático de la expansión del Derecho penal<sup>45</sup>.

A través de la Ley Orgánica 15/2003 se amplió el ámbito de aplicación del blanqueo en relación con el delito antecedente: se eliminó la limitación del carácter

---

<sup>43</sup> *Artículo 304*. “La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en los artículos 301 a 303 se castigará, respectivamente, con la pena inferior en uno o dos grados”.

<sup>44</sup> Vid. FERNÁNDEZ TERUELO, J. G., “Blanqueo de capitales”, op. cit., marginales 7361 y 7380; CARPIO DELGADO, J. del, “La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 2; MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Receptación y blanqueo de capitales (arts. 301 y 302)”, op. cit., pág. 339; ABEL SOUTO, M., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 64; CASTRO MORENO, A., “Reflexiones críticas sobre las nuevas conductas de posesión y utilización en el delito de blanqueo de capitales en la reforma del anteproyecto de 2008”, op. cit., pág. 1388; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 183; ALONSO CARBAJO, J. M., “Evolución normativa del delito de blanqueo de capitales a tenor de su tratamiento en los ámbitos internacional, comunitario y nacional”, *La Ley* 19196/2011, Año XXXII. Nº 7736, 15 de noviembre de 2011, pág. 7.

<sup>45</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., págs. 61 y ss.; CASTRO MORENO, A., “Reflexiones críticas sobre las nuevas conductas de posesión y utilización en el delito de blanqueo de capitales en la reforma del anteproyecto de 2008”, op. cit., pág. 1387; FERNÁNDEZ TERUELO, J. G., “El comiso con particular referencia a su incidencia en el delito del blanqueo de capitales (a raíz de la reforma del código penal operada por LO 5/2010)”, op. cit., págs. 125 y 126; MUÑOZ CONDE, F., “Consideraciones en torno al bien jurídico protegido del blanqueo de capitales”, *I Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, págs. 157 y 158.

grave del delito previo que imponía el texto original del Código penal del año 1995, pudiendo constituir, tras la reforma, delito antecedente o previo cualquier tipo penal<sup>46</sup>. En este sentido, la modificación introducida por la LO 15/2003 ya fue considerada por numerosos autores como una ampliación desmesurada del ámbito de aplicación del tipo penal<sup>47</sup>, si bien desde otros sectores se consideró acertada, al incorporar como objeto material del delito los beneficios derivados de actividades delincuenciales especialmente lucrativas que, por no ser consideradas graves, quedaban fuera del ámbito de aplicación del tipo<sup>48</sup>. No fue en cualquier caso la ampliación del objeto del delito la única transformación que introdujo dicha ley de reforma en el tipo de blanqueo: por un lado, se añadió al régimen penológico ya previsto la pena facultativa de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión o industria de uno a tres años y la medida, también facultativa, de clausura temporal (con un límite de cinco años) o definitiva del establecimiento o local. Por otro lado, se introdujeron “alusiones expresas al comiso”<sup>49</sup> y se contemplaron, como medidas potestativas, la aplicación de las consecuencias accesorias del artículo 129 CP y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social, durante el tiempo de duración de la mayor de las penas privativas de libertad, para los supuestos de organizaciones dedicadas al blanqueo a las que alude el artículo 302.1 CP.

Si la reforma del año 2003 supuso una ampliación del tipo ciertamente generosa, la dilatación del ámbito típico impulsada por la reforma de 2010 fue aún de mayor

---

<sup>46</sup> Vid. FERRÉ OLIVÉ, J. C., “El nuevo tipo agravado de blanqueo cuando los bienes tengan su origen en delitos relativos a la corrupción”, *III Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pág. 389.

<sup>47</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., pág. 235; id., “Década y media de vertiginosa política criminal en la normativa penal española contra el blanqueo: análisis de los tipos penales contra el blanqueo desde su incorporación al Texto punitivo español en 1988 hasta la última reforma de 2003”, op. cit., pág. 24; COBO DEL ROSAL, M., “La recepción de las normas de la Comunidad Europea en la legislación penal contra el blanqueo de capitales”, *Cuadernos de política criminal* n° 85, 2005. Edersa, Madrid, 2005, pág. 63; GIL DE LA FUENTE, J., “La criminalidad organizada y el delito de asociación ilícita: referencia al delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 35; MUÑOZ CONDE, F., *Derecho Penal. Parte Especial*, op. cit., pág. 514; GÓMEZ BENÍTEZ, J. M., “Reflexiones técnicas y de política criminal sobre el delito de blanqueo de bienes”, op. cit., pág. 8. En sentido contrario, vid. SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, J. L., “Algunas cuestiones relativas a la regulación penal del blanqueo de capitales”, págs. 785-788.

<sup>48</sup> Vid. VIDALES RODRÍGUEZ, C., “Blanqueo, ¿qué es blanqueo? (Estudio del artículo 301.1 del Código Penal Español tras la reforma de la LO 5/2010)”, op. cit., pág. 9.

<sup>49</sup> Las referencias concretas al comiso que se introducían por la ley de reforma se referían, una de ellas, al tipo agravado de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, conforme a lo previsto en el artículo 374 CP, otra, relativa al comiso respecto del delito de blanqueo genérico (artículo 301.5), que remitía a las reglas generales del comiso del artículo 127, y finalmente una última referencia, prevista en el artículo 302.2 CP para los supuestos de blanqueo cometidos en el seno de una organización dedicada al blanqueo. (Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 183).

calado y objeto de acertadas críticas<sup>50</sup>. En efecto, las modificaciones introducidas por la LO 5/2010, supusieron una nueva vuelta de tuerca en el proceso de expansión del delito de blanqueo<sup>51</sup>: aparecieron, en primer lugar, dos nuevos comportamientos expresamente previstos -la *posesión* y la *utilización* de los bienes de ilícito origen<sup>52</sup>, que se añadieron a los de adquisición, conversión y transmisión (contemplados en el texto original del precepto)-, y se incriminó de manera expresa, en segundo lugar, el llamado *autoblanqueo*. La reforma de 2010 ha supuesto un censurable ensanchamiento del ya de por sí dilatado ámbito de aplicación del tipo objeto de estudio<sup>53</sup>, que aconseja una interpretación restrictiva del mismo. Nótese que la combinación de la previsión de las

<sup>50</sup> Vid. MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Receptación y blanqueo de capitales (arts. 301 y 302)”, op. cit., pág. 339; ABEL SOUTO, M., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 64; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 183; CARPIO DELGADO, J. del, “La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 2; CASTRO MORENO, A., “Reflexiones críticas sobre las nuevas conductas de posesión y utilización en el delito de blanqueo de capitales en la reforma del anteproyecto de 2008”, op. cit., pág. 1388; MATA LLÍN EVANGELIO, A., “El “autoblanqueo” de capitales”, op. cit., pág. 18; VIDALES RODRÍGUEZ, C., “El fenómeno asociativo como actividad delictiva previa al delito de blanqueo de capitales (reflexiones a propósito de la Sentencia 25191/14, de 27 de febrero, de las Secciones Unidas Penales de la Corte Suprema de Casación italiana)”, op. cit., pág. 107; id., “El delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 331.

<sup>51</sup> Vid. GALLEGU SOLER, J. I., *Comentarios al Código Penal. Reforma LO 5/2010*. Dir. Mirentxu Corcoy Bidasolo, Santiago Mir Puig. Ed. Tirant lo Blanch 2011. Valencia, 2011, pág. 664.

<sup>52</sup> Conductas que, según el Informe del CGPJ sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de reforma del Código penal, de fecha 18 de febrero de 2009, y un importante sector doctrinal “no son propiamente de blanqueo, [pues] no suponen disimular el origen delictivo y no conllevan cambio de titularidad”, teniendo en cuenta que las modalidades de conducta blanqueadora tradicionales se caracterizan por disimular el origen delictivo de los bienes sobre los que recae el comportamiento. (Vid. CASTRO MORENO, A., “Reflexiones críticas sobre las nuevas conductas de posesión y utilización en el delito de blanqueo de capitales en la reforma del anteproyecto de 2008”, op. cit., pág. 1388; MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Receptación y blanqueo de capitales (arts. 301 y 302)”, op. cit., págs. 342 y 343).

<sup>53</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., págs. 61 y ss.; id., “La reforma penal española de 2010 sobre blanqueo, las nuevas técnicas de comisión delictiva y el uso de las telecomunicaciones para el blanqueo”, *III Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, págs. 163 y 164; id., “Volumen mundial del blanqueo de dinero, evolución del delito en España y jurisprudencia reciente sobre las últimas modificaciones del Código penal”, *Revista General de Derecho Penal*. N° 20, 2013. Ed. Iustel, disponible en el siguiente enlace: [http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle\\_revista.asp?id\\_noticia=413920](http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=413920), pág.18; id., “Jurisprudencia penal reciente sobre el blanqueo de dinero, volumen del fenómeno y evolución del delito en España”, *IV Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, pág. 139; MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Receptación y blanqueo de capitales (arts. 301 y 302)”, op. cit., págs. 339 y ss.; CARPIO DELGADO, J. del, “La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 6 y ss.; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 183, 184, 439, 447 y ss.; id., “La cuota tributaria defraudada como objeto material del delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 178; FERNÁNDEZ TERUELO, J. G., “El comiso con particular referencia a su incidencia en el delito del blanqueo de capitales (a raíz de la reforma del código penal operada por LO 5/2010)”, op. cit., pág. 125; QUINTERO OLIVARES, G., “Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil”, op. cit., pág. 13; MILANS DEL BOSCH, S., “Principales novedades que introduce la ley 10/2010, de 28 de abril, sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo”, op. cit., págs. 45 y ss. En contra de la opinión mayoritaria, ALFONSO LASO consideró que la modificación operada en el tipo de blanqueo constituyó “una de las reformas más esperadas y sin duda de mayor calado y sentido social” operadas en el Código Penal. (“La modificación del delito de blanqueo de capitales (arts. 301 y 302)”, *La Reforma Penal de 2010: Análisis y comentarios*. Dir.: Gonzalo Quintero Olivares; Ed. Aranzadi, 2010, pág. 254).



nuevas conductas típicas *posesión y utilización* con la punición expresa del autoblanqueo conduce a “extrañas consecuencias” oportunamente señaladas QUINTERO OLIVARES<sup>54</sup>: de conformidad con el tenor literal del precepto, todo aquel que cometa un delito económicamente productivo, será automáticamente merecedor, sin realizar ningún otro comportamiento adicional, de ser sancionado a su vez por un delito de blanqueo por poseer o utilizar los fondos ilícitos<sup>55</sup>.

También fue objeto de intensas críticas la novedosa alusión a la “actividad delictiva” como hecho previo, al no haber aclarado el legislador la finalidad que le impulsó a llevar a cabo esta modificación, teniendo en cuenta que, de acuerdo con jurisprudencia suficientemente consolidada, la condena por el delito previo no se consideraba requisito necesario para castigar el delito de blanqueo<sup>56</sup>. La nueva expresión llegó a suscitar dudas interpretativas relativas a la posibilidad de considerar a las desaparecidas faltas como posible conducta antecedente, si bien, con razón afirmó ABEL SOUTO, una interpretación gramatical, histórica, hermenéutica y sistemática del delito de blanqueo conducía a considerarlas excluidas como hecho previo del blanqueo<sup>57</sup>. Mejor acogida ha tenido el cambio de Rúbrica del Capítulo XIV en el que se ubica el delito de blanqueo de capitales, y con él la denominación del propio tipo<sup>58</sup>. En efecto, la denominación anterior que identificaba dicho capítulo podía inducir a cierta confusión, toda vez que el blanqueo de capitales en absoluto puede considerarse una conducta asimilada a la receptación<sup>59</sup>.

---

<sup>54</sup> Vid. QUINTERO OLIVARES, G., “Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil”, op. cit., pág. 13.

<sup>55</sup> Vid. MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Receptación y blanqueo de capitales (arts. 301 y 302)”, op. cit., págs. 343-345; ABEL SOUTO, M., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 62.

<sup>56</sup> Vid. MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Receptación y blanqueo de capitales (arts. 301 y 302)”, op. cit., págs. 340 y 341; CARPIO DELGADO, J. del, “La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 3 y ss.

<sup>57</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 71. En el mismo sentido, MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Receptación y blanqueo de capitales (arts. 301 y 302)”, op. cit., pág. 341; CARPIO DELGADO, J. del, “La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 5 y 6.

<sup>58</sup> Vid. MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Receptación y blanqueo de capitales (arts. 301 y 302)”, op. cit., pág. 340.

<sup>59</sup> Vid. VIVES ANTÓN, T. S./ GONZÁLEZ CUSSAC, J. L., *Comentarios al Código Penal de 1995*, 1, op. cit., pág. 1461; HUERTA TOCILDO, S., “Aproximación crítica a la nueva regulación del delito de receptación y otras conductas afines”, op. cit., pág. 386.

### 2.1.3. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES COMO MANIFESTACIÓN DE LA EXPANSIÓN DEL DERECHO PENAL. ¿EJEMPLO PARADIGMÁTICO DE LA INSTAURACIÓN DE UN “DERECHO PENAL DEL ENEMIGO”?

La evolución reciente del tratamiento penal del delito de blanqueo de capitales se comprende mejor cuando se contempla desde la perspectiva de lo que en el debate doctrinal viene identificándose como “la expansión del derecho penal”<sup>60</sup>. Como consecuencia de los avances tecnológicos, de las nuevas formas de organización y de relación social y de los procesos de globalización de la economía y de la información, se han alcanzado mayores cotas de progreso y bienestar en la población, pero también han surgido, como ha advertido MENDOZA BUERGO, novedosos espacios de riesgo de carácter global, “cualitativa y cuantitativamente distintos a los correspondientes a otras épocas”, y han conformado el actual modelo de la sociedad del riesgo<sup>61</sup>.

Al avance hacia el llamado “estado de bienestar” no sólo se ha asociado la aparición de desconocidas formas de peligro y de nuevas tipologías delictivas: también se constata el crecimiento simultáneo de una sensación social de amenaza y de inseguridad<sup>62</sup>, promovida en muchas ocasiones por algunos agentes políticos<sup>63</sup> y ciertos

---

<sup>60</sup> Entendida como “tendencia claramente dominante en la legislación hacia la introducción de nuevos tipos penales así como a una agravación de los ya existentes, que cabe enlazar en el marco general de la restricción, o la “reinterpretación de las garantías clásicas del Derecho penal sustantivo y del Derecho procesal penal. Creación de nuevos bienes jurídico-penales, ampliación de los espacios de riesgos jurídico-penalmente relevante, flexibilización de las reglas de imputación y relativización de los principios político-criminales de garantía, no serían sino aspectos de esta tendencia general, a la que cabe referirse con el término *expansión*.” (Vid. SILVA SÁNCHEZ, J.M., *La expansión de Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales*, op. cit., pág. 17; id. *La expansión de Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales. Segunda edición, revisada y ampliada*, op. cit., pág. 20; id., *Aproximación al Derecho penal contemporáneo*. Ed. Bosch. Barcelona, 1992, pág. 16).

<sup>61</sup> Vid. MENDOZA BUERGO, B., “Gestión del riesgo y política criminal de seguridad en la sociedad del riesgo”, *Liber amicorum en Homenaje al Profesor Antonio González-Cuellar García*, Ed. Colex, Madrid, 2006, págs. 352-360. En el mismo sentido, DÍEZ RIPOLLÉS, J. L., *De la sociedad del riesgo a la seguridad ciudadana: un debate desenfocado*, RECPC 07-01 (2005), págs. 3 y 4.

<sup>62</sup> Vid. SILVA SÁNCHEZ, J. M., *La expansión de Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales. Segunda edición, revisada y ampliada*, op. cit., pág. 32; PÉREZ CEPEDA, A. I., “De la sociedad neoliberal del riesgo a la expansión del Derecho penal”, *Problemas actuales de Derecho penal y Criminología. Libro Homenaje a la Profesora M<sup>a</sup> del Mar Díaz Pita*. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2008, pág. 165; MENDOZA BUERGO, B., “Gestión del riesgo y política criminal de seguridad en la sociedad del riesgo”, op. cit., pág. 366.

<sup>63</sup> Vid. ampliamente BÖHM, M. L., “Políticas de seguridad y neoliberalismo”, *Delincuencia, finanzas y globalización*. CIS. Madrid, 2013, págs. 325 y ss. Asimismo, PÉREZ CEPEDA, A. I., “De la sociedad neoliberal del riesgo a la expansión del Derecho penal”, op. cit., págs. 165, 183, 184 y 191; ZUGALDÍA ESPINAR, J. M., “Seguridad ciudadana y Estado Social de Derecho”, *Estudios penales en recuerdo del Profesor Ruiz Antón*, Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2004, pág. 1122; BAJO FERNÁNDEZ, M., “Los delitos

medios de comunicación que, interesados en aumentar sus índices de audiencia, contribuyen con sus noticias alarmantes a difundir un sentimiento de inseguridad<sup>64</sup> con frecuencia exorbitado. En este contexto, puede constatarse que, desde hace décadas, se ha visto incrementada la pretensión social de protección estatal frente a las nuevas amenazas. La reacción del legislador a las crecientes demandas sociales de tutela se ha traducido en políticas de anticipación al riesgo, orientadas a prevenir las contingencias muchas veces antes de que éstas se hayan convertido en verdaderos peligros<sup>65</sup>. La doctrina denuncia que son demasiadas las ocasiones en las que, en el marco de estas políticas preventivas, se ha acudido como primera vía de solución al Derecho penal<sup>66</sup>, provocando la exacerbación de las funciones que corresponden a dicho orden punitivo y la instauración de modelos penales de “seguridad ciudadana”<sup>67</sup>. Resulta en efecto cuestionable la oportunidad de recurrir a la vía penal para minimizar los modernos riesgos, pues se corre el peligro de que un abuso de la políticas criminales preventivas derive en un “continuo proceso de expansión” del orden penal y de que éste asuma “un papel que no le pertenece de modo prioritario ni, menos aún, exclusivo”<sup>68</sup>. Tal y como advierte la doctrina, no es el Derecho penal el instrumento más acertado para prevenir o reparar los daños que puedan producirse en ciertos ámbitos de riesgo, y, en la medida de lo posible, es preciso hacer frente a los mismos a través de soluciones alternativas<sup>69</sup>.

Por otro lado, la aparición de las nuevas formas de delincuencia está provocando la “ampliación de los espacios de riesgo jurídico-penalmente relevantes, dando lugar a un Derecho menos garantista, en el que se flexibiliza[n] las reglas tradicionales de imputación y en el que se relativiza[n] los principios político-criminales de garantía,

---

económicos como manifestación característica de la expansión del Derecho Penal”, *Libro homenaje al Prof. Luis Rodríguez Ramos*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, págs. 407 y 408.

<sup>64</sup> Vid. PÉREZ CEPEDA, A. I., “De la sociedad neoliberal del riesgo a la expansión del Derecho penal”, op. cit., pág. 191.

<sup>65</sup> Vid. MENDOZA BUERGO, B., “Gestión del riesgo y política criminal de seguridad en la sociedad del riesgo”, op. cit., pág. 360; SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I., *El moderno Derecho Penal y la anticipación de la tutela penal*. Secretariado de publicaciones e intercambio científico Universidad de Valladolid. Valladolid. 1999, págs. 35 y ss.

<sup>66</sup> Vid. NÚÑEZ CASTAÑO, E., “Las transformaciones sociales y el derecho penal: del estado liberal al derecho penal de enemigos”, *Problemas actuales de Derecho penal y Criminología. Libro Homenaje a la Profesora M<sup>a</sup> del Mar Díaz Pita*. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2008, pág. 130.

<sup>67</sup> Vid. ZUGALDÍA ESPINAR, J. M., “Seguridad ciudadana y Estado Social de Derecho”, op. cit., pág. 1122.

<sup>68</sup> Vid. NÚÑEZ CASTAÑO, E., “Las transformaciones sociales y el derecho penal: del estado liberal al derecho penal de enemigos”, op. cit., pág. 130. Vid., en este mismo sentido, MENDOZA BUERGO, B., “Gestión del riesgo y política criminal de seguridad en la sociedad del riesgo”, op. cit., pág. 367; HASSEMER, W., “Bienes jurídicos en el derecho penal”, *Estudios sobre justicia penal. Homenaje a Julio B.J. Maier*. Editores del Puerto, Buenos Aires, 2005, pág. 69.

<sup>69</sup> Vid. PÉREZ CEPEDA, A. I., “De la sociedad neoliberal del riesgo a la expansión del Derecho penal”, op. cit., pág. 173.

sustantivos y procesales”<sup>70</sup>. Estas nuevas tendencias, cristalizadas en las últimas reformas legislativas, aparecen como expresión de un “Derecho penal preventivo”<sup>71</sup> y de una política criminal caracterizada por el adelantamiento de la intervención penal<sup>72</sup>, con el recurso preferente a tipos de mera actividad y de peligro –“cediendo terreno”, dentro de éstos, los delitos de peligro concreto frente a los de peligro abstracto<sup>73</sup>-, y por la ampliación de los espacios de riesgo penalmente relevantes, con manifiesta tendencia a proteger intereses colectivos de manera preventiva<sup>74</sup>. Como afirmara SILVA SÁNCHEZ, “el derecho penal que reaccionaba *a posteriori* contra un hecho lesivo individualmente delimitado (en cuanto al sujeto activo y al pasivo) se ha convertido un Derecho de gestión (punitiva) de riesgos generales”<sup>75</sup>. En esta medida, puede afirmarse que

<sup>70</sup> Vid. MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “La dimensión internacional del blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 185. En el mismo sentido, SILVA SÁNCHEZ, J. M., *La expansión de Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales. Segunda edición, revisada y ampliada*, op. cit., págs. 20 y 101; id., “Expansión del derecho penal y blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 131; CUESTA ARZAMENDI, J. L., “El derecho penal ante la criminalidad organizada. Nuevos retos y límites”, op. cit., págs. 9 y ss.; Díez RIPOLLÉS, J. L., *De la sociedad del riesgo a la seguridad ciudadana: un debate desenfocado*, op. cit., pág. 2; OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, E., “Repercusión de la “responsabilidad penal por el producto” en los principios garantizadores y la dogmática penales (O de cómo sobrevive el “viejo” Derecho Penal cuando se quiere, y se sabe, aplicar a la “nueva” realidad social)”, *Nuevas posiciones de la Dogmática Jurídica Penal, Cuadernos de Derecho Judicial* n° VII, 2006. CGPJ. Madrid, 2006, págs. 119 y ss.; FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, J. M., “Un Código Penal en continua reforma”, *Las últimas reformas penales II, Cuadernos de Derecho Judicial* n° X, 2006. CGPJ. Madrid, 2006, págs. 245 y ss.; PÉREZ CEPEDA, A. I., “De la sociedad neoliberal del riesgo a la expansión del Derecho penal”, op. cit., pág. 166; NÚÑEZ CASTAÑO, E., “Las transformaciones sociales y el derecho penal: del estado liberal al derecho penal de enemigos”, op. cit., pág. 120; CORCOY BIDASOLO, M., *Revista de Derechos Fundamentales*, n° 8, 2012. Ed. Universidad Viña del Mar, 2008, págs. 46 y ss., disponible en el enlace <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4334611>; LANDROVE DÍAZ, G., “El blanqueo de capitales de procedencia delictiva”, op. cit., pág. 141. A favor de esta criticada tendencia parece posicionarse GARZÓN REAL, censurando el modelo de garantías vigente, en el que, a su juicio, “a veces se producen situaciones absurdas e incomprensibles social y jurídicamente, que favorecen objetivamente la extensión del fenómeno [delictivo].” Para el autor, sería conveniente “la creación y desarrollo de los Instrumentos jurídico-materiales y procesales adecuados que garanticen el equilibrio entre los derechos fundamentales de los imputados, la eficacia de la investigación y protección a las víctimas”, evitando el actual modelo de “hipergarantismo, que más que proteger a la sociedad y a los ciudadanos actúa contra ellos en forma perversa”. (“Cooperación jurídica internacional en el ámbito del blanqueo de dinero y espacio de seguridad, libertad y justicia en la Unión Europea”, op. cit., pág. 431).

<sup>71</sup> Vid. SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, M. I., *El moderno derecho penal y la anticipación de la tutela penal*, op. cit., pág. 81.

<sup>72</sup> Vid. HEFENDEHL, R., *¿Debe ocuparse el derecho penal de Riesgos futuros?*, *Bienes jurídicos colectivos y delitos de peligro abstracto*, RECCP 04-14 (2002), disponible en [criminnet.ugr.es/recpc/recpc\\_04-14.pdf](http://criminnet.ugr.es/recpc/recpc_04-14.pdf), pág. 12.

<sup>73</sup> Vid. PÉREZ CEPEDA, A. I., “De la sociedad neoliberal del riesgo a la expansión del Derecho penal”, op. cit., pág. 180.

<sup>74</sup> Vid. NÚÑEZ CASTAÑO, E., “Las transformaciones sociales y el derecho penal: del estado liberal al derecho penal de enemigos”, op. cit., pág. 120; HASSEMER, W., “Líneas de desarrollo del Derecho penal alemán desde la época de posguerra hasta la actualidad”, *Estudios penales en homenaje a Enrique Gimbernat*. Ed. Edisofer. Madrid, 2008, pág. 380; Díez RIPOLLÉS, L., *De la sociedad del riesgo a la seguridad ciudadana: un debate desenfocado*, op. cit., págs. 4 y ss.

<sup>75</sup> Vid. SILVA SÁNCHEZ, J. M., *La expansión de Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales. Segunda edición, revisada y ampliada*, op. cit., pág. 123; id., “Hacia el derecho penal del estado de la prevención. La protección penal de las agencias administrativas de control en la evolución de la política criminal”, *¿Libertad económica o fraudes punibles?: Riesgos penalmente relevantes e irrelevantes en la actividad económico-empresarial* (Coord. Jesús María Silva Sánchez). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2003, págs. 322 y ss.

asistimos a una progresiva administrativización<sup>76</sup> del Derecho penal, “en cuanto gestor de determinados sectores o contextos generales de actividad social”<sup>77</sup>. La doctrina ha advertido que dicho panorama está contribuyendo a la progresiva instauración de un Derecho penal simbólico<sup>78</sup>, instrumentalizado como mecanismo de solución rápida y sencilla<sup>79</sup> de los distintos conflictos que el actual modelo social plantea, olvidando los principios de subsidiariedad, *ultima ratio*<sup>80</sup> y lesividad<sup>81</sup> que operan como criterios informadores básicos del Derecho penal.

Las últimas reformas legislativas en materia penal demuestran que las tendencias expansivas van más allá de una política preventiva de protección de riesgos y se aproximan a lo que PÉREZ CEPEDA denomina “nuevo modelo de seguridad ciudadana”<sup>82</sup>: el adelantamiento de la intervención penal también se manifiesta a través del incremento de los delitos de acumulación, del castigo de actos preparatorios específicamente tipificados, de la autonomía de la punición de la asociación delictiva, de la aproximación de la participación a la autoría y de la tentativa a la consumación, así como de la tendencia “abusiva” a acudir a la responsabilidad penal de garante en los delitos de comisión por omisión<sup>83</sup>. A su vez, se constata una clara inclinación a la superación del modelo penal garantista, único considerado “legítimo” y “aceptable” en un Estado de Derecho<sup>84</sup>, a través de la implantación gradual de una preocupante “flexibilización de los criterios de imputación y la relativización de los principios

---

<sup>76</sup> Ibidem. En el mismo sentido, vid. FEIJÓO SÁNCHEZ, B., “Sobre la “administrativización del Derecho penal en la “sociedad del riesgo”. Un apunte sobre la política criminal a principios del siglo XXI”, *Liber amicorum en Homenaje al Profesor Antonio González-Cuellar García*, Colex. Madrid, 2006, págs. 138 y ss.

<sup>77</sup> Vid. PÉREZ CEPEDA, A. I., “De la sociedad neoliberal del riesgo a la expansión del Derecho penal”, op. cit., págs. 174 y ss. Prueba de ello es la incriminación de “abundantes ilícitos que antes sólo eran administrativos, civiles o mercantiles”, acudiendo directamente al Derecho penal, “sin tener en cuenta otros medios de control social (...) dejando de lado el criterio limitador del bien jurídico, lo que se encuentra en clara contradicción con el principio de lesividad”.

<sup>78</sup> Vid. SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, M. I., *El moderno derecho penal y la anticipación de la tutela penal*, op. cit., pág. 96; CANCIO MELIÁ, M., “De nuevo: ¿“derecho penal” del enemigo?”, *Derecho penal del enemigo* (JAKOBS, Günther/CANCIO MELIÁ, Manuel), Ed. Thomson. 1ª ed. Madrid, 2003, págs. 65 y ss.; FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y TORRES, J., *Blanqueo de capitales y principio de lesividad*, op. cit., págs. 65 y ss.

<sup>79</sup> Vid. SILVA SÁNCHEZ, J. M., *La expansión de Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales. Segunda edición, revisada y ampliada*, op. cit., pág. 21.

<sup>80</sup> Vid. MORILLAS CUEVA, L., *Reflexiones sobre el Derecho penal del futuro*, RECCP 04-06 (2002), pág. 22, disponible en el enlace [http://criminnet.ugr.es/recpc/recpc\\_04-06.html](http://criminnet.ugr.es/recpc/recpc_04-06.html).

<sup>81</sup> Vid. PÉREZ CEPEDA, A. I., “De la sociedad neoliberal del riesgo a la expansión del Derecho penal”, op. cit., págs. 179 y ss.

<sup>82</sup> Ibidem, pág. 195.

<sup>83</sup> Ibidem, págs. 181 y 182.

<sup>84</sup> Vid. NÚÑEZ CASTAÑO, E., “Las transformaciones sociales y el derecho penal: del estado liberal al derecho penal de enemigos”, op. cit., pág. 120.

constitucionales de garantía”<sup>85</sup>. Según NÚÑEZ CASTAÑO, el principal interés perseguido por las últimas reformas no ha sido otro que intensificar la respuesta penal frente a ámbitos delictivos tradicionales con objeto de combatir determinados tipos de delincuencia considerada especialmente nociva<sup>86</sup> en atención, no a la amenaza del hecho delictivo en sí, sino más bien a la potencial peligrosidad del delincuente. En clara contradicción con algunos de los principios básicos en los que se fundamenta la legitimidad de la intervención punitiva del Derecho penal clásico, el ordenamiento penal pasa a considerarse como instrumento para combatir a determinado tipo de agente social considerado potencialmente peligroso, “al haberse *situado en una contravención permanente del ordenamiento jurídico*”<sup>87</sup>. En sus manifestaciones más depuradas, este discurso conduce al conocido planteamiento de JAKOBS, el llamado “Derecho penal del enemigo”, fundamentado en la idea de la peligrosidad de determinada tipología de delincuentes. Esta propuesta viene a suponer en la práctica la fragmentación del Derecho penal en dos categorías jurídicas diferenciadas, destinadas cada una de ellas a diversos grupos de población a los que se considera radicalmente distintos: los ciudadanos y los enemigos. A los primeros, se les aplicaría un Derecho penal “normalizado”, que actuaría como respuesta a la comisión de un delito, mientras que a los segundos, se les aplicaría un Derecho penal “excepcional”, que intervendría de manera anticipada, en estadios previos a la comisión del delito, en atención a su eventual peligrosidad<sup>88</sup>.

---

<sup>85</sup> Ibidem. Vid., asimismo, PÉREZ CEPEDA, A. I., “De la sociedad neoliberal del riesgo a la expansión del Derecho penal”, op. cit., pág. 166; HASSEMER, W., “Líneas de desarrollo del Derecho penal alemán desde la época de posguerra hasta la actualidad”, op. cit., págs. 387 y 388; SILVA SÁNCHEZ, J. M., *La expansión de Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales. Segunda edición, revisada y ampliada*, op. cit., págs. 20 y 101; SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, M. I., *El moderno derecho penal y la anticipación de la tutela penal*, op. cit., pág. 84; BÖHM, M. L., “Políticas de seguridad y neoliberalismo”, op. cit., pág. 329.

<sup>86</sup> Representada fundamentalmente por la delincuencia organizada, la criminalidad individual grave “identificada con la de naturaleza violenta y/o sexual que afecta a bienes jurídicos individuales clásicos (vida, integridad física y/o psíquica, libertad sexual, e incluso patrimonio)” y ciertas formas de delincuencia leve, fundamentalmente la comisión reiterada de delitos patrimoniales de carácter leve identificados con la “marginalidad, inmigración y exclusión social”. (Vid. NÚÑEZ CASTAÑO, E., “Las transformaciones sociales y el derecho penal: del estado liberal al derecho penal de enemigos”, op. cit., pág. 130).

<sup>87</sup> Ibidem, pág. 140; GRACIA MARTÍN, L., *Consideraciones críticas sobre el actualmente denominado “Derecho penal del enemigo”*, RECPC 07-02 (2005), disponible en <http://criminet.ugr.es/recpc/07/recpc07-02.pdf>, págs. 6 y 7.

<sup>88</sup> Vid. JAKOBS, G., “Derecho penal del ciudadano y Derecho penal del enemigo”, *Derecho penal del enemigo* (JAKOBS, Günther/CANCIO MELIÁ, Manuel), Ed. Thomson. 1ª ed. Madrid, 2003, págs. 42 y 43. La delincuencia a la que principalmente se refiere JAKOBS como destinataria de la aplicación de este “derecho excepcional” se concreta en la criminalidad económica, el terrorismo, la criminalidad organizada, la delincuencia sexual y otras infracciones penales especialmente peligrosas. (Ibidem, pág. 39).

El Derecho penal excepcional que se aplica a los considerados “enemigos”, afirma NÚÑEZ CASTAÑO, se caracteriza, en primer lugar, por centrar su atención no en el concreto hecho delictivo cometido, sino en la “actitud del autor”, en su “inclinación o tendencia al delito” o, incluso, en la “peligrosidad criminal” que pueda presentar; en segundo lugar, por un adelantamiento de la punibilidad, elevando a la categoría de delito autónomo meros actos preparatorios; en tercer lugar, por un notable incremento de las penas a aplicar para supuestos en los que la gravedad y el desvalor de la acción y del resultado no lo justifica; y por último, por la supresión o relajación de determinadas garantías procesales individuales del sujeto considerado como enemigo, “al cual no se le reconocen los mismos derechos que a aquellos que respetan el Ordenamiento jurídico, y ostentan, por tanto, la condición de ciudadano”<sup>89</sup>. En efecto, afirma JAKOBS, el tratamiento polarizado entre ciudadanos y enemigos también incide en el orden procesal penal: al ciudadano que es imputado en un proceso penal se le considera “sujeto procesal”, mientras que al enemigo se pueden aplicar medidas excepcionales de incomunicación, intervenciones coactivas y de las telecomunicaciones en que participe, y otras medidas relativas a investigaciones secretas o a la intervención de agentes encubiertos<sup>90</sup>. Pero para el tratadista alemán, “al igual que en el Derecho penal del enemigo sustantivo, (...) estas medidas no tienen lugar fuera del Derecho”, pues los enemigos, “en la medida en que se interviene en su ámbito, son excluidos de su derecho: el Estado abole derechos de modo jurídicamente ordenado”<sup>91</sup>.

---

<sup>89</sup> Vid. NÚÑEZ CASTAÑO, E., “Las transformaciones sociales y el derecho penal: del estado liberal al derecho penal de enemigos”, op. cit., págs. 146 y 147. En este sentido, JAKOBS, G., *Dogmática de Derecho Penal y la Configuración Normativa de la Sociedad*, Ed. Thomson. Madrid, 2004, págs. 43 y ss.

<sup>90</sup> Vid. JAKOBS, G., “Derecho penal del ciudadano y Derecho penal del enemigo”, op. cit., págs. 42 y ss. Es en el ámbito del proceso penal, a juicio de Díez Ripollés, donde “el derecho penal del enemigo concentra sus esfuerzos”, tanto a través del fomento de la aplicación de la prisión preventiva como “mediante una panoplia de propuestas que desmontan sin contemplaciones el derecho penal garantista: Facilitación de controles corporales, de intervención de comunicaciones o de intromisión en ámbitos privados sin control judicial o con laxos controles, uso generalizado de agentes encubiertos, prolongación de los periodos de incomunicación, restricciones del derecho a no declarar contra sí mismo, limitaciones del derecho de defensa, reconsideración de la invalidez de la prueba ilícitamente obtenida, etc.”. (*De la sociedad del riesgo a la seguridad ciudadana: un debate desenfocado*, op. cit., págs. 23 y 24).

<sup>91</sup> Vid. JAKOBS, G., “Derecho penal del ciudadano y Derecho penal del enemigo”, op. cit., pág. 45. Como ha afirmado Muñoz Conde, ejemplos de Derecho penal excepcional ha habido siempre. Lo que caracteriza al Derecho penal del enemigo es su conformación como *Derecho penal excepcional* instituido en Estados democráticos de Derecho, en cuyas constituciones y textos jurídicos fundamentales se garantizan principios básicos del Derecho penal material del Estado de Derecho (legalidad, proporcionalidad, culpabilidad) y, fundamentalmente, los de carácter procesal (principios de presunción de inocencia, derecho a un proceso debido y garantías procesales). (“De nuevo, sobre el «derecho penal del enemigo»”, *Revista penal*, nº 16, 2005, pág. 125, disponible en <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1202746>).

En definitiva, se establece un tratamiento penal específico para este tipo de delincuentes, considerados enemigos sociales por su disposición reiterada a delinquir<sup>92</sup>, encaminado a neutralizar su peligrosidad. La instauración de dos modelos de tratamiento diferenciados, aplicables por un lado al ciudadano y por otro al enemigo, encontraría su justificación en el hecho de que los últimos “no se comportan como auténticos ciudadanos, pues no se limitan sólo a infringir el Derecho, sino que fundamentalmente tratan de destruirlo y con ello persiguen acabar con el sistema social”<sup>93</sup>. Las consecuencias de esta línea de pensamiento son tan evidentes como graves: la instauración de un tratamiento excepcional para determinadas tipologías delictivas, por muy peligrosas que éstas sean, supone el paso de un derecho penal del hecho a un derecho penal de autor<sup>94</sup>, y con ello el abandono de “uno de los principales logros en la evolución del Derecho penal, y en el reconocimiento de los derechos y garantías de los ciudadanos”<sup>95</sup>. De acuerdo con la doctrina mayoritaria, los postulados del denominado “Derecho penal del enemigo” deben ser rechazados por contravenir principios esenciales de Derecho penal, como lo son los de proporcionalidad, culpabilidad e igualdad, así como las más elementales garantías procesales<sup>96</sup>. Sin

<sup>92</sup> Sobre la problemática de la identificación del “enemigo” y la aproximación al “derecho penal de autor” del modelo que aquí se analiza, vid. MUÑOZ CONDE, F., “¿Es el Derecho penal internacional un “Derecho penal del enemigo?””, *Derecho penal del siglo XXI, Cuadernos de Derecho Judicial* n° VIII, 2007. CGPJ. Madrid, 2007, págs. 27 y ss.

<sup>93</sup> Vid. GONZÁLEZ CUSSAC, J. L., *El renacimiento del pensamiento totalitario en el seno del estado de Derecho: la doctrina del derecho penal enemigo*, Revista Penal, n° 19 (2007), págs. 54 y 55, disponible en el enlace [www.uhu.es/revistapenal/index.php/penal/article/viewFile/304/295](http://www.uhu.es/revistapenal/index.php/penal/article/viewFile/304/295); NÚÑEZ CASTAÑO, E., “Las transformaciones sociales y el derecho penal: del estado liberal al derecho penal de enemigos”, op. cit., pág. 140. En palabras de JAKOBS: “sólo es persona quien ofrece una garantía cognitiva suficiente de un comportamiento personal”, y “quien por principio se conduce de modo desviado no ofrece garantía de un comportamiento personal; por ello, no puede ser tratado como ciudadano, sino debe ser combatido como enemigo”. (“Derecho penal del ciudadano y Derecho penal del enemigo”, op. cit., págs. 55 y 56). Por lo tanto, sería completamente erróneo demonizar aquello que aquí se ha denominado Derecho penal del enemigo. (Ibidem, pág. 47). En el mismo sentido, id., *Dogmática de Derecho Penal y la Configuración Normativa de la Sociedad*, op. cit., págs. 44 y ss.

<sup>94</sup> Vid. CANCIO MELIÁ, M., “De nuevo: ¿“derecho penal” del enemigo?”, op. cit., págs. 93 y 94; NÚÑEZ PAZ, M. A., “THE LONG AND WINDING ROAD: De un Derecho penal de los delincuentes a un derecho penal de los enemigos”, *Un derecho penal comprometido: libro homenaje al Prof. Dr. Gerardo Landrove Díaz*. Francisco José Muñoz Conde (dir.), José Manuel Lorenzo Salgado (dir.), Juan Carlos Ferré Olivé (dir.), Emilio Cortés Bechiarelli (dir.), Miguel Ángel Núñez Paz (dir.). Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2011, pág. 893.

<sup>95</sup> Vid. NÚÑEZ CASTAÑO, E., “Las transformaciones sociales y el derecho penal: del estado liberal al derecho penal de enemigos”, op. cit., pág. 141.

<sup>96</sup> Vid. HASSEMER, W., “Líneas de desarrollo del Derecho penal alemán desde la época de posguerra hasta la actualidad”, op. cit., págs. 385 y 386; CANCIO MELIÁ, M., “De nuevo: ¿“derecho penal” del enemigo?”, op. cit., pág. 99; NÚÑEZ CASTAÑO, E., “Las transformaciones sociales y el derecho penal: del estado liberal al derecho penal de enemigos”, op. cit., pág. 143. Vid., asimismo, abundantes referencias bibliográficas en GRACIA MARTÍN, L., *Consideraciones críticas sobre el actualmente denominado “Derecho penal del enemigo”*, op. cit., pág. 2, nota a pie de página núm. 3; MUÑOZ CONDE, F., “De nuevo, sobre el «derecho penal del enemigo»”, op. cit., pág. 123, nota a pie de página núm. 11; id., “El nuevo Derecho penal autoritario”, *Estudios penales en recuerdo del Profesor Ruiz Antón*, Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2004, págs. 812 y ss.; id., “El Derecho penal en tiempos de cólera”, *Un derecho penal comprometido: libro homenaje al Prof. Dr.*



embargo, es posible constatar en los últimos años una tendencia evolutiva hacia estos planteamientos, respecto a ciertos ámbitos delictivos especialmente graves<sup>97</sup>, en las legislaciones de los Estados democráticos de Derecho<sup>98</sup>, que, en principio, acogen en sus ordenamientos jurídicos las máximas que inspiran el Derecho penal material<sup>99</sup>. Incluso es posible pronosticar, de acuerdo con las peores predicciones de SILVA SÁNCHEZ, que “el círculo del Derecho penal de los «enemigos» tenderá, ilegítimamente, a estabilizarse y a crecer”<sup>100</sup>.

Las sucesivas reformas operadas sobre el llamado «Código penal de la democracia»<sup>101</sup> constituyen un claro ejemplo del proceso de expansión del Derecho penal y de la relajación de las reglas de imputación y de las garantías jurídico-penales. Desde su entrada en vigor, la “espiral” de reformas legislativas de las que el Código ha sido objeto -más de veinte, anota MUÑOZ CONDE- ha obedecido a una política criminal de adelantamiento de la intervención penal<sup>102</sup> y a un continuo “espíritu de incremento del rigor punitivo”<sup>103</sup>, no sólo en la ampliación de los tipos, sino también en cuanto a

---

Gerardo Landrove Díaz. Francisco José Muñoz Conde (dir.), José Manuel Lorenzo Salgado (dir.), Juan Carlos Ferré Olivé (dir.), Emilio Cortés Bechiarelli (dir.), Miguel Ángel Núñez Paz (dir.). Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2011, págs. 867 y ss.; NÚÑEZ PAZ, M. A., “THE LONG AND WINDING ROAD: De un Derecho penal de los delincuentes a un derecho penal de los enemigos”, op. cit., págs. 896 y ss.; SANZ MULAS, N., “El Derecho penal del enemigo y la obstinación de justificar lo injustificable”, *Un derecho penal comprometido: libro homenaje al Prof. Dr. Gerardo Landrove Díaz*. (VV. AA.) Francisco José Muñoz Conde (dir.), José Manuel Lorenzo Salgado (dir.), Juan Carlos Ferré Olivé (dir.), Emilio Cortés Bechiarelli (dir.), Miguel Ángel Núñez Paz (dir.). Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2011, págs. 1034 y ss.; FERNÁNDEZ STEINKO, A., “Delito y criminalización en una sociedad global”, op. cit., págs. 106 y ss.

<sup>97</sup> La aproximación a este “derecho excepcional” se concreta fundamentalmente en la delincuencia más grave, concretamente la relativa al tráfico de drogas, al terrorismo y la relacionada con la criminalidad organizada. Afirma MUÑOZ CONDE que precisamente “son estos delitos y sus autores la principal preocupación de los Gobiernos actuales, que proceden de la forma más dura y eficaz posibles para combatirlos, incluso más allá de los parámetros admisibles en el Estado de Derecho.” Buena prueba de ello, según el autor, son las reformas introducidas en el Código penal español por la LO 15/2003. (“De nuevo, sobre el «derecho penal del enemigo»”, op. cit., pág. 126). En este mismo sentido, BÖHM, M. L., “Políticas de seguridad y neoliberalismo”, op. cit., pág. 332.

<sup>98</sup> Vid. MUÑOZ CONDE, F., “De nuevo, sobre el «derecho penal del enemigo»”, op. cit., pág. 123.

<sup>99</sup> Vid. NÚÑEZ CASTAÑO, E., “Las transformaciones sociales y el derecho penal: del estado liberal al derecho penal de enemigos”, op. cit., pág. 143. Tendencia que en ocasiones llega a bordear, afirma MUÑOZ CONDE, cuando no claramente a infringir, “los límites constitucionales del Derecho penal en el Estado de Derecho”. (“De nuevo, sobre el «derecho penal del enemigo»”, op. cit., pág. 128).

<sup>100</sup> Vid. SILVA SÁNCHEZ, J. M., *La expansión de Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales. Segunda edición, revisada y ampliada*, op. cit., pág. 167.

<sup>101</sup> Vid. MUÑOZ CONDE, F., “Análisis de algunos aspectos del Anteproyecto de Reforma del Código Penal español de 14 noviembre 2008”, *Revista Penal.com*, n° 24 (2009), pág. 109, disponible en el siguiente enlace: <http://www.uhu.es/revistapenal/index.php/penal/article/view/403/393>.

<sup>102</sup> Vid. ampliamente, con un detallado análisis de los tipos modificados por la LO 15/2003, NÚÑEZ CASTAÑO, E., “Las transformaciones sociales y el derecho penal: del estado liberal al derecho penal de enemigos”, op. cit., págs. 147 y ss.; NÚÑEZ PAZ, M. A., “THE LONG AND WINDING ROAD: De un Derecho penal de los delincuentes a un derecho penal de los enemigos”, op. cit., págs. 898 y ss.; SANZ MULAS, N., “El Derecho penal del enemigo y la obstinación de justificar lo injustificable”, op. cit., págs. 1056 y ss.

<sup>103</sup> Vid. MUÑOZ CONDE, F., “Análisis de algunos aspectos del Anteproyecto de Reforma del Código Penal español de 14 noviembre 2008”, op. cit., págs. 109 y 110, nota a pie de página núm. 5.

penas se refiere<sup>104</sup>. La “dureza extrema” que representó el aumento del límite máximo de cumplimiento de la pena privativa de libertad incorporado en la reforma de 2003 -de hasta cuarenta años en determinados supuestos concursales<sup>105</sup>-, se ha visto incluso superada por la reciente reforma operada por la LO 1/2015, que ha introducido la pena de prisión permanente revisable para delitos especialmente graves, pena de duración indeterminada que comporta un cumplimiento mínimo efectivo nunca inferior a los veinticinco años de la condena<sup>106</sup>. Además de la controvertida novedad punitiva, de dudosa constitucionalidad, y cuyos fines poco se compadecen con la orientación a la resocialización del delincuente, la reforma de 2015 -la más profunda operada en nuestro actual Código- supone el aumento del rigor punitivo en muchos otros ámbitos. Así, y sin ánimo de ser exhaustivos, muchas de las antiguas faltas han sido transformadas en delitos leves -ténganse en cuenta los efectos que de ello se derivan, tales como el aumento del plazo de prescripción de la infracción a un año, o el hecho de que generen antecedentes penales-, se han ampliado las posibilidades del decomiso (decomiso ampliado y decomiso por sustitución), se han agravado las penas en muchas tipologías delictivas (homicidio, hurto, robo, estafa o delitos contra la propiedad intelectual, entre otros). En fin, la reciente entrada en vigor de la LO 1/2015, de 30 de marzo, confirma los desalentadores pronósticos de SILVA SÁNCHEZ<sup>107</sup>: la imparable expansión del Derecho penal y el endurecimiento de las penas en aquellos ámbitos de delincuencia

---

<sup>104</sup> Vid. VIVES ANTÓN, T. S., “Acción y omisión. Tres notas a un *status questionis*”, *Estudios penales en recuerdo del Profesor Ruiz Antón*, Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2004, pág. 1113.

<sup>105</sup> Vid. NÚÑEZ CASTAÑO, E., “Las transformaciones sociales y el derecho penal: del estado liberal al derecho penal de enemigos”, op. cit., pág. 157.

<sup>106</sup> Acertadamente ha afirmado GIMBERNAT ORDEIG que no existen razones de prevención general para introducir esta gravosa pena, pues con “el arsenal punitivo del que ya disponíamos, España era el país europeo con uno de los índices más bajos de criminalidad, no obstante lo cual ocupamos el primer lugar en lo que se refiere a personas privadas de libertad judicialmente por cada 100.000 habitantes, lo que es reconducible, naturalmente, a que nuestro Código ya era tal vez el de mayor severidad de la Unión Europea”. Por tanto, la novedad legislativa no puede explicarse desde ninguna razón plausible de política criminal. “Cuando se argumenta que en otros países europeos también existe la cadena perpetua, se oculta que en los Códigos de dichos países sólo figura con un carácter simbólico y que, en la práctica, nunca se aplica. Y así, la ejecución de la prisión perpetua puede ser suspendida en Bélgica y en Finlandia a partir de los 10 años, en Dinamarca, de los 12, y en Austria, Francia, Suiza y la República Federal de Alemania, a partir de los 15, siendo en este último país la media de cumplimiento efectivo de la prisión perpetua el de 18 años. Que en España, en los casos más graves, esa pena sólo pueda ser revisada cuando el delincuente ha permanecido ya 35 años en prisión, es decir: cuando probablemente es ya un anciano, pone de manifiesto hasta qué punto nuestros gobernantes han decidido convertir a nuestro Derecho penal en uno que, por su innecesaria crueldad, no encuentra parangón en Europa”. (“La reforma del Código Penal”, *Diario El Mundo*, artículo publicado el 24/04/2015, disponible en el siguiente enlace <http://www.elmundo.es/opinion/2015/04/23/5539383be2704ed1158b4582.html>).

<sup>107</sup> Vid. SILVA SÁNCHEZ, J. M., *La expansión de Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales. Segunda edición, revisada y ampliada*, op. cit., pág. 167.

¿socialmente? considerada más peligrosa, hasta extremos que, en palabras de MUÑOZ CONDE, van “incluso más allá de los parámetros admisibles en el Estado de Derecho”<sup>108</sup>.

La configuración del delito de blanqueo y las sucesivas modificaciones del Código Penal que han afectado al mismo constituyen un ejemplo paradigmático del fenómeno de expansión del Derecho penal<sup>109</sup>. Es posible constatar esta “vertiginosa”<sup>110</sup> tendencia a través del análisis de la evolución del tipo, desde su configuración original a las modificaciones que ha experimentado a través de las sucesivas reformas operadas en el Código de 1995. La amplia y ambigua formulación actual del artículo 301 CP, conformado a través de un prolijo entramado de comportamientos que responde a los criterios omnicomprendivos asumidos internacionalmente<sup>111</sup>, permite criminalizar un elevado número de conductas, algunas de ellas, como veremos, sin potencial lesivo para los intereses socioeconómicos que el delito está llamado a tutelar. En efecto, algunas modalidades típicas más bien se conforman como conductas favorecedoras o incluso de mero aprovechamiento que no siempre resultarán idóneas para hacer circular los bienes

<sup>108</sup> Vid. MUÑOZ CONDE, F., “De nuevo, sobre el «derecho penal del enemigo»”, op. cit., pág. 126.

<sup>109</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 61 y ss.; id., “Jurisprudencia penal reciente sobre el blanqueo de dinero, volumen del fenómeno y evolución del delito en España”, *IV Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, pág. 137 y 138; MESTRE DELGADO, E., “Delitos y sospechas”, *La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario*, n° 20, 2005, pág. 4; SILVA SÁNCHEZ, J. M., “Expansión del derecho penal y blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 132; MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Receptación y blanqueo de capitales (arts. 301 y 302)”, op. cit., pág. 339; id., “Ganancias criminales y ganancias no declaradas (El desbordamiento del delito fiscal y del blanqueo)”, op. cit., pág. 656; BLANCO CORDERO, I., “La cuota tributaria defraudada como objeto material del delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 178; CASTRO MORENO, A., “Reflexiones críticas sobre las nuevas conductas de posesión y utilización en el delito de blanqueo de capitales en la reforma del anteproyecto de 2008”, op. cit., pág. 1387; id., “Consideraciones críticas sobre la aplicación e interpretación del tipo subjetivo de los delitos de blanqueo de capitales”, *Libro homenaje al Prof. Luis Rodríguez Ramos*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pág. 447; FERNÁNDEZ TERUELO, J. G., “El comiso con particular referencia a su incidencia en el delito del blanqueo de capitales (a raíz de la reforma del código penal operada por LO 5/2010)”, op. cit., págs. 125 y 126; MUÑOZ CONDE, F., “Consideraciones en torno al bien jurídico protegido del blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 157 y 158; id., “¿Dominio de la voluntad en virtud de aparatos de poder organizados en organizaciones “no desvinculadas al Derecho”?”, *Revista penal* n°6, 2000, pág. 111; GONZÁLEZ RUS, J. J., “Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico”, *Sistema de derecho penal español* (coord. Lorenzo Morillas Cueva). Ed. Dykinson. Madrid, 2011, pág. 637; VILLEGAS GARCÍA, M.ª A., “El autoblanqueo y el delito fiscal como delito antecedente del delito de blanqueo: la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo n.º 974/2012, de 5 de diciembre”, *Revista del Poder Judicial*, n° 95, año 2013. GCPJ, pág. 37.

<sup>110</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., “Década y media de vertiginosa política criminal en la normativa penal española contra el blanqueo: análisis de los tipos penales contra el blanqueo desde su incorporación al Texto punitivo español en 1988 hasta la última reforma de 2003”, op. cit., pág. 6.

<sup>111</sup> Vid. LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J./ALONSO GONZÁLEZ, A./ENCINAR DEL POZO, M. A., *Código Penal comentado con jurisprudencia sistematizada y concordancias*, op. cit., pág. 935.

de origen delictivo en el sistema económico<sup>112</sup>, eliminando su rastro ilícito, y posibilitando así, finalmente, su reincorporación al tráfico legal<sup>113</sup>.

Inspirado por los compromisos internacionales y comunitarios que vinculaban a España, la pretensión del legislador de 1995 fue sin duda conformar un tipo delictivo de amplio alcance, que abarcase casi cualquier contacto con bienes de procedencia delictiva. El resultado fue la configuración de un delito poco respetuoso con los mandatos de determinación y certeza que incumben a toda norma penal<sup>114</sup>, cuyo propósito no fue sino absorber prácticamente cualquier participación postdelictiva que suponga algún contacto con los bienes derivados de un hecho delictivo, muchas veces propio, a través de una amplia variedad de conductas, algunas de ellas no siempre merecedoras de reproche penal. El afán omnicomprendivo del legislador también se materializó en una formulación típica lo suficientemente amplia e indeterminada (realización de cualquier acto) que garantizase un dilatado ámbito de la autoría en detrimento de otras formas de participación<sup>115</sup>, y en la previsión de una modalidad imprudente de blanqueo, muy discutida por la doctrina, y deficientemente regulada, como se verá. Un análisis global de las sucesivas modificaciones del artículo 301 CP permite verificar que, en su conjunto, no son sino “expresión de una constante evolución incriminadora del delito”<sup>116</sup>, y que revelan de forma manifiesta el fenómeno expansivo que aquí censuramos<sup>117</sup>. Si hay una nota común que caracteriza a todas ellas,

---

<sup>112</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 280.

<sup>113</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., pág. 189.

<sup>114</sup> Vid. SUÁREZ-MIRA RODRÍGUEZ, C., *Manual de Derecho penal*, op. cit., pág. 325; ARIAS HOLGUÍN, D. P., *Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 111.

<sup>115</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 349; ARIAS HOLGUÍN, D. P., *Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 113.

<sup>116</sup> Vid. OLIVA GARCÍA, H., “La defensa ante la acusación por blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 23.

<sup>117</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., págs. 61 y ss.; id., “Jurisprudencia penal reciente sobre el blanqueo de dinero, volumen del fenómeno y evolución del delito en España”, op. cit., pág. 137 y 138; MESTRE DELGADO, E., “Delitos y sospechas”, op. cit., pág. 4; SILVA SÁNCHEZ, J. M., “Expansión del derecho penal y blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 132; MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Receptación y blanqueo de capitales (arts. 301 y 302)”, op. cit., pág. 339; id., “Ganancias criminales y ganancias no declaradas (El desbordamiento del delito fiscal y del blanqueo)”, op. cit., pág. 656; BLANCO CORDERO, I., “La cuota tributaria defraudada como objeto material del delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 178; CASTRO MORENO, A., “Reflexiones críticas sobre las nuevas conductas de posesión y utilización en el delito de blanqueo de capitales en la reforma del anteproyecto de 2008”, op. cit., pág. 1387; FERNÁNDEZ TERUELO, J. G., “El comiso con particular referencia a su incidencia en el delito del blanqueo de capitales (a raíz de la reforma del código penal operada por LO 5/2010)”, op. cit., págs. 125 y 126; MUÑOZ CONDE, F., “Consideraciones en torno al bien jurídico protegido del blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 157 y 158; id., ¿Dominio de la voluntad en virtud de aparatos de poder organizados en organizaciones “no desvinculadas al Derecho”?”, *Revista penal* n° 6, 2000, pág. 111.

ésta es la progresiva dilatación del ámbito objetivo del tipo<sup>118</sup>. Dicho ensanchamiento no sólo ha extendido el elenco de conductas específicamente previstas (posesión y uso de bienes de procedencia delictiva), sino que ha afectado, asimismo, a los posibles sujetos activos del delito (punición expresa del autoblanqueo) y ha dilatado considerablemente su objeto material, o lo que es lo mismo, el catálogo de delitos precedentes<sup>119</sup>. Como sabemos, el Código Penal anteriormente vigente vinculaba el delito de blanqueo exclusivamente a los bienes procedentes de delitos relativos al tráfico de drogas. El Código de 1995 extendió el catálogo de delitos base a todos aquellos que tuvieran la consideración de grave. El ámbito de aplicación del delito de blanqueo experimentó una nueva ampliación tras la entrada en vigor de la LO 15/2003, al eliminarse la limitación del carácter grave del delito previo que imponía el texto original del Código, de tal modo que tras la reforma del año 2003, cualquier tipo penal pasó a ser idóneo para un acto de blanqueo posterior, quedando únicamente fuera de su radio de acción los beneficios económicos derivados de las antiguas faltas<sup>120</sup>.

Si bien un importante sector doctrinal ya consideró que la reforma de 2003 significaba un ensanchamiento desmesurado del ámbito de aplicación del tipo penal<sup>121</sup>, han sido las modificaciones introducidas por la LO 5/2010, de 22 de junio, las que han situado la tendencia expansiva más allá de lo razonable<sup>122</sup>, implantando “un concepto de

---

<sup>118</sup> Vid. CARPIO DELGADO, J. del, “La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 2; VIDALES RODRÍGUEZ, C., “Blanqueo, ¿qué es blanqueo? (Estudio del artículo 301.1 del Código Penal Español tras la reforma de la LO 5/2010)”, op. cit., págs. 2 y 4.

<sup>119</sup> Vid. MARTÍNEZ-ARRIETA MÁRQUEZ DE PRADO, I., *El autoblanqueo. El delito fiscal como antecedente del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 21.

<sup>120</sup> Vid. LANDROVE DÍAZ, G., “El blanqueo de capitales de procedencia delictiva”, op. cit., pág. 146.

<sup>121</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., pág. 225; id., “Década y media de vertiginosa política criminal en la normativa penal española contra el blanqueo: análisis de los tipos penales contra el blanqueo desde su incorporación al Texto punitivo español en 1988 hasta la última reforma de 2003”, op. cit., pág. 24; COBO DEL ROSAL, M., “La recepción de las normas de la Comunidad Europea en la legislación penal contra el blanqueo de capitales”, *Cuadernos de política criminal* n° 85, 2005. Edersa, Madrid, 2005, pág. 63; GÓMEZ BENÍTEZ, J. M., “Reflexiones técnicas y de política criminal sobre el delito de blanqueo de bienes”, op. cit., pág. 8.

<sup>122</sup> Vid. CASTRO MORENO, A., “Reflexiones críticas sobre las nuevas conductas de posesión y utilización en el delito de blanqueo de capitales en la reforma del anteproyecto de 2008”, op. cit., pág. 1388; LANDROVE DÍAZ, G., “El blanqueo de capitales de procedencia delictiva”, op. cit., págs. 142 y ss.; OLIVA GARCÍA, H., “La defensa ante la acusación por blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 23; MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Receptación y blanqueo de capitales (arts. 301 y 302)”, op. cit., pág. 339; id., “Prevención y sanción del blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 371, 374 y 375; id., “Ganancias criminales y ganancias no declaradas (El desbordamiento del delito fiscal y del blanqueo)”, op. cit., págs. 663 y 664; id., “Un matrimonio de conveniencia: blanqueo de capitales y delito fiscal”, op. cit., págs. 15 y ss.; ABEL SOUTO, M., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., págs. 64 y 82; id., “La reforma penal española de 2010 sobre blanqueo, las nuevas técnicas de comisión delictiva y el uso de las telecomunicaciones para el blanqueo”, op. cit., págs. 163 y 164; id., “Volumen mundial del blanqueo de dinero, evolución del delito en España y jurisprudencia reciente sobre las últimas modificaciones del Código penal”, op. cit., pág. 18; id., “Jurisprudencia penal reciente sobre el blanqueo de dinero, volumen del fenómeno y evolución del delito en España”, op. cit., pág. 139; GALLEGU SOLER, J. I., *Comentarios al Código Penal. Reforma LO 5/2010*, op.

blanqueo desnaturalizado”<sup>123</sup> que permite criminalizar conductas de “dudoso merecimiento de pena”<sup>124</sup>. En efecto, la incorporación, por virtud de la reforma de 2010, de dos nuevos comportamientos específicamente previstos -la *posesión* y la *utilización* de los bienes de ilícito origen- supone de facto, como acertadamente ha advertido ABEL SOUTO, “la equiparación típica de los actos preparatorios o de la tentativa con la consumación del delito [y] la sanción penal del beneficiado por el hecho que no ha intervenido en su ejecución”, derivada de la mera utilización de los bienes delictivos sin ninguna finalidad concreta<sup>125</sup>. Una lectura atenta de la nueva redacción del artículo 301.1 CP permite advertir que una de las consecuencias más perniciosas de la reforma de 2010 se materializa al relacionar la expresa incriminación del autoblanqueo con las novedosas conductas de posesión y utilización: las extrañas consecuencias a las que se refiriese QUINTERO OLIVARES<sup>126</sup> alcanzan, si se interpreta el tipo en su literalidad, a la incriminación automática del delito de blanqueo a toda persona que participe en cualquier hecho delictivo que genere algún tipo de beneficio económico<sup>127</sup>. La punición de los dos delitos, como ya advirtiese el Consejo General del Poder Judicial en su preceptivo Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica de reforma del Código penal,

---

cit., pág. 664; QUINTERO OLIVARES, G., “Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil”, op. cit., pág. 13; DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, J., “El blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 463; MILANS DEL BOSCH, S., “Principales novedades que introduce la ley 10/2010, de 28 de abril, sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo”, op. cit., págs. 45 y ss.; CARPIO DELGADO, J. del, “La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 2, 6 y ss.; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 183, 184, 434, 447 y ss.; id., “La cuota tributaria defraudada como objeto material del delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 178; FARALDO CABANA, P., “El blanqueo de capitales tras la reforma de 2010”, op. cit., pág. 31; FERNÁNDEZ TERUELO, J. G., “El comiso con particular referencia a su incidencia en el delito del blanqueo de capitales (a raíz de la reforma del código penal operada por LO 5/2010)”, op. cit., pág. 125; id., “El nuevo modelo de reacción penal frente al blanqueo de capitales (los nuevos tipos de blanqueo, la ampliación del comiso y la integración del blanqueo en el modelo de responsabilidad penal de las empresas)”, op. cit., pág. 8; CORCOY BIDASOLO, M., “Crisis de las garantías constitucionales a partir de las reformas penales y de su interpretación por los tribunales”, *Constitución y sistema penal*, Mir Puig, S./ Corcoy Bidasolo, M. (dirs.). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2012, pág. 166; MATA LLÍN EVANGELIO, A., “El “autoblanqueo” de capitales”, op. cit., págs. 2 y 40.

<sup>123</sup> Vid. VIDALES RODRÍGUEZ, C., “Blanqueo, ¿qué es blanqueo? (Estudio del artículo 301.1 del Código Penal Español tras la reforma de la LO 5/2010)”, op. cit., pág. 4.

<sup>124</sup> Vid. ROBLES PLANAS, R./PASTOR MUÑOZ, N., *Lecciones de Derecho Penal. Parte Especial*, op. cit., pág. 252.

<sup>125</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 63.

<sup>126</sup> Vid. QUINTERO OLIVARES, G., “Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil”, op. cit., pág. 13.

<sup>127</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., “Jurisprudencia penal reciente sobre el blanqueo de dinero, volumen del fenómeno y evolución del delito en España”, op. cit., pág. 152; id., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 80; id., “Volumen mundial del blanqueo de dinero, evolución del delito en España y jurisprudencia reciente sobre las últimas modificaciones del Código penal”, op. cit., pág. 29; MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Receptación y blanqueo de capitales (arts. 301 y 302)”, op. cit., pág. 344; id., “Un matrimonio de conveniencia: blanqueo de capitales y delito fiscal”, op. cit., pág. 23; CARPIO DELGADO, J. del, “La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 6-8.

podría entrañar la vulneración de garantías constitucionales elementales, como es el principio *non bis in idem*<sup>128</sup>. Recordemos que dicho principio, si bien no está expresamente reflejado en el texto de la Norma Fundamental, ha sido considerado por el Tribunal Constitucional como integrado en los principios de legalidad y tipicidad penal garantizados en el artículo 25.1 CE<sup>129</sup>.

Por otro lado, la orientación expansiva de la reforma de 2010 se ha manifestado, en materia de blanqueo, a través de la previsión de “insólitos tipos agravados” y de la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas<sup>130</sup>, lo que en la práctica, acertadamente ha afirmado SILVA SÁNCHEZ, supone que “todas las empresas, todos sus administradores y directivos se hallan obligados (...) a actuar como garantes de la no comisión de delitos de blanqueo en su organización; en otras palabras como agentes de policía”<sup>131</sup>. En cualquier caso, la incorporación de los nuevos tipos agravados -a los que, recordemos, se asocia la aplicación de la pena prevista para el tipo básico en su mitad superior- resulta muy ilustrativa de la “exacerbación punitiva del blanqueo”<sup>132</sup> perseguida por el legislador. Si la redacción original del artículo 301 CP contenía únicamente como hechos determinantes de la modalidad agravada los delitos relacionados con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas previstos en los artículos 368 a 372, la LO 5/2010 ha ampliado el catálogo a los delitos comprendidos en los Capítulos V, VI, VII, VIII, IX y X del Título XIX y en el Capítulo I del Título XVI del Código (esencialmente, delitos relativos a la corrupción y delitos urbanísticos). Sobre la base de la autonomía del delito de blanqueo, la doctrina ha censurado con razón que el motivo de agravación descansa en una mayor desaprobación del delito previo o antecedente. El hecho de que el delito del que proceden los bienes sobre los que el blanqueador opera merezca especial reproche, no supone mayor

---

<sup>128</sup> Vid. GALLEGOS SOLER, J. I., *Comentarios al Código Penal. Reforma LO 5/2010*, op. cit., pág. 666. Asimismo, CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Comisión de Estudios e Informes), Informe al anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, de 18 de febrero de 2009, pág. 123, disponible en el siguiente enlace: <http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-al-Anteproyecto-de-Ley-Organica-por-la-que-se-modifica-la-Ley-Organica-10-1995--de-23-de-noviembre--del-Codigo-Penal>.

<sup>129</sup> Vid. SSTC 188/2005, de 7 de julio, 180/2004, de 2 de noviembre, 229/2003, de 18 de diciembre, 2/2003, de 16 de enero, 177/1999, de 11 de octubre, 221/1997, de 4 de diciembre, 154/1990, de 15 de octubre, 2/1981, de 30 de enero, entre otras muchas.

<sup>130</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 61.

<sup>131</sup> Vid. SILVA SÁNCHEZ, J. M., “Expansión del derecho penal y blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 139.

<sup>132</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 82.

afección al bien jurídico que el tipo de blanqueo está llamado a proteger<sup>133</sup>. Si en este delito lo que determina mayor contenido de injusto es el especial valor de los bienes o fondos blanqueados, el incremento de la pena únicamente hallaría justificación en la especial relevancia de la cuantía de los activos objeto de la acción típica<sup>134</sup> y no en la irrelevante naturaleza del delito previo<sup>135</sup> invocado por los tipos agravados.

En definitiva, la evolución en la criminalización del blanqueo de capitales, desde sus primeras formulaciones típicas hasta la reforma operada por la LO 10/2010, constituye un claro ejemplo del proceso expansivo del Derecho penal. Incluso resulta comprensible que algún autor estime que dicha evolución “nos acerca peligrosamente a un Derecho penal del enemigo”<sup>136</sup> o, cuanto menos, excepcional<sup>137</sup>. Estamos ante un tipo redactado de manera excesivamente abierta y flexible precisamente con objeto de garantizar su hiperefectividad y asegurar el “aislamiento económico y social de los sujetos que intervienen en actividades ilícitas”<sup>138</sup>, que llega a alcanzar a quienes,

---

<sup>133</sup> Vid. BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I./FABIÁN CAPARRÓS, E. A., “La emancipación del delito de blanqueo de capitales en el Derecho penal español”, op. cit., págs. 130 y 131; ABEL SOUTO, M., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 103; id., “La reforma penal española de 2010 sobre blanqueo, las nuevas técnicas de comisión delictiva y el uso de las telecomunicaciones para el blanqueo”, op. cit., págs. 182-184; id., “Jurisprudencia penal reciente sobre el blanqueo de dinero, volumen del fenómeno y evolución del delito en España”, op. cit., pág. 174; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 263 y 264; LORENZO SALGADO, J. M., “El tipo agravado de blanqueo cuando los bienes tengan su origen en el delito de tráfico de drogas”, *III Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pág. 232; NÚÑEZ PAZ, M. A., “El tipo agravado de blanqueo de dinero procedente de delitos urbanísticos”, *III Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, págs. 272, 273 y 276.

<sup>134</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 787 y 788; ABEL SOUTO, M., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., págs. 103 y 104; id., “La reforma penal española de 2010 sobre blanqueo, las nuevas técnicas de comisión delictiva y el uso de las telecomunicaciones para el blanqueo”, op. cit., pág. 183; id., BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 263 y 264; NÚÑEZ PAZ, M. A., “El tipo agravado de blanqueo de dinero procedente de delitos urbanísticos”, op. cit., pág. 275.

<sup>135</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., “Blanqueo, innovaciones tecnológicas, amnistía fiscal de 2012 y reforma penal”, op. cit., pág. 42; id., “Volumen mundial del blanqueo de dinero, evolución del delito en España y jurisprudencia reciente sobre las últimas modificaciones del Código penal”, op. cit., pág. 46; id., “Jurisprudencia penal reciente sobre el blanqueo de dinero, volumen del fenómeno y evolución del delito en España”, op. cit., pág. 174; ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 316.

<sup>136</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 96. En sentido similar, BLANCO CORDERO, I., “Negocios socialmente adecuados y delito de blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 290 y 291; MUÑOZ CONDE, F., “Consideraciones en torno al bien jurídico protegido del blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 157 y ss.; id., “El delito de blanqueo de capitales y el derecho penal del enemigo”, *III Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coord. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pág. 375; LANDROVE DÍAZ, G., “El blanqueo de capitales de procedencia delictiva”, op. cit., págs. 141 y ss.; ARIAS HOLGUÍN, D. P., *Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 128.

<sup>137</sup> Vid. PÉREZ MANZANO, M., “Neutralidad delictiva y blanqueo de capitales: el ejercicio de la abogacía y la tipicidad del delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 170.

<sup>138</sup> Vid. ARIAS HOLGUÍN, D. P., *Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 128. Vid., asimismo, BLANCO CORDERO, I., “Negocios socialmente



desarrollando conductas subsumibles en la literalidad del tipo, realicen actos cotidianos de consumo o de cuantía insignificante sin ningún potencial lesivo para el bien jurídico. Actos que, por este motivo, deben ser excluidos del ámbito de aplicación del delito a través de una interpretación razonable del mismo, de acuerdo con el principio de lesividad o exclusiva protección de los bienes jurídicos, que vincula el injusto del hecho delictivo a la afectación del bien jurídico protegido por el delito. A dicha exégesis restrictiva contribuirá no sólo la interpretación teleológica del tipo, sino también el recurso a determinados criterios dogmáticos de carácter esencialmente normativo, derivados de la imputación objetiva y de otras construcciones dogmáticas, como son los denominados actos “neutrales” o “de la vida cotidiana” o los principios de de confianza<sup>139</sup> y de insignificancia<sup>140</sup>. Para la reducción teleológica del tipo a través de la incidencia en el bien jurídico es preciso determinar antes cuál es el bien protegido por el delito de blanqueo y si resulta admisible otorgar al bien jurídico la aptitud para delimitar el contenido de los tipos penales. A ello dedicaremos el capítulo siguiente. Por su parte, el estudio de los criterios dogmáticos que posibilitan limitar normativamente el ámbito típico se abordará en el primer apartado del capítulo IV.

---

adecuados y delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 290; id. *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 463.

<sup>139</sup> Vid. GALLEGO SOLER, J. I., *Comentarios al Código Penal. Reforma LO 5/2010*, op. cit., pág. 666.

<sup>140</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., págs. 93 y ss.

## 2.2. EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALS

### 2.2.1. CONCEPTO Y FUNCIONES DEL BIEN JURÍDICO

Es aceptado mayoritariamente por la doctrina penal que la función esencial del Derecho penal es la protección de bienes jurídicos<sup>141</sup>, pudiendo entenderse por tales aquellas “realidades o fines que son necesarios para una vida social libre y segura que garantice los derechos humanos y fundamentales del individuo, o para el funcionamiento del sistema estatal erigido para la consecución de tal fin”<sup>142</sup>. Esta

<sup>141</sup> Vid. HASSEMER, W., “Bienes jurídicos en el derecho penal”, *Estudios sobre justicia penal. Homenaje a Julio B.J. Maier*. Editores del Puerto, Buenos Aires, 2005, pág. 74; ROXIN, C., *Derecho Penal Parte General. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito*. Ed. Civitas. 2ª ed. Madrid, 1997, pág. 51; id., “¿Es la protección de bienes jurídicos una finalidad del Derecho penal?”, *La teoría del bien jurídico* (VV.AA). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2007, pág. 447; id., “El concepto de bien jurídico como instrumento de crítica legislativa sometido a examen”, *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 2013, núm. 15-1, disponible en el siguiente enlace: <http://criminnet.ugr.es/recpc/15/recpc15.html>, pág. 3; RODRÍGUEZ MOURULLO, G., *Derecho Penal. Parte General. Tomo I*. Ed. Civitas. Madrid, 1977, pág. 52; OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, E., “Función y límites del principio de exclusiva protección de bienes jurídicos”, *ADPCP*, Tomo XLIII, Fasc/Mes 1, 1990, pág. 5; GIMBERNAT ORDEIG, E., “Presentación”, *La teoría del bien jurídico* (VV.AA). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2007, pág. 11; ÁLVAREZ GARCÍA, F. J. “Bien jurídico y Constitución”, *Cuadernos de Política Criminal*, nº 43, Madrid, 1991, págs. 5 y ss.; FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 164; id., “Tipologías y lógica del lavado de dinero”, op. cit., pág. 41; GÓMEZ PAVÓN, P., “El bien jurídico protegido en la receptación, blanqueo de dinero y encubrimiento”, op. cit., pág. 191; PÉREZ DEL VALLE, C., “En el punto de mira. La crítica a la Teoría de los bienes jurídicos”, *Los desafíos del derecho penal en el siglo XXI. Libro homenaje al Profesor Dr. Gunter Jakobs*. ARA Editores, 2005, pág. 714; HORMAZÁBAL MALARÉE, H. “Consecuencias político criminales y dogmáticas del principio de exclusiva protección de bienes jurídicos”, *Serta: in memoriam Alexandro Baratta*, Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca, 2004, págs. 1083 y ss.; BAIGÚN, D., “El bien jurídico orden económico”, *Estudios sobre justicia penal. Homenaje a Julio B.J. Maier*. Editores del Puerto, Buenos Aires, 2005, pág. 13; BUNZEL, M., “La fuerza del principio constitucional de proporcionalidad como límite de la protección de bienes jurídicos en la sociedad de la información”, *La teoría del bien jurídico* (VV.AA). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2007, pág. 152; MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., *Derecho penal económico y de la empresa. Parte General*. 4ª edición. Ed. Tirant lo Blanch. Madrid, 2014, pág. 153; FERNÁNDEZ BAUTISTA, S., “La adscripción de un hecho a su autor: la pertenencia del hecho. Especial referencia al administrador”, *Derecho penal del estado social y democrático de derecho. Libro homenaje a Santiago Mir Puig*. Diego Manuel Luzón Peña (dir.). Ed. La Ley. Madrid, 2010, pág. 580; KIERSZENBAUM, M., “El bien jurídico en el derecho penal. Algunas nociones básicas desde la óptica de la discusión actual”, *Lecciones y Ensayos*, nº 86, 2009, págs. 194 y ss., también disponible en el siguiente enlace: <http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/86/07-ensayo-kierszenbaum.pdf>. El mandato de orientación a la tutela de bienes jurídicos constituye la denominada “función inmanente al sistema de la teoría del bien jurídico”, que, sin pretender sujetar al legislador a un concepto material de bien jurídico, vincula la legitimación de la pena concreta al “concepto de protección fundamentado en la ley (...) haciendo depender la legitimidad de cualquier pena, más allá del tenor literal, también en la protección de bienes jurídicos perseguidos por la ley”. (Vid. GAEDE, K., “Puntos fuertes y puntos flacos de la función legitimadora de la teoría del bien jurídico inmanente al sistema en el ejemplo del fraude de subvenciones”, *La teoría del bien jurídico* (VV.AA). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2007, págs. 266 y 267).

<sup>142</sup> Vid. ROXIN, C., “¿Es la protección de bienes jurídicos una finalidad del Derecho penal?”, op. cit., pág. 448. Cfr., asimismo, en la doctrina española, MIR PUIG, S., “Límites del normativismo en Derecho penal”, *Derecho penal del siglo XXI. Cuadernos de Derecho Judicial* nº VIII, 2007. CGPJ. Madrid, 2007, pág. 62; GIMBERNAT ORDEIG, E., “Presentación”, op. cit., pág. 15; FABIÁN CAPARRÓS, E. A., “El blanqueo de

máxima dogmática aparece íntimamente asociada a los principios de lesividad y ofensividad<sup>143</sup>, que descartan la posibilidad de que a través del Derecho penal sean sancionadas conductas que no supongan la efectiva lesión de un bien jurídico concreto<sup>144</sup>. La ausencia de un bien jurídico objeto de tutela “despoja a la norma penal de todo contenido material -y, con ello, de toda legitimidad-, de manera que cualquier tipificación resulta imposible o bien arbitraria si no se construye sobre la base de su preexistencia”<sup>145</sup>.

Precisamente por ello, la doctrina de manera prácticamente unánime asume que el bien jurídico se configura como un concepto esencial y decisivo en materia penal<sup>146</sup>, lugar común para la dogmática y política criminal<sup>147</sup> y base irrenunciable de un sistema jurídico-penal racional<sup>148</sup>. De acuerdo con MIR PUIG, dos son las funciones básicas que cumple el bien jurídico protegido: en un sentido político-criminal, indica qué ha de ser objeto de protección por el Derecho penal -función limitadora frente al legislador-y en un sentido dogmático, desempeña una función sistemática y hermenéutica, como guía de la interpretación del ámbito de protección de la concreta norma<sup>149</sup> (alcance y contorno del tipo penal)<sup>150</sup>.

---

capitales (Contexto, razones de su penalización, evolución en nuestro entorno de las iniciativas supranacionales, op. cit., pág. 171; id., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 164.

<sup>143</sup> Vid. MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., *Derecho penal económico y de la empresa. Parte general*, op. cit., pág. 153.

<sup>144</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., pág. 21.

<sup>145</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 164; GÓMEZ PAVÓN, P., “El bien jurídico protegido en la receptación, blanqueo de dinero y encubrimiento”, op. cit., págs. 191 y 192.

<sup>146</sup> Si bien su contenido es, aún hoy, uno de los más discutidos en la Ciencia del Derecho penal. (Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, op. cit., pág. 177). Resulta en cualquier caso aceptado de manera general -con algunas excepciones, como se verá- la idea del bien jurídico como concepto nuclear del Derecho penal. Vid., en este sentido, GIMBERNAT ORDEIG, E., “Presentación”, op. cit., pág. 22; AMELUNG, K., “El concepto de «bien jurídico» en la teoría de la protección penal de bienes jurídicos”, *La teoría del bien jurídico* (VV.AA). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2007, págs. 229 y 263; ROXIN, C., “¿Es la protección de bienes jurídicos una finalidad del Derecho penal?”, op. cit., pág. 446; HASSEMER, W., “Bienes jurídicos en el Derecho penal”, op. cit., pág. 66, id., “¿Puede haber delitos que no afecten a un bien jurídico penal?”, *La teoría del bien jurídico* (VV.AA). Marcial Pons. Madrid, 2007, pág. 96; HEFENDEHL, R., “De largo aliento: el concepto de Bien Jurídico”, *La teoría del bien jurídico* (VV.AA). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2007, pág. 461; SCHÜNEMANN, B., “El principio de protección de bienes jurídicos como punto de fuga de los límites constitucionales de los tipos penales y de su interpretación”, *La teoría del bien jurídico* (VV.AA). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2007, pág. 198.

<sup>147</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 165.

<sup>148</sup> Vid. VON HIRSCH, A., “El concepto de bien jurídico y el principio del daño”, *La teoría del bien jurídico* (VV.AA). Marcial Pons. Madrid, 2007, pág. 37.

<sup>149</sup> Vid. MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*. Reppertor, 9ª edición, Barcelona, 2011, págs. 163 y 164. Asimismo, LANDECHO VELASCO, C. M., *Derecho Penal Español. Parte General*. Ed. Tecnos. 8ª ed., Madrid, 2010, pág. 253; VON HIRSCH, A., “El concepto de bien jurídico y el principio del daño”, op. cit., pág. 37.

<sup>150</sup> Vid. JORGE BARREIRO, A., “El delito de alzamiento de bienes. Problemas prácticos”, *Derecho Penal Económico. Cuadernos de Derecho Judicial* nº 2, 2003. CGPJ, 2003, págs. 194 y ss.; CUESTA MERINO, J.

### 2.2.1.1 FUNCIÓN LEGITIMADORA

La primera función a la que se ha hecho referencia tiene un sentido esencialmente legitimador<sup>151</sup> o crítico<sup>152</sup>, y opera como instrumento político-criminal para “la fundamentación y limitación de la génesis y formulación de los tipos penales”<sup>153</sup>. Esta función ha sido ampliamente cuestionada fundamentalmente en la doctrina alemana<sup>154</sup>, y en la actualidad se ha suscitado un intenso debate en el que se discute si la teoría del bien jurídico puede seguir considerándose hoy en día criterio de legitimación de las normas penales<sup>155</sup>; si, por el contrario, es preciso descartar la teoría del bien jurídico como instrumento suprapositivo de legitimación<sup>156</sup>; o si, dada la falta de claridad y la vaguedad del concepto *bien jurídico*<sup>157</sup>, no es éste apto para “abarcarse todas las materias objeto de regulación penal”<sup>158</sup> y ha de ser “al menos completado con

---

L., “La instrucción de las insolvencias punibles”, *Estudios de Derecho Judicial*, nº 64, 2004, *La instrucción de los delitos económicos y contra la Hacienda Pública*, CGPJ, 2004, pág. 532.

<sup>151</sup> Vid. SEHER, G., “La legitimación de normas penales basada en principios y el concepto de bien jurídico”, *La teoría del bien jurídico* (VV.AA). Marcial Pons. Madrid, 2007, pág. 69; HASSEMER, W., “Bienes jurídicos en el derecho penal”, op. cit., pág. 69; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 2ª ed., op. cit., pág. 177; FABIÁN CAPARRÓS, E. A., “El blanqueo de capitales (Contexto, razones de su penalización, evolución en nuestro entorno de las iniciativas supranacionales)”, op. cit., pág. 171; id., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 165; GÓMEZ PAVÓN, P., “El bien jurídico protegido en la receptación, blanqueo de dinero y encubrimiento”, op. cit., pág. 212.

<sup>152</sup> Vid. KAHLO, M., “Sobre la relación entre el concepto de bien jurídico y la imputación objetiva en Derecho Penal”, *La teoría del bien jurídico* (VV.AA). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2007, pág. 53; HEFENDEHL, R., “El bien jurídico: imperfecto, pero sin alternativa”, *Estudios penales en homenaje a Enrique Gimbernat*. Ed. Edisofer. Madrid, 2008, pág. 390; id., “De largo aliento: el concepto de Bien Jurídico”, op. cit., pág. 461.

<sup>153</sup> Vid. KAHLO, M., “Sobre la relación entre el concepto de bien jurídico y la imputación objetiva en Derecho Penal”, op. cit., pág. 53.

<sup>154</sup> Vid., entre otros, HEFENDEHL, R., “El bien jurídico como eje material de la norma penal”, *La teoría del bien jurídico* (VV.AA). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2007, pág. 180; id., “El bien jurídico: imperfecto, pero sin alternativa”, op. cit., págs. 459 y ss.; SEHER, G., “La legitimación de normas penales basada en principios y el concepto de bien jurídico”, op. cit., pág. 72; SCHÜNEMANN, B., “El principio de protección de bienes jurídicos como punto de fuga de los límites constitucionales de los tipos penales y de su interpretación”, *La teoría del bien jurídico* (VV.AA). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2007, págs. 198 y ss.; ROXIN, C., “¿Es la protección de bienes jurídicos una finalidad del Derecho penal?”, op. cit., págs. 445 y 446; FRISCH, W., “Bien jurídico, Derecho, estructura del delito e imputación en el contexto de la legitimación penal estatal”, *La teoría del bien jurídico* (VV.AA). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2007, pág. 310. En la doctrina penal española, se ha pronunciado de forma especialmente crítica con la función legitimadora del bien jurídico PÉREZ DEL VALLE (“En el punto de mira. La crítica a la Teoría de los bienes jurídicos”, op. cit., págs. 715 y ss.).

<sup>155</sup> Vid. SEHER, G., “La legitimación de normas penales basada en principios y el concepto de bien jurídico”, op. cit., pág. 70; FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y TORRES, J., *Blanqueo de capitales y principio de lesividad*. (Tesis doctoral dirigida por Eduardo A. Fabián Caparrós, presentada en Salamanca en 2013), disponible en el enlace <http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/122959>, págs. 50, 68 y ss.

<sup>156</sup> Vid. FRISCH, W., “Bien jurídico, Derecho, estructura del delito e imputación en el contexto de la legitimación penal estatal”, op. cit., págs. 310 y ss.

<sup>157</sup> Vid. VON HIRSCH, A./ WOHLERS, W., “Teoría del bien jurídico y estructura del delito. Sobre los criterios de una imputación justa”, *La teoría del bien jurídico* (VV.AA). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2007, pág. 287.

<sup>158</sup> Vid. SEHER, G., “La legitimación de normas penales basada en principios y el concepto de bien jurídico”, op. cit., pág. 76. Así, STRATENWERTH niega la posibilidad de apelar a bienes jurídicos universales para la justificación de las normas penales llamadas a tutelar intereses colectivos. (“La criminalización en los delitos contra bienes jurídicos colectivos”, *La teoría del bien jurídico* (VV.AA). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2007, págs. 370 y ss.).

ulteriores criterios”<sup>159</sup>. En lo que sigue, nuestra exposición relativa a la función crítica del bien jurídico reflejará principalmente las ideas desarrolladas en la fundamental obra *La teoría del bien jurídico*<sup>160</sup>, en la que muchos de los más ilustres penalistas germanos abordan el estado de la cuestión en la dogmática alemana.

En el seno de la doctrina penal alemana, algunos autores rechazan la operatividad del bien jurídico como criterio de legitimación de las normas penales, al considerar que la finalidad del Derecho penal no es proteger bienes jurídicos<sup>161</sup>. Fundamentalmente, desde concepciones sociológicas y hegelianas, se concibe la pena como “acto para el restablecimiento o aseguramiento del Derecho”<sup>162</sup>. La finalidad de la pena no sería otra que garantizar el funcionamiento óptimo de la sociedad, de modo que no resulta necesario acudir al concepto de bien jurídico para legitimar la punición de un acto concreto<sup>163</sup>. Para el funcionalismo penal, se trata de garantizar no la indemnidad de bienes jurídicos, sino la vigencia de la norma<sup>164</sup>. Son, en este sentido, paradigmáticas las formulaciones de JAKOBS, en virtud de las cuales se rechaza el concepto tradicional de bien jurídico. Para este autor, dichos bienes -por ejemplo, la vida, la propiedad- deben ser entendidos como “situaciones valoradas positivamente” y configuran el “objeto de la acción” o “del comportamiento”. Han de distinguirse en cualquier caso del concepto de bien jurídico-penal, integrado por “la firmeza de las expectativas normativas esenciales frente (...) a las decepciones que tiene el mismo ámbito que la vigencia de la norma puesta en práctica”<sup>165</sup>. Lo penalmente relevante no es la lesión de intereses individualmente considerados; la función de la pena es reforzar la vigencia de la norma<sup>166</sup>.

<sup>159</sup> Vid. VON HIRSCH, A., “El concepto de bien jurídico y el principio del daño”, op. cit., pág. 44.

<sup>160</sup> Vid. *La teoría del bien jurídico* (VV.AA., coord. Roland Hefendehl). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2007.

<sup>161</sup> Vid. GIMBERNAT ORDEIG, E., “Presentación”, op. cit., pág. 12.

<sup>162</sup> Vid. SEHER, G., “La legitimación de normas penales basada en principios y el concepto de bien jurídico”, op. cit., pág. 73.

<sup>163</sup> Ibidem, págs. 72 y 73.

<sup>164</sup> Vid. WITTIG, P., “Teoría del bien jurídico, *harm principle* y delimitación de ámbitos de responsabilidad”, *La teoría del bien jurídico* (VV.AA.). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2007, pág. 342.

<sup>165</sup> Vid. JAKOBS, G., *Derecho Penal. Parte General. Fundamentos y teoría de la imputación*. Ed. Marcial Pons, 2ª ed. Madrid, 1997, pág. 44.

<sup>166</sup> JAKOBS ilustra esta idea con el siguiente ejemplo: “Lo que constituye una lesión de un bien *jurídico-penal* no es la causación de una muerte (ésta es simplemente lesión de un bien), sino la oposición a la norma subyacente en el homicidio evitable. El homicidio evitable tiene el sentido de una oposición a la norma subyacente en los delitos de homicidio, porque al autor se le hace responsable, a causa de su conocimiento (dolo) o cognoscibilidad (imprudencia), de haber elegido (...) realizar el comportamiento que acarrearía consecuencias en lugar de la alternativa inocua. La norma obliga a elegir la organización a la que no siguen daños, pero el autor se organiza de modo que causa daño imputablemente: su proyecto de conformación del mundo se opone al de la norma. Sólo este punto de vista eleva el bien jurídico-penal a la esfera de la *significación* del comportamiento (delictivo) en tanto que negación del *significado* de normas y el

No sólo desde los postulados de teorías funcionalistas se censura la función crítica del bien jurídico. FRISCH rechaza que éste pueda considerarse la “piedra de toque” de la legitimación penal; son, a su juicio, las teorías de la imputación los instrumentos teóricos que permiten aportar criterios relevantes en orden a valorar la legitimación de una conducta positivada penalmente<sup>167</sup>. Resultan censurables, a juicio de FRISCH, las recientes tendencias a la tipificación de conductas que, aún orientadas a tutelar bienes jurídicos “razonables”, acuden a mecanismos de protección “cuestionables” desde el punto de vista de la legitimación penal, por situarse “en un momento muy alejado de un posible menoscabo del bien”<sup>168</sup>; claro ejemplo de ello es la incriminación en muchos ámbitos de delitos de peligro -sobre todo de peligro abstracto- y de mera actividad, así como la sanción penal de meros actos preparatorios, de la mera pertenencia a organizaciones, o de conductas que sólo pueden ser lesivas mediante los efectos de la acumulación. “Dirigir la atención hacia estos fenómenos en el marco de la discusión sobre la legitimación es (...) altamente aconsejable” y el recurso a las teorías de la imputación puede aportar considerables avances<sup>169</sup>. SEELMANN también descarta el bien jurídico como modelo de legitimación, y acude a una concepción del Derecho como relación de respeto o reconocimiento recíproco entre personas: el delito aparece definido como la lesión de la relación de reconocimiento que implica el cuestionamiento del otro como sujeto de Derecho<sup>170</sup>. Este principio, a juicio del autor, se configura de forma más precisa que el *harm principle* o el concepto del bien jurídico, pues “depende en menor medida de la conformación social de que se trate y las correspondientes condiciones constitucionales del sistema”, si bien dicho principio también ha de considerarse “históricamente flexible”<sup>171</sup>.

---

reforzamiento de perseverar en el significado de la norma por medio de la reacción punitiva.” (Ibidem, págs. 46 y 47).

<sup>167</sup> Vid. FRISCH, W., “Bien jurídico, Derecho, estructura del delito e imputación en el contexto de la legitimación penal estatal”, op. cit., págs. 323-326.

<sup>168</sup> Ibidem, pág. 326.

<sup>169</sup> Ibidem, págs. 326 y 327. En cualquier caso, afirma SCHULENBURG, no existe problema para plantear cuestiones de imputación en los delitos de peligro abstracto “en tanto que posean una estructura propia de los delitos de resultado”. Y ello, porque no se ha de confundir el objeto del bien jurídico, que permite distinguir los delitos de lesión, de peligro concreto y de peligro abstracto, con el objeto de la acción, que diferencia los delitos de resultado de los tipos de mera actividad. (“Relaciones dogmáticas entre bien jurídico, estructura del delito e imputación objetiva”, *La teoría del bien jurídico* (VV.AA). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2007, pág. 362).

<sup>170</sup> Vid. SEELMANN, K., “El concepto de bien jurídico, el *harm principle* y el modelo de reconocimiento como criterios de merecimiento de pena”, *La teoría del bien jurídico* (VV.AA). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2007, págs. 375 y 376.

<sup>171</sup> Ibidem, pág. 382.

Desde una perspectiva diferente, otro sector de la doctrina alemana sostiene que el bien jurídico, por sí solo, no está en condiciones de legitimar la intervención legislativa en materia penal, de ofrecer bases de legitimación sólidas, y resulta necesario acudir a ulteriores criterios<sup>172</sup>. Para ello, algunos autores han acudido a determinados principios y reglas constitucionales, en especial a los derechos fundamentales<sup>173</sup> y al principio de proporcionalidad<sup>174</sup>. Las conclusiones alcanzadas desde las diferentes ópticas conducen a muy diversos resultados. Si para HASSEMER, el bien jurídico se inserta sin esfuerzo en los derechos fundamentales y en los principios de prohibición de exceso y de insuficiencia<sup>175</sup>, para STERNBERG-LIEBEN, BOSË y BUNZEL actualmente la Constitución no puede aportar pautas positivas<sup>176</sup> ni instrucciones concretas<sup>177</sup> en orden a limitar el amplio margen de maniobra de que dispone el legislador a la hora de configurar los tipos penales<sup>178</sup>. Frente a dicha interpretación, otros autores consideran acertado mantener las líneas de investigación enfocadas a la interacción entre las disciplinas penal y constitucional<sup>179</sup>.

Para otro sector doctrinal (HIRSCH y WOHLERS), la existencia de un bien jurídico merecedor de protección penal no opera como única pauta legitimadora de los tipos penales. Como criterio complementario, en aquellos casos en los que “no concurre el menoscabo de un bien jurídico o sólo se causa indirectamente”, debe responderse “en qué medida y frente a qué modalidades de ataque” la norma penal cuestionada brinda protección a determinado bien jurídico<sup>180</sup>. En la doctrina española, FEIJÓO SÁNCHEZ

<sup>172</sup> Vid. VON HIRSCH, A., “El concepto de bien jurídico y el principio del daño”, op. cit., pág. 44.

<sup>173</sup> Vid. BOSË, M., “Derechos fundamentales y Derecho penal como «Derecho coactivo»”, *La teoría del bien jurídico* (VV.AA). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2007, págs. 137 y ss.

<sup>174</sup> Vid. BOTKE, W., “¿Roma locuta causa finita? ¿Adiós a la exigencia de protección de los bienes jurídicos?”, *Derecho penal del estado social y democrático de derecho. Libro homenaje a Santiago Mir Puig*, Diego Manuel Luzón Peña (dir.). Ed. La Ley. Madrid, 2010, págs. 121-123. Por su parte, también BUNZEL busca en el principio de proporcionalidad la base legitimadora de los bienes jurídicos, si bien sus conclusiones no son muy esperanzadoras, dadas las amplias prerrogativas que el legislador tiene en la determinación de objetivos. (“La fuerza del principio constitucional de proporcionalidad como límite de la protección de bienes jurídicos en la sociedad de la información”, op. cit., págs. 155-169).

<sup>175</sup> Vid. HASSEMER, W., “¿Puede haber delitos que no afecten a un bien jurídico penal?”, op. cit., págs. 98 y ss.

<sup>176</sup> Vid. BOSË, M., “Derechos fundamentales y Derecho penal como «Derecho coactivo»”, op. cit., pág. 138.

<sup>177</sup> Vid. STERNBERG-LIEBEN, D., “Bien jurídico, proporcionalidad y libertad del legislador penal”, *La teoría del bien jurídico* (VV.AA). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2007, pág. 107.

<sup>178</sup> Vid. BUNZEL, M., “La fuerza del principio constitucional de proporcionalidad como límite de la protección de bienes jurídicos en la sociedad de la información”, op. cit., pág. 155.

<sup>179</sup> Vid. LAGODNY, O., “El Derecho penal sustantivo como piedra de toque de la dogmática constitucional”, *La teoría del bien jurídico* (VV.AA). Marcial Pons. Madrid, 2007, pág. 136. En sentido contrario, vid. WOHLERS, W., “Las jornadas desde la perspectiva de un escéptico del bien jurídico”, *La teoría del bien jurídico* (VV.AA). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2007, págs. 404 y 405.

<sup>180</sup> Vid. VON HIRSCH, A./WOHLERS, W., “Teoría del bien jurídico y estructura del delito. Sobre los criterios de una imputación justa”, op. cit., pág. 287.

considera que el bien jurídico resulta insuficiente para determinar la legitimidad de la tipificación de una conducta concreta, siendo necesario acudir a criterios adicionales, si bien la noción de bien jurídico permite contrastar la ilegitimidad de aquella norma penal “que no proteja nada digno de protección” (esto es, aquello considerado “como valioso para la generalidad”)<sup>181</sup>. En cualquier caso, considera el autor que la ciencia penal debería dirigir su atención más que al objeto de protección de la norma penal, a lo que ésta castiga y de qué manera lo hace<sup>182</sup>.

Por último, otro sector de la doctrina considera fuera de toda duda el potencial crítico del bien jurídico: dicho concepto se revela como instrumento especialmente idóneo para censurar aquellas decisiones del legislador de incriminar penalmente conductas no atentatorias contra algún interés digno de protección penal.

En la doctrina alemana, HASSEMER afirma que el bien jurídico constituye base irrenunciable “como parámetro de una buena política criminal”, aceptando como bienes jurídicos no sólo aquéllos intereses individuales, sino también los bienes jurídicos universales, siempre que sean “funcionalizados a partir de la persona” (concepto personal de bien jurídico). Frente a la declarada crisis del bien jurídico, el autor reinterpreta a éste desde una nueva óptica basada en principios constitucionales: el bien jurídico se inserta sin esfuerzo en los derechos fundamentales y en los principios de prohibición de exceso y de insuficiencia, pues todos ellos comparten con el primero el hecho de constituir un límite a las injerencias del Derecho penal<sup>183</sup>.

Por su parte, ROXIN reafirma con rotundidad el “concepto crítico con la legislación”<sup>184</sup> del bien jurídico, en la medida en que, a través de su “función de directriz político-criminal”<sup>185</sup>, permite determinar los límites de la punición legítima<sup>186</sup>.

---

<sup>181</sup> Vid. FEIJÓO SÁNCHEZ, B., “Sobre la crisis de la teoría del bien jurídico”, *Revista Electrónica InDret* 2/2008, pág. 16, disponible en el siguiente enlace: <http://www.raco.cat/index.php/InDret/article/view/124256>.

<sup>182</sup> Para el autor, el Derecho penal “no puede científicamente más que aportar criterios sobre cómo intervenir racionalmente con un instrumento como la pena. (...) Más allá de los límites constitucionales, carece no sólo de la posibilidad sino también de la legitimidad de fijar qué puede ser digno de protección para una determinada sociedad. Por ello, la cuestión esencial para el desarrollo de una teoría de la Política Criminal para el siglo XXI no es “si se protegen bienes jurídicos, sino cómo se protegen y cómo delimitar la permisión de conductas”, es decir” cuál es la técnica específica de protección de bienes jurídicos que se desempeña mediante la pena”, por lo que más que el objeto de tutela la doctrina jurídico-penal debe aportar criterios sobre la forma en la que legítimamente el Derecho penal puede prestar protección.” (Ibidem, pág. 15).

<sup>183</sup> Vid. HASSEMER, W., “Bienes jurídicos en el derecho penal”, op. cit., págs. 65 y ss.; id., “¿Puede haber delitos que no afecten a un bien jurídico penal?”, op. cit., 96 y ss.; id., *Persona, mundo y responsabilidad. Bases para una teoría de la imputación en Derecho penal*. Ed. Temis. Santa Fe de Bogotá, 1999, págs. 6 y 7.

<sup>184</sup> Vid. ROXIN, C., “¿Es la protección de bienes jurídicos una finalidad del Derecho penal?”, op. cit., pág. 448.

<sup>185</sup> Ibidem, pág. 452.



A dicho efecto, el autor refiere una serie de criterios que el legislador penal no debería traspasar al tipificar penalmente una conducta<sup>187</sup>. Partiendo del concepto del contrato social y de la idea de delito como daño social<sup>188</sup>, también SCHÜNEMANN considera que la teoría del bien jurídico está en condiciones de aportar decisivos argumentos críticos, si bien reconoce que “el auténtico desarrollo de dicha teoría está aún por venir”<sup>189</sup>. AMELUNG, desde una perspectiva más desalentadora, entiende que “el debate político-criminal se ha metido en un callejón sin salida con la constante postulación de una nunca articulada teoría del bien jurídico”<sup>190</sup>. Sin embargo, considera AMELUNG que la teoría de los bienes jurídicos no está en crisis. Esta aparente sensación sólo se deriva del incumplimiento de las expectativas depositadas sobre el mismo por parte de los detractores de la función crítica, “expectativas que desde un primer momento no estaban justificadas”<sup>191</sup>. Tanto AMELUNG como HEFENDEHL consideran que el concepto de bien jurídico es un punto de partida “prometedor”, siempre y cuando se descarten los que denominan “bienes jurídicos aparentes”<sup>192</sup>, entre los que se encuentra la paz pública<sup>193</sup>.

Ya en la doctrina española, FABIÁN CAPARRÓS, concede gran relevancia legitimadora al bien jurídico, el cual debe ser considerado como punto de partida de la

---

<sup>186</sup> Ibidem, pág. 448; id., “El concepto de bien jurídico como instrumento de crítica legislativa sometido a examen”, op. cit., pág. 11.

<sup>187</sup> Vid. ROXIN, C., “¿Es la protección de bienes jurídicos una finalidad del Derecho penal?”, op. cit., págs. 449 y ss. También parece encontrar el penalista alemán la vinculación constitucional de la idea de protección de los bienes jurídicos a través del principio de proporcionalidad, “una de cuyas manifestaciones es la denominada «prohibición de exceso». (...) Se podría afirmar sin más que un precepto penal que no proteja bien jurídico alguno es nulo por constituir una intromisión excesiva en la libertad de los ciudadanos. Por su puesto, (...) habrá de concederse un margen de apreciación al legislador. Pero cuando no pueda encontrarse una fundamentación seriamente defendible, la consecuencia tendrá que ser la nulidad de semejante norma penal «desproporcionada».” (Ibidem, pág. 453).

<sup>188</sup> Vid. SCHÜNEMANN, B., “El principio de protección de bienes jurídicos como punto de fuga de los límites constitucionales de los tipos penales y de su interpretación”, op. cit., págs. 203 y ss.

<sup>189</sup> Ibidem, págs. 225 y 226.

<sup>190</sup> Vid. AMELUNG, K., “El concepto de «bien jurídico» en la teoría de la protección penal de bienes jurídicos”, op. cit., pág. 240.

<sup>191</sup> Ibidem, pág. 264.

<sup>192</sup> Vid. HEFENDEHL, R., “Las jornadas desde la perspectiva de un partidario del bien jurídico”, *La teoría del bien jurídico* (VV.AA). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2007, págs. 410 y ss.; id., *¿Debe ocuparse el Derecho penal de riesgos futuros?*, op. cit., pág. 6.

<sup>193</sup> Vid. HEFENDEHL, R., “Las jornadas desde la perspectiva de un partidario del bien jurídico”, op. cit., pág. 411. En sentido contrario, HÖRNLE, T., “La protección de sentimientos en el StGB”, *La teoría del bien jurídico* (VV.AA). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2007, págs. 384 y ss. Para la penalista germano, en el Código penal alemán se encuentran normas de conducta que “pueden explicarse exclusivamente como protectoras de sentimientos” fuertemente extendidos y arraigados socialmente, como lo son la paz pública o el sentimiento de seguridad.

conformación de las distintas figuras delictivas<sup>194</sup>. Para el autor, los principios de exclusiva protección de los bienes jurídicos, de ofensividad y de lesividad impiden la sanción penal de un comportamiento que no lesione o ponga en peligro los “presupuestos imprescindibles para una existencia en común”<sup>195</sup>. Para el monografista, de la Constitución pueden extraerse los intereses que han de ser penalmente tutelados; el principio de lesividad posee, en este sentido, “una aptitud crítica respecto de la potestad punitiva del Estado”<sup>196</sup>. También, próximo a las líneas constitucionalistas, ORTS BERENGUER vincula la legitimidad de un tipo penal a la tutela de “algo que desde la perspectiva constitucional pueda ser considerado como bien”<sup>197</sup>. Por su parte, MOLINA FERNÁNDEZ igualmente concede relevancia legitimadora al bien jurídico, si bien éste siempre ha de apuntar en última instancia a “bienes personales básicos”, de modo que la tutela de “bienes derivados o instrumentales” -entre los que se encuentran los bienes de carácter supraindividual- sólo encontrará legitimación cuando pueda establecerse alguna vinculación con los bienes personales básicos, “cuya protección última es lo único que puede justificar la creación de un tipo penal”<sup>198</sup>.

En cualquier caso, la legitimación de la intervención penal para la protección de un bien jurídico no se agota con la constatación de su efectiva afección a través de la conducta incriminada (principios de ofensividad, lesividad y exclusiva protección de bienes jurídicos). Además del merecimiento de protección penal<sup>199</sup>, los principios de *ultima ratio* e intervención mínima, y sus manifestaciones esenciales de subsidiariedad y fragmentariedad -que igualmente informan el orden punitivo- obligan a limitar la incriminación penal a aquellas conductas que supongan los más graves ataques al bien jurídico afectado, teniendo en cuenta las posibilidades de acudir a otras instancias jurídicas (como el Derecho administrativo sancionador) para la tutela de los intereses

---

<sup>194</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 165. En este mismo sentido, FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y TORRES, J., *Blanqueo de capitales y principio de lesividad*, op. cit., pág. 68.

<sup>195</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 166 y 167.

<sup>196</sup> Ibidem, pág. 174.

<sup>197</sup> Vid. ORTS BERENGUER, E., “Delimitación entre encubrimiento, receptación blanqueo respecto a las modalidades de posesión y uso incorporadas en el artículo 301 por la L.O. 5/2010”, *III Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pág. 259.

<sup>198</sup> Vid. MOLINA FERNÁNDEZ, F., “¿Qué se protege en el delito de blanqueo de capitales?: reflexiones sobre un bien jurídico problemático, y a la vez aproximación a la participación en el delito”, op. cit., págs. 96-98.

<sup>199</sup> Vid. MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., *Derecho penal económico y de la empresa. Parte general*, op. cit., pág. 229.

necesarios de protección<sup>200</sup> y el grado de eficacia de las mismas. En este sentido, y de acuerdo con MARTINEZ-BUJÁN, en el ámbito de la delincuencia económica, el principio de fragmentariedad permitirá restringir la intervención penal a aquellas modalidades de ataque que afecten de la manera más relevante al interés jurídico tutelado, “dejando las restantes para ser reguladas a través de otras medidas jurídicas”,<sup>201</sup>.

En síntesis, sólo será legítima la criminalización de una conducta si, en primer lugar, efectivamente existe un interés social con relevancia suficiente como para ser tutelado penalmente y, en segundo lugar, siempre que se haya demostrado la ineficacia del resto de las instancias de control social -jurídicas y no jurídicas- para proteger dicho interés<sup>202</sup>.

### **2.2.1.2. FUNCIÓN INTERPRETATIVA**

La segunda función del bien jurídico, que a efectos del estudio y exégesis del tipo de blanqueo de capitales tiene para nosotros mayor interés, posee una finalidad básicamente interpretativa<sup>203</sup> y permite imponer límites a la aplicación de la norma al supuesto de hecho concreto<sup>204</sup>. A través de la interpretación teleológica, -que, de acuerdo con MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, es la que posee la máxima significación-, la función interpretativa permitirá revelar el sentido, la finalidad y el alcance de un determinado tipo penal<sup>205</sup>.

Si bien, como acabamos de comprobar, no existe consenso doctrinal alguno sobre las posibilidades de la función crítica del bien jurídico, su función interpretativa -afirma GAEDE- “se da por supuesta y se considera indiscutible”<sup>206</sup> como instrumento

---

<sup>200</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 209; FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 167, 175 y ss.; DONINI, M., “Principios constitucionales y sistema penal”, *Derecho penal del estado social y democrático de derecho. Libro homenaje a Santiago Mir Puig*, Diego Manuel Luzón Peña (dir.). Ed. La Ley. Madrid, 2010, pág. 94.

<sup>201</sup> Vid. MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., *Derecho penal económico y de la empresa. Parte general*, op. cit., pág. 235.

<sup>202</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 219.

<sup>203</sup> Vid. KAHLO, M., “Sobre la relación entre el concepto de bien jurídico y la imputación objetiva en Derecho Penal”, op. cit., pág. 53.

<sup>204</sup> Vid. AMELUNG, K., “El concepto de «bien jurídico» en la teoría de la protección penal de bienes jurídicos”, op. cit., pág. 228.

<sup>205</sup> Vid. MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., *Derecho penal económico y de la empresa. Parte general*, op. cit., pág. 161.

<sup>206</sup> Vid. GAEDE, K., “Puntos fuertes y puntos flacos de la función legitimadora de la teoría del bien jurídico inmanente al sistema en el ejemplo del fraude de subvenciones”, op. cit., pág. 266. En el mismo sentido, vid.

fundamental de interpretación teleológica de los tipos penales contenidos en la Parte Especial del Código penal<sup>207</sup>. La función teleológica o interpretativa, es, en términos de MOLINA FERNÁNDEZ, “expresión condensada de lo efectivamente protegido”<sup>208</sup>, y permite valorar si una conducta concreta posee relevancia penal por incidir en el bien jurídico protegido por la norma<sup>209</sup>. Dicha función, de acuerdo con MIR PUIG, permitirá excluir del ámbito de aplicación del tipo aquellos actos que no lesionen ni pongan en peligro dicho bien jurídico<sup>210</sup>.

Trataremos a continuación de descender desde los postulados teóricos de la doctrina del bien jurídico a su desarrollo en el caso concreto del delito de blanqueo de capitales. Como hemos visto, la correcta identificación del bien jurídico protegido por el tipo penal objeto de nuestro estudio resultará fundamental para este trabajo, pues aportará interesantes criterios que permitan fundamentar la reducción teleológica de un tipo expresado en unos términos excesivamente amplios<sup>211</sup>: únicamente serán susceptibles de imputación aquellos comportamientos que, coincidentes con la literalidad del tipo, supongan la efectiva lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido<sup>212</sup>.

---

VON HIRSCH, A./WOHLERS, W., “Teoría del bien jurídico y estructura del delito. Sobre los criterios de una imputación justa”, op. cit., pág. 285.

<sup>207</sup> Vid. AMELUNG, K., “El concepto de «bien jurídico» en la teoría de la protección penal de bienes jurídicos”, op. cit., pág. 229; LANDECHO VELASCO, C. M., *Derecho Penal Español. Parte General*, op. cit., pág. 253. Además de servir como guía interpretativa de los tipos diferentes tipos penales, según MIR PUIG la función interpretativa o dogmática del bien jurídico despliega efectos en la ordenación sistemática de los delitos y sirve como criterio de determinación de la pena dentro del rango punitivo asociado al tipo penal de que se trate (en función de “la mayor o menor gravedad de la lesión al bien jurídico, o la mayor o menor peligrosidad de su ataque”). (*Derecho Penal. Parte General*, 9ª ed., op. cit., pág. 164).

<sup>208</sup> Vid. MOLINA FERNÁNDEZ, F., “¿Qué se protege en el delito de blanqueo de capitales?: reflexiones sobre un bien jurídico problemático, y a la vez aproximación a la participación en el delito”, op. cit., págs. 96 y 97.

<sup>209</sup> Vid. RODRÍGUEZ MOURULLO, G., “El bien jurídico protegido en los delitos societarios con especial referencia a la administración desleal”, *Cuadernos de derecho judicial*. CGPJ, 1999, pág. 14.

<sup>210</sup> Vid. MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, 9ª ed., loc. cit.

<sup>211</sup> Idea manifestada sin reserva por la doctrina española dominante. (Vid. MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Receptación y blanqueo de capitales (arts. 301 y 302)”, op. cit., pág. 339; ABEL SOUTO, M., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 64; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 183; CARPIO DELGADO, J. del, “La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 2; CASTRO MORENO, A., “Reflexiones críticas sobre las nuevas conductas de posesión y utilización en el delito de blanqueo de capitales en la reforma del anteproyecto de 2008”, op. cit., pág. 1388; FERRÉ OLIVÉ, J. C., “Política criminal europea en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo”, *I Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, pág. 250, artículo también publicado en *Financiación del terrorismo, blanqueo de capitales y secreto bancario: un análisis crítico* (dir. José Luis González Cussac; coord. Antonio Fernández Hernández). Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2009.

<sup>212</sup> Vid., en este sentido, ARIAS HOLGUÍN, D. P., *Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 219; ABEL SOUTO, M., *El Delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., pág. 483; MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de Capitales”, 3ª ed., op. cit., pág. 483.

## 2.2.2. PROBLEMÁTICA DEL BIEN JURÍDICO EN EL BLANQUEO DE CAPITALES

### 2.2.2.1. INTRODUCCIÓN

Como se ha dicho, el bien jurídico constituye un elemento fundamental de referencia para interpretar tanto el alcance y contenido de un delito como para analizar los diferentes elementos que conforman su estructura típica<sup>213</sup>. La interpretación teleológica de un tipo penal, -que, de acuerdo con MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, es la que posee la máxima significación-, precisa haber determinado previamente cuál es el concreto interés jurídico que ese tipo está llamado a salvaguardar. Para ello, no sólo resulta necesario averiguar cuál es la *ratio legis* que ha impulsado al legislador penal a tipificar un concreto ilícito<sup>214</sup>, sino también indagar “respecto a la dimensión y estructura de (...) protección en el delito correspondiente”<sup>215</sup>.

Tanto la adecuada interpretación de un tipo penal tan complejo y abierto como lo es el delito de blanqueo, como la delimitación de las conductas que aquel procura incriminar<sup>216</sup>, precisan que previamente se haya identificado el bien o los bienes jurídicos objeto de tutela. Adelantamos ya que la determinación de los mismos se presenta como tarea muy compleja<sup>217</sup>, y que, lejos de ser una cuestión pacífica en la doctrina, ha sumido a ésta “en un campo abonado para el constante debate y la polémica”<sup>218</sup>.

Pero antes de entrar a valorar los diferentes argumentos a los que ha acudido la doctrina para justificar las distintas posturas a favor de uno u otro bien jurídico,

---

<sup>213</sup> Vid., entre otros autores, MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., *Derecho penal económico y de la empresa. Parte general*, op. cit., pág. 161; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 900.

<sup>214</sup> Con acierto ha afirmado GÓMEZ PAVÓN que “no puede confundirse la finalidad de la ley con el bien jurídico protegido. Esa finalidad puede ser el objeto de protección mediato, pero sólo el inmediato servirá a estos efectos, como elemento típico”. (“El bien jurídico protegido en la receptación, blanqueo de dinero y encubrimiento”, op. cit., pág. 211).

<sup>215</sup> Vid. GAEDE, K., “Puntos fuertes y puntos flacos de la función legitimadora de la teoría del bien jurídico immanente al sistema en el ejemplo del fraude de subvenciones”, op. cit., pág. 281.

<sup>216</sup> Vid. CALDERÓN CERREZO, A., “Algunos aspectos críticos del blanqueo de capitales. Legislación y jurisprudencia”, op. cit., pág. 72.

<sup>217</sup> Vid. MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de Capitales”, 3ª ed., op. cit., pág. 479. Asimismo, ARIAS HOLGUÍN, D. P., *Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 27 y 133.

<sup>218</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., pág. 22; GÓMEZ INIESTA, D. J., *El delito de blanqueo de capitales en Derecho Español*, op. cit., pág. 31.

conviene hacer un breve apunte sobre la necesidad de la tipificación autónoma del delito de blanqueo de capitales. Como vimos en el apartado anterior de este trabajo, la función legitimadora del bien jurídico, unida al principio de lesividad y al carácter fragmentario del Derecho penal, aportan criterios fundamentales para determinar si resulta legítima y justificada la criminalización de determinado ilícito. Para dar respuesta positiva a esta cuestión, ha de ser constatado que existe un interés jurídico suficientemente relevante como para merecer la protección penal; asimismo, debe verificarse que para que dicha protección sea efectiva, resulte imprescindible acudir a esta vía de tutela, la más gravosa, por resultar ineficaces otras instancias de control social -jurídicas y no jurídicas<sup>219</sup>. Tras la incorporación del tipo de blanqueo al texto punitivo de 1973, un sector doctrinal minoritario consideró que el que el fenómeno del reciclaje de fondos de origen delictivo carecía de una valoración social negativa, que era penalmente irrelevante y que, incluso, debía ser promocionado por los poderes públicos (BAJO FERNÁNDEZ)<sup>220</sup>, dada su conveniencia desde el punto de vista jurídico-económico -al favorecer el control de dichos capitales por la administración y su sometimiento a obligaciones impositivas- (SUÁREZ GONZÁLEZ)<sup>221</sup>. En la actualidad, sin embargo, la

<sup>219</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 219.

<sup>220</sup> Vid. BAJO FERNÁNDEZ, M., “Política criminal y reforma penal. Delitos patrimoniales económicos”, *Política criminal y reforma penal, Libro homenaje a la memoria del Profesor Dr. Juan del Rosal*. Edersa, Madrid, 1983, págs. 147 y 148. En la última edición de su manual de *Derecho penal económico*, representando una posición minoritaria en la doctrina, el autor vuelve a manifestarse en contra de la oportunidad de la tipificación del delito de blanqueo, considerando que la figura delictiva “es inoportuna por ser innecesaria, perturbadora y responder exclusivamente a la mentalidad de una clase burócrata afincada en organismos al estilo del GAFI que confunde los fines preventivos, políticos y policiales en la lucha contra la criminalidad organizada con la función del Derecho penal. Es innecesaria porque se solapa con los delitos relativos al comportamiento postdelictivo (encubrimiento y receptación) y es perturbadora porque, si se independiza totalmente del delito base (...), no se puede razonablemente concretar un objeto jurídico de protección.” Censura el Profesor BAJO finalmente esta figura delictiva por ser propia de “un Derecho penal expansivo impropio de un Estado liberal, porque impone deberes positivos (...) que pueden incluso dificultar la vida económica.” Considera aquél que el delito de blanqueo habría de concebirse como una “forma de participación postdelictiva elevada a delito independiente”, pues a su juicio, la única relevancia jurídico-penal del mismo “estriba en lo que representa como participación en el delito base, es decir, en su significación como receptación o encubrimiento”. Bajo esta perspectiva, reprueba la tipificación del blanqueo como delito autónomo y considera que el objeto de tutela del blanqueo ha de quedar representado por aquel bien jurídico protegido por el delito antecedente, con el que guarda íntima relación. Y ello porque la finalidad de la norma no es otra que impedir el delito originario que se está ocultando. La formulación típica de la “legitimación de activos” que propone debe responder en todo caso a las siguientes características: el autor del delito de blanqueo no puede haber sido partícipe en el delito antecedente -impunidad del autoblanqueo-; ha de evitarse el castigo del blanqueo imprudente; la pena ha de estar limitada por la pena superior del delito precedente; el blanqueo debe referirse sólo a los efectos derivados de los delitos que se quiere combatir, es decir, los relativos a la criminalidad organizada, por lo que su objeto de protección “lo conformarían los bienes jurídicos que potencialmente pueden en el futuro ser puestos en peligro como consecuencia del incremento de dichas estructuras organizativas.” (“Blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 714-723 passim; id., “El desatinado delito de blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 12 y ss.).

<sup>221</sup> Vid. SUÁREZ GONZÁLEZ, C. J., “Blanqueo de capitales y merecimiento de pena: consideraciones críticas a la luz de la legislación española”, op. cit., págs. 142 y ss.

doctrina coincide de manera prácticamente unánime en rechazar esta opinión<sup>222</sup> y en afirmar, acertadamente, la necesidad político-criminal de tipificar el blanqueo de capitales<sup>223</sup> por menoscabar realmente un bien jurídico necesitado de protección penal<sup>224</sup> que no puede ser tutelado a través de otros medios de control social<sup>225</sup>.

Como veremos más adelante, el fenómeno del blanqueo es sumamente nocivo para intereses de vital importancia de la realidad social y la necesidad de tutela penal frente al mismo resulta, a día de hoy, prácticamente incuestionada. Dicho esto, a continuación abordaremos la cuestión esencial que aquí nos ocupa: la identificación del bien o bienes jurídicos protegidos -si fueren varios-, que el delito de blanqueo de capitales está llamado a proteger. Para afrontar dicha tarea, se ha de tener en cuenta que el debate suscitado en torno a la determinación del bien jurídico ha ido naturalmente ligado, por un lado, a la formulación típica que el delito de blanqueo ha adoptado en cada texto punitivo o revisión del mismo y, por otro, a la diversidad de criterios que han sido empleados para la determinación del bien jurídico tutelado<sup>226</sup>: la ubicación sistemática del delito de blanqueo en el Código penal, la penalidad asociada a este delito, etc.

---

<sup>222</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., “El blanqueo de capitales (Contexto, razones de su penalización, evolución en nuestro entorno de las iniciativas supranacionales)”, op. cit., pág. 173; CALDERÓN CERREZO, A., “El marco jurídico del blanqueo de capitales: aspectos penales y administrativos”, op. cit., pág. 3; ABEL SOUTO, M., *Normativa internacional sobre el blanqueo de dinero y su recepción en el ordenamiento penal español* (Tesis doctoral dirigida por José Manuel Lorenzo Salgado, presentada en Santiago de Compostela en enero de 2.001), págs. 284 y ss.; id., *El Delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., pág. 25; MOLINA FERNÁNDEZ, F., “¿Qué se protege en el delito de blanqueo de capitales?: reflexiones sobre un bien jurídico problemático, y a la vez aproximación a la participación en el delito”, op. cit., págs. 96 y 97; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 196.

<sup>223</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 238 y 239; ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 77 y ss.; GÓMEZ INIESTA, D. J., *El delito de blanqueo de capitales en Derecho Español*, op. cit., págs. 29 y ss.; ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., pág. 25; PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 268 y ss.; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 193 y ss.; QUERALT JIMÉNEZ, J. J., *Derecho Penal Español. Parte Especial*, op. cit., pág. 1292.

<sup>224</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, op. cit., pág. 196; MARTÍNEZ-ARRIETA MÁRQUEZ DE PRADO, I., *El autoblanqueo. El delito fiscal como antecedente del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 26. Más allá de los pronunciamientos de BAJO FERNÁNDEZ y de SUÁREZ GONZÁLEZ, rechazando el acierto de la tipificación del tipo de blanqueo, COBO DEL ROSAL y ZABALA LOPEZ-GOMEZ han negado expresamente que este delito lesione algún bien jurídico. Para estos autores, “el delito afectaría, a lo sumo, al control estatal como tutelador del circuito legal de capitales, propio y específico, de una economía de mercado.” (*Blanqueo de capitales: abogados, procuradores y notarios, inversores bancarios y empresarios*, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2005, pág. 94).

<sup>225</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, loc. cit.

<sup>226</sup> Vid. GÓMEZ INIESTA, D. J., *El delito de blanqueo de capitales en Derecho Español*, op. cit., pág. 31; MOLINA FERNÁNDEZ, F., “¿Qué se protege en el delito de blanqueo de capitales?: reflexiones sobre un bien jurídico problemático, y a la vez aproximación a la participación en el delito”, *Política criminal y blanqueo de capitales*, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2009, pág. 92.

Como hemos dicho, la cuestión sometida aquí a debate ha sido objeto de una prolongada discusión doctrinal que en la actualidad perdura<sup>227</sup>. Un sector minoritario ha interpretado que el blanqueo de capitales está llamado a proteger el *bien jurídico que es objeto de tutela del delito previo*. De acuerdo con esta tesis, que tuvo mayor relevancia bajo la vigencia de los antiguos artículos 344 bis h) y 344 bis i) del Texto refundido de 1973, se dijo que el blanqueo de capitales protegía la *salud pública*, dada la ubicación del tipo de blanqueo en el capítulo dedicado por el Código anteriormente vigente a los delitos de tráfico de drogas. Desde otro sector doctrinal, se ha afirmado que es el buen funcionamiento de la *administración de justicia*, o determinados intereses relacionados con la misma, el bien jurídico susceptible de menoscabo, dada la proximidad del blanqueo con los delitos de receptación y favorecimiento. Actualmente es mayoritaria la opinión, avalada por la ubicación sistemática del delito de blanqueo en el actual Código penal, que sitúa el bien jurídico objeto de tutela en el ámbito del *orden socioeconómico*: sería dicho orden o diversos aspectos de éste -en función de las diferentes propuestas- el bien jurídico protegido por el delito blanqueo. Por último, un amplio sector doctrinal defiende en la actualidad que el delito de blanqueo tiene *naturaleza pluriofensiva*, toda vez que, se dice, las conductas legitimadoras afectarían a varios bienes jurídicos simultáneamente.

A continuación, analizaremos en apartados diferenciados las distintas propuestas interpretativas apuntadas por la doctrina. Una vez estudiadas las diferentes perspectivas, trataremos de justificar que el delito de blanqueo es un delito de carácter fundamentalmente económico, cuyo objeto de protección son diversos intereses vinculados al orden socioeconómico.

#### **2.2.2.2. EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO POR EL DELITO PREVIO. LA TEORÍA DEL MANTENIMIENTO**

De acuerdo con la tradicional teoría del mantenimiento, surgida de los postulados de la Convención de Viena de 1988<sup>228</sup> y de las primeras formulaciones del

---

<sup>227</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 238; MOLINA FERNÁNDEZ, F., “¿Qué se protege en el delito de blanqueo de capitales?: reflexiones sobre un bien jurídico problemático, y a la vez aproximación a la participación en el delito”, loc. cit.

<sup>228</sup> Vid. OMAR PLÉE, R., “El lavado de dinero: un fenómeno transnacional de política criminal contemporánea”, *Derecho penal empresario*, op. cit., pág. 445.



delito de blanqueo como tipo penal vinculado a la receptación<sup>229</sup>, se consideró que la incriminación del blanqueo se dirigía a impedir el mantenimiento, la consolidación y la prolongación de la situación antijurídica derivada de la comisión del delito previo<sup>230</sup>. En la doctrina española, esta concepción goza actualmente de escasa aceptación<sup>231</sup>, siendo hoy generalizada la opinión que considera sus postulados superados por planteamientos más sólidos. Quienes en su día, bajo la vigencia del derogado Código penal de 1973, se adscribieron a esta hipótesis<sup>232</sup>, estimaron que la tipificación del delito de blanqueo perseguía reforzar la protección del bien jurídico amparado por el delito precedente<sup>233</sup>. Así, se afirmaba que la ocultación del origen delictivo del bien o los capitales derivados del delito antecedente afectaría indirectamente al bien jurídico protegido por aquel, ya que el blanqueo supone el agotamiento del delito base, “facilitando la consecución del móvil criminal, lo cual fomenta la comisión de la actividad ilícita de referencia”<sup>234</sup>. La

<sup>229</sup> Vid. ARIAS HOLGUÍN, D. P., *Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 196.

<sup>230</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., pág. 53. En realidad, la teoría del mantenimiento es fruto de la discusión que tradicionalmente venía sosteniendo la doctrina en torno al bien jurídico protegido por el delito de receptación -que se debatía entre la referida teoría del mantenimiento y la teoría del aprovechamiento-, y no de un verdadero análisis de su estructura típica del delito. (Vid. FARALDO CABANA, P., “Aspectos básicos del delito de blanqueo de bienes en el Código Penal de 1995”, *Estudios Penales y Criminológicos*, nº XXI, 1998, págs. 124 y 125; PALMA HERRERA, J. M., *Comentarios al Código Penal*, op. cit., págs. 659 y 660; MATA BARRANCO, N. J. de la, “Límites de la sanción en el delito de receptación: la receptación sustitutiva y la teoría del mantenimiento. El art. 546 bis f) CP”, Madrid, 1989, pág. 32; GÓMEZ PAVÓN, P., “El bien jurídico protegido en la receptación, blanqueo de dinero y encubrimiento”, op. cit., pág. 204). En realidad, afirmó PÉREZ DEL VALLE, tampoco resultaba técnicamente acertado acudir a la teoría del mantenimiento en el delito de receptación, pues en este tipo penal no existe lesión patrimonial propiamente dicha, al no verse afectado interés patrimonial por el traspaso del objeto del que la víctima se ha visto privada ilícitamente. (“El delito de receptación: los elementos objetivos de la infracción”, *Cuadernos de Derecho Judicial I*, 1994. CGPJ. Madrid, 1994, pág. 67).

<sup>231</sup> Si bien existe a día de hoy algún sector minoritario que se adscribe a esta tesis. Es el caso de BAJO FERNÁNDEZ y BACIGALUPO SAGESSE, para quienes la *ratio legis* del delito de blanqueo es impedir la comisión del delito originario que se está ocultando. “Se lesiona, por lo tanto, el bien jurídico de este delito”. Dado que el delito de blanqueo se vincula con determinadas formas de criminalidad organizada, a juicio de los referidos autores, “el objeto de protección lo conformarían los bienes jurídicos que potencialmente pueden en el futuro ser puestos en peligro como consecuencia del incremento de dichas estructuras organizativas. En último extremo, la norma reprimiría aquellas formas de comportamiento que pueden poner en peligro las estructuras de los fundamentos del Estado social y democrático de Derecho”. (“Blanqueo de capitales”, 2ª ed., op. cit., págs. 721-723 passim; id., “Blanqueo de capitales”, *Derecho penal económico*. Colección CEURA. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, 1ª Edición. Madrid, 2001, pág. 684). Comparte este parecer SUÁREZ GONZÁLEZ, al afirmar que “el blanqueo de capitales no entrañaría un injusto en sí mismo, sino un injusto referido al hecho que se halla en su origen.” Por ello, encuentra el fundamento de su castigo en que las conductas legitimadoras constituyen un estímulo para la eventual comisión de futuros hechos delictivos. (“Blanqueo de capitales y merecimiento de pena: consideraciones críticas a la luz de la legislación española”, op. cit., pág. 149).

<sup>232</sup> Vid. BLANCO LOZANO, C., “El blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas en el ordenamiento penal español”, op. cit., págs. 73, 93 y 94.

<sup>233</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 239. Esta fue la idea expresada por ZARAGOZA AGUADO respecto del delito de blanqueo tipificado en el artículo 546 bis f) del Código del 73. (“El blanqueo de dinero. Aspectos sustantivos. Su investigación”, *Cuadernos de Derecho Judicial I*, 1994. CGPJ. Madrid, 1994, pág. 114).

<sup>234</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., pág. 37.

incriminación del blanqueo obedecería a un fin preventivo general, al perseguir disuadir a los potenciales delincuentes de cometer delitos económicamente rentables<sup>235</sup>.

Ya vimos que la reforma de 1992 incorporó en el Código entonces vigente un nuevo precepto que incriminaba el blanqueo de bienes [el artículo 344 bis.h)] entre los delitos contra la salud pública. De dicha ubicación, algunos autores dedujeron que el bien jurídico objeto de protección por el delito previo -la salud pública- era asimismo el que amparaba el delito de blanqueo<sup>236</sup>. Además de la ubicación sistemática, se decía, avalaba esta interpretación el hecho de que los actos de legitimación conformarían parte del “ciclo productivo” de la distribución de drogas, en la medida que facilitaría la obtención de recursos que financiaran la ilícita labor de producción y/o distribución<sup>237</sup>. Desde una perspectiva contraria, GÓMEZ PAVÓN sostuvo que la ubicación sistemática del tipo de blanqueo más bien debió obedecer a razones de técnica legislativa, agrupando los distintos preceptos destinados a combatir el tráfico ilegal de drogas con objeto de sistematizar las distintas formas de intervención “en todos los tramos del circuito económico del mismo”. En cualquier caso, acertadamente rechazaba esta autora la identificación la finalidad que la ley persigue al incriminar una conducta con el bien jurídico protegido: “esa finalidad puede ser objeto de protección mediato, pero sólo el inmediato servirá a estos efectos, como elemento típico”<sup>238</sup>.

No puede negarse que la actividad de blanqueo supone indirectamente ciertos perjuicios para el bien jurídico tutelado por el delito antecedente<sup>239</sup>. Sin embargo, en la actualidad no puede identificarse el bien jurídico protegido por el delito de blanqueo

---

<sup>235</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed. op. cit., pág. 197. La idea es expuesta por FABIÁN CAPARRÓS en términos muy gráficos: la criminalización del blanqueo perseguiría crear en la mente del potencial delincuente la idea de que la actividad delictiva que se dispone a desarrollar “no compensa”. (“El blanqueo de capitales (Contexto, razones de su penalización, evolución en nuestro entorno de las iniciativas supranacionales)”, op. cit., pág. 172).

<sup>236</sup> Vid. GÓMEZ INIESTA, D. J., *El delito de blanqueo de capitales en Derecho Español*, op. cit., pág. 31; ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., pág. 41.

<sup>237</sup> Vid. FARALDO CABANA, P., “Aspectos básicos del delito de blanqueo de bienes en el Código Penal de 1995”, op. cit., pág. 126; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 196 y 197.

<sup>238</sup> Vid. GÓMEZ PAVÓN, P., “El bien jurídico protegido en la receptación, blanqueo de dinero y encubrimiento”, op. cit., pág. 211. En el mismo sentido crítico, PALMA HERRERA, J. M., *Comentarios al Código Penal*, op. cit., págs. 661 y 662.

<sup>239</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 221. Y ello porque la ocultación del origen delictivo de los beneficios económicos que el delito previo genera favorece a quienes lo cometen, “dificultando su persecución por parte del Estado y, por ello, animándolos a que la conducta delictiva se repita.” Ello se potencia en el caso de que la actividad criminal subyacente sea cometida por la delincuencia organizada, pues la actividad blanqueadora “se convierte en elemento integrante del ciclo productivo, propiciando la permanencia de las actividades criminales al conseguir que las vías financieras del grupo se mantengan despejadas.” (Ibidem, págs. 221 y 222). Vid., asimismo, MUÑOZ CONDE, F., “Consideraciones en torno al bien jurídico protegido del blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 161.

con aquel que es objeto de tutela por el delito precedente, ya sea la salud pública o cualquier otro. Numerosos argumentos obligan a rechazar esta tesis. Tal y como afirma GÓMEZ BENÍTEZ, la actual configuración del delito de blanqueo le dota de sustantividad propia como delito autónomo. El tipo de blanqueo no puede ser concebido como un mero instrumento de política criminal orientado a prevenir el delito subyacente, máxime cuando el ordenamiento penal prevé mecanismos mucho más eficaces como es el comiso<sup>240</sup>. El beneficio que supone la reintegración en los cauces oficiales de los productos del delito principal en nada puede aumentar o mantener la lesión del bien jurídico protegido por aquél; para su menoscabo resulta indiferente el móvil lucrativo<sup>241</sup> y, por ello, resulta irrelevante cuál haya sido el delito previamente cometido así como el bien jurídico que pretende tutelar<sup>242</sup>. Las conductas típicas previstas en el art. 301 CP no pueden lesionar o mantener el ataque al bien jurídico menoscabado por el delito antecedente, pues con el blanqueo se persigue disfrute de los beneficios del delito previo y en ningún caso el del propio objeto material de dicho delito<sup>243</sup>. En todo caso, como advierte FARALDO CABANA, resulta suficientemente significativo el hecho de que en la estructura típica del actual delito de blanqueo resulte indiferente cuál haya sido el delito previamente cometido<sup>244</sup>.

También permiten rechazar la tesis que exponemos los argumentos penológicos esgrimidos por BLANCO CORDERO: la identificación del bien jurídico protegido por el blanqueo con aquel interés tutelado por el delito previo “hace recaer una pena sobre un sujeto distinto de aquel cuyo comportamiento se pretende evitar, [lo que] puede ser contrario al principio de personalidad de las penas”<sup>245</sup>. ABEL SOUTO acude a un ulterior argumento penológico: el hecho de que para la determinación de la pena del delito de blanqueo resulte indiferente la que corresponde al delito precedente, confirma tanto la desvinculación del blanqueo con el delito previo, como que el bien jurídico protegido

---

<sup>240</sup> Vid. GÓMEZ BENÍTEZ, J. M., “Reflexiones técnicas y de política criminal sobre el delito de blanqueo de bienes”, op. cit., págs. 6 y ss.

<sup>241</sup> Vid. HUERTA TOCILDO, S., “Aproximación crítica a la nueva regulación del delito de receptación y otras conductas afines”, op. cit., pág. 374; GÓMEZ INIESTA, D. J., *El delito de blanqueo de capitales en Derecho Español*, op. cit., pág. 32; FARALDO CABANA, P., “Aspectos básicos del delito de blanqueo de bienes en el Código Penal de 1995”, op. cit., pág. 126.

<sup>242</sup> Vid. GÓMEZ PAVÓN, P., “El bien jurídico protegido en la receptación, blanqueo de dinero y encubrimiento”, op. cit., págs. 211 y 212.

<sup>243</sup> Vid. GÓMEZ INIESTA, D. J., *El delito de blanqueo de capitales en Derecho Español*, op. cit., pág. 32.

<sup>244</sup> Vid. FARALDO CABANA, P., “Aspectos básicos del delito de blanqueo de bienes en el Código Penal de 1995”, op. cit., pág. 127.

<sup>245</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 197.

por éste es independiente del tutelado por la infracción precedente<sup>246</sup>. Por su parte, MUÑOZ CONDE advierte de la vulneración al principio *ne bis in idem* que las interpretaciones orientadas a la teoría de mantenimiento implican, señalado asimismo que, con todo, cuando se realiza la conducta de blanqueo, la lesión del bien jurídico provocada por el delito antecedente ya se ha producido<sup>247</sup>. En todo caso, teniendo presente la actual configuración típica del blanqueo, hemos de afirmar con ABEL SOUTO que el blanqueo está dotado de un *injusto propio*, de modo que no resulta necesario acudir al delito previo para encontrarlo<sup>248</sup>. Así lo confirma la Jurisprudencia de la Sala Segunda, que en la Sentencia 202/2006, de 2 de marzo, declara, en su FJ 6º, que el delito de blanqueo no pretende “castigar directamente el delito base o delito de origen (aquél que genera los bienes que luego se tratan de transformar en el mercado lícito) que tiene una respuesta penal distinta y autónoma”.

#### **2.2.2.4. LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**

Teniendo en cuenta la proximidad conceptual del tipo de blanqueo con los delitos de receptación y favorecimiento<sup>249</sup>, cierto sector doctrinal ha mantenido que aquél también incide en determinados intereses vinculados a la administración de justicia, apelando a diferentes argumentos, como inmediatamente comprobaremos. Para algunos autores, la esencia encubridora del tipo de blanqueo permite considerar que éste conmina conductas próximas a la receptación o al encubrimiento<sup>250</sup> y entraña en realidad una tipología específica de favorecimiento.

---

<sup>246</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., pág. 38.

<sup>247</sup> Vid. MUÑOZ CONDE, F., “Consideraciones en torno al bien jurídico protegido del blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 161.

<sup>248</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., pág. 37. En similar sentido, GÓMEZ INIESTA, D. J., *El delito de blanqueo de capitales en Derecho Español*, op. cit., pág. 38, con un amplio desarrollo argumentativo en págs. 43 y 44; MUÑOZ CONDE, F., “Consideraciones en torno al bien jurídico protegido del blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 161; CALDERÓN CEREZO, A., “Algunos aspectos críticos del blanqueo de capitales. Legislación y jurisprudencia”, op. cit., pág. 73. En sentido análogo, bajo la óptica del principio de lesividad, se pronuncia FABIÁN CAPARRÓS (*El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 222 y ss.).

<sup>249</sup> Constituyen todas ellas actividades delictivas de segundo grado (vid. BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I. / FABIÁN CAPARRÓS, E. A., “La emancipación del delito de blanqueo de capitales en el Derecho penal español”, op. cit., pág. 126), en las que se precisa la realización de un delito antecedente. (Vid. CALDERÓN CEREZO, A., “Algunos aspectos críticos del blanqueo de capitales. Legislación y jurisprudencia”, op. cit., pág. 71). Esto es, su punibilidad viene condicionada por la previa comisión de otro delito, con cuyo objeto material o con las ganancias generadas se pretende obtener un beneficio económico. (MUÑOZ CONDE, F., “Consideraciones en torno al bien jurídico protegido del blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 159).

<sup>250</sup> En realidad, tanto el blanqueo de capitales como la receptación y el encubrimiento constituyen formas delictivas favorecedoras. El deslinde de unas conductas respecto de otras no es *a priori* sencillo, y como veremos a continuación, presenta ciertas dificultades. (Vid en este sentido RUIZ RODRÍGUEZ, L.,

El *delito de receptación* está regulado en los artículos 298 a 300 CP, que preceden a los artículos 301 y ss. CP, con los que comparte el Capítulo XIV (“De la receptación y el blanqueo de capitales”) del Título XIII del Código penal. El delito de *receptación* consiste, de acuerdo con lo previsto en el artículo 298 CP, en *ayudar* a los responsables de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico *a aprovecharse* de los efectos del mismo, o en *recibir, adquirir u ocultar* tales efectos, precisándose ánimo de lucro y conocimiento de la comisión del delito en la persona del autor, así como que éste no haya participado en el delito previo como autor o como cómplice. Por su parte, los artículos 451 a 454 CP prevén los *delitos de encubrimiento*. Ubicados en el Título XX del Libro II del Código, son genuinamente delitos contra la Administración de Justicia, como su rúbrica indica. De acuerdo con la definición de MARTÍNEZ ARRIETA, el encubrimiento consiste en la realización consciente de actos que favorezcan al responsable de un delito previamente cometido, “bien auxiliándole para que se aproveche de sus efectos, bien ocultando o inutilizando el cuerpo, los efectos o instrumentos del delito, o bien albergando, ocultando o proporcionando fuga al culpable” concurriendo los requisitos que el precepto exige, actos todos ellos realizados por quien no ha participado en dicho delito<sup>251</sup>. El artículo 451 tipifica el delito de encubrimiento, previendo tres conductas típicas. En el número 1 del precepto, se regula el *auxilio complementario* (auxiliar sin que medie ánimo de lucro al delincuente a beneficiarse del provecho, producto o precio de su delito); el número 2 prevé lo que se conoce como *favorecimiento o encubrimiento real*, consistente en ocultar, alterar o inutilizar “el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito, para impedir su descubrimiento”; y el número 3 conmina el *favorecimiento personal*, o “ayuda a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad”, en determinados supuestos.

Desde el sector doctrinal que destaca el aspecto encubridor del blanqueo, se sostiene que si ambas figuras favorecedoras afines a éste -la receptación y el encubrimiento- tutelan la administración de justicia, en su función de averiguación, persecución y castigo de los delitos, será aquella misma el objeto de protección penal

---

“Encubrimiento y receptación. Los específicos elementos subjetivos del injusto”, *Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos: in memoriam*, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2001, págs. 611 y ss.).

<sup>251</sup> Vid. MARTÍNEZ ARRIETA, A., “El encubrimiento”, *Cuadernos de Derecho Judicial*, 1994. CGPJ. Madrid, 1994, pág. 13.

del delito de blanqueo<sup>252</sup>. Si el verdadero sentido de los actos legitimadores es posibilitar el aprovechamiento de los bienes procedentes de un delito cuando aquél -o su naturaleza ilícita- todavía no ha sido descubierto, dicha actividad dificultará notablemente su conocimiento por las autoridades y facilitará el aprovechamiento y disfrute de los referidos bienes; en los casos en los que el delito antecedente haya sido ya descubierto, la actividad blanqueadora dificultará el acceso por parte de las autoridades a los bienes de ilícita procedencia, impidiendo su comiso y aplicación a la satisfacción de las responsabilidades civiles a que hubiere lugar; y en ambos casos, al permitir el aprovechamiento de los bienes de origen delictivo, los actos de blanqueo estimularán la comisión de nuevos delitos<sup>253</sup>.

Ya bajo la vigencia del Texto refundido de 1973, GÓMEZ PAVÓN<sup>254</sup> señaló que el artículo 546 bis f) -precepto que tipificaba el blanqueo de bienes en el marco de las diferentes modalidades receptadoras contenidas en el artículo 546- se hallaba más próximo al favorecimiento que a la receptación propia o impropia. En realidad, afirmó la autora, el tipo de blanqueo integraba una “modalidad *sui generis* del favorecimiento real”<sup>255</sup>, cuya incriminación se fundamentaba en el entorpecimiento de una adecuada administración de justicia, al tratar de obstaculizar la identificación del beneficio delictivo y, con ello, impedir el descubrimiento del hecho delictivo previo<sup>256</sup>. FARALDO

---

<sup>252</sup> Como acertadamente puntualiza PALMA HERRERA, no ha de entenderse la administración de justicia, en tanto que bien jurídico protegido, como la organización de la justicia, sino como la correcta administración de justicia. Para el monografista, la referencia a la “administración de justicia” como bien jurídico protegido entraña un concepto en exceso vago y abstracto “que hay que llenar de contenido”. La “buena marcha” de la función judicial se traduce en el “deber de no obstaculizar el funcionamiento de la administración de justicia haciendo posible el descubrimiento de los delitos, la persecución y condena del delincuente, que es lo que se dificulta, precisamente, con la realización de actos de blanqueo cuando el delito no ha sido descubierto y el delincuente condenado.” Además de la condena del autor del delito previo, la administración de justicia persigue la efectividad de ulteriores consecuencias jurídico-penales, como es el comiso de los bienes de naturaleza delictiva. El blanqueo, al conferir apariencia de licitud a los bienes delictivos, impide, o al menos obstaculiza, la materialización de estas manifestaciones de la administración de justicia: la posibilidad del descubrimiento de los delitos, la persecución y condena del delincuente y del comiso de los bienes procedentes de aquéllos. (*Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 288- 291 passim).

<sup>253</sup> Ibidem, pág. 285.

<sup>254</sup> Adviértase que la interpretación de la autora que aquí se expone va referida a la regulación del blanqueo contenida en el ya derogado artículo 546 bis f). (Vid. GÓMEZ PAVÓN, P., “El bien jurídico protegido en la receptación, blanqueo de dinero y encubrimiento”, op. cit., págs. 210 y ss.).

<sup>255</sup> La conducta descrita en el antiguo artículo 546 bis f) no se dirigía a obtener un provecho para su autor o para el autor del delito precedente -éste ya había sido obtenido-, sino a blanquear el producto de aquel, siendo éste su contenido del injusto. Es decir, su objetivo era “evitar u obstaculizar la identificación de lo obtenido previamente, ocultar su origen ilícito y por tanto, evitar el descubrimiento del delito”. Siendo así, el interés jurídico afectado por el artículo referido no sería otro que la administración de justicia; y precisamente por ello, la ubicación del delito de blanqueo junto a la receptación era, a juicio de GÓMEZ PAVÓN, inadecuada. (Ibidem, pág. 216).

<sup>256</sup> Ibidem, págs. 215 y 216. En sentido similar, FABIÁN CAPARRÓS sostiene que, como actividad encubridora, el blanqueo lesiona la administración de justicia “toda vez que su práctica puede dificultar -si no impedir- el cometido atribuido a los órganos jurisdiccionales en su investigación de los delitos y persecución de

CABANA también concibió el tipo de blanqueo como un supuesto de favorecimiento real: las conductas blanqueadoras no serían más que modalidades de ocultación<sup>257</sup> y, por ello, verdaderamente atentaría contra la administración de justicia, constituyendo por tanto ésta el principal objeto de tutela por el delito de blanqueo de capitales<sup>258</sup>.

Tras la entrada en vigor del Código de 1995, disminuyó el alcance de la tesis que postulaba el adecuado funcionamiento de la administración de justicia como único interés tutelado por el tipo de blanqueo, si bien desde entonces algunos de los autores más destacados en la materia que nos ocupa han considerado y aún hoy consideran que el referido interés es objeto directo de protección, mas no el único. Como veremos, bajo distintas concepciones pluriofensivas del delito de blanqueo<sup>259</sup>, un importante sector de la doctrina sostiene que el correcto funcionamiento de la administración de justicia constituye uno de los bienes jurídicos protegidos, discrepando los autores que mantienen esta línea de pensamiento acerca de cuál o cuáles otros intereses son, asimismo, objeto de protección. Al estudio de estas propuestas pluriofensivas nos referiremos más adelante en otro apartado; interesa ahora ocuparnos de los planteamientos que, bajo la vigencia del Código de 1995, sitúan el correcto funcionamiento de la administración de justicia como único o principal interés tutelado.

Para VIDALES RODRÍGUEZ, existe un “innegable parecido” entre el delito de “legitimación de capitales” y el encubrimiento<sup>260</sup>. En ambos casos, entiende la monografista, la conversión o transferencia de bienes de origen delictivo integran modalidades de ocultación que dificultan en gran medida el descubrimiento del delito previamente cometido, por lo que en ambos delitos constituye el bien jurídico tutelado

---

sus autores”. (*El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 253). Sin embargo, como se verá más adelante, FABIÁN, sin negar los efectos encubridores del delito de blanqueo, considera que el bien jurídico protegido ha de situarse en el ámbito socioeconómico, constituyendo la libre competencia y la estabilidad del mercado de capitales su principal manifestación. (*El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 224 y ss.; id., “Consideraciones de urgencia sobre la LO 8/1992 de modificación del CP y LECr en materia de tráfico de drogas”, ADPCP, 1993, pág. 611).

<sup>257</sup> FARALDO CABANA, P., “Aspectos básicos del delito de blanqueo de bienes en el Código Penal de 1995”, op. cit., págs. 127 y ss.

<sup>258</sup> Si bien, a juicio de la autora, no el único, pues el blanqueo es “también un delito socio-económico en sentido estricto”. (Ibidem, págs. 128 y 129).

<sup>259</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., págs. 29.

<sup>260</sup> Si bien para VIDALES RODRÍGUEZ “la legitimación de capitales” -expresión que usa preferentemente esta autora- constituye un delito pluriofensivo, el núcleo ofensivo del blanqueo se dirige a aspectos vinculados a la administración de justicia. La monografista justifica la naturaleza pluriofensiva del blanqueo de capitales en la ubicación sistemática del delito, en el más grave tratamiento penológico del blanqueo -mayor pena privativa de libertad y pena de multa proporcional respecto del valor de los bienes “legitimados”- frente a los delitos de encubrimiento y receptación, y en el hecho de que la pena correspondiente al delito precedente no opere como límite máximo para la pena del blanqueo. (*Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código penal de 1995*, op. cit., págs. 90 y ss.).

la correcta administración de justicia, que queda frustrada por el acto de ocultación<sup>261</sup>. Similar línea interpretativa es la mantenida por BACIGALUPO ZAPATER, para quien las conductas blanqueadoras dificultan seriamente la persecución del delito previo generador del beneficio económico, reduciendo a su vez el efecto preventivo general de la pena<sup>262</sup>, y por VIVES ANTÓN/GONZALEZ CUSSAC, autores que subrayan la naturaleza encubridora de estos comportamientos<sup>263</sup>.

Desde una perspectiva relacionada con los fines preventivos del Derecho penal, COBO DEL ROSAL considera que el artículo 301 CP está llamado a frenar “el estímulo que constituye el aprovechamiento de las ganancias de procedencia ilícita de cara a la comisión de nuevos delitos”<sup>264</sup>. Con otro matiz, aunque también prestando especial atención a los fines preventivos del orden punitivo, para RAGUÉS I VALLÉS el delito de blanqueo no entraña ningún interés objeto de tutela propio, sino que se articula como instrumento político-criminal necesario para reforzar la función de la pena prevista para aquellos delitos previos que se cometen con fines lucrativos<sup>265</sup>, tutelando por tanto la administración de justicia en su dimensión preventiva<sup>266</sup>. A nuestro juicio, ha de censurarse esta interpretación, y ello porque no puede justificarse la tipificación de un delito para agravar las consecuencias jurídico-penales de la comisión de otros delitos previamente cometidos. La tipificación de un delito sólo puede legitimarse a través de la efectiva lesión de un bien jurídico.

Por su parte, para FEIJÓO SÁNCHEZ, en una línea hermenéutica próxima a la mantenida mayoritariamente por la doctrina alemana -que centra su atención en el interés del Ordenamiento penal por la lucha contra la criminalidad organizada (BARTON,

---

<sup>261</sup> Ibidem, pág. 92.

<sup>262</sup> Vid. BACIGALUPO ZAPATER, E., “Estudio comparativo del Derecho Penal de los Estados Miembros de la Unión Europea sobre la represión del reciclaje o blanqueo de dinero ilícitamente obtenido”, op. cit., pág. 457.

<sup>263</sup> Vid. VIVES ANTÓN, T. S./GONZÁLEZ CUSSAC, J. L., *Comentarios al Código Penal de 1995*, I. Valencia, 1996, pág. 1464.

<sup>264</sup> Vid. COBO DEL ROSAL, M., “La recepción de las normas de la Comunidad Europea en la legislación penal contra el blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 63.

<sup>265</sup> Vid. RAGUÉS I VALLÉS, R., “Blanqueo de capitales y negocios standard. Con especial mención a los abogados como potenciales autores de un delito de blanqueo”, *¿Libertad económica o fraudes punibles?: Riesgos penalmente relevantes e irrelevantes en la actividad económico-empresarial* (coord. por Jesús María Silva Sánchez). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2003, pág. 150. Si bien RAGUÉS niega la existencia de un interés protegido de forma autónoma, BLANCO CORDERO pone de manifiesto que en realidad la interpretación del autor se halla muy próxima a aquellas ya referidas que identifican el objeto de tutela del tipo de blanqueo con el bien jurídico protegido por el delito antecedente (*El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 200), interpretación que, en realidad, RAGUÉS I VALLÉS niega expresamente. (“Blanqueo de capitales y negocios standard. Con especial mención a los abogados como potenciales autores de un delito de blanqueo”, loc. cit.)

<sup>266</sup> Ibidem, pág. 153.



FORTHAUSER)-<sup>267</sup>, el blanqueo constituye “un instrumento de lucha contra la delincuencia organizada en la medida en la que pretende estrangular económicamente a las organizaciones criminales”<sup>268</sup>. Acertadamente constata el monografista la estrecha vinculación entre el tipo de blanqueo y la criminalidad organizada; sin embargo, no puede identificarse aquello que fenomenológicamente se asocia en numerosas ocasiones -si bien no necesariamente- con el delito de blanqueo, con el objeto de tutela de éste. Como sabemos, la criminalización del blanqueo está orientada a dificultar la incorporación de los rendimientos ilícitos al tráfico legal. Cuestión diferente es el hecho de que sólo la incorporación de aquellas cuantías suficientemente elevadas al tráfico legal sea apta para menoscabar el bien jurídico protegido por el blanqueo, y que dichas cuantías suelen ser introducidas a través de organizaciones delictivas dotadas de una sólida estructura. Se trata -desde diversos medios, no sólo a través de la tipificación del blanqueo- de evitar la proliferación de la delincuencia organizada, y la tipificación del tipo de blanqueo se presenta como un eficaz instrumento. Debe evitarse, sin embargo, la identificación entre el propósito de la erradicación del fenómeno con el bien jurídico protegido por el delito de blanqueo. Como ha advertido ABEL SOUTO, el artículo 301 CP en ningún momento vincula el blanqueo con la delincuencia organizada, de tal modo que, sin verificarse ninguna restricción en este sentido, el tipo también despliega sus efectos sobre personas no integradas en organizaciones criminales. En el ámbito del blanqueo de capitales, la única referencia que el Código penal hace a este grave fenómeno criminal se encuentra en el artículo 302, precepto que prevé penas más severas para las personas que pertenezcan a una organización dedicada a actividades de blanqueo, así como a sus jefes, administradores o encargados. Ello obliga a concluir que la pertenencia del blanqueador a organizaciones criminales en ningún caso puede considerarse un elemento constitutivo del tipo básico de blanqueo, y que por tanto no es el fenómeno de la criminalidad organizada lo que se trata de conjurar, al menos no de forma directa y exclusiva, con la tipificación de aquel delito<sup>269</sup>.

No hay duda de que, en la medida en que el fenómeno del blanqueo dificulta tanto la persecución del hecho delictivo del que provienen los bienes como la

---

<sup>267</sup> Vid., con detalle, BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 201 y ss.

<sup>268</sup> Vid. FEIJÓO SÁNCHEZ, B., “Imputación objetiva en el Derecho penal económico y empresarial: Esbozo de una teoría general de los delitos económicos”, *Revista Electrónica InDret*, mayo de 2009, pág. 50, disponible en el siguiente enlace: [http://www.indret.com/es/derecho\\_penal/8/?&sa=10&fc=137&sn=80](http://www.indret.com/es/derecho_penal/8/?&sa=10&fc=137&sn=80).

<sup>269</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., pág. 45.

identificación de sus autores, y obstaculiza el posterior comiso de los activos, incide negativamente en intereses vinculados con la administración de justicia<sup>270</sup>. Asimismo, el blanqueo constituye un importante mecanismo desincentivador de la comisión de delitos económicamente productivos. Sin embargo, no ha de confundirse la constatación de los positivos efectos sobre el buen funcionamiento de la administración de justicia que pueda desplegar la criminalización del blanqueo con el bien jurídico que éste está llamado a proteger; el aspecto favorecedor del delito no agota en él todo su injusto. El fenómeno que ha dado lugar a la criminalización del blanqueo como tipo autónomo es más complejo que el que subyace a los comportamientos meramente favorecedores, que encuentran encaje penal a través de otros tipos diferenciados. Más allá de las distintas exigencias típicas que permiten distinguir el blanqueo de otras figuras favorecedoras<sup>271</sup>, existen diferencias estructurales entre el primero y los segundos que impiden una identificación siquiera aproximada entre ellos. En este sentido, BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/FABIÁN CAPARRÓS han subrayado la diferencia estructural que permite distinguir la receptación del blanqueo: si bien el primer delito tipifica una conducta de consumación instantánea en la que el sujeto activo, al adquirir los bienes, los incorpora a su ámbito de dominio para su disfrute o aprovechamiento “sin que sean precisos más actos sucesivos sobre los mismos”, el blanqueo se caracteriza por conformar *un proceso* dirigido a distanciar progresivamente los bienes o activos de su origen delictivo “con objeto de dotarlos de un aspecto lícito”. El injusto intrínseco al blanqueo no se sitúa en el dominio, disfrute o aprovechamiento del bien, sino en la realización de una cadena de actos jurídico-económicos, en los que habitualmente intervienen diferentes sujetos, por cuya virtud se hacen circular los bienes a través de diferentes cauces económicos legales

<sup>270</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 94 y 95.

<sup>271</sup> Resulta interesante el análisis comparativo efectuado por CALDERÓN CEREZO en el que se destacan notables diferencias entre el blanqueo de capitales y los delitos de receptación y encubrimiento. En el delito de receptación, el sujeto activo ha de actuar con ánimo de lucro y no necesariamente el blanqueador; el delito precedente ha de afectar al patrimonio o al orden socioeconómico en la receptación y en el blanqueo es apto cualquier delito como precedente; del delito de receptación está excluido como autor aquel que lo haya sido en el delito previo, y no así en el blanqueo, cuyo autor puede coincidir con aquel que haya cometido el delito precedente; en la receptación los actos preparatorios no son punibles, y sí en el blanqueo; en la receptación la extensión de la pena privativa de libertad está limitada por aquella que corresponda al delito antecedente, limitación que no opera en el blanqueo, dada su consideración de delito autónomo; por último, el blanqueo admite la modalidad típica imprudente y no así la receptación. Respecto al delito de encubrimiento, si en éste opera la limitación de la pena privativa de libertad referida a la que corresponda al delito encubierto, no ocurre así en el blanqueo, como hemos visto; no son punibles los actos preparatorios del encubrimiento y sí los del blanqueo; cabe la excusa absolutoria de encubrimiento entre parientes (artículo 454), previsión legal que no existe para el delito de blanqueo; y por último, también el encubrimiento es un delito exclusivamente doloso, mientras el blanqueo admite un tipo imprudente. (“Algunos aspectos críticos del blanqueo de capitales. Legislación y jurisprudencial”, op. cit., págs. 71 y 72).

para eliminar su rastro de ilicitud<sup>272</sup>. Es precisamente su caracterización como proceso destinado a maquillar el origen delictivo de los activos y su incidencia en el normal desarrollo de la economía lo que permite diferenciar también al tipo de blanqueo del delito de encubrimiento.

En definitiva, tanto desde la perspectiva de la realidad fenomenológica del blanqueo como desde la óptica de su configuración legal, el delito de blanqueo aparece claramente diferenciado de otras conductas favorecedoras expresamente tipificadas cuyo objeto de protección es el adecuado funcionamiento de la administración de justicia. Dicho interés jurídico ya está salvaguardado a través del delito encubrimiento, de tal modo que no sería necesario ni estaría justificado incorporar una nueva figura delictiva para proteger exclusivamente intereses asociados a la administración de justicia<sup>273</sup>. Asimismo, de acuerdo con ABEL SOUTO, si ésta constituyese el interés jurídico tutelado, no podría explicarse razonablemente por qué no tiene cabida en el blanqueo la excusa absolutoria entre parientes, el privilegio del autoencubrimiento impune o la limitación de la pena por la que corresponde al delito base<sup>274</sup>.

Los motivos apuntados conducen a concluir que el fenómeno que el blanqueo trata de erradicar va más allá de la mera tutela del adecuado funcionamiento de la administración de justicia, y que éste no constituye, no al menos de forma principal, el bien jurídico protegido por el tipo<sup>275</sup>.

#### **2.2.2.5. EL ORDEN SOCIOECONÓMICO**

La ubicación sistemática del delito de blanqueo dentro del Código penal ha servido a algunos autores como factor indiciario<sup>276</sup> del que partir para la determinación

---

<sup>272</sup> Vid. BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I. /FABIÁN CAPARRÓS, E. A., “La emancipación del delito de blanqueo de capitales en el Derecho penal español”, op. cit., págs. 127 y 128.

<sup>273</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 199.

<sup>274</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., págs. 26, 32 y ss.; ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 94 y 95; MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de Capitales”, 3ª ed., op. cit., pág. 480.

<sup>275</sup> Vid. en este sentido, GÓMEZ INIESTA, D. J., *El delito de blanqueo de capitales en Derecho Español*, op. cit., págs. 34 y 35; ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 94 y ss.; CARPIO DELGADO, J. del, *El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal*, op. cit., págs. 63 y ss.; SUÁREZ GONZÁLEZ, C. J., “Blanqueo de capitales y merecimiento de pena: consideraciones críticas a la luz de la legislación española”, op. cit., pág. 146; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., loc. cit.

<sup>276</sup> Vid. DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, J., *El delito de blanqueo de capitales en Derecho Español*, op. cit., pág. 13; id., *El blanqueo de capitales en el Derecho español (Texto provisional)*, disponible en el enlace [http://www.ac-firma.com/biblioteca/opac\\_css/doc\\_num.php?explnum\\_id=7](http://www.ac-firma.com/biblioteca/opac_css/doc_num.php?explnum_id=7), pág. 6; GÓMEZ INIESTA, D. J.,

del objeto de tutela. De acuerdo con esta perspectiva, un importante sector doctrinal entiende que, en principio, el bien jurídico protegido por el tipo penal previsto en el artículo 301 CP ha de ser el orden socioeconómico. Esta parece ser, *a priori*, la voluntad del legislador, si tenemos en cuenta la ubicación del delito de blanqueo en el Título XIII del Libro II del vigente Código penal<sup>277</sup>, o la alusión que a este delito se hace en el Preámbulo del Proyecto de CP de 1992<sup>278</sup>. Además de la ubicación sistemática del delito, los perniciosos efectos que provocan los procesos de reintegración de activos de origen criminal en diversos ámbitos del sistema económico han conducido a un amplio sector a afirmar que el delito de blanqueo de capitales menoscaba fundamentalmente el orden económico, bien considerado éste de forma genérica, o materializado en diferentes aspectos relacionados con el mismo. Es en la especificación de las distintas manifestaciones del orden económico (la libertad de mercado, la libre circulación de bienes, la libre competencia, la estabilidad del sistema financiero, etc.) donde pueden ser apreciadas ciertas diferencias entre las distintas líneas argumentales desarrolladas por los autores adscritos a este sector mayoritario. En lo que sigue, expondremos a grandes rasgos los diferentes planteamientos propuestos por los autores que interpretan el delito de blanqueo en clave de lesividad económica.

GÓMEZ INIESTA concibe el tipo de blanqueo como un grave delito contra la economía. Para el monografista, su incriminación persigue proteger o preservar el sistema económico como *bien jurídico supraindividual*, toda vez que los actos legitimadores distorsionan la estabilidad, los indicadores reales y los principios en los que se basa el actual modelo socioeconómico<sup>279</sup>. Por su parte, MARTOS NÚÑEZ,

---

*El delito de blanqueo de capitales en Derecho Español*, op. cit., pág. 31; PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 247, 300 y ss.; ZARAGOZA AGUADO, J. A., “Artículo 301”, *Comentarios al Código Penal* (Coord. Manuel Gómez Tomillo). Ed. Lex Nova. Madrid, 2010, pág. 1156.

<sup>277</sup> Vid. MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de Capitales”, 3ª ed., op. cit., págs. 481 y ss.; ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., págs. 56 y 57; GALLEGOS SOLER, J. I., *Comentarios al Código Penal. Reforma LO 5/2010*, op. cit., pág. 664; LOBO GONZÁLEZ, R./ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, M., *Código Penal. Parte especial. Tomo II. Vol. II*, op. cit., pág. 192; MARTÍN PALLÍN, J. A., “Blanqueo de dinero, secreto profesional y criminalidad organizada”, op. cit., págs. 663 y 664; MARTÍNEZ-ARRIETA MÁRQUEZ DE PRADO, I., *El autoblqueo. El delito fiscal como antecedente del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 27.

<sup>278</sup> Texto cuyas discusiones parlamentarias, nos recuerda BLANCO CORDERO, han sido muy tenidas en cuenta para la elaboración del Código penal de 1995, según establece el Preámbulo de este último. (*El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 190). Vid., en el mismo sentido, ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., pág. 56, nota a pie de página nº 216.

<sup>279</sup> Vid. GÓMEZ INIESTA, D. J., *El delito de blanqueo de capitales en Derecho Español*, op. cit., págs. 37 y ss. En un sentido similar, Díez Ripollés ya había considerado, bajo la vigencia del Código anterior, que el blanqueo incide negativamente en el orden socioeconómico, “incluso entendido éste en el sentido más estricto”, concibiendo éste como un bien jurídico de naturaleza colectiva. (“El blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas. La recepción de la legislación internacional en el ordenamiento penal español”, op. cit., pág. 182).

destacando el aspecto internacional de los intereses llamados a ser protegidos por el tipo, afirma que éstos son tanto el orden económico como el sistema financiero<sup>280</sup>. También para CADENAS CORTINA el fenómeno del blanqueo incide negativamente en el funcionamiento ordenado de la economía, y especifica, como factores económicos directamente afectados, el adecuado funcionamiento de los mercados -en los que movimientos especulativos derivados de la reconversión de capitales pueden provocar en aquéllos “fenómenos de hiper-reacción (...) con las oscilaciones consiguientes en los índices de cambio y/o interés”-, así como la libre competencia y el desarrollo normalizado de la actividad empresarial y de las entidades de crédito<sup>281</sup>.

Aun reconociendo que las conductas blanqueadoras tienen cierta repercusión en el funcionamiento normalizado de la administración de justicia, OMAR PLÉE destaca el aspecto económico del delito de blanqueo, en el que el bien jurídico afectado es el orden económico en su conjunto y el normal funcionamiento de los mercados, especialmente el financiero<sup>282</sup>. Ello, porque, a juicio de este autor, las conductas blanqueadoras suponen “un obstáculo al ejercicio de la función económica del Estado, o más precisamente al ejercicio de la función que en la economía general cumple el sistema financiero”<sup>283</sup>. Desde una perspectiva muy similar, FABIÁN CAPARRÓS admite la incidencia de los comportamientos de blanqueo en el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia<sup>284</sup>, si bien para el monografista estamos ante un genuino delito que menoscaba el orden socioeconómico<sup>285</sup>: la reintroducción en los cauces oficiales de los beneficios procedentes de las actividades delictivas atenta contra “la salud del sistema económico”<sup>286</sup>, pues el lavado de activos puede llegar a condicionar peligrosamente el normal desarrollo de las relaciones de mercado<sup>287</sup>. Numerosos son los

---

<sup>280</sup> Vid. MARTOS NÚÑEZ, J. A., “Receptación y blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 209.

<sup>281</sup> Vid. CADENAS CORTINA, C., “Problemas de la penalidad en los delitos de receptación y blanqueo de dinero”, *Cuadernos de Derecho Judicial*, 1994. CGPJ. Madrid, 1994, pág. 280.

<sup>282</sup> Vid. OMAR PLÉE, R., “El lavado de dinero: un fenómeno transnacional de política criminal contemporánea”, *Derecho penal empresario*, op. cit., págs. 446 y ss.

<sup>283</sup> Ibidem, pág. 450.

<sup>284</sup> Incluso concede el monografista que los procesos de reciclaje “atentan, siquiera de manera mediata, contra el objeto jurídico tutelado por la norma (...) de cuya previa infracción se derive la obtención de capitales.” (Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 221).

<sup>285</sup> Ibidem, págs. 224 y ss.; id., “El blanqueo de capitales (Contexto, razones de su penalización, evolución en nuestro entorno de las iniciativas supranacionales)”, op. cit., págs. 173 y ss.; id., “Consideraciones de urgencia sobre la LO 8/1992 de modificación del CP y LECr en materia de tráfico de drogas”, op. cit., págs. 611 y ss.; id., “Tipologías y lógica del lavado de dinero”, op. cit., págs. 46 y ss., 57 y ss.

<sup>286</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., “Consideraciones de urgencia sobre la LO 8/1992 de modificación del CP y LECr en materia de tráfico de drogas”, op. cit., pág. 611.

<sup>287</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., “El blanqueo de capitales (Contexto, razones de su penalización, evolución en nuestro entorno de las iniciativas supranacionales)”, op. cit., pág. 174; id., “Relaciones entre blanqueo de capitales y corrupción. Algunas valoraciones a propósito de las previsiones contenidas en la

argumentos esgrimidos por FABIÁN para fundamentar su postura. En primer lugar, el blanqueo de capitales corrompe el normal uso de los instrumentos jurídicos y de los mecanismos que ofrece el tráfico mercantil a través de los que habitualmente se canalizan las operaciones de lavado<sup>288</sup>. En segundo lugar, provoca aquél graves perjuicios para el sistema económico en su conjunto: por un lado, y principalmente<sup>289</sup>, deteriora el sistema de libre competencia<sup>290</sup>, y por otro, resta certidumbre y credibilidad a la economía de mercado, cuya estabilidad y adecuado funcionamiento depende en gran medida de la confianza que en él tienen depositada los operadores económicos, confianza que queda seriamente mermada por la introducción de riqueza sucia<sup>291</sup>. Por ello, la nocividad del blanqueo de capitales se manifiesta en una doble trayectoria: en primer lugar, colectiva, “perturbando las condiciones generales del mercado que permiten el normal desarrollo de la vida privada, a la vez que la satisfacción de los intereses de los consumidores y usuarios; en segundo término, individual, poniendo en peligro -si no lesionando- las legítimas expectativas de los particulares que aspiran a participar, cada cual desde su propia posición, en ese juego de relaciones económicas”<sup>292</sup>.

Para PALMA HERRERA son también diversos los aspectos del sistema económico que resultan gravemente afectados por la incorporación de activos de ilícita procedencia

---

convención de la OCDE sobre soborno de funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales”, *Blanqueo de dinero y corrupción en el sistema bancario*, Ediciones Universidad de Salamanca, 2002, pág. 106.

<sup>288</sup> Así, “quien trata de reciclar fondos no usa los cajeros automáticos para disponer de dinero en efectivo en cualquier momento del día, sino para trocar moneda evitando el control del empleado; ni emplea títulos valores para documentar el crédito y facilitar su circulación, sino para estancar su riqueza; ni suscribe pólizas de seguro para evitar riesgos, sino para esconder dinero; ni juega a la lotería para optar por un premio, sino para administrar títulos al portador; ni tributa conforme a regímenes de estimación objetiva para evitar complicaciones administrativas, sino para permitir el afloramiento de unos ingresos ajenos a la actividad empresarial; ni se ampara en el secreto bancario para salvaguardar su derecho a la intimidad, sino para eludir el control de un dinero de procedencia sospechosa; ni se aprovecha de la libre circulación internacional de capitales para comerciar con el exterior, sino para transferir fondos de unas plazas a otras más permisivas o menos preparadas; ni constituye personas jurídicas para lograr objetivos inalcanzables por sujetos individuales, sino para fingir titularidades”. Todo ello, llega a provocar una innegable pérdida de confianza en la práctica del tráfico mercantil, que “puede llegar a afectar gravemente a la estabilidad que requiere el mercado de capitales para su adecuado funcionamiento”. (Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., “El blanqueo de capitales (Contexto, razones de su penalización, evolución en nuestro entorno de las iniciativas supranacionales)”, op. cit., págs. 175 y 176).

<sup>289</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., “Tipologías y lógica del lavado de dinero”, op. cit., pág. 50.

<sup>290</sup> Este es sin duda, a juicio de FABIÁN CAPARRÓS, el efecto de índole socioeconómica más pernicioso que el blanqueo implica. (*El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 216). Volveremos más adelante sobre el desarrollo argumental ofrecido al respecto por el autor.

<sup>291</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., “El blanqueo de capitales (Contexto, razones de su penalización, evolución en nuestro entorno de las iniciativas supranacionales)”, op. cit., pág. 176; id., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 214 y 215. Y es que aquel mercado en el que se reinvierten capitales de origen delictivo “se convierte poco a poco en un núcleo de relación dominado por unos pocos, en que los operadores económicos pierden la confianza sobre la que se deben basar en todo caso las relaciones comerciales.” (Ibidem, pág. 228).

<sup>292</sup> Ibidem, pág. 229.

al tráfico legal. En primer lugar, los procesos blanqueadores deterioran el tejido empresarial y productivo, así como la libre competencia. Las estructuras empresariales que se dedican a actividades delictivas lucrativas disponen de grandes ventajas frente a sus competidoras: las “empresas mafiosas” disponen de mayor facilidad para procurarse financiación que las compañías que operan legalmente, lo que a su vez les permite situarse en una posición preeminente o de dominio en el mercado concreto en que operen, incluso en situación de monopolio, en la que eventualmente podrían eliminar toda suerte de competencia en el sector<sup>293</sup>. En cualquier caso, advierte PALMA, no siempre la reintegración de los capitales procedentes de actividades delictivas en el circuito económico legal persigue su inversión en actividades y negocios lícitos. Muchas veces el destino de los fondos ilícitos se dirige a satisfacer necesidades básicas de consumo o en la reinversión de los beneficios en ulteriores actividades ilícitas. Y, en estos casos, continúa el autor, no se ve afectada la libre competencia, por lo que no puede considerarse a ésta el bien jurídico que persigue salvaguardar el delito de blanqueo<sup>294</sup>. Otro efecto nocivo para el orden económico al que presta especial atención PALMA HERRERA es la pérdida de confianza en el sector bancario, lo que a la larga podría incidir negativamente en el sistema económico en general. Por ello, cabría pensar, como hace BLANCO CORDERO<sup>295</sup>, que el bien jurídico protegido en el blanqueo de capitales viene constituido -siquiera de manera subsidiaria- por la estabilidad y solidez del sistema financiero. A esta interpretación se opone PALMA, pues, a su juicio, entender que el sistema financiero “siempre es el punto de llegada de los capitales de procedencia delictiva, cualquiera que sea el uso que a los mismos se dé, supone partir de un concepto tan amplio que, a la postre, significa la identificación entre sistema financiero y la propia economía. Sucede entonces lo mismo que con el orden económico, que resulta un concepto tan amplio, vago y abstracto, que resulta inaceptable como bien jurídico protegido”. Por ello, a juicio de este autor, debe descartarse también la solidez del sistema financiero como bien jurídico tutelado por el delito de blanqueo. Dicho interés, como ocurre con el orden socioeconómico y la libre competencia, se ve afectado

---

<sup>293</sup> Es cierto, reconoce el monografista, que “estos efectos que es capaz de producir el blanqueo de capitales constituyen el modelo extremo al que, como es lógico, no siempre se llega. Tales efectos se verán más claros en términos macroeconómicos, de influencia sobre la producción legal”. (Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Comentarios al Código Penal*, op. cit., pág. 263). “La gravedad del fenómeno criminal desde el punto de vista económico [se concreta] en constituir (...) una fuerza productiva caracterizada por métodos de adquisición propios del capitalismo primitivo y salvaje, pero con mecanismos de inversión propios del capitalismo moderno”. (Ibidem, pág. 265).

<sup>294</sup> Ibidem, pág. 266; id., *Comentarios al Código Penal*, op. cit., pág. 667.

<sup>295</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 215 y ss.

por las actividades de blanqueo de capitales, pero ello no significa que sea el bien jurídico protegido. La insuficiencia de los conceptos “orden socioeconómico”, “libre competencia” y “solidez del sistema financiero” obliga al autor a indagar sobre la existencia de “un bien o valor que se vea realmente afectado por el blanqueo de capitales y cuya afectación genere nocivos efectos tanto para la libre competencia como para el sistema financiero y el orden socioeconómico en general”, bien o valor que constituirá el bien jurídico protegido del tipo de blanqueo. Para PALMA HERRERA, como veremos al ocuparnos de las tesis pluriofensivas, dicho bien o valor que englobaría los intereses enumerados sería “el tráfico lícito de bienes”<sup>296</sup>. En el epígrafe siguiente estudiaremos con más detalle los argumentos que respaldan sus conclusiones.

En el mismo sentido que el apuntado por PALMA HERRERA<sup>297</sup>, otros autores han puesto también en tela de juicio la aptitud del orden socioeconómico para constituir un bien jurídico objeto de protección penal, dado su carácter ambiguo, difuso e inconcreto, por lo que a los efectos de interpretar el delito blanqueo, resultarían “insuficientes las meras referencias a dicho orden sin mayores especificaciones”<sup>298</sup>. Quizá por este motivo, algunos monografistas han tratado de precisar determinados ámbitos o aspectos del orden socioeconómico como objeto de protección inmediato<sup>299</sup>; aquéllos constituirían el verdadero interés protegido en sentido técnico<sup>300</sup>. Es esta línea, DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO concibe el orden socioeconómico como bien jurídico mediato, que se concretará en “el interés del Estado en controlar el flujo de capitales dimanantes de actividades delictivas y capaz de influir en el sistema económico nacional, incluso europeo” como bien jurídico inmediato e “interés directamente tutelado en sentido

---

<sup>296</sup> Ibidem, págs. 266- 283 passim.

<sup>297</sup> Ibidem, pág. 253; id., *Comentarios al Código Penal*, op. cit., pág. 663.

<sup>298</sup> Vid. MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de Capitales”, 3ª ed., op. cit., pág. 481. En sentido similar, id., *Derecho penal económico y de la empresa. Parte general*, op. cit., págs. 173 y ss.; ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 89 y 90; FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 183 y ss.; BAIGÚN, D., “El bien jurídico orden económico”, op. cit., págs. 31 y ss.; BAJO FERNÁNDEZ, M./BACIGALUPO SAGESSE, S., “Blanqueo de capitales”, 2ª ed., op. cit., págs. 721 y 722; ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., págs. 61 y 62; SOTO NAVARRO, S., *La protección penal de los bienes colectivos en la sociedad moderna*. Ed. Comares, Granada, 2003, págs. 256-258; CARPIO DELGADO, J. del, *El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal*, op. cit., págs. 71 y ss.; MUÑOZ CONDE, F., “Consideraciones en torno al bien jurídico protegido del blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 162; MOLINA MANSILLA, M. del C., “El delito básico de blanqueo de capitales del artículo 301 del Código Penal”, *La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario*, nº 42, 2007, págs. 63 y 64.

<sup>299</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, loc. cit.; PALMA HERRERA, J. M., *Comentarios al Código Penal*, loc. cit.

<sup>300</sup> Vid. MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., *Derecho penal económico y de la empresa. Parte general*, op. cit., pág. 173.



técnico”<sup>301</sup>. Para CARPIO DELGADO, el bien jurídico amparado por el delito de blanqueo estaría constituido por “la circulación de los bienes en el mercado como elemento indispensable para su normal funcionamiento y de la economía en general”<sup>302</sup>. En sentido similar se han pronunciado MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ y MUÑOZ CONDE, al afirmar que el tipo de blanqueo trata de proteger la licitud de los bienes que circulan en el mercado<sup>303</sup>, y MORENO CANOVÉS/RUIZ MARCO, para quienes el objeto de tutela del tipo está conformado por “el interés de que los bienes de origen delictivo sean excluidos del tráfico legal de bienes y servicios”<sup>304</sup>.

Buena parte de los autores que subrayan la dimensión económica del blanqueo han considerado que es la libre competencia la concreta manifestación del orden socioeconómico que el tipo pretende amparar<sup>305</sup>. Desde este sector se parte del hecho de que las operaciones de blanqueo, destinadas a enmascarar la procedencia ilícita y el pacífico disfrute de aquéllos<sup>306</sup>, no responden a criterios de rentabilidad o de maximización de beneficios. Con estos fines, en no pocas ocasiones, las sucesivas inversiones realizadas por el blanqueador se llevarán a cabo a través de métodos anárquicos e inútiles<sup>307</sup> desde el punto de vista económico, incluso a costa de obtener

---

<sup>301</sup> Vid. DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, J., *El delito de blanqueo de capitales en Derecho Español*, op. cit., págs. 14 y 15; id., “Recepción de las propuestas del GAFI de las Directivas europeas sobre el blanqueo de capitales en el derecho español”, op. cit., pág. 43; id., *El blanqueo de capitales en el Derecho español (Texto provisional)*, op. cit., pág. 7; id., “El blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 455.

<sup>302</sup> Vid. CARPIO DELGADO, J. del, *El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal*, op. cit., págs. 81 y ss.

<sup>303</sup> Vid. MUÑOZ CONDE, F., *Derecho Penal. Parte Especial*, op. cit., pág. 513; MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de capitales”, 3ª ed., op. cit., págs. 481 y 482. En cualquier caso, como veremos, ambos autores se pronuncian a favor de la naturaleza pluriofensiva del delito, lo que, según MARTÍNEZ-BUJÁN, “permitirá llevar a cabo una deseable restricción teleológica en la interpretación del tipo.” (Ibidem, pág. 483). Próxima a esta interpretación, con matices, y el marco de una exégesis pluriofensiva del tipo de blanqueo, se sitúa la tesis defendida por ABEL SOUTO, para quien el concreto interés económico que a través del delito de blanqueo se trata de proteger viene constituido por la “licitud de los bienes en el tráfico económico y legal”, esto es, “el interés de la comunidad en preservar la licitud de los bienes que son objeto de la circulación mercantil.” (*El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., págs. 75 y ss.).

<sup>304</sup> Vid. MORENO CÁNOVES, A. / RUIZ MARCO, F., *Delitos socioeconómicos*, op. cit., pág. 386.

<sup>305</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 97 y ss.; FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 216-218; id., “Consideraciones de urgencia sobre la LO 8/1992 de modificación del CP y LECr en materia de tráfico de drogas”, op. cit., pág. 612; id., “Tipologías y lógica del lavado de dinero”, op. cit., págs. 50 y ss.; FERRÉ OLIVÉ, J. C., “Corrupción, crimen organizado y blanqueo de capitales en el mercado financiero”, op. cit., pág. 15; SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, J. L., “Algunas cuestiones relativas a la regulación penal del blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 773; DOMÍNGUEZ PUNTAS, A., *Memento de Autor Blanqueo de Capitales y Delito Fiscal*. Instituto de Estudios Fiscales, Ed. Francis Lefebvre. Madrid, 2011, marginal 40; ARIAS HOLGUÍN, D. P., *Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 213-215; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 222 y ss.

<sup>306</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 218.

<sup>307</sup> Ibidem.

rendimientos bajos o negativos<sup>308</sup>. Dicha forma de operar, llevada a cabo a gran escala, puede provocar serias distorsiones en el mercado de que se trate, acostumbrado a funcionar conforme a criterios de racionalidad económica<sup>309</sup>. Por otra parte, toda vez que la obtención ilegal de recursos es muy inferior al coste que estos presentan en los mercados lícitos, los sujetos financiados con cuantiosos activos de procedencia delictiva se erigen en una innmerceda posición privilegiada<sup>310</sup> que les permite actuar en el mercado con total libertad, orientando su comportamiento a fines diferentes a la maximización de la rentabilidad, y “asumiendo riesgos empresariales que bajo ningún concepto estarían en condiciones de afrontar el resto de los competidores”<sup>311</sup>. La gradual desventaja a la que éstos pueden quedar relegados (mayores costes de financiación, cargas financieras y menor liquidez<sup>312</sup>) permitirá a los primeros “apropiarse progresivamente del mercado de que se trate, extendiendo su presencia en él como si fuera una mancha de aceite”<sup>313</sup>.

En este sentido, para ARÁNGUEZ SÁNCHEZ no hay duda de que el bien jurídico inmediatamente protegido es el principio de libre competencia<sup>314</sup>, constituyendo su más relevante manifestación la credibilidad del sistema financiero: la ausencia de transparencia de las operaciones de blanqueo provoca una pérdida de confianza de los inversores en las instituciones financieras, que corren el riesgo ser instrumentalizadas para la consecución de tan ilícitos fines<sup>315</sup>. Similar es la interpretación de ARIAS HOLGUÍN, para quien la libre competencia es bien jurídico directamente tutelado<sup>316</sup> junto al “correcto funcionamiento de los «mecanismos económicos y bursátiles»”<sup>317</sup>

---

<sup>308</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., “La lucha contra el blanqueo de capitales procedentes de las actividades delictivas en el marco de la U.E.”, *Eguzkilore. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología*, nº 15, San Sebastián, 2001, pág. 18.

<sup>309</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 97 y ss.; BLANCO CORDERO, I., “La lucha contra el blanqueo de capitales procedentes de las actividades delictivas en el marco de la U.E.”, loc. cit.

<sup>310</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 97 y ss.

<sup>311</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 217.

<sup>312</sup> Vid. SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, J. L., “Algunas cuestiones relativas a la regulación penal del blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 773.

<sup>313</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 217.

<sup>314</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 97 y ss.

<sup>315</sup> Ibidem, págs. 100 y 101.

<sup>316</sup> Vid. ARIAS HOLGUÍN, D. P., *Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 213-215.

<sup>317</sup> Ibidem, pág. 219. Y ello porque -afirma la autora- los comportamientos que buscan reintroducir los beneficios de actos delictivos a través de operaciones bursátiles y financieras “se traducen en una alteración de los precios, o de la rentabilidad de los activos, títulos, etc., allí negociados”. La inversión de estos capitales suele realizarse asumiendo mayores riesgos de los que se estaría dispuesto a afrontar, pues a la hora de realizar la concreta operación bancaria o bursátil “primará el interés de «blanquear capitales» y no el de la obtención de un mayor rendimiento económico, de una eficiente distribución del ahorro, de los riesgos, etc.”. Ello coloca en

siempre que estos intereses resulten afectados por «un ejercicio ilegítimo u objetivamente abusivo» que impidan su normal funcionamiento. Conforme a ello, puntualiza esta autora, sólo poseerían relevancia penal aquellas conductas legitimadoras cuya ejecución “implique un ejercicio abusivo de los «mecanismos económicos y bursátiles» y/o suponga la afección de la libre competencia en el mercado”<sup>318</sup>.

Por último, hemos de referirnos a una corriente doctrinal que, si bien parte de la pluriofensividad del delito de blanqueo, acaba afirmando que realmente es, o *ha de ser*, el orden socioeconómico el bien jurídico objeto de tutela por delito referido<sup>319</sup>. A esta idea se aproxima la singular propuesta de BLANCO CORDERO. El monografista, admitiendo la similitud del delito de blanqueo con el favorecimiento real derivada del carácter encubridor del primero, termina negando que la administración de justicia haya de interpretarse como el interés objeto de protección, proponiendo el orden socioeconómico como el bien jurídico protegido por el delito de acuerdo con una exégesis teleológica del mismo. Aunque el blanqueo de capitales implique siempre un atentado contra la administración de justicia, “no es éste el aspecto más relevante del mismo”: su incriminación realmente obedece a la protección de otros intereses, y estos son de carácter económico: “frente a una interpretación del blanqueo de capitales acorde con su naturaleza jurídica, que lo configura como un delito contra la Administración de Justicia, consideramos más acertado proceder a una interpretación teleológica del mismo. La intención del legislador parece dirigirse a la configuración de un delito contra el orden socioeconómico, como se deriva de la propia ubicación sistemática del art. 301 CP”. Además, los precedentes legislativos avalarían, a juicio del autor, esta interpretación<sup>320</sup>.

BLANCO parte del análisis de la compleja configuración del blanqueo contenida en el artículo 301 CP, norma que prevé, a su juicio, dos conductas distintas: por un lado, la realización de actos indeterminados tendentes a las finalidades expresamente previstas (ocultación, encubrimiento o auxilio); y por otro, la adquisición, posesión, utilización, conversión y transmisión de los bienes con conocimiento del origen delictivo de los mismos, con independencia de la finalidad que guíe al blanqueador al

---

situación de riesgo “tanto la inversión como la solvencia de quienes van al mercado a obtener financiación”. (Ibidem, págs. 216-219).

<sup>318</sup> Ibidem, pág. 220, y nota a pie de página núm. 198.

<sup>319</sup> Vid. ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 336.

<sup>320</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 199 y 214.

realizar las referidas conductas expresamente previstas<sup>321</sup>. Pues bien, los actos indeterminados realizados con las finalidades explícitamente reflejadas en el precepto menoscaban el bien jurídico administración de justicia<sup>322</sup>, toda vez que impiden el descubrimiento del delito previo y de su autor, y obstaculizan, con ello, el normal funcionamiento de la referida administración de justicia; a su vez, dichos actos indeterminados realizados con particulares finalidades “prosигuen la lesión del bien jurídico previamente menoscabado por el delito previo”<sup>323</sup>. De otro lado, las conductas específicamente previstas (adquisición, conversión, posesión, utilización y transmisión de los bienes) están llamados, según la interpretación de BLANCO CORDERO, a tutelar un bien jurídico diferente: el orden socioeconómico<sup>324</sup>. De este modo, la peculiar configuración del tipo de blanqueo en el texto punitivo le confiere cierto carácter pluriofensivo<sup>325</sup>, constituyendo, a juicio del autor, la administración de justicia el bien predominantemente protegido conforme a la literalidad del precepto<sup>326</sup>.

Sin embargo, razona el autor, deben ser otros los criterios que inspiren la interpretación de la norma, y éstos han de ser “fundamentalmente de índole económica”<sup>327</sup>, de acuerdo con la verdadera intención del legislador y la ubicación sistemática del tipo. Toda vez que los procesos de reintegración de fondos delictivos distorsionan la libre competencia, y a su vez dañan la estabilidad y solidez del sistema financiero, el delito de blanqueo de capitales ha de ser interpretado desde la óptica de la afección al orden económico, constituyendo así el verdadero objeto de tutela los referidos intereses jurídicos: la libre competencia y la estabilidad y solidez del sistema financiero; el primero de manera directa, y el segundo de forma subsidiaria<sup>328</sup>.

---

<sup>321</sup> Ibidem, pág. 210.

<sup>322</sup> Ibidem, pág. 213. Para el monografista, los actos realizados con las finalidades de ocultar o encubrir el bien de origen delictivo constituyen supuestos de “tentativa de favorecimiento real o de auxilio complementario” autónomamente previstos, pues no exigen que se produzca la efectiva ocultación o encubrimiento del bien, mientras que los actos realizados sobre los bienes ilícitos con el fin de ayudar al autor del delito previo a eludir las consecuencias jurídicas del mismo, conforman supuestos de favorecimiento real. (Ibidem, págs. 211-213).

<sup>323</sup> Ibidem, pág. 213.

<sup>324</sup> Para BLANCO la referencia al orden socioeconómico es “excesivamente vaga e imprecisa para constituir un bien jurídico, y requiere determinar qué aspectos de aquél son lesionados o puestos en peligro por el blanqueo de capitales.” A partir de un análisis criminológico y doctrinal del tipo, el monografista concluye que el bien jurídico concreto susceptible de ser menoscabado de manera directa es la libre competencia, y de forma subsidiaria, “la estabilidad y solidez del sistema financiero”. (Ibidem, págs. 220 y ss.).

<sup>325</sup> Ibidem, pág. 213.

<sup>326</sup> Afirma el autor que “con base a la naturaleza jurídica del art. 301 CP, el bien jurídico predominantemente protegido es la Administración de Justicia. Sólo de forma subsidiaria o mediata se puede decir que protege el orden económico”. (Ibidem, pág. 192).

<sup>327</sup> Ibidem.

<sup>328</sup> Ibidem, págs. 215 y ss.

Como hemos visto, en efecto, el fenómeno del blanqueo de capitales que se trata de erradicar provoca perniciosos efectos tanto en variables macroeconómicas como microeconómicas. Si el bien jurídico protegido por el tipo ha de ser interpretado en clave económica, de acuerdo con BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE y FABIÁN CAPARRÓS, habrá de excluirse la relevancia penal de aquellos comportamientos que, encajando en la descripción típica, no lleguen a menoscabar ningún interés asociado al ordenado funcionamiento de la economía lícita. Así, aquellas conductas que no supongan realmente la transformación o inversión de capitales, sino el simple consumo, disfrute o ayuda a otros a realizarlo no conformarían “ese núcleo socio-económico que caracteriza al blanqueo”. Dichas conductas pueden ser consideradas próximas al “encubrimiento real con o sin ánimo de lucro”, e incluso considerarse atípicas, como acciones “cotidianas” o “neutrales”<sup>329</sup>.

Por su parte, la doctrina jurisprudencial también ha considerado que es el orden socioeconómico, en sus diversas manifestaciones, el bien jurídico directamente tutelado por el tipo de blanqueo. Es particularmente significativa en este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo 202/2006, de 2 de marzo, en la que la Sala Segunda, tras negar que con la incriminación del delito de blanqueo de capitales se pretenda “castigar directamente el delito base o delito de origen”, declara que “se trata, fundamentalmente, de dificultar el agotamiento de dichos delitos en lo que se refiere a la obtención de un beneficio económico extraordinario (auténtica finalidad perseguida con su ejecución), conseguido por no tener que soportar los costes personales, financieros, industriales y tributarios que se exigen a la ganancia obtenida lícitamente, con desestabilización de las condiciones de la competencia y el mercado”<sup>330</sup>. Las tesis jurisprudenciales más recientes avalan esta línea interpretativa. Así, se reconoce en la Sentencia 974/2012, de 5 de diciembre, que de acuerdo con la doctrina mayoritaria, “se afecta al orden económico, esto es “la regulación jurídica de la producción, distribución y consumo de bienes” o bien “la regulación jurídica del intervencionismo estatal en la economía”. (...) La base de esta concepción económica se encuentra en la libre y leal competencia, por lo que el sistema económico regular se ve afectado por la afluencia de recursos económicos que se genera al margen del propio sistema, con efectos sobre la

---

<sup>329</sup> Vid. BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I. /FABIÁN CAPARRÓS, E. A., “La emancipación del delito de blanqueo de capitales en el Derecho penal español”, op.cit., pág. 128.

<sup>330</sup> Vid. STS 202/2006, de 2 de marzo, FJ 6º. Resoluciones posteriores se manifiestan en el mismo sentido (así, la STS 811/2012, de 30 de octubre).

financiación de las empresas, competencia desleal y consolidación de organizaciones que contaminan el orden económico y merman la credibilidad del mercado”<sup>331</sup>. Por su parte, en la Sentencia 279/2013, de 6 de marzo, el Tribunal Supremo afirma que la ubicación del precepto que tipifica el delito de blanqueo dentro de los delitos contra el orden socioeconómico supone un argumento adicional que avala la línea interpretativa que apunta a dicho orden como el bien jurídico que la norma trata de proteger<sup>332</sup>.

#### **2.2.2.6. EL BLANQUEO COMO DELITO PLURIOFENSIVO**

En la actualidad, un importante sector de la doctrina penal española coincide al categorizar el tipo de blanqueo como un delito pluriofensivo, cuyo objeto de tutela estaría conformado simultáneamente por distintos bienes jurídicos<sup>333</sup>. Entre los autores que proponen soluciones pluriofensivas, se constata no obstante cierto desacuerdo respecto a cuáles constituyen los concretos intereses merecedores de protección. Así, en la doctrina coexisten diferentes interpretaciones que alternan de manera diversa algunos de los bienes jurídicos a los que hemos hecho referencia en los epígrafes anteriores: el correcto funcionamiento de la administración de justicia, el orden socioeconómico, la transparencia del sistema financiero, la seguridad interior del Estado o incluso el propio bien jurídico protegido por el delito previo<sup>334</sup>.

Ya dijimos que la mayoría de los autores que han considerado el adecuado funcionamiento de la administración de justicia como objeto de protección del delito de

---

<sup>331</sup> No obstante, la Sentencia, de acuerdo con la línea interpretativa jurisprudencial más reciente, y tras hacerse eco de cierto sector de la doctrina que defiende la afección de la seguridad interior del Estado, entendida como “interés en la erradicación de ciertas formas de delincuencia, esencialmente la delincuencia organizada”, postula una *concepción pluriofensiva del delito*, que afecta al orden socioeconómico y a la administración de justicia, “cuya punición está justificada por la lesividad inherente a las conductas tipificadas, así como por razones de política criminal radicadas en la lucha contra la criminalidad organizada.” (STS 974/2012, del 5 de diciembre, FJ 37). Volveremos a esta resolución del Alto Tribunal en el siguiente apartado.

<sup>332</sup> De acuerdo con la Sentencia referida, “ha de entenderse que dentro del orden socioeconómico existen intereses concretos susceptibles de ser tutelados materialmente por el sistema punitivo, tales como el interés del Estado en controlar el flujo de capitales procedentes de actividades delictivas ejecutadas a gran escala y que pueden menoscabar el sistema económico, y que afectan también al buen funcionamiento del mercado y de los mecanismos financieros y bursátiles.” No obstante, como hemos visto, el Alto Tribunal no descarta la existencia de otros intereses jurídicos como objeto de tutela, apuntando al carácter pluriofensivo del delito. Con todo, la resolución no llega a pronunciarse de forma concluyente sobre la cuestión que nos ocupa. Así, se declara que “no siendo imprescindible dirimir con carácter definitivo si el bien jurídico protegido es único o plural, ni tampoco si se centra en el bien tutelado por el delito previo o por otros autónomos, como sería el orden socioeconómico en los términos anteriormente expuestos dada la ubicación sistemática del precepto”, no ha de excluirse “tampoco a mayores la Administración de Justicia”.

<sup>333</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 204.

<sup>334</sup> *Ibidem*, págs. 204 y 205.

blanqueo, lo han hecho desde un enfoque *pluriofensivo* del tipo penal<sup>335</sup>. Dentro de este sector doctrinal, algunos autores han colocado el peso ofensivo de las conductas legitimadoras en intereses vinculados a la administración de justicia<sup>336</sup>, otros conceden mayor relevancia a bienes jurídicos de carácter económico<sup>337</sup> y la mayoría, sin hacer mayor precisión al respecto, parecen ubicar en plano de igualdad ambos bienes jurídicos<sup>338</sup>.

MOLINA FERNÁNDEZ afirma la pluriofensividad del delito de blanqueo, si bien niega que su objeto de protección tenga que ver con intereses económicos<sup>339</sup>: lo dañoso del blanqueo no es la incorporación a la economía legal del fruto ilegal del delito, sino “lo que esta actividad favorece la acción delictiva”<sup>340</sup>. Para el autor, estamos ante un tipo complejo que “no sólo encubre delitos, sino que los promueve de manera

<sup>335</sup> Vid. MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de Capitales”, 3ª ed., op. cit., págs. 480 y ss.; LAMPE, E. J., “El nuevo tipo penal de blanqueo de dinero”, *Estudios penales y criminológicos*, XX, Universidad de Santiago de Compostela, 1997, págs. 120-122; PALMA HERRERA, J. M., *Comentarios al Código Penal*, op. cit., págs. 668 y ss.; VIDALES RODRÍGUEZ, C., *Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código penal de 1995*, op. cit., págs. 91 y ss.; MUÑOZ CONDE, F., “Consideraciones en torno al bien jurídico protegido del blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 161 y ss.; id., *Derecho Penal. Parte Especial*, op. cit., pág. 513; ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., págs. 83 y ss.; ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 336; CALDERÓN CEREZO, A., *Comentarios al Código penal*, vol. 3, op. cit., pág. 2294; id., “Algunos aspectos críticos del blanqueo de capitales. Legislación y jurisprudencial”, op. cit., pág. 75; FARALDO CABANA, P., “Aspectos básicos del delito de blanqueo de bienes en el Código Penal de 1995”, op. cit., págs. 128 y 129; ZARAGOZA AGUADO, J. A., “El blanqueo de bienes de origen criminal”, op. cit., págs. 374 y ss.; CARPIO DELGADO, J. del, *El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal*, op. cit., págs. 63-65; MOLINA MANSILLA Mª del C./MOLINA MANSILLA, L., *El blanqueo de dinero*, op. cit., págs. 24 y 25; GONZÁLEZ RUS, J. J., “Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico”, op. cit., págs. 637 y 638, entre otros.

<sup>336</sup> Vid. MOLINA FERNÁNDEZ, F., “¿Qué se protege en el delito de blanqueo de capitales?: reflexiones sobre un bien jurídico problemático, y a la vez aproximación a la participación en el delito”, op. cit., pág. 122; VIDALES RODRÍGUEZ, C., *Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código penal de 1995*, op. cit., págs. 90 y ss.; ORTS BERENGUER, E., “Delimitación entre encubrimiento, receptación y blanqueo respecto a las modalidades de posesión y uso incorporadas en el artículo 301 por la L.O. 5/2010”, op. cit., págs. 260 y 261.

<sup>337</sup> Vid. ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 336; CALDERÓN CEREZO, A., *Comentarios al Código penal*, vol. 3, op. cit., pág. 2294; LOMBARDEO EXPÓSITO, L. M., de, “La perspectiva penal”, *Blanqueo de capitales: prevención y represión del fenómeno desde la perspectiva penal, mercantil, administrativa y tributaria*. Ed. Bosch. Barcelona, 2009, pág. 154; DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, M., “El castigo del autoblanqueo en la reforma penal de 2010. La autoría y participación en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 285 y 286; REBOLLO VARGAS, R., “Receptación y blanqueo de capitales”, *Derecho Penal Español. Parte Especial (II)*. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, págs. 774 y 775; FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y TORRES, J., *Blanqueo de capitales y principio de lesividad*, op. cit., págs. 170 y 233.

<sup>338</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 282 y ss.; id., *Comentarios al Código Penal*, op. cit., págs. 663 y ss.; VIVES ANTÓN, T. S./ GONZÁLEZ CUSSAC, J. L., *Comentarios al Código Penal de 1995, I*, op. cit., pág. 1464; ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., págs. 83 y ss.; MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de Capitales”, 3ª ed., op. cit., pág. 481; MUÑOZ CONDE, F., *Derecho Penal. Parte Especial*, op. cit., pág. 513.

<sup>339</sup> Por ello, su ubicación dentro del Código penal es, a juicio del autor, incorrecta. (Vid. MOLINA FERNÁNDEZ, F., “¿Qué se protege en el delito de blanqueo de capitales?: reflexiones sobre un bien jurídico problemático, y a la vez aproximación a la participación en el delito”, op. cit., pág. 122).

<sup>340</sup> Ibidem, págs. 111-113 *passim*.

genérica”<sup>341</sup>. Se configura esencialmente, por tanto, como un delito contra la administración de justicia<sup>342</sup>, próximo al encubrimiento pero con una “capacidad lesiva añadida” que justifica su tipificación independiente, como figura pluriofensiva. El blanqueo, al crear un contexto favorable a la comisión de otros delitos, como el delito base, contribuye también de algún modo a la lesión de los bienes jurídicos salvaguardados por aquéllos<sup>343</sup>.

También VIDALES RODRÍGUEZ señala que el delito previsto en el artículo 301 CP posee naturaleza pluriofensiva: para la monografista, además de la administración de justicia, el tipo está llamado a proteger el orden socioeconómico<sup>344</sup>. De acuerdo con su interpretación, en realidad el ataque al orden socioeconómico es un *medio* para realizar la conducta legitimadora y el atentado principal se produce contra la administración de justicia. No sería imprescindible, por ello, que una concreta conducta legitimadora lesione simultáneamente ambos bienes jurídicos para colmar el tipo penal<sup>345</sup>. En cualquier caso, son numerosos los argumentos que justifican, según VIDALES, la naturaleza pluriofensiva del delito de blanqueo: su ubicación sistemática, el más grave tratamiento penológico que se le dispensa frente a la receptación, y el hecho de que la pena correspondiente al delito precedente no opere como límite máximo para la pena del blanqueo.<sup>346</sup> Si bien ORTS BERENGUER admite la dificultad de precisar el bien jurídico objeto de tutela en el blanqueo, se inclina por admitir la naturaleza pluriofensiva del delito, que estaría llamado a proteger tanto intereses relacionados con la administración de justicia como también diversos aspectos patrimoniales o manifestaciones del orden socioeconómico<sup>347</sup>.

ÁLVAREZ PASTOR/EGUIDAZU PALACIOS sitúan el núcleo de protección del delito de blanqueo en aspectos de naturaleza económica, “pero superando el ámbito estricto de la economía nacional”<sup>348</sup>. También son el orden socioeconómico y la administración de

---

<sup>341</sup> Ibidem, pág. 122.

<sup>342</sup> El delito de blanqueo de capitales puede contribuir a la destrucción de elementos de prueba o investigación, incluso a dificultar la persecución del responsable del delito previo. (Ibidem, pág. 120).

<sup>343</sup> Ibidem, págs. 113 y ss.

<sup>344</sup> Vid. VIDALES RODRÍGUEZ, C., *Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código penal de 1995*, op. cit., págs. 90 y ss.

<sup>345</sup> Ibidem, pág. 91.

<sup>346</sup> Ibidem, págs. 91 y ss.

<sup>347</sup> Vid. ORTS BERENGUER, E., “Delimitación entre encubrimiento, receptación y blanqueo respecto a las modalidades de posesión y uso incorporadas en el artículo 301 por la L.O. 5/2010”, op. cit., págs. 260 y 261.

<sup>348</sup> Vid. ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 336.



justicia los intereses amparados a juicio de CALDERÓN CEREZO<sup>349</sup>. Para dicho autor, nuevamente estamos ante un delito pluriofensivo “que incide sobre todo en el orden socioeconómico como bien tutelado de carácter colectivo, difuso y relativamente indeterminado, en la medida en que la solidez, transparencia y estabilidad del sistema financiero se ve afectado por la afluencia de recursos económicos que no proceden del ahorro o el crédito sino que se originan al margen del sistema regular, con sus secuelas sobre la financiación ilegal de empresas, competencia desleal, consolidación de organizaciones que contaminan el orden económico y merman la credibilidad en el mercado”<sup>350</sup>. Asimismo, el blanqueo afecta al “normal funcionamiento de la Administración de Justicia, concretado en el interés público por la averiguación de los delitos y sus responsables”<sup>351</sup>, junto con “la voluntad del legislador en erradicar los delitos de que traen causa las ganancias” que con el blanqueo pretenden legalizarse<sup>352</sup>. Desde parecida óptica pluriofensiva<sup>353</sup>, FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y TORRES estima que es el orden socioeconómico “el bien jurídico preponderante (...) que ha de servir como criterio de conceptualización y sistematización del delito de lavado de dinero”<sup>354</sup>. Para el autor, dentro del proceso de lavado pueden resultar lesionados bienes jurídicos diferenciados en función de la fase en que se produzca y de los métodos de reciclaje empleados<sup>355</sup>. En cualquier caso, a su juicio, el denominador común a todas las fases del blanqueo y a todos sus métodos es la lesión de “bienes jurídicos instrumentales correspondientes al orden socioeconómico”<sup>356</sup>.

---

<sup>349</sup> Vid. CALDERÓN CEREZO, A., *Comentarios al Código penal*, vol. 3, op. cit., pág. 2294. En sentido similar, CALDERÓN CEREZO, A./CHOCLÁN MONTALVO, J. A., *Manual de derecho Penal II. Parte especial*. Ed. Deusto. Barcelona, 2005, pág. 315.

<sup>350</sup> Vid. CALDERÓN CEREZO, A., *Comentarios al Código penal*, vol. 3, loc. cit.

<sup>351</sup> Ibidem.

<sup>352</sup> Vid. CALDERÓN CEREZO, A., “Algunos aspectos críticos del blanqueo de capitales. Legislación y jurisprudencia”, op. cit., pág. 75. Invocando la línea argumental de CALDERÓN, LOMBARDERO EXPÓSITO considera que confluyen varios intereses protegidos de forma directa o indirecta: tanto el orden socioeconómico como la administración de justicia, pero también, “de algún modo el bien jurídico protegido en el delito causal, y, además, la Hacienda Pública, el funcionamiento regular de las sociedades mercantiles, la libre concurrencia en la formación de los precios, la fe pública, etc.” (“La perspectiva penal”, op. cit., pág. 154).

<sup>353</sup> Vid. FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y TORRES, J., *Blanqueo de capitales y principio de lesividad*, op. cit., págs. 170, 233 y ss.

<sup>354</sup> Ibidem, pág. 236.

<sup>355</sup> Ibidem, pág. 215. Así, en las primeras fases del blanqueo (colocación y conversión) resultan menoscabados tanto la administración de justicia como la licitud de los bienes que circulan en el mercado y la estabilidad y solidez del sistema financiero. Y en la fase de integración son vulnerados tanto el orden socioeconómico en sentido estricto (identificado con los principios rectores económicos del Estado) y la libre competencia (Ibidem, págs. 218-229, 273 y ss.).

<sup>356</sup> Ibidem, pág. 236.

Otro reputado monografista en la materia que nos ocupa, PALMA HERRERA, también interpreta el delito de blanqueo desde una perspectiva pluriofensiva. Para dicho autor, en el delito de blanqueo resultan afectados tanto el tráfico lícito de bienes como la administración de justicia<sup>357</sup>. En primer lugar, el tipo penal lesiona el interés en el correcto funcionamiento de la administración de justicia, en sus dos dimensiones, preventiva y represiva. La afección a la dimensión preventiva se evidencia en el hecho de que el sujeto que favorece “el aprovechamiento de las ganancias de procedencia delictiva, no hace sino estimular la comisión de nuevos delitos”<sup>358</sup>. La dimensión represiva (en su función de persecución de la delincuencia) también se ve menoscabada, toda vez que quien realiza actos de blanqueo impide, o al menos dificulta, “el descubrimiento, persecución y castigo de delito y delincuente”; también obstaculiza dicha función aquél que, “paralelamente o con posterioridad a ese descubrimiento, persecución o castigo, realiza actos que tienen por objeto desvincular las ganancias de procedencia delictiva, del responsable del delito; y quien realiza actos que, sin desvincularlas de los responsables del delito previo, las ocultan, haciéndolas inalcanzables para las autoridades, impidiendo su comiso en definitiva”<sup>359</sup>. Además del menoscabo del funcionamiento normalizado de la administración de justicia, para el monografista resulta innegable la afección a intereses jurídicos de carácter económico derivada de los procesos de lavado<sup>360</sup>. En este sentido, el tipo de blanqueo pretende salvaguardar el tráfico lícito de bienes<sup>361</sup>. En un primer momento, PALMA pareció situar el núcleo ofensivo de las conductas legitimadoras en el correcto funcionamiento de la administración de justicia: “por encima de la protección de los mercados financieros, del tráfico lícito de bienes, de la competencia lícita, del orden socioeconómico, de la persecución de los delitos, de la efectividad del comiso, etc., hay un presupuesto que es aceptado sin discusión: con la incriminación de las conductas de blanqueo de bienes se trata de evitar el estímulo que constituye el aprovechamiento de las ganancias de

---

<sup>357</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 298.

<sup>358</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Comentarios al Código Penal*, op. cit., pág. 674.

<sup>359</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 291.

<sup>360</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Comentarios al Código Penal*, op. cit., págs. 663-670; id., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 282 y 283.

<sup>361</sup> Además del normal funcionamiento de la administración de justicia, para PALMA la incriminación del delito de blanqueo se dirige también a “evitar que accedan a los canales ordinarios de la economía legal capitales obtenidos de manera delictiva con el fin de que no llegue a contaminarse la economía y se produzcan efectos indeseables para la libre competencia, el sistema financiero, etc. [Se trata] de mantener incólume el tráfico de bienes evitando que los de procedencia delictiva accedan a él y circulen junto a los de origen legal”. (Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 282; id., *Comentarios al Código Penal*, op. cit., págs. 668 y ss.).

procedencia ilícita de cara a la comisión de nuevos delitos”<sup>362</sup>. Sin embargo, en su posterior monografía sobre el delito de blanqueo de capitales, el autor ha considerado que ambos intereses, el tráfico lícito de bienes y la administración de justicia, “deben ser considerados en un plano de igualdad”, lo que le conduce a confirmar sin reservas la pluriofensividad del delito de blanqueo<sup>363</sup>.

Muchos otros autores, desde líneas interpretativas próximas, han admitido la naturaleza pluriofensiva del tipo penal cuyo estudio nos ocupa. Si, como vimos, para FARALDO CABANA el delito de blanqueo -concebido como un supuesto de favorecimiento real- tutela la administración de justicia como principal objeto de protección, dicho ilícito está llamado a salvaguardar asimismo el orden económico “entendido como regulación jurídica de la producción, distribución y consumo de bienes o servicios”, toda vez que su comisión puede provocar a la postre “una desestabilización de las condiciones mismas de la competencia y el mercado”<sup>364</sup>. En sentido similar, para VIVES ANTÓN y GONZÁLEZ CUSSAC la naturaleza encubridora del tipo de blanqueo permite su clasificación como un delito contra la administración de justicia, si bien desde la óptica de su ubicación sistemática se concluye que las conductas de reciclaje también menoscaban el orden socioeconómico. La elevada penalidad a que se asocia la comisión de las diferentes conductas que integran el tipo de blanqueo constituye un dato que avalaría, de acuerdo con los referidos autores, su condición pluriofensiva<sup>365</sup>. De forma análoga, otros autores han afirmado que el blanqueo trata de proteger, junto a la administración de justicia, el “orden socioeconómico en sentido amplio, o sea a intereses generales supraindividuales de orden social y económico” (DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO)<sup>366</sup>, y la licitud de los bienes que circulan en el mercado así como la libre competencia (MUÑOZ CONDE)<sup>367</sup>.

Para ABEL SOUTO resulta innegable que “el correcto funcionamiento tanto de la Administración de Justicia como del tráfico económico y financiero legal,

---

<sup>362</sup> Ibidem, pág. 673.

<sup>363</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 297.

<sup>364</sup> Vid. FARALDO CABANA, P., “Aspectos básicos del delito de blanqueo de bienes en el Código Penal de 1995”, op. cit., págs. 128 y 129.

<sup>365</sup> Vid. VIVES ANTÓN, T. S./ GONZÁLEZ CUSSAC, J. L., *Comentarios al Código Penal de 1995*, I, op. cit., pág. 1464.

<sup>366</sup> Vid. DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, M., “El castigo del autoblanqueo en la reforma penal de 2010. La autoría y participación en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 285 y 286.

<sup>367</sup> Vid. MUÑOZ CONDE, F., *Derecho Penal. Parte Especial*, op. cit., pág. 513.

entendiéndose éste como concreción del orden socioeconómico”<sup>368</sup>, son objeto de protección directa<sup>369</sup> del tipo de blanqueo. Aunque el blanqueo constituya en esencia un comportamiento favorecedor, su contenido de injusto es mayor al que subyace al delito de encubrimiento<sup>370</sup>, incidiendo negativamente también en el tráfico económico y financiero legal. Dicha conclusión se desprende, a juicio de ABEL, no sólo de la ubicación sistemática del tipo de blanqueo en el Código penal<sup>371</sup> o de su severo régimen penológico<sup>372</sup>, sino también de la propia esencia de las conductas legitimadoras<sup>373</sup>: la incriminación del blanqueo de capitales pretende impedir que los beneficios de origen delictivo accedan al tráfico financiero y económico legal<sup>374</sup>. La afección a diversos bienes jurídicos, de acuerdo con ABEL, justifica la tipificación autónoma del delito de blanqueo, la inexistencia de exención penal para quienes blanqueen capitales delictivos de parientes y asimilados, la inoperancia del privilegio del autoencubrimiento, así como la ausencia de previsión de limitaciones penológicas para el tipo de blanqueo respecto al delito previo.<sup>375</sup>

Los argumentos esgrimidos por ABEL SOUTO resultan suficientemente convincentes para MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, que se adhiere a los postulados pluriofensivos, revelando una línea interpretativa muy próxima a la de aquél. Para MARTINEZ-BUJÁN, serían bienes jurídicos tutelados por el tipo de blanqueo tanto la administración de justicia como el orden socioeconómico, delimitado éste a través de la idea de “*la licitud de los bienes que circulan en el mercado*, que debe ser protegida frente a la incorporación de bienes de procedencia delictiva”<sup>376</sup>. Si bien la ubicación del

---

<sup>368</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., pág. 83. La idea de “licitud de los bienes en el tráfico económico y legal”, se concreta en “el interés de la comunidad en preservar la licitud de los bienes que son objeto de la circulación mercantil.” La salvaguarda de la licitud de los bienes objeto del tráfico normalizado constituye “elemento básico para el buen funcionamiento del orden socioeconómico, sector que requiere que los bienes ilícitos se excluyan del mercado. (...) Así pues, el tráfico financiero y económico legal debe ser tutelado de la contaminación que entraña la incorporación de bienes ilícitos.” (Ibidem, págs. 75-79 passim).

<sup>369</sup> Ibidem, pág. 85.

<sup>370</sup> Ibidem, pág. 33.

<sup>371</sup> Ibidem, págs. 56 y 57.

<sup>372</sup> Ibidem, pág. 87.

<sup>373</sup> Ibidem, pág. 77.

<sup>374</sup> Ibidem, pág. 79.

<sup>375</sup> Ibidem, págs. 33 y 88.

<sup>376</sup> Vid. MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de Capitales”, 3ª ed., op. cit., págs. 481 y 482. Afirma el reputado penalista que “en consonancia con una configuración socioeconómica del delito de blanqueo de capitales superadora de una visión puramente patrimonial o apegada al bien jurídico de la Administración de justicia, el precepto del art. 301 debería ser modificado (...) introduciendo un límite ligado a la entidad económica del objeto material, [si bien] tal propuesta no es consecuencia tanto de la propia configuración del bien jurídico (y de su susceptibilidad de lesión o peligro) como de necesaria plasmación del principio de

tipo de blanqueo parece sugerir a MARTINEZ-BUJÁN que el peso ofensivo de los procesos de lavado se sitúa en torno a intereses de naturaleza económica<sup>377</sup>, concluye el autor que la literalidad del precepto conduce a afirmar que son también objeto de protección intereses ligados a la correcta administración de justicia. Asimismo, la gravedad de las penas asociadas al delito de blanqueo parece apuntar a la pluriofensividad del delito<sup>378</sup>. Con todo, según el autor, la exégesis pluriofensiva “permitirá llevar a cabo una deseable restricción teleológica en la interpretación del tipo.”<sup>379</sup>

Por otro lado, de acuerdo con orientaciones interpretativas diferentes a las hasta aquí expuestas pero también vinculadas a perspectivas pluriofensivas, sectores doctrinales minoritarios consideran que el tipo de blanqueo trata de amparar simultáneamente una pluralidad de bienes jurídicos, si bien otros distintos al binomio conformado por intereses económicos y la administración de justicia. Aunque para BLANCO LOZANO el bien jurídico objeto de tutela en el tipo de blanqueo coincide con el bien protegido por el delito previo, parece admitir este autor que asimismo se trata de amparar “el interés del Estado en controlar un determinado orden socioeconómico”<sup>380</sup>. También ZARAGOZA AGUADO concibe el delito de blanqueo de capitales como “una actividad criminal pluriofensiva”<sup>381</sup>, en el que resultan afectados tanto el orden socioeconómico, de modo directo e inmediato<sup>382</sup>, como el normal funcionamiento del mercado comercial y financiero, y por ello, “la propia esencia del sistema democrático”<sup>383</sup>. En términos similares se ha pronunciado MOLINA MANSILLA, para quien los bienes jurídicos protegidos por el delito de blanqueo son el orden socioeconómico, en tanto que afectación a la transparencia de las normas de

---

intervención mínima en este ámbito, de la misma manera que sucede, v. gr., en los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social”. (Ibidem, pág. 481).

<sup>377</sup> Ibidem; id., “La dimensión internacional del blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 221.

<sup>378</sup> Vid. MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de Capitales”, 3ª ed., op. cit., pág. 483.

<sup>379</sup> Ibidem.

<sup>380</sup> Vid. BLANCO LOZANO, C., “El blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas en el ordenamiento penal español”, op. cit., págs. 73 y 74.

<sup>381</sup> Vid. ZARAGOZA AGUADO, J. A., “Aspectos probatorios y técnicas de investigación en los procesos por lavado de dinero: medidas preventivas y cautelares, recomendaciones internacionales”, op. cit., pág. 238.

<sup>382</sup> Vid. ZARAGOZA AGUADO, J. A., “Aspectos legales de la prevención del blanqueo de capitales”, *Curso Superior Universitario en Derecho Penal Económico. Un diálogo entre Jueces, Fiscales, Abogados y Profesores (Cátedra de Investigación Financiera y Forense KPMG-URJC)*, Ed. Universidad Rey Juan Carlos. 1ª ed., Madrid, 2009, pág. 349. Versión digitalizada disponible en el siguiente enlace: <http://www.kpmg.com/ES/es/Actualidad/Novedades/ArticulosyPublicaciones/Documents/Curso-Superior-Derecho-Penal-Economico.pdf>.

<sup>383</sup> Vid. ZARAGOZA AGUADO, J. A., “El blanqueo de bienes de origen criminal”, op. cit., págs. 374 y ss.; id., “Aspectos probatorios y técnicas de investigación en los procesos por lavado de dinero: medidas preventivas y cautelares, recomendaciones internacionales”, op. cit., págs. 238-241; id., “Artículo 301”, *Comentarios al Código Penal* (Coord. Manuel Gómez Tomillo). Ed. Lex Nova. Madrid, 2010, págs. 1156 y 1157.

funcionamiento del sistema financiero y a la seguridad del tráfico lícito de bienes, el funcionamiento correcto de la administración de justicia, al incidir en la investigación de los delitos cometidos y en la persecución de los culpables, y la seguridad interior del Estado, toda vez que la última finalidad de la tipificación del blanqueo de capitales es la lucha contra el crimen organizado<sup>384</sup>.

Por su parte, la jurisprudencia más reciente parece evolucionar hacia una interpretación pluriofensiva del delito de blanqueo. Aunque hasta ahora la Sala Segunda del Tribunal Supremo no se ha pronunciado de manera precisa sobre el interés o intereses que el delito de blanqueo trata de tutelar, en diversas resoluciones ha subrayado la autonomía del delito y afirmado su carácter pluriofensivo<sup>385</sup>. En la Sentencia 974/2012, tras hacer mención a aquel sector doctrinal que se inclina por la afección de la seguridad interior del Estado -entendida como “interés en la erradicación de ciertas formas de delincuencia, esencialmente la delincuencia organizada”- como bien jurídico protegido, se revela una tendencia a una *concepción pluriofensiva del delito*, en virtud de la cual el tipo penal estaría llamado a tutelar el orden socioeconómico y a la administración de justicia, “cuya punición está justificada por la lesividad inherente a las conductas tipificadas, así como por razones de política criminal radicadas en la lucha contra la criminalidad organizada”<sup>386</sup>.

---

<sup>384</sup> Vid. MOLINA MANSILLA, M. del C./MOLINA MANSILLA, L., *El blanqueo de dinero*, op. cit., págs. 24 y 25. De forma similar, ARIAS MERLANO, partiendo de la vinculación del fenómeno del blanqueo con la criminalidad organizada, considera que el sistema y la seguridad democrática de los Estados constituye un interés jurídico llamado a ser protegido por el delito de blanqueo, toda vez que las organizaciones criminales comprometen seriamente, especialmente en determinados Estados, su estabilidad, seguridad y soberanía, así como “las estructuras de la administración pública, las actividades comerciales y financieras lícitas y la sociedad a todos los niveles”. (“El sistema democrático y la seguridad interior como bien jurídico protegido por el delito de blanqueo de dinero”, *III Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pág. 341).

<sup>385</sup> Vid. CALDERÓN CEREZO, A., *Delitos contra el orden socioeconómico* (Coord. Juan Saavedra Ruiz). Ed. La Ley, Madrid, 2008, págs. 370 y 371.

<sup>386</sup> Vid. STS 974/2012, del 5 de diciembre, FJ 37. La perspectiva pluriofensiva parece ir consolidándose en los últimos años. Así en la STS 228/2013, de 22 de marzo, se afirma que “en el delito de blanqueo la doctrina mayoritaria sostiene que se afecta al orden económico, esto es “la regulación jurídica de la producción, distribución y consumo de bienes” o bien “la regulación jurídica del intervencionismo estatal en la economía”. El sistema de economía de mercado está garantizado por los poderes públicos (art. 38 CE). La base de esta concepción económica se encuentra en la libre y leal competencia, por lo que el sistema económico regular se ve afectado por la afluencia de recursos económicos que se generan al margen del propio sistema, con efectos sobre la financiación de las empresas, competencia desleal y consolidación de organizaciones que contaminan el orden económico y merman la credibilidad del mercado. Algún autor apunta que el bien jurídico protegido es la seguridad interior del Estado, pero entendido más que como preservación del orden público, como interés en la erradicación de ciertas formas de delincuencia. Realmente nos encontramos ante un delito pluriofensivo que afecta al orden socioeconómico y a la Administración de Justicia, cuya punición está justificada por la lesividad inherente a las conductas tipificadas, así como por razones de política criminal radicadas en la lucha contra la criminalidad organizada.”

Como se ha expuesto, la exégesis pluriofensiva goza en la actualidad de una importante acogida en el seno de la doctrina española, si bien existen voces altamente autorizadas en la materia que nos ocupa que censuran esta interpretación. En contra de una lectura pluriofensiva del delito de blanqueo se ha manifestado abiertamente ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, que considera preferible “señalar un único interés” objeto de protección, evitando la inseguridad jurídica que implica la superposición de tan heterogéneos bienes jurídicos<sup>387</sup>.

### **2.2.3. RECAPITULACIÓN Y TOMA DE POSICIÓN**

#### **I**

Como se ha advertido al comienzo de este epígrafe, no es cuestión baladí la individualización del bien jurídico que determinado delito está llamado a salvaguardar. El bien jurídico protegido constituye un elemento configurador del propio tipo penal<sup>388</sup>, absolutamente determinante para su interpretación<sup>389</sup>, y su especificación proporcionará apodícticos criterios para restringir el ámbito de aplicación de delitos que, como ocurre con el blanqueo de capitales, están redactados en términos excesivamente laxos e inextricables.

A pesar del escaso recorrido histórico del delito de blanqueo, la doctrina no ha mantenido una línea interpretativa homogénea con respecto a la identificación del bien jurídico que el tipo está llamado a proteger. No obstante, también es cierto que la determinación del interés tutelado ha estado íntimamente vinculada a la concreta configuración que el legislador ha dado en cada momento al tipo penal. Las sucesivas revisiones del texto punitivo que han afectado al delito de blanqueo han tenido generalmente su correspondiente reflejo en las diferentes interpretaciones doctrinales sobre el bien jurídico protegido por aquél.

La configuración legal del delito de blanqueo de capitales se asoció en sus orígenes al tipo de receptación, y sólo con posterioridad -tras diversas reformulaciones

---

<sup>387</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 101 y 102.

<sup>388</sup> Vid. GÓMEZ PAVÓN, P., “El bien jurídico protegido en la receptación, blanqueo de dinero y encubrimiento”, op. cit., pág. 211.

<sup>389</sup> Vid. GÓMEZ INIESTA, D. J., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 31.

legislativas-, ha adquirido finalmente su propia autonomía. Resulta comprensible que, conforme a las primeras enunciaciones del delito, la doctrina acudiese a las teorías del mantenimiento o del aprovechamiento, estrechamente ligadas a la receptación, y que vinculase así su objeto de tutela con el interés protegido por el delito antecedente. Sin embargo, de acuerdo con la formulación legal actualmente vigente, el tipo de blanqueo se configura como un delito autónomo, y debe descartarse toda interpretación que asocie el bien jurídico que pretende tutelar con el objeto de protección del delito previo, máxime teniendo en cuenta que, de acuerdo con la actual redacción del artículo 301 CP, resulta indiferente cuál haya sido el delito previo origen de los bienes objeto del delito<sup>390</sup>. La línea interpretativa que vincula el bien jurídico protegido por el blanqueo con aquél tutelado por el delito antecedente apunta en realidad a una concepción del tipo penal como mero instrumento de política criminal orientado a prevenir el delito subyacente. Dicha concepción debe ser rechazada de plano, pues, de conformidad con el principio de lesividad, la tipificación de un delito únicamente halla justificación en el efectivo menoscabo de un bien jurídico<sup>391</sup>. La afección a un mismo bien jurídico en ningún caso puede ser sancionado por dos tipos diferentes -el delito antecedente y el de blanqueo-, y debe ser descartada de forma radical por contravenir el principio *non bis in idem*, consagrado constitucionalmente de manera implícita en el artículo 25.1 de la Norma fundamental. Esta misma interpretación es plenamente suscrita en la actualidad por la jurisprudencia, al considerar que el delito de blanqueo posee un injusto propio y definitivamente desvinculado del referido al hecho previo<sup>392</sup>.

En cualquier caso, la obtención de un ulterior beneficio económico -a través de la reintroducción en el tráfico legal del capital ilícito- en nada puede aumentar o mantener la lesión del bien jurídico protegido por hecho previo, el cual en todo caso habrá sucedido en un momento anterior. Ulteriores argumentos penológicos, apuntados acertadamente por la doctrina, conducen a rechazar la tesis sometida aquí a valoración: el artículo 301 CP prevé un sistema penológico no referenciado al delito precedente, lo

---

<sup>390</sup> Nos referimos, claro está, para la conformación del tipo básico. En aquéllos supuestos en los que el hecho previo constituya alguno de los delitos relacionados con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas previstos en los artículos 368 a 372 CP, o alguno de los delitos comprendidos en los Capítulos V, VI, VII, VIII, IX y X del Título XIX o del Capítulo I del Título XVI, de conformidad con el segundo y tercer párrafo del artículo 301.1 CP, el delito previo determinará la aplicación del subtipo agravado previsto en dicho precepto.

<sup>391</sup> Vid. GÓMEZ BENÍTEZ, J. M., “Reflexiones técnicas y de política criminal sobre el delito de blanqueo de bienes”, op. cit., págs. 6 y ss.

<sup>392</sup> Vid., por todas, STS 884/2012, de 8 de noviembre.



cual confirma la total desvinculación del tipo de blanqueo respecto del delito previo en lo que al bien jurídico que éste está llamado a proteger se refiere.

## II

Un sector de la doctrina ha considerado que es el correcto funcionamiento de la administración de justicia el bien jurídico protegido del tipo de blanqueo, bien como único interés tutelado, bien asociado a la protección de otros bienes jurídicos, de acuerdo con una interpretación pluriofensiva del tipo. Se dice que si los procesos de reciclaje tienen naturaleza favorecedora, el bien jurídico protegido por el delito de blanqueo estará conformado por el buen funcionamiento de la administración de justicia. Este planteamiento nos obliga a examinar si también el delito objeto de nuestro estudio está llamado a tutelar intereses vinculados a la referida administración de justicia.

La configuración del delito actualmente vigente revela una naturaleza marcadamente favorecedora, especialmente en relación con aquellos comportamientos neutros que sólo adquieren relevancia penal cuando están dirigidos a alguna de las finalidades expresamente previstas en el artículo 301.1 CP -ocultación, encubrimiento o auxilio-, y con las conductas contenidas en número 2 del precepto (actos de ocultación y encubrimiento). A pesar de ello, consideramos que la administración de justicia no constituye interés objeto de protección del tipo. A nuestro juicio, no ha de confundirse la naturaleza encubridora de algunas de las conductas incriminadas ni el manifiesto interés que pueda existir para los poderes públicos en dificultar el desarrollo de cierto tipo de delincuencia con el bien jurídico que el tipo procura salvaguardar. La positivización expresa del delito de blanqueo como un tipo autónomo e independiente permite concluir que el fenómeno criminal que el legislador penal pretende erradicar es mucho más complejo que el que subyace a los comportamientos favorecedores, que por otro lado encuentran encaje a través de otro tipo diferenciado previsto en el Código, la figura delictiva del encubrimiento (artículo 451).

Es cierto que la incorporación al texto punitivo del delito de blanqueo despliega beneficiosos efectos para trascendentes intereses asociados a la administración de justicia: sin duda, la incriminación penal del blanqueo favorece la efectividad tanto de la función preventiva o disuasoria de la administración de justicia como de su función

represiva (averiguación, persecución y castigo de los delitos). Los comportamientos blanqueadores, de un lado, dificultan la detección y persecución de la actividad criminal de la que los fondos ilícitos proceden, obstaculizando la erradicación de la delincuencia -especialmente de la criminalidad organizada-, y, de otro, facilitan la financiación de nuevas actividades criminales. Sin embargo, no ha de confundirse la constatación de los positivos efectos sobre el buen funcionamiento de la administración de justicia que pueda desplegar la tipificación del blanqueo con el bien jurídico que éste está llamado a proteger, a la luz del cual haya de interpretarse el precepto que lo positiviza<sup>393</sup>. La reintroducción de las ganancias obtenidas a través de actividades delictivas en los canales económico-financieros seguros produce, como trataremos de justificar a continuación, graves perjuicios a diversos aspectos del orden socioeconómico, constituyendo éste el bien jurídico que el tipo persigue salvaguardar, y ello con independencia de que algunas formas de conducta revelen cierto carácter favorecedor. Por todo ello, entendemos que la administración de justicia no constituye el bien jurídico llamado a ser protegido por el delito de blanqueo.

### III

Compartimos con la doctrina mayoritaria que la ubicación del delito de blanqueo en el Título XIII XXX del Código penal vigente apunta indiciariamente a que la intención del legislador penal se ha dirigido a garantizar la indemnidad del orden socioeconómico, o diversos aspectos vinculados al mismo. Parece que la *ratio legis* que ha impulsado al legislador a tipificar el delito de blanqueo no ha sido otra que evitar la reintegración en los circuitos normalizados de los fondos que traen origen en la comisión de delitos, y con ello garantizar la salvaguarda del correcto funcionamiento del orden socioeconómico, al que se pretende preservar de toda mancha derivada de capitales ilícitamente obtenidos. Por ello, *a priori* se podría considerar que es *el orden socioeconómico* -o determinados aspectos del mismo- el interés o intereses jurídicos cuya tutela procura el delito de blanqueo.

---

<sup>393</sup> Vid. ARANGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de Capitales*, op. cit., pág. 95; MUÑOZ CONDE, F., “Consideraciones en torno al bien jurídico protegido del blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 159 y 160.

Sin embargo, debe ser rechazada una exacta identificación de la finalidad que la ley persigue con el bien jurídico protegido<sup>394</sup>. Asimismo, tal y como ha advertido HUERTA TOCILDO, se ha de admitir que en lo que respecta a la determinación del bien jurídico protegido, “corta explicación es la que sólo atiende al Derecho positivo, olvidando que éste puede cambiar con relativas frecuencia y facilidad”<sup>395</sup>. Precisamente, constituye un paradigmático ejemplo de ello la evolución legislativa del delito de blanqueo, caracterizada por una continua reformulación típica, una constante expansión y un progresivo aumento de su ámbito de aplicación. Por todo ello, a la ubicación sistemática han de añadirse nuevos argumentos que justifiquen la consideración del orden socioeconómico -o diversos aspectos del mismo- como interés o intereses objeto de tutela. Hemos tenido oportunidad de comprobar en páginas anteriores que la literatura especializada -no sólo la que se ocupa de la cuestión desde una perspectiva penal- reiteradamente ha advertido del impacto negativo que la legalización de grandes masas patrimoniales puede producir tanto en variables macroeconómicas como microeconómicas del sistema constitucionalmente establecido. Por un lado, los procesos de reintegración inciden negativamente en el normal funcionamiento del orden económico y financiero, tanto nacional como internacional, pues la introducción de elevadas cantidades de riqueza “sucía” en el tráfico legal puede provocar la volatilidad de los tipos de cambio y de interés, menoscabando la eficacia de las políticas económicas que los gobiernos desarrollan para la estabilización de estas variables. En las economías menos consolidadas, dichos procesos pueden repercutir negativamente, a su vez, en diversos índices de carácter económico, e incluso incrementar su déficit con terceros países. Asimismo, la introducción masiva en el mercado legal de elevadas cantidades de recursos ilícitos podría provocar el aumento de la masa monetaria en circulación, y a continuación reducirse si dichos capitales son colocados en otros países, causando graves perjuicios a la liquidez bancaria<sup>396</sup>.

Por otro lado, los procesos legitimadores despliegan perniciosos efectos en la buena marcha de la economía de mercado y en la libre competencia, su pilar básico. La

---

<sup>394</sup> Vid. GÓMEZ PAVÓN, P., “El bien jurídico protegido en la receptación, blanqueo de dinero y encubrimiento”, op. cit., pág. 211; GAEDE, K., “Puntos fuertes y puntos flacos de la función legitimadora de la teoría del bien jurídico inmanente al sistema en el ejemplo del fraude de subvenciones”, op. cit., pág. 281.

<sup>395</sup> Vid. HUERTA TOCILDO, S., “Aproximación crítica a la nueva regulación del delito de receptación y otras conductas afines”, op. cit., pág. 376.

<sup>396</sup> Vid. MOLINA MANSILLA, M. C./MOLINA MANSILLA, L., *El blanqueo de dinero*, op. cit., págs. 8 y 9; QUIRK, P. J., “El blanqueo de dinero: repercusiones macroeconómicas”, *Ekonomiaz: Revista vasca de economía*, nº 39, 1997, pág. 191, disponible en el enlace siguiente: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=273774>.

financiación empresarial a través de recursos ilícitos compromete costes notablemente inferiores a los que han de satisfacer aquellos operadores que actúan de forma legítima. Para financiarse, éstos se ven obligados a acudir a entidades que proporcionan capital financiero, satisfaciendo por el uso de dichos recursos costes relativamente elevados. Operar en el mercado resulta mucho más costoso para las compañías que actúan lícitamente que para aquellas otras que se financian a través de recursos de origen delictivo. Ello, a la postre, coloca a las primeras en situación de desventaja frente a las entidades financiadas ilícitamente, capaces de situarse en una posición de dominio en el mercado concreto en que operen, y en sistemas económicos de escasa consolidación, pueden llegar incluso eliminar a sus competidoras y asumir posiciones monopolísticas en su sector<sup>397</sup>.

Asimismo, la reintegración de los capitales procedentes de actividades delictivas en el circuito económico legal no se rige por criterios de maximización de beneficios. El principal -y a veces único- objetivo que el blanqueador persigue no es otro que la reintroducción de la riqueza “sucia” en el tráfico legal, incluso a través de operaciones de nula rentabilidad. No son los criterios de racionalidad económica que naturalmente rigen los mercados los que compelen al referido agente a realizar determinada operación; sus pretensiones se orientan a aflorar de la manera más eficaz y menos llamativa los fondos de procedencia delictiva, recurriendo, si es necesario, a inversiones de escaso rendimiento o incluso deficitarias<sup>398</sup>. La difusión de estas prácticas, contrarias a criterios de rentabilidad a los que el mercado naturalmente obedece, desvirtúa las propias reglas en que aquél se asienta, provocando a la postre un elevado riesgo de corromperse de manera generalizada.

Paralelamente, teniendo en cuenta que la reintegración en el mercado legal de recursos ilícitos se articula a través de la desviada utilización y de la manipulación de los instrumentos y mecanismos legítimos que ofrece el tráfico financiero y mercantil, las conductas de blanqueo inciden negativamente en la credibilidad y en la confianza depositada tanto en los referidos instrumentos como en el tráfico normalizado y en la

---

<sup>397</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Comentarios al Código Penal*, op. cit., pág. 664; FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 217.

<sup>398</sup> Ibidem, pág. 218; BLANCO CORDERO, I., “La lucha contra el blanqueo de capitales procedentes de las actividades delictivas en el marco de la U.E.”, op. cit., pág. 18; id., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 223 y ss.

propia economía de mercado, a los que aquéllos están llamados a servir<sup>399</sup>. Teniendo presente que la estabilidad y el adecuado funcionamiento del sistema económico-financiero y de los mecanismos a través de los que aquél se articula dependen en buena medida de la confianza que en ellos tienen los diferentes operadores, la falta de confianza y credibilidad por parte de aquéllos en el conjunto del sistema, derivada de la proliferación de los procesos de reintegración de recursos de origen delictivo, puede incidir de forma considerablemente negativa en su estabilidad y en su correcto funcionamiento<sup>400</sup>. En definitiva, los procesos legitimadores pueden afectar negativamente a distintos aspectos del orden económico, bien individualmente considerados o a un conjunto de los mismos.

Constatada la nociva afección de los procesos de reciclaje de fondos de origen delictivo sobre diversos intereses socioeconómicos, y constituyendo éstos bienes jurídicos merecedores de protección penal -debido a la incuestionable incidencia que el funcionamiento desordenado de la actividad económica desplegaría sobre la sociedad en general y los individuos en particular-, podemos afirmar que el delito de blanqueo está llamado a proteger el orden socioeconómico. Como hemos visto, algunos autores han afirmado que es este un concepto demasiado ambiguo, difuso e inespecífico que impide que pueda ser considerado un bien jurídico objeto de tutela penal<sup>401</sup>. Toda vez que los comportamientos legitimadores pueden causar graves perjuicios en el sistema económico en su conjunto o en diferentes aspectos del mismo, no debería plantear mayor inconveniente hacer referencia al orden socioeconómico como bien jurídico si con esta expresión se alude a manifestaciones concretas de dicho orden. Tampoco ha de representar ningún problema el hecho de que los diferentes aspectos del orden económico tengan naturaleza inmaterial o colectiva, toda vez que el menoscabo de los mismos supone a su vez una potencial lesión de bienes jurídicos individuales<sup>402</sup>.

En definitiva, atendiendo a la afectación que comportan los actos de blanqueo sobre diversas manifestaciones del sistema económico -la estabilidad del sistema

---

<sup>399</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 212 y ss.; QUIRK, P. J., “El blanqueo de dinero: repercusiones macroeconómicas”, op. cit., pág. 192.

<sup>400</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 215.

<sup>401</sup> Vid. MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de Capitales”, 3ª ed., op. cit., pág. 481; id., *Derecho penal económico y de la empresa. Parte general*, op. cit., págs. 173 y ss.

<sup>402</sup> Vid. MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Los delitos de peligro en el derecho penal económico y empresarial”, *Un derecho penal comprometido: libro homenaje al Prof. Dr. Gerardo Landrove Díaz*. (VV. AA.) Francisco José Muñoz Conde (dir.), José Manuel Lorenzo Salgado (dir.), Juan Carlos Ferré Olivé (dir.), Emilio Cortés Bechiarelli (dir.), Miguel Ángel Núñez Paz (dir.). Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2011, pág. 800.

económico-financiero, la economía de mercado y el uso normalizado de los instrumentos y mecanismos legítimos al servicio del tráfico financiero y mercantil- y a la ubicación sistemática del tipo penal, es, a nuestro juicio, el orden socioeconómico el bien jurídico protegido que justifica la incriminación del blanqueo de capitales y a la luz del cual ha de ser interpretado el tipo penal.

Doctrina y jurisprudencia coinciden al afirmar que los comportamientos blanqueadores constituyen en esencia procesos de ocultamiento del origen o la naturaleza ilícita de los rendimientos de los delitos económicamente productivos, para facilitar su reintegración en el tráfico lícito y posibilitar así al agente, su disfrute de un modo jurídicamente incuestionado<sup>403</sup>. El denominador común de las diferentes modalidades de blanqueo está determinado por el propio fin que con ellas se persigue: facilitar la reincorporación de los bienes de procedencia delictiva en el mercado lícito. Como hemos constatado, dichas conductas pueden provocar perniciosos efectos en el tráfico legal y en el orden socioeconómico en general. Es de naturaleza económica, por tanto, el bien jurídico que se trata de proteger. Sin embargo ha de admitirse que algunas modalidades típicas, caracterizadas por su naturaleza encubridora o favorecedora, también pueden incidir negativamente en intereses relacionados con la administración de justicia. En efecto, en muchos supuestos una operación de blanqueo puede contribuir a la destrucción de elementos de prueba y a dificultar tanto la investigación en el marco del proceso por el delito previo como la persecución de los responsables y el resarcimiento de los daños a los perjudicados. Y no debemos olvidar que, asimismo, el reciclaje en general fomenta el mantenimiento de la actividad delincuencia, en tanto que constituye la culminación del ciclo productivo de los delitos lucrativos y genera rendimientos que posibilitan la financiación de nuevas actividades criminales, sobre todo en el ámbito de la delincuencia organizada. En este sentido, es posible afirmar que el delito de blanqueo de capitales también incide negativamente en la administración -en minúscula, como bien advierte MOLINA FERNÁNDEZ<sup>404</sup>- de justicia en materia penal. Podría considerarse entonces que si los intereses relacionados con ésta pueden verse afectados, la tipificación del delito de blanqueo proyecta sobre los mismos cierta

---

<sup>403</sup> Muy gráficamente se afirma en la STS 165/2013, de 26 de marzo, que la esencia del delito de blanqueo es la creación de estructuras ficticias por las que se hace circular el dinero de ilícita procedencia con la finalidad de conseguir una apariencia de licitud al borrarse su verdadero origen. Por ello, la opacidad de la verdadera actividad desarrollada, junto con una apariencia de normalidad de operaciones comerciales constituye la esencia de su dinámica comisiva.

<sup>404</sup> Vid. MOLINA FERNÁNDEZ, F., “¿Qué se protege en el delito de blanqueo de capitales?: reflexiones sobre un bien jurídico problemático, y a la vez aproximación a la participación en el delito”, op. cit., pág. 120.

protección, pero de manera mediata o indirecta: el interés principal tutelado, que legitima su tipificación como delito autónomo, y que dogmáticamente sirve de pauta para la correcta interpretación del tipo penal<sup>405</sup>, es, como se ha dicho, de naturaleza económica.

#### IV

Además de una función interpretativa<sup>406</sup>, hemos visto que el bien jurídico desempeña un papel crítico o legitimador de los tipos penales que permite rechazar la criminalización de aquéllas conductas que no supongan la afección de un verdadero interés merecedor de protección penal. La inexistencia de un interés a proteger permite conjeturar la ilegitimidad del tipo penal de que se trate. Acertadamente ha afirmado FABIÁN CAPARRÓS que a través del principio de lesividad<sup>407</sup> se materializa la función legitimadora del bien jurídico protegido en nuestro sistema penal, pues sus postulados permiten censurar el recurso a la sanción penal de un comportamiento que no lesione o ponga en peligro un interés merecedor del más alto grado de protección que confiere el Ordenamiento punitivo. De este modo, sólo podrá considerarse legítima la criminalización de una conducta si se constata, en primer lugar, que efectivamente existe un interés social con relevancia suficiente como para ser tutelado penalmente y, en segundo lugar, que el resto de las instancias de control social -jurídicas y no jurídicas- resultan ineficaces para proteger dicho interés<sup>408</sup>.

Constatada la afección de los comportamientos legitimadores a múltiples aspectos del orden socioeconómico, consideramos que la función crítica permite corroborar la legitimidad y la necesidad de la tipificación del delito de blanqueo. De conformidad con los principios de ofensividad y de intervención mínima, no sólo resulta acertada sino también necesaria la incriminación del tipo penal, dada la insuficiencia de otras instancias jurídicas para la tutela de los intereses económicos necesitados de protección<sup>409</sup>. La normativa administrativa, de eminente carácter preventivo, asocia sanciones al incumplimiento de las obligaciones que impone a los sujetos obligados. Sin

<sup>405</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 238.

<sup>406</sup> El bien jurídico constituye en este sentido un instrumento fundamental de interpretación teleológica de los tipos penales contenidos en la Parte Especial del Código Penal. (Vid. AMELUNG, K., “El concepto de «bien jurídico» en la teoría de la protección penal de bienes jurídicos”, op. cit., pág. 229).

<sup>407</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 166 y 167.

<sup>408</sup> Ibidem, pág. 219.

<sup>409</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 209; DONINI, M., “Principios constitucionales y sistema penal”, *Derecho penal del estado social y democrático de derecho. Libro homenaje a Santiago Mir Puig*. Diego Manuel Luzón Peña (dir.). Ed. La Ley. Madrid, 2010, pág. 94.

embargo dichas sanciones, de carácter pecuniario, resultan insuficientes para neutralizar un fenómeno tan nocivo como es el blanqueo de capitales. En primer lugar porque la eficacia de la norma preventiva aparece lógicamente limitada a determinados sujetos, y en segundo lugar, porque las sanciones económicas resultan claramente inefectivas, toda vez que permiten al agente evaluar comparativamente el riesgo y la rentabilidad inherentes a una concreta operación de blanqueo proyectada, y realizarla sólo cuando la considere provechosa, a pesar de la sanción que haya de soportar<sup>410</sup>.

Desde esta perspectiva, y de acuerdo con la interpretación que actualmente suscribe la doctrina especializada de forma prácticamente unánime, consideramos necesario el recurso a la amenaza penal para conminar las conductas legitimadoras a través de tipos específicos. La obstaculización eficaz de la reintroducción en el circuito económico legal de la riqueza derivada de actividades delictivas no puede servirse únicamente de una normativa de naturaleza administrativa. De este modo, desde un punto de vista político-criminal, la tipificación del delito de blanqueo no sólo está justificada, sino que resulta ineludible.

Con todo, no sólo la incriminación del delito de blanqueo ha de superar esta “prueba de legitimidad”. Ha de someterse asimismo a juicio crítico la concreta configuración típica que el legislador penal ha dado al delito previsto en el artículo 301 del texto punitivo, y determinar si cada una de las conductas expresamente previstas supone en todo caso la efectiva lesión o puesta en peligro del bien jurídico que se pretende tutelar. Se entiende sin especial dificultad que las conductas de adquisición, conversión o transmisión del bien de procedencia delictiva pueden afectar al orden socioeconómico, pues constituyen actos idóneos para hacer circular los bienes por los cauces económicos y, así, borrar su rastro delictivo y reincorporarlos al tráfico normalizado. Sin embargo, parece que las conductas introducidas en la reforma del año 2010 -posesión y utilización del bien ilícitamente obtenido- no suponen automáticamente la afección de intereses económicos. Dichas modalidades típicas, como acertadamente han señalado BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE y FABIÁN CAPARRÓS, constituyen más bien actos de disfrute o aprovechamiento<sup>411</sup>, no destinados a transformar los bienes o a hacerlos circular por el circuito económico legal para

---

<sup>410</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 209 y ss.; FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 230 y ss.

<sup>411</sup> Vid. BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I. / FABIÁN CAPARRÓS, E. A., “La emancipación del delito de blanqueo de capitales en el Derecho penal español”, op.cit., pág. 128.



difuminar su rastro de ilicitud. Piénsese en el tan manido ejemplo de la pareja del narcotraficante que utiliza el vehículo que aquél adquirió con fondos procedentes del tráfico de drogas, conociendo esta última circunstancia. Si bien, conforme a la actual redacción del precepto, la conducta tiene pleno encaje típico (utilización de un bien de origen delictivo, con conocimiento de su ilícita procedencia), no parece sin embargo sensato afirmar que estamos ante una conducta que lesione ninguna manifestación del orden socioeconómico, bien jurídico llamado a proteger por el tipo. En definitiva, no toda conducta que encaje en alguno de los comportamientos típicamente previstos ha de ser considerada automáticamente constitutiva de delito de blanqueo. Para desechar supuestos como el que se acaba de indicar, subsumibles formalmente en el tipo penal conforme a la literalidad del precepto pero desprovistos de un potencial lesivo relevante para el interés penalmente amparado, la función interpretativa del bien jurídico, junto con el principio de ofensividad, posibilitará la reducción teleológica de un tipo penal definido en términos tan amplios. Desde esta perspectiva, para afirmar que determinado comportamiento está dotado de trascendencia penal, además de constatar su adecuación al tipo -en todos los elementos que éste precisa-, será necesario verificar que aquél ocasiona la efectiva lesión o puesta en peligro del orden socioeconómico. Ello permitirá descartar, como penalmente irrelevantes, aquellos supuestos en los que no se constate la antijuridicidad material de la conducta por no incidir, siquiera mínimamente, en el referido orden, bien jurídico protegido por el tipo de blanqueo.

## **CAPÍTULO TERCERO. EL TIPO OBJETIVO EN EL DELITO BASICO DE BLANQUEO DE CAPITALS (I)**



### **3.1 INTRODUCCIÓN. PROBLEMÁTICA EN TORNO A LA DESCRIPCIÓN DE LAS CONDUCTAS TÍPICAS**

El artículo 301 del Código Penal, en sus números 1 y 2, prevé diversas conductas típicas a través de las cuales se configura el delito doloso de blanqueo. Además del tipo básico, objeto de este estudio, el número 1 del artículo 301 prevé en sus párrafos segundo y tercero sendos subtipos agravados o cualificados -a los que se asocia la aplicación de la pena en su mitad superior-, cuya razón de ser es la especial gravedad del delito previo o antecedente, aquél del que proceden los bienes sobre los que se opera (delitos de narcotráfico y aquellos otros comprendidos en los Capítulos V, VI, VII, VIII, IX y X del Título XIX y en el Capítulo I del Título XVI). En cuanto al tipo básico, el artículo 301.1 castiga, en su primer párrafo, a quien «adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos». Por su parte, el artículo 301.2 sanciona «la ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos, a sabiendas de que proceden de alguno de los delitos expresados en el apartado anterior o de un acto de participación en ellos».

Si bien en el seno de la doctrina son numerosos los aspectos relativos al delito de blanqueo objeto de discusión y profuso debate, unánimemente se censura el tratamiento normativo que el legislador ha dispensado al tipo. Con razón se ha calificado la estructuración y descripción de los distintos comportamientos que integran el artículo 301 de “turbulenta y tenebrosa”<sup>1</sup>, conformando un precepto de “confusa redacción”<sup>2</sup>, “caótica esquematización”<sup>3</sup> y “contornos imprecisos”<sup>4</sup>, plagado de referencias

---

<sup>1</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., pág. 91; id. “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., pág. 175.

<sup>2</sup> Vid. VIDALES RODRÍGUEZ, C., *Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código penal de 1995*, op. cit., pág. 95.

<sup>3</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 220.

<sup>4</sup> Vid. ÁLVAREZ-SALA WALTER, J., *El blanqueo de capitales y las profesiones jurídicas*, op. cit., pág. 9.

casuísticas y de “un exceso de palabras que da lugar a reiteraciones y superposiciones”<sup>5</sup> que genera “problemas hermenéuticos”<sup>6</sup> de “difícil solución”<sup>7</sup>. Se ha dicho, además, que la configuración del tipo penal no responde de manera eficiente a la conminación de un fenómeno tan complejo como es el blanqueo de capitales<sup>8</sup>.

Al margen del juicio que pueda merecer la técnica legislativa utilizada, el “maremágnum de combinaciones”<sup>9</sup> en que se estructura el tipo objeto de nuestro estudio ha provocado en la doctrina considerables discrepancias interpretativas respecto a cuáles son y bajo qué requisitos se configuran las diferentes modalidades conductuales que la norma incrimina. La amplia y ambigua descripción del precepto, que parece responder a los criterios omnicomprendivos asumidos internacionalmente<sup>10</sup>, conmina conductas tan diferenciadas entre sí que imposibilita una interpretación unitaria del delito e impide individualizar el denominador común<sup>11</sup> a todas ellas. El artículo 301.1 CP incorpora cinco comportamientos expresamente determinados<sup>12</sup> (*adquisición, posesión, utilización, conversión o transmisión* de bienes a sabiendas de que tienen origen en una actividad delictiva), y una conducta genérica, *realizar cualquier otro acto*, delimitada por las tres finalidades específicamente previstas en el precepto (*ocultar o encubrir* el origen ilícito de los bienes o *ayudar* al autor o partícipe del delito previo a eludir las consecuencias de sus actos). A lo largo de este tercer capítulo trataremos de precisar el contenido y la naturaleza de cada una de las modalidades comisivas previstas en el

---

<sup>5</sup> Vid. QUINTERO OLIVARES, G., *Comentarios a la Parte especial del Derecho penal*, op. cit., pág. 943. Una redacción típica, en definitiva, poco respetuosa con el mandato de determinación que incumbe a toda norma penal -en virtud del principio constitucional de legalidad penal-, por “la indefinición de las palabras y la utilización de cláusulas abiertas.” (Vid. SUÁREZ-MIRA RODRÍGUEZ, C., *Manual de Derecho penal*, op. cit., pág. 325). En términos críticos similares se han pronunciado CALDERÓN CEREZO (*Comentarios al Código penal*, vol. 3, op. cit. pág. 2295) y MARTÍNEZ DE SALINAS (“Últimas tendencias jurisprudenciales en materia de blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 32 y 33).

<sup>6</sup> Vid. ARIAS HOLGUÍN, D. P., *Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 243.

<sup>7</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 447.

<sup>8</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 241 y ss. El autor atribuye la deficiencia técnica que entraña este “desdichado precepto” a la “preocupante falta de iniciativa” del legislador de 1995, que, no de forma novedosa, ha trasladado casi literalmente al Código penal el texto de la Convención vienesa. Como resultado de esta dudosa técnica legislativa, la configuración penal del blanqueo, caracterizada por una combinación del “casuismo que distingue a los textos de inspiración anglosajona con la ambigüedad propia de los instrumentos internacionales que surgen a la vida jurídica con una neta vocación de universalidad”, resulta “ajena a nuestra cultura jurídica”. (Ibidem, págs. 350, 351, 359 y 360 *passim*).

<sup>9</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., pág. 93; id., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., pág. 177; FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 360.

<sup>10</sup> Vid. LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J./ALONSO GONZÁLEZ, A./ENCINAR DEL POZO, M. A., *Código Penal comentado con jurisprudencia sistematizada y concordancias*, op. cit., pág. 935.

<sup>11</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 275.

<sup>12</sup> Vid. CARPIO DELGADO, J. del, “La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 10.

primer ordinal del artículo 301, así como la relación que guardan las referidas conductas entre sí y respecto a aquella otra contenida en el número 2 de dicho artículo, la *ocultación o encubrimiento* de la verdadera naturaleza origen, ubicación, destino o derechos sobre bienes de origen delictivo.

En el segundo apartado de este capítulo abordemos en profundidad el análisis de las distintas modalidades comisivas que integran el artículo 301.1 CP. Comenzaremos ocupándonos de uno de los problemas interpretativos más complejos que origina la configuración típica del delito de blanqueo: el alcance de las finalidades específicamente previstas en el precepto (ocultar, encubrir o ayudar), sometiendo a debate si dichas finalidades van referidas únicamente a la modalidad indeterminada “realización de cualquier acto” o si, por el contrario, abarcan también a las conductas de adquisición, posesión, utilización, conversión o transmisión. Aunque autores de probada solvencia en la materia han aportado sugestivos argumentos a favor de la tesis que exige la verificación de las finalidades referidas en todas las formas comisivas, veremos sin embargo que la redacción del precepto apunta a la interpretación contraria: las finalidades específicamente previstas sólo son condición de tipicidad en la fórmula indeterminada consistente en la realización de cualquier acto.

Identificadas cada una de las modalidades comisivas en las que se estructura el tipo penal, se procederá a analizar en detalle de cada una de ellas, presentando especial atención a las nuevas modalidades de posesión y utilización, cuya tipificación, como veremos, no sólo no parece justificada, sino que distorsiona aún más la problemática estructura del tipo penal. En efecto, algunas de las conductas que integran el delito no poseen un potencial lesivo para los intereses socioeconómicos que, de conformidad con una concepción autónoma del tipo, son objeto de protección. Las modalidades de adquisición, conversión y transmisión de los bienes de origen delictivo parecen por sí solas estar dotadas de aptitud para incidir negativamente en los intereses tutelados, pues constituyen comportamientos jurídico-económicos sobre los bienes especialmente idóneos para hacerlos circular en el sistema económico<sup>13</sup>, eliminando su rastro delictivo, y posibilitando así, finalmente, su reincorporación al tráfico normalizado<sup>14</sup>. Sin embargo, los indeterminados actos dirigidos a la ocultación o encubrimiento del origen

---

<sup>13</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 280.

<sup>14</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., pág. 189.

o la naturaleza delictiva de los bienes, o a la ayuda al partícipe en el delito previo, más bien apuntan a mecanismos favorecedores que sólo bajo ciertas condiciones resultan eficaces para poner en riesgo los intereses económicos protegidos por el tipo. Y, como veremos, la virtualidad lesiva para dichos intereses de las nuevas conductas introducidas por la LO 5/2010, de 22 de junio, -la posesión y la utilización de los bienes de origen delictivo desvinculadas de cualquier finalidad- presenta aún mayores dudas. La falta de idoneidad de dichas conductas para enmascarar y reintroducir los fondos delictivos en los cauces económicos regulares despoja a las mismas de potencial lesivo para menoscabar los intereses de carácter económico llamados a ser protegidos por el tipo. Por ello, concluiremos, no encontramos justificada su incriminación.

Tras abordar en el tercer apartado de este capítulo el estudio de la modalidad comisiva prevista en el número 2 del artículo 301 CP y la problemática que ésta plantea, en un cuarto apartado nos ocuparemos con detalle de otra de las novedades más polémicas introducidas por la LO 5/2010: la punición expresa del autoblanqueo, figura especialmente perturbadora cuando va a asociada a las modalidades de posesión y utilización.

Se plantearán en un capítulo aparte, por motivos de extensión, otras cuestiones relativas al tipo objetivo. En el capítulo cuarto, en primer lugar se abordará el estudio de la imputación objetiva y de otras figuras dogmáticas de carácter normativo que permiten limitar el alcance de los tipos penales, indagando si por virtud de las mismas es posible reducir el excesivo ámbito típico que presenta el delito de blanqueo. En segundo lugar, nos ocuparemos del blanqueo omisivo, haciendo hincapié en la especial dificultad que presenta la fundamentación de su incriminación en este delito, y concluyendo que su punición sólo es posible en ciertas modalidades comisivas y bajo estrictos requisitos. Finalizaremos el estudio de la tipicidad objetiva con el análisis del objeto del delito (los bienes de procedencia delictiva) y de los diferentes problemas que en torno a aquél se plantean, prestando especial atención a la problemática surgida en torno a la cuota tributaria defraudada, y dando respuesta a una cuestión sobre la que en la actualidad no existe consenso alguno: ¿es posible que el delito fiscal pueda conformar el hecho delictivo previo del blanqueo?

Al ocuparnos de la evolución histórica del delito de blanqueo, tuvimos ocasión de comprobar que la redacción actual del artículo 301 no es plenamente coincidente con

el enunciado original dado al precepto por el legislador en el Código de 1995<sup>15</sup>. Las sucesivas modificaciones operadas en el artículo 301 CP han alterado aún más la ya de por sí compleja estructura original del tipo, incrementando las dificultades para interpretarlo de forma unitaria. Fruto de las distintas reformas operadas en el Código que han incidido en el artículo 301, el precepto acoge en la actualidad “un concepto de blanqueo desnaturalizado”<sup>16</sup>, que alcanza a criminalizar conductas de “dudoso merecimiento de pena”<sup>17</sup>. Como vimos, las sucesivas modificaciones del texto punitivo “son expresión de una constante evolución incriminadora del delito”<sup>18</sup>. Si hay una nota común que caracteriza a todas ellas, esta es la progresiva dilatación del ámbito de aplicación del tipo<sup>19</sup>. Especialmente perturbadora ha sido la reforma operada por virtud de la LO 5/2010, de 22 de junio, que ha incorporado al tipo dos nuevas modalidades de acción -la *posesión* y la *utilización*- y la previsión expresa del autoblanqueo. Con ello, no sólo se ha ampliado de forma desmedida el ámbito del delito, sino que también, como se ha dicho, se ha alterado profundamente su estructura típica, dificultando aún más la individualización de cada una de las formas comisivas que lo integran, así como con la determinación del contenido y el alcance de cada una de ellas.

La ambigua estructura que en la actualidad presenta el artículo 301 CP ha generado importantes controversias interpretativas fundamentalmente respecto a dos cuestiones. En primer lugar, se debate sobre cuál es *el tipo básico* del delito doloso de blanqueo: para algunos autores, dicho tipo básico está constituido por el número 2 del artículo 301 CP, de modo que los supuestos recogidos en el párrafo primero del artículo 301.1 no serían más que formas imperfectas de ejecución de la infracción prevista en el artículo 301.2 autónomamente tipificadas; para otros autores, en cambio, ambos números prevén sendas modalidades comisivas del tipo básico, que integra a todas ellas. Por otro lado, la estructura típica del artículo 301 CP ha conducido a la doctrina especializada a plantear otro interrogante, más controvertido y de mayor incidencia práctica: se discute si *las finalidades de ocultar o encubrir el origen ilícito del bien* que trata de legitimarse o *de ayudar a la persona que haya participado en la infracción o*

<sup>15</sup> Vid. *supra*, Capítulo II, apartado 2.1.2, págs. 125 y ss.

<sup>16</sup> Vid. VIDALES RODRÍGUEZ, C., “Blanqueo, ¿qué es blanqueo? (Estudio del artículo 301.1 del Código Penal Español tras la reforma de la LO 5/2010)”, op. cit., pág. 4.

<sup>17</sup> Vid. ROBLES PLANAS, R./PASTOR MUÑOZ, N., *Lecciones de Derecho Penal. Parte Especial*, op. cit., pág. 252.

<sup>18</sup> Vid. OLIVA GARCÍA, H., “La defensa ante la acusación por blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 23.

<sup>19</sup> Vid. CARPIO DELGADO, J. del, “La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 2; VIDALES RODRÍGUEZ, C., “Blanqueo, ¿qué es blanqueo? (Estudio del artículo 301.1 del Código Penal Español tras la reforma de la LO 5/2010)”, op. cit., págs. 2 y 4.



*infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos* van referidas únicamente a la *realización de cualquier acto*, o han de abarcar también a los actos de adquisición, posesión, utilización, conversión o transmisión de bienes. Al primer interrogante planteado trataremos de dar respuesta en el apartado dedicado al estudio del artículo 301.2 CP, y de la segunda cuestión nos ocuparemos a continuación.

## **3.2. CONDUCTAS TIPIFICADAS EN EL ARTÍCULO 301.1 CP**

### **3.2.1. INTERPRETACIONES RESTRICTIVA Y AMPLIA RESPECTO AL ALCANCE DE LAS FINALIDADES ESPECÍFICAMENTE PREVISTAS**

La confusa configuración del artículo 301.1 CP ha propiciado la aparición de un intenso debate doctrinal en torno al *alcance de las finalidades de ocultar o encubrir el origen ilícito del bien o ayudar a eludir las consecuencias legales* previstas en el precepto. Hemos visto que artículo 301.1 CP prevé, por un lado, cinco comportamientos específicos *-adquisición, posesión, utilización, conversión y transmisión de bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona-*; junto a éstos, se incluye una cláusula genérica (*realizar cualquier otro acto*) y, finalmente, “dos elementos de índole subjetiva o intencional”<sup>20</sup>, integrados por la locución “*para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos*”. Dada la ambigua redacción del precepto en este aspecto, se discute si las finalidades de ocultar, encubrir o ayudar van referidas únicamente a “cualquier acto”, o si abarcan también a los actos de adquisición, posesión, utilización, conversión y transmisión. La doctrina se divide así en dos posiciones enfrentadas sobre una cuestión que determina en gran medida el ámbito de aplicación del tipo penal.

#### **3.2.1.1. INTERPRETACIÓN AMPLIA**

Un importante sector de la doctrina<sup>21</sup> considera que en el artículo 301.1 CP quedan comprendidas dos modalidades típicas diferenciadas: por un lado, la

---

<sup>20</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 407.

<sup>21</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 222 y ss.; VIDALES RODRÍGUEZ, C., *Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código penal de 1995*, op. cit., págs. 96 y ss.; id., “Blanqueo, ¿qué es blanqueo? (Estudio del artículo 301.1 del Código Penal Español tras la

adquisición, posesión, utilización, conversión o transmisión de bienes, conociendo su origen delictivo -con independencia de las finalidades a que vayan dirigidas-; y por otro, la realización de cualquier acto sobre los bienes de ilícito origen con la intención de ocultar, encubrir o ayudar<sup>22</sup>. La tipicidad de las modalidades de acción expresamente tasadas en el precepto no está sujeta a la concurrencia de las finalidades expresamente previstas, cuya presencia sólo es precisa en la “realización de cualquier otro acto”.

---

reforma de la LO 5/2010”, op. cit., pág. 13; GÓMEZ INIESTA, D. J., *El delito de blanqueo de capitales en Derecho Español*, op. cit., págs. 48 y ss.; ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., pág. 101; id., “Ocultación de dinero procedente del narcotráfico en una caja de seguridad (Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo nº 155/2002, de 19 de febrero)”, *Revista de derecho y Criminología*, 2ª época, nº 13 (2004). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2004, págs. 319 y ss.; id., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., págs. 186 y 187; id., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 85; id., “La reforma penal española de 2010 sobre blanqueo, las nuevas técnicas de comisión delictiva y el uso de las telecomunicaciones para el blanqueo”, op. cit., pág. 175; id., “Blanqueo, innovaciones tecnológicas, amnistía fiscal de 2012 y reforma penal”, op. cit., pág. 36; id., “Jurisprudencia penal reciente sobre el blanqueo de dinero, volumen del fenómeno y evolución del delito en España”, op. cit., págs. 160 y ss.; MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de capitales”, 3ª ed., op. cit., pág. 490; ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 339; QUINTERO OLIVARES, G., *Comentarios a la Parte especial del Derecho penal*, op. cit., pág. 943; SUÁREZ-MIRA RODRÍGUEZ, C., *Manual de Derecho penal*, op. cit., pág. 324; MOLINA MANSILLA, M. C./MOLINA MANSILLA, L., *El blanqueo de dinero*, op. cit., págs. 21 y 22; ARIAS HOLGUÍN, D. P., *Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 251 y ss.; FERNÁNDEZ TERUELO, J. G., “Blanqueo de capitales”, op. cit., marginal 7375; GONZÁLEZ RUS, J. J., “Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico”, op. cit., pág. 639; DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, M., “El castigo del autoblanqueo en la reforma penal de 2010. La autoría y participación en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 289. Por su parte, BLANCO CORDERO se ha adherido a esta posición recientemente, y es la que refleja en la última edición de su importante monografía dedicada al delito de blanqueo de capitales. A su juicio, los cambios introducidos en el tipo de blanqueo por la LO 5/2010 conducen a esta interpretación, pues en caso contrario no se habrían incorporado como conductas diferenciadas la posesión y utilización. En todo caso, considera más acertado, en la línea interpretativa que mantuvo antes de la reforma del 2010, que todas las conductas específicamente previstas en el artículo 301.1 CP “se realizasen con las finalidades especificadas en el tipo”. (*El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 448, 505 y 506; id; “El delito fiscal como actividad delictiva previa del blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 42). En la segunda edición de su monografía -previa a la reforma-, BLANCO interpretaba el precepto en un sentido muy diferente: aunque mantenía que son varias las conductas sancionadas por el art. 301.1 -por un lado, la adquisición, la conversión y la transmisión de bienes de ilícito origen con objeto de ocultar o encubrir dicho origen o de ayudar al autor o partícipe a eludir las consecuencias legales de sus actos, y por otro, “la realización de cualquier otro acto sobre los bienes con los mismos objetivos”-, consideraba que realmente las primeras fácilmente podrían entenderse subsumidas en la segunda modalidad, de modo que ambas variantes se reducirían a una misma y única conducta típica: la realización de cualquier acto con las finalidades de ocultar, encubrir o ayudar. (*El Delito de Blanqueo de Capitales*, 2ª ed., op. cit., pág. 322). Conforme a dicha interpretación, la mención expresa de determinadas conductas tendría, por tanto, carácter meramente ejemplificativo. (Ibidem, pág. 340). En el mismo sentido restrictivo, id., *Negocios socialmente adecuados y delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 283.

<sup>22</sup> Algunos autores posicionados en defensa de esta tesis, partiendo de la distinción que delimita el favorecimiento real del favorecimiento personal, entienden que el artículo 301.1 realmente engloba tres formas comisivas, al desdoblar la realización de cualquier acto con determinados fines en dos modalidades de acción diferenciadas: por un lado, la realización de cualquier acto que persiga la finalidad de ocultar o encubrir el origen ilícito del bien, y por otro aquellos otros actos cuyo fin sea ayudar al partícipe en el delito previo a eludir las consecuencias jurídicas de aquel. (Vid. CALDERÓN CEREZO, A., “Algunos aspectos críticos del blanqueo de capitales. Legislación y jurisprudencial”, op. cit., págs. 75 y ss.; CARDONA TORRES, J., *Derecho Penal. Parte Especial*. Ed. Bosch, Barcelona, 2010, pág. 335). Esta distinción no tiene trascendencia a los efectos que aquí interesan, ya que desde esta interpretación se sostiene igualmente que los actos específicamente previstos son punibles con independencia de cuál sea la finalidad perseguida.

Según el sector doctrinal que se inclina por esta exégesis, a la que nos adherimos, otra interpretación violentaría la letra del precepto<sup>23</sup>. Se ha de añadir que una comprensión sistemática del mismo conduce a esta misma solución: como veremos, el número 3 del artículo 301 define el tipo de blanqueo imprudente a través de una escueta remisión a los hechos descritos en los números anteriores. Pues bien, si se interpreta que todas las conductas conformadoras del tipo básico previstas en el número 1 del precepto han de ir dirigidas a la consecución de las finalidades típicas, el conjunto de modalidades comisivas contenidas en él serían irreconciliables con el tipo imprudente de blanqueo, ya que éste es incompatible con conductas que incorporen a su estructura elementos subjetivos vinculados al dolo, como lo es la prosecución de las específicas finalidades legalmente previstas (ocultar, encubrir o ayudar). Sólo si se interpreta el precepto en el sentido de asociar los referidos propósitos exclusivamente con la modalidad de conducta “realización de cualquier otro acto”, los comportamientos específicamente previstos (adquisición, posesión, utilización, conversión y transmisión) podrían cometerse a título de imprudencia. A pesar de la deficiente técnica legislativa empleada en el número 3 del artículo 301, la doctrina y la jurisprudencia han interpretado mayoritariamente que el tipo imprudente puede ir referido tanto las conductas previstas en el número 2 del precepto como los comportamientos específicos contenidos en su número 1. Tampoco parece que la voluntad del legislador haya sido limitar la modalidad imprudente del blanqueo a la conducta prevista en el artículo 301.2 del Código, pues en este caso, el número 3 del precepto habría remitido exclusivamente al número 2 y no a todas las conductas conformadoras del tipo básico doloso.

Además de argumentos interpretativos semánticos, gramaticales y de orden sistemático, esta segunda exégesis se encuentra avalada por otros razonamientos oportunamente apuntados por ABEL SOUTO. De acuerdo con el monografista, carecería

---

<sup>23</sup> Vid. el minucioso análisis que realiza ABEL SOUTO de las razones gramaticales -bastante convincentes- que apuntan a esta interpretación. (*El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., págs. 95 y ss.). En sentido similar, vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C. *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 223; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 505 y 506, si bien este último autor considera que ambas modalidades típicas (los actos expresamente previstos y las conductas indeterminadas orientadas a las específicas finalidades) deberían haberse ordenado en números separados dentro del precepto. En sentido contrario, como veremos, CARPIO DELGADO entiende que una interpretación literal del precepto sólo permite entender que la mención a las conductas de adquisición, conversión o transmisión cumple una función indiciaria “sobre las características o naturaleza de todas aquellas conductas que se pretenden incluir dentro de “cualquier otro acto”. De tal forma que dentro de ésta modalidad solo es posible subsumir aquellas conductas que sean similares a la adquisición, conversión o transmisión.” (*El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal*, op. cit., pág. 169). Más recientemente, CARPIO ha reconocido que, dada la confusa redacción del precepto, también cabe la interpretación que denomina “amplia”. (“La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 17).

de sentido incluir en el artículo 301.1 conductas a título meramente ejemplificativo, “por cuanto que ya se subsumen en la realización de cualquier acto con los mentados fines”<sup>24</sup>. Por otro lado, de conformidad con una interpretación teleológica del precepto que tenga en cuenta la salvaguarda del bien jurídico que ha de ser tutelado, las acciones de adquisición, conversión o transmisión deben considerarse punibles con independencia de la finalidad pretendida por el blanqueador, ya que dichas conductas de por sí inciden en el bien jurídico protegido<sup>25</sup>. Tanto MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ como ABEL SOUTO consideran que la reforma del texto punitivo operada por la LO 5/2010, de 22 de junio, vendría a confirmar la tesis que suscriben, pues “la mención de dos nuevas modalidades específicas de acción, como la posesión y la utilización, cobra pleno sentido se si trata de modalidades tasadas dentro de un tipo que no requiere la constatación de finalidad alguna y que es independiente del segundo tipo que se describe”<sup>26</sup>. Por último, otros autores acuden a la normativa internacional que ha inspirado la regulación penal del blanqueo para considerar plenamente consolidada la interpretación que este sector doctrinal comparte. Así, ÁLVAREZ PASTOR/EGUIDAZU PALACIOS afirman que tanto la Convención de Naciones Unidas sobre drogas como la Directiva comunitaria 91/308 CEE no exigen propósito encubridor alguno en relación a la adquisición, tenencia y utilización de los fondos o bienes; la única exigencia presente en los instrumentos internacionales mencionados atañe al conocimiento de su ilícito origen<sup>27</sup>.

---

<sup>24</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., pág. 95.

<sup>25</sup> Esto es, afectan por sí solos, con independencia de la finalidad que persigan, a los bienes jurídicos que el delito de blanqueo trata de proteger. (Ibidem, pág. 100). Este argumento es plenamente compartido por VIDALES RODRÍGUEZ, para quien “razones de coherencia sistemática nos obliga a entender que (...) la adquisición, conversión y transmisión de bienes procedentes de la comisión de un delito ha de castigarse en todo caso; es decir, con independencia de cuál sea el fin que persiga el autor.” (*Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código penal de 1995*, op. cit., pág. 97).

<sup>26</sup> Vid. MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de capitales”, 3ª ed., op. cit., pág. 490. En el mismo sentido, ABEL SOUTO, M., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., págs. 85 y 86; id., “Blanqueo, innovaciones tecnológicas, amnistía fiscal de 2012 y reforma penal”, op. cit., págs. 36 y 37; id., “Volumen mundial del blanqueo de dinero, evolución del delito en España y jurisprudencia reciente sobre las últimas modificaciones del Código penal”, op. cit., págs. 32 y 33; id., “Jurisprudencia penal reciente sobre el blanqueo de dinero, volumen del fenómeno y evolución del delito en España”, op. cit., págs. 156 y 157; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 505.

<sup>27</sup> Vid. ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 340. Una interpretación contraria de la Convención de Viena y de la Directiva europea ha hecho BLANCO CORDERO, para quien de dichos textos “se deriva claramente que las conductas de conversión o transferencia han de realizarse con determinadas finalidades, no siendo punibles si éstas no concurren”. (*El Delito de Blanqueo de Capitales*, 2ª ed., op. cit., pág. 323). En un sentido similar interpreta DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO los textos internacionales aludidos. (*El delito de blanqueo de capitales en Derecho Español*, op. cit., pág. 16). Vid., asimismo, MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de capitales”, 3ª ed., op. cit., pág. 490; ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op.

La interpretación amplia, además de estar avalada por un considerable respaldo doctrinal, ha sido acogida por el Tribunal Supremo en multitud de sentencias. Hasta el año 2010, la lectura que del artículo 301.1 CP ha hecho el Tribunal Supremo ha apuntado de forma unánime a esta dirección, si bien desde ese año se han dictado algunas resoluciones en sentido discordante, como veremos a continuación. En cualquier caso, son numerosas las sentencias que desvinculan las finalidades de ocultar, encubrir o ayudar de las exigencias típicas que han de colmar las modalidades de conducta expresamente previstas en el precepto. En este sentido, en las Sentencias 120/2013, de 20 de febrero, 974/2012, de 5 de diciembre, 811/2012, de 30 de octubre, 151/2011, de 10 de marzo, 1012/ 2006, de 19 octubre, y 1113/2004, de 9 de octubre, entre otras muchas, la Sala Segunda ha dispuesto que artículo 301.1 CP describe distintas modalidades de conductas: por un lado, adquirir, convertir o transmitir bienes sabiendo que provienen de la realización de un delito; y por otro, realizar actos *dirigidos a* ocultar o encubrir ese origen, o ayudar a quien ha realizado el delito base a eludir las consecuencias de sus actos. En realidad, la tesis jurisprudencial que comentamos considera que el número 1 del precepto integra tres modalidades típicas, porque la que constituye la que para nosotros conforma segunda variante (realización de cualquier otro acto) es desdoblada en dos conductas diferenciadas: la realización de cualquier acto para ocultar o encubrir el origen delictivo de los bienes, supuestos que la Sala Segunda considera conductas propias de favorecimiento real; y la realización de cualquier otro acto para ayudar a quien realizó la infracción o delito base a eludir las consecuencias de sus actos, que conformarían supuestos específicos de encubrimiento personal (por todas, STS 974/2012, de 5 de diciembre). En cualquier caso, en lo que aquí interesa, las resoluciones indicadas consagran la interpretación amplia: la relevancia penal de los actos específicamente previstos sobre los bienes de origen delictivo no precisa la verificación de ninguna finalidad concreta. Por su parte, la jurisprudencia menor ha suscrito naturalmente los criterios interpretativos del Alto Tribunal, considerando que son tres las modalidades comisivas que integran el artículo 301.1 CP: adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes conociendo su procedencia delictiva; realizar actos dirigidos a ocultar o encubrir el ilícito origen del bien; y por último, realizar actos

---

cit., pág. 126; id., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., pág. 183; id., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 85.

dirigidos a ayudar al autor o partícipe en el delito base a eludir las consecuencias de sus actos<sup>28</sup>.

### 3.2.1.2. INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA

Son también numerosos los autores que se adscriben a la que, con CARPIO DELGADO, podríamos denominar “interpretación restrictiva”<sup>29</sup>, de acuerdo con la cual las finalidades de ocultar, encubrir o ayudar condicionan la tipicidad de todas las modalidades de acción expresamente previstas en el tipo penal<sup>30</sup>. Por virtud de esta exégesis, se estima que el artículo 301.1 entraña una única conducta típica: la realización de *cualquier acto* sobre los bienes procedentes de un delito con *finés de ocultación, encubrimiento* de su ilícito origen *o de ayuda al autor o partícipe en la infracción a eludir las consecuencias de sus actos*. La mención a los actos expresamente previstos en el precepto (adquisición, posesión, utilización, conversión o transmisión) tiene un carácter meramente ejemplificativo<sup>31</sup> o “indiciario sobre la naturaleza de los comportamientos susceptibles de ser englobados en la cláusula genérica «cualquier otro acto»”<sup>32</sup>. En definitiva, las conductas expresamente previstas

<sup>28</sup> Vid., por todas, SAN 47/2011, Sección 2ª, de 23 de noviembre; SAP Málaga 535/2013 (Caso Malaya), Sección 2ª, de 4 de octubre. Tomo 4º, págs. 108 y ss.

<sup>29</sup> Vid. CARPIO DELGADO, J. del, “La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 17.

<sup>30</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, págs. 360 y 361; PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 407-420; id., *Comentarios al Código Penal*, op. cit., págs. 360 y 361; CARPIO DELGADO, J. del, *El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal*, op. cit., pág. 167; id., “La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 11 y ss.; DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, J., *El delito de blanqueo de capitales en Derecho Español*, op. cit., pág. 16; id., “El blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 462 y 463; GÓMEZ BENÍTEZ, J. M., “Reflexiones técnicas y de política criminal sobre el delito de blanqueo de bienes”, op. cit., págs. 10 y ss.; ZARAGOZA AGUADO, J. A., “El blanqueo de bienes de origen criminal”, op. cit., pág. 378; id., “Aspectos probatorios y técnicas de investigación en los procesos por lavado de dinero: medidas preventivas y cautelares, recomendaciones internacionales”, op. cit., pág. 241; CALDERÓN CEREZO, A., *Comentarios al Código penal*, vol. 3, op. cit., pág. 2295; MUÑOZ CONDE, F., *Derecho Penal. Parte Especial*, op. cit., pág. 514; GALLEGU SOLER, J. I., *Comentarios al Código Penal. Reforma LO 5/2010*, op. cit., pág. 666; LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J./ALONSO GONZÁLEZ, A./ENCINAR DEL POZO, M. A., *Código Penal comentado con jurisprudencia sistematizada y concordancias*, op. cit., pág. 935; LOBO GONZÁLEZ, R./ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, M., *Código Penal. Parte especial. Tomo II. Vol. II*, op. cit., págs. 192, 193 y 200; MARTOS NÚÑEZ, J. A., “Receptación y blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 209 y 210; MANZANARES SAMANIEGO, J. L., *Código penal (adaptado a la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de julio). Comentarios y jurisprudencia*. Ed. Comares. Granada, 2010, pág. 726; BAJO FERNÁNDEZ, M./BACIGALUPO SAGESSE, S., “Blanqueo de capitales”, 2ª ed., op. cit., págs. 724 y 725; QUERALT JIMÉNEZ, J. J., *Derecho Penal Español. Parte Especial*, op. cit., pág. 1294; ALFONSO LASO, D. de, “La modificación del delito de blanqueo de capitales (arts. 301 y 302)”, op. cit., págs. 254 y ss.

<sup>31</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 367 y 379; PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 408; FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y TORRES, J., *Blanqueo de capitales y principio de lesividad*, op. cit., pág. 296.

<sup>32</sup> Vid. CARPIO DELGADO, J. del “La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 21; id., *El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal*, op. cit., pág. 169.

no son más que formas de alcanzar la ocultación, el encubrimiento o la ayuda, y también de aquéllas se exige que estén orientadas a las finalidades referidas. En esta línea, afirma GÓMEZ BENÍTEZ que si las conductas típicas contempladas en el precepto constituyen supuestos de favorecimiento real o personal, necesariamente habrán de ir dirigidas a las finalidades específicamente previstas, verdadero núcleo del tipo y al que confieren su especial caracterización favorecedora.<sup>33</sup> Según MARTOS NÚÑEZ, si todo acto de blanqueo tiene como meta conseguir que los bienes de origen delictivo ingresen en los circuitos económicos legítimos, bien impidiendo que se pueda detectar su origen o naturaleza, bien ayudando a los que se dedican a ello a que lo consigan, todos los comportamientos típicos que integran el delito de blanqueo pivotan en torno a las finalidades expresamente previstas en el precepto. Por tanto, para colmar la tipicidad de las conductas de adquisición, posesión, utilización, conversión o transmisión de los bienes, también éstas habrán de ir dirigidas a los fines de ocultar, encubrir o ayudar<sup>34</sup>. CARPIO DELGADO no sólo considera que todas las conductas que integran el artículo 301.1 CP han de ir dirigidas a las finalidades que el precepto menciona, sino que en la expresión “realización de cualquier otro acto” sólo pueden subsumirse “aquellas conductas que sean similares a la adquisición, conversión o transmisión”<sup>35</sup>. Para la monografista, es esta la lectura del precepto más coherente con la normativa nacional e internacional sobre el blanqueo<sup>36</sup>. Asimismo, dicha interpretación, que favorece a limitar la amplitud del ámbito de aplicación del tipo, “es necesaria, más que antes si cabe”, tras la incorporación al precepto de las conductas de posesión y utilización<sup>37</sup>.

No podemos compartir esta interpretación: aunque la reforma ha ampliado aún más el desmesurado campo de aplicación del tipo penal, a nuestro juicio no existen razones gramaticales ni sistemáticas<sup>38</sup> para alcanzar semejante conclusión. Es más, precisamente la reforma del Código de 2010, al incorporar dos nuevas modalidades de conducta (posesión y utilización), conduce a la exégesis contraria: en el caso de que el

---

<sup>33</sup> Vid. GÓMEZ BENÍTEZ, J. M., “Reflexiones técnicas y de política criminal sobre el delito de blanqueo de bienes”, op. cit., págs. 10 y ss.

<sup>34</sup> Vid. MARTOS NÚÑEZ, J. A., “Receptación y blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 209 y 210.

<sup>35</sup> Vid. CARPIO DELGADO, J. del, *El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal*, op. cit., pág. 169.

<sup>36</sup> Vid. ampliamente CARPIO DELGADO, J. del, “La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 11-17.

<sup>37</sup> Ibidem, pág. 11. Ello, afirma la autora, “sin dejar de aceptar que la interpretación amplia realizada por otro sector de la doctrina, también puede ser posible si tenemos en cuenta la deficiente técnica legislativa empleada en la configuración del tipo.” (Ibidem, pág. 17).

<sup>38</sup> Vid. ampliamente ABEL SOUTO, M., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., págs. 180 y ss.

legislador hubiera considerado que las finalidades específicas abarcan a los comportamientos expresamente previstos en el precepto, no habría estimado necesario incorporar al tipo penal dos nuevas conductas<sup>39</sup>, pues en todo caso habrían podido subsumirse en la fórmula “realización de cualquier otro acto”. Es obvio que la lectura del artículo 301.1 CP propuesta por los planteamientos “restrictivos” permite moderar el dilatado ámbito de aplicación del tipo; sin embargo, a nuestro juicio, como más adelante justificaremos, la limitación de este vasto campo aplicativo no ha de abordarse desde esta exégesis, sino a través de una interpretación teleológica del tipo que tenga fundamentalmente en cuenta la idoneidad de la conducta concreta para ocasionar un riesgo de lesión al bien jurídico protegido por el delito de blanqueo<sup>40</sup>.

Como hemos anticipado páginas atrás, si bien la Sala Segunda ha acogido mayoritariamente la interpretación amplia, desde el año 2010 la cuestión ha dejado de ser interpretada jurisprudencialmente de forma pacífica. Con el fin de restringir el ensanchamiento del ámbito del tipo ocasionado por la reforma de 2010, el Alto Tribunal ha desarrollado paralelamente una línea interpretativa distinta a la que hasta la Sentencia STS 1080/2010, de 20 de octubre, venía siendo jurisprudencia más que consolidada. La incorporación al tipo de las nuevas conductas de posesión y utilización y la previsión expresa del autoblanqueo parece haber motivado la aparición de la nueva exégesis, cuyo fin, como se admite expresamente en la STS 1080/2010, no es otro que “evitar interpretaciones desmesuradas del delito”. En dicha resolución se afirma que las finalidades que el precepto penal menciona, “ha(n) de estar presente(s) en todo acto de blanqueo. Incluyendo la adquisición, conversión o transmisión”. También en la Sentencia 942/2013, de 11 de diciembre, se consideró que todas las conductas típicas que conforman el artículo 301.1 CP han de estar presididas por la finalidad de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a los autores del delito a eludir las consecuencias de sus actos. Finalmente, en la STS 265/2015, de 29 de abril, se analiza la cuestión con más profundidad, concluyendo que “la finalidad de encubrir u ocultar la

---

<sup>39</sup> Vid. MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de capitales”, 3ª ed., op. cit., pág. 490; ABEL SOUTO, M., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., págs. 85 y 86; id., “Blanqueo, innovaciones tecnológicas, amnistía fiscal de 2012 y reforma penal”, op. cit., págs. 36 y 37.

<sup>40</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 81; id., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., págs. 185 y 186; id., “Volumen mundial del blanqueo de dinero, evolución del delito en España y jurisprudencia reciente sobre las últimas modificaciones del Código penal”, op. cit., pág. 30; id., “Jurisprudencia penal reciente sobre el blanqueo de dinero, volumen del fenómeno y evolución del delito en España”, op. cit., pág. 154; ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 244 y 245; ARIAS HOLGUÍN, D. P., *Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 221, 239 (nota a pie de página nº 34), 252 y ss., 290 y ss.



ilícita procedencia de los bienes o ayudar a los participantes del delito previo, constituye (...) un elemento esencial integrante de todas las conductas previstas en el art. 301.1 C.P.”; otra lectura del precepto “conduciría a una interpretación excesivamente amplia de la conducta típica, y a la imposibilidad de eludir la vulneración del principio "non bis in idem" en los supuestos de autoblanqueo”.

### **3.2.1.3. TOMA DE POSICIÓN. CONDUCTAS TÍPICAS QUE CONFORMAN EL DELITO DE BLANQUEO**

A nuestro juicio, el artículo 301.1 CP contiene dos formas comisivas diferenciadas: por un lado, cinco conductas expresamente previstas (la adquisición, la posesión, la utilización, la conversión y la transmisión de bienes, con conocimiento de su origen delictivo y con independencia de las finalidades a que vayan dirigidas) y, por otro, la realización de cualquier acto sobre los bienes de ilícito origen con la intención de ocultar, encubrir o ayudar. Dichas finalidades no constituyen exigencias típicas de las modalidades de conducta expresamente previstas en el precepto. Esta interpretación obedece no sólo a la propia redacción del artículo 301.1 CP; otros argumentos de orden sistemático (remisión del blanqueo imprudente a las modalidades contenidas en el número 1 del precepto) y la interpretación del mismo de acuerdo con la normativa internacional que inspiró la tipificación del delito conducen a esta exégesis. Asimismo, parece claro que la voluntad de legislador de 1995 al redactar el artículo 301.1 del Código fue desvincular las modalidades de acción expresamente previstas de las finalidades de ocultar, encubrir o ayudar. Sólo conforme a esta lectura del precepto tiene sentido que en la reforma de 2010 se hayan incorporado dos nuevas modalidades comisivas (posesión y utilización). Es evidente que si el legislador considerase que dichas conductas han de ir dirigidas en todo caso a las finalidades previstas, no las habría incorporado al precepto como modalidades diferenciadas, pues ya serían subsumibles en la fórmula “realización de cualquier otro acto”<sup>41</sup>.

---

<sup>41</sup> Vid. MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de capitales”, 3ª ed., op. cit., pág. 490; ABEL SOUTO, M., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., págs. 85 y 86; id., “Blanqueo, innovaciones tecnológicas, amnistía fiscal de 2012 y reforma penal”, op. cit., págs. 36 y 37; id., “Volumen mundial del blanqueo de dinero, evolución del delito en España y jurisprudencia reciente sobre las últimas modificaciones del Código penal”, op. cit., págs. 32 y 33; id., “Jurisprudencia penal reciente sobre el blanqueo de dinero, volumen del fenómeno y evolución del delito en España”, op. cit., págs. 156 y 157; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 505.

Son meritorios los esfuerzos desarrollados tanto por la doctrina como por la jurisprudencia para limitar el ámbito típico del delito de blanqueo, sin duda desmedido, si bien consideramos que las líneas argumentales esgrimidas con tan loable propósito no son las más acertadas. La incorporación al tipo de las dos conflictivas modalidades de conducta y del autoblanqueo no justifica la interpretación del precepto en un sentido, en nuestra modesta opinión, distinto al que su propia literalidad apunta y contrario a la voluntad del legislador. La restricción del ámbito objetivo del blanqueo ha de abordarse desde una interpretación teleológica del tipo que atienda, en el caso concreto, a la idoneidad de la conducta para ocasionar la efectiva lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido<sup>42</sup>. De acuerdo con esta idea, veremos más adelante, será posible excluir del ámbito de aplicación de la norma aquellas conductas que, por no ser idóneas para transformar los fondos delictivos o incorporarlos al circuito financiero normalizado<sup>43</sup>, no generen un peligro relevante para los intereses de carácter socioeconómico cuya tutela justifica la conminación penal del blanqueo. Con la misma finalidad de restringir la tipicidad del delito, también podrán ser invocadas otras soluciones dogmáticas propuestas por la doctrina especializada; así, la exclusión del ámbito típico de conductas que se consideren cotidianas, neutras o socialmente adecuadas (BLANCO CORDERO<sup>44</sup>), o la invocación del principio de insignificancia, apuntada por ARANGUEZ SÁNCHEZ y ABEL SOUTO, que descarta la tipicidad de aquellas conductas legitimadoras que no superen un umbral mínimo en cuanto a su cuantía que sea materialmente relevante<sup>45</sup>. Sobre estas categorías dogmáticas volveremos en el capítulo siguiente<sup>46</sup>.

En cualquier caso, en lo que aquí interesa, no son ni la interpretación restrictiva propuesta por algunos autores ni la línea jurisprudencial mantenida en las SSTS

---

<sup>42</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 81; id., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., págs. 185 y 186; ARANGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 244 y 245; ARIAS HOLGUÍN, D. P., *Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 221, 239 (nota a pie de página nº 34), 252 y ss., 290 y ss.

<sup>43</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, loc. cit.

<sup>44</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 493 y ss., 504 y 505; id., “El delito fiscal como actividad delictiva previa del blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 42.

<sup>45</sup> Vid. ARANGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 248 y 249. El principio de insignificancia permitiría incluso excluir, a juicio de ABEL, aquellos “actos básicos de consumo, prestaciones de servicios o ventas de mercancías en los negocios vitales cotidianos”. (“Volumen mundial del blanqueo de dinero, evolución del delito en España y jurisprudencia reciente sobre las últimas modificaciones del Código penal”, op. cit., pág. 36 ; id., “Jurisprudencia penal reciente sobre el blanqueo de dinero, volumen del fenómeno y evolución del delito en España”, op. cit., pág. 163).

<sup>46</sup> Vid. *infra*, Capítulo IV, apartados 4.1 (págs. 301 y ss.) y 4.3.2.1 (págs. 390 y ss.).

265/2015, de 29 de abril, y 1080/2010, de 20 de octubre, los instrumentos exegeticos más adecuados para limitar el desmesurado ámbito de aplicación del delito de blanqueo. Dicha limitación habrá de abordarse, insistimos, a través de la reducción teleológica del tipo conforme al bien jurídico. La finalidad perseguida por quien realice los comportamientos expresamente previstos no tiene incidencia en la aptitud de la conducta para menoscabar el bien jurídico. Que al adquirir, convertir o transmitir los bienes, el propósito del agente sea el de ocultar, encubrir o ayudar es irrelevante a estos efectos. Sí lo es, en cambio, la idoneidad de dichas conductas para activar un proceso de integración, transformación o reconversión de los bienes de procedencia delictiva, contribuyendo así a darles apariencia de licitud, y facilitando su incorporación al tráfico económico normalizado. Y dicha idoneidad habrá de examinarse desde una perspectiva eminentemente objetiva, que tenga presente la capacidad de la conducta para crear una ocasión de riesgo en el bien jurídico. En este sentido, parece claro que los actos recientemente incorporados al tipo de posesión y utilización, así como muchos de los supuestos de autoblanqueo -especialmente cuando éste vaya asociado a dichas conductas- constituyen más bien actos de disfrute o aprovechamiento<sup>47</sup>, no idóneos para transformar o reconvertir los bienes de procedencia delictiva o para promover su incorporación al tráfico legal, y en este sentido deberán considerarse atípicos por no incidir en el bien jurídico protegido. La cuestión será tratada con más profundidad al estudiar las distintas modalidades de conducta.

De acuerdo con lo que hasta aquí se ha expuesto, y sumándonos a la interpretación amplia asumida por gran parte de la doctrina, a nuestro juicio el artículo 301.1 CP se estructura en dos formas de conducta<sup>48</sup> diferenciadas:

1. La adquisición, posesión, utilización, conversión o transmisión de bienes de origen delictivo, conociendo su ilícita procedencia, con independencia de cuál sea la finalidad perseguida<sup>49</sup>.

---

<sup>47</sup> Vid. BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I. /FABIÁN CAPARRÓS, E. A., “La emancipación del delito de blanqueo de capitales en el Derecho penal español”, op. cit., pág. 128.

<sup>48</sup> Como se ha podido observar, a lo largo de este capítulo se ha empleado la expresión “conducta” o “comportamiento” para referirnos a los diversas modalidades comisivas en las que el delito de blanqueo puede manifestarse. Hemos considerado conveniente utilizar estas expresiones en vez de la de “actos” -quizá más expresiva-, pues aquéllas son comprensivas tanto de comportamientos activos como omisivos. Con posterioridad, en el apartado 4.2 del capítulo IV, tendremos oportunidad de pronunciarnos sobre la admisibilidad del blanqueo omisivo en cada una de las diferentes formas comisivas en que puede presentarse el tipo de blanqueo.

2. La realización de “cualquier otro acto” sobre el bien *dirigido a* ocultar o encubrir su origen delictivo, o a ayudar a aquel que haya participado en el delito del cual procede el bien o los bienes a eludir las consecuencias jurídicas de aquel.

El tipo básico de blanqueo de capitales doloso se conforma por las dos formas comisivas que integran el artículo 301.1, y por la modalidad prevista en el artículo 301.2 CP. En los próximos apartados de este capítulo analizaremos con detalle cada una de ellas.

### **3.2.2. LA ADQUISICIÓN, POSESIÓN, UTILIZACIÓN, CONVERSIÓN O TRANSMISIÓN DE BIENES DE ORIGEN DELICTIVO**

Tal y como han apuntado diferentes autores, este primer elenco de conductas expresamente previstas conforman un tipo mixto alternativo<sup>49</sup>, de modo que “la presencia de cualquiera de los (...) comportamientos da lugar al delito de blanqueo”<sup>51</sup>, y realización de más de uno de ellos resulta penalmente irrelevante<sup>52</sup>. También la jurisprudencia considera que se comete un único hecho delictivo en aquellos supuestos en los que un mismo sujeto realice una pluralidad de conductas de reconversión de fondos delictivos con el mismo fin legitimador. Teniendo en cuenta que desde la perspectiva fenomenológica el blanqueo de capitales suele conformar un proceso<sup>53</sup>, que normalmente se desarrolla a través de diversos actos dirigidos a dotar de apariencia legítima a capitales de origen delictivo para facilitar su incorporación al tráfico jurídico-

---

<sup>49</sup> La bibliografía manejada publicada con anterioridad a la entrada en vigor de la LO 5/2010 -que incorpora, como sabemos, las conductas de posesión y utilización-, al referirse al elenco de conductas expresamente tipificadas, únicamente menciona la adquisición, la conversión y la transmisión de bienes de origen delictivo. Con objeto de facilitar la exposición, al referirnos al catálogo de conductas expresamente previstas habrán de considerarse integradas las dos nuevas modalidades -posesión y utilización- aunque expresamente no sean mencionadas en el texto original de las obras.

<sup>50</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 429; ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 221; ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., pág. 102; id., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., pág. 187; MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de capitales”, 3ª ed., op. cit., pág. 490; CALDERÓN CEREZO, A., “Algunos aspectos críticos del blanqueo de capitales. Legislación y jurisprudencia”, op. cit., pág. 76; id., *Comentarios al Código penal*, vol. 3, op. cit., pág. 2295; ALFONSO LASO, D. de, “La modificación del delito de blanqueo de capitales (arts. 301 y 302)”, op. cit., pág. 256; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 449; LORENZO SALGADO, J. M., “El tipo agravado de blanqueo cuando los bienes tengan su origen en el delito de tráfico de drogas”, op. cit., pág. 224.

<sup>51</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, loc. cit.

<sup>52</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, loc. cit.; ABEL SOUTO, M., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., pág. 188; BAJO FERNÁNDEZ, M./BACIGALUPO SAGESSE, S., “Blanqueo de capitales”, 2ª ed., op. cit., pág. 724.

<sup>53</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 378 y 379.

económico, la Sala Segunda ha rechazado la aplicación figuras concursales y del delito continuado en el delito de blanqueo en estos supuestos. En la STS 974/2012, de 5 de diciembre, se afirma que el blanqueo se configura como uno de los “tipos que incluyen conceptos globales”<sup>54</sup>, en los que “una variedad de acciones punibles de contenido semejante cometidas por el mismo sujeto constituyen no un delito continuado, sino una sola infracción penal (SSTS 519/2002 de 22.3, 986/2004 de 13.9, 413/2008 de 20.6). (...) No existen varios delitos por el hecho a que se hayan producido varios actos de adquisición, conversión o transmisión de bienes. En general se niega la posibilidad de la continuidad delictiva. Incluso cuando la actividad se ha desarrollado durante un largo lapso de tiempo”<sup>55</sup>.

Como hemos visto, la incorporación de dos nuevas conductas típicas al artículo 301.1 CP -la posesión y la utilización de bienes de origen delictivo- a través de la Ley Orgánica 5/2010 ha incrementado de forma considerable el ámbito de aplicación del tipo. La nueva formulación ha sido ampliamente criticada por la doctrina, pues se ha

---

<sup>54</sup> De acuerdo con dicha Sentencia, “en la construcción de los correspondientes tipos penales el legislador a veces utiliza conceptos globales, es decir, expresiones que abarcan tanto una sola acción prohibida como varias del mismo tenor, de modo que con una sola de ellas ya queda perfeccionado el delito y su repetición no implica otro delito a añadir. Así ocurre con el delito del art. 301 CP que se refiere al que adquiera, convierta o transmita “bienes (apartado 1º) la ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos... (apartado 2), o con el delito del art. 368 CP. cuando nos habla de “actos de cultivo, elaboración o tráfico” en relación con las sustancias estupefacientes, o cuando el art. 325, al definir los delitos contra el medio ambiente, nos habla de emisiones, vertidos, radiaciones, etc.”.

<sup>55</sup> Se afirma en la Sentencia 974/2012 que “la previsión típica en plural del término “actos” obliga a considerar que una pluralidad de ellos queda abarcada en el propio tipo penal. Ello obliga a considerar integrados en el tipo, como delito único, la pluralidad de conductas homogéneas que, de otro modo, habrían de constituir un delito continuado (...), salvo que el Tribunal sentenciador explique razonadamente la presencia de una suficiente separación temporal, un plan preconcebido o el aprovechamiento de una idéntica ocasión que justifiquen la apreciación de la continuidad delictiva.” De acuerdo con la SAP Málaga 179/2013 (Sección 2ª), de 16 de abril, se ha de tener en cuenta si las diversas acciones típicas se han realizado persiguiendo el mismo fin legitimador (lo que entrañaría una unidad típica de acción, que entrañaría un único delito de blanqueo aun cuando se haya desarrollado durante un largo lapso de tiempo) o si se han desarrollado en contextos espacio-temporales delimitados y diferenciados. En la STS 487/2014, de 9 de junio, que resuelve el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia 179/2013 de la Audiencia de Málaga, se aclara que han de diferenciarse los supuestos de delito continuado de aquellos otros integradores de una unidad típica de acción. Ésta existirá “cuando varios actos son unificados como objeto único de valoración jurídica por el tipo penal. De forma que varios actos que contemplados aisladamente colman las exigencias de un tipo de injusto se valoran por el derecho desde un punto de vista unitario”. En el caso del delito de blanqueo, en el que la redacción típica se refiere a “actos” o “acciones” en plural y no en singular, el tenor literal de la norma permite tanto “apreciar las diferentes acciones como una unidad referida a un concepto global del supuesto fáctico de la norma (unidad típica de acción concebida como un único delito), o como la unidad jurídica propia del delito continuado (la unidad típica agravada propia del art. 74 del C. Penal). (...) Los argumentos que se han vertido relativos al fraccionamiento connatural a las conductas propias del art. 301 del C. Penal, así como la vinculación fáctica y jurídica con algunos de los delitos antecedentes más habituales en la práctica, como el tráfico de drogas, con una notable similitud en la estructuración de sus conductas, y, por último, los criterios axiológicos relacionados con la intensificación del injusto en los diferentes grupos de delitos y la exigible proporcionalidad de las penas, atendiendo para ello a las connotaciones de ocultación y encubrimiento de otros delitos que alberga en su esencia el delito de blanqueo, nos llevan a entender que este delito contempla una pluralidad de actos que han de ser concebidos como la unidad de valoración típica propia de un único delito no continuado”.

considerado -incluso por el propio Consejo General del Poder Judicial, en su preceptivo Informe previo a la reforma- que los nuevos comportamientos tipificados no resultan actos propiamente de blanqueo si no se realizan con las finalidades específicamente previstas (ocultar, encubrir o ayudar)<sup>56</sup>, concluyéndose que cuando las dos nuevas conductas no van dirigidas a la consecución de dichas finalidades, resulta “dudoso” que sean merecedoras de conminación penal<sup>57</sup>.

En cualquier caso, adelantando cuestiones que veremos con detalle al estudiar el tipo subjetivo, ya apuntamos que, de acuerdo con el precepto, en cada uno de los comportamientos específicamente previstos resulta imprescindible que el agente tenga conocimiento de la irregular procedencia del bien, si bien no resulta necesaria la presencia de ánimo de lucro, ni propio ni ajeno<sup>58</sup>, ni que se persiga ningún propósito concreto más allá del fin último del propio blanqueo (reintegrar en los circuitos económicos normalizados los fondos ilícitos)<sup>59</sup>.

Pasemos a continuación a analizar cada una de las conductas expresamente previstas en el artículo 301.1 del Código.

### **3.2.2.1. ADQUISICIÓN DE BIENES DE ORIGEN DELICTIVO**

En el ámbito jurídico general, la adquisición de un bien implica la incorporación del mismo a un patrimonio, ya sea a título oneroso o gratuito, o a través de prescripción<sup>60</sup>. Con respecto al delito de blanqueo de capitales, podemos considerar que la adquisición supone la incorporación de un bien procedente de una actividad delictiva al patrimonio del sujeto activo. La doctrina interpreta en general esta modalidad típica en términos ciertamente amplios. Así, PALMA HERRERA ha considerado que la

---

<sup>56</sup> Vid. BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I./FABIÁN CAPARRÓS, E. A., “La emancipación del delito de blanqueo de capitales en el Derecho penal español”, op. cit., págs. 128 y 129; CASTRO MORENO, A., “Reflexiones críticas sobre las nuevas conductas de posesión y utilización en el delito de blanqueo de capitales en la reforma del anteproyecto de 2008”, op. cit., pág. 1388.

<sup>57</sup> Vid. ROBLES PLANAS, R./ PASTOR MUÑOZ, N., *Lecciones de Derecho Penal. Parte Especial*, op. cit., pág. 252.

<sup>58</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., págs. 129 y 188.

<sup>59</sup> Para facilitar la comprensión de la exposición consideramos conveniente expresar aquí estas cuestiones que pertenecen al ámbito de la tipicidad subjetiva, y que, como tales, se desarrollarán con detalle en la parte de este trabajo a ello dedicado (vid. *infra* Capítulo V, apartados 5.1 y 5.2 (págs. 427 y ss.).

<sup>60</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., pág. 190; ARIAS HOLGUÍN, D. P., *Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 265.

adquisición supone “la obtención de la propiedad de un bien o la titularidad de un derecho (...) por cualquiera de las formas que señala el Código Civil”<sup>61</sup>. Tanto el referido monografista como otros distinguidos autores en la materia han coincidido en que la adquisición puede ser tanto onerosa como a título gratuito<sup>62</sup>.

Con todo, dada la amplitud<sup>63</sup> del concepto de adquisición, algunos autores han propuesto fórmulas interpretativas para reducir el ámbito de aplicación de esta modalidad comisiva. En este sentido, ABEL SOUTO ha afirmado que es preciso que la adquisición produzca en el patrimonio del blanqueador un incremento económico: “nos hallamos ante la obtención del dominio sobre los bienes ilícitos o la consecución de su disponibilidad plena y no, simplemente, en cualquier grado”<sup>64</sup>. En esta misma dirección interpretativa, la jurisprudencia ha afirmado que lo relevante para la apreciación de esta modalidad delictiva es que se produzca en el patrimonio del agente un incremento patrimonial (STS 534/2014, de 27 de junio). BLANCO CORDERO considera necesario delimitar la definición de la adquisición de acuerdo con criterios civilistas, pero basada esencialmente en “una interpretación teleológica de los tipos penales”<sup>65</sup>. De acuerdo con esta idea, la adquisición consistiría en el ingreso de los derechos sobre los bienes de origen delictivo en el patrimonio del sujeto activo, entre los cuales se incluyen tanto el derecho de propiedad como otros derechos reales, pero no la mera posesión<sup>66</sup>. En esta línea, la doctrina penal ha rechazado de manera generalizada la posesión como forma de adquisición. Ya antes de la incorporación de la posesión como conducta típica

<sup>61</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 425.

<sup>62</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 225. Advierte el autor, no obstante, que la adquisición abarca un amplísimo conjunto de situaciones, “algunas de ellas quizá no merecedoras de una respuesta penal tan severa”. Vid., asimismo, DIAZ MAROTO Y VILLAREJO, J., *El delito de blanqueo de capitales en Derecho Español*, op. cit., pág. 17; GÓMEZ INIESTA, D. J., *El delito de blanqueo de capitales en Derecho Español*, op. cit., pág. 49; VIDALES RODRÍGUEZ, *Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código penal de 1995*, op. cit., pág. 99; PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, loc. cit.; ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., págs. 109 y 110; id., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., pág. 195; ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 341; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 452. Plantea dudas respecto a la tipicidad de las adquisiciones a título gratuito ARIAS HOLGUÍN, D. P., *Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 270-272. En contra de la interpretación mayoritaria, afirman que la punibilidad de la adquisición exige en todo caso contraprestación MORENO CANOVÉS, A./RUIZ MARCO, F., *Delitos socioeconómicos*, op. cit., pág. 387; MOLINA MANSILLA, M. C./MOLINA MANSILLA, L., *El blanqueo de dinero*, op. cit., pág. 23; CALDERÓN CEREZO, A., “El marco jurídico del blanqueo de capitales: aspectos penales y administrativos”, op. cit., pág. 5.

<sup>63</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 449.

<sup>64</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., págs. 191 y 192. Vid., en sentido contrario, PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 423; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 451 y 452.

<sup>65</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 450.

<sup>66</sup> Ibidem, págs. 451, 453 y 454.

específica, se afirmaba que la adquisición, como modalidad comisiva de blanqueo, en ningún caso abarcaba a la mera posesión fáctica del bien<sup>67</sup>. Diversos autores consideraron que el Código Penal de 1995 había despenalizado esta conducta, al no contener el nuevo texto punitivo una conducta anteriormente prevista de manera expresa (en el artículo 344 del Texto refundido de 1973) como comportamiento diferenciado a la adquisición<sup>68</sup>. En cualquier caso, tras la reforma del Código vigente operada por la LO 5/2010, de 22 de junio, la posesión se desvincula definitivamente de la adquisición<sup>69</sup>, si bien el legislador opta por incluir esta conducta como modalidad comisiva autónoma, al tipificarla expresamente<sup>70</sup>. Del análisis de esta problemática modalidad típica y de la oportunidad de su tipificación como modalidad autónoma de acción nos ocuparemos unas páginas más adelante<sup>71</sup>.

### **3.2.2.2. CONVERSIÓN DE BIENES DE ORIGEN DELICTIVO**

La conversión hace referencia a la transformación de los bienes de procedencia ilícita en activos de cualquier otro tipo, o su transmutación en otros<sup>72</sup> de distinta<sup>73</sup> o de

---

<sup>67</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 422; ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 225; ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., págs. 105 y 106; id., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., pág. 192; id., “La reforma penal española de 2010 sobre blanqueo, las nuevas técnicas de comisión delictiva y el uso de las telecomunicaciones para el blanqueo”, op. cit., pág. 176; id., “Jurisprudencia penal reciente sobre el blanqueo de dinero, volumen del fenómeno y evolución del delito en España”, op. cit., pág. 160; MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de capitales”, 3ª ed., op. cit., pág. 490; ARIAS HOLGUÍN, D. P., *Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 270. En sentido contrario, CARPIO DELGADO, J. del, *El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal*, op. cit., págs. 171 y ss.; MORENO CANOVÉS, A./RUIZ MARCO, F., *Delitos socioeconómicos*, op. cit., pág. 387.

<sup>68</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 422; ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., pág. 107; id., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., págs. 193 y 194.

<sup>69</sup> Vid. ARIAS HOLGUÍN, D. P., *Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 269, nota a pie de página nº 93; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 454.

<sup>70</sup> Ello implica que las conductas de mera posesión de capitales o bienes de ilícito origen cometidas antes de la entrada en vigor de la LO 5/2010 no pueden considerarse en ningún caso subsumibles en el art. 301.1 CP, siempre que, como advierte CALDERÓN CEREZO, la posesión no tenga por objeto la propia ocultación o encubrimiento del bien. (“El marco jurídico del blanqueo de capitales: aspectos penales y administrativos”, op. cit., pág. 6). En cualquier caso, nos recuerda el autor que de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Segunda, hasta la entrada en vigor de la Ley de reforma del Código penal, no era punible -como conducta de adquisición- “la posesión injustificada de bienes cuyo origen no pueda referirse a un delito previo (...). Los incrementos no justificados de patrimonio constituyen presunción a efectos sólo tributarios, (...) pero no sirven de prueba en el proceso penal para presumir otro tanto en cuanto al blanqueo se refiere por ser ello contrario a la presunción constitucional de inocencia (Sentencias (...) TS 14.07.2000 y 09.05.2001)”.

<sup>71</sup> Vid. *infra* apartado 3.2.2.4 de este capítulo (págs. 232 y ss.).

<sup>72</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 225.

<sup>73</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., pág. 112; id., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., pág. 198.



la misma naturaleza<sup>74</sup>. Para algunos autores, la conversión representa el paradigma de la conducta blanqueadora<sup>75</sup> y, en su amplia significación, permite dar cabida a la más variada gama de conductas. La conversión puede ir referida tanto a bienes no fungibles (v. gr. la conversión de joyas robadas en lingotes de oro) como fungibles, supuesto más habitual (así, la transformación del precio obtenido por el rescate de un secuestro en divisas). Asimismo, la mutación puede ser reversible (v. gr. la transformación de efectivo procedente de un delito en un documento cambiario) o irreversible (la fundición de una reliquia hurtada de la que se obtiene oro). Cabe, en fin, tanto la conversión material (como ocurre con el cambio físico de billetes de alto valor obtenidos con el narcotráfico por otros más pequeños) como la inmaterial (sustanciada fundamentalmente a través de operaciones bancarias y financieras), que es la que más relevancia adquiere tanto por su incidencia en la práctica<sup>76</sup> como por su efectividad para enmascarar el origen ilícito de los bienes. Mencionan ABEL SOUTO y BLANCO CORDERO, como modalidades habituales de conversión inmaterial, la admisión de ingresos de efectivo a través de un cajero en cuentas bancarias (el efectivo es convertido en un crédito contra la cuenta o en un apunte contable), la conversión de fondos delictivos en inmuebles o negocios en los que se opera con continuos movimientos de metálico (a través de su adquisición), las inversiones en activos, joyas y obras de arte, las operaciones de cambio de moneda y las compensaciones internacionales<sup>77</sup>.

Habitualmente las operaciones de blanqueo no se conforman a través de una sola conversión. En muchas ocasiones, especialmente cuando la actividad blanqueadora se materializa a través de operaciones financieras y bancarias, aquélla tiene lugar mediante

---

<sup>74</sup> En efecto, como ha ilustrado PALMA HERRERA, cabe la posibilidad de que un bien de determinada naturaleza -pensemos en el dinero, de naturaleza monetaria, líquida y fungible- se convierta “en algo con una naturaleza completamente distinta como es un asiento contable, un activo financiero, o una cuota de capital social”. Sin embargo, también son habituales, y constituirían supuestos de conversión aquellos casos en los que el bien mantiene la misma naturaleza. En el ejemplo propuesto (dinero), ello ocurriría a través de “la transformación de un asiento contable en otro asiento contable, de una moneda en otra distinta, de billetes grandes por billetes pequeños, de una joya en otra para que sea irreconocible, etc.”. (*Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 429).

<sup>75</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 226; ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., pág. 116; id., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., pág. 202; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 454.

<sup>76</sup> Vid. MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de capitales”, 3ª ed., op. cit., pág. 490; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 457.

<sup>77</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., págs. 200 y 201; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 457.

sucesivas transformaciones o sustituciones de los bienes o activos de origen ilícito<sup>78</sup>. En estos casos, la efectividad y el éxito de la concreta operación se debe habitualmente a su articulación a través de complejos esquemas que combinan sucesivas operaciones de transformación de los fondos en cadena<sup>79</sup>.

Como hemos dicho, la conversión como tipología de blanqueo se define en términos muy amplios<sup>80</sup>, de tal modo que en esta modalidad típica van a tener cabida gran variedad de conductas, incluso aquéllas que se ejecutan a través de operaciones que *a priori* revisten los caracteres propios de un acto transmisión pero que al no intervenir un tercero, no pueden considerarse propiamente como tales. La previsión típica de la conversión resulta particularmente útil para sancionar aquellos supuestos en los que el enmascaramiento del ilícito origen de los fondos o bienes no tiene lugar mediante su puesta en circulación en el tráfico, sino a través de actos jurídicos o económicos unilaterales sin cambio de titularidad (*v. gr.*, cuando el titular de determinado depósito situado en una cuenta bancaria que figura a su nombre, lo transfiere a cuentas en el extranjero, de las que también es titular, y que allí es convertido en depósitos a plazo puestos a su nombre)<sup>81</sup>.

### **3.2.2.3. TRANSMISIÓN DE BIENES DE ORIGEN DELICTIVO**

La transmisión es la *operación opuesta a la adquisición*<sup>82</sup>. En el ámbito del blanqueo, supone la extracción del patrimonio del blanqueador de determinados fondos

---

<sup>78</sup> Vid. ARIAS HOLGUÍN, D. P., *Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 272.

<sup>79</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., pág. 199; id., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., pág. 113. Reproduce el monografista el ilustrativo ejemplo propuesto por ARÁNGUEZ: el dinero obtenido por una organización criminal es convertido a un asiento contable en un banco, transformándose ésta en un cheque de ventanilla, que a su vez es cambiado por un pagaré con el que finalmente se adquieren acciones al portador. (Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, loc. cit.).

<sup>80</sup> Vid. ARIAS HOLGUÍN, D. P., *Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 272.

<sup>81</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 226; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 458.

<sup>82</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 426; ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 227; MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de capitales”, 3ª ed., op. cit., pág. 491; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 460. Como afirma ABEL SOUTO, la transmisión viene a ser el “reverso” de la adquisición”, de modo que “ambas conductas representan los dos extremos de un mismo desplazamiento patrimonial.” (“Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., pág. 205).

o bienes de origen delictivo para integrarlos en el patrimonio de un tercero<sup>83</sup>. Al igual que ocurre en la adquisición y la conversión, la variedad de operaciones a través de las que la transmisión de activos de origen delictivo puede manifestarse es realmente amplio<sup>84</sup>. Así, dicha transmisión puede tener lugar mediante cualquier forma de transferencia, cesión o traspaso<sup>85</sup> a través de cualquier título, ya sea oneroso o gratuito<sup>86</sup>. Incluso las transmisiones *mortis causa* serían, a juicio de ABEL SOUTO, subsumibles en el tipo, toda vez que el heredero que adquiere bienes de origen delictivo a través de la correspondiente herencia realizará la conducta típica aceptando la herencia si conoce el ilícito origen de aquéllos. Tal y como advierte el monografista, no son pocas las ocasiones en las que los testamentos se instrumentalizan para justificar ciertas titularidades<sup>87</sup>. Por otro lado, la transmisión no necesariamente ha de ser material o fáctica: puede aquélla consistir también en una transmisión jurídica mediante el cambio en la titularidad de cierto derecho sin implicar un desplazamiento fáctico del bien sobre el que recae el derecho<sup>88</sup>, como ocurre con las transferencias electrónicas. Precisamente la naturaleza de este medio de transmisión ha generado cierta polémica en el seno de la doctrina: si para BLANCO CORDERO supone un supuesto de transmisión, aún entre cuentas pertenecientes a un mismo titular<sup>89</sup>, actualmente se rechaza con carácter general en esta última hipótesis. En efecto, cuando ambas cuentas -ordenante y beneficiaria- pertenezcan a un mismo titular o alguna de ellas esté a nombre de sociedades instrumentales que haya podido crear aquél, la transferencia no se considerará un acto de transmisión, pues la misma no implica un traslado real del dominio o de la disponibilidad de los fondos: una vez verificada la operación, el dinero de origen delictivo permanecerá situado en el patrimonio del autor del delito<sup>90</sup>. En estos casos, de

<sup>83</sup> Vid. ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 342; ARIAS HOLGUÍN, D. P., *Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 276.

<sup>84</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, loc. cit.

<sup>85</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 227; ABEL SOUTO, M., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., pág. 205; MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de capitales”, 3ª ed., op. cit., pág. 490.

<sup>86</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 425; ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., loc. cit.; ARIAS HOLGUÍN, D. P., *Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 277; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 461.

<sup>87</sup> De hecho, constata ABEL que “frente a las investigaciones sobre inexplicables incrementos patrimoniales se repite demasiado la alegación de que tales bienes traen causa de una herencia”. (“Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., págs. 206 y 207).

<sup>88</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 227.

<sup>89</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 2ª ed., op. cit., pág. 338; id., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 458.

<sup>90</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 427; ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 342.

acuerdo con la doctrina mayoritaria, estaremos ante un supuesto de conversión, pues la transmisión precisa un traslado dominical del dinero o del bien de procedencia delictiva, esto es, un cambio de titularidad sobre el bien<sup>91</sup>. En cualquier caso, con acierto ha apuntado ABEL SOUTO que, en aquellos casos en los que no quepa probar la existencia de una transmisión, ésta podrá ser fácilmente reconducida a la modalidad de conversión<sup>92</sup>.

Consideramos, con CARPIO DELGADO, que la consumación de un acto de transmisión no precisa necesariamente el traslado material de los bienes a la esfera fáctica del adquirente. Basta con que éste adquiera un poder de disposición sobre los bienes o activos a través de la efectiva transmisión jurídica<sup>93</sup>. Sin embargo, no compartimos con la autora referida la idea de que el mero desplazamiento material del bien, sin cambio de titularidad, sea constitutivo de transmisión<sup>94</sup>. Estos supuestos -v. gr. los correos que trasladan físicamente maletas llenas de billetes, o las transferencias realizadas entre cuentas de un mismo titular- no constituyen a nuestro juicio actos de transmisión, si bien podrán reconducirse a la modalidad típica de conversión o, en su caso, a la conducta consistente en la “realización de cualquier otro acto” cuando sea posible acreditar la concurrencia de alguna de las finalidades previstas en el precepto (encubrir, ocultar o ayudar) en el ánimo del sujeto<sup>95</sup>. Por último, entendemos, junto a ABEL SOUTO, que quedan abarcados, como supuestos típicos de transmisión, aquellos casos en los que el agente transmitente, por el motivo jurídico-real de que se trate, no ostente la verdadera propiedad del bien ilícito, sino su mera posesión<sup>96</sup>.

---

<sup>91</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 426 y 427; ABEL SOUTO, M., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., págs. 205, 207 y 208; MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de capitales”, 3ª ed., op. cit., pág. 490.

<sup>92</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., págs. 113 y 121; id., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., pág. 199.

<sup>93</sup> Vid. CARPIO DELGADO, J. del, *El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal*, op. cit., págs. 188 y 189. En el mismo sentido, vid. ABEL SOUTO, M., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., pág. 206.

<sup>94</sup> Vid. CARPIO DELGADO, J. del, *El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal*, op. cit., págs. 185 y 186. En sentido contrario, ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., págs. 120 y 121; id., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., pág. 207; ARIAS HOLGUÍN, D. P., *Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 277.

<sup>95</sup> Ibidem. Vid. en este mismo sentido, MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de capitales”, 3ª ed., op. cit., pág. 491; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 461 y 462.

<sup>96</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., pág. 119.

#### **3.2.2.4. POSESIÓN Y UTILIZACIÓN DE BIENES DE ORIGEN DELICTIVO**

La incorporación de las dos nuevas modalidades típicas de conducta -la *posesión* y la *utilización* de los bienes de origen delictivo- por virtud de la LO 5/2010, de 22 de junio, es quizá el aspecto de la reforma operada en el tipo de blanqueo de capitales que mayores críticas doctrinales ha recibido. Como ha destacado ABEL SOUTO, la posesión y la utilización ya se consideraban conductas punibles antes de la reforma de 2010 cuando se realizaban con las finalidades de ocultar, encubrir o ayudar. Por virtud de la LO 5/2010, han sido recientemente integradas en el tipo, sin embargo, como modalidades de conducta autónomas, desconectadas de finalidades específicas<sup>97</sup>. Como veremos, la punición de las conductas recientemente incorporadas al precepto, así caracterizadas, no sólo no está justificada, sino que es merecedora de las más severas críticas.

En su momento, la doctrina consideró acertado que legislador de 1995 despenalizase las conductas de posesión y utilización, por su dudosa compatibilidad con los principios constitucionales y los conceptos fundamentales que informan a nuestro ordenamiento jurídico<sup>98</sup>. Como vimos, el artículo 344 bis i), integrado en el entonces vigente Código penal de 1973 por la Ley Orgánica 8/1992, sancionaba la adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de recibirlos, de que los mismos proceden del delito antecedente (tráfico de drogas). La reciente reincorporación

---

<sup>97</sup> Ello de acuerdo con la interpretación amplia que hemos mantenido respecto a la estructuración de las diferentes modalidades comisivas que integran el tipo penal. (Vid. *supra*, apartado 3.2.1.3 de este capítulo, págs. 220 y ss.). Cfr., asimismo, ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., págs. 95 y ss.; id., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., pág. 192; id., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 85; id., “La reforma penal española de 2010 sobre blanqueo, las nuevas técnicas de comisión delictiva y el uso de las telecomunicaciones para el blanqueo”, op. cit., pág. 175; id., “Volumen mundial del blanqueo de dinero, evolución del delito en España y jurisprudencia reciente sobre las últimas modificaciones del Código penal”, op. cit., págs. 31 y 32; id., “Jurisprudencia penal reciente sobre el blanqueo de dinero, volumen del fenómeno y evolución del delito en España”, op. cit., pág. 156; CALDERÓN CERREZO, A., “El marco jurídico del blanqueo de capitales: aspectos penales y administrativos”, op. cit., pág. 6; CARPIO DELGADO, J. del, “La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 21; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 469 y 470.

<sup>98</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 244; GÓMEZ INIESTA, D. J., *El delito de blanqueo de capitales en Derecho Español*, op. cit., págs. 52 y 53; VIDALES RODRÍGUEZ, C., *Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código penal de 1995*, op. cit., pág. 98; ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., págs. 107 y 108; id., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., págs. 193 y 194; id., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 82; MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de capitales”, 3ª ed., op. cit., pág. 488; CASTRO MORENO, A., “Reflexiones críticas sobre las nuevas conductas de posesión y utilización en el delito de blanqueo de capitales en la reforma del anteproyecto de 2008”, op. cit., pág. 1388; CARPIO DELGADO, J. del, “La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 20; MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Receptación y blanqueo de capitales (arts. 301 y 302)”, op. cit., pág. 342; id., “Ganancias criminales y ganancias no declaradas (El desbordamiento del delito fiscal y del blanqueo)”, op. cit., pág. 661; id., “Un matrimonio de conveniencia: blanqueo de capitales y delito fiscal”, op. cit., pág. 20.

de la posesión y la utilización al texto punitivo como conductas objetivas<sup>99</sup>, desvinculadas a ninguna finalidad, se ha considerado como “un claro retroceso”<sup>100</sup> o “una vuelta atrás”<sup>101</sup>, sobre todo si tenemos en cuenta que, a diferencia de lo que ocurría en el Código de 1973, ahora cualquier tipo penal puede constituir delito previo<sup>102</sup>. Asimismo, si el antiguo artículo 344 bis i) contenía una limitación de carácter subjetivo a la conducta típica (sólo se incriminaba la adquisición, posesión o utilización del bien cuando se conocía su procedencia delictiva en el momento de recibirlos), la redacción actual del artículo 301.1 CP no contiene ninguna cláusula restrictiva similar, de tal forma que, como ha advertido ABEL SOUTO, encontrarían encaje en el tipo aquellos supuestos en los que el agente adquiere un conocimiento sobrevenido del origen delictivo de los bienes. De acuerdo con la literalidad del precepto, en estos casos “la simple continuación en el estado posesorio o uso ya [sería] subsumible en el tipo”<sup>103</sup>.

A pesar de las dificultades dogmáticas que presenta la incriminación de las nuevas conductas como modalidades blanqueadoras autónomas y desvinculadas de cualquier finalidad, el principio de vigencia de la norma<sup>104</sup> nos obliga, como punto de partida, a considerarlas integradas en el tipo penal. Ha de advertirse, sin embargo, que, si se atiende exclusivamente a la literalidad del precepto, serán penalmente relevantes aquellos comportamientos consistentes en la sola posesión o la utilización de un bien que se sabe o se puede suponer (dolo eventual) que procede de un delito<sup>105</sup>, o incluso aquellos casos en los que no se conoce el origen ilícito por la infracción del deber de cuidado (imprudencia grave), a través del tipo imprudente de blanqueo<sup>106</sup>.

---

<sup>99</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 85.

<sup>100</sup> Vid. MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Receptación y blanqueo de capitales (arts. 301 y 302)”, loc. cit.; id., “Ganancias criminales y ganancias no declaradas (El desbordamiento del delito fiscal y del blanqueo)”, op. cit., pág. 669; id., “Un matrimonio de conveniencia: blanqueo de capitales y delito fiscal”, loc. cit.

<sup>101</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 434.

<sup>102</sup> Vid. MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Receptación y blanqueo de capitales (arts. 301 y 302)”, op. cit., pág. 342.

<sup>103</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 84. Asimismo, BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 472.

<sup>104</sup> Vid. CARPIO DELGADO, J. del, “La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 23.

<sup>105</sup> Vid. QUINTERO OLIVARES, G., “Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil”, op. cit., pág. 12.

<sup>106</sup> Toda vez que, como veremos, el tipo imprudente de blanqueo también extiende su ámbito de aplicación a las modalidades comisivas previstas en el artículo 301.1 CP. Cuando ni siquiera medie imprudencia grave en la posesión o en la utilización de los activos de procedencia delictiva, será de aplicación la figura de la **participación a título lucrativo** (también conocida como “receptación civil”), prevista en el artículo 122 CP para aquéllos supuestos en los que el partícipe haya participado, a título lucrativo, en los efectos de un delito, desconociendo su origen ilícito, y cuya consecuencia jurídica pasa por la restitución del bien o el resarcimiento

Acertadamente ha dicho ARIAS HOLGUÍN que la determinación del contenido específico y de los límites del ámbito típico de las conductas de posesión y utilización -en realidad, de cualquier modalidad típica- “no puede provenir exclusivamente de la interpretación gramatical” del precepto<sup>107</sup>. Será preciso, como veremos, tener presentes el principio de lesividad y determinados criterios dogmáticos que contribuyen a limitar el dilatado ámbito típico de cara a excluir comportamientos que no resultan “propiamente de blanqueo”<sup>108</sup> por no ser aptos o idóneos para transformar los bienes o para hacerlos circular en los cauces económicos normalizados con objeto de difuminar su rastro de ilicitud.

Como hemos visto, la doctrina ha censurado enérgicamente la incorporación al texto legal de las nuevas modalidades típicas de posesión y utilización, máxime teniendo en cuenta que ni los Instrumentos internacionales (art. 3 del Convenio de Viena; art. 6 de la Convención de Nueva York contra la Delincuencia Organizada Internacional) ni el marco jurídico europeo (Convenio del Consejo de Europa de Estrasburgo de 1990, Directivas 91/308/CEE y 2005/60/CE) obligaban al legislador de 2010 a incriminar dichas conductas como comportamientos típicos autónomos<sup>109</sup>. A través de cláusulas de reserva constitucional, en los referidos textos se dispensaba a los Estados vinculados de la obligación de penalizarlas cuando ello fuera contrario a los principios constitucionales y conceptos jurídicos básicos internos de cada Estado<sup>110</sup>.

---

del daño hasta la cuantía de su participación. (Vid. FERNÁNDEZ ROS, J. F., *Algunas notas sobre la Reforma del Código Penal sobre el comiso y el blanqueo de capitales*, op. cit.; QUINTERO OLIVARES, G., “Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil”, op. cit., págs. 15 y ss.).

<sup>107</sup> Vid. ARIAS HOLGUÍN, D. P., *Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 279.

<sup>108</sup> Vid. CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Comisión de Estudios e Informes), Informe al anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, de 18 de febrero de 2009, op. cit., pág. 20; MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Receptación y blanqueo de capitales (arts. 301 y 302)”, op. cit., págs. 342 y 343; id., “Prevención y sanción del blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 378; id., “Un matrimonio de conveniencia: blanqueo de capitales y delito fiscal”, op. cit., pág. 21; MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de capitales”, 3ª ed., op. cit., pág. 489.

<sup>109</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 465 y ss., 471 y 472. Quizá si fue determinante, advierte BLANCO, el contenido del Informe del GAFI de 2006, que, a la luz de la evaluación sobre la acomodación de la legislación española a sus recomendaciones, propuso que España tipificara de manera expresa las conductas de posesión y utilización.

<sup>110</sup> Vid. MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Receptación y blanqueo de capitales (arts. 301 y 302)”, op. cit., pág. 340; id., “Prevención y sanción del blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 372; ABEL SOUTO, M., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., págs. 83- 85; id., “La reforma penal española de 2010 sobre blanqueo, las nuevas técnicas de comisión delictiva y el uso de las telecomunicaciones para el blanqueo”, op. cit., pág. 174; id., “Volumen mundial del blanqueo de dinero, evolución del delito en España y jurisprudencia reciente sobre las últimas modificaciones del Código penal”, op. cit., pág. 31; id., “Jurisprudencia penal reciente sobre el blanqueo de dinero, volumen del fenómeno y evolución del delito en España”, op. cit., págs. 155 y 156; MORILLAS CUEVA, L., “Aspectos dogmáticos y político-criminales del delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 104; FERNÁNDEZ TERUELO, J. G., “El nuevo modelo de reacción penal frente al blanqueo de capitales (los nuevos tipos de blanqueo, la ampliación

Pasemos a continuación a analizar separadamente las modalidades típicas objeto de estudio en este apartado.

**La posesión** hace referencia a la mera detentación<sup>111</sup> o disponibilidad fáctica<sup>112</sup> de los bienes o activos de procedencia delictiva, ello con independencia de que se tenga o no derecho a su tenencia<sup>113</sup>. La doctrina desde hace tiempo viene en general excluyendo la mera posesión como forma de adquisición<sup>114</sup>, pues no supone la incorporación de los bienes o activos ilícitos al patrimonio del blanqueador, no determina una posición de dominio de éste sobre aquéllos ni le beneficia con incremento patrimonial alguno<sup>115</sup>. La incorporación de la posesión al texto punitivo como nueva modalidad típica confirma esta interpretación que distingue claramente la conducta de la mera posesión del bien delictivo y la adquisición del mismo<sup>116</sup>.

Habitualmente se identifica la actividad de los testaferros como supuesto paradigmático del comportamiento consistente en la mera posesión. En efecto, la función de “los hombres de paja”<sup>117</sup>, con frecuencia utilizados en operaciones de blanqueo, no es otra que la tenencia de los bienes delictivos en “depósito o

---

del comiso y la integración del blanqueo en el modelo de responsabilidad penal de las empresas)”, op. cit., pág. 7; CASTRO MORENO, A., “Reflexiones críticas sobre las nuevas conductas de posesión y utilización en el delito de blanqueo de capitales en la reforma del anteproyecto de 2008”, op. cit., págs. 1388 y 1389.

<sup>111</sup> Vid. GALLEGU SOLER, J. I., *Comentarios al Código Penal. Reforma LO 5/2010*, op. cit., pág. 666; CORCOY BIDASOLO, M., “Crisis de las garantías constitucionales a partir de las reformas penales y de su interpretación por los tribunales”, op. cit., pág. 168.

<sup>112</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 88; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 477-480.

<sup>113</sup> Vid. MATA LLÍN EVANGELIO, A., “El “autoblanqueo” de capitales”, op. cit., págs. 24 y 25.

<sup>114</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 422; ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 225; ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., págs. 105 y 106; id., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., pág. 192; id., “La reforma penal española de 2010 sobre blanqueo, las nuevas técnicas de comisión delictiva y el uso de las telecomunicaciones para el blanqueo”, op. cit., pág. 176; id., “Jurisprudencia penal reciente sobre el blanqueo de dinero, volumen del fenómeno y evolución del delito en España”, op. cit., pág. 160; MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de capitales”, 3ª ed., op. cit., pág. 490; ARIAS HOLGUÍN, D. P., *Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 270. En sentido contrario, vid. CARPIO DELGADO, J. del, *El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal*, op. cit., págs. 171 y ss.; MORENO CANOVÉS, A./RUIZ MARCO, F., *Delitos socioeconómicos*, op. cit., pág. 387.

<sup>115</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., págs. 106 y 107.; id., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., págs. 192 y 193; id., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 86; id., “Volumen mundial del blanqueo de dinero, evolución del delito en España y jurisprudencia reciente sobre las últimas modificaciones del Código penal”, op. cit., pág. 34; id., “Jurisprudencia penal reciente sobre el blanqueo de dinero, volumen del fenómeno y evolución del delito en España”, op. cit., pág. 159.

<sup>116</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 474.

<sup>117</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., “La reforma penal española de 2010 sobre blanqueo, las nuevas técnicas de comisión delictiva y el uso de las telecomunicaciones para el blanqueo”, op. cit., pág. 176; id., “Jurisprudencia penal reciente sobre el blanqueo de dinero, volumen del fenómeno y evolución del delito en España”, op. cit., pág. 159.



administración”, “como meros guardianes de los mismos”<sup>118</sup>. La participación de testaferros en procesos de blanqueo, no obstante, era ya sancionable, antes de la conminación expresa de la posesión, a través de la cláusula genérica *realización de cualquier otro acto* para ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes, o para ayudar a los partícipes en el delito previo a eludir las consecuencias legales del mismo. Sin embargo, para la incriminación de tales conductas era necesario acreditar la presencia en el ánimo del testaferro de las finalidades típicamente previstas, “prueba de la que el legislador de 2010 libera” mediante la incriminación de la mera posesión como conducta autónoma<sup>119</sup>. Para BLANCO los testaferros no serían más que “servidores de la posesión”, que, si bien detentan física y materialmente un bien de origen delictivo, carecen de la disponibilidad o capacidad decisoria sobre el mismo. No son, en definitiva, auténticos poseedores. Por ello, para el monografista la conducta tanto de los testaferros como de quienes, en general, se limiten a la mera tenencia material de los bienes -sin una efectiva disponibilidad sobre los mismos- no hallaría encaje en la modalidad comisiva de la posesión, si bien podría reconducirse a la amplia fórmula de realizar cualquier otro acto con las finalidades típicas<sup>120</sup>.

Adviértase -como hace CASTRO MORENO- que, en cualquier caso, la posesión del bien de procedencia delictiva es siempre consustancial a la propia conducta del delito subyacente: “no es ni siquiera un acto de agotamiento de los efectos del delito (como podría ser la utilización), sino que forma parte del propio comportamiento”<sup>121</sup>. Si una persona, por ejemplo, hurta un bien, “obviamente posee la cosa hurtada”; asimismo, es evidente que conocerá su origen ilícito. Por ello, conforme a la literalidad del precepto, colmará tanto los elementos objetivos como subjetivos del tipo<sup>122</sup>. Esta situación, para el autor del delito previo, deriva siempre en un concurso entre el delito de blanqueo (por la mera posesión del bien) y el delito previo del que procede. Asimismo, respecto a

---

<sup>118</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 88.

<sup>119</sup> También otros supuestos de mera posesión, como la detentación de activos delictivos en cajas de seguridad, su desplazamiento material de un lugar a otro (correos o mulas), eran reconducibles antes de la reforma de 2010 a otras modalidades típicas de blanqueo. La incorporación de la mera posesión, sin asociarse a finalidad o propósito alguno, facilita enormemente el castigo de estos supuestos, al liberar de la carga de acreditar elementos típicos que en ocasiones presentan especiales dificultades probatorias. (Ibidem., págs. 89 y 90).

<sup>120</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 480-482.

<sup>121</sup> Vid. CASTRO MORENO, A., “Reflexiones críticas sobre las nuevas conductas de posesión y utilización en el delito de blanqueo de capitales en la reforma del anteproyecto de 2008”, op. cit., pág. 1390. En sentido similar, vid. CARPIO DELGADO, J. del, “La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 23 y 24.

<sup>122</sup> Vid. CASTRO MORENO, A., “Reflexiones críticas sobre las nuevas conductas de posesión y utilización en el delito de blanqueo de capitales en la reforma del anteproyecto de 2008”, loc. cit.

terceros no intervinientes como autores o partícipes en el delito previo, la posesión del bien planteará difíciles problemas concursales entre el blanqueo y las conductas previstas en el artículo 298.1 CP -el poseedor del bien de origen ilícito colmaría la acción típica de receptación al recibir los bienes, si lo hace con ánimo de lucro- o con el encubrimiento del artículo 451.1 CP -si, en ausencia de ánimo de lucro, actuase con fines favorecedores-<sup>123</sup>. También la mera posesión provoca problemas concursales con la participación a título lucrativo de los efectos del delito (artículo 122 CP) en aquellos casos en los que el poseedor del bien desconozca su origen delictivo sin que medie imprudencia grave<sup>124</sup>.

Por su parte, **la utilización** es concebida por MATALLÍN EVANGELIO como el aprovechamiento del bien, esto es, emplearlo útilmente “o sacarle el máximo rendimiento”<sup>125</sup>. ABEL SOUTO otorga a la nueva modalidad de conducta un significado residual, conceptuándola como el “uso o empleo de bienes delictivos que no implique un cambio de titularidad, en el sentido que exigen la adquisición y transmisión, una mutación de naturaleza, como requiere la conversión, una posesión sancionable, una ocultación o encubrimiento efectivo y que no se incluya en la realización de indeterminados actos para ocultar, encubrir o auxiliar”<sup>126</sup>. Para algunos autores, la incorporación de la utilización al elenco de comportamientos expresamente previstos persigue “acabar con la impunidad de los actos neutros de consumo”<sup>127</sup>, si bien su mayor virtualidad reside en salvar los obstáculos probatorios que presentan otros comportamientos típicos, pues, en los casos problemáticos, “basta con constatar una utilización de bienes con el mero conocimiento de su origen delictivo” para conferir a la conducta la pretendida relevancia penal<sup>128</sup>. Sin embargo, como acertadamente afirma

<sup>123</sup> Ibidem. En el mismo sentido, vid. CARPIO DELGADO, J. del, “La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 24.

<sup>124</sup> Vid. en este sentido, MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Receptación y blanqueo de capitales (arts. 301 y 302)”, op. cit., pág. 343; id., “Un matrimonio de conveniencia: blanqueo de capitales y delito fiscal”, op. cit., págs. 21 y 22.

<sup>125</sup> Vid. MATALLÍN EVANGELIO, A., “El “autoblanqueo” de capitales”, op. cit., pág. 32.

<sup>126</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 92. En sentido similar, DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, J., “El blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 463.

<sup>127</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, loc. cit. Vid. asimismo ALFONSO LASO, D. de, “La modificación del delito de blanqueo de capitales (arts. 301 y 302)”, op. cit., pág. 256.

<sup>128</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., págs. 92 y 93; id., “La reforma penal española de 2010 sobre blanqueo, las nuevas técnicas de comisión delictiva y el uso de las telecomunicaciones para el blanqueo”, op. cit., pág. 177; id., “Jurisprudencia penal reciente sobre el blanqueo de dinero, volumen del fenómeno y evolución del delito en España”, op. cit., pág. 162. Téngase en cuenta, advierte MATALLÍN, que la utilización de los bienes puede realizarse de muy variadas formas -tanto usándolo conforme a destino como realizando otras conductas dirigidas a obtener el

ABEL, tan vasto campo aplicativo ha de reducirse a partir de una interpretación teleológica del tipo, que vincule la utilización de los bienes o fondos delictivos con la finalidad de reintroducirlos en los circuitos económicos legales<sup>129</sup>. BLANCO CORDERO, con el mismo propósito de restringir el ámbito de aplicación de la conducta, considera que el conocimiento del origen delictivo del bien ha de verificarse en el mismo momento en que da comienzo su utilización, siendo penalmente irrelevante aquel uso en el que el referido conocimiento se adquiriera en un momento posterior<sup>130</sup>.

De acuerdo con un sector relevante de la doctrina, la utilización del bien por parte del autor del hecho delictivo previo ha de ser considerada como un acto de agotamiento del mismo, “que, como tal, ya se encuentra copenado en la propia sanción prevista para la comisión”. Por esta razón, dicha utilización no puede ser a su vez sancionada como acto de blanqueo sin quebrantar la proscripción del *bis in idem*<sup>131</sup>. Asimismo, dicha conducta no es objetivamente idónea para desvincular los bienes de su origen delictivo<sup>132</sup>: ni constituye un acto de disimulo que permita revestirlos de apariencia legítima, ni facilita su reintegración en el tráfico lícito.

Se ha dicho que la incorporación al tipo penal de las nuevas conductas de posesión y utilización responde a recientes políticas orientadas a la incriminación de la posesión injustificable de bienes, promovidas en gran medida por la Decisión Marco 2005/212/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005<sup>133</sup>. Otros autores han manifestado fundadas sospechas de que dicha incorporación obedezca a censurables fines de aislamiento social (*soziale isolation*) de aquellas personas que perpetren delitos económicamente rentables<sup>134</sup>. En este sentido, se ha alertado del riesgo existente de que

---

máximo rendimiento o provecho, por ejemplo convirtiéndolo o transmitiéndolo, solapándose en estos casos la utilización con otras modalidades de acción descritas en el artículo 301.1 CP. Es por ello que, a juicio de la autora, el sentido jurídico-penal que hay que atribuir a la modalidad típica de utilización, ha de limitarse al uso del bien conforme a destino. (“El “autoblanqueo” de capitales”, loc. cit.).

<sup>129</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., págs. 93 y 94.

<sup>130</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 489 y 490.

<sup>131</sup> Vid. CASTRO MORENO, A., “Reflexiones críticas sobre las nuevas conductas de posesión y utilización en el delito de blanqueo de capitales en la reforma del anteproyecto de 2008”, op. cit., pág. 1390; CARPIO DELGADO, J., “La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 25; GALLEGU SOLER, J. I., *Comentarios al Código Penal. Reforma LO 5/2010*, op. cit., pág. 665.

<sup>132</sup> Vid. CASTRO MORENO, A., “Reflexiones críticas sobre las nuevas conductas de posesión y utilización en el delito de blanqueo de capitales en la reforma del anteproyecto de 2008”, op. cit., pág. 1388.

<sup>133</sup> Vid. QUINTERO OLIVARES, G., “Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la recepción civil”, op. cit., pág. 13.

<sup>134</sup> La actual configuración del tipo penal no sólo “aisla a los delincuentes o a sus ganancias amenazando con pena a los terceros, sino que también amenaza con pena a él mismo (sanción del autoblanqueo) (...) por la mera posesión”. (Vid. ampliamente BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op.

el legislador instrumentalice determinados tipos penales para facilitar la consecución exitosa de los procesos judiciales penales -agilizando la lucha contra el delito, facilitando su prueba, y dando cobertura a las autoridades judiciales para acordar diligencias de investigación y adoptar medidas cautelares desde el comienzo del procedimiento-<sup>135</sup>. La incriminación de las nuevas conductas de posesión y utilización parece ser un buen ejemplo de este censurable propósito. Lamentablemente, el legislador no ha ofrecido pistas sobre los motivos que le han llevado a emprender una reforma de semejante “calado” -ninguna razón se aduce al respecto en la exposición de motivos de la LO 5/2010-<sup>136</sup>. Lo que sí ha revelado la práctica forense de los últimos años es la tendencia de distintos operadores jurídicos a promover una función instrumental del delito de blanqueo de capitales<sup>137</sup>. La progresiva ampliación del tipo impulsada por el legislador está facilitando sin duda la tarea de los agentes encargados de la persecución de hechos delictivos, suscitando, tal y como pronosticó ABEL SOUTO, una aplicación extensiva del tipo de blanqueo<sup>138</sup>. Esta situación fue oportunamente denunciada por el reconocido monografista, que llegó a lanzar un mensaje de moderación, especialmente a la fiscalía, reprochando a ésta la excesiva frecuencia con la que sus representantes, “después de la acusación por varios delitos menos graves, [añaden] la coletilla “y blanqueo de dinero” para poder acordar la prisión provisional” del imputado<sup>139</sup>. También se ha censurado la costumbre, cada vez más frecuente, de asociar de manera cuasiautomática a las acusaciones por delitos de corte económico la

---

cit., pág. 463). En sentido similar, ABEL SOUTO, M., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 87; id., “La reforma penal española de 2010 sobre blanqueo, las nuevas técnicas de comisión delictiva y el uso de las telecomunicaciones para el blanqueo”, op. cit., pág. 179; id., “Volumen mundial del blanqueo de dinero, evolución del delito en España y jurisprudencia reciente sobre las últimas modificaciones del Código penal”, op. cit., pág. 36.

<sup>135</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 439.

<sup>136</sup> Vid. MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Receptación y blanqueo de capitales (arts. 301 y 302)”, op. cit., págs. 339 y 340; id., “Ganancias criminales y ganancias no declaradas (El desbordamiento del delito fiscal y del blanqueo)”, op. cit., págs. 663 y 664; CARPIO DELGADO, J. del, “La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 21; DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, J., “El blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 463; VIDALES RODRÍGUEZ, C., “Blanqueo, ¿qué es blanqueo? (Estudio del artículo 301.1 del Código Penal Español tras la reforma de la LO 5/2010)”, op. cit., pág. 11; FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y TORRES, J., *Blanqueo de capitales y principio de lesividad*, op. cit., pág. 257.

<sup>137</sup> Vid. MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Ganancias criminales y ganancias no declaradas (El desbordamiento del delito fiscal y del blanqueo)”, op. cit., pág. 658.

<sup>138</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 82; id., “Volumen mundial del blanqueo de dinero, evolución del delito en España y jurisprudencia reciente sobre las últimas modificaciones del Código penal”, op. cit., pág. 18. Vid., en sentido similar, BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 464.

<sup>139</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., págs. 243-246.

imputación adicional del delito de blanqueo de capitales, como cláusula de cierre<sup>140</sup>, “dando lugar a veces a situaciones incluso rocambolescas”<sup>141</sup>. Por su parte, BLANCO CORDERO y MANJÓN-CABEZA OLMEDA han señalado que en otras ocasiones el blanqueo es utilizado como calificación alternativa a otros delitos cuando éstos no pueden acreditarse en todos sus elementos<sup>142</sup>, empleándose a modo de “cláusula de cierre del sistema” del conjunto de delitos económicamente rentables<sup>143</sup>. Afortunadamente, la reacción jurisprudencial a la política expansiva inherente a la reforma de 2010 se ha traducido en una nueva orientación interpretativa del tipo, más restrictiva, que progresivamente va abriéndose paso en la mal llamada jurisprudencia menor. En efecto, en las Sentencias 1080/2010, de 20 de octubre, 942/2013, de 11 de diciembre, y 265/2015, de 29 de abril, el Tribunal Supremo ha afirmado que las conductas típicas expresamente previstas en el artículo 301.1 CP -no sólo la posesión y la utilización- han de ir dirigidas a las finalidades de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a los autores del delito a eludir las consecuencias de sus actos. Esta novedosa línea exegética supone un giro de ciento ochenta grados respecto a la que hasta entonces había sido jurisprudencia más que consolidada. Aunque, como vimos<sup>144</sup>, no compartimos el razonamiento expresado en las referidas resoluciones, la aparición de esta interpretación restrictiva del delito de blanqueo permite constatar la loable preocupación del Alto Tribunal por reducir su dilatado ámbito de aplicación.

---

<sup>140</sup> Vid. MESTRE DELGADO, E., “Las campañas mediáticas sobre el blanqueo”, *III Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pág. 361.

<sup>141</sup> Vid. CASTRO MORENO, A., “Consideraciones críticas sobre la aplicación e interpretación del tipo subjetivo de los delitos de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 448.

<sup>142</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 439. En este aspecto, “el sentido pleno de esta novedad legal se alcanza relacionándola con otra de las modificaciones, (...) el castigo del autoblanqueo; se posibilita así castigar por blanqueo al sujeto que está en posesión o actúa sobre los bienes objeto de un delito previo que él ha cometido, cuando no se puede probar ese ilícito precedente pero sí el blanqueo (que ahora se conforma con la sola posesión) acudiendo a la inferencia y a la prueba de indicios.” (MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Prevención y sanción del blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 377). Vid., asimismo, MUÑOZ CONDE, F., “Consideraciones en torno al bien jurídico protegido del blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 173 y 174.

<sup>143</sup> Vid. PÓRFILO TRILLO NAVARRO, J., *Delitos económicos. La respuesta penal a los rendimientos de la delincuencia económica*. Ed. Dykinson. Madrid, 2008, pág. 137; SILVA SÁNCHEZ, J. M., “Los delitos patrimoniales y económico-financieros”, *Diario La Ley*, Sección Tribuna, 23 Dic. 2010, Año XXXI. Nº 7534. Ed. La Ley, 2010, págs. 12 y ss.; MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Receptación y blanqueo de capitales (arts. 301 y 302)”, op. cit., pág. 342; ABEL SOUTO, M., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 62.

<sup>144</sup> Vid. *supra*, apartado 3.2.1.2 de este capítulo, págs. 217 y ss.

Además de la ampliación extraordinaria del ámbito de intervención del tipo<sup>145</sup>, la incorporación de la posesión y la utilización como conductas típicas desvinculadas de cualquier finalidad ha generado significativos problemas tanto de carácter dogmático como de política criminal, que han sido objeto de muy oportunas críticas por parte de la doctrina<sup>146</sup>. Ha de advertirse, en primer lugar, que si bien las modalidades tradicionales de blanqueo (adquirir, convertir y transmitir los bienes) se caracterizan por su aptitud para desvincularlos de su origen delictivo<sup>147</sup>, esto es, dotarlos de apariencia legítima y facilitar su reintegración en el tráfico jurídico normalizado<sup>148</sup>, las nuevas conductas de posesión y utilización no pueden considerarse propiamente actos de blanqueo<sup>149</sup>, pues no suponen *per se* disimular el origen delictivo del bien<sup>150</sup>, no conllevan un cambio de titularidad real o aparente, ni resultan idóneas para reintegrar los fondos sucios al tráfico lícito<sup>151</sup>. En efecto, de acuerdo con FERNÁNDEZ TERUELO y ABEL SOUTO, las modalidades típicas originalmente previstas, aún desligadas de cualquier finalidad, constituyen “comportamientos «genuinos» de blanqueo”<sup>152</sup>, idóneos para introducir los activos de ilícita procedencia en el tráfico normalizado, y aptos para el encubrimiento o auxilio: la conversión o transmisión de los bienes constituyen las fórmulas típicas de blanqueo, y resultan especialmente aptas para desvincular al bien de su origen delictivo,

<sup>145</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., págs. 61, 81 y 82; id., “Volumen mundial del blanqueo de dinero, evolución del delito en España y jurisprudencia reciente sobre las últimas modificaciones del Código penal”, op. cit., pág. 18; id., “Jurisprudencia penal reciente sobre el blanqueo de dinero, volumen del fenómeno y evolución del delito en España”, op. cit., pág. 139; GALLEGO SOLER, J. I., *Comentarios al Código Penal. Reforma LO 5/2010*, op. cit., pág. 664; MORILLAS CUEVA, L., “Aspectos dogmáticos y político-criminales del delito de blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 103 y 104; MUÑOZ CONDE, F., *Derecho Penal. Parte Especial*, op. cit., pág. 514.

<sup>146</sup> Vid. CORCOY BIDASOLO, M., “Crisis de las garantías constitucionales a partir de las reformas penales y de su interpretación por los tribunales”, op. cit., pág. 166.

<sup>147</sup> Vid. CASTRO MORENO, A., “Reflexiones críticas sobre las nuevas conductas de posesión y utilización en el delito de blanqueo de capitales en la reforma del anteproyecto de 2008”, op. cit., pág. 1388.

<sup>148</sup> Vid. CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Comisión de Estudios e Informes), Informe al anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, de 18 de febrero de 2009, op. cit., pág. 120.

<sup>149</sup> Vid. MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Receptación y blanqueo de capitales (arts. 301 y 302)”, op. cit., págs. 342 y 343; id., “Prevención y sanción del blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 378; id., “Ganancias criminales y ganancias no declaradas (El desbordamiento del delito fiscal y del blanqueo)”, op. cit., pág. 669; id., “Un matrimonio de conveniencia: blanqueo de capitales y delito fiscal”, op. cit., pág. 21; CASTRO MORENO, A., “Reflexiones críticas sobre las nuevas conductas de posesión y utilización en el delito de blanqueo de capitales en la reforma del anteproyecto de 2008”, op. cit., pág. 1388; MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de capitales”, 3ª ed., op. cit., pág. 489; DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, J., “El blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 464; MUÑOZ CONDE, F., *Derecho Penal. Parte Especial*, op. cit., págs. 514 y 515.

<sup>150</sup> Tal y como afirma VIDALES RODRÍGUEZ, las referidas modalidades no implican un distanciamiento entre los bienes y su origen delictivo. (“Blanqueo, ¿qué es blanqueo? (Estudio del artículo 301.1 del Código Penal Español tras la reforma de la LO 5/2010)”, op. cit., pág. 14).

<sup>151</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 244; BERMEJO, M. G./AGUSTINA SANLLEHÍ, J. R., “El delito de blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 457 y 458.

<sup>152</sup> Vid. FERNÁNDEZ TERUELO, J. G., “El nuevo modelo de reacción penal frente al blanqueo de capitales (los nuevos tipos de blanqueo, la ampliación del comiso y la integración del blanqueo en el modelo de responsabilidad penal de las empresas)”, op. cit., pág. 7.

ya impliquen (transmisión) o no (conversión) un cambio de titularidad. Y la adquisición, “al comportar un cambio de titularidad, rompe los vínculos del bien con el autor del delito previo”, alejándolo de su origen ilícito y favoreciendo la ocultación de su ilícita procedencia<sup>153</sup>. En cambio, la mera posesión o utilización del bien de procedencia delictiva, desprovistas de finalidad alguna, no supone blanquearlos, esto es disimular o esconder su origen<sup>154</sup>. No constituyen *per se* conductas idóneas para la ocultación o encubrimiento de su ilícito origen y su posterior incorporación en el tráfico legal. Su naturaleza jurídica, afirma ABEL, gira más bien “en torno a una receptación específica”, toda vez que través de las mismas se persigue más el aprovechamiento propio del poseedor “que el provecho para el autor del delito previo o de un tercero”<sup>155</sup>. Y en todo caso, señala MANJÓN-CABEZA, cuando la posesión o la utilización se dirijan a los fines de ocultación o encubrimiento, serán subsumibles en la cláusula general que conmina “*cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito*”<sup>156</sup>.

A las mismas conclusiones llegan BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE y FABIÁN desde la óptica de la lesividad para los intereses socioeconómicos que caracteriza a los actos de blanqueo. La sola posesión o utilización del bien de origen delictivo, desligadas de las finalidades de disimular el origen ilícito de los bienes para incorporarlos al tráfico jurídico-económico normalizado, presentan un escaso o nulo potencial lesivo para los intereses socioeconómicos llamados a ser protegidos<sup>157</sup>. Los referidos comportamientos, si no se insertan en un proceso cuyo objeto es distanciar los activos de que se trate de su

<sup>153</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., págs. 185-187.

<sup>154</sup> Vid. MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Receptación y blanqueo de capitales (arts. 301 y 302)”, op. cit., págs. 342 y 343; id., “Prevención y sanción del blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 378.

<sup>155</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 86. En el mismo sentido, vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 473.

<sup>156</sup> Vid. MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Receptación y blanqueo de capitales (arts. 301 y 302)”, op. cit., pág. 343; id., “Prevención y sanción del blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 378; id., “Un matrimonio de conveniencia: blanqueo de capitales y delito fiscal”, op. cit., pág. 21.

<sup>157</sup> Vid. BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I./FABIÁN CAPARRÓS, E. A., “La emancipación del delito de blanqueo de capitales en el Derecho penal español”, op. cit., págs. 125 y 126. En sentido similar, vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 244; CARPIO DELGADO, J. del, “La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 27; GALLEGOS SOLER, J. I., *Comentarios al Código Penal. Reforma LO 5/2010*, op. cit., pág. 666; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 434; id., “El delito fiscal como actividad delictiva previa del blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 40; MATA LLÍN EVANGELIO, A., “El “autoblanqueo” de capitales”, op. cit., pág. 29; ORTOS BERENGUER, E., “Delimitación entre encubrimiento, receptación blanqueo respecto a las modalidades de posesión y uso incorporadas en el artículo 301 por la L.O. 5/2010”, op. cit., págs. 260 y 261; VIDALES RODRÍGUEZ, C., “Blanqueo, ¿qué es blanqueo? (Estudio del artículo 301.1 del Código Penal Español tras la reforma de la LO 5/2010)”, op. cit., pág. 14.

origen delictivo “con objeto de dotarlos de un aspecto lícito”<sup>158</sup> e incorporarlos al tráfico legal, no conforman en sí actos propios de blanqueo, sino que se aproximan más bien al concepto de receptación o favorecimiento real<sup>159</sup>.

En definitiva, la doctrina especializada coincide al afirmar que cuando las conductas de posesión o utilización no estén vinculadas a los específicos propósitos de ocultación, encubrimiento o ayuda -en cuyo caso estarían implícitamente comprendidas en la fórmula de *realización de otro acto* con las finalidades referidas-, no pueden considerarse propiamente conductas de blanqueo, al no ser idóneas para reintegrar los fondos sucios al tráfico lícito y entrañar, con ello, un riesgo penalmente relevante para los intereses socioeconómicos objeto de protección. Así lo interpretó también el Consejo General del Poder Judicial, al censurar en su preceptivo Informe previo a la ley de reforma de 2010 la tipificación de la mera “posesión” o “utilización” de los bienes delictivos. Dichos comportamientos no resultan actos propiamente de blanqueo al no suponer necesariamente actos de disimulo del origen de los bienes -porque no comportan, si quiera, un cambio de titularidad real o aparente-. Únicamente, continuaba el Informe, “cuando la posesión o la utilización de bienes derivados de delito por terceras personas ajenas al delito del que provienen son conductas que contribuyen a ocultar o a encubrir el origen ilícito de aquéllos” podrán considerarse actos de blanqueo. Por ello resulta “obvia la inutilidad de las nuevas modalidades de la acción típica, ya

---

<sup>158</sup> Vid. BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I/FABIÁN CAPARRÓS, E. A., “La emancipación del delito de blanqueo de capitales en el Derecho penal español”, op. cit., pág. 127.

<sup>159</sup> De acuerdo con BERDUGO y FABIÁN, el blanqueo “se caracteriza por ser un proceso a lo largo del cual se distancian progresivamente unos activos de su origen delictivo con objeto de dotarlos de un aspecto lícito, *iter* a lo largo del cual esos bienes pueden experimentar cambios sucesivos. En consecuencia, para el blanqueo no importa tanto la captación de esos bienes -el poder real sobre las cosas que caracteriza a la receptación; su tenencia, su disfrute o su aprovechamiento- como la intervención que se practica sobre el valor de los mismos mediante una sucesión de transformaciones -la realización de una cadena de actos dotados de relevancia jurídico-económica con la intervención de una serie de sujetos-. Es más, cabe la posibilidad de que ese dominio sobre los bienes que caracteriza a la receptación sea el presupuesto necesario para su blanqueo. Mientras la receptación encuentra su esencia en la constitución ilícita de un derecho real sobre el producto de un delito previo, las conductas de blanqueo pertenecen al ámbito de la dinámica patrimonial y del derecho de crédito. Precisamente es la influencia de ese proceso sobre la economía ilícita la que dota de específica lesividad a la figura que nos ocupa. También por ello conviene ser prudente a la hora de imputar por el delito de blanqueo a quienes no transforman o invierten capitales ilegales sino que, simplemente, los consumen, disfrutan o ayudan a otros a hacerlo, por importantes que sean las cuantías implicadas. A nuestro juicio, esas conductas no forman parte de ese núcleo socio-económico que caracteriza al blanqueo, aproximándose más al terreno del encubrimiento real con o sin ánimo de lucro, si es que no son atípicas por ser consideradas acciones “cotidianas” o “neutrales”. (Ibidem, págs. 127 y 128).



que el artículo 301.1 incrimina expresamente la realización de «cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito»<sup>160</sup>.

No es éste, sin embargo, el único conflicto dogmático que presenta la incorporación al precepto de las nuevas conductas. Los más distinguidos autores en la materia han descartado el encaje de las novedosas modalidades de acción en el tipo de blanqueo por no compadecerse con máximas fundamentales que presiden el procedimiento penal, algunas de ellas dotadas de relevancia constitucional, tales como el principio de proporcionalidad de las penas, el principio de intervención mínima o de el carácter de *ultima ratio* del Derecho penal<sup>161</sup>. Hace ya dos décadas, GÓMEZ INIESTA constató que la mera posesión de bienes de origen delictivo no es más que “una hipótesis de peligrosidad -en términos reales, también personales y conectados a la condición de sospechoso del sujeto- de la posesión injustificada” de bienes<sup>162</sup>. En esta línea crítica, numerosos autores han llamado la atención sobre los problemas de proporcionalidad que presenta la incriminación de la mera posesión o lo utilización de bienes: a falta de una previsión legal que limite penológicamente el blanqueo respecto a los delitos subyacentes, “puede resultar más gravemente penado el hecho de poseer o utilizar los bienes sin haber intervenido en la comisión del delito del que proceden que haber cometido el propio delito en cuestión”<sup>163</sup>. Los problemas de proporcionalidad se intensifican en los supuestos de posesión o utilización imprudente: el castigo de dichas modalidades típicas, afirma FERNÁNDEZ TERUELO, “nos llevaría al absurdo de penalizar

---

<sup>160</sup> Vid. CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Comisión de Estudios e Informes), Informe al anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, de 18 de febrero de 2009, op. cit., pág. 120.

<sup>161</sup> Vid. VIDALES RODRÍGUEZ, C., “Blanqueo, ¿qué es blanqueo? (Estudio del artículo 301.1 del Código Penal Español tras la reforma de la LO 5/2010)”, op. cit., págs. 9 y 10.

<sup>162</sup> Vid. GÓMEZ INIESTA, D. J., *El delito de blanqueo de capitales en Derecho Español*, op. cit., págs. 52 y 53.

<sup>163</sup> Vid. FERNÁNDEZ TERUELO, J. G., “Blanqueo de capitales”, op. cit., marginal 7381; id., “El nuevo modelo de reacción penal frente al blanqueo de capitales (los nuevos tipos de blanqueo, la ampliación del comiso y la integración del blanqueo en el modelo de responsabilidad penal de las empresas)”, op. cit., pág. 9. En el mismo sentido, vid. MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Receptación y blanqueo de capitales (arts. 301 y 302)”, op. cit., pág. 343; id., “Prevención y sanción del blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 378 y 379; id., “Un matrimonio de conveniencia: blanqueo de capitales y delito fiscal”, op. cit., pág. 22; ABEL SOUTO, M., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 91; id., “La reforma penal española de 2010 sobre blanqueo, las nuevas técnicas de comisión delictiva y el uso de las telecomunicaciones para el blanqueo”, op. cit., pág. 171; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 474; CASTRO MORENO, A., “Reflexiones críticas sobre las nuevas conductas de posesión y utilización en el delito de blanqueo de capitales en la reforma del anteproyecto de 2008”, op. cit., págs. 1390 y 1391; CARPIO DELGADO, J. del, “La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 26; MATALLÍN EVANGELIO, A., “El “autoblanqueo” de capitales”, op. cit., pág. 29; MORILLAS CUEVA, L., “Aspectos dogmáticos y político-criminales del delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 86; VIDALES RODRÍGUEZ, C., “Blanqueo, ¿qué es blanqueo? (Estudio del artículo 301.1 del Código Penal Español tras la reforma de la LO 5/2010)”, op. cit., pág. 19.

en algunos casos de forma más grave al que por negligencia posea o use un bien proveniente de la actividad delictiva que al autor (doloso) de esta última”<sup>164</sup>.

Asimismo, se ha advertido que la expresa punición de la posesión y la utilización de bienes de origen delictivo provoca problemas concursales de difícil solución tanto con el delito de receptación (cuando el beneficio provenga de un delito patrimonial o contra el orden socioeconómico y el tenedor actúe con ánimo de lucro) como con el encubrimiento (cuando el tenedor carezca de ánimo de lucro)<sup>165</sup> en aquellos casos en los que sea un tercero el que opere con los bienes o fondos ilícitos. Incluso se ha alertado de la estrecha similitud que presentan las novedosas conductas con la receptación civil o participación a título lucrativo de los efectos del delito<sup>166</sup>, “de la que sólo se separa porque en ésta se desconoce el origen delictivo”<sup>167</sup> de los referidos efectos. En todo caso, de acuerdo con ORTS BERENGUER, para la delimitación entre las modalidades problemáticas de blanqueo y otros tipos penales próximos, así como la resolución a los problemas concursales que puedan surgir, ha de atenderse al bien jurídico menoscabado<sup>168</sup>: es preciso en estos casos valorar la idoneidad de la concreta conducta para la creación del riesgo típico<sup>169</sup> en el bien jurídico protegido, de tal modo que sólo podrán considerarse constitutivos de delito de blanqueo aquellos

---

<sup>164</sup> Vid. FERNÁNDEZ TERUELO, J. G., “El nuevo modelo de reacción penal frente al blanqueo de capitales (los nuevos tipos de blanqueo, la ampliación del comiso y la integración del blanqueo en el modelo de responsabilidad penal de las empresas)”, loc. cit.; MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Receptación y blanqueo de capitales (arts. 301 y 302)”, loc. cit.; CASTRO MORENO, A., “Reflexiones críticas sobre las nuevas conductas de posesión y utilización en el delito de blanqueo de capitales en la reforma del anteproyecto de 2008”, loc. cit.; CARPIO DELGADO, J. del, “La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 28.

<sup>165</sup> Vid. CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Comisión de Estudios e Informes), Informe al anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, de 18 de febrero de 2009, op. cit., págs. 112 y 113; CASTRO MORENO, A., “Reflexiones críticas sobre las nuevas conductas de posesión y utilización en el delito de blanqueo de capitales en la reforma del anteproyecto de 2008”, op. cit., pág. 1390; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 473; CARPIO DELGADO, J. del, “La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 24, 26 y 27; FERNÁNDEZ TERUELO, J. G., “El nuevo modelo de reacción penal frente al blanqueo de capitales (los nuevos tipos de blanqueo, la ampliación del comiso y la integración del blanqueo en el modelo de responsabilidad penal de las empresas)”, op. cit., pág. 9; MORILLAS CUEVA, L., “Aspectos dogmáticos y político-criminales del delito de blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 85 y 86; VIDALES RODRÍGUEZ, C., “Blanqueo, ¿qué es blanqueo? (Estudio del artículo 301.1 del Código Penal Español tras la reforma de la LO 5/2010)”, op. cit., pág. 15.

<sup>166</sup> Vid. QUINTERO OLIVARES, G., “Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil”, op. cit., págs. 16 y ss.

<sup>167</sup> Vid. MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Un matrimonio de conveniencia: blanqueo de capitales y delito fiscal”, op. cit., pág. 21.

<sup>168</sup> Vid. ORTS BERENGUER, E., “Delimitación entre encubrimiento, receptación blanqueo respecto a las modalidades de posesión y uso incorporadas en el artículo 301 por la L.O. 5/2010”, *III Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, págs. 260 y 261. En el mismo sentido, ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 367 y 368.

<sup>169</sup> Vid. GALLEGU SOLER, J. I., *Comentarios al Código Penal. Reforma LO 5/2010*, op. cit., pág. 666.

comportamientos que presenten un potencial lesivo para intereses jurídicos relacionados con el orden socioeconómico.

Los problemas que suscitan la incorporación de la posesión y la utilización como formas comisivas expresamente previstas se agravan al asociarse con la incriminación expresa del autoblanqueo. Tanto la doctrina como el Informe del Consejo General del Poder Judicial han incidido en las absurdas consecuencias interpretativas<sup>170</sup> que se alcanzan al relacionar las nuevas modalidades típicas con la controvertida figura del autoblanqueo<sup>171</sup>: si atendemos sólo a la literalidad de la norma y “no se restringe su sentido interpretativamente”<sup>172</sup>, al autor de cualquier delito del que derive algún tipo de rentabilidad económica se le imputará de forma automática, por la mera posesión o utilización del bien, un posterior delito -el de blanqueo-, sin necesidad de constatar la realización de un comportamiento adicional orientado a disimular el origen delictivo de los fondos o de verificar un dolo diferenciado, más allá del conocimiento de su ilícita procedencia. A las atinadas críticas formuladas por el Consejo General del Poder Judicial en su preceptivo informe previo a la reforma se ha sumado el enérgico rechazo doctrinal a la modificación legislativa, advirtiendo que la conminación penal de los nuevos comportamientos al autor del hecho previo, además de oponerse a la lógica jurídica más elemental<sup>173</sup>, resulta contraria a máximas fundamentales de transcendencia constitucional que rigen el procedimiento penal, principalmente el principio *non bis in idem*<sup>174</sup>, que impide que se “castigue dos veces la misma conducta”<sup>175</sup>.

<sup>170</sup> Vid. QUINTERO OLIVARES, G., “Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil”, op. cit., pág. 13.

<sup>171</sup> Vid. MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Receptación y blanqueo de capitales (arts. 301 y 302)”, op. cit., págs. 343-345; id., “Prevención y sanción del blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 378; id., “Ganancias criminales y ganancias no declaradas (El desbordamiento del delito fiscal y del blanqueo)”, op. cit., pág. 671.

<sup>172</sup> Vid. FERNÁNDEZ TERUELO, J. G., “El nuevo modelo de reacción penal frente al blanqueo de capitales (los nuevos tipos de blanqueo, la ampliación del comiso y la integración del blanqueo en el modelo de responsabilidad penal de las empresas)”, op. cit., pág. 9.

<sup>173</sup> Vid. CARPIO DELGADO, J. del, “La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 23.

<sup>174</sup> Vid. CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Comisión de Estudios e Informes), Informe al anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, de 18 de febrero de 2009, op. cit., pág. 123; MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de capitales”, 3ª ed., op. cit., pág. 494; ABEL SOUTO, M., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., págs. 80 y 81; id., “Blanqueo, innovaciones tecnológicas, amnistía fiscal de 2012 y reforma penal”, op. cit., pág. 35; id., “La reforma penal española de 2010 sobre blanqueo, las nuevas técnicas de comisión delictiva y el uso de las telecomunicaciones para el blanqueo”, op. cit., pág. 174; id., “Conclusiones: Jurisprudencia penal reciente sobre el blanqueo de dinero, volumen del fenómeno y evolución del delito en España”, op. cit., pág. 154; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 436, 473 y 528; id., “El delito fiscal como actividad delictiva previa del blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 36; CASTRO MORENO, A., “Reflexiones críticas sobre las nuevas conductas de posesión y utilización en el delito de blanqueo de capitales en la reforma del anteproyecto de 2008”, op. cit., pág. 1390; MATA LLÍN EVANGELIO, A., “El “autoblanqueo” de capitales”, op. cit., pág. 18; MARTÍNEZ-ARRIETA

Aunque nos referiremos a ello con detalle en el lugar oportuno<sup>176</sup>, ya adelantamos que, a nuestro juicio, ha de rechazarse la incriminación automática y en todo caso al autor de cualquier delito económicamente rentable de un segundo delito (blanqueo de capitales) por el mero hecho de poseer o utilizar el producto de su delito, conductas que son consustanciales a la propia conducta del hecho delictivo previo (posesión) o suponen su agotamiento (utilización)<sup>177</sup>. Siempre que no se verifique cualquier otro comportamiento constitutivo de otro delito<sup>178</sup> en el autor del delito antecedente, la relevancia penal derivada de la mera posesión o utilización del bien por parte de aquél habrá de rechazarse “desde una recta aplicación del non bis in idem”<sup>179</sup>.

A nuestro juicio, las severas críticas lanzadas por distinguidos autores en materia de blanqueo a la incorporación de las nuevas conductas (posesión y utilización) se encuentran plenamente justificadas. Dichas conductas, desprovistas de finalidad alguna, no son idóneas para transformar los fondos sucios ni posibilitar su retorno encubierto al ciclo económico legal. No presentan *per se*, por este motivo, un potencial lesivo contra las distintas manifestaciones del bien jurídico llamado a ser protegido (orden socio-económico)<sup>180</sup>, tal y como se ha expresado a través de muy ilustrativos ejemplos<sup>181</sup>. La

---

MÁRQUEZ DE PRADO, I., *El autoblanqueo. El delito fiscal como antecedente del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 41; MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Receptación y blanqueo de capitales (arts. 301 y 302)”, op. cit., pág. 345; id., “Prevención y sanción del blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 379; MUÑOZ CONDE, F., *Derecho Penal. Parte especial*, op. cit., pág. 515; NOREÑA SALTO, J. R., *Estructura del delito de blanqueo de capitales y su relación con el delito antecedente*, La Ley 19196/2011, Año XXXII. Nº 7736, 15 de noviembre de 2011, pág. 9; GONZÁLEZ RUS, J. J., “Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico”, op. cit., pág. 641; CARPIO DELGADO, J. del, “La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 23; ORTS BERENGUER, E., “Delimitación entre encubrimiento, receptación blanqueo respecto a las modalidades de posesión y uso incorporadas en el artículo 301 por la L.O. 5/2010”, op. cit., pág. 255.

<sup>175</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 436; id., “El delito fiscal como actividad delictiva previa del blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 41.

<sup>176</sup> Vid. *infra* apartado 3.4.4 de este capítulo, págs. 292 y ss.

<sup>177</sup> Vid. CASTRO MORENO, A., “Reflexiones críticas sobre las nuevas conductas de posesión y utilización en el delito de blanqueo de capitales en la reforma del anteproyecto de 2008”, op. cit., pág. 1390; CARPIO DELGADO, J. del, “La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 23- 25; GALLEGU SOLER, J. I., *Comentarios al Código Penal. Reforma LO 5/2010*, op. cit., pág. 665.

<sup>178</sup> Vid. NOREÑA SALTO, J. R., *Estructura del delito de blanqueo de capitales y su relación con el delito antecedente*, loc. cit.

<sup>179</sup> Vid. MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Receptación y blanqueo de capitales (arts. 301 y 302)”, op. cit., pág. 345.

<sup>180</sup> En efecto, tal y como han señalado BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/FABIÁN CAPARRÓS, la posesión y la utilización “poco tienen que ver con las grandes fortunas del narcotráfico, con la estructura financiera de los grupos dedicados al crimen organizado o, en general, con el daño real o potencial contra cualquier manifestación del orden socio-económico. Más bien encajan con otras formas delictivas ajenas a esa significación económica, como la receptación o el encubrimiento, y conforme a ellas deberían ser tratadas por la ley”. (“La emancipación del delito de blanqueo de capitales en el Derecho penal español”, op. cit., págs. 125 y 126).

<sup>181</sup> Véanse en este sentido las disparatadas hipótesis presentadas por la doctrina que podrían plantearse si se aplicase el tipo en su literalidad: tras la reforma del Código de 2010, cometerían delito de blanqueo (en sus

mera posesión o utilización del bien representan conductas muy alejadas de lo que constituye la esencia del blanqueo<sup>182</sup>. Únicamente cuando dichos comportamientos se instrumentalicen como forma de ocultación o encubrimiento para enmascarar el origen delictivo de los bienes o activos y facilitar su reintroducción en el circuito financiero legal, adquirirán sustantividad propia como hechos penalmente relevantes. Y en dichas hipótesis, la conducta podrá sancionarse -tal y como se hacía antes de la reforma- mediante la cláusula genérica “realización de cualquier otro acto” para ocultar, encubrir o ayudar<sup>183</sup>.

En definitiva, desprovistos de finalidad alguna, los comportamientos de posesión y utilización no son conductas propias de blanqueo, máxime cuando son realizadas por el autor del delito previo. Es por ello que, *de lege ferenda*, consideramos recomendable que sean suprimidas del artículo 301.1 CP las problemáticas modalidades de acción recientemente incorporadas al precepto: tanto la posesión como la utilización sólo pueden adquirir relevancia penal, como actos propiamente de blanqueo, cuando se instrumentalicen como medio de ocultar el origen ilícito de los bien o capitales y posibilitar su retorno encubierto al tráfico legal; y, en estos casos, como se ha dicho, habrán de ser sancionadas a través de la cláusula indeterminada “realizar cualquier otro acto” con las finalidades ocultar, encubrir o ayudar. En tanto las nuevas conductas no sean definitivamente suprimidas del precepto, habrá de promoverse su interpretación restrictiva, especialmente cuando dichas conductas sean realizadas por el autor del

---

modalidades de posesión o utilización) quien escribe en un ordenador que sabe que ha sido previamente sustraído, el transportista que hace la mudanza de un famoso traficante, el empleado de un garaje que custodia su vehículo, o el guardarrropa de cualquier establecimiento que queda al cuidado de su abrigo, siendo previsible que dichos bienes tengan origen en los delitos que habitualmente comenten, o incluso, el poseedor de las joyas robadas y quien utiliza el coche que ha sustraído para darse a la fuga (autoblanqueo). (Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, loc. cit.; ABEL SOUTO, M., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., pág. 194; id., “Blanqueo, innovaciones tecnológicas, amnistía fiscal de 2012 y reforma penal”, op. cit., pág. 37; QUINTERO OLIVARES, G., “Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil”, op. cit., pág. 13; CARPIO DELGADO, J. del, “La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 8; ARIAS HOLGUÍN, D. P., *Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 249. Los ejemplos podrían multiplicarse sin límite, y llegar a ser aún más ridículos, si cabe, cuando la posesión o utilización tenga lugar por la falta de cuidado que precisa la imprudencia; así la posesión o uso de cualquier bien mueble o inmueble sobre cuyo origen pueda presumirse alguna vinculación con prácticas delictivas -por ejemplo, el arrendamiento de una vivienda en cuya construcción pudo presumiblemente cometerse un delito urbanístico-. (Vid. QUINTERO OLIVARES, G., “Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil”, op. cit., pág. 13).

<sup>182</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 500.

<sup>183</sup> Vid. MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Receptación y blanqueo de capitales (arts. 301 y 302)”, op. cit., pág. 343; id., “Prevención y sanción del blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 378; CARPIO DELGADO, J. del, “La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales”, loc. cit.

delito previo<sup>184</sup>. En estos supuestos (autoblanqueo), parece aconsejable acudir a la invocación de la prohibición constitucional del *bis in idem*; y en el resto de hipótesis, será preciso analizar si la conducta concreta de posesión o utilización tiene la capacidad o aptitud para producir la efectiva lesión o puesta en peligro de los intereses socioeconómicos (bien jurídico) llamados a ser tutelados por el tipo de blanqueo<sup>185</sup>, para rechazar la incriminación de aquellos supuestos que no sean idóneos para borrar el rastro delictivo del bien o incorporarlos al tráfico económico normalizado<sup>186</sup>, y no colmen, de este modo, los criterios de lesividad a los que con acierto aluden BERDUGO y FABIÁN<sup>187</sup>. También serán en este sentido de singular utilidad diversas fórmulas dogmáticas de carácter normativo propuestas por la doctrina. Como veremos con detalle más adelante, los principios de insignificancia e intervención mínima<sup>188</sup> ofrecerán interesantes argumentos para excluir del ámbito típico la mera posesión o la utilización de bienes o activos ilícitos de cuantía irrelevante y los casos en los que dichas conductas constituyan actos básicos de consumo o se desarrollen en el marco de la actividad negocial de la vida cotidiana<sup>189</sup>. También será posible excluir la tipicidad de muchos de estos supuestos cuando puedan ser considerados “actos neutrales”<sup>190</sup> o “negocios socialmente adecuados”<sup>191</sup>. Abordaremos el análisis en profundidad de estos criterios dogmáticos en el capítulo siguiente<sup>192</sup>.

---

<sup>184</sup> Vid. FERNÁNDEZ ROS, J. F., *Algunas notas sobre la Reforma del Código Penal sobre el comiso y el blanqueo de capitales*, op. cit. Vid., en el mismo sentido, GALLEGU SOLER, J. I., *Comentarios al Código Penal. Reforma LO 5/2010*, op. cit., pág. 666. En cualquier caso, como ha apuntado CALDERÓN CERREZO, de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Segunda, no podrá sancionarse “la posesión injustificada de bienes cuyo origen no pueda referirse a un delito previo (...). Los incrementos no justificados de patrimonio constituyen presunción a efectos sólo tributarios, (...) pero no sirven de prueba en el proceso penal para presumir otro tanto en cuanto al blanqueo se refiere por ser ello contrario a la presunción constitucional de inocencia (Sentencias TS 14.07.2000 y 09.05.2001).” (“El marco jurídico del blanqueo de capitales: aspectos penales y administrativos”, op. cit., pág. 6).

<sup>185</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 81.

<sup>186</sup> Ibidem, pág. 90.

<sup>187</sup> Vid. BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I./FABIÁN CAPARRÓS, E. A., “La emancipación del delito de blanqueo de capitales en el Derecho penal español”, op. cit., págs. 128 y 129.

<sup>188</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 184; ABEL SOUTO, M., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 94; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 490-492.

<sup>189</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 247 y 248; ABEL SOUTO, M., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 95; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 492 y ss.

<sup>190</sup> Vid. CARPIO DELGADO, J. del, “La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 19; BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I./FABIÁN CAPARRÓS, E. A., “La emancipación del delito de blanqueo de capitales en el Derecho penal español”, op. cit., pág. 129.

<sup>191</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 495 y ss.

<sup>192</sup> Vid. *infra* Capítulo IV apartado 4.1, págs. 301 y ss.

### **3.2.3. LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRO ACTO PARA OCULTAR, ENCUBRIR O AYUDAR**

Además de la previsión de las conductas específicamente determinadas que acabamos de estudiar (adquisición, posesión, utilización, conversión y transmisión de bienes de origen delictivo), el artículo 301.1 CP prevé en su segundo inciso como comportamiento típico adicional y autónomo la realización de cualquier otro acto para ocultar o encubrir el origen ilícito del bien, o para ayudar a la persona que haya participado en el delito previo a eludir las consecuencias legales de sus actos. En este caso, la conducta no se define a través de un “verbo específico nuclear de la acción”<sup>193</sup>, sino que ésta queda caracterizada por las específicas finalidades que a que va dirigida (ocultar, encubrir o ayudar). De este modo, ante la ausencia de mención a los medios comisivos<sup>194</sup>, la determinación de la conducta punible va depender exclusivamente de la concurrencia en el agente de determinado ánimo o finalidad<sup>195</sup>.

El recurso a esta fórmula abierta, ausente en el Código anteriormente vigente, fue una de las principales novedades del artículo 301 CP<sup>196</sup>. Parece que la incorporación de esta cláusula responde a la mutabilidad y adaptabilidad que caracteriza al blanqueo, cuyas técnicas, como hemos comentado en capítulos anteriores, están en permanente evolución. Para combatir con mayor grado de eficacia este fenómeno, el legislador de 1995 optó por emplear una fórmula omnicomprendensiva que evitase que “ningún comportamiento [escapase] del ámbito de lo punible”<sup>197</sup>.

Si, como hemos visto, resultan plenamente justificadas las críticas doctrinales al extenso ámbito derivado del elenco de conductas contenidas específicamente previstas

---

<sup>193</sup> Vid. ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 343.

<sup>194</sup> Vid. VIDALES RODRÍGUEZ, C., *Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código penal de 1995*, op. cit., pág. 102.

<sup>195</sup> Vid. ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 343.

<sup>196</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 227.

<sup>197</sup> Vid. VIDALES RODRÍGUEZ, C., *Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código penal de 1995*, op. cit., pág. 101; CARPIO DELGADO, J. del, *El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal*, op. cit., pág. 191; PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 431; ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., pág. 123; id., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., pág. 210; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 506. Con razón ha afirmado ZARAGOZA AGUADO que esta “especie de cajón desastre” supone “una auténtica excepcionalidad de la complicidad en beneficio de las formas de autoría.” (“El blanqueo de bienes de origen criminal”, op. cit. pág. 383).

en el primer inciso del precepto, con más motivo es merecedora de desaprobación la extraordinaria amplitud<sup>198</sup> de la cláusula genérica contenida en su segundo inciso, definida a través de una fórmula en exceso abierta e indeterminada<sup>199</sup> -*la realización de cualquier otro acto*-. No resulta extraño que FABIÁN CAPARRÓS haya afirmado que la imprecisión de este segundo inciso ha convertido al tipo de blanqueo en una “suerte de agujero negro, capaz de devorar cualquier conducta que se le aproxime”<sup>200</sup>. Numerosos han sido los argumentos críticos dirigidos por la doctrina especializada a la cláusula que aquí comentamos: desde su censurable falta de compatibilidad con los mandatos constitucionales de determinación<sup>201</sup>, taxatividad<sup>202</sup> y *lex certa*<sup>203</sup>, derivados del principio constitucional de legalidad<sup>204</sup> que ha de presidir el ordenamiento penal, a la conculcación del principio de proporcionalidad en el ámbito penal<sup>205</sup>. En fin, la ausencia de un verbo específico<sup>206</sup> que describa la conducta permite que sean sancionadas “mínimas contribuciones a hechos ajenos, lo cual implica un olvido del papel referente a la exclusiva protección de bienes jurídicos que debe representar el Derecho penal”<sup>207</sup>.

<sup>198</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 380; PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 431; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 507.

<sup>199</sup> Vid. DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, J., “El blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 465; ZARAGOZA AGUADO, J. A., “Artículo 301”, op. cit., pág. 1159.

<sup>200</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 379 y 380.

<sup>201</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 507; DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, J., “El blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 465; CALDERÓN CEREZO, A., *Comentarios al Código penal*, vol. 3, pág. 2296; id., “Algunos aspectos críticos del blanqueo de capitales. Legislación y jurisprudencia”, op. cit., pág. 77.

<sup>202</sup> Vid. MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de capitales”, 3ª ed., op. cit., pág. 491; ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., págs. 123 y 124; id., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., pág. 209; ARIAS HOLGUÍN, D. P., *Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 279; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., loc. cit.

<sup>203</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 379; ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 227; CARPIO DELGADO, J. del, *El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal*, op. cit., págs. 192 y 193.

<sup>204</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 380; ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., págs. 123 y 124; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 507.

<sup>205</sup> Vid. CARPIO DELGADO, J. del, *El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal*, op. cit., págs. 192 y 193; ABEL SOUTO, M., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., pág. 210.

<sup>206</sup> Vid. ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 343.

<sup>207</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., pág. 124. En sentido contrario a las críticas formuladas por la doctrina mayoritaria, para PALMA HERRERA, aun cuando la formulación legal es extraordinariamente abierta, “reúne, al mismo tiempo, la concreción suficiente como para salvaguardar el principio de legalidad, taxatividad y seguridad jurídica.” (*Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 433). El monografista considera un acierto que el legislador haya incorporado una fórmula abierta que permita incorporar conductas que no tendrían cabida en las modalidades específicas contenidas en el primer inciso del artículo 301.1 CP, y que quedarían también fuera del precepto al no encontrar acomodo en número 2 del precepto, toda vez que lo que éste castiga “es ya la consecución de un resultado (...) y no la simple realización de actos tendentes a conseguirlo.” (Ibidem, págs. 434 y 435).



La excesiva amplitud del ámbito objetivo de esta modalidad típica aconseja acudir a fórmulas interpretativas para restringirlo<sup>208</sup>. La principal limitación va a proceder, evidentemente, de la verificación de la concurrencia de las finalidades previstas en el precepto -la ocultación o el encubrimiento del origen delictivo de los bienes, o la ayuda a quien haya participado en la infracción penal a eludir sus consecuencias legales<sup>209</sup> en la conducta del agente y de la *aptitud* del acto concreto para alcanzar alguna de ellas<sup>210</sup>. Asimismo, como indica ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, el acto *debe ir referida a los bienes* de los que se conoce su origen ilícito, es decir, ha de recaer sobre los mismos<sup>211</sup>. Por su parte, ABEL SOUTO propone recurrir a una suerte de *juicio de idoneidad* de la conducta *para lesionar el bien jurídico* protegido, de tal modo que “sólo queden embebidas en la descripción típica” aquellas conductas que resulten idóneas para ocultar o encubrir la procedencia delictiva de los bienes o capitales o, aquellas otras ejecutadas con *animus adiuuandi*, que resulten “idóneas para incorporar capitales ilícitos al tráfico económico”<sup>212</sup>. En términos similares, PALMA HERRERA y ARIAS HOLGUÍN invocan criterios teleológicos para limitar el ámbito típico a aquellas conductas que supongan una “potencial situación de peligro para los bienes jurídicos protegidos”<sup>213</sup>.

El empleo en el precepto de la expresión *para* (referida a los propósitos o finalidades de ocultar, encubrir o ayudar) ha suscitado un interesante debate doctrinal en

---

<sup>208</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., pág. 125; id., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., pág. 211; ARIAS HOLGUÍN, D. P., *Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 290; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 507.

<sup>209</sup> Conductas que CALDERÓN CEREZO identifica con supuestos de favorecimiento real y personal, con los que comparte determinadas notas características propias de estas modalidades de encubrimiento, lo que puede provocar supuestos de concurso aparente de normas con los arts. 451.2º, y que se resolverán acudiendo a la regla de la alternatividad prevista en el art. 8.4 CP. (*Comentarios al Código penal*, vol. 3, op. cit., pág. 2296; id., “Algunos aspectos críticos del blanqueo de capitales. Legislación y jurisprudencia”, op. cit., pág. 77).

<sup>210</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 433.

<sup>211</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 228. Asimismo, ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., págs. 126; id., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., pág. 221. Resulta en este sentido muy ilustrativa la crítica de BLANCO a la STS 457/2007, de 29 de mayo, censurando la condena por delito de blanqueo a quien vertió falso testimonio en declaraciones que prestó en instrucción con el propósito de ayudar a los imputados. Según la resolución, el acusado, además de auxiliarles a eludir la acción de la justicia, “tratando de exonerarle de la responsabilidad contraída por la transacción blanqueadora del dinero, con tal comportamiento también consiguió, además, consolidar los beneficios provenientes de un delito”. Acertadamente afirma BLANCO que dicha conducta nada tiene que ver con el blanqueo, toda vez que el acusado no realizó ningún acto sobre los bienes de origen delictivo. (*El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 508-510).

<sup>212</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., págs. 211 y 223; id., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., págs. 125, 138 y 139.

<sup>213</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 433; ARIAS HOLGUÍN, D. P., *Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 290.

torno a la naturaleza jurídica de las finalidades típicamente previstas. Para un sector minoritario de la doctrina, las finalidades contenidas en la norma constituyen un requisito que ha de verificarse para que la conducta típica se considere objetivamente adecuada para la consecución de dichos fines<sup>214</sup>. Otros autores han puesto de relieve, a nuestro juicio acertadamente, su naturaleza subjetiva. A su vez, dentro de este sector mayoritario, encontramos autores que consideran que la fórmula entraña un especial elemento subjetivo del tipo distinto del dolo<sup>215</sup>, si bien desde otra perspectiva las específicas finalidades se conciben como una “tendencia que refuerza el elemento volitivo del dolo”<sup>216</sup>. Limitamos a este breve apunte la cuestión objeto de debate, pues, dada la naturaleza subjetiva que a nuestro juicio poseen las finalidades previstas en el precepto, pospondremos el desarrollo detallado de su estudio al capítulo dedicado a la tipicidad subjetiva<sup>217</sup>. También al examinar el tipo subjetivo comprobaremos que en esta modalidad comisiva no es preciso que en el ánimo del agente concorra ningún propósito lucrativo, el cual, si bien en la mayoría de los casos estará presente, no conforma un elemento *sine qua non* de la tipicidad.

Tres son las finalidades rectoras del comportamiento a las que se puede dirigir esta modalidad típica: ocultar, encubrir y ayudar. La doctrina especializada discute si las dos primeras expresiones (ocultación o encubrimiento de los bienes) operan como sinónimas o si entre ambas existen matices que permiten diferenciar la una de la otra. La opinión dominante considera que los dos términos, ocultar y encubrir, son sinónimos<sup>218</sup>, pues en definitiva en ambos casos se hace referencia a esconder, disimular<sup>219</sup> o desvincular en apariencia el origen delictivo de los bienes<sup>220</sup>. ABEL SOUTO mantiene la tesis opuesta, considerando que, si bien los términos ocultar y encubrir parecen

---

<sup>214</sup> Vid. GÓMEZ INIESTA, D. J., *El delito de blanqueo de capitales en Derecho Español*, op. cit., pág. 51.

<sup>215</sup> Sostienen esta postura FABIÁN CAPARRÓS (*El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 402), CARPIO DELGADO (*El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal*, op. cit., págs. 289 y ss.) y VIDALES RODRÍGUEZ (*Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código penal de 1995*, op. cit., pág. 119).

<sup>216</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 229 y 230; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 671 y 672. En sentido similar, aunque en relación con los arts. 344 bis h) e i) del Código anteriormente vigente, vid. PÉREZ MANZANO, M., “El tipo subjetivo en los delitos de receptación y blanqueo de dinero”, *Estudios de Derecho Judicial nº 1*. CGPJ. Madrid, 1994, pág. 240.

<sup>217</sup> Vid. *infra* Capítulo V, apartado 5.3, págs. 459 y ss.

<sup>218</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 442; ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 232.

<sup>219</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, loc. cit.

<sup>220</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 440.

gramaticalmente sinónimos<sup>221</sup>, a efectos del tipo de blanqueo, es necesario distinguir ambas finalidades. El razonamiento del monografista parte del contenido de los instrumentos internacionales suscritos por España en materia de blanqueo -la Convención de Viena, la Directiva europea 91/308/CEE y el Convenio de Estrasburgo- en cuyos textos, a su juicio, no se empleó los términos ocultación y encubrimiento como sinónimos<sup>222</sup>. En los mismos, la expresión “encubrimiento” no se habría utilizado en un sentido técnico jurídico-penal -“como resulta lógico en los instrumentos que se dirigen a sistemas jurídicos dispares”-, sino que aludiría a una suerte de “simulación”<sup>223</sup>, aplicable a aquellos supuestos “en los que se da a los bienes o a sus características una apariencia distinta, en los cuales se simula o se finge que se trata de otros objetos o que las manifestaciones externas de los bienes, por las que devienen susceptibles de identificación, resultan diversas a las reales. Dicho encubrimiento posee un significado más activo que la ocultación, un matiz que entronca con el elemento manipulador del blanqueo”<sup>224</sup>. La diferenciación entre ambas finalidades estaría, en fin, avalada por el principio de vigencia, que “obliga a distinguir las dos conductas, ya que entre las variadas lecturas de una norma tendrá validez la que (...) otorgue sentido a todos los términos utilizados”<sup>225</sup>. A nuestro juicio, resulta acertada la lectura de PALMA HERRERA, para quien, si, en efecto, pueden existir diferencias de matiz entre las finalidades de ocultar y encubrir, dicha diferenciación no tiene mayor incidencia práctica<sup>226</sup>, pues ambas finalidades están previstas en el precepto como propósitos específicos determinantes de la tipicidad de la conducta.

En cuanto a las conductas indeterminadas dirigidas a “ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos”, la doctrina coincide al afirmar que la alusión al partícipe en el delito previo va referida “tanto a los autores como partícipes, esto es, autores, coautores, autores

---

<sup>221</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., págs. 215, 216, 239 y ss.

<sup>222</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., pág. 158.

<sup>223</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., págs. 241 y 242.

<sup>224</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., pág. 159; id., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., pág. 243. En sentido similar, MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de Capitales”, 3ª ed., op. cit., págs. 492 y 493.

<sup>225</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., pág. 156; id., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., pág. 240.

<sup>226</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 441 y 442.

mediatos, inductores, cooperadores necesarios y cómplices”<sup>227</sup>, y que las consecuencias legales a las que el precepto se refiere abarcan tanto la responsabilidad penal (penas y medidas de seguridad) como las consecuencias accesorias -el comiso, principalmente-, las responsabilidades civiles derivadas del delito<sup>228</sup> y otras consecuencias de naturaleza procesal<sup>229</sup>. Se descarta, sin embargo, con carácter general, la tipicidad de los actos de ayuda tendentes a evitar aquellas consecuencias del delito que no sean obligatorias o ineludibles, como la fianza<sup>230</sup>.

En otro orden de cosas, también ha sido objeto de discusión doctrinal la naturaleza jurídica de los actos indeterminados dirigidos a las finalidades específicamente previstas. No ofrece en este sentido muchas dudas modalidad consistente en la realización de cualquier otro acto para ocultar o encubrir, que se reconoce ampliamente como un supuesto específico de favorecimiento real<sup>231</sup>. Para algunos autores, constituirían tentativas expresamente previstas de favorecimiento real, cuya consumación estaría sancionada en el artículo 301.2 del Código<sup>232</sup>. Por su parte, los actos indeterminados realizados con el fin de ayudar a quien haya participado en el delito previo a eludir las consecuencias legales de sus actos también participan de la

<sup>227</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 235. En el mismo sentido, DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, J., *El delito de blanqueo de capitales en Derecho Español*, op. cit., pág. 18; GÓMEZ INIESTA, D. J., *El delito de blanqueo de capitales en Derecho Español*, op. cit., pág. 53; PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 447; ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 343 y 344; ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., pág. 142; id., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., pág. 227.

<sup>228</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 235; ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., pág. 140; id., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., pág. 224.

<sup>229</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 443 y 444.

<sup>230</sup> Ibidem, pág. 444; ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, loc. cit.; ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, loc. cit.; id., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., pág. 225.

<sup>231</sup> Vid. GÓMEZ INIESTA, D. J., *El delito de blanqueo de capitales en Derecho Español*, op. cit., pág. 49; VIDALES RODRÍGUEZ, C., *Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código penal de 1995*, op. cit., pág. 102; FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 255 y ss.; CALDERÓN CERESO, A., “Análisis sustantivo del delito (I): Prevención y represión del blanqueo de capitales”, *Prevención y represión del blanqueo de capitales, Estudios de Derecho Judicial* n° 28, 2000. CGPJ. Madrid, 2000, pág. 273; id., “Algunos aspectos críticos del blanqueo de capitales. Legislación y jurisprudencia”, op. cit., pág. 77; FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y TORRES, J., *Blanqueo de capitales y principio de lesividad*, op. cit., pág. 298. En contra de la opinión mayoritaria, vid. ARIAS HOLGUÍN, D. P., *Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 291 y 292.

<sup>232</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., pág. 213; MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de capitales”, 3ª ed., op. cit., pág. 491; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 672. De este modo, para ABEL la realización de los actos indeterminados constituye un delito de consumación anticipada, que “comporta un insoportable adelantamiento de las barreras de protección penal”. (“Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., pág. 216). En contra de esta opinión, vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 251.

naturaleza encubridora de las anteriores conductas, si bien, en este caso, la doctrina discute si estamos ante un supuesto específico de favorecimiento real o si, por el contrario, se trata de una modalidad de favorecimiento personal. Para un sector doctrinal, estamos ante una tipología determinada de favorecimiento personal pues “el comportamiento típico se extiende a las actividades de aprovechamiento de tercero”<sup>233</sup>. Para el sector mayoritario se trata, en cambio, de un supuesto específico de favorecimiento real<sup>234</sup>. Con razón ha afirmado ABEL SOUTO que si en el favorecimiento personal, la ayuda toma como punto de referencia al propio delincuente, las indeterminadas conductas tendentes al auxilio del artículo 301.1 CP han de recaer exclusivamente sobre los bienes de origen delictivo, aunque sea en provecho del autor o el partícipe en el delito previo. Por tanto, también los actos indeterminados dirigidos a la ayuda constituyen un supuesto de favorecimiento real<sup>235</sup>. Dicha conclusión se deduce “no sólo de una interpretación sistemática y lógica sino también de la literalidad del precepto, que impone a tales auxiliadores, aparte de una pena de prisión, la “multa del tanto al triplo del valor de los bienes”, pues el legislador presupone que en todo caso media la presencia de bienes delictivos”<sup>236</sup>.

Precisamente del carácter favorecedor de las conductas indeterminadas definidas por las finalidades típicamente previstas se han derivado complejos problemas concursales con determinadas tipologías del delito de encubrimiento. En efecto, ha señalado ARANGUEZ SÁNCHEZ, “la mayoría de las conductas de favorecimiento real o

---

<sup>233</sup> Vid. GÓMEZ INIESTA, D. J., *El delito de blanqueo de capitales en Derecho Español*, op. cit., pág. 53. También parecen acoger la tesis del favorecimiento personal VIDALES RODRÍGUEZ, C., *Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código penal de 1995*, op. cit., pág. 102; id., “La última reforma del Código Penal en materia de drogas. (Novedades introducidas por la Ley Orgánica de 12 de noviembre de 1992)”, op. cit., págs. 2733 y 2734; CALDERÓN CEREZO, Á./CHOCLÁN MONTALVO, J. A., *Manual de derecho Penal II. Parte especial*, op. cit., pág. 316; URBANO CASTILLO, E. de, “Sobre las distintas modalidades del «blanqueo de dinero»”, op. cit., pág. 1250; LOMBARDERO EXPÓSITO, L. M. de, “La perspectiva penal”, op. cit., pág. 173; CALDERÓN CEREZO, A., *Comentarios al Código penal*, vol. 3, op. cit., pág. 2296; ZARAGOZA AGUADO, J. A., “Artículo 301”, op. cit., pág. 1157; FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y TORRES, J., *Blanqueo de capitales y principio de lesividad*, op. cit., pág. 299. También podemos encontrar Sentencias del Alto Tribunal que consideran que los actos indeterminados destinados a ayudar constituyen conductas de favorecimiento personal (STS 483/2007, de 4 de junio), si bien en otras resoluciones, son catalogados como conductas de favorecimiento real (STS 182/2014, de 11 de marzo).

<sup>234</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 233 y 234; ABEL SOUTO, M., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., págs. 219 y ss.

<sup>235</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., pág. 221. En el mismo sentido, ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 234 y 235; FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 409; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 508.

<sup>236</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., págs. 221 y 222.

complementario son encuadrables en la actual regulación del blanqueo”<sup>237</sup>. Acertadamente afirma el monografista que la incardinación de los supuestos problemáticos en uno u otro tipo delictivo ha de resolverse atendiendo al bien jurídico que la conducta menoscabe<sup>238</sup>. En sentido similar, ARIAS HOLGUÍN considera que para delimitar los actos indeterminados del artículo 301.1 CP de las conductas favorecedoras tipificadas en el artículo 451, ha de acudir a criterios teleológicos, descartando el criterio de especialidad -que podría conculcar el principio de proporcionalidad de las penas- y el de alternatividad -que vulneraría el principio de vigencia “al convertir en inaplicables (...) otras disposiciones”-<sup>239</sup>.

Algún sector doctrinal ha caracterizado a los actos indeterminados previstos en el artículo 301.1 CP como un delito de mera actividad<sup>240</sup>, partiendo de la idea de que para la perfección del delito no se exige la efectiva ocultación o encubrimiento de la procedencia delictiva del bien, o la verificación de que la ayuda dispensada al autor o partícipe en el delito previo le haya permitido eludir las consecuencias legales de su ilícito actuar. Aunque, efectivamente, no es necesario que sea contrastada la efectividad de la ocultación, el encubrimiento o la ayuda, entendemos, con la doctrina dominante, que la conducta contenida en el segundo inciso del art. 301.1 CP se configura como un tipo de resultado cortado<sup>241</sup>, modalidad en la que no se exige la verificación del resultado pero sí la intención del autor orientada a ese resultado. Con ello, en esta modalidad típica, “la obtención del fin propuesto por el autor no afecta a la

<sup>237</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 367.

<sup>238</sup> Ibidem, pág. 368. De la misma opinión, ORTS BERENGUER, E., “Delimitación entre encubrimiento, receptación y blanqueo respecto a las modalidades de posesión y uso incorporadas en el artículo 301 por la L.O. 5/2010”, op. cit., págs. 260 y 261.

<sup>239</sup> Vid. ARIAS HOLGUÍN, D. P., *Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 279-291.

<sup>240</sup> Así lo hizo BLANCO CORDERO en la segunda edición de su importante monografía (si bien, como veremos, en su última edición ha reconsiderado su posición). Inicialmente sostuvo el autor que, dado que “los actos sobre los bienes ilícitos están dirigidos a la ocultación o encubrimiento de su origen ilícito, es factible que aquellos se realicen sin producirse dichos resultados (de ocultación o encubrimiento). Esta variante típica ha de calificarse como de mera actividad, pues los referidos actos “no exigen como resultado la efectiva ocultación o encubrimiento. De producirse deberían sancionarse mediante el artículo 301 número 2.” (*El Delito de Blanqueo de Capitales*, 2ª ed., op. cit., pág. 332; cfr. id., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 448).

<sup>241</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 453; FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 376; MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de capitales”, 3ª ed., op. cit., pág. 491; VIDALES RODRÍGUEZ, C., *Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código penal de 1995*, op. cit., págs. 97 y 98; ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., págs. 130 y 131; id., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., págs. 216 y 217; MARTOS NÚÑEZ, J. A., “Receptación y blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 211; GONZÁLEZ RUS, J. J., “Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico”, op. cit., pág. 642; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 448; LORENZO SALGADO, J. M., “El tipo agravado de blanqueo cuando los bienes tengan su origen en el delito de tráfico de drogas”, op. cit., pág. 225.

consumación”<sup>242</sup>. Sería suficiente para que ésta se verificase “la realización de cualquier acto sobre los bienes -comportamiento que ha de manifestarse tanto objetiva como subjetivamente- dirigido a la ocultación o encubrimiento de su origen ilícito” o a la ayuda del partícipe a eludir las consecuencias de sus actos<sup>243</sup>, si bien, como acertadamente han señalado ARANGUEZ SÁNCHEZ y PALMA HERRERA, los principios de lesividad y ofensividad hacen preciso que el comportamiento indeterminado tendente a ocultar, encubrir o ayudar sea apto o adecuado para menoscabar el bien jurídico protegido por el tipo penal. De este modo, todas aquellas conductas que no resulten idóneas para alcanzar la efectiva ocultación o encubrimiento del origen delictivo del bien o para ayudar al autor o partícipe a eludir las consecuencias de su ilícito actuar, aunque tendencialmente se dirijan a dichos fines, habrán de excluirse del ámbito típico<sup>244</sup>.

### **3.3. CONDUCTAS TIPIFICADAS EN EL ARTÍCULO 301.2 CP**

Además del heterogéneo elenco de conductas previstas en el primer párrafo del artículo 301.1CP, el número 2 del precepto contempla una última modalidad comisiva conformadora del tipo básico doloso, caracterizada también por su amplio contenido<sup>245</sup>: *la ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos, a sabiendas de que proceden de alguno de los delitos expresados en el apartado anterior o de un acto de participación en ellos.*

Como ha advertido PALMA HERRERA, el precepto no contempla “ninguna forma verbal, y sí únicamente el resultado de conductas, «la ocultación o encubrimiento», lo que permite inferir que cualquier tipo de comportamiento que produzca tales resultados

---

<sup>242</sup> Vid. CALDERÓN CEREZO, A., “Algunos aspectos críticos del blanqueo de capitales. Legislación y jurisprudencia”, op. cit., pág. 76.

<sup>243</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., págs. 131 y 132. En el mismo sentido, id., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., págs. 217 y 223; MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de capitales”, 3ª ed., op. cit., pág. 491.

<sup>244</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 458 y 459; ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 251.

<sup>245</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 463.

encontrará sitio en el precepto”<sup>246</sup>. En efecto, como más adelante veremos en detalle, esta modalidad típica integra un delito de resultado.

Por otro lado, y al igual que ocurre con la enunciación del número 1 del artículo 301 CP, la doctrina, en general, ha mostrado reparos frente a la “pomposa y redundante”<sup>247</sup> redacción de este número 2 en lo que a la casuística enunciación del objeto de la ocultación o encubrimiento se refiere. ¿Es necesaria la mención de todas estas manifestaciones externas de los bienes, o ha de entenderse que todas ellas son *cualidades equivalentes* que realmente podían reconducirse básicamente a una misma categoría? Un destacado sector doctrinal ha respondido a esta cuestión negando la necesidad de la mención expresa del elenco de manifestaciones o cualidades del bien<sup>248</sup>. En esta línea, ARÁNGUEZ SÁNCHEZ pone en tela de juicio la “utilidad de la técnica empleada para redactar el precepto”, concluyendo que el legislador “debería haberse ahorrado esta larga lista que concreta la actividad encubridora, pues con una simple referencia al encubrimiento de bienes o derechos se hubiera llegado a las mismas soluciones interpretativas”<sup>249</sup>. También FABIÁN CAPARRÓS considera que la larga lista de “vocablos” contenidos en el precepto hace referencia a “cualidades o caracteres que, en última instancia, nos llevarán siempre al objeto -los bienes de origen ilícito- del que se predicán”<sup>250</sup>. Un sector minoritario, en cambio, concede una significación especial a cada una de las circunstancias<sup>251</sup> a las que da cabida el prolijo número 2 del art. 301. En este sentido, DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO parece entender justificada la expresa mención a todos ellos, ya que, a su parecer, “la ocultación o encubrimiento no ha de ser necesariamente de los bienes, pues aparte de los supuestos de ubicación, destino o movimiento, cabe que el bien esté localizado pero lo que se oculta es su origen o su naturaleza, siempre y cuando no se realice mediante conversión o transferencia, que

---

<sup>246</sup> Ibidem.

<sup>247</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., pág. 155.

<sup>248</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 241 y 242; FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 414; ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., pág. 148; id., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., págs. 232 y 233; QUINTERO OLIVARES, G., *Comentarios a la Parte especial del Derecho penal*, op. cit., pág. 944; GONZÁLEZ RUS, J. J., “Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico”, op. cit., pág. 643.

<sup>249</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 241 y 242.

<sup>250</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 414.

<sup>251</sup> Vid., con detalle, el análisis detallado que abordan ARÁNGUEZ SÁNCHEZ (*El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 239 y ss.) y PALMA HERRERA (*Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 467 y ss.) de cada una de las manifestaciones de los bienes a los que, de acuerdo con la literalidad del precepto, ha de ir dirigida la ocultación o encubrimiento para colmar la tipicidad de la conducta.



situaría el comportamiento en el número 1” del precepto<sup>252</sup>. Para ÁLVAREZ PASTOR /EGUIDAZU PALACIOS, salvo por la expresión “verdadera naturaleza”, que entienden superflua, es positiva la enumeración de circunstancias del art. 301.2, pues favorece a la investigación del crimen organizado debido a que “para poder identificar los bienes que tienen origen en el delito es primordial describir el origen, ubicación, movimientos y propiedad de los bienes que han sido previamente objeto de blanqueo”<sup>253</sup>.

Aunque la redacción del precepto resulte en exceso prolija, consideramos que no todas las manifestaciones de los bienes a las que aquél hace referencia responden a la idea de la ocultación o el encubrimiento del bien o de su procedencia ilícita, por lo que parece acertada la mención expresa de dichas manifestaciones. El principio de vigencia, asimismo, abona esta interpretación. Si, de acuerdo con PALMA HERRERA, la ocultación o el encubrimiento de la verdadera naturaleza o el origen del bien parecen hacer referencia al enmascaramiento de la procedencia delictiva del bien<sup>254</sup>, la ocultación o el encubrimiento de la ubicación, el movimiento o el destino apunta más bien a que el objeto de la acción es el propio bien, su localización o los movimientos que a lo largo del proceso de reciclaje se han realizado<sup>255</sup>. Teniendo en cuenta que el blanqueo de capitales suele conformar un proceso más o menos complejo, en el que los bienes o activos están en movimiento o circulación, la ocultación o el encubrimiento de la ubicación o el destino de aquellos significa camuflar tanto el espacio físico en el que se encuentran como el destino que se ha dado a los mismos, teniendo presente que los términos ubicación o movimiento no han de entenderse sólo en sentido físico sino también, como apunta PALMA, comprensivos de cualquier forma de colocación o “desplazamiento de la riqueza física, jurídica o contable”<sup>256</sup>. Por último, la ocultación o encubrimiento sobre los derechos de los bienes -la propiedad ha de considerarse a los efectos del tipo como un tipo de derecho sobre los mismos-, puede ir referida tanto a la ocultación de dichos derechos como a la titularidad de quien los ostenta<sup>257</sup>.

---

<sup>252</sup> Vid. DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, J., *El delito de blanqueo de capitales en Derecho Español*, op. cit., pág. 21.

<sup>253</sup> Vid. ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 346.

<sup>254</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 467-474.

<sup>255</sup> Ibidem, págs. 474-478. Asimismo, vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 240.

<sup>256</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, loc. cit. En el mismo sentido, ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 240 y 241.

<sup>257</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 481.

También resulta de interés para nuestro análisis el debate suscitado por el empleo simultáneo de los dos “términos nucleares sobre los que pivota el comportamiento típico del art. 301.2”<sup>258</sup>: la ocultación y el encubrimiento. En el seno de la doctrina se discute si han de considerarse ambos términos como sinónimos, o por el contrario hacen referencia a conductas diferenciadas. Para un sector minoritario, dichos términos son sinónimos; los dos apuntan a un mismo comportamiento, “esconder, disimular, camuflar, tapar o disfrazar el rastro que une al bien con su ilícita procedencia”<sup>259</sup>. La mención de ambas expresiones no haría “sino complicar la farragosa redacción del precepto”<sup>260</sup>, por lo que “el legislador podría haberse ahorrado alguna de esas dos palabras”<sup>261</sup>.

La opinión doctrinal mayoritaria considera en cambio oportuna la referencia expresa a ambos vocablos, por dar contenido a conceptos diferentes<sup>262</sup>. Como ya hemos tenido oportunidad de comprobar, la redacción del delito de blanqueo contenida en el Código Penal trasladó casi literalmente la descripción del delito contenida en el Convenio de Viena<sup>263</sup>, de modo que para dar respuesta a la cuestión que ahora nos ocupa habrá de partirse del contenido del art. 3.1 b) ii) del Convenio<sup>264</sup>. Según la doctrina dominante, en dicho texto las expresiones “ocultación” y “encubrimiento” se emplearon como términos sinónimos<sup>265</sup>. Sin embargo, se afirma en este sector doctrinal, en el Derecho penal español, el encubrimiento tiene unas características específicas, e incluso aparece tipificado como delito autónomo<sup>266</sup>. En esta línea interpretativa, BLANCO CORDERO considera que mientras la expresión *ocultación* va referida a “acciones positivas de esconder, disfrazar o tapar, así como callar lo que se conoce, para

<sup>258</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., pág. 155.

<sup>259</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 232. En el mismo sentido, vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 411; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 512.

<sup>260</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 238.

<sup>261</sup> Ibidem, pág. 232.

<sup>262</sup> Así lo entienden ABEL SOUTO (*El blanqueo de dinero en la normativa internacional*, op. cit., págs. 155 y ss.), MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ (“Blanqueo de Bienes”, 3ª ed., op. cit., pág. 492), ÁLVAREZ PASTOR/EGUIDAZU PALACIOS (*Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 345), CARPIO DELGADO (*El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal*, op. cit., pág. 198), DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO (*El delito de blanqueo de capitales en Derecho Español*, op. cit., pág. 21) y TIEDEMANN (*Manual de Derecho Penal Económico. Parte General y Especial*, op. cit., pág. 346).

<sup>263</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, pág. 359; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 191; MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de Bienes”, 3ª ed., op. cit., pág. 509.

<sup>264</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 411; PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 488 y ss.

<sup>265</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., pág. 158.

<sup>266</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 441; ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 345.

evitar el conocimiento por terceros” de aquellas circunstancias relativas a los bienes que expresamente son recogidas en el texto legal<sup>267</sup>, el término *encubrimiento* tiene un contenido jurídico-penal específico y distinto, definido por el artículo 451 CP<sup>268</sup>. Si bien dicho artículo recoge tres modalidades encubridoras diferenciadas (auxilio complementario, en su número 1; favorecimiento real, en el 2; y favorecimiento personal, en el 3), sólo dos de ellas pueden ser a su vez comprendidas en el encubrimiento al que se refiere el artículo 301.2 CP, cuyo contenido es más restringido, pues limita el encubrimiento a aquel que recae sobre los bienes de procedencia delictiva. Así, el autor reserva en el contexto de esta norma la expresión “encubrimiento” a los supuestos de favorecimiento real y auxilio complementario de los números 1 y 2 del artículo 451 -la alteración e inutilización de los bienes procedentes de un delito para impedir su descubrimiento, y el auxilio al autor de aquél para beneficiarse de los bienes que origine-, quedando excluidos en todo caso los supuestos de favorecimiento personal. Por su parte, la “ocultación” sólo podría abarcar los supuestos de favorecimiento real, excluyendo además de los supuestos de favorecimiento personal, aquellos otros de auxilio complementario<sup>269</sup>.

ABEL SOUTO, aún suscribiendo la diferenciación conceptual de los dos términos que el artículo 301.2 emplea<sup>270</sup>, considera que el razonamiento de BLANCO CORDERO es artificioso y conduce a pintorescas consecuencias<sup>271</sup>, rechazando la interpretación que aquel autor hace en sentido técnico jurídico-penal de la expresión “encubrimiento”. Para ABEL, la diferencia significativa de ambos términos -ocultación y encubrimiento- se ha de indagar a la luz de los textos internacionales dictados en materia de blanqueo, en los que el término “encubrimiento” no es utilizado en sentido técnico, “como resulta lógico en los instrumentos que se dirigen a sistemas jurídicos dispares”<sup>272</sup>, sino que aludiría a una forma de “simulación”<sup>273</sup>. Atendiendo a dicha exégesis, el encubrimiento quedaría

---

<sup>267</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 515.

<sup>268</sup> Ibidem, pág. 517.

<sup>269</sup> Ibidem, págs. 514 y ss.

<sup>270</sup> Si bien “la interpretación gramatical, en principio apunta hacia la sinonimia de ambos vocablos, (...) el principio de vigencia obliga a distinguir las dos conductas, ya que entre las variadas lecturas de una norma tendrá validez la que (...) otorgue sentido a todos los términos utilizados, de manera que se evite la conclusión de que alguna parte del texto constituye letra muerta”. (Vid. ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., pág. 156; id., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., pág. 240).

<sup>271</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., pág. 157; id., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., págs. 240 y 241.

<sup>272</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., pág. 241.

<sup>273</sup> Ibidem, pág. 242.

reservado para aquellos casos en los que a través de la conducta se confiere a los bienes o a sus características una apariencia distinta, simulando o fingiendo “que se trata de otros objetos o que las manifestaciones externas de los bienes, por las que devienen susceptibles de identificación, resultan diversas a las reales. Dicho encubrimiento posee un significado más activo que la ocultación, un matiz que entronca con el elemento manipulador del blanqueo”<sup>274</sup>. La interpretación de MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ apunta a esta misma dirección, considerando que el encubrimiento tiene un significado más “activo que la ocultación, que apunta a la idea de “simulación” o “disimulación”. En la misma línea que ABEL, el Profesor gallego apela a los textos internacionales suscritos por España para atribuir al término “encubrimiento” un sentido diferenciado al de la mera “ocultación”: mientras “la conducta de ocultación habrá de ser interpretada como comprensiva tanto de acciones positivas consistentes en esconder, disfrazar o tapar, como de conductas consistentes en callar lo que se conoce con el fin de evitar que otras personas puedan tener conocimiento de la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes procedentes de un delito”, el encubrimiento “se reservaría para los casos en los que se da a los bienes o a sus características una apariencia distinta”<sup>275</sup>. Si bien a nuestro juicio resulta correctamente enfocada esta diferencia de matiz entre los actos de ocultamiento y de encubrimiento, dicha diferenciación -como acertadamente ha observado PALMA HERRERA- en la práctica no tiene gran relevancia<sup>276</sup>, pues ambas conductas están previstas en el precepto como comportamientos típicos. En cualquier caso, coincidimos con ABEL SOUTO y MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ en que las dos conductas poseen significación diferente y, por ello, es preciso que el precepto prevea ambas.

En cuanto a la *naturaleza jurídica* de las conductas tipificadas en el artículo 301.2 CP, hoy se encuentra superada aquella concepción clásica que les atribuía una naturaleza receptadora<sup>277</sup>, hábilmente criticada por VIDALES RODRÍGUEZ<sup>278</sup>. De acuerdo con la doctrina mayoritaria, consideramos que los comportamientos que integran el

---

<sup>274</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., pág. 159; id., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., pág. 243.

<sup>275</sup> Vid. MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C. “Blanqueo de Capitales”, 3ª ed., op. cit., págs. 492 y 493.

<sup>276</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 441 y 442.

<sup>277</sup> Basada esencialmente en su ubicación sistemática, junto al delito de recepción. (Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 236).

<sup>278</sup> Vid. VIDALES RODRÍGUEZ, C., *Los delitos de recepción y legitimación de capitales en el Código penal de 1995*, op. cit., págs. 103 a 105.

número 2 del precepto poseen naturaleza favorecedora<sup>279</sup>. De este modo, esta modalidad típica se configura como un encubrimiento específicamente previsto<sup>280</sup>, una tipología de favorecimiento real<sup>281</sup>, si bien dotada, en palabras de FABIÁN CAPARRÓS, de una sustantividad propia, derivada de su aptitud para proporcionar a los bienes una apariencia de licitud y distanciarlos así de su origen delictivo, y por tanto idónea para incidir en los intereses económicos típicamente protegidos<sup>282</sup>. En cualquier caso, de acuerdo con la estructura del delito previsto en el artículo 301.2 CP, la tipicidad no precisa la concurrencia de ánimo de lucro o aprovechamiento por parte del sujeto activo -sino más bien un *animus adjuvandi*<sup>283</sup>-, ni tan siquiera se exige que el agente esté en posesión de los bienes. Lo que el precepto sanciona es la obstaculización, por parte del sujeto activo y a través de conductas encubridoras, del descubrimiento del producto del delito, con independencia de la relación que vincule a aquel sujeto con los bienes de origen delictivo<sup>284</sup>.

Una lectura conjunta de los números 1 (segundo inciso) y 2 del artículo 301 CP permite advertir que en ambos casos se alude a dos elementos típicos de naturaleza similar: *la ocultación* y el *encubrimiento*. De hecho, tal y como han puesto de manifiesto diversos autores, no resulta sencillo encontrar la diferencia entre los comportamientos descritos en los dos primeros números del precepto<sup>285</sup>. El paralelismo

---

<sup>279</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., pág. 235.

<sup>280</sup> Vid. MANZANARES SAMANIEGO, J. L., *Código penal (adaptado a la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de julio). Comentarios y jurisprudencia*, op. cit., pág. 726.

<sup>281</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., pág. 158; id., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, loc. cit.; VIDALES RODRÍGUEZ, C., *Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código penal de 1995*, op. cit., págs. 105 y 106; DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, J., *El delito de blanqueo de capitales en Derecho Español*, op. cit., pág. 21; GÓMEZ INIESTA, D. J., *El delito de blanqueo de capitales en Derecho Español*, op. cit., pág. 49; ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 236 y 237; BLANCO CORDERO, I. *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 511. En sentido contrario, CARPIO DELGADO, J. del, *El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal*, op. cit., pág. 201; LUZÓN CUESTA, J. M., *Compendio de derecho Penal. Parte Especial*, op. cit., pág. 215; SERRANO GONZÁLEZ, A./SERRANO MAÍLLO, A., *Derecho Penal. Parte Especial*. Ed. Dykinson, 15ª ed. Madrid, 2010, pág. 570.

<sup>282</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 262 y 278.

<sup>283</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 237.

<sup>284</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 511 y 512.

<sup>285</sup> Vid. ROBLES PLANAS, R./PASTOR MUÑOZ, N., *Lecciones de Derecho Penal. Parte Especial*, op. cit., pág. 253; QUINTERO OLIVARES, G., *Comentarios al Código Penal. Tomo II. Parte Especial (artículos 138 a 318)*, op. cit., pág. 1039. Algún autor, incluso, considera que la modalidad típica contenida en el artículo 301.2 “podría ser (...) innecesaria, dado que en la primera ya se habla de cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito [de los bienes].” (Vid. GONZÁLEZ RUS, J. J., “Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico”, op. cit., págs. 642 y 643).

que parece encerrar<sup>286</sup>, desde un punto de vista formal<sup>287</sup>, la dicción del artículo 301.2 CP con algunos comportamientos tipificados en el artículo 301.1 CP (*realización de cualquier otro acto para ocultar o encubrir*) ha suscitado en la doctrina la necesidad de precisar cuál es la relación entre ambas formas comisivas. Algunos autores han pretendido encontrar la solución en una suerte de mecanismo relacional tentativa-consumación<sup>288</sup>. De acuerdo con esta idea, los autores que suscriben esta tesis consideran que el *tipo básico* está constituido por el del artículo 301.2 CP, de modo que los supuestos previstos en el artículo 301.1 referidos a la realización de cualquier otro acto con las finalidades de ocultar o encubrir no serían más que formas imperfectas de ejecución autónomamente tipificadas. Esta es la posición que defiende ABEL SOUTO, para quien el número 2 del precepto realmente incrimina la “consumación de comportamientos intentados recogidos en el art. 301.1”, lo cual no es incompatible con “la esencia perfectible del blanqueo ni [con] la imposibilidad de alcanzar la plena desaparición de las huellas que vinculan los bienes a su origen delictivo”<sup>289</sup>.

Es precisamente la estructura del fenómeno legitimador, que puede desarrollarse en diferentes fases sucesivas, lo que conduce a FABIÁN CAPARRÓS a justificar la tesis

---

<sup>286</sup> ARÁNGUEZ SÁNCHEZ pone de manifiesto que “una simple lectura de ambos preceptos basta para comprobar que un buen número de casos podrán ser incluidos en esos dos párrafos simultáneamente”. (*El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 241 y 242).

<sup>287</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 411.

<sup>288</sup> Vid. PALOMO DEL ARCO, A., “Receptación y figuras afines”, *Estudios de Derecho Judicial*, 2 (1996). *Estudios sobre el Código Penal de 1995 (Parte Especial)*. Dir. Tomás Vives Antón Y J. Luis Manzanares Samaniego. CGPJ. Madrid, 1996, pág. 51; ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., págs. 150 y 151.

<sup>289</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, loc. cit. En similar sentido, id., “Ocultación de dinero procedente del narcotráfico en una caja de seguridad (Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo nº 155/2002, de 19 de febrero)”, op. cit., pág. 321; id., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., págs. 233-235. Mismo parecer manifiesta MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ (“Blanqueo de Capitales”, 3ª ed., op. cit., pág. 492), para quien, en virtud de esta interpretación, no cabe la tentativa de las conductas previstas en el inciso 1º del número 1 del art. 301, “por recoger un supuesto de tentativa de encubrimiento o favorecimiento real elevada a la categoría de delito independiente (tentativas autónomas)”, teniendo en cuenta que no “es jurídicamente posible sancionar la tentativa de la tentativa, de conformidad con la interpretación tradicional del precepto contenido en el art. 64 CP”. (Ibidem, pág. 501). Sobre la base de esta misma interpretación, ROBLES PLANAS y PASTOR MUÑOZ afirman que este precepto comprende aquellas conductas referidas a bienes que hayan experimentado una previa transformación y también conductas que podrían definirse como actos preparatorios o tentativas de los comportamientos contemplados en el artículo 301.1 CP. (*Lecciones de Derecho Penal. Parte Especial*, op. cit., pág. 253). En sentido similar, vid. LANDROVE DÍAZ, G., “El blanqueo de capitales de procedencia delictiva”, op. cit., pág. 147; DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, J., “El blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 470 y 471; LORENZO SALGADO, J. M., “El tipo agravado de blanqueo cuando los bienes tengan su origen en el delito de tráfico de drogas”, op. cit., pág. 225. Para PALMA HERRERA y ARIAS HOLGUÍN esta interpretación ha de rechazarse, toda vez que supone castigar con el mismo rigor punitivo las formas imperfectas de ejecución y el delito consumado, desatendiendo así el principio de proporcionalidad de la pena. (Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 494 y 495). De la misma opinión, ARIAS HOLGUÍN, D. P., *Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 300.

contraria a la mantenida por ABEL. A su juicio, los números 1 y 2 del artículo 301 CP prevén sendas modalidades comisivas del tipo básico, que integra a todas ellas<sup>290</sup>. Para el monografista, todas las conductas del artículo 301.2 CP, salvo las realizadas a título de dolo eventual o de imprudencia, “podrían quedar incluidas en la ilimitada amplitud de la cláusula “o realice cualquier otro acto”, en tanto no se estimaran incluidas dentro de los verbos adquirir, convertir o transferir”<sup>291</sup>, de modo que realmente constituiría el número 1 del artículo 301 CP, con su cláusula omnicomprendensiva, el tipo básico de blanqueo de mayor aplicación. Otros autores mantienen posiciones más ambiguas respecto a la determinación del tipo básico. Así, para ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, éste estaría constituido por la modalidad prevista en el número 2 del precepto, que aquí se comenta, y por ciertas conductas integradas en el número 1 del artículo 301 CP<sup>292</sup>.

A nuestro juicio, el tipo básico de blanqueo está conformado por todas las modalidades comisivas contenidas en los números 1 y 2 del artículo 301. Si, de acuerdo con FABIÁN, el blanqueo constituye un proceso que normalmente está integrado por diferentes actos favorecedores y que es siempre perfectible, no será en principio posible desvincular de manera absoluta y definitiva los bienes de su origen delictivo<sup>293</sup>. Cada acto de blanqueo sólo supondrá, a lo sumo, un “mayor distanciamiento” de los bienes respecto a su ilícita procedencia<sup>294</sup>. Ello nos conduce a interpretar que tanto la realización de los actos indeterminados a los que el artículo 301.1 CP alude como la conducta prevista en el artículo 301.2 conforman modalidades comisivas que apuntan a ese mismo fin, sin que la consumación de una u otra precise la efectiva consecución de la total ocultación o encubrimiento del origen delictivo de los bienes sobre los que recae la conducta. El artículo 301.1 no tipifica, por tanto, la ejecución intentada de la modalidad típica contenida en el número 2 del precepto. Ambas tipologías conforman el

---

<sup>290</sup> De acuerdo con FABIÁN, “siempre será posible realizar una nueva operación de ocultamiento que redunde a favor de la separación de los bienes respecto de su remota procedencia, (...) de ahí que no pueda hablarse de un lavado de capitales «perfecto» -representado por el art. 301.2- junto a otro «imperfecto», «incompleto» o «intentado» -los actos descritos en el 301.1, realizados con el mismo fin-. Por ello, se habrá de llegar a la conclusión de que el 301.2 no penaliza «la ocultación o encubrimiento» irreparable, sino, como también lo hace el art. 301.1, la ejecución de actos que -solo- se aproximen a ese fin”. (*El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 412). En sentido similar, ARIAS HOLGUÍN, D. P., *Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 301 y 302).

<sup>291</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 413.

<sup>292</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 236.

<sup>293</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 412.

<sup>294</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 251.

tipo básico de blanqueo<sup>295</sup>: la primera, conmina la realización de cualquier acto dirigido a ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes (también, por cierto, aquellos otros cuyo fin sea ayudar a quien haya participado en la infracción penal previa a eludir sus consecuencias legales); y la segunda, prevé la realización de un acto concreto sobre los bienes que contribuya a su ocultación o al encubrimiento de alguna de las circunstancias referidas a los mismos que prevé el precepto. En ambos casos, la conducta típica procurará como fin último alcanzar un mismo propósito ideal (conseguir la total desvinculación entre el bien y su procedencia delictiva), fin cuya consecución no se precisa para la consumación de ninguna de las dos variantes comisivas.

En muchos de los casos, las conductas subsumibles en el número 2 del precepto encajarán también en la omnicomprendensiva fórmula del artículo 301.1 CP<sup>296</sup>, y su incardinación en una u otra modalidad suscitará complejas dudas<sup>297</sup>. Si bien, a juicio de ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, la subsunción de los supuestos dudosos en uno u otro número del precepto será “irrelevante a efectos prácticos”<sup>298</sup>, hemos de tener presente que la configuración típica de las dos modalidades comisivas comparadas presentan una diferencia esencial: el número 1 del artículo 301 se refiere a la realización de actos *para* ocultar o encubrir, y su número 2 conmina la ocultación o encubrimiento de (...). La primera modalidad conforma, como vimos, un delito de resultado cortado, en el que no es necesaria la verificación de un resultado, sino comprobar que la intención del autor aparece orientada a la consecución del mismo. Sin embargo, la fórmula empleada en el artículo 301.2, parece requerir la producción de un resultado (la “ocultación” o “encubrimiento”)<sup>299</sup>. Desde una posición minoritaria, ARÁNGUEZ SÁNCHEZ ha afirmado que ninguna de las modalidades típicas en que se estructura el delito de blanqueo, tampoco la prevista en el artículo 301.2 CP, se configura como delito de resultado. Partiendo de que el blanqueo es siempre un proceso perfectible, “no puede afirmarse

---

<sup>295</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 413; ARIAS HOLGUÍN, D. P., *Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 301 y 302.

<sup>296</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 241.

<sup>297</sup> Vid. QUINTERO OLIVARES, G., *Comentarios a la Parte especial del Derecho penal*, op. cit., pág. 944; PALMA HERRERA, J. M., *Comentarios al Código Penal*, op. cit., pág. 686.

<sup>298</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 242. En el mismo sentido se pronuncia MUÑOZ CONDE para quien la relación entre los dos preceptos es de alternatividad. (*Derecho Penal. Parte Especial*, op. cit., pág. 515). Para MANZANARES SAMANIEGO, la aparente duplicidad que provoca la similitud de las descripciones típicas de los números 1 y 2 del art. 301 se resuelve interpretando el art. 301.2 CP como “un particular encubrimiento”, con preferencia conforme al principio de especialidad en el concurso de normas con el art. 451 CP. (*Código penal (adaptado a la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de julio). Comentarios y jurisprudencia*, op. cit., pág. 727).

<sup>299</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Comentarios al Código Penal*, op. cit., pág. 24.



con rotundidad que un bien ha sido definitivamente blanqueado, sino que cada conducta de blanqueo sólo supone un mayor distanciamiento del bien respecto a su origen ilícito”. Por ello, no es posible realizar nuevas conductas blanqueadoras sobre bienes que hayan sido objeto previamente de un primer blanqueo: “esas nuevas conductas no constituirán un nuevo delito de blanqueo cuando exista una unidad de contexto y de propósito, justamente porque no ha habido un nuevo resultado, ni se ha incrementado el peligro para la leal competencia en el mercado”<sup>300</sup>. La doctrina dominante considera, por el contrario, que la modalidad comisiva objeto de estudio en este apartado sí constituye un delito de resultado<sup>301</sup>. Resulta conveniente profundizar con mayor detenimiento en esta cuestión, de la que, como veremos, se desprenden importantes consecuencias prácticas. Para ello, partiremos del análisis de las notas que caracterizan a los delitos de resultado y, posteriormente, comprobaremos si las mismas están presentes en la configuración típica de la modalidad comisiva contenida en el artículo 301.2 CP.

De acuerdo con ROXIN, la estructura típica de los delitos de resultado requiere necesariamente la presencia de un resultado separado espacial y temporalmente de la acción<sup>302</sup>, resultado que es definido por RODRIGUEZ MOURULLO como “modificación del mundo exterior derivada de una determinada conducta”<sup>303</sup>. Para ALCALÉ SÁNCHEZ, dicho resultado se conforma como un resultado natural o efecto separado conceptualmente de la conducta que lo ha provocado, “esto es, que lo ha causado; esta separación entre ambas magnitudes se establece en dos sentidos: espacial y temporalmente (la acción se lleva a cabo en un lugar y a un tiempo y el resultado se produce en otro momento espacio-temporal)”<sup>304</sup>. Es el resultado precisamente el elemento diferencial que permite distinguir dicha tipología delictiva de los delitos de mera actividad: éstos se configuran a partir de la propia conducta, estando ausente en ellos cualquier efecto natural vinculado causalmente a la conducta<sup>305</sup> como elemento

---

<sup>300</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 251.

<sup>301</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Comentarios al Código Penal*, op. cit., págs. 463 y ss.; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 513 y 514; implícitamente, ARIAS HOLGUÍN, D. P., *Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 295.

<sup>302</sup> Vid. ROXIN, C., *Derecho Penal Parte General. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito*, op. cit., pág. 328.

<sup>303</sup> Vid. RODRÍGUEZ MOURULLO, G., *Derecho Penal. Parte General. Tomo I*, op. cit., pág. 273.

<sup>304</sup> Vid. ALCALÉ SÁNCHEZ, M., *El tipo de injusto en los delitos de mera actividad*. Ed. Comares. Granada, 2000, págs. 92 y 93. Si bien la conducta y el resultado pueden coincidir en el mismo lugar o en el mismo momento, no ha de ser así necesariamente.

<sup>305</sup> Vid. SILVA SÁNCHEZ, J. M., *El delito de omisión. Concepto y sistema*. Ed. BdeF. 2ª ed. Buenos Aires, 2006, pág. 440.

típico separable de la misma<sup>306</sup>. En los delitos de mera actividad, la conducta constituye el principio y el final de la realización típica<sup>307</sup>. El tipo de injusto se agota en una mera acción del autor<sup>308</sup>; es éste el punto final típico, mientras que los delitos de resultado precisan la producción de un resultado natural diferenciado de la conducta, concebido como “modificación del mundo exterior causada por la acción material”,<sup>309</sup>.

Teniendo en cuenta los elementos que definen cada una de las modalidades delictivas y que permiten diferenciarlas entre sí, a nuestro juicio es claro que el legislador ha configurado formalmente la modalidad típica prevista en el artículo 301.2 CP como un delito de resultado. En efecto, el precepto, que ni siquiera contiene expresión verbal alguna<sup>310</sup>, sólo describe la causación de un resultado (la ocultación o el encubrimiento) separado conceptualmente de la conducta<sup>311</sup>. Así lo ha entendido, como se ha dicho, la doctrina dominante, que mayoritariamente sostiene que la fórmula contenida en el artículo 301.2 del Código conforma una estructura de resultado. A nuestro juicio esta es precisamente la característica que permite diferenciar dicha variante comisiva de los comportamientos tipificados en el artículo 301.1 CP consistentes en realización de cualquier acto para ocultar o encubrir. La consumación de la modalidad contenida en el número 2 del precepto precisará realización de un acto concreto que suponga la efectiva ocultación de los bienes o activos, o el encubrimiento alguna de las características relacionadas con el origen ilícito los mismos que expresamente prevé la norma. Si bien la conducta típica procurará como fin último conseguir la total desvinculación entre el bien y su procedencia delictiva, la consecución dicho fin -teóricamente irrealizable, como vimos- no es necesaria para la consumación del tipo.

---

<sup>306</sup> Vid. ALCALÉ SÁNCHEZ, M., *El tipo de injusto en los delitos de mera actividad*, loc. cit. No ha de confundirse, como precisa la autora, el resultado como efecto natural y separado de la conducta, con el resultado jurídico o desvalor de resultado (puesta en peligro o lesión del bien jurídico), presente necesariamente tanto en los delitos de resultado material como en los de mera actividad. El primero pertenece al plano de la tipicidad, y permite diferenciar a los delitos de resultado de los de mera actividad, mientras que la ofensividad al bien jurídico tiene que ver con la antijuridicidad, y permite distinguir delitos de lesión y delitos de peligro en función del grado de ataque al bien jurídico. (Ibidem, págs. 152-155, 176 y ss.).

<sup>307</sup> Vid. MODOLELL GONZÁLEZ, J. L., “Consideraciones teóricas sobre la posibilidad de extensión de la imputación objetiva a los delitos de mera actividad”, *Imputación objetiva y dogmática penal*, Bolaños González, Mireya (Compiladora). Universidad de los Andes. Mérida, 2005, pág. 235.

<sup>308</sup> Vid. JESCHECK, H. H., *Tratado de Derecho Penal. Parte General*. Ed. Comares. Granada, 1993, pág. 237.

<sup>309</sup> Vid. ALCALÉ SÁNCHEZ, M., *El tipo de injusto en los delitos de mera actividad*, op. cit., pág. 155.

<sup>310</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Comentarios al Código Penal*, op. cit., pág. 24.

<sup>311</sup> Vid. ALCALÉ SÁNCHEZ, M., *El tipo de injusto en los delitos de mera actividad*, op. cit., pág. 37.

El hecho de que la modalidad típica objeto de estudio en este apartado se configure como un delito de resultado tiene importantes implicaciones prácticas: en lo que al tipo subjetivo se refiere, es preciso que el dolo abarque, como veremos en el lugar oportuno, el resultado y el nexo causal entre la acción y aquél; en el ámbito del tipo objetivo, el resultado de la ocultación o el encubrimiento ha de conectarse con la conducta desplegada por el sujeto activo de acuerdo con los criterios de la imputación objetiva; asimismo, sólo en el ámbito de los delitos de resultado podrá invocarse la cláusula de equivalencia prevista en el artículo 11 del Código, tal y como dicho precepto exige. Presenta esta cuestión especial interés en el ámbito de las contribuciones a los procesos de blanqueo a través de conductas omisivas: si partimos de la hipótesis de que los casos de ocultación o encubrimiento derivados de comportamientos omisivos no pueden configurarse como supuestos de omisión propia<sup>312</sup>, la responsabilidad penal derivada de aquéllos sólo podrá fundamentarse a través de la figura dogmática de la comisión por omisión, cuyo ámbito de aplicación se limita a los delitos de resultado. Por ello, cualquier ocultación o encubrimiento verificada a través de comportamientos omisivos sólo podrá ser inculpada a través de la modalidad típica prevista en el artículo 301.2 -siempre que se colmen los requisitos previstos en dicho precepto y se verifiquen las exigencias del artículo 11 del Código-; en ningún caso será posible deducir responsabilidad penal por una conducta omisiva tendente a la ocultación o al encubrimiento a través de la fórmula “realización de cualquier acto” con las finalidades referidas prevista en el artículo 301.1 CP, que, como vimos, contiene un delito de resultado cortado y no un delito de resultado material. Todas estas cuestiones serán objeto de un análisis más detallado en el apartado segundo del siguiente capítulo.

Por último, queremos referirnos a otra cuestión que en la doctrina ha suscitado cierto debate, y que tiene que ver con la desafortunada referencia a “*alguno de los delitos expresados en el apartado anterior*”. Tradicionalmente, algunos autores han interpretado que esta remisión se dirige a los delitos de blanqueo del número 1 del artículo 301 CP, de tal modo que el número 2 del precepto “se refiere a bienes que ya han sufrido una primera transformación, castigada en el número anterior”<sup>313</sup>. Según esta

---

<sup>312</sup> En tanto que los delitos de omisión propia inculpan “únicamente una omisión desligada de cualquier posible consecuencia” (vid. RODRÍGUEZ MOURULLO, G., *Derecho Penal. Parte General. Tomo I*, loc. cit.), estructura típica que no coincide con ninguna de las modalidades comisivas que integran el tipo básico del delito de blanqueo (vid. *infra*, apartado 4.2.2 del capítulo IV (págs. 360 y ss.).

<sup>313</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, loc. cit. Se suman a esta opinión CALDERÓN CEREZO (“El marco jurídico del blanqueo de capitales: aspectos penales y administrativos”, op.

lectura, el artículo 301.2 supone “la tipificación expresa de la segunda fase del proceso legitimador”<sup>314</sup>, o del “doble enmascaramiento”<sup>315</sup>: “lo que aquí se castigan son ulteriores operaciones de blanqueo, esto es, cuando los bienes ya han sufrido una primera transformación que se castiga en el párrafo 1 del art. 301.1, o que han sido adquiridos u obtenidos con el producto de la misma”<sup>316</sup>. Esta solución interpretativa incluso ha sido acogida en ocasiones acogida por la Sala Segunda, al considerar que los comportamientos descritos por los números 1 y 2 del artículo 301 CP hacen referencia a las sucesivas fases del blanqueo en las que el agente puede intervenir. Así, en su Sentencia 1070/2003, de 22 de julio, tras reconocer “que pueden solaparse” las conductas previstas en los números 1 y 2 del precepto, el Alto Tribunal afirma que “la distinción entre ambos no está tanto en la clase de operación realizada como en la fase sucesiva en que se produce el blanqueo de bienes, pues de lo que se trata es de hacer posible la intervención del derecho penal cualquiera que haya sido el destino ulterior de dichos bienes, de forma que en supuestos de sucesivas operaciones de blanqueo es aplicable el número segundo”.

Desde una perspectiva a nuestro juicio más acertada, actualmente se admite de manera general que “la expresión que comentamos no es más que una licenciosa remisión al mismo delito previo que establece el párrafo primero del art. 301, esto es, cualquier delito”<sup>317</sup>. Creemos que la adecuada interpretación del precepto -que en nada contradice su literalidad-, apunta a que la remisión que hace el artículo 301.2 CP *-delitos expresados en el apartado anterior-* no va referida al delito previsto en dicho

---

cit., pág. 4) y LÓPEZ BARJA DE QUIROGA/ALONSO GONZÁLEZ/ENCINAR DEL POZO (*Código Penal comentado con jurisprudencia sistematizada y concordancias*, op. cit., págs. 935 y 938).

<sup>314</sup> Así lo expresa VIDALES RODRÍGUEZ. La autora entiende que si “la conversión, transmisión o adquisición de estos bienes ha tenido lugar en un momento anterior a la realización de esta conducta, (...) de lo que se trata ahora es, precisamente, de ocultar o encubrir la previa sustitución de unos bienes por otros”. (*Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código penal de 1995*, op. cit., págs. 106 y 107).

<sup>315</sup> Así lo califica DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO (*El delito de blanqueo de capitales en Derecho Español*, op. cit., pág. 21). Similar expresión emplean para referirse a este fenómeno SUÁREZ-MIRA RODRÍGUEZ (*Manual de Derecho penal. Tomo II. Parte especial*, op. cit., pág. 325), CALDERÓN CERREZO (“Algunos aspectos críticos del blanqueo de capitales. Legislación y jurisprudencial”, op. cit., pág. 78) y MORENO CANOVÉS/RUIZ MARCO (*Delitos socioeconómicos*, op. cit., pág. 395).

<sup>316</sup> Vid. DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, J., *El delito de blanqueo de capitales en Derecho Español*, op. cit., pág. 21. Vid. asimismo SERRANO GONZÁLEZ, A./SERRANO MAÍLLO, A., *Derecho Penal. Parte Especial*, op. cit., pág. 569. Razonables críticas permiten descartar esta interpretación, pues la versatilidad de los mecanismos de blanqueo impide “diferenciar sus fases con tanta nitidez como para que el legislador haya decidido darles reconocimiento legal”. Asimismo, el texto de la Convención de Viena -que inspira la dicción del precepto penal como tantas veces se ha dicho-, circunscribe “los bienes cuya naturaleza, origen, ubicación, etc., se oculta o encubre, a los procedentes de un delito de tráfico de drogas, y no a los que ya hubieren sido sometidos a una primera operación de blanqueo”. (Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 491 y 492).

<sup>317</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 237.

número anterior (blanqueo) sino a aquellos a los que se refiere el número anterior, esto es, a cualquier delito (antecedente). Así lo ha entendido la doctrina más actualizada<sup>318</sup>, si bien hay quien a día de hoy sostiene la tesis contraria<sup>319</sup>.

### **3.4. LA PUNICIÓN DEL AUTOBLANQUEO**

#### **3.4.1. INTRODUCCIÓN. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

El blanqueo de capitales constituye una actividad post-delictiva<sup>320</sup> o, si se prefiere, un delito de segundo grado<sup>321</sup>: su comisión precisa la previa realización de un hecho típicamente antijurídico<sup>322</sup>, cuyo beneficio económico constituirá el objeto material del blanqueo. Es frecuente que quien ha participado en el delito previo intervenga, a su vez, en operaciones posteriores de blanqueo para desvincular los beneficios económicos obtenidos de su vestigio delictivo. Son dichos supuestos los que tanto la doctrina como la jurisprudencia suele denominar “autoblanqueo”.

La principal problemática que presenta el autoblanqueo gira en torno a su punibilidad. Se discute si es posible que el autor de cualquier delito del que derive algún tipo de rentabilidad económica pueda ser sancionado, además, por un posterior delito -el de blanqueo- cuando realice alguna de las conductas previstas en el tipo penal. Esto es, si el autor o partícipe en el delito previo puede ser a su vez sujeto activo del delito de blanqueo, o si, por el contrario, su participación en el hecho antecedente impide que sea sancionado por el blanqueo de las ganancias procedentes del hecho delictivo propio.

---

<sup>318</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, loc. cit.; ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, loc. cit.; MANZANARES SAMANIEGO, J. L., *Código penal (adaptado a la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de julio). Comentarios y jurisprudencia*, op. cit., pág. 727; QUINTERO OLIVARES, G., *Comentarios a la Parte especial del Derecho penal*, op. cit., pág. 944; ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., pág. 153; id., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., pág. 237. Incluso para este autor, la interpretación opuesta contradice el tenor literal del art. 301.2, pues “éste registra el término “delitos” en plural, y el Código concibe el blanqueo de forma unitaria, por lo que si pretendiese aludir al reciclaje se habría utilizado el singular “delito”. (*El Delito de blanqueo en el Código penal español*, loc. cit.).

<sup>319</sup> Vid. ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 345; MOLINA MANSILLA, M<sup>a</sup>. del C./MOLINA MANSILLA, L., *El blanqueo de dinero*, op. cit., pág. 24.

<sup>320</sup> Vid. QUINTERO OLIVARES, G., “Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la recepción civil”, op. cit., pág. 8.

<sup>321</sup> Vid. BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I. /FABIÁN CAPARRÓS, E. A., “La emancipación del delito de blanqueo de capitales en el Derecho penal español”, op.cit., pág. 126.

<sup>322</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 537.

Si bien, en la redacción original del artículo 301 del vigente Código penal, a diferencia de lo que ocurría con delitos de receptación o de encubrimiento, no se hacía referencia alguna a la posibilidad de sancionar el autoblanqueo, tras la última reforma operada en el artículo 301 CP, del año 2010, se ha previsto expresamente la relevancia típica de esta controvertida figura en relación con las modalidades de acción contenidas en el número 1 del precepto referido. La incorporación del autoblanqueo al tipo genera, como veremos a lo largo del presente apartado, importantes problemas dogmáticos. Podrá comprobarse que una aplicación literal del precepto provocará “extrañas consecuencias”, dando cabida a la incriminación de conductas que se apartan sustancialmente del ilícito que el legislador penal pretende sancionar.

El presente apartado se estructura a su vez en diferentes subapartados. En ellos se analizará, en primer lugar, el debate suscitado en torno a esta discutida figura y las diferentes propuestas tanto doctrinales como jurisprudenciales a favor y en contra de su punición. Posteriormente se estudiará de qué modo ha repercutido tanto en la doctrina penal como en la jurisprudencia la incorporación del autoblanqueo al tipo penal como consecuencia de la modificación operada por la LO 5/2010, de 22 de junio. Finalmente expondremos nuestra valoración personal a la problemática analizada, proponiendo *de lege ferenda* la supresión de la previsión legal expresa del autoblanqueo en el artículo 301.1 CP.

### **3.4.2. EL DEBATE DOCTRINAL Y LAS DIFERENTES SOLUCIONES. INTERPRETACIONES JURISPRUDENCIALES CONTRADICTORIAS**

Como se ha dicho, la configuración original del artículo 301 CP no expresaba si el autor del delito previo podía ser asimismo considerado destinatario<sup>323</sup> de las diferentes modalidades de acción en que el blanqueo puede cometerse. La indeterminación normativa abrió un intenso debate doctrinal e incentivó una respuesta jurisprudencial poco clara y vacilante<sup>324</sup>, a través de pronunciamientos sustentados en líneas interpretativas abiertamente contradictorias<sup>325</sup>.

---

<sup>323</sup> Ibidem.

<sup>324</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 373; CARPIO DELGADO, J. del, “La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 6; ABEL SOUTO, M., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de

Ya hemos visto que una de las novedades “de mayor calado”<sup>326</sup> introducidas a través de la reforma operada por la LO 5/2010 en el artículo 301 CP ha sido la incorporación del autoblanqueo. La previsión normativa expresa de esta discutida figura jurídica no ha hecho sino reavivar una polémica doctrinal<sup>327</sup> existente desde las primeras formulaciones del delito de blanqueo de capitales. En efecto, la incorporación de los artículos 546 bis f) y 344 bis h) e i) al anterior texto punitivo<sup>328</sup> llevó a algunos autores a cuestionar si el recién tipificado delito de blanqueo podía abarcar, como sujetos activos del mismo, a los autores o partícipes en el delito previo del cual derivaban los bienes sobre los que había de recaer la acción típica. Tras la entrada en vigor del Código penal de 1995, cuyo artículo 301 nada expresaba al respecto, la doctrina continuó dividida respecto a esta discutida materia.

Para un sector doctrinal, la falta de exclusión expresa en el precepto de los partícipes en el delito previo como sujeto activo avalaba la tesis contraria a la punición del autoblanqueo<sup>329</sup>, solución que debía rechazarse de plano, de conformidad con

---

dinero”, op. cit., pág. 78; id., “Jurisprudencia penal reciente sobre el blanqueo de dinero, volumen del fenómeno y evolución del delito en España”, op. cit., pág. 150; MATA LLÍN EVANGELIO, A., “El “autoblanqueo” de capitales”, op. cit., pág. 18.

<sup>325</sup> Vid. REBOLLO VARGAS, R., “Receptación y blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 778.

<sup>326</sup> Vid. QUINTERO OLIVARES, G., “Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil”, loc. cit.; MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Receptación y blanqueo de capitales (arts. 301 y 302)”, op. cit., pág. 339; CORCOY BIDASOLO, M., “Crisis de las garantías constitucionales a partir de las reformas penales y de su interpretación por los tribunales”, op. cit., pág. 168; VIDALES RODRÍGUEZ, C., “Blanqueo, ¿qué es blanqueo? (Estudio del artículo 301.1 del Código Penal Español tras la reforma de la LO 5/2010)”, op. cit., pág. 10.

<sup>327</sup> Vid. STS 858/2013, de 19 de noviembre.

<sup>328</sup> A través de las Leyes Orgánicas 1/1988, de 24 de marzo, y 8/1992, de 23 de diciembre, respectivamente.

<sup>329</sup> Vid. VIDALES RODRÍGUEZ, C., *Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código penal de 1995*, op. cit., pág. 111; PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 370 y ss.; MORENO CÁNOVES, A./ RUIZ MARCO, F., *Delitos socioeconómicos*, op. cit., pág. 386; COBO DEL ROSAL, M./ZABALA LOPEZ-GOMEZ, C., *Blanqueo de capitales: abogados, procuradores y notarios, inversores bancarios y empresarios*, Ed. Marcial Pons. Madrid, 2005, págs. 96 y 97; ZARAGOZA AGUADO, J. A., “El blanqueo de bienes de origen criminal”, op. cit., pág. 386, si bien con posterioridad, parece el autor decantarse por la tesis opuesta. (Cfr. id., “Artículo 301”, op. cit., págs. 1161 y 1162). En la actualidad, tras la modificación del artículo 301 CP operada por la LO 5/2010, se han pronunciado en contra de la punición del autoblanqueo, en algunos casos respecto a las conductas de posesión y utilización, y en otros, respecto a todas las modalidades comisivas, QUINTERO OLIVARES, G., “Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil”, op. cit., págs. 10 y ss.; CASTRO MORENO, A., “Reflexiones críticas sobre las nuevas conductas de posesión y utilización en el delito de blanqueo de capitales en la reforma del anteproyecto de 2008”, op. cit., págs. 1389-1391; MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Receptación y blanqueo de capitales (arts. 301 y 302)”, op. cit., pág. 344; id., “Ganancias criminales y ganancias no declaradas (El desbordamiento del delito fiscal y del blanqueo)”, op. cit., págs. 671 y ss.; id., “Un matrimonio de conveniencia: blanqueo de capitales y delito fiscal”, op. cit., pág. 23; ABEL SOUTO, M., “La reforma penal española de 2010 sobre blanqueo, las nuevas técnicas de comisión delictiva y el uso de las telecomunicaciones para el blanqueo”, op. cit., págs. 173 y 174; id., “Conclusiones: Jurisprudencia penal reciente sobre el blanqueo de dinero, volumen del fenómeno y evolución del delito en España”, op. cit., págs. 152 y ss.; MOLINA FERNÁNDEZ, F., “¿Qué se protege en el delito de blanqueo de capitales?: reflexiones sobre un bien jurídico problemático, y a la vez aproximación a la participación en el delito”, op. cit., pág. 122; GONZÁLEZ RUS, J. J., “Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico”, op. cit., pág. 641; LOBO GONZÁLEZ, R./ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, M., *Código Penal. Parte especial. Tomo II. Vol. II*, op.

diversas líneas argumentales, principalmente el privilegio del autoencubrimiento, que ampara a todo partícipe en el delito previo (al que no le es exigible otra conducta), y la consideración del blanqueo como agotamiento del delito previo propio, cuyo injusto es abarcado por éste, constituyendo así un hecho posterior copenado.

En efecto, algunos autores consideraron que el blanqueo cometido por el autor del delito previo había de entenderse como un *hecho posterior copenado*<sup>330</sup>, toda vez que forma parte del hecho delictivo anterior ya penado<sup>331</sup>. Constituiría su agotamiento<sup>332</sup> o consumación<sup>333</sup>, de tal forma que entre ambos ilícitos habría de apreciarse un concurso de normas<sup>334</sup> o de leyes<sup>335</sup> a resolver conforme al principio de la consunción<sup>336</sup>.

---

cit., pág. 200; CARPIO DELGADO, J. del, “La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 6-8; GALLEGO SOLER, J. I., *Comentarios al Código Penal. Reforma LO 5/2010*, op. cit., pág. 665; MATA LLÍN EVANGELIO, A., “El “autoblanqueo” de capitales”, op. cit., págs. 21 y ss.; FERNÁNDEZ TERUELO, J. G., “El nuevo modelo de reacción penal frente al blanqueo de capitales (los nuevos tipos de blanqueo, la ampliación del comiso y la integración del blanqueo en el modelo de responsabilidad penal de las empresas)”, op. cit., pág. 13; CORCOY BIDASOLO, M., “Crisis de las garantías constitucionales a partir de las reformas penales y de su interpretación por los tribunales”, op. cit., págs. 168 y 169; VARELA CASTRO, L., “Últimas líneas jurisprudenciales en sede de blanqueo”, *III Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, págs. 387 y 388.

<sup>330</sup> En la doctrina española han fundamentado la exclusión de la punición del autoblanqueo en el expediente del hecho posterior copenado PALMA HERRERA (*Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 382 y ss.), MORENO CÁNOVES/RUIZ MARCO (*Delitos socioeconómicos*, op. cit., pág. 386), QUINTERO OLIVARES (“Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil”, op. cit., pág. 11), CASTRO MORENO (“Reflexiones críticas sobre las nuevas conductas de posesión y utilización en el delito de blanqueo de capitales en la reforma del anteproyecto de 2008”, op. cit., pág. 1390), CARPIO DELGADO (“La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 24 y 25), MATA LLÍN EVANGELIO (“El “autoblanqueo” de capitales”, op. cit., págs. 21 y ss.), CORCOY BIDASOLO (“Crisis de las garantías constitucionales a partir de las reformas penales y de su interpretación por los tribunales”, op. cit., pág. 168) y MARTÍNEZ-ARRIETA MÁRQUEZ DE PRADO (*El autoblanqueo. El delito fiscal como antecedente del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 40). También parece haber admitido implícitamente, con matices, la exclusión de la punición del autoblanqueo como hecho posterior copenado SILVA SÁNCHEZ, al afirmar que sólo podrán considerarse como actos posteriores copenados aquellos supuestos en los que “la intervención del autor o del partícipe en el hecho principal en la posterior receptación tiene el sentido de autoencubrimiento”. (“La receptación específica”, op. cit., págs. 491 y 492).

<sup>331</sup> Vid. MARTÍNEZ-ARRIETA MÁRQUEZ DE PRADO, I., *El autoblanqueo. El delito fiscal como antecedente del blanqueo de capitales*, loc. cit.

<sup>332</sup> Vid. QUINTERO OLIVARES, G., “Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil”, op. cit., págs. 10 y 11.

<sup>333</sup> Afirma MATA LLÍN EVANGELIO que ha de distinguirse el agotamiento del delito (el logro del objetivo por el que se delinquirió, que supone normalmente la posesión de los bienes derivados de su comisión), de su consumación (realización de todos los elementos integrados en el tipo). La autora hace esta diferenciación, como veremos, al distinguir -en el ámbito del autoblanqueo- la posesión de bienes procedentes de delitos de apoderamiento, como acto de consumación de éste, de la posesión de bienes procedentes de otros delitos, que constituirá su agotamiento. (“El “autoblanqueo” de capitales”, op. cit., pág. 26).

<sup>334</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 383.

<sup>335</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 528.

<sup>336</sup> De acuerdo con MATA LLÍN EVANGELIO, el principio de la consunción determina que un delito precedente o principal incluye el desvalor de otro ilícito penal también realizado con la conducta del sujeto, si bien éste último integra “un acto posterior de aseguramiento, utilización o aprovechamiento de los bienes derivados del delito previo, ya penado, por tanto, con la figura principal”. La doctrina acepta el principio de



El fundamento de esta interpretación descansaría en que el hecho previo abarca el contenido de injusto del delito de blanqueo<sup>337</sup>, por lo que quien realiza actos de enmascaramiento sobre los beneficios del delito previamente por él cometido sólo podría ser sancionado por el delito antecedente<sup>338</sup>. Para PALMA HERRERA, nada impide acudir a esta solución por el hecho de que estemos en presencia de conductas diferenciadas -aunque conectadas-, pues lo relevante no es el hecho en sentido naturalístico, sino el hecho típico: “desde un punto de vista jurídico-penal de ofensa para un bien jurídico no puede sino mantenerse la existencia de una unidad de acto, de un único supuesto fáctico”, lo que “no excluye la posibilidad de apreciar el concurso de leyes”<sup>339</sup>. Incluso si admitiésemos que el blanqueo incide en un nuevo bien jurídico, considera PALMA que podría “hablarse de acto copenado y su consunción”, pues “el contenido de injusto del delito previo abarca el contenido de injusto de los actos de blanqueo cuando son llevados a cabo por el autor de ese delito previo”, por lo que en estos supuestos “nos encontramos ante un caso de concurso de normas y no de delitos”<sup>340</sup>. En fin, “castigar a quien cometió el delito previo por ese delito y por el de blanqueo, sería castigarle por la obtención ilícita de una riqueza y por el natural aprovechamiento de la misma”<sup>341</sup>. Por ello, en estos casos, la punición ulterior del blanqueo casos infringiría el principio *non bis in idem*<sup>342</sup>.

---

manera general, si bien algunos autores condicionan su admisión a determinadas exigencias: “que el hecho posterior no se dirija contra otro bien jurídico distinto al vulnerado por el delito principal, y/o que ambas realizaciones típicas supongan una sola intención, ínsita en el delito principal.” (“El “autoblanqueo” de capitales”, op. cit., pág. 25). Vid., asimismo, MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, 9ª ed., op. cit., pág. 666; LANDECHO VELASCO, C. M., *Derecho Penal Español. Parte General*, op. cit., págs. 145 y 146.

<sup>337</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 390 y 391; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 528.

<sup>338</sup> Siempre que, advierte PALMA HERRERA, el autor del delito previo no cometa otro hecho típico - diferente a la ocultación del origen delictivo del bien, por ejemplo una falsedad documental- cuyo desvalor no sea comprendido por el delito previo. En estos casos, la antijuridicidad del hecho previo no se extenderá al nuevo ilícito, que será merecedor de un reproche penal autónomo y diferenciado. (*Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 394).

<sup>339</sup> Ibidem, págs. 384 y 385. En sentido similar, MATA LLÍN EVANGELIO, A., “El “autoblanqueo” de capitales”, op. cit., pág. 36, nota a pie de página nº 124.

<sup>340</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 386 y 387 *passim*.

<sup>341</sup> Ibidem, pág. 389.

<sup>342</sup> Vid. CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Comisión de Estudios e Informes), Informe al anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, de 18 de febrero de 2009, op. cit., pág. 123; PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 383 y 389; MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de capitales”, 3ª ed., pág. 494; ABEL SOUTO, M., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 80; id., “Blanqueo, innovaciones tecnológicas, amnistía fiscal de 2012 y reforma penal”, op. cit., pág. 35; id., “La reforma penal española de 2010 sobre blanqueo, las nuevas técnicas de comisión delictiva y el uso de las telecomunicaciones para el blanqueo”, op. cit., pág. 174; id., “Conclusiones: Jurisprudencia penal reciente sobre el blanqueo de dinero, volumen del fenómeno y evolución del delito en España”, op. cit., pág. 154; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 436, 473 y 528; id., “El delito fiscal como actividad delictiva previa del blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 36; CASTRO

ARANGUEZ SÁNCHEZ rechazó el razonamiento expuesto al considerar que la justificación en todo caso de la conducta blanqueadora llevada a cabo por el autor o el partícipe en el delito previo impediría aplicar el delito de blanqueo quien, sin intervenir, en el delito previo haya colaborado con los primeros en la acción de blanqueo, solución que, afirmó el monografista, sería “manifiestamente injusta”<sup>343</sup>. También BLANCO CORDERO hanegado la posibilidad de acudir al recurso del hecho posterior copenado para excluir la incriminación por el blanqueo al autor del hecho delictivo previo. Para el monografista, sólo es posible acudir al expediente del hecho posterior copenado cuando el ilícito posterior no suponga el menoscabo de un nuevo bien jurídico, y ello no ocurre en el delito de blanqueo de capitales. Éste, como delito autónomo, incide en bienes jurídicos diferenciados a los afectados por el delito previo. En definitiva, el desvalor del hecho previo no abarca en su integridad el desvalor del posterior blanqueo<sup>344</sup>.

El recurso al *privilegio del autoencubrimiento* ha pretendido superar esta barrera dogmática. De acuerdo con este principio, que encuentra su fundamento en la no exigibilidad de otra conducta distinta a la realizada, no es jurídicamente legítimo impedir a quien ha cometido un delito que no trate de evitar ser descubierto para eludir las consecuencias asociadas a su ilícito actuar (en el caso del blanqueo, realizando actos de enmascaramiento sobre los beneficios ilegítimamente obtenidos para borrar su rastro delictivo)<sup>345</sup>. Puesto que el delito de blanqueo está integrado en gran medida por

---

MORENO, A., “Reflexiones críticas sobre las nuevas conductas de posesión y utilización en el delito de blanqueo de capitales en la reforma del anteproyecto de 2008”, op. cit., pág. 1390; MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Receptación y blanqueo de capitales (arts. 301 y 302)”, op. cit., pág. 345; id., “Prevención y sanción del blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 379; MUÑOZ CONDE, F., *Derecho Penal. Parte Especial*, op. cit., pág. 515 (sólo en los supuestos de posesión y utilización); NOREÑA SALTO J. R., *Estructura del delito de blanqueo de capitales y su relación con el delito antecedente*, op. cit., pág. 9; GONZÁLEZ RUS, J. J., “Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico”, op. cit., pág. 641; CARPIO DELGADO, J. del, “La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 23; MARTÍNEZ-ARRIETA MÁRQUEZ DE PRADO, I., *El autoblanqueo. El delito fiscal como antecedente del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 41; CORCOY BIDASOLO, M., “Crisis de las garantías constitucionales a partir de las reformas penales y de su interpretación por los tribunales”, op. cit., pág. 168; ORTS BERENGUER, E., “Delimitación entre encubrimiento, receptación blanqueo respecto a las modalidades de posesión y uso incorporadas en el artículo 301 por la L.O. 5/2010”, op. cit., pág. 255.

<sup>343</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 172.

<sup>344</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 533.

<sup>345</sup> Vid. COBO DEL ROSAL, M./ZABALA LOPEZ-GOMEZ, C., *Blanqueo de capitales: abogados, procuradores y notarios, inversores bancarios y empresarios*, op. cit., págs. 97 y ss.; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 534 y 535. Como afirma MARTÍNEZ-ARRIETA MÁRQUEZ DE PRADO, “resultaría ilógico que, al que ha delinquido, se le obligue a observar la norma (...) no usando, incluso no poseyendo, lo obtenido ilícitamente”. (*El autoblanqueo. El delito fiscal como antecedente del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 44). En contra de la fundamentación de la impunidad del autoblanqueo a través del privilegio del autoencubrimiento, vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 377-381; CAMPOS NAVAS, D., “Lavado de dinero y delito fiscal. Posibilidad de que delito fiscal sea el delito precedente al de blanqueo”, op. cit., págs. 1407 y 1408; FARALDO CABANA, P., “Cuestiones relativas a la autoría de los delitos de blanqueo de bienes”,

conductas de naturaleza favorecedora, un sector doctrinal ha planteado la posibilidad de aplicar analógicamente en él el privilegio previsto en el artículo 451 CP para el delito de encubrimiento<sup>346</sup>. Se afirma, asimismo, que la conducta del autor del delito previo, tratando de enmascarar el origen del rédito del delito, no es el “prototipo” de acto que el tipo de blanqueo está llamado a sancionar<sup>347</sup>. El tipo penal parece orientado, más bien, a impedir la reintegración de grandes masas monetarias en los cauces regulares de la economía. En efecto, la comisión de delitos económicamente rentables obedece siempre a un mismo fin: la obtención de un beneficio patrimonial. El posterior blanqueo de dicho beneficio por el mismo autor del hecho previo no responde sino a una legítima vocación de su aprovechamiento económico, y por tanto carece de sentido que a quien ha cometido el delito subyacente se le exija conducirse conforme a la norma, desinteresándose del aprovechamiento económico de los efectos de aquél<sup>348</sup>.

Aquel sector doctrinal que afirma la relevancia penal del autoblanqueo<sup>349</sup> parte de la sustantividad y autonomía del tipo<sup>350</sup>: si el bien jurídico protegido por el blanqueo es distinto al que resulta menoscabado por el hecho antecedente<sup>351</sup>, el desvalor derivado

---

*Criminalidad organizada, terrorismo e inmigración. Retos contemporáneos de la política criminal*, Puente Aba, L. M. (Dir.). Ed. Comares. Granada, 2008. Versión digitalizada disponible en el enlace [http://www.ecrim.es/publications/2008\\_AutoriaBlanqueo.pdf](http://www.ecrim.es/publications/2008_AutoriaBlanqueo.pdf); id., “El blanqueo de capitales tras la reforma de 2010”, op. cit., pág. 32; DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, M., “El castigo del autoblanqueo en la reforma penal de 2010. La autoría y participación en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 284-285.

<sup>346</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 534.

<sup>347</sup> Ibidem, págs. 535 y 356.

<sup>348</sup> Vid. MARTÍNEZ-ARRIETA MÁRQUEZ DE PRADO, I., *El autoblanqueo. El delito fiscal como antecedente del blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 44 y 45.

<sup>349</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 176-178; FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 318, 368 y 369; FARALDO CABANA, P., “Los autores del delito de blanqueo de bienes en el Código Penal español de 1995. Especial alusión a los proveedores de bienes y/o servicios: el caso de los abogados y asesores fiscales”, op. cit., págs. 138 y ss.; id., “Antes y después de la tipificación expresa del autoblanqueo de capitales”, op. cit., págs. 47 y ss.; MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de capitales”, 3ª ed., op. cit., págs. 493 y 494; LOMBARDEO EXPÓSITO, L. M. de, “La perspectiva penal”, op. cit., pág. 168; CAMPOS NAVAS, D., “Lavado de dinero y delito fiscal. Posibilidad de que delito fiscal sea el delito precedente al de blanqueo”, op. cit., págs. 1406-1409; BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I./FABIÁN CAPARRÓS, E. A., “La emancipación del delito de blanqueo de capitales en el Derecho penal español”, op. cit., págs. 135 y 136; MUÑOZ CONDE, F., *Derecho Penal. Parte Especial*, pág. 515; FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y TORRES, J., *Blanqueo de capitales y principio de lesividad*, op. cit., págs. 293 y 294. También admite la punición del autoblanqueo DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, si bien matiza el autor, citando a QUINTERO OLIVARES, que “el legislador debería haber precisado mejor los elementos del tipo que deben concurrir cuando el autor es el propio generador del llamado «dinero sucio»”. (“El blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 467; QUINTERO OLIVARES, G., “Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil”, op. cit., pág. 12).

<sup>350</sup> Vid. CAMPOS NAVAS, D., “Lavado de dinero y delito fiscal. Posibilidad de que delito fiscal sea el delito precedente al de blanqueo”, op. cit., págs. 1408 y 1409; BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I./FABIÁN CAPARRÓS, E. A., “La emancipación del delito de blanqueo de capitales en el Derecho penal español”, op. cit., pág. 136.

<sup>351</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., “Conclusiones: Jurisprudencia penal reciente sobre el blanqueo de dinero, volumen del fenómeno y evolución del delito en España”, op. cit., pág. 313. En el mismo sentido, vid.

del primero no queda absorbido por el delito previo, y, en consecuencia, debe ser sancionado separadamente. De acuerdo con esta línea interpretativa, DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO sostiene que no cabe, en primer lugar, apelar al privilegio del autoencubrimiento, pues “la impunidad del encubrimiento cesa cuando se comete otro delito”, y en cualquier caso, “el blanqueo es bastante más que un encubrimiento” que menoscaba, además de a la administración de justicia, al orden socioeconómico; tampoco, en segundo lugar, puede considerarse que el blanqueo es un acto copenado en el delito previo, toda vez que cada delito lesiona bienes jurídicos diferenciados<sup>352</sup>. Señala FARALDO CABANA que “no puede afirmarse sin más que el aprovechamiento o la ocultación de los bienes procedentes de la comisión del delito previo integre materialmente la fase de agotamiento de ese delito. Supone el simple agotamiento la conducta consistente en el mero disfrute del beneficio ilícitamente obtenido o su transformación en bienes de consumo que aprovecha directamente el interviniente en el delito previo, pues en estos casos no se dificulta su detección por la Administración de Justicia. En cambio, se aplicará un concurso real entre el delito previo y el de blanqueo cuando ese beneficio sirve de base para una actividad comercial o de inversión”<sup>353</sup>.

Asimismo, afirman los autores que defienden la punibilidad del autoblanqueo, existen otros argumentos que apoyan esta tesis: en primer lugar, a diferencia de lo que ocurre en el encubrimiento y en la receptación, la pena prevista para el delito de blanqueo no está legalmente limitada por la asociada al delito previo, pudiendo aquél ser sancionado con una pena superior<sup>354</sup>. En segundo lugar, si el legislador, en el propio tenor literal del artículo 301 CP, no excluye de forma expresa como autor del blanqueo a quien ha participado en el delito previo, y si lo hace en los delitos de encubrimiento y

---

FARALDO CABANA, P., “Cuestiones relativas a la autoría de los delitos de blanqueo de bienes”, op. cit.; id., “El blanqueo de capitales tras la reforma de 2010”, op. cit., pág. 32.

<sup>352</sup> Vid. DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, M., “El castigo del autoblanqueo en la reforma penal de 2010. La autoría y participación en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 283. Sin embargo, el autor admite excepciones al principio general: en aquellos supuestos en los que “el autoblanqueo no pase de ser un autoencubrimiento, ya no tiene razón de ser castigarlo separadamente”, si bien “no es posible determinar con precisión respecto a qué delitos previos sucederá esto (si es que hay más de uno)”. Según DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, parece claro que habría que excluir la punición del autoblanqueo cuando los fondos procedan de un delito fiscal, pues “podría resultar que los intereses socioeconómicos protegidos en el blanqueo coincidieran en buena parte con los afectados por el delito previo contra la Hacienda Pública”, y respecto a las modalidades típicas de posesión y utilización, en las que “no se observa la afectación relevante de ningún nuevo bien jurídico”. En estos casos, para excluir el castigo separado del autoblanqueo, podría apelarse “a la ausencia de insuficiente antijuridicidad material [o al] principio de insignificancia”. (Ibidem, págs. 287 y 290).

<sup>353</sup> Vid. FARALDO CABANA, P., “Cuestiones relativas a la autoría de los delitos de blanqueo de bienes”, op. cit.; id., “Antes y después de la tipificación expresa del autoblanqueo de capitales”, op. cit., pág. 51.

<sup>354</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 538; DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, M., “El castigo del autoblanqueo en la reforma penal de 2010. La autoría y participación en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 285.

de receptación, “es porque desea que tales sujetos puedan ser condenados, además de por el delito previo, por el de blanqueo”<sup>355</sup>. En realidad, ha reconocido PALMA HERRERA, también del tenor literal del precepto se pueden extraer argumentos para acoger la tesis contraria. Así, “la segunda parte del número primero del artículo 301 -«para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos»- difícilmente tendría sentido si se entiende que el sujeto activo puede ser la misma persona que ya participó en la infracción previa”<sup>356</sup>. Asimismo, advierte MATALLÍN EVANGELIO, la exigencia típica del “conocimiento del origen delictivo de los bienes (...) supone un contrasentido con relación al partícipe en el delito previo”<sup>357</sup>, toda vez que, de acuerdo con FERNÁNDEZ TERUELO, “entra en contradicción con la previsión subjetiva contenida en el propio precepto”<sup>358</sup>.

Por su parte, el *tratamiento jurisprudencial del autoblanqueo* no ha mantenido una dirección hermenéutica clara y homogénea, tal y como admite el propio Tribunal Supremo en su Sentencia 279/2013, de 6 de marzo<sup>359</sup>: si bien la tendencia interpretativa inicial huía, con escaso rigor argumentativo<sup>360</sup>, de la tesis de la punición del autoblanqueo<sup>361</sup> -existiendo, no obstante, algunos pronunciamientos que apuntaban a otra dirección<sup>362</sup>-, la exégesis jurisprudencial fue poco a poco aproximándose a la admisión del autoblanqueo, en atención a la autonomía del tipo de blanqueo respecto al delito antecedente y a la afección de las dos infracciones a bienes jurídicos diferenciados<sup>363</sup>. De acuerdo con la STS 279/2013, que acabamos de referir, respecto al

---

<sup>355</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 374; FARALDO CABANA, P., “Los autores del delito de blanqueo de bienes en el Código Penal español de 1995. Especial alusión a los proveedores de bienes y/o servicios: el caso de los abogados y asesores fiscales”, op. cit., pág. 143; id., “Cuestiones relativas a la autoría de los delitos de blanqueo de bienes”, op. cit.; DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, M., “El castigo del autoblanqueo en la reforma penal de 2010. La autoría y participación en el delito de blanqueo de capitales”, loc. cit.

<sup>356</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 374 y 375.

<sup>357</sup> Vid. MATALLÍN EVANGELIO, A., “El “autoblanqueo” de capitales”, op. cit., págs. 17 y 22.

<sup>358</sup> Vid. FERNÁNDEZ TERUELO, J. G., “El nuevo modelo de reacción penal frente al blanqueo de capitales (los nuevos tipos de blanqueo, la ampliación del comiso y la integración del blanqueo en el modelo de responsabilidad penal de las empresas)”, op. cit., pág. 10. En este mismo sentido, vid. MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Un matrimonio de conveniencia: blanqueo de capitales y delito fiscal”, op. cit., págs. 23 y 24.

<sup>359</sup> Llegando a acoger “posiciones, en ocasiones, contradictorias”, según se reconoce en la STS 858/2013, de 19 de noviembre.

<sup>360</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 375. La STS 279/2013 describe vagamente los criterios que permitieron a la Sala Segunda a rechazar la punición del “autoblanqueo”: en algunas resoluciones, el Alto Tribunal consideró que “se trataba de actos copenados que habían de quedar absorbidos (principio de consunción) en el delito previo de tráfico de drogas. En otras ocasiones se alegaba directamente la vulneración del principio *ne bis in idem*, y en algún caso se atendió también al criterio de interpretación gramatical restrictiva del art. 301 en favor del reo.

<sup>361</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 531.

<sup>362</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 373.

<sup>363</sup> Vid. CALDERÓN CEREZO, A., *Delitos contra el orden socioeconómico*, op. cit., pág. 385.

tratamiento de la punición del autoblanqueo se pueden distinguir dos etapas diferenciadas: la primera, que comprendería hasta el año 2006, en la que predominó el criterio de la absolucón; y una segunda etapa, iniciada tras la celebración del Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda de 2006 -al que inmediatamente nos referiremos-, en la que la regla general se invirtió, resultando claramente mayoritaria la opción incriminatoria.

*Primera etapa.* Continuando la línea interpretativa anterior a la entrada en vigor del Código de 1995, las primeras sentencias que se pronunciaron en materia de autoblanqueo, dictadas fundamentalmente en supuestos en los que el delito previo estaba vinculado al tráfico de drogas, rechazaron la punición del blanqueo respecto del autor del hecho previo. En la Sentencia 575/2003, de 14 de abril, el Alto Tribunal sostuvo que si existe condena previa “por un delito de tráfico de drogas y una completa identidad entre el objeto económico del mismo y el blanqueo producido, no debe sancionarse por dos veces al autor del tráfico”. Y ello porque “no es posible la penalización autónoma de la ocultación o transformación de los efectos del delito a quien a su vez ha sido castigado como autor del primer delito, pues el art. 368 CP ya contempla actos de tráfico, en los que van implícitas las ganancias, que en un afán de agotamiento del delito, el sujeto agente trata de aprovechar y ocultar”. Invocando la resolución que acabamos de citar, la STS 550/2006, de 24 de mayo, insiste en rechazar “la penalización autónoma de los efectos del delito (blanqueo) a quien a su vez ha sido castigado como autor del delito base (tráfico), si bien para ello es necesario que exista una completa identidad entre la autoría del delito base y la del blanqueo procedente de ese tráfico”, y declara que en estos supuestos, la penalización del blanqueo puede conculcar el principio *non bis in ídem*, el cual “ha de entenderse comprendido en el art. 25.1 CE , como íntimamente relacionado con el de legalidad penal”. Del mismo modo, cuando no existe una completa identidad entre el objeto del delito de blanqueo y los bienes que traen causa en el delito previo, el Tribunal Supremo afirma la posibilidad de condenar por ambos delitos, el hecho previo y el blanqueo, sin que ello suponga incurrir en la prohibición del principio *ne bis in ídem*. En este sentido, ya en la STS 1293/2001, de 28 de julio, se afirmó que la punición por blanqueo al autor del delito antecedente “tampoco sería ningún imposible jurídico, (...) ya que el art. 301 del Código penal tanto comprende la realización de actos de ocultamiento o encubrimiento del origen lícito de actividades propias, como de terceras personas que hayan participado en la infracción,

para eludir las consecuencias legales de sus actos (...) sin que se excluya de forma expresa al autor del delito, como ocurre con la receptación, dentro de nuestro sistema jurídico-penal”. En cualquier caso, el criterio al que la doctrina jurisprudencial suele acudir para evitar la punición del autoblanqueo se materializa en la consideración del posterior acto de blanqueo como agotamiento del delito previo, considerando que su punición no es respetuosa con la prohibición del *bis in idem*. En este sentido, en la STS 858/2013, de 19 de noviembre, se dispone lo siguiente:

“El delito incluye cuatro frases: ideación, ejecución, consumación y agotamiento, de manera que la realización de actos en cualesquiera de estas cuatro frases no permite una sanción independiente del delito en el que se enmarcan. De esta manera los actos que suponen agotamiento de un delito tienen su encaje penal en el mismo, y su consecuencia jurídica en el comiso, en la pena pecuniaria y en la responsabilidad civil. Los actos posteriores al hecho delictivo que tienen por objeto asegurar o realizar el beneficio obtenido de un concreto hecho delictivo antecedente son actos penados en el tipo penal objeto del inicial reproche y no procede ser objeto de su punición en otra figura delictiva, en la medida en que están ya penados y absorbidos por el delito del que traen causa. El acto de transformación de las ganancias procedentes de un hecho delictivo que es objeto de sanción penal es un hecho que entra en la tipicidad del delito que lo genera. Esos hechos son también típicos del blanqueo pero su consideración de ser los mismos hace que queden absorbidos por el primer delito y constituye un hecho posterior copenado. En este sentido, Sentencias 202/2007, de 20 de marzo, y 20/2001, de 28 de marzo de 2001. De conformidad con lo anteriormente expuesto, el delito de tráfico de drogas absorbe los posteriores hechos de aprovechamiento de los efectos del delito cuando el patrimonio que se transforma es el que directamente procede del delito contra la salud pública, pues este tipo penal comprende, en su total dimensión, la conducta y la penalidad de manera que afecta a la totalidad del patrimonio, ilícitamente generado por el delito objeto de la sanción. Cuestión distinta es que el patrimonio formado procediera de actos típicos distintos a los que son enjuiciados en el caso concreto en cuyo caso cabría la punición separada pues los objetos son distintos en uno y otro delito. De esta manera resulta que si el delito contra la salud pública, delito antecedente de un aprovechamiento posterior típico del blanqueo, ha comprendido una condena efectiva sobre la totalidad del patrimonio generado por el actuar ilícito, no es posible la doble incriminación en la medida en que el delito antecedente ha recogido la total antijuricidad de la conducta y se extiende a los efectos y ganancias. Así lo prevé el legislador penal al señalar la consecuencia jurídica, pena

pecuniaria y comiso de los efectos y ganancias, por lo que no es posible una nueva punición en lo que ya ha sido objeto de reproche penal y de sanción y fijación de la consecuencia jurídica”.

En otras resoluciones, la Sala Segunda ha hecho mayores esfuerzos argumentativos para trazar la difusa “línea divisoria entre el agotamiento delictivo y la realización de una nueva figura típica”<sup>364</sup>. En la STS 884/2012, de 8 de noviembre, partiendo de la base de que todo delito contra la propiedad implica, con carácter general, una vocación de aprovechamiento económico, ya sea inmediato o futuro, se trata de establecer los criterios que permitan diferenciar qué supuestos han de ser considerados actos de agotamiento del delito previo, descartando la existencia de un segundo delito (blanqueo), y qué otros son merecedores de sanción por blanqueo, además del por el delito principal, apreciándose concurso real entre éste y aquél. En algunos casos, “la escasa relevancia económica de las ganancias obtenidas en la actividad criminal será suficiente para descartar la existencia de un segundo delito. Sin embargo, la exclusiva atención a los parámetros cuantitativos (...) no puede considerarse definitiva. Resulta preciso atender, además, a la idoneidad de los comportamientos imputados para incorporar bienes ilícitos al tráfico económico y, cómo no, a la intención del autor, a su propósito de rentabilizar en canales financieros seguros las ganancias obtenidas. Para colmar el juicio de tipicidad no bastará, por tanto, con la constatación del tipo objetivo. Será indispensable acreditar la voluntad de activar un proceso de integración o reconversión de los bienes obtenidos mediante la previa comisión de un hecho delictivo, logrando así dar apariencia de licitud a las ganancias asociadas al delito.”

La *segunda etapa*, favorable a la admisión de la tipicidad y la punición del “autoblanqueo”, se inicia -dejando al margen algún precedente anterior- en el año 2005 y se acentúa a partir de 2006, tras el Acuerdo Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda, celebrado el 18 de Julio de ese año, en el que se convino que *“el artículo 301 del Código Penal no excluye, en todo caso, el concurso real con el delito antecedente”*. Ha advertido la doctrina -y ha reconocido la propia Sala Segunda- que el Pleno no jurisdiccional de 2006 no ofreció una solución clara que permitiese deslindar en qué supuestos está excluido el concurso real y en cuáles no<sup>365</sup>. En efecto, se reconoce en la

<sup>364</sup> Vid. MATA LLÍN EVANGELIO, A., “El “autoblanqueo” de capitales”, op. cit., pág. 27.

<sup>365</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 539; ABEL SOUTO, M., “Jurisprudencia penal reciente sobre el blanqueo de dinero, volumen del fenómeno y evolución



Sentencia 279/2013, de 6 de marzo, que el Pleno aludido “mostraba un grado importante de ambigüedad, lo que propició que se prosiguiera dictando alguna resolución en la línea de no castigar los supuestos de autoblanqueo”, si bien, “a partir del año 2005 comenzó a predominar de forma clara el criterio de la punición. Los argumentos no siempre fueron claros ni explícitos. Se habla de la tutela de un bien jurídico autónomo al tratarse de un delito contra el orden socioeconómico, aunque sin mucha concreción, y también se acude a la normativa comunitaria para estrechar la punición de cualquier aprovechamiento del hecho delictivo por parte de los traficantes de drogas. Asimismo se hace referencia en otras ocasiones a la pretensión del legislador de reforzar la punición de todo el ciclo económico de los delitos graves, especialmente de aquellos que se cometen por organizaciones”<sup>366</sup>. En cualquier caso, se afirma en la STS 884/2012, de 8 de noviembre, que el hecho de coincidir en la misma persona la autoría del delito previo y de los actos posteriores de blanqueo “no es obstáculo para la punición del delito de blanqueo, (...) pues si se produce la coincidencia de autores en actividades de generación y blanqueo nos encontramos ante un evidente concurso real y no ante una modalidad de absorción ya que las conductas adquieren relevancia penal y criminológica autónoma y permiten su aplicación conjunta como suma de actividades delictivas de distinto carácter y con bienes jurídicos de distinta naturaleza afectados. Por tanto, no existe duplicidad sancionadora y la decisión adoptada respecto a la participación e incriminación doble (...) está ajustada a la más estricta legalidad.” Tras el Acuerdo de pleno de 2006, en definitiva, la línea jurisprudencial generalizada ha impulsado la punición del “autoblanqueo”, si bien podemos encontrar resoluciones discrepantes (SSTS 637/2010, de 28 de junio, 959/2007, de 23 de noviembre, y 115/2007, de 22 de enero), incluso relativamente recientes (SSTS 245/2014, de 24 de marzo, 858/2013, de 19 de noviembre, y 884/2012, de 8 de noviembre).

---

del delito en España”, op. cit., pág.151; DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, M., “El castigo del autoblanqueo en la reforma penal de 2010. La autoría y participación en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 283; MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Un matrimonio de conveniencia: blanqueo de capitales y delito fiscal”, op. cit., pág. 25; MARTÍNEZ-ARRIETA MÁRQUEZ DE PRADO, I., *El autoblanqueo. El delito fiscal como antecedente del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 37.

<sup>366</sup> Vid. STS 279/2013, de 6 de marzo, FJ 9º. La propia Sentencia hace una relación de los pronunciamientos anteriores declarando la punición del autoblanqueo, algunos de ellos anteriores al Pleno no jurisdiccional de 2006: SSTS 1293/2001, de 28 de julio ; 1070/2003, de 22 de julio; 1359/2004, de 15 de noviembre ; 1597/2005, de 21 de diciembre ; 449/2006, de 17 de abril; 1260/2006, de 1 de diciembre; 483/2007, de 4 de junio; 57/2008, de 25 de enero; 145/2008, de 8 de abril; 960/2008, de 26 de diciembre; 737/2009, de 6 de julio; 313/2010, de 8 de abril; 796/2010, de 17 de septiembre; 811/2012, de 30 de octubre; 884/2012, de 8 de noviembre; 997/2012, de 5 de diciembre; y 974/2012, de 5 de diciembre.

### **3.4.3. LA PUNICIÓN EXPRESA DEL AUTOBLANQUEO**

La doctrina ha acogido en general con duras críticas la incorporación del “autoblanqueo” en el artículo 301.1 del texto punitivo. Si bien algunos autores han aplaudido que con la reforma de 2010 se haya superado la indefinición legal existente<sup>367</sup>, la doctrina especializada mayoritariamente ha considerado que la previsión expresa del autoblanqueo no es sino una manifestación más de la ampliación “desmesurada” operada en el tipo, censurado la incorporación al mismo de una figura “sumamente perturbadora”<sup>368</sup>. Tras la reforma, algunos autores siguen manteniendo -como ya se hacía antes de la promulgación de la LO 5/2010- que el blanqueo de bienes derivados del delito propio no constituye más que el agotamiento de este último, siendo un hecho posterior copenado; otros autores desaprueban la punición del autoblanqueo basándose en el privilegio del autoencubrimiento, que ampara a todo partícipe en el delito previo (al que no le es exigible otra conducta), y en general se invoca el principio *non bis in idem*, que resultaría contravenido por la doble punición al autor o partícipe en el delito previo (por este delito y por el ulterior blanqueo).

MATALLÍN EVANGELIO formula una contundente crítica, sólidamente argumentada, a la incorporación del autoblanqueo a la estructura típica del artículo 301.1 CP. A su juicio, “la problemática constitucional de la tipificación del autoblanqueo no puede ser objeto de tratamiento general, sino que debe analizarse específicamente en función de la tipología del delito precedente y de la concreta forma de conducta ante la que nos encontremos”<sup>369</sup>. De acuerdo con esta idea, la autora considera que la conducta de adquisición no puede tener relevancia penal cuando es realizada por el autor o partícipe del delito previo, pues forma parte de la dinámica comisiva del delito precedente (su agotamiento). Su sanción independiente, como

---

<sup>367</sup> Vid. ALFONSO LASO, D. de, “La modificación del delito de blanqueo de capitales (arts. 301 y 302)”, op. cit., pág. 254; BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I./FABIÁN CAPARRÓS, E. A., “La emancipación del delito de blanqueo de capitales en el Derecho penal español”, op. cit., pág. 11; FARALDO CABANA, P., “El blanqueo de capitales tras la reforma de 2010”, op. cit., pág. 32; id., “Antes y después de la tipificación expresa del autoblanqueo de capitales”, op. cit., pág. 54; DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, J., “El blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 467.

<sup>368</sup> Vid. MORILLAS CUEVA, L., “Aspectos dogmáticos y político-criminales del delito de blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 103 y 104.

<sup>369</sup> Vid. MATALLÍN EVANGELIO, A., “El “autoblanqueo” de capitales”, op. cit., pág. 20. En el mismo sentido, vid. VIDALES RODRÍGUEZ, C., “Blanqueo, ¿qué es blanqueo? (Estudio del artículo 301.1 del Código Penal Español tras la reforma de la LO 5/2010)”, op. cit., pág. 17.

ulterior delito de blanqueo, vulneraría en todo caso el principio *ne bis in idem*<sup>370</sup>. Tampoco la posesión de bienes derivados de un delito patrimonial propio puede sancionarse como forma de blanqueo: cuando se trate de un delito de apoderamiento, la posesión del bien conforma “un acto de aprovechamiento o utilización inmerso en la dinámica comisiva del delito”, representando su agotamiento, no pudiendo ser sancionado como conducta independiente por imperativo del *ne bis in idem*. Cuando el delito antecedente sea diferente, “la posesión de los bienes derivados del delito propio constituirá un acto posterior impune, valorado en el delito principal (copenado), que para evitar su doble punición vulneradora del principio *ne bis in idem*, no deberá ser objeto de sanción autónoma”<sup>371</sup>. Tampoco puede sancionarse como forma de blanqueo la utilización del bien conforme a destino<sup>372</sup> realizada por el autor del delito previo, pues, al igual que la posesión, constituye un episodio integrado en “la dinámica comisiva” del delito principal<sup>373</sup>.

Las modalidades típicas de conversión y transmisión de bienes derivados del delito propio sí estarían dotadas de aptitud para ocultar el origen ilícito, pero -afirma MATA LLÍN- en los supuestos de autoblanqueo constituirían actos de autoencubrimiento impune cuando se trate de una primera conversión o transmisión, siempre que éstas se orienten “a la finalidad encubridora de aprovechamiento/aseguramiento de los bienes”<sup>374</sup>. Sí sería, en cambio, punible el autoblanqueo cuando la transformación o transmisión esté dirigida a otras finalidades lucrativas: tanto en los supuestos de transformaciones de un bien previamente transformado (aquéllas que sean posteriores a la primera), como en los casos de conversiones o transformaciones realizadas por redes

<sup>370</sup> Vid. MATA LLÍN EVANGELIO, A., “El “autoblanqueo” de capitales”, op. cit., pág. 23.

<sup>371</sup> Ibidem, págs. 23-27 passim. En cualquier caso, a juicio de MATA LLÍN, el mantenimiento en la posesión del bien por el autor del delito previo no supone ninguna ofensa relevante al bien jurídico protegido por el delito de blanqueo. (Ibidem, pág. 29). En este sentido, QUINTERO OLIVARES considera que ha de excluirse la tipicidad del autoblanqueo en supuestos de posesión de bienes derivados de aquellos delitos “que no producen una consecuencia de incremento de patrimonio material de sus autores o partícipes”, como el alzamiento de bienes o el delito fiscal. (“Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil”, op. cit., pág. 10, nota a pie de página nº 10).

<sup>372</sup> Vid. MATA LLÍN EVANGELIO A., “El “autoblanqueo” de capitales”, op. cit., pág. 32.

<sup>373</sup> Ibidem, págs. 33 y 34. Para la autora, la utilización de los bienes derivados del hecho propio no pueden ser considerados un acto de autoencubrimiento impune, toda vez que la utilización no constituye una conducta apta para la ocultación del delito previo. (Ibidem, pág. 33). Por su parte, ABEL SOUTO rechaza la punición de la utilización de los bienes derivados delito propio no por considerarla integrada en su fase de agotamiento, sino invocando el principio de insignificancia (actos básicos de consumo, prestaciones de servicios o ventas de mercancías en los negocios vitales cotidianos) y, especialmente, sobre la base de una restrictiva interpretación teleológica del tipo, toda vez que la conducta de utilización no resulta idónea para incorporar capitales ilícitos al tráfico económico, y no está dotada, por tanto, de aptitud para menoscabar el bien jurídico protegido por el blanqueo de capitales. (“La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., págs. 81, 93-95).

<sup>374</sup> Ibidem, págs. 34-35.

de delincuencia organizada dirigidas a la legalización de grandes sumas de dinero<sup>375</sup>. Por último, la autora rechaza la punición del autoblanqueo en los supuestos de la realización de cualquier otro acto con las finalidades de ocultar o encubrir el origen ilícito del bien derivado del delito propio (segundo inciso del artículo 301.1 CP) así como en las modalidades típicas previstas en el artículo 301.2. En este segundo supuesto, la previsión del elemento subjetivo determinado por el conocimiento del origen delictivo de los bienes imposibilita que esta modalidad típica pueda ser cometida por al autor del hecho previo. Dicha posibilidad quedará reducida, según MATALLÍN, a alguna de las modalidades típicas contenidas en el artículo 301.1 CP, pero en ellas ha de descartarse la punición al autor del delito principal por constituir, como hemos visto, actos copenados por aquél<sup>376</sup>.

También resulta de especial interés el razonamiento de VIDALES RODRÍGUEZ. Para la monografista, tras la incorporación del autoblanqueo al artículo 301.1 del Código, éste habría de limitarse a las conductas expresamente previstas en el primer inciso del precepto pues la modalidad consistente en la realización de “cualquier otro acto” con las finalidades de ocultar, encubrir o ayudar integran a su juicio actos lesivos para la administración de justicia, que quedarían amparados en los supuestos de autoblanqueo por la figura del autoencubrimiento impune<sup>377</sup>. Por otra parte, y en la línea interpretativa apuntada por MATALLÍN EVANGELIO, afirma VIDALES que las modalidades típicas de adquisición, posesión y utilización suponen un aprovechamiento de los beneficios derivados del delito propio (ya sea de sus efectos o del producto de los mismos), y en ellas la acción típica “forma parte del agotamiento de la infracción previa”. Las conductas de conversión y transmisión, si bien pueden formar parte del agotamiento del delito, también pueden suponer un acto de enmascaramiento de los beneficios del hecho delictivo previo propio. En estos casos, afirma la autora, la conversión y transmisión de beneficios derivados del delito propio únicamente deberían tener trascendencia penal “cuando la conversión o transmisión referida se efectúe a través de la comisión de un delito distinto”<sup>378</sup>.

---

<sup>375</sup> Ibidem, págs. 34 y 35.

<sup>376</sup> Ibidem, págs. 42-44.

<sup>377</sup> Vid. VIDALES RODRÍGUEZ, C., “Blanqueo, ¿qué es blanqueo? (Estudio del artículo 301.1 del Código Penal Español tras la reforma de la LO 5/2010)”, op. cit., pág. 17.

<sup>378</sup> Ibidem, págs. 17-19 *passim*.

Otros autores (MORILLAS CUEVA, CORCOY BIDASOLO), admitiendo la tipicidad del autoblanqueo por imperativo del principio de legalidad, critican vivamente la fórmula empleada por el legislador, considerando como “absolutamente imprescindible una revisión a fondo” de los elementos de la configuración legal de la controvertida figura, o preferiblemente su propia supresión. Y ello porque dicha figura “conduce a una exagerada intervención penal”, especialmente en hipótesis de escasa relevancia económica y en relación con ciertas modalidades de acción, especialmente la posesión y la utilización. En estos supuestos, afirma MORILLAS CUEVA, lo razonable es apreciar “la absorción del posible delito de blanqueo integrado en el mecanismo total del agotamiento del delito previo cometido [y no] su doble punición concursal”<sup>379</sup>.

La doctrina dominante<sup>380</sup>, también acudiendo básicamente a la categoría de los actos copenados, al privilegio del autoencubrimiento impune o la inexigibilidad de otra conducta, ha rechazado especialmente la punibilidad del autoblanqueo cuando éste va asociado a las modalidades típicas de posesión y utilización. En efecto, son éstos los supuestos más problemáticos que presenta la doble sanción al autor del hecho previo, por la comisión de éste y por la ulterior posesión o uso de los bienes derivados de aquél. Este sector doctrinal, como ya hiciera el Consejo General del Poder Judicial en su Informe de 2008 previo al anteproyecto de Ley Orgánica de modificación del Código Penal, ha alertado de las extrañas y absurdas consecuencias interpretativas<sup>381</sup> que

---

<sup>379</sup> Vid. MORILLAS CUEVA, L., “Aspectos dogmáticos y político-criminales del delito de blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 106 y 107. En sentido similar, vid. CORCOY BIDASOLO, M., “Crisis de las garantías constitucionales a partir de las reformas penales y de su interpretación por los tribunales”, op. cit., págs. 168 y 169.

<sup>380</sup> Vid. QUINTERO OLIVARES, G., “Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil”, op. cit., págs. 10 y ss.; CASTRO MORENO, A., “Reflexiones críticas sobre las nuevas conductas de posesión y utilización en el delito de blanqueo de capitales en la reforma del anteproyecto de 2008”, op. cit., págs. 1389-1391; MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Receptación y blanqueo de capitales (arts. 301 y 302)”, op. cit., pág. 344; id., “Ganancias criminales y ganancias no declaradas (El desbordamiento del delito fiscal y del blanqueo)”, op. cit., págs. 671 y ss.; id., “Un matrimonio de conveniencia: blanqueo de capitales y delito fiscal”, op. cit., pág. 23; ABEL SOUTO, M., “La reforma penal española de 2010 sobre blanqueo, las nuevas técnicas de comisión delictiva y el uso de las telecomunicaciones para el blanqueo”, op. cit., págs. 173 y 174; id., “Conclusiones: Jurisprudencia penal reciente sobre el blanqueo de dinero, volumen del fenómeno y evolución del delito en España”, op. cit., págs. 152 y ss.; CARPIO DELGADO, J. del, “La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 6-8; GALLEGO SOLER, J. I., *Comentarios al Código Penal. Reforma LO 5/2010*, op. cit., pág. 666; MOLINA FERNÁNDEZ, F., “¿Qué se protege en el delito de blanqueo de capitales?: reflexiones sobre un bien jurídico problemático, y a la vez aproximación a la participación en el delito”, op. cit., pág. 122; FERNÁNDEZ TERUELO, J. G., “El nuevo modelo de reacción penal frente al blanqueo de capitales (los nuevos tipos de blanqueo, la ampliación del comiso y la integración del blanqueo en el modelo de responsabilidad penal de las empresas)”, op. cit., pág. 13; CORCOY BIDASOLO, M., “Crisis de las garantías constitucionales a partir de las reformas penales y de su interpretación por los tribunales”, loc. cit.; MUÑOZ CONDE, F., *Derecho Penal. Parte Especial*, op. cit., pág. 515.

<sup>381</sup> Vid. QUINTERO OLIVARES, G., “Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil”, op. cit., pág. 13; ABEL SOUTO, M., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia

provoca “la dual aplicación de ambos tipos en concurso de delitos”<sup>382</sup>; si atendemos sólo a la literalidad de la norma y “no se restringe su sentido interpretativamente”<sup>383</sup>, al autor de cualquier delito del que derive algún tipo de rentabilidad económica se le imputará de forma automática, por la mera posesión o utilización del bien, un posterior delito -el de blanqueo-, sin necesidad de constatar la realización de un comportamiento adicional orientado a disimular el origen delictivo de los fondos o de verificar un dolo diferenciado, más allá del conocimiento de su ilícita procedencia. A las acertadas críticas formuladas por el Consejo General del Poder Judicial en su preceptivo informe previo a la reforma se ha sumado un enérgico rechazo doctrinal a la modificación legislativa, advirtiendo que la conminación penal de los nuevos comportamientos al autor del hecho previo, además de oponerse a la lógica jurídica más elemental<sup>384</sup>, resulta contraria a máximas fundamentales de transcendencia constitucional que rigen el procedimiento penal, principalmente el principio *non bis in idem*<sup>385</sup>, que impide que se “castigue dos veces la misma conducta”<sup>386</sup>.

Para evitar una desafortunada lectura del precepto en su vigente configuración, que “lleva la punición a límites verdaderamente extremos, que rozan el esperpento”<sup>387</sup>, algunos autores sostienen que la mera posesión o uso del bien por parte de quien lo obtuvo ilícitamente no constituirían sino actos posteriores copenados no punibles<sup>388</sup>. Y

---

de blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 80; id., “La reforma penal española de 2010 sobre blanqueo, las nuevas técnicas de comisión delictiva y el uso de las telecomunicaciones para el blanqueo”, op. cit., pág. 173; id., “Conclusiones: Jurisprudencia penal reciente sobre el blanqueo de dinero, volumen del fenómeno y evolución del delito en España”, op. cit., pág. 153; CARPIO DELGADO, J. del, “La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 8; GALLEGO SOLER, J. I., *Comentarios al Código Penal. Reforma LO 5/2010*, loc. cit.; DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, M., “El castigo del autoblanqueo en la reforma penal de 2010. La autoría y participación en el delito de blanqueo de capitales”, pág. 289; CORCOY BIDASOLO, M., “Crisis de las garantías constitucionales a partir de las reformas penales y de su interpretación por los tribunales”, op. cit., pág. 166.

<sup>382</sup> Vid. MORILLAS CUEVA, L., “Aspectos dogmáticos y político-criminales del delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 105.

<sup>383</sup> Vid. FERNÁNDEZ TERUELO, J. G., “El nuevo modelo de reacción penal frente al blanqueo de capitales (los nuevos tipos de blanqueo, la ampliación del comiso y la integración del blanqueo en el modelo de responsabilidad penal de las empresas)”, op. cit., pág. 9.

<sup>384</sup> Vid. CARPIO DELGADO, J. del, “La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 23.

<sup>385</sup> Vid. nota a pie de página nº 174 de este capítulo, págs. 246 y ss.

<sup>386</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 436; id., “El delito fiscal como actividad delictiva previa del blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 41.

<sup>387</sup> Vid. GONZÁLEZ RUS, J. J., “Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico”, op. cit., pág. 641. Vid., asimismo, la multitud de ejemplos muy ilustrativos de esta idea propuestos por MATA LLÍN EVANGELIO, citando muchos de los autores que se han ocupado de la problemática. (“El “autoblanqueo” de capitales”, op. cit., pág. 24).

<sup>388</sup> Vid. CASTRO MORENO, A., “Reflexiones críticas sobre las nuevas conductas de posesión y utilización en el delito de blanqueo de capitales en la reforma del anteproyecto de 2008”, op. cit., pág. 1390; MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Receptación y blanqueo de capitales (arts. 301 y 302)”, op. cit., pág. 344; id., “Un matrimonio de conveniencia: blanqueo de capitales y delito fiscal”, op. cit., pág. 23; CARPIO DELGADO, J.

ello porque dichas conductas quedan embebidas en el propio delito previo de contenido patrimonial como comportamiento “consustancial”<sup>389</sup> o consumido<sup>390</sup> en el mismo, o como acto que supone su agotamiento<sup>391</sup>. Otros autores excluyen la tipicidad del autoblanqueo en los comportamientos típicos de posesión y utilización por no integrar conductas idóneas para comprometer los bienes jurídicos tutelados por el tipo<sup>392</sup>. En cualquier caso, para este sector doctrinal, la punición del autoblanqueo en las supuestos referidos a las nuevas modalidades típicas traspasaría la prohibición del *bis in idem*<sup>393</sup>, y conculcaría elementales principios de proporcionalidad -especialmente en los supuestos imprudentes-. Por estos motivos, algunos autores han puesto en duda la legitimidad constitucional de la reciente incriminación expresa del autoblanqueo<sup>394</sup>.

---

del, “La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 24; QUINTERO OLIVARES, G., “Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil”, op. cit., pág. 11; GALLEGOS SOLER, J. I., *Comentarios al Código Penal. Reforma LO 5/2010*, op. cit., pág. 665; FERNÁNDEZ TERUELO, J. G., “El nuevo modelo de reacción penal frente al blanqueo de capitales (los nuevos tipos de blanqueo, la ampliación del comiso y la integración del blanqueo en el modelo de responsabilidad penal de las empresas)”, op. cit., pág. 10. En el mismo sentido, pero limitando la línea argumental a la posesión de bienes derivados del delito propio -y no a la utilización-, vid. ABEL SOUTO, M., “La reforma penal española de 2010 sobre blanqueo, las nuevas técnicas de comisión delictiva y el uso de las telecomunicaciones para el blanqueo”, op. cit., pág. 174; id., “Conclusiones: Jurisprudencia penal reciente sobre el blanqueo de dinero, volumen del fenómeno y evolución del delito en España”, op. cit., pág. 154. En estos casos, afirma ABEL, el autor del delito previo sólo puede ser sancionado por blanqueo cuando no quepa sancionarlo por el primer delito (“La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 81; en el mismo sentido, vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 542).

<sup>389</sup> En el caso de la posesión, afirma el autor, la conducta no es ni siquiera un acto de agotamiento de los efectos del delito (como podría serlo la utilización), sino que “es consustancial” a la propia conducta de todo delito de contenido patrimonial (especialmente los de apoderamiento), forma parte del propio comportamiento típico. (Vid. CASTRO MORENO, A., “Reflexiones críticas sobre las nuevas conductas de posesión y utilización en el delito de blanqueo de capitales en la reforma del anteproyecto de 2008”, op. cit., pág. 1390).

<sup>390</sup> Vid. CARPIO DELGADO, J. del, “La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 24 y 35; FERNÁNDEZ TERUELO, J. G., “El nuevo modelo de reacción penal frente al blanqueo de capitales (los nuevos tipos de blanqueo, la ampliación del comiso y la integración del blanqueo en el modelo de responsabilidad penal de las empresas)”, op. cit., pág. 10.

<sup>391</sup> Vid. CORCOY BIDASOLO, M., “Crisis de las garantías constitucionales a partir de las reformas penales y de su interpretación por los tribunales”, op. cit., pág. 168; MORILLAS CUEVA, L., “Aspectos dogmáticos y político-criminales del delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 106.

<sup>392</sup> Vid. LORENZO SALGADO, J. M., “El tipo agravado de blanqueo cuando los bienes tengan su origen en el delito de tráfico de drogas”, op. cit., pág. 225; respecto del autoblanqueo y la modalidad típica “utilización”, ABEL SOUTO, M., “La reforma penal española de 2010 sobre blanqueo, las nuevas técnicas de comisión delictiva y el uso de las telecomunicaciones para el blanqueo”, op. cit., pág. 174; id., “Conclusiones: Jurisprudencia penal reciente sobre el blanqueo de dinero, volumen del fenómeno y evolución del delito en España”, op. cit., pág. 154.

<sup>393</sup> Vid. nota a pie de página nº 174 de este capítulo, págs. 246 y ss.

<sup>394</sup> Vid. CASTRO MORENO, A., “Reflexiones críticas sobre las nuevas conductas de posesión y utilización en el delito de blanqueo de capitales en la reforma del anteproyecto de 2008”, op. cit., pág. 1389; MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Ganancias criminales y ganancias no declaradas (El desbordamiento del delito fiscal y del blanqueo)”, op. cit., pág. 670; ARIAS HOLGUÍN, D. P., *Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 278; MATA LLÍN EVANGELIO, A., “El “autoblanqueo” de capitales”, op. cit., pág. 2; MORILLAS CUEVA, L., “Aspectos dogmáticos y político-criminales del delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 107; CORCOY BIDASOLO, M., “Crisis de las garantías constitucionales a partir de las reformas penales y de su interpretación por los tribunales”, op. cit., pág. 168.

Por su parte, para la Sala Segunda (SSTS 809/2014, de 26 de noviembre, 245/2014, de 24 de marzo, y 279/2013, de 6 de marzo), la modificación operada por la LO 5/2010 en el artículo 301.1 CP no ha venido sino a confirmar la línea jurisprudencial que admitía el concurso real entre el delito antecedente y el de blanqueo de capitales, al prever de forma expresa que la actividad ilícita de donde proceden los bienes afluídos puede haber sido cometida por el propio autor del blanqueo o por un tercero<sup>395</sup>. Sin embargo, como hemos visto, existen pronunciamientos posteriores a la reforma del Código de 2010 en las que, a pesar de la incriminación expresa del autoblanqueo como conducta típica, se vuelve a acudir a criterios restrictivos (interpretando los actos de blanqueo como agotamiento del delito previo e invocando la prohibición del *bis in idem*), quizá para contrarrestar la desmesurada ampliación del tipo derivada de la reforma de 2010. En este sentido, la STS 858/2013, de 19 de noviembre, declara que “en los casos en los que existe identidad entre las ganancias y beneficios resultantes de un delito de tráfico de drogas y la realización de actos de conversión y transmisión sobre esos mismos bienes, no cabe la doble punición del mismo hecho, como agotamiento del delito originario y como blanqueo de dinero, pues el mismo patrimonio es objeto de una doble punición penal. Esa doble punición lesionaría el non bis in idem y, además, ya aparece contemplado y recogido en la penalidad del delito antecedente como pena de comiso y entrega la pena pecuniaria, por lo tanto, ya está penado”. La Sala Segunda vuelve a insistir en la necesidad de que exista “una completa identidad entre la autoría del delito principal -la venta de droga- con el blanqueo procedente de la venta de la misma”<sup>396</sup>. Por su parte, en la STS 265/2015, de 29 de abril, si bien se admite como regla general la relevancia penal del autoblanqueo, el Alto Tribunal llega a reinterpretar el tipo -recuperando la aislada línea exegética de la STS

---

<sup>395</sup> Según la STS 245/2014, de 24 de marzo, “lo que el legislador hace es aclarar esta cuestión ante pronunciamientos [jurisprudenciales] contradictorios, señalando el verdadero alcance de [la] tesis punitiva, que no era otro que la posibilidad de incriminar el autoblanqueo de capitales, del cual esta Sala Casacional ya había dicho que no era «ningún imposible jurídico»”.

<sup>396</sup> En caso de que no se verifique esa “completa identidad”, se afirma en la STS 858/2013, “no estamos ante una estricta situación de autoblanqueo pues los bienes sobre los que se actúa la forma típica no proceden del [delito] que motiva la instrucción y enjuiciamiento penal, sino de operaciones anteriores, es decir, un patrimonio desconectado de la concreta operación [delictiva] que motiva la investigación. Cuando el patrimonio se ha generado a través de una conducta [típica] permanente en el tiempo, este patrimonio de origen ilícito aparece desconectado de una concreta operación (...) que ha sido objeto de investigación, pues esa operación interrumpida por la acción policial no ha generado un patrimonio. En estos supuestos, la doble punición es procedente, pues el tráfico de drogas objeto de la condena es ajeno al patrimonio de origen ilícito que tiene su referencia en otras operaciones de tráfico.” Vid., en este mismo sentido, STS 286/2015, de 19 de mayo. Cfr. DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, M., “El castigo del autoblanqueo en la reforma penal de 2010. La autoría y participación en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 283; MARTÍNEZ-ARRIETA MÁRQUEZ DE PRADO, I., *El autoblanqueo. El delito fiscal como antecedente del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 37.



1080/2010, de 20 de octubre- para limitar su punición. De acuerdo con la nueva interpretación del artículo 301.1 CP, todas las modalidades comisivas en él integradas estarían dirigidas a las finalidades de ocultar, encubrir o ayudar, pues otra lectura del precepto “conduciría a una interpretación excesivamente amplia de la conducta típica, y a la imposibilidad de eludir la vulneración del principio "non bis in idem" en los supuestos de autoblanqueo”.

Como vemos, ni siquiera tras la previsión legal expresa del autoblanqueo se puede afirmar que la jurisprudencia haya acogido una interpretación clara e inequívoca respecto a su punición, si bien la STS 228/2013, de 22 de marzo, confirma que continúa siendo mayoritaria la exégesis favorable a castigarlo. En la resolución referida, el Alto Tribunal ratifica la relevancia penal del autoblanqueo, pues en estos casos “se está ante dos delitos [el hecho previo y el blanqueo], unidos en concurso real (...) y no ante un modalidad de absorción ya que las conductas adquieren relevancia penal y criminológica autónoma y permiten su aplicación conjunta como suma de actividades delictivas de distinto carácter y con bienes jurídicos de distinta naturaleza afectados”. (Véanse en este mismo sentido las Sentencias 659/2014, de 15 de octubre, 279/2013, de 6 de marzo, 228/2013, de 22 de marzo, 974/2012, de 5 de diciembre (caso Ballena Blanca), 884/2012, de 8 de noviembre, 811/2012, de 30 de octubre, 796/2010, de 17 de septiembre, 1597/2005, de 21 de diciembre, 233/2005, de 24 de febrero, y 1293/2001, de 28 de julio).

#### **3.4.4. VALORACIÓN PERSONAL**

Coincidimos con MAESTRE DELGADO en que la incorporación del autoblanqueo al Código constituye una manifestación más de la expansión del ámbito del delito que va “más allá de lo permisible”, al dar cabida en el tipo penal a supuestos penalmente irrelevantes<sup>397</sup>, muy alejados, en palabras de MORILLAS CUEVA, de “lo que en esencia debe ser el delito de blanqueo”: complejos entramados empresariales y financieros, a través de empresas ficticias e interpuestas así como de testaferros, asociados a la delincuencia organizada y en los que se manejan ingentes cantidades de dinero que

---

<sup>397</sup> Vid. MESTRE DELGADO, E., “Delitos y sospechas”, *La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario*, nº 20, 2005, pág. 4.

deben ser incorporados al tráfico económico legal<sup>398</sup>. En definitiva, el autoblanqueo conforma una “figura sumamente perturbadora” cuya expresa previsión legal combinada con el resto de las novedades introducidas por la LO 5/2010 en el artículo 301 “desvirtúa la propia esencia delictiva del blanqueo”<sup>399</sup>.

Ha de rechazarse la incriminación automática y en todo caso del autoblanqueo. Su previsión expresa, además de provocar en muchos casos espinosos problemas concursales, presenta importantes dificultades dogmáticas y problemas de constitucionalidad, como ha advertido la doctrina más autorizada. Consideramos que la atribución del delito de blanqueo al autor del delito previo ha de resolverse por el tribunal que conozca de la causa en atención a la modalidad típica de que se trate y teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto. Si todo delito de carácter patrimonial implica una vocación de aprovechamiento económico, ya sea inmediato o posterior a su comisión, resultará necesario diferenciar en qué supuestos las conductas subsumibles en el tipo de blanqueo han de ser consideradas actos de agotamiento del delito previo, descartando su relevancia penal como acto de blanqueo, y en qué otros dichas conductas son merecedoras de sanción por esta segunda figura típica, además del por el delito principal, a través del correspondiente concurso real. Para ello será fundamental atender a las circunstancias concretas del caso, como lo es el espacio temporal transcurrido entre el hecho delictivo generador de los bienes y el acto subsumible en el tipo de blanqueo: la proximidad temporal entre ambas conductas apuntará a que este último no es sino un acto de agotamiento del delito previo (aprovechamiento) que permitirá descartar la aplicación del concurso real. Asimismo, el órgano jurisdiccional debe tener presente la idoneidad de la modalidad comisiva realizada para incorporar los capitales ilícitos al tráfico económico normalizado, e indagar cuál es la verdadera intención del autor al operar con los bienes derivados del delito propio. Sólo cuando se constate en el sujeto un dolo propio y específico de blanqueo, diferenciado de la tipicidad subjetiva dimanante del delito previo, por cuya virtud la conducta se oriente a la reincorporación de los beneficios delictivos previamente obtenidos en el tráfico jurídico-económico legal (fundamentalmente a

---

<sup>398</sup> Vid. MORILLAS CUEVA, L., “Aspectos dogmáticos y político-criminales del delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 107. Actividades, estas sí, que adquieren “sustantividad propia y se sitúan por encima y al margen de las fuentes originadoras del dinero ilícito”. (STS 1597/2005, de 21 de diciembre).

<sup>399</sup> Vid. MORILLAS CUEVA, L., “Aspectos dogmáticos y político-criminales del delito de blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 103 y ss.

través de actos de inversión), el comportamiento podrá adquirir relevancia como conducta blanqueadora<sup>400</sup>.

Como modalidades típicas penalmente relevantes, son descartables *a priori*, por su propia naturaleza, la adquisición, la posesión y la utilización de los beneficios o ganancias derivados delito propio: son éstas conductas implícitas o consustanciales a la dinámica comisiva del delito precedente que constituyen su propio agotamiento, en tanto que suponen su aprovechamiento económico<sup>401</sup>. Tanto la adquisición de los efectos derivados del delito propio como su ulterior posesión o utilización son actos implícitos a la dinámica comisiva de cualquier delito patrimonial -conformando así parte del mismo- pues obviamente éste irá siempre dirigido al aprovechamiento de los beneficios generados, a través de su adquisición fáctica (ésta no tiene por objeto proporcionar a aquéllos apariencia lícita para su posterior reincorporación en el tráfico legal). Las modalidades de adquisición y de mera posesión o utilización, desprovistas de ulteriores finalidades, quedan, por tanto, consumidas en el delito previo; constituyen un acto de agotamiento de éste, y no pueden ser objeto de sanción independiente. Otra cosa, como acertadamente ha reiterado la doctrina mayoritaria, infringiría el principio *non bis in idem*<sup>402</sup>. Asimismo, ha de advertirse que las modalidades típicas de posesión y utilización, cometidas por autor del delito previo y desvinculadas de los fines propios del blanqueo (enmascarar el origen delictivo de los bienes y reintroducirllos en el al circuito legal de capitales) no constituyen fórmulas idóneas para canalizar las ganancias ilícitamente obtenidas hacia circuitos financieros seguros, ni por ello están dotadas, *per se*, de significación lesiva para intereses socio-económicos llamados a ser tutelados por el tipo de blanqueo.

---

<sup>400</sup> En términos de la STS 884/2012, de 8 de noviembre, es preciso “acreditar la voluntad de activar un proceso de integración o reconversión de los bienes obtenidos mediante la previa comisión de un hecho delictivo, logrando así dar apariencia de licitud a las ganancias asociadas al delito”. Sólo en estos casos dichos comportamientos adquieren pleno significado como conductas blanqueadoras.

<sup>401</sup> Vid., en este sentido, MATA LLÍN EVANGELIO, A., “El “autoblanqueo” de capitales”, op. cit., págs. 23 y ss.; VIDALES RODRÍGUEZ, C., “Blanqueo, ¿qué es blanqueo? (Estudio del artículo 301.1 del Código Penal Español tras la reforma de la LO 5/2010)”, op. cit., págs. 17-19.

<sup>402</sup> Vid. nota a pie de página nº 174 de este capítulo, págs. 246 y ss. Como han advertido muy autorizados autores en materia de blanqueo, en estos casos, al autor o partícipe en el delito principal sólo podrá imputársele un delito de blanqueo cuando no quepa sancionarlo por el primer delito realizado. (Vid. QUINTERO OLIVARES, G., “Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil”, op. cit., pág. 20; ABEL SOUTO, M., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 81; id., “Blanqueo, innovaciones tecnológicas, amnistía fiscal de 2012 y reforma penal”, op. cit., pág. 37; NOREÑA SALTO J. R., *Estructura del delito de blanqueo de capitales y su relación con el delito antecedente*, op. cit., pág. 9; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 483).

Respecto a las modalidades típicas de conversión y transmisión, será preciso atender al propósito perseguido por el agente al operar con el bien derivado del delito propio, para cuya determinación serán de especial importancia las circunstancias particulares del caso. Parece claro que en aquellos supuestos en los que la acción vaya dirigida a actos de consumo o a atender necesidades vitales cotidianas, la conducta será penalmente irrelevante por no entrañar un potencial lesivo para el bien jurídico protegido. En estos casos, el aprovechamiento de los beneficios económicos del delito forma parte de su propia estructura, de tal forma que la punición de éste impide un posterior castigo por cualquier acto dirigido a su pacífico disfrute. En cambio, en aquellos supuestos en los que el comportamiento típico constituya un acto de inversión o de algún modo esté dirigido a la reincorporación de las ganancias ilícitamente obtenidas en los cauces del tráfico legal (conductas, estas sí, que poseen significación lesiva para intereses socio-económicos), podrá aquél considerarse penalmente relevante y punible como forma comisiva del delito de blanqueo<sup>403</sup>. Para ello, además de la idoneidad de la conducta para alcanzar dichos propósitos, habrá de verificarse en el autor del delito previo un dolo diferenciado, materializado en “la voluntad de activar un proceso de integración o reconversión”<sup>404</sup> de las ganancias ilícitas en los cauces económicos legales.

En definitiva, en aquellos supuestos en los que las conductas blanqueadoras recaen sobre el objeto del delito previo en que el mismo sujeto ha participado, ha de verificarse, en primer lugar, si la concreta modalidad típica realizada es compatible con el autoblanqueo: no lo serán la adquisición, posesión ni utilización, pues dichas conductas se integrarán en la propia estructura del delito previo (su agotamiento). En segundo lugar, y respecto del resto de conductas (conversión y transmisión), ha de comprobarse la idoneidad del específico comportamiento para incorporar bienes ilícitos al tráfico económico y menoscabar, con ello, el bien jurídico protegido. En este sentido, debe ser descartada la relevancia penal de los actos de mero consumo y de aquellos otros destinados a atender necesidades cotidianas, siendo en cambio subsumibles en el tipo los actos de inversión aptos para reintroducir las ganancias ilícitamente obtenidas en los cauces económicos normalizados, en los que, en atención a las circunstancias que

---

<sup>403</sup> En términos del Auto 627/2014, de 7 de noviembre, de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (Sección 2ª), en estos casos será preciso “algún acto de conversión o transformación procedente para deslindar la fase de agotamiento del delito anterior del posterior lavado del dinero sucio”.

<sup>404</sup> Vid. STS 884/2012, de 8 de noviembre.

en cada caso concurren, podrá sancionarse el posterior blanqueo en concurso real con el hecho delictivo previo propio. Además, para colmar la tipicidad (subjetiva), ha de resultar acreditada en el sujeto activo la presencia de un “dolo blanqueador” diferenciado, una voluntad de dar apariencia de licitud a los beneficios obtenidos del delito que previamente ha cometido para facilitar su reincorporación al tráfico financiero legal. Con todo, ha de advertirse por último que, de acuerdo con la propia configuración del precepto, no ha de extenderse el autoblanqueo a la modalidad comisiva indeterminada prevista en el segundo inciso del artículo 301.1 (realización de cualquier acto con las finalidades típicamente previstas) ni al número 2 de la norma. La nueva redacción del precepto vincula exclusivamente el autoblanqueo a las modalidades expresamente previstas en su número 1; esta es *a priori* la voluntad del legislador y no sería jurídicamente admisible interpretar de forma extensiva un tipo configurado en términos tan amplios.

Han de ser los tribunales los que determinen en cada caso concreto en qué supuestos el autoblanqueo podrá ser objeto de doble punición, de acuerdo con los criterios antes expresados y prestando especial atención a las circunstancias presentes en cada caso. Por ello, *de lege ferenda*, al igual que propusimos respecto a las modalidades típicas de posesión y utilización, consideramos recomendable que sea suprimida del artículo 301.1 CP la referencia expresa al autoblanqueo<sup>405</sup>. Como otrora afirmara ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, “estamos ante otro de esos problemas interpretativos que plantea [la nueva redacción del precepto], y que no obtendrán una respuesta satisfactoria a menos que se modifique el tenor de la Ley”<sup>406</sup>. Hasta su definitiva supresión, sería aconsejable que los tribunales de justicia interpretasen la controvertida figura de forma restrictiva, especialmente en los supuestos de posesión y utilización. Como vimos, para ello resultará muy oportuno, como ya ha hecho la Sala Segunda en algunas ocasiones, considerar que la mera posesión o utilización de bienes derivados delito propio desprovistas de finalidad alguna constituyen el agotamiento del hecho delictivo anterior -descartando su sanción por contravenir la prohibición del *bis in idem*-; y en el resto de modalidades típicas, negar la punibilidad de aquellos supuestos que no sean idóneos

---

<sup>405</sup> Tal y como ya han propuesto, entre otros autores, CARPIO DELGADO (“La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 24 y 35), FERNÁNDEZ TERUELO (“El nuevo modelo de reacción penal frente al blanqueo de capitales (los nuevos tipos de blanqueo, la ampliación del comiso y la integración del blanqueo en el modelo de responsabilidad penal de las empresas)”, op. cit., pág. 10) y MORILLAS CUEVA (“Aspectos dogmáticos y político-criminales del delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 107).

<sup>406</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 235.

para borrar el rastro delictivo de los bienes derivados del hecho propio e incorporarlos al tráfico económico normalizado, por no contener un potencial lesivo para el bien jurídico<sup>407</sup>, y en los que no se constate la realización de un comportamiento adicional orientado a disimular el origen delictivo de los fondos o la concurrencia en el agente de un dolo diferenciado, más allá del conocimiento de la procedencia de los bienes, dirigido a enmascarar su ilícita procedencia o a activar un proceso de integración de aquéllos en el tráfico jurídico legal.

---

<sup>407</sup> Vid. BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I./FABIÁN CAPARRÓS, E. A., “La emancipación del delito de blanqueo de capitales en el Derecho penal español”, op. cit., págs. 128 y 129.



## **CAPÍTULO CUARTO. EL TIPO OBJETIVO EN EL DELITO BASICO DE BLANQUEO DE CAPITALS (II)**





## **4.1. PROBLEMAS PARTICULARES DE LA IMPUTACIÓN OBJETIVA EN LAS DIFERENTES CONDUCTAS DE BLANQUEO. CRITERIOS NORMATIVOS LIMITADORES DE LA TIPICIDAD**

### **4.1.1. INTRODUCCIÓN. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

Con objeto de limitar el extraordinario ámbito de aplicación del delito de blanqueo, cuyo tenor literal admite la incriminación de conductas que difícilmente pueden considerarse propias de blanqueo<sup>1</sup>, un sector relevante de la doctrina ha propuesto la invocación de criterios normativos que contribuyen a excluir del tipo comportamientos que, pese a ser *formalmente* subsumibles en el precepto por coincidir con la descripción típica, no poseen relevancia penal al no ser lesivos para los intereses socioeconómicos que la norma está llamada a proteger. Dichos criterios o institutos normativos adquieren especial significación práctica en la delimitación de la responsabilidad de aquellos sujetos que, en el ámbito profesional o negocial, establecen “contactos”<sup>2</sup> con quienes tratan de reincorporar al tráfico los beneficios de sus actividades delictivas y, a través de comportamientos estandarizados y en principio inocuos<sup>3</sup>, acaban contribuyendo causalmente, en un sentido puramente fáctico, a la consumación de un delito de blanqueo. Como han advertido SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES y OLIVA GARCÍA, no todo sujeto cuya actividad pueda ser fácticamente aprovechada por un tercero para emprender una concreta operación de blanqueo, debe considerarse merecedor de responsabilidad penal como autor o cooperador de un delito de blanqueo doloso e incluso imprudente<sup>4</sup>.

Desde hace ya bastantes décadas, la doctrina viene apartándose de una concepción naturalística del tipo penal. Progresivamente, ha ido imponiéndose una

---

<sup>1</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 640.

<sup>2</sup> Vid. OLIVA GARCÍA, H., “La defensa ante la acusación por blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 26.

<sup>3</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *Límites a la participación delictiva. Las acciones neutrales y la cooperación con el delito*. Ed. Comares. Granada, 2001, pág. 2.

<sup>4</sup> Vid. SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, J., “Blanqueo de Capitales y abogacía: un necesario análisis crítico desde la teoría de la imputación objetiva”, op. cit., pág. 44; OLIVA GARCÍA, H., “La defensa ante la acusación por blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 26.

interpretación del tipo fundamentada en criterios axiológicos o normativos<sup>5</sup>. En este contexto, a partir de diferentes razonamientos doctrinales, ha ido fraguándose la teoría de la imputación objetiva, cuyos postulados, junto a otros criterios normativos vinculados a aquélla, se perfilan como correctores dogmáticos idóneos para limitar el ámbito de la tipicidad de los delitos. Veremos que, en el ámbito del blanqueo de capitales, por virtud de algunas de las fórmulas propuestas y bajo ciertos presupuestos, es posible descartar la propia tipicidad objetiva de determinados comportamientos que, pese a encajar en la literalidad del artículo 301 CP y haber podido contribuir causalmente a la materialización de una operación de lavado, no son objetivamente imputables a su autor<sup>6</sup>, bien porque no han generado un riesgo jurídicamente relevante para que se produzca el hecho penalmente lesivo, bien porque dicha lesión no ha supuesto la realización del riesgo generado por el comportamiento.

Para abordar este estudio, partiremos del análisis de la teoría general de la imputación objetiva, cuyos postulados permitirán descartar la relevancia penal de conductas que, si bien suponen la realización aparente del tipo, no implican la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado para el bien jurídico protegido (que, como vimos en el capítulo segundo<sup>7</sup>, posee claros tintes económicos), o cuyo riesgo no es el que se materializa en el resultado lesivo para dicho bien. Posteriormente examinaremos a grandes rasgos diferentes instituciones o categorías dogmáticas -especialmente aquellas que mayor alcance y operatividad despliegan en el ámbito la delincuencia económica-, que contribuyen a acotar teleológicamente el tipo, con objeto de estudiar en qué medida permiten excluir del ámbito de la tipicidad conductas que, aun siendo formalmente subsumibles<sup>8</sup> en la norma, no sean desde perspectivas normativas penalmente relevantes. Por un lado, prestaremos atención a las denominadas conductas socialmente adecuadas, aquéllas que pueden ocasionar riesgos para bienes jurídicos pero que se consideran jurídicamente legítimas si se desarrollan dentro de determinados límites y precauciones<sup>9</sup>, y a la categoría del riesgo permitido, asociada en gran medida a aquélla y que en la actualidad tiene mayor acogida en la doctrina. A continuación, se

---

<sup>5</sup> Vid. GIMBERNAT ORDEIG, E., “¿Qué es la imputación objetiva?”, *Estudios penales y criminológicos*, nº 10, 1985-1986, pág. 171.

<sup>6</sup> Vid. GIMBERNAT ORDEIG, E., “A vueltas con la imputación objetiva, la participación delictiva, la omisión impropia y el Derecho penal de la culpabilidad”, *ADPCP*, Vol. LXVI, 2013, pág. 36.

<sup>7</sup> Vid. *supra*, apartado 2.2.3 del capítulo III, págs. 194 y ss.

<sup>8</sup> Vid. GIMBERNAT ORDEIG, E., “¿Qué es la imputación objetiva?”, *op. cit.*, pág. 178.

<sup>9</sup> Vid. MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., *Derecho penal económico y de la empresa. Parte General*, *op. cit.*, pág. 290.

estudiarán determinados correctores normativos que permiten extraer del ámbito de la participación punible<sup>10</sup> aquellas contribuciones fácticas a la realización dolosa de un ilícito penal llevada a cabo por un tercero: la denominada “prohibición de regreso” y el principio de confianza. Finalizaremos este apartado analizando la categoría que mayor repercusión doctrinal y jurisprudencial tiene en la actualidad en el ámbito del blanqueo: los denominados actos neutrales o cotidianos, comportamientos desarrollados conforme a patrones estandarizados y considerados *per se* inocuos si se desarrollan conforme a las reglas de determinado rol, pero que pueden favorecer la comisión de hechos delictivos ajenos<sup>11</sup>.

En el apartado siguiente, comprobaremos que también la jurisprudencia ha acudido a los criterios de la imputación objetiva y a formulaciones dogmáticas vinculadas a aquélla para resolver muchos casos problemáticos. Finalmente, a partir del tratamiento doctrinal y jurisprudencial de los distintos “correctores dogmáticos”<sup>12</sup> estudiados, examinaremos en qué medida cada uno de ellos permite reducir, a modo de “filtro normativo”<sup>13</sup>, el excesivo ámbito de aplicación del delito de blanqueo, descartando la trascendencia penal de conductas formalmente subsumibles en el artículo 301 CP pero no merecedoras del más grave de los reproches.

## **4.1.2. LA TEORÍA DE LA IMPUTACIÓN OBJETIVA**

### **4.1.2.1. EVOLUCIÓN DE LA TEORÍA Y CONFIGURACIÓN DOGMÁTICA**

La teoría de la imputación objetiva nació en Alemania en la década de los años 60 del siglo pasado<sup>14</sup> como superación, en el marco de los delitos de resultado, de los

---

<sup>10</sup> Vid, RUEDA MARTÍN, M.A., “Consideraciones acerca de la relevancia penal de las acciones cotidianas en la comisión de un hecho doloso”, *Revista penal*, nº 9, 2002, disponible en el enlace <http://www.uhu.es/revistapenal/index.php/penal/article/viewArticle/132>, pág. 123.

<sup>11</sup> Si bien la doctrina relaciona generalmente los actos neutrales con formas de participación en el delito ajeno (considerándose en la mayoría de los casos supuestos de complicidad), también esta categoría dogmática cobra sentido en el marco de los “tipos específicos de colaboración post-delictiva”, como el encubrimiento o el blanqueo de capitales. (Vid. PÉREZ MANZANO, M., “Neutralidad delictiva y blanqueo de capitales: el ejercicio de la abogacía y la tipicidad del delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 174).

<sup>12</sup> Vid. ALCALÉ SÁNCHEZ, M., “Los delitos de mera actividad”, op. cit., pág. 30.

<sup>13</sup> Vid. CANCIO MELIÁ, M., “Algunas reflexiones sobre lo objetivo y lo subjetivo en la teoría de la Imputación Objetiva”, *Imputación objetiva y dogmática penal*, Bolaños González, M. (Comp.). Universidad de los Andes. Mérida, 2005, pág. 208; REQUENA JULIANI, J., *Intercambiabilidad de acción y omisión en los delitos de dominio: Posición de garante e imputación objetiva*, Ed. Dykinson. Madrid, 2010, pág. 221.

<sup>14</sup> Sobre la génesis de la teoría de la imputación objetiva, vid. MARTINEZ ESCAMILLA, M., *La imputación objetiva del resultado*, Edersa, Madrid, 1992, págs. 30 y ss.; MORSELLI, E., “Observaciones críticas acerca de la teoría de la imputación objetiva”, *Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos: in memoriam*. (Vol. 1).

criterios individualizadores de la causalidad que entonces venían manejándose por la dogmática penal<sup>15</sup>, fundamentalmente la teoría de la equivalencia de condiciones (fórmula de la condición *sine qua non*), matizada posteriormente por sucesivos enfoques correctores (teorías de la causalidad adecuada, de la relevancia, etc.)<sup>16</sup>. La imputación objetiva emergió, de este modo, con vocación de limitar la atribución de resultados penalmente relevantes<sup>17</sup>, concebida hasta entonces con arreglo a criterios naturalísticos u ontológicos<sup>18</sup>, instituyéndose así como un nuevo modelo de atribución de responsabilidad basado en criterios normativos<sup>19</sup> o valorativos<sup>20</sup>.

La aparición de la teoría de la imputación objetiva supone una “*nueva concepción del tipo objetivo*”<sup>21</sup>, el cual pasa a integrarse tanto por el nexo causal entre la acción y el resultado típico como por la imputación objetiva de ese resultado a la primera<sup>22</sup>. El nuevo análisis de tipicidad pasa a precisar la verificación sucesiva de ambas relaciones entre la conducta del sujeto activo y el resultado típico que la norma penal trata de conjurar<sup>23</sup>: una vez comprobada la causalidad natural o física entre la

---

Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2001, págs. 1207 y ss.; CARBONELL MATEU, J. C., “Sobre tipicidad e imputación: reflexiones básicas en torno a la imputación del dolo y la imprudencia”, *Estudios penales en recuerdo del Profesor Ruiz Antón* (coord. E. Octavio de Toledo y Ubieta, M. Gurdíel Sierra, E. Cortés). Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2003, págs. 140 y ss.; MIR PUIG, S., “Significado y alcance de la imputación objetiva en Derecho penal”, *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*. 2003, núm. 05-05, págs. 2 y ss., disponible en el siguiente enlace: <http://criminet.ugr.es/recpc/05/recpc05-05.pdf>; GIMBERNAT ORDEIG, E., “Los orígenes de la teoría de la imputación objetiva”, *Libro homenaje al Prof. Luis Rodríguez Ramos*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, págs. 97 y ss.

<sup>15</sup> Vid. MARTINEZ ESCAMILLA, M., *La imputación objetiva del resultado*, op. cit., pág. 30; ALCALÉ SÁNCHEZ, M., “Los delitos de mera actividad”, op. cit., pág. 33; id., *El Tipo de Injusto en los Delitos de Mera Actividad*, op. cit., pág. 264.

<sup>16</sup> Vid. GIMBERNAT ORDEIG, E., “¿Qué es la imputación objetiva?”, op. cit., pág. 173; CUESTA AGUADO, M<sup>a</sup>. P. de la, *Tipicidad e imputación objetiva*. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 1996, págs. 116 y ss.; MARTINEZ ESCAMILLA, M., “La imputación objetiva del resultado. Una primera aproximación”, *Causalidad e imputación objetiva*. Cuadernos de Derecho Judicial. CGPJ. Madrid, 1994, pág. 84; MIR PUIG, S., “Significado y alcance de la imputación objetiva en Derecho penal”, op. cit., pág. 9.

<sup>17</sup> Vid. MUÑOZ CONDE, F./GARCÍA ARÁN, M., *Derecho Penal. Parte General*, op. cit., pág. 229.

<sup>18</sup> Vid. MARTINEZ ESCAMILLA, M., *La imputación objetiva del resultado*, op. cit., pág. 34.

<sup>19</sup> Vid. ROBLES PLANAS, R., “Las conductas neutrales en el ámbito de los delitos fraudulentos. Espacios de riesgo permitido en la intervención en el delito”, *¿Libertad económica o fraudes punibles?: Riesgos penalmente relevantes e irrelevantes en la actividad económico-empresarial* (coord. Jesús María Silva Sánchez). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2003, pág. 20; MARTINEZ ESCAMILLA, M., “La imputación objetiva del resultado. Una primera aproximación”, op. cit., págs. 83 y 86.

<sup>20</sup> Vid. HORMAZÁBAL MALAREE, H., “Imputación objetiva en los delitos calificados por el resultado”, *ADPCP*, XLII, 1987, pág. 1047.

<sup>21</sup> Vid. GIMBERNAT ORDEIG, E., “Los orígenes de la teoría de la imputación objetiva”, op. cit., pág. 95.

<sup>22</sup> La imputación objetiva se configura, por tanto como un elemento más del tipo -concretamente un elemento normativo del tipo- que ha de ser contrastado, aunque la ley no lo mencione. (Vid. GIMBERNAT ORDEIG, E., “¿Qué es la imputación objetiva?”, op. cit., págs. 175 y 176). En este sentido, vid. asimismo MARTINEZ ESCAMILLA, M., *La imputación objetiva del resultado*, op. cit., pág. 47; TORÍO LÓPEZ, A., “Cursos causales no verificables en derecho penal”, *ADPCP*, XXXVI, 1983, pág. 235.

<sup>23</sup> Vid. GIMBERNAT ORDEIG, E., “Los orígenes de la teoría de la imputación objetiva”, op. cit., pág. 96.

acción y el resultado lesivo para el bien jurídico<sup>24</sup> conforme a criterios ontológicos, es necesario contrastar si, de conformidad con los criterios normativos o valorativos que a continuación referiremos, el segundo es imputable al primero<sup>25</sup>. De conformidad con la formulación más comúnmente aceptada de la teoría de la imputación objetiva<sup>26</sup>, para imputar objetivamente un resultado a una conducta, es preciso que dicha conducta haya creado un riesgo jurídicamente desaprobado, y que el referido riesgo se haya realizado en el resultado típico, precisamente aquél que la norma trata de evitar.

<sup>24</sup> Vid., ampliamente, MARTÍNEZ RINCONES, J. F., “Causalidad y Derecho Penal: Una Reflexión Hermenéutica”, *Imputación objetiva y dogmática penal*, Bolaños González, Mireya (Compiladora). Universidad de los Andes. Mérida, 2005, págs. 71 y ss.

<sup>25</sup> Vid. MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, 9ª ed., op. cit., pág. 260; SILVA SÁNCHEZ, J. M., “Aberratio ictus e imputación objetiva”, ADPCP, XXXVII, 1994, pág. 368; GIMBERNAT ORDEIG, E., “Los orígenes de la teoría de la imputación objetiva”, op. cit., págs. 95 y ss.

<sup>26</sup> Las propuestas y criterios que conforman la teoría de la imputación objetiva son tan diversas como sus fuentes. (Vid. MARTINEZ ESCAMILLA, M., *La imputación objetiva del resultado*, op. cit., pág. 39; FRISCH, W., “La imputación objetiva: estado de la cuestión”, *Sobre el estado de la teoría del delito*, Ed. Civitas. Madrid, 2000, pág. 21; REYES ALVARADO, Y., “El concepto de Imputación Objetiva”, *Imputación objetiva y dogmática penal*, Bolaños González, M. (Comp.). Universidad de los Andes. Mérida, 2005, pág. 173). En la actualidad, su concreta enunciación “cambia considerablemente según el autor que la formula”, hasta el punto de que “no existe acuerdo doctrinal sobre el concepto de la imputación objetiva” ni respecto a los presupuestos que la conforman. (Vid. ALCALÉ SÁNCHEZ, M., *El Tipo de Injusto en los Delitos de Mera Actividad*, op. cit., pág. 263). Así, por ejemplo, se encuentran notables diferencias entre las concepciones más ortodoxas derivadas de la propuesta de ROXIN (*Derecho Penal Parte General. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito*, op. cit., págs. 363 y ss.) -acogidas en la doctrina española, con determinados matices, por GIMBERNAT ORDEIG (“Los orígenes de la teoría de la imputación objetiva”, op. cit., págs. 107 y ss.), MARTINEZ ESCAMILLA (*La imputación objetiva del resultado*, op. cit., págs. 30 y ss.) y MUÑOZ CONDE (*Derecho Penal. Parte General*, op. cit., págs. 229 y ss.), entre otros autores-, la imputación objetiva entendida como el primero de los tres niveles de imputación desarrollados por MIR PUIG (“Significado y alcance de la imputación objetiva en Derecho penal”, op. cit., págs. 11 y ss.) o la reformulación de la teoría por JAKOBS, acogida por muchos otros autores adscritos al funcionalismo (Vid. JAKOBS, G., *La imputación penal de la acción y la omisión*, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1996, págs. 31 y ss.; id., *Derecho Penal. Parte General. Fundamentos y teoría de la imputación*. Ed. Marcial Pons, 2ª ed. Madrid, 1997, págs. 224 y ss.; id., *La imputación objetiva en el Derecho penal*. Ed. Ad Hoc, Buenos Aires, 1997, págs. 43 y ss.). Un análisis de cada una de las variantes existentes excedería los límites de este trabajo, de modo que aquí se expondrá la enunciación clásica, vinculada a las propuestas de ROXIN, ampliamente aceptada por la doctrina y la jurisprudencia (por todas, STS 413/2015, de 30 de junio), si bien, como veremos, su aplicación no ha de entenderse limitada -tal y como inicialmente fue propuesta- a los delitos de resultado. Por otro lado, se ha de advertir que algunos autores han formulado importantes reparos a la teoría de la imputación objetiva. Las más arduas críticas han partido de enfoques finalistas, desde los que se afirma que no es posible formular un juicio de imputación conforme a criterios puramente objetivos sin tener antes en cuenta elementos de aspecto subjetivo. Por cuestiones de espacio tampoco podemos entrar a fondo en esta cuestión, sobre la que, por lo demás, ya existe abundante bibliografía. Cfr. ampliamente CANCIO MELIÁ, M., “Algunas reflexiones sobre lo objetivo y lo subjetivo en la teoría de la Imputación Objetiva”, op. cit., pág. 208, nota a pie de página nº 5. Vid., asimismo FRISCH, W., “La imputación objetiva: estado de la cuestión”, op. cit., págs. 40 y ss., especialmente, págs. 58 y ss.; REQUENA JULIANI, J., *Intercambiabilidad de acción y omisión en los delitos de dominio: Posición de garante e imputación objetiva*, op. cit., págs. 216-220; GRACIA MARTÍN, L., “El Finalismo como método sintético real-normativo para la construcción de la Teoría del Delito”, *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*. 2004.06-07, disponible en el enlace <http://criminnet.ugr.es/recpc/06/recpc06-07.pdf>, págs. 14 y 15; RUEDA MARTÍN, M. A., *La Teoría de la imputación objetiva del resultado en el delito doloso de acción*. Ed. Bosch, Madrid, 2001, pág. 98; ROBLES PLANAS, R., “Normatividad e imputación objetiva: respuesta a la recensión de Feijóo Sánchez a Frisch/Robles Planas, Desvalorar e imputar (2005)”, *Revista Electrónica para el Análisis del Derecho (InDret)* 3/2006, págs. 4 y ss., disponible en el siguiente enlace: [www.raco.cat/index.php/InDret/article/download/121392/167840](http://www.raco.cat/index.php/InDret/article/download/121392/167840).

Los criterios normativos o *topoi*<sup>27</sup> empleados por la teoría de la imputación objetiva son, por tanto, tres:

- La creación o aumento de un riesgo jurídicamente relevante.
- La realización de ese riesgo en el resultado.

- Dicho resultado ha de integrarse dentro del fin o ámbito de protección de la norma infringida. Esto es, el resultado ha de ser precisamente el que la norma penal trata de impedir<sup>28</sup>.

El primero de los criterios apuntados (*primer nivel de imputación*<sup>29</sup>) conforma lo que algunos autores denominan “el juicio de adecuación”<sup>30</sup>. Para que un comportamiento posea relevancia penal, es preciso que genere un peligro jurídicamente desaprobado. De acuerdo con el juicio de adecuación, se entiende que la conducta crea un riesgo penalmente relevante cuando, desde una perspectiva *ex ante*<sup>31</sup>, es considerada apta o adecuada<sup>32</sup> para crear o incrementar el riesgo de que se produzca el resultado que se trata de evitar, con independencia de que éste se realice o no lo haga. Algunos autores hablan de la *previsibilidad objetiva*<sup>33</sup> del peligro ocasionado para el bien jurídico por la conducta: ha de determinarse si desde un punto de vista *ex ante*, y teniendo en cuenta las circunstancias que el agente conocía y pudo conocer, éste pudo representarse la posibilidad de que su conducta ocasionase el resultado penalmente relevante. Expresado

<sup>27</sup> Vid. GIMBERNAT ORDEIG, E., “Los orígenes de la teoría de la imputación objetiva”, op. cit., pág. 115.

<sup>28</sup> Vid., ROXIN, C. *Derecho Penal Parte General. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito*, op. cit., págs. 363 y 364; GIMBERNAT ORDEIG, E., “¿Qué es la imputación objetiva?”, op. cit., págs. 183 y 184; CANCIO MELIÁ, M., “Aproximación a la Teoría de la Imputación Objetiva”, *Imputación objetiva y dogmática penal*, Bolaños González, Mireya (Compiladora). Universidad de los Andes. Mérida, 2005, pág. 93.

<sup>29</sup> Vid. MARTINEZ ESCAMILLA, M., *La imputación objetiva del resultado*, op. cit., pág. 54.

<sup>30</sup> Ibidem, pág. 81; id., “La imputación objetiva del resultado. Una primera aproximación”, op. cit., págs. 88 y ss.; LANDECHO VELASCO, C. M., *Derecho Penal Español. Parte General*, loc. cit.; ALCÁCER GUIRAO, R., “El juicio de adecuación de la conducta. Consideraciones sobre la teoría de la imputación objetiva y sobre la tentativa”, ADPCP, XXXIX, 1986, págs. 483 y ss.

<sup>31</sup> Vid. MARTINEZ ESCAMILLA, M., *La imputación objetiva del resultado*, op. cit., pág. 76; id. “La imputación objetiva del resultado. Una primera aproximación”, op. cit., págs. 87 y 88; SILVA SÁNCHEZ, J. M., “Aberratio ictus e imputación objetiva”, op. cit., pág. 368.

<sup>32</sup> El juicio de adecuación ha de partir del conocimiento de aquellas circunstancias “reconocibles por un hombre prudente en el momento de la acción más todas aquellas conocidas o reconocibles por el autor por sus conocimientos especiales o por el azar, denominándose este juicio de probabilidad prognosis posterior objetiva. De esta manera la conducta consistente en causar una leve herida a una persona puede ser inadecuada de cara a la producción del resultado de muerte si el sujeto actuante desconocía que la víctima era un hemofílico y habría que afirmar que se trata de una conducta peligrosa si el autor conocía dicha circunstancia”. (Vid. MARTINEZ ESCAMILLA, M., “La imputación objetiva del resultado. Una primera aproximación”, op. cit., pág. 89).

<sup>33</sup> Vid. CUESTA AGUADO, M<sup>a</sup>. P. de la, *Tipicidad e imputación objetiva*, op. cit., pág. 161; MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., *Derecho penal económico y de la empresa. Parte General*, op. cit., págs. 276-278.

de otro modo: de conformidad con este primer nivel de imputación, debe examinarse si el comportamiento del agente era o no previsiblemente idóneo para desencadenar el resultado lesivo. La pauta con la que operara el juicio de previsibilidad es el criterio del “hombre medio prudente situado en la misma posición y con los mismos conocimientos que tuvo o debió tener el autor”<sup>34</sup>. Cuando el riesgo sea previsible y el agente lo rebase al realizar la conducta, “se deberá analizar la «cantidad» del riesgo creado, de forma que si la previsibilidad era muy remota y el riesgo no permitido creado muy escaso, podrá (...) excluirse la imputación en base al «principio de insignificancia», según el cual, aquellas conductas que crean un riesgo muy escaso, casi despreciable para el bien jurídico (denominadas conductas de bagatela) carecen de lesividad material suficiente para ser incluidas en el ámbito del tipo”<sup>35</sup>.

El pronóstico de peligrosidad *ex ante* constituye el “elemento esencial del desvalor de acción”<sup>36</sup>, y “afecta a la imputación de *la conducta* a la parte objetiva del tipo”<sup>37</sup>. Como ya afirmara TORÍO LÓPEZ, la creación de un riesgo o peligro jurídicamente desaprobado constituye “el núcleo o el centro sobre el que gravita la imputación objetiva”<sup>38</sup>. Con todo, existe un amplio acuerdo doctrinal, con el que coinciden incluso sectores que rechazan la imputación objetiva como criterio general de imputación, en considerar como “exigencia metódica y político criminal (...) que toda acción punible pueda ser definida como acción peligrosa para bienes jurídicos en contradicción con una norma jurídico-penal”<sup>39</sup>.

De conformidad con el juicio de adecuación, es posible excluir la relevancia penal de aquéllos casos en los que la conducta ni crea ni aumenta el riesgo porque el resultado se habría producido de igual forma sin la intervención del autor<sup>40</sup>. Atendiendo a este criterio puede determinarse *ex ante* que la conducta no crea un riesgo penalmente

---

<sup>34</sup> Vid. CUESTA AGUADO, M<sup>a</sup>. P. de la, *Tipicidad e imputación objetiva*, loc. cit. Asimismo, MARTINEZ ESCAMILLA, M., *La imputación objetiva del resultado*, op. cit., pág. 88.

<sup>35</sup> Vid. CUESTA AGUADO, M<sup>a</sup>. P. de la, *Tipicidad e imputación objetiva*, op. cit., págs. 161 y 162. En sentido similar, MARTINEZ ESCAMILLA, M., *La imputación objetiva del resultado*, op. cit., pág. 98.

<sup>36</sup> Vid. MARTINEZ ESCAMILLA, M., “La imputación objetiva del resultado. Una primera aproximación”, op. cit., pág. 87; id., *La imputación objetiva del resultado*, op. cit., pág. 61 y ss.

<sup>37</sup> Vid. MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, 9<sup>a</sup> ed., op. cit., pág. 260.

<sup>38</sup> Vid. TORÍO LÓPEZ, A., “Naturaleza y ámbito de la teoría de la imputación objetiva”, ADPCP, XXXIX, 1986, pág. 47. En el mismo sentido, RUEDA MARTÍN, M. A., *La Teoría de la imputación objetiva del resultado en el delito doloso de acción*, op. cit., pág. 221; ROBLES PLANAS, R., *La participación en el delito: fundamento y límites*. Ed. Marcial Pons. Madrid, 2003, pág. 185.

<sup>39</sup> Vid. TORÍO LÓPEZ, A., “Naturaleza y ámbito de la teoría de la imputación objetiva”, op. cit., pág. 48.

<sup>40</sup> En estos casos, afirman MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN, “el resultado sólo puede imputarse [al agente] si se demuestra claramente que, con su acción indebida, aumentaron sensiblemente las posibilidades normales de producir el resultado”. (*Derecho Penal. Parte General*, op. cit., pág. 230).



relevante en los contextos de disminución de riesgo<sup>41</sup> o en aquellas situaciones en las que la acción se realiza en el contexto de un riesgo permitido<sup>42</sup> o socialmente adecuado (riesgos derivados de actividades que, por su utilidad socialmente admitida, se consideran penalmente intrascendentes siempre que se desarrollen dentro de los límites normativamente tolerados)<sup>43</sup>. Finalmente, se ha de señalar que para algunos autores, los criterios de riesgo permitido y de adecuación social, no constituirían supuestos de exclusión de la tipicidad derivados de la imputación objetiva, sino fórmulas dogmáticas diferenciadas. Un análisis más detallado de las mismas se hará en el siguiente apartado<sup>44</sup>.

El segundo momento o nivel de imputación, la realización del riesgo en el resultado, sí integra un presupuesto referido propiamente a la *imputación del resultado*, condicionando el desvalor de dicho resultado a la existencia de un nexo específico<sup>45</sup> con el comportamiento peligroso que pueda confirmarse desde una perspectiva *ex post*<sup>46</sup>. De acuerdo con este segundo presupuesto, es preciso que el resultado sea la materialización o realización del riesgo inherente a la conducta. Una vez comprobada *ex ante* la peligrosidad de la conducta -primer nivel de imputación-, ha de corroborarse, en primer lugar, la existencia de una relación de causalidad entre aquella y el resultado y, en segundo lugar, la vinculación de ese resultado concreto al riesgo inherente a la acción<sup>47</sup>. En los casos en los que no exista la *relación de riesgo*<sup>48</sup>, no podrá imputarse al sujeto activo de la acción el resultado penalmente relevante, con independencia de que, en determinados casos y bajo ciertas condiciones, la conducta dé lugar a responsabilidad penal en grado de tentativa<sup>49</sup>.

<sup>41</sup> Vid. ROXIN, C., *Derecho Penal Parte General. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito*, op. cit., págs. 365 y 366.

<sup>42</sup> Vid. MARTINEZ ESCAMILLA, M., “La imputación objetiva del resultado. Una primera aproximación”, op. cit., págs. 91 y ss.; LANDECHO VELASCO, C. M., *Derecho Penal Español. Parte General*, op. cit., pág. 278.

<sup>43</sup> Vid. MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, 9ª ed., op. cit., págs. 260-263; ROXIN, C., *Derecho Penal. Parte General. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito*, op. cit., pág. 366.

<sup>44</sup> Vid. *infra*, apartados 4.1.3.1 y 4.1.3.2 de este capítulo, págs. 315 y ss.

<sup>45</sup> Vid. MARTINEZ ESCAMILLA, M., “La imputación objetiva del resultado. Una primera aproximación”, op. cit., pág. 95.

<sup>46</sup> Vid. MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, 9ª ed., op. cit., pág. 260; MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., *Derecho penal económico y de la empresa. Parte General*, op. cit., pág. 273.

<sup>47</sup> Vid. MARTINEZ ESCAMILLA, M., *La imputación objetiva del resultado*, op. cit., págs. 167 y 168; SILVA SÁNCHEZ, J. M., “Aberratio ictus e imputación objetiva”, op. cit., pág. 369; LANDECHO VELASCO, C. M., *Derecho Penal Español. Parte General*, op. cit., pág. 278.

<sup>48</sup> Vid. SILVA SÁNCHEZ, J. M., “Aberratio ictus e imputación objetiva”, op. cit., pág. 368.

<sup>49</sup> Vid. MARTINEZ ESCAMILLA, M., *La imputación objetiva del resultado*, op. cit., págs. 165 y ss.; CUESTA AGUADO, Mª. P. de la, *Tipicidad e imputación objetiva*, op. cit., pág. 137.

El segundo nivel de imputación resulta especialmente útil como fórmula limitativa de la responsabilidad penal en aquellos casos en los que exista una diversidad de riesgos que influyan en el curso causal que finalmente conduce al resultado que la norma trata de evitar<sup>50</sup>. A través de este *topos* es posible descartar la trascendencia penal de supuestos en los que, pese a existir una acción generadora de un riesgo típicamente relevante, el resultado no se materializa en la realización de este riesgo, sino que deriva de *otro factor*<sup>51</sup>, como cursos causales atípicos<sup>52</sup> o irregulares<sup>53</sup> -desviación del curso causal normal<sup>54</sup>-, generalmente no pronosticables<sup>55</sup>, o de aquellos otros en los que la secuencia causal originada por la conducta peligrosa se ve interrumpida por intervenciones imprevisibles posteriores de la víctima o de terceros<sup>56</sup>, supuestos que la doctrina habitualmente sitúa fuera del ámbito de protección penal<sup>57</sup>.

Por último, la exigencia de que el resultado quede abarcado por el ámbito de protección de la norma permitirá excluir de la esfera de la tipicidad aquellos resultados distintos a los que la norma penal pretende tutelar imponiendo el deber de diligencia<sup>58</sup>. Para algunos autores, este *topos* será el indicado para descartar la imputación objetiva de las denominadas conductas alternativas conforme a derecho (aquellas, generalmente imprudentes, en las que el resultado se habría producido aunque el autor hubiese actuado de forma diligente)<sup>59</sup>. En esta línea, MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN afirman que cuando pueda afirmarse que la conducta realizada correctamente hubiera producido también el resultado típico, se excluirá la imputación objetiva del resultado al comportamiento; por el contrario, habrá de afirmarse aquélla cuando se constate que el comportamiento imprudente suponga un “*incremento notable del riesgo normal* de que

<sup>50</sup> Vid. MARTINEZ ESCAMILLA, M., “La imputación objetiva del resultado. Una primera aproximación”, op. cit., pág. 96.

<sup>51</sup> Vid. MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, 9ª ed., op. cit., pág. 263.

<sup>52</sup> Vid. MUÑOZ CONDE, F./GARCÍA ARÁN, M., *Derecho Penal. Parte General*, op. cit., pág. 230; LANDECHO VELASCO, C. M., *Derecho Penal Español. Parte General*, op. cit., pág. 278.

<sup>53</sup> Vid., con detalle, GIMBERNAT ORDEIG, E., “Cursos causales irregulares e imputación objetiva”, ADPCP, LXIII, 2010, págs. 17 y ss.

<sup>54</sup> Vid. MARTINEZ ESCAMILLA, M., *La imputación objetiva del resultado*, op. cit., págs. 313 y ss.; id., “La imputación objetiva del resultado. Una primera aproximación”, op. cit., págs. 95, 97 y ss.

<sup>55</sup> Vid. TORÍO LÓPEZ, A., “Naturaleza y ámbito de la teoría de la imputación objetiva”, op. cit., pág. 39; SILVA SÁNCHEZ, J. M., “Aberratio ictus e imputación objetiva”, op. cit., pág. 369.

<sup>56</sup> Vid. MARTINEZ ESCAMILLA, M., *La imputación objetiva del resultado*, op. cit., pág. 333; MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, 9ª ed., op. cit., pág. 263. Con detalle, BOLEA BARDÓN, C., “Interrupción de la imputación objetiva por intervención de terceras personas”, ADPCP, 1994, págs. 375 y ss.

<sup>57</sup> Vid. MUÑOZ CONDE, F./GARCÍA ARÁN, M., *Derecho Penal. Parte General*, op. cit., pág. 231.

<sup>58</sup> Vid. GIMBERNAT ORDEIG, E., “¿Qué es la imputación objetiva?”, op. cit., pág. 185.

<sup>59</sup> Vid. LANDECHO VELASCO, C. M., *Derecho Penal Español. Parte General*, op. cit., pág. 279; MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, 9ª ed., op. cit., págs. 305-308.

el resultado se produjera”<sup>60</sup>. Para la solución de estos supuestos -cuyo exponente paradigmático son los conocidos casos de los pelos de cabra y de la novocaína propuestos por ROXIN-, algunos autores acuden a la *teoría del incremento del riesgo* enunciada por el distinguido penalista alemán, según la cual, la conducta ha de incrementar el riesgo de producción del resultado respecto a la conducta adecuada a Derecho. “Para averiguarlo, se llevará a cabo una comparación entre el riesgo real creado y el que hubiera generado el comportamiento correcto. Para ello se tendrán en cuenta no solo los factores reconocibles *ex ante*, sino los conocidos una vez producido el resultado”<sup>61</sup>. Desde la perspectiva opuesta, MARTÍNEZ ESCAMILLA considera que el hecho de que la conducta hipotéticamente correcta (o comportamiento alternativo conforme a derecho) no hubiese evitado el resultado es irrelevante desde la perspectiva de la imputación objetiva<sup>62</sup>.

En cualquier caso, también, por virtud de este tercer criterio, podrá descartarse la relevancia penal de supuestos de favorecimiento imprudente a suicidios, a autolesiones y a autopuestas en peligro de la propia víctima<sup>63</sup> y de la contribución a daños derivados o secundarios, supuestos estos últimos en los que, tras la producción de un primer resultado derivado de la conducta peligrosa, “sobreviene un segundo resultado

<sup>60</sup> Vid. MUÑOZ CONDE, F./GARCÍA ARÁN, M., *Derecho Penal. Parte General*, op. cit., pág. 290.

<sup>61</sup> Vid. CUESTA AGUADO, M<sup>a</sup>. P. de la, *Tipicidad e imputación objetiva*, op. cit., pág. 168.

<sup>62</sup> Según MARTÍNEZ ESCAMILLA “conviene (...) diferenciar dos extremos: la finalidad de la norma y la capacidad de ésta en el caso concreto para conseguir sus objetivos. (...) El que el comportamiento correcto (...) no pueda limitar en el caso concreto los riesgos (...), no quiere decir que el peligro real que la conducta diligente hubiera generado sea el que el legislador sobre la base de una ponderación de intereses estaba dispuesto a admitir. *No se trataría de un riesgo que el legislador quiera tolerar, que considere admisible, sino un riesgo que no puede castigar porque la conducta de la que ha derivado no es una conducta disvaliosa por haber respetado las normas de cuidado establecidas*. Pero, ¿por qué debería quedar también impune la creación de un riesgo real que sobre pasa el nivel inicialmente aceptado cuando no deriva de una conducta correcta, sino claramente disvaliosa? No creo que hasta el momento se haya justificado suficientemente por qué ha de concedérsele la impunidad al sujeto tan sólo porque en el supuesto hipotético de haberse comportado prudentemente, por circunstancias causales tan sólo reconocibles *ex post* hubiera generado una puesta en peligro mayor de la que el legislador inicialmente se mostró dispuesto a admitir. Al sujeto ha de juzgársele por lo que realmente aconteció, no por lo que hipotéticamente pudo suceder, y lo que aconteció fue que el autor, con su comportamiento *ex ante* peligroso por lesionar el deber de cuidado, en realidad dio lugar a un riesgo mayor que en el momento de establecimiento de las normas de cuidado se quería admitir, materializándose éste en un resultado *ex ante* previsible. (...) *No siempre que el resultado se hubiera producido también con el comportamiento prudente resulta correcta la afirmación de que la norma de diligencia vulnerada se ha mostrado «ex post» ineficaz para la consecución de sus objetivos*”. (“La imputación objetiva del resultado. Una primera aproximación”, op. cit., págs. 104-108 *passim*, cursivas en el texto original; más detalladamente, id., *La imputación objetiva del resultado*, op. cit., págs. 193 y ss.).

<sup>63</sup> Vid. CUESTA AGUADO, M<sup>a</sup>. P. de la, *Tipicidad e imputación objetiva*, op. cit., págs. 141 y ss.; MARTÍNEZ ESCAMILLA, M., *La imputación objetiva del resultado*, op. cit., págs. 344 y ss.; LANDECHO VELASCO, C. M., *Derecho Penal Español. Parte General*, op. cit., pág. 279; GIMBERNAT ORDEIG, E., “Imputación objetiva, participación en una autopuesta en peligro y heteropuesta en peligro consentida”, *Estudios penales en recuerdo del Profesor Ruiz Antón*, Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2004, págs. 432 y ss.

proveniente de una posterior acción de la víctima, de un tercero o de la intervención de la propia naturaleza”<sup>64</sup>.

#### 4.1.2.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA IMPUTACIÓN OBJETIVA

Modernamente se considera que la imputación objetiva va más allá de una mera selección de procesos causales relevantes<sup>65</sup> a través de criterios normativos, e incluye en su “marco teórico consideraciones en realidad pertenecientes a la determinación de la conducta típica”<sup>66</sup>. La doctrina dominante actualmente identifica la imputación objetiva una con verdadera teoría de la imputación<sup>67</sup> o de la adecuación al tipo<sup>68</sup>, en el sentido de atribución “del injusto específico de una figura delictiva (esto es, la lesión o puesta en peligro del bien jurídico) a una conducta que coincide con la descrita por el tipo”<sup>69</sup>. De este modo, se amplía el ámbito de aplicación de la teoría general, que deja de asociarse exclusivamente -como venía haciéndose tradicionalmente- a los delitos de resultado material<sup>70</sup>, para proyectarse asimismo a los tipos de mera actividad<sup>71</sup>. También en esta última tipología delictiva es necesario contrastar que la conducta ha superado un umbral de peligrosidad (riesgo jurídicamente desaprobado) para el bien jurídico llamado a ser protegido<sup>72</sup>. De este modo, en los delitos de mera actividad, el juicio de imputación objetiva<sup>73</sup> precisa la verificación, primero, de la creación de un riesgo de lesión o puesta

---

<sup>64</sup> Vid. MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., *Derecho penal económico y de la empresa. Parte General*, op. cit., pág. 288.

<sup>65</sup> Vid. CANCIO MELIÁ, M., “Aproximación a la Teoría de la Imputación Objetiva”, op. cit., pág. 94; FEIJÓO SÁNCHEZ, B., *Derecho penal de la empresa e imputación objetiva*, Ed. Reus. Madrid, 2007, pág. 63; MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., *Derecho penal económico y de la empresa. Parte General*, op. cit., pág. 272.

<sup>66</sup> Vid. CANCIO MELIÁ, M., “Aproximación a la Teoría de la Imputación Objetiva”, loc. cit.

<sup>67</sup> Vid. MIR PUIG, S., “Significado y alcance de la imputación objetiva en Derecho penal”, op. cit., pág. 8.

<sup>68</sup> Vid. MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., *Derecho penal económico y de la empresa. Parte General*, loc. cit.

<sup>69</sup> Ibidem. Asimismo, FEIJÓO SÁNCHEZ, B., *Derecho penal de la empresa e imputación objetiva*, op. cit., pág. 70; REQUENA JULIANI, J., *Intercambiabilidad de acción y omisión en los delitos de dominio: Posición de garante e imputación objetiva*, op. cit., págs. 225 y 226.

<sup>70</sup> Vid. AGUILAR LÓPEZ, M. A., “Delitos de Peligro e Imputación Objetiva”, *Revista Iter Criminis*, Mayo - Junio, 2008, disponible en el enlace [portal.uclm.es/portal/page/portal/IDP/.../delitos%20de%20peligro.pdf](http://portal.uclm.es/portal/page/portal/IDP/.../delitos%20de%20peligro.pdf), pág. 21; MODOLELL GONZÁLEZ, J. L., “Consideraciones teóricas sobre la posibilidad de extensión de la imputación objetiva a los delitos de mera actividad”, op. cit., págs. 236 y ss.

<sup>71</sup> Vid. MARTINEZ ESCAMILLA, M., *La imputación objetiva del resultado*, op. cit., pág. 48; TORÍO LÓPEZ, A., “Naturaleza y ámbito de la teoría de la imputación objetiva”, op. cit., págs. 35 y 43; id., “Racionalidad y relatividad en las teorías jurídicas del delito”, ADPCP, XLII, 1989, pág. 510; REYES ALVARADO, Y., “Fundamentos teóricos de la imputación objetiva”, ADPCP, XLV, 1992, págs. 964 y 965; ALCALÉ SÁNCHEZ, M., *El Tipo de Injusto en los Delitos de Mera Actividad*, op. cit., pág. 262; MIR PUIG, S., “Significado y alcance de la imputación objetiva en Derecho penal”, op. cit., págs. 16 y 17; FEIJÓO SÁNCHEZ, B., *Derecho penal de la empresa e imputación objetiva*, op. cit., pág. 65; MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., *Derecho penal económico y de la empresa. Parte General*, op. cit., pág. 273; AGUILAR LÓPEZ, M. A., “Delitos de Peligro e Imputación Objetiva”, loc. cit.

<sup>72</sup> Vid. REYES ALVARADO, Y., “Fundamentos teóricos de la imputación objetiva”, op. cit., pág. 964.

<sup>73</sup> Vid. MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., *Derecho penal económico y de la empresa. Parte General*, loc. cit.

en peligro del bien jurídico tutelado por la norma penal y, en segundo lugar, de que dicha lesión o puesta en peligro es imputable a la conducta<sup>74</sup>. Es por ello que, de acuerdo con MIR PUIG, el resultado típico (la puesta en peligro o lesión del bien jurídico, que en los delitos de mera actividad se agota en *la propia conducta* y no requiere un resultado separado de ella), ha de constatarse *ex post* para poder afirmar el desvalor de resultado, si bien asimismo ha de verificarse *ex ante* la idoneidad lesiva de la conducta para poder afirmar también el desvalor de la misma<sup>75</sup>.

Determinados autores han puesto de relieve que los postulados de la imputación objetiva son también aplicables a los delitos de omisión<sup>76</sup>, si bien en términos diferenciados. Esta clase de delitos se fundamenta a través de criterios estrictamente normativos, pues imponen un deber o mandato de hacer positivo con objeto de neutralizar ocasiones de riesgo para el bien jurídico<sup>77</sup>. El objeto de imputación en los delitos de omisión propia es la no realización de la conducta a que la norma obliga para disminuir o eliminar un peligro preexistente para el bien jurídico<sup>78</sup>; y en los delitos de omisión impropia o comisión por omisión -en los que, recordemos, a la no evitación del resultado lesivo se asocian las mismas consecuencias penológicas que a su causación activa-, la imputación objetiva de dicho resultado se traduce en la “indebida falta de contención de un curso de riesgo que se acaba concretando en el resultado”<sup>79</sup>. En este último caso, resulta preciso que pueda afirmarse, con una “probabilidad rayana en la certeza”, que la acción omitida habría evitado el resultado<sup>80</sup> y que el sujeto omitente se

---

<sup>74</sup> Vid. CARBONELL MATEU, J. C., “Sobre tipicidad e imputación: reflexiones básicas en torno a la imputación del dolo y la imprudencia”, op. cit., pág. 140. En definitiva, de acuerdo con MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, en los tipos de mera actividad también ha de verificarse que el resultado, entendido como afectación del bien jurídico, es objetivamente imputable a la acción del agente. (*Derecho penal económico y de la empresa. Parte General*, op. cit., pág. 285). Y dicha imputación tendrá lugar, según CARBONELL MATEU, “sólo cuando sea generalmente predecible que la conducta lesionará o pondrá en peligro un bien tutelado por la norma penal”. (“Sobre tipicidad e imputación: reflexiones básicas en torno a la imputación del dolo y la imprudencia”, op. cit., pág. 145).

<sup>75</sup> Vid. MIR PUIG, S., “Significado y alcance de la imputación objetiva en Derecho penal”, op. cit., pág. 16.

<sup>76</sup> Vid. MARTINEZ ESCAMILLA, M., *La imputación objetiva del resultado*, loc. cit.; RIGHI, E., “Causalidad natural e imputación objetiva”, *Dogmática y ley penal. Libro homenaje a Enrique Bacigalupo* (coord. José Miguel Zugaldía Espinar, Jacobo López Barja de Quiroga). Marcial Pons. Madrid, 2004, pág. 790.

<sup>77</sup> Vid. CARBONELL MATEU, J. C., “Sobre tipicidad e imputación: reflexiones básicas en torno a la imputación del dolo y la imprudencia”, op. cit., pág. 146.

<sup>78</sup> *Ibidem*, págs. 147 y 148.

<sup>79</sup> Vid. LASCURAÍN SÁNCHEZ, J. A., “Salvar al oficial Ryan: (sobre la responsabilidad penal del oficial de cumplimiento)”, *Responsabilidad de la Empresa y Compliance. Programas de prevención, detección y reacción penal*, Ed. Edisofer. Madrid, 2014, pág. 3.

<sup>80</sup> Vid. CARBONELL MATEU, J. C., “Sobre tipicidad e imputación: reflexiones básicas en torno a la imputación del dolo y la imprudencia”, op. cit., pág. 148; MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, 9ª ed., op. cit., pág. 265.

encuentre en *posición de garante*<sup>81</sup>. Si en el omitente no concurre el deber jurídico específico de actuar para salvaguardar el bien jurídico o no puede afirmarse casi con certeza que la acción omitida habría evitado el resultado lesivo, no podrá ser éste objetivamente imputable a la conducta omisiva<sup>82</sup>.

Por otro lado, de acuerdo con la doctrina dominante, la teoría de la imputación objetiva opera tanto en los delitos imprudentes como en los dolosos, si bien es en los primeros donde históricamente ha adquirido mayor relevancia<sup>83</sup>. Como sabemos, la tipicidad del delito imprudente precisa que la infracción del deber de cuidado provoque la producción del resultado típico<sup>84</sup>. Para que dicho resultado pueda imputarse a la conducta imprudente, es necesario que exista una relación de causalidad entre ambas así como que la conducta imprudente genere -o incremente- un riesgo penalmente relevante que se realice en el resultado, resultado que asimismo ha de pertenecer al ámbito de protección de la norma de cuidado infringida<sup>85</sup>. De acuerdo con MIR PUIG y MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN, en el ámbito de la imprudencia la imputación objetiva será especialmente útil para excluir la tipicidad de aquellos supuestos en los que, aun habiendo creado la conducta imprudente un riesgo relevante, no fuere previsible que aquella provocase el concreto resultado causado, de aquellos otros en los que el resultado no sea consecuencia directa de la infracción de la norma de cuidado desatendida y, finalmente, de los supuestos de comportamiento alternativo correcto o conforme a derecho<sup>86</sup>.

---

<sup>81</sup> Ibidem; id., “Significado y alcance de la imputación objetiva en Derecho penal”, op. cit., pág. 17.

<sup>82</sup> Vid. CARBONELL MATEU, J. C., “Sobre tipicidad e imputación: reflexiones básicas en torno a la imputación del dolo y la imprudencia”, op. cit., pág. 149.

<sup>83</sup> Vid. MARTINEZ ESCAMILLA, M., *La imputación objetiva del resultado*, op. cit., págs. 44 y 123; RUEDA MARTÍN, M. A., *La Teoría de la imputación objetiva del resultado en el delito doloso de acción*, op. cit., pág. 219; REYES ALVARADO, Y., “El concepto de Imputación Objetiva”, op. cit., pág. 200; id., “Intervención delictiva e imputación objetiva”, ADPCP, LX, 2007, págs. 98 y ss.; REQUENA JULIANI, J., *Intercambiabilidad de acción y omisión en los delitos de dominio: Posición de garante e imputación objetiva*, op. cit., pág. 225.

<sup>84</sup> Vid. MUÑOZ CONDE, F./GARCÍA ARÁN, M., *Derecho Penal. Parte General*, op. cit., pág. 288. De acuerdo con MIR PUIG, “dicho resultado puede consistir tanto en un resultado separado de la conducta («resultado» en el sentido estricto de los delitos de resultado, que constituyen la inmensa mayoría de los delitos imprudentes), como en la parte objetiva de la conducta descrita en un tipo de mera actividad. En ambos casos es necesario que el hecho resultante haya sido *causado* por la infracción del deber de cuidado y pueda *imputarse objetivamente* a la misma”. (*Derecho Penal. Parte General*, 9ª ed., op. cit., pág. 302).

<sup>85</sup> Vid. MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, 9ª ed., op. cit., pág. 304.

<sup>86</sup> Ibidem, págs. 305-308; MUÑOZ CONDE, F./GARCÍA ARÁN, M., *Derecho Penal. Parte General*, op. cit., pág. 290.

Mayoritariamente se afirma que también en los delitos dolosos<sup>87</sup> la imputación objetiva permite determinar bajo qué condiciones la conducta del agente supone la creación de un riesgo penalmente relevante para el bien jurídico protegido imputable al autor<sup>88</sup>. Los filtros normativos<sup>89</sup> derivados de la teoría general son también aplicables a esta modalidad delictiva, en la que también es preciso verificar que la conducta era *ex ante* (en el momento de su realización) potencialmente lesiva para el bien jurídico protegido<sup>90</sup> y descartar la trascendencia penal de la creación dolosa de riesgos irrelevantes para el mismo.

#### **4.1.3. OTRAS CATEGORÍAS DOGMÁTICAS DE CARÁCTER NORMATIVO**

Además de la teoría general de la imputación objetiva, existen otras instituciones y criterios de carácter normativo estrechamente ligados a aquella que permiten igualmente, ya a nivel de tipicidad, descartar la relevancia penal de resultados lesivos meramente causales no vinculados normativamente con la conducta. Ciertamente han sido muy diversas las propuestas y teorías formuladas a lo largo del siglo pasado, fundamentalmente por la ciencia penal alemana, en el largo camino de la “normativización del contenido del tipo objetivo”<sup>91</sup>. Naturalmente, un análisis de todas ellas excede los límites de este trabajo<sup>92</sup>, de modo que limitaremos nuestro estudio a

---

<sup>87</sup> Vid. GIMBERNAT ORDEIG, E., “¿Qué es la imputación objetiva?”, op. cit., págs. 180 y 181; MARTINEZ ESCAMILLA, M., “La imputación objetiva del resultado. Una primera aproximación”, op. cit., págs. 93 y 94. El finalismo ha rechazado especialmente la operatividad de los criterios de imputación ligados a la teoría de la imputación objetiva en los delitos dolosos. En este sentido, ha criticado RUEDA MARTÍN que “en la determinación de [los] filtros objetivos ubicados (...) en la esfera del tipo objetivo no se tiene en cuenta el contenido de la voluntad del autor. La fundamentación del riesgo permitido e igualmente su infracción, tiene lugar en la teoría de la imputación objetiva, al parecer, con absoluta independencia de lo que el sujeto “quiere” y “conoce”. (*La Teoría de la imputación objetiva del resultado en el delito doloso de acción*, op. cit., pág. 230). Este planteamiento es incorrecto, a juicio de la autora, porque en la delimitación del riesgo permitido no puede prescindirse del examen del dolo de la conducta. Para comprender el sentido de la misma “hay que atender fundamentalmente a la finalidad” que persigue el autor; sólo así se le puede atribuir el sentido típico. (Ibidem, pág. 346). En definitiva, de acuerdo con el sistema dogmático del finalismo, “es imposible afirmar que se haya realizado el tipo objetivo del delito doloso sin tener en cuenta -o faltando, incluso-, el tipo subjetivo (el dolo). No es posible hablar de la existencia de un tipo objetivo del delito doloso con independencia del dolo”. (Ibidem, pág. 248).

<sup>88</sup> Vid. REQUENA JULIANI, J., *Intercambiabilidad de acción y omisión en los delitos de dominio: Posición de garante e imputación objetiva*, op. cit., pág. 225.

<sup>89</sup> Ibidem, pág. 221.

<sup>90</sup> Vid. MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., *Derecho penal económico y de la empresa. Parte General*, op. cit., pág. 276.

<sup>91</sup> Vid. CANCIO MELIÁ, M., “Algunas reflexiones sobre lo objetivo y lo subjetivo en la teoría de la Imputación Objetiva”, op. cit., pág. 208.

<sup>92</sup> Sobre las diferentes propuestas doctrinales desarrolladas fundamentalmente en el marco de la participación delictiva, vid. BLANCO CORDERO, I., *Límites a la participación delictiva. Las acciones neutrales y la*

aquellas que más relevancia han adquirido en el ámbito de la delincuencia económica y más incidencia han desplegado en el delito blanqueo de capitales.

Si bien las especificidades que presenta cada instituto dogmático y los requisitos que cada uno de ellos precisa permite establecer importantes diferencias entre los mismos, todos ellos comparten rasgos comunes. En primer lugar, persiguen la misma finalidad: erigirse como filtro normativo para descartar la tipicidad de grupos de casos no dotados de un verdadero injusto por no crear de un riesgo penalmente relevante para el bien jurídico. Asimismo, se sitúan en el primer estadio de la imputación objetiva (imputación del comportamiento)<sup>93</sup>, y se fundamentan en el principio del riesgo permitido. Sobre la base de dicho principio, los distintos criterios normativos de los que a continuación nos ocuparemos permiten excluir del radio de acción típica conductas que en el ámbito de las relaciones sociales, negociales o profesionales normalizadas, están socialmente admitidas porque, o bien resultan *a priori* inocuas si se desarrollan conforme a patrones estandarizados, o porque, pese a generar determinado peligro de vulnerar bienes jurídicos, son socialmente permitidas por la utilidad que comportan si se desarrollan dentro de los límites de riesgo tolerables.

#### **4.1.3.1. LA ADECUACIÓN SOCIAL**

Numerosos autores<sup>94</sup> han señalado que determinadas conductas desarrolladas en el marco de actividades peligrosas o incluso lesivas para bienes jurídicos, pero estimadas socialmente adecuadas o lícitas por su utilidad, pueden considerarse atípicas<sup>95</sup> si se realizan observando la diligencia debida y dentro de los márgenes del riesgo permitido<sup>96</sup>. En estos casos, afirma MIR PUIG, “la voluntad de la ley [es dejar]

---

*cooperación con el delito*, op. cit., págs. 30 y ss.; ROBLES PLANAS, R., *La participación en el delito: fundamento y límites*, op. cit., págs. 52 y ss.

<sup>93</sup> Vid. CANCIO MELIÁ, M., “Aproximación a la Teoría de la Imputación Objetiva”, op. cit., pág. 96.

<sup>94</sup> Vid. MARTINEZ ESCAMILLA, M., “La imputación objetiva del resultado. Una primera aproximación”, op. cit., pág. 83; GIMBERNAT ORDEIG, E., “¿Qué es la imputación objetiva?”, op. cit., pág. 182; LANDECHO VELASCO, C. M., *Derecho Penal Español. Parte General*, op. cit., pág. 314; MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, 9ª ed., op. cit., pág. 528; MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., *Derecho penal económico y de la empresa. Parte General*, op. cit., págs. 288 y ss.

<sup>95</sup> Vid. MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, 9ª ed., op. cit., pág. 528. Cfr., asimismo, JAKOBS, G., *La imputación objetiva en el Derecho penal*, op. cit., pág. 49; BACIGALUPO ZAPATER, E., *Derecho Penal. Parte General*, 2ª ed. Ed. Hammurabi. Buenos Aires, 1999, pág. 273; GIMBERNAT ORDEIG, E., “¿Qué es la imputación objetiva?”, op. cit., págs. 181 y ss.

<sup>96</sup> Vid. MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, 9ª ed., op. cit., pág. 525. Si en estos casos “son actividades expresamente aprobadas -porque en ellas no existe el mínimo desvalor objetivo- por el ordenamiento jurídico; y si el hecho realizado es una conducta correcta -por mucho que se realice con la peor de las intenciones-, entonces para un Derecho penal regido por el principio del hecho, no existe tampoco una



tácitamente fuera del tipo legal las conductas perfectamente adecuadas a la vida social”<sup>97</sup>.

De acuerdo con la *teoría de la adecuación social*, formulada inicialmente por WELZEL, se consideran atípicas aquellas acciones que, aun pudiendo menoscabar bienes jurídicos, son inherentes al orden social y por tanto no se consideran desvaloradas<sup>98</sup> incluso cuando coinciden con el tenor literal de un tipo penal<sup>99</sup>. Si un comportamiento no está prohibido, tampoco puede constituir un injusto penal<sup>100</sup>. Esta teoría conforma, afirma ROBLES PLANAS, un concepto normativo que excluye la tipicidad de conductas que no poseen “el sentido o significado social de realización del tipo”<sup>101</sup>.

La adecuación social ha sido interpretada por la doctrina, en cuanto a su contenido y alcance, de forma muy diversa<sup>102</sup>. En la doctrina española han asumido la formulación inicialmente propuesta por WELZEL como criterio interpretativo que excluye la tipicidad de los actos socialmente adecuados GRACIA MARTÍN y RUEDA MARTÍN. Desde perspectivas asociadas a la doctrina final de acción, los referidos autores han negado la vinculación de la adecuación social a los criterios de la imputación objetiva<sup>103</sup>. A pesar de reconocer la necesidad de desarrollar y delimitar los fundamentos de la teoría de la adecuación social y de depurar “los casos que deban encontrar solución en su ámbito”, GRACIA asevera que a través de esta institución puede rechazarse la tipicidad de “aquellas acciones que estén dirigidas al fin de la actividad socialmente valiosa aun a pesar de que la voluntad de realización comprenda como segura producción o cuente con la posible producción del menoscabo del bien jurídico implicado y subordinado al ejercicio de aquella actividad. (...) Si la voluntad de realización del agente está dirigida a la consecución de algún fin no típico de la

---

manifestación externa a la que se pueda vincular una prohibición (tipificación) penal”. (Vid. GIMBERNAT ORDEIG, E., “¿Qué es la imputación objetiva?”, op. cit., pág. 182).

<sup>97</sup> Vid. MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, 9ª ed., loc. cit.

<sup>98</sup> Vid. RUEDA MARTÍN, M.A., *La Teoría de la imputación objetiva del resultado en el delito doloso de acción*, op. cit., pág. 235.

<sup>99</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *Límites a la participación delictiva. Las acciones neutrales y la cooperación con el delito*, op. cit., pág. 34; ROBLES PLANAS, R., *La participación en el delito: fundamento y límites*, op. cit., pág. 93.

<sup>100</sup> Vid. CANCIO MELIÁ, M., “La teoría de la adecuación social en Welzel”, ADPCP, XLVI, 1993, pág. 669; GIMBERNAT ORDEIG, E., “¿Qué es la imputación objetiva?”, loc. cit.

<sup>101</sup> Vid. ROBLES PLANAS, R., *La participación en el delito: fundamento y límites*, op. cit., págs. 93 y 94.

<sup>102</sup> Sobre una variante de la adecuación social que HASSEMER traslada al ámbito de sectores profesionales determinados (adecuación profesional), vid. ROBLES PLANAS, *La participación en el delito: fundamento y límites*, op. cit., págs. 97 y ss.

<sup>103</sup> Vid. RUEDA MARTÍN, M. A., “Consideraciones acerca de la relevancia penal de las acciones cotidianas en la comisión de un hecho doloso”, *Revista penal*, nº 9, 2002, pág. 131, disponible en el siguiente enlace: <http://www.uhu.es/revistapenal/index.php/penal/article/viewArticle/132>.

actividad socialmente valorada, entonces la acción que verdaderamente realizará será ya distinta de la socialmente adecuada y, por ello, axiológicamente diferente”<sup>104</sup>. Por ello, afirma RUEDA MARTÍN, para determinar la significación social de la conducta (si ésta es o no socialmente adecuada), resulta imprescindible atender a la finalidad que orienta la misma: “el sentido social de la acción (...) se determina fundamentalmente por el contenido de la voluntad”, indagando si ésta “tiene sentido en sí misma al margen de la comisión del delito”<sup>105</sup>. En definitiva, la participación consciente en un hecho delictivo constituye el principal elemento que atribuye un sentido social a la acción e impide que pueda ser valorada como socialmente adecuada<sup>106</sup>.

En un sentido muy diferente al propuesto por GRACIA MARTÍN y su discípula, un sector doctrinal ha asociado la adecuación social con la idea de riesgo permitido<sup>107</sup>. Para algunos autores, el riesgo permitido no sería sino una manifestación o subcaso del principio de la adecuación social<sup>108</sup>. Así lo interpreta, como hemos visto *supra*, MIR PUIG, que considera socialmente adecuadas conductas formalmente subsumibles en la

---

<sup>104</sup> Vid. GRACIA MARTÍN, L., “El Finalismo como método sintético real-normativo para la construcción de la Teoría del Delito”, op. cit., págs. 18-21 *passim*. En cualquier caso, afirma el autor, la realización de las acciones socialmente adecuadas debe atender al deber objetivo de cuidado para evitar la “producción de esas consecuencias no típicas o normales de la acción socialmente adecuada. [La] inobservancia del cuidado objetivamente debido por la acción socialmente adecuada la convierte ya en socialmente inadecuada, no por su finalidad (...) sino por el ejercicio defectuoso”. (Ibidem). Vid, asimismo, RUEDA MARTÍN, M.A., *La Teoría de la imputación objetiva del resultado en el delito doloso de acción*, op. cit., págs. 285 y ss.). RUEDA MARTÍN ha tratado de sistematizar los diferentes supuestos que podrían ampararse en la adecuación social. De acuerdo con la autora, en las actividades reconocidas y valoradas socialmente, “la afección de un bien jurídico es consustancial al ordenado funcionamiento de la vida social, y por lo tanto, socialmente no desvalorada. En estos casos, aunque formalmente, podría ser subsumida la afección del bien jurídico en un determinado tipo, no existe un desvalor penal de resultado, pues la afección del bien jurídico involucrado de un modo consustancial por la actividad socialmente adecuada no puede constituir el resultado descrito por el tipo penal. (*La Teoría de la imputación objetiva del resultado en el delito doloso de acción*, op. cit., pág. 251). Al no existir un desvalor penal del resultado no podemos considerar tampoco que la conciencia y voluntad del sujeto de afectar a un bien jurídico de forma socialmente adecuada sea constitutiva del dolo y por consiguiente tampoco hay desvalor de acción” (pág. 440). Según la autora, bajo la adecuación social quedarían cubiertos supuestos como las intervenciones médico quirúrgicas, los daños derivados de explotaciones industriales que producen una afección en la salud de los trabajadores, o las lesiones efectuadas en el desarrollo de actividades deportivas. También estarían amparados por la adecuación social aquellos casos en los que la lesión del bien jurídico no resulta socialmente tolerada, pero dicha afección se produce de forma imprevisible *ex ante*. En estos casos, al no existir dolo ni imprudencia en la conducta del autor, no existe desvalor de la acción, y por ello, tampoco desvalor de resultado imputable al agente. Estos supuestos son los que la autora considera como “los auténticos casos usualmente denominados de riesgo permitido.” (Ibidem, págs. 275).

<sup>105</sup> Vid. RUEDA MARTÍN, M. A., “Consideraciones acerca de la relevancia penal de las acciones cotidianas en la comisión de un hecho doloso”, op. cit., pág. 130; id., *La Teoría de la imputación objetiva del resultado en el delito doloso de acción*, op. cit., pág. 280.

<sup>106</sup> Vid. RUEDA MARTÍN, M. A., “Consideraciones acerca de la relevancia penal de las acciones cotidianas en la comisión de un hecho doloso”, op. cit., págs. 126 y 127.

<sup>107</sup> De hecho, afirma MARTÍNEZ ESCAMILLA, por muchos autores ambas expresiones son entendidas como sinónimas. (*La imputación objetiva del resultado*, op. cit., págs. 125 y 145).

<sup>108</sup> Ibidem; id., “La imputación objetiva del resultado. Una primera aproximación”, op. cit., pág. 91.

norma penal pero desarrolladas dentro del margen del riesgo permitido<sup>109</sup>. Con todo, actualmente predominan las voces que niegan la operatividad de la adecuación social como institución eficaz para delimitar del tipo penal. No sólo por su falta de positivización a través de una norma penal expresa, sino fundamentalmente por la falta de la precisión conceptual que le caracteriza<sup>110</sup>. Quizá por ello finalmente ROXIN acabó concibiendo la adecuación social como criterio hermenéutico reductor de los tipos penales, y centró su atención en el riesgo permitido como auténtico criterio normativo fundamentador de la teoría general de la imputación objetiva<sup>111</sup>.

MARTÍNEZ ESCAMILLA rechaza expresamente la aptitud de la teoría de la adecuación social como fórmula de exclusión de la tipicidad. Para la autora, aquellos comportamientos considerados socialmente adecuados por crear un riesgo irrelevante o permitido sólo pueden considerarse atípicos conforme a los criterios derivados de la teoría de la imputación objetiva (primer nivel de imputación: la no creación de un riesgo penalmente relevante). La atipicidad de aquellos otros casos que, rebasando dicho riesgo, comparten como denominador común su conformidad con el orden ético y social “imperante en una determinada comunidad”, podrá fundamentarse a través de los instrumentos tradicionales de interpretación penal aplicados al tipo penal de que se trate, fundamentalmente la reducción teleológica conforme al fin de protección de la norma, en el sentido propuesto por ROXIN<sup>112</sup>. En cualquier caso, como se ha dicho, en la actualidad la doctrina dominante considera que la teoría de la adecuación social se presenta como excesivamente vaga e indeterminada<sup>113</sup>, al no aportar fórmulas precisas que permitan determinar qué supuestos y bajo qué condiciones pueden considerarse

---

<sup>109</sup> Vid. MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, 9ª ed., op. cit., pág. 528. En este sentido, afirma MIR que “quien respeta el margen de riesgo permitido no ha de incurrir en responsabilidad penal aunque cause un resultado que, tratándose de otra clase de actividad peligrosa no adecuada socialmente, sería imputable a [título de] imprudencia”.

<sup>110</sup> Vid. ESER, A., “La Adecuación social”: ¿Figura legal superflua o necesaria? Reflexiones respecto a la concesión de ventajas socialmente habituales”, *Revista de Derecho Penal*, 2002, pág. 462, disponible en el siguiente enlace: <https://www.freidok.uni-freiburg.de/dnb/download/3716>.

<sup>111</sup> Ibidem, págs. 462, 463 y 465; RUEDA MARTÍN, M. A., *La Teoría de la imputación objetiva del resultado en el delito doloso de acción*, op. cit., págs. 240 y 241.

<sup>112</sup> Vid. MARTÍNEZ ESCAMILLA, M., *La imputación objetiva del resultado*, op. cit., págs. 149-153 passim.

<sup>113</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *Límites a la participación delictiva. Las acciones neutrales y la cooperación con el delito*, op. cit., pág. 34; ROBLES PLANAS, R., *La participación en el delito: fundamento y límites*, op. cit., pág. 94; RAGÜES I VALLÈS, R., “Blanqueo de capitales y negocios standard. Con especial mención a los abogados como potenciales autores de un delito de blanqueo”, op. cit., pág. 134; PÉREZ MANZANO, M., “Los Derechos Fundamentales al ejercicio de la profesión de abogado, a la libre elección de abogado y a la defensa y las “conductas naturales”. La Sentencia del Tribunal Constitucional Alemán de 30 de marzo de 2004”, *Homenaje al Profesor Dr. Gonzalo Rodríguez Mourullo*. Ed. Civitas, Madrid, 2005, págs. 816 y 817; REQUENA JULIANI, J., *Intercambiabilidad de acción y omisión en los delitos de dominio: Posición de garante e imputación objetiva*, op. cit., pág. 292.

atípicas las denominadas “conductas socialmente adecuadas”<sup>114</sup>. Esta parece ser la razón de que, actualmente, la doctrina no preste gran atención a esta institución y oriente las líneas de investigación al criterio del riesgo permitido. Este se erige como un verdadero criterio normativo, precisamente aquél sobre el que se estructura la teoría de la imputación objetiva, que aparece dotado de contornos más precisos y ofrece superiores perspectivas<sup>115</sup>.

#### 4.1.3.2. EL RIESGO PERMITIDO

El riesgo permitido, ya sea considerado como negación del primer nivel de imputación exigible a toda conducta típica derivado de la teoría general de la imputación objetiva<sup>116</sup> o como categoría dogmática diferenciada<sup>117</sup>, permite descartar la tipicidad<sup>118</sup> de aquéllos supuestos en los que la producción del resultado lesivo deriva de una acción cuya realización, pese a ser peligrosa, está tolerada por ser “considerada más útil para la sociedad que su prohibición”<sup>119</sup>, siempre que se realice con la diligencia debida<sup>120</sup>. Diligencia que precisa la observancia de determinadas medidas de precaución o control<sup>121</sup> para minimizar el riesgo y mantener así la peligrosidad intrínseca a la

<sup>114</sup> Vid. ROBLES PLANAS, R., “Las conductas neutrales en el ámbito de los delitos fraudulentos”, op. cit., pág. 96; REQUENA JULIANI, J., *Intercambiabilidad de acción y omisión en los delitos de dominio: Posición de garante e imputación objetiva*, op. cit., pág. 293.

<sup>115</sup> Vid. ROBLES PLANAS, R., *Garantes y cómplices. La intervención por omisión y en los delitos especiales*. Ed. Atelier. Barcelona, 2007, pág. 80.

<sup>116</sup> Vid. MARTÍNEZ ESCAMILLA, M., *La imputación objetiva del resultado*, op. cit., pág. 139.

<sup>117</sup> Vid. PAREDES CASTAÑÓN, J. M., “La determinación del nivel de riesgo permitido: un caso de derecho penal económico”, *Revista de Derecho y Proceso penal*, 12, 2004, pág. 140; CÁRDENAS, J., “Algunas cuestiones sobre el riesgo permitido”, *Los Desafíos del Derecho Penal en el Siglo XXI: Libro Homenaje al Profesor Dr. Günther Jakobs* (Dir. Yacobucci, Guillermo Jorge). Ara Editores. Lima, 2005, págs. 385 y 386. Para algunos autores, el análisis del riesgo permitido no ha de asociarse a la teoría de la imputación objetiva (así FRISH, ROBLES PLANAS, que lo sitúan en el ámbito de la teoría de la conducta típica, vid. ROBLES PLANAS, R., *Garantes y cómplices. La intervención por omisión y en los delitos especiales*, op. cit., pág. 97). Incluso se discute si el análisis del riesgo permitido ha de ubicarse sistemáticamente en el ámbito la tipicidad, considerando algún sector doctrinal que en realidad constituye una causa de justificación que excluye la antijuridicidad o, incluso, una causa de exclusión de la culpabilidad. (Cfr. ROXIN, C., *Derecho Penal Parte General. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito*, op. cit., pág. 371; RUEDA MARTÍN, M. A., *La Teoría de la imputación objetiva del resultado en el delito doloso de acción*, op. cit., págs. 242 y 243; MUÑOZ CONDE, F./GARCÍA ARÁN, M., *Derecho Penal. Parte General*, op. cit., pág. 295; MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., *Derecho penal económico y de la empresa. Parte General*, op. cit., págs. 289 y 290). En este sentido se ha pronunciado LANDECHO VELASCO, que interpreta el riesgo permitido como una causa de justificación. (*Derecho Penal Español. Parte General*, op. cit., págs. 315 y 316).

<sup>118</sup> Vid. TORÍO LÓPEZ, A., “Naturaleza y ámbito de la teoría de la imputación objetiva”, op. cit., pág. 42; MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, 9ª ed., op. cit., pág. 299; MUÑOZ CONDE, F./GARCÍA ARÁN, M., *Derecho Penal. Parte General*, loc. cit.; MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., *Derecho penal económico y de la empresa. Parte General*, op. cit., pág. 289.

<sup>119</sup> Vid. MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, 9ª ed., op. cit., pág. 299; ROBLES PLANAS, R., “Las conductas neutrales en el ámbito de los delitos fraudulentos”, op. cit., pág. 197.

<sup>120</sup> Vid. MUÑOZ CONDE, F./GARCÍA ARÁN, M., *Derecho Penal. Parte General*, op. cit., pág. 295.

<sup>121</sup> Vid. MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., *Derecho penal económico y de la empresa. Parte General*, loc. cit.

conducta dentro de los niveles tolerables<sup>122</sup>. En materia de delitos socioeconómicos, afirma MARTÍNEZ-BUJÁN, la admisión del riesgo permitido ha de partir de una ponderación de intereses, en la que se tenga en cuenta tanto “el valor del bien jurídico amenazado, el grado de peligro que corre y las posibilidades de control, y, por otra parte, la relevancia del interés social de la conducta peligrosa y los beneficios que esta pueda proporcionar”<sup>123</sup>.

Aunque tradicionalmente la institución del riesgo permitido se ha vinculado a los delitos imprudentes<sup>124</sup>, en la actualidad se considera que dicha figura también excluye la tipicidad en las conductas dolosas: el resultado típico causado por éstas “no es objetivamente imputable cuando el comportamiento externo es objetivamente correcto”<sup>125</sup>, incluso, según un sector doctrinal, aunque en el ánimo del agente esté precisamente alcanzar dicho resultado<sup>126</sup>.

Una de las dificultades prácticas a las que se enfrenta el riesgo permitido como institución diferenciada es la individualización del grado permitido de riesgo. Para PAREDES CASTAÑÓN, los criterios que permiten su determinación, han de ser definidos

---

<sup>122</sup> Vid. MARTÍNEZ ESCAMILLA, M., “La imputación objetiva del resultado. Una primera aproximación”, op. cit., págs. 91 y 92. Afirma la autora que “las reglas tendentes a la minimización de riesgos” pueden tener origen en el derecho penal o ser normas extrapenales, incluso extrajurídicas -como puede ser la *lex artis* propia de un sector profesional-. Y en aquellos casos en los que no existe una normativa dirigida a reducir los riesgos de una concreta actividad peligrosa, suele acudir al criterio del hombre prudente.

<sup>123</sup> Vid. MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., *Derecho penal económico y de la empresa. Parte General*, op. cit., pág. 291. En efecto, afirma el autor, existe un “interés general de toda la comunidad en el adecuado desarrollo económico e industrial del país, que en buena medida lleva aparejada la realización de actividades peligrosas, immanentes al modelo económico constitucionalmente consagrado. Sobre la base de dicha ponderación se determinará el límite hasta donde sea posible ejecutar la acción peligrosa sin que ello acarree responsabilidad criminal alguna”.

<sup>124</sup> Vid. MARTÍNEZ ESCAMILLA, M., *La imputación objetiva del resultado*, op. cit., pág. 153.

<sup>125</sup> Vid. GIMBERNAT ORDEIG, E., “¿Qué es la imputación objetiva?”, op. cit., pág. 183.

<sup>126</sup> Vid. MARTÍNEZ ESCAMILLA, M., *La imputación objetiva del resultado*, op. cit., págs. 159 y 160. A esta idea, como ya se ha dicho, se opone el sector doctrinal adscrito a la teoría final de la acción. De acuerdo con RUEDA MARTÍN, la valoración del riesgo permitido exige tener también en cuenta el sentido social de la acción, especialmente su aspecto subjetivo, valorando si aquella se ha dirigido a una finalidad lesiva para el bien jurídico. (*La Teoría de la imputación objetiva del resultado en el delito doloso de acción*, op. cit., pág. 309). La autora recurre al ejemplo propuesto por SCHÜNEMANN para ilustrar el diferente tratamiento que debe dispensarse al riesgo permitido en los delitos dolosos y en los imprudentes: cuando, en el marco de una actividad de caza, un cazador alcanza a otra persona de forma imprudente, “se deberá hacer referencia, sin reparos, a un riesgo permitido. Por el contrario, quien efectúa el mismo disparo contra la víctima con el propósito de matarla, (...) no puede alegar que se ha tratado de un riesgo permitido. Pues, a diferencia del autor imprudente, no posee ningún fundamento digno de consideración para su actuar”. (Ibidem, pág. 303). Para RUEDA, cuando la acción persigue la lesión del bien jurídico no cabe invocar el riesgo permitido para excluir la responsabilidad penal. (Ibidem, pág. 442). Por su parte, sin excluir el criterio del riesgo permitido en los delitos dolosos, TORÍO LÓPEZ afirma que dicho criterio tiene un alcance diferente en las dos tipologías delictivas: “una peligrosidad mínima de la acción puede fundamentar en los delitos dolosos la imputación objetiva. Por el contrario, presente un alto grado de peligrosidad en la acción, la imputación objetiva puede estar ausente en los hechos no dolosos”. (“Naturaleza y ámbito de la teoría de la imputación objetiva”, op. cit., pág. 40).

en cada sector de la vida social. En el ámbito de la delincuencia económica, dicha individualización ha de ser precisada en relación con “cada clase de relación jurídico-patrimonial”<sup>127</sup> y respecto a cada concreto tipo delictivo a que pueda dar lugar<sup>128</sup>, a través del conjunto de reglas de conducta relevantes<sup>129</sup> para el ámbito de la vida social de que se trate<sup>130</sup>, que suelen ir referidas a una actuación diligente<sup>131</sup>. En cuanto a las fuentes de las reglas que determinan el riesgo permitido, afirma SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES que en ocasiones tienen un origen normativo (legislación sectorial extrapenal que regula ámbitos concretos de determinada actividad), y otras veces, su origen es deontológico o consuetudinario, y determina “la correcta actuación en un determinado oficio o profesión (*lex artis*)”. En defecto de una norma concreta aplicable, regiría el “juicio de valor hipotético de cómo habría actuado en el caso concreto, *ex ante*, un tercero prudente imparcial (un buen y diligente padre de familia, un empresario responsable, o similar)”<sup>132</sup>. Según PÉREZ MANZANO, no poseen la misma relevancia, a efectos de determinación del riesgo permitido, las reglas de conducta la formalizadas jurídicamente que las meramente deontológicas. Sólo en las primeras, el legislador ha tomado partido de forma expresa sobre la definición de los deberes de cuidado y el ámbito del riesgo permitido; sólo en ellas existe un componente normativo que delimita de forma expresa los límites de actuación en el sector de que se trate<sup>133</sup>. Precisamente por ello, para la determinación del riesgo permitido en determinado sector, tendrán mucha mayor trascendencia las reglas de conducta normativizadas.

Se afirma que cuando las reglas de conducta prohíben determinado comportamiento formalmente subsumible en el tipo, su realización constituirá una extralimitación del riesgo permitido; si, en cambio, aquellas reglas no lo prohíben,

---

<sup>127</sup> Vid. PAREDES CASTAÑÓN, J. M., “La determinación del nivel de riesgo permitido: un caso de derecho penal económico”, op. cit., pág. 141; MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., *Derecho penal económico y de la empresa. Parte General*, op. cit., pág. 292.

<sup>128</sup> Vid. PAREDES CASTAÑÓN, J. M., “La determinación del nivel de riesgo permitido: un caso de derecho penal económico”, op. cit., pág. 157.

<sup>129</sup> Ibidem, págs. 146 y ss.

<sup>130</sup> Vid. SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, J., “Blanqueo de Capitales y abogacía: un necesario análisis crítico desde la teoría de la imputación objetiva”, op. cit., pág. 47.

<sup>131</sup> Vid. PAREDES CASTAÑÓN, J. M., “La determinación del nivel de riesgo permitido: un caso de derecho penal económico”, op. cit., págs. 149-151.

<sup>132</sup> Vid. SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, J., “Blanqueo de Capitales y abogacía: un necesario análisis crítico desde la teoría de la imputación objetiva”, op. cit., págs. 47 y 48. Asimismo, CÓRDOBA, F. J., “Imputación objetiva y teoría de la acción”, *Estudios sobre justicia penal. Homenaje a Julio B.J. Maier*. Editores del Puerto, Buenos Aires, 2005, pág. 47.

<sup>133</sup> Vid. PÉREZ MANZANO, M., “Los Derechos Fundamentales al ejercicio de la profesión de abogado, a la libre elección de abogado y a la defensa y las “conductas naturales”. La Sentencia del Tribunal Constitucional Alemán de 30 de marzo de 2004”, op. cit., pág. 819.

“surgen espacios de riesgo permitido”<sup>134</sup>, condicionados en su caso a la observancia de medidas o acciones de cuidado<sup>135</sup> (planificación o control del riesgo de la actividad peligrosa que se realiza)<sup>136</sup>. En este sentido, MARTÍNEZ ESCAMILLA advierte que toda conducta amparada por el riesgo permitido ha de ser objetivamente prudente o diligente<sup>137</sup>. El criterio o principio de prudencia objetiva es aplicable por su puesto a aquellas actividades peligrosas para cuya ejecución no existen reglas predeterminadas, pero también en aquellos sectores donde sí existen. Es por ello que la observancia de las medidas de conducta no supone actuar en todo caso bajo la cobertura del riesgo permitido; el comportamiento ha de ser además objetivamente prudente o cuidadoso para evitar la materialización del peligro<sup>138</sup>.

Como es sabido, muchos delitos enmarcados en el ámbito del derecho penal económico tienen carácter accesorio<sup>139</sup>, por lo que un adecuado análisis de su tipicidad habrá de tener presente el contexto normativo en que la actividad peligrosa se desarrolle. Las previsiones administrativas o mercantiles aplicables o las reglas técnicas que regulan determinados sectores profesionales<sup>140</sup>, que en muchos casos imponen deberes especiales vinculados a determinados roles jurídico-económicos<sup>141</sup> -no sólo negativos sino también positivos-, determinarán en gran medida el nivel de riesgo tolerable<sup>142</sup>. No obstante, no cualquier infracción de deberes extrapenales supone rebasar el límite del riesgo permitido: si bien la existencia de normas puede constituir un “útil instrumento de ayuda como indicios para determinar el umbral de permisión de conductas”<sup>143</sup>, no todo incumplimiento de dichos deberes conduce a la tipicidad de la conducta, -como tampoco la ausencia de una infracción extrapenal supone siempre actuar dentro del riesgo permitido-<sup>144</sup>. El principio de intervención mínima y el carácter fragmentario del Derecho penal obligan a distinguir el ámbito del riesgo penalmente

---

<sup>134</sup> Vid. PAREDES CASTAÑÓN, J. M., “La determinación del nivel de riesgo permitido: un caso de derecho penal económico”, op. cit., pág. 157.

<sup>135</sup> Ibidem, págs. 161 y ss.; MARTÍNEZ ESCAMILLA, M., *La imputación objetiva del resultado*, op. cit., pág. 136.

<sup>136</sup> Vid. FEIJÓO SÁNCHEZ, B., *Derecho penal de la empresa e imputación objetiva*, op. cit., pág. 84.

<sup>137</sup> Vid. MARTÍNEZ ESCAMILLA, M., *La imputación objetiva del resultado*, op. cit., pág. 137.

<sup>138</sup> Ibidem, págs. 137- 139

<sup>139</sup> Vid. MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., *Derecho penal económico y de la empresa. Parte General*, op. cit., pág. 292.

<sup>140</sup> Vid. FEIJÓO SÁNCHEZ, B., “Imputación objetiva en el Derecho penal económico y empresarial: Esbozo de una teoría general de los delitos económicos”, op. cit., págs. 36 y 37.

<sup>141</sup> Ibidem, pág. 18.

<sup>142</sup> Ibidem, pág. 9.

<sup>143</sup> Ibidem, pág. 32.

<sup>144</sup> Ibidem.

típico del “riesgo antijurídico no penal”, merecedor en su caso de sanciones civiles o administrativas<sup>145</sup>. Criterios valorativos propios del orden punitivo, especialmente vinculados a los principios de ofensividad y de exclusiva protección de bienes jurídicos, permitirán determinar si la infracción de deberes extrapenales suponen la efectiva afectación del bien jurídico penalmente protegido de que se trate<sup>146</sup>, para cuya protección el concreto rol del agente le impone determinados “deberes positivos” (además de la obligación de no actuar en perjuicio de aquél)<sup>147</sup>.

Quizá la cuestión más problemática a la que se enfrenta la delimitación del riesgo permitido guarda relación con los llamados “conocimientos especiales” de que puede disponer el autor al realizar la conducta peligrosa. Como sabemos, de acuerdo con la teoría general, el juicio de adecuación de la conducta al riesgo se configura como una valoración de previsibilidad objetiva<sup>148</sup> *ex ante* relativa al riesgo “desde la perspectiva de un sujeto ideal perteneciente al contexto social en el que actúa el sujeto”<sup>149</sup>. Sin embargo, el autor concreto no suele corresponderse con dicho hombre ideal: puede ocurrir que tenga mayores conocimientos o aptitudes para identificar y controlar el ámbito de riesgo o puede que sus conocimientos sean inferiores o esté dotado de menos pericia. También puede ocurrir que, por virtud de esos conocimientos especiales, el sujeto se represente al menos como probable que su actuación conducirá a la producción de una lesión penalmente relevante. En el ámbito del riesgo permitido, y de la teoría de la imputación objetiva en general, no existe acuerdo doctrinal sobre la relevancia que adquieren los conocimientos especiales. Para algunos autores como JAKOBS, incluso en los supuestos en los que el sujeto pueda conocer que su conducta derive en un resultado lesivo, los conocimientos especiales de que disponga serán penalmente irrelevantes si, desde la perspectiva objetiva, aquél ha actuado de acuerdo con su rol. En el ilustrativo caso del estudiante de biología que, actuando de camarero, sirve una exótica ensalada en la que, por sus conocimientos especiales, sabe que tiene frutas venenosas, el penalista alemán considera que no se ha sobrepasado el riesgo

---

<sup>145</sup> Vid. MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., *Derecho penal económico y de la empresa. Parte General*, op. cit., pág. 293.

<sup>146</sup> Vid. FEIJÓO SÁNCHEZ, B., “Imputación objetiva en el Derecho penal económico y empresarial: Esbozo de una teoría general de los delitos económicos”, op. cit., págs. 32 y 33.

<sup>147</sup> Ibidem, págs. 34 y 35.

<sup>148</sup> Vid. CUESTA AGUADO, M<sup>a</sup>. P. de la, *Tipicidad e imputación objetiva*, op. cit., págs. 161; MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., *Derecho penal económico y de la empresa. Parte General*, op. cit., págs. 276-278.

<sup>149</sup> Vid. CANCIO MELIÁ, M., “Algunas reflexiones sobre lo objetivo y lo subjetivo en la teoría de la Imputación Objetiva”, op. cit., pág. 216.



permitido, toda vez que en su actuación como camarero no ha quebrantado su rol, y su conducta es penalmente irreprochable<sup>150</sup>.

Para otro sector doctrinal, es determinante, ya en sede de tipicidad objetiva, el conocimiento de circunstancias por parte del autor de que su comportamiento puede contribuir, de forma probable o segura, a ocasionar o aumentar el riesgo para un bien jurídico<sup>151</sup>. Dicho conocimiento -se afirma- podrá determinar la relevancia penal de la conducta. Sobre esta cuestión volveremos después, al ocuparnos de los denominados “actos neutrales”.

#### 4.1.3.3. EL PRINCIPIO DE CONFIANZA

El principio de confianza y la prohibición de regreso se encuentran íntimamente relacionados con la interrupción de la imputación objetiva a un sujeto de un resultado penalmente relevante cuando es la libre y responsable intervención de un tercero la que determina finalmente la producción de dicho resultado. El *principio de autorresponsabilidad*, sobre el que pivota en la actualidad toda teoría de la imputación penal<sup>152</sup>, impide que un sujeto, salvo que tenga especiales deberes positivos de garantizar la indemnidad del bien jurídico, deba asumir especiales cuidados para preservarlo de las ocasiones de riesgo derivadas de comportamientos típicos realizados por terceros. El sujeto sólo se ha de controlar el nivel de riesgo derivado del propio ámbito de actuación<sup>153</sup>.

---

<sup>150</sup> Vid. JAKOBS, G., *La imputación objetiva en el Derecho penal*, op. cit., págs. 63 y 64. Cuestión diferente es que dicho camarero retenga el plato de fruta venenosa y lo sirva “a una persona que odia”. En este caso, la conducta sí sería penalmente relevante, pues se “adapta el comportamiento propio del rol a [los] conocimientos, que de este modo pierden la cualidad de ser conocimientos especiales, es decir conocimientos al margen del rol”. (Ibidem, pág. 66). ROBLES PLANAS considera acertado el razonamiento de JAKOBS, toda vez que, a su juicio, se incurriría en un grave error metodológico tener en cuenta elementos que pertenecen a la tipicidad subjetiva en el juicio objetivo de peligrosidad que ha de ser previo. (*La participación en el delito: fundamento y límites*, op. cit., págs. 58 y ss.). Se suman a la interpretación de JAKOBS, SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, J., “Blanqueo de Capitales y abogacía: un necesario análisis crítico desde la teoría de la imputación objetiva”, op. cit., pág. 50, GÓMEZ-JARA DÍEZ, C., “El criterio de los honorarios profesionales “bona fides” como barrera del abogado defensor frente al delito de blanqueo de capitales: un apunte introductorio”, *Política criminal y blanqueo de capitales*, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2009, pág. 209.

<sup>151</sup> Vid. ROXIN, C., *Derecho Penal Parte General. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito*, op. cit., pág. 367.

<sup>152</sup> Vid. ROBLES PLANAS, R., “Las conductas neutrales en el ámbito de los delitos fraudulentos”, op. cit., pág. 26.

<sup>153</sup> Vid. MARAVER GÓMEZ, M., “El principio de confianza en el Derecho penal”, *Derecho penal del estado social y democrático de derecho. Libro homenaje a Santiago Mir Puig* (Dir. Diego Manuel Luzón Peña). La Ley. Madrid, 2010, págs. 392 y 398.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia admiten el recurso al principio de confianza para delimitar la responsabilidad de un sujeto cuando “la producción de un resultado lesivo puede verse condicionada por la actuación incorrecta de un tercero”<sup>154</sup>. Quienes intervienen en una actividad que puede afectar negativamente a un bien protegido penalmente<sup>155</sup> están legitimados para confiar en que el resto de sujetos actuarán correctamente, esto es, “sin incidir en un ámbito de tipicidad penal”<sup>156</sup>. Se trata, como afirma SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, “de una confianza normativa, y no meramente fáctica. Ello significa que el sujeto puede y debe confiar en Derecho, y que no le son imputados resultados dañosos por el hecho de no haber adoptado medidas de precaución para evitarlos, aun cuando fácticamente, todo el mundo sabe que se cometen delitos, que hay terceros que se aprovechan de situaciones o contextos para fines ilícitos, etc.”<sup>157</sup>.

Además de la participación en el tráfico de vehículos a motor, se consideran como ámbito prototípico del principio de confianza los supuestos de trabajo en equipo o aquellos otros contextos en los que en la gestión de un riesgo participan diversas personas, resultando así este principio de especial utilidad en el ámbito del derecho penal de la empresa<sup>158</sup>. En estos casos, cada uno de los partícipes, si actúa conforme a Derecho, no tienen por qué contar con el uso delictivo que de su aporte hagan otros sujetos responsables, “a pesar de que ello sea previsible o probable”<sup>159</sup>.

Como presupuesto de aplicación del principio de confianza, afirma MARAVER GÓMEZ, ha de verificarse que el sujeto no tenga un deber positivo especial de garantizar la indemnidad del riesgo que le obligue a adoptar especiales medidas de aseguramiento, y que no existan circunstancias que evidencien un comportamiento incorrecto del tercero. Asimismo, la aplicación de este principio exige que el autor no tenga obligaciones de cuidado frente a la conducta del tercero que condiciona la producción

---

<sup>154</sup> Ibidem, pág. 382.

<sup>155</sup> Se acude generalmente a este principio para limitar la responsabilidad penal de sujetos que intervienen en la realización de actividades peligrosas en las que también participan otros sujetos. Algunos autores consideran que no puede acudirse a este criterio limitador de forma general, sino que su aplicación ha de limitarse a ámbitos o contextos específicos y “sólo a partir de un análisis de las circunstancias del caso concreto”. (Ibidem, pág. 383).

<sup>156</sup> Ibidem; OLIVA GARCÍA, H., “La defensa ante la acusación por blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 31.

<sup>157</sup> Vid. SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, J., “Blanqueo de Capitales y abogacía: un necesario análisis crítico desde la teoría de la imputación objetiva”, op. cit., pág. 56.

<sup>158</sup> Vid. MARAVER GÓMEZ, M., “El principio de confianza en el Derecho penal”, op. cit., pág. 399; ROBLES PLANAS, R., *La participación en el delito: fundamento y límites*, op. cit., págs. 107 y 108.

<sup>159</sup> Ibidem, pág. 107.

del resultado lesivo, y que éste sea responsable -que no pueda considerarse irresponsable o que no esté obligado a asumir el riesgo-. Si no se dan estos requisitos, según MARAVER, el sujeto “dejará de estar amparado por el principio de confianza”<sup>160</sup>.

#### **4.1.3.4. LA PROHIBICIÓN DE REGRESO**

Según ROBLES PLANAS, la prohibición de regreso conforma “la teoría de la imputación aplicada a la participación”, y trata de definir si un sujeto (partícipe) que facilita a otro sujeto (autor) la comisión de un hecho delictivo ha de responder penalmente de un resultado, y en qué términos<sup>161</sup>. En realidad, la denominada *prohibición de regreso* hace referencia a diferentes planteamientos desarrollados en la doctrina sucesivamente y que responden a perfiles muy distintos<sup>162</sup>.

La teoría desarrollada inicialmente por FRANK como fórmula de interrupción de nexos causales, pretendía limitar la responsabilidad de conductas imprudentes seguidas por la conducta dolosa de un segundo actuante, a quien habría de considerarse el verdadero autor del resultado penalmente relevante<sup>163</sup>. De acuerdo con esta propuesta, cuando la iniciación de un curso causal por una acción no dolosa es aprovechada por una tercera persona para producir dolosamente un resultado, no cabe retroceder (regreso) más allá de la acción dolosa para atribuir dicho resultado a anteriores factores causales no dolosos<sup>164</sup>.

---

<sup>160</sup> Vid. MARAVER GÓMEZ, M., “El principio de confianza en el Derecho penal”, op. cit., págs. 399-402. A juicio del autor, el principio de confianza ha de considerarse como un criterio de imputación objetiva, pero independiente del criterio del riesgo permitido “porque se fundamenta en la delimitación negativa de ámbitos de responsabilidad y toma concretamente como referencia la intervención de terceras personas responsables”. Asimismo, afirma MARAVER que el principio es aplicable no sólo a los delitos imprudentes; también puede invocarse en los delitos dolosos. Así, puede ocurrir que “el sujeto se represente claramente el comportamiento incorrecto del tercero, pero no pretenda o no se represente suficientemente la producción del resultado lesivo y no pueda, por tanto, reconocerse la existencia de dolo. (...) Puede ocurrir también (...) que el sujeto persiga o se represente subjetivamente la producción del resultado lesivo, pero no se pueda dejar de aplicar el principio de confianza para delimitar su deber de cuidado porque no haya realmente circunstancias que evidencien el comportamiento incorrecto del tercero”. (Ibidem, págs. 403 y 404 *passim*).

<sup>161</sup> Vid. ROBLES PLANAS, R., *La participación en el delito: fundamento y límites*, op. cit., pág. 80. Sobre la “confusa” relación entre esta institución y el principio de confianza, vid. MARAVER GÓMEZ, M., “El principio de confianza en el Derecho penal”, op. cit., pág. 385.

<sup>162</sup> Vid. ROBLES PLANAS, R., *La participación en el delito: fundamento y límites*, op. cit., págs. 80 y 81.

<sup>163</sup> Vid. MARAVER GÓMEZ, M., “El principio de confianza en el Derecho penal”, op. cit., pág. 392.

<sup>164</sup> Vid. ROBLES PLANAS, R., *La participación en el delito: fundamento y límites*, op. cit., pág. 81. En realidad, FRANK no afirmaba la exclusión de la responsabilidad penal del primer sujeto, pues éste podía responder como partícipe. La fórmula de FRANK se limitaba a excluir su responsabilidad a título de autor. (Ibidem, págs. 84 y 85). Tanto la formulación propuesta inicialmente por FRANK como diversas teorías desarrolladas posteriormente que, si bien han abandonado el dogma causal, se han fundamentado a través de

Actualmente, son ampliamente aceptadas en la doctrina las últimas formulaciones de la prohibición de regreso propuestas por JAKOBS. El penalista alemán identifica estos casos como aquellos en los que un primer actuante realiza una aportación dentro de su rol<sup>165</sup> en sí misma considerada inocua y cotidiana pero que se convierte en un curso causal dañoso<sup>166</sup> “porque un tercero desvía, sin relación con el agente, las consecuencias de la acción hacia el daño”<sup>167</sup>. Podrá invocarse la prohibición de regreso, excluyéndose la imputación objetiva de la actuación del primer interviniente, cuando ésta “carezca de sentido delictivo”<sup>168</sup>. Por el contrario, no operará este instituto dogmático en aquellos casos en los que el comportamiento del interviniente se caracterice por tener un sentido que facilite al autor la acción delictiva, de acuerdo con el contexto; dicho contexto “puede hacer que un papel estereotipado, conforme a los usos sociales, ceda el paso, como elemento de la definición, al ajustarse a unos planes delictivos”<sup>169</sup>. También responderá el primer interviniente, con independencia del contenido de su comportamiento, apunta JAKOBS, cuando se sitúe como garante de la evitación del proceso causal dañoso, según las reglas de la omisión impropia<sup>170</sup>. En estos casos, el agente responde del resultado dañoso mediante comisión precisamente por virtud de su posición de garantía, derivada de su ámbito de organización, que le obliga a asegurar la indemnidad del bien afectado frente a determinados peligros<sup>171</sup>. En definitiva, de conformidad con las últimas formulaciones

---

referentes prejurídicos (criterios de previsibilidad o dominabilidad), deben rechazarse porque no aportan criterios decisivos que permitan negar la responsabilidad del primer sujeto. (Ibidem, págs. 87-92).

<sup>165</sup> Vid. JAKOBS, G., *La imputación objetiva en el Derecho penal*, op. cit., pág. 82.

<sup>166</sup> Vid. JAKOBS, G., *Derecho Penal. Parte General. Fundamentos y teoría de la imputación*, op. cit., pág. 842.

<sup>167</sup> Ibidem, pág. 259.

<sup>168</sup> Ibidem, pág. 844; FEIJÓO SÁNCHEZ, B., *Límites de la participación criminal: ¿Existe una prohibición de regreso como límite general del tipo en derecho penal?* Ed. Comares. Granada, 1999, págs. 5 y 51. Para JAKOBS, este es “el ámbito principal de aplicación de la prohibición de regreso, esto es, de la prohibición de recurrir, en el marco de la imputación, a personas que si bien física y psíquicamente podrían haber evitado el curso lesivo -hubiese bastado tener la voluntad de hacerlo-, a pesar de la no evitación no han quebrantado su rol de ciudadanos que se comportan legalmente. En una sociedad organizada en régimen de reparto de tareas, con un intercambio de información y de bienes extremadamente complejo, ha de diferenciarse de manera rigurosa lo que es el sentido objetivo de un contacto social y qué es lo que los intervinientes pretenden con ese contacto desde el punto de vista subjetivo. Con carácter general, únicamente se debe tener en cuenta el sentido objetivo; éste es el sentido socialmente válido del contacto. Al no objetivarse, al menos no en ese contexto, el sentido que subjetivamente se persigue en nada atañe a la otra persona”. (*La imputación objetiva en el Derecho penal*, op. cit., pág. 83).

<sup>169</sup> Vid. JAKOBS, G., *Derecho Penal. Parte General. Fundamentos y teoría de la imputación*, op. cit., pág. 486.

<sup>170</sup> Ibidem. En el mismo sentido, BACIGALUPO ZAPATER, E., *Derecho Penal, Parte General*, op. cit., pág. 277.

<sup>171</sup> Vid. JAKOBS, G., *Derecho Penal. Parte General. Fundamentos y teoría de la imputación*, op. cit., pág. 264. El alcance de la prohibición de regreso en el sentido esbozado por JAKOBS rige “tanto para el dolo como para la imprudencia, siempre que ésta sea punible, aún cuando el ejecutor actúe sin dolo. Cuando en este último

de la teoría desarrolladas por JAKOBS, ésta puede sintetizarse en la idea de la “prohibición de regresar a la conducta de quien no ostente una posición de garante con respecto a las consecuencias que se deriven de la propia conducta”<sup>172</sup>.

En la línea conceptual del prestigioso tratadista alemán, y ya en la doctrina española, REQUENA JULIANI considera que la prohibición de regreso sólo operará cuando la contribución del primer interviniente carezca de sentido delictivo. La contribución sólo tendrá sentido delictivo en dos supuestos: cuando el autor sea garante de la conducta del tercero, posición que derivará de su competencia institucional o de la previa creación de una situación de peligro; y en aquellos casos en los que “la contribución vincula al partícipe con el plan delictivo del autor” porque sólo se explica por su sentido delictivo (carece de dicho sentido delictivo “cuando el plan en el que aparece integrada todavía puede objetivamente explicado como un plan no delictivo”)<sup>173</sup>. En similar dirección interpretativa, MARAVER GÓMEZ ha sostenido que sólo es posible acudir a la prohibición de regreso si el sujeto no tiene un deber positivo especial de garantizar la indemnidad del riesgo que le obligue a adoptar especiales medidas de aseguramiento; asimismo, considera el autor que ha de existir una “relación lineal” entre el riesgo derivado del actuar del primer sujeto y el riesgo inherente a la conducta del segundo interviniente<sup>174</sup>. Por otro lado, resulta irrelevante que la conducta de este último sea dolosa o imprudente, así como que constituya una acción o una omisión. Y también pierde importancia que el comportamiento inicial (el del primer sujeto) sea doloso o imprudente. Lo realmente trascendente es determinar si dicho primer sujeto tiene o no un deber positivo de controlar o evitar el riesgo para garantizar la indemnidad del bien jurídico<sup>175</sup>.

---

caso el «interviniente» actúa dolosamente, la prohibición de regreso limita, pues el alcance de la «intervención» en el hecho no doloso, que con arreglo al Derecho positivo siempre es autoría mediata”. (Ibidem, pág. 487).

<sup>172</sup> Vid. ROBLES PLANAS, R., *La participación en el delito: fundamento y límites*, op. cit., pág. 93; en sentido similar, REQUENA JULIANI, J., *Intercambiabilidad de acción y omisión en los delitos de dominio: Posición de garante e imputación objetiva*, op. cit., págs. 287 y ss.

<sup>173</sup> Ibidem, págs. 296 y 297.

<sup>174</sup> De este modo, no es posible invocar este criterio cuando “el riesgo del que es competente el tercero surge en un momento previo o cuando las líneas de actuación confluyen en un mismo punto, sin ser una continuación de la otra. En tal caso, la relación que tiene el sujeto con su propio riesgo no se ve alterada por la presencia del tercero”. (Vid. MARAVER GÓMEZ, M., “El principio de confianza en el Derecho penal”, op. cit., pág. 394).

<sup>175</sup> Ibidem, pág. 397. En sentido similar, vid. FEIJÓO SÁNCHEZ, B., *Límites de la participación criminal: ¿Existe una prohibición de regreso como límite general del tipo en derecho penal?*, op. cit., págs. 81 y ss. Sin embargo, para FEIJÓO los deberes de garantía han de ser muy precisos y estar suficientemente fundamentados. Refiere en este sentido en su monografía diversos supuestos en los que considera que la posición de garantía fundamenta la responsabilidad penal por cooperación. (Ibidem, págs. 87 y ss.).

#### 4.1.3.5. LOS DENOMINADOS ACTOS NEUTRALES

Además del principio de confianza y de la prohibición de regreso, cobran especial importancia dentro del derecho penal económico los denominados *actos neutrales*<sup>176</sup>, aquellos comportamientos cotidianos socialmente admitidos desarrollados conforme a patrones estandarizados que, si bien se consideran *per se* inocuos, pueden llegar a contribuir a la realización de un hecho delictivo por terceras personas. La doctrina mayoritaria afirma en general que, pese a encontrarse formalmente abarcadas en el tipo de que se trate, ha de afirmarse la atipicidad<sup>177</sup> de las acciones neutrales en determinados casos y bajo ciertos presupuestos<sup>178</sup>. Aun cuando dichas conductas contribuyan fácticamente a la producción de un resultado lesivo, dejan de ser típicas cuando se desarrollan en el marco del “rol social lícito en el que se interactúa”<sup>179</sup> y no poseen un significado delictivo indudable<sup>180</sup>.

Los actos neutrales pueden definirse como aquellas conductas que, realizadas con arreglo a un rol, estándar o estereotipo<sup>181</sup> (se caracterizan esencialmente por su intercambiabilidad y ubicuidad), carecen de un sentido unívocamente delictivo: son acciones dirigidas no a favorecer un delito ajeno, sino a la satisfacción de intereses propios legítimos<sup>182</sup>, aunque quien las realiza conoce, o al menos sospecha, que pueden contribuir a la producción de un resultado delictivo<sup>183</sup>. Si bien, como ha advertido la doctrina especializada, el tratamiento dogmático de las acciones neutrales tiene lugar fundamentalmente en el ámbito de la participación delictiva, no se limita exclusivamente a ésta. La problemática de los actos neutrales “también se plantea en el marco de la autoría de determinados delitos”, como el encubrimiento y el blanqueo de

---

<sup>176</sup> El fenómeno ha recibido multitud de denominaciones: acciones cotidianas, estándar, negocios normales de la vida diaria, conductas neutrales, socialmente adecuadas, etc. (Vid. MIRÓ LLINARES, F., “Intervención en actividades económicas ilícitas y conductas ¿neutrales?”, *ADPE*, 2011, págs. 73 y 74). Aquí, junto a ROBLES PLANAS, emplearemos preferentemente la expresión conductas neutrales, por aproximarse al carácter neutro desde la perspectiva de su relevancia penal. (*La participación en el delito: fundamento y límites*, op. cit., pág. 32).

<sup>177</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., “Negocios socialmente adecuados y delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 265.

<sup>178</sup> Vid. PÉREZ MANZANO, M., “Neutralidad delictiva y blanqueo de capitales: el ejercicio de la abogacía y la tipicidad del delito de blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 173 y 174.

<sup>179</sup> Vid. SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, J., “Blanqueo de Capitales y abogacía: un necesario análisis crítico desde la teoría de la imputación objetiva”, op. cit., pág. 65.

<sup>180</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *Límites a la participación delictiva. Las acciones neutrales y la cooperación con el delito*, op. cit., pág. 3.

<sup>181</sup> Vid. ROBLES PLANAS, R., *La participación en el delito: fundamento y límites*, op. cit., pág. 33.

<sup>182</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *Límites a la participación delictiva. Las acciones neutrales y la cooperación con el delito*, loc. cit.

<sup>183</sup> Vid. ROBLES PLANAS, R., *La participación en el delito: fundamento y límites*, loc. cit.

capitales<sup>184</sup>, tipos penales que elevan a categoría de autoría lo que en realidad constituye una intervención “postejecutiva”<sup>185</sup> o “postconsumativa”<sup>186</sup> en otro delito, aquél que se encubre o, en el blanqueo, el hecho delictivo antecedente, aquél del que provienen los bienes.

Desde hace décadas, la doctrina alemana (y recientemente la española) intenta dar una solución jurídica satisfactoria a la punibilidad de los casos límite en los que un acto neutral conduce a un resultado penalmente lesivo, que se encuentran a caballo entre lo que podrían considerarse conductas socialmente adecuadas (impunes) y la participación delictiva (punible)<sup>187</sup>. En este apartado se tratará de determinar en qué condiciones la contribución a la producción de un resultado delictivo a través de estas conductas estandarizadas “supera la barrera de la neutralidad, de la inocuidad o de la adecuación social”<sup>188</sup>, y en qué otros supuestos dicho favorecimiento puede considerarse penalmente irrelevante.

La doctrina dominante coincide en que la problemática de los actos neutrales ha de resolverse en el ámbito de la tipicidad<sup>189</sup>, concretamente en el marco del tipo objetivo. La solución ha de atender fundamentalmente al significado normativo del hecho<sup>190</sup>, teniendo en cuenta los criterios de la imputación objetiva (primer nivel de

---

<sup>184</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *Límites a la participación delictiva. Las acciones neutrales y la cooperación con el delito*, op. cit., pág. 9. En el mismo sentido, PÉREZ MANZANO, M., “Neutralidad delictiva y blanqueo de capitales: el ejercicio de la abogacía y la tipicidad del delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 174; id., “Los Derechos Fundamentales al ejercicio de la profesión de abogado, a la libre elección de abogado y a la defensa y las “conductas naturales”. La Sentencia del Tribunal Constitucional Alemán de 30 de marzo de 2004”, op. cit., págs. 789 y 790.

<sup>185</sup> Vid. MIRÓ LLINARES, F., “Intervención en actividades económicas ilícitas y conductas ¿neutrales?”, op. cit., pág. 73.

<sup>186</sup> Vid. RAGUÉS I VALLÈS, R., “Blanqueo de capitales y negocios standard. Con especial mención a los abogados como potenciales autores de un delito de blanqueo”, op. cit., pág. 152.

<sup>187</sup> Vid. GRAMATICA BOSCH, G., “Conductas neutrales: estado de la cuestión”. Centro de Investigación interdisciplinaria en Derecho Penal Económico, 2009, pág. 2, disponible en el siguiente enlace: <http://ciidpe.com.ar/area1/conductas%20neutrales.gramatica.pdf>.

<sup>188</sup> Vid. ROBLES PLANAS, R., *La participación en el delito: fundamento y límites*, op. cit., pág. 105.

<sup>189</sup> Un sector doctrinal minoritario considera que la el tratamiento de los actos neutrales ha de ubicarse en la antijuridicidad. Incluso, para algunos autores, las particularidades que presentan estos casos no afectan a su transcendencia penal, considerando que toda cooperación causal al hecho ajeno es penalmente relevante, y que estos casos, a lo sumo, pueden ser merecedores de una atenuación de la pena. (Cfr. ROBLES PLANAS, R., *La participación en el delito: fundamento y límites*, op. cit., págs. 51 y ss. ; ROCA DE AGAPITO, L., “Límites de la responsabilidad Penal por actividad (profesional) cotidiana”, *Estudios Penales y Criminológicos*, vol. XXVIII (2008). Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela, pág. 362, disponible en el siguiente enlace: [https://dSPACE.usc.es/bitstream/10347/4139/1/pg\\_343-396\\_ep28.pdf](https://dSPACE.usc.es/bitstream/10347/4139/1/pg_343-396_ep28.pdf)). La tesis que aquí se defiende sitúa el debate, como veremos, en el ámbito de la tipicidad objetiva.

<sup>190</sup> Vid. CARO JOHN, J. A., “La impunidad de las conductas neutrales. A la vez, sobre el deber de solidaridad mínima en el derecho penal”, *Nueva doctrina penal*, nº 2. Editores del Puerto, 2005, pág. 8, disponible en el siguiente enlace: [www.alfonsozambrano.com/doctrina\\_penal/conductas\\_neutrales.doc](http://www.alfonsozambrano.com/doctrina_penal/conductas_neutrales.doc).

imputación) y el riesgo permitido<sup>191</sup>. La punibilidad de dichos supuestos por tanto ha de decidirse, esencialmente, desde la perspectiva de la creación de un riesgo objetivamente relevante para el bien jurídico protegido, primer y más importante “elemento del juicio de la imputación objetiva”<sup>192</sup>. De este modo, la aportación podrá considerarse inocua si se desarrolla dentro del ámbito del riesgo permitido; cuando supere dicho límite y sea objetivamente peligrosa para aquél, perderá su carácter neutral<sup>193</sup>.

En la doctrina, es objeto de un intenso debate si el conocimiento del interviniente sobre el uso delictivo posterior que a su contribución pueda darle un tercero puede considerarse un factor determinante para decidir si su conducta ha rebasado el riesgo permitido. Para un amplio sector doctrinal, la intención de favorecer el hecho delictivo ajeno determina la relevancia penal de la aportación. En estos casos, la conducta deja de ser neutral<sup>194</sup>. En este sentido, ha afirmado ROXIN que los actos cotidianos no serán penalmente irrelevantes cuando tienen “referencia de sentido delictiva”. Ello ocurre cuando, para quien los realiza, su aportación no tiene otro sentido que la contribución a la realización de un hecho típico (dolo directo)<sup>195</sup>. La presencia de un contexto delictivo dominante (situado en un primer plano) implica que la contribución pierda su carácter neutral<sup>196</sup>. Sin embargo, cuando el contribuyente actúe con dolo eventual respecto al fin delictivo del autor (sólo lo piensa como algo probable, no puede apreciar inequívocamente que participa en un hecho delictivo ajeno), el aporte podrá considerarse impune siempre que sea útil y tenga sentido con independencia del hecho principal<sup>197</sup>. Un sector doctrinal ha censurado esta perspectiva por incurrir en un

<sup>191</sup> Vid. PÉREZ MANZANO, M., “Los Derechos Fundamentales al ejercicio de la profesión de abogado, a la libre elección de abogado y a la defensa y las “conductas naturales”. La Sentencia del Tribunal Constitucional Alemán de 30 de marzo de 2004”, op. cit., pág. 824; id., “Neutralidad delictiva y blanqueo de capitales: el ejercicio de la abogacía y la tipicidad del delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 173.

<sup>192</sup> Vid. ROBLES PLANAS, R., *La participación en el delito: fundamento y límites*, op. cit., pág. 185. En este mismo sentido, BLANCO CORDERO, I., *Límites a la participación delictiva. Las acciones neutrales y la cooperación con el delito*, op. cit., págs. 147 y 148; MIRÓ LLINARES, F., “Intervención en actividades económicas ilícitas y conductas ¿neutrales?”, op. cit., pág. 73.

<sup>193</sup> Ibidem, págs. 65, 72 y ss.; SILVA SÁNCHEZ, J. M., “Informe sobre las discusiones. V. Acciones neutrales y otras cuestiones. La discusión sobre la ponencia del Profesor Roxin”, *Sobre el estado de la teoría del delito*, Ed. Civitas. Madrid, 2000, págs. 202 y ss.

<sup>194</sup> Vid. FRIEYRO ELÍCEGUI, S., “Las conductas neutrales de intervención en el delito y el delito de tráfico de drogas”, *Diario La Ley*, Sección Doctrina, 12 enero 2015, Año XXXVI. Nº 8456. Ed. La Ley, 2011, pág. 2.

<sup>195</sup> Vid. ROBLES PLANAS, R., *La participación en el delito: fundamento y límites*, op. cit., pág. 281.

<sup>196</sup> Vid. ROXIN, C., “Las formas de intervención en el delito: estado de la cuestión”, *Sobre el estado de la teoría del delito*, Ed. Civitas. Madrid, 2000, pág. 177. En el mismo sentido, vid. GIMBERNAT ORDEIG, E., “A vueltas con la imputación objetiva, la participación delictiva, la omisión impropia y el Derecho penal de la culpabilidad”, ADPCP, LXVI, 2013, pág. 76.

<sup>197</sup> El fundamento del argumento esgrimido por ROXIN se halla en el principio de confianza: “si no existen razones que lo desvirtúen, siempre debe presumirse que el segundo sujeto se comportará conforme a Derecho.” En estos casos, “el primer sujeto no habrá superado (...) la barrera del riesgo permitido”, salvo que exista una



error metodológico y por ocultar elementos subjetivos tras una perspectiva pretendidamente objetiva; según este sector crítico, no es procedente entrar a valorar una cuestión que pertenece al ámbito tipicidad subjetiva de la contribución sin antes fundamentar la peligrosidad objetiva de la misma<sup>198</sup>. En esta línea, afirma ROBLES PLANAS, la peligrosidad de una acción no puede depender del conocimiento del interviniente sobre lo que otro hará con su aporte<sup>199</sup>; el sentido delictivo del aporte ha de considerarse, por el contrario, un dato objetivo que deriva de la configuración externa de la conducta<sup>200</sup>.

Un importante sector de la doctrina penal alemana (SCHUMANN, JAKOBS y FRISH, entre otros)<sup>201</sup> entiende que la contribución sólo será penalmente relevante si objetivamente, en sí misma, comporta un riesgo especial de favorecer un hecho delictivo posterior ajeno<sup>202</sup>. Para JAKOBS y FRISH, cobra gran relevancia la idea de “sentido” o “significado” delictivo: el aporte perderá su carácter neutral y será punible cuando la única finalidad objetivamente concebible sea favorecer el delito del tercero, de tal modo que “su contenido de sentido se agota en esa posibilitación o favorecimiento”<sup>203</sup>. En posteriores contribuciones, ambos autores aportarán ulteriores criterios para precisar los límites del riesgo desaprobado en el ámbito de la participación<sup>204</sup>. JAKOBS matizará su planteamiento a través de la prohibición de regreso

---

“inclinación reconocible hacia el hecho”, “en cuyo caso no estará ya justificada la confianza”. (Vid. ROBLES PLANAS, R., *La participación en el delito: fundamento y límites*, op. cit., págs. 59 y 60).

<sup>198</sup> Vid. ROBLES PLANAS, R., “Las conductas neutrales en el ámbito de los delitos fraudulentos. Espacios de riesgo permitido en la intervención en el delito”, op. cit., pág. 38; id., *La participación en el delito: fundamento y límites*, op. cit., pág. 283; MIRÓ LLINARES, F., “Intervención en actividades económicas ilícitas y conductas ¿neutrales?”, op. cit., pág. 78.

<sup>199</sup> Vid. ROBLES PLANAS, R., *La participación en el delito: fundamento y límites*, loc. cit.; cfr. BLANCO CORDERO, I., *Límites a la participación delictiva. Las acciones neutrales y la cooperación con el delito*, op. cit., pág. 49.

<sup>200</sup> Vid. ROBLES PLANAS, R., “Las conductas neutrales en el ámbito de los delitos fraudulentos. Espacios de riesgo permitido en la intervención en el delito”, op. cit., pág. 38. En este sentido, afirma MIRÓ LLINARES que en este momento valorativo ha de prescindirse de “lo que sabe o quiere el sujeto”, siendo únicamente relevante lo que “su posición social (rol) le obliga a saber”. En definitiva, “el conocimiento lo marca el deber”. (“Intervención en actividades económicas ilícitas y conductas ¿neutrales?”, op. cit., pág. 80).

<sup>201</sup> Vid. ROBLES PLANAS, R., *Límites a la participación delictiva. Las acciones neutrales y la cooperación con el delito*, op. cit., págs. 285 y ss.

<sup>202</sup> Vid. ROBLES PLANAS, R., “Las conductas neutrales en el ámbito de los delitos fraudulentos. Espacios de riesgo permitido en la intervención en el delito”, op. cit., pág. 33; id., *La participación en el delito: fundamento y límites*, op. cit., pág. 285.

<sup>203</sup> Ibidem, pág. 285 y 286. De acuerdo con ello, afirma ROBLES PLANAS, “se excluirá la imputación al primer sujeto siempre que su conducta apareciese *objetivamente* con sentido también sin el posterior hecho del autor, siendo indiferente que tuviera o no algún otro sentido para el autor. (...) Por el contrario, la imputación alcanzará a quien sólo puede haberse motivado por un plan delictivo, esto es, a quien en su conducta sólo muestra tener la voluntad de que se produzca el comportamiento que de modo evitable lesiona directamente -motivabilidad delictiva en sentido objetivo-.” (Ibidem, pág. 287).

<sup>204</sup> Vid. ROBLES PLANAS, R., “Las conductas neutrales en el ámbito de los delitos fraudulentos. Espacios de riesgo permitido en la intervención en el delito”, op. cit., págs. 34-36.

y el criterio de la posición de garantía: si un sujeto “es garante de asegurar que en su ámbito de organización (rol) se respeten los estándares de seguridad habituales”<sup>205</sup>, el partícipe no será responsable cuando su conducta no defraude expectativas, esto es, cuando se mueva dentro de los contornos de su rol (la mayor parte de las veces, profesional)<sup>206</sup>.

En la doctrina española, al margen de minoritarias tesis esencialmente subjetivas (RUEDA MARTÍN)<sup>207</sup>, también se ubica mayoritariamente el análisis de la relevancia penal de los actos neutrales en el ámbito de la tipicidad objetiva: el criterio decisivo que excluye la punibilidad de aquéllos ha de ser el riesgo permitido, si bien muchos autores, en la línea de ROXIN, vinculan dicha valoración en gran medida a los conocimientos que el contribuyente posea respecto al eventual uso delictivo posterior que un tercero haga de su aporte. En esta línea de pensamiento, BLANCO CORDERO enfoca la cuestión desde una perspectiva objetiva pero sin renunciar a “los conocimientos especiales del autor”<sup>208</sup>. Para el monografista, el carácter neutral de la conducta, vinculado esencialmente a la idea de riesgo permitido<sup>209</sup>, encuentra su límite en dos variables: por

---

<sup>205</sup> Vid. JAKOBS, G., *La imputación objetiva en el Derecho penal*, op. cit., pág. 67. Incluso se llega a afirmar que un contexto marcadamente delictivo puede determinar que un comportamiento estereotipado deje de serlo. En estos “contextos caóticos” en los que los roles ya no desempeñan su función aseguradora de manera efectiva, ya no rigen las reglas de imputación basadas en aquéllos. (MIRÓ LLINARES, F., “Intervención en actividades económicas ilícitas y conductas ¿neutras?”, op. cit., pág. 81). En realidad, afirma MIRÓ LLINARES, si bien JAKOBS y FRISCH “niegan la relevancia del conocimiento del partícipe para la valoración de la significación de su comportamiento, (...) implícitamente no renuncian a partir precisamente de lo que el sujeto conoce”. (Ibidem, pág. 82).

<sup>206</sup> Vid. ROBLES PLANAS, R., “Las conductas neutrales en el ámbito de los delitos fraudulentos. Espacios de riesgo permitido en la intervención en el delito”, op. cit., pág. 36.

<sup>207</sup> Coherente con su concepción final de la acción, RUEDA MARTÍN considera punible la contribución del partícipe a través de actos estandarizados cuando conoce que su conducta se inserta en un contexto delictivo. (“Consideraciones acerca de la relevancia penal de las acciones cotidianas en la comisión de un hecho doloso”, op. cit., pág. 126). Para la autora, en estos casos lo que impide la valoración neutral de la contribución “es precisamente el conocimiento, un dato subjetivo que está al margen de cualquier estandarización del comportamiento desde el punto de vista de la ejecución de un rol, de modo que es el dolo, es decir, la conciencia y voluntad de realizar un favorecimiento en el desarrollo de un hecho el principal elemento que atribuye un sentido social a la acción”. (Ibidem, pág. 127). Para RUEDA “el tratamiento de la cuestión de la complicidad mediante conductas neutrales o cotidianas” ha de ser resuelto a través del instituto de la adecuación social, al que antes hemos hecho referencia. (Con detalle, ibidem, págs. 129 y ss.).

<sup>208</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *Límites a la participación delictiva. Las acciones neutrales y la cooperación con el delito*, op. cit., págs. 150 (nota nº 14), 159 y ss. En una línea interpretativa similar, MIRÓ LLINARES aborda la problemática de los actos neutrales desde la perspectiva objetiva, pero considera que para determinar la peligrosidad o sentido social delictivo del mismo también ha de tenerse en cuenta el conocimiento del partícipe sobre la relevancia de su aporte. (“Intervención en actividades económicas ilícitas y conductas ¿neutras?”, op. cit., págs. 90 y ss.). También los planteamientos de ROCA DE AGAPITO sitúan el análisis en el ámbito objetivo teniendo en cuenta los aspectos subjetivos, que, afirma el autor, “pueden perfilar mejor la relevancia típica de la conducta, sin que por ello se abandone la objetividad del juicio.” Para ROCA, los conocimientos especiales que posea el interviniente “condicionan ya el tipo objetivo”. (“Límites de la responsabilidad Penal por actividad (profesional) cotidiana”, op. cit., pág. 372).

<sup>209</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *Límites a la participación delictiva. Las acciones neutrales y la cooperación con el delito*, op. cit., pág. 155.

un lado, en la previsibilidad objetiva (pronóstico *ex ante* desde la perspectiva de un observador objetivo) de la continuidad delictiva del aporte y, por otro, en la superación, por parte del aportante, del riesgo permitido de acuerdo con las circunstancias que concurran en el caso concreto<sup>210</sup>. Como principio, no será rebasado el riesgo permitido cuando el sujeto adecúe su conducta a las normas jurídicas o sociales aplicables al ámbito en que se desarrolla la conducta. La infracción de dichas normas constituirá un indicio de la inadecuación de la conducta, pero ha de probarse que dicha infracción está directamente relacionada con el riesgo creado de favorecimiento delictivo<sup>211</sup>. En ausencia de normas que regulen la actividad, BLANCO acude al criterio de la previsibilidad: el sujeto no superará el riesgo permitido (y la conducta se reputará neutral y atípica) cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, no sea previsible que contribuye al hecho delictivo de un tercero, conforme al “criterio del hombre medio situado en la posición del autor” pero teniendo en cuenta sus “conocimientos especiales”<sup>212</sup>. En un sentido similar, PÉREZ MANZANO sostiene que los conocimientos del autor son determinantes para decidir la relevancia penal del acto neutral: ésta, que a priori ha de considerarse atípica especialmente en los supuestos en los que constituya una actividad regulada (conducta profesionalmente adecuada), será típica si en atención a las circunstancias del contexto en el que se realiza, “adquiere un claro y unívoco sentido delictivo”<sup>213</sup>. Dicho sentido “sólo es deducible a partir de todas las circunstancias que configuran el caso, del contexto en que se inserta”; y las circunstancias que deben ser tenidas en cuenta son tanto “el contexto de realización de la acción” como los conocimientos especiales “que avalen el objetivo delictivo del autor”, sin que sea suficiente la mera duda o sospecha de conexión con el delito<sup>214</sup>. En ausencia de ese conocimiento, será preciso que dichas circunstancias sean reconocibles “para cualquiera en el lugar del autor”<sup>215</sup>. En todo caso, para que el acto cotidiano pierda su carácter neutral, es preciso no sólo que el autor conozca la relación específicamente delictiva de su aportación: ésta ha de tener un sentido clara y unívocamente delictivo, en el sentido de agotar su significado en la colaboración al delito; y en el caso específico de blanqueo, la propia conducta realizada sobre los

---

<sup>210</sup> Ibidem, pág. 157.

<sup>211</sup> Ibidem, págs. 157-159.

<sup>212</sup> Ibidem, págs. 159 y ss.

<sup>213</sup> Vid. PÉREZ MANZANO, M., “Los Derechos Fundamentales al ejercicio de la profesión de abogado, a la libre elección de abogado y a la defensa y las “conductas naturales”. La Sentencia del Tribunal Constitucional Alemán de 30 de marzo de 2004”, op. cit., pág. 824.

<sup>214</sup> Ibidem, pág. 829.

<sup>215</sup> Ibidem, págs. 826 y 829.

activos ilícitos ha de ser una “actividad instrumental de ocultación del origen delictivo del mismo”<sup>216</sup>.

También ROBLES PLANAS y SÁNCHEZ-VERA han situado el análisis de la problemática de los actos neutrales en el ámbito de la tipicidad objetiva, si bien negando absolutamente la relevancia de los conocimientos especiales del partícipe. La cuestión decisiva es si un acto neutral crea o no un riesgo penalmente desaprobado de participación en el delito del tercero. Para dar respuesta a la cuestión, no ha de atenderse a los conocimientos especiales del partícipe<sup>217</sup>: la relevancia penal de la contribución no depende del significado que aquél haya atribuido a su conducta, sino del propio sentido objetivo de la conducta<sup>218</sup>.

En su señalada monografía dedicada a la fundamentación y límites de la participación delictiva, afirma ROBLES PLANAS que por virtud del principio de autorresponsabilidad, quien realiza un aporte jurídicamente admisible no debe responder de los usos que del mismo haga un tercero (también responsable) que deriven en un resultado delictivo mediante su desviación arbitraria<sup>219</sup>. Por ello, como punto de partida puede afirmarse que, en general, el favorecimiento de un hecho delictivo ajeno queda cubierto por el riesgo permitido<sup>220</sup>. La regla general se exceptúa en dos supuestos. En primer lugar, cuando el sujeto ostente una determinada *posición jurídica* que le obligue a evitar que su aportación derive en conductas delictivas de terceros<sup>221</sup> o que le imponga deberes de aseguramiento referidos a determinados objetos que, por su especial peligrosidad, están fuera de la disponibilidad general y cuyo uso o cesión se permite dentro de los límites impuestos por la correspondiente normativa sectorial<sup>222</sup>. En

---

<sup>216</sup> Ibidem, págs. 831 y 832.

<sup>217</sup> Vid. ROBLES PLANAS, R., “Las conductas neutrales en el ámbito de los delitos fraudulentos. Espacios de riesgo permitido en la intervención en el delito”, op. cit., pág. 50; SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, J., “Blanqueo de Capitales y abogacía: un necesario análisis crítico desde la teoría de la imputación objetiva”, op. cit., págs. 65 y 66.

<sup>218</sup> Vid. ROBLES PLANAS, R., “Las conductas neutrales en el ámbito de los delitos fraudulentos. Espacios de riesgo permitido en la intervención en el delito”, loc. cit.

<sup>219</sup> Vid. ROBLES PLANAS, R., *La participación en el delito: fundamento y límites*, op. cit., pág. 291.

<sup>220</sup> Ibidem, pág. 314.

<sup>221</sup> Deberes que, por ejemplo, ostentarían funcionarios públicos con deber de controlar a personas peligrosas, empresarios respecto a sus empleados o encargados de establecimientos públicos por las conductas de sus clientes (ibidem, pág. 296), o los sujetos obligados a prevenir el blanqueo de capitales. (“Las conductas neutrales en el ámbito de los delitos fraudulentos. Espacios de riesgo permitido en la intervención en el delito”, op. cit., pág. 59).

<sup>222</sup> Vid. ROBLES PLANAS, R., *La participación en el delito: fundamento y límites*, op. cit., págs. 297 y 298. De acuerdo con ROBLES PLANAS, a quien le compete el cuidado de estos objetos peligrosos crea un riesgo jurídicamente desaprobado si, incumpliendo la normativa sectorial que le obliga, cede o no evita su utilización por sujetos no idóneos. El caso paradigmático es el del guardarropa: quien deja un arma cargada en su abrigo

segundo lugar, si no existiesen dichos deberes especiales, en aquellos casos en los que la propia conducta del contribuyente “muestra una *configuración tal que se adapta al comportamiento delictivo* del tercero”<sup>223</sup>.

Para valorar si dicha conducta crea un riesgo especial de ser continuada hasta el delito, será determinante el contexto en el que el primer interviniente desarrolla dicha conducta: en caso de prestaciones profesionales estandarizadas o de venta de objetos que pueden adquirirse libremente, la propia fungibilidad de la prestación o la ubicuidad de los bienes descartan “una configuración especial” de la conducta orientada al hecho delictivo posterior: “cuanto más ubicua o cotidiana sea una determinada acción”, más difícil resultará hallar una razón convincente para fundamentar la punibilidad del partícipe<sup>224</sup>. En cambio, cuando la conducta del partícipe genere un “riesgo especial de continuidad delictiva” y esté próxima espacio-temporalmente al hecho delictivo ajeno<sup>225</sup>, podrá afirmarse la relevancia penal del aporte. Para ello, se insiste, no han de ser tenidos en cuenta los conocimientos especiales del aportante, sino atender al contexto en que se inserta la contribución. Así, podrá negarse la adaptación del aporte al hecho delictivo principal en contextos altamente regulados en los que se respete el estándar normativo (que determinará objetivamente el ámbito del riesgo permitido) y, por el contrario, podrá afirmarse *a priori* que el partícipe se adapta al hecho delictivo posterior cuando aquél “recorte especialmente su conducta para hacerla encajar en el hecho simultáneo o posterior”<sup>226</sup>.

En definitiva, tanto en los casos en los que el primer interviniente haya infringido un deber derivado de una posición jurídica de garantía como en los que su conducta sea inequívocamente “de adaptación o acoplamiento” al hecho delictivo del tercero en atención al contexto, afirma ROBLES PLANAS, el partícipe habrá creado “un riesgo especialmente apto o idóneo” para la comisión de un delito ajeno. Habiendo

---

que posteriormente es disparada por el guardarropa alcanzando a un tercero en la creencia errónea de que estaba descargada, infringe el deber de asegurarse que no va a ser utilizada por personas no autorizadas. Por ello, responderá como partícipe, por virtud del incumplimiento de los deberes derivados de su posición jurídica, del hecho delictivo cometido por el guardarropa. (Ibidem, pág. 297-299).

<sup>223</sup> Ibidem, pág. 310; id., *Garantes y cómplices. La intervención por omisión y en los delitos especiales*, op. cit., pág. 99. Lo que ocurrirá, teniendo en cuenta el contexto, en aquellos casos en los que el aporte contenga “un riesgo especial de continuación delictiva”, es decir, que (...) contiene, por su configuración, la posibilidad intrínseca de que va a ser llevada hasta lo delictivo”. (*La participación en el delito: fundamento y límites*, op. cit., pág. 293).

<sup>224</sup> Ibidem, pág. 305.

<sup>225</sup> Vid. ROBLES PLANAS, R., “Las conductas neutrales en el ámbito de los delitos fraudulentos. Espacios de riesgo permitido en la intervención en el delito”, op. cit., pág. 60.

<sup>226</sup> Vid. ROBLES PLANAS, R., *La participación en el delito: fundamento y límites*, op. cit., pág. 307.

rebasado en ambos caso el riesgo permitido, haciendo así también suyo el hecho delictivo del tercero, responderá como partícipe en el mismo. Cuando de acuerdo con el contexto no pueda afirmarse que la conducta se ha adaptado a una posterior continuación delictiva ajena, podrá afirmarse la neutralidad del comportamiento. Para ello serán datos muy relevantes “la relación espacio-temporal” entre la aportación y el hecho delictivo y la disponibilidad de aquélla: cuanto más se separe el aporte del hecho delictivo, y cuanto más *ubicua* y *estereotipada* sea la clase de favorecimiento, menos deberá realizar el cómplice para adaptarlo al hecho, y más se aproximará la conducta a la neutralidad. Caracterizándose las conductas neutrales precisamente por su naturaleza estereotipada, en la gran mayoría de los casos habrá de descartarse la relevancia típica de la intervención<sup>227</sup>, a salvo, insiste ROBLES PLANAS, de que la conducta se configure especialmente para encajar en el delito ajeno (por ejemplo, adaptándose a las necesidades de quien pretende cometer el delito)<sup>228</sup>.

#### 4.1.4. TRATAMIENTO JURISPRUDENCIAL DE LA IMPUTACIÓN OBJETIVA Y DE OTRAS CATEGORÍAS DOGMÁTICAS NORMATIVAS

Actualmente, no sólo la doctrina admite en general la teoría de la imputación objetiva como criterio general de atribución de un resultado penalmente relevante a una conducta. También, desde hace tiempo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha recurrido a la teoría general<sup>229</sup> tanto en los delitos imprudentes como dolosos<sup>230</sup> como

---

<sup>227</sup> En estos casos, a juicio de ROBLES PLANAS, “subsiste la posibilidad de apreciar en la conducta del partícipe la infracción de deberes de solidaridad”, que en el Código Penal español se concreta en los delitos de omisión del deber de impedir determinados delitos (artículo 450 CP) y omisión del deber de socorro del artículo 195 CP. (“Las conductas neutrales en el ámbito de los delitos fraudulentos. Espacios de riesgo permitido en la intervención en el delito”, op. cit., pág. 60). Son los casos en los que, sin ostentar el primer interviniente una *posición jurídica* que le obligue a evitar conductas delictivas de terceros -en la medida en que no es responsable de la existencia del riesgo que amenaza el bien-, favorece un hecho delictivo ajeno que está aconteciendo o está próximo a realizarse. En estos supuestos, si el sujeto no ha orientado su conducta al hecho delictivo ni ostenta una posición de garantía, no responderá como partícipe pero sí por infringir un deber general de solidaridad. (*La participación en el delito: fundamento y límites*, op. cit., págs. 307-312 passim). Reconoce ROBLES PLANAS que en la mayoría de estos casos, la solución propuesta no abarca todo el desvalor que representa el acto favorecedor: “la solución mediante la imputación de un deber de socorro suele parecer insuficiente, mientras la imputación de la conducta a un tipo de participación suele parecer excesiva”. Por ello el autor propone *de lege ferenda* la incorporación de una solución legal intermedia, a modo de “infracción agravada de deberes de solidaridad”. (Ibidem, págs. 312 y 313).

<sup>228</sup> Ibidem, pág. 317.

<sup>229</sup> Vid. VARELA CASTRO, L., “Los delitos contra la vida y la integridad física de los trabajadores”, *La protección penal de los trabajadores: tipos, instrucción y enjuiciamiento*, Cuadernos de Derecho Judicial, V, 2008, pág. 69.

<sup>230</sup> Vid. RUEDA MARTÍN, M. A., *La Teoría de la imputación objetiva del resultado en el delito doloso de acción*, op. cit., pág. 225.

correctivo de la teoría de la equivalencia de condiciones, a la que con anterioridad había acudido frecuentemente, dando lugar a resultados insatisfactorios -e injustos, en sentido material- en la resolución de casos problemáticos (así, en aquellos en los que existen riesgos concurrentes para la producción de un resultado o en los casos de autopuesta en peligro)<sup>231</sup>. Tras rechazar la suficiencia de la mera verificación de la causalidad natural para la atribución del resultado a un comportamiento (STS 413/2015, de 30 de junio), la Sala Segunda precisa que para dicha atribución es preciso acudir a la teoría de la imputación objetiva. De acuerdo con la misma, una vez comprobada la necesaria causalidad natural, la imputación de un resultado con relevancia penal a una conducta requiere además verificar diversos extremos:

1º. Que la acción del autor haya creado o incrementado un peligro jurídicamente desaprobado para la producción del resultado.

2º. Que el resultado producido por dicha acción sea la realización del mismo peligro (jurídicamente desaprobado) creado o incrementado por la acción.

En definitiva, como vimos al estudiar el tratamiento doctrinal de la imputación objetiva, el Tribunal Supremo considera necesario verificar que la conducta ha ocasionado un riesgo desaprobado jurídicamente y que el resultado lesivo se ha producido como consecuencia de dicho riesgo (SSTS 723/2014, de 30 de octubre, 1345/2011, de 14 de diciembre, 1246/2009, de 30 de noviembre, y 863/2006, de 13 de septiembre). Asimismo, en otras resoluciones, se afirma que es también preciso verificar que el resultado lesivo producido sea “uno de los (...) que quiere evitar la norma penal” (STS 413/2015, de 30 de junio). Acoge el Alto Tribunal, como vemos, el concepto de imputación conformado por tres *topoi* o niveles diferenciados que vimos *supra*<sup>232</sup>.

Constituye el “primer nivel de la imputación objetiva” la creación de un riesgo típicamente relevante o no permitido para el bien jurídico (STS 286/2015, de 19 de mayo). “El comportamiento ha de ser, pues, peligroso, esto es, crear un determinado grado de probabilidad de lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido”. “El riesgo creado no debe ser un riesgo permitido” y, en este sentido, “el ámbito del riesgo permitido dependerá de lo que sea adecuado en el sector en el que opere, y entre otras

---

<sup>231</sup> Vid. LANDECHO VELASCO, C. M., *Derecho Penal Español. Parte General*, op. cit., págs. 280 y 281.

<sup>232</sup> Vid. *supra*, apartado 4.1.2.1 de este capítulo, págs. 306 y ss.

circunstancias, de la importancia de las prestaciones [a] que se obliga cada parte, las relaciones que concurren entre las partes contratadas, las circunstancias personales del sujeto pasivo y la capacidad para autoprotegerse y la facilidad del recurso a las medidas de autoprotección”<sup>233</sup>. En cuanto al juicio de probabilidad (prognosis posterior objetiva), la Sala Segunda afirma que han de tenerse en cuenta “las circunstancias conocidas o reconocibles que un hombre prudente en el momento de la acción más todas las circunstancias conocidas o reconocibles por el autor sobre la base de sus conocimientos excepcionales o al azar”, si bien también habrán de ser tenidos en cuenta “los conocimientos especiales del autor” (SSTS 413/2015, de 30 de junio, 135/2015, de 17 de febrero, y 82/2014, de 12 de diciembre). En definitiva, la suficiencia, idoneidad o adecuación del riesgo para el bien jurídico “ha de establecerse con arreglo a un baremo mixto objetivo-subjetivo, en el que se ponderen (...) las características personales de la víctima y del autor, y a las circunstancias que rodean al hecho” (STS 286/2015, de 19 de mayo).

En cuanto a la relación “de segundo nivel” (STS 82/2014, de 12 de diciembre) o “relación de riesgo”, es preciso que el resultado producido no sólo esté vinculado causalmente a la acción generadora del riesgo, sino que además sea la realización del mismo peligro (jurídicamente desaprobado) creado o incrementado por la acción (SSTS 42/2015, de 28 de enero, 900/2014, de 26 de diciembre, 723/2014, de 30 de octubre, 624/2014, de 23 de septiembre). En la STS 979/2013, de 23 de diciembre, se aborda la cuestión de “los riesgos concurrentes”, en los que, como vimos, el resultado penalmente típico puede materializarse en la realización de un riesgo distinto a la conducta peligrosa del agente. En estos supuestos, de acuerdo con la resolución referida, resulta ineludible “determinar la intensidad del riesgo creado para poder afirmar sin dudas que el resultado producido se encuentra dentro del ámbito de aquél o que, por el contrario, puede aparecer por el efecto de otras causas que actúan de forma concurrente con un riesgo que por sus características cabe considerar insuficiente”.

Como tercer nivel o estadio de la imputación objetiva, ha de atenderse al alcance de la protección de la norma. De acuerdo con la STS 54/2015, de 11 de febrero, no podrá imputarse el resultado a la conducta peligrosa “cuando éste no sea uno de los que

---

<sup>233</sup> El grado de riesgo permitido, se afirma en la STS 54/2015, de 11 de febrero, puede estar establecido en la ley, en un reglamento, en disposiciones particulares y, desde luego, basado en la experiencia. “La acción peligrosa tiene que producir un resultado que pueda ser imputado objetivamente a la misma. Así pues, el resultado debe ser evitable conforme a un análisis “ex ante””.



se pretenden impedir con la indicada norma”; es decir, cuando se encuentre fuera de su ámbito de protección. En conexión con el fin de protección de la norma, adquieren relevancia los supuestos de falta de autoprotección del sujeto pasivo del delito, cuyo incumplimiento puede llegar a excluir la tipicidad de la conducta (así, por ejemplo, en el delito de estafa, en el que ha de valorarse la idoneidad del engaño “tanto atendiendo a módulos objetivos como en función de las condiciones personales del sujeto engañado y de las demás circunstancias concurrentes en el caso concreto” -SSTS 135/2015, de 17 de febrero, y 162/2012, de 15 de marzo-).

Ciertamente, el Tribunal Supremo no ha acudido habitualmente a la teoría general de la imputación objetiva para restringir normativamente la aplicación del ámbito objetivo del blanqueo; sí ha acogido de forma habitual el criterio del riesgo permitido (primer nivel de imputación) pero asociado preferentemente a la categoría de los actos neutrales, como veremos. En cualquier caso, además de la teoría general de la imputación objetiva, el Alto Tribunal se ha servido en otras ocasiones de otros institutos dogmáticos asociados a aquélla que permiten restringir el ámbito de lo penalmente relevante en diferentes tipos delictivos, vinculando en ocasiones unos con otros. En el ámbito del derecho penal económico, se han invocado como fórmulas excluyentes de la tipicidad las actuaciones realizadas en un ámbito de riesgo permitido o para disminuir un riesgo preexistente, el principio de confianza, “cuando quien actúa lo hace en la confianza de que otros se mantendrán en el riesgo permitido -criterio de especial relevancia en actuaciones en el ámbito de la empresa y de pluralidad de actores”-, la denominada prohibición de regreso, “referida a situaciones en las que concurren otras situaciones previas puestas por quien no es garante de la evitación de un resultado” (STS 1345/2011, de 14 de diciembre), así como la contribución al resultado lesivo a través de los denominados “actos neutrales”, considerados penalmente irrelevantes cuando se den las condiciones que a continuación referiremos.

En el ámbito específico del blanqueo de capitales, ha afirmado la Sala Segunda que es preciso que “toda acción típica represente, con independencia de su resultado, un peligro socialmente inadecuado. (...) Una acción que no representa peligro alguno de realización del tipo carece de relevancia penal.” En el marco de la contribución a una operación de blanqueo, “es necesario comprobar que la acción de colaboración tenga un sentido objetivamente delictivo y que ello sea conocido por el que realiza una acción

que, en principio, es socialmente adecuada.” (STS 34/2007, de 1 de febrero)<sup>234</sup>. De acuerdo con esta resolución, los actos neutrales o cotidianos “son comportamientos cotidianos, socialmente adecuados, que por regla general no son típicos” siempre que no representen “peligro alguno de realización del tipo”. En las SSTS 487/2014, de 9 de junio, y 942/2013, de 11 de diciembre, la Sala define dichos actos como “conductas causales desde un punto de vista natural, pero que, en tanto que pueden estar amparadas en su adecuación social, pueden no suponer un peligro (o un aumento del peligro) jurídicamente desaprobado para el bien jurídico, y, en esa medida, no resultar típicas”. Como primera premisa, por tanto, es condición *si ne qua non* que el acto concreto no rebase el límite del riesgo permitido, esto es, “que no aument[e] el riesgo de comisión del delito” (STS 189/2007, de 6 de marzo). Desde esta perspectiva, “una acción que no representa peligro alguno de realización del tipo carece de relevancia penal” (SSTS 338/2015, de 2 de junio, 597/2014, de 30 de julio, y 487/2014, de 9 de junio).

Para determinar la relevancia penal de los actos cotidianos, es necesario que “tenga un sentido objetivamente delictivo y que ello sea conocido por el que realiza una acción que, en principio, es socialmente adecuada. (...) En este sentido se atribuye relevancia penal, que justifica la punibilidad de la cooperación, a toda realización de una acción que favorezca el hecho principal en el que el autor exteriorice un fin delictivo manifiesto, o que revele una relación de sentido delictivo, o que supere los límites del papel social profesional del cooperante, de tal forma que ya no puedan ser consideradas como profesionalmente adecuadas, o que se adapte al plan delictivo del autor, o que implique un aumento del riesgo, etc.” (SSTS 487/2014, de 9 de junio, 91/2014, de 7 de febrero, 942/2013, de 11 de diciembre, y 34/2007, de 1 de febrero).

En principio, para la jurisprudencia, el análisis de la transcendencia penal de los actos cotidianos ha de tener lugar en sede de tipicidad objetiva mediante criterios

---

<sup>234</sup> En el caso enjuiciado, el negocio simulado que había favorecido la operación de blanqueo fue no obstante llevada a cabo por un testaferro, y a tal efecto se afirma en la Sentencia que “la acción del testaferro implica siempre tomar parte en un acto, que aunque no es en sí mismo delictivo, conlleva un ocultamiento, que, en ocasiones, *puede aumentar el riesgo de comisión de un delito*, como ocurre en los casos en los que se lo lleva a cabo sin una explicación objetiva plausible de la simulación, es decir fundada en causas manifiestamente lícitas. *En tales casos el acto neutral deja de serlo, pues tiene una relación de sentido delictivo*. Cuando la cooperación en ese hecho no es dolosa, el art. 301.3 CP exige al que coopera prestándose a la simulación que obre con especial cuidado de no favorecer un delito de los autores. Es evidente que el recurrente, cuyo dolo, como se ha visto, no ha sido demostrado, no ha tomado ninguna medida de precaución para que su participación no favoreciera la comisión del delito o no aumentara el riesgo de la misma. Por tales razones la acción que se le imputa no es simplemente un acto neutral y su imprudencia no puede ser cuestionada.” (Las cursivas son nuestras).

normativos de imputación del resultado lesivo a la conducta, de tal forma que “si la conducta resulta atípica objetivamente no es preciso siquiera analizarse el siguiente nivel de imputación, el subjetivo, de modo que el conocimiento que el sujeto pudiese llegar a tener a la utilización que otros hacen de su comportamiento plenamente ajustado a Derecho resulta irrelevante” (STS 974/2012 de 5 de diciembre). Situando el análisis en una óptica estrictamente objetiva, en las SSTS 877/2014, de 22 de diciembre, y 157/2014, de 5 de marzo, se afirma que perderían en carácter neutral (no punible) aquellos actos “que conducen inequívocamente a la consecución de un delito”, es decir aquellos que demuestren una carácter “claramente favorecedor o tendente a la realización de un delito”. Sin embargo, en muchas otras resoluciones, para diferenciar los actos neutrales de los que no lo son (o sólo lo son en apariencia), la Sala Segunda otorga cierta relevancia al hecho de que el sujeto conozca que con su comportamiento, aparentemente neutral, contribuye a la realización de un hecho delictivo. En este sentido, en la STS 942/2013, de 11 de diciembre, se afirma que “la distinción entre los actos neutrales y las conductas delictivas de cooperación puede encontrar algunas bases ya en los aspectos objetivos, especialmente en los casos en los que la aparición de los actos, aparentemente neutrales, tiene lugar en un marco de conducta del tercero en el que ya se ha puesto de relieve la finalidad delictiva. Dentro de estos aspectos objetivos se encuentra no solo la conducta del sujeto, aisladamente considerada, sino también el marco en el que se desarrolla. Y a ello ha de añadirse el conocimiento que el sujeto tenga de dicho marco”<sup>235</sup>. De este modo, no serán penalmente irrelevantes aquellos actos que tengan “un sentido objetivamente delictivo y que ello sea conocido por el que realiza una acción que, en principio, es socialmente adecuada” (SSTS 338/2015, de 2 de junio, y 974/2012 de 5 de diciembre).

En conclusión, como se puede observar en este apartado, además de la teoría general de la imputación objetiva, cuya invocación jurisprudencial en procedimientos por delito de blanqueo ha sido exigua, la Sala Segunda ha acogido otros institutos dogmáticos también de carácter normativo que permiten delimitar el alcance de los

---

<sup>235</sup> Y ello porque, añade la Sentencia, “resulta difícil disociar absolutamente aquellos aspectos objetivos de los elementos subjetivos relativos al conocimiento de que, con la conducta que se ejecuta, que es externamente similar a otras adecuadas socialmente por la profesión o actividad habitual de su autor, se coopera a la acción delictiva de un tercero”. En la STS 165/2013, de 26 de marzo, expresamente se reconoce que “en general la Sala se ha inclinado por un *criterio mixto* como elemento diferenciador de actos neutrales de los que no lo son, exigiendo que el sujeto conozca la verdadera naturaleza y finalidad del acto, y que este, objetivamente sirva, y coadyuve a la facilitación del delito, lo que supone un aporte necesario a tal fin”.

tipos<sup>236</sup>. De entre ellos, destaca como formulación de mayor repercusión en materia de blanqueo la categoría de los “actos neutrales”. Para diferenciar los actos neutrales de los que sólo lo son en apariencia, la línea jurisprudencial dominante atiende a que la conducta tenga o no un “sentido objetivamente delictivo”; en este sentido se descarta la irrelevancia penal de aquellos actos que superen en riesgo permitido y demuestren una carácter “claramente favorecedor o tendente a la realización de un delito”, superando los límites del rol social o profesional del cooperante -ya no podrían considerarse adecuados o profesionales- o adaptándose al plan delictivo del autor principal. Sin embargo, de acuerdo con la jurisprudencia más reciente, a dichos efectos han de ser tenidos en cuenta no sólo las circunstancias concurrentes, sino también los conocimientos de quien realiza el acto aparentemente neutral: la consciencia de favorecer o contribuir con su conducta a la realización de un hecho delictivo alejará la pretendida neutralidad de su contribución.

#### **4.1.5. RESTRICCIÓN NORMATIVA DEL ÁMBITO OBJETIVO DEL TIPO DE BLANQUEO DE CAPITALS**

En el ámbito del blanqueo de capitales, los criterios derivados de la teoría de la imputación objetiva y de otras categorías dogmáticas que hemos estudiado permitirán excluir del ámbito objetivo del delito acciones aparentemente típicas -al coincidir *formalmente* con modalidades de acción descritas en el artículo 301 CP- “que sin embargo no lo son”<sup>237</sup>, bien porque el propio comportamiento subsumible en la norma no ha creado un riesgo jurídicamente desaprobado para la realización de un acto de blanqueo (distanciar el bien de su origen ilícito o facilitar su reintegración en el tráfico normalizado), bien porque el riesgo provocado por dicho comportamiento no se haya materializado en el concreto acto de blanqueo. En efecto, si nos alejamos de una concepción meramente naturalística o mecanicista del tipo penal<sup>238</sup>, se ha de concluir que no toda contribución puramente causal a la efectiva producción de un resultado de blanqueo ha de ser merecedora de reproche penal<sup>239</sup>: como hemos visto, para la imputación objetiva de ese resultado, además de la vinculación fáctica de la conducta,

---

<sup>236</sup> Vid. SILVA SÁNCHEZ, J. M., “Introducción”, op. cit., págs. 11 y 12.

<sup>237</sup> Vid. GIMBERNAT ORDEIG, E., “¿Qué es la imputación objetiva?”, op. cit., pág. 178.

<sup>238</sup> Vid. SAP Madrid 95/2002 (Sec. 15), de 19 de abril.

<sup>239</sup> Vid. SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, J., “Blanqueo de Capitales y abogacía: un necesario análisis crítico desde la teoría de la imputación objetiva”, op. cit., pág. 44.

se precisa una vinculación normativa<sup>240</sup>. En el ámbito del delito de blanqueo, dicha vinculación normativa sólo podrá afirmarse cuando, respecto de un comportamiento concreto formalmente subsumible en el artículo 301 CP, puedan verificarse de forma sucesiva los diversos niveles de imputación que exige la teoría general, de tal forma que, una vez constatada su individualización como una concreta modalidad comisiva prevista en el tipo penal, se corrobore que el referido comportamiento ha creado, en primer lugar, un “riesgo jurídicamente desaprobado” y, en caso afirmativo, que dicho riesgo “se ha concretado en el resultado prohibido por el Derecho Penal”<sup>241</sup>, esto es, el enmascaramiento del origen delictivo de bienes o activos sobre los que recae la acción típica, o su reincorporación al circuito económico legal -maquillados en mayor o menor medida- con afección a los intereses socio-económicos que el delito protege.

Conforme al primer nivel de imputación, como requisito para afirmar la tipicidad de los comportamientos subsumibles en las modalidades comisivas contenidas en el artículo 301 CP, es preciso que, desde una perspectiva *ex ante* (en el momento en el que se realiza la conducta concreta)<sup>242</sup>, ésta genere o aumente el riesgo de que a través de la misma se enmascare el origen delictivo del bien o se reintegre éste al circuito económico legal. Las conductas de adquisición, conversión y transmisión, en tanto que posibilitan que las ganancias ilícitamente obtenidas circulen a través de los canales financieros y sean reintroducidas en el tráfico legal, resultarán *a priori* idóneas para crear o aumentar el riesgo jurídicamente relevante de lesionar el bien jurídico. Ello no ocurrirá, sin embargo, en aquellos casos en los que, en atención a sus circunstancias concretas, la conducta esté amparada por un ámbito de riesgo permitido, especialmente cuando pueda considerarse como penalmente neutral o profesionalmente adecuada. Tampoco ocurrirá en los casos en los que la conducta consista en la mera posesión o la utilización de los bienes ilícitos, pues no revisten en general una especial aptitud para rebasar el ámbito de riesgo permitido. De este modo, normativamente es posible descartar *a priori* la relevancia penal de las mismas.

---

<sup>240</sup> Vid. OLIVA GARCÍA, H., “La defensa ante la acusación por blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 25.

<sup>241</sup> Vid. SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, J., “Blanqueo de Capitales y abogacía: un necesario análisis crítico desde la teoría de la imputación objetiva”, op. cit., pág. 45; OLIVA GARCÍA, H., “La defensa ante la acusación por blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 27.

<sup>242</sup> Vid. MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., *Derecho penal económico y de la empresa. Parte General*, op. cit., pág. 276.

Por su parte, en las modalidades favorecedoras integradas en la fórmula “realización de cualquier otro acto” (segundo inciso del artículo 301.1 CP) con las finalidades típicamente previstas (ocultar, encubrir o ayudar), el primer nivel de imputación precisará que el concreto acto operado sobre el bien esté dotado de aptitud suficiente para crear un riesgo relevante de ocultación o encubrimiento de su origen delictivo o de servir eficazmente para ayudar al sujeto que participó en el hecho delictivo previo a eludir las consecuencias de su ilícito actuar. De forma similar, respecto a la modalidad comisiva prevista en artículo 301.2 CP, conforme al primer estadio de la imputación objetiva será necesario que el acto realizado sobre el bien sea idóneo para alcanzar la ocultación o el encubrimiento de la características del bien definidas en el precepto<sup>243</sup>. En ambos casos, la conducta concreta habrá de rebasar el riesgo permitido.

De conformidad con el segundo y el tercer nivel de imputación, ha de verificarse que el riesgo de blanqueo ocasionado por la conducta realizada se materializa en el resultado penalmente relevante que la norma trata de conjurar. En el caso de las modalidades típicas consistentes en la adquisición, conversión y transmisión, será necesario que se concluya la concreta operación de que se trate, incidiendo de forma relevante en el ámbito de protección de la norma. En la modalidad indeterminada consistente en la realización de cualquier acto para ocultar, encubrir o ayudar, será preciso que la concreta acción realizada sobre el bien menoscabe de forma efectiva los intereses socioeconómicos que el tipo trata de proteger. Por último, en el caso de la modalidad comisiva prevista en el artículo 301.2 CP, que, como vimos, se configura como un delito de resultado, se deberá constatar que se ha realizado la efectiva ocultación o encubrimiento de la características del bien a que el precepto hace referencia como consecuencia del riesgo relevante contenido en la conducta, y que dicho acto ha contribuido a desvincular en mayor o menor medida el bien de su origen ilícito (fin que la norma penal trata de impedir).

Estos dos últimos niveles de imputación permitirán determinar si son o no objetivamente imputables contribuciones a operaciones de blanqueo atendiendo a

---

<sup>243</sup> En ambas modalidades comisivas (los actos indeterminados dirigidos a los fines previstos en el segundo inciso del artículo 301.1 CP, y la ocultación o encubrimiento del artículo 301.2) la indeterminación del verbo típico hace que la relevancia penal del tipo esté vinculada en el primer caso a las finalidades específicamente previstas (ocultar, encubrir o ayudar) y en el segundo a la producción del resultado ocultación o el encubrimiento de la características del bien previstas en el precepto.

criterios delimitadores de esferas de responsabilidad (qué sujeto o sujetos, de entre todos aquellos que a través de su conducta han creado una ocasión de riesgo, deben considerarse responsables y en qué medida)<sup>244</sup>.

Como hemos visto en apartados anteriores de este capítulo, no sólo la imputación objetiva ofrece criterios normativos para delimitar el ámbito tipo. La restricción normativa del mismo es también posible a través de diversas instituciones dogmáticas que, en general, han sido acogidas por la jurisprudencia más reciente. En materia de blanqueo de capitales ha adquirido especial preeminencia la doctrina de los “actos neutrales” junto al principio de riesgo permitido.

De acuerdo con la doctrina dominante, el *riesgo permitido* excluye la tipicidad<sup>245</sup>. En el mismo sentido, en numerosas sentencias dictadas en procesos por blanqueo de capitales, la Sala Segunda ha reiterado que “una acción que no representa peligro alguno de realización del tipo carece de relevancia penal” (por todas, STS 34/2007, de 1 de febrero). Como vimos, la delimitación del nivel de riesgo dependerá en gran medida tanto del sector en el que se inserte la conducta a valorar<sup>246</sup> como del concreto tipo delictivo que se enjuicie<sup>247</sup>. A estos efectos, la reglamentación sectorial que regule la actividad concreta en la que se desarrolle la conducta puede ser un significativo “punto de partida”<sup>248</sup> para valorar su adecuación a los límites del riesgo permitido. En el ámbito del blanqueo de capitales, además de la normativa sectorial que discipline la actividad de que se trate (legislación bancaria, del ámbito del seguro, estatutos profesionales, etc.), resulta de especial interés la Ley 10/2010, de 28 de abril, y su reglamento de desarrollo para la definición del ámbito del riesgo permitido en la actuación de una tipología específica de sujetos: los profesionales y otros operadores que a dicha norma administrativa se encuentran vinculados<sup>249</sup>. Las disposiciones de la legislación preventiva que prevén el elenco de obligaciones a las que aquéllos están sometidos, determinarán en gran medida el nivel de riesgo tolerable a efectos penales en

---

<sup>244</sup> Vid. MIR PUIG, S., “Significado y alcance de la imputación objetiva en Derecho penal”, op. cit., pág. 17.

<sup>245</sup> Vid. TORÍO LÓPEZ, A., “Naturaleza y ámbito de la teoría de la imputación objetiva”, op. cit., pág. 42; MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, 9ª ed., op. cit., pág. 299; MUÑOZ CONDE, F./GARCÍA ARÁN, M., *Derecho Penal. Parte General*, op. cit., pág. 295; MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., *Derecho penal económico y de la empresa. Parte General*, op. cit., pág. 289.

<sup>246</sup> Vid. STS 413/2015, de 30 de junio.

<sup>247</sup> Vid. PAREDES CASTAÑÓN, J. M., “La determinación del nivel de riesgo permitido: un caso de derecho penal económico”, op. cit., pág. 157.

<sup>248</sup> Vid. PÉREZ MANZANO, M., “Neutralidad delictiva y blanqueo de capitales: el ejercicio de la abogacía y la tipicidad del delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 175.

<sup>249</sup> Vid. OLIVA GARCÍA, H., “La defensa ante la acusación por blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 28.

aquellos supuestos en los que el sujeto activo esté vinculado a dicha norma. Si bien las exigencias de cautela son mayores para estos sujetos vinculados que para el ciudadano medio, la existencia de normas de conducta relevantes también permitirá delimitar con mayor precisión los márgenes de riesgo permitido en las actuaciones que los primeros que realicen. De acuerdo con SÁNCHEZ-VERA, los abogados -y también el resto de sujetos obligados por la norma, entendemos- quedarán amparados por el riesgo permitido cuando un cliente lleve a cabo un acto de blanqueo sirviéndose de su actuación, siempre que dicha actuación se desarrolle en el marco de las obligaciones impuestas por la Ley 10/2010. En estos casos, afirma el autor, aun cuando el sujeto obligado haya podido prever que su actuación, escrupulosamente respetuosa con las obligaciones que dicha normativa preventiva le impone, pueda ser aprovechada por terceros para realizar actos de blanqueo, no responderá por dicho resultado típico -por mucho que su conducta haya sido causal del mismo-, pues al adecuar su conducta a la normativa preventiva, actúa dentro del riesgo permitido<sup>250</sup>. Sin duda, *a priori* la normativa preventiva aportará importantes “indicios para determinar el umbral de permisión de [sus] conductas”<sup>251</sup>. Sin embargo, entendemos con MARTÍNEZ ESCAMILLA y FEIJÓO SÁNCHEZ que la observancia de las obligaciones impuestas por la normativa preventiva no supone siempre actuar dentro del riesgo permitido, del mismo modo que no todo incumplimiento de dichos deberes conduce a la tipicidad de la conducta<sup>252</sup>. La actuación del profesional, además de adecuarse a la normativa preventiva y a las reglas sectoriales que disciplinen su concreta actividad, ha de ser objetivamente prudente o cuidadosa para evitar que su actuación facilite la materialización de una operación de blanqueo<sup>253</sup>.

---

<sup>250</sup> Vid. SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, J., “Blanqueo de Capitales y abogacía: un necesario análisis crítico desde la teoría de la imputación objetiva”, op. cit., pág. 50; OLIVA GARCÍA, H., “La defensa ante la acusación por blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 29. Con razón critica SÁNCHEZ-VERA la tendencia del legislador a restringir progresivamente el ámbito del riesgo permitido en torno a los sujetos obligados por la normativa antiblanqueo, pues cada vez se va ampliando el nivel de exigencia respecto de sus obligaciones. Obligaciones que al autor considera “absolutamente impropias”, dadas las limitaciones que muchos de estos profesionales tienen para controlar y detectar las conductas blanqueadoras, limitaciones “no sólo humanas o de conocimientos, sino incluso técnicas.” (“Blanqueo de Capitales y abogacía: un necesario análisis crítico desde la teoría de la imputación objetiva”, op. cit., pág. 54). Por ello, resulta imprescindible una interpretación restrictiva del tipo de blanqueo en relación con las obligaciones impuestas *ex lege* a las que nos venimos refiriendo.

<sup>251</sup> Vid. FEIJÓO SÁNCHEZ, B., “Imputación objetiva en el Derecho penal económico y empresarial: Esbozo de una teoría general de los delitos económicos”, op. cit., pág. 32.

<sup>252</sup> Vid. MARTÍNEZ ESCAMILLA, M., *La imputación objetiva del resultado*, op. cit., págs. 137 y 139; FEIJÓO SÁNCHEZ, B., “Imputación objetiva en el Derecho penal económico y empresarial: Esbozo de una teoría general de los delitos económicos”, loc. cit.

<sup>253</sup> En este sentido, vid. MARTÍNEZ ESCAMILLA, M., *La imputación objetiva del resultado*, loc. cit.



De acuerdo con FEIJÓO SÁNCHEZ, para excluir normativamente la tipicidad de la contribución causal de estos profesionales (mediante la realización de las atribuciones inherentes a su profesión) a la comisión de un hecho delictivo posterior por parte del cliente, será fundamental atender al “sentido del comportamiento” del profesional, esto es, si el significado objetivo de su conducta es o no “facilitar la futura comisión del hecho delictivo”<sup>254</sup>. Cuando el “servicio” prestado por el profesional “pueda tener otro sentido que el delictivo no se podrá hablar de participación” en el ilícito penal. Por ejemplo, en los casos de asesoramiento, “el aprovechamiento delictivo de la prestación es competencia exclusiva del que hace uso [de la contribución del profesional] para llevar a cabo una conducta delictiva”<sup>255</sup>. Si, por el contrario, el “asesoramiento se torna claramente en “consejo delictivo” entendido como “parecer o dictamen que se da para hacer o no [o cómo] hacer una cosa”, entramos de lleno en el ámbito de lo típico”<sup>256</sup>.

En cualquier caso, como ha advertido la doctrina especializada, no de todo incumplimiento de las obligaciones contenidas en la normativa preventiva por los sujetos vinculados podrá deducirse responsabilidad penal<sup>257</sup>: sólo la inobservancia de algunas obligaciones podrá crear un riesgo relevante de facilitar la realización de una operación de blanqueo<sup>258</sup>, contribuyendo a la desvinculación de los bienes o activos de su origen delictivo<sup>259</sup>. El incumplimiento de determinadas obligaciones -deberes de identificación de clientes, de comunicar las operaciones sospechosas al SEPBLAC, de abstenerse de ejecutar determinadas operaciones sospechosas en tanto no se haya

---

<sup>254</sup> Vid. FEIJÓO SÁNCHEZ, B., “Imputación objetiva en el Derecho penal económico y empresarial: Esbozo de una teoría general de los delitos económicos”, op. cit., págs. 41-43 *passim*. Para el autor, dicho análisis cobra un importante significado de cara a afirmar la prohibición de regreso y la neutralidad de determinadas conductas.

<sup>255</sup> *Ibidem*, pág. 43.

<sup>256</sup> *Ibidem*.

<sup>257</sup> Aunque, como señala PERALS CALLEJA, “en muchas ocasiones el incumplimiento de las obligaciones de la Ley es precisamente uno de los claros indicios de comisión del delito de blanqueo”. (“Blanqueo de capitales y actividad de los abogados”, *Blanqueo de Capitales*. Boletín del ICAM nº 37. Madrid, 2007, pág. 91). Adviértase que, con todo, también sería posible que un sujeto vinculado a la norma administrativa cometa en el ejercicio de su cargo un delito de blanqueo sin incumplir formalmente la normativa preventiva, siempre que tanto a nivel objetivo como subjetivo colme las exigencias típicas. Lo que queremos expresar es que deben ser diferenciadas claramente la responsabilidad administrativa y la penal derivada de un comportamiento sospechoso de blanqueo. Una conducta sospechosa precisa ser analizada desde una doble perspectiva: por un lado, debe determinarse si dicha conducta ha supuesto el incumplimiento de una concreta obligación prevista en la legislación preventiva para esa modalidad de sujeto obligado, y por otro, se ha de valorar la posible adecuación típica de aquella conducta respecto a las diferentes modalidades comisivas en que el delito de blanqueo se puede presentar.

<sup>258</sup> Vid. ZARAGOZA AGUADO, J. A., “El blanqueo de bienes de origen criminal”, op. cit., págs. 399 y 400; FEIJÓO SÁNCHEZ, B., “Imputación objetiva en el Derecho penal económico y empresarial: Esbozo de una teoría general de los delitos económicos”, op. cit., pág. 45.

<sup>259</sup> Vid. PÉREZ MANZANO, M., “Neutralidad delictiva y blanqueo de capitales: el ejercicio de la abogacía y la tipicidad del delito de blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 203 y 204.

efectuado la preceptiva comunicación o, en fin, el deber de confidencialidad frente a terceros- puede resultar idóneo para alejar el bien de su procedencia delictiva y podría, a su vez, dar lugar a responsabilidad penal por blanqueo si se verifican los requisitos típicos tanto objetivos como subjetivos que el delito precisa. En cambio, el incumplimiento de otras obligaciones de carácter más formal (obligaciones de documentación y conservación de registros, de establecimiento de procedimientos y órganos adecuados de control interno y de formación en materia de prevención de blanqueo a los empleados) difícilmente parece compatible con alguna de las modalidades típicas previstas en el artículo 301 CP<sup>260</sup>, pues en ningún caso el incumplimiento de las referidas obligaciones será “expresivo de una conducta tendente a la ocultación”<sup>261</sup>.

En definitiva, sólo en el caso del incumplimiento de aquellas obligaciones que sean materialmente idóneas para facilitar la realización de una operación de blanqueo, el profesional responderá, a título de imprudencia o de dolo, según los casos, como autor si su conducta es subsumible en algunas de las modalidades típicas contenidas en el artículo 301, o en su caso, como partícipe por la contribución al hecho delictivo realizado por el autor<sup>262</sup>.

SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES ha señalado que *el principio de confianza* resulta un instrumento normativo muy útil para excluir la responsabilidad de los abogados en relación con los actos de blanqueo que hayan podido emprender sus clientes. Nuevamente, no parece existir inconveniente en extender, en su mayoría, las conclusiones alcanzadas por el autor a la actuación de cualquier otro agente que opere en el tráfico jurídico-económico y cuya actividad pueda ser aprovechada por terceras

---

<sup>260</sup> Vid. ZARAGOZA AGUADO, J. A., “El blanqueo de bienes de origen criminal”, loc. cit.; FEIJÓO SÁNCHEZ, B., “Imputación objetiva en el Derecho penal económico y empresarial: Esbozo de una teoría general de los delitos económicos”, op. cit., pág. 53. Incluso para FEIJÓO si el incumplimiento de la normativa preventiva “sólo afecta a la colaboración con la Administración para detectar y perseguir delitos de blanqueo, pero no a la posibilidad de impedir la operación [concreta], el comportamiento es atípico (...) salvo que se tratara de un elemento más de un comportamiento que, adicionalmente por otras razones, adquiere un significado delictivo”.

<sup>261</sup> Ibidem, pág. 204

<sup>262</sup> Vid. FEIJÓO SÁNCHEZ, B., “Imputación objetiva en el Derecho penal económico y empresarial: Esbozo de una teoría general de los delitos económicos”, op. cit., págs. 52 y 53. No está de más recordar que en estos supuestos, además de que la conducta sea objetivamente imputable al sujeto, ha de concurrir dolo -directo o eventual- o imprudencia grave. En caso contrario, no podrá afirmarse sino la atipicidad de la conducta, si bien el incumplimiento de la correspondiente norma podrá ser, en su caso, constitutivo de la correspondiente infracción administrativa en aplicación de la ley preventiva. (Vid. FUENTES MARTÍNEZ, J. J., “El alcance del control de la legalidad de los actos y negocios jurídicos por parte del notario. (La “posición de garantía” del notario)”, *Judicatura y notariado ante los delitos económicos*, *Estudios de Derecho Judicial* nº 73. Madrid, 2006, pág. 134).

personas para culminar exitosamente operaciones de blanqueo. Salvo que el sujeto tenga un deber positivo especial de garantizar la indemnidad del riesgo que le obligue a adoptar especiales medidas de aseguramiento, de acuerdo con SÁNCHEZ-VERA, dicho sujeto podrá “acogerse plenamente al principio de confianza con respecto a sus clientes, aun cuando, fácticamente, a nadie le escapa que habrá clientes que pueden defraudar dicha confianza”. Ello, claro está, siempre “que la pretendida confianza no haya sido defraudada ya”<sup>263</sup>. Sólo en este caso nacerá en el abogado una de sus obligaciones como sujeto sometido a la normativa preventiva: el deber de comunicar la operación sospechosa al SEPBLAC. Sin embargo, su misma condición de letrado le impone, por acatamiento a otras normas -incluso de rango superior-, el cumplimiento de ciertos deberes de sigilo para con sus clientes<sup>264</sup>.

Asimismo, han revelado SÁNCHEZ-VERA y OLIVA GARCÍA la oportunidad de acudir al principio de confianza como fórmula limitativa de la atribuciones de responsabilidad penal “globales” o “unitarias”, en aquellos casos en los que varios sujetos contribuyen casualmente con su actuación a la realización de una operación de blanqueo. El principio de confianza, afirma SÁNCHEZ-VERA, “se muestra como un

<sup>263</sup> Vid. SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, J., “Blanqueo de Capitales y abogacía: un necesario análisis crítico desde la teoría de la imputación objetiva”, op. cit., págs. 56 y 57.

<sup>264</sup> Así, el artículo 29 del Estatuto general de la Abogacía Española, el artículo 42.3 LOPJ (“los abogados deberán guardar secreto de todos los hechos o noticias que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligados a declarar sobre los mismos”), el artículo 24.2 CE (derecho fundamental, entre otros, a la defensa letrada); incluso la transgresión de su deber de secreto puede ser constitutivo de sendos delitos de revelación de secretos -artículo 199 CP- y de deslealtad profesional -artículo 467 CP-. (Vid. MILANS DEL BOSCH, S., “El abogado, sujeto obligado de la normativa antiblanqueo”, *Blanqueo de Capitales*. Boletín del ICAM nº 37. Madrid, 2007, pág. 26; id., “El abogado como sujeto obligado de la normativa sobre medidas preventivas del blanqueo de capitales y del secreto profesional”, *La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario*, nº 20, 2005, pág. 41). El abogado no sólo está obligado a guardar secreto profesional en virtud de la normativa aludida: la propia ley preventiva en su artículo 22 impone al abogado “el deber de secreto profesional de conformidad con la legislación vigente”. Sobre la problemática del abogado como sujeto del delito de blanqueo, vid. ampliamente GONZÁLEZ CUÉLLAR SERRANO, N., “Blanqueo de capitales y secreto profesional del abogado (I)”, *Actualidad jurídica Aranzadi*, nº 546, septiembre 2002, págs. 3 y 4; id., “Blanqueo de capitales y secreto profesional del abogado (II)”, *Actualidad jurídica Aranzadi*, nº 547, octubre 2002, págs. 1 y ss.; ALFONSO LASO, D., *El abogado ante la comisión imprudente de blanqueo de capitales*, Diario La Ley, nº 7020, año XXIX, 25 sep. 2008, ref.ª D-269, pág. 1967; CÓRDOBA RODA, J., *Abogacía, secreto profesional y blanqueo de capitales*. Ed. Marcial Pons. Madrid, 2006, págs. 25 y ss.; id., “Abogacía, secreto profesional y blanqueo de capitales”, *I Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, págs. 49 y ss.; CORTÉS BECHIARELLI, E., “Protección del secreto profesional del abogado en España y ejercicio del derecho de defensa a la luz de las directivas 2001/97 y 2005/60 del Parlamento Europeo y del Consejo”, *Financiación del terrorismo, blanqueo de capitales y secreto bancario: un análisis crítico* (dir. José Luis González Cussac; coord. Antonio Fernández Hernández). Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2009, págs. 48 y ss.; id., “Secreto profesional del abogado y ejercicio del derecho de defensa a la luz de la Directiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo”, *Anuario de la Facultad de Derecho (Universidad de Extremadura)*, nº 21, 2003, págs. 158 y ss.; DOMINGUEZ PUNTAS, A., “Novedades en materia de la lucha contra el blanqueo de capitales”, (I, II, III y IV), *Actum fiscal*, nº 28 (junio de 2009) y nº 31 (septiembre de 2009).

importante límite frente a criterios meramente causales de atribución en coautoría o de extensión de la responsabilidad de la mano de la figura de la accesoriedad”. En estos casos, el sujeto obligado por la legislación preventiva puede normativamente confiar en que otros intervinientes, también sujetos a la misma norma, que hayan actuado antes que él hayan observado también debidamente sus deberes de prevención para conjurar el riesgo de realización de una operación de blanqueo. Salvo en el caso de que tenga constancia de que alguno de los “eslabones” de la cadena de sujetos obligados hayan dejado de tomar las medidas de prevención que le son impuestas, el sujeto podrá ampararse en su actuación bajo la cobertura del principio de confianza<sup>265</sup>.

Por su parte, tanto la doctrina como la jurisprudencia han apelado a otro corrector dogmático para restringir el tipo de blanqueo, *la prohibición de regreso*, si bien en muchos casos vinculando esta institución a la doctrina de los actos neutrales. En el apartado anterior pudimos comprobar que, para la doctrina mayoritaria, la figura dogmática de la que ahora nos ocupamos impide atribuir responsabilidad penal a quien crea una situación fáctica (primer sujeto) que permite a un tercero realizar un hecho delictivo, siempre que no actúe en connivencia con éste último, no se haya solidarizado con su plan delictivo y no sea garante de la evitación del proceso causal dañoso<sup>266</sup>. En parecidos términos se han pronunciado también algunas sentencias. Así, en la SAP Madrid 95/2002 (Sec. 15), de 19 de abril, se afirma que para poder afirmar la irrelevancia penal de la conducta del primer sujeto es preciso, por un lado, que exista un distanciamiento temporal entre el acto favorecedor y la ejecución posterior el hecho delictivo por el autor y, por otro, que la conducta del primer sujeto tenga “un sentido por sí misma socialmente adecuado, sin que presente de por sí connotaciones o significaciones específicamente delictivas”. En estos casos, aunque dicho actuar

---

<sup>265</sup> Si en el curso de un procedimiento penal en el que se imputa de forma conjunta a varios sujetos su participación en una operación de blanqueo, se observa que “el abogado, por ejemplo, constituye diversas sociedades con capital extranjero, para la ejecución de una operación inmobiliaria, podrá aquél ampararse en que tal dinero ya ha pasado el “filtro” bancario en cuanto a la prevención de blanqueo -el mismo podría extenderse incluso, dependiendo de la cantidad, a la Dirección General de Transacciones Exteriores-, es decir, podrá ampararse en el principio de confianza, igual que el Registrador de la Propiedad que finalmente inscribe el cambio de titularidad del bien inmueble en su registro puede ampararse en que todos los intervinientes anteriores en la operación se han comportado conforme a Derecho. (...) Pasado el primer eslabón de la cadena (los bancos) el resto de los actantes podrá ampararse en el principio de confianza sin mayores dificultades; sólo serían garantes (...) cuando el suceso en el que normativamente se podía confiar haya acaecido ya (...), es decir, cuando v.gr. resulte obvio que el empleado de banca no ha tomado las medidas de prevención que le impone la norma”. (Vid. SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, J., “Blanqueo de Capitales y abogacía: un necesario análisis crítico desde la teoría de la imputación objetiva”, op. cit., págs. 59 y 60; en idéntico sentido, OLIVA GARCÍA, H., “La defensa ante la acusación por blanqueo de dinero”, op. cit., págs. 31 y 32).

<sup>266</sup> Vid. JAKOBS, G., *Derecho Penal. Parte General. Fundamentos y teoría de la imputación*, op. cit., pág. 486.

“favorezca causalmente la ejecución de la acción delictiva del autor, no cabe subsumirla en el marco de la participación delictiva (...) a no ser, insistimos, que el tercero actué en connivencia y en solidaridad con el autor del delito”.

En materia de blanqueo, la prohibición de regreso impediría considerar típica cualquier conducta que pudiera favorecer en un sentido puramente fáctico a la materialización de un proceso de blanqueo en beneficio de un tercero (autor del delito principal), siempre y cuando aquélla tuviese en sí misma sentido, distinto al favorecimiento delictivo, y no se adaptase a un plan delictivo de reciclaje, y siempre que, en su caso, el sujeto observase las específicas cautelas que su rol le impone para no convertirse en instrumento para blanquear. En cualquier caso, como se ha dicho, para el tratamiento de estos supuestos, actualmente tanto la doctrina como la jurisprudencia suele acudir a la doctrina de los actos neutrales, categoría dogmática a través de la cual se suelen resolver los casos más problemáticos.

Puede afirmarse que, de todos los correctores dogmáticos que permiten la reducción axiológica del tipo, es la categoría de los *actos neutrales* la que mayor interés doctrinal y utilidad práctica ha demostrado en los últimos años. Da fe de ello la constante aparición de contribuciones doctrinales, no sólo en idioma alemán sino también en nuestro país. Tampoco son pocas las sentencias en las que el Alto Tribunal da respuesta a líneas de defensa basadas en esta doctrina, creando una jurisprudencia que va progresivamente enriqueciéndose.

Como vimos, se consideran actos neutrales aquellos comportamientos cotidianos, socialmente adecuados, que suelen desarrollarse conforme a patrones estandarizados, muchas veces en el seno de determinada actividad profesional o negocial, y que carecen de un sentido unívocamente delictivo (no se realizan en principio con fines delictivos, sino para satisfacer los intereses legítimos propios)<sup>267</sup>.

No puede afirmarse que la literalidad del artículo 301 CP excluya la relevancia penal de este género de conductas, cuando las mismas reúnen los elementos típicos ínsitos a alguna de las modalidades comisivas previstas en el precepto<sup>268</sup>. Dicho

---

<sup>267</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *Límites a la participación delictiva. Las acciones neutrales y la cooperación con el delito*, op. cit., pág. 3; ROBLES PLANAS, R., *La participación en el delito: fundamento y límites*, op. cit., pág. 33.

<sup>268</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 504.

precepto no incluye ninguna cláusula limitativa que permita extraer del tipo ninguna clase de comportamientos cotidianos, social o profesionalmente adecuados. Y ello porque, como ha afirmado PÉREZ MANZANO, el carácter neutral de una conducta no determina per se su atipicidad; es decir, “no puede excluirse con carácter general la tipicidad de *clases de acciones* ni tampoco la actividad estándar que en abstracto pueda considerarse inherente al ejercicio de una profesión”<sup>269</sup>. Será necesario, por tanto someter a valoración si la conducta que en principio puede considerarse neutral reúne determinadas condiciones para que pueda afirmarse, en ese caso concreto, su irrelevancia penal. La doctrina mayoritaria, como sabemos, afirma que ello ha de decirse en el primer estadio de la imputación objetiva, en el que se ha de determinar si el acto concreto ha creado un peligro jurídicamente desaprobado o si por el contrario se ha mantenido dentro de los límites del riesgo permitido.

De acuerdo con este juicio valorativo, tanto la doctrina como la jurisprudencia consideran que los actos neutrales se considerarán atípicos, siempre que no representen peligro alguno de realización de un tipo delictivo, en nuestro caso, el blanqueo de capitales. Como primera exigencia, por tanto, es preciso que el acto en principio neutral no sobrepase el riesgo permitido que marca el rol de quien lo realiza o el sector de actividad en que aquél se inserta<sup>270</sup>. Dicho de otra forma, la conducta sometida a valoración no ha de crear o aumentar de forma relevante el riesgo de que a través de la misma se enmascare el origen delictivo del bien sobre el que se opera o de que contribuya a la reintegración de dicho bien en el circuito económico. Sólo en estos casos, el acto podrá considerarse neutral y podrá afirmarse su irrelevancia penal, aun cuando haya contribuido fácticamente a la producción de un resultado de blanqueo.

En aquellos casos en los que la conducta se desarrolla en un ámbito sectorial sometido a reglas de conducta, dichas reglas determinarán, en gran medida, el ámbito de riesgo permitido, especialmente cuando están formalizadas jurídicamente<sup>271</sup>. Cuando la

---

<sup>269</sup> Vid. PÉREZ MANZANO, M., “Neutralidad delictiva y blanqueo de capitales: el ejercicio de la abogacía y la tipicidad del delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 173.

<sup>270</sup> Vid. ROBLES PLANAS, R., *La participación en el delito: fundamento y límites*, op. cit., pág. 185; BLANCO CORDERO, I., *Límites a la participación delictiva. Las acciones neutrales y la cooperación con el delito*, op. cit., págs. 147, 148 y 155; MIRÓ LLINARES, F., “Intervención en actividades económicas ilícitas y conductas ¿neutras?”, op. cit., págs. 72 y 73.

<sup>271</sup> Como ha afirmado PÉREZ MANZANO, cuando las reglas de conducta están formalizadas jurídicamente, el legislador ha tomado partido de forma expresa sobre la definición del ámbito del riesgo permitido y los límites que este adquiere en el marco del desarrollo de la actividad que regule. (“Los Derechos Fundamentales al ejercicio de la profesión de abogado, a la libre elección de abogado y a la defensa y las “conductas naturales”. La Sentencia del Tribunal Constitucional Alemán de 30 de marzo de 2004”, op. cit., pág. 819).

conducta del sujeto se adecúa al rol o estándar determinado por las normas a las que se encuentra vinculado, existe “cierta presunción de juridicidad” en su actuación<sup>272</sup>, cierta presunción de que ha respetado los límites de riesgo permitido que le son impuestos. En el ámbito del blanqueo, como hemos visto, existe una legislación administrativa que precisamente regula las cautelas que han de observarse en determinados sectores y por ciertos profesionales cuya actividad es especialmente idónea para blanquear capitales. El cumplimiento de la normativa -insistimos, de carácter preventivo- aportará como punto de partida, significativos indicios de que el sujeto -cuando esté vinculado a la norma- ha respetado el nivel de riesgo tolerable a efectos penales. Sin embargo, de acuerdo con PÉREZ MANZANO, la adecuación profesional de la conducta a los estándares definidos normativamente no determina de forma automática que dicha conducta se circunscriba a los límites del riesgo permitido definidos para esa actividad concreta<sup>273</sup>. La doctrina y la jurisprudencia coinciden -si bien con diferentes matices- en que es preciso determinar si el acto en principio neutral tiene o no, desde la perspectiva objetiva, significado o sentido claramente delictivo<sup>274</sup>. Han de ser tenidas especialmente en cuenta las circunstancias del contexto en que se inserta la conducta, formalmente subsumible en el tipo de blanqueo, para decidir si tiene verdaderamente sentido propio, respondiendo a criterios de utilidad para quien la realiza, con independencia del fin delictivo, o si por el contrario, la actividad *a priori* lícita sólo sirve de cobertura para posibilitar (fin último) el enmascaramiento de las ganancias procedentes de un hecho delictivo o su retorno disimulado al circuito financiero legal.

Además del sentido o significado delictivo de la conducta, para un relevante sector doctrinal también ha de tenerse en cuenta si el autor del hecho tiene “deberes

---

<sup>272</sup> Vid. PÉREZ MANZANO, M., “Neutralidad delictiva y blanqueo de capitales: el ejercicio de la abogacía y la tipicidad del delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 175.

<sup>273</sup> En efecto, afirma la autora, no existen razones para excluir radicalmente como hipótesis de blanqueo la actuación de los sujetos vinculados a la normativa preventiva: “cualquier conducta realizada en el marco de una actividad profesional socialmente lícita puede perder su carácter neutral, esto es, su significado inocuo para el Derecho, y adquirir un claro sentido delictivo en función del contexto en que se inserta”. (Ibidem, pág. 178).

<sup>274</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *Límites a la participación delictiva. Las acciones neutrales y la cooperación con el delito*, op. cit., pág. 3; ROBLES PLANAS, R., *La participación en el delito: fundamento y límites*, op. cit., págs. 303 y ss.; id., “Las conductas neutrales en el ámbito de los delitos fraudulentos. Espacios de riesgo permitido en la intervención en el delito”, op. cit., pág. 60; FEIJÓO SÁNCHEZ, B., “Imputación objetiva en el Derecho penal económico y empresarial: Esbozo de una teoría general de los delitos económicos”, op. cit., págs. 41 y ss.; PÉREZ MANZANO, M., “Los Derechos Fundamentales al ejercicio de la profesión de abogado, a la libre elección de abogado y a la defensa y las “conductas naturales”. La Sentencia del Tribunal Constitucional Alemán de 30 de marzo de 2004”, op. cit., pág. 824; id., “Neutralidad delictiva y blanqueo de capitales: el ejercicio de la abogacía y la tipicidad del delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 180; SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, J., “Blanqueo de Capitales y abogacía: un necesario análisis crítico desde la teoría de la imputación objetiva”, op. cit., pág. 72. Asimismo, SSTs 338/2015, de 2 de junio, 877/2014, de 22 de diciembre, 157/2014, de 5 de marzo, y 974/2012, de 5 de diciembre, entre otras muchas.

especiales” (que fundamenten una posición de garantía referida a la evitación, en este caso, de un resultado de blanqueo)<sup>275</sup>. En esta dirección interpretativa, SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, siguiendo la línea dogmática de su maestro, ha afirmado la neutralidad de aquellos actos que “queden cubiertos por el rol lícito en que se interactúa”<sup>276</sup>. Para el autor, el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los sujetos obligados por la normativa preventiva del blanqueo determinará el carácter neutral de la conducta y con ello su atipicidad. Sólo cuando en los supuestos en los que, desde una perspectiva estrictamente objetiva, “exista un “sentido per se delictivo” o unívoco y no ambivalente”, podrá afirmarse que el autor se ha apartado de su rol social y que su conducta es típica<sup>277</sup>.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo sigue, en general, la línea doctrinal a la que hemos hecho referencia en páginas anteriores, con la particularidad de asignar una especial relevancia al conocimiento del sujeto. Según la jurisprudencia mayoritaria, si la conducta sometida a valoración tiene un sentido objetivamente delictivo y ello es conocido por su autor, pierde el carácter neutral y entra en el ámbito de la tipicidad (STS 974/2012, de 5 de diciembre). En el caso del blanqueo, dejarán de ser penalmente neutrales aquellos actos cotidianos o profesionalmente adecuados que, pese a ser *a priori* inocuos y lícitos, revelen claramente, de acuerdo con las circunstancias y el contexto en que se inserten, que están dirigidos a ocultar o distraer el origen delictivo de un bien o unos activos, o a integrarlos en los cauces financieros normalizados. De acuerdo con las SSTS 487/2014, de 9 de junio, y 91/2014, de 7 de febrero, ello ocurrirá en los casos en los que el autor exteriorice un fin delictivo manifiesto, claro y unívoco, cuando aquél supere los límites del rol social o profesional en los que se ubica su conducta, o cuando, de acuerdo con las circunstancias y el contexto, su conducta se ajuste claramente a un fin legitimador, de tal forma que la única finalidad objetivamente concebible del acto sea posibilitar el retorno encubierto al circuito legal de capitales de procedencia delictiva. Así, no se consideró por ejemplo un acto neutral la construcción de una serie de inmuebles financiados por fondos cuyo origen delictivo era conocido por el constructor, y cuyo pago se encauzaba a través de una sociedad interpuesta (STS 943/2013, de 11 de diciembre). Tampoco se consideró “profesionalmente adecuado” el

---

<sup>275</sup> Vid. ROBLES PLANAS, R., *La participación en el delito: fundamento y límites*, op. cit., pág. 112.

<sup>276</sup> Vid. SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, J., “Blanqueo de Capitales y abogacía: un necesario análisis crítico desde la teoría de la imputación objetiva”, op. cit., pág. 65.

<sup>277</sup> *Ibidem*, pág. 68.



asesoramiento pretendidamente profesional de un abogado que creó diversos entramados societarios en un territorio no cooperante al que se canalizaban fondos que luego eran reinvertidos en sociedades e inmuebles a nombre de familiares del cliente. En la STS 974/2012 de 5 de diciembre se condenó al profesional acusado, toda vez que participó en operaciones especialmente idóneas para blanquear dinero de origen delictivo sin extremar las cautelas necesarias que impidiesen que su actividad instrumentalizase importantes operaciones de blanqueo (el profesional actuó fuera del riesgo permitido). En sentido similar, en la STS 91/2014, de 7 de febrero, tampoco se consideró neutral la conducta de la hija de unos traficantes de droga, a cuyo nombre se ponían sistemáticamente fondos de inversión de altísimo importe, numerosos inmuebles y vehículos de gran valor pero utilizados por su padre. En la Sentencia (condenatoria) se declara que la proximidad familiar de la acusada “le permitía conocer que sus padres estaban procediendo a reconvertir importantes cantidades de dinero procedentes del narcotráfico en bienes muebles, inmuebles y productos financieros, con la evidente finalidad de ocultar su procedencia. En el marco de la conducta de sus padres, que exterioriza una manifiesta finalidad delictiva, la recurrente aportó su colaboración para facilitar el tránsito de las ganancias procedentes del narcotráfico desde su condición inicial de dinero en metálico hasta su transformación en inmuebles o en productos financieros, como fondos de inversión, aceptando que los bienes resultantes se pusiesen a su nombre para facilitar la ocultación de su origen delictivo. Con lo cual, llevó a cabo una conducta que contribuía a facilitar la lesión del bien jurídico y se ejecutó directamente un acto de blanqueo”.

#### **4.1.6. CONCLUSIONES**

La actual configuración legal del delito de blanqueo de capitales determina un ámbito objetivo sin duda exorbitante. El tenor literal del precepto admite la incriminación de conductas muy alejadas de lo que es el fenómeno que pretende incriminar<sup>278</sup>. Ello hace preciso una reducción teleológica del tipo por cuya virtud sólo queden abarcadas por el mismo aquellas conductas previstas en el precepto que sean aptas para ocasionar la efectiva lesión o puesta en peligro de los intereses que conforman el bien jurídico protegido, el orden socioeconómico. Para lograr dicho

---

<sup>278</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 640.

propósito, resultan de gran utilidad diversos institutos dogmáticos de carácter normativo que contribuyen a excluir del tipo comportamientos que, siendo formalmente subsumibles en el tenor literal de la norma, no poseen relevancia penal por no ser idóneos para crear ocasiones de riesgo penalmente reprochable en los intereses socioeconómicos que la norma está llamada a proteger.

La doctrina moderna prácticamente ha abandonado obsoletas concepciones naturalísticas del tipo vigentes en épocas pasadas. Desde hace décadas aquéllas han ido siendo progresivamente sustituidas por criterios de imputación fundamentados en principios normativos, hoy día admitidos en general por la doctrina e invocados con frecuencia por nuestros tribunales. En el ámbito del blanqueo de capitales, tanto la teoría general de la imputación objetiva como otros institutos normativos que hemos estudiado se perfilan como eficaces mecanismos para descartar la propia tipicidad objetiva de determinados comportamientos que, pese a encajar en la literalidad del artículo 301 CP y haber podido contribuir causalmente a la materialización de una operación de lavado, no son objetivamente imputables a su autor<sup>279</sup>, bien porque no han generado un riesgo jurídicamente relevante para que se produzca el hecho penalmente lesivo, bien porque dicha lesión no ha supuesto la realización del riesgo generado por el comportamiento.

Además de la teoría general de la imputación objetiva, otras categorías dogmáticas también de carácter normativo -la prohibición de regreso, el principio de confianza, y la doctrina de los actos neutrales, principalmente- permiten, bajo ciertos requisitos, descartar la tipicidad objetiva de aportaciones meramente causales a resultados de blanqueo y, con ello, excluir su relevancia penal. Al margen de las propias especificidades de cada una de los institutos referidos, en general en todos ellos se precisa que la conducta tenga en sí misma un sentido socialmente adecuado; esto es, que no tenga sentido delictivo, para lo cual resulta imprescindible que el agente adecúe su conducta a un rol y se mueva dentro de los márgenes de riesgo permitido que dicha posición le exige.

De entre todas las figuras dogmáticas referidas, es en la actualidad la doctrina de los actos neutrales la que mayor interés ha suscitado en ciencia penal y la que mayor

---

<sup>279</sup> Vid. GIMBERNAT ORDEIG, E., “A vueltas con la imputación objetiva, la participación delictiva, la omisión impropia y el Derecho penal de la culpabilidad”, op. cit., pág. 36.

incidencia práctica ha demostrado, al menos en cuanto a su aplicación jurisprudencial. Se consideran actos neutrales aquellos comportamientos cotidianos, socialmente adecuados, que suelen desarrollarse conforme a patrones estandarizados, muchas veces en el seno de determinada actividad profesional o negocial, y que carecen de un sentido unívocamente delictivo (no se realizan en principio con fines delictivos, sino para satisfacer los intereses legítimos propios)<sup>280</sup>. Si bien *a priori* los actos neutrales pueden tener encaje en el tipo de blanqueo -no existe ninguna cláusula en el artículo 301 CP que excluya su subsunción en el tipo penal-<sup>281</sup>, puede descartarse la relevancia penal de dichas conductas cuando, quien las realiza no sobrepase el riesgo permitido (que marca el rol o el sector de actividad en que aquél actúa) de que a través de las mismas se enmascare el origen delictivo del bien sobre el que se opera o de que contribuyan a la reintegración de dicho bien en el circuito económico.

Cuando la conducta del sujeto se adecúa al rol o estándar determinado por las normas a las que se encuentra vinculado -como es el caso de los sujetos sometidos a la normativa de prevención del blanqueo-, existe cierta presunción de que la conducta *a priori* neutral ha respetado los límites de riesgo permitido que le son impuestos<sup>282</sup>. Sin embargo, han de ser tenidas especialmente en cuenta las circunstancias del contexto en que se inserta la conducta para decidir si tiene verdaderamente sentido propio, respondiendo a criterios de utilidad para quien la realiza -con independencia de un fin delictivo- o si, por el contrario, su sentido es unívocamente delictivo, esto es, sólo sirve de cobertura para posibilitar (fin último) el enmascaramiento de las ganancias procedentes de un hecho delictivo o su retorno disimulado al circuito financiero legal.

Únicamente cuando, de acuerdo con las circunstancias del contexto en que se inserte, el acto cotidiano o la conducta social o profesionalmente adecuada no tenga un sentido clara y unívocamente delictivo, podrá afirmarse su atipicidad. En caso contrario, perderá su carácter neutral y será penalmente relevante.

---

<sup>280</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *Límites a la participación delictiva. Las acciones neutrales y la cooperación con el delito*, op. cit., pág. 265; ROBLES PLANAS, R., *La participación en el delito: fundamento y límites*, op. cit., pág. 33.

<sup>281</sup> Vid. PÉREZ MANZANO, M., “Neutralidad delictiva y blanqueo de capitales: el ejercicio de la abogacía y la tipicidad del delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 173.

<sup>282</sup> *Ibidem*, pág. 175.

## **4.2. EL BLANQUEO POR OMISIÓN**

### **4.2.1. INTRODUCCIÓN**

En algunas ocasiones, la imputación de un delito de blanqueo trae causa en conductas omisivas. Es frecuente que ello ocurra en los supuestos en los que un sujeto vinculado a la ley de prevención del blanqueo, incumpla (deje de realizar) alguna de las obligaciones que la normativa preventiva le impone. En este apartado se analizará si es posible la realización del delito de blanqueo a través de comportamientos omisivos, así como, de ser jurídicamente plausible, qué modalidades comisivas admiten tal posibilidad y bajo qué requisitos.

Si bien la doctrina afirma en general la posibilidad de que el delito de blanqueo se realice a través de conductas omisivas, no existe consenso respecto a los requisitos que dicha forma conductual exige, ni tampoco respecto a qué modalidades típicas la admiten. Gran parte de los autores se limitan a admitir el blanqueo por omisión, sin entrar en más detalle, y muchos de ellos afirman que estos supuestos adquieren relevancia penal a través de la fórmula de la comisión por omisión, sin valorar los requisitos que esta categoría dogmática precisa.

Para dar respuesta a la cuestión principal del estudio que aquí se propone, esto es, si el blanqueo de capitales puede o no realizarse a través de comportamientos omisivos, hemos de comenzar distinguiendo las diferentes modalidades en que se pueden presentar los delitos omisivos (la omisión pura o propia y la comisión por omisión u omisión impropia), y determinar qué condiciones precisan una y otra. Dicho análisis nos permitirá concluir que el delito de blanqueo no puede constituir un supuesto de omisión propia, de tal modo que la contribución a un resultado de blanqueo mediante conductas omisivas sólo podrá incriminarse a través de la cláusula de equivalencia contenida en el artículo 11 CP, que prevé bajo qué requisitos un comportamiento omisivo puede ser penado de la misma manera que la “causación activa” de un resultado penalmente relevante.

Situados en el ámbito de la omisión impropia, se indagará qué formas comisivas, de entre las previstas en el artículo 301 CP, admiten ser sancionadas en comisión por

omisión, y se abordará el análisis de los requisitos que han de estar presentes para que un blanqueo omisivo pueda ser punible.

#### **4.2.2. ACCIÓN Y OMISIÓN. OMISIÓN PURA Y COMISIÓN POR OMISIÓN. CONFIGURACIÓN DE LA OMISIÓN EN EL DELITO DE BLANQUEO**

El delito, como cualquier otra forma de conducta humana, puede presentarse tanto a modo de acción positiva como en forma omisiva. Ambas pueden ser conductas penalmente relevantes, tal y como señala el artículo 10 CP. El significado normológico de los delitos de acción y la de los delitos de omisión es, no obstante, diferente: los primeros, mediante conductas positivas *-acción-*, consideradas indeseables por su nocividad, infringen normas prohibitivas. Los delitos de omisión, en cambio, obligan a la realización de determinada conducta para salvaguardar determinados bienes jurídicos, y su incumplimiento *-omisión-* supone la infracción de una norma preceptiva<sup>283</sup>. En los delitos de omisión, por tanto, no se exige una pasividad física del autor, sino la realización de una conducta distinta a la ordenada por la norma<sup>284</sup>, ya consista ésta en una acción o en una omisión. A primera vista, pocas dificultades ofrecería la distinción entre delitos de acción y delitos de omisión, atendiendo a la conducta que el verbo típico describe. Sin embargo, la distinción entre acción y omisión no siempre es tan nítida, y en ocasiones depende de la concreta formulación del tipo de la que el legislador se haya servido<sup>285</sup>. Claro ejemplo son los delitos que incriminan “la producción de un resultado” pero no hacen referencia en la mayoría de las ocasiones a la conducta concreta por virtud de la cual dicho resultado puede alcanzarse: si mediante una acción –lo cual no se discute-, o también mediante comportamientos omisivos. Es en este aspecto en el que se centra el debate fundamental referido a la *comisión por omisión*: si los comportamientos omisivos, no mencionados en los tipos prohibitivos de resultado de

---

<sup>283</sup> Vid. MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, 9ª ed., op. cit., pág. 317; KAUFMANN, A., *Dogmática de los delitos de omisión*. Traducción de la segunda edición alemana (Gottinga, 1980). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2006, pág. 25; MAQUEDA ABREU, Mª. L., *Derecho Penal. Parte General*. (dir. J. María Zugaldía Espinar). Ed. Tirant lo Blanch, 2ª edición, Valencia, 2.004, pág. 796.

<sup>284</sup> Vid. MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, 9ª ed., op. cit., pág. 316; RODRÍGUEZ MESA, M. J., *La atribución de responsabilidad en comisión por omisión*. Ed. Aranzadi. Cizur Menor, 2005, págs. 28 y ss.

<sup>285</sup> Vid. CUADRADO RUIZ, Mª. A., “La comisión por omisión como problema dogmático”, ADPCP, L, 1997, pág. 389.

forma expresa, pueden subsumirse en éstos junto a los comportamientos activos, y de ser así, en qué supuestos y bajo qué condiciones<sup>286</sup>.

Del mismo modo que las normas penales prohibitivas pueden ordenar la no realización de determinada conducta o prohibir la producción de su resultado, las normas preceptivas pueden establecer un deber general de actuar ante determinada situación, o bien un deber de evitar determinado resultado. En el primer caso, estaremos ante los delitos de omisión pura o propia y, en el segundo, ante los delitos de comisión por omisión u omisión impropia<sup>287</sup>. Ambas formas delictivas comparten que la conducta que sancionan está constituida por una omisión, pero como ya se habrá advertido, las consecuencias penales asociadas a cada una de ellas son considerablemente diferentes: si en los delitos de comisión por omisión se atribuye -bajo ciertos presupuestos- la responsabilidad penal por el resultado no evitado (del mismo modo que si éste se hubiera producido activamente), en delitos de omisión propia el omitente responderá únicamente por no haber realizado la acción exigida, y en ningún caso por el eventual resultado que la norma preceptiva trata de evitar<sup>288</sup>.

---

<sup>286</sup> Vid. SÁNCHEZ TOMÁS, J. M., *Comisión por omisión y omisión de socorro agravada*. Bosch, 1ª ed., Barcelona, 2.005, págs. 23 y 24.

<sup>287</sup> Aunque la generalidad de la doctrina emplea ambas combinaciones terminológicas, hay autores como ARMIN KAUFMANN que reservan la distinción entre omisión propia e impropia para diferenciar aquellos delitos de omisión que están tipificados expresamente (omisión propia) de los que no lo están (omisión impropia). (*Dogmática de los delitos de omisión*, op. cit., pág. 108). Es por ello que un relevante sector doctrinal (RODRÍGUEZ MOURULLO, SILVA SÁNCHEZ y MIR PUIG, entre otros autores) considera preferible la distinción de ambas formas omisivas mediante las expresiones de omisión pura y comisión por omisión. (Vid. RODRÍGUEZ MOURULLO, G., “La cláusula general sobre la comisión por omisión”, *Política Criminal y Reforma Penal. Homenaje a la memoria del Profesor Dr. D Juan del Rosal*, Ed. Edersa, 1993, pág. 905; id., “Nuevas reflexiones sobre la cláusula general de la comisión por omisión”, *Estudios de Derecho Penal Económico*. Ed. Civitas. Cizur Menor, 2009, págs. 302 y ss.; SILVA SÁNCHEZ, J. M., *El delito de omisión. Concepto y sistema*, op. cit., pág. 398; MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, 9ª ed., op. cit., pág. 299).

<sup>288</sup> Vid. GIMBERNAT ORDEIG, E., “La omisión impropia en la dogmática penal alemana. Una exposición”, ADPCP, LIII, 1997, pág. 11. Como puede verse, nuestra exposición contempla la tradicional clasificación bipartita de los delitos de omisión. Se ha de indicar, no obstante, que otro importante sector doctrinal ha propuesto una clasificación tripartita, añadiendo una nueva modalidad de gravedad intermedia que se situaría entre la comisión por omisión y la omisión pura. Para SILVA SÁNCHEZ, las “omisiones puras de garante”, siendo más graves que las omisiones “puras estándar”, se caracterizan por no alcanzar un título de imputación suficiente para atribuir la responsabilidad por resultado lesivo al bien jurídico al omitente, que aquí también aparece como sujeto cualificado. Estas omisiones “no alcanzan el desvalor propio de la comisión activa, ni puede afirmarse que sean idénticas, en el plano estructural y material, con ésta”, por lo que no “puede afirmarse que sean omisiones equivalentes, según el sentido del texto de la ley, a la comisión activa”. En cualquier caso, el autor considera recomendable que las omisiones puras de garante estén tipificadas expresamente como categoría intermedia para evitar “cualquier posible tendencia a una extensión de la comisión por omisión”. Paradigma de esta tipología de gravedad intermedia es el delito de omisión de socorro cualificado del art. 195.3 CP que sanciona la omisión de socorro cuando “la víctima lo sea por accidente ocasionado fortuitamente por el que omitió el auxilio”. (“Política criminal y reforma legislativa en la comisión por omisión. (El artículo 10 del Proyecto del Código penal de 1.992)”, *Política Criminal y Reforma Penal. Homenaje a la memoria del Profesor Dr. D Juan del Rosal*, Ed. Edersa. Madrid 1993, págs. 1.084 y 1085. Con detalle, id., *El delito de omisión. Concepto y sistema*, op. cit., págs. 422 y ss. También RODRÍGUEZ MOURULLO es partidario de

En los *delitos de omisión pura*, la tipicidad se agota en la no realización de la acción exigida en la situación descrita en el tipo penal<sup>289</sup>. La conducta típica consiste en la mera infracción del mandato de acción previsto genéricamente en la norma, de modo que la producción del resultado lesivo que la norma pretende conjurar es, a efectos típicos, irrelevante<sup>290</sup>.

MIR PUIG ha cifrado tres elementos como integradores del tipo objetivo en los delitos de omisión pura, a saber: la descripción de una situación típica, ante la cual se obliga con carácter general a todo sujeto a actuar; la ausencia de realización de la acción ordenada; y, por último, la capacidad personal de realizar dicha acción por parte del autor, concurriendo en él las condiciones externas y personales para poder realizarla<sup>291</sup>.

Los delitos de omisión pura aparecen siempre tipificados en la ley penal “de un modo directo mediante expresiones de significado inequívocamente omisivo”<sup>292</sup>.

Por su parte, los delitos de *comisión por omisión* están definidos por una norma que prohíbe no la realización de una acción, sino la producción de un resultado lesivo para un bien jurídico<sup>293</sup>. En estos delitos generalmente no se definen los medios activos u omisivos<sup>294</sup>, sino que incorporan mandatos específicos de evitar la producción del resultado descrito en el tipo penal, y no dirigidos a todas las personas, sino sólo a aquellas que, por guardar una especial relación con el bien jurídico protegido, la norma considera garantes de su indemnidad. Precisan, por tanto como elemento típico, y diferencia de los delitos de omisión pura, la producción de un resultado de lesión o peligro para el bien jurídico llamado a ser tutelado por el tipo. De dicho resultado sólo

---

una clasificación tripartita, pero en términos diferenciados. Para el autor, ha de distinguirse entre los *delitos de mera omisión*, como aquellos cuyo tipo describe una conducta omisiva, y para el que es indiferente que el resultado se haya o no impedido; los *delitos de omisión y resultado*, que son aquellos “en cuyo tipo a una determinada conducta omisiva se anuda, como su consecuencia, un cierto resultado”; y los *delitos impropios de omisión*, aquellos “cuyo tipo, sin describir expresamente una omisión, tiene el sentido de prohibir todas aquellas conductas, activas u omisivas, que conlleven la producción de determinado resultado”. (“La cláusula general sobre la comisión por omisión”, op. cit., págs. 907 y 908).

<sup>289</sup> Vid. GRACIA MARTÍN, L., “Los delitos de comisión por omisión. (Una exposición crítica de la doctrina dominante), *Modernas tendencias en la ciencia del derecho penal y en la criminología*. UNED. 1ª edición, Madrid, 2001, pág. 418.

<sup>290</sup> Vid. MAQUEDA ABREU, Mª. L., *Derecho Penal. Parte General*, op. cit., págs. 799 y 802.

<sup>291</sup> Vid. MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, 9ª ed., op. cit., pág. 322.

<sup>292</sup> Vid. GRACIA MARTÍN, L., “Los delitos de comisión por omisión. (Una exposición crítica de la doctrina dominante)”, op. cit., pág. 418; MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, 9ª ed., op. cit., pág. 319.

<sup>293</sup> Vid. BACIGALUPO ZAPATER, E., *Delitos impropios de omisión*. Ed. Dykinson. Madrid, 2005, pág. 118.

<sup>294</sup> Vid. RODRÍGUEZ MOURULLO, G., “Nuevas reflexiones sobre la cláusula general de la comisión por omisión”, op. cit., pág. 302.

podrá ser responsable, el omitente-garante, bajo determinadas circunstancias<sup>295</sup>. La punición de la comisión por omisión tiene lugar a través de la “cláusula general de equivalencia”<sup>296</sup> prevista en la Parte General del Código Penal, en su artículo 11. Dicho precepto impone a ciertos sujetos, por su especial relación con el bien jurídico protegido por la norma, la obligación de evitar el resultado de lesión o peligro de dicho bien jurídico; y considera, bajo ciertos presupuestos, la no evitación de ese resultado *-omisión-* como *equivalente a su producción activa*. De acuerdo con el artículo 11 CP,

Los delitos que consistan en la producción de un resultado sólo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación. A tal efecto se equipará la omisión a la acción:

- a) Cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar.
- b) Cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente.

Nuevamente, tomaremos como referencia el Tratado de Parte General de MIR PUIG para definir los elementos que integran el tipo objetivo de esta tipología delictiva. Según el autor, éste mantiene una estructura semejante a los delitos de omisión pura, pero añadiendo a los tres elementos que definían el tipo objetivo de aquella (situación típica, ausencia de acción y capacidad de realizarla) otros tres que son “necesarios para la imputación objetiva del hecho”: la posición de garante, la producción del resultado típico y la posibilidad del omitente-garante de evitarlo<sup>297</sup>. Para algunos autores, además,

<sup>295</sup> Como desarrollaremos más adelante, fundamenta esta equiparación la correspondencia valorativa que existe entre la omisión que no evita el resultado y su producción por una conducta activa que tiene lugar, bajo ciertas exigencias, por virtud del artículo 11 CP.

<sup>296</sup> Vid. HUERTA TOCILDO, S., *Principales novedades de los delitos de omisión en el Código Penal de 1.995*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, pág. 47.

<sup>297</sup> Vid. MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, 9ª ed., op. cit., pág. 324. Además, como exigencias de la tipicidad subjetiva, el dolo habrá de abarcar no sólo la ausencia de la acción debida y la posibilidad y necesidad de evitar el resultado, sino también la situación que fundamenta la especial obligación de evitar el resultado del sujeto. El error sobre la posición de garante no constituiría error de tipo, sino error de prohibición, en tanto que la falta de conciencia del sujeto de su especial deber se refiere al significado antijurídico del hecho. (Ibidem, pág. 337). Con detalle, BACIGALUPO ZAPATER, E., *Delitos impropios de omisión*, op. cit., págs. 123-127. En similares términos, la Sala Segunda ha establecido que en la comisión impropia dolosa, “el agente ha de conocer “las circunstancias que generan su deber (la posición de garante y el peligro de producción del resultado en los delitos impropios de omisión) y su propia capacidad de acción para evitar el resultado, ha omitido dolosamente”. En la modalidad imprudente, el tipo subjetivo precisa que el omitente, “por no emplear el cuidado debido”, no haya tenido conocimiento “de la situación de hecho que genera su deber de actuar o de su capacidad para realizar la acción impuesta como necesaria para evitar el resultado”, o que el obligado a realizar la acción no logre impedir el resultado “por la forma descuidada o inadecuada en la que ejercita dicha acción por la que intenta dar cumplimiento al deber de garantía.”



es preciso que exista una identidad valorativa o estructural entre la no evitación del resultado típico y su causación activa, la equivalencia “según el sentido del texto de la ley” a la que hace referencia el artículo 11 del Código. Sobre esta cuestión volveremos en las páginas siguientes.

Cabe la posibilidad de que los delitos comisión por omisión estén expresamente regulados. Esto ocurre cuando, en los delitos prohibitivos de resultado, el legislador prevé expresamente junto a la acción típica una omisión determinada, atribuyendo a ambas conductas la misma significación penal. No obstante, la mayoría de los delitos de comisión por omisión no aparecen regulados legalmente. Lo habitual es que, en los tipos de resultado, la conducta típica queda descrita por verbos en cuyo tenor literal se dé cabida a comportamientos activos (el que matare, el que lesionare...) y que las conductas omisivas se entiendan implícitas. La subsunción de estas últimas en la norma se fundamentará entonces mediante los criterios de equivalencia de la comisión por omisión de conformidad con lo previsto en el artículo 11 CP<sup>298</sup>.

Definidos de este modo los delitos de omisión pura y de comisión por omisión, el siguiente paso es determinar si cabe el blanqueo de capitales omisivo, bien como delito de omisión pura o por aplicación de la cláusula de equivalencia prevista en el artículo 11 CP.

Hemos de partir de que la configuración típica del blanqueo, según el tenor literal del precepto, no incluye en ninguna de las formas comisivas un mandato de acción positivo expresamente previsto, de tal modo que ha de descartarse la posibilidad de que cualquiera de las formas comisivas que conforman el tipo integre una omisión pura. Descartada esta posibilidad<sup>299</sup>, resta por analizar si es posible la incriminación de conductas omisivas de blanqueo en comisión por omisión. Como hemos visto, el artículo 11 del Código penal, que regula esta institución dogmática, prevé como ámbito de aplicación exclusivo “los delitos que consistan en la producción de un resultado”<sup>300</sup>.

---

<sup>298</sup> Vid. MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, 9ª ed., op. cit., pág. 319.

<sup>299</sup> En contra de esta opinión, BLANCO CORDERO estima que la omisión en el ámbito de los actos indeterminados dirigidos a los fines de ocultar, encubrir o ayudar previstos en el segundo inciso del artículo 301.1 integraría un supuesto de omisión pura. (*El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed. op. cit., págs. 510 y 511).

<sup>300</sup> Creemos con LANDECHO VELASCO que el empleo en el precepto de la expresión “sólo se entenderán cometidos...” es suficientemente expresivo de que es voluntad del legislador que el operador jurídico haga un empleo restringido de la fórmula de la comisión por omisión. (*Derecho Penal. Parte General*, op. cit., pág. 282). También la doctrina mayoritariamente ha descartado que la comisión por omisión extienda su ámbito de

De acuerdo con esta disposición, sólo aquellas modalidades comisivas de blanqueo que se estructuren como un delito de resultado material<sup>301</sup> podrán ser inculadas en comisión por omisión cuando se realicen a través de conductas omisivas.

Como vimos en otro apartado de este trabajo<sup>302</sup>, el delito doloso de blanqueo se estructura en tres modalidades comisivas diferenciadas. Por un lado, el primer inciso del artículo 301.1 CP contiene cinco conductas expresamente previstas (la adquisición, la posesión, la utilización, la conversión y la transmisión de bienes, con conocimiento de su origen delictivo y con independencia de las finalidades a que vayan dirigidas). El segundo inciso de dicho precepto contiene otra modalidad diferenciada: la realización de cualquier acto sobre los bienes de ilícito origen con la intención de ocultar, encubrir o ayudar. Y por último, el artículo 301.2 contiene una tercera modalidad comisiva: “la ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos, a sabiendas de que proceden de alguno de los delitos expresados en el apartado anterior o de un acto de participación en ellos”.

Las modalidades típicas consistentes en adquirir, convertir y transmitir los bienes de origen delictivo se configuran como un delito de resultado<sup>303</sup>, pues, respecto de ellas, el precepto no describe los medios comisivos, sino que se limita a prohibir que a través del comportamiento se produzca la efectiva adquisición, conversión o transmisión de los bienes de origen delictivo. La consumación de las modalidades de posesión y utilización se ve colmada mediante la mera infracción del mandato prohibitivo previsto en la norma, sin que sea preciso que a la acción se asocie ningún resultado (al margen de la muy discutible afección al bien jurídico); por ello estas formas de conducta conforman delitos de mera actividad. Por su parte, la fórmula prevista en el segundo inciso del precepto (realización de cualquier otro acto con los fines de ocultar, encubrir o ayudar), conforma un delito de resultado cortado, caracterizado, como vimos, por no precisar la verificación de un resultado pero sí la

---

aplicación a los delitos de mera actividad. (Vid., por todos, SILVA SÁNCHEZ, J. M., *El delito de omisión. Concepto y sistema*, op. cit., págs. 439 y ss.; RODRÍGUEZ MOURULLO, G., “Nuevas reflexiones sobre la cláusula general de la comisión por omisión”, op. cit., págs. 301-307; DOPICO GÓMEZ-ALLER, J., *Omisión e injerencia en derecho penal*. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2006, pág. 702).

<sup>301</sup> Vid. RODRÍGUEZ MOURULLO, G., “Nuevas reflexiones sobre la cláusula general de la comisión por omisión”, op. cit., págs. 306 y 307.

<sup>302</sup> Vid. *supra*, Capítulo III, apartado 3.2.1.3, págs. 220 y ss.

<sup>303</sup> Vid., en este sentido, BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed. op. cit., pág. 448.

intención del autor orientada al resultado previsto en la norma<sup>304</sup>. La consumación del delito no exige que se alcance el fin propuesto por el autor; es, bien al contrario, suficiente la constatación de que la conducta desarrollada sobre los bienes se dirija a la ocultación o encubrimiento de su origen ilícito o a la ayuda del partícipe a eludir las consecuencias de sus actos<sup>305</sup>. Por último, el número 2 del artículo 301 CP, como vimos al ocuparnos de esta modalidad típica<sup>306</sup>, integra un verdadero delito de resultado: el precepto sólo describe la causación de un resultado (la ocultación o el encubrimiento) separado conceptualmente de la conducta. Como afirmara PALMA HERRERA, el art. 301.2 CP no recoge “fórmula verbal alguna, y sí únicamente el resultado de conductas, la ocultación o encubrimiento”<sup>307</sup>.

De acuerdo con lo expuesto, el ámbito del blanqueo omisivo queda limitado a las modalidades de adquisición, conversión o transmisión *ex* artículo 301.1 (primer inciso) y la forma comisiva prevista en el artículo 301.2 CP, y sólo podrá ser sancionado a través de fórmula de la comisión por omisión, cuando concurran los requisitos que el artículo 11 CP prevé para su aplicación.

#### 4.2.3. EXIGENCIAS TÍPICAS DEL DELITO DE BLANQUEO OMISIVO

Limitado el ámbito de aplicación del blanqueo omisivo a las modalidades típicas de adquisición, conversión, transmisión y a la prevista en el artículo 301.2 CP, a continuación se ha de determinar cuáles son los requisitos que posibilitan su incriminación. A ello dedicaremos este apartado. Además de las exigencias propias de la modalidad comisiva de que se trate (que fueron definidas al estudiar cada una de ellas en los apartados 3.2 y 3.3 del capítulo tercero de este trabajo), el blanqueo omisivo precisa, de acuerdo con la fórmula prevista en el artículo 11, la concurrencia de cuatro requisitos: la presencia de un *delito de resultado*; la existencia de un especial deber jurídico de evitar el resultado para el agente -la denominada *posición de garante*-; que el sujeto se encuentre en la posibilidad de evitar el resultado; y, por último, que la no

---

<sup>304</sup> Vid. *supra*, Capítulo III, apartado 3.2.3, págs. 257 y 258.

<sup>305</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., págs. 131 y 132. En el mismo sentido, id., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., págs. 217 y 223.

<sup>306</sup> Vid. *supra*, Capítulo III, apartado 3.3, págs. 268 y ss.

<sup>307</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Comentarios al Código Penal*, op. cit., pág. 24.

evitación del resultado *equivalga, según el sentido del texto de la ley*, a su causación<sup>308</sup>. Al primero de los requisitos referidos ya se ha hecho alusión en páginas anteriores. Analicemos brevemente los otros tres.

#### 4.2.3.1. LA INFRACCIÓN DE UN ESPECIAL DEBER JURÍDICO (POSICIÓN DE GARANTE)

Según un importante sector doctrinal, la posición de garantía constituye el fundamento normativo que permite equiparar valorativamente la no evitación de un resultado penalmente relevante a su realización activa. No cualquier omisión de evitar el resultado típico contiene un grado de injusto equiparable a la producción activa del mismo. Desde NAGLER, es comúnmente admitido que sólo la omisión de aquellos sujetos que ostenten una posición de garante -quienes tengan el deber jurídico de intervenir por virtud de una especial conexión previa con el bien jurídico- puede considerarse materialmente equivalente a su producción activa<sup>309</sup>.

El omitente que, en virtud de una especial vinculación con el bien jurídico protegido<sup>310</sup>, ostente dicha *posición de garante*, es responsable de la salvaguarda del mismo. Este deber jurídico específico determina que la no evitación -*omisión*- de la lesión o puesta en peligro del bien jurídico penalmente protegido, se considere *normativamente equivalente* a su producción activa. El Código Penal vigente, al conferir -por primera vez- una regulación expresa a la comisión por omisión, exige en su artículo 11, junto a la identidad estructural con la forma activa de comisión (equivalencia según el sentido del texto de la ley), la posición de garante (*infracción de un especial deber jurídico del autor*) para poder atribuir la responsabilidad penal al omitente por la producción del resultado típico. Como veremos, el propio artículo determina, “no de forma absolutamente convincente”<sup>311</sup>, un sistema de fuentes de la posición de garantía concebido en términos excesivamente formalistas.

---

<sup>308</sup> Vid., en este sentido, SSTs 325/2013, de 2 de abril, 542/2012, de 21 de junio, 64/2012, de 27 de enero, 213/2007, de 15 de marzo, y 37/2006, de 25 de enero.

<sup>309</sup> Vid. BACIGALUPO ZAPATER, E., *Delitos impropios de omisión*, op. cit., págs. 51 y 52.

<sup>310</sup> Ibidem, pág. 121.

<sup>311</sup> Vid. CUADRADO RUIZ, M<sup>a</sup>. A, “La comisión por omisión como problema dogmático”, op. cit., pág. 444.

Si bien la posición de garante está admitida con carácter general por la doctrina<sup>312</sup>, existen significativas discrepancias respecto a cuestiones fundamentales relacionadas con esta figura dogmática. Así, no se acepta de forma generalizada la suficiencia de la infracción del deber de garantía para la equiparación de la omisión a la realización activa del resultado. En este sentido, desde las teorías de la equivalencia estructural se niega que la posición de garantía fundamente la equiparación valorativa entre la no evitación del resultado típico y la realización activa del mismo<sup>313</sup>, y ello porque la omisión de la evitación del resultado -se afirma- comporta menor gravedad que su producción activa. Es por ello que autores como ROMEO CASABONA<sup>314</sup> se han pronunciado a favor de que legislativamente se prevea la atenuación facultativa de la pena para los supuestos de comisión por omisión.

Es el sistema de fuentes de la posición de garantía una de las cuestiones que históricamente mayores controversias ha generado en torno a la dogmática de la comisión por omisión<sup>315</sup>. Si bien el artículo 11 del Código incorpora en su inciso segundo un sistema de fuentes con arreglo a la teoría formal del deber jurídico (ley, contrato y actuar precedente peligroso o injerencia), muchos autores consideran que la posición el especial deber de actuar ha de fundamentarse sobre criterios materiales, y que ello no sería contrario a la literalidad del precepto<sup>316</sup>. Por razones de espacio, no podemos entrar aquí a exponer con detalle una cuestión tan debatida y que ha sido objeto de copiosa producción doctrinal, abordada por intérpretes de gran solvencia, no sólo en la ciencia penal alemana sino también española. A la abundante bibliografía existente nos remitimos para un análisis en detalle de la cuestión. En esta contribución nos limitaremos a apuntar unas breves notas de las dos corrientes doctrinales fundamentales, las teorías formales del deber jurídico y la teoría funcional de las fuentes del deber, basada en criterios materiales.

---

<sup>312</sup> Aunque no de forma unánime: desde las perspectivas más radicales de las teorías de la equivalencia estructural se niega que la posición de garante constituya el fundamento punitivo de la comisión por omisión. En la doctrina española, vid. GRACIA MARTÍN, L., “Los delitos de comisión por omisión. (Una exposición crítica de la doctrina dominante)”, op. cit., págs. 441 y ss.

<sup>313</sup> Vid. CUADRADO RUIZ, M<sup>a</sup>. A., “La comisión por omisión como problema dogmático”, op. cit., págs. 438 y ss.

<sup>314</sup> Vid. ROMEO CASABONA, C. M., “Los delitos de comisión por omisión. (Una exposición crítica de la doctrina dominante)”, op. cit., pág. 937.

<sup>315</sup> Vid. GIMBERNAT ORDEIG, E., “La omisión impropia en la dogmática penal alemana. Una exposición”, op. cit., págs. 7 y ss.

<sup>316</sup> Vid. BACIGALUPO ZAPATER, E., “La regulación de las conductas omisivas en el nuevo Código penal”, *Nuevos trabajos sobre los delitos de omisión, Delitos impropios de omisión*. Ed. Dykinson. Madrid, pág. 218.

De acuerdo con las *teorías formales del deber jurídico*, se afirma, a grandes rasgos, que la posición de garante derivaría de determinadas fuentes formales: la ley (extrapenal)<sup>317</sup>, el contrato y la injerencia. El excesivo formalismo de dichas fuentes ha llevado a muchos autores a hacer una interpretación correctiva basada en perspectivas materiales. Así, del contrato se afirma que no es necesaria su validez jurídica ni que llegue a estar perfeccionado, sino que lo determinante es la asunción fáctica voluntaria de la función de protección del bien jurídico<sup>318</sup>.

Del conjunto de fuentes de la posición de garante propuestas, la más discutida ha sido la injerencia. De acuerdo con el principio de injerencia, “el que, mediante un hacer precedente (injerente) crea un peligro de lesión de un bien jurídico, responde de esa lesión, igual que si la hubiera causado mediante una acción positiva, si posteriormente omite evitar el resultado típico en el que va a desembocar la cadena causal puesta en marcha por aquel hacer precedente”<sup>319</sup>. El fundamento de la injerencia radica en el desvalor dimanante a la no neutralización del riesgo previo creado por el sujeto: quien genera un riesgo para un bien jurídico, adquiere la obligación de evitar que dicho riesgo se materialice en la lesión del mismo. Un amplio sector doctrinal critica enorme potencial expansivo<sup>320</sup> del principio de injerencia, consecuencia de la excesiva amplitud de supuestos que admite<sup>321</sup>. Algunos autores han llegado a negar a la injerencia el carácter de fuente de posición de garantía<sup>322</sup>, si bien en la doctrina española se acepta,

---

<sup>317</sup> Vid. MANTOVANI, F., “La obligación de garantía reconstruida a la luz de los principios de legalidad, de solidaridad, de libertad y de responsabilidad personal”, *Modernas tendencias en la ciencia del derecho penal y en la criminología*. UNED. 1ª edición, Madrid, 2001, pág. 485.

<sup>318</sup> Vid. MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, 9ª ed., op. cit., págs. 329 y 330; ROMEO CASABONA, C. M., “Los delitos de comisión por omisión. (Una exposición crítica de la doctrina dominante)”, op. cit., pág. 931; MANTOVANI, F., “La obligación de garantía reconstruida a la luz de los principios de legalidad, de solidaridad, de libertad y de responsabilidad personal”, op. cit., pág. 492; LANDECHO VELASCO, C. M., *Derecho Penal. Parte General*, op. cit., pág. 283.

<sup>319</sup> Vid. GIMBERNAT ORDEIG, E., “La omisión impropia en la dogmática penal alemana. Una exposición”, op. cit., págs. 19 y 20.

<sup>320</sup> Vid. RODRÍGUEZ MESA, Mª. J., *La atribución de responsabilidad en comisión por omisión*, op. cit., págs. 99 y 100.

<sup>321</sup> Demasiado amplia en opinión de GIMBERNAT ORDEIG, lo que ha motivado que la doctrina haya exigido ulteriores requisitos para que el precedente genere la posición de garantía. (“La omisión impropia en la dogmática penal alemana. Una exposición”, op. cit., pág. 21).

<sup>322</sup> Así, SCHÜNEMANN, que, de acuerdo con su criterio del *dominio sobre la causa* como fundamento de la posición de garante, rechaza esta fuente de garantía, ya que, en la injerencia, el dominio del omitente sólo se sitúa en el pasado. “En el momento de la omisión, el injerente no se distingue de ninguna manera del *quivis ex populo*, pues ambos tienen simplemente un dominio potencial sobre el acontecer, caracterizado por la posibilidad de impedir”. (*Fundamentos y límites de los delitos de omisión impropia*, Ed. Marcial Pons. Madrid, 2006, pág. 364; asimismo, id., “El llamado delito de omisión impropia o la comisión por omisión”, *Estudios penales en homenaje a Enrique Gimbernat*. Ed. Edisofer. Madrid, 2008, pág. 1617). En la doctrina española, ha negado la injerencia como fuente de deber GRACIA MARTÍN, L., “Los delitos de comisión por omisión. (Una exposición crítica de la doctrina dominante)”, op. cit., pág. 436.

con carácter general, aunque en muchas ocasiones sometida a diversas exigencias y entendida no como deber formal sino como fuente material de la posición de garante<sup>323</sup>.

**Fundamentación material de las fuentes de garantía.** Tal y como ya constató GRACIA MARTÍN en el año 2004, en la doctrina española está ganando terreno la concepción material de la posición de garante<sup>324</sup>. Este enfoque, surgido de la *Teoría de las funciones* de ARMIN KAUFMANN, fundamenta las fuentes del deber de garantía de acuerdo con dos criterios: la función de protección del bien jurídico y la función personal de control de una fuente de peligro. Sobre la base de estas dos funciones, los autores que se posicionan a favor de las fuentes materiales han formulado diversas propuestas de sistematización (naturalmente, con variaciones de unas respecto de otras) de las situaciones que dan lugar a la posición de garantía<sup>325</sup>.

Siguiendo el esquema propuesto por MIR PUIG<sup>326</sup>, la *función de protección de un bien jurídico* hace referencia a situaciones que generan la obligación de velar por la integridad de un bien jurídico que está dentro del ámbito del dominio del sujeto, e impedir, por tanto, su puesta en peligro. En virtud de esta función, la posición de garante puede basarse en: a) *Una estrecha relación vital* en la que exista una verdadera situación de dependencia del portador del bien jurídico respecto del garante. Se incluye aquí el deber de protección de los padres respecto de los hijos hasta que puedan valerse por sí mismos, y el de los hijos adultos respecto de sus padres ancianos que tengan a su

---

<sup>323</sup> Vid. ROMEO CASABONA, C. M., “Los delitos de comisión por omisión. (Una exposición crítica de la doctrina dominante)”, op. cit., págs. 931 y 932; HUERTA TOCILDO, S., *Principales novedades de los delitos de omisión en el Código Penal de 1995*, op. cit., pág. 44; MAQUEDA ABREU, M<sup>a</sup>. L., *Derecho Penal. Parte General*, op. cit., pág. 810; SÁNCHEZ TOMÁS, J. M., *Comisión por omisión y omisión de socorro agravada*, op. cit., págs. 56, 215 y ss.; DOPICO GÓMEZ-ALLER, J., *Omisión e injerencia en derecho penal*, op. cit., págs. 785 y ss.; RODRÍGUEZ MOURULLO, G., “Nuevas reflexiones sobre la cláusula general de la comisión por omisión”, op. cit., pág. 306; en casos excepcionales y bajo ciertas exigencias, BACIGALUPO ZAPATER, E., *Delitos impropios de omisión*, op. cit., pág. 148; id., “Conducta precedente y posición de garante en el Derecho penal”, *Nuevos trabajos sobre los delitos de omisión, Delitos impropios de omisión*. Ed. Dykinson. Madrid, 2005, págs. 203-208.

<sup>324</sup> Vid. GRACIA MARTÍN, L., “Los delitos de comisión por omisión. (Una exposición crítica de la doctrina dominante)”, op. cit., pág. 436. En la doctrina española, se han manifestado claramente a favor de una concepción material de la posición de garante BACIGALUPO ZAPATER, E., *Delitos impropios de omisión*, op. cit., págs. 144 y ss.; id., “La regulación de las conductas omisivas en el nuevo Código penal”, op. cit., págs. 221 y ss.; id., “La posición de garante en el ejercicio de funciones de vigilancia en el ámbito empresarial”, *Nuevos trabajos sobre los delitos de omisión, Delitos impropios de omisión*. Ed. Dykinson. Madrid, 2005, págs. 235 y ss.; HUERTA TOCILDO, S., *Principales novedades de los delitos de omisión en el Código Penal de 1995*, op. cit., pág. 33; LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J., “La omisión en la jurisprudencia del Tribunal Supremo”, *Dogmática y ley penal. Libro homenaje a Enrique Bacigalupo* (coord. José Miguel Zugaldía Espinar, Jacobo López Barja de Quiroga). Marcial Pons. Madrid, 2004, págs. 400 y ss.; MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, 9<sup>a</sup> ed., op. cit., págs. 325 y ss.; LANDECHO VELASCO, C. M., *Derecho Penal. Parte General*, op. cit., pág. 284.

<sup>325</sup> Vid. MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, 9<sup>a</sup> ed., op. cit., pág. 324.

<sup>326</sup> Ibidem, págs. 324-335.

cargo; b) *La comunidad de peligro*. Se refiere a la obligación que asumen tácitamente las personas que participan voluntariamente en una actividad peligrosa de socorrerse entre sí. Cada uno de ellos se convierte en garante de la indemnidad del resto de miembros del grupo. El ejemplo con el que la literatura científica suele ilustrar esta fuente de garantía es la expedición alpina en la que cada uno de sus miembros *voluntariamente* acepta realizarla en la confianza de que, en caso de acontecer un percance, será auxiliado por el resto de compañeros. Por el mismo motivo, cada uno de ellos tácitamente se compromete a asumir dicha función de protección; c) *La asunción voluntaria de una función de protección*. Se incluyen aquí los compromisos que pueda adquirir el garante a favor de la protección de un bien jurídico, y podría concebirse como una concepción no formalista del contrato como fuente de garantía -ex art. 11 a)-, excluyendo la relevancia de los requisitos de validez o la existencia del mismo.

Por su parte, la posición de garante surge en los casos en los que se asume *deber de control de una fuente determinada de peligro* cuando la indemnidad del bien jurídico protegido depende del control de determinadas fuentes de peligro por parte de quien lo ha creado, o de aquel a quien se atribuye su vigilancia. Se incluyen los supuestos siguientes: a) *El actuar precedente o injerencia*. Como hemos visto en el apartado anterior, de conformidad con el principio de injerencia, quien ha provocado a través de una conducta precedente una situación de peligro para un bien jurídico, está obligado a evitar que dicho peligro se materialice en la lesión de dicho bien jurídico. La doctrina exige de forma general, para dar lugar a la posición de garante, que el precedente generador del riesgo sea contrario a derecho. Según este criterio, no colocarían en posición de garante los riesgos ocasionados fortuitamente, ni aquellos en los que la víctima ha generado con su actuar precedente una situación de justificación que autorice al omitente a enfrentarse a él de forma típica; b) *Deber de control de las fuentes de peligro situadas en la esfera de dominio del sujeto*. Quien posea en su esfera de dominio elementos (instalaciones, máquinas, animales) que puedan poner en peligro determinados bienes jurídicos, responde de la no materialización de dicho peligro en la lesión del bien jurídico; c) *Responsabilidad por la conducta de otras personas*. Quien tiene el deber de vigilar a otras personas, se convierte en garante respecto de los males que éstas puedan ocasionar. Para evitar una desmesurada extensión de esta concreta posición de garante, MIR PUIG considera preciso “que el deber de vigilancia abarque, en



particular, la obligación de controlar una específica peligrosidad que encierre el vigilando”<sup>327</sup>.

Tras este apresurada exposición de las diferentes perspectivas doctrinales, veamos qué dice al respecto nuestro Derecho positivo y cómo es interpretado por la doctrina y la jurisprudencia. Recordemos que el artículo 11 CP dispone que “se equiparará la omisión a la acción” cuando exista la existencia de una específica obligación legal o contractual de actuar por parte del omitente, o cuando éste haya creado “una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente” (la denominada “injerencia”). La doctrina coincide en calificar de excesivamente formalista el sistema de fuentes previsto en los apartados a) y b) del segundo inciso del precepto<sup>328</sup>, si bien se discute si la relación de fuentes expresamente aludida en dicho artículo ha de ser o no exhaustiva.

Para algunos autores, las fuentes formales referidas en el art. 11 CP tienen carácter meramente ejemplificativo de los supuestos en que *puede* darse la equivalencia material que precisa el inciso primero, de tal modo que “la cuestión decisiva seguirá siendo, entonces, cuándo se da esta equivalencia material. Para decidirla habrá que acudir a la teoría de las funciones”<sup>329</sup>. En este sentido, a juicio de BACIGALUPO ZAPATER, el artículo 11, en su inciso primero, acoge un sistema de fuentes funcional; en su segundo inciso “sólo se dice que *en todo caso* habrá que estimar la existencia de un “especial deber jurídico” cuando el deber provenga de la ley, del contrato o del actuar previo generador del peligro”<sup>330</sup>. Para otro sector de la doctrina, sin embargo, la extensión de las fuentes del deber a otras no previstas en los apartados a) y b) es

---

<sup>327</sup> Ibidem, pág. 335.

<sup>328</sup> Vid. GIMBERNAT ORDEIG, E., “La omisión impropia en la dogmática penal alemana. Una exposición”, op. cit., pág. 6; HUERTA TOCILDO, S., *Principales novedades de los delitos de omisión en el Código Penal de 1995*, op. cit., pág. 32; RODRÍGUEZ MOURULLO, G., “Nuevas reflexiones sobre la cláusula general de la comisión por omisión”, op. cit., págs. 306 y 307; MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, 9ª ed., op. cit., pág. 324.

<sup>329</sup> Ibidem, pág. 325. En sentido similar, BACIGALUPO ZAPATER, E., “La regulación de las conductas omisivas en el nuevo Código penal”, op. cit., págs. 218 y 219; CUADRADO RUIZ, Mª. A., “La comisión por omisión como problema dogmático”, op. cit., pág. 445; SCHÜNEMANN, B., “El llamado delito de omisión impropia o la comisión por omisión”, op. cit., pág. 1613; LANDECHO VELASCO, C. M., *Derecho Penal. Parte General*, op. cit., pág. 284; MUÑOZ CONDE, F., *Derecho Penal. Parte General*, op. cit., pág. 245.

<sup>330</sup> Vid. BACIGALUPO ZAPATER, E., “La regulación de las conductas omisivas en el nuevo Código penal”, op. cit., pág. 218.

incompatible con las exigencias del principio de legalidad<sup>331</sup>, y despojaría al precepto por completo del “sentido garantista que el legislador le atribuyó”<sup>332</sup>.

Por su parte, la jurisprudencia, si bien inicialmente concibió las fuentes de la posición de garante desde perspectivas formalistas, ha ido inclinándose en momentos posteriores a admitir criterios materiales<sup>333</sup>, aunque sin dejar de acudir en ciertas ocasiones a la fundamentación formal. En este sentido, en la STS 542/2012, de 21 de junio, se hace referencia expresa, como fuentes de la posición de garantía, a la protección de un bien jurídico y al control de la fuente de peligro para ese bien, acogiendo los criterios de la teoría de las funciones. Sin embargo, en muchas sentencias, la Sala Segunda afirma la existencia de una posición de garante sin hacer expresa referencia a la fuente concreta del deber, pudiendo interpretarse tanto que la posición de garante se fundamenta en criterios materiales como que aquélla es expresión de las fuentes formales previstas en el artículo 11 CP (ley, contrato e injerencia). En este sentido, se ha considerado garante la madre que incumplió sus deberes de protección de sus hijos de corta edad, no evitando que fuesen maltratados por su pareja (STS 907/2014, de 30 de diciembre, y 870/2014, de 18 de diciembre), sin que se exprese si el deber de actuar nace de la estrecha vinculación familiar que obliga a garantizar la indemnidad de los hijos (función de protección de un bien jurídico), o de la propia ley, que igualmente impone dicha obligación. Lo mismo cabe decir de la posición de garante que asume el director de una sucursal bancaria que no hizo nada por impedir que se realizasen actividades delictivas en la misma, lucrándose con ello (STS 908/2012, de 19 de noviembre): no se especifica si el especial deber nace del deber de control de una fuente de peligro o de la diligencia en su cargo que le es exigible en virtud del contrato que le vincula a la entidad.

---

<sup>331</sup> Vid. HUERTA TOCILDO, S., *Principales novedades de los delitos de omisión en el Código Penal de 1995*, op. cit., pág. 35; MAQUEDA ABREU, M<sup>a</sup>, L., *Derecho Penal. Parte General*, op. cit., pág. 808.

<sup>332</sup> Vid. RODRÍGUEZ MOURULLO, G., “Nuevas reflexiones sobre la cláusula general de la comisión por omisión”, op. cit., pág. 313. Si bien para el autor, resulta conveniente otorgar a los apartados a) y b) del artículo 11 “la más amplia de las interpretaciones posibles”. Así, considerar el contrato no en términos puramente formales sino como acuerdo natural de voluntades, o considerando como forma de injerencia supuestos “en los que la asunción de funciones de protección o control genera en el titular del bien jurídico, o de terceros encargados de la tutela de éste, una confianza que comporta una relajación o abandono en la defensa del mismo”. (Ibidem, pág. 314).

<sup>333</sup> Vid., con detalle, LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J., “La omisión en la jurisprudencia del Tribunal Supremo”, op. cit., págs. 400 y ss.

De acuerdo con RODRÍGUEZ MOURULLO, el sistema de fuentes previsto en el artículo 11 CP no puede calificarse sino de excesivamente arcaico<sup>334</sup>, y puede llegar a ser disfuncional para la atribución de responsabilidad penal a conductas omisivas que incorporen un grado de reprochabilidad similar a la lesión activa del bien jurídico. En este sentido, se muestra mucho más acertado el sistema de fuentes basado en principios materiales. Sin embargo, creemos que el principio de legalidad penal obliga a entender sistema de fuentes previsto en el artículo 11 como taxativo. No compartimos la opinión de aquel sector doctrinal mayoritario que le atribuye un carácter meramente ejemplificativo. Debe reflexionarse seriamente si no son mayores los peligros que encierra dicha interpretación a las ventajas que ofrece. Desde nuestro punto de vista, las exigencias del principio de legalidad y de seguridad jurídica desaconsejan dicha exégesis. Sin embargo, coincidimos con RODRÍGUEZ MOURULLO y RODRÍGUEZ MESA en que resulta altamente conveniente interpretar las fuentes legalmente previstas de la forma más ampliamente posible que la literalidad del precepto admita<sup>335</sup>. Asimismo, sería aconsejable que el legislador revisase el sistema de fuentes previsto en el artículo 11, con objeto de adecuarlo a la realidad social actual y descargarlo del excesivo formalismo que le caracteriza. A través de dicha revisión legislativa, el sistema de fuentes de garantía habría de fundamentarse en esencia en la relación *materialmente* existente entre el sujeto y el bien jurídico, de conformidad con los criterios de la reconocida *Teoría de las Funciones* de KAUFMANN. Con ello, la posición de garantía se adecuaría a verdaderos criterios del injusto material, y a su vez resultarían garantizadas tanto la seguridad jurídica como el principio *nullum crimen sine lege*<sup>336</sup>.

Muchos autores han considerado que, en el blanqueo omisivo, la fuente principal del deber jurídico de actuar deriva de la normativa de carácter preventivo -Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y su Reglamento de desarrollo, fundamentalmente-, que impone a sus destinatarios ciertas obligaciones con objeto de impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores vulnerables para la realización de actividades de blanqueo. En efecto, los sujetos destinatarios de la normativa preventiva -previstos,

---

<sup>334</sup> Vid. RODRÍGUEZ MOURULLO, G., “Nuevas reflexiones sobre la cláusula general de la comisión por omisión”, op. cit., pág. 308.

<sup>335</sup> Ibidem, pág. 314; RODRÍGUEZ MESA, M<sup>a</sup>. J., *La atribución de responsabilidad en comisión por omisión*, op. cit., págs. 94 y ss.

<sup>336</sup> Vid. TORÍO LÓPEZ, A., “Límites político criminales del delito de comisión por omisión”, ADPCP, XXXVII, 1984, pág. 706.

recordemos, en el artículo 2 de la Ley 10/2010- serán preferentemente los sujetos que integren el ámbito de aplicación del art. 11 CP en relación con el delito de blanqueo. Pero, ¿sólo ellos? Realmente, nada impide que la fuente de la posición de garantía se halle en una norma distinta, en obligaciones asumidas contractualmente -piénsese en empleados de una notaría o de una casa de apuestas, cuyas obligaciones laborales o contractuales exigen especial cuidado en orden a prevenir el resultado de realización de actividades de blanqueo-. De este modo, como acertadamente han advertido ÁLVAREZ PASTOR/ EGUIDAZU PALACIOS, no se ha de vincular necesariamente la comisión por omisión en el delito de blanqueo -cuando dicha incriminación sea jurídicamente admisible- con las obligaciones impuestas en la ley 19/2010 y el Reglamento de desarrollo<sup>337</sup>.

En cualquier caso, repárese que en muchas ocasiones el incumplimiento de alguna de las obligaciones asumidas por el sujeto vinculado irá asociada a una conducta favorecedora de naturaleza activa, que permitirá abordar el juicio de tipicidad de la propia conducta activa, reconducible en la mayor parte de las ocasiones a la fórmula genérica “realizar cualquier acto” sobre los bienes o activos de naturaleza delictiva con las finalidades de ocultar, encubrir o ayudar”. Esta advertencia es oportuna toda vez que en ocasiones se enfoca la cuestión desde una óptica inexacta por el hecho de que el agente sea sujeto vinculado con especiales deberes en materia de prevención. Así, *v. gr.*, el empleado de banca que, pese a no comunicar al Servicio Ejecutivo sus sospechas, abre una cuenta corriente para depositar unos fondos ingresados por un nuevo cliente de cuyo origen delictivo tiene más que indicios. El acto de blanqueo, a nuestro juicio, tiene en este caso lugar a través de una conducta activa (la apertura de la cuenta) y no omisiva (la falta de comunicación al SEPBLAC). Habrá por tanto de precisarse, en primer lugar, si el favorecimiento al blanqueo se realiza a través de una verdadera omisión -incumplimiento de un específico deber derivado de la normativa preventiva- o realmente el agente desarrolla una conducta que favorece activamente al blanqueo.

---

<sup>337</sup> Vid. ÁLVAREZ PASTOR, D.; EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 344.

#### 4.2.3.2. LA EQUIVALENCIA ESTRUCTURAL O VALORATIVA

Además de la posición de garantía, para poder atribuir la responsabilidad penal al omitente por la producción del resultado típico, el artículo 11 impone otro requisito: es preciso que la no evitación del resultado equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación. Sin embargo, la referencia del precepto a esta nueva exigencia es demasiado imprecisa y no ofrece pistas sobre el contenido de dicha equivalencia.

En la referida expresión han encontrado las teorías de la equivalencia estructural el fundamento legal a la perspectiva que sostienen, de acuerdo con la cual ha de rechazarse que la posición de garante sea único requisito para fundamentar la equiparación penológica de la omisión a la causación activa del resultado. Para estas teorías, además, la omisión ha de ser material y estructuralmente equivalente en el plano normativo<sup>338</sup> a la producción activa del resultado típico<sup>339</sup>. Si acción y omisión son estructuras ontológicamente diferenciadas, “el necesario juicio de identidad sólo puede establecerse en el plano normativo de las estructuras de la imputación”<sup>340</sup>. Para afirmar la equivalencia legal, no es suficiente que “el omitente no impida que un riesgo preexistente para el bien jurídico siga su curso y se realice en el resultado, sino que es necesario *que sea la propia omisión la que lo cree o lo incremente y, en todo caso, domine el proceso de su realización*”<sup>341</sup>. Para SILVA SÁNCHEZ, la identidad estructural precisa asimismo *la asunción voluntaria de control del riesgo* por parte del omitente de

<sup>338</sup> Vid. SILVA SÁNCHEZ, J. M., “Política criminal y reforma legislativa en la comisión por omisión. (El artículo 10 del Proyecto del Código penal de 1.992)”, op. cit., pág. 1082. En sentido similar, HUERTA TOCILDO, S., *Principales novedades de los delitos de omisión en el Código Penal de 1.995*, op. cit., pág. 31; RODRÍGUEZ MOURULLO, G., “Nuevas reflexiones sobre la cláusula general de la comisión por omisión”, op. cit., pág. 311.

<sup>339</sup> Vid. SÁNCHEZ TOMÁS, J. M., *Comisión por omisión y omisión de socorro agravada*, op. cit., pág. 97.

<sup>340</sup> Vid. RODRÍGUEZ MESA, M<sup>a</sup>. J., *La atribución de responsabilidad en comisión por omisión*, op. cit., pág. 61. Por su parte, GRACIA MARTÍN, claro exponente de la teoría extrema de la equivalencia estructural, considera preciso que en el tipo de comisión por omisión exista no una mera equivalencia, sino una total identidad con la acción descrita expresamente en el tipo concreto de la Parte Especial. Para el autor, el desvalor de injusto previsto en el tipo para la producción activa del resultado mediante conductas activas no puede ser igualado, como afirma la doctrina dominante, mediante la asunción por parte del omitente de una posición de garantía (que, afirma, “es un elemento ajeno a lo injusto específico de la comisión por omisión”). Lo que, a su juicio, determina el injusto específico de la que denomina “verdadera comisión por omisión” son las características de la acción omitida. (Vid. GRACIA MARTÍN, L., “Los delitos de comisión por omisión. (Una exposición crítica de la doctrina dominante)”, op. cit., págs. 474-481 passim). Para que la omisión posea el mismo fundamento material que entraña la acción positiva descrita en el tipo, el omitente ha de haber incorporado voluntariamente “el proceso causal que se desarrolla en dirección a la producción del resultado a su esfera de *dominio social*” y que dicho dominio se actualice posteriormente en la situación en la que el sujeto omite la “neutralización de la causa *determinante* del resultado”. (Ibidem, págs. 411 y 412).

<sup>341</sup> Vid. MAQUEDA ABREU, M<sup>a</sup>. L., *Derecho Penal. Parte General*, op. cit., pág. 811. Con detalle, RODRÍGUEZ MESA, M<sup>a</sup>. J., *La atribución de responsabilidad en comisión por omisión*, op. cit., págs. 113 y ss.

forma inequívoca (no necesariamente expresa, pero sí concluyente)<sup>342</sup>. Sólo cuando el compromiso del garante es inequívoco, se puede decir que asume “el riesgo real o hipotético, actuando a modo de barrera de contención” de él. Una vez establecida -con el compromiso- tal “barrera”, el retirarla, esto es, el no contener el riesgo cuando éste amenaza con realizarse en el bien que hay que proteger, muestra una auténtica identidad estructural, en el plano normativo, con el hecho comisivo<sup>343</sup>.

Para la doctrina mayoritaria, sin embargo, esta segunda exigencia impuesta por el artículo 11 no es tan rigurosa: lo que la equivalencia según el texto de la ley impone es que la omisión sea compatible con la acción descrita en el tipo de referencia. Esto ocurre “cuando pudiera afirmarse “a partir de los correspondientes verbos típicos y del contexto valorativo específico de cada delito” que la conducta omisiva “resulta subsumible en la formulación legal del delito”, que es tanto como afirmar que se corresponda con la realización activa del resultado que no evitó. Y esto sucede cuando su contenido de ilicitud es equiparable<sup>344</sup>. En cualquier caso, el artículo 11 exige que el verbo contenido en el tipo de acción correlativo admita la forma omisiva. Únicamente cuando la equiparación pueda inferirse de la expresión contenida en literalidad del tipo activo, al menos contextualmente, “la comisión por omisión encontrará encaje en el ámbito de las conductas incriminadas por el tipo” de acción correspondiente<sup>345</sup>.

También la Sala Segunda ha afirmado en diversas sentencias que la atribución de responsabilidad en comisión por omisión precisa, como ulterior requisito, que la omisión de la evitación del resultado sea *normativamente* equivalente a su causación (STS 542/2012, de 21 de junio). Desde la perspectiva normativa, afirma la Sentencia citada, ambos comportamientos han de equipararse en su estructura y, según sostiene un sector de la doctrina, en su configuración material como modos de dominio (control) sobre el riesgo típico. Desde la perspectiva axiológica del merecimiento de pena, también ha de afirmarse la oportuna equivalencia entre el no hacer y el hacer del sujeto que causa el resultado típico; ambos comportamientos deben tener el mismo y único

---

<sup>342</sup> Vid. SILVA SÁNCHEZ, J. M., *El delito de omisión. Concepto y sistema*, op. cit., págs. 464 y 465.

<sup>343</sup> Ibidem, pág. 465. Prosigue el autor: “en el mencionado nivel resulta indiferente que el riesgo se genere por vía causal por el sujeto, o que éste, teniéndolo normativamente controlado, esto es, “en sus manos”, le deje producir sus resultados lesivos. En ambos casos, cabe hablar de la realización de un riesgo controlado por el sujeto. De producirse el resultado, cabe imputárselo a uno y a otro sujeto en igual medida”

<sup>344</sup> Vid. MAQUEDA ABREU, M<sup>a</sup>. L., *Derecho Penal. Parte General*, op. cit., pág. 812.

<sup>345</sup> Vid. QUINTERO OLIVARES, G., *Parte General del Derecho Penal*, Ed. Aranzadi. 2ª edición, 2007, pág. 370.

fundamento material del injusto. Por último, desde la perspectiva del principio de legalidad, ha de estarse al sentido que en el texto de la ley tiene el comportamiento típico. En este sentido, cuando “el lenguaje” expresado en el tipo penal admita de forma generalizada que quien se comporta omitiendo lo hace con objeto de lesionar el bien jurídico y “se entienda, sin forzamiento de la expresión”, que efectivamente lo menoscaba, “podrá valorarse que ese comportamiento omisivo resulta injusto por la misma razón que se predica la producción activa del resultado lesivo para el bien jurídico”<sup>346</sup>. Y añade la resolución que comentamos que “la no evitación, sin más, de un resultado no puede equivaler en desvalor que corresponde a su producción mediante una acción. Se ha podido decir en efecto, que *el cumplimiento del deber de actuar es más gravoso que el de no actuar, por eso la infracción de aquél debe ser menos onerosa que la infracción de éste*”. Es decir, la Sala Segunda estima que para apreciar la equivalencia es condición *si ne qua non* que en el comportamiento omisivo concurra el mismo contenido del injusto que el que posee el tipo activo con cuya pena pretende conminarse al que omite. Finalmente, la equivalencia precisa que el omitente disponga de la misma “capacidad de control de la situación de riesgo que la que de ordinario tiene el que produce activamente el resultado sobre el proceso causal. Lo que cabe afirmar que ocurra solamente si todo lo que *sucede* en relación a la producción del resultado se puede valorar como *obra de su voluntad*”.

En el delito de blanqueo la equivalencia estructural precisará que las modalidades de blanqueo admitidas en comisión por omisión -que como vimos se reducen a la adquisición, la conversión, la transmisión (*ex* artículo 301.1 CP) y la ocultación y encubrimiento del artículo 301.2-, sean estructuralmente equivalentes, cada una de ellas, a la conducta activa equiparable. Sin perjuicio de desarrollar esta idea en el apartado siguiente, conviene ya anticipar que, de conformidad con la STS 1697/2002, de 19 de octubre, cualquiera de las conductas referidas cuyo elemento verbal no pueda conjugarse en modalidad omisiva, ha de ser descartada de plano por no colmar el requisito de la equivalencia. Para que ésta sea confirmada, deberá asimismo verificarse que la específica modalidad de conducta realizada a través de una omisión, es valorativa y estructuralmente equivalente al comportamiento activo, y que el omitente garante

---

<sup>346</sup> En este sentido, en la STS 1697/2002, de 19 de octubre, se afirma que “la equiparación o equivalencia de la omisión con la acción ha de realizarse según el sentido del texto de la Ley, excluye cualquier equivalencia que no pase por la interpretación de que el elemento verbal de una concreta figura típica penal pueda conjugarse en modalidad omisiva”.

tenga la misma capacidad de control o dominio sobre la situación de riesgo que la que de ordinario tiene el que produce activamente el resultado. Por último, será preciso que la forma comisiva concreta realizada por quien es garante a través de una omisión posea el mismo grado de injusto que su realización a través de un comportamiento activo.

#### **4.2.3.3. LA POSIBILIDAD DE EVITAR EL RESULTADO**

Sin entrar a fondo, por razones de espacio, en una cuestión tan problemática y debatida como la causalidad en la omisión, sí resulta conveniente recordar que existe prácticamente consenso doctrinal en interpretar este requisito como la exigencia de verificar que la acción omitida hubiera evitado el resultado “con una probabilidad rayana en la certeza”<sup>347</sup>. La jurisprudencia exige también que sea verificada la causalidad hipotética, siendo condición ineludible “la comprobación de si la realización de la acción omitida hubiera evitado la producción del resultado con una probabilidad rayana en la seguridad” (SSTS 601/2013, de 11 de julio, 325/2013, de 2 de abril, y 1061/2009, de 26 de octubre). Lamentablemente, pese a la existencia de esta línea jurisprudencial plenamente asentada en el Alto Tribunal, denuncia GIMBERNAT que la realidad en la jurisprudencia menor en muchas ocasiones es diferente, al ser frecuentes las sentencias en las que se “echa por la borda la fórmula cuasimatemática de la «probabilidad rayana en la certeza de la evitación del resultado», para hacer responder al omitente por la lesión sobrevenida aunque la acción omitida hubiera supuesto sólo una probabilidad de impedir el resultado”<sup>348</sup>.

---

<sup>347</sup> Vid. ampliamente, GIMBERNAT ORDEIG, E., “La causalidad en la omisión impropia y la llamada omisión por comisión”, ADPCP, L. 2.000, págs. 34 y ss. Asimismo, id., “A vueltas con la imputación objetiva, la participación delictiva, la omisión impropia y el Derecho penal de la culpabilidad”, op. cit., págs. 80 y ss.; MAQUEDA ABREU, M<sup>a</sup>. L., *Derecho Penal. Parte General*, op. cit., pág. 804; MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, 9<sup>a</sup> ed., op. cit., págs. 336 y 337. Incluso para TORIO LÓPEZ el criterio de la probabilidad rayana en la certeza llega a ser “cuestionable”, toda vez que en las omisiones no puede operarse más que con juicios de probabilidad. A su juicio, “debe exigirse en el delito de comisión por omisión la seguridad total equivalente a la unidad (=100/100) de que la acción hubiera evitado el resultado”. (“Límites político criminales del delito de comisión por omisión”, op. cit., págs. 699 y 700; id., “Racionalidad y relatividad en las teorías jurídicas del delito”, ADPCP, XLII, 1989, pág. 502).

<sup>348</sup> Vid. GIMBERNAT ORDEIG, E., “A vueltas con la imputación objetiva, la participación delictiva, la omisión impropia y el Derecho penal de la culpabilidad”, op. cit., págs. 81 y 82.



#### **4.2.4. CONCLUSIONES. MODALIDADES Y REQUISITOS DEL DELITO DE BLANQUEO OMISIVO**

Como sabemos, la configuración del blanqueo no incluye expresamente en su descripción típica ninguna conducta omisiva. Ello permite descartar la posibilidad de que cualquiera de las formas de conducta en las que se estructura el tipo integre una omisión pura. Situada la punibilidad de cualquier conducta blanqueadora omisiva en el ámbito de la comisión por omisión, ha de verificarse la concurrencia de los requisitos que prevé artículo 11 CP para fundamentar la equiparación normativa de la omisión a la causación activa del resultado. Dichos requisitos, como vimos, son la presencia de un *delito de resultado*; la existencia de un especial deber jurídico de evitar el resultado para el agente (*posición de garante*); la capacidad personal de sujeto de evitar el resultado; y, por último, que la no evitación del resultado *equivalga, según el sentido del texto de la ley*, a su causación.

Del conjunto de modalidades comisivas que integran el tipo de blanqueo, sólo conforman delitos de resultado la efectiva adquisición, conversión o transmisión de los bienes o activos de origen delictivo (*ex* artículo 301.1 CP) y los actos de ocultación o encubrimiento sobre determinadas características del bien (artículo 301.2). La mera posesión o utilización del bien conforman delitos de mera actividad, y la modalidad integrada por la fórmula genérica “realizar cualquier otro acto” para ocultar, encubrir o ayudar se configura como un delito de resultado cortado. De este modo, la primera exigencia del artículo 11 (limitación de su ámbito de aplicación a verdaderos delitos de resultado) permite descartar el blanqueo omisivo de las modalidades típicas de posesión y utilización y de aquella otra consistente en la realización de cualquier otro acto con las finalidades típicamente previstas. Con matices, en este sentido se han pronunciado MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ y PALMA HERRERA<sup>349</sup>. Para el primero, la comisión por omisión “no es en rigor conceptualmente posible en la modalidad del apartado 1 del art. 301”<sup>350</sup>. Por su parte, PALMA HERRERA niega también la posibilidad de admitir la omisión impropia en relación a las conductas previstas en el artículo 301.1 CP, aunque admite la

---

<sup>349</sup> No es esta la opinión mayoritariamente defendida por la doctrina, como veremos. Y ello porque no suele hacerse diferenciación alguna entre las distintas modalidades conductuales en que se puede presentar el delito de blanqueo de capitales. La tendencia al abordar esta cuestión es afirmar la aplicabilidad del artículo 11 al blanqueo omisivo en general, sin hacer mayores precisiones.

<sup>350</sup> Vid. MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de Bienes”, 3ª ed., op. cit., pág. 508.

posibilidad de subsumir en dicho precepto conductas omisivas como supuestos de omisión pura<sup>351</sup>.

Hemos visto que el artículo 11 precisa, para atribuir la responsabilidad penal al omitente por la producción del resultado típico, que la no evitación del mismo equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación. En este sentido, ya afirmó CARPIO DELGADO, el comportamiento omisivo del sujeto ha de ser *equivalente valorativa y estructuralmente*<sup>352</sup> a la producción activa del resultado típico de blanqueo. A nuestro juicio, dicha expresión precisa, en primer lugar “que el elemento verbal de una concreta figura típica penal pueda conjurarse en modalidad omisiva” (STS de 19 de octubre de 2.002). Atendiendo al tenor literal de los números 1 y 2 del artículo 301 CP, de entre las conductas típicas susceptibles de ser cometidas en comisión por omisión, plantean especiales problemas para ser “conjugadas en modalidad omisiva” la adquisición, la conversión y la transmisión de un bien. A nuestro juicio, dichas conductas sólo pueden desplegarse a través de un comportamiento externo, corporal, voluntario, dirigido a un fin, y no pueden realizarse por tanto de forma omisiva<sup>353</sup>. Sin embargo, la modalidad típica prevista en el artículo 301.2 CP, de naturaleza esencialmente encubridora, pueden realizarse tanto mediante acciones como mediante comportamientos omisivos, ya sean dolosos o negligentes.

Si el primer requisito impuesto por el artículo 11 CP (el delito ha de ser prohibitivo de causar un resultado) nos permitió excluir de su ámbito de aplicación la posesión y la utilización de los bienes así como los actos indeterminados tendentes a la ocultación, encubrimiento o ayuda del artículo 301.1 CP, la exigencia de la equivalencia estructural permitirá descartar la modalidades comisivas de adquisición, conversión y transmisión. Reducido el ámbito del blanqueo omisivo a la modalidad típica prevista en

---

<sup>351</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Comentarios al Código Penal*, op. cit., pág. 705, nota a pie de página nº 127. Ya nos hemos manifestado en contra de la posibilidad de admitir la omisión propia en relación con el art. 301.1, pues en él no se impone ninguna obligación de hacer en favor de la salvaguarda de determinado bien jurídico -que es lo que caracteriza a los delitos de omisión propia-, sino que prohíbe la realización de conductas activas o realizar cualquier acto con determinada finalidad.

<sup>352</sup> Vid. CARPIO DELGADO, J. del, *El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal*, op. cit., pág. 217. La autora afirma que la equivalencia valorativa y estructural ocurrirá sólo en aquellos casos “en los que el legislador, al configurar el tipo, no describa expresamente la forma de ejecución del delito, cabiendo la posibilidad de que el resultado sea capaz de producirse tanto por un hacer como por un no hacer”. Y para CARPIO DELGADO “ésta es una característica del delito de blanqueo de bienes.” (Ibidem, pág. 220).

<sup>353</sup> Aun en la hipótesis de que pudieran conjugarse los verbos adquirir, convertir o transmitir en sentido omisivo, cualquier operación de características similares a la adquisición, conversión o transmisión que pudiese realizarse sobre el bien a través de un comportamiento omisivo no comportaría el mismo contenido del injusto que las conductas activas de adquisición, conversión y transmisión.

el artículo 301.2 CP, veamos en qué condiciones será penalmente relevante la realización de dicha modalidad típica a través de un comportamiento omisivo.

La imputación individualizada de un delito de blanqueo en comisión por omisión precisa, en primer lugar, la *equivalencia valorativa y estructural*. La concreta conducta omisiva ha de ser material y estructuralmente equivalente en el plano normativo<sup>354</sup> a la producción activa del resultado de blanqueo, y debe estar dotada de un desvalor de injusto igualado a aquélla<sup>355</sup>. Para afirmar la equivalencia legal, no es suficiente que la omisión no evite la realización de un riesgo preexistente para el bien jurídico, sino que es preciso, tal y como afirma MAQUEDA ABREU, que sea la propia omisión la que cree dicho peligro o lo incremente y, en todo caso, que el omitente “domine el proceso de su realización”<sup>356</sup> habiendo asumido previamente dicho control<sup>357</sup>.

Asimismo, como segundo requisito, es preciso que al sujeto activo le incumban especiales deberes de asegurar la indemnidad del bien jurídico (*posición de garante*). Sólo aquellos sujetos que tengan especial obligación de evitar que se produzca el resultado típico conjurado en el artículo 301.2 -la efectiva ocultación o encubrimiento de los bienes o capitales, o de su origen delictivo, etc.-, en virtud de la fuente de garantía a la que en cada caso estén vinculados, responderán de un delito de blanqueo en comisión por omisión.

En general se afirma que la fuente del deber jurídico de actuar deriva, en el delito de blanqueo de capitales, de la normativa administrativa de carácter preventivo -Ley 10/2010, de 28 de abril, y su reglamento de desarrollo-. Incluso, en muchos de los casos, se hace depender la relevancia penal del blanqueo omisivo exclusivamente de que el agente ostente la posición de garante derivada de la normativa preventiva, sin entrar a valorar si es posible o no realizar la concreta modalidad comisiva en comisión por omisión, y prescindiendo de la exigencia de la equivalencia valorativa que el artículo 11 CP precisa. En este sentido, ha afirmado CALDERÓN CEREZO que los actos

---

<sup>354</sup> Vid. SILVA SÁNCHEZ, J. M., “Política criminal y reforma legislativa en la comisión por omisión. (El artículo 10 del Proyecto del Código penal de 1.992)”, op. cit., pág. 1082; HUERTA TOCILDO, S., *Principales novedades de los delitos de omisión en el Código Penal de 1995*, op. cit., pág. 31; RODRÍGUEZ MOURULLO, G., “Nuevas reflexiones sobre la cláusula general de la comisión por omisión”, op. cit., pág. 311.

<sup>355</sup> Vid. GRACIA MARTÍN, L., “Los delitos de comisión por omisión. (Una exposición crítica de la doctrina dominante)”, op. cit., págs. 411 y 412.

<sup>356</sup> Vid. MAQUEDA ABREU, M<sup>a</sup>. L., *Derecho Penal. Parte General*, op. cit., pág. 811.

<sup>357</sup> Vid. SILVA SÁNCHEZ, J. M., *El delito de omisión. Concepto y sistema*, op. cit., págs. 464-465.

típicos “pueden consistir en un hacer o en una omisión, si bien que en este segundo caso el omitente habría de ser destinatario de un deber jurídico de actuar impuesto legal o reglamentariamente”<sup>358</sup>. En sentido similar, QUINTERO OLIVARES sostiene que “fácil es aceptar que [la conducta] se puede cometer por acción y por omisión, en este segundo caso cuando el administrativamente obligado omite aplicar los controles o inspecciones debidos precisamente para la prevención de estas conductas”<sup>359</sup>. Para ARÁNGUEZ SÁNCHEZ es “ilógico eliminar la comisión por omisión [en el delito de blanqueo], teniendo en cuenta la existencia de específicos deberes de comunicación de operaciones sospechosas por parte de los intermediarios del sector financiero”<sup>360</sup>. Por su parte, MOLINA MANSILLA afirma que en los supuestos de “encubrimiento, nos hallamos ante una comisión por omisión, en la que el sujeto en posición de garante infringe mediante su omisión un deber legal o contractual de proceder, que en este caso vendría impuesto por las leyes especiales de prevención de blanqueo de capitales”<sup>361</sup>. También parecen vincular la fuente de garantía exclusivamente a la norma preventiva LÓPEZ BARJA DE QUIROGA/ALONSO GONZÁLEZ/ ENCINAR DEL POZO<sup>362</sup>, BLANCO CORDERO<sup>363</sup>, LOMBARDERO EXPÓSITO<sup>364</sup> y FABIÁN CAPARRÓS<sup>365</sup>. Más acertadamente, CARPIO DELGADO ha considerado que es posible puede fundamentar la posición de garantía respecto del bien jurídico en la ley preventiva y su reglamento, siendo los sujetos vinculados por dicha ley los que tienen la obligación de actuar para evitar que se produzca el resultado lesivo, si bien, junto a la posición de garantía, declara la autora imprescindible que el delito sea de resultado y que se verifique la equivalencia de la omisión a la producción activa del resultado<sup>366</sup>. Del mismo modo, VIDALES RODRÍGUEZ, junto a la posición de garante - determinada a su juicio por lo dispuesto en la ley preventiva- considera necesario que “estemos ante un delito de resultado”<sup>367</sup>.

---

<sup>358</sup> Vid. CALDERÓN CEREZO, A., “Algunos aspectos críticos del blanqueo de capitales. Legislación y jurisprudencia”, op. cit., pág. 77.

<sup>359</sup> Vid. QUINTERO OLIVARES, G., *Comentarios a la Parte especial del Derecho penal*, op. cit., pág. 944.

<sup>360</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 231.

<sup>361</sup> Vid. MOLINA MANSILLA, M<sup>a</sup> del C./ MOLINA MANSILLA, L., *El blanqueo de dinero*, op. cit., págs. 23 y 24.

<sup>362</sup> Vid. LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J./ ALONSO GONZÁLEZ, A./ ENCINAR DEL POZO, M. A., *Código Penal comentado con jurisprudencia sistematizada y concordancias*, op. cit., pág. 938.

<sup>363</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3<sup>a</sup> ed. op. cit., págs. 516 y 517.

<sup>364</sup> Vid. LOMBARDERO EXPÓSITO, L. M., “La perspectiva penal”, op. cit., pág. 172.

<sup>365</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit. págs. 379 y 380.

<sup>366</sup> Vid. CARPIO DELGADO, J. del, *El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal*, op. cit., págs. 212-215 *passim*.

<sup>367</sup> Vid. VIDALES RODRÍGUEZ, C., *Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código penal de 1995*, op. cit., págs. 107 y 108. A esta línea interpretativa se ha adscrito MARTOS NÚÑEZ (“Receptación y blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 210).

Como dijimos, aquellos destinatarios de la normativa preventiva -previstos, recordemos, en el artículo 2 de la Ley 10/2010- serán preferentemente los sujetos que integren el ámbito de aplicación del artículo 11 CP en relación con el delito de blanqueo. Pero, la posición de garantía puede tener origen una norma distinta o en cualquier otra prevista en los apartados a) y b) del segundo inciso del artículo 11<sup>368</sup>. Asimismo, tal y como se dijo *supra*<sup>369</sup>, no todo incumplimiento de la normativa preventiva es merecedora de responsabilidad penal, toda vez que la inobservancia de algunas de las obligaciones impuestas a los sujetos obligados no serán aptas o idóneas para crear una ocasión de riesgo que pueda materializarse en la realización de un resultado de blanqueo. Así, el incumplimiento de obligaciones formales, tales como la llevanza ordenada de documentación y conservación de registros, de establecimiento de procedimientos y órganos adecuados de control interno y de comunicación o de formación en materia de prevención de blanqueo a los empleados<sup>370</sup> será en todo caso penalmente intrascendente. A nuestro juicio, dichas obligaciones “formales” no son fuente de garantía en el sentido de que su incumplimiento no genera en el omitente ningún deber especial de evitar ulteriores resultados de blanqueo que puedan estar conectados a través de hipótesis causales con dicho incumplimiento.

Por último, para que el blanqueo omisivo sea penalmente relevante es necesario, además de acreditar la efectiva ocultación o encubrimiento del origen delictivo del bien o capital -sin que sea suficiente que la conducta del sujeto haya ido dirigida a tales fines-<sup>371</sup>, verificar que *la acción omitida hubiera evitado el resultado “con una probabilidad rayana en la certeza”*. Es preciso que el operador jurídico sea rigurosamente respetuoso con esta fórmula, y no hacer responder al omitente por la lesión sobrevenida omitida cuando sólo existiese la probabilidad de impedir dicho resultado<sup>372</sup>. Teniendo en cuenta el exorbitante ámbito de aplicación del tipo de

---

<sup>368</sup> Vid., en este mismo sentido, ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 344, si bien los monografistas extienden el ámbito de la comisión por omisión a las conductas previstas en el artículo 301.1 CP.

<sup>369</sup> Vid. *supra*, apartado 4.1.5 de este capítulo (págs. 347y ss.).

<sup>370</sup> Vid. ZARAGOZA AGUADO, J. A., “El blanqueo de bienes de origen criminal”, op. cit., págs. 399 y 400; FEIJÓO SÁNCHEZ, B., “Imputación objetiva en el Derecho penal económico y empresarial: Esbozo de una teoría general de los delitos económicos”, op. cit., pág. 45.

<sup>371</sup> Cuando sólo pueda acreditarse que la intención del sujeto es la ocultación o el encubrimiento referidos, pero no quede demostrada la efectiva producción de dicho resultado, el comportamiento omisivo no podrá reconducirse a la genérica cláusula de realizar cualquier acto con la finalidad de ocultar o encubrir, prevista en el art. 301.1, pues, como vimos, conforma un delito de resultado cortado que no admite la imputación en comisión por omisión.

<sup>372</sup> Vid. GIMBERNAT ORDEIG, E., “A vueltas con la imputación objetiva, la participación delictiva, la omisión impropia y el Derecho penal de la culpabilidad”, op. cit., págs. 81 y 82.

blanqueo, es más necesario, si cabe, evitar cualquier exceso de punibilidad en el ámbito de este delito.

En conclusión, a nuestro juicio, sólo será penalmente relevante el blanqueo omisivo en la modalidad comisiva prevista en el artículo 301.2 CP, y únicamente en las condiciones descritas: que la omisión sea valorativa y estructuralmente equivalente a la producción activa de un resultado de blanqueo, que el omitente tenga especiales deberes evitar que se produzca dicho resultado, y que pueda afirmarse que la acción omitida hubiera evitado el resultado “con una probabilidad rayana en la certeza”.

### **4.3. EL OBJETO MATERIAL DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALS**

#### **4.3.1. INTRODUCCIÓN**

Se ha definido el *objeto material del delito* como aquél sobre el que recae la conducta típica<sup>373</sup>. Si bien actualmente la doctrina le concede, en general, una limitada función dogmática<sup>374</sup>, la estructura típica de determinados ilícitos penales sí confiere una significativa relevancia a este elemento en la conformación del tipo objetivo. Así ocurre en el delito de blanqueo de capitales, donde su objeto material, los bienes de origen delictivo, “es el elemento de la estructura típica alrededor del cual giran todos los demás”<sup>375</sup>.

De acuerdo con PALMA HERRERA, hemos de diferenciar el objeto material del delito de blanqueo de capitales de los efectos, instrumentos y ganancias del mismo<sup>376</sup>. En cualquier ilícito penal, los bienes pueden desempeñar cada una de las cuatro funciones apuntadas<sup>377</sup>, si bien el bien, como objeto material del delito, que aquí

---

<sup>373</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 303; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 239; MUÑOZ CONDE, F./GARCÍA ARÁN, M., *Derecho Penal. Parte General*. Tirant lo Blanch, 7ª edición, Madrid, 2007, pág. 262. Los últimos autores citados hablan de “aquella cosa del mundo exterior sobre la que recae directamente la acción típica”.

<sup>374</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 241.

<sup>375</sup> Ibidem. Asimismo, MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de capitales”, 3ª ed., op. cit., pág. 483.

<sup>376</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 310 y ss. Con efectos del delito se identifican aquellos “objetos producidos por el delito”; las ganancias están constituidas por aquellas ventajas económicamente cuantificables derivadas del hecho delictivo; los instrumentos del delito son los “elementos materiales de que se haya valido el autor del delito para su ejecución”.

<sup>377</sup> Ibidem, pág. 310.

interesa, constituye un elemento del tipo objetivo, precisamente aquél sobre el que recae la acción típica. En el delito de blanqueo, el objeto material se identifica con los bienes procedentes de una actividad delictiva previa: aquellas ventajas económicamente evaluables “enmarcadas en una relación causa-efecto con el delito”<sup>378</sup>. Pueden constituir, por tanto, el objeto del delito de blanqueo las ganancias obtenidas con la realización del delito antecedente, o el precio obtenido por su comisión<sup>379</sup>.

De este modo, quedarían en principio excluidos del concepto de objeto material tanto los instrumentos empleados en el delito previo como sus efectos<sup>380</sup>. Sin embargo, para PALMA, cuando los instrumentos del hecho delictivo previo constituyan “una ventaja derivada del delito evaluable económicamente, y en torno a ellos exist[a] un interés en mantener el tráfico lícito, pueden llegar a ser también objeto material del delito”<sup>381</sup>. La doctrina mayoritaria también rechaza *a priori* que los efectos del delito previo sean aptos para constituir el objeto material del delito de blanqueo. Si bien BLANCO CORDERO no halla inconveniente en aceptar que también pueden conformar el objeto material del blanqueo los bienes que genere el delito antecedente cuando antes no existieran<sup>382</sup>, otros autores, acertadamente a nuestro juicio, consideran que los efectos del delito previo habrían de quedar fuera del concepto de “objeto material” del blanqueo, pues el legislador no puede pretender que resulte amparado el “tráfico lícito” de bienes ilícitos, como podrían serlo monedas falsificadas, alimentos adulterados o drogas<sup>383</sup>.

El objeto material del tipo de blanqueo de capitales está constituido por *bienes* que tengan su *origen* (artículo 301.1) o *procedencia* (artículo 301.2) en una *actividad delictiva*.<sup>384</sup> Son pues tres los elementos que definen dicho objeto material: los bienes, el

<sup>378</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 314 y 315.

<sup>379</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 251.

<sup>380</sup> Razones gramaticales y teleológicas avalan suficientemente esta correcta interpretación. (Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 249; ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 205).

<sup>381</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 316. Sería este el caso del “diamante utilizado para cortar el cristal de la urna en la que se encuentra la obra de arte robada, instrumento del delito y ganancia obtenida con el mismo cuando es entregado al autor del robo en pago por sus servicios”.

<sup>382</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 251.

<sup>383</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 317.

<sup>384</sup> La doctrina mayoritaria coincide en esta definición, sin embargo encontramos algunos autores para los que el artículo 301.2 tienen un objeto material diferenciado: no se trataría de los bienes, sino su “verdadera naturaleza, el origen, la localización, el destino, los derechos o la propiedad sobre los bienes”. (Vid. CARPIO DELGADO, J. del, *El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal*, op. cit., págs. 110-114; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 2ª ed., op. cit., pág. 245; ÁLVAREZ PASTOR,

delito y el nexo de unión entre ambos: su origen o procedencia. Para lograr una adecuada comprensión del objeto material del delito, es oportuno analizar cada uno de ellos por separado. Se dará así comienzo este apartado con el análisis de cada uno de dichos elementos, dedicando especial atención a la cuota tributaria defraudada en el delito contra la Hacienda Pública como objeto del delito de blanqueo. En los últimos años se ha intensificado el debate acerca de la posibilidad de que el delito fiscal pueda ser el delito previo del blanqueo de capitales, problemática íntimamente ligada con el autoblanqueo y las novedosas formas comisivas de posesión y utilización. Veremos que, de acuerdo con una interpretación literal del tipo, es posible que la cuota tributaria defraudada constituya el objeto del delito de blanqueo; sin embargo la cuestión, lejos de ser pacífica en la doctrina, sigue siendo objeto de intenso debate, sin que pueda afirmarse que haya una posición mayoritaria clara al respecto.

Tras el estudio de los elementos que definen el objeto material del delito, abordaremos el análisis de los bienes sustitutivos, aquellos que no proceden directamente de la comisión del delito, sino que son fruto alguna transformación jurídica o económica operada sobre el bien o capital originario. La doctrina discute cuál es la extensión o alcance de la contaminación sobre el bien procedente del hecho delictivo previo. Por muchas transformaciones de que éste sea objeto, incluso a través de operaciones lícitas, ¿nunca llegará a perder su carácter ilegítimo? ¿O por el contrario es posible la “descontaminación” del bien? Si la respuesta a esta pregunta es afirmativa, ¿cuáles son los criterios que permiten dicha descontaminación y bajo qué condiciones? A la resolución de dichas cuestiones dedicaremos la última parte de este apartado.

---

D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 346 y 347). Coincidimos con ARÁNGUEZ SÁNCHEZ en que todas esas expresiones no son más que circunstancias o cualidades de los bienes que van referidos a la ilicitud de la procedencia del bien, verdadero objeto material también en el número 2 del artículo 301. (*El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 181). Como afirma PALMA HERRERA, “la conducta recae sobre una cosa, el bien de procedencia delictiva (...), aunque el propio tipo limita la intervención penal sólo a los supuestos en los que esa conducta produzca como resultado la ocultación o encubrimiento de estas circunstancias, cualidades o caracteres”. (*Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 304).



## 4.3.2. ELEMENTOS DEFINITORIOS DEL OBJETO MATERIAL DEL DELITO

### 4.3.2.1. LOS BIENES

La doctrina, de acuerdo con los instrumentos internacionales que han inspirado la regulación penal del blanqueo<sup>385</sup>, coincide en otorgar un sentido amplio a la expresión “bienes”<sup>386</sup>, comprensivo de cualquier bien apto para el tráfico mercantil<sup>387</sup> de carácter lícito<sup>388</sup>, susceptible de ser incorporado al patrimonio<sup>389</sup> y que entrañe “cualquier beneficio valorable económicamente”<sup>390</sup>. Un concepto amplio que dé cabida a “activos de cualquier tipo, corporales o incorporeales, muebles o raíces, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos

<sup>385</sup> Fundamentalmente el artículo 1 q) de la Convención de Viena de 1988, cuya amplísima definición es acogida en términos prácticamente idénticos en el artículo 2 d) de la Convención de Palermo, en el artículo 1 b) del Convenio del Consejo de Europa de 1990, en el artículo 1 de la Directiva 91/308/CEE y en el artículo 3.3 de la Tercera Directiva (2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005), disposición esta última que considera bienes “todo tipo de activos, tanto materiales como inmateriales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así como los documentos o instrumentos jurídicos con independencia de su forma, incluidas la electrónica o la digital, que acrediten la propiedad de dichos activos o un derecho sobre los mismos”. (Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 304 y 305; ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 347; ZARAGOZA AGUADO, J. A., “Artículo 301”, op. cit., pág. 1161).

<sup>386</sup> Sentido lo suficientemente amplio como “para abarcar la totalidad de las modalidades que puedan revestir los capitales o beneficios económicos” derivados del hecho previo. (Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 248). Vid., asimismo, ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 181; PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 304, 305 y 307; FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 391; ALONSO PÉREZ, F., “Conductas afines a la receptación”, op. cit., pág. 473; BAJO FERNÁNDEZ, M./BACIGALUPO SAGESSE, S., “Blanqueo de capitales”, 2ª ed., op. cit., pág. 729; MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de capitales”, 3ª ed., op. cit., pág. 483; TOMÁS-VALIENTE LANUZA, C., “El delito de blanqueo de capitales”, *Auditoría, prevención y represión del blanqueo de capitales*, Ed. Liber Factory. Madrid, 2014, pág. 54; MARTÍNEZ-ARRIETA MÁRQUEZ DE PRADO, I., *El autoblanqueo. El delito fiscal como antecedente del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 29.

<sup>387</sup> Vid. GÓMEZ INIESTA, D. J., *El delito de blanqueo de capitales en Derecho Español*, op. cit., pág. 47; ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 182; PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 306; MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de Capitales”, 3ª ed., loc. cit.; CALDERÓN CEREZO, A., “Algunos aspectos críticos del blanqueo de capitales. Legislación y jurisprudencia”, op. cit., pág. 81; id., *Comentarios al Código penal*, vol. 3, op. cit., pág. 2297.

<sup>388</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 182; PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 306.

<sup>389</sup> Vid. MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de capitales”, 3ª ed., loc. cit.; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., loc. cit.

<sup>390</sup> Expresión de MUÑOZ CONDE (*Derecho Penal. Parte Especial*, op. cit., pág. 515) que, por su alto grado de expresividad, es recogida en la mayoría de las monografías relativas al delito de blanqueo. (Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 182; PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 305 y 306; ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 347; MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de capitales”, 3ª ed., loc. cit.; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., loc. cit.; id., “El delito fiscal como actividad delictiva previa del blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 20; BAJO FERNÁNDEZ, M./BACIGALUPO SAGESSE, S., “Blanqueo de capitales”, 2ª ed., loc. cit.; MARTOS NÚÑEZ, J. A., “Receptación y blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 210; MARTÍNEZ-ARRIETA MÁRQUEZ DE PRADO, I., *El autoblanqueo. El delito fiscal como antecedente del blanqueo de capitales*, loc. cit.).

sobre dichos activos”, en los dilatados términos definidos por el artículo 1 q) de la Convención de Viena sobre tráfico de drogas<sup>391</sup>.

El artículo 301 CP no precisa que el valor de los bienes supere determinada cuantía<sup>392</sup>. De acuerdo con la configuración típica del delito, es apta como conducta blanqueadora la introducción en el tráfico legal desde el primer euro que tenga origen delictivo<sup>393</sup>. Frente a esta realidad normativa, de dudoso encaje con los principios de intervención mínima y de proporcionalidad del derecho penal<sup>394</sup>, un sector doctrinal ha reclamado una reformulación del tipo que establezca un límite por debajo el cual la conducta no sea punible<sup>395</sup> o su penalidad se atenúe<sup>396</sup>. Dicha demanda es totalmente oportuna, toda vez que, como ha afirmado CALDERÓN CEREZO, cuando el bien es de cuantía insignificante, la conducta “no incorpora lesividad respecto del bien jurídico representado fundamentalmente por el orden económico”, y debería, por tanto, resultar impune<sup>397</sup>. También se han propuesto criterios limitativos desde la perspectiva de los delitos de referencia. En este sentido, basándose en principios de la doctrina alemana, SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO ha afirmado que si el tipo de blanqueo halla su justificación en la persecución de “la criminalidad de altos vuelos”, la selección de ilícitos previos habría de quedar determinada por la gravedad de los mismos, “descartando los supuestos de bagatela”. Sólo debería considerarse objeto de blanqueo los bienes procedentes de aquellos delitos caracterizados por “su capacidad de producir grandes flujos financieros, por su tipología de desarrollo, al incluir actividades repartidas en distintos países, por su conexión con la delincuencia organizada y, desde el punto de vista de su represión, por la dificultad de descubrirlos empleando las técnicas clásicas de investigación. Tales requisitos los reunirían, además de la delincuencia dedicada al narcotráfico, las redes internacionales mafiosas de trata de

---

<sup>391</sup> Vid. ZARAGOZA AGUADO, J. A., “El blanqueo de bienes de origen criminal”, op. cit., pág. 385. Conforme a este extendido concepto de bienes, “no existe obstáculo alguno para incluir el producto del delito, las ganancias y las sucesivas transformaciones o mutaciones que aquellos experimenten en el tráfico jurídico”.

<sup>392</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 183.

<sup>393</sup> Vid. CALDERÓN CEREZO, A., *Comentarios al Código penal*, vol. 3, op. cit., pág. 2297. En el mismo sentido, PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 306.

<sup>394</sup> Vid. CALDERÓN CEREZO, A., *Comentarios al Código penal*, vol. 3, loc. cit.

<sup>395</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 184; PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 352 y 353; FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y TORRES, J., *Blanqueo de capitales y principio de lesividad*, op. cit., pág. 316.

<sup>396</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 184; FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 392.

<sup>397</sup> Vid. CALDERÓN CEREZO, A., “Algunos aspectos críticos del blanqueo de capitales. Legislación y jurisprudencia”, op. cit., pág. 81; id., *Comentarios al Código penal*, vol. 3, loc. cit.; id., “El marco jurídico del blanqueo de capitales: aspectos penales y administrativos”, op. cit., pág. 7.

blancas, falsificación de moneda, tráfico de armas, juegos ilícitos, fraudes financieros, vertidos tóxicos ilegales, etc.”, en definitiva, la gran criminalidad que opera motivada por fines económicos<sup>398</sup>. Otros autores postulan una interpretación más laxa del tipo que permita excluir de su aplicación aquellas “pequeñas transacciones económicas orientadas a cubrir necesidades primarias del delincuente”<sup>399</sup>. QUINTERO OLIVARES va más allá, llegando a afirmar que aunque el tipo no lo requiera expresamente, “del sentido de la ley puede desprenderse que ha de tratarse de una cantidad razonablemente grande de bienes”<sup>400</sup>.

Consideramos que, tal y como está configurado el tipo, del mismo no puede extraerse ningún criterio limitativo, pero, de acuerdo con un importante sector doctrinal, es posible apelar al *principio de insignificancia* como corrector dogmático para excluir del ámbito típico conductas “de bagatela”<sup>401</sup>, no dotadas de un injusto suficiente merecedor de reproche penal.

Aunque algún autor ha vinculado este principio a la doctrina de la adecuación social<sup>402</sup>, mayoritariamente se concibe como un criterio hermenéutico limitativo<sup>403</sup> que, según algunos autores, permite excluir la tipicidad<sup>404</sup> de aquellas conductas que, si bien son formalmente subsumibles en la descripción de un tipo penal, su insignificante gravedad impide considerarlas idóneas para afectar al bien jurídico protegido por el

---

<sup>398</sup> Vid. SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, J. L., “Algunas cuestiones relativas a la regulación penal del blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 779 y 780.

<sup>399</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, loc. cit.; MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de Bienes”, 3ª ed., op. cit., pág. 504.

<sup>400</sup> Vid. QUINTERO OLIVARES, G., *Comentarios a la Parte especial del Derecho penal*, loc. cit.

<sup>401</sup> Vid. SILVA SÁNCHEZ, J. M., “Delincuencia patrimonial leve: una observación del estado de la cuestión”, *Estudios penales y criminológicos*, nº 25, 2004, págs. 333, 344 y 345.

<sup>402</sup> Vid. MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, 9ª ed., op. cit., pág. 528.

<sup>403</sup> Vid. MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., *Venta de cantidades mínimas de droga*, op. cit., pág. 84; RUEDA MARTÍN, M. A., *La Teoría de la imputación objetiva del resultado en el delito doloso de acción*, op. cit., pág. 268. En efecto, MANJÓN-CABEZA OLMEDA afirma que la adecuación social y la insignificancia son dos causas diferenciadas de la atipicidad, pues la primera va asociada a la aprobación social de la conducta mientras la segunda “no supone la corrección o aprobación social, sino sólo una cierta tolerancia”. (*Venta de cantidades mínimas de droga*, op. cit., pág. 76). También niega RUEDA MARTÍN que en los supuestos de insignificancia se pueda invocar la adecuación social. Según la autora, estos supuestos en realidad constituyen conductas socialmente inadecuadas “porque existe una finalidad jurídico penalmente relevante, esto es, el dolo”. En cualquier caso, considera la autora que “el criterio de la insignificancia (...) es inseguro y vago porque no dibuja claramente los límites entre lo insignificante y lo significativo para los tipos, mientras la adecuación social se muestra como un instrumento más preciso al contemplar tanto el sistema funcional y dinámico de los bienes como el contenido de la voluntad del sujeto”. (*La Teoría de la imputación objetiva del resultado en el delito doloso de acción*, op. cit., págs. 269 y 270).

<sup>404</sup> Vid. MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, 9ª ed., loc. cit.; MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., *Venta de cantidades mínimas de droga*, op. cit., pág. 82; ESER, A., “La Adecuación social”: ¿Figura legal superflua o necesaria? Reflexiones respecto a la concesión de ventajas socialmente habituales”, op. cit., pág. 462, con ulteriores referencias a ROXIN.

delito<sup>405</sup>. El principio de insignificancia encuentra fundamento, de este modo, en el *principio de lesividad*, por cuya virtud las afectaciones exiguas de bienes jurídicos excluyen la tipicidad. Si, como acertadamente ha afirmado ALCALÉ SÁNCHEZ, ha de distinguirse entre una realización aparente y la realización efectiva del tipo a través de una interpretación teleológica del precepto, “esto es, desde el bien jurídico”<sup>406</sup>, aquellas conductas que no lesionen o pongan en peligro de manera significativa un bien jurídico tutelado han de considerarse atípicas<sup>407</sup>. El operador jurídico habría así de realizar un doble nivel de análisis de la conducta objeto de valoración: por un lado, la antijuridicidad formal del hecho o mera contrariedad de la conducta a la norma penal; y por otro, la concurrencia o no en el hecho de la necesaria antijuridicidad material. De acuerdo con esta última valoración, si no se ha puesto en peligro el bien jurídico, o se ha puesto en peligro de manera insignificante, la conducta habrá de ser considerada atípica.

Si bien el principio de insignificancia no se halla positivizado en derecho español en ningún precepto de carácter material o procesal<sup>408</sup>, no hay razón, de acuerdo con MANJÓN-CABEZA OLMEDA, para no invocar su aplicación como “criterio interpretativo-limitativo” en aquellos delitos en los que “quepa graduar la importancia del ataque al bien jurídico”<sup>409</sup>. No comparte, sin embargo, esta idea la doctrina jurisprudencial, al negar con carácter general la operatividad del principio de insignificancia, rechazando en todo caso su aplicación respecto a los delitos graves (STS 53/2009, de 26 de enero). Si bien en ocasiones Sala Segunda ha apelado a dicho principio como criterio hermenéutico reductor del ámbito típico en materia de tráfico de drogas<sup>410</sup>, no existen, por el momento, pronunciamientos similares en supuestos de

<sup>405</sup> Vid. MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., *Venta de cantidades mínimas de droga*, op. cit., pág. 84.

<sup>406</sup> Vid. ALCALÉ SÁNCHEZ, M., “Los delitos de mera actividad”, *Revista de derecho penal y criminología*, nº 10, 2002, pág. 30.

<sup>407</sup> Vid. MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., *Venta de cantidades mínimas de droga*, loc. cit.

<sup>408</sup> Ibidem, págs. 81 y 82.

<sup>409</sup> Ibidem, pág. 84.

<sup>410</sup> En el ámbito de los delitos contra la salud pública, la Sala Segunda ha afirmado que “deben de quedar excluidas de la punición por este delito aquellas conductas en las que, aún cuando aparentemente se realice la conducta típica, por las especiales o excepcionales circunstancias que concurren en el caso concreto, puede excluirse totalmente la generación de riesgo alguno para el bien jurídico protegido. En este ámbito se ha hecho referencia en sentencias de esta Sala al principio de insignificancia: cuando la cantidad de droga es tan insignificante que resulta incapaz de producir efecto nocivo alguno en la salud, carece la acción de antijuridicidad material por falta de un verdadero riesgo para el bien jurídico protegido en el tipo.” (STS 977/2003, de 4 de julio). De acuerdo con las SSTs 1139/2010, de 24 de noviembre, y 15/2011, de 28 de enero, cuando la cantidad de sustancia prohibida incautada se sitúa “claramente por debajo del umbral de toxicidad que permitiría considerar a la acción enjuiciada como de riesgo para la salud pública”, faltaría “un elemento objetivo del tipo penal central para su aplicación, lo que es determinante de la atipicidad de la conducta”. En la STS 183/2008, de 29 de abril, se afirma que cuando la cantidad de droga no supera el umbral de la dosis mínima psicoactiva, puede afirmarse que no genera “riesgo alguno para el bien jurídico protegido, al resultar

blanqueo, pese a que un sector de la doctrina especializada reclama su aplicación también en este ámbito.

En efecto, para evitar que se subsuman en el tipo penal actos o negocios de bagatela, afirma ABEL SOUTO, habrá de interpretarse la norma de acuerdo con el principio de insignificancia, excluyendo de su ámbito de aplicación aquellas conductas que “pese a encajar en [la formulación típica] y poseer algún desvalor, entrañan un injusto mínimo”<sup>411</sup>. Dichas supuestos habrían de ser “relegados a la atipicidad”<sup>412</sup>. Incluso, de *lege ferenda*, propone el autor que en el precepto se incluya un *quantum* que delimite la relevancia penal del blanqueo<sup>413</sup>. Otros autores especializados han considerado preferible, más acertadamente en nuestra opinión, que de la determinación de dichos límites cuantitativos se encargue la jurisprudencia, menos rígida y más fácilmente actualizable<sup>414</sup>. A su vez, en la línea propuesta por otros autores, el legislador habría de estudiar el establecimiento de un ilícito de menor entidad que conminara conductas blanqueadoras de escasa relevancia lesiva<sup>415</sup>.

Coincidimos con ABEL SOUTO en que el bien jurídico protegido ha de jugar un importante papel a la hora de tamizar el desmesurado ámbito de aplicación que la redacción del tipo del art. 301 CP sugiere. A la luz del bien jurídico protegido, sólo aquellas conductas que efectivamente perjudiquen intereses socioeconómicos podrán considerarse *idóneas* para cubrir el mínimo injusto exigible para la lesión del bien jurídico. Aquellas conductas que apenas creen una ocasión de riesgo para el orden económico<sup>416</sup> habrán de ser consideradas excluidas, de acuerdo con el principio de

---

(...) incapaz de producir efecto nocivo alguno en la salud”. Esta circunstancia “elimina la antijuricidad material del hecho, transmutando en atípica la conducta enjuiciada (principio de insignificancia)”. En cualquier caso, ha afirmado MANJÓN-CABEZA que la jurisprudencia se muestra ambigua a la hora de aplicar este principio a los delitos de tráfico de drogas: si bien es acogido en algunas Sentencias, existen otras que se resisten a aplicarlo. Cita la autora la STS 901/2003, que dispone que en los delitos graves no cabe invocar este principio, por no existir en la legislación positiva precepto alguno que “autorice su aplicación para no penar un comportamiento que es típico y antijurídico.” (*Venta de cantidades mínimas de droga*, op. cit., pág. 81).

<sup>411</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., pág. 195.

<sup>412</sup> Ibidem, págs. 194 y 195.

<sup>413</sup> Ibidem, pág. 196. En sentido similar, vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 183 y 184; PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 352 y 353.

<sup>414</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 297 y 298, MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de Capitales”, 3ª ed., op. cit., págs. 484 y 485.

<sup>415</sup> Propuesta apuntada por ABEL SOUTO (*El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., pág. 199) y, anteriormente, por ARÁNGUEZ SÁNCHEZ (*El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 184 y 185).

<sup>416</sup> Es muy ilustrativo el ejemplo propuesto por ABEL del encubrimiento de un pequeño botín que deriva de un robo agravado. (*El Delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., pág. 202).

insignificancia, del ámbito de tipicidad del art. 301 CP, por ausencia de lesión o puesta en peligro significativa de los bienes jurídicos protegidos por el delito de blanqueo<sup>417</sup>.

#### **4.3.2.2. LA ACTIVIDAD DELICTIVA COMO HECHO DE REFERENCIA**

El delito de blanqueo de capitales requiere que los bienes o fondos sobre los que se desarrolla la conducta típica procedan de una actividad delictiva previa<sup>418</sup>, esto es, cometida con anterioridad<sup>419</sup>.

La “actividad delictiva” constituye un elemento normativo del tipo<sup>420</sup>, pues la comprensión de su significado no puede ser apreciado por la mera percepción sensitiva, sino que exige un “proceso valorativo o de comprensión intelectual”<sup>421</sup> por parte del intérprete, como realidad determinada jurídicamente<sup>422</sup>, para conocer su significado jurídico exacto<sup>423</sup>. La doctrina, como veremos, acepta de forma general que la “actividad delictiva” ha de interpretarse como hecho típico y antijurídico, con independencia de las circunstancias relativas a la culpabilidad y la punibilidad de su

---

<sup>417</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., págs. 202 y 203. Incluso, afirma el autor, “el mismo principio de insignificancia resulta aplicable a los actos básicos de consumo, prestaciones de servicios o ventas de mercancías en los negocios vitales cotidianos”. (Ibidem, pág. 203).

<sup>418</sup> Por delito (o actividad delictiva) de referencia, se entiende aquél que origina los bienes que son objeto de la conducta típica de blanqueo. (Vid. GÓMEZ BENÍTEZ, J. M., “Reflexiones técnicas y de política criminal sobre el delito de blanqueo de bienes”, op. cit., pág. 5). Dicha expresión se emplea de forma equivalente a las de delito principal, base, subyacente, antecedente, previo, de referencia, etc., expresiones todas ellas que, con un mismo significado, aluden comúnmente al delito del que proceden los bienes, aquél cuyo beneficio económico se trata en definitiva de blanquear.

<sup>419</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 273.

<sup>420</sup> De acuerdo con PALMA HERRERA, “desde una perspectiva interpretativa o cognoscitiva, los elementos del tipo pueden ser descriptivos o normativos. Serán descriptivos cuando el intérprete alcance a comprender su significado de forma natural y sin necesidad de segundas valoraciones por tratarse de conceptos pertenecientes al lenguaje ordinario. Serán, por el contrario, normativos, cuando precisen de un ulterior análisis intelectual; un especial ejercicio de valoración para poder ser constatados, sin que baste el mero conocimiento derivado de la experiencia o percepción ordinarias para comprobar su existencia en el caso concreto. Planteada la cuestión en estos términos, (...) no cabe sino concluir que se trata de un elemento normativo, ya que no es posible captar con su simple percepción el verdadero significado y contenido que encierra. El concepto de delito requiere un ejercicio de comprensión específica por parte del intérprete”. (*Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 321). Cfr. LANDECHO VELASCO, C. M., *Derecho Penal Español. Parte General*, op. cit., págs. 258 y 259; MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, 9ª ed., op. cit., págs. 242 y 243; ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 267; CALDERÓN CEREZO, A., *Comentarios al Código penal*, vol. 3, op. cit., pág. 2299; FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 328; MARTÍNEZ DE SALINAS, L., “Últimas tendencias jurisprudenciales en materia de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 36; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 659. Por su parte, la jurisprudencia también considera que la actividad delictiva de la que proceden los bienes objeto del blanqueo se configura como un “elemento objetivo (normativo) del tipo”. (SSTS 303/2010, de 22 de marzo, y 28/2010, de 28 de enero).

<sup>421</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, loc. cit.

<sup>422</sup> Vid. MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, 9ª ed., op. cit., pág. 242.

<sup>423</sup> Vid. LANDECHO VELASCO, C. M., *Derecho Penal Español. Parte General*, op. cit., pág. 258.

autor que puedan concurrir en el caso concreto. Con todo, la catalogación de la “actividad delictiva” como elemento normativo tiene relevancia no sólo a efectos de determinar el objeto material del delito de blanqueo, y por tanto de su alcance objetivo, sino también, como estudiaremos en otro capítulo<sup>424</sup>, para la verificación de la tipicidad subjetiva, al incidir en la determinación del “alcance del conocimiento y el error”<sup>425</sup> sobre el hecho delictivo previo por parte del agente.

De acuerdo con la normativa internacional que inspiró su penalización<sup>426</sup>, el delito de blanqueo nació limitado al lavado de activos producto del narcotráfico. En efecto, para los artículos 546 bis f) y 344 bis h) del derogado Código penal de 1973 constituía condición del tipo penal que el delito antecedente estuviese vinculado al tráfico de drogas. Con acertado criterio, el Código penal de 1995 “amplió el abanico de los hechos previos a los delitos graves”<sup>427</sup> pues, como la doctrina se había encargado de advertir, los activos reciclados “no sólo derivan del tráfico de estupefacientes, sino que otras muchas actividades delictivas son susceptibles de generar enormes flujos monetarios”<sup>428</sup>. Siguiendo las recomendaciones de autores holgadamente autorizados en materia de blanqueo<sup>429</sup>, la Ley Orgánica 15/2003 amplió a su vez el radio de acción del artículo 301 CP a los bienes procedentes de cualquier actividad delictiva, con independencia de su gravedad. Dicha ampliación ha de valorarse positivamente, pues reafirma la autonomía del delito y, como recuerda ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, la repercusión del blanqueo en el orden económico -bien jurídico protegido por este delito- no depende del delito precedente, “sino del valor que aflora a la economía lícita a través del blanqueo”<sup>430</sup>. Muchos de los delitos considerados menos graves, que permiten al

<sup>424</sup> Vid. *infra* apartado 5.2.1 del capítulo V, págs. 431 y ss.

<sup>425</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, loc. cit.

<sup>426</sup> Vid. ampliamente BLANCO CORDERO, I., “Penalización de lavado de dinero: aspectos sustantivos, principios y recomendaciones internacionales”, *Combate del lavado de activos desde el sistema judicial*. 3ª edición. Washington, DC: Organización de los Estados Americanos, República Bolivariana de Venezuela, y Banco Interamericano de Desarrollo, 2007, págs. 163 y ss., disponible en el siguiente enlace: [http://www.cicad.oas.org/lavado\\_activos/pubs/Combate\\_Lavado\\_3ed.pdf](http://www.cicad.oas.org/lavado_activos/pubs/Combate_Lavado_3ed.pdf).

<sup>427</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., pág. 223.

<sup>428</sup> Ibidem. Vid., asimismo, BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 278.

<sup>429</sup> Vid. CARPIO DELGADO, J., *El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal*, op. cit., pág. 119; ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 192; FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 386 y 446; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 2ª ed., op. cit., pág. 257; id., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 278 y 279.

<sup>430</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 191. En sentido similar, BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 279.

delincuente obtener pingües beneficios<sup>431</sup>, son igualmente aptos para menoscabar, incluso en mayor grado, el bien jurídico protegido que muchos otros delitos graves. Con todo, un importante sector doctrinal estimó desmesurado el campo de aplicación que abrió la modificación legislativa de 2003, considerando que la extensión del delito previo a cualquier delito contravenía el principio de intervención mínima que ha de inspirar al legislador penal<sup>432</sup>. Ciertamente, la reforma operada por la Ley Orgánica 15/2003 supone una vasta ampliación del ámbito objetivo del tipo, pero está plenamente justificada. El criterio que determina la lesividad de la conducta es el de la rentabilidad económica del delito previo y no el de su gravedad; como ya se dijo, la limitación de la dilatada extensión del ámbito del tipo ha de ir referida a criterios de lesividad material -posibilidad de que la conducta incida en el orden económico-. Y ello dependerá fundamentalmente de la relevancia económica de los bienes sobre los que recaiga la conducta y no de la gravedad del delito previo.

Una de las modificaciones operadas en el tipo por la reforma del Código de 2010 (Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio) incidió en la referencia al hecho previo, al sustituir la anterior expresión “delito” por la locución “actividad delictiva”, lo que provocó encendidas críticas en la doctrina. Partiendo de que, según jurisprudencia consolidada, no se consideraba necesaria la condena por el delito previo para castigar el

---

<sup>431</sup> Ibidem. Acertadamente, BLANCO CORDERO considera correcta la ampliación del hecho previo a todos los delitos, pues se logra evitar “las lagunas que podrían resultar de la remisión a determinados delitos, ya sea en forma de catálogo, ya a una clase de ellos como los de carácter grave, que podrían reorientar la criminalidad organizada hacia otras actividades delictivas generadoras de grandes ganancias, pero no subsumibles en los delitos de referencia”.

<sup>432</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., pág. 235. Para el monografista, la desmesurada expansión de los hechos previos limita la eficacia de la norma, incrementa los costes sociales de forma intolerable, supera los límites de una política criminal racional y es fiel exponente de una legislación penal puramente simbólica. (Ibidem, págs. 236 y ss.; id., “Década y media de vertiginosa política criminal en la normativa penal española contra el blanqueo: análisis de los tipos penales contra el blanqueo desde su incorporación al Texto punitivo español en 1988 hasta la última reforma de 2003”, op. cit., págs. 5 y ss.). También en contra de la ampliación del delito precedente a todas las categorías delictivas se ha manifestado QUINTERO OLIVARES, al considerar necesario establecer criterios que permitan establecer una relación de delitos previos al blanqueo, “*puesto que no es jurídicamente riguroso zanjar la cuestión diciendo que todos los delitos pueden servir para integrar la tipicidad previa al blanqueo, (...) basta pensar en ejemplos como el dinero del alzado o del quebrado, que claro está que hubieran debido emplearlo en otra cosa (pagar sus deudas) pero en ningún caso será un dinero que proceda de delito*”. Por ello, considera el autor que la omnicompronsiva fórmula no puede dar cabida a cualquier delito, sino que habrá que excluir como delitos previos a aquellos “que no producen una consecuencia de incremento del patrimonio material de sus autores o partícipes, al margen de que con esa acción consigan objetivos injustos. (...) Ayudar a un deudor a incumplir sus obligaciones será sin duda una forma de participación en ese delito; pero quien sin esa participación acepta inversiones de un sujeto que en un momento anterior, distante incluso en el tiempo, y sin participación propia, incumplió sus obligaciones frente a sus acreedores, no está blanqueando dinero de ese pagador”. (*Comentarios al Código Penal. Tomo II. Parte Especial (artículos 138 a 318)*, op. cit., pág. 1043). Especialmente problemático se presenta, en este sentido, el delito fiscal como hecho delictivo previo. Más adelante, en este mismo apartado, nos referiremos a esta cuestión, que ha despertado especial interés en la actualidad y que es objeto de arduas polémicas doctrinales.



delito de blanqueo<sup>433</sup>, la doctrina planteó dudas sobre la verdadera finalidad perseguida por el legislador con la modificación legislativa, así como ciertas alarmas sobre la posibilidad de que determinados operadores jurídicos hiciesen una interpretación extensiva del tipo que incluyera los beneficios derivados de las ya desaparecidas faltas. De forma unánime, la doctrina especializada rechazó esta posibilidad<sup>434</sup>, por motivos de coherencia normativa y elementales principios de proporcionalidad. Para un sector doctrinal, la única interpretación posible apuntaba a que la incorporación al tipo de la nueva locución estaba dirigida a dar cobertura legal a la doctrina jurisprudencial que consideraba innecesaria una condena expresa y previa por el delito antecedente para la aplicación del tipo de blanqueo, resultando suficiente a dichos efectos la acreditación de la procedencia del bien en un hecho delictivo previo, descartando otros posibles orígenes<sup>435</sup>. En cualquier caso, de acuerdo con ABEL SOUTO, una interpretación literal, gramatical, histórica, hermenéutica y sistemática del delito de blanqueo impediría contemplar las extintas faltas y los ahora vigentes delitos leves como hecho previo del blanqueo<sup>436</sup>.

---

<sup>433</sup> Vid. MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Receptación y blanqueo de capitales (arts. 301 y 302)”, op. cit., págs. 340 y 341; id., “Prevención y sanción del blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 376; CARPIO DELGADO, J. del, “La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 3 y ss.; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 540 y 541; id., “El delito fiscal como actividad delictiva previa del blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 32.

<sup>434</sup> Vid., ABEL SOUTO, M., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 71; id., “Blanqueo, innovaciones tecnológicas, amnistía fiscal de 2012 y reforma penal”, op. cit., pág. 32; id., “Jurisprudencia penal reciente sobre el blanqueo de dinero, volumen del fenómeno y evolución del delito en España”, op. cit., págs. 142-149; MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Receptación y blanqueo de capitales (arts. 301 y 302)”, op. cit., págs. 339 y ss.; id., “Ganancias criminales y ganancias no declaradas (El desbordamiento del delito fiscal y del blanqueo)”, op. cit., págs. 665-667; LORENZO SALGADO, J. M., “El tipo agravado de blanqueo cuando los bienes tengan su origen en el delito de tráfico de drogas”, op. cit., págs. 228 y 229; CARPIO DELGADO, J. del, “La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 3 y ss.; QUINTERO OLIVARES, G., “Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil”, op. cit., pág. 13; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 246; MUÑOZ CONDE, F., *Derecho Penal. Parte Especial*, op. cit., pág. 515; FERNÁNDEZ TERUELO, J. G., “El comiso con particular referencia a su incidencia en el delito del blanqueo de capitales (a raíz de la reforma del código penal operada por LO 5/2010)”, op. cit., pág. 125; MILANS DEL BOSCH, S., “Principales novedades que introduce la ley 10/2010, de 28 de abril, sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo”, op. cit., págs. 45 y ss. En cualquier caso, ha advertido ABEL que la reforma del Código penal de 2014, al convertir muchas de las faltas en delitos leves, podría expandir “el campo de los hechos previos del delito de blanqueo” a muchos los ilícitos que han pasado a ser delitos leves. (“Volumen mundial del blanqueo de dinero, evolución del delito en España y jurisprudencia reciente sobre las últimas modificaciones del Código penal”, op. cit., pág. 26; id., “Jurisprudencia penal reciente sobre el blanqueo de dinero, volumen del fenómeno y evolución del delito en España”, op. cit., pág. 149).

<sup>435</sup> Vid. LORENZO SALGADO, J. M., “El tipo agravado de blanqueo cuando los bienes tengan su origen en el delito de tráfico de drogas”, op. cit., págs. 228 y 229; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 246.

<sup>436</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 71; id., “Blanqueo, innovaciones tecnológicas, amnistía fiscal de 2012 y reforma penal”, op. cit., pág. 32; id., “Volumen mundial del blanqueo de dinero, evolución del delito en España y jurisprudencia reciente

De acuerdo con CALDERÓN CEREZO, el delito antecedente puede ser tanto doloso como imprudente, si bien, como advierte el autor, ciertamente en este último caso no será habitual que la infracción penal produzca beneficios<sup>437</sup>. En cualquier caso, ningún motivo dogmático encontramos para excluir los delitos imprudentes como hecho previo al blanqueo. Así fue interpretado ya por ARANGUEZ SÁNCHEZ<sup>438</sup> durante los primeros años de vigencia del Código del 1995, en los que, recordemos, el objeto material del blanqueo estaba limitado a los bienes procedentes de delitos graves. Las sucesivas reformas del texto punitivo parecen avalar esta línea interpretativa, sin que en la actualidad se pueda oponer a la misma el argumento que, en su momento, esgrimiera PALMA HERRERA para excluir los bienes procedentes de delitos imprudentes como objeto material del delito de blanqueo: para el monografista, el hecho de que aquéllos no quedasen abarcados por el comiso indicaba que el legislador consideraba que los bienes procedentes de delitos imprudentes “no [tenían] la consideración de una ganancia cuyo aprovechamiento [debiera] evitarse y de cuya circulación [debiese] salvaguardarse el tráfico de bienes”<sup>439</sup>. La actual configuración de este instrumento permite, de conformidad con el artículo 127.2 CP, el comiso de bienes procedentes de delitos imprudentes para los que la ley prevea la imposición de una pena privativa de libertad superior a un año. En cualquier caso, tanto desde un punto de vista dogmático<sup>440</sup> como desde la perspectiva de la antijuridicidad material de la conducta, nada impide que los beneficios económicos que pueda llegar a generar un delito imprudente integren el objeto material del tipo de blanqueo. Con independencia de que dicha hipótesis sea poco frecuente en la práctica, la reintegración de bienes o fondos procedentes de hechos delictivos imprudentes al tráfico lícito es apta para provocar los mismos efectos lesivos en los intereses socioeconómicos protegidos por el tipo que los que pueda ocasionar el blanqueo de beneficios económicos derivado de delitos dolosos<sup>441</sup>.

Recordemos, por otro lado, que, por expresa previsión del número 4 del artículo 301 CP, es indiferente que el delito o los delitos de los que provinieren los bienes se hayan cometido, total o parcialmente, en el extranjero. En ese caso, de acuerdo con la

---

sobre las últimas modificaciones del Código penal”, op. cit., págs. 21-26; id., “Jurisprudencia penal reciente sobre el blanqueo de dinero, volumen del fenómeno y evolución del delito en España”, op. cit., págs. 142-149.

<sup>437</sup> Vid. CALDERÓN CEREZO, A., “Algunos aspectos críticos del blanqueo de capitales. Legislación y jurisprudencia”, op. cit., pág. 82; id., *Comentarios al Código penal*, vol. 3, op. cit., pág. 2298.

<sup>438</sup> Vid. ARANGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 189.

<sup>439</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 335.

<sup>440</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 286.

<sup>441</sup> Vid. CALDERÓN CEREZO, A., “Algunos aspectos críticos del blanqueo de capitales. Legislación y jurisprudencia”, loc. cit.; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., loc. cit.

doctrina dominante, habrá de respetarse el principio de doble incriminación<sup>442</sup>, de modo que el hecho previo ha de estar previsto como delito tanto en España como en el extranjero. De acuerdo con ZARAGOZA AGUADO, la disposición está plenamente justificada, “si tenemos en cuenta el carácter transnacional [de la delincuencia organizada], la existencia de zonas o espacios en los que gozan de la más absoluta impunidad (paraísos fiscales), y el hecho comprobado de que el blanqueo no es sino una parte de la actividad delictiva global de estas organizaciones criminales cuya persecución y castigo es vital para limitar su crecimiento y potenciación”<sup>443</sup>.

En otro orden de cosas, se admite generalmente por la doctrina la *autonomía* del delito previsto en el artículo 301 respecto al delito precedente<sup>444</sup>. Asimismo se destaca la *accesoriedad limitada* del blanqueo respecto de la infracción previa<sup>445</sup>, confirmada por la previsión del artículo 300 CP<sup>446</sup>, que, además de ir referida al delito de receptación -cuya regulación le antecede-, se aplica al delito de blanqueo, ubicado en el mismo capítulo. En cualquier caso, el delito de blanqueo no se supedita a la efectiva culpabilidad del autor de la infracción previa, “ni a la eventual concurrencia del alguna causa de exclusión de la pena”<sup>447</sup>. Únicamente es necesaria la realización de un hecho

<sup>442</sup> Vid. MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de Capitales”, 3ª ed., op. cit., pág. 487. Principio que, no obstante, no se exige expresamente por el precepto. Vid. asimismo, QUERALT JIMÉNEZ, J. J., *Derecho Penal Español. Parte Especial*, op. cit., pág. 1295; ZARAGOZA AGUADO, J. A., “Aspectos probatorios y técnicas de investigación en los procesos por lavado de dinero: medidas preventivas y cautelares, recomendaciones internacionales”, op. cit., pág. 256; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 297; id., “Penalización de lavado de dinero: aspectos sustantivos, principios y recomendaciones internacionales”, op. cit., pág. 175.

<sup>443</sup> Vid. ZARAGOZA AGUADO, J. A., “Artículo 301”, op. cit., pág. 1179.

<sup>444</sup> Acertadamente ha afirmado CALDERÓN CEREZO que “la lesividad que incorporan las conductas [blanqueadoras] deben valorarse en sí mismas, y no como una continuación o prolongación del (...) delito antecedente del que los bienes proceden”. (“El marco jurídico del blanqueo de capitales: aspectos penales y administrativos”, op. cit., pág. 2). Vid., asimismo, MARTOS NÚÑEZ, J. A., “Receptación y blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 212; FABIÁN CAPARRÓS, E. A., “El blanqueo de capitales (Contexto, razones de su penalización, evolución en nuestro entorno de las iniciativas supranacionales)”, op. cit., pág. 173.

<sup>445</sup> Vid. MUÑOZ CONDE, F., *Derecho Penal. Parte Especial*, op. cit., pág. 515; ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 198. Teniendo en consideración la autonomía del tipo de blanqueo respecto del hecho delictivo previo, ABEL SOUTO prefiere renunciar a cualquier referencia a la accesoriidad, proponiendo como más acertado referirse a la “integración” del blanqueo con el delito previo. (*El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., pág. 216). En este mismo sentido, BLANCO CORDERO considera conveniente “abandonar expresiones confundentes como la de accesoriidad limitada, que pueda expresar una dependencia del blanqueo respecto del delito previo. Simplemente bastará con señalar que el art. 300 CP exige para la sanción del blanqueo que el hecho previo sea al menos típico y antijurídico, siendo indiferente que el autor del delito principal sea irresponsable o esté exento de pena”. (*El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 282).

<sup>446</sup> Establece el artículo 300 del Código Penal que las disposiciones previstas en el capítulo que contiene el tipo de blanqueo se aplicarán aun cuando el autor o el cómplice del hecho de que provengan los efectos aprovechados fuera irresponsable o estuviera personalmente exento de pena.

<sup>447</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 389.

anterior típico y antijurídico<sup>448</sup> (no amparado por una causa de justificación), siendo irrelevante, a estos efectos, la culpabilidad y punibilidad de su autor (o partícipe)<sup>449</sup>.

La *autonomía* y la *accesoriedad limitada* del delito de blanqueo respecto de la infracción previa han llevado tanto a la doctrina como a la jurisprudencia a rechazar la necesidad de que exista una condena previa por el delito antecedente para colmar la tipicidad del delito de blanqueo<sup>450</sup>. Ya antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de reforma del Código penal, la doctrina apuntaba a esta interpretación de forma prácticamente unánime<sup>451</sup>, si bien desde algún sector minoritario se reclamaba la conveniencia de que, a efectos probatorios, existiese una condena expresa por el delito previo<sup>452</sup>. En cualquier caso, la doctrina coincidía mayoritariamente con la jurisprudencia en afirmar que para fundamentar una Sentencia condenatoria por delito de blanqueo bastaba con acreditar que el bien objeto de la conducta típica procedía de un hecho previo típicamente antijurídico, y dicha acreditación podía fundamentarse tanto en una Sentencia firme dictada con anterioridad como en cualquier otro medio probatorio<sup>453</sup>. Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica

<sup>448</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 322; id., *Comentarios al Código Penal*, op. cit., pág. 687; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 281.

<sup>449</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, loc. cit. MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ pone de relieve que la doctrina mayoritariamente admite la posibilidad de que el delito previo consista en un hecho intentado, e incluso en un acto preparatorio punible, “en la medida en que de él se puedan derivar bienes idóneos para ser objeto de blanqueo”, así como en hechos imprudentes, siempre que los mismos generen bienes. (“Blanqueo de Capitales”, 3ª ed., op. cit., pág. 486). PALMA HERRERA, matiza esta observación, considerando que ha de constatar la realización de, al menos, algún acto ejecutivo (*Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 339), excluyendo en todo caso la realización de actos preparatorios como hecho antecedente. (Ibidem, págs. 341 y 342).

<sup>450</sup> Vid. GALLEGU SOLER, J. I., *Comentarios al Código Penal. Reforma LO 5/2010*, op. cit., pág. 665.

<sup>451</sup> Vid. LUZÓN CUESTA, J. M., *Compendio de derecho Penal. Parte Especial*, op. cit., pág. 215; QUERALT JIMÉNEZ, J. J., *Derecho Penal Español. Parte Especial*, op. cit., pág. 1295; MANZANARES SAMANIEGO, J. L., *Código penal (adaptado a la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de julio). Comentarios y jurisprudencia*, op. cit., pág. 726.

<sup>452</sup> En contra de la línea interpretativa mayoritaria, COBO DEL ROSAL/ ZABALA LOPEZ-GOMEZ han considerado preciso para probar el delito previo la existencia de una sentencia condenatoria firme. Lo contrario es, a juicio de los autores, “una aberración jurídica que se ha producido y se sigue produciendo en la *praxis judicial*”. (*Blanqueo de capitales: abogados, procuradores y notarios, inversores bancarios y empresarios*. Marcial Pons. Madrid, 2005, pág. 82). COBO DEL ROSAL ha llegado a afirmar que la apreciación de un delito de blanqueo sin condena previa del delito base anterior conduciría a vulnerar los principios de legalidad y de presunción de inocencia: “No se puede comprender razonablemente, una condena por un delito de blanqueo cuando la procedencia delictiva de los bienes está por probar, ya que, en ese caso la presunción de inocencia quedaría claramente desvirtuada, y lo que es peor: el mismo sentido común. (...) El término “delito” es un elemento valorativo del tipo de injusto del delito de blanqueo de capitales. No puede en absoluto, ni suponerse ni ser objeto de una mera y simple sospecha. (...) Fácticamente debe ser un hecho producido en una fecha y en un lugar determinado que, posteriormente, es declarado por sentencia penal firme y definitiva *delito*. Mientras todo esto no se produzca, *nunca* puede, ni debe, condenarse por blanqueo de capitales, salvo que nos salgamos de la vigencia del principio de legalidad”. (“La recepción de las normas de la Comunidad Europea en la legislación penal contra el blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 64, cursivas en el texto original).

<sup>453</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 200; TOMÁS-VALIENTE LANUZA, C., “El delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 56.

5/2010, la referencia a la “actividad delictiva” como hecho previo consolida esta interpretación, si bien, en todo caso, ha de resultar suficientemente acreditada -por cualquier medio probatorio, se insiste- la existencia del delito precedente<sup>454</sup>, pues ésta “constituye condición de tipicidad”<sup>455</sup>. Asimismo, convenientemente advierte CALDERÓN CEREZO que si por motivos distintos a la irresponsabilidad o exención de la pena del autor del delito previo, recayera Sentencia absolutoria respecto al delito antecedente, habría de ser revisada la Sentencia condenatoria por el delito de blanqueo mediante el Recurso extraordinario de revisión, por haber sobrevenido “nuevos hechos o nuevos elementos de prueba de tal naturaleza que evidencien la inocencia del condenado”, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 954.4º LECr<sup>456</sup>.

En cuanto a las condiciones de perfección o grado de ejecución del delito previo, se discute si es posible sancionar actos preparatorios punibles que puedan haber generado beneficio económico como actos típicos de blanqueo. Tampoco hay consenso sobre la aptitud de la tentativa para constituir la actividad delictiva previa que exige el tipo de blanqueo<sup>457</sup>. Con relación al texto punitivo anteriormente vigente, Díez RIPOLLÉS consideró irrelevante que el hecho previo consistiera en conductas consumadas o ejecutadas imperfectamente<sup>458</sup>. Más actualmente, y respecto al Código de 1995, BLANCO CORDERO se ha sumado a esta línea interpretativa, negando la existencia de impedimento legal o interpretativo alguno para considerar la tentativa como hecho previo del delito de blanqueo; “cuando del delito intentado se deriven bienes, éstos van a ser aptos para el blanqueo de capitales”<sup>459</sup>. Misma solución propone el monografista respecto a los actos preparatorios sancionados expresamente por la Ley penal: “en la medida en que de los actos preparatorios punibles se puedan derivar bienes idóneos para ser objeto de blanqueo de capitales, es posible la sanción del posterior blanqueo de los mismos”<sup>460</sup>.

---

<sup>454</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., “El delito fiscal como actividad delictiva previa del blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 31 y 32; MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Receptación y blanqueo de capitales (arts. 301 y 302)”, op. cit., págs. 340 y ss.

<sup>455</sup> Vid. CALDERÓN CEREZO, A., “El marco jurídico del blanqueo de capitales: aspectos penales y administrativos”, op. cit., pág. 8.

<sup>456</sup> Vid. CALDERÓN CEREZO, A., “Algunos aspectos críticos del blanqueo de capitales. Legislación y jurisprudencia”, op. cit., pág. 83; id., *Comentarios al Código penal*, vol. 3, op. cit., pág. 2299; id., “El marco jurídico del blanqueo de capitales: aspectos penales y administrativos”, op. cit., pág. 8. En el mismo sentido, vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 200 y 201.

<sup>457</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 283 y 284.

<sup>458</sup> Vid. Díez RIPOLLÉS, J. L., “El blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas. La recepción de la legislación internacional en el ordenamiento penal español”, op. cit., pág. 184.

<sup>459</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 284.

<sup>460</sup> *Ibidem*, pág. 285.

En otro orden de cosas, la doctrina admite de manera generalizada<sup>461</sup> la posibilidad de que el delito previo sea a su vez un delito de blanqueo. La doctrina también contempla el llamado *blanqueo en cadena* no sólo como realidad posible, sino muy frecuente en la práctica<sup>462</sup>. Como pudimos comprobar al estudiar el blanqueo desde su perspectiva fenomenológica, es habitual el recurso a sucesivas operaciones de lavado para distanciar, con cada nueva operación, aún más la vinculación de los bienes o activos respecto del hecho delictivo del que proceden. Por lo demás, así lo ha entendido nuestra jurisprudencia en diversas ocasiones, al aceptar la punibilidad del blanqueo de activos que a su vez han sido convertidos previamente<sup>463</sup>. Diferente al blanqueo en cadena es el blanqueo de los llamados bienes sustitutivos, que son aquellos que no derivan directamente de la actividad delictiva, sino que han sufrido alguna transformación, en virtud de cualquier tipo de negocio jurídico o por cualquier otro motivo<sup>464</sup>. Respecto a la problemática en torno al blanqueo de *bienes sustitutivos*, su mayor complejidad justifica un estudio más detallado, que abordaremos en un subapartado independiente al final de este capítulo. Ahora centraremos nuestra atención en el delito antecedente que más dificultades ha suscitado tanto en el plano dogmático como en el jurisprudencial: el delito fiscal.

### **EL DELITO FISCAL COMO DELITO PREVIO DEL BLANQUEO DE CAPITALES. LA CUOTA TRIBUTARIA DEFRAUDADA COMO OBJETO DEL DELITO DE BLANQUEO**

En fechas recientes se han intensificado las aspiraciones internacionales a que los Estados incluyan en su catálogo de delitos antecedentes del blanqueo al delito fiscal<sup>465</sup>. Haciéndose eco de dichas demandas, el legislador ha incorporado

---

<sup>461</sup> Vid. CALDERÓN CEREZO, A., “Algunos aspectos críticos del blanqueo de capitales. Legislación y jurisprudencia”, op. cit., pág. 82; MUÑOZ CONDE, F., *Derecho Penal. Parte Especial*, op. cit., pág. 515.

<sup>462</sup> Vid. QUINTERO OLIVARES, G., *Comentarios a la Parte especial del Derecho penal*, op. cit., pág. 945; MUÑOZ CONDE, F., *Derecho Penal. Parte Especial*, op. cit., pág. 515; PALMA HERRERA, J. M., *Comentarios al Código Penal*, op. cit., pág. 689; VIDALES RODRÍGUEZ, C., *Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código penal de 1995*, op. cit., págs. 109 y 100; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 335. Nótese, como advierte BLANCO, que en cualquier caso el segundo blanqueador ha de conocer la procedencia delictiva del bien (que, generalmente, adquiere), bien teniendo consciencia de la procedencia delictiva originaria (hecho previo), bien a través del conocimiento del delito de blanqueo que contamina el bien.

<sup>463</sup> Vid. STS de 31 de octubre de 1994.

<sup>464</sup> Sobre las diferencias entre la receptación en cadena y la receptación de bienes sustitutivos, trasladable al marco del blanqueo, vid. SILVA SÁNCHEZ, J. M., “La Receptación específica”, op. cit., págs. 485 y ss.

<sup>465</sup> Sobre la discusión planteada al respecto en el seno del Grupo de Acción Financiera Internacional, vid. ampliamente BLANCO CORDERO, I., “El delito fiscal como actividad delictiva previa del blanqueo de capitales”, op. cit. págs. 7 y ss.; id., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 371 y ss.

expresamente en la Ley de prevención aprobada en 2010 la cuota defraudada en los delitos contra la Hacienda Pública como objeto material del blanqueo de capitales<sup>466</sup>. En este contexto, se ha intensificado en el seno de la doctrina el debate relativo a la posibilidad de que el fraude fiscal con relevancia penal constituya la actividad delictiva previa al blanqueo de capitales<sup>467</sup>. Prueba de ello es que, en fechas recientes, se ha publicado abundante bibliografía<sup>468</sup> en la que se ha puesto en tela de juicio la

<sup>466</sup> El legislador, apunta BLANCO, no ha explicitado su propósito al incluir la referencia expresa a la cuota tributaria como objeto material del blanqueo de capitales en la Ley 10/2010. En contra de lo que sostiene algún autor, ha de descartarse que esta previsión legislativa pueda desempeñar una función interpretativa del contenido del tipo penal de blanqueo, porque, como refiere el monografista, “la propia literalidad del art. 301 CP carece de una remisión normativa expresa a normativa extrapenal alguna”. Asimismo, queda descartada esta posibilidad “por las dudas que surgirían de cara a su compatibilidad con la *reserva de Ley orgánica* propia de la materia penal, cuestión que, si bien discutida, parece necesaria en este ámbito al prever los tipos de blanqueo de capitales penas de prisión”. (Ibidem, pág. 396). Como ha afirmado MANJÓN-CABEZA OLMEDA, “si el Legislador penal hubiese querido una tal interpretación auténtica en el tipo de blanqueo, tendría que haberla incluido al definir los elementos del delito, pero no lo ha hecho”. (“Un matrimonio de conveniencia: blanqueo de capitales y delito fiscal”, op. cit., pág. 39). Vid., en sentido similar, ÁLVAREZ FEIJÓO, M., “Delito fiscal y blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 2. En todo caso, la propia ley preventiva limita expresamente sus previsiones a los únicos efectos preventivos de la propia ley. Téngase en cuenta, asimismo, que “el hecho de que el art. 1.2 de la Ley utilice la expresión “a los efectos de esta Ley...” se consideran las cuotas defraudadas a Hacienda como bienes procedentes de un delito, debe interpretarse como la clara intención del legislador de que únicamente a los efectos de la Ley de Prevención del Blanqueo y de su regulación administrativa y, por tanto, no a los efectos del Código Penal, puede considerarse que las cuotas defraudadas a la Hacienda Pública proceden de delitos, pero no tiene ninguna incidencia en el ámbito penal que seguiría dejando fuera al fraude fiscal como delito previo del blanqueo de capitales”. (Vid. STS 974/2012, de 5 de diciembre, FJº 37).

<sup>467</sup> En paralelo, la doctrina también ha prestado especial atención a la compatibilidad del delito de blanqueo y el delito fiscal en el sentido opuesto; esto es, si las rentas de origen delictivo -que a constituirán el objeto material del delito de blanqueo- han de tributar, y en caso afirmativo, si la elusión de dicha tributación puede integrar, además del delito de blanqueo, el correspondiente delito fiscal. Sobre este interesante debate, vid. MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Un matrimonio de conveniencia: blanqueo de capitales y delito fiscal”, op. cit., págs. 30 y ss.; CHOCLÁN MONTALVO, J. A., “¿Puede ser el delito fiscal delito precedente de blanqueo de capitales?”, *Revista Jurídica General, Blanqueo de Capitales*. Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, nº 37, Madrid, 2007, págs. 172-174; BACIGALUPO ZAPATER, E., *Sobre el concurso de delito fiscal y blanqueo de dinero*, Ed. Civitas. Cizur Menor, 2012, págs. 14, 15, 29 y ss.; MARTÍNEZ-ARRIETA MÁRQUEZ DE PRADO, I., *El autoblanqueo. El delito fiscal como antecedente del blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 83 y ss.; MELLADA FERNÁNDEZ, C., *Fiscalidad y blanqueo de capitales* (Tesis doctoral, publicada en 2012), Repositorio de la Universidad de Oviedo (tesis doctorales) disponible en el siguiente enlace: <http://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/12737>, págs. 165 y ss. Vid., asimismo, SSTs 649/1996, de 7 de diciembre (caso Nécora), 1493/1999, de 21 de diciembre (caso Roldán), 20/2001, de 28 de marzo (caso Urralburu), y 1113/2005, de 15 de septiembre.

<sup>468</sup> Vid. CAMPOS NAVAS, D., “Lavado de dinero y delito fiscal. Posibilidad de que delito fiscal sea el delito precedente al de blanqueo”, op. cit., págs. 1404 y ss.; QUINTERO OLIVARES, G., “El delito fiscal y el ámbito material del delito de blanqueo”, *Actualidad jurídica Aranzadi*, nº 698. Febrero 2006; CHOCLÁN MONTALVO, J. A., “¿Puede ser el delito fiscal delito precedente de blanqueo de capitales?”, op. cit., págs. 159 y ss.; MORENO VERDEJO, J., “Aspectos concursales del delito de blanqueo”, *Revista Jurídica General*, Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, nº 37, 2007, págs. 146 y 147; BLANCO CORDERO, I., “El delito fiscal como actividad delictiva previa del blanqueo de capitales”, op. cit.; id., “La cuota tributaria defraudada como objeto material del delito de blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 141 y ss.; id., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 361 y ss.; BACIGALUPO ZAPATER, E., *Sobre el concurso de delito fiscal y blanqueo de dinero*, op. cit.; DOPICO GÓMEZ-ALLER, J., *Si todo es blanqueo, nada es blanqueo (I)*, Legaltoday.com, publicado en el siguiente enlace: <http://www.legaltoday.com/practica-juridica/penal/economico/si-todo-es-blanqueo-nada-es-blanqueo-i>; MALLADA FERNÁNDEZ, C., *Blanqueo de capitales y evasión fiscal*. Ed. Lex Nova. Valladolid, 2012, págs. 174 y ss.; ÁLVAREZ FEIJÓO, M., *Delito fiscal y blanqueo de capitales*, Legal today.com, disponible en el enlace [http://www.legaltoday.com/practica-juridica/penal/blanqueo\\_capitales/delito-fiscal-y-blanqueo-de-capitales](http://www.legaltoday.com/practica-juridica/penal/blanqueo_capitales/delito-fiscal-y-blanqueo-de-capitales); MARTÍN QUERALT, J., “La idoneidad del delito de defraudación tributaria como presupuesto del delito de blanqueo de capitales. Una

posibilidad de que determinadas modalidades comisivas del delito de defraudación tributaria constituyan el hecho previo del que derive el capital a legitimar.

La cuestión objeto de debate puede formularse de manera sencilla: la cuota tributaria no liquidada derivada de un delito fiscal, ¿puede integrar el objeto material del delito de blanqueo? Dicho de otro modo: ¿puede el delito fiscal constituir la actividad delictiva antecedente del delito de blanqueo de capitales? Evidentemente, ha afirmado MANJÓN-CABEZA<sup>469</sup>, la problemática se plantea respecto a una modalidad concreta de delito fiscal: la elusión del pago de impuestos derivada de la falta de realización de la declaración del tributo correspondiente, o de su realización de forma no veraz, dejándose de ingresar en todo caso una cuota tributaria superior al umbral típico, 120.000 euros. Sólo en estos casos, la cuantía defraudada no ingresa en el patrimonio del obligado tributario, sino que ya se encuentra incorporado al mismo<sup>470</sup>.

La doctrina aparece frontalmente dividida respecto a la posibilidad de que esta modalidad defraudatoria pueda integrar la actividad delictiva antecedente<sup>471</sup>, si bien

---

cuestión inquietante”, *Tribuna Fiscal*, nº 266, Sección La opinión, mayo-junio 2013. Ed. CISS, 2013; id., “Delito fiscal y delito de blanqueo de capitales”, *Intercambio de información, blanqueo de capitales y lucha contra el fraude fiscal. Instituto de Estudios Fiscales. Madrid*, 2014; MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Delito fiscal como delito antecedente de conductas de blanqueo de capitales”, *Revista de Derecho Penal*, Lex Nova, nº 37, 3/2012, disponible en el siguiente enlace: <http://online.lexnova.es/servicesLXOL/visordoc?signatura=19AFA294BFB9502F77F738AC2FAA9A61C0DDEAA583539A0F2602532813C0E14F>; id., “Un matrimonio de conveniencia: blanqueo de capitales y delito fiscal”, op. cit., págs. 36 y ss.; VILLEGAS GARCÍA, M. A., “El autoblanqueo y el delito fiscal como delito antecedente del delito de blanqueo: la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo nº 974/2012, de 5 de diciembre”, *Revista del Poder Judicial*, nº 95, año 2013. GCPJ, pág. 39; MARTÍNEZ-ARRIETA MÁRQUEZ DE PRADO, I., *El autoblanqueo. El delito fiscal como antecedente del blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 67 y ss.

<sup>469</sup> Vid. MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Delito fiscal como delito antecedente de conductas de blanqueo de capitales”, op. cit.; id., “Un matrimonio de conveniencia: blanqueo de capitales y delito fiscal”, op. cit., pág. 37. Vid., asimismo, CAMPOS NAVAS, D., “Lavado de dinero y delito fiscal. Posibilidad de que delito fiscal sea el delito precedente al de blanqueo”, op. cit., pág. 1405.

<sup>470</sup> El artículo 305 integra tres modalidades defraudatorias diferenciadas: la elusión del pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, la obtención indebida de devoluciones o la obtención, también indebida, de beneficios fiscales, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados supere, como sabemos, los 120.000€. La problemática que aquí se expone guarda relación con la primera modalidad típica (omisión de pago de tributos, retenciones o ingresos a cuenta), pues, a diferencia de las modalidades de obtención indebida de devoluciones, beneficios fiscales o subvenciones, con dicha defraudación no se produce el ingreso de dichas cuantías en el patrimonio del blanqueador. Adviértase, por otro lado, que el análisis que nos disponemos a abordar se extiende al delito de defraudación de cuotas de la Seguridad Social (artículo 307 CP), y a la defraudación a los presupuestos generales de la Unión Europea u otros administrados por ésta (artículo 306). (Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 407).

<sup>471</sup> Sobre un análisis del derecho comparado en la materia, vid. ampliamente BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 397 y ss. Vid., asimismo, STS 974/2012, de 5 de diciembre, FJº 37.



prevalecen las posiciones contrarias a admitir esta solución<sup>472</sup>. Sin embargo, voces muy autorizadas en la materia sostienen la opinión contraria, renovando la línea interpretativa de la Agencia Tributaria y la Fiscalía<sup>473</sup>, a la que, como veremos, recientemente se ha sumado la exegesis jurisprudencial. Por su puesto, como advierte BLANCO, para que la cuota defraudada pueda ser objeto material del blanqueo, en la defraudación han de concurrir todos los elementos integradores del tipo penal previsto y penado en el artículo 305 CP. Recordemos que en el delito contra la Hacienda Pública se precisa, en primer lugar, verificar la presencia de todos los elementos que integran el tipo objetivo<sup>474</sup>, especialmente que la cuota defraudada es superior a los 120.000 euros que marcan el umbral del delito fiscal<sup>475</sup>. Asimismo, constituyendo un tipo esencialmente doloso<sup>476</sup>, es necesario, en el ámbito subjetivo, que se constate el conocimiento por parte del sujeto activo de que realiza el tipo objetivo -ha de conocer la existencia de la deuda, la falta de cumplimiento de su obligación de satisfacerla y de que la cuota defraudada supera el umbral típico de 120.000€<sup>477</sup>-, así como la concurrencia de un elemento intencional<sup>478</sup>, conformado por la voluntad de infringir la obligación de satisfacer el correspondiente impuesto<sup>479</sup>. La doctrina discute si es además preciso que esté presente un *animus defraudandi*, esto es, un especial ánimo defraudatorio “que

<sup>472</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., “El delito fiscal como actividad delictiva previa del blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 2; id., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 370.

<sup>473</sup> Vid. Informe del Consejo Fiscal de 28 de septiembre de 2009, sobre de Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, pág. 4; disponible en el siguiente enlace: [https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/documentos/consejo\\_fiscal/ut/p/a/1/04\\_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9HT0cDT2DDbzcfsZcDBzdPYOdTD08jIO9DYAKIpEVHv4GgEVGPqGmli6GBu4G5KoH1WBRZAJcfoNcABHA0L6w\\_WjUJVg8QEM8BOBCvA44aC3NDQCINMTwDQkuWM/dl5/d5/L2dBISevZ0FBIS9nQSEh/?ckInformes=1&txtFechaDesde=&txtFechaHasta=&palabraBuscar=blanqueo&btnBuscar2=Buscar&paginaDestino=2](https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/documentos/consejo_fiscal/ut/p/a/1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9HT0cDT2DDbzcfsZcDBzdPYOdTD08jIO9DYAKIpEVHv4GgEVGPqGmli6GBu4G5KoH1WBRZAJcfoNcABHA0L6w_WjUJVg8QEM8BOBCvA44aC3NDQCINMTwDQkuWM/dl5/d5/L2dBISevZ0FBIS9nQSEh/?ckInformes=1&txtFechaDesde=&txtFechaHasta=&palabraBuscar=blanqueo&btnBuscar2=Buscar&paginaDestino=2). Asimismo, MALLADA FERNÁNDEZ, C., *Blanqueo de capitales y evasión fiscal*, op. cit., pág. 170; ÁLVAREZ FEIJÓO, M., *Delito fiscal y blanqueo de capitales*, op. cit.; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 370.

<sup>474</sup> Teniendo en cuenta que el delito fiscal se configura como “ley penal en blanco”, para la delimitación de la tipicidad objetiva será necesario acudir a la legislación tributaria aplicable en el caso concreto. (Vid. GIL MARTÍNEZ, A., “Instrucción de los delitos fiscales y contra la Hacienda Pública”, *La instrucción de los delitos económicos y contra la Hacienda Pública (Estudios de Derecho Judicial nº 64)*. CGPJ. Madrid, 2004, pág. 311). En el mismo sentido, BACIGALUPO SAGESSE, S., “Principio de legalidad y fraude a la ley tributaria”, *Liber amicorum en Homenaje al Profesor Antonio González-Cuellar García*, Ed. Colex. Madrid, 2006, págs. 472 y 473; id., “La prueba del perjuicio en el delito fiscal mediante el régimen tributario de estimación indirecta: presunción de inocencia e *in dubio pro reo*”, *Homenaje al Profesor Dr. Gonzalo Rodríguez Mourullo*. Ed. Civitas, Madrid, 2005, págs. 1112 y 1113.

<sup>475</sup> Por debajo de la referida cuantía, la defraudación integraría únicamente una infracción administrativa, sancionable en dicha vía y, obviamente, la cuota defraudada nunca podría ser objeto material del delito de blanqueo. (Vid. MALLADA FERNÁNDEZ, C., “Delitos conexos”, *Auditoría, prevención y represión del blanqueo de capitales*, Ed. Liber Factory. Madrid, 2014, pág. 74).

<sup>476</sup> Vid. CUGAT MAURI, M./BAÑERES SANTOS, F., “Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social”, *Derecho Penal Español. Parte Especial (II)*. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pág. 843.

<sup>477</sup> Ibidem, págs. 843 y 844.

<sup>478</sup> Vid. MALLADA FERNÁNDEZ, C., *Blanqueo de capitales y evasión fiscal*, op. cit., pág. 173; id., *Fiscalidad y blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 207.

<sup>479</sup> Vid. STS 801/2008, de 26 de noviembre.

suponga simulación u ocultación de la situación económica del contribuyente<sup>480</sup> y que se materialice en la obtención de un lucro por parte del sujeto<sup>481</sup>.

**a) Tesis que rechazan la idoneidad de la cuota tributaria como objeto material del delito de blanqueo**

Un nutrido sector doctrinal rechaza la idoneidad del delito de defraudación tributaria en su modalidad de elusión del pago de tributos para erigirse en presupuesto del delito de blanqueo de capitales, toda vez que si la cuota que no se ha ingresado en la Hacienda Pública ya se encontraba incorporada al patrimonio del obligado tributario<sup>482</sup>, aquélla no procede o tiene su origen en el delito fiscal, y por tanto no puede afirmarse que tenga su origen o proceda de una actividad delictiva<sup>483</sup>. En este sentido, afirma QUINTERO OLIVARES, aquellos delitos cuya comisión no produce un incremento del patrimonio en el sujeto activo no pueden integrar la actividad delictiva previa del blanqueo. Así ocurre con el alzamiento de bienes o con la modalidad de defraudación fiscal que nos ocupa: en este último caso, la cuota defraudada no es “producto”<sup>484</sup> del delito -ya se integraba en el patrimonio del defraudador y no ha accedido a circuitos ilícitos<sup>485</sup>-, y por ello no puede hablarse de origen o procedencia delictiva<sup>486</sup>. Se dice

<sup>480</sup> Vid. CHOCLÁN MONTALVO, J. A., “Sobre el fundamento del injusto del delito fiscal desde los principios constitucionales de legalidad y proporcionalidad”, *Las últimas reformas penales, Estudios de Derecho Judicial* n° 138. CGPJ. Madrid, 2007, pág. 13.

<sup>481</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., “Delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social”, *Eguzkilore. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología*, n° 14, San Sebastián, 2000, pág. 24.

<sup>482</sup> Vid. MALLADA FERNÁNDEZ, C., *Blanqueo de capitales y evasión fiscal*, op. cit., pág. 174.

<sup>483</sup> Vid. MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Un matrimonio de conveniencia: blanqueo de capitales y delito fiscal”, op. cit., pág. 37.

<sup>484</sup> Vid. CHOCLÁN MONTALVO, J. A., “¿Puede ser el delito fiscal delito precedente de blanqueo de capitales?”, op. cit., pág. 164.

<sup>485</sup> Vid. ÁLVAREZ FEIJÓO, M., *Delito fiscal y blanqueo de capitales*, op. cit.

<sup>486</sup> Vid. QUINTERO OLIVARES, G., “El delito fiscal y el ámbito material del delito de blanqueo”, op. cit., pág. 698. En sentido similar, CHOCLÁN MONTALVO, J. A., “¿Puede ser el delito fiscal delito precedente de blanqueo de capitales?”, op. cit., págs. 163 y ss.; REQUE MATA, S., “¿Puede considerarse el delito fiscal delito previo al delito de blanqueo de capitales?”, *I Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, pág. 287. En este mismo sentido, en el voto particular de la STS 974/2012, a la que inmediatamente nos referiremos, el Magistrado D. Antonio del Moral García refiere que “sólo pueden servir de presupuesto del delito de blanqueo de capitales (...) los delitos idóneos para “generar” bienes o ganancias en sentido material. Una “no pérdida” es diferente a una ganancia. Ganancia y ahorro son realidades diferentes. Quien ahorra, no está ganando, no está obteniendo ningún bien; sencillamente lo está manteniendo. (...) En el campo de los delitos patrimoniales, serán delitos aptos para servir de base al delito de blanqueo los que clásicamente se bautizaban como delitos de enriquecimiento. En otros ámbitos criminales, aquellas infracciones que pueden incrementar el patrimonio -entendido en un sentido económico y no puramente jurídico- de los responsables. Por eso no son infracciones que puedan servir de sustrato al blanqueo de capitales ni el delito de alzamiento de bienes del art. 257, ni el delito de impago de pensiones del art. 227, ni cualquiera cuya estructura consista en omitir pagos. Con ellos se produce un ahorro, pero no un incremento patrimonial. El ahorro es una ventaja, una utilidad, pero no es equiparable a los bienes en el sentido del art. 301 del Código Penal. Diferente es el delito de apropiación indebida en el que sí se produce un enriquecimiento al disponer como propietario de bienes que solo se tenían como poseedor”.

que esta modalidad de fraude fiscal, “en sí mismo no genera los bienes”<sup>487</sup> distintos a los que ya existían en el haber del sujeto<sup>488</sup>.

La cuota defraudada, afirma CHOCLÁN MONTALVO, no es efecto del delito fiscal<sup>489</sup>. El ahorro que supone el no ingreso en la Hacienda Pública de la cuota tributaria que ha de ser satisfecha, supone una no pérdida, situación que es diferente a una ganancia<sup>490</sup>: “quien ahorra no está ganando, no está obteniendo ningún bien; sencillamente lo está manteniendo”<sup>491</sup>. Es por ello que el delito de defraudación tributaria, en la modalidad consistente en dejar de ingresar una determinada obligación tributaria, en puridad no produce bienes, y por ello las cuantías defraudadas al fisco no son producto ni tienen origen en una actividad delictiva, ni pueden por este motivo integrar el objeto material del delito de blanqueo<sup>492</sup>.

Por su parte, BACIGALUPO ZAPATER fundamenta la inidoneidad del delito fiscal como antecedente del blanqueo invocando los criterios de la consunción y de los hechos posteriores copenados, “categorías sólidamente consolidadas en la dogmática penal europea y española desde hace más de tres cuartos de siglo”<sup>493</sup>. El autor resume la tesis que sostiene de la siguiente manera: “aunque se considera que los hechos imputados a un mismo autor *pueden formalmente ser subsumidos bajo los tipos del delito fiscal y del*

---

<sup>487</sup> Vid. GÓMEZ BENÍTEZ, J. M., “Reflexiones técnicas y de política criminal sobre el delito de blanqueo de bienes”, op. cit., pág. 18.

<sup>488</sup> Vid. MARTÍN QUERALT, J., “La idoneidad del delito de defraudación tributaria como presupuesto del delito de blanqueo de capitales. Una cuestión inquietante”, op. cit., pág. 1.

<sup>489</sup> Vid. CHOCLÁN MONTALVO, J. A., “¿Puede ser el delito fiscal delito precedente de blanqueo de capitales?”, op. cit., pág. 164.

<sup>490</sup> Afirma CHOCLÁN que “la ventaja económica que se deriva de la no satisfacción de determinadas obligaciones jurídicas (...) no constituye ganancia, en el sentido del tipo penal del blanqueo de capitales. (...) La ganancia no equivale a evitar, por medio del comportamiento punible, una pérdida patrimonial debida, conservando el *status quo* patrimonial, sino que requiere dinámicamente una transformación del patrimonio incrementando su activo. En suma, el delito ha de ser la fuente o el origen del ingreso, no la causa de la evitación del gasto”. (Ibidem, pág. 165).

<sup>491</sup> Vid. Voto particular STS 974/2012, de 5 de diciembre.

<sup>492</sup> Vid. QUINTERO OLIVARES, G., “El delito fiscal y el ámbito material del delito de blanqueo”, *Actualidad jurídica Aranzadi*, n.º 698, Febrero 2006, pág. 6; CHOCLÁN MONTALVO, J. A., “¿Puede ser el delito fiscal delito precedente de blanqueo de capitales?”, op. cit., pág. 163; ÁLVAREZ FEIJÓO, M., *Delito fiscal y blanqueo de capitales*, op. cit.; DOPICO GÓMEZ-ALLER, J., *Si todo es blanqueo, nada es blanqueo (I)*, op. cit.; MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Un matrimonio de conveniencia: blanqueo de capitales y delito fiscal”, op. cit., págs. 37 y 38; MARTÍN QUERALT, J., “La idoneidad del delito de defraudación tributaria como presupuesto del delito de blanqueo de capitales. Una cuestión inquietante”, op. cit., págs. 3 y 4; id., “Delito fiscal y delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 40; VILLEGAS GARCÍA, M. A., “El autoblanqueo y el delito fiscal como delito antecedente del delito de blanqueo: la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo n.º 974/2012, de 5 de diciembre”, op. cit., pág. 39; BOIX REIG, J., “Delito fiscal vs. blanqueo de capitales”, *Intercambio de información, blanqueo de capitales y lucha contra el fraude fiscal*. Instituto de Estudios Fiscales. Madrid, 2014, págs. 47 y ss.

<sup>493</sup> Vid. BACIGALUPO ZAPATER, E., *Sobre el concurso de delito fiscal y blanqueo de dinero*, op. cit., pág. 13.

*blanqueo de dinero, ambos tipos concurren en la forma de un concurso (aparente de normas) que excluye el delito de blanqueo por ser un hecho posterior copenado, de acuerdo con el art. 8.3º CP*<sup>494</sup>. Que el delito fiscal pueda ser antecedente del tipo de blanqueo sería una cuestión irrelevante, toda vez que, a su juicio, la problemática ha de ser tratada desde la perspectiva de las reglas del concurso de normas o concurso aparente de leyes previsto en el artículo 8 del Código. En concreto, la regla de la consunción -prevista en el apartado 3º del precepto- permite considerar que los hechos que podrían integrar el delito de blanqueo tienen la exclusiva finalidad de asegurar, utilizar o aprovechar los bienes obtenidos por el delito previo -en este caso, la cuota tributaria defraudada-, e integran, por ello, “una parte del delito cometido y constituyen con éste una unidad, que debe ser sancionada conjuntamente con el delito del que habrían provenido esos bienes. Se trata, por tanto, de *hechos posteriores copenados*”<sup>495</sup>.

Además de las razones expuestas, desde este sector doctrinal se considera que la incriminación adicional del delito de blanqueo a quien comete la defraudación fiscal con relevancia penal vulneraría la prohibición del *bis in idem*<sup>496</sup>, si bien este argumento tiene

<sup>494</sup> Ibidem.

<sup>495</sup> Ibidem, págs. 16-22 passim. Las conductas formalmente subsumibles en el delito de blanqueo “son (...) acciones *necesarias* para el aprovechamiento, utilización o aseguramiento de lo obtenido por el delito fiscal, no sólo están absorbidas como *acciones posteriores co-penadas* con el delito fiscal. Son también *característicos hechos acompañantes* del delito fiscal y ello determina su no punibilidad. (...) Como «*característico hecho acompañante*», la posesión, la utilización, la transmisión del dinero correspondiente a la cuota defraudada de un delito fiscal también debe quedar impune por su consunción en el primer hecho cometido”. (Ibidem, pág. 26). A la tesis defendida por BACIGALUPO es posible presentar dos objeciones: como vimos al estudiar la problemática del autoblanqueo, para que el acto de aprovechamiento se considere copenado en el primer delito, se requiere que ambos tipos penales incidan en el mismo bien jurídico; asimismo, la invocación de este principio sería únicamente posible en aquellos supuestos en los que el hecho, formalmente subsumible en ambos tipos penales -delito fiscal y blanqueo-, fuese cometido por la misma persona (cuando el defraudador fiscal sea quien a su vez realice la conducta coincidente con una modalidad típica de blanqueo). Respecto a la primera cuestión, sabemos que el delito fiscal y el blanqueo de capitales abarcan, cada uno de ellos, un ámbito de protección distinto. Sin embargo, entiende el autor que esto no es óbice para considerar el blanqueo copenado en el delito fiscal, pues en estos casos, de acuerdo con la jurisprudencia más reciente de la Sala Segunda, se da “una homogeneidad progresiva en la línea de ataque”: cuando el defraudador comete el delito fiscal, lo hace “para, al menos, disponer del dinero, cuya posesión es aparentemente constitutiva del delito de blanqueo. [Así,] los bienes jurídicos protegidos por el delito fiscal y por el blanqueo de dinero se encuentran en la misma línea lesiva” y por ello es posible invocar, en estos casos, el criterio de la consunción. (Ibidem, págs. 31-32 passim). Respecto al segundo problema planteado, el autor afirma que “los efectos del concurso aparente de normas y la exclusión del delito de blanqueo también alcanza al partícipe (no obligado fiscal) (...) en el delito fiscal de un tercero. Es decir: la consunción del delito de blanqueo por el delito fiscal no se ve alterada en el caso de los partícipes no obligados fiscales que hayan tomado parte en el delito fiscal como cooperadores necesarios o cómplices.” (Ibidem, pág. 39).

<sup>496</sup> Vid. DOPICO GÓMEZ-ALLER, J., *Si todo es blanqueo, nada es blanqueo (I)*, op. cit.; CUGAT MAURI, M./BAÑERES SANTOS, F., “Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social”, op. cit, pág. 835.

sentido únicamente en los supuestos de autoblanqueo<sup>497</sup>, y puede invocarse con independencia de cuál sea el delito previo. En fin, se dice que la incriminación de actos de blanqueo sobre la cuota tributaria ampliaría intolerablemente el plazo de prescripción del delito<sup>498</sup>, e incluso convertiría de facto el delito fiscal en imprescriptible<sup>499</sup>, tras incorporación en la reforma de 2010 de la posesión y el uso del beneficio del delito previo -en este caso, la cuota defraudada- como modalidades de acción específicas. Al permanecer dicha cuota en el patrimonio del sujeto, y hasta que disponga de ella<sup>500</sup>, su uso y posesión “permitiría seguir persiguiendo al defraudador, pero esta vez por blanqueo”<sup>501</sup>. Además, la punición del blanqueo en estos casos plantea un grave problema en cuanto que la regularización fiscal prevista en el artículo 305.4 CP no alcanzaría al delito de blanqueo que habría cometido el defraudador, al menos por poseer la cuota defraudada. La regularización extinguiría la responsabilidad penal por el delito fiscal y aquellos otros conexos referidos en el precepto, pero no incidiría en el delito de blanqueo, de tal modo que “quedaría un blanqueo sin delito subyacente y sin «cuota ahorrada-defraudada» que se habrá entregado a Hacienda con la regularización”<sup>502</sup>. Por último, desde este sector doctrinal se afirma que si se asocia irreversiblemente el delito de blanqueo al delito fiscal, una regularización tributaria como la aprobada a primeros de 2012 no podría considerarse verdaderamente efectiva, a salvo de que se vea acompañada de las correspondientes medidas correctoras relativas al blanqueo de capitales<sup>503</sup>.

---

<sup>497</sup> En este caso, el blanqueo sería un hecho posterior copenado, siendo de aplicación el artículo 8.3º CP. Vid. MARTÍN QUERALT, J., “La idoneidad del delito de defraudación tributaria como presupuesto del delito de blanqueo de capitales. Una cuestión inquietante”, op. cit., pág. 1.

<sup>498</sup> Ibidem; MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Un matrimonio de conveniencia: blanqueo de capitales y delito fiscal”, op. cit., pág. 40.

<sup>499</sup> Vid. DOPICO GÓMEZ-ALLER, J., *Si todo es blanqueo, nada es blanqueo (I)*, op. cit.; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 409. En efecto, si la mera posesión de la cuota defraudada es penalmente relevante como forma de blanqueo, se produce el efecto de convertir el delito en permanente, y por tanto imprescriptible.

<sup>500</sup> Naturalmente, cualquier acto de disposición que se realice sobre la cuota defrauda podrá considerarse un acto de conversión o transmisión, modalidades típicas menos problemáticas a los efectos que aquí analizamos.

<sup>501</sup> Vid. DOPICO GÓMEZ-ALLER, J., *Si todo es blanqueo, nada es blanqueo (I)*, op. cit.; MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Un matrimonio de conveniencia: blanqueo de capitales y delito fiscal”, op. cit., págs. 37 y 40. Para BACIGALUPO ZAPATER la problemática de la prescripción carece de relevancia, toda vez que, al excluirse el tipo de blanqueo como acto posterior copenado, “sólo sería aplicable el art. 305 CP y, por lo tanto, su plazo de prescripción normal”. (*Sobre el concurso de delito fiscal y blanqueo de dinero*, op. cit., págs. 40, 47 y ss.).

<sup>502</sup> Vid. MANJÓN-CABEZA OLMEDA, A., “Un matrimonio de conveniencia: blanqueo de capitales y delito fiscal”, op. cit., pág. 41.

<sup>503</sup> Vid. MARTÍN QUERALT, J., “La idoneidad del delito de defraudación tributaria como presupuesto del delito de blanqueo de capitales. Una cuestión inquietante”, op. cit., pág. 4.

Todas estas observaciones conducen a un importante sector la doctrina a rechazar la idoneidad de la cuota defraudada como objeto del delito de blanqueo; la tesis opuesta no supondría sino la desnaturalización del tipo penal, alejándolo de su “orientación político criminal originaria”<sup>504</sup>. La consideración del delito fiscal como delito previo del blanqueo, en fin, contravendría los principios de intervención mínima y *ultima ratio* que informan el orden penal, y no constituiría más que un mecanismo de control de movimientos de capitales para la persecución del fraude fiscal<sup>505</sup>.

***b) Tesis que consideran idónea la cuota tributaria defraudada como objeto material del delito de blanqueo***

La tesis que considera posible que el delito fiscal opere como delito antecedente del blanqueo -a la que nos adherimos- tampoco ha encontrado escasa acogida en la doctrina especializada<sup>506</sup>. Para este sector doctrinal, tras la realización de la modalidad de delito fiscal consistente en la elusión del pago de cuota tributaria<sup>507</sup>, siempre que

---

<sup>504</sup> Vid. GÓMEZ BENÍTEZ, J. M., “Reflexiones técnicas y de política criminal sobre el delito de blanqueo de bienes”, op. cit., pág. 17; DOPICO GÓMEZ-ALLER, J., *Si todo es blanqueo, nada es blanqueo (I)*, op. cit.

<sup>505</sup> Vid. GÓMEZ BENÍTEZ, J. M., “Reflexiones técnicas y de política criminal sobre el delito de blanqueo de bienes”, op. cit., págs. 16 y 17.

<sup>506</sup> Admiten el delito fiscal como antecedente del blanqueo ARANGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de Capitales*, op. cit., pág. 187; PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 715 y 716; ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., pág. 224; BLANCO CORDERO, I., “El delito fiscal como actividad delictiva previa del blanqueo de capitales”, op. cit. págs. 19 y ss.; id., “La cuota tributaria defraudada como objeto material del delito de blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 151 y ss.; id., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 411 y ss.; CAMPOS NAVAS, D., “Lavado de dinero y delito fiscal. Posibilidad de que delito fiscal sea el delito precedente al de blanqueo”, op. cit., pág. 1405; GONZÁLEZ RUS, J. J., “Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico”, op. cit., págs. 637 y 638; ZARAGOZA AGUADO, J. A., “Artículo 301”, op. cit., pág. 1166; MALLADA FERNÁNDEZ, C., *Blanqueo de capitales y evasión fiscal*, op. cit., pág. 175; id., *Fiscalidad y blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 209; MARTÍNEZ-ARRIETA MÁRQUEZ DE PRADO, I., *El autoblanqueo. El delito fiscal como antecedente del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 73.

<sup>507</sup> Recordemos que, de conformidad con la normativa fiscal vigente, los incrementos de patrimonio no justificados tienen la consideración de una ganancia patrimonial que implica la realización del hecho imponible sujeto al pago del correspondiente impuesto. (Vid. BLANCO CORDERO, I., “El delito fiscal como actividad delictiva previa del blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 16; id., “La cuota tributaria defraudada como objeto material del delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 148; id., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 408; BACIGALUPO SAGESSE, S., *Ganancias ilícitas y derecho penal*, Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2004, págs. 43 y ss.; MALLADA FERNÁNDEZ, C., *Blanqueo de capitales y evasión fiscal*, op. cit., pág. 159 y ss.; id., *Fiscalidad y blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 187 y ss.). El artículo 39 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio da un tratamiento específico a los incrementos no justificados de patrimonio. La regla general es que dichos incrementos no justificados de patrimonio tienen la consideración de ganancias patrimoniales que se imputan en el periodo impositivo que se descubran, salvo que el contribuyente pueda acreditar documentalmente que la ganancia corresponde a un periodo anterior al de prescripción del correspondiente impuesto. Cuando esa ganancia o incremento no justificado del patrimonio se corresponda con bienes y derechos respecto de los que el contribuyente hubiera tenido que presentar la declaración de bienes en el extranjero, la ganancia patrimonial que se haya puesto de manifiesto se imputa al último periodo más antiguo de los no prescritos, salvo que el contribuyente acredite que los bienes o derechos situados en el extranjero se adquirieron con rentas declaradas en España o con rentas de las disponía cuando el sujeto no tenía la consideración de contribuyente en España

concurran todos los elementos del tipo previsto en el artículo 305 CP, la cuota defraudada pasará a ser objeto material del delito idóneo para la realización de una operación de blanqueo<sup>508</sup>. Ello porque la cuota tributaria constituye un bien que procede de una actividad delictiva, el delito fiscal. En este sentido, afirma BLANCO CORDERO que “la cuota tributaria es una cantidad de dinero que constituye normalmente una proporción que se aplica sobre la base imponible (gravamen). Y el dinero, evidentemente, constituye un bien en el sentido del delito de blanqueo de capitales. Se trata, con todo, de una cantidad de dinero que no ingresa en el patrimonio del autor del delito fiscal [con motivo de su comisión], sino que se encuentra en él porque constituye una parte del mismo. Este argumento, sin embargo, no impide considerar que la cuota tributaria procede del delito fiscal”<sup>509</sup>. La cuota defraudada procede de la actividad delictiva previa (delito fiscal), de tal modo que puede afirmarse la relación causal entre ambas<sup>510</sup>: “el delito fiscal supone un incremento del patrimonio del defraudador (...) con bienes que de otro modo no estarían en el mismo”: la cuota defraudada habría salido de dicho patrimonio si la defraudación no se hubiese realizado<sup>511</sup>. El delito fiscal es, por tanto, un delito de enriquecimiento: el defraudador “se hace con un patrimonio que no le corresponde”: la retención de la cuota tributaria no es un simple ahorro, sino que en efecto constituye una ganancia, “puesto que se trata de un patrimonio afecto a un fin diferente a la permanencia en el patrimonio personal del deudor”<sup>512</sup>. El incremento patrimonial derivado del no ingreso de la cuota tributaria debida constituye, en este sentido, una ganancia derivada de actividad delictiva, idónea como objeto material del

---

(de acuerdo con la modificación de la Ley 7/2012 operada en el artículo 39). Por su parte, y en relación con las entidades jurídicas que hayan de tributar conforme a la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, el artículo 121 de la norma prevé un tratamiento equivalente al previsto en el artículo 39 de la Ley 35/2006 con determinadas especificidades derivadas de la especial obligación de la llevanza de la contabilidad impuesta a los sujetos vinculados a la norma.

<sup>508</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., “El delito fiscal como actividad delictiva previa del blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 19; id., “La cuota tributaria defraudada como objeto material del delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 152; id., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 411.

<sup>509</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., “El delito fiscal como actividad delictiva previa del blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 20 y 21; id., “La cuota tributaria defraudada como objeto material del delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 153; id., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 412.

<sup>510</sup> Dicha conclusión puede alcanzarse acudiendo a la fórmula de la *conditio sine qua non*, según la cual, afirma BLANCO, “un bien procede de una actividad delictiva previa cuando, suprimiendo mentalmente tal actividad previa, el bien desaparecería en su concreta configuración. (...) No existirá nexo causal si la actividad previa no constituye una condición de la situación patrimonial actual o la existencia del bien”. (*El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 414).

<sup>511</sup> Ibidem, págs. 414 y 415.

<sup>512</sup> Vid. MARTÍNEZ-ARRIETA MÁRQUEZ DE PRADO, I., *El autoblanqueo. El delito fiscal como antecedente del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 73.

blanqueo<sup>513</sup>. Como afirma BLANCO CORDERO, “que se encuentre ya en poder del defraudador no tiene ninguna importancia a efectos del blanqueo”<sup>514</sup>.

A través de la Sentencia 974/2012, de 5 de diciembre (dictada en el caso conocido como Ballena Blanca), la Sala Segunda se ha pronunciado por primera vez<sup>515</sup> sobre la cuestión que nos ocupa, afirmando expresamente que es perfectamente posible que la cuota tributaria constituya el objeto material del delito de blanqueo<sup>516</sup> (no ha de confundirse dicha cuota con los rendimientos o base imponible que ha dado lugar a la deuda tributaria, que, al ser en principio lícita, no integrará el objeto material del delito de blanqueo). El hecho de que la cuota tributaria se encontrase con anterioridad a la comisión del delito fiscal en el patrimonio del defraudador no impide alcanzar dicha conclusión, no excluida en cualquier caso por el artículo 301 CP<sup>517</sup>. El delito fiscal “genera efectivamente un ahorro de gastos (la deuda tributaria), pero traduce dicho ahorro en una cantidad de dinero, esto es, otorga relevancia penal a los gastos ahorrados, en este caso, a la cuota tributaria defraudada, que debe superar los 120.000 euros. Esta cuantía, es el bien derivado del delito y, por lo tanto, es idónea para ser objeto material del delito de blanqueo. Que se encuentre ya en poder del defraudador no tiene ninguna importancia a efectos del blanqueo de capitales. Así también en las insolvencias punibles los bienes ya están en el patrimonio del deudor, y ello impide considerar que constituyen bienes que proceden de un delito, idóneos por lo tanto para ser blanqueados. El art. 257 n° 1 CP castiga a quien se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores, bienes, por lo tanto, expresamente mencionados en el tipo penal y

---

<sup>513</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., “El delito fiscal como actividad delictiva previa del blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 23 y 24; id., “La cuota tributaria defraudada como objeto material del delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 156; id., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 415 y 416.

<sup>514</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., “El delito fiscal como actividad delictiva previa del blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 23; id., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 416.

<sup>515</sup> Vid. VILLEGAS GARCÍA, M. A., “El autoblanqueo y el delito fiscal como delito antecedente del delito de blanqueo: la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo n.º 974/2012, de 5 de diciembre”, op. cit., pág. 39.

<sup>516</sup> Si bien, en su voto particular, el Magistrado D. Antonio del Moral García expresa su opinión discrepante en el sentido de considerar que si la deuda tributaria es anterior a la comisión del delito, dicha deuda es presupuesto de la comisión del delito, no su consecuencia. Así, el delito de defraudación tributaria en su modalidad de elusión del pago de tributos no produce bienes. En el patrimonio del obligado tributario no se produce alteración alguna: tras la defraudación tributaria, en dicho patrimonio hay exactamente los mismos bienes que antes de producirse aquélla. No puede por tanto hablarse de bienes provenientes de ese delito que puedan ser blanqueados. En puridad, afirma el Magistrado, la comisión del delito fiscal no supone un enriquecimiento patrimonial en el blanqueador, “sino un indebido “no empobrecimiento”, es decir la no producción del empobrecimiento -pago debido-. Es un ahorro, no un incremento; un *damnum cesans* y no un lucro emergente.”

<sup>517</sup> Tampoco, según la Sentencia, son atendibles los argumentos que sostienen que “el blanqueo dimanante de un delito fiscal vulnera el principio “ne bis in idem”, por cuanto, (...) la cuota defraudada es el resultado de la liquidación tributaria de un fraude al erario público, en tanto que el objeto del ulterior blanqueo es la ganancia obtenida de ese fraude, es decir la cuota tributaria”.



que resultarán contaminados al menos en la cuantía de las deudas que tenga con aquellos. Y también se encuentran los bienes en poder del delincuente (aunque no le pertenezcan) en la apropiación indebida, en la que el sujeto activo los ha recibido antes de apropiárselos, y ello no impide considerarlos bienes idóneos para el blanqueo por constituir el objeto del delito”<sup>518</sup>. Con ello, se alcanza la conclusión de que la comisión del delito fiscal supone un beneficio o provecho económico para el defraudador, con bienes que de otro modo no estarían en el mismo. Dicho beneficio cuantificable económicamente, cuando supere la cuantía típica de 120.000 euros, al derivar de una actividad delictiva, es “susceptible de ser considerado bien idóneo del delito de blanqueo de capitales”. Para ello será preciso que “durante la investigación se pueda identificar razonablemente la parte de los bienes del patrimonio del defraudador que constituyen la cuota tributaria”. Por último, según el Alto Tribunal, avala esta tesis el hecho de que el blanqueo de capitales se configure como un delito autónomo, que protege bienes jurídicos diferenciados a los tutelados por el delito fiscal, por lo que ambas conductas típicamente previstas adquieren relevancia penal y criminológica autónoma<sup>519</sup>.

### ***c) Toma de posición y conclusiones***

A nuestro juicio, ningún impedimento existe para considerar el delito contra la Hacienda Pública como hecho previo del delito de blanqueo. El delito fiscal constituye una actividad delictiva generadora de beneficios económicamente cuantificables: la cuota tributaria, que conforma, en este caso, el objeto material del delito de blanqueo. Las tesis que rechazan la posibilidad de que el delito fiscal constituya el delito antecedente del blanqueo parecen partir de una confusión entre base imponible, cuya licitud no tiene por qué ser discutida, y la cuota tributaria, la cual, verificada la comisión del delito fiscal, sí tiene encaje en la descripción típica del artículo 301 CP como bienes que provengan o tengan su origen en una actividad delictiva, constituyendo así objeto material del delito de blanqueo. El hecho de que dicha cantidad no haya ingresado en el

---

<sup>518</sup> Vid. STS 974/2012, de 5 de diciembre, FJº 37.

<sup>519</sup> De acuerdo con la Sentencia referida, “los comportamientos de uno y otro delito son diferentes y diversos son los bienes jurídicos protegidos. En el delito de blanqueo la doctrina mayoritaria sostiene que se afecta al orden económico”, mientras que en el delito fiscal, el bien jurídico protegido apunta a “los principios constitucionales que imponen la real y leal contribución al sostenimiento de los servicios sociales y los cargos públicos, por lo que cualquier fraude tributario supone un grave atentado contra ellos. Consecuentemente se trata de conductas que adquieren relevancia penal y criminológica autónoma y permiten su aplicación conjunta como suma de actividades delictivas de distinto carácter y de bienes jurídicos de distinta naturaleza afectados, por lo que la norma del delito penal no abarca la total antijuricidad del hecho.”

patrimonio del contribuyente como consecuencia de la defraudación no es óbice para considerar que la elusión del tributo supone un incremento de dicho patrimonio. Se trata en todo caso de un beneficio procedente directamente de la actividad delictiva desarrollada, idóneo por tanto como objeto material del delito de blanqueo de capitales. Cuestión diferente, como hemos apuntado en otro lugar de este trabajo<sup>520</sup>, es que la imputación de un delito de blanqueo al defraudador, además del delito contra la Hacienda Pública, pueda contravenir la prohibición del *bis in idem*, si bien esta circunstancia deriva de la inoportuna punición expresa del autoblanqueo -previsión que de *lege ferenda*, como dijimos, debería suprimirse del tipo de blanqueo-. En cualquier caso, los dos tipos delictivos lesionan bienes jurídicos diferenciados, por lo que nada impide la apreciación del concurso real entre ambos.

El problema fundamental que presenta la tesis favorable a la incriminación de las operaciones de blanqueo realizadas sobre la cuota tributaria defraudada es la individualización de la misma dentro del patrimonio del contribuyente<sup>521</sup>. No resultará sencillo determinar qué parte del patrimonio del obligado tributario que no ha liquidado el correspondiente impuesto ha quedado contaminada<sup>522</sup>, y si no se puede individualizar dicha porción patrimonial “difícilmente se puede realizar la conducta típica del delito de blanqueo”, al no estar determinado su objeto material<sup>523</sup>. En efecto, es necesario establecer con precisión cuál es la cuota defraudada para poder determinar la tipicidad de la conducta que ha de recaer sobre el objeto material del delito (dicha cuota defraudada). En el voto particular de la Sentencia 974/2012, se expone con claridad el problema planteado: si se afirma la idoneidad, como objeto material del delito de

---

<sup>520</sup> Vid. *supra*, apartado 3.4.3 del capítulo III, págs. 290 y ss.

<sup>521</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., “El delito fiscal como actividad delictiva previa del blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 26 y ss.; id., “La cuota tributaria defraudada como objeto material del delito de blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 157 y ss.; id., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 416; MALLADA FERNÁNDEZ, C., *Blanqueo de capitales y evasión fiscal*, op. cit., pág. 175.

<sup>522</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 388. Respecto al momento de la contaminación, de acuerdo con BLANCO, viene determinado por la fecha de vencimiento para la declaración del correspondiente impuesto. Presentan, sin embargo, especial dificultad aquellos supuestos en los que “el acto de liquidación definitiva se realiza muy posteriormente a su vencimiento” (así, en supuestos de investigaciones o inspecciones, en los que el acto de liquidación correcto se produce con posterioridad al vencimiento de los plazos administrativos). Para estos casos, sostiene el monografista, hasta que no exista una decisión definitiva que precise la existencia y cuantía de una cuota defraudada, “no podrá considerarse que existen bienes susceptibles de ser blanqueados. (Ibidem, págs. 417 y 418).

<sup>523</sup> Vid. BLANCO, CORDERO, I., “El delito fiscal como actividad delictiva previa del blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 27; id., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 420. Asimismo, STS 974/2012, de 5 de diciembre, FJº 37. Como afirma MALLADA FERNÁNDEZ, la problemática descrita no se presenta en los delitos fiscales con forma comisiva activa (fraude de subvenciones o devolución indebida de ingresos), “ya que el dinero entra en el patrimonio del delincuente en ese preciso momento”. (*Blanqueo de capitales y evasión fiscal*, op. cit., págs. 175 y 176).

blanqueo, de la cuota defraudada “(que es una cifra contable, un valor, no una realidad identificable), se acabará teniendo que sostener que cualquier elemento del patrimonio del autor, hasta que alcance el monto de la cuota, es un bien proveniente del delito. ¿Hay alguna posibilidad de marcar justamente los bienes que debían destinarse al pago de esa cuota? ¿Es solamente el metálico? ¿La enajenación de cualquier activo será delito de blanqueo de capitales? Los bienes correspondientes a la cuota defraudada, ¿no pueden ser justamente los que el autor gastó antes del vencimiento del tributo? ¿Cuáles son los bienes que quedan ensuciados por ese delito de defraudación tributaria si el patrimonio es mucho mayor? No es un problema anudado a la fungibilidad del dinero. Es sustancialmente distinto. Según la concepción que ahora se combate, el autor del delito de defraudación tributaria también sería autor de un delito de blanqueo aunque en el momento del impago careciese absolutamente de liquidez y solo dispusiese de inmuebles u objetos suntuosos. En esos valores habría que buscar la “cuota defraudada”.

En efecto, nos enfrentamos a una cuestión de extremada complejidad a la que, en la actualidad, ni la doctrina ni la jurisprudencia ha dado una solución satisfactoria. En ningún caso cabe afirmar la contaminación total de los bienes, pues ello resulta desproporcionado y supondría una interpretación *contra legem*<sup>524</sup> del tipo. De acuerdo con BLANCO CORDERO<sup>525</sup>, cuyos brillantes argumentos son asumidos en la STS 974/2012, sólo en algunos casos será posible individualizar, dentro del patrimonio del obligado tributario, aquella porción que corresponde a la cuota tributaria, sobre la que ha de recaer la modalidad de acción para apreciar la tipicidad del blanqueo. Ello ocurrirá, en primer lugar, en los casos en los que la conducta penalmente típica recaiga sobre “una parte del patrimonio del defraudador que obligatoriamente incluya todo o parte de la cuota tributaria” (cuando la acción de blanqueo se realiza sobre la totalidad del patrimonio del autor del delito previo, o “sobre una proporción tan elevada de su patrimonio que supere la parte lícita y comprenda una parte del valor de la cuota

---

<sup>524</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., “El delito fiscal como actividad delictiva previa del blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 27; id., “La cuota tributaria defraudada como objeto material del delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 158; id., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 420; MALLADA FERNÁNDEZ, C., *Blanqueo de capitales y evasión fiscal*, op. cit., págs. 159 y ss.; id., *Fiscalidad y blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 210 y 211.

<sup>525</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., “El delito fiscal como actividad delictiva previa del blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 28 y ss.; id., “La cuota tributaria defraudada como objeto material del delito de blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 159 y ss.; id., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 421 y ss.

tributaria impagada”)<sup>526</sup>. También, en segundo lugar, en aquellos casos en los que se realice una operación sobre la totalidad de la masa patrimonial integrada por la base liquidable, toda vez que una parte de la misma estará contaminada, o sobre una cuantía de dinero que obligatoriamente incluya una parte de la cuota tributaria<sup>527</sup>. En ambos casos parece posible determinar con alto grado de certeza que los bienes obtenidos del delito fiscal se encuentran total o parcialmente en el objeto sobre el que recae la acción típica del delito de blanqueo. En otros supuestos, cuando no sea posible individualizar la porción patrimonial correspondiente a la cuota tributaria, no podrán considerarse penalmente relevantes las conductas coincidentes con la descripción típica, al no recaer sobre cuantías que, fuera de toda duda, constituyan el objeto material del delito de blanqueo.

Por último, de acuerdo con lo expresado por BLANCO CORDERO y MELLADA FERNÁNDEZ, consideramos que la prescripción del delito fiscal no descontamina la cuota tributaria defraudada, que podrá integrar el delito de blanqueo aun cuando el delito contra la Hacienda Pública haya prescrito<sup>528</sup>. Sin embargo, la institución de la regularización de la situación tributaria del obligado sí permitirá a nuestro juicio la descontaminación de la cuota inicialmente no ingresada. A partir de ese momento dará comienzo el plazo de prescripción del delito, “puesto que no será hasta entonces cuando el sujeto activo del delito deje de poseer el bien ilícito y de cometer el delito fiscal”<sup>529</sup>. Para BLANCO, sin embargo, esta conclusión no puede mantenerse cuando la modalidad comisiva sea la de mera posesión, pues el defraudador habrá poseído en todo caso la

---

<sup>526</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., “El delito fiscal como actividad delictiva previa del blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 28; id., “La cuota tributaria defraudada como objeto material del delito de blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 159 y 160; id., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 421.

<sup>527</sup> Ibidem, págs. 421 y 422; MALLADA FERNÁNDEZ, C., *Blanqueo de capitales y evasión fiscal*, op. cit., pág. 177.

<sup>528</sup> Vid. MALLADA FERNÁNDEZ, C., *Blanqueo de capitales y evasión fiscal*, op. cit., pág. 177; id., *Fiscalidad y blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 212. Para BLANCO CORDERO, de conformidad con el artículo 132.1 CP, que “dispone que el plazo de prescripción de los delitos permanentes se computará desde que se eliminó la situación ilícita (...), el plazo de prescripción del delito de blanqueo en su modalidad de posesión comenzará a contar desde que el sujeto deje de poseer.” Sin embargo, a juicio del monografista, “lo más razonable, para evitar la imprescriptibilidad del blanqueo, es atender (en línea de lo manifestado por el TS) al momento de toma de posesión de los bienes como inicio de la prescripción”. (“El delito fiscal como actividad delictiva previa del blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 35; id., “La cuota tributaria defraudada como objeto material del delito de blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 165 y 166; id., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 429 y ss.).

<sup>529</sup> Vid. MALLADA FERNÁNDEZ, C., *Blanqueo de capitales y evasión fiscal*, op. cit., pág. 178.

cuota defraudada antes de proceder a la regularización, de tal modo que ya habrá realizado el delito de blanqueo de capitales<sup>530</sup>.

#### 4.3.2.3. “ORIGEN” Y “PROCEDENCIA DELICTIVA” COMO NEXO DE UNIÓN ENTRE EL BIEN Y EL DELITO PREVIO

El tercer elemento que caracteriza al objeto del delito de blanqueo de capitales es la vinculación de los bienes o capitales sobre los que ha recaer la conducta típica con el delito previo. El Código emplea dos expresiones diferenciadas para referirse a dicho vínculo: que los referidos activos o capitales *tengan origen* (expresión que emplea el artículo 301.1) o *procedan* (artículo 301.2) de una actividad delictiva anterior. Acertadamente, un sector doctrinal afirma que estamos ante expresiones equivalentes<sup>531</sup>, tanto desde un punto de vista semántico como jurídico, pues en ambas fórmulas “se establece una relación entre delito previo y delito de blanqueo cuyo punto de intersección o lazo de conexión es el bien, objeto material de este último delito”<sup>532</sup>.

Con anterioridad hemos visto que tanto la doctrina como la jurisprudencia sostienen que el *origen delictivo* del bien objeto del blanqueo es un elemento normativo del tipo<sup>533</sup>, y como tal, debe ser también objeto de prueba<sup>534</sup>. Como ha puesto de manifiesto MIRANDA ESTRAMPES, respecto a la “conexión, la doctrina jurisprudencial viene reclamando que la misma resulte plenamente acreditada mediante la prueba practicada (...), sin que pueda consistir en cualquier conexión, más o menos evanescente, con el delito antecedente y sin que, además, dicho origen ilícito pueda presumirse”<sup>535</sup>. La Sala Segunda ha afirmado en múltiples Sentencias (por todas SSTs 483/2007, de 4 de junio, y 928/2006, de 5 de octubre) que no se exige al respecto ninguna regla probatoria especial, pudiendo acreditarse el origen delictivo del bien sobre el que opera el agente de múltiples formas: desde la aportación al proceso de

<sup>530</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., “El delito fiscal como actividad delictiva previa del blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 38; id., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 432 y 433.

<sup>531</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 202; PALMA HERRERA, J. M., *Comentarios al Código Penal*, op. cit., pág. 309; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 413. No obstante esta interpretación no se comparte en la doctrina de forma unánime, y algunos autores opinan de manera divergente, como es el caso de VIDALES RODRÍGUEZ (*Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código penal de 1995*, op. cit., pág. 109).

<sup>532</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Comentarios al Código Penal*, loc. cit.

<sup>533</sup> Vid. *supra*, apartado 4.3.2.2 de este capítulo, pág. 393.

<sup>534</sup> Vid. CALDERÓN CEREZO, A., *Delitos contra el orden socioeconómico*, op. cit., pág. 393.

<sup>535</sup> Vid. MIRANDA ESTRAMPES, M., “Blanqueo de capitales, presunción de inocencia y prueba indiciaria”, La Ley 19196/2011, Año XXXII. N° 7736, 15 de noviembre de 2011, pág. 12.

copia testimoniada de la Sentencia condenatoria del hecho delictivo del que proceden los bienes hasta el recurso a la prueba indiciaria, muy habitual en estos casos<sup>536</sup>. Es este último medio probatorio, de acuerdo con la STS 910/2014, de 2 de enero de 2015, el más idóneo y, en la mayor parte de las ocasiones, único posible para acreditar el origen delictivo del capital, si bien, su utilización exige la estricta observancia de las especiales cautelas que para este controvertido mecanismo acreditativo impone la jurisprudencia<sup>537</sup>. Aunque, de acuerdo con la Sala Segunda, no es necesario que se precise con detalle el hecho delictivo concreto que ha generado los beneficios económicos con los que el agente opera -es suficiente acreditar que existe una actividad delictiva previa de la que provienen dichos fondos- ni la identidad de los concretos sujetos que participaron en el referido hecho previo, debe descartarse de forma motivada, en atención a las circunstancias del caso concreto, la posibilidad de que aquellos fondos tengan otros posibles orígenes, diferentes a un hecho delictivo<sup>538</sup>. A este respecto, sería conveniente analizar con suficiente cautela la existencia de incrementos patrimoniales no justificados en el patrimonio del agente, pues, como se afirma en la STS 928/2006, de 5 de octubre, “el delito del art. 301.1 CP no consiste en la omisión de justificar los incrementos del patrimonio, sino en acciones positivas de receptación, transformación, ocultamiento, etc., de dinero proveniente de un delito. Ello no significa que los incrementos patrimoniales ni justificados sean impunes”, pues, en

---

<sup>536</sup> Vid. ZARAGOZA AGUADO, J. A., “Artículo 301”, op. cit., pág. 1166. Como hemos visto, como indicios habituales que permiten conectar el bien sobre el que recae la conducta típica con hechos delictivos previos destacan la constatación de algún vínculo o conexión del sujeto con actividades delictivas criminales o con personas o grupos vinculados a las mismas, la existencia de antecedentes penales, la incautación de bienes producto del delito o efectos del mismo, la sujeción a otros procedimientos judiciales, la vinculación con otras investigaciones criminales (incluso de naturaleza policial), el contenido de conversaciones telefónicas, la incautación de documentación contable paralela o clandestina, etc. (Ibidem, págs. 1169 y 1170). En general, afirma JUAN SÁNCHEZ, integrará en este sentido indicio “cualquier circunstancia concurrente que sea susceptible de ser calificada como irregular o atípica desde una perspectiva financiera y mercantil, [puesto que las mismas] no vienen sino a indicar, en el fondo, la clara intención o voluntad de ocultar los bienes del producto del delito”. (“Derecho Procesal Penal”, *Auditoría, prevención y represión del blanqueo de capitales*, Ed. Liber Factory. Madrid, 2014, pág. 167). En la STS 467/2005, de 14 de abril, se afirma que el hecho delictivo en el que indiciariamente traen causa los bienes objeto de la conducta típica no han de resultar “alejados en el tiempo de forma significativa (...), pues en ese caso su poder demostrativo se debilita extraordinariamente hasta resultar insuficiente, al aparecer otras posibles explicaciones razonables de la conducta. Por lo tanto, entre la acción que se considera constitutiva del delito de blanqueo y los hechos indiciarios (...) debe existir cierta coincidencia temporal”. En cualquier caso, como advierte MANJÓN-CABEZA OLMEDA, el recurso a la prueba indiciaria no puede transmutarse en una inversión de la carga de la prueba en aquellos supuestos en los que el sujeto omita o no sea capaz de justificar sus incrementos patrimoniales. La prueba indiciaria no puede elevar, tampoco, a la categoría de sospecha la existencia de un entramado societario o de negocios jurídicos simulados -pues como se afirma en la STS 145/2008, de 8 de abril, por sí solos pueden constituir actos jurídicamente neutros-, o un historial delictivo más o menos amplio, o las meras sospechas policiales, pues “si las mismas no se confirman o se han negado en una resolución judicial, no sirven para acreditar la previa actividad delictiva”. (“Ganancias criminales y ganancias no declaradas (El desbordamiento del delito fiscal y del blanqueo)”, op. cit., págs. 668 y 669).

<sup>537</sup> Vid. *infra*, apartado V.2.2 del capítulo V, págs. 434 y ss.

<sup>538</sup> Vid. ZARAGOZA AGUADO, J. A., “Artículo 301”, op. cit., pág. 1169.

su caso, pueden tener relevancia penal derivada de la comisión de un delito fiscal. No obstante lo dicho, en su prolijo estudio de la jurisprudencia relativa al delito de blanqueo de capitales, CALDERÓN CEREZO ha constatado que en los casos en los que el acusado se ha beneficiado de un notorio e injustificado incremento patrimonial, que no tiene un origen explicable en términos comerciales y financieros, la Sala Segunda tiende a desplazar la carga de la prueba al acusado, exigiéndole una explicación del origen lícito de sus numerosos bienes o de las importantísimas cantidades de dinero manejadas para descartar la existencia de un delito de blanqueo. En este aspecto, “el silencio del acusado puede reforzar la virtualidad incriminatoria de otras pruebas de cargo”, y una explicación plausible del origen de los fondos por parte del acusado puede conducir a pronunciamientos absolutorios. (Vid. las reseñas que hace el reputado jurista a las SSTS 1113/2004, de 9 de octubre, y 774/2001, de 9 de mayo, resolución esta última en la que la Sala Segunda confirma la absolución del Tribunal de instancia, por aplicación del principio *in dubio pro reo*, al haber proporcionado el acusado explicaciones razonables sobre el origen de las importantes sumas de dinero y bienes que poseía)<sup>539</sup>.

La doctrina ha señalado que el bien sobre el que recae la conducta típica puede estar representado directamente por el objeto material del delito precedente (si es apto para el tráfico legal)<sup>540</sup>, o ser el beneficio, ganancia o utilidad que aquel haya reportado al autor, incluyéndose el precio, la recompensa o la promesa<sup>541</sup>. Expresamente deben considerarse excluidos los instrumentos empleados para la comisión de delito, pues no tienen su origen o no proceden de aquel<sup>542</sup>.

#### **4.3.3. LA EXTENSIÓN DEL BLANQUEO DE BIENES SUSTITUTIVOS. CRITERIOS RELATIVOS A LA DESCONTAMINACIÓN DEL BIEN**

Por bienes sustitutivos entendemos aquéllos que no proceden directamente de la comisión del delito, sino que son fruto de alguna transformación sobre el bien o capital

---

<sup>539</sup> Vid. CALDERÓN CEREZO, A., *Delitos contra el orden socioeconómico*, op. cit., págs. 428 y ss.

<sup>540</sup> No es posible blanquear el objeto material de ciertos delitos, pues estos nunca podrían introducirse en el tráfico legal precisamente por estar prohibido su comercio. Así ocurre por ejemplo con las sustancias de que son objeto los delitos de tráfico de drogas, o las armas o especies protegidas en los delitos de tráfico ilegal de ambas. (Vid. CARPIO DELGADO, J. del, *El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal*, op. cit., págs. 94 y ss.).

<sup>541</sup> Vid. MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de Capitales”, 3ª ed., op. cit., pág. 484.

<sup>542</sup> Vid. CARPIO DELGADO, J. del, *El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal*, op. cit., pág. 103; ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 205.

originario, por virtud de cualquier tipo de negocio jurídico. La doctrina admite de forma pacífica la aptitud de los bienes sustitutivos para la configuración típica del delito de blanqueo<sup>543</sup>, si bien se advierte acertadamente que, en cualquier caso, ha de ser efectivamente probado el carácter delictivo de bien sustitutivo, “a cuyo efecto deberá verificarse el curso causal y el momento de la sustitución para evitar que el delito de blanqueo esté permanentemente abierto, sin posible prescripción”<sup>544</sup>.

Resulta conveniente en todo caso señalar ciertos límites que permitan interrumpir la “conexión entre los bienes objeto de blanqueo y la infracción previa”<sup>545</sup>. El Código penal no proporciona en este sentido ningún criterio limitador<sup>546</sup>, si bien la doctrina, fundamentalmente en Alemania, ha ofrecido ciertas pautas para evitar conexiones demasiado alejadas entre el bien y la infracción penal.

En el marco de la doctrina española, BLANCO CORDERO ha dedicado un considerable esfuerzo a la búsqueda de los *límites del blanqueo sustitutivo*, esto es, a determinar aquellos criterios que permitan afirmar la ruptura del nexo causal entre un bien sustitutivo y el ilícito penal originario. En efecto, ha de evitarse un *regresus ad infinitum*<sup>547</sup>, pues resulta “excesivo y distorsionador del tráfico jurídico y económico mantener indefinidamente el carácter delictivo de los bienes procedentes de un delito”<sup>548</sup>. Partiendo de un riguroso estudio de los criterios aportados por BARTON, ha estudiado BLANCO CORDERO las posibilidades de resolución de una serie de casos controvertidos a partir de las teorías penales relativas a la causalidad (teorías de la equivalencia de condiciones, de la causalidad adecuada y la moderna teoría de la imputación objetiva), aunque teniendo en cuenta también aspectos económicos, como

---

<sup>543</sup> Una interpretación diferente “dejaría al blanqueo con un limitadísimo marco de aplicación, pues (...) la característica criminológica más relevante del blanqueo es su desarrollo en diversas operaciones que se van sucediendo, formando su conjunto un proceso que tiende a perpetuarse en el tiempo.” (Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 207).

<sup>544</sup> Vid. CALDERÓN CEREZO, A., *Comentarios al Código penal*, vol. 3, op. cit., pág. 2297.

<sup>545</sup> Vid. MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de Capitales”, 3ª ed., op. cit., pág. 488. En este sentido, advierte BLANCO CORDERO de la incorrección de “admitir una derivación ilimitada de los bienes originarios de forma que todos los que tengan algún tipo de conexión con ellos en su origen deban ser considerados provenientes del delito previo. Si las transformaciones no tienen, en principio, por qué causar una interrupción de la unión entre el bien originario y el hecho previo, esa unión no debe ser tan extensamente perpetuada que abarque todas las posteriores transformaciones de dichos bienes.” (*El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 340).

<sup>546</sup> Vid. MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de Capitales”, 3ª ed., loc. cit.

<sup>547</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 341.

<sup>548</sup> *Ibidem*, pág. 369.



complementarios a los criterios causales<sup>549</sup>. CARPIO DELGADO también ha acudido a criterios causales para resolver estos casos problemáticos<sup>550</sup>. Sin embargo, las soluciones alcanzadas por ambos autores, como apunta ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, presentan el inconveniente de “resolver cada uno de los supuestos en base a una teoría de la causalidad distinta, con lo que su argumentación, aceptable caso por caso, pierde coherencia si es valorada en conjunto”<sup>551</sup>. Para ARÁNGUEZ SÁNCHEZ el análisis sobre la descontaminación de un bien de su origen ilícito debe abordarse de acuerdo con una *interpretación teleológica* de la norma antiblanqueo, que en definitiva persigue “el aislamiento de los beneficios procedentes de un delito (...) del tráfico económico legal”<sup>552</sup>.

Las hipótesis más problemáticas de contaminación, a las que la doctrina ha prestado especial atención, son las siguientes: la mezcla del objeto de origen delictivo con otros lícitamente obtenidos, los supuestos en los que el bien de ilícito origen produce beneficios -ordinarios o extraordinarios-, los casos de devaluación y revalorización del bien de origen delictivo, los supuestos de especificación del mismo, la adquisición del bien contaminado por un tercero de buena fe y, finalmente, los supuestos de prescripción del delito. Se trata de determinar si en cada uno de estos casos, el capital lícito mezclado, los beneficios, la revalorización del bien, el nuevo bien surgido tras la especificación, etc. *resultan contaminados*, de modo tal que todo el conjunto se considera afectado por el estigma de la ilícita procedencia, o si no ocurre de ese modo.

Empezaremos ocupándonos de los supuestos de *mezcla* del objeto de origen delictivo con otros lícitamente obtenidos. El supuesto de hecho, bastante frecuente en la práctica, es aquel en el que se produce la adquisición de un bien, parte con capital de origen delictivo y parte con capital lícito. Para dar solución a estos casos, la doctrina ha recurrido a sistemas de porcentajes, a otros basados en principios de

---

<sup>549</sup> Ibidem, págs. 342 y ss. También se proponen otras vías de restricción, como las construcciones jurídico-civiles de la propiedad, la adecuación social y las reducciones teleológicas. (Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 208).

<sup>550</sup> Vid. CARPIO DELGADO, J. del, *El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal*, op. cit., págs. 109 y ss.

<sup>551</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 209. Así, el autor pone como ejemplo la resolución que hace BLANCO CORDERO de la adquisición de una cuota empresarial con activos delictivos basándose en la Teoría de la Equivalencia de Condiciones, mientras que para resolver la descontaminación de bienes ilícitos por intervención de juegos de azar emplea la Teoría de la Causalidad Adecuada.

<sup>552</sup> Ibidem, págs. 209 y 210.

proporcionalidad<sup>553</sup>, y hasta se ha llegado a hablar de la contaminación absoluta de todo el bien adquirido<sup>554</sup>. Si bien en un primer momento BLANCO CORDERO admitió el recurso al principio de proporcionalidad, afirmando que ha de analizarse en cada caso concreto el grado de correlación entre la parte de origen delictivo y la parte legítimamente obtenida<sup>555</sup>, en la última edición de su monografía matiza que “si se acredita que la mezcla tiene como objetivo utilizar el dinero limpio para lavar el sucio, entonces resultará contaminada la totalidad de la mezcla”<sup>556</sup>. Por su parte, ARÁNGUEZ SÁNCHEZ propone que, para estos casos de mezcla, además se establezca un límite a la cuantía del bien, “como medio de limitar la posibilidad de ser objeto material del delito de blanqueo”<sup>557</sup>.

Respecto a los beneficios que pueda proporcionar el bien de origen delictivo, la doctrina diferencia los supuestos de *beneficios ordinarios* de aquellos de origen extraordinario. Respecto a los primeros, por ejemplo los dividendos de una empresa financiada con capital de ilícita procedencia, la doctrina (LEIP) habla del “principio del todo o nada”, según el cual los beneficios se considerarán contaminados si el capital originario ilícito supera al legítimamente obtenido, y no si ocurre en sentido inverso<sup>558</sup>. Respecto a los *beneficios extraordinarios* -v. gr. la adquisición, con capital de ilícito origen, de un billete de lotería que finalmente resulta premiado-, se entiende que el premio no resulta contaminado, ya que la proporción aportada por el valor invertido (ilícito) es mucho menor que el “golpe de fortuna en el juego”, que es una forma de obtener ganancias perfectamente legal<sup>559</sup>.

En relación con la *devaluación y revalorización* del bien ilícitamente obtenido del bien de origen ilícito, BLANCO y ARÁNGUEZ coinciden en que en ambos supuestos el bien mantiene su contaminación, que además se traslada, en su caso, a aquella parte

---

<sup>553</sup> Criterio al que se ha adherido PALMA HERRERA. (*Comentarios al Código Penal*, op. cit., pág. 690).

<sup>554</sup> No nos parece esta solución la más acertada, pues como apunta ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, conforme a esta idea cada euro de procedencia delictiva podría contaminar millones: esta teoría implicaría una sucesiva expansión de los bienes contaminados “como una mancha de aceite, de tal modo que si no se limita ese proceso en poco tiempo casi todos los objetos de comercio tendrían una relación más o menos directa con la comisión de un delito”. (*El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 210).

<sup>555</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 2ª ed., op. cit., pág. 300.

<sup>556</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 357.

<sup>557</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 212.

<sup>558</sup> Ibidem. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ acepta la aplicación de este principio pero con una matización: si las participaciones en la empresa son divisibles, y el capital de origen delictivo es aportado por socio/-s individualizado/-s, “no cabe considerar a todos los beneficios como de origen ilegal, sino sólo los percibidos por el socio que participó en la empresa con capitales de ilícita procedencia”. (Ibidem, pág. 213).

<sup>559</sup> Ibidem.

revalorizada<sup>560</sup>. Y ello ocurre, sostiene BLANCO CORDERO, tanto si la revalorización se produce como consecuencia del transcurso del tiempo como en aquellos casos en que aquélla traiga causa en la pericia del poseedor del bien<sup>561</sup>.

A la hipótesis de *transmisiones parciales* de un bien a su vez parcialmente proveniente de un delito se han dado diversas soluciones. La más acertada, a nuestro juicio, apunta a que tras la confusión, “cada parte del objeto contaminado resulta contaminado en una proporción idéntica al global”; después “sólo restará saber si esa proporción de dinero ilícito justifica la proveniencia global ilícita de toda la cantidad”, juicio que se efectuará de acuerdo con los criterios empleados para los supuestos de mezcla<sup>562</sup>.

Respecto a los supuestos de *especificación* o transformación del bien por el trabajo de un tercero, BLANCO CORDERO ha acogido los criterios civilistas aportados por la doctrina alemana (cumplimiento de una serie de requisitos, a saber: la adquisición del bien de buena fe<sup>563</sup>, la indemnización al verdadero dueño y que el producto de la transformación sea superior al del valor originario), matizando que el nuevo bien quedará descontaminado siempre que “se transforme” en un bien “de nueva especie”<sup>564</sup>. ARÁNGUEZ discrepa, acertadamente a nuestro juicio, de dicho razonamiento: para solucionar estos casos hay que acudir de nuevo a los criterios generales aplicables a los supuestos de mezcla<sup>565</sup>.

La *adquisición del bien de procedencia delictiva por un tercero de buena fe*, ¿descontamina dicho bien? En primer lugar, hay que partir de la idea de que el adquirente de un bien sobre el que desconoce su procedencia delictiva sin mediar imprudencia grave no comete delito de blanqueo, pues en su conducta no concurre tipicidad subjetiva alguna<sup>566</sup>. Pero, ¿qué ocurre con el bien? Para ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, el bien queda descontaminado, siendo el capital entregado -como contraprestación- el

<sup>560</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., loc. cit.; ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 214.

<sup>561</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 362.

<sup>562</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 215 y 216.

<sup>563</sup> Creencia de que se adquiere al legítimo titular de la cosa y que éste tiene plena capacidad para transmitir su dominio (artículo 1950 CC).

<sup>564</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 360. En contra de esta interpretación, para PALMA HERRERA aun cuando el bien sufra múltiples transformaciones, mantendrá su contaminación *sine die*, con independencia de que haya perdido su identidad como bien o no lo haya hecho. (*Comentarios al Código Penal*, op. cit., pág. 691).

<sup>565</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 216.

<sup>566</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 367.

que pasa a estar contaminado<sup>567</sup>. BLANCO CORDERO matiza que para que se elimine el rastro delictivo del bien, es preciso que exista un acto de transmisión en el que el tercer adquirente de buena fe haya satisfecho una contraprestación “adecuada o (...) haya pagado un precio justo”, que dicho tercer adquirente “no cometa un delito, esto es, que desconozca el origen delictivo de los bienes, pues de lo contrario su acción punible no limpiará la mancha” y, finalmente, que actúe en beneficio propio y no en interés del blanqueador<sup>568</sup>.

Por último, ¿de qué manera afecta al bien la *prescripción o despenalización del delito* de cuya comisión trae causa? PALMA HERRERA y ARÁNGUEZ SÁNCHEZ se pronuncian a favor de la descontaminación del bien en ambos supuestos<sup>569</sup>; BLANCO CORDERO, en cambio -a nuestro juicio acertadamente, basándose en el principio de accesoriedad limitada del blanqueo (que sólo exige del hecho previo que sea típicamente antijurídico)-, entiende que esas ganancias siguen contaminadas, de modo que aún pueden constituir objeto material del delito de blanqueo<sup>570</sup>.

---

<sup>567</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 217. En contra de esta opinión, PALMA HERRERA entiende que el bien continuará contaminado. Si se produce una ulterior transmisión por parte del adquirente, estaría éste actuando en ejercicio legítimo de un derecho (derecho del tercer adquirente de buena fe de disponer de los bienes como legítimo propietario), y con ello actuaría amparado en una causa de justificación. (*Comentarios al Código Penal*, op. cit., pág. 692). Se advierte que, en cualquier caso, los terceros adquirentes de buena fe, “por razones de seguridad del tráfico económico deben ser mantenidos en su adquisición (art. 34 de la Ley Hipotecaria, arts. 85 y 547 y ss. del Código de Comercio, etc.)”. (Vid. CALDERÓN CEREZO, A., *Comentarios al Código penal*, vol. 3, op. cit., pág. 2297).

<sup>568</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 367 y 368.

<sup>569</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 218 y 219. En el mismo sentido, PALMA HERRERA afirma que sólo este supuesto de despenalización del delito “produce un saneamiento o descontaminación” del bien. (*Comentarios al Código Penal*, op. cit., pág. 692).

<sup>570</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 365 y 366.



## **CAPÍTULO QUINTO. EL TIPO SUBJETIVO EN EL DELITO BASICO DE BLANQUEO DE CAPITALS**



## 5.1 INTRODUCCIÓN. PROBLEMÁTICA RELATIVA AL TIPO DOLOSO

El delito de blanqueo de capitales se configura en nuestro Código penal como un delito esencialmente doloso<sup>1</sup>. Las modalidades típicas descritas en los números 1 y 2 del artículo 301 exigen tanto el conocimiento de la ilícita procedencia como, en ciertos supuestos, determinados elementos intencionales. El *conocimiento de la procedencia delictiva de los bienes* es exigencia común a todas las modalidades de comportamiento bajo las que puede presentarse el tipo doloso de blanqueo. Al estudio de este requisito, cuestión nuclear en el debate doctrinal relativo al tipo subjetivo de este delito<sup>2</sup>, se dedicará el segundo apartado de este capítulo.

La modalidad típica consistente en la *realización de cualquier otro acto* con determinadas finalidades, prevista en el segundo inciso del artículo 301.1 CP, precisa, además del conocimiento de la procedencia delictiva de los bienes, la concurrencia de un segundo elemento subjetivo: el ánimo o finalidad de *ocultar o encubrir* el origen ilícito del bien o de *ayudar* a las personas responsables a eludir las consecuencias legales de sus actos. La problemática de su naturaleza jurídica (si dichas finalidades han de considerarse elementos subjetivos del injusto diferentes del dolo o constituyen el elemento volitivo integrado en el dolo típico) será analizada en el tercer apartado de este capítulo. Posteriormente, en dicho apartado se abordará una cuestión especialmente controvertida: si las finalidades de ocultar, encubrir o ayudar sólo afectan a la realización de “cualquier acto”, o si, por el contrario, dicha exigencia típica extiende su ámbito de aplicación a las conductas específicamente previstas en el inciso primero del precepto. Como veremos, lejos de haberse alcanzado un consenso doctrinal al respecto, ninguna postura puede considerarse dominante en la actualidad. También existen importantes controversias acerca de los grados de dolo admisibles en esta modalidad

---

<sup>1</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 2ª ed. op. cit., pág. 354. En el marco del derecho comparado, el delito de blanqueo suele conformarse como un delito de naturaleza dolosa, si bien en algunos de los ordenamientos de Estados de nuestro entorno jurídico se sanciona asimismo el blanqueo imprudente, acudiendo a diferentes técnicas. (Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 648 y 652).

<sup>2</sup> Vid. ARIAS HOLGUÍN, D. P., *Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 327; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 648.



comisiva. Finalizaremos este tercer apartado con el análisis de las diferentes perspectivas ofrecidas al respecto por la doctrina y justificando por qué, a nuestro juicio, la realización de cualquier acto tendente a alguna de las finalidades expresamente previstas precisa la presencia de dolo directo de primer grado.

A continuación, en el cuarto apartado de este capítulo, prestaremos atención al tratamiento del error en el delito de blanqueo de capitales. Se estudiará cómo en él operan el error de tipo y error de prohibición, así como el tratamiento del error de subsunción que, si bien no está expresamente recogido en el artículo 14 CP, suele ser considerado en la doctrina como un supuesto de error de tipo. El presente capítulo finalizará con un quinto apartado dedicado al delito imprudente de blanqueo de capitales. Como sabemos, junto al delito doloso, el Código penal vigente ha incorporado en su artículo 301.3 una modalidad culposa, cuya configuración legal no es en absoluto afortunada, pues se limita a remitir a “los hechos” previstos en los números anteriores cometidos imprudencia grave. La remisión al tipo doloso provoca un grave problema: difícil encaje tiene un delito imprudente en tipos penales que incorporan específicos elementos subjetivos del injusto, como ocurre con las conductas previstas en los números 1 y 2 del artículo 301. Abordaremos esta problemática cuestión en el último epígrafe de este capítulo, con objeto de pronunciarnos sobre cuáles, de entre todas las modalidades típicas, admiten la comisión imprudente. El presente capítulo finalizará con el análisis de otra materia muy debatida en la doctrina, el sujeto activo en el delito imprudente de blanqueo. Como se verá, alcanzaremos la conclusión de que esta modalidad se configura como un delito común.

Antes de continuar, es conveniente hacer un último apunte: a diferencia de lo que sucede con la receptación o el favorecimiento real, en el delito de blanqueo de capitales *no es necesaria la concurrencia de ánimo de lucro*, propio o ajeno: aunque lo habitual es que la conducta legitimadora esté dirigida a la obtención de algún tipo de beneficio o rentabilidad, no constituye dicho propósito un requisito típico que deba concurrir en todo caso<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Vid. QUINTERO OLIVARES, G., *Comentarios a la Parte especial del Derecho penal*, op. cit., pág. 945; ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., pág. 129; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 674; MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de Capitales”, 3ª ed., op. cit., págs. 495 y 496. En sentido contrario, vid. COBO DEL ROSAL, M./ZABALA LOPEZ-GOMEZ, C., *Blanqueo de capitales: abogados, procuradores y notarios, inversores bancarios y empresario*, op. cit., págs. 91 y ss.; ZARAGOZA AGUADO, J. A., “Artículo 301”, op. cit., pág.

## 5.2 EL CONOCIMIENTO DE LA PROCEDENCIA DELICTIVA DEL BIEN

### 5.2.1 NATURALEZA JURÍDICA, OBJETO Y ALCANCE DEL CONOCIMIENTO

Se ha definido tradicionalmente el dolo típico como el conocimiento y la voluntad en la realización de los elementos objetivos del tipo<sup>4</sup>. En cualquiera de las modalidades dolosas en que el delito de blanqueo de capitales puede cometerse, el dolo típico ha de recaer sobre cada uno de los elementos del tipo objetivo. De acuerdo con el artículo 301 CP, el elemento intelectual del dolo (conocimiento), además de abarcar el objeto del delito (bien procedente de una actividad delictiva)<sup>5</sup>, también ha de recaer sobre la conducta típica, esto es, sobre los propios comportamientos contenidos en el artículo 301 CP, y alcanzar a los elementos que condicionan la relevancia penal del hecho: el resultado típico *ex post*, la relación de causalidad y la imputación objetiva (creación de un riesgo penalmente relevante por la conducta y la actualización de éste en el resultado lesivo para los bienes jurídicamente protegidos)<sup>6</sup>.

---

1158; MARTÍNEZ-ARRIETA MÁRQUEZ DE PRADO, I., *El autoblanqueo. El delito fiscal como antecedente del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 29.

<sup>4</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 653; BACIGALUPO ZAPATER, E., *Derecho Penal, Parte General*, 2ª ed., Ed. Hammurabi. Buenos Aires, 1999, pág. 315; MUÑOZ CONDE, F./GARCÍA ARÁN, M., *Derecho Penal. Parte General*, op. cit., págs. 267 y 268; LANDECHO VELASCO, C. M., *Derecho Penal Español. Parte General*, op. cit., pág. 227; MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, 9ª ed., op. cit., pág. 267; LUZÓN CUESTA, J. M., *Compendio de Derecho Penal. Parte General*. Ed. Dykinson. 21ª ed, Madrid, 2011, págs. 62 y 63; LUZÓN PEÑA, D. M., *Lecciones de Derecho Penal. Parte General*. Ed. Tirant lo Blanch, 2ª Ed. Valencia, 2012, pág. 239; POLAINO NAVARRETE, M., *Lecciones de Derecho Penal. Parte General. Tomo II*. Ed. Tecnos. Madrid, 2013, págs. 100-102; CARBONELL MATEU, J. C., “Sobre tipicidad e imputación: reflexiones básicas en torno a la imputación del dolo y la imprudencia”, op. cit., pág. 150. Sobre la discusión relativa a los elementos que han de integrar la imputación subjetiva en el delito doloso (conocimiento y voluntad de los elementos objetivos del tipo -teoría de la voluntad- o sólo conocimiento -teoría de la representación-), vid. MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, 9ª ed., op. cit., págs. 268 y 269; LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J., *Tratado de Derecho Penal. Parte General*, op. cit., págs. 469 y ss.; MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “El concepto “significativo” del dolo: un concepto volitivo normativo”, *Problemas actuales de Derecho penal y Criminología. Libro Homenaje a la Profesora Mª del Mar Díaz Pita*. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2008, págs. 339 y ss., id., “Los delitos de peligro en el derecho penal económico y empresarial”, op. cit., pág. 813; GÓMEZ-BENÍTEZ, J. M., “El concepto de dolo en la moderna dogmática penal”, *Nuevas posiciones de la dogmática jurídica penal. Cuadernos de Derecho Judicial* nº 7, 2006. CGPJ. Madrid, 2006, págs. 13 y ss.

<sup>5</sup> Como advierte FABIÁN CAPARRÓS, la determinación del conocimiento del autor respecto al objeto material del delito presenta mayores dificultades que el referido al resto de los elementos que conforman el tipo objetivo, sobre todo en lo que a su acreditación se refiere. (*El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 327 y 329).

<sup>6</sup> Vid. MUÑOZ CONDE, F./GARCÍA ARÁN, M., *Derecho Penal. Parte General*, op. cit., pág. 268; MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, 9ª ed., op. cit., pág. 268; VIVES ANTÓN, T. S., “Reexamen del

De todos los elementos que han de ser conocidos por el autor, hay uno que expresamente aparece previsto en las descripciones típicas del artículo 301 CP: el conocimiento de la ilícita procedencia del bien, si bien a través de expresiones diferentes. El número 1 del precepto impone que el sujeto realice las conductas típicas “*sabiendo* que [los bienes] tienen su origen en un delito”, y su número 2 precisa que lo haga “*a sabiendas* de que [los bienes] proceden de alguno de los delitos (...)”<sup>7</sup>. Si bien ambas expresiones formalmente no son idénticas, sí son semánticamente equivalentes<sup>8</sup>.

Respecto a la *naturaleza jurídica* del conocimiento de la procedencia delictiva del bien, se han conformado tres posiciones doctrinales diferenciadas:

1. Un sector concibe dicho conocimiento como un elemento subjetivo del tipo distinto del dolo, cuya misión es delimitar el ámbito de aplicación de la modalidad dolosa del delito de blanqueo<sup>9</sup>, y que permitirá excluir su modalidad imprudente<sup>10</sup>.

2. Desde una posición minoritaria, se ha afirmado que el referido conocimiento es parte integrante de la conciencia de la antijuridicidad<sup>11</sup>.

3. Tanto la doctrina dominante como la jurisprudencia sostienen, a nuestro juicio acertadamente, que el conocimiento del hecho delictivo previo y su vinculación con el bien es parte del elemento intelectual del dolo típico, por ello, su acreditación también es exigencia de la tipicidad<sup>12</sup>.

---

dolo”, *Problemas actuales de Derecho penal y Criminología. Libro Homenaje a la Profesora M<sup>a</sup> del Mar Díaz Pita*. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2008, pág. 371; PÉREZ MANZANO, M., “El tipo subjetivo en los delitos de receptación y blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 228; ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 265; FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 326; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 662.

<sup>7</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, loc. cit.

<sup>8</sup> De la misma opinión BLANCO CORDERO, para quien no existen diferencias esenciales entre las dos expresiones, pues se refieren al mismo verbo “saber”. (*El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 656).

<sup>9</sup> Vid. ZARAGOZA AGUADO, J. A., “El blanqueo de bienes de origen criminal”, op. cit., págs. 382 y ss.; VIDALES RODRÍGUEZ, C., *Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código penal de 1995*, op. cit., págs. 123 y ss. Si bien la autora comienza afirmando que se trata de un elemento subjetivo del tipo, en las págs. 117 y 118 de su monografía admite que a su vez se trata de un elemento conformador de la parte intelectual del dolo, cumpliendo así una doble función.

<sup>10</sup> Vid. ARIAS HOLGUÍN, D. P., *Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 337 y 338.

<sup>11</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 265.

<sup>12</sup> Vid. CALDERÓN CEREZO, A., *Comentarios al Código penal*, vol. 3, op. cit., pág. 2299; MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “La dimensión internacional del blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 238; LORENZO SALGADO, J. M., “El tipo agravado de blanqueo cuando los bienes tengan su origen en el delito de tráfico de drogas”, op. cit., págs. 223 y 224. Esta es la posición que mantiene actualmente BLANCO CORDERO (*El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 658), si bien en la anterior edición de su monografía, el

Admitido que el conocimiento del origen delictivo del bien constituye un elemento del dolo típico, se plantea a continuación la siguiente cuestión: ¿a qué obedece su mención expresa en el precepto? Para algunos autores se trata de una redundancia superflua: si el dolo ha de abarcar todos los elementos del tipo, habrá de contener el objeto material del delito -verdadero elemento objetivo del tipo-, lo que determinará, necesariamente, el conocimiento de la ilícita procedencia del bien. Es por ello que, acertadamente concluye este sector doctrinal, resulta innecesaria la expresa mención al conocimiento de la procedencia ilícita del bien<sup>13</sup>.

En relación con el *alcance del conocimiento de la procedencia delictiva del bien*, resulta preciso delimitar qué tipo de conocimiento es suficiente a efectos de tipicidad. La doctrina mayoritaria y la jurisprudencia considera excesivo requerir un conocimiento muy detallado del delito precedente<sup>14</sup>. En general, se afirma que es suficiente el conocimiento referido al hecho delictivo y a sus circunstancias, no siendo necesario que abarque la calificación jurídica del delito precedente<sup>15</sup> ni aspectos relativos a su antijuridicidad<sup>16</sup>. Tal y como ha afirmado HUERTA TOCILDO, en todo caso no son suficientes para integrar el aspecto cognitivo del dolo las meras sospechas de que los bienes o efectos proceden de la comisión de un delito. Es preciso que el sujeto tenga conciencia del origen delictivo, aunque no alcance con todo detalle cada una de las circunstancias del hecho base. Se trata, de este modo, de un “conocimiento no pormenorizado del ilícito penal del que proceden los efectos recibidos”<sup>17</sup>. Actualmente, la doctrina admite que la procedencia delictiva del bien constituye un *elemento normativo*<sup>18</sup> del tipo objetivo. Es por ello, afirma MARTÍNEZ-BUJÁN, que el agente ha de

---

autor parecía acercarse a la segunda postura a la que se ha hecho referencia. (*El Delito de Blanqueo de Capitales*, 2ª ed., op. cit., pág. 357). La Sala Segunda también considera que las expresiones “sabiendo” y “a sabiendas” aluden al dolo típico. (Vid. SSTs 987/2012, de 3 de diciembre, y 303/2010, de 22 de marzo).

<sup>13</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 266; PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 559; FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 392 y ss.

<sup>14</sup> Vid. QUINTERO OLIVARES, G., *Comentarios a la Parte especial del Derecho penal*, op. cit., pág. 945. Tanto la jurisprudencia de la Sala Segunda como la de las Audiencias siguen este mismo criterio, como veremos a continuación.

<sup>15</sup> Vid. ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 349.

<sup>16</sup> Vid. CALDERÓN CEREZO, A., *Comentarios al Código penal*, vol. 3, op. cit., pág. 2299.

<sup>17</sup> Vid. HUERTA TOCILDO, S., “Aproximación crítica a la nueva regulación del delito de receptación y otras conductas afines”, op. cit., págs. 388 y 389.

<sup>18</sup> Pues “no puede ser aprehendido por la mera percepción sensitiva, sino que exige un proceso de valoración o de comprensión intelectual”. Nos recuerda ARÁNGUEZ SÁNCHEZ la relevancia que tiene considerar dicho origen como elemento normativo del tipo “a la hora de evaluar el alcance del conocimiento y el error sobre dicho elemento”. (*El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 267). En sentido similar se han pronunciado PALMA HERRERA (*Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 321), CALDERÓN CEREZO

conocer aquellas circunstancias fácticas que le sirvan de base para valorar el origen delictivo del bien, “ponderadas con arreglo al criterio de la valoración paralela del autor en la esfera del profano, sin necesidad de que se efectúe una calificación jurídica precisa y, sin que deba exigirse un conocimiento exhaustivo de la conducta delictiva”<sup>19</sup>.

También la jurisprudencia, desde hace tiempo, ha venido rechazando la exigencia de un conocimiento exhaustivo de las circunstancias del delito precedente: si bien es menester la absoluta certeza respecto a la procedencia delictiva del bien (sin ser suficientes, por tanto, meras sospechas o presunciones), basta con el conocimiento por parte del agente de que el bien tiene origen en un hecho típico y antijurídico<sup>20</sup>. En cualquier caso, no es necesario que exista una condena previa por el delito antecedente. Es ésta una línea jurisprudencial suficientemente consolidada que ha venido reiterándose hasta las resoluciones más recientes. Resulta en este sentido paradigmática la STS 303/2010, de 22 de marzo, en la que, con cita de copiosa jurisprudencia, se afirma que, “admitiéndose que la existencia del delito previo constituye elemento objetivo (normativo) del tipo y su prueba condición asimismo de tipicidad, en ningún caso la jurisprudencia requiere que se haya dictado sentencia condenatoria firme, bastando con que el sujeto activo conozca que los bienes tienen como origen un hecho típico y antijurídico, y ni siquiera se considera preciso que se determine la autoría del

---

(*Comentarios al Código penal*, vol. 3, op. cit., pág. 2299), FABIÁN CAPARRÓS (*El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 328), MARTÍNEZ DE SALINAS (“Últimas tendencias jurisprudenciales en materia de blanqueo de capitales”, *II Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 36) y BLANCO CORDERO (*El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 659), entre otros autores. Por su parte, la jurisprudencia también considera que estamos ante un “elemento objetivo (normativo) del tipo”. (STS 303/2010, de 22 de marzo, y 28/2010, de 28 de enero).

<sup>19</sup> Vid. MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de Capitales”, 3ª ed., op. cit., pág. 495. En sentido similar, vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 659-661; ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 267 y 268; ALVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 349; CALDERÓN CERERO, A., *Comentarios al Código penal*, vol. 3, op. cit., pág. 2299; ZARAGOZA AGUADO, J. A., “Artículo 301”, op. cit., pág. 1160. Por su parte, FABIÁN CAPARRÓS nos recuerda que la “valoración paralela a la esfera del profano”, expresión acuñada por MEZGER, hace referencia al “sentido que posee la previa incriminación al nivel del común de los ciudadanos, acudiendo, además, al mismo contexto social en que se hallare el presunto autor del delito de blanqueo.” (*El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 395). Llama la atención el monografista sobre el hecho de que el conocimiento del origen delictivo de los bienes será más fácil de demostrar en los supuestos en los que el agente blanqueador se halle próximo al sujeto que cometió el delito antecedente (o lo sea él mismo). Así, “la dificultad de la prueba se incrementará según aumente el grado de complejidad de la estructura criminal y, con ello, el volumen de la riqueza sucia manejada. De hecho, cuando la persona o personas que lavan dinero actúan de acuerdo a criterios de profesionalidad, es perfectamente posible que ignoren -o que afirmen ignorar, amparándose sólidamente en una muy legítima presunción de inocencia- la concreta procedencia de los fondos ilícitos, limitándose a hacer circular una determinada suma de origen incierto -la mayoría de las ocasiones mezclada con cantidades obtenidas lícitamente que huyen del Fisco o del control de cambios- a cambio de una comisión que suele ser proporcional a la base reciclada”. (Ibidem, pág. 330).

<sup>20</sup> Vid. CALDERÓN CERERO, A., “Algunos aspectos críticos del blanqueo de capitales. Legislación y jurisprudencia”, op. cit., pág. 87.

delito precedente, pues el requisito de la necesidad de la condena previa haría imposible en la práctica la aplicación del tipo de blanqueo. (...) No es preciso acreditar una condena anterior por el delito de que proceden los bienes o dinero lavado, siendo bastante con establecer la relación con actividades delictivas y la inexistencia de otro posible origen del dinero, en función de los demás datos disponibles. Dicho de otra forma, que dados los indicios, la conclusión razonable sea su origen delictivo (SSTS 141/2005, de 27-1; 155/2009, de 26-2; y 1372/2009, de 28-12, entre otras)”<sup>21</sup>. Por su parte, la jurisprudencia menor ha tenido ocasión de pronunciarse en términos similares (vid. SAP Málaga 535/2013 (Caso Malaya), Sección 2ª, de 4 de octubre. Tomo 3º, pág. 105; SAN 47/2011, Sección 2ª, de 23 de noviembre).

En relación con el *momento del conocimiento* de la naturaleza delictiva del bien, se admite de forma pacífica que el mismo ha de ser anterior o simultáneo al desarrollo de la conducta legitimadora. Es decir, ha de existir en el momento en el que el agente realice la conducta típica. El conocimiento integrado en el dolo ha de ser actual, rechazándose el llamado *dolus subsequens* o dolo posterior al hecho, al que nuestro Ordenamiento penal no asocia consecuencia jurídica alguna<sup>22</sup>. En este mismo sentido se

<sup>21</sup> Profundizando en esta exégesis, la STS 341/2013, de 9 de abril, ha aclarado que la falta de exigencia de una previa condena penal por el delito previo no exime en modo alguno de la exigencia de prueba del delito de blanqueo -en concreto, del origen delictivo de los bienes- para proclamar su existencia. Así, “una cosa es que la existencia del previo delito pueda afirmarse sin previa condena, y otra que la prueba del mismo no sea tan exigible como lo es la relativa a cualquiera otros de los elementos del tipo. Ahí puede probarse por prueba directa o indiciaria. Pero tan plena es en un caso como en otro.” En el caso de que hubiese recaído Sentencia absolutoria por el delito antecedente, hablar en un proceso posterior del origen delictivo de los bienes procedentes del delito declarado no probado en la primera Sentencia supone “una cierta burla de uno de los principios básicos del Estado que garantice los derechos y libertades fundamentales del ciudadano: la presunción de inocencia robustecida, si cabe, por la fuerza de la cosa juzgada de una sentencia absolutoria.” Por su parte, en las SSTS 587/2009, de 22 de mayo, y 155/2009, de 26 de febrero, se afirma que no es exigible un conocimiento preciso o exacto del delito previo (que, de ordinario, solo se dará cuando se integren organizaciones criminales amplias con distribución de tareas delictivas), sino que es suficiente con la conciencia de la anormalidad de la operación a realizar y la razonable inferencia de que procede de un delito, por ejemplo por su cuantía, medidas de protección, contraprestación ofrecida, etc. Consecuentemente, se dice en la STS 587/2009, de 22 de mayo, “puede afirmarse ese conocimiento cuando el autor ha podido representarse la posibilidad de la procedencia ilícita y actúa para ocultar o encubrir o ayudar a la persona que haya participado en la ilícita actividad, sin que deba exigirse una concreta calificación, siendo bastante un conocimiento genérico de la naturaleza delictiva del hecho sobre cuyos efectos se actúa. En otras palabras, es suficiente con un conocimiento de las circunstancias del hecho y de su significado social (por todas, cfr. STS 1034/2005, 26 de febrero), e igualmente para la acreditación de los elementos del tipo subjetivo hemos de acudir a las inferencias lógicas extraídas de hechos objetivos que permitan acreditar su conocimiento.”

<sup>22</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 662 y 663; id. “Penalización de lavado de dinero: aspectos sustantivos, principios y recomendaciones internacionales”, op. cit., pág. 189. Vid., en sentido similar, BACIGALUPO ZAPATER, E., *Manual de Derecho Penal, Parte General*. Ed. Temis. Santa Fe de Bogotá, 1996, pág. 107; PÉREZ MANZANO, “El tipo subjetivo en los delitos de receptación y blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 232; ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 273; CALDERÓN CEREZO, A., *Comentarios al Código penal*, vol. 3, op. cit., pág. 2298; id., “Algunos aspectos críticos del blanqueo de capitales. Legislación y jurisprudencia”, op. cit., pág. 83; POLAINO NAVARRETE, M., *Lecciones de Derecho Penal. Parte General. Tomo II*, op. cit., pág. 102. FABIÁN CAPARRÓS introduce en esta línea de pensamiento el siguiente matiz: sería aplicable el artículo 301

ha pronunciado el Tribunal Supremo, rechazando de plano cualquier tipo de conocimiento sobrevenido<sup>23</sup>.

### **5.2.2. LA ACREDITACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL ORIGEN DELICTIVO DEL BIEN. LA PRUEBA INDICIARIA**

Otra cuestión de interés, y que en la práctica reviste especial trascendencia, tiene que ver con la *prueba del conocimiento* del origen delictivo de los bienes o fondos sobre los que recae la conducta típica. Como es sabido, son los elementos subjetivos del tipo los que habitualmente presentan mayor dificultad probatoria, pues no son susceptibles de aprehensión directa, sino que deben obtenerse de hechos exteriores y verificables<sup>24</sup>. Sin embargo, como se ha advertido tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, cualquier pronunciamiento condenatorio precisa en todo caso la acreditación del dolo típico. Como factor integrante del tipo penal, también el conocimiento de la procedencia delictiva del bien ha de ser probado en el delito de blanqueo de capitales, idea que en ocasiones -tal y como ha advertido la Sala Segunda- no es objeto de un suficiente esfuerzo argumentativo por parte de los tribunales de instancia a la hora de motivar sus sentencias condenatorias.

Dada la dificultad que presenta la acreditación del conocimiento de la procedencia delictiva de los fondos o bienes en el delito de blanqueo (SSTS 1012/2006, de 19 de octubre, y 1034/05, de 14 de septiembre), con carácter general el Tribunal Supremo ha admitido el recurso a la prueba indirecta o de indicios para considerar

---

CP a aquellos casos en los que, “disponiendo todavía del destino de los bienes cuyo origen desconocieron [los autores] en un primer momento, tengan con posterioridad noticia de su procedencia y, a pesar de ello, operen con ellos (...) aunque, como es obvio, no se responda por las operaciones ultimadas en tanto se ignora el origen de los bienes.” (*El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 396, y nota 186). Asimismo, en el contexto de relaciones económicas de carácter duradero, un contrato bancario de tracto sucesivo, por ejemplo, puede ocurrir que las dudas sobre la legitimidad de determinados fondos, por parte del agente, surjan en momentos posteriores al contacto inicial; en estos casos, la responsabilidad penal del empleado de banca -continuando con el ejemplo- no podrá extenderse a los actos anteriores al momento de conocer el origen delictivo de los fondos, salvo que “propiciada inconscientemente una operación de lavado, y manteniéndose aún dentro de su esfera de poder, el sujeto activo no hiciera nada por evitar el reciclaje definitivo de ese capital de origen ilegal -comisión por omisión-, después de haber conocido su procedencia real.” (Ibidem, pág. 327).

<sup>23</sup> Vid., por todas, SSTS 42/2014, de 5 febrero, y 974/2012, de 5 de diciembre (FJ 41°).

<sup>24</sup> Vid. SILVA SÁNCHEZ, J. M., “La receptación específica”, *Comentarios a la legislación penal*, tomo XII. *Delitos contra la salud pública* (dir. Cobo del Rosal), Madrid, 1990, pág. 495; FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 326; ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 269; MADRIGAL MARTÍNEZ-PEREDA, C., “Soluciones jurisprudenciales a los problemas de prueba en el delito de blanqueo de capitales”, *Blanqueo de Capitales*. Boletín del ICAM nº 37. Madrid, 2007, pág. 119; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 681.

verificado dicho extremo<sup>25</sup>, si bien se precisa un plus de motivación debido al mayor grado de subjetivismo que presenta dicho medio acreditativo frente a la prueba directa (SSTS 19/2009, de 7 de enero, 220/2004, de 20 de febrero, y 217/1999, de 15 de febrero). Admitido este mecanismo probatorio, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional han precisado que el recurso al mismo está condicionado al cumplimiento de especiales exigencias<sup>26</sup>. Según jurisprudencia plenamente consolidada (por todas, SSTC 128/2011, de 18 de julio, y 300/2005, de 21 de noviembre, SSTS 341/2013, de 9 de abril, 860/2005, de 22 de junio, y 781/2005, de 9 de junio), los requisitos que, con carácter general, ha de reunir toda prueba indiciaria para ser considerada prueba de cargo suficiente capaz de enervar la presunción de inocencia, son los siguientes:

1. Los indicios deben estar plenamente probados, de modo indubitado, por pruebas practicadas en el juicio oral.

2. Entre los indicios y el hecho presunto ha de existir un enlace lógico, de manera que los primeros conduzcan necesariamente a los segundos (juicio de inferencia razonable).

3. El órgano judicial debe explicitar el razonamiento o inferencia lógica en virtud de la cual, partiendo de los indicios, ha llegado a la conclusión de que el acusado realizó la conducta típica. Es decir, la Sentencia debe motivar de manera lógica el juicio de inferencia que ha conducido al Órgano jurisdiccional a alcanzar su deducción<sup>27</sup>.

---

<sup>25</sup> Recordemos que es posible la corrección de este medio probatorio, pues la prueba indirecta puede ser impugnada en casación por la vía de la infracción de ley, revisando la racionalidad de la inferencia de la Sala de instancia (vid. LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J./ALONSO GONZÁLEZ, A./ENCINAR DEL POZO, M. A., *Código Penal comentado con jurisprudencia sistematizada y concordancias*, op. cit., pág. 936) cuando se considere que existe una contradicción “con la lógica, la ciencia y la experiencia [o una] insuficiencia o ilógica valoración de la prueba sobre aquel conocimiento”. (Vid MADRIGAL MARTÍNEZ-PEREDA, C., “Soluciones jurisprudenciales a los problemas de prueba en el delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 125).

<sup>26</sup> Vid. HUERTA TOCILDO, S., “Aproximación crítica a la nueva regulación del delito de receptación y otras conductas afines”, op. cit., pág. 390.

<sup>27</sup> De acuerdo con la STS 341/2013, de 9 de abril, con cita de abundante jurisprudencia, la motivación de la inferencia es precisamente lo que permite controlar su razonabilidad. Para ello es preciso, “en primer lugar, que el órgano judicial exteriorice los hechos que están acreditados, o indicios, y, sobre todo que explique el razonamiento o engarce lógico entre los hechos base y los hechos consecuencia; y, finalmente, que este razonamiento esté asentado en las reglas del criterio humano o en las reglas de la experiencia común o “en una comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a los criterios colectivos vigentes”. Y concluye advirtiendo que, en el ámbito del amparo constitucional, sólo se considera vulnerado el derecho a la presunción de inocencia cuando “la inferencia sea ilógica o tan abierta que en su seno quepa tal pluralidad de conclusiones alternativas que ninguna de ellas pueda darse por probada”. Es decir que en tales supuestos ha de constatarse tanto la solidez de la inferencia desde el canon de la lógica y la coherencia, como la



Resulta de especial interés el minucioso estudio abordado por PALOMO DEL ARCO relativo a las exigencias jurisprudenciales en materia de prueba indiciaria. En su análisis, el autor distingue entre requisitos formales, materiales y aquellos otros que atañen a la inferencia lógica. Respecto de los primeros, la Sala Segunda precisa que las sentencias condenatorias fundadas en la prueba indiciaria expresen con claridad los hechos base o indicios que se consideren acreditados y que fundamentan la deducción o inferencia, así como el razonamiento a través del cual, partiendo de dichos indicios, “se ha llegado a la doble convicción, primero sobre el acaecimiento del hecho punible y segundo sobre la participación en el mismo del acusado”<sup>28</sup>. Como requisitos materiales, la Sala Segunda considera que han de concurrir los siguientes:

- 1.- La acreditación mediante prueba directa de los hechos base o indicios.
- 2.- La pluralidad de los mismos, si bien excepcionalmente es admisible el indicio único cuando es de “singular potencia acreditativa”<sup>29</sup>.
- 3.- Que los indicios sean concomitantes al hecho que se trata de probar<sup>30</sup>.
- 4.- Que estén interrelacionados de modo que se refuercen entre sí. La fuerza probatoria de la prueba indiciaria precisamente deriva de la “interrelación y combinación de los indicios, que concurren y se refuerzan mutuamente cuando todos ellos señalan racionalmente en una misma dirección”<sup>31</sup>.

Y por último, es menester que *la inducción o inferencia* entre los hechos base o indicios y las “conclusiones fácticas incriminatorias” *sea razonable*: no sólo es ineludible que el razonamiento no sea arbitrario, absurdo o infundado, sino que además “debe responder plenamente a las reglas de la lógica y de la experiencia, de manera que de los hechos base acreditados, fluya, como conclusión natural, el dato precisado de

---

suficiencia o carácter concluyente que se considerará ausente en los casos de inferencias excesivamente abiertas, débiles o indeterminadas (Sentencia del Tribunal Constitucional 117/2007).”

<sup>28</sup> Vid. PALOMO DEL ARCO, A., “Lavado de dinero y corrupción bancaria en la praxis. Problemas de investigación y prueba”, op. cit., pág. 264.

<sup>29</sup> Ibidem.

<sup>30</sup> O expresado en otros términos, que todos los indicios sean idóneos para apuntar en la misma dirección a la conclusión que se alcance a través del proceso deductivo. (Vid. ZARAGOZA AGUADO, J. A., “Artículo 301”, op. cit., págs. 1167 y 1168).

<sup>31</sup> Vid. PALOMO DEL ARCO, A., “Lavado de dinero y corrupción bancaria en la praxis. Problemas de investigación y prueba”, loc. cit. Se reputaría por tanto metódicamente erróneo el análisis de cada uno de los indicios de forma aislada, pues su fuerza probatoria procede precisamente de la interrelación y combinación de aquéllos: los indicios que sirven de base a una inferencia sólo se refuerzan mutuamente cuando todos ellos señalan racionalmente en una misma dirección (SSTS. 9-1-2003, 1-3-2000 14-2-2000).

acreditar, existiendo entre ambos un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano”<sup>32</sup>.

La Sentencia 545/2009 de la Sala Segunda, de 22 de mayo, destaca como claro exponente de la doctrina expuesta. Incorporando abundantes referencias jurisprudenciales, en dicha resolución se afirma que la “mal llamada prueba de presunciones no es un medio de prueba, sino una forma de valoración de los hechos indirectos plenamente acreditados. Por ello, entre estos y el dato precisado de acreditar ha de existir «un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano»; enlace que consiste en que los hechos-base o indicios no permitan otras inferencias contrarias igualmente válidas epistemológicamente”. Esto es, la inferencia ha de ser inequívoca, en el sentido de que de los hechos base no quepa alcanzar una conclusión igualmente lógica de sentido exculpatario<sup>33</sup>. La razonabilidad del juicio de inferencia no supone la imposibilidad de otras versiones de los hechos, de manera que el Tribunal haya debido inclinarse por la única certeza posible (STS 499/2003, de 4 de abril), pero si exige que no se opte por una ocurrencia fáctica basada en una inferencia débil, inconsistente o excesivamente abierta (STS 1090/2002, de 11 de junio).

Por otro lado, el Tribunal Supremo ha tenido ocasión de delimitar en numerosas sentencias aquellos indicios concretos que, en relación con el delito de blanqueo de capitales, considera suficientes para enervar la presunción de inocencia del acusado. Dichos indicios suelen ser empleados no sólo para considerar probado que el sujeto conocía el origen delictivo de los bienes o activos al realizar la conducta típica, sino también para estimar acreditada la propia procedencia delictiva de los mismos<sup>34</sup>. Entre otras muchas, las SSTS 258/2012, de 30 de octubre, y 202/2006, de 2 de marzo, establecen, como indicios frecuentes que permiten considerar acreditados ambos extremos, los siguientes:

- a) En primer lugar, el incremento inusual del patrimonio o el manejo de cantidades de dinero que por su elevada cantidad, dinámica de las transmisiones y tratarse de

---

<sup>32</sup> Ibidem, págs. 264 y 265.

<sup>33</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 684.

<sup>34</sup> Vid. VIDALES RODRÍGUEZ, C., “El delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 333; GALLEGO SOLER, J. I., *Comentarios al Código Penal. Reforma LO 5/2010*, op. cit., pág. 667.

efectivo pongan de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias<sup>35</sup>.

b) En segundo lugar, la inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias<sup>36</sup>.

c) En tercer lugar, la constatación de algún vínculo o conexión con actividades delictivas o con personas o grupos relacionados con las mismas<sup>37</sup>.

En diversas resoluciones recientes (entre ellas, las SSTS 811/2012, de 30 de octubre, 28/2010, de 28 de enero, y 145/2008, de 8 de abril), el Tribunal Supremo ha referido, junto con los anteriores, otros indicios adicionales que podrían operar a la hora de acreditar indiciariamente el conocimiento típico del agente<sup>38</sup>:

a) La importancia de la cantidad del dinero blanqueado, como elemento de primera aproximación;

b) La vinculación de los autores con actividades ilícitas o grupos o personas relacionados con ellas;

c) Lo inusual o desproporcionado del incremento patrimonial del sujeto;

---

<sup>35</sup> “Tales como manejo de grandes cantidades de efectivo, utilización de testaferros, aperturas de cuentas o depósitos en entidades bancarias ubicadas en país distinto del de residencia de su titular, etc.” (STS 1061/2002, de 6 de junio).

<sup>36</sup> “La escasa entidad de los ingresos acreditados y la procedencia de los restantes de diferentes “chapuzas” -obra o labor de poca importancia, según el Diccionario de la Real Academia-, justifican sobradamente la concurrencia de este indicio.” (STS 233/2005, de 24 de febrero).

<sup>37</sup> Como es lógico, la jurisprudencia menor acude a estos mismos parámetros indiciarios en la fundamentación jurídica de sus resoluciones. (Vid., en este sentido, SAN 47/2011, Sección 2ª, de 23 de noviembre; SSAP Málaga 200/2011 (Caso Ballena Blanca), Sección 2ª, de 31 de marzo, FJ 27; y 535/2013 (Caso Malaya), Sección 2ª, de 4 de octubre, Tomo 4º, pág. 133).

<sup>38</sup> También en la doctrina podemos encontrar importantes contribuciones sobre el estudio de los indicios a los que la jurisprudencia acude regularmente. En este sentido, vid. HUERTA TOCILDO, S., “Aproximación crítica a la nueva regulación del delito de receptación y otras conductas afines”, op. cit., pág. 390; ZARAGOZA AGUADO, J. A., “Aspectos probatorios y técnicas de investigación en los procesos por lavado de dinero: medidas preventivas y cautelares, recomendaciones internacionales”, op. cit., pág. 397; id., “Artículo 301”, op. cit., pág. 1169-1171; CALDERÓN CEREZO, A., *Delitos contra el orden socioeconómico*, op. cit., págs. 412 y ss.; BAJO FERNÁNDEZ, M./ BACIGALUPO SAGESSE, S., “Blanqueo de capitales”, 2ª ed., op. cit., pág. 728; DELGADO GARCÍA, D., *Configuración Jurisprudencial del delito de blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas. ¿Inversión de la carga de la prueba?*, págs. 1020 y ss., publicado en el siguiente enlace: <http://www.cej.justicia.es/pdf/publicaciones/fiscales/FISCAL05.PDF>; id., *La prueba indiciaria en el Delito de Lavado de Activos -Perspectiva del Fiscal*, págs. 4 y ss., publicado en el siguiente enlace: [www.cej.justicia.es/pdf/publicaciones/fiscales/FISCAL07.pdf](http://www.cej.justicia.es/pdf/publicaciones/fiscales/FISCAL07.pdf); LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J./ALONSO GONZÁLEZ, A./ENCINAR DEL POZO, M. Á., *Código Penal comentado con jurisprudencia sistematizada y concordancias*, op. cit., pág. 939; ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 270 y 271; GALLEGO SOLER, J. I., *Comentarios al Código Penal. Reforma LO 5/2010*, op. cit., pág. 666; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 683.

d) La naturaleza y características de las operaciones económicas llevadas a cabo, por ejemplo, el uso de abundante dinero en metálico. Constituye un decisivo indicio en este sentido el aumento desproporcionado del patrimonio durante el período de tiempo al que se refiere dicha vinculación o el manejo de dinero que por su elevada cantidad, dinámica de las transmisiones y tratarse de efectivo pongan de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias;

e) La inexistencia de justificación lícita de los ingresos que permiten la realización de esas operaciones;

f) La debilidad de las explicaciones acerca del origen lícito de esos capitales;

g) La existencia de sociedades "pantalla" o entramados financieros que no se apoyen en actividades económicas acreditadamente lícitas.

Otros indicios que se han manejado por la jurisprudencia tienen que ver con el incumplimiento de determinados deberes de naturaleza administrativa, cuando el agente está jurídicamente obligado a su observación. Así, en algunas sentencias ha operado como indicio el hecho de que el agente no haya facilitado información sobre el origen de los capitales con los que se ha operado o sobre la identidad de los clientes, estando obligado a ello por virtud de la normativa del Banco de España, Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y su reglamento de desarrollo (STS 28/2010, de 28 de enero). Incluso puede constituir elemento indiciario el silencio del acusado<sup>39</sup> que, frente a existencia de una prueba de cargo, no ofrece una explicación, o cuando la ofrecida no resulte plausible o verosímil<sup>40</sup>, pudiendo incluso esta circunstancia “reforzar la virtualidad incriminatoria de otras pruebas de cargo existentes”<sup>41</sup>. Los indicios a los

---

<sup>39</sup> Como ha señalado ZARAGOZA AGUADO, de acuerdo con la jurisprudencia del TEDH y del TC, “el silencio del acusado, en el ejercicio de su derecho a no declarar, puede ser objeto de valoración cuando el cúmulo de pruebas de cargo reclama una explicación por su parte de los hechos, de manera que, conforme a la doctrina jurisprudencial (SSTEDH de 8-2-1996, caso Murray, y de 2-5-2000, caso Condrom, SSTC 137/98, de 7 de julio, y 202/2000, de 24 de julio) no puede afirmarse que la decisión del acusado de permanecer en silencio en el proceso penal no pueda tener implicación alguna en la valoración de las pruebas por el tribunal que la juzga; por el contrario, se puede decir que dicha decisión, o la inconsistencia de la versión de los hechos que aporta el acusado, pueden ser utilizados como elemento corroborador de las pruebas de cargo aportadas, pues la ausencia de una explicación o la falta de coherencia de la aportada equivale a que no hay explicación posible”. (“Artículo 301”, op. cit., pág. 1171).

<sup>40</sup> Vid. SSTs 858/2013, de 19 de noviembre, 684/2013, de 3 de septiembre, 1261/2006, de 20 de diciembre.

<sup>41</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 684 y 685, con interesantes citas jurisprudenciales; GUÉREZ TRICARICO, P., “Consecuencias accesorias y blanqueo de capitales”, *Política criminal y blanqueo de capitales*, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2009, pág. 228; ZARAGOZA AGUADO, J. A., “Artículo 301”, loc. cit.; MIRANDA ESTRAMPES, M., *Blanqueo de capitales, presunción de inocencia y prueba indiciaria*, La Ley 19196/2011, Año XXXII. N° 7736, 15 de noviembre de 2011, pág. 12. Ahora bien, como acertadamente ha afirmado ZARAGOZA AGUADO, “no es posible construir el método

que se ha hecho referencia no son, obviamente, los únicos en los que ha basado la jurisprudencia para considerar indirectamente acreditado el dolo típico. De hecho, en su Sentencia 341/2013, de 9 de abril, reconoce la Sala Segunda del Tribunal Supremo que la propia naturaleza de la prueba indiciaria impide que el elenco de indicios relevantes pueda “reducirse a la canonización clausurada de los utilizables”, y ello porque “la experiencia en la lucha contra el crimen, y en especial el organizado, hace que cada día se conozcan nuevos mecanismos utilizados a fin de burlar el acceso al conocimiento del origen del dinero obtenido en actividades ilícitas. De ahí que pueda predicarse una cierta ingenuidad de los esfuerzos de catalogación”.

En cualquier caso, se advierte en las SSTs 857/2012, de 9 de noviembre, y 928/2006, de 5 de octubre, que no deben confundirse los indicios con las meras sospechas, rumores o conjeturas<sup>42</sup>. Además, previene la Sala Segunda, cabe la posibilidad de que los indicios se neutralicen a través de contraindicios. En este sentido, en la STS 145/2008, de 8 de abril, se afirma que “para que el oportuno juicio de inferencia resulte en verdad convincente se precisa que la base indiciaria, plenamente acreditada siempre mediante prueba directa, se integre por una pluralidad de indicios -aunque con carácter excepcional pueda admitirse incluso la concurrencia de uno sólo, si su determinante significación pudiera justificarlo-, que no pierdan su fuerza acreditativa por la presencia de otros posibles contraindicios que neutralicen el sentido de su eficacia probatoria y que, en definitiva, la argumentación sobre la que se asiente la conclusión probatoria última resulte plenamente razonable, desde criterios de la lógica del humano discurrir”.

---

indiciario sólo a base de manifestaciones autoexculpatorias del acusado, aún entendidas como inverosímiles o ilógicas”. Para fundamentar la prueba indiciaria es preciso que, además de aquéllas, existan otros indicios sobre su participación en los hechos que “pueden servir de indicio adicional o de refuerzo para consolidar éstos.” (“Artículo 301”, loc. cit.).

<sup>42</sup> En su Fundamento Jurídico 2º de la Sentencia 857/2012, la Sala Segunda afirma que “los indicios, como tales, deben estar plenamente probados y no es admisible que sean simples productos de una cadena de conjeturas o sospechas, es decir de suposiciones no corroboradas con plenitud como lo requiere expresamente la STC 229/1988. La prueba de indicios no es prueba directa, pero no autoriza a reducir el rigor de la prueba -como parece suponer la Audiencia- sino todo lo contrario. (...) Nuestra sentencia 1113/2004 dice algo diverso de lo entendido por la Audiencia: requiere la existencia de datos objetivos que permitan «afianzar la imprescindible vinculación entre sendos delitos», es decir, entre el delito que es origen de los bienes y el de blanqueo de dinero. Dicho claramente: como ha puesto de manifiesto la doctrina, se trata de una relación «causal» entre ambos delitos”. Abundando en esta idea, la Sentencia 1133/2006, de 21 de noviembre, rechaza la posibilidad de acudir a meras sospechas disfrazadas como prueba de indicios, afirmándose en el FJ 3º de la resolución que para acudir a la prueba indiciaria es necesario que los hechos básicos o indiciarios, es decir, “aquellos datos de los que ha de inferirse la realidad del hecho necesitado de prueba (hecho consecuencia), aparezcan de uno u otro modo en el texto de la sentencia recurrida al menos en sus aspectos esenciales”.

Recordemos que, en cualquier caso, la racionalidad de la inferencia es revisable a través de los oportunos recursos, de tal modo que cuando en la sentencia de instancia la argumentación inferencial adolece de una fragilidad constatada, se articula mediante indicios equívocos que ofrecen otras lecturas o posibilidades de inferencia, o existe un déficit de motivación en relación a la valoración de la prueba y la determinación de los hechos probados, podrá denunciarse a través del correspondiente recurso la vulneración del derecho a la presunción de inocencia (SSTS 209/2002, de 11 de noviembre, 124/2001, de 4 de junio, y 249/2000, de 30 de octubre)<sup>43</sup>.

En ningún caso es admisible la inversión de la carga de la prueba que reclama un sector minoritario de la doctrina<sup>44</sup>, de tal modo que se traslade al acusado la carga de acreditar el origen regular de los bienes o fondos con los que ha operado. Dicho proceder vulneraría el principio constitucional de presunción de inocencia<sup>45</sup>. Como ha advertido QUERALT JIMÉNEZ, la existencia de bienes de origen dudoso en el patrimonio del sujeto activo o de incrementos patrimoniales no justificados no es suficiente para

---

<sup>43</sup> Ha destacado ZARAGOZA AGUADO que tanto la idoneidad de los indicios como la razonabilidad del proceso deductivo seguido por el Órgano judicial de instancia “son revisables en las diferentes instancias jurisdiccionales, no sólo en el juicio de apelación, sino también en la vía casacional, e incluso en la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo, por entender que afecta de manera esencial al principio de presunción de inocencia que proclama el artículo 24 de la Constitución. El control casacional en la prueba indiciaria se dirige a comprobar la estructura racional del proceso valorativo seguido por el Tribunal y su adecuación a las reglas de la lógica y de la experiencia, función ésta mucho más limitada en el caso de la prueba directa al quedar excluido de la misma todo lo concerniente a la precepción sensorial de la prueba derivada de la intermediación”. Por su parte, la doctrina constitucional (SSTC 105/1988, 283/1994, 24/1997, 45/1997, 68/1998, 157/1998, 189/1998 y 229/1998 entre otras) constriñe el control a través del correspondiente amparo “a la constatación de la existencia de una prueba de cargo suficiente y lícitamente practicada: la licitud requiere que no se hayan quebrantado las garantías constitucionales en su obtención e incorporación al proceso; y la suficiencia exige que la inferencia realizada por el Tribunal sea razonable, pues la irrazonabilidad de la inferencia produce la vulneración de la presunción de la prueba por falta de prueba de cargo. LA STC 220/1998, de 16 de noviembre (...) cita como supuestos de irrazonabilidad los siguientes: 1) la falta de lógica o de coherencia en la estructura del proceso valorativo del Tribunal, y 2) el carácter no concluyente de los indicios por ser excesivamente abiertos, débiles o indeterminados (lo que posibilita conclusiones alternativas razonables).” (Vid. ZARAGOZA AGUADO, J. A., “Artículo 301”, op. cit., pág. 1168).

<sup>44</sup> Vid. CASTRO MORENO, A., “Consideraciones críticas sobre la aplicación e interpretación del tipo subjetivo de los delitos de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 448.

<sup>45</sup> Vid. CALDERÓN CEREZO, A., *Comentarios al Código penal*, vol. 3, op. cit., pág. 2298. En sentido similar, vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 27; COBO DEL ROSAL, M./ ZABALA LOPEZ-GOMEZ, C., “Conclusiones críticas a la jurisprudencia contradictoria de la Audiencia Nacional y confirmatoria del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal)”, *Blanqueo de capitales. Abogados, procuradores y notarios, inversores, bancarios y empresarios*. CESEJ Centro de Estudios Superiores de Especialidades Jurídicas, 2005, pág. 126; MARTÍNEZ DE SALINAS, L., “Últimas tendencias jurisprudenciales en materia de blanqueo de capitales”, *II Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 35; MIRANDA ESTRAMPES, M., *Blanqueo de capitales, presunción de inocencia y prueba indiciaria*, op. cit., pág. 12; MARTÍNEZ-ARRIETA MÁRQUEZ DE PRADO, I., *El autoblanqueo. El delito fiscal como antecedente del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 33. En sentido similar, respecto a la previsión legal de la presunción del origen delictivo de los bienes del patrimonio de valor desproporcionado referida a la figura del comiso ampliado (artículo 127.1 CP), vid. GUINARTE CABADA, G., “La reforma de 2010 del comiso en el blanqueo”, *III Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, págs. 156-158.

imputar automáticamente un delito de blanqueo, pues los activos o incrementos patrimoniales pueden tener un origen distinto a una actividad delictiva<sup>46</sup>. No puede exigirse al acusado la carga de acreditar la licitud de su patrimonio, pues la prueba de la ilícita procedencia de aquél, como elemento del tipo que es, corresponde a la acusación. En este sentido, la STS 2207/2001, de 19 de noviembre, ha negado que la mera tenencia injustificada de bienes integre *per se* un delito de blanqueo. En el supuesto enjuiciado, el acusado no llegó a justificar la procedencia de un importante patrimonio, y ello a pesar de que conocía que su padre había sido condenado por tráfico de drogas, de que era titular de bienes adquiridos por aquél y puestos a su nombre a través de donaciones encubiertas, y de que carecía de capacidad económica para la adquisición de unos bienes cuyo origen no justificó. En la Sentencia se concluyó que el aumento patrimonial del acusado, a la vista de sus declaraciones de IRPF, pudo perfectamente traer causa en la ocultación de todo o parte de los ingresos derivados de su actividad de transportista, y ello podría tener relevancia en orden a determinar el cabal cumplimiento de sus obligaciones fiscales, pero no a para dirimir responsabilidades penales por un delito de blanqueo.

En suma, se puede afirmar que el silencio del acusado no es apto para enervar, por sí solo, su presunción de inocencia. Únicamente permite reforzar la inferencia del conocimiento sobre el ilícito origen de los bienes cuando, existiendo material probatorio que verdaderamente pueda considerarse de cargo, no ofrezca el acusado la explicación verosímil sobre la procedencia de los fondos que cabría esperar. En cualquier caso, la jurisprudencia atribuye al silencio del acusado o las explicaciones inverosímiles o inveraces el carácter de indicio meramente accesorio, de modo que la condena no podrá descansar nunca de manera exclusiva o fundamental en la ausencia de una explicación mínimamente razonable sobre la procedencia legítima de los bienes<sup>47</sup>.

---

<sup>46</sup> Vid. QUERALT JIMÉNEZ, J. J., *Derecho Penal Español. Parte Especial*, op. cit., págs. 1294 y 1295.

<sup>47</sup> Vid., en este sentido, STC 61/2005, de 14 de marzo; asimismo, CALDERÓN CERESO, A., *Comentarios al Código penal*, vol. 3, op. cit., pág. 2300; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 684.

### **5.2.3. GRADO DEL CONOCIMIENTO SOBRE EL ORIGEN DELICTIVO DEL BIEN. DOLO DIRECTO DE PRIMER GRADO, DOLO DIRECTO DE SEGUNDO GRADO Y DOLO EVENTUAL. LA IGNORANCIA DELIBERADA**

La determinación del *grado del conocimiento* de la procedencia delictiva del bien ha sido desde hace años objeto de intensos debates doctrinales. Recordemos que el tipo penal que aquí analizamos recurre a las expresiones “sabiendo” (artículo 301.1) y “a sabiendas” (artículo 301.2). Si, como afirma BLANCO CORDERO, el verbo “saber” significa conocer, este conocimiento ha de ir referido a “algún elemento que ha de ser abarcado por la conciencia del agente”<sup>48</sup>. Pero, ¿qué grado de conciencia ha de exigirse para poder afirmar una realización delictiva dolosa de blanqueo? ¿Qué modalidad de dolo se precisa?

Como sabemos, la doctrina distingue tres niveles de dolo: dolo directo de primer grado, dolo directo de segundo grado o de consecuencias necesarias y dolo eventual. En el dolo directo de primer grado o intencional, el autor del delito persigue la realización del mismo. En el dolo directo de segundo grado o de consecuencias necesarias, el autor no persigue la realización del tipo, pero lo advierte como seguro, como una consecuencia necesaria e inevitable de su actuar, unida al resultado principal que pretende alcanzar. En el dolo eventual, el agente se representa la posibilidad de que su actuación de lugar al delito; es decir, se representa como probable la producción de aquél y, aun cuando no quiera producirlo, actúa, admitiendo su eventual realización. Esta última modalidad dolosa que, conforme a nuestra legislación penal, lleva aparejada la penalidad que corresponde al delito doloso, se encuentra muy próxima a la culpa consciente (ámbito de la imprudencia, cuya penalidad es mucho menos rigurosa o inexistente -téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 12 CP-), de tal forma que, en la práctica, representa no pocos problemas la delimitación del ámbito de aplicación de una y otra figura. Para diferenciar el dolo eventual y la imprudencia consciente, la doctrina ha acudido a las teorías de la representación y del consentimiento. De acuerdo con la primera de ellas, el elemento diferenciador es el grado de probabilidad de que se produzca el resultado: el dolo eventual precisa una elevada probabilidad conocida por el

---

<sup>48</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 657.



sujeto de que se produzca el resultado, mientras que en la imprudencia consciente dicha probabilidad será apreciada como exigua. Para la teoría del consentimiento o de la aprobación, el criterio delimitador es el volitivo. En el dolo eventual, el sujeto acepta que se realice el resultado típico, mientras que en la imprudencia consciente el sujeto espera que aquél no se produzca. Sobre ello volveremos más adelante, al abordar el análisis del tipo imprudente de blanqueo<sup>49</sup>.

En el ámbito del blanqueo de capitales, en la doctrina se presentan importantes discrepancias sobre el grado de conocimiento respecto al origen delictivo del bien que el tipo penal precisa: desde un sector minoritario, se considera necesario el sujeto activo tenga un conocimiento absoluto de la procedencia ilícita del bien (dolo directo de primer grado)<sup>50</sup>. La doctrina mayoritaria entiende, por el contrario, que el grado de conocimiento que precisa el tenor literal del precepto abarca el dolo en todas sus formas: por su puesto, el dolo directo de primer grado, pero también el de segundo grado, e incluso el dolo eventual<sup>51</sup>. Esta es la interpretación que consideramos más acertada, pues, como ha advertido BLANCO CORDERO, si el número 3 del artículo 301 da

<sup>49</sup> Vid. *infra*, Apartado 5.6.4 de este capítulo, págs. 497 y ss.

<sup>50</sup> Vid. ARIAS HOLGUÍN, D. P., *Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 336 y 337. En general, aquéllos autores que consideran que las conductas expresamente previstas en el artículo 301.1 CP (actos de adquisición, etc.) han de estar dirigidas a algunas de las finalidades expresadas en el precepto (encubrir, ocultar o ayudar), descartan la posibilidad del dolo eventual como de forma de tipicidad subjetiva en todas las conductas abarcadas por el número 1 del precepto (vid., en este sentido, FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 398). Por su parte, PALMA HERRERA entiende que el número 1 del artículo 301 admite únicamente el dolo directo de primer grado, mientras que el número 2 de dicho artículo también admite el dolo de segundo grado y el dolo eventual. (*Comentarios al Código Penal*, op. cit., pág. 729). También CALDERÓN CERREZO considera que, de acuerdo con la literalidad del precepto, el autor debe actuar “con la certeza de que los bienes que constituyen el objeto material proceden de la realización de un delito”. (*Comentarios al Código penal*, vol. 3, op. cit., pág. 2299). Niegan el dolo eventual con carácter general para los tipos de blanqueo SERRANO GONZÁLEZ/SERRANO MAÍLLO, pues, a su juicio, resulta incompatible con la expresión “sabiendo”. Aquellos casos en los que no pueda constatar el dolo directo, según los autores referidos, han de reconducirse a la modalidad típica de imprudencia grave para que la conducta no quede impune; incluso, “en caso de duda, habrá que recurrir al principio *in dubio pro reo*.” (*Derecho Penal. Parte Especial*, op. cit., pág. 568).

<sup>51</sup> Vid. VIDALES RODRÍGUEZ, C., *Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código penal de 1995*, op. cit., pág. 126; ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 276; ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 349; BAJO FERNÁNDEZ, M./BACIGALUPO SAGESSE, S., “Blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 734 y 735; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 676; id., “Penalización de lavado de dinero: aspectos sustantivos, principios y recomendaciones internacionales”, op. cit., pág. 188; ZARAGOZA AGUADO, J. A., “Aspectos probatorios y técnicas de investigación en los procesos por lavado de dinero: medidas preventivas y cautelares, recomendaciones internacionales”, op. cit., pág. 398; MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de Capitales”, 3ª ed., op. cit., pág. 495; id., “La dimensión internacional del blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 238; ALONSO PÉREZ, F., “Conductas afines a la receptación”, op. cit., pág. 474; LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J./ALONSO GONZÁLEZ, A./ENCINAR DEL POZO, M. A., *Código Penal comentado con jurisprudencia sistematizada y concordancias*, op. cit., pág. 939; QUERALT JIMÉNEZ, J. J., *Derecho Penal Español. Parte Especial*, op. cit., pág. 1295; LOBO GONZÁLEZ, R./ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, M., *Código Penal. Parte especial. Tomo II. Vol. II*, op. cit., págs. 200, 201 y 203; LORENZO SALGADO, J. M., “El tipo agravado de blanqueo cuando los bienes tengan su origen en el delito de tráfico de drogas”, op. cit., pág. 226.

cabida a la imprudencia, “quedaría una laguna de punibilidad para aquellos casos en los que concurriese dolo eventual”<sup>52</sup>.

El mismo sentido amplio concede la jurisprudencia a las expresiones típicas “saber” y “a sabiendas”. Aunque, apunta CALDERÓN CEREZO, la interpretación judicial del tipo de blanqueo fue en su momento más bien restrictiva en cuanto a la tipicidad subjetiva, y tendía a considerar necesaria la concurrencia de dolo directo<sup>53</sup>, en la actualidad es prácticamente unánime la aceptación del dolo eventual en todas las modalidades comisivas dolosas. En la Sentencia 28/2010, de 28 de enero, el Tribunal Supremo establece que la expresión típica “sabiendo”, “si bien estrictamente equivaldría a tener conciencia o estar informado, debe entenderse en el sentido de tener un conocimiento práctico, derivado de la experiencia, que permita representarse algo como lo más probable en la situación dada (...), con plena admisión del dolo eventual”. En las SSTs 801/2012, de 30 de octubre -con cita de la STS 1034/05, de 14 de septiembre- y 1012/2006, de 19 de octubre, se incide en la idea de que no es necesario un conocimiento preciso del hecho delictivo del que deriva el bien, “(que, de ordinario, sólo se dará cuando se integren organizaciones criminales amplias con distribución de tareas delictivas) sino que basta con la conciencia de la anormalidad de la operación a realizar y la razonable inferencia de que procede de un delito grave (p. ej. por su cuantía, medidas de protección, contraprestación ofrecida, etc.)”<sup>54</sup>.

En definitiva, se admite con carácter general la imputación a título de dolo eventual en aquellos casos en los que el autor haya podido representarse la posibilidad

---

<sup>52</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 2ª ed., op. cit., pág. 387. En el mismo sentido, ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 276. Como veremos en el siguiente apartado, respecto de las conductas indeterminadas consistentes en la realización de *cualquier acto con las finalidades de* ocultar, encubrir o ayudar, contenidas en el segundo inciso del artículo 301.1 CP, la referencia expresa a determinado *ánimo o finalidad* en el agente, impone, a nuestro juicio, la presencia del dolo directo y permite excluir como títulos de imputación subjetiva tanto el dolo de segundo grado como su modalidad eventual (vid. *infra*, apartado 5.3 de este capítulo, págs. 462 y ss.).

<sup>53</sup> Vid. CALDERÓN CEREZO, A., *Comentarios al Código penal*, vol. 3, op. cit., pág. 2299, con referencias a las Sentencias de 7 de junio de 1991, 2 de marzo de 1992 y 5 de abril de 1998.

<sup>54</sup> Precisa la Sala Segunda, en la Sentencia 68/2011, de 15 de febrero, que cabe apreciar dolo eventual en aquellos supuestos en los que se acredite que el agente “decide la realización de la acción, no obstante haber tenido consistentes y claras sospechas de que se dan en el hecho los elementos del tipo objetivo, manifestando indiferencia respecto de la concurrencia o no de estos. [En estos casos] no cabe alegar un error o ignorancia relevantes para la exclusión del dolo en el sentido del artículo 14.1 CP. Esta situación, como se ha dicho, es de apreciar en aquellos casos en los que el autor incumple conscientemente obligaciones legales o reglamentarias de cerciorarse sobre los elementos del hecho, como en el delito de blanqueo de capitales, o en los delitos de tenencia y tráfico de drogas, cuando el autor tuvo razones evidentes para comprobar los hechos y no lo hizo porque le daba igual que concurrieran o no los elementos del tipo; es decir: cuando está acreditado que estaba decidido a actuar cualquiera fuera la situación en la que lo hacía y que existían razones de peso para sospechar la realización del tipo.”

de la procedencia delictiva del bien sobre el que opera (SSTS 910/2014, de 2 de enero de 2015, 839/2014, de 2 de diciembre, 165/2013, de 26 de marzo, 811/2012, de 30 de octubre, 303/2010, de 22 de marzo, y 28/2010, de 28 de enero). En la Sentencia 131/2005, de 19 de enero, el Tribunal Supremo da un paso más, declarando en su FJ 3º que respecto del conocimiento del delito “no se exige un dolo directo, bastando el eventual o incluso (...) es suficiente situarse en la posición de *ignorancia deliberada*. Es decir, quien pudiendo y debiendo conocer la naturaleza del acto o colaboración que se le pide, se mantiene en situación de no querer saber, pero no obstante presta su colaboración, se hace acreedor a las consecuencias penales que se deriven de su antijurídico actuar”. Veremos, al ocuparnos del blanqueo cometido por imprudencia grave, que en la siempre problemática distinción entre el dolo eventual y la imprudencia consciente, en los últimos años el Alto Tribunal está mostrando una orientación marcadamente acusada a asumir, en los supuestos de blanqueo, la teoría de la representación<sup>55</sup>, y con ello, “a reconducir casi cualquier supuesto al dolo eventual” hasta el punto de que “son frecuentes las sentencias que contienen auténticas presunciones de dolo”<sup>56</sup>.

Como vemos, sobre la base de una distendida interpretación del dolo eventual, la jurisprudencia ha llegado a considerar suficiente un conocimiento potencial relativo a la ilícita procedencia de los bienes<sup>57</sup>, lo que ha dado cabida ya no sólo a la imputación con dolo eventual, sino también a la aceptación del principio de ignorancia deliberada o ignorancia intencional<sup>58</sup> (invocando en algunos casos los principios del *willful*

---

<sup>55</sup> Vid. CALDERÓN CERESO, A., “Algunos aspectos críticos del blanqueo de capitales. Legislación y jurisprudencia”, op. cit., pág. 84; id., *Comentarios al Código penal*, vol. 3, op. cit., pág. 2299. Más detalladamente, BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 719-721.

<sup>56</sup> Vid. CASTRO MORENO, A., “Consideraciones críticas sobre la aplicación e interpretación del tipo subjetivo de los delitos de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 449.

<sup>57</sup> Vid. CARDONA TORRES, J., *Derecho Penal. Parte Especial*. Editorial Bosch, Barcelona, 2010, pág. 337; GALLEGOS SOLER, J. I., *Comentarios al Código Penal. Reforma LO 5/2010*, op. cit., pág. 666.

<sup>58</sup> Vid. BAJO FERNÁNDEZ, M./BACIGALUPO SAGESSE, S., “Blanqueo de capitales”, 2ª ed., op. cit., págs. 735 y 736; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 687 y ss.; ARIAS HOLGUÍN, D. P., *Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 333; MUÑOZ CUESTA, J., “Blanqueo de capitales imprudente: una figura más que discutible. Comentario a STS, Sala 2ª, de 14 septiembre 2005”, *Repertorio de jurisprudencia Aranzadi*, nº 7, 2005, págs. 21.778 y 21.779.

*blindness*<sup>59</sup> del derecho angloamericano) considerando en ocasiones dicha figura como un “auténtico sustitutivo del dolo eventual”<sup>60</sup>.

En efecto, desde la Sentencia 1637/1999, de 10 de enero de 2000, la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha introducido progresivamente el llamado *principio de ignorancia deliberada*, de desconocimiento provocado o de ignorancia intencional para resolver supuestos problemáticos en los que surgen especiales dificultades en la acreditación del conocimiento, por parte del autor, de algunos aspectos penalmente relevantes de su conducta<sup>61</sup>. En el curso de procedimientos por delito de blanqueo de capitales, resulta habitual que el acusado alegue desconocer el carácter delictivo del bien sobre el que opera. Frente a estas alegaciones de descargo, en la resolución antes referida el Alto Tribunal afirmó novedosamente que “quien se pone en situación de ignorancia deliberada, es decir no querer saber aquello que puede y debe conocerse, y sin embargo se beneficia de esta situación (...), está asumiendo y aceptando todas las posibilidades del origen del negocio en el que participa, y por tanto debe responder de sus consecuencias”. Desde entonces, la Sala Segunda ha desarrollado una línea jurisprudencial en torno a la doctrina de la ignorancia deliberada caracterizada, como a continuación veremos, por su falta de uniformidad<sup>62</sup>, llegando incluso, en determinados pronunciamientos recientes, a censurar la invocación de criterios importados del derecho norteamericano, cuya adecuación a las exigencias de las garantías

---

<sup>59</sup> Expresión que puede traducirse literalmente como “ceguera intencionada”. (Vid. RAGUÉS I VALLÈS, R., *La ignorancia deliberada en derecho penal*. Editorial Atelier, Barcelona, 2007, op. cit., pág. 44).

<sup>60</sup> Ibidem, pág. 35. Vid., asimismo, CASTRO MORENO, A., “Consideraciones críticas sobre la aplicación e interpretación del tipo subjetivo de los delitos de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 452.

<sup>61</sup> Si bien la Sala Segunda recurrió inicialmente a la ignorancia deliberada en el ámbito de los delitos de blanqueo y tráfico de drogas para considerar acreditado el conocimiento -por parte del sujeto activo- del origen delictivo del bien (en el primer caso) y de la naturaleza o cantidad de la sustancia estupefaciente transportada (en el segundo), el recurso a esta doctrina se ha visto ampliado posteriormente a otras figuras delictivas, tales como la estafa, el alzamiento de bienes, las insolvencias punibles, la falsedad documental, o los delitos de terrorismo y tenencia ilícita de armas. (Vid., ampliamente, RAGUÉS I VALLÈS, R., *La ignorancia deliberada en derecho penal*, op. cit., págs. 23 y 31 a 58).

<sup>62</sup> Ibidem, pág. 58. Como ha constatado BLANCO CORDERO, en determinadas Sentencias la Sala Segunda parece equiparar valorativamente esta controvertida figura con el dolo eventual, considerando que en esta tipología subjetiva tendrían cabida los supuestos de ignorancia deliberada. En otras resoluciones, el Alto Tribunal no identifica ambas instituciones, afirmando que los supuestos de ignorancia deliberada deben ser considerados en unos casos como supuestos de dolo eventual y en otros reconducirse al ámbito de la imprudencia. (*El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 686, 687 y 691). En cualquier caso, denuncia RAGUÉS, en las Sentencias en las que el Alto Tribunal apela a esta figura “se aprecian numerosas contradicciones acerca de su alcance y contenido, siendo a menudo un mero recurso retórico que permite eludir los deberes de motivación del juez en relación con la prueba de indicios”. (*La ignorancia deliberada en derecho penal*, op. cit., pág. 61).

constitucionales de la presunción de inocencia<sup>63</sup> y del principio de culpabilidad resulta, cuanto menos, dudosa<sup>64</sup>.

En sus primeras Sentencias, el Tribunal Supremo conceptuó la ignorancia deliberada como figura valorativamente equivalente al dolo eventual<sup>65</sup>, recurriendo a ella como medio de acreditación del elemento cognitivo y como indicio de la presencia del elemento volitivo del dolo eventual. Es decir, la voluntad del sujeto de no conocer más allá de lo que sabe se configuró como un indicio de la aceptación, propia del dolo eventual, de su participación en el hecho delictivo<sup>66</sup>. Como acabamos de ver, en la STS 1637/1999, de 10 de enero de 2000, se identifica el desconocimiento provocado por el propio autor sobre la procedencia de los bienes con la aceptación de la realización de la conducta típica propia del dolo eventual. En una resolución inmediatamente posterior (STS 1583/2000, de 16 de octubre) la Sala Segunda confirma esta línea interpretativa, calificando la provocación del propio desconocimiento como un “claro supuesto de dolo eventual fundado en la doctrina del asentimiento que viene a centrar la esencia del dolo eventual en que al agente si bien desconoce en todos sus detalles el acto ilícito penal en el que se encuentra involucrado, lo asume en la medida que acepta todas las consecuencias de su ilícito actuar.”

En pronunciamientos posteriores, la Sala Segunda ha invocado la ignorancia deliberada como medio de constatar la presencia del dolo pese a no constar acreditado el conocimiento del autor sobre algún elemento típico, es decir, “ha pasado a ser un auténtico sustitutivo del citado elemento cognitivo”<sup>67</sup>. Desde la Sentencia 1034/2005, de

---

<sup>63</sup> Vid. STS 987/2012, de 3 de diciembre.

<sup>64</sup> Vid. STS 797/2006, de 20 de julio, y otras posteriores (STS 987/2012, de 3 de diciembre), que acogen similar discurso argumental. En la STS 68/2011, de 15 de febrero, se declara terminantemente que “en el derecho vigente no cabe ni la presunción del dolo, ni eliminar sin más las exigencias probatorias del elemento cognitivo del dolo”.

<sup>65</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 686 y 687.

<sup>66</sup> Vid. RAGUÉS I VALLÈS, R., *La ignorancia deliberada en derecho penal*, op. cit., pág. 28. Vid., asimismo, BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 701.

<sup>67</sup> Vid. RAGUÉS I VALLÈS, R., *La ignorancia deliberada en derecho penal*, op. cit., pág. 58. Véase cómo en la STS 946/2002, de 22 de mayo, el recurso a la ignorancia deliberada sirve al Alto Tribunal no sólo como indicio del elemento volitivo del dolo eventual (el sujeto aceptó o asumió la posibilidad de la realización de la conducta típica), sino también “como un dato que permite (...) soslayar la necesidad de obtener indicios de que el sujeto se representara la eventualidad de [la realización del tipo objetivo,] sin necesidad de probar su representación (elemento cognitivo)”. (Ibidem, págs. 28 y 29). Con certeza ha advertido RAGUÉS en su relevante monografía dedicada al estudio de esta particular institución que si en un primer momento el recurso a la ignorancia deliberada sirvió al Alto Tribunal como “indicio del llamado elemento volitivo del dolo eventual («aceptación, asentimiento o indiferencia»), progresivamente la doctrina de la ignorancia deliberada ha ido cobrando «vida propia»”, hasta el punto de afirmarse en algunas resoluciones posteriores -de forma más o menos explícita- que en estos casos de provocación del desconocimiento no es siquiera necesario acreditar la concurrencia del elemento cognitivo del dolo”, de modo que “el desconocimiento provocado ha alcanzado

14 de septiembre, el Tribunal Supremo ha abierto paralelamente otra línea interpretativa por cuya virtud se aparta de la vinculación estricta de la ignorancia deliberada al dolo eventual; tras invocar expresamente la figura del *willful blindness*, se afirma en esta resolución -y se confirma en otras posteriores que mantienen similar línea interpretativa- que quien actúa con ignorancia deliberada responde en unos casos a título de dolo eventual y en otros a título de culpa. “Y ello, tanto si hay representación, considerando el sujeto posible la procedencia delictiva de los bienes, y pese a ello actúa, confiando en que no se producirá la actuación o encubrimiento de su origen, como cuando no la hay, no previendo la posibilidad de que se produzca un delito de blanqueo, pero debiendo haber apreciado la existencia de indicios reveladores del origen ilegal del dinero. Existe un deber de conocer que impide cerrar los ojos ante las circunstancias sospechosas”<sup>68</sup>.

Lo cierto es que en el panorama jurisprudencial más reciente se mantiene esta doble dirección interpretativa: existen pronunciamientos que identifican la ignorancia deliberada con el título de imputación del dolo eventual (SSTS 165/2013, de 26 de marzo, 888/2012, de 22 de noviembre, y 561/2012, de 3 de julio), si bien en otras resoluciones se afirma que los supuestos de ignorancia provocada pueden dar lugar a diferentes grados de imputación subjetiva, tanto dolosos como imprudentes, en función de las circunstancias del caso concreto (SSTS 1257/2009, de 2 de diciembre, 16/2009, de 27 de enero, 1012/2006, de 19 de octubre, y 1034/2005, de 14 de septiembre). Por su parte, tras la Sentencia 797/2006, de 20 de julio, comienza a desarrollarse una nueva línea jurisprudencial, esta vez crítica, que convivirá con las dos anteriormente referidas. En dicha resolución, se censura la invocación una doctrina importada del derecho angloamericano, a la que la Sala Segunda llega a calificar de “conceptualmente errónea e innecesaria”<sup>69</sup>. En resoluciones posteriores, se mantendrá esta línea crítica, que sin

---

autonomía como un nuevo título de imputación subjetiva que únicamente se vincula con la figura legal del dolo a efectos punitivos”. Este enfoque jurisprudencial ha convertido así la ignorancia deliberada en un “auténtico sustitutivo del dolo eventual”. (Ibidem, págs. 31-36 *passim*. Asimismo, OLIVA GARCÍA, H., “La defensa ante la acusación por blanqueo de dinero”, *op. cit.*, pág. 42).

<sup>68</sup> Vid. STS 1034/2005, FJ 4º. Esta misma línea jurisprudencial se mantiene en Sentencias posteriores (SSTS 1257/2009, de 2 de diciembre, 16/2009, de 27 de enero, 1012/2006, de 19 de octubre, y 31/2006, de 13 de enero) si bien existen pronunciamientos ulteriores que vuelven a vincular la ignorancia deliberada al dolo eventual, en la línea interpretativa expuesta *supra*.

<sup>69</sup> Vid. RAGUÉS I VALLÈS, R., *La ignorancia deliberada en derecho penal*, *op. cit.*, págs. 49 y 58. El FJ 16º de la STS 797/2006 se pronuncia, como hemos dicho, en términos marcadamente críticos con una “doctrina a la que [el recurrente] atribuye proceder del derecho de los EEUU, según la cual se trataría de casos de “ignorancia deliberada” o de “ignorancia intencional”. Tales expresiones no resultan ni idiomática ni conceptualmente adecuadas, dado que si se tiene intención de ignorar es porque, en realidad, se sabe lo que se ignora. Nadie puede tener intención de lo que no sabe. La *contradictio in terminis* es evidente.” Como se ha

embargo coexistirá de forma simultánea con Sentencias en las que expresamente se hace uso de la ignorancia intencional. Afortunadamente, la línea interpretativa que rechaza la aplicación de esta controvertida figura se está consolidando. En efecto, en diversas Sentencias recientes se advierte la dificultad de compatibilizar el recurso a la ignorancia deliberada con las exigencias de las garantías constitucionales de la presunción de inocencia y las derivadas del principio de culpabilidad. En este sentido, el Tribunal Supremo ha afirmado que “en el Derecho vigente no cabe ni la presunción del dolo, ni eliminar sin más las exigencias probatorias del elemento cognitivo del dolo. Asimismo tampoco cabe impugnar la aplicación del principio "in dubio pro reo" realizada por los Tribunales de instancia sobre los hechos con apoyo en un supuesto "principio" de la ignorancia deliberada.” (SSTS 586/2014, de 23 de julio, 997/2013, de 19 diciembre, 987/2012, de 3 de diciembre, y 68/2011, de 15 de febrero).

Como puede observarse, la interpretación y la aplicación que la Sala Segunda hace de la figura cuya atención nos ocupa adolece de la coherencia y uniformidad que sería deseable. En este confuso contexto, resulta sumamente aclaratoria la nueva orientación jurisprudencial que se deduce de la STS 57/2009, de 2 de febrero. En dicha resolución, la Sala Segunda advierte, en el marco del delito de receptación, del riesgo de que los Tribunales de instancia, basándose en la jurisprudencia desarrollada por la propia Sala en torno a la ignorancia deliberada, asuman sus postulados como “un instrumento más que útil para eludir el deber de motivación respecto del tipo subjetivo y, sobre todo, obviar la prueba del conocimiento sobre el que se construye el dolo eventual”. Continúa la Sentencia afirmando que tanto desde las teorías cognitivas como

---

advertido, esta línea jurisprudencial crítica no ha desterrado esta extraña institución ni ha impedido que la Sala Segunda haya invocado con posterioridad los criterios de la ignorancia deliberada para fundamentar otras resoluciones; paralelamente existen pronunciamientos recientes que, con cita expresa de la Sentencia 796/2006 e invocando sus argumentos, acuden a la línea interpretativa que censura la doctrina angloamericana. Así, en la STS 987/2012, de 3 de diciembre, el Alto Tribunal rechaza “el recurso que la sentencia hace al sintagma "ignorancia deliberada" como argumento para establecer la conclusión sobre el elemento subjetivo de la estafa que imputa (...) reiterando una doctrina de esta Sala que ya proclamaba serias advertencias sobre la difícil compatibilidad de tal método con las exigencias de la garantía constitucional de presunción de inocencia. Así en la Sentencia de este Tribunal Supremo nº 68/2011 de 15 de febrero dijimos: En alguno de los precedentes de esta Sala, no obstante, se ha mencionado la "ignorancia deliberada", como criterio para tener por acreditado el elemento cognitivo del dolo, es decir, para tener por probado que el autor obró conociendo los elementos del tipo objetivo (hecho constitutivo de la infracción penal en la terminología del art. 14.1 CP ) o de un hecho que cualifique la infracción penal, como es el caso de la cantidad de notoria importancia discutida en el recurso). Este punto de vista ha sido fuertemente criticado en la doctrina porque se lo entendió como una transposición del "willful blindness" del derecho norteamericano y porque se considera que no resulta adecuado a las exigencias del principio de culpabilidad, cuyo rango constitucional ha puesto de manifiesto el Tribunal Constitucional. Asimismo se ha llamado la atención sobre el riesgo de que la fórmula de la "ignorancia deliberada" -cuya incorrección idiomática ya fue señalada en la STS de 20-7- 2006 - pueda ser utilizada para eludir "la prueba del conocimiento en el que se basa la aplicación de la figura del dolo eventual ", o, para invertir la carga de la prueba sobre este extremo.”

volitivas del dolo, “sólo aquel que ejecuta la acción típica con alguna forma de conocimiento de los elementos del tipo objetivo, puede hacerse merecedor de pena. Sustituir el conocimiento o la representación de los elementos del delito por la prueba de que el sujeto activo ha evitado deliberadamente abarcar esos elementos, puede implicar nuestro apoyo a una verdadera desnaturalización del desafío probatorio que incumbe a las acusaciones. En supuestos como el que nos ocupa, la condena del acusado sólo puede basarse en lo que éste sabía, no en lo que debió conocer. El reproche penal por lo que se debió conocer y, sin embargo, no se conoce, no puede servir, sin más, de fundamento para la afirmación del dolo.” De este modo, han de diferenciarse nítidamente las situaciones en las que el autor actúa con ignorancia deliberada de aquellas otras en las que existe verdaderamente un dolo eventual; y en estos últimos casos, ha de probarse que el sujeto se representó todos y cada uno de los elementos que conforman el tipo objetivo del delito de que se trate. Los supuestos de ignorancia deliberada, continúa la Sentencia, son aquellos en los que “el autor, pese a colmar todas las exigencias del tipo objetivo, ha incorporado a su estrategia criminal, de una u otra forma, rehuir aquellos conocimientos mínimos indispensables para apreciar, fuera de toda duda, una actuación dolosa, si quiera por la vía del dolo eventual. De esa manera, se logra evitar el tratamiento punitivo que el CP reserva a los delincuentes dolosos, para beneficiarse de una pena inferior -prevista para las infracciones imprudentes- o de la propia impunidad, si no existiera, como sucede en no pocos casos, una modalidad culposa expresamente tipificada.” Finalmente, el Alto Tribunal determina las condiciones que permitirían trasladar el tratamiento punitivo de “los casos de dolo eventual en su sentido más estricto” a “aquellos casos de ignorancia deliberada en los que se constate la existencia de un acto de indiferencia hacia el bien jurídico que sugiera la misma necesidad de pena”. Para ello, afirma la Sala Segunda, habrán de concurrir en el sujeto las siguientes circunstancias:

“1º.- Una falta de representación suficiente de todos los elementos que definen el tipo delictivo de que se trate. Esa falta de representación, si es absoluta, nunca podrá fundamentar la imputación subjetiva a título de dolo. Los supuestos abarcados estarán relacionados, de ordinario, con la conciencia de que se va a realizar, con una u otra aportación, un acto inequívocamente ilícito. La sospecha puede incluso no llegar a perfilar la representación de todos y cada uno de los elementos del tipo objetivo, al menos, con la nitidez exigida de ordinario para afirmar la concurrencia del elemento intelectual del dolo. Sin embargo, sí ha de ser



reveladora de una grave indiferencia del autor hacia los bienes jurídicos penalmente protegidos, pues, pese a representarse el riesgo que su conducta puede aparejar, no desiste del plan concebido.

2º.- Una decisión del sujeto de permanecer en la ignorancia, aun hallándose en condiciones de disponer, de forma directa o indirecta, de la información que se pretende evitar. Además, esa determinación de desconocer aquello que puede ser conocido, ha de prolongarse en el tiempo, reforzando así la conclusión acerca de la indiferencia del autor acerca de los bienes jurídicos objeto de tutela penal.

3º.- Un componente motivacional, inspirado en el propósito de beneficiarse del estado de ignorancia alentado por el propio interesado, eludiendo así la asunción de los riesgos inherentes a una eventual exigencia de responsabilidad criminal<sup>70</sup>.

Por su parte, la doctrina española no ha mostrado una especial preocupación por las situaciones de ignorancia deliberada hasta fechas relativamente recientes. En su día, PALMA HERRERA identificó la ignorancia deliberada con el dolo eventual, toda vez que, a su juicio, quien ciega voluntariamente sus fuentes de conocimiento, al no querer indagar sobre el origen de los bienes sobre los que opera, lo hace voluntariamente, “lo que supone que quien lo hace, teme y se plantea, al menos, la posibilidad de que el origen de los bienes sea delictivo”. De este modo, según PALMA, sería legítimo acudir a la figura del dolo eventual a partir del conocimiento eventual de la procedencia delictiva del bien<sup>71</sup>. Más recientemente, RAGUÉS I VALLÈS, ha desarrollado un minucioso análisis sobre la cuestión que nos ocupa, concluyendo que los supuestos de ignorancia deliberada<sup>72</sup> comparten con el dolo eventual una actitud de “*indiferencia*”, por parte del

---

<sup>70</sup> Esta línea jurisprudencial, asentada en fundamentos más sólidamente argumentados, y marcadamente orientada por las conclusiones alcanzadas por RAGUÉS en su significativa monografía, es reiterada en resoluciones posteriores (vid. SSTs 68/2011, de quince de febrero, y 234/2012, de 16 de marzo, que conocen de sendos recursos de casación contra Sentencias dictadas en materia de delitos de estafa y de terrorismo). Sin embargo, la aparición de esta orientación jurisprudencial, basada en argumentos jurídico-penales más reflexivos y minuciosos, no ha impedido que en pronunciamientos posteriores la propia Sala Segunda haya retornado a la equiparación valorativa de los supuestos de desconocimiento provocado con el dolo eventual. Así, en el FJº 3º de la STS 557/2012, de 9 de julio, se invoca aquella tradicional doctrina por cuya virtud se afirma que “dentro del dolo eventual, ordinariamente se incluirán aquellos comportamientos de “ignorancia deliberada” (...) sobre los que esta Sala se ha pronunciado en diversas ocasiones (entre otras SSTs 1637/99 de 10 de enero-2000; 946/2002 de 22 de mayo; 236/2003 de 17 de febrero; 420/2003 de 20 de mayo; 628/2003 de 30 de abril; 785/2003 de 29 de mayo; 16/2009 de 27 de enero, etc.)”.

<sup>71</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 576.

<sup>72</sup> Tal y como el autor la concibe, la figura de la ignorancia deliberada ha de reunir las siguientes características: a) ausencia en el agente, en el momento de realizar el comportamiento típico, de la representación suficiente que exige el dolo, si bien ha de albergar cierta sospecha de estar actuando ilícitamente; b) persistencia en la decisión de desconocer circunstancias penalmente relevantes de su conducta que puede y debe conocer (ignorancia evitable y provocada por voluntad del sujeto); y c) que la motivación que ha llevado al sujeto a mantenerse en situación de ignorancia provocada se materialice en la persecución de

sujeto activo, respecto al conocimiento del origen delictivo del bien. Por ello, considera en determinado aspecto acertada la jurisprudencia que invoca la ignorancia deliberada como fundamento de imputación subjetiva a título de dolo eventual: valorativamente, lo que el autor denomina “desconocimiento provocado” puede ser equiparado al dolo eventual, si bien, advierte el monografista, “existen casos de ignorancia deliberada que nadie dudaría en tratar como situaciones de imprudencia”<sup>73</sup>. Por otro lado, RAGUÉS plantea interesantes dudas acerca de la legalidad de la equiparación punitiva entre la ignorancia deliberada y el dolo eventual -toda vez que bajo este último título de imputación *también* se exige la concurrencia del conocimiento propio del dolo-<sup>74</sup>. El autor finalmente descarta que la equivalencia valorativa conculque el principio de legalidad penal, pues considera que el Código penal no incorpora un concepto de dolo en virtud del cual sea necesariamente exigible la concurrencia del conocimiento de los elementos típicos. A su juicio, la definición jurídico-penal del dolo “se encuentra totalmente en manos de los consensos de la ciencia penal, que puede perfilarlo según sus necesidades con el único límite de que las consecuencias sean asumibles por el propio sistema jurídico”<sup>75</sup>.

---

beneficios sin asunción de riesgos propios y evitación de responsabilidades. (Vid. RAGUÉS I VALLÈS, R., *La ignorancia deliberada en derecho penal*, op. cit., págs. 156-159 y 186-187).

<sup>73</sup> Ibidem, pág. 211. Reconoce el autor que la indiferencia que caracteriza a la ignorancia deliberada es común a la imprudencia pero también al comportamiento doloso-eventual, toda vez que a través de este título de imputación subjetiva “no [se] ataca o [se] niega frontalmente un determinado interés valioso socialmente, sino que simplemente [se] muestra (...) indiferencia hacia dicho interés, en la medida en que su puesta en peligro no constituye un motivo suficiente para desistir del comportamiento proyectado”. De ello deriva la dificultad en la delimitación del ámbito de aplicación de las referidas modalidades de imputación. Como criterio aproximativo de distinción, RAGUÉS acude a la gravedad de la indiferencia, de modo que si el dolo eventual “ha de reservarse para los casos de indiferencia más abierta y grave, la imprudencia debe quedar limitada a aquellos supuestos en los que el grado de desinterés expresado es menor.” Sin embargo, continúa el autor, tal distinción presenta problemas al servirse de términos valorativos excesivamente vagos e imprecisos, de modo que admite el recurso a determinados datos psíquicos: “ya sea una especial actitud interna (aceptación, conformidad) en el caso de las teorías volitivas o bien un nivel cualificado de conocimientos, en el caso de las teorías cognitivas del dolo. Pese a ello -continúa el autor-, no cabe descartar que ciertos supuestos en los que no concurren los «hechos psíquicos» tradicionalmente exigidos para el dolo *puedan ser valorados como la expresión de un grado equivalente de indiferencia*, como posiblemente sucede en algunos casos de ignorancia deliberada”. (Ibidem, págs. 173-176 *passim*). En los supuestos que describe como de ignorancia deliberada *strictu sensu*, aquellos que reúnen las notas a las que hemos hecho referencia en la nota a pie de página precedente, el “grado de indiferencia del sujeto ante el interés lesionado (...) suscita una necesidad de pena desde luego no inferior a la propia de los casos de dolo eventual.” (Ibidem, pág. 187).

<sup>74</sup> El monografista reconoce que “no deja de ser llamativo que pretenda definirse un estado que se supone de «ignorancia» exigiendo determinados conocimientos a quien lo padece”. (Ibidem, pág. 136). En cualquier caso, “quien no sabe porque no puede saber no es un ignorante deliberado”. (Ibidem, pág. 140).

<sup>75</sup> Ibidem, págs. 193-195; id., La atribución del conocimiento en el ámbito de la imputación dolosa. (Tesis doctoral), 1998, disponible en el siguiente enlace: <http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CEQQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.tdx.cat%2Fbitstream%2F10803%2F7299%2F5%2FTRRV3de9.pdf&ei=sTYUrmnKsFLywPy0YCwDA&usg=AFQjCNEJdbg5ECH6zVs5NRIG3bxPzC8rMw&sig2=ZEYTtMoZ5hbunhR6l1eefA&bvm=bv.59568121,d.bGQ>, págs. 193 y ss. Plantean, a estos efectos, mayores problemas aquellos delitos de la Parte Especial que incorporan “exigencias subjetivas cualificadas”, como pueden ser los tipos penales que, en su

Para BLANCO CORDERO, en el ámbito del delito de blanqueo, la ignorancia deliberada puede dar lugar a imputaciones doloso-eventuales o constituir supuestos de imprudencia consciente. Para el monografista, la distinción entre unos y otros casos depende de que el sujeto se haya representado o no *la probabilidad* de lesionar el bien jurídico protegido con su conducta: “si el sujeto no quiere conocer la procedencia delictiva de los bienes, pero en función de las circunstancias objetivas se representa ésta como probable, actúa con dolo eventual; si el sujeto, además de no querer saber, no se representa en absoluto el origen de los bienes”, actuará con imprudencia<sup>76</sup>. Particularmente crítico se ha mostrado CASTRO MORENO con el recurso a la institución de la “ignorancia deliberada” y su utilización por la jurisprudencia como sustitutivo del dolo típico en el ámbito del delito de blanqueo<sup>77</sup>. Como su propio nombre indica, la ignorancia deliberada hace referencia a supuestos en los que el sujeto “no tiene un conocimiento concreto del origen delictivo de los bienes”. Ello determina la ausencia de dolo en estos casos “pues resulta obvio que no se puede «saber» lo que se «ignora», por mucho que se pudiera haber conocido”. Formulando “de manera mucho más sencilla con apoyo legal: el desconocimiento excluye (siempre) el dolo conforme al artículo 14.1 CP, y ello, tanto si resultare evitable como si no”<sup>78</sup>. Ha de rechazarse, concluye el autor, el recurso a la ignorancia deliberada para colmar el elemento cognitivo del dolo con “el mero conocimiento potencial del peligro que encierra la acción”, toda vez que es precisamente dicha particularidad la que caracteriza a la imprudencia consciente. El pernicioso efecto que ello provoca es que dicho título de imputación esté siendo

---

enunciado, contienen la expresión “a sabiendas”. En estos delitos, en el ámbito subjetivo se exige verdadero conocimiento, absoluta certeza acerca de la realización del hecho típico. En estos casos, la aplicación del tratamiento punitivo propio del dolo a los supuestos de ignorancia deliberada sí plantearía serios problemas de legalidad, suscitándose para estos supuestos “una *injustificada laguna punitiva* que no puede salvarse del mismo modo que en los casos de ignorancia *stricto sensu*, por la sencilla razón de que el concreto fenómeno psíquico -conocimiento cierto- viene exigido como tal en el propio texto legal.” (Ibidem, págs. 200 y 201).

<sup>76</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 732. Para los casos en que el sujeto no se represente como probable el origen delictivo de los bienes sobre los que despliega su conducta, matiza BLANCO, “si el ordenamiento jurídico impone una obligación de cuidado, no se va a poder alegar el desconocimiento de los bienes para eludir la responsabilidad por el blanqueo (...). También son subsumibles en el tipo de blanqueo imprudente los casos de culpa inconsciente o sin representación [en aquellos casos en los que el sujeto esté normativamente obligado] a apreciar indicios del origen ilegal del dinero”. (Ibidem).

<sup>77</sup> Vid. CASTRO MORENO, A., “Consideraciones críticas sobre la aplicación e interpretación del tipo subjetivo de los delitos de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 452.

<sup>78</sup> Ibidem, pág. 451.

absorbido “por una concepción expansiva del dolo, que tiene más de «presunción» de dolo, que de auténtico y verdadero dolo. Todo ello, además, en perjuicio del reo”<sup>79</sup>.

A nuestro juicio, deben ser claramente diferenciados los supuestos en los que verdaderamente existe un dolo eventual -en los que ha de concurrir, y así ha de ser probado, al menos un elevado grado de representación del origen delictivo de los bienes- de las situaciones en las que el agente provoca su propio desconocimiento sobre la procedencia del bien respecto del cual realiza una conducta que, desde el punto de vista objetivo, puede considerarse *a priori* típica. Como se afirma en la STS 57/2009, de 2 de febrero, la condena a título de dolo eventual exige alguna forma de conocimiento de los elementos objetivos del tipo, y no es jurídicamente admisible sustituir dicho conocimiento, en el ámbito de lo que en definitiva es una modalidad dolosa, por lo que el sujeto debió o pudo conocer. En términos de la propia Sentencia, “la condena del acusado sólo puede basarse en lo que éste sabía, no en lo que debió conocer. El reproche penal por lo que se debió conocer y, sin embargo, no se conoce, no puede servir, sin más, de fundamento para la afirmación del dolo.” No es admisible, por tanto, trasladar las severas condiciones punitivas previstas para el dolo a aquellos supuestos en los que, conforme a los hechos declarados probados, no existen siquiera indicios de la existencia de conocimiento -por parte del autor- de alguno de los elementos que conforman el tipo objetivo, como lo es la procedencia delictiva de los bienes sobre los que despliega su conducta. Ello supondría, a nuestro juicio, una inadmisibles inobservancia de elementales fundamentos y principios del Derecho penal -la garantía constitucional de la presunción de inocencia y los principios de culpabilidad y de tipicidad penal-, al presumir *contra reo* la concurrencia de elementos subjetivos del tipo. Recordemos que conforme al concepto tradicional de dolo, mayoritariamente aceptado por la jurisprudencia y la doctrina española, aquél debe incorporar el conocimiento, o al menos la representación, por parte del agente, de que realiza los elementos que conforman el tipo objetivo, esto es, la conducta típica, su resultado y la vinculación normativa entre

---

<sup>79</sup> Ibidem, pág. 452. Para CASTRO MORENO, construcciones de este tipo suponen “un paso más en el proceso progresivo de «desnaturalización» del dolo al que asiste en los últimos tiempos la dogmática penal”: si las teorías cognitivas han pretendido reducir la relevancia del elemento volitivo del dolo, con la ignorancia deliberada se intenta “descafeinar también el elemento cognoscitivo para dejarlo en un mero conocimiento potencial de un riesgo: (...) el dolo ya no requiere el conocimiento de todos los elementos del tipo objetivo, sino que se define como conocimiento de la propia conducta y del peligro o riesgo no permitido que ésta conlleva. Sin embargo, el gran error de estas construcciones se encuentra en que ese potencial del peligro concreto que encierra la acción, también acontece exactamente igual en la imprudencia consciente, cuyo ámbito de juego queda prácticamente eliminado en beneficio de una interpretación expansiva del dolo (eventual)”. (Ibidem, pág. 451).

ambos o imputación objetiva<sup>80</sup>. De acuerdo con estos postulados, no es admisible la apreciación del dolo sin que resulte efectivamente probado el conocimiento, o al menos la representación, de uno de los elementos esenciales que definen el tipo objetivo -la procedencia delictiva de los fondos sobre los que recaen las conductas penalmente reprochables-, máxime cuando el propio tipo penal, de conformidad con los números 1 y 2 del artículo 301 CP, expresamente prevé la exigencia de dicho conocimiento a través de las expresiones “sabiendo” y “a sabiendas”. Como acertadamente ha apuntado CASTRO MORENO, no resulta dogmáticamente admisible sustituir el elemento cognitivo cuya presencia exige el dolo típico con “el mero conocimiento potencial del peligro que encierra la acción”<sup>81</sup>, más propio de la imprudencia consciente.

No se pretende aquí, sin embargo, descartar la relevancia penal de las situaciones de ignorancia deliberada. A nuestro juicio, la constatación de una situación de desconocimiento provocado puede perfilarse como *indicio* del conocimiento, por parte del agente, de que participa en un hecho ilícito. Es admisible, de este modo, que opere como un indicio más, junto con otros que apunten en el mismo sentido, del que deducir la existencia del dolo típico (concurrencia de al menos la representación en el sujeto de que maneja bienes, capitales o fondos que proceden de un hecho delictivo) a través de la prueba indirecta o de indicios -a la que con tanta asiduidad recurren los tribunales para considerar acreditados elementos subjetivos del tipo-. Sin embargo, acudir a la sola circunstancia de no haber querido indagar en la procedencia de los bienes o capitales sobre los que el sujeto realiza una conducta típica para instituir *per se* un nuevo título de imputación<sup>82</sup>, al que se vinculan nada menos que las consecuencias punitivas del dolo, sin que exista prueba directa o indirecta del conocimiento del origen delictivo de los bienes o capitales, supone una inadmisibles presunción *contra reo* de la concurrencia del elemento intelectual del dolo típico.

Como punto de partida consideramos acertada la doctrina contenida en la STS 57/2009, que rechaza la equiparación, sin más, de los supuestos de ignorancia

---

<sup>80</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 326; MUÑOZ CONDE, F./GARCÍA ARÁN, M., *Derecho Penal. Parte General*, op. cit., pág. 268. Vid. asimismo SSTS 234/2012, de 16 de marzo, 68/2011, de 15 de febrero, y 57/2009, de 2 de febrero.

<sup>81</sup> Vid. CASTRO MORENO, A., “Consideraciones críticas sobre la aplicación e interpretación del tipo subjetivo de los delitos de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 452.

<sup>82</sup> Implícitamente la conformación de un “novedoso” título de imputación se desprende de la propia jurisprudencia. Así, en la STS 131/2005, de 19 de enero, se afirma que para apreciar el dolo del autor “no se exige un dolo directo, bastando el eventual o incluso (...) es suficiente situarse en la posición de ignorancia deliberada”.

deliberada con el dolo eventual. A partir de una más profunda reflexión, la novedosa orientación jurisprudencial parte de la imposición de ciertas exigencias respecto a las situaciones que pueden considerarse como de verdadera ignorancia deliberada, para formular a continuación una equiparación valorativa de los referidos supuestos con el dolo eventual. Recordemos que dicha resolución, manifiestamente inspirada en criterios apuntados por RAGUÉS I VALLES en su destacada monografía, señala como verdaderas situaciones de ignorancia deliberada aquellas en las que concurren ciertas exigencias: la decisión de permanecer en condiciones de ignorancia con el propósito de evitar “riesgos inherentes a una eventual exigencia de responsabilidad criminal”, y la conciencia, o al menos sospecha, de que se va a realizar, con una u otra aportación, un acto inequívocamente ilícito, demostrando así el autor “una grave indiferencia (...) hacia los bienes jurídicos penalmente protegidos”. Sin embargo, a nuestro juicio, la equiparación valorativa de estos supuestos con el dolo eventual seguidamente propuesta en la Sentencia comentada no llega a convencer plenamente. La representación por parte del agente de que al realizar un acto sobre los fondos va a participar en un acto ilegal o de que los referidos fondos o bienes tienen un origen ilícito no colma las exigencias del tipo subjetivo. Han de ser radicalmente diferenciados los supuestos en los que el sujeto se representa la posibilidad de participar en un hecho ilícito, operando sobre fondos o bienes de cuyo origen recela, de aquellos otros en los que el agente tiene verdaderos motivos para sospechar que muy probablemente interviene en una actividad delictiva, manejando fondos que proceden de un hecho criminal concreto (dolo eventual). En los primeros supuestos, muy comunes en la práctica (las maniobras destinadas a reintroducir en el tráfico legal capitales fuera de control fiscal son tanto o más frecuentes que las que se emplean para incorporar al tráfico legal fondos de origen delictivo), en los que el sujeto no dispone de fundamentos para sospechar de la procedencia delictiva de los bienes que maneja, la asimilación valorativa automática del desconocimiento provocado con el dolo eventual implica presumir *contra reo* la concurrencia del tipo subjetivo. La sola sospecha de colaboración en la incorporación al tráfico legal de lo que comúnmente se conoce como “dinero negro” no sólo no es valorativamente equiparable con comportamientos doloso-eventuales, sino que no colma mínimamente las exigencias de tipicidad del delito doloso de blanqueo<sup>83</sup>. La

---

<sup>83</sup> Como recuerda BLANCO CORDERO, el tipo subjetivo del delito de blanqueo no impone un “conocimiento exacto de las circunstancias del delito que proceden los bienes”. Así, no se exige el conocimiento de los autores del hecho delictivo previo, del momento y lugar de su comisión, etc. Basta “con que el blanqueador conozca las circunstancias de las que se deriva la existencia de un delito previo, que ha de valorar como profano y llegar a

colocación en situación de desconocimiento provocado por parte del agente, habrá de ser valorada junto a las demás circunstancias o particularidades presentes en el caso concreto en orden a determinar si, en ese caso, indiciariamente puede deducirse la representación por parte de aquél de la alta probabilidad de operar sobre bienes de origen delictivo.

En definitiva, si se pretende acudir a un título de imputación que incorpora el conocimiento de determinados elementos típicos, dicho conocimiento ha de probarse, si quiera a través de la prueba de indicios. En el ámbito del delito que blanqueo, el hecho de que el sujeto se haya colocado voluntariamente en una situación de desconocimiento respecto al origen de los fondos con los que opera puede ser un indicio, de gran peso por cierto, para considerar probado el conocimiento, o la representación al menos, de la naturaleza delictiva de los fondos a través de la llamada prueba indirecta, siempre que concurren los requisitos que al respecto consolidada jurisprudencia viene exigiendo. Dicho indicio, relacionado con otros que apunten en la misma línea, podrá servir para inferir el efectivo conocimiento o representación, por parte del autor, respecto del origen delictivo de los bienes. Sin embargo, en los supuestos en los que ni siquiera a través de esa prueba indiciaria sea posible considerar acreditado el conocimiento -o al menos una elevada representación- del origen delictivo de los bienes, el desconocimiento provocado por el agente no será *per se* suficiente para fundamentar una condena a título de dolo eventual, habiéndose de valorar en ese caso si el referido desconocimiento trae causa en una actitud negligente que pueda calificarse como grave -conforme a criterios que estudiaremos en un apartado posterior-, en orden a considerar la imputación al sujeto de un delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave<sup>84</sup>.

---

la conclusión del origen delictivo de los bienes”. Sin embargo, “no es suficiente para el castigo por blanqueo doloso eventual con la representación de que el dinero provenía de un «negocio ilegal».” (*El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 719). En este sentido, ha advertido BACIGALUPO ZAPATER que “el Tribunal Supremo debe, todavía hoy, corregir -ya con menor frecuencia- a los tribunales inferiores, que, en ocasiones, utilizan una retórica propia de la presunción del dolo para referirse a la inexistencia en la causa de razones que permitieran pensar en la concurrencia de circunstancias excluyentes del dolo”. (“Problemas actuales del dolo”, *Homenaje al Profesor Dr. Gonzalo Rodríguez Mourullo*. Ed. Civitas, Madrid, 2005, pág. 65).

<sup>84</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 718.

### **5.3 LAS FINALIDADES DE ENCUBRIR, OCULTAR O AYUDAR A LAS QUE DEBE RESPONDER LA REALIZACIÓN DE “CUALQUIER OTRO ACTO”**

Ya hemos visto que el artículo 301.1 CP prevé como conducta típica, en su segundo inciso, la realización de cualquier acto *para* ocultar o encubrir el origen ilícito del bien, o ayudar a aquel que haya participado en el delito del cual procede el bien o los bienes a eludir las consecuencias jurídicas de su ilícito obrar. En este apartado veremos que, ausente cualquier mención de los medios comisivos<sup>85</sup>, la determinación en esta modalidad típica de la conducta punible depende exclusivamente de la concurrencia en el agente de determinado *ánimo o finalidad*<sup>86</sup>. La principal limitación a la amplitud de la genérica fórmula *realizar cualquier otro acto* va a proceder de las intenciones específicamente previstas en la descripción típica: por un lado, la ocultación o encubrimiento del origen delictivo de los bienes y, por otro, la ayuda a quien haya participado en la infracción penal previa a eludir sus consecuencias legales. Para colmar el tipo subjetivo de estas conductas, además del conocimiento de los elementos del tipo objetivo (realización de cualquier acto típico sobre un bien que proceda de la previa comisión de un delito), la voluntad del autor ha de ir dirigida a una de las finalidades antes referidas<sup>87</sup>.

Antes de continuar con el estudio de este elemento típico, es conveniente recordar que un sector doctrinal nada desdeñable vincula las especiales finalidades o intenciones a las que se refiere el segundo inciso del artículo 301.1 CP con los comportamientos expresamente mencionados en el primer inciso del precepto. Con ocasión del análisis del tipo objetivo<sup>88</sup>, se advirtió que para numerosos autores las finalidades de ocultar o encubrir el origen ilícito del bien que trata de legitimarse, o de ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, además de ir referidas a la realización de “cualquier

---

<sup>85</sup> Vid. VIDALES RODRÍGUEZ, C., *Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código penal de 1995*, op. cit., pág. 102.

<sup>86</sup> Vid. ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 343. La misma observación hace PALMA HERRERA, al afirmar el “importantísimo papel delimitador del ámbito de lo punible” que cumplen estos dos elementos subjetivos. (*Comentarios al Código Penal*, op. cit., pág. 704).

<sup>87</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 402.

<sup>88</sup> Vid. *supra* Capítulo III, apartado 3.2.1, págs. 217 y ss.



acto”, han de abarcar también a los actos de adquisición, posesión, utilización, conversión o transmisión de bienes. Para este sector doctrinal, el artículo 301.1 entrañaría una única conducta típica: la realización de cualquier acto sobre los bienes procedentes de un delito con fines de ocultación o encubrimiento de su ilícito origen o de ayuda al autor de la infracción a eludir las consecuencias de sus actos. Las conductas de adquisición, posesión, utilización, conversión o transmisión de bienes de ilícito origen -con conocimiento dicha procedencia ilícita- no colmarían, de este modo, la tipicidad del artículo 301.1 CP sin la concurrencia de las finalidades legalmente previstas. Su mención expresa tendría un carácter meramente ejemplificativo, constituyendo únicamente formas de alcanzar la ocultación, el encubrimiento o la ayuda, y a lo sumo su función se reduciría a brindar indicios sobre las características o la naturaleza de las conductas que podrían subsumirse en la modalidad consistente en la realización de “cualquier otro acto”<sup>89</sup>. De conformidad con esta exégesis doctrinal, el tipo subjetivo de todas las modalidades comisivas previstas en el artículo 301.1 CP comportaría una doble exigencia: por un lado, el conocimiento de la ilícita procedencia del bien sobre el que el agente actúa y, por otro, la concurrencia de una de las finalidades expresamente señaladas de ocultar, encubrir o ayudar<sup>90</sup>.

Como vimos, de acuerdo con la interpretación opuesta, también suscrita por un amplio sector de la doctrina y que aquí se ha defendido<sup>91</sup>, el artículo 301.1 CP comprende dos modalidades de conducta: por un lado, la adquisición, posesión, utilización, conversión o transmisión de bienes, conociendo su origen delictivo -sin que en ellas sea requisito ineludible la constatación de las finalidades de ocultar, encubrir o ayudar-; y por otro, la de realizar cualquier acto sobre los bienes de ilícito origen con la concurrencia de las referidas intenciones. La interpretación que del precepto hace la jurisprudencia -salvo en algunas Sentencias recientes- va en esta dirección, considerando que el artículo 301.1 CP tipifica en realidad diferentes comportamientos: por un lado, adquirir, convertir o transmitir bienes sabiendo que provienen de la realización de un delito; y por otro, realizar actos que procuren ocultar o encubrir ese origen, o ayudar a quien ha realizado la infracción o delito base a eludir las

---

<sup>89</sup> Vid. CARPIO DELGADO, J. del, *El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal*, op. cit., pág. 169.

<sup>90</sup> Vid. MARTOS NÚÑEZ, J. A., “Receptación y blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 209 y 210; GALLEGOS SOLER, J. I., *Comentarios al Código Penal. Reforma LO 5/2010*, op. cit., pág. 666.

<sup>91</sup> Vid. *supra* Capítulo III, apartado 3.2.1, págs. 212 y ss.

consecuencias de sus actos<sup>92</sup>. En cualquier caso, no se precisa con carácter general la concurrencia de ánimo de lucro propio o ajeno en ninguna de las modalidades comisivas<sup>93</sup> integradas en el artículo 301 CP, al no constituir un requisito típico, si bien en la práctica podrá constatar su presencia la gran mayoría de las veces.

Al igual que ocurre con el conocimiento de la procedencia delictiva del bien objeto de blanqueo, las finalidades de ocultar, encubrir o ayudar deben quedar acreditadas, y no meramente sospechadas o inducidas, tal y como dispone la Sala Segunda del Tribunal Supremo en su Sentencia 2207/2001, de 19 de noviembre. Para considerar acreditado este elemento típico, difícilmente verificable a través de prueba directa, suele acudir a la llamada prueba de indicios, cuya aplicación, como se dijo en el epígrafe anterior, debe en todo caso observar los requisitos jurisprudencialmente establecidos al efecto<sup>94</sup>.

En cuanto a la *naturaleza jurídica* de las finalidades o intenciones expresamente previstas en el artículo 301.1 CP, la doctrina no ha dado una respuesta consensuada. Para algunos autores, dichas finalidades constituyen un elemento subjetivo del tipo de injusto independiente del dolo<sup>95</sup>; el sector doctrinal mayoritario considera, por el contrario, que se trata de un elemento integrado en el dolo típico<sup>96</sup> referido a su

<sup>92</sup> Vid. SSTS 1012/2006, de 19 de octubre, y 1113/2004, de 9 de octubre, entre otras muchas.

<sup>93</sup> Vid. ABEL SOUTO, M., *El delito de blanqueo en el Código penal español*, op. cit., pág. 129; id., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., pág. 215; QUINTERO OLIVARES, G., *Comentarios a la Parte especial del Derecho penal*, op. cit., pág. 945; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 674; MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de Capitales”, 3ª ed., op. cit., págs. 495 y 496. En sentido contrario, vid. COBO DEL ROSAL, M./ZABALA LOPEZ-GOMEZ, C., *Blanqueo de capitales: abogados, procuradores y notarios, inversores bancarios y empresario*, op. cit., págs. 91 y ss.; ZARAGOZA AGUADO, J. A., “Artículo 301”, op. cit., pág. 1158; MARTÍNEZ-ARRIETA MÁRQUEZ DE PRADO, I., *El autoblanqueo. El delito fiscal como antecedente del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 29; ARIAS HOLGUÍN, D. P., *Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 283.

<sup>94</sup> Vid. *supra*, apartado 5.2.2 de este capítulo, págs. 434 y ss.

<sup>95</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Comentarios al Código Penal*, op. cit., págs. 694 y ss. El autor opina que los fines expresamente previstos no son sino “móviles, fines o motivos (...) que nada tienen que ver con el elemento volitivo del dolo”. En la misma línea interpretativa, vid. CARPIO DELGADO, J. del, *El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal*, op. cit., págs. 289 y ss.; VIDALES RODRÍGUEZ, C., *Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código penal de 1995*, op. cit., pág. 119; MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “La dimensión internacional del blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 239; LORENZO SALGADO, J. M., “El tipo agravado de blanqueo cuando los bienes tengan su origen en el delito de tráfico de drogas”, op. cit., pág. 225.

<sup>96</sup> Vid. PÉREZ MANZANO, M., “El tipo subjetivo en los delitos de receptación y blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 240; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 671 y 672; ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 230; BAJO FERNÁNDEZ, M./BACIGALUPO SAGESSE, S., “Blanqueo de capitales”, 2ª ed., op. cit., pág. 737; MANZANARES SAMANIEGO, J. L., *Código penal (adaptado a la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de julio). Comentarios y jurisprudencia*, op. cit., pág. 726. Hemos de referirnos por último a la postura mantenida por GÓMEZ INIESTA, que en la doctrina ha contado con escasa acogida, y que considera que los específicos propósitos previstos en el tipo no constituyen una finalidad, sino que describen “la índole de la acción, esto es, que debe

elemento volitivo<sup>97</sup>. A favor de esta última opción se ha manifestado CALDERÓN CEREZO, para quien esta “intención complementaria (...) opera como verdadero elemento subjetivo del tipo (...) porque indica no el porqué del obrar del sujeto sino el para qué”<sup>98</sup>. A nuestro juicio, si bien estas finalidades coinciden con el objeto de la voluntad del dolo<sup>99</sup>, no lo agotan, sino que lo refuerzan. Si el dolo ha de abarcar, como hemos dicho, el conocimiento sobre la realización de los elementos objetivos del tipo (conocer que se realiza alguna de las conductas típicas sobre un bien, que éste procede de la previa comisión de un hecho delictivo, y que con su actuación el agente supera el riesgo jurídicamente tolerado para el bien jurídico), entendemos que, en la modalidad típica de la realización de cualquier otro acto, las finalidades de ocultar, encubrir o ayudar constituyen un específico elemento subjetivo que ha de concurrir junto al elemento intelectual del dolo típico. En definitiva, en aquellos casos en los que el comportamiento del agente no consista en la adquisición, posesión, utilización, conversión o transmisión de los bienes de origen delictivo, el propósito del agente habrá de abarcar necesariamente el ánimo de ocultar, encubrir o ayudar. La no verificación de dicho elemento tendencial en esta modalidad comisiva determinará la atipicidad de la conducta, aunque ésta haya creado una ocasión de riesgo penalmente relevante para el bien jurídico.

Se ha discutido en el seno de la doctrina si las inespecíficas conductas orientadas a los fines típicamente previstos deben estar dotadas en todo caso de un dolo reforzado (de primer o segundo grado), o basta con la concurrencia del dolo eventual. Desde un sector doctrinal mayoritario<sup>100</sup> se afirma, creemos que de manera acertada, que la

---

ser objetivamente adecuada para ocultar o encubrir; por lo tanto, es independiente el propósito del autor si la acción es objetivamente adecuada para la ocultación o encubrimiento, lo cual no quiere decir que el autor no tenga otras intenciones, las altruistas, las de lucro, etc.”. (*El delito de blanqueo de capitales en Derecho Español*, op. cit., pág. 51). Acertadamente ha criticado GÓMEZ BENÍTEZ esta traslación de los propósitos expresamente previstos a la vertiente objetiva, considerando que el argumento “es incompatible con el significado de la preposición -fin o término a que se encamina una acción- y, por tanto, con el principio de legalidad.” (“Reflexiones técnicas y de política criminal sobre el delito de blanqueo de bienes”, op. cit., págs. 12 y 13, nota a pie de página nº 12 *in fine*).

<sup>97</sup> Vid. PÉREZ MANZANO, M., “El tipo subjetivo en los delitos de receptación y blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 240; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 671.

<sup>98</sup> Vid. CALDERÓN CEREZO, A., *Comentarios al Código penal*, vol. 3, op. cit., pág. 2300.

<sup>99</sup> Vid. PÉREZ MANZANO, M., “El tipo subjetivo en los delitos de receptación y blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 240.

<sup>100</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 584 y 585; ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 272; PÉREZ MANZANO, M., “El tipo subjetivo en los delitos de receptación y blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 240; CALDERÓN CEREZO, A., *Comentarios al Código penal*, vol. 3, op. cit., pág. 2300; MANZANARES SAMANIEGO, J. L., *Código penal (adaptado a la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de julio). Comentarios y jurisprudencia*, op. cit., pág.

referencia expresa a la intención del autor impone un dolo directo de primer grado. Quedan por tanto excluidos de esta modalidad típica el dolo de segundo grado y el eventual<sup>101</sup>, toda vez que el propósito perseguido con la conducta indeterminada “realización de cualquier acto” ha de coincidir precisamente con las finalidades expresamente previstas en el precepto. BLANCO CORDERO ha denunciado oportunamente la laguna de punibilidad que semejante interpretación implicaría para estas dos últimas modalidades dolosas<sup>102</sup>. Solventa el monografista esta situación reconduciendo los supuestos de dolo de segundo grado y eventual al artículo 301.2 CP, cuya fórmula (“a sabiendas”), a su juicio menos exigente que la del número anterior, no excluiría ninguna modalidad de dolo<sup>103</sup>. Parece que, en efecto, la redacción con la que el artículo 301.2 describe la modalidad típica que incorpora favorecería la admisión de todas las formas de dolo<sup>104</sup>, si bien ya afirmamos en otra parte de este trabajo<sup>105</sup> que cada una de las modalidades típicas confrontadas poseen tanto un contenido y una naturaleza distintas como unas exigencias diferenciadas. Ha de tenerse en cuenta que la solución propuesta por BLANCO únicamente tendría cabida en aquellos casos en los que la finalidad del comportamiento consista en ocultar o encubrir la ilicitud del bien, pero no en aquellos otros en los que la conducta esté dirigida a ayudar al autor o partícipe a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos (supuesto no contemplado en el número 2 del artículo 301 CP). Pero el motivo que nos conduce a rechazar esta solución es la diferente configuración de las dos modalidades comisivas comparadas: la realización de cualquier acto con las finalidades legalmente previstas se configura como un delito de resultado cortado, cuya consumación precisa únicamente la verificación de la específica intencionalidad en el sujeto. Por el contrario, la modalidad contenida en el artículo

---

726; ARIAS HOLGUÍN, D. P., *Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 331.

<sup>101</sup> Ibidem. Otros autores, desde una perspectiva menos exigente, únicamente han excluido de manera expresa el dolo eventual, admitiendo implícitamente el dolo de segundo grado. (Vid. HUERTA TOCILDO, S., “Aproximación crítica a la nueva regulación del delito de receptación y otras conductas afines”, op. cit., pág. 389).

<sup>102</sup> BLANCO CORDERO admite en estas modalidades típicas diferenciadas por su carácter tendencial el dolo de segundo grado, si bien rechaza expresamente el dolo eventual. (*El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 673).

<sup>103</sup> Ibidem. En este mismo sentido, vid. PÉREZ MANZANO, M., “El tipo subjetivo en los delitos de receptación y blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 240.

<sup>104</sup> En opinión de ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, la diferencia entre las expresiones ocultar o encubrir el origen ilícito y “realizar cualquier otro acto para ocultar o encubrir el origen reside en el elemento de volitivo del dolo, pues aquí no se concreta, siendo posible el dolo directo de segundo grado y el dolo eventual.” (*El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 272). En sentido similar, vid. MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de Capitales”, 3ª ed., op. cit., págs. 495 y 496.

<sup>105</sup> Vid. *supra*, capítulo III, apartado 3.3, págs. 267 y ss.

301.2 se estructura como un tipo de resultado, de tal modo que la presencia de las finalidades previstas no colmaría el tipo penal.

Reiteramos que, a nuestro juicio, los especiales elementos subjetivos que integran la específica modalidad comisiva objeto de este análisis exigen la presencia del dolo directo de primer grado. La realización de “cualquier acto” *dirigido a* ocultar o encubrir el origen ilícito del bien, o a ayudar al autor o partícipe en el delito precedente a eludir las consecuencias jurídicas de su ilícito obrar, implica en todo caso que el agente actúe movido precisamente por alguna de las finalidades particularmente previstas en el tipo penal. Por ello, únicamente el dolo directo de primer grado permite colmar la tipicidad subjetiva en estos casos, descartándose la posibilidad de admitir aquí las modalidades de dolo directo de segundo grado y de dolo eventual. En cualquier caso, la realización de cualquier acto dirigido a las finalidades descritas en el precepto es incompatible con la modalidad imprudente de blanqueo, como veremos en el último epígrafe de este capítulo.

## **5.4 CONCLUSIONES Y TOMA DE POSICIÓN**

Finalizado el análisis de los elementos típicos de carácter subjetivo que conforman el delito doloso de blanqueo de capitales, y antes de pasar a estudiar la problemática del error, parece oportuno hacer una breve recapitulación sobre la forma en que a nuestro juicio han de articularse, desde la perspectiva del tipo subjetivo, las diferentes modalidades comisivas que integran el tipo doloso de blanqueo. En primer lugar, tanto en las formas comisivas que integran el número 1 del artículo 301 CP como las previstas en el número 2 del precepto, el sujeto activo ha de conocer (*elemento intelectual del dolo*) todos los elementos objetivos del tipo (especialmente que realiza la conducta típica y que los bienes objeto de aquella tienen su origen en un delito -objeto material del blanqueo-), y ha de actuar conforme a ese conocimiento (*elemento volitivo del dolo*). Cuando la conducta consista en realizar cualquier acto, será preciso, además, verificar la presencia, *como elemento subjetivo adicional del tipo*, de la finalidad de ocultar o encubrir el origen delictivo del bien, o de ayudar al autor o partícipe en el delito precedente a eludir las consecuencias de aquél. No será necesario para colmar la tipicidad que concurra dicho elemento intencional en las conductas expresamente

previstas en el artículo 301.1 (actos de adquisición, posesión, utilización, conversión y transmisión de los bienes).

Respecto a la modalidad comisiva consistente en la realización de cualquier acto con el específico propósito de ocultar, encubrir o ayudar, el refuerzo impuesto por la exigencia típica de un adicional elemento volitivo o intencional impide admitir otra forma de dolo que no sea el dolo directo de primer grado. En cambio, en resto de supuestos contenidos en el artículo 301.1 CP (actos de adquisición, posesión, utilización, conversión y transmisión de los bienes), así como en las conductas previstas en el artículo 301.2, tiene cabida, además del dolo directo de primer grado, el dolo directo de segundo grado y el dolo eventual.

## **5.5. EL ERROR EN EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALS**

### **5.5.1. INTRODUCCIÓN. FORMAS DE ERROR**

El concepto penal del error hace referencia a una representación falsa de la realidad, ya sea por ignorancia o por un conocimiento equivocado de aquélla<sup>106</sup>. La doctrina ha distinguido fundamentalmente dos modalidades de error: el error de tipo y el error de prohibición<sup>107</sup>. El *error de tipo* va referido a la falta de conocimiento o al conocimiento defectuoso de algún elemento del tipo objetivo en el autor<sup>108</sup>, constituyendo, en palabras de BLANCO CORDERO, una especie de cara negativa o inversa

---

<sup>106</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 286.

<sup>107</sup> Distinción que supera la tradicional diferenciación entre error de hecho y error de derecho. (Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 331; PÉREZ MANZANO, M., “El tipo subjetivo en los delitos de receptación y blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 242; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, op. cit., 3ª ed., pág. 762). Sobre la evolución de la teoría del error, vid. ampliamente PÉREZ MANZANO, M., “El tipo subjetivo en los delitos de receptación y blanqueo de dinero”, op. cit., págs. 243 y ss.

<sup>108</sup> El contenido del error de tipo está integrado, por tanto, “bien por una representación falsa, bien por una falta de representación del los elementos del tipo objetivo en el autor”. (Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, op. cit., 3ª ed., pág. 762). Se discute si el error de tipo afecta a todos los elementos del tipo objetivo, ya sean de naturaleza descriptiva o normativa. MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN consideran el error sobre los elementos normativos como error de tipo, y entienden que “basta con que el autor tenga una valoración en la esfera del profano para imputar el conocimiento del elemento normativo a título de dolo.” (*Derecho Penal. Parte General*, op. cit., pág. 275). El mismo criterio maneja MIR PUIG, quien afirma que el error sobre un elemento normativo del tipo, “aunque sea de derecho, deberá considerarse error sobre un hecho [constitutivo] de la infracción penal”. (*Derecho Penal. Parte General*, 9ª ed., op. cit., pág. 563). BLANCO CORDERO, matiza esta idea, al distinguir entre el error relativo a la existencia de elementos normativos y el error que afecta a su valoración jurídica. Si para el autor el primero conforma un error del tipo, considera error de prohibición aquel que recae “sobre la concreta valoración o subsunción jurídica, siempre que implique una creencia errónea de estar obrando lícitamente”. (*El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed. op. cit., págs. 763 y 764).

del dolo<sup>109</sup>. Por el contrario, el *error de prohibición* (o sobre la antijuridicidad) excluye la culpabilidad por falta de conciencia de la antijuridicidad: éste acontece cuando “el sujeto activo advierte correctamente la situación descrita por el tipo, pero desconoce que su comportamiento se encuentra jurídicamente prohibido”<sup>110</sup>. También se suele considerar error de prohibición aquel que recae sobre la existencia o límites de una causa de justificación<sup>111</sup> (el llamado error indirecto de prohibición)<sup>112</sup>.

Tras la entrada en vigor del Código de 1995, la doctrina se planteó si la novedosa nomenclatura con la que la nueva Ley penal se refería al error en su artículo 14 permitía mantener la tradicional clasificación a la que nos hemos referido. Actualmente, la doctrina entiende prácticamente de forma unánime que el error sobre “un hecho constitutivo de infracción penal” al que el artículo 14.1 CP se refiere corresponde al error de tipo, y el error sobre la “ilicitud del hecho”, previsto en el 14.3, hace referencia al error de prohibición<sup>113</sup>.

Respecto a las consecuencias jurídico-penales del error, hemos de distinguir de nuevo dos variantes en función de la modalidad de error de que se trate. El *error de tipo* excluye el dolo<sup>114</sup>. Si el error es invencible<sup>115</sup>, excluye la responsabilidad penal; si, por el contrario, se considera vencible, atendidas las circunstancias del hecho y las personales del autor, la infracción se castigará a título de imprudencia, en la medida en que el delito de que se trate admita la forma culposa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 CP. Por su parte, el *error de prohibición* no excluye el dolo, sino la culpabilidad por falta de conciencia de la antijuridicidad. Si es invencible, excluye la responsabilidad criminal; y si es vencible, atenuará la pena (en uno o dos grados, de conformidad con el artículo 14.3 CP).

<sup>109</sup> Ibidem. Vid., en términos similares, FAKHOURI GÓMEZ, Y., *Teoría del dolo vs. teoría de la culpabilidad. Un modelo para afrontar la problemática del error en Derecho penal*, InDret Penal, nº 4, octubre 2009, pág. 5, disponible en el enlace <http://www.raco.cat/index.php/InDret/article/download/141389/192900>.

<sup>110</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, op. cit., 3ª ed., pág. 76. Es decir, hace referencia a “la ignorancia de que la realización de esa descripción típica está penada por la ley, o la suposición de estar justificada.” (Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 331).

<sup>111</sup> Para MIR PUIG, el error sobre los presupuestos de una causa de justificación ha de ser tratado como un error de tipo, pues comparte “su misma significación”: afecta “como el error de tipo al supuesto de hecho prohibido por la norma y no a ésta”. (*Derecho Penal. Parte General*, 4ª ed., op. cit., pág. 252).

<sup>112</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 763.

<sup>113</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 286; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 763.

<sup>114</sup> Vid. MUÑOZ CONDE, F./GARCÍA ARÁN, M., *Derecho Penal. Parte General*, op. cit., pág. 275.

<sup>115</sup> Será invencible aquel error que el autor no hubiera superado ni empleando la diligencia debida; será vencible cuando el error se deba a una negligencia o falta de diligencia; aquél que se podría haber evitado si se hubiera observado el debido cuidado. (Vid. MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, 9ª ed., op. cit., págs. 279 y 280).

Una vez hecha esta breve exposición sobre la cuestión del error en general, pasemos a analizar los distintos supuestos de error, de tipo y de prohibición, que pueden acontecer en el marco del delito de blanqueo de capitales, y la manera en que cada uno de ellos afecta a los distintos elementos del delito.

### **5.5.2. ERROR RESPECTO AL ORIGEN DELICTIVO DEL BIEN**

Antes de ocuparnos de los supuestos concretos de error que pueden presentarse respecto al origen delictivo de un bien, se ha de recordar que este último constituye un *elemento objetivo del tipo de carácter normativo*<sup>116</sup>. Doctrinalmente se ha discutido si el error que recae sobre el origen delictivo de un bien ha de recibir el tratamiento del error de tipo o debe ser considerado un supuesto de error de prohibición. A juicio de PÉREZ MANZANO, cualquier error referido a los elementos normativos del tipo no habrá de tratarse automáticamente como un supuesto de error de tipo o error de prohibición<sup>117</sup>. Tanto el desconocimiento del supuesto de hecho que sirve de base a los elementos normativos como su significado social “conforme a una valoración paralela en la esfera del profano” deberán considerarse como supuestos de error excluyente del dolo. Por su parte, “el desconocimiento de la subsunción jurídica estricta” será penalmente irrelevante siempre que el autor crea que no obra antijurídicamente<sup>118</sup>. En definitiva, de acuerdo con los criterios de PÉREZ MANZANO, a efectos de error de tipo, no hay motivo para diferenciar entre el desconocimiento de las circunstancias fácticas y la ignorancia normativa, esto es, entre el desconocimiento del soporte fáctico del elemento normativo y el error sobre la valoración de aquél: tanto el error en el conocimiento de las circunstancias fácticas como el error en su valoración jurídica merecen el mismo tratamiento penal<sup>119</sup>.

Sin embargo, tradicionalmente de forma mayoritaria se ha considerado oportuna la diferenciación entre los supuestos de conocimiento erróneo sobre las circunstancias fácticas del hecho del que proceden los bienes y el error que recae sobre su valoración

---

<sup>116</sup> Vid. *supra*, capítulo IV, apartado 4.3.2.2, pág. 393.

<sup>117</sup> Vid. PÉREZ MANZANO, M., “El tipo subjetivo en los delitos de receptación y blanqueo de dinero”, op. cit., pág. 246.

<sup>118</sup> Ibidem, págs. 248 y 249.

<sup>119</sup> Ibidem, pág. 244.



jurídica<sup>120</sup>, valoración que habría de referirse en cualquier caso a la tipicidad del hecho previo y a su antijuridicidad, y no al desconocimiento o el error sobre la culpabilidad o la punibilidad de aquél<sup>121</sup>. Esta distinción importa a efectos de determinar qué tratamiento jurídico-penal merece el error referido a cada uno de estos aspectos: si bien puede asumirse sin discusión que aquel error que recae sobre el contenido del soporte fáctico del supuesto de hecho del que proceden los bienes ha de ser considerado error de tipo -pues afecta al dolo típico-<sup>122</sup>, planteará mayores controversias la calificación del error referido a la valoración jurídica de dichos elementos (el conocimiento equivocado, en palabras de FABIÁN CAPARRÓS, “*respecto al juicio de valor per se*, es decir, respecto del carácter delictivo del comportamiento previo”<sup>123</sup>). En este caso, la norma prevista en el tipo constituye a su vez una prohibición de carácter penal, pero ello no ha de conducir a considerar que el error referido a aquélla afecta al carácter antijurídico del hecho -lo que derivaría en el error de prohibición-. FABIÁN afirma, acertadamente, que estos casos deben ser considerados también como supuestos de error de tipo, pues “si optáramos por la equiparación de este género de supuestos a aquéllos otros en los que la ignorancia versa sobre la ilicitud o ilicitud de la conducta que se está enjuiciando -y no sobre alguno o algunos de los elementos integrantes de la conducta típica-, desembocaríamos irremisiblemente en una renuncia tácita a la diferenciación entre error de tipo y error de prohibición, retornando con ello al clásico criterio que distingue entre *error facti* y *error iuris*”<sup>124</sup>.

También, en este sentido, BLANCO CORDERO rechaza el tratamiento diferenciado del error referido a las circunstancias fácticas del hecho del que proceden los bienes y el error que recae sobre su valoración jurídica: el sujeto activo hace una única valoración, en una unidad de acto, referida tanto a los hechos como a su valoración: “una única valoración en la esfera del profano que le permita conocer la calificación jurídica, no

---

<sup>120</sup> Y ello porque, de conformidad con el artículo 14 CP, ha de distinguirse entre “el error «sobre un hecho constitutivo de la infracción penal» y el error «sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal».” (Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 287).

<sup>121</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 765.

<sup>122</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 333.

<sup>123</sup> Ibidem. La cuestión no es sencilla, pues como pone de manifiesto FABIÁN CAPARRÓS, muchas veces la descripción típica contiene elementos referidos a situaciones ya prohibidas “en sí mismas por el ordenamiento, y aun por el propio precepto en que se encuentran insertas”. El carácter delictivo de esas conductas precedentes “por sí solo, no prejuzga inevitablemente el carácter delictivo del lavado de fondos, de tal manera que su constatación implique, al mismo tiempo, la inequívoca antijuricidad penal del acto de reciclaje. Más bien se limita a determinar la cualidad de un determinado tipo penal -es decir, la procedencia penalmente antijurídica de los bienes a reciclar-”. (Ibidem, pág. 332).

<sup>124</sup> Ibidem, pág. 334.

exacta, pero sí aproximada.”<sup>125</sup> Es por ello que, de acuerdo con la tesis que el autor defiende y que aquí asumimos, cualquier error sobre un elemento típico, ya sea de naturaleza descriptiva o normativa, ha de ser tratado como un error de tipo que excluye el dolo: si el error es invencible, la conducta será atípica por desconocimiento de un elemento del tipo; y si se trata de un error vencible, será de aplicación el tipo imprudente de blanqueo del artículo 301.3 siempre que la imprudencia se considere como grave<sup>126</sup>.

Caracterizado pues, conforme a esta tesis mayoritaria<sup>127</sup>, como error de tipo aquel que vaya referido al origen delictivo del bien, pasemos a estudiar los diferentes supuestos que se pueden plantear en torno a la errónea representación de este elemento normativo, distinguiendo en qué casos el error ha de considerarse relevante y en cuáles no.

1.- La creencia de que los bienes no tienen una procedencia delictiva, cuando realmente tienen su origen en un delito, determina, sin ningún género de duda, un error de tipo relevante. Toda vez que, al margen de los círculos profesionales o de ciertos ámbitos de actividad, es creencia extendida que el dinero negro es aquel que se sitúa fuera de los circuitos legales -sin hacer distinción entre dinero “no declarado” y aquél otro que es fruto de operaciones delictivas- en la práctica serán frecuentes los supuestos en los que se realicen conductas descritas en el tipo penal en las que el agente desconoce el origen delictivo de los bienes, operando en la creencia errónea de que aquéllos sólo están fuera de control fiscal. Dicho error, excluirá la responsabilidad penal cuando sea invencible, y determinará la apreciación del delito de blanqueo imprudente en aquellos supuestos de error vencible en los que la imprudencia se haya de calificar como grave<sup>128</sup>, de acuerdo con los criterios que estudiaremos en el apartado siguiente de este capítulo.

2.- El error en el delito del cual provienen los bienes o *error de subsunción* -supuesto en que el sujeto activo cree que el bien tiene origen en determinado delito

<sup>125</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 766.

<sup>126</sup> Ibidem, pág. 767.

<sup>127</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 334; MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de Capitales”, 3ª ed., op. cit., pág. 496; GÓMEZ BENÍTEZ, J. M., “Reflexiones técnicas y de política criminal sobre el delito de blanqueo de bienes”, op. cit., pág. 25; ALFONSO LASO, D. de, *El abogado ante la comisión imprudente de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 1965.

<sup>128</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 769.

cuando realmente lo tiene en un delito distinto-, puede presentar mayores dificultades. Salvo en aquellos supuestos en los que el delito previo sea relativo al tráfico de drogas, alguno de los delitos comprendidos en los Capítulos V, VI, VII, VIII, IX y X del Título XIX o de los previstos en el Capítulo I del Título XVI (que determina la aplicación de los subtipos agravados de los párrafos 2º y 3º del artículo 301.1 CP), el error habrá de considerarse irrelevante, porque, como afirma ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, “el legislador no exige el conocimiento del delito preciso del que provienen los bienes, sino que se refiere a las categorías de delitos en base a grupos”<sup>129</sup>. Por el contrario, si el sujeto activo piensa que el bien tiene origen en un delito pero desconoce o yerra sobre su pertenencia a los tipos penales que determinan la aplicación del subtipo agravado de blanqueo, será de aplicación el tipo básico, y no el agravado. Y ello con independencia de que su error sea vencible o invencible, pues el artículo 14.2 CP dispone, sin distinguir entre una y otra clase de error, que aquel que recaiga “sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una circunstancia agravante, impedirá su apreciación” en todo caso<sup>130</sup>.

3.- El error respecto a la relación entre el objeto y el delito previo (aquel referido a las sucesivas transformaciones o conversiones intermedias que haya sufrido el bien respecto al producto delictivo originario) será generalmente considerado como

---

<sup>129</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 289. En el mismo sentido, vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 770. Afirma ARÁNGUEZ que esta modalidad de error sería equiparable a un *error in personam* en un delito de homicidio. No obstante, el autor entiende que en determinados supuestos el error de subsunción puede llegar a ser relevante, en cuyo caso habría de ser tratado como un error de prohibición. Pone el ejemplo del banquero suizo que acepta una fuerte suma producto del impago de impuestos por un empresario español. En el caso de que el banquero conozca el soporte fáctico de la evasión fiscal (el mismo impago) -no incurriendo en error de tipo-, pero yerre al considerar la evasión fiscal como ilícito administrativo y no como delito, incurrirá en un error de prohibición. (*El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 289). BLANCO CORDERO entiende por el contrario que en un supuesto como el planteado “no sería correcto plantear directamente la concurrencia de un error de prohibición” sin antes ver si estamos ante un error de tipo que excluye el dolo. Para el autor, este error, referido a un elemento normativo (exigencia de que el bien proceda de un delito), entra dentro de la categoría de error de tipo que excluye el dolo. Lo importante es determinar si es vencible o no lo es: en caso de considerar, en el supuesto concreto, que el error es invencible, la conducta será atípica (sin necesidad de entrar a valorar si el sujeto ha creído actuar lícita o ilícitamente). Si, por el contrario, el error se considera vencible, “el comportamiento será típico de un delito de blanqueo de capitales imprudente. Entonces se podrá pasar a analizar si se plantean problemas de error de prohibición, en caso de que el sujeto actúe además en la creencia de obrar lícitamente.” (*El Delito de Blanqueo de Capitales*, 2ª ed., op. cit., págs. 429 y 430. En sentido similar, id., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 768 y 769).

<sup>130</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 293; MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de Capitales”, 3ª ed., op. cit., pág. 496. En las circunstancias descritas, como decimos, será de aplicación el tipo básico de blanqueo, y no el subtipo agravado. Cuando se dé la situación opuesta, es decir, aquella en la que el agente crea estar blanqueando bienes procedentes de alguno de los delitos que determinan la aplicación del subtipo agravado, pero en realidad opere sobre bienes procedentes de cualquier otro delito, será aplicable también el tipo básico de blanqueo, dado que es este el delito que el sujeto efectivamente lleva a cabo, y “consume íntegramente el injusto realmente cometido.” (Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 770 y 771).

irrelevante<sup>131</sup>. No hay motivo para considerar trascendente, a efectos del conocimiento del origen delictivo del bien, que el sujeto sepa si el bien ha sido objeto de alguna transformación o de varias, y, en su caso, en qué han consistido éstas, siempre y cuando tenga certeza de que aquél procede de un hecho delictivo.

### **5.5.2. ERROR DE PROHIBICIÓN EN EL DELITO DE BLANQUEO**

Diferente tratamiento se dispensa al desconocimiento del carácter prohibido -no permitido- de la propia conducta blanqueadora llevada a cabo por el sujeto activo. En estos casos, el conocimiento equivocado sobre la ilicitud de la propia conducta legitimadora recibirá el tratamiento que el artículo 14.3 CP prevé para el error de prohibición por faltar la conciencia de antijuridicidad respecto al delito de blanqueo que realiza el sujeto<sup>132</sup>. Respecto al alcance del desconocimiento de la antijuridicidad que da lugar al error de prohibición, la doctrina se plantea si basta para su apreciación que el autor desconozca de manera general que su conducta es contraria al Ordenamiento jurídico o si es necesario que el sujeto desconozca la “antijuridicidad penal” de su comportamiento. Como advierte BLANCO CORDERO, no serán pocas las ocasiones en las que el sujeto sepa que su conducta es antijurídica por contravenir la normativa administrativa, pero actúe en la creencia de que no posee relevancia penal. En estos casos, la doctrina mayoritaria acertadamente considera que basta que concurra en el blanqueador una conciencia general de antijuridicidad (que conozca que actúa de forma contraria al Ordenamiento jurídico) para excluir la apreciación del error de prohibición y afirmar la relevancia penal de su conducta<sup>133</sup>.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.3 CP, el error de prohibición invencible excluye la responsabilidad criminal, y el error vencible determinará la aplicación de la pena inferior en uno o dos grados. Para decidir si el error ha de considerarse vencible o invencible, la jurisprudencia acude habitualmente al criterio de la valoración en la esfera del profano. De acuerdo con las SSTs 163/2005, de 10 de febrero, y 1287/2003, de 10 de octubre, “para sancionar un acto delictivo el conocimiento de la ilicitud del hecho no tiene que ser preciso, en el sentido de conocer concretamente la gravedad con la que el comportamiento realizado es sancionado por la

---

<sup>131</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 294.

<sup>132</sup> Ibidem, pág. 295.

<sup>133</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 772 y 773.

Ley. Los ciudadanos no son ordinariamente expertos en las normas jurídicas sino legos en esta materia por lo que lo que se requiere para la punición de una conducta antijurídica es lo que se ha denominado doctrinalmente el conocimiento paralelo en la esfera del profano sobre la ilicitud de la conducta que se realiza”. De este modo, “no basta con alegar la existencia del error sino que éste ha de quedar suficientemente acreditado, empleándose para ello criterios que se refieren básicamente a la posibilidad del autor de informarse sobre el Derecho, de forma que cuando dicha información en todo caso se presenta como de fácil acceso no se trata ya en rigor de que el error sea vencible o invencible sino de cuestionar su propia existencia.” (STS 755/2003, de 20 de mayo).

También se ha discutido en el seno de la doctrina qué tratamiento merecen los supuestos denominados de “doble error de prohibición”. En estos casos, el sujeto actúa creyendo erróneamente que no realiza el tipo de blanqueo, pero persuadido, a su vez erróneamente, de realizar otro delito diferente. Esta situación se da, por ejemplo, cuando el sujeto considera que su conducta es constitutiva de un delito contra la Hacienda Pública, que realmente no se perfecciona por no superarse el límite cuantitativo requerido por el tipo, y sin embargo realiza una conducta típica de blanqueo. Para BLANCO CORDERO, en estos casos habrá de apreciarse un error de prohibición, por estar ausente el conocimiento de la antijuridicidad del tipo de blanqueo<sup>134</sup>. Sin embargo, consideramos que para excluir la apreciación del error de prohibición basta con que el sujeto posea una consciencia general de antijuridicidad, sin que sea preciso que conozca la gravedad o el título bajo el cual el comportamiento que ha realizado es sancionado por la Ley. La estimación en estos casos del error de prohibición dependerá de las circunstancias concretas del caso (el delito que el sujeto haya creído haber cometido, su accesibilidad a la norma, etc.), si bien, en el supuesto de ser apreciado, debería recibir el tratamiento de error de prohibición vencible, tal y como ha señalado ARÁNGUEZ SÁNCHEZ<sup>135</sup>.

---

<sup>134</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 774.

<sup>135</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 295.

### **5.5.3. ERROR SOBRE LAS CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN**

Por último, la doctrina se ha planteado si el error respecto a la concurrencia de una causa de justificación supone un error de tipo o un error de prohibición. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ califica estos supuestos como error de prohibición, que “difícilmente podrá ser considerado como invencible”<sup>136</sup>. BLANCO CORDERO también considera este supuesto como error de prohibición, si bien matiza que “el error sobre los elementos inesenciales de la causa de justificación, cuando concurren los esenciales, ha de ser subsumido en la causa de justificación incompleta del art. 21.1 CP, con lo que se atenúa la pena pero no queda excluido el dolo, y cuando verse sobre los elementos esenciales de la causa de justificación, en el art. 14 núm. 3 CP”<sup>137</sup>. A nuestro juicio, estos supuestos han de recibir un tratamiento unitario como error de prohibición, toda vez que, ya recaiga el error sobre un elemento esencial o insencial de la causa de justificación, el sujeto cree actuar de manera justificada, entendiendo que obra sin transgredir el Ordenamiento jurídico, si bien generalmente el error habrá de ser considerado vencible.

### **5.5.4. BREVE SÍNTESIS**

Tras una sucinta aproximación al concepto general de error y a las diversas formas en que puede manifestarse, puede admitirse que cualquier *error sobre un elemento típico*, ya sea de naturaleza descriptiva o normativa, ha de ser tratado como un error de tipo que excluye el dolo: si el error es invencible, la conducta será atípica por desconocimiento de un elemento del tipo; y si se trata de un error vencible, será de aplicación el tipo imprudente de blanqueo del artículo 301.3 CP, siempre que la imprudencia pueda considerarse grave. En materia de blanqueo, se presentará con mayor frecuencia el error respecto al origen delictivo del bien. La creencia errónea de que los bienes tienen origen legal ha de considerarse un error de tipo relevante.

El *error de subsunción* (aquel referido al delito del cual provienen los bienes) es irrelevante, salvo en aquellos supuestos en los que el sujeto activo sepa que el bien tiene origen en un delito pero desconozca que realmente provienen de uno de los delitos comprendidos en los Capítulos V, VI, VII, VIII, IX y X del Título XIX o de los

---

<sup>136</sup> Ibidem, págs. 295 y 296.

<sup>137</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 778.

previstos en el Capítulo I del Título XVI (supuestos que habrían de subsumirse en los subtipos agravados de los párrafos 2º y 3º del artículo 301.1 CP). En estos casos, el error de subsunción determinará la aplicación el tipo básico de blanqueo, y no el subtipo agravado. Y ello con independencia de que el error se considere vencible o invencible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 CP. El error respecto a la relación entre el objeto y el delito previo (aquel referido a las sucesivas transformaciones o conversiones intermedias que haya sufrido el bien respecto al producto delictivo originario) es generalmente considerado como irrelevante.

El *error de prohibición*, aquél derivado del desconocimiento del carácter delictivo de la propia conducta blanqueadora (el sujeto desconoce o yerra sobre la antijuridicidad propia del delito de blanqueo) o por creencia errónea de concurrencia de una causa de justificación, suele ser considerado, con carácter general, como vencible. Para resolver sobre la vencibilidad del error, se ha de acudir -como hace la jurisprudencia normalmente- al criterio de la valoración en la esfera del profano. De acuerdo con los criterios generales previstos en el artículo 14.3 CP, el error de prohibición invencible excluye la responsabilidad criminal, y el error vencible determinará la aplicación de la pena inferior en uno o dos grados.

## **5.6. EL TIPO IMPRUDENTE DE BLANQUEO DE CAPITALES. EL ARTÍCULO 301.3 CP**

### **5.6.1. INTRODUCCIÓN. OPORTUNIDAD DE LA INCRIMINACIÓN DEL BLANQUEO IMPRUDENTE Y ÁMBITO DE EXTENSIÓN**

El artículo 301.3 CP positiviza el delito de blanqueo de capitales por imprudencia. El precepto, lejos de describir el contenido de la conducta imprudente, se limita a remitir a las modalidades comisivas previstas en los dos números anteriores, que contienen el tipo doloso de blanqueo, pero “realizadas por imprudencia grave”. La doctrina aparece dividida en cuanto a la conveniencia de incriminar el blanqueo imprudente. Mayor consenso se constata a la hora de censurar la técnica legislativa empleada: el precepto se limita a hacer una escueta remisión a “los hechos” previstos en los números 1 y 2 del artículo 301, sin ofrecer las pautas que permitan determinar en

qué consiste la infracción del deber de cuidado o diligencia en el ámbito concreto del blanqueo. En cualquier caso, especiales dificultades presenta la comisión imprudente de un delito que incorpora elementos subjetivos estrechamente vinculados al dolo. Si, como más adelante se dirá, la imprudencia ha de ir referida al desconocimiento por parte del agente de la procedencia ilícita de los bienes, habremos de descartar la extensión de la imprudencia a aquellas modalidades típicas que precisan determinadas finalidades (ocultar, encubrir o ayudar) previstas en el segundo inciso del artículo 301.1, que presuponen dicho conocimiento y revelan una clara intencionalidad. De este modo, sumándonos a la interpretación restrictiva<sup>138</sup> secundada por un amplio sector doctrinal, concluiremos que sólo determinadas formas comisivas podrán ser cometidas a título de imprudencia grave.

Tras analizar los elementos típicos que conforman el delito imprudente en general y el blanqueo por imprudencia grave en particular, nos ocuparemos de la problemática distinción entre la imprudencia consciente y el dolo eventual, dedicando especial atención a los criterios manejados actualmente por la jurisprudencia para distinguir ambos títulos de imputación en el ámbito del blanqueo de capitales. Para finalizar nuestro estudio sobre el blanqueo imprudente, dirigiremos la atención al intenso debate suscitado en torno a la individualización del círculo de sujetos que pueden realizar la modalidad imprudente de blanqueo. Aunque existen interesantes argumentos para considerar que el blanqueo imprudente se configura como un delito especial, restringiéndose así su ámbito de aplicación a los sujetos obligados por la normativa preventiva, concluiremos que, al igual que sucede en las modalidades dolosas, el blanqueo imprudente constituye un delito común.

De todas aquellas cuestiones que interesan al estudio dogmático del delito de blanqueo de capitales, quizá la relativa a la oportunidad de sancionar su comisión imprudente sea la que ha generado mayores controversias en el seno de la doctrina<sup>139</sup>. No sólo la conveniencia de su sanción, sino también la técnica legislativa empleada para su positivización (una escueta remisión a unos “hechos” constitutivos de un delito esencialmente doloso) han sido objeto de enérgicas críticas.

---

<sup>138</sup> Vid. VIDALES RODRÍGUEZ, C., “El delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 350.

<sup>139</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 724; CASTRO MORENO, A., “Consideraciones críticas sobre la aplicación e interpretación del tipo subjetivo de los delitos de blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 457 y ss.; VIDALES RODRÍGUEZ, C., “El delito de blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 350 y ss.



A diferencia de lo que ocurría en el Código Penal de 1973<sup>140</sup>, el texto actualmente vigente prevé en su artículo 12 un sistema de cerrado o de *numerus clausus* para la incriminación de los delitos imprudentes<sup>141</sup>. Uno de los delitos que expresamente prevé la comisión culposa es el blanqueo de capitales. No es ésta, sin embargo, una novedad en nuestro Ordenamiento penal: el blanqueo imprudente fue sancionado por primera vez tras la aprobación de la LO 8/1992, que introdujo en el Código penal anteriormente vigente el artículo 344 bis h) apartado 3<sup>142</sup>, mediante la remisión a tipos dolosos (“hechos descritos en los números precedentes”) cometidos “por negligencia o ignorancia inexcusables”<sup>143</sup>. Misma estructura remisiva ha empleado el legislador de 1995 al tipificar el delito de blanqueo realizado por imprudencia grave. Como hemos dicho, la técnica legislativa de la que el legislador se ha servido para penalizar el blanqueo imprudente ha sido merecedora de numerosas críticas<sup>144</sup>: la lacónica remisión a las conductas previstas en los números 1 y 2 del artículo 301 CP, que contienen elementos subjetivos específicos estrechamente vinculados al dolo<sup>145</sup> -tanto cognitivos

<sup>140</sup> Vid. MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, 9ª ed., op. cit., pág. 292; ESTEBAN, R., “El delito imprudente”, *La imprudencia. Cuadernos de Derecho Judicial*, XVI, 2005. CGPJ. Madrid, 2005, págs. 59 y 60.

<sup>141</sup> Vid. HUERTA TOCILDO, S., “Aproximación crítica a la nueva regulación del delito de receptación y otras conductas afines”, op. cit., pág. 390; VICENTE REMESAL, J. de, *La Regulación de la Imprudencia en el Código Penal*, Revista Xurídica Galega, nº. 23, 1999, págs. 13 y 14, disponible en el enlace <https://www.rexurga.es/pdf/COL098.pdf>.

<sup>142</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 416; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 730.

<sup>143</sup> Vid. ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 351. Para DÍEZ RIPOLLÉS, la modalidad imprudente sólo era posible respecto a una de las dos modalidades típicas, la contenida en el art. 344 bis h) 2, siendo incompatible con la prevista en el art. 344 bis h) 1, en la que el comportamiento típico necesariamente había de dirigirse a especiales finalidades (ocultar, encubrir o ayudar). (“El blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas. La recepción de la legislación internacional en el ordenamiento penal español”, op. cit., pág. 177).

<sup>144</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 589 y ss.; ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 281 y ss.; FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 420 y ss.; CALDERÓN CEREZO, A., “Algunos aspectos críticos del blanqueo de capitales. Legislación y jurisprudencia”, op. cit., pág. 87; CALDERÓN CEREZO, A./CHOCLÁN MONTALVO, J. A., *Manual de derecho Penal II. Parte especial*, op. cit., pág. 318; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 733 y ss.

<sup>145</sup> Vid. CARPIO DELGADO, J. del, *El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal*, op. cit., pág. 333; CALDERÓN CEREZO, A., *Comentarios al Código penal*, vol. 3, op. cit., pág. 2301; id., “El marco jurídico del blanqueo de capitales: aspectos penales y administrativos”, op. cit., pág. 9; id., “Algunos aspectos críticos del blanqueo de capitales. Legislación y jurisprudencia”, op. cit., pág. 88; PELLUZ ROBLES, L. C., “Blanqueo de capitales: presupuestos del tipo penal, legislación interna-comunitaria y regulación en otros países”, *Judicatura y notariado ante los delitos económicos (Estudios de Derecho Judicial nº 73)*. CGPJ. Madrid, 2006, pág. 27; MILANS DEL BOSCH, S., “Algunas cuestiones procesales en la investigación del delito de blanqueo de capitales”, *I Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, pág. 13; GONZÁLEZ RUS, J. J., “Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico”, op. cit., pág. 643; MUÑOZ CUESTA, J., “Blanqueo de capitales imprudente: una figura más que discutible. Comentario a la STS, Sala 2ª, de 14 septiembre 2005”, op. cit., pág. 21.779; CABALLERO SÁNCHEZ-IZQUIERDO, J. M.ª, “El delito imprudente de blanqueo de capitales”, *La Ley* 19196/2011, Año XXXII. Nº 7736, 15 de noviembre de 2011, pág. 14; ALFONSO LASO, D. de, *El abogado ante la comisión imprudente de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 1965; CASTRO MORENO, A., “Consideraciones críticas sobre la aplicación e interpretación del tipo subjetivo de los delitos de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 461.

(conocimiento de la procedencia delictiva del bien) como intencionales (finalidades expresamente previstas en el texto punitivo para algunas de las modalidades comisivas contempladas en el artículo 301.1)- dificulta la comprensión de su comisión a título imprudente. Con acierto, tanto la doctrina dominante como la jurisprudencia han manifestado que la presencia de los especiales elementos subjetivos del injusto difícilmente casa con el concepto de reciclaje culposo que maneja nuestro actual Código Penal<sup>146</sup>. Hubiese sido sin duda preferible que el precepto incorporase una descripción típica del blanqueo imprudente en la que se detallasen “las correspondientes conductas basadas en la infracción del deber de diligencia”<sup>147</sup>. Asimismo, CASTRO MORENO ha advertido de un conflicto dogmático adicional que presenta la modalidad imprudente: si el blanqueo de capitales se caracteriza por conminar una suerte de participación en el hecho delictivo ajeno, su comisión imprudente resultaría “anormal” en el actual sistema penal, teniendo en cuenta que “una de las reglas sacrosantas de la dogmática penal es el carácter exclusivamente doloso de la participación”<sup>148</sup>.

Algunos autores han manifestado firmes sospechas de que la incorporación del blanqueo imprudente al texto punitivo realmente obedece a pretensiones de soslayar las especiales dificultades probatorias que presenta la tipicidad subjetiva en el delito de blanqueo<sup>149</sup>. La sanción del blanqueo imprudente operaría como una suerte de “sanción por la sospecha” a la que acudir cuando, presumiéndose el dolo del inculpado, este no

---

<sup>146</sup> Vid. GÓMEZ INIESTA, D. J., *El delito de blanqueo de capitales en Derecho Español*, op. cit., pág. 60; VIDALES RODRÍGUEZ, C., *Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código penal de 1995*, op. cit., pág. 128; MARTINOT, S., “Tráfico de drogas y blanqueo de dinero ¿una política criminal europea?”, op. cit., pág. 957; ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 351; CALDERÓN CEREZO, A., “El marco jurídico del blanqueo de capitales: aspectos penales y administrativos”, op. cit., pág. 10; LANDROVE DÍAZ, G., “El blanqueo de capitales de procedencia delictiva”, op. cit., pág. 148; ESCOBAR JIMÉNEZ, R., “El delito de blanqueo de capitales, delito fiscal y contra la Seguridad Social tras la reforma de la LO 5/2010, de 22 de junio”, *La nueva reforma del Código Penal*. Cuadernos de derecho para ingenieros. Ed. La Ley, Madrid, 2011, págs. 63 y 64; ALFONSO LASO, D. de, *El abogado ante la comisión imprudente de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 1965.

<sup>147</sup> Vid. CALDERÓN CEREZO, A., “Algunos aspectos críticos del blanqueo de capitales. Legislación y jurisprudencia”, op. cit., pág. 87.

<sup>148</sup> Vid. CASTRO MORENO, A., “Consideraciones críticas sobre la aplicación e interpretación del tipo subjetivo de los delitos de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 458.

<sup>149</sup> Vid. VIDALES RODRÍGUEZ, C., *Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código penal de 1995*, op. cit., pág. 129; id., “El delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 350; FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 417; FERRÉ OLIVÉ, J. C., “Política criminal europea en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo”, op. cit., pág. 260; ABEL SOUTO, M., “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, op. cit., pág. 245; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 738; CASTRO MORENO, A., “Consideraciones críticas sobre la aplicación e interpretación del tipo subjetivo de los delitos de blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 458 y 459.

puede finalmente acreditarse<sup>150</sup>. Si ello es así, no podemos más que criticar contundentemente la política legislativa que ha conducido al legislador a conminar penalmente el blanqueo imprudente: resulta inasumible que la tipificación de un delito obedezca a razones de mera oportunidad procesal; de acuerdo con BLANCO CORDERO, el merecimiento de pena de un delito, en este caso del blanqueo imprudente, sólo puede fundamentarse en base a criterios de carácter material<sup>151</sup>.

No sólo la doctrina científica ha manifestado, como acabamos de ver, importantes reparos a la incriminación del blanqueo imprudente: también la jurisprudencia ha admitido que el blanqueo cometido por imprudencia presenta importantes dificultades dogmáticas. Reconoce la Sala Segunda que el “blanqueo de capitales es un delito esencialmente doloso que incorpora incluso el elemento subjetivo del injusto consistente en conocer la ilícita procedencia de los bienes y la intención de coadyuvar a su ocultación o transformación”. Asimismo, se constata que la redacción típica impide distinguir entre culpa grave (punible), y leve (no punible), censurando el precepto por su “ambigüedad e inespecificidad”, y por contradecir el criterio de “taxatividad” de los tipos penales”, si bien, afirma el Alto Tribunal, “el principio de legalidad, evidentemente, obliga a considerar la comisión imprudente del delito”. (SSTS 997/2013, de 19 diciembre, 120/2013, de 20 febrero, y 28/2010, de 28 de enero, entre otras muchas).

Uno de los principales problemas interpretativos que ha provocado la configuración legal del blanqueo imprudente es el referido a su propio alcance: ¿se admite la comisión imprudente de todas las modalidades comisivas descritas en los números 1 y 2 del artículo 301 CP o sólo de algunas de ellas? Como es natural, no son pacíficas las conclusiones alcanzadas por la doctrina al respecto. Desde una posición minoritaria, VIDALES RODRÍGUEZ interpreta que el artículo 301.3 configura el blanqueo imprudente como “un tipo independiente que sanciona, sin requerir elemento subjetivo alguno, los hechos descritos en los números anteriores”. Concediendo un *sentido naturalístico* al término *hechos*, el delito imprudente tendría lugar cuando dichos “hechos” se realizasen “sin conocimiento de su ilícita procedencia (...) pero debiendo haberse representado tanto el ilícito origen de los bienes, como las consecuencias que,

---

<sup>150</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 738.

<sup>151</sup> *Ibidem*, pág. 739.

por ello, tenía su actuar en relación con los bienes jurídicamente protegidos”<sup>152</sup>. Desde una perspectiva opuesta, entendemos, junto a CARPIO DELGADO, que cuando el precepto alude a hechos, dicha expresión ha de interpretarse “desde un punto de vista jurídico, es decir, como *hecho típico*”. El artículo 301.3 CP no crea ni configura un tipo independiente de los contenidos en los números 1 y 2 del precepto, sino referenciado a las conductas previstas en los mismos. Como inmediatamente veremos, habrá que determinar qué modalidades de conducta, de las previstas en los números referidos, conceptualmente admiten la comisión imprudente “en la medida en que ello sea compatible con su estructura”<sup>153</sup>.

Un sector minoritario acepta con carácter general la posibilidad de que sean cometidas por imprudencia todas las conductas típicas previstas en los números 1 y 2 del artículo 301 CP. Para este sector doctrinal, la literalidad del artículo 301.3 CP conduce a esta interpretación, toda vez que la norma refiere “de forma expresa la comisión imprudente de los hechos descritos en los apartados anteriores”<sup>154</sup>. Esta misma interpretación amplia es la que maneja la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En la Sentencia 1034/2005, de 14 de septiembre, sin ofrecer un desarrollo argumentativo convincente, la Sala Segunda ha afirmado que el ámbito de aplicación de la modalidad imprudente de blanqueo abarca todos los supuestos típicos contenidos en los números 1 y 2 del artículo 301 CP, toda vez que “el tenor literal del art. 301.3 CP se refiere a todos los hechos descritos en los apartados 1 y 2 del mismo, sin hacer distinción alguna, para tipificar su posible comisión culposa”.

Para otros autores<sup>155</sup>, pese a la referencia genérica que formalmente expresa, el artículo 301.3 CP sólo puede “desplegar su eficacia”<sup>156</sup> en los comportamientos

---

<sup>152</sup> Vid. VIDALES RODRÍGUEZ, C., *Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código penal de 1995*, op. cit., págs. 128 y 129.

<sup>153</sup> Vid. CARPIO DELGADO, J. del, *El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal*, op. cit., págs. 330 y 331. De la misma opinión, MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de Capitales”, 3ª ed., op. cit., pág. 496.

<sup>154</sup> Vid. BAJO FERNÁNDEZ, M./BACIGALUPO SAGESSE, S., “Blanqueo de capitales”, 2ª ed., op. cit., pág. 737. Misma interpretación manifiestan LUZÓN CUESTA, J. M., *Compendio de derecho Penal. Parte Especial*, op. cit., pág. 216; SERRANO GONZÁLEZ, A./SERRANO MAÍLLO, A., *Derecho Penal. Parte Especial*, op. cit., pág. 570.

<sup>155</sup> Vid. PALMA HERRERA, J. M., *Los delitos de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 591; id., *Comentarios al Código Penal*, op. cit., pág. 731; FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 418; MARTOS NÚÑEZ, J. A., “Receptación y blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 211; MUÑOZ CONDE, F., *Derecho Penal. Parte Especial*, op. cit., pág. 516; LANDROVE DÍAZ, G., “El blanqueo de capitales de procedencia delictiva”, op. cit., pág. 148; ALFONSO LASO, D. de, *El abogado ante la comisión imprudente de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 1965.

<sup>156</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, loc. cit.

previstos en el artículo 301.2 CP. En gran medida, esta perspectiva aparece vinculada a la lectura que este sector doctrinal hace del artículo 301.1, por cuya virtud todas las modalidades comisivas contenidas en dicho precepto, también las expresamente previstas, habrían de perseguir las finalidades específicas de ocultar o encubrir el ilícito origen del bien objeto de blanqueo o de ayuda al autor de la infracción a eludir las consecuencias de sus actos<sup>157</sup>, finalidades que son incompatibles con la imprudencia. En cualquier caso, y a pesar de las reticencias derivadas de la naturaleza esencialmente dolosa del delito de blanqueo que expresa la doctrina, se admite mayoritariamente<sup>158</sup> la posible comisión culposa de las conductas previstas en el artículo 301.2 CP. Y ello porque, afirma MUÑOZ CUESTA, dicho precepto sólo exige la verificación del resultado de la ocultación o encubrimiento de los bienes procedentes de cualquier delito, y no que el sujeto actúe con esas finalidades. De este modo, cometerá un delito de blanqueo imprudente aquel sujeto que contribuya a un resultado de ocultación o encubrimiento, desconociendo el origen ilícito de los bienes por no observar la diligencia debida<sup>159</sup>.

Actualmente, la doctrina mayoritaria limita la incompatibilidad de la comisión imprudente con las conductas previstas en el inciso segundo del número 1 del artículo 301 (realizar cualquier acto con las específicas finalidades de ocultar, encubrir o ayudar) en la medida en que éstas incorporan “un elemento subjetivo del injusto, cuyo contenido es incompatible con la imprudencia”<sup>160</sup>. La modalidad imprudente de blanqueo resulta entonces acomodable, por un lado, a los comportamientos expresamente previstos (en el primer inciso del párrafo 1º del artículo 301.1 CP) y, por otro, a la conducta descrita en el número 2 del precepto señalado<sup>161</sup>. En todo caso, afirma MUÑOZ CUESTA, los comportamientos previstos en el artículo 301.1 CP, que exigen determinadas

<sup>157</sup> Vid. *supra* Capítulo III, apartado 3.2.1.2, págs. 217 y ss.

<sup>158</sup> Vid. MUÑOZ CUESTA, J., “Blanqueo de capitales imprudente: una figura más que discutible. Comentario a la STS, Sala 2ª, de 14 septiembre 2005”, op. cit., pág. 21.779; CARPIO DELGADO, J. del, *El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal*, op. cit., pág. 333; CALDERÓN CERREZO, A., *Comentarios al Código penal*, vol. 3, op. cit., pág. 230; MUÑOZ CONDE, F., *Derecho Penal. Parte Especial*, op. cit., pág. 557; GÓMEZ BENÍTEZ, J. M., “Reflexiones técnicas y de política criminal sobre el delito de blanqueo de bienes”, op. cit., pág. 12; ALFONSO LASO, D. de, *El abogado ante la comisión imprudente de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 1966; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 733.

<sup>159</sup> Vid. MUÑOZ CUESTA, J., “Blanqueo de capitales imprudente: una figura más que discutible. Comentario a la STS, Sala 2ª, de 14 septiembre 2005”, op. cit., págs. 21.779 y 21.780.

<sup>160</sup> Vid. MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de Capitales”, 3ª ed., op. cit., pág. 496.

<sup>161</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 282; CARPIO DELGADO, J. del, *El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal*, op. cit., pág. 333; MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Blanqueo de Capitales”, 3ª ed., loc. cit.; BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., loc. cit. También parece interpretar restrictivamente el blanqueo imprudente ARIAS HOLGUÍN (*Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 336).

intenciones o finalidades (de ocultar o encubrir o de ayudar) no pueden imputarse a título culposo. En estas modalidades típicas resulta ineludible la presencia previa del elemento cognitivo del dolo, porque “mal se puede tener la finalidad de ocultar el origen ilícito penal de unos bienes si se desconoce que tienen tal origen”<sup>162</sup>.

Efectivamente, ha de rechazarse la modalidad imprudente en los supuestos de realización de cualquier otro acto con las finalidades de ocultar, encubrir o ayudar: las finalidades o intenciones expresamente previstas en el precepto, verdaderos elementos subjetivos del tipo especialmente vinculados al dolo, no son compatibles con conductas imprudentes. Asimismo, siempre que un sujeto realice un acto sobre un bien para ocultar o encubrir su origen delictivo o para ayudar a quien realizó el delito previo a eludir las consecuencias jurídicas de su ilícito actuar, conocerá, evidentemente, dicho origen delictivo del bien. Toda vez que las finalidades típicas que han de orientar la realización de “cualquier acto” no se extienden, a nuestro juicio, a las conductas expresamente previstas en el primer inciso del artículo 301.1 CP<sup>163</sup>, *a priori* no existe inconveniente en admitir que cabe extender la imprudencia, además de a las modalidades comisivas previstas en el artículo 301.2 CP, a las conductas de adquisición, posesión, utilización, conversión o transmisión de bienes. A esta cuestión nos referiremos con más detalle al exponer nuestras conclusiones sobre la conformación del tipo de blanqueo imprudente, una vez hayamos analizado en profundidad los elementos típicos en que aquél se estructura.

En otro orden de cosas, se ha dicho que la incriminación imprudente del blanqueo no es sino una manifestación más del llamado “derecho penal simbólico”<sup>164</sup>, y que habría de ser el Derecho administrativo “el que tratara de evitar estas conductas, no ya por la vía de la represión, sino por la más eficaz y menos lesiva de la prevención”<sup>165</sup>. Precisamente un sector doctrinal nada desdeñable ha vinculado la comisión del blanqueo imprudente a los sujetos obligados por la normativa administrativa antiblanqueo. Sobre esta cuestión volveremos más adelante, al examinar si el tipo de

---

<sup>162</sup> Vid. MUÑOZ CUESTA, J., “Blanqueo de capitales imprudente: una figura más que discutible. Comentario a la STS, Sala 2ª, de 14 septiembre 2005”, op. cit., pág. 21.778. En efecto, afirma el autor, “no tiene cabida la imprudencia en estos casos, pues si el agente “no actúa a sabiendas de que los bienes proceden de un hecho delictivo, sólo podía haberlo conocido de haber obrado diligentemente; es materialmente imposible que tenga la finalidad de ocultar o encubrir su origen delictivo, si como decimos no lo conoce, aunque pudiera haberlo conocido de no actuar con olvido de normas elementales de conducta.” (Ibidem, pág. 21.779).

<sup>163</sup> Vid. *supra* Capítulo III, apartado 3.2.1.3, págs. 220 y ss.

<sup>164</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 730.

<sup>165</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 417.

blanqueo imprudente está vinculado a los sujetos obligados por la normativa preventiva o si aquél se configura como un delito común. Conviene antes examinar qué *requisitos típicos* ha de satisfacer la concreta figura delictiva objeto de nuestro estudio.

### **5.6.2. ELEMENTOS TÍPICOS DEL DELITO IMPRUDENTE. ESPECIAL REFERENCIA A LA GRAVEDAD DE LA INFRACCIÓN DEL DEBER CUIDADO**

La doctrina científica coincide al afirmar que, con carácter general, todo delito imprudente precisa que la imprudencia en que incurre el agente sea grave o temeraria<sup>166</sup>. La imprudencia grave suele identificarse como la infracción de las más elementales normas de cuidado que hubiese observado una persona diligente en las actividades de la vida social<sup>167</sup>. Además de la inobservancia del cuidado exigible, que operaría como “exigencia primaria de lo injusto del delito imprudente”<sup>168</sup>, es preciso que la lesión del bien jurídico haya sido previsible, y que la infracción del deber objetivo de cuidado haya ocasionado la efectiva producción del resultado que la norma penal trata de evitar<sup>169</sup>, de acuerdo con los criterios de la teoría de la imputación objetiva<sup>170</sup>.

---

<sup>166</sup> Vid. MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, 9ª ed., op. cit., págs. 294 y 295; MUÑOZ CONDE, F./GARCÍA ARÁN, M., *Derecho Penal. Parte General*, op. cit., pág. 288; CUESTA AGUADO, Mª. P. de la, *Tipicidad e imputación objetiva*, op. cit., pág. 176.

<sup>167</sup> Vid. MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, 9ª ed., op. cit., pág. 294; MUÑOZ CONDE, F./GARCÍA ARÁN, M., *Derecho Penal. Parte General*, op. cit., pág. 284; LANDECHO VELASCO, C. M., *Derecho Penal Español. Parte General*, op. cit., págs. 301-303. La doctrina suele acudir como referencia al “hombre medio ideal, prudente y cuidadoso”, bien considerándolo desde un punto de vista general, o en su caso, “circunscribiéndolo al ámbito profesional cuando se trata de un hecho en el ejercicio de una profesión. Cuando el autor en concreto actúa con el cuidado o diligencia con el que jurídicamente se espera que actúe el hombre medio ideal, entonces el sujeto concreto no infringe el deber objetivo de cuidado, requerido por el tipo imprudente. En caso contrario, realiza la conducta objetivamente imprudente.” Cuando el agente, por sus características personales, capacidades o facultades disminuidas en relación con ese hombre medio, no pueda cumplir el deber objetivo de cuidado, “hay que seguir afirmando la conducta antijurídica imprudente, pero puede resultar atenuada o excluida respecto a ella la culpabilidad de dicho autor en concreto.” (Vid. VICENTE REMESAL, J. de, *La Regulación de la Imprudencia en el Código Penal*, op. cit., págs. 25 y 26).

<sup>168</sup> Vid. HIRSCH, H. J., *Sobre lo injusto del delito imprudente*, Revista de derecho penal y criminología, nº 16, 2005, pág. 3, disponible en el siguiente enlace: [portal.uclm.es/descargas/idp\\_docs/doctrinas/hirsch.pdf](http://portal.uclm.es/descargas/idp_docs/doctrinas/hirsch.pdf). En el mismo sentido, CUESTA AGUADO, Mª. P. de la, *Tipicidad e imputación objetiva*, op. cit., pág. 172.

<sup>169</sup> Vid. MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, 9ª ed., op. cit., pág. 297; LANDECHO VELASCO, C. M., *Derecho Penal Español. Parte General*, op. cit., pág. 301. También respecto a la previsibilidad la doctrina acude a criterios objetivos, de tal modo que se toma como referencia la previsión del peligro de afeción al bien jurídico de un “hombre medio ideal, colocado en la situación del autor, con los conocimientos de éste”, si bien en ciertos casos -imprudencia profesional-, la obligación de previsibilidad ha de considerarse acentuada. (Vid. VICENTE REMESAL, J. de, *La Regulación de la Imprudencia en el Código Penal*, op. cit., pág. 26). Siendo la infracción del deber objetivo de cuidado y la previsibilidad los elementos definitorios del delito imprudente, “si la realización del hecho típico es objetivamente imprevisible, entonces no puede existir deber de cuidado alguno con el que se intente evitar dicho resultado. Asimismo, si aun existiendo dicha previsibilidad el sujeto

La jurisprudencia (por todas, STS 79/2013, de 8 de febrero) define el delito cometido por imprudencia grave de manera similar, cifrando como elementos que, con carácter general, han de concurrir para su apreciación, los siguientes:

- “a) la producción de un resultado que sea la parte objetiva de un tipo doloso;
- b) la infracción de una norma de cuidado cuyo aspecto interno es el deber de advertir el peligro y cuyo aspecto externo es el deber de comportarse conforme a las normas de cuidado previamente advertido; y
- c) que se haya querido la misma conducta descuidada, con conocimiento del peligro, o sin él, pero no el hecho resultante de tal conducta.”

Con mayor detalle, las SSTs 598/2013, de 28 de junio, y 1089/2009, de 27 de octubre, configuran la estructura del delito imprudente de la siguiente forma:

El delito imprudente “aparece estructuralmente configurado, de una parte, por la infracción de un deber de cuidado interno (deber subjetivo de cuidado o deber de previsión), que obliga a advertir la presencia de un peligro cognoscible y el índice de su gravedad; y, de otra, por la vulneración de un deber de cuidado externo (deber objetivo de cuidado), que obliga a comportarse externamente de forma que no se generen riesgos no permitidos, o, en su caso, a actuar de modo que se controlen o neutralicen los riesgos no permitidos creados por terceras personas o por factores ajenos al autor, siempre que el deber de garante de éste le obligue a controlar o neutralizar el riesgo ilícito que se ha desencadenado. A estos requisitos ha de sumarse, en los comportamientos activos, el nexo causal entre la acción imprudente y el resultado (vínculo naturalístico u ontológico), y la imputación objetiva del resultado a la conducta imprudente, de forma que el riesgo no permitido generado por ésta sea el que se materialice en el resultado (vínculo normativo o axiológico). Y en los comportamientos omisivos habrá de operarse con el criterio hipotético de imputación centrado en dilucidar si la conducta omitida habría evitado, con una probabilidad rayana en la certeza, la lesión o el menoscabo del bien jurídico que tutela la norma penal.”

---

respeto todas las normas de cuidado exigidas, entonces su conducta no es imprudente; el resultado, en caso de producirse, sería un caso fortuito o estaría amparado por riesgo permitido”. (Ibidem, pág. 23).

<sup>170</sup> Vid. MUÑOZ CONDE, F./ GARCÍA ARÁN, M., *Derecho Penal. Parte General*, op. cit., págs. 288-291; MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, 9ª ed., op. cit., págs. 302-308; RUEDA MARTÍN, M.ª A., La concreción del deber objetivo de cuidado en el desarrollo de la actividad médico-quirúrgica curativa, *InDret Penal*, nº 4, 2009, págs. 4 y ss., disponible en [www.raco.cat/index.php/InDret/article/download/141388/192899](http://www.raco.cat/index.php/InDret/article/download/141388/192899).



En definitiva, la Sala Segunda del Tribunal Supremo identifica al delito imprudente como la inobservancia de la norma de cuidado (infracción de los que denomina deberes de cuidado interno y externo), la previsibilidad del riesgo, la producción del resultado típico (menoscabo del bien jurídico que la norma penal trata de proteger), y el nexo causal entre ambos conforme a los criterios de la causalidad y de la imputación objetiva (vínculo normativo en virtud del cual, la inobservancia del deber de cuidado crea un riesgo no permitido que se materializa en el resultado típico) que, en el caso de las conductas omisivas, se resolverá conforme a criterios hipotéticos de imputación (probabilidad rayana en la certeza de que la conducta omitida hubiese evitado la lesión o puesta en peligro del bien jurídico cuya tutela la norma penal ampara).

Una atenta lectura a la STS 79/2013, de 8 de febrero, permite comprobar que, para la jurisprudencia, es la gravedad de la imprudencia el elemento nuclear del tipo imprudente. Para distinguirla de la negligencia leve, la Sala Segunda acude generalmente al criterio de la gravedad de la infracción del deber de cuidado por parte del agente. Invocando resoluciones anteriores, la Sentencia referida dispone que la imprudencia grave se identifica con “la vulneración de las más elementales normas de cautela o diligencia exigibles en una determinada actividad”; significa la infracción de aquellos “deberes elementales que se pueden exigir al menos diligente de los sujetos”. La imprudencia es temeraria “cuando supone «un olvido total y absoluto de las más elementales normas de previsión y cuidado». Estas consideraciones adquieren especial relieve cuando la situación de riesgo creado con el comportamiento imprudente afecta a bienes de primer interés, como es la vida de las personas, y cuando se está creando un peligro elevado para dichos bienes sin la adopción de las necesarias medidas de cuidado y control.” [STS 537/2005]”.

Por otro lado, con arreglo a las SSTs 598/2013, de 28 de junio, 1415/2011, de 23 de diciembre, y 1089/2009, de 27 de octubre, la gravedad de la imprudencia ha de valorarse desde dos perspectivas diferentes, teniendo en cuenta tanto los criterios objetivos que concurren como subjetivos o grado de previsibilidad del riesgo.

En primer lugar, ha de evaluarse “desde una perspectiva objetiva o externa, con arreglo a la magnitud de la infracción del deber objetivo de cuidado o de diligencia en que incurre el autor, magnitud que se encuentra directamente vinculada

al grado de riesgo no permitido generado por la conducta activa del imputado con respecto al bien que tutela la norma penal, o, en su caso, al grado de riesgo no controlado cuando tiene el deber de neutralizar los riesgos que afecten al bien jurídico debido a la conducta de terceras personas o a circunstancias meramente casuales”. A su vez, “el nivel de permisión de riesgo se encuentra determinado (...) por el grado de utilidad social de la conducta desarrollada por el autor (a mayor utilidad social mayores niveles de permisión de riesgo). Por último, ha de computarse también la importancia o el valor del bien jurídico amenazado por la conducta imprudente: cuanto mayor valor tenga el bien jurídico amenazado menor será el nivel de riesgo permitido y mayores las exigencias del deber de cuidado. De otra parte, y desde una perspectiva subjetiva o interna (relativa al deber subjetivo de cuidado), la gravedad de la imprudencia se dilucidará por el grado de previsibilidad o de cognoscibilidad de la situación de riesgo, atendiendo para ello a las circunstancias del caso concreto. De forma que cuanto mayor sea la previsibilidad o cognoscibilidad del peligro, mayor será el nivel de exigencia del deber subjetivo de cuidado y más grave resultará su vulneración”<sup>171</sup>.

En suma, de acuerdo con los razonamientos de la Sala Segunda, para determinar el alcance de la gravedad de la imprudencia resulta especialmente relevante tener presente si el agente adoptó o no precauciones suficientes y adecuadas para controlar el riesgo de su actuar peligroso, ello teniendo en cuenta, por un lado, la utilidad social de la conducta por él desarrollada y la relevancia del bien jurídico amenazado por la

---

<sup>171</sup> La STS 598/2013, de 28 de junio, en la que se discutió la gravedad de la imprudencia en la conducta de un sujeto que alcanzó con un disparo a su acompañante en el momento en que se disponía a tirar a unas latas para probar su puntería, se refería al “deber de cuidado interno, consistente en este caso en asegurarse de que el arma se hallaba descargada, y también el deber de cuidado externo, que le obligaba a manejar el arma de forma que nunca apuntara hacia ninguna persona que se hallara en las proximidades, y mucho menos cuando se tiene puesto un dedo en el gatillo. Y como el riesgo que se generó acabó materializándose en el resultado, es claro que concurre también la relación causal entre la acción imprudente y el resultado lesivo, así como la relación de riesgo ilícito propia del requisito de la imputación objetiva. La infracción del deber objetivo de cuidado por parte del autor del disparo ha sido de notable entidad, en cuanto que el riesgo que generaba con su forma de maniobrar con el arma era relevante, pues al cogerla del suelo la orientó hacia la víctima, que quedó así comprendida en el radio de acción de la carabina de aire comprimido en un instante en que el acusado tenía un dedo en el gatillo. Además, el riesgo que generaba no aportaba utilidad social relevante alguna y afectaba a un bien jurídico de primera magnitud: la integridad física de Severino. Ello imponía la exclusión de cualquier clase de riesgo, dado que la situación no lo permitía ni lo justificaba. Y en cuanto al menoscabo del bien jurídico tutelado por la norma penal, alcanzó en este caso una gravedad extrema, puesto que la víctima, al introducirse el proyectil en la cavidad craneal, sufrió un coma estructural (...). Y le quedan como secuelas un coma neurológico estructural por síndrome mesencefálico bilateral que determina un estado vegetativo persistente, así como necesidad de recibir alimentación mediante una sonda. Por último, en lo que atañe a la gravedad del deber subjetivo de cuidado es claro que el acusado tenía la obligación de saber que un disparo con un arma de esas características podía producir graves heridas en órganos importantes de la víctima. Estaba pues obligado a advertir los peligros que conllevaba el arma en el caso concreto, por lo que debió asegurarse de que estaba descargada y también de que no había personas que pudieran resultar alcanzadas por los movimientos que hiciera con ella, de modo que en ningún caso quedaran comprendidas dentro de su radio directo de acción debido a un encañonamiento negligente y a la manipulación del gatillo.”

conducta imprudente, y, por otro, la previsibilidad de la situación de riesgo generada por su conducta. Atendiendo a estos criterios, se podrá calificar de grave aquella conducta imprudente que haya infringido deberes elementales de cautela o diligencia que se pueden exigir al menos diligente de los sujetos, aquélla que suponga un olvido total y absoluto de las más elementales normas de previsión y cuidado, sobre todo cuando la situación de riesgo es previsible y el bien jurídico amenazado es merecedor de la máxima protección. Desde luego -como se afirma en la STS 79/2013, de 8 de febrero- cuando el agente tome las medidas necesarias para garantizar la protección del bien jurídico, y desde un análisis *ex post* no pueda afirmarse la existencia de un riesgo que no pudiera haber sido controlado a través de la adopción de las oportunas cautelas, no procederá la imputación del resultado lesivo provocado por la conducta imprudente.

Por su parte, también la doctrina científica sitúa el elemento nuclear del delito imprudente en la gravedad de la imprudencia: como ocurre de forma general respecto a cualquier delito imprudente, para la apreciación del tipo previsto en el art. 301.3 CP no bastará con el simple descuido o negligencia leve del agente<sup>172</sup>. La imprudencia ha de ser *grave o temeraria*<sup>173</sup>, esto es, una infracción de las más elementales normas de cuidado debido o de la diligencia debida<sup>174</sup> que deben ser observadas en el curso de cualquier actividad de la vida<sup>175</sup> y que “cualquier persona situada en las circunstancias del autor podría haber observado”<sup>176</sup>.

Para MIR PUIG, la infracción de la norma o deber de cuidado integra el desvalor de acción del tipo imprudente, y comporta tanto el deber de cuidado interno, que “obliga a advertir la presencia del peligro en su gravedad aproximada”, y un deber de cuidado externo, que exige al agente comportarse externamente conforme a la norma de cuidado previamente advertida, y que se manifiesta principalmente en el deber de omitir acciones peligrosas, en el deber de preparación antes de emprender acciones peligrosas

---

<sup>172</sup> Vid. ZARAGOZA AGUADO, J. A., “Análisis sustantivo del delito (I): Cuestiones de interés sobre el delito de blanqueo de bienes de origen criminal: la prueba indiciaria. La comisión culposa. Nuevas orientaciones en derecho comparado”, op. cit., pág. 311.

<sup>173</sup> Vid. CALDERÓN CEREZO, A., “Algunos aspectos críticos del blanqueo de capitales. Legislación y jurisprudencia”, op. cit., pág. 87.

<sup>174</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 747; MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, 9ª ed., op. cit., pág. 292; MUÑOZ CONDE, F./GARCÍA ARÁN, M., *Derecho Penal. Parte General*, op. cit., pág. 284; ZARAGOZA AGUADO, J. A., “Análisis sustantivo del delito (I): Cuestiones de interés sobre el delito de blanqueo de bienes de origen criminal: la prueba indiciaria. La comisión culposa. Nuevas orientaciones en derecho comparado”, op. cit., pág. 311.

<sup>175</sup> Vid. MUÑOZ CUESTA, J., “Blanqueo de capitales imprudente: una figura más que discutible. Comentario a la STS, Sala 2ª, de 14 septiembre 2005”, op. cit., pág. 21.779.

<sup>176</sup> Vid. MUÑOZ CONDE, F./GARCÍA ARÁN, M., *Derecho Penal. Parte General*, loc. cit.

y en la obligación de actuar prudentemente en situaciones peligrosas pero que, por ser útiles, son aceptadas por la sociedad (riesgo permitido)<sup>177</sup>. Por ello, la observancia de la norma de cuidado precisa que el agente tenga presente tanto la peligrosidad de la conducta que se dispone a realizar como la valoración social del riesgo que va a asumir. Para determinar la primera, ha de atenderse al grado de probabilidad de lesión y la relevancia del bien jurídico afectado. Para la valoración social del riesgo, ha de tenerse en cuenta si la conducta se desarrolla en aquellos “ámbitos en que se admiten determinados grados de riesgo permitido: un grado de peligrosidad que podría ser grave fuera de uno de estos ámbitos puede ser leve dentro de ellos”<sup>178</sup>.

Para la determinación de *la gravedad de la infracción del deber de cuidado*, MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN consideran pertinente emplear un “doble baremo”, en el que habría de partirse de lo que objetivamente se considera prudente, “e individualizarlo después con arreglo a las circunstancias del caso concreto y a los conocimientos y capacidades especiales del sujeto”<sup>179</sup>. Más acertadamente, a nuestro juicio, MIR PUIG considera que la gravedad de la imprudencia ha de graduarse conforme a los criterios objetivos de prudencia estándar que habría observado el hombre medio diligente en el contexto del autor (nivel cultural, profesional), si bien teniendo en cuenta “los conocimientos especiales de la situación del autor al actuar”. De acuerdo con esta idea, la conducta a valorar se ha de medir desde la perspectiva del cuidado requerido en un contexto social o profesional determinado: será imprudente desde un punto de vista jurídico-penal aquél comportamiento que no alcance la observancia del cuidado que habría empleado un hombre diligente en la situación del autor, a partir de un juicio *ex ante*<sup>180</sup>.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia han prestado especial atención a los supuestos de *imprudencia profesional*, aquélla que supone una dejación inexcusable de las normas o los criterios técnicos que son de aplicación a la actividad profesional de

---

<sup>177</sup> Vid. MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, 9ª ed., op. cit., págs. 297 y ss.

<sup>178</sup> Ibidem, pág. 294 y 295.

<sup>179</sup> Vid. MUÑOZ CONDE, F./GARCÍA ARÁN, M., *Derecho Penal. Parte General*, op. cit., pág. 287.

<sup>180</sup> Vid. MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, 9ª ed., op. cit., pág. 299. Para el autor, “una capacidad inferior del sujeto no imaginable en una persona mentalmente normal (reflejos demasiado lentos, capacidad intelectual inferior, debidos a enfermedades mentales, etc.) no pueden excluir o disminuir la antijuridicidad, sino sólo la imputación personal de la misma. (...) Esto no significa que personalmente pueda exigirse el mismo grado de cuidado objetivo al que se halla por debajo de la normalidad, sino sólo que su conducta no puede considerarse prudente desde el prisma de un hombre diligente. La inferioridad anormal del sujeto determinará, no obstante, la exclusión o atenuación de la imputación personal de la objetiva norma de cuidado”. (Ibidem, págs. 301 y 302).

que se trate<sup>181</sup>. Se considera que generalmente este tipo de negligencia entraña un mayor contenido de injusto y un más intenso reproche social<sup>182</sup>. Toda vez que el profesional, al que se le confía la asunción de un riesgo precisamente por la presuposición de una especial pericia en su ámbito de actuación, dispone de mayores conocimientos y aptitudes para prever el riesgo y controlarlo<sup>183</sup>, es legítimo que las normas de cuidado que vinculan al profesional alcancen su más alto grado de exigencia. De este modo, “la imprudencia profesional (...) supone “un plus de antijuridicidad consecutivo a la infracción de la ‘lex artis’ y de las precauciones y cautelas más elementales, imperdonables e indisculpables a personas que, perteneciendo a una actividad profesional, deben tener unos conocimientos propios de una actividad profesional.” (STS 1904/2001, 23 de octubre). Dichas consideraciones cobran especial importancia en el ámbito del blanqueo, pues en muchas ocasiones la realización de una operación legitimadora trae causa en la conducta negligente de profesionales. En estos casos, como ha afirmado CASTRO MORENO, generalmente la imprudencia profesional será considerada como grave precisamente por vulnerar un deber de diligencia de especial intensidad<sup>184</sup>. En cualquier caso, no creemos recomendable que dicha máxima sea interpretada como norma general: deberá estarse a las circunstancias del caso concreto, evitando presuponer en cualquier caso que el incumplimiento de cualquier exigencia impuesta por la normativa sectorial (extrapenal) haya de ser calificada *per se* como constitutiva de una imprudencia grave<sup>185</sup>.

Conviene aclarar por último que no debe identificarse la imprudencia grave con la culpa consciente<sup>186</sup>: la imprudencia grave admite tanto supuestos de culpa consciente o con previsión como de culpa inconsciente. La gravedad de la imprudencia se subordina a la infracción del deber objetivo de cuidado, y ésta “no implica

---

<sup>181</sup> Vid. LANDECHO VELASCO, C. M., *Derecho Penal Español. Parte General*, op. cit., pág. 307.

<sup>182</sup> Vid. TENA ARAGÓN, M. F., “La imprudencia profesional y la imprudencia del profesional”, *La imprudencia. Cuadernos de Derecho Judicial*, XVI, 2005. CGPJ. Madrid, 2005, págs. 89 y ss.; LANDECHO VELASCO, C. M., *Derecho Penal Español. Parte General*, op. cit., págs. 306 y 307. Asimismo, STS 1904/2001, 23 de octubre.

<sup>183</sup> Vid. TENA ARAGÓN, M. F., “La imprudencia profesional y la imprudencia del profesional”, op. cit., págs. 94 y 95.

<sup>184</sup> Vid. CASTRO MORENO, A., “Consideraciones críticas sobre la aplicación e interpretación del tipo subjetivo de los delitos de blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 458 y 459.

<sup>185</sup> Vid., en este sentido, VIDALES RODRÍGUEZ, C., “El delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 353.

<sup>186</sup> Ésta tiene lugar cuando el sujeto se representa como posible la producción del resultado lesivo, pero confía en que finalmente no se produzca, frente a la culpa inconsciente o sin representación, en la que “el sujeto ni siquiera prevé la posibilidad” de que el resultado lesivo se produzca. (Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 731).

necesariamente una representación mental por parte del sujeto activo”<sup>187</sup>. Téngase en cuenta que en ocasiones se considerará más grave la imprudencia inconsciente que la culpa consciente<sup>188</sup>, pues el hecho de que el sujeto ni siquiera repare en la peligrosidad de su conducta puede reflejar “un grado de despreocupación y ligereza aún más grave que la imprudencia consciente”<sup>189</sup>. La imprudencia inconsciente incorporará un especial “plus de gravedad” en aquellos ámbitos en los que el agente se encuentre especialmente vinculado a determinadas obligaciones en orden a garantizar la tutela del bien jurídico de que se trate, como ocurre con los sujetos obligados por la normativa administrativa de prevención del blanqueo.

### **5.6.3. CONFORMACIÓN DE LA TIPICIDAD EN EL BLANQUEO DE CAPITALES IMPRUDENTE**

Hemos visto que el artículo 301.3 CP no incorpora una descripción de comportamientos típicos imprudentes ni ofrece pautas para determinar en qué consiste, en su ámbito específico, la infracción del deber de cuidado o diligencia<sup>190</sup>. La escueta remisión a los “hechos” (dolosos) descritos en los números 1 y 2 del precepto plantea importantes problemas para determinar en qué consiste norma de cuidado en el ámbito del blanqueo y en qué supuestos puede afirmarse la omisión de la misma de forma grave. Hemos de acudir por ello a los criterios relativos a la infracción del deber de cuidado generalmente asumidos por la doctrina para definir el delito imprudente. Sirviéndonos de dicho concepto dogmático, y considerando que la imprudencia ha de recaer sobre el conocimiento del origen delictivo del bien<sup>191</sup>, podemos afirmar que el desvalor de acción del tipo contenido en el artículo 301.3 se conforma a partir de la inobservancia de las normas elementales de cuidado que, en la situación concreta en la que se encuentra el sujeto, observaría una persona prudente y sensata del mismo círculo

<sup>187</sup> Vid. LANDECHO VELASCO, C. M., *Derecho Penal Español. Parte General*, op. cit., pág. 305.

<sup>188</sup> Vid. MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, 9ª ed., op. cit., págs. 293 y 294. Vid. en el mismo sentido HIRSCH, refiriéndose a aquellos supuestos en los que inconsciencia se basa en una especial falta de escrúpulos o en una especial indiferencia del sujeto. (*Sobre lo injusto del delito imprudente*, op. cit., pág. 20).

<sup>189</sup> Vid. MUÑOZ CONDE, F./GARCÍA ARÁN, M., *Derecho Penal. Parte General*, op. cit., pág. 288.

<sup>190</sup> Vid. CALDERÓN CERESO, A., “Algunos aspectos críticos del blanqueo de capitales. Legislación y jurisprudencia”, op. cit., pág. 87; id., “El marco jurídico del blanqueo de capitales: aspectos penales y administrativos”, op. cit., pág. 10.

<sup>191</sup> Vid. BAJO FERNÁNDEZ, M./BACIGALUPO SAGESSE, S., “Blanqueo de capitales”, 2ª ed., op. cit., pág. 737; FERNÁNDEZ TERUELO, J. G., “Blanqueo de capitales”, marginal 7454. Vid. asimismo STS 1034/2005, de 14 de septiembre. En sentido contrario, vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 743.

social o profesional para detectar el origen delictivo de los bienes con los que se dispone a operar, y evitar así realizar o contribuir a la realización de un delito de blanqueo en las formas previstas en los números 1 y 2 del precepto<sup>192</sup>. Y ello porque, junto a BLANCO CORDERO, consideramos que existe *a priori* un deber de cuidado que obliga a cualquier ciudadano a adoptar las cautelas necesarias para evitar operar con fondos delictivos y no contribuir a su ocultación o encubrimiento. La cuestión decisiva es si la infracción de dicho deber ha de considerarse, en todo caso y respecto a cualquier ciudadano, como grave<sup>193</sup>. Sobre ello volveremos más adelante, al analizar la problemática del sujeto activo del tipo imprudente de blanqueo. Ahora resulta preciso indagar sobre los criterios o pautas que determinan el grado mínimo de la infracción del deber de cuidado para que la conducta de blanqueo pueda considerarse penalmente relevante.

Como hemos visto, la doctrina y la jurisprudencia mayoritarias coinciden al afirmar que la gravedad de la inobservancia del deber de cuidado se configura a partir de criterios objetivos, atendiendo a la conducta que desplegaría una persona diligente y sensata en el desarrollo de la actividad de que se trate. Algunos autores precisamente asocian la gravedad de la imprudencia a la específica posición social o actividad profesional del sujeto activo<sup>194</sup>. En este sentido, para BLANCO LOZANO -que considera, como veremos, que el blanqueo imprudente debería configurarse como un delito especial- el deber jurídico de cuidado, consistente en “la investigación y conocimiento de la procedencia de todos los bienes, propios y ajenos, que circulan en el tráfico económico y consiguientemente de las conductas de los demás ciudadanos que en él intervienen”, no podrá vincular en la misma medida a todos los sujetos<sup>195</sup>. Para FABIÁN, algunos profesionales -no sólo aquellos vinculados por la normativa preventiva de blanqueo-, quedan sujetos a un especial deber de cuidado; sin embargo, a la mayoría de

---

<sup>192</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 756. En sentido similar, VIDALES RODRÍGUEZ, C., “La última reforma del Código Penal en materia de drogas. (Novedades introducidas por la Ley Orgánica de 12 de noviembre de 1992)”, op. cit., pág. 2735. ZARAGOZA AGUADO, J. A., “El blanqueo de dinero. Aspectos sustantivos. Su investigación”, op. cit., págs. 127 y 128.

<sup>193</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 756 y 757.

<sup>194</sup> Vid. ALFONSO LASO, D. de, *El abogado ante la comisión imprudente de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 1966; FERNÁNDEZ TERUELO, J. G., “Blanqueo de capitales”, marginal 7458.

<sup>195</sup> Para el autor, la imposición de deberes de investigación y conocimiento de los movimientos económicos ajenos impuesta al particular tiene visos de inconstitucionalidad y resulta inadmisibles en un Estado de Derecho. Dichas obligaciones habrán de reservarse a “los operadores financieros” y a aquellos sujetos que se encuentren vinculados a obligaciones derivadas de normativa de prevención del blanqueo de capitales. (Vid. BLANCO LOZANO, C., “El blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas en el ordenamiento penal español”, op. cit., págs. 88 y 89).

los ciudadanos “no se les podrá exigir un nivel de vigilancia que inquiete su vida ordinaria”<sup>196</sup>.

De acuerdo con GALLEGO SOLER, en algunos casos la configuración de los deberes de cuidado dependerá en gran medida de la legislación extrapenal. En el caso del delito de blanqueo de capitales, cobra especial transcendencia la Ley 10/2010 y otra normativa sectorial<sup>197</sup>, si bien cada vez en mayor medida se van concretando los deberes de cuidado a partir de un conocimiento progresivamente más generalizado de las operaciones que habitualmente aparecen vinculadas al blanqueo, como consecuencia de la difusión mediática de casos significados y, en sectores más específicos, de la publicación de documentos editados por las instituciones internacionales antiblanqueo, en las que se relacionan listados de operaciones sospechosas<sup>198</sup>. No obstante, si bien la normativa sectorial puede poseer un relativo valor indiciario<sup>199</sup>, la valoración de la imprudencia no puede depender de criterios reglamentarios ni de “exigencias más o menos formales” conformadas extrapenalmente<sup>200</sup>. En cualquier caso, respecto a los sujetos vinculados a la Ley 10/2010, no puede considerarse que cualquier incumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa preventiva suponga *per se* y en todo caso la comisión del delito imprudente de blanqueo. De acuerdo con TORRES-DULCE LIFANTE, la gravedad de la imprudencia que aquél exige precisará la apreciación de una “ausencia notable y esencial de los deberes de cuidado”<sup>201</sup>. Asimismo, la inobservancia de dicho deber ha de materializarse en el incumplimiento de aquellas concretas obligaciones cuya infracción sea apta para crear una ocasión de riesgo para el bien jurídico protegido por el delito de blanqueo. De este modo, el incumplimiento de obligaciones “con un contenido netamente administrativo” (como pueden ser las que imponen el deber de conservación de documentos, de formación de empleados o de establecer procedimientos y órganos de control interno y de comunicación) será intrascendente para la materialización de una operación de

---

<sup>196</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 420.

<sup>197</sup> Como puede serlo la IDGRN de 10 de diciembre de 1999, sobre obligaciones de los Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles en materia de prevención de blanqueo de capitales, que prevé una relación exhaustiva de operaciones sospechosas o susceptibles de estar vinculadas con el blanqueo, respecto de las cuales el profesional destinatario debe guardar especiales cautelas. (Vid. GALLEGO SOLER, J. I., *Comentarios al Código Penal. Reforma LO 5/2010*, op. cit., pág. 667).

<sup>198</sup> Ibidem.

<sup>199</sup> Vid. VIDALES RODRÍGUEZ, C., “El delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 353

<sup>200</sup> Vid. LANDECHO VELASCO, C. M., *Derecho Penal Español. Parte General*, op. cit., pág. 305.

<sup>201</sup> Vid. TORRES-DULCE LIFANTE, E., “El blanqueo de dinero en paraísos fiscales”, op. cit., págs. 245 y 246.



blanqueo, por lo que en ningún caso podrá considerarse penalmente relevante<sup>202</sup>. Con todo, en los supuestos en los que incumplimiento de la normativa preventiva favorezca a la materialización de una operación de blanqueo, la gravedad de la infracción de la norma de cuidado permitirá marcar “la línea divisoria” por debajo de la cual el hecho será penalmente irrelevante y sólo podrá ser sancionado, como mera infracción administrativa, con arreglo a la ley preventiva<sup>203</sup>.

En todo caso, no sólo respecto a los sujetos vinculados por la normativa preventiva interesa el canon de la gravedad de la inobservancia del deber de cuidado. Será por tanto, con carácter general y para todos los sujetos, la gravedad de dicha inobservancia la que determine el vértice a partir del cual la conducta imprudente de blanqueo adquirirá relevancia penal, bajo la premisa de que, como veremos, el blanqueo por imprudencia se configura como un delito común.

También la jurisprudencia ha centrado su atención en la gravedad de la conducta imprudente como elemento esencial que caracteriza al tipo previsto en el artículo 301.3 CP. Para la Sala Segunda, es la inobservancia de los deberes de cuidado exigibles al sujeto activo el criterio que permite afirmar la gravedad de la imprudencia en el ámbito específico del delito de blanqueo de capitales. Resultan muy ilustrativas en este sentido las SSTS 997/2013, de 19 diciembre, 960/2008, de 26 de diciembre, y el Auto 145/2014, de 23 enero, resoluciones en las que, invocando la Sentencia 1034/2005 (FJ 4º), de 14 de septiembre, se dispone lo siguiente:

“La imprudencia se exige que sea grave, es decir, temeraria. Así en el tipo subjetivo se sustituye el elemento intelectual del conocimiento por el subjetivo de la imprudencia grave, imprudencia que por ello recae precisamente sobre aquel elemento intelectual. En este tipo no es exigible que el sujeto sepa la procedencia de los bienes, sino que por las circunstancias del caso esté en condiciones de conocerlas sólo con observar las cautelas propias de su actividad y, sin embargo, haya actuado al margen de tales cautelas o inobservando los deberes de cuidado que le eran exigibles y los que, incluso, en ciertas formas de actuación, le imponían normativamente averiguar la procedencia de los bienes o abstenerse de operar sobre ellos, cuando su procedencia no estuviere claramente establecida. (...)”

---

<sup>202</sup> Vid. ZARAGOZA AGUADO, J. A., “Artículo 301”, op. cit., pág. 1178. En el mismo sentido, BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 758 y 759; VIDALES RODRÍGUEZ, C., “El delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 353.

<sup>203</sup> Vid. CARDONA TORRES, J., *Derecho Penal. Parte Especial*, op. cit., pág. 338.

Como vemos, también para la Sala Segunda la gravedad de la inobservancia del deber de cuidado se configura en el ámbito del blanqueo teniendo en cuenta los deberes de cuidado que incumben al sujeto por virtud de su concreta posición social o profesional. Respecto de aquellas actividades sociales en las que no se han establecido normas de cuidado, la Sentencia 1034/05, de 14 de septiembre, dispone que para la individualización del cuidado objetivamente exigible habrá de atenderse a “la conducta que observaría en esa situación concreta una persona inteligente y sensata de la misma profesión o círculo social, y si es en el ámbito de los negocios cuál sería la actitud con respeto a la realización de operaciones comerciales extrañas (pago con elevadas sumas en metálico, transferencias a o de paraísos fiscales, etc.)”. Añade esta resolución que, partiendo de que “todos los ciudadanos tienen un deber de diligencia que les obliga a actuar prudentemente para evitar realizar un delito de blanqueo, la distinción entre imprudencia grave y leve, a pesar de su sutilidad y dificultad, radicarán en la gravedad de la infracción de la norma de cuidado, caracterizándose la primera por la omisión de todas las precauciones o al menos una grave infracción de normas elementales de cuidado”, por lo que puede reputarse grave o inexcusable la imprudencia “cuando cualquier persona mínimamente cuidadosa advierte el riesgo, y, advertido el riesgo, la actividad entraña un alto nivel de omisión de la diligencia debida”<sup>204</sup>.

Por último, también han de ser tenidos en cuenta, según se dispone en la STS 997/2013, de 19 diciembre, otros criterios adicionales a efectos de diferenciar la imprudencia grave o temeraria de la negligencia leve en el ámbito del tipo de blanqueo. En dicha resolución, la Sala Segunda nos recuerda que se considera temeraria aquella imprudencia que haya “infringido deberes elementales que se pueden exigir al menos diligente de los sujetos”, aquélla que suponga “un olvido total y absoluto de las más elementales normas de previsión y cuidado”, teniendo presente en este sentido tanto el grado de interés del bien tutelado como la intensidad del peligro creado y si frente al mismo se han adoptado o no “las necesarias medidas de cuidado y control.” A dichos efectos, se estima que el bien jurídico patrimonial objeto de tutela por el tipo de blanqueo suscita exigencias de menor intensidad que los delitos contra la vida o las

---

<sup>204</sup> Acogiendo los argumentos de la sentencia dictada por el Tribunal de instancia, la Sala Segunda afirma en la Sentencia citada que el acusado “a) pudo conocer ese origen; b) pudo evitar llevar a cabo la actividad de ocultación; c) debió conocer el origen; d) debió evitar tal actividad. Y que esos deberes, aunque no derivados de la Ley de Blanqueo de Capitales de 28-12-93, ni de sus disposiciones reglamentarias, vienen impuestos por la exigencia de evitar los riesgos para la salud pública que encierra el favorecimiento del negocio consistente en el tráfico de estupefacientes. (...) Cuando el conocimiento no existe y sólo cabe hablar de una sospecha más o menos vehemente, que el sujeto omitiendo la diligencia debida, no comprueba, se dará la comisión culpable.”

personas en general, añadiendo que “también contribuye a una especificidad de la configuración de la impudencia en estos delitos la existencia de una compleja regulación administrativa que enumeran deberes específicos tendentes a conjurar el riesgo para el bien jurídico que se dice proteger.” En definitiva, la determinación del grado del injusto y de la gravedad de la imprudencia en el delito culposo dependerá, además de la infracción de la norma de cuidado y de las posibilidades de previsión del sujeto, de la intensidad del peligro creado y de las medidas de cautela desplegadas para neutralizarlo, así como de la relevancia del bien jurídico que la conducta imprudente menoscaba.

Hemos dedicado las anteriores páginas al estudio de la gravedad de la imprudencia, núcleo esencial del tipo imprudente de blanqueo. Recordemos que, además de este elemento típico -determinado por una significativa infracción del deber de cuidado-, la doctrina y la jurisprudencia coinciden al afirmar que el blanqueo de capitales por imprudencia grave requiere como ulteriores requisitos adicionales la previsibilidad del peligro<sup>205</sup> y que la infracción del deber objetivo de cuidado haya ocasionado la efectiva producción de un resultado de blanqueo<sup>206</sup>. La relación entre la infracción de la norma objetiva de cuidado y la producción del resultado lesivo para el bien jurídico ha de analizarse, del mismo modo que ocurre en el tipo doloso, desde la perspectiva de la teoría de la imputación objetiva, que, como es sabido, opera como “correctivo normativo” de las teorías clásicas de la causalidad<sup>207</sup>. Conforme a los criterios normativos que integran la imputación objetiva, ha de constatar, en primer lugar, que la conducta imprudente ha creado o incrementado el riesgo de facilitar la realización de una operación de blanqueo; y en caso afirmativo, que dicho riesgo se verifique en la efectiva materialización de la concreta operación de blanqueo, de tal modo que si dicha operación trae causa en motivos ajenos al riesgo provocado por el

---

<sup>205</sup> Vid. ESTEBAN, R., “El delito imprudente”, op. cit., pág. 55.

<sup>206</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 285; MARTOS NÚÑEZ, J. A., “Receptación y blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 211. La jurisprudencia también ha puesto de relieve estas exigencias, explícitamente referidas en la Sentencia de la Audiencia Nacional -Sala de lo Penal, Sección 1ª- de 1 de junio de 1999. (Vid. ZARAGOZA AGUADO, J. A., “El blanqueo de bienes de origen criminal”, op. cit., págs. 394 y 395, nota a pie de página nº 18).

<sup>207</sup> Vid. CORTÉS BECHIARELLI, E., “Ejercicio de las profesiones sanitarias y delitos imprudentes”, *La imprudencia. Cuadernos de Derecho Judicial*, XVI, 2005. CGPJ. Madrid, 2005, pág. 39.

sujeto, ha de negarse la imputación objetiva de dicho resultado a la conducta imprudente<sup>208</sup>.

En otro orden de cosas, es también cuestión debatida por la doctrina penal cuál es el *objeto sobre el que ha de recaer la actitud imprudente* del agente. Se discute en este sentido si la imprudencia va referida exclusivamente al conocimiento por parte del agente de la procedencia ilícita de los bienes, si se refiere a la forma en que se ejecuta la conducta blanqueadora (v. gr., el acto de ocultación o encubrimiento), o si ha de corroborarse la actitud negligente del sujeto tanto respecto del desconocimiento como de la forma en que ejecuta el hecho. Como vimos, la formulación típica del artículo 301.3 CP, a través de una escueta remisión a “los hechos” contenidos en apartados anteriores del precepto, no aporta demasiados datos para dar respuesta a esta cuestión. Algunos autores han entendido que la referida remisión a “los hechos” permite interpretar que la negligencia ha de predicarse tanto de la procedencia ilícita del bien como de la propia conducta de blanqueo<sup>209</sup>. En este sentido, afirma BLANCO CORDERO que la redacción típica del artículo 301.3 CP permite subsumir en el precepto tanto aquellos casos de desconocimiento imprudente del origen delictivo de los bienes como aquellos otros en los que la efectiva ocultación o el encubrimiento se realizan por imprudencia (un claro ejemplo sería el incumplimiento imprudente de las obligaciones legalmente asumidas por los sujetos vinculados por la normativa de prevención de blanqueo, en el que el agente no llegara siquiera a representarse el origen delictivo de los bienes por no existir siquiera indicios de dicho origen). Desde una perspectiva altamente exigente, el monografista concluye que el artículo 301.3 CP sanciona aquella conducta que supone cumulativamente tanto el desconocimiento culposo de la procedencia delictiva de los bienes como el propio comportamiento de ocultación o encubrimiento, que ha de ser asimismo imprudente<sup>210</sup>, de tal modo que el ámbito de aplicación del artículo 301.3 CP se reservaría a aquellos supuestos en los que el sujeto activo, sin haberse siquiera planteado la posibilidad del origen delictivo de los bienes por transgredir a las más elementales normas de cuidado, realice un acto de ocultación o encubrimiento por falta del cuidado objetivamente debido. Sin embargo, como ha apuntado FABIÁN CAPARRÓS, “en la práctica diaria, los casos en los que la imprudencia

<sup>208</sup> Vid. MUÑOZ CONDE, F./GARCÍA ARÁN, M., *Derecho Penal. Parte General*, op. cit., pág. 290. En el mismo sentido, MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, 9ª ed., op. cit., págs. 302-308. Vid., asimismo, STS 79/2013, de 8 de febrero, y las que en ella se citan.

<sup>209</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 421.

<sup>210</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., pág. 743.

verse sobre la efectiva ocultación o el encubrimiento de los bienes -y no sobre su procedencia ilícita- se nos antojan bastante improbables”. De este modo, “la propia fenomenología” del blanqueo conduce al monografista a limitar el ámbito de la negligencia al conocimiento de la procedencia delictiva del objeto material<sup>211</sup>.

En esta dirección interpretativa, tanto la doctrina mayoritaria<sup>212</sup> como la jurisprudencia consideran que la imprudencia va referida exclusivamente al conocimiento por parte del agente de la procedencia ilícita de los bienes. Ya hemos visto que en la STS 1034/2005 (FJ 4º), nuestro Alto Tribunal afirmó que “la imprudencia [debe recaer] sobre aquel elemento intelectual” determinado por el conocimiento de procedencia ilícita del bien. Esta idea, a día de hoy, constituye jurisprudencia ampliamente consolidada. Y en multitud de resoluciones recientes (por todas, Sentencias 257/2014, de 1 de abril, 165/2013, de 26 de marzo, 960/2008, de 26 de diciembre, y Auto 145/2014, de 23 enero) el Tribunal Supremo ha dispuesto que en el tipo imprudente de blanqueo “la imprudencia recae, no sobre la forma en que se ejecuta el hecho, sino sobre el conocimiento de la naturaleza delictiva de los bienes receptados, de tal modo que debiendo y pudiendo conocer la procedencia delictiva de los bienes, actúe sobre ellos, adoptando una conducta de las que describe el tipo y causando así objetivamente la ocultación de la procedencia de tales bienes (su blanqueo) con un beneficio auxiliador para los autores del delito de que aquellos procedan”.

En síntesis, y de acuerdo con lo hasta ahora expuesto, podemos concluir que, en el contexto del delito de blanqueo, incurre en imprudencia grave aquel sujeto que, habiendo podido conocer la procedencia de bienes o dinero de dudoso origen con los que opera, observando las cautelas propias desde su posición, haya actuado sin embargo al margen de tales cautelas, inobservando los deberes que le son exigibles y, no absteniéndose de operar, haya provocado la creación o el incremento del riesgo de contribuir a una operación de blanqueo, materializándose dicho riesgo en la realización de un resultado de blanqueo.

---

<sup>211</sup> Vid. FABIÁN CAPARRÓS, E. A., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 421.

<sup>212</sup> Vid. GÓMEZ INIESTA, D. J., *El delito de blanqueo de capitales en Derecho Español*, op. cit., pág. 59; PERALS CALLEJA, J., “Blanqueo de capitales y actividad de los abogados”, *Blanqueo de Capitales*. Boletín del ICAM nº 37. Madrid, 2007, pág. 98; LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J./ALONSO GONZÁLEZ, A./ENCINAR DEL POZO, M. A., *Código Penal comentado con jurisprudencia sistematizada y concordancias*, op. cit., pág. 940; MANZANARES SAMANIEGO, J. L., *Código penal (adaptado a la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de julio)*. Comentarios y jurisprudencia, op. cit., pág. 728; VIDALES RODRÍGUEZ, C., “El delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 352.

#### **5.6.4. DISTINCIÓN ENTRE CULPA CONSCIENTE Y DOLO EVENTUAL**

Como vimos, los términos en los que aparece redactado el artículo 301 del Código (números 1 y 2) admiten la imputación del delito de blanqueo a título de dolo eventual, salvo en las modalidades de conducta que incorporan específicas finalidades. Esta interpretación es en general la mantenida por la doctrina mayoritaria, con determinados matices<sup>213</sup>, y también por la jurisprudencia, que extiende la posibilidad de imputación doloso eventual a todas las modalidades de blanqueo. Una vez estudiado el tipo imprudente de blanqueo, resulta oportuno ahora dedicar atención a los criterios permiten distinguir la culpa consciente del dolo eventual, pues ambos títulos de imputación presentan caracteres muy similares. En efecto, en uno y otro el sujeto conoce que su comportamiento puede derivar en que se produzca un resultado de blanqueo, aunque confía que no se produzca.

Si bien en el plano fáctico las dos modalidades de imputación subjetiva se encuentran muy próximas<sup>214</sup>, las consecuencias que el Código prevé para cada una de ellas son muy diferentes: la apreciación de la culpa consciente implica la imposición de la pena prevista para el delito imprudente -en caso de estar tipificado en el Código dicho título de imputación respecto a la figura delictiva de que se trate-, mientras que la pena asociada a los casos de dolo eventual es la prevista para los tipos dolosos, sin ninguna clase de atenuación más que la que deriva con carácter general del artículo 72 CP, que obliga al Tribunal sentenciador a individualizar motivadamente la pena dentro de los márgenes máximo y mínimo previstos en abstracto para el delito cometido en atención a las concretas circunstancias del hecho y de su autor. En el caso del blanqueo de capitales, al estar expresamente prevista la modalidad imprudente, caben los dos títulos de imputación, y la diferencia penológica para ambos es ciertamente sustancial: el blanqueo doloso eventual está penado con pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes, y el cometido mediando imprudencia consciente con pena prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al triplo.

La proximidad de los dos títulos de imputación subjetiva de los que ahora nos ocupamos provoca que, en la práctica, la delimitación del ámbito de aplicación de una y

---

<sup>213</sup> Vid. *supra* apartado 5.3 de este capítulo, págs. 462 y ss.

<sup>214</sup> Vid. STS 120/2013, de 20 febrero.

otra figura sea especialmente problemática: en ambos casos, el sujeto tiene consciencia del riesgo y la confianza mínimamente razonable de que, en nuestro caso, el resultado de blanqueo no se va a producir<sup>215</sup>. La distinción entre ambas figuras dependerá, en gran medida, de las circunstancias del caso concreto<sup>216</sup>.

La Ciencia penal ha elaborado a lo largo del siglo pasado diversas teorías para establecer criterios diferenciadores entre la culpa consciente o con previsión y el dolo eventual. Si bien un análisis detallado de las mismas y de las múltiples variantes desarrolladas por la doctrina excede el objeto del presente trabajo, creemos conveniente esbozar a grandes rasgos las características de las principales teorías para tratar de deslindar el ámbito de aplicación dos títulos de imputación a los que se asocian consecuencias penológicas tan diferenciadas. Las múltiples formulas doctrinales pueden clasificarse básicamente en función de su mayor proximidad a las teorías de la probabilidad o de la representación o a los criterios derivados de la teoría del consentimiento o de la aprobación<sup>217</sup>. De acuerdo con la teoría de la probabilidad o de la representación, el criterio que permite diferenciar las dos figuras es el elemento intelectual del dolo, de tal modo que lo determinante para su distinción es el grado de probabilidad de que se produzca el resultado, cuya posibilidad se ha representado el sujeto: si aquél es elevado, estaremos ante un supuesto de dolo eventual; el caso contrario habrá de calificarse como culpa consciente<sup>218</sup>. En el dolo eventual, el sujeto se representa como probable que de su comportamiento se derive el resultado penalmente relevante, y aun así lo lleva a cabo. En la culpa consciente, aun cuando el sujeto prevé conscientemente el hipotético resultado dañoso, no considera probable que finalmente

---

<sup>215</sup> Vid. MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., “Los delitos de peligro en el derecho penal económico y empresarial”, op. cit., pág. 815.

<sup>216</sup> Tal y como ha advertido MOLINA FERNÁNDEZ, “la distinción de dolo e imprudencia (consciente) es un ejemplo de categorización en una situación teórica uniformemente gradual, definida por la gradualidad del conocimiento de la peligrosidad de la acción. Pero esta gradualidad teórica (potencial) no se corresponde con la real”, de tal forma que sólo resultará clara en los casos próximos a los supuestos prototípicos de dolo eventual e imprudencia consciente, porque ambos conceptos se refieren “a situaciones graduales, en las que es imposible establecer límites definidos que sean valorativamente justificables”. (“La cuadratura del dolo problemas irresolubles, sorites y derecho penal”, op. cit., págs. 700-741 passim).

<sup>217</sup> Vid. LANDECHO VELASCO, C. M., *Derecho Penal Español*, op. cit., págs. 293 y 294. Sobre la evolución de estas teorías, vid. OITANA, C./ YRURE, F., *Posiciones tradicionales y actuales sobre el Dolo Eventual*, Revista Jurídica, Universidad Católica de Guayaquil, [http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=101&Itemid=34](http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=101&Itemid=34), págs. 267 y ss.

<sup>218</sup> Como afirma LANDECHO VELASCO, “cuando el sujeto se lanza a ejecutar una acción muy peligrosa, hay que suponer que normalmente acepta el resultado. Pero esto no siempre es así, porque en ocasiones el sujeto puede confiar (aunque sea alocadamente), en su buena suerte. Por el contrario, es de sospechar que un individuo que realiza una acción con poco riesgo normalmente no acepta el resultado (espera que no se produzca).” (*Derecho Penal Español. Parte General*, op. cit., pág. 293).

se produzca, debido a la pericia que el agente cree desplegar, o bien confiando en que el contexto es inidóneo para que aquél se produzca<sup>219</sup>.

Para la teoría del consentimiento o de la aprobación, es el elemento volitivo el que permite distinguir el dolo eventual de la culpa consciente: en el primer supuesto, el sujeto acepta la producción del resultado típico, mientras que en el segundo, espera que aquél no se produzca, “y por tanto, no lo acepta en su fuero interno”<sup>220</sup>, de tal forma que de haber concebido como segura la producción resultado, hubiera dejado de actuar<sup>221</sup>. Aunque progresivamente van ganando terreno fórmulas asociadas teoría de la representación, la teoría del consentimiento ha contado tradicionalmente con mayor acogida en la doctrina española, al considerar que en los casos límite lo penalmente relevante es “la voluntad de realizar actos que puedan lesionar bienes jurídicos, no el mero factor intelectual. (...) Aunque la mayor o menor probabilidad del resultado pueda ser indicio de la mayor o menor aceptación por parte del sujeto (y por tanto, tenga su validez a la hora de la prueba), la diferencia ha de colocarse en la voluntad”<sup>222</sup>. Además de estas dos teorías, podemos encontrar fórmulas híbridas entre la probabilidad y el consentimiento muy en boga actualmente en Alemania, para las que “en último extremo, el factor decisivo es el del consentimiento”<sup>223</sup>. Incluso desde algún sector doctrinal se ha propuesto la creación de un título de imputación intermedio, entre el dolo eventual y la imprudencia consciente, similar al *recklessness* (temeridad) del Derecho angloamericano<sup>224</sup>.

En páginas anteriores ya apuntamos que en los supuestos de blanqueo, si bien la jurisprudencia acudió en ocasiones a los criterios derivados de la teoría del consentimiento o de la aceptación, en pronunciamientos más recientes la Sala Segunda del Tribunal Supremo se ha hecho eco de razonamientos propios de la teoría de la

---

<sup>219</sup> Vid. SSTs 901/2013, de 26 de noviembre, y 57/2004, de 22 de enero.

<sup>220</sup> Vid. LANDECHO VELASCO, C. M., *Derecho Penal Español*, loc. cit.

<sup>221</sup> Vid. MIR PUIG, S., *Derecho Penal. Parte General*, 9ª ed., op. cit., págs. 271-276; MUÑOZ CONDE, F./GARCÍA ARÁN, M., *Derecho Penal. Parte General*, op. cit., págs. 270-273; LANDECHO VELASCO, C. M., *Derecho Penal Español. Parte General*, op. cit., págs. 292-294.

<sup>222</sup> Ibidem, pág. 294. En el mismo sentido, vid. TORÍO LÓPEZ, Á., “Teoría cognitiva del dolo y concepto de temeridad (Recklessness)”, *Universitas vitae: homenaje a Ruperto Núñez Barbero*. Coord. por Fernando Pérez Álvarez, Miguel Ángel Núñez Paz, Isabel García Alfara. Ediciones Universidad de Salamanca, 2007, pág. 839.

<sup>223</sup> Vid. LANDECHO VELASCO, C. M., *Derecho Penal Español. Parte General*, loc. cit.

<sup>224</sup> Vid. TORÍO LÓPEZ, Á., “Teoría cognitiva del dolo y concepto de temeridad (Recklessness)”, op. cit., págs. 837 y ss.; CANESTRARI, S., “La estructura del dolo eventual y las nuevas fenomenologías de riesgo”, *Anales de derecho*, nº 21. Universidad de Murcia, 2003, págs. 72, 102 y ss., disponible en el siguiente enlace: [http://new.pensamientopenal.com.ar/sites/default/files/2014/04/doctrina03\\_0.pdf](http://new.pensamientopenal.com.ar/sites/default/files/2014/04/doctrina03_0.pdf).



representación con probabilidad de resultado, empleando en ocasiones fórmulas mixtas que conjugan ambas teorías. En la STS 479/2013, de 2 de junio, se sitúa el punto de inflexión en el que definitivamente se acoge la teoría de la representación en la Sentencia de 23 de abril de 1992 («caso de la colza»), en la que la Sala Segunda, afirmó que “si el autor conocía el peligro concreto jurídicamente desaprobado y si, no obstante ello, obró en la forma en que lo hizo, su decisión equivale a la ratificación del resultado que con diversas intensidades ha exigido la jurisprudencia para la configuración del dolo eventual”. De este modo, “el dolo eventual no se excluye simplemente por la esperanza de que no se producirá el resultado o porque éste no haya sido deseado por el autor”.

Una atenta lectura a la STS 1415/2011, de 23 de diciembre, permite comprobar que la Sala Segunda se decanta en la actualidad por un criterio más bien normativo en el que prima el elemento intelectual o cognoscitivo sobre el volitivo: “el autor obra con dolo cuando haya tenido conocimiento del peligro concreto jurídicamente desaprobado para los bienes tutelados por la norma penal.” Sin embargo -continúa la Sentencia-, ello no excluye la atención al elemento volitivo ni supone rechazar por completo la teoría del consentimiento. “Así pues, más que excluir o descartar el elemento volitivo -se dice en la Sentencia 69/2010-, la jurisprudencia lo orilla o lo posterga en la fundamentación probatoria por obtenerse de una mera inferencia extraíble del dato de haber ejecutado el hecho con conocimiento del peligro concreto generado por la acción. (...) Y es que tras constatarse que el autor actuó con el conocimiento del peligro concreto que entrañaba su acción, no parece fácil admitir probatoriamente que el acusado no asume el resultado lesivo. Las máximas de la experiencia revelan que quien realiza conscientemente un acto que comporta un grave riesgo está asumiendo el probable resultado. Sólo en circunstancias extraordinarias podrían aportarse datos individualizados que permitieran escindir probatoriamente ambos elementos. Las alegaciones que en la práctica se hacen en el sentido de que se confiaba en que no se llegara a producir un resultado lesivo precisan de la acreditación de circunstancias excepcionales que justifiquen esa confianza, pues esta no puede convertirse en una causa de exculpación dependiente del subjetivismo esgrimido por el imputado. En principio, el sujeto que ex ante conoce que su conducta puede generar un grave riesgo para el bien jurídico está obligado a no ejecutarla y a no someter por tanto los bienes jurídicos ajenos a niveles de riesgo que, en el caso concreto, se muestran como no controlables”. (STS 69/2010, de 30 de enero).

Como vemos, la Sala Segunda del Tribunal Supremo tiende en la actualidad a acudir a criterios derivados de la teoría de la representación (vid., además de las citadas, las SSTS 41/2014, de 29 de enero, 901/2013, de 26 de noviembre, y 360/2013 de 1 de abril) diferenciando el dolo eventual y la culpa consciente en base a la representación del grado de probabilidad de que se produzca el resultado por parte del autor. Si el autor tiene conocimiento del peligro concreto para el bien jurídico o le resulta indiferente, habrá obrado con dolo; por el contrario, habrá imprudencia cuando el autor, por descuido, desconozca el peligro -culpa inconsciente- o cuando conozca el peligro abstracto -no concreto- que genera la acción -culpa consciente-. (STS 901/2013, de 26 de noviembre). Ello, porque el conocimiento precede a la voluntad de realizar la conducta prevista o proyectada, de modo que cuando se constate que el autor actuó con el conocimiento del peligro concreto que entrañaba su acción, con carácter general no se podrá admitir que el acusado no asume el resultado lesivo. Cuando el sujeto conoce *ex ante* que su conducta puede generar un grave riesgo para el bien jurídico, está obligado a no ejecutarla y a no someter por tanto los bienes jurídicos ajenos a niveles de riesgo que, en el caso concreto, se muestran como no controlables. Si a pesar de conocer el riesgo que con su conducta genera para el bien jurídico, la lleva a cabo y se produce la efectiva lesión de aquél, asumirá dicho resultado y responderá a título de dolo eventual. Responderá por *culpa consciente* cuando *desconozca el peligro concreto* para el bien jurídico que deriva de su actuar peligroso. (SSTS 41/2014, de 29 de enero, 1022/2013, de 11 de diciembre, y 360/2013, de 1 de abril).

Cabe intuir que son las especiales dificultades para acreditar el elemento volitivo las que llevan a la Sala Segunda a inclinarse por postulados próximos a la más laxa teoría de la probabilidad. La propia Sala Segunda reconoce que se trata de soslayar “las alegaciones que en la práctica se hacen en el sentido de que se confiaba en que no se llegara a producir un resultado lesivo”, pues éstas no pueden “convertirse en una causa de exculpación dependiente del subjetivismo esgrimido por el imputado” (STS 69/2010, de 30 de enero). Hemos de censurar que para ello el Alto Tribunal acuda a la presunción de que quien conoce que su comportamiento comporta un grave riesgo de lesión, asume en todo caso su resultado típico. Si bien es cierto que, para evitar la rigidez de este argumento, se abre la posibilidad que el sujeto acredite las circunstancias excepcionales que justifiquen, en el caso concreto, una razonable confianza de que el resultado lesivo

no se produjera, ello comporta una inasumible inversión de la carga de la prueba de un elemento conformador del tipo subjetivo, que como tal, no corresponde al acusado.

En el ámbito del delito de blanqueo de capitales, la cuestión fundamental gira esencialmente en torno al conocimiento o representación por parte del sujeto del riesgo de operar con fondos de procedencia delictiva. Como se dijo, el Tribunal Supremo considera -y aquí así se asume- que la imprudencia recae no sobre la forma en que se ejecuta el hecho sino sobre el conocimiento de la naturaleza u origen delictivo de los bienes, de tal modo que comete el tipo imprudente aquel sujeto que, debiendo y pudiendo conocer dicha procedencia con sólo observar las mínimas cautelas, realice sobre aquellos una de las conductas que describe el tipo, causando así objetivamente la ocultación de la procedencia de tales bienes (su blanqueo). Se ha afirmado en la STS 28/2010, de 28 de enero, que si, respecto a las diferentes modalidades dolosas, el Código penal emplea las expresiones “sabiendo”, “para” y “a sabiendas” para referirse al conocimiento del origen ilícito -locuciones que equivaldrían “a tener conciencia o estar informado”-, el elemento subjetivo debe entenderse en el sentido de “tener un conocimiento práctico, derivado de la experiencia, que permita representarse algo como lo más probable en la situación dada.” Es por ello que este conocimiento exige certidumbre sobre el origen delictivo de los bienes sobre los que el agente opera, de modo que “no es suficiente la mera sospecha.” En cambio, de acuerdo con la STS 1257/2009, de 2 de diciembre, en el tipo imprudente de blanqueo “no es exigible que el sujeto sepa la procedencia de los bienes, sino que por las circunstancias del caso esté en condiciones de conocerlas sólo con observar las cautelas propias de su actividad”. Se da este tipo penal cuando el agente, pudiendo conocer el ilícito origen de los bienes sobre los que despliega su conducta, actúa “al margen de tales cautelas o inobservando los deberes de cuidado que le eran exigibles y los que, incluso, en ciertas formas de actuación, le imponían normativamente averiguar la procedencia de los bienes o abstenerse de operar sobre ellos, cuando su procedencia no estuviere claramente establecida”.

A partir de las Sentencias referidas, podemos concluir que, teniendo en cuenta las expresiones que definen las conductas típicas contenidas en el artículo 301 CP, la Sala Segunda sitúa la línea que separa el dolo eventual de la imprudencia consciente en la corroboración de un “estado anímico de certeza” respecto del origen delictivo de los

bienes en el sujeto activo (STS 857/2012, de 9 de noviembre). Sin embargo esta dirección interpretativa no es uniforme, pues en otras resoluciones el Alto Tribunal ha considerado suficiente para imputar un delito de blanqueo a título doloso eventual que el autor se represente al menos como probable la procedencia delictiva del bien sobre el que opera (SSTS 165/2013, de 26 de marzo, 811/2012, de 30 de octubre, y 303/2010, de 22 de marzo). A través de dicha línea interpretativa, como muy acertadamente han advertido CASTRO MORENO y OLIVA GARCÍA, la jurisprudencia tiende a reconducir casi todos los supuestos conflictivos hacia el dolo eventual, relegando la aplicación del tipo imprudente a un espacio “puramente marginal”<sup>225</sup>. Al ocuparnos del estudio de la doctrina de la *ignorancia deliberada*, comprobamos que no han sido pocas las ocasiones en las que la Sala Segunda ha estimado suficiente para fundamentar una condena por dolo eventual un conocimiento potencial, por parte del sujeto, sobre la ilícita procedencia de los bienes (SSTS 561/2012, de 3 de julio, y 1583/2000, de 16 de octubre, entre otras). Ya nos manifestamos en tono crítico frente esta solución, pues realmente constituye, como acertadamente expresase RAGUÉS I VALLÈS, “un auténtico sustitutivo” del elemento cognitivo del dolo<sup>226</sup> en supuestos en los que realmente no se existe -o al menos no se ha probado- el conocimiento del origen delictivo de los bienes por parte del sujeto activo<sup>227</sup>. El propio Tribunal Supremo, en su Sentencia 57/2009, de 2 de febrero, declaró que “la condena del acusado sólo puede basarse en lo que éste sabía, no en lo que debió conocer. El reproche penal por lo que se debió conocer y, sin embargo, no se conoce, no puede servir, sin más, de fundamento para la afirmación del dolo.” En cualquier caso, las nuevas tendencias jurisprudenciales, críticas con las formulaciones de la *ignorancia deliberada*, no han impedido que a día de hoy el Tribunal Supremo siga dictando sentencias equiparando, en materia de delito de blanqueo, la controvertida figura al dolo eventual (SSTS 165/2013, de 26 de marzo, 888/2012, de 22 de noviembre, 561/2012, de 3 de julio), y considerando que este título de imputación abarca los supuestos de conocimiento potencial. Con ello, la Sala Segunda olvida que dicho conocimiento potencial es precisamente el que caracteriza a

<sup>225</sup> Vid. CASTRO MORENO, A., “Consideraciones críticas sobre la aplicación e interpretación del tipo subjetivo de los delitos de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 449; OLIVA GARCÍA, H., “La defensa ante la acusación por blanqueo de dinero”, op. cit., págs. 40 y ss.

<sup>226</sup> Vid. RAGUÉS I VALLÈS, R., *La ignorancia deliberada en derecho penal*, op. cit., pág. 58. Vid., con detalle, *supra* apartado 5.2.3 de este capítulo, págs. 455 y ss.

<sup>227</sup> Supuestos en los que, en puridad, debe ser negado el dolo, pues “no se puede «saber» lo que se «ignora», por mucho que se pudiera haber conocido”. (Vid. CASTRO MORENO, A., “Consideraciones críticas sobre la aplicación e interpretación del tipo subjetivo de los delitos de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 451).

la imprudencia, que “queda absorbida por una concepción expansiva del dolo, que tiene más de «presunción» de dolo, que de auténtico y verdadero dolo”<sup>228</sup>.

### 5.6.5. EL TIPO IMPRUDENTE DE BLANQUEO: ¿DELITO COMÚN O DELITO ESPECIAL?

Un sector considerable de la doctrina especializada<sup>229</sup> ha vinculado el blanqueo imprudente a los sujetos destinatarios de la Ley 10/2010; algunos monografistas que se han ocupado de esta cuestión parecen considerar también el tipo imprudente de blanqueo como delito especial, si bien lo han expresado en términos más ambiguos<sup>230</sup>. En cualquier caso, otros autores de autorizada solvencia en materia de delito de blanqueo se han mostrado, a nuestro juicio con acierto, críticos con esta limitación del círculo de posibles sujetos activos del delito contemplado en el artículo 301.3 CP<sup>231</sup>,

<sup>228</sup> Ibidem, pág. 452.

<sup>229</sup> Vid. GÓMEZ INIESTA, D. J., *El delito de blanqueo de capitales en Derecho Español*, op. cit., pág. 60; BLANCO LOZANO, C., “El blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas en el ordenamiento penal español”, op. cit., págs. 88 y 89; CALDERÓN CERREZO, A., *Comentarios al Código penal*, vol. 3, op. cit., pág. 2301; id., “Algunos aspectos críticos del blanqueo de capitales. Legislación y jurisprudencia”, op. cit., págs. 87 y ss.; MANZANARES SAMANIEGO, J. L., *Código penal (adaptado a la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de julio). Comentarios y jurisprudencia*, op. cit., pág. 727; MARTOS NÚÑEZ, J. A., “Receptación y blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 211; MUÑOZ CONDE, F., *Derecho Penal. Parte Especial*, op. cit., pág. 516; ROBLES PLANAS, R./ PASTOR MUÑOZ, N., *Lecciones de Derecho Penal. Parte Especial*, op. cit., pág. 254; QUINTERO OLIVARES, G., *Comentarios a la Parte especial del Derecho penal*, op. cit., pág. 949; FERRÉ OLIVÉ, J. C., “Política criminal europea en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo”, op. cit., págs. 260 y 261; LANDROVE DÍAZ, G., “El blanqueo de capitales de procedencia delictiva”, op. cit., pág. 148; OLIVA GARCÍA, H., “La defensa ante la acusación por blanqueo de dinero”, op. cit., págs. 43 y ss.; LOMBARDEO EXPOSITO, L. M. de, “La perspectiva penal”, op. cit., pág. 179; CASTRO MORENO, A., “Consideraciones críticas sobre la aplicación e interpretación del tipo subjetivo de los delitos de blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 453 y ss.

<sup>230</sup> Véase la postura mantenida por CARPIO DELGADO, quien comienza admitiendo que se trata de un delito común “cuyo tipo no exige ninguna cualidad para ser sujeto de la acción” para concluir reconduciendo su posición, afirmando que “no obstante, los obligados por el (...) art. 301.3 serán todas aquellas personas o profesionales que desarrollan sus actividades como operadores en el mercado -sea éste el financiero, el bursátil o el bancario-”, pues la norma objetiva de cuidado “tiene su punto de partida en la diligencia debida exigida por las leyes.” (*El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal*, op. cit., págs. 336 y 337). Similar línea interpretativa desarrolla PALMA HERRERA, que habla de “una suerte de imprudencia profesional” que incumbe a los sujetos obligados de la Ley 19/1993, equivalente a la imprudencia grave que exige del delito culposo de blanqueo. Si bien “el hecho de que se trate de un sujeto obligado por la Ley 19/1993 no debe suponer la exigencia automática de responsabilidad, considerando grave su imprudencia en todo caso, [sino que] habrá de estar a las circunstancias del caso concreto y a la situación real de los sujetos obligados”. (*Comentarios al Código Penal*, op. cit., págs. 733 y 734).

<sup>231</sup> Vid. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C., *El delito de blanqueo de capitales*, op. cit., pág. 283; DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, J., *El blanqueo de capitales en Derecho Español*, op. cit., págs. 32 y 33; id., *El blanqueo de capitales en el Derecho español (Texto provisional)*, op. cit., pág. 8; ZARAGOZA AGUADO, J. A., “El blanqueo de bienes de origen criminal”, op. cit., págs. 394 y ss.; id., “Análisis sustantivo del delito (I): Cuestiones de interés sobre el delito de blanqueo de bienes de origen criminal: la prueba indiciaria. La comisión culposa. Nuevas orientaciones en derecho comparado”, op. cit., pág. 306; id., “La prevención del blanqueo de capitales. La comisión culposa y las profesiones jurídicas”, op. cit., pág. 76; id., “El blanqueo de bienes de origen criminal”, op. cit., págs. 374 y ss.; id., “Aspectos probatorios y técnicas de investigación en los procesos por lavado de dinero: medidas preventivas y cautelares, recomendaciones internacionales”, op.

respecto del que, en cualquier caso, deben quedar fuera, por razones obvias, quienes hayan participado en el delito del cual provienen los bienes<sup>232</sup>.

Partiendo de la literalidad del precepto, cabe preguntarse qué base legal autoriza a considerar limitado el ámbito de aplicación de dicho precepto a los sujetos obligados por la Ley preventiva. Es cierto que éstos están sometidos a determinadas obligaciones impuestas en la referida norma en orden a prevenir el blanqueo de capitales, y que su incumplimiento puede determinar la comisión de un delito de blanqueo -no sólo a título imprudente, por cierto, pues resulta obvio que también pueden cometer el delito dolosamente cuando sea posible acreditar que en ellos concurre el conocimiento y la voluntad de realizar la operación de lavado-. Pero no es menos cierto que la responsabilidad penal únicamente puede fundarse en la comisión de un hecho típico expresamente previsto en una ley penal, y que el tipo imprudente de blanqueo, de acuerdo con el tenor literal del Código, no se configura -como se ha sostenido en alguna sentencia<sup>233</sup>- como una norma penal en blanco que haya de ser perfeccionada con normas extrapenales. Es innegable, como ha advertido GALLEGO SOLER, que para la determinación del deber de cuidado al que en cada caso esté sometido el sujeto habrán de ser tenidos especialmente en cuenta los mandatos que legislación extrapenal (en este caso, la Ley 10/2010 y otra normativa sectorial) impone al sujeto. No obstante, el incumplimiento de las obligaciones legales por los sujetos obligados no lleva implícita la comisión de un delito de blanqueo imprudente: dicha conducta *puede ser* un elemento para fundamentar la responsabilidad de aquellos “al menos por imprudencia, y en algunos casos incluso por imprudencia grave”<sup>234</sup>. Sólo en estos últimos supuestos, cuando adicionalmente se vean satisfechas las demás exigencias que el tipo imprudente requiere, podrá imputarse al sujeto el delito a título culposo.

---

cit., págs. 257 y 258; id., “Artículo 301”, op. cit., pág. 1175; ÁLVAREZ PASTOR, D./EGUIDAZU PALACIOS, F., *Manual de prevención del blanqueo de capitales*, op. cit., págs. 353 y 354; URBANO CASTILLO, E. de, “Sobre las distintas modalidades del «blanqueo de dinero»”, op. cit., pág. 1250; MESTRE DELGADO, E., “Las eximentes de ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, y de cumplimiento de un deber, y el blanqueo de capitales”, *I Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, pág. 90; BAJO FERNÁNDEZ, M./BACIGALUPO SAGESSE, S., “Blanqueo de capitales”, 2ª ed., op. cit., págs. 738 y 739; GALLEGO SOLER, J. I., *Comentarios al Código Penal. Reforma LO 5/2010*, op. cit., pág. 665; LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J./ALONSO GONZÁLEZ, A./ ENCINAR DEL POZO, M. A., *Código Penal comentado con jurisprudencia sistematizada y concordancias*, op. cit., pág. 940; LOBO GONZÁLEZ, R./ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, M., *Código Penal. Parte especial. Tomo II. Vol. II*, op. cit., pág. 205.

<sup>232</sup> Vid. VIDALES RODRÍGUEZ, C., “El delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 352.

<sup>233</sup> Vid. STS 483/2007, de 4 de junio.

<sup>234</sup> Vid. GALLEGO SOLER, J. I., *Comentarios al Código Penal. Reforma LO 5/2010*, op. cit., pág. 667.

Por otro lado, téngase en cuenta que no todo incumplimiento de los deberes impuestos por la Ley preventiva genera responsabilidad penal en el sujeto vinculado: de entre todas las obligaciones que a aquél se somete, sólo podrían constituir conductas blanqueadoras aquellas cuyo incumplimiento pudiese favorecer la exitosa producción de una concreta operación de blanqueo (inobservancia del deber de identificar a los clientes, la falta de comunicación de operaciones sospechosas al SEPBLAC, la abstención de realizar determinadas operaciones en tanto no se haya realizado la oportuna comunicación, o el incumplimiento del deber de confidencialidad)<sup>235</sup>. En cambio será intrascendente para la materialización de una operación de blanqueo el incumplimiento de obligaciones “con un contenido netamente administrativo” (como pueden ser las que imponen el deber de conservación de documentos, de formación de empleados o de establecer procedimientos y órganos de control interno y de comunicación), por lo que en ningún caso el incumplimiento de dichas obligaciones determinará *per se* responsabilidad penal alguna<sup>236</sup>.

En suma, hemos de concluir que de acuerdo con la configuración legal del blanqueo imprudente, éste se conforma como un delito común, y puede ser por tanto realizado por cualquier persona que infrinja el deber de cuidado que impone, sin restricción alguna, el artículo 301.3 CP. Cuestión diferente será la determinación del deber objetivo de cuidado que incumbe al ciudadano medio, que evidentemente será *a priori* menos intensa que la exigible a sujetos a los que se les presupone unos conocimientos técnicos que les permitiría advertir, con mayor nitidez, el riesgo de que los fondos con los que se disponen a operar provienen de actividades delictivas. Pero la obligación de cuidado no sólo es exigible a los sujetos vinculados por la normativa preventiva -o a cualquier otro profesional con especiales conocimientos técnicos-. Incumbe a todo ciudadano<sup>237</sup> el deber de diligencia y la obligación de abstenerse de operar con fondos respecto a los que sospeche su origen delictivo, por lo que el tipo

<sup>235</sup> Vid. ZARAGOZA AGUADO, J. A., “El blanqueo de bienes de origen criminal”, op. cit., págs. 399 y ss.

<sup>236</sup> Vid. ZARAGOZA AGUADO, J. A., “Artículo 301”, op. cit., pág. 1178.

<sup>237</sup> Para BLANCO CORDERO, la literalidad del artículo 301.3 CP conduce a concebir el blanqueo imprudente como un delito común, pues el precepto impone con carácter general un deber de diligencia que obliga “a actuar de forma prudente para evitar realizar un delito de blanqueo de capitales”. Sin embargo, la infracción de dicho deber por cualquier ciudadano se podría valorar como una infracción leve de dicha norma de cuidado, en contraste con la gravedad que supone la infracción de los deberes que asumen los sujetos obligados por la normativa preventiva: sólo a ellos “se les va a poder exigir una precaución superior a lo normal”, de forma que implícitamente, a juicio del autor, la imprudencia grave únicamente podrá apreciarse respecto a determinados “grupos profesionales, principalmente en el ámbito del sector financiero y grupos profesionales similares que se encuentran legalmente obligados a cumplir con una serie de deberes de diligencia”. (*El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 755-758 *passim*).

imprudente de blanqueo ha de considerarse un delito común, sin restricción expresa respecto al círculo de posibles sujetos activos.

Por su parte, la jurisprudencia ha venido pronunciándose a este respecto de una manera ciertamente confusa y vacilante<sup>238</sup>, sin mantener una dirección interpretativa clara hasta la STS 1034/2005, de 14 de septiembre<sup>239</sup>. La propia Sala Segunda ha reconocido (entre otras, en la STS 960/2008, de 26 de diciembre) que hasta la Sentencia de 2005, la doctrina jurisprudencial se había mostrado despreocupadamente ambivalente, manteniendo simultáneamente ambas líneas interpretativas: tanto la que defendía la limitación del ámbito de aplicación del artículo 301.3 CP a los sujetos vinculados por la legislación administrativa en materia de prevención de blanqueo como aquella otra que mantenía que el tipo imprudente de blanqueo constituía un delito común.

Para justificar la tesis de la configuración del tipo imprudente de blanqueo como delito especial, incluso en resoluciones posteriores a la Sentencia 1034/2005, el Alto Tribunal ha partido del argumento de la dificultad dogmática de admitir la comisión imprudente en “tipos penales que incorporan elementos subjetivos del injusto (...) sobre todo cuando, como sucede en el presente caso, el legislador no crea un tipo distinto en el que se describen las correspondientes conductas basadas en la infracción del deber de diligencia.” (STS 483/2007, de 4 de junio). Dado que el artículo 301.3 CP no prevé cuál es el origen del deber objetivo de cuidado exigible en el caso concreto y quiénes son los sujetos destinatarios de las reglas de prudencia, la STS 483/2007 considera que, en principio, puede serlo cualquier persona que incurra en grave dejación del deber de diligencia exigible o meramente esperable de cualquier persona precavida. Sin embargo -continúa la resolución-, “cabe sostener (...) que el tipo reviste los caracteres de un delito especial, en la medida en que su comisión sólo estará al alcance de personas cuya conducta sea reprobable por la infracción de específicos deberes de cuidado que le sean

---

<sup>238</sup> Vid. BERMEJO, M. G./ AGUSTINA SANLLEHÍ, J. R., “El delito de blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 453.

<sup>239</sup> Véase como tan sólo unos meses antes, la Sala 2ª había resuelto en sentido contrario: en la Sentencia 924/2005, de 17 de junio, se considera al blanqueo imprudente como delito especial que cuyos sujetos son las personas que tienen el especial deber de controlar las operaciones sospechosas de blanqueo. Esta línea jurisprudencial no ha sido abandonada, pues aunque en un sentido mayoritario acoge la tesis del blanqueo imprudente como delito común, la Sala Segunda en sentencias posteriores a la de 17 de junio de 2005 ha afirmado que “sólo pueden ser sujetos activos aquellos los sujetos obligados por la normativa administrativa de prevención del blanqueo de capitales que incumplan las obligaciones legalmente establecidas (SSTS de 17-6-2005, y parece apuntar en este sentido la STS de 25-4-2007).”



exigibles legal o reglamentariamente, en consideración al desempeño de determinadas actividades con carácter profesional o funcionarial. Y en concreto a los sujetos obligados a que se refiere la Ley (...) a quienes se imponen las obligaciones de identificación de clientes, examen de determinadas operaciones, comunicación de operaciones a la Administración y abstención de realizar operaciones sospechosas de ilegalidad (...), con lo que el tipo imprudente es tipo penal en blanco que debe integrarse mediante remisión a dicha normativa administrativa.” Esta solución vendría avalada por la vigencia de los principios de intervención mínima, taxatividad y seguridad jurídica, toda vez que el artículo 301.3 CP no aporta ningún criterio que permita distinguir entre la culpa grave, punible, y negligencia leve. (SSTS 924/2005, de 17 junio, y 1034/2005, de 14 de septiembre). En cualquier caso, aunque el blanqueo por imprudencia grave se interpretase como un delito común -reza la STS 969/2007, de 23 de noviembre- sería difícil apreciar su comisión por sujetos no vinculados por la normativa preventiva.

Aunque existen Sentencias posteriores, incluso recientes, que califican el blanqueo imprudente como delito especial (STS 16/2009, de 27 de enero), en la actualidad esta línea jurisprudencial es minoritaria frente la tesis cada vez más consolidada que interpreta el tipo previsto en el artículo 301.3 CP como un delito común, tal y como expresamente se reconoce en la STS 801/2010, de 23 de septiembre.

La línea jurisprudencial que identifica el blanqueo por imprudencia grave como delito común partió de la Sentencia de la Sala de lo Penal (Sección 1ª) de la Audiencia Nacional de fecha 1 de junio de 1999, y fue refrendada por resoluciones posteriores del mismo órgano jurisdiccional (Sentencia 12/2002, de 8 de abril, de la Sección 2ª de la misma Sala, que fue confirmada en casación por la STS 1746/2003). Ya en la resolución de la Audiencia Nacional de 1999 se identificó el tipo imprudente de blanqueo como delito común que puede cometer cualquier persona, ya que a todos los ciudadanos están vinculados por un deber objetivo de cuidado que les obliga a advertir el riesgo que determinadas operaciones económicas o comerciales se materialicen en un resultado de blanqueo de capitales. Como hemos dicho, tras un sinfín de vacilaciones, la Sala Segunda dispuso en su Sentencia 1034/2005, de 14 de septiembre, que el tipo imprudente de blanqueo ha de considerarse un delito común. Esta la resolución ha sido recurrentemente invocada por Sentencias más recientes para afianzar definitivamente

esta línea interpretativa. Así, en la STS 960/2008, de 26 de diciembre, el Alto Tribunal expresa, como exégesis jurisprudencial finalmente consolidada, que:

“Aunque existen sentencias discrepantes, la jurisprudencia de esta Sala, de la que es exponente la número 1034/2005, de 14 de septiembre, tiene declarado que a pesar de las divergencias existentes al respecto en la doctrina, puede concluirse que el supuesto previsto en el artículo 301.3 CP es un *delito común*, de manera que puede ser cometido por cualquier ciudadano, en la medida en que actúe con falta del cuidado socialmente exigible para evitar el daño al bien jurídico protegido, y, por tanto, todos los ciudadanos tienen un deber de diligencia que les obliga a actuar prudentemente para evitar realizar un delito de blanqueo.”

En resoluciones posteriores, el Tribunal Supremo ha consolidado esta orientación jurisprudencial, considerando que cualquier persona es sujeto destinatario de las reglas de prudencia que el artículo 301.3 CP impone (SSTS 997/2013, de 19 de diciembre, 857/2012, de 9 de noviembre, 801/2010, de 23 de septiembre, 1257/2009, de 2 de diciembre, 960/2008, de 26 de diciembre, 16/2009, de 27 de enero, 483/2007, de 7 de junio, 34/2007, de 1 de febrero, y ATS 145/2014, de 23 enero).

La cuestión que a continuación se plantea el Alto Tribunal es cómo determinar el *quantum* de la gravedad en la infracción del deber objetivo de cuidado para determinar la responsabilidad penal por blanqueo imprudente en aquellos casos en los que los destinatarios de la norma no están sujetos al cumplimiento de determinadas obligaciones normativamente instituidas, como ocurre con los sujetos no vinculados por la normativa administrativa de prevención del blanqueo. Evidentemente, la infracción del deber objetivo de cuidado no puede aparecer referenciada a través de una normativa a la que el ciudadano medio no se encuentra sujeto. Ya en la STS 1034/2005, de 14 de septiembre, se dijo que el cuidado objetivamente debido, en aquellas actividades sociales en que no se han establecido normas de cuidado, se determinará atendiendo al “criterio de la conducta que observaría en esa situación concreta una persona inteligente y sensata de la misma profesión o círculo social, y si es en el ámbito de los negocios cuál sería la actitud con respecto a la realización de operaciones comerciales extrañas (pago con elevadas sumas en metálico, transferencias a o de paraísos fiscales, etc.). Supuesto, por tanto, que todos los ciudadanos tienen un deber de diligencia que les obliga a actuar prudentemente para evitar realizar un delito de blanqueo, la distinción

entre imprudencia grave y leve, a pesar de su sutilidad y dificultad, radicaré en la gravedad de la infracción de la norma de cuidado, caracterizándose la primera por la omisión de todas las precauciones o al menos una grave infracción de normas elementales de cuidado”<sup>240</sup>.

### **5.6.6. CONCLUSIONES Y TOMA DE POSICIÓN**

El tipo de blanqueo por imprudencia grave se configura como un delito común. Ninguna restricción en cuanto al sujeto activo prevé el artículo 301.3 CP. El Código penal exige en los delitos culposos que la imprudencia sea grave, y es cierto, como apuntan BLANCO y CASTRO MORENO, que dicho grado imprudencia se apreciará normalmente y con mayor facilidad en aquellos casos en los que la infracción del deber de cuidado sea llevada a cabo por sujetos obligados<sup>241</sup>, u otras personas, cabría añadir, que por razón de su oficio o actividad queden especialmente vinculados por la norma de cuidado que impone a todo sujeto la obligación de evitar operar con fondos de origen delictivo. Para el resto de sujetos, la determinación del deber objetivo de cuidado dependerá del ámbito al que pertenezca el sujeto (nivel cultural, actividad profesional, círculo social, etc.) tomando como modelo el ciudadano medio al que la jurisprudencia suele acudir en estos casos (la conducta que habría observado, en esa situación concreta, una persona inteligente y sensata de la misma profesión o círculo social).

El elemento nuclear del blanqueo por imprudencia grave, en torno al cual pivotan los demás requisitos típicos, está constituido por la infracción del deber de cuidado, considerada como la contravención de las más elementales normas de cuidado

---

<sup>240</sup> En la resolución comentada, se justificó la condena por blanqueo imprudente al agente por haber actuado “con significativa dejación del cuidado y determinante abandono de las precauciones usuales del caso.” Invocando los fundamentos de derecho de la sentencia dictada por el Tribunal *a quo*, consideró la Sala Segunda “que el acusado, junto a la actividad encaminada a ocultar el origen de un dinero procedente del narcotráfico aparece que: a) pudo conocer ese origen; b) pudo evitar llevar a cabo la actividad de ocultación; c) debió conocer el origen; d) debió evitar tal actividad. Y que esos deberes, aunque no derivados de la Ley de Blanqueo de Capitales de 28-12-93, ni de sus disposiciones reglamentarias, vienen impuestos por la exigencia de evitar los riesgos para la salud pública que encierra el favorecimiento del negocio consistente en el tráfico de estupefacientes. (...) Cuando el conocimiento no existe y sólo cabe hablar de una sospecha más o menos vehemente, que el sujeto omitiendo la diligencia debida, no comprueba, se dará la comisión culposa.”

<sup>241</sup> Vid. BLANCO CORDERO, I., *El Delito de Blanqueo de Capitales*, 3ª ed., op. cit., págs. 755 y ss.; CASTRO MORENO, A., “Consideraciones críticas sobre la aplicación e interpretación del tipo subjetivo de los delitos de blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 453 y ss. En cualquier caso, el deber de cuidado cuya inobservancia determina la imprudencia grave, como apunta BLANCO LOZANO, en ningún caso ha de confundirse con un deber general impuesto a todos los ciudadanos dirigido a “la investigación y conocimiento de la procedencia de todos los bienes (...) que circulan en el tráfico económico”, así como de “los movimientos económicos ajenos”. (“El blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas en el ordenamiento penal español”, op. cit., págs. 88 y 89).

que hubiese observado una persona diligente en las actividades de la vida situada en ese mismo entorno social o profesional. En el ámbito del delito de blanqueo, el deber de cuidado va dirigido especialmente a tomar las cautelas y precauciones necesarias para asegurarse de que los bienes con los que el agente se dispone a operar no tienen origen delictivo.

Para la determinación del deber de cuidado exigible al sujeto deben ser tenidos en cuenta los criterios objetivos de prudencia estándar que habría observado el hombre medio diligente situado en el ámbito al que pertenezca el sujeto. Cuando éste se encuentra vinculado por determinadas obligaciones impuestas por la normativa de prevención de blanqueo, el incumplimiento de aquéllas será concluyente en buena parte de los casos, si se quiere, a modo de indicio, para considerar infringida la norma objetiva de cuidado. En aquellos otros supuestos en los que el sujeto opera en actividades respecto a las que no se han establecido normas de cuidado, debe recurrirse al criterio del hombre medio: la imprudencia se considerará grave cuando el agente no haya observado las cautelas que observaría una persona prudente, diligente y sensata de equivalentes aptitudes y de la misma profesión o entorno social.

Además de la infracción de la norma de cuidado, debe constatarse la presencia de ulteriores elementos: en primer lugar, la previsibilidad del riesgo o peligro de que la conducta del agente contribuya a materializar una concreta operación de blanqueo; y en segundo lugar, que la infracción del deber objetivo de cuidado haya ocasionado la efectiva producción de ese resultado de blanqueo de capitales, conforme a los criterios establecidos por la teoría de la imputación objetiva (creación de una ocasión de riesgo jurídicamente desaprobado, y concreción de ese riesgo en el resultado que la norma penal trata de evitar).

Teniendo presentes los especiales elementos subjetivos que exigen las diferentes modalidades típicas en que el delito de blanqueo se puede presentar, a nuestro parecer el tipo imprudente de blanqueo puede acontecer de las siguientes formas:

a) En los supuestos de *adquisición, posesión, utilización, conversión o transmisión* de bienes del artículo 301.1 CP, cuando el agente realice la efectiva adquisición, posesión, utilización, conversión o transmisión del bien de ilícita

procedencia, desconociendo el origen delictivo de los bienes como consecuencia de la falta del cuidado objetivo que le era exigible.

b) En los supuestos de *ocultación o encubrimiento* “de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos” (*ex* artículo 301.2), cuando se produzca la ocultación o el encubrimiento debido al desconocimiento por parte del agente del origen delictivo de los bienes por falta del cuidado objetivo que le era exigible.

Sin embargo, a nuestro juicio, no cabe afirmar la modalidad imprudente de blanqueo en los supuestos de realización de *cualquier otro acto con las finalidades de ocultar, encubrir o ayudar* (...). La exigencia de las finalidades referidas, que constituyen verdaderos elementos subjetivos del tipo especialmente vinculados al dolo, hace incompatible esta conducta con su comisión imprudente. Dichas conductas precisan la concurrencia del dolo directo de primer grado, no admitiéndose el dolo eventual y, con mayor motivo, la imprudencia.

Como hemos visto, el ámbito subjetivo de las diferentes modalidades típicas de blanqueo viene marcado por la determinación del grado de conocimiento, por parte del agente, del riesgo de operar con fondos de procedencia delictiva. En el tipo doloso, es preciso al menos que el agente se represente como altamente probable que los fondos con los que opera provienen de un hecho delictivo; en el tipo imprudente el sujeto, sin conocer el origen delictivo de los bienes, ha de estar en condiciones de conocerlas sólo con observar las cautelas propias de su actividad, atendiendo a las circunstancias del caso concreto. A nivel práctico, existen casos dudosos en los que ambos títulos de imputación subjetiva se aproximan, y en los que no resulta sencillo determinar su calificación como supuestos de dolo eventual o de culpa consciente. Los criterios que a dicho efecto se han manejado por la jurisprudencia no han sido todo lo precisos y uniformes que cabría desear para diferenciar ambos títulos de imputación subjetiva, a los que se asocian consecuencias penológicas tan diferenciadas. Como han advertido OLIVA GARCÍA y CASTRO MORENO, resulta excesivamente acentuada la tendencia jurisprudencial a calificar los supuestos dudosos como doloso eventuales<sup>242</sup>, si bien

---

<sup>242</sup> Acertadamente ha denunciado OLIVA GARCÍA la progresiva tendencia jurisprudencial a calificar los supuestos dudosos como doloso eventuales: “Se empezó por mantener que el dolo no requiere volición, y se camina ahora en la línea de afirmar que tampoco exigen cognición, o que -como mucho- ésta se conforma con el mero conocimiento potencial del peligro que encierra la acción. Cuando ello, precisamente, es lo que

podemos encontrar Sentencias en las que, con mayor acierto, para imputar un delito de blanqueo a título de dolo eventual la Sala Segunda exige cierto estado de conocimiento próximo a la certeza del origen delictivo de los bienes sobre los que el agente opera, reputando para ello insuficiente la mera sospecha (STS 857/2012, de 9 de noviembre). No consideramos jurídicamente admisible la línea jurisprudencial mantenida en otras sentencias en las que la Sala Segunda fundamenta la condena por dolo eventual a través de la mera concurrencia en el agente de un *conocimiento potencial* sobre la ilícita procedencia de los bienes con los que opera ante situaciones sospechosas, y menos aún el recurso a la doctrina de la *ignorancia deliberada* como fórmula sustitutiva del elemento cognitivo del dolo<sup>243</sup>. La colocación en situación de desconocimiento provocado por parte del agente, habrá de ser valorada junto a las demás circunstancias en orden a determinar si, en ese caso concreto, indiciariamente puede deducirse la representación en el sujeto de operar con fondos de origen delictivo como altamente probable. En ese caso, el desconocimiento provocado constituirá un indicio de gran peso acreditativo que, en unión con otros indicios que apunten en la misma línea, permitirá inferir a través de la técnica de la prueba indirecta el efectivo conocimiento o representación, por parte del autor, del origen delictivo de los bienes. Sin embargo, si a través de la prueba indiciaria, no puede acreditarse el conocimiento de la naturaleza delictiva de los bienes por con los que el sujeto opera, la fórmula del desconocimiento provocado no será *per se* suficiente para fundamentar una condena a título de dolo eventual. Deberá en este caso valorarse si el referido desconocimiento tiene origen en la contravención de las más elementales normas de cuidado que hubiese observado una persona diligente para detectar los signos que pudieran llevar a la sospecha de la procedencia ilícita del dinero -atendiendo a la previsibilidad del riesgo-, en orden a atribuir al agente un delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave.

Además de las situaciones de ignorancia deliberada, muchos de los supuestos de blanqueo imprudente tendrán origen en un *error de tipo vencible* en que haya incurrido el sujeto activo. Como ha advertido CARPIO DELGADO<sup>244</sup>, cuando el desconocimiento o

---

siempre ha caracterizado a la imprudencia consciente, de modo que ésta queda absorbida por una concepción expansiva del dolo, que tiene más de «presunción» de dolo, que de auténtico y verdadero dolo. Todo ello, además, en perjuicio del reo.” (“La defensa ante la acusación por blanqueo de dinero”, op. cit., págs. 40, 42 y 43). En el mismo sentido, vid. CASTRO MORENO, A., “Consideraciones críticas sobre la aplicación e interpretación del tipo subjetivo de los delitos de blanqueo de capitales”, op. cit., págs. 449 y ss.

<sup>243</sup> Vid. RAGUÉS I VALLÈS, R., *La ignorancia deliberada en derecho penal*, op. cit., pág. 58.

<sup>244</sup> Vid. CARPIO DELGADO, J. del, *El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal*, op. cit., págs. 335 y 336. Vid. asimismo MARTOS NÚÑEZ, J. A., “Receptación y blanqueo de capitales”, op. cit., pág. 211.

el conocimiento erróneo del origen delictivo de los bienes sobre los que aquél vaya a actuar hubiera podido evitarse prestando la debida atención, esto es, cuando se deba a una negligencia o falta de comprobación, el error será generalmente considerado vencible, y la conducta será constitutiva del tipo imprudente del artículo 301.3 CP.

En cualquier caso, teniendo en cuenta las dificultades dogmáticas que presenta blanqueo por imprudencia, derivadas fundamentalmente de la naturaleza esencialmente dolosa a que responden las diferentes modalidades típicas previstas en los números 1 y 2 del artículo 301 CP, y de la indefinición del criterio valorativo de la gravedad de la imprudencia que dificulta su diferenciación con la imprudencia leve -no punible-, especialmente cuando aquélla se atribuye al ciudadano común, consideramos recomendable una interpretación restrictiva del tipo imprudente de blanqueo de capitales.

## CONCLUSIONES

### I

El fenómeno del blanqueo de capitales de origen delictivo es, en la actualidad, motivo básico de preocupación, tanto para los diferentes Estados que integran la comunidad internacional como para diversas instituciones que operan en la misma. Se afirma que el blanqueo de capitales provoca profundas alteraciones en el sistema económico-financiero a nivel mundial y que dicho fenómeno guarda una estrecha vinculación con otra realidad aún más preocupante: la criminalidad organizada.

### II

En las últimas décadas, los fenómenos delincuenciales han variado notablemente. La delincuencia tradicional, representada fundamentalmente por delitos que atentan contra bienes jurídicos personales e individuales, ha dado paso a nuevos comportamientos delictivos más complejos y cuyo objeto principal es la obtención de altos rendimientos económicos, a través de estructuras criminales más desarrolladas y organizadas que, en muchas ocasiones, traspasan las fronteras de los Estados. Para el aprovechamiento eficaz de los rendimientos económicos ilícitamente obtenidos, resulta imprescindible hacer desaparecer de ellos cualquier rastro del origen delictivo y darles apariencia de licitud para facilitar su incorporación disimulada al circuito económico legal, permitiendo así su libre disfrute y evitar levantar sospecha sobre la previa realización de actividades criminales. Se puede decir que con la reintegración de los fondos ilícitamente obtenidos en el sistema económico legal, se culmina el plan criminal de la delincuencia económica.

Se ha comprobado que una de las estrategias más eficientes para combatir este tipo de delincuencia es privar a sus integrantes de los altos beneficios que obtienen mediante sus actividades delictivas. La lucha contra el blanqueo de capitales constituye,



así, una eficaz medida disuasoria y de erradicación de estos fenómenos delictivos, en especial de la criminalidad organizada.

### III

De forma paralela al proceso de globalización de la economía y al progresivo desarrollo de las nuevas tecnologías y del ciberespacio operados en las últimas décadas, el fenómeno del blanqueo de capitales ha experimentado notables transformaciones. En la actualidad, se constata la marcada tendencia internacional de, al menos, las formas más perfeccionadas de blanqueo. De manera habitual, los activos ilícitos son trasladados desde el Estado en el que ha tenido lugar la actividad delictiva a otros territorios caracterizados por disponer de escasos controles administrativos sobre los capitales, los denominados refugios financieros, paraísos fiscales o plazas *offshore*.

Quizá sea, precisamente, la existencia de paraísos fiscales uno de los mayores obstáculos para combatir eficazmente el blanqueo de capitales. Por ello, llama poderosamente la atención que hayan sido y sigan siendo tan escasos los esfuerzos desplegados por la comunidad internacional y por muchos de los Estados que la integran para su erradicación. Si de verdad se tiene intención de luchar de forma eficiente contra el blanqueo de capitales, es preciso dar inicio al desarrollo de políticas verdaderamente eficaces destinadas a acabar de forma definitiva con estos verdaderos “paraísos del reciclaje”.

### IV

Tanto la doctrina científica como los diversos operadores internacionales suelen vincular el fenómeno del blanqueo con otra realidad criminal que en las últimas décadas es motivo, con razón, de extremada preocupación: la criminalidad organizada. Sin embargo, no ha de identificarse en todos los casos, como desde determinados foros se pretende hacer creer para magnificar la nocividad del blanqueo de capitales, dicho fenómeno delictivo con la criminalidad organizada. Si bien las organizaciones criminales han de acudir regularmente a los más sofisticados métodos de blanqueo para transformar los elevados rendimientos procedentes de sus operaciones ilícitas y

reintroducirlas en el tráfico normalizado, debe advertirse que no toda operación de blanqueo está relacionada con la delincuencia organizada. También los beneficios derivados de los hechos delictivos cometidos por agentes individuales, o por agrupaciones delincuenciales que estructuralmente no pueden identificarse con las más graves formas de asociación delictiva, han de ser reincorporadas a los cauces económicos legales para su pacífico disfrute.

## V

La progresiva internacionalización del fenómeno del blanqueo de capitales ha demandado una mayor coordinación entre Estados con objeto de contener el fenómeno de manera eficaz. En la década de los años 80 del siglo pasado surgieron los primeros instrumentos normativos internacionales relativos al fenómeno criminal que aquí se estudia, y desde entonces se ha intensificado la cooperación supranacional con el objetivo de erradicarlo. Dicha cooperación dio inicio con la aprobación de la Convención de Viena contra el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias psicotrópicas, de 1988. Poco después, en 1989, se creó el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Sus 40 Recomendaciones, sometidas a periódicas revisiones, constituyen el instrumento normativo internacional con mayor incidencia práctica en materia de prevención y represión del blanqueo. También, en el marco europeo, se han dictado sucesivas Directivas para combatir el blanqueo de capitales desde una perspectiva preventiva. El 20 de mayo de 2015, fue aprobada la IV Directiva (UE 2015/849) del Parlamento Europeo y el Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

## VI

En el ámbito del Ordenamiento español, la lucha contra el blanqueo se articula a través de normativa administrativa, de carácter esencialmente preventivo, y de la previsión, en el Código penal, del delito de blanqueo. En los dos ámbitos, las fórmulas de erradicación del blanqueo han experimentado notables transformaciones en los últimos años, caracterizándose por un progresivo ensanchamiento.

La normativa administrativa básica en materia preventiva está conformada por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo. Además, existe normativa complementaria de rango inferior, conformada por Órdenes Ministeriales y disposiciones reglamentarias en materia de control de cambios, además de diversa normativa de diferente rango que afecta directa o indirectamente a la prevención del blanqueo de capitales.

Como principal novedad de la Ley 10/2010, destaca el enfoque orientado al riesgo. Dicho concepto, inspirado en la revisión de las Cuarenta Recomendaciones del GAFI de febrero de 2012, posee un doble propósito: incrementar la eficiencia de las medidas a aplicar, y a su vez flexibilizar una norma dirigida a un colectivo muy heterogéneo de sujetos. De acuerdo con el nuevo enfoque, se establecen unos requerimientos básicos y comunes para todos los sujetos obligados, permitiendo asimismo un margen de adaptación de la aplicación de la norma a la realidad específica de la actividad que cada sujeto desarrolla. Asimismo, se limitan las obligaciones procedimentales para los sujetos de tamaño más reducido, y se incrementan determinadas exigencias cuando la dimensión y volumen de negocio del sujeto obligado así lo precisen.

## VII

La persecución penal del blanqueo de capitales se ha caracterizado por una progresiva intensificación: si el delito de blanqueo nació como un instrumento para combatir la criminalidad organizada, en la actualidad el artículo 301 CP instituye un concepto de blanqueo mucho más amplio que abarca a la legitimación de los beneficios derivados de toda actividad delictiva. Un análisis de las sucesivas reformas del Código penal vigente permite comprobar que el delito de blanqueo ha sido objeto de una preocupante expansión, experimentado un radical aumento no sólo en su ámbito de aplicación, sino también en las formas comisivas a través de las cuales aquél puede manifestarse. Ante este fenómeno de capital trascendencia, censurado de manera general por la doctrina especializada como expresión paradigmática de la actual “expansión del Derecho penal”, hemos de manifestar nuestro más enérgico rechazo. La lucha contra el blanqueo no debe abordarse ampliando el ámbito objetivo del tipo penal

que lo incrimina hasta niveles extraordinarios, sino a través de sistemas de prevención realmente eficaces. Sólo de ese modo podrá combatirse de manera efectiva el pernicioso fenómeno objeto de nuestro estudio sin comprometer los principios de *ultima ratio* e intervención mínima, que operan como criterios informadores básicos del Derecho penal.

## VIII

Como consecuencia de las sucesivas reformas operadas en el artículo 301 CP, en la actualidad el delito de blanqueo presenta unos contornos casi inabarcables. Con razón ha afirmado FABIÁN CAPARRÓS que este delito se ha convertido en una “suerte de agujero negro, capaz de devorar cualquier conducta que se le aproxime”. Resulta preciso interpretar el tipo penal de forma restrictiva para reducir su excesiva amplitud. A esta labor de depuración contribuirá no sólo la interpretación teleológica del tipo, sino también el recurso a determinados institutos dogmáticos de carácter normativo que determinan la atipicidad de aquellas conductas que, aun coincidiendo formalmente con la descripción típica, no entrañan una lesión o puesta en peligro de suficiente entidad para el bien jurídico protegido por el delito, o no crean un riesgo jurídicamente desaprobado para el mismo. Por último, la diferente naturaleza que corresponde a cada una de modalidades típicas en que el delito de blanqueo se puede presentar, así como las exigencias que cada una de ellas requiere, permitirán asimismo restringir el ámbito de aplicación del blanqueo cometido por imprudencia y por comportamientos omisivos.

## IX

De acuerdo con la doctrina dominante, la función esencial del Derecho penal es la protección de bienes jurídicos. Dos son las funciones básicas que cumple el bien jurídico: de un lado, la función crítica o legitimadora, que opera como instrumento político-criminal para la fundamentación y limitación de la génesis y formulación de los tipos penales, y a través de la cual se determina qué ha de ser objeto de protección por el Derecho penal; de otro lado, la función interpretativa, que permite tanto interpretar el contenido de la norma que incorpora determinado tipo penal como delimitar su alcance y ámbito de protección.

La función interpretativa adquiere gran relevancia para el estudio y exégesis del delito de blanqueo de capitales, pues aportará decisivos argumentos para la reducción teleológica del tipo penal, delimitando el ámbito de aplicación de la norma y excluyendo del mismo comportamientos que, aun encajando en la literalidad del precepto, no supongan la efectiva lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido. Para ello, resulta preciso determinar previamente cuál es el bien protegido que el delito de blanqueo está llamado a tutelar, cuestión que, lejos de ser pacífica en la doctrina, sigue siendo objeto de debate y polémica. Además de distintas tesis pluriofensivas, de gran peso en la actualidad, que sostienen que son diversos los bienes jurídicos protegidos por el delito de blanqueo, la doctrina científica ha interpretado mayoritariamente que el delito de blanqueo protege el orden socioeconómico o diversas manifestaciones del mismo.

## X

Para un sector minoritario de la doctrina, el delito de blanqueo de capitales está llamado a proteger el *bien jurídico que es objeto de tutela por el delito previo*. De acuerdo con esta tesis, que tuvo mayor relevancia bajo la vigencia de los antiguos artículos 344 bis h) y 344 bis i) del Texto refundido de 1973, se dijo que el blanqueo de capitales protegía la *salud pública*, dada la ubicación del tipo en el Capítulo dedicado por el Código anteriormente vigente a los delitos de tráfico de drogas. Sin embargo, de acuerdo con la formulación legal actualmente vigente, el blanqueo de capitales se configura como un delito autónomo, y debe descartarse toda interpretación que asocie el bien jurídico que pretende tutelar con el objeto de protección del delito previo, máxime teniendo en cuenta que, a la luz de la actual redacción del artículo 301 CP, resulta indiferente cuál haya sido el delito previo origen de los bienes objeto del delito. La concepción que identifica al bien jurídico protegido del blanqueo con aquel otro que es tutelado por el delito previo debe ser rechazada de plano, pues, de conformidad con el principio de lesividad, la incriminación de un delito únicamente halla justificación en el efectivo menoscabo de un bien jurídico. El delito de blanqueo posee un injusto propio y desvinculado del referido al hecho delictivo previo.

## XI

Desde otro sector doctrinal, se ha afirmado que es el buen funcionamiento de la *administración de justicia*, o determinados intereses relacionados con la misma, el bien jurídico susceptible de afección, dada la proximidad del blanqueo con los delitos de receptación y favorecimiento. Asimismo, se dice que la incorporación al texto punitivo del delito de blanqueo despliega beneficiosos efectos para trascendentes intereses asociados a la administración de justicia. Sin embargo, no ha de confundirse la naturaleza encubridora de algunas de las conductas incriminadas ni el manifiesto interés que pueda existir para los poderes públicos en dificultar el desarrollo de cierto tipo de delincuencia con el bien jurídico que el tipo de blanqueo está llamado a proteger, a la luz del cual haya de interpretarse el precepto que lo positiviza. La incriminación del blanqueo como tipo autónomo e independiente permite concluir que el fenómeno criminal que el legislador penal pretende erradicar es mucho más complejo que el que subyace a los comportamientos favorecedores, que por otro lado encuentran encaje a través de otro tipo diferenciado previsto en el Código, la figura delictiva del encubrimiento (artículo 451).

## XII

La reintroducción de las ganancias obtenidas a través de actividades delictivas en los canales económico-financieros seguros produce graves perjuicios a diversos aspectos del orden socioeconómico, constituyendo éste el bien jurídico que el tipo persigue salvaguardar. En la actualidad, esta tesis, avalada por la ubicación sistemática del delito de blanqueo en el Código penal, se perfila, junto a determinadas concepciones pluriofensivas, como mayoritaria.

La doctrina, no sólo aquélla que ha estudiado el fenómeno del blanqueo desde perspectiva penal, coincide en señalar el impacto negativo que la legalización de grandes masas patrimoniales puede producir tanto en variables macroeconómicas como microeconómicas del sistema constitucionalmente establecido. Tal y como ha advertido MOLONA MANSILLA, por un lado, los procesos de reintegración inciden negativamente en el normal funcionamiento del orden económico y financiero, tanto nacional como internacional. La introducción de elevadas cantidades de riqueza “sucia” en el tráfico legal puede provocar la volatilidad de los tipos de cambio y de interés, y, en economías

poco consolidadas, llegar a causar graves problemas de liquidez e incluso incrementar el déficit con terceros países. Por otro lado, los procesos legitimadores despliegan perniciosos efectos en la buena marcha de la economía de mercado y en la libre competencia, su pilar básico. Los mecanismos de blanqueo no obedecen a los criterios de racionalidad económica que naturalmente rigen los mercados, pues están orientados a aflorar de la manera más eficaz y menos llamativa los fondos de procedencia delictiva, recurriendo, si es necesario, a inversiones de escaso rendimiento o incluso deficitarias. La difusión de estas prácticas, contrarias a criterios de rentabilidad a los que el mercado naturalmente obedece, desvirtúa las propias reglas en que aquél se asienta, provocando a la postre un elevado riesgo de corromperse de manera generalizada.

Paralelamente, teniendo en cuenta que la reintegración en el mercado legal de recursos ilícitos se articula a través de la desviada utilización y de la manipulación de los instrumentos y mecanismos legítimos que ofrece el tráfico financiero y mercantil, las conductas de blanqueo inciden negativamente en la credibilidad y en la confianza depositada tanto en los referidos instrumentos como en el tráfico normalizado y en la propia economía de mercado, a los que aquéllos están llamados a servir. Teniendo presente que la estabilidad y el adecuado funcionamiento del sistema económico-financiero y de los mecanismos a través de los que aquél se articula dependen en buena medida de la confianza que en ellos tienen los diferentes operadores, la falta de confianza y credibilidad por parte de aquéllos en el conjunto del sistema, derivada de la proliferación de los procesos de reintegración de recursos de origen delictivo, puede incidir de forma considerablemente negativa en su estabilidad y en su correcto funcionamiento.

### XIII

Teniendo en cuenta la ubicación sistemática del delito de blanqueo en el Código penal, así como la afectación que comportan los actos legitimadores sobre diversas manifestaciones del sistema económico -la estabilidad del sistema económico-financiero, la economía de mercado y el uso normalizado de los instrumentos y mecanismos legítimos al servicio del tráfico financiero y mercantil- y la incidencia de todas ellas no sólo en el conjunto de la sociedad sino también en los individuos que la conforman, a nuestro juicio, es el orden socioeconómico el bien jurídico protegido que

justifica la incriminación del blanqueo de capitales y a la luz del cual ha de ser interpretado el tipo penal.

Ha de admitirse que algunas modalidades típicas, caracterizadas por su naturaleza encubridora o favorecedora, también pueden incidir negativamente en intereses relacionados con la administración de justicia. En efecto, en muchos supuestos una operación de blanqueo puede contribuir a la destrucción de elementos de prueba y a dificultar tanto la investigación en el marco del proceso por el delito previo como la persecución de los responsables y el resarcimiento de los daños a los perjudicados. Y no debemos olvidar que, asimismo, el reciclaje fomenta en general el mantenimiento de la actividad delincencial, en tanto que constituye la culminación del ciclo productivo de los delitos lucrativos y genera rendimientos que posibilitan la financiación de nuevas actividades criminales, sobre todo en el ámbito de la delincuencia organizada. En este sentido, es posible afirmar que el delito de blanqueo de capitales también incide negativamente en la administración de justicia en materia penal. Podría considerarse entonces que si los intereses relacionados con ésta pueden verse afectados, la incriminación del delito de blanqueo proyecta sobre los mismos cierta protección, pero de manera mediata o indirecta: el interés principal tutelado, que legitima su tipificación como delito autónomo y que dogmáticamente sirve de pauta para la correcta interpretación del tipo penal es, como se ha dicho, de naturaleza económica.

#### XIV

La función crítica del bien jurídico no sólo permite corroborar la legitimidad y la necesidad de tipificación del delito de blanqueo. Ha de someterse asimismo a esta “prueba de legitimidad” la concreta configuración que el legislador penal ha dado al delito previsto en el artículo 301 del Código penal, y determinar si cada una de las conductas expresamente previstas en el precepto supone en todo caso la efectiva lesión o puesta en peligro del bien jurídico que se pretende tutelar. Se entiende sin especial dificultad que determinados actos de ocultación o encubrimiento de la procedencia delictiva de los bienes y las conductas de adquisición, conversión o transmisión del bien de procedencia delictiva pueden afectar al orden socioeconómico, pues constituyen actos idóneos para hacer circular los bienes por los cauces económicos y, así, borrar su rastro delictivo y reincorporarlos al tráfico normalizado. Sin embargo, las conductas introducidas en la reforma del año 2010 -posesión y utilización del bien ilícitamente



obtenido desvinculadas de cualquier finalidad- no suponen automáticamente la afección de intereses económicos. Dichas modalidades típicas, constituyen más bien actos de aprovechamiento, no destinados a transformar los bienes o a hacerlos circular por el circuito económico legal para difuminar su rastro de ilicitud.

## XV

Ha de censurarse el tratamiento normativo que el legislador ha dispensado al delito de blanqueo de capitales. Como consecuencia de las sucesivas reformas operadas en el artículo 301 CP, la actual configuración típica presenta una confusa esquematización y conmina conductas tan diferenciadas entre sí que imposibilita una interpretación unitaria del delito. Es por ello que en la doctrina se ha discutido con especial profusión la identificación y el contenido de cada una de las modalidades comisivas previstas en el precepto, así como la relación que todas ellas guardan entre sí.

A nuestro juicio, el tipo básico del delito de blanqueo de capitales se estructura en tres formas de conducta diferenciadas, las dos primeras integradas en el primer párrafo del artículo 301.1 CP y la tercera en el número 2 del precepto:

1. La adquisición, posesión, utilización, conversión o transmisión de bienes de origen delictivo, conociendo su ilícita procedencia, con independencia de cuál sea la finalidad perseguida.
2. La realización de “cualquier otro acto” sobre el bien dirigido a ocultar o encubrir su origen delictivo, o a ayudar a aquél que ha participado en el delito del cual procede el bien o los bienes a eludir las consecuencias jurídicas de su ilícito actuar.
3. La ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos, a sabiendas de que proceden de un delito o de un acto de participación en el mismo.

## XVI

La primera modalidad comisiva se estructura a través de cinco conductas específicamente previstas: la adquisición, la posesión, la utilización, la conversión o la transmisión de bienes de origen delictivo, sin que a las mismas se extiendan los fines de ocultar, encubrir o ayudar. La *adquisición de bienes de origen delictivo* implica la incorporación de los mismos a un nuevo patrimonio -el del blanqueador-, ya sea a título oneroso o gratuito. La *conversión de los bienes* hace referencia a la transformación de los mismos en activos de cualquier otro tipo, o su mutación en otros de distinta naturaleza. La conversión representa el paradigma de la conducta blanqueadora y, en su amplia significación, permite dar cabida a la más variada gama de conductas. La previsión típica de la conversión resulta particularmente útil para sancionar aquellos supuestos en los que el enmascaramiento del ilícito origen de los fondos o bienes no tiene lugar mediante su puesta en circulación en el tráfico, sino a través de actos jurídicos o económicos unilaterales sin cambio de titularidad. La *transmisión de los bienes* es gráficamente la operación opuesta a la adquisición. Supone la extracción del patrimonio del blanqueador de determinados fondos o bienes de origen delictivo para integrarlos en el patrimonio de un tercero. La transmisión debe ser interpretada de forma amplia, dando cabida a cualquier forma de transferencia, cesión o traspaso a través de cualquier título, ya sea oneroso o gratuito, si bien es preciso que atribuya al nuevo adquirente un poder de disposición real sobre los bienes o activos a través de su efectiva transmisión jurídica.

## XVII

Ha de censurarse enérgicamente la incorporación al tipo penal de la posesión y la utilización de los bienes de origen delictivo, como conductas específicamente previstas desconectadas de cualquier finalidad. Dichos comportamientos no se caracterizan precisamente por su aptitud e idoneidad para dotar de apariencia legítima a los bienes y facilitar su reintegración en el tráfico jurídico normalizado. Desde esta perspectiva, no constituyen verdaderamente actos de blanqueo sino actos de aprovechamiento de los beneficios de un delito por quien lo cometió o por un tercero. Por este motivo, y por no estar dotadas de la lesividad propia que legitimaría su incriminación, se propone *de lege ferenda* la supresión de estas problemáticas formas

comisivas del artículo 301.1 CP. Únicamente cuando la posesión y la utilización de los bienes se instrumentalicen como forma de ocultación o encubrimiento para enmascarar su origen delictivo y facilitar su reintroducción en el circuito financiero legal, adquirirán sustantividad propia como hechos penalmente relevantes. Y en dichas hipótesis, la conducta habrá de sancionarse -tal y como se hacía antes de la reforma del Código penal de 2010- mediante la cláusula genérica consistente en la “realización de cualquier otro acto” para ocultar, encubrir o ayudar.

## XVIII

La segunda modalidad comisiva que integra el tipo de blanqueo, prevista en el segundo inciso del artículo 301.1 CP, consiste en la realización de *cualquier otro acto* dirigido a *ocultar o encubrir* el origen ilícito del bien, o a *ayudar* a aquél que ha participado en el delito del cual procede el bien o los bienes a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos. El Código emplea aquí una cláusula en exceso genérica, abierta e indeterminada, en la que, ante la ausencia de mención a los medios comisivos, la determinación de la conducta punible va depender exclusivamente de la concurrencia en el agente de determinado *ánimo o finalidad*: ocultar, encubrir o ayudar. Teniendo en cuenta la imprecisión y la extraordinaria amplitud de la fórmula, es aconsejable una interpretación restrictiva de esta modalidad típica. El “acto” realizado debe ser, en el caso concreto, apto para alcanzar alguna de las finalidades típicamente previstas, y debe recaer en todo caso sobre los bienes de los que se conoce su origen ilícito.

Toda vez que los actos indeterminados han de recaer sobre los bienes, no sólo aquéllos que tengan por finalidad ocultar o encubrir su origen delictivo, sino también los que estén dirigidos a la ayuda del partícipe en el delito previo a eludir las consecuencias de sus actos constituyen supuestos específicamente previstos de favorecimiento real. Cualquier problema concursal que pudiera presentarse con otras formas de favorecimiento previstas en el Código penal ha de ser resuelto de acuerdo con criterios teleológicos, atendiendo al bien jurídico que la concreta conducta menoscabe.

## XIX

Tampoco en la modalidad comisiva prevista en artículo 301.2 CP se define la conducta típica a través de una forma verbal, pues el precepto únicamente prevé el resultado de la conducta (la ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos). De este modo, en principio, cualquier comportamiento idóneo para producir dichos resultados podrá ser subsumido en el precepto.

Si bien la ocultación y el encubrimiento no pueden considerarse expresiones sinónimas (de acuerdo con MARTINEZ-BUJÁN, el encubrimiento posee una significación más dinámica que la ocultación, que apunta a la idea de “simulación” o “disimulación”), la diferenciación entre ambas no tiene mayor incidencia práctica, ya que las dos conductas tienen encaje en el precepto como comportamientos típicos. Es oportuna la mención al elenco de manifestaciones del bien que pueden ser objeto de la ocultación o encubrimiento, pues no todas ellas pueden considerarse como cualidades equivalentes. Si la ocultación o el encubrimiento de la verdadera naturaleza y del origen del bien parecen hacer referencia al enmascaramiento de la procedencia delictiva del bien, la ocultación o el encubrimiento de la ubicación, el movimiento y el destino apunta más bien a que el objeto de la acción es el propio bien, su localización o los movimientos que a lo largo del proceso de reciclaje se han realizado. Por último, la ocultación o el encubrimiento de los derechos sobre los bienes -la propiedad ha de considerarse a los efectos del tipo como un tipo de derecho sobre los mismos-, puede ir referida tanto a la ocultación de dichos derechos como a la titularidad de quien los ostenta.

## XX

Una lectura conjunta de los números 1 (segundo inciso) y 2 del artículo 301 CP permite advertir que en ambos casos se alude a dos elementos típicos de naturaleza similar: *la ocultación* y *el encubrimiento*. Ambas formas comisivas conforman modalidades típicas diferenciadas del tipo básico. Si bien la conducta contenida en el segundo inciso del artículo 301.1 CP (realización de actos indeterminados con las finalidades de ocultar, encubrir o ayudar) se configura como un tipo de resultado

cortado -modalidad en la que no se exige la verificación del resultado pero sí la intención del autor orientada al mismo- la modalidad comisiva prevista en el artículo 301.2 constituye un delito de resultado.

## XXI

La incorporación del autoblanqueo al Código penal por virtud de la LO 5/2010, de 22 de junio, constituye una manifestación más de la expansión del ámbito del delito que no sólo no está justificada sino que ha de ser enérgicamente censurada, al dar cabida en el tipo de blanqueo a supuestos penalmente irrelevantes, especialmente en aquellos casos en los que la conducta típica consista en la posesión o la utilización de los beneficios del delito propio.

Ha de rechazarse la incriminación automática y en todo caso del autoblanqueo; la atribución del delito de blanqueo al autor del delito previo ha de resolverse por el tribunal que conozca de la causa en atención a la modalidad típica de que se trate y teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto. Si todo delito de carácter patrimonial implica una vocación de aprovechamiento económico, ya sea inmediato o posterior a su comisión, resultará necesario diferenciar en qué casos las conductas subsumibles en el tipo de blanqueo han de ser consideradas actos de agotamiento del delito previo, descartando su relevancia penal como acto de blanqueo, y en qué otros supuestos dichas conductas son merecedoras de sanción por esta segunda figura típica, además del por el delito principal, a través del correspondiente concurso real.

No son compatibles con el autoblanqueo las modalidades de adquisición, posesión y utilización, pues dichas conductas se integran en la propia estructura del delito previo (su agotamiento). En segundo lugar, y respecto del resto de conductas previstas en el artículo 301.1 CP (conversión y transmisión), ha de comprobarse la idoneidad del específico comportamiento para incorporar bienes ilícitos al tráfico económico y menoscabar, con ello, el bien jurídico protegido. Cuando la conversión o la transmisión integren actos de mero consumo o estén destinadas a atender necesidades cotidianas de quien cometió el delito previo, no serán penalmente relevantes. Sí serán, en cambio, subsumibles en el tipo los actos de inversión de los beneficios del delito

propio, aptos para reintroducir las ganancias ilícitamente obtenidas en los cauces económicos normalizados. En estos casos, en atención a las circunstancias que en cada caso concurran, podrá sancionarse el posterior blanqueo en concurso real con el hecho delictivo previo propio. Además, para colmar la tipicidad (subjetiva) en los supuestos de autoblanqueo, ha de resultar acreditada en el sujeto activo la presencia de un “dolo blanqueador” diferenciado, una voluntad de dar apariencia de licitud a los beneficios obtenidos del delito que previamente ha cometido para facilitar su reincorporación al tráfico financiero legal.

Toda vez que la punición del autoblanqueo dependerá de los factores concurrentes en el caso concreto a los que se acaba de hacer alusión, *de lege ferenda* se propone que sea suprimida del artículo 301.1 CP la referencia expresa al autoblanqueo.

## XXII

Si nos alejamos de una concepción meramente naturalística o mecanicista del delito de blanqueo de capitales, debemos concluir que no toda contribución meramente causal a la efectiva producción de un resultado de blanqueo ha de ser merecedora de reproche penal. Para la imputación objetiva de ese resultado, además su vinculación fáctica a la conducta, es preciso que sea verificada una vinculación normativa.

Tanto la teoría de la imputación objetiva como otros criterios normativos asociados a la misma se perfilan como correctores dogmáticos idóneos para limitar el ámbito de la tipicidad de delitos que, como el blanqueo de capitales, aparecen formulados en términos extraordinariamente amplios. Por virtud de algunas de estas instituciones dogmáticas y bajo ciertos presupuestos, es posible descartar la propia tipicidad objetiva de determinados comportamientos que, pese a encajar en la literalidad del artículo 301 CP y haber podido contribuir causalmente a la materialización de una operación de lavado, no son objetivamente imputables a su autor, bien porque no han generado un riesgo jurídicamente desaprobado para que se produzca el hecho penalmente lesivo (distanciar el bien de su origen ilícito o facilitar su reintegración en el tráfico normalizado), bien porque el riesgo provocado por el comportamiento no se haya materializado en el concreto acto de blanqueo (el enmascaramiento del origen delictivo

de bienes o activos sobre los que recae la acción típica, o su reincorporación al circuito económico legal -maquillados en mayor o menor medida- con afección a los intereses socioeconómicos que el delito protege).

Además de la teoría general de la imputación objetiva, otras categorías dogmáticas también de carácter normativo -la prohibición de regreso, el principio de confianza, y la doctrina de los actos neutrales, principalmente- permiten, bajo ciertos requisitos, descartar la tipicidad objetiva de aportaciones meramente causales a resultados de blanqueo y, con ello, excluir su relevancia penal. Para ello, al margen de las propias especificidades que cada uno de los institutos referidos requiere, en general en todos ellos se precisa que la conducta tenga en sí misma un sentido socialmente adecuado; esto es, que no tenga sentido delictivo, para lo cual resulta imprescindible que el agente adecúe su conducta a un rol y se mueva dentro de los márgenes de riesgo permitido que dicha posición le exige.

### XXIII

De entre los diferentes correctores dogmáticos que permiten la reducción axiológica del tipo, cobra en la actualidad especial importancia la doctrina de los actos neutrales. Es esta categoría la que mayor interés ha suscitado últimamente en ciencia penal y la que mayor incidencia jurisprudencial ha demostrado.

Se consideran actos neutrales aquellos comportamientos cotidianos o socialmente adecuados que suelen desarrollarse conforme a patrones estandarizados, muchas veces en el seno de determinada actividad profesional o comercial, y que carecen de un sentido unívocamente delictivo (no se realizan en principio con fines delictivos, sino para satisfacer intereses legítimos propios). Si bien *a priori* los actos neutrales pueden tener encaje en el tipo de blanqueo -no existe ninguna cláusula en el artículo 301 CP que excluya su subsunción en la norma-, puede descartarse la relevancia penal de dichas conductas cuando, quien las realiza, no sobrepasa el riesgo permitido (que marca el rol o el sector de actividad en que aquél actúa) de que a través de las mismas se enmascare el origen delictivo del bien sobre el que se opera o de que se contribuya a la reintegración de dicho bien en el circuito económico.

Cuando la conducta del sujeto se adecúa al rol o estándar determinado por las normas a las que se encuentra vinculado -como es el caso de los sujetos sometidos a la normativa de prevención del blanqueo-, existe cierta presunción de que la conducta *a priori* neutral ha respetado los límites de riesgo permitido. Sin embargo, han de ser tenidas especialmente en cuenta las circunstancias del contexto en que se inserta la conducta para decidir si tiene verdaderamente sentido propio, respondiendo a criterios de utilidad para quien la realiza -con independencia de un fin delictivo- o si, por el contrario, su sentido es unívocamente delictivo, esto es, sólo sirve de cobertura para posibilitar (fin último) el enmascaramiento de las ganancias procedentes de un hecho delictivo o su retorno disimulado al circuito financiero legal.

Únicamente cuando, en atención a las circunstancias del contexto en que se inserte, el acto cotidiano o la conducta social o profesionalmente adecuada no tenga un sentido clara y unívocamente delictivo, podrá afirmarse su atipicidad. En caso contrario, perderá su carácter neutral y será penalmente relevante.

## XXIV

La configuración del blanqueo no incluye expresamente en su descripción típica ninguna conducta omisiva. Ello permite descartar la posibilidad de que cualquiera de las formas de conducta en las que se estructura el tipo integre una omisión pura. Situada la punibilidad de cualquier conducta blanqueadora omisiva en el ámbito de la comisión por omisión, ha de verificarse la concurrencia de los requisitos que prevé artículo 11 CP para fundamentar la equiparación normativa de la omisión a la causación activa de un resultado de blanqueo. Dichos requisitos son la presencia de un *delito de resultado*; la existencia de un especial deber jurídico de evitar el resultado para el agente (*posición de garante*); la capacidad personal de sujeto de evitar el resultado “con una probabilidad rayana en la certeza”; y, por último, que la no evitación del resultado *equivalga, según el sentido del texto de la ley*, a su causación.

Del conjunto de modalidades comisivas que integran el tipo de blanqueo, sólo conforman delitos de resultado la efectiva adquisición, conversión o transmisión de los bienes o activos de origen delictivo (*ex* artículo 301.1) y los actos de ocultación o



encubrimiento sobre determinadas características del bien (artículo 301.2). La mera posesión o utilización del bien conforman delitos de mera actividad, y la modalidad integrada por la fórmula genérica “realizar cualquier otro acto” para ocultar, encubrir o ayudar se configura como un delito de resultado cortado. De este modo, la primera exigencia del artículo 11 (limitación de su ámbito de aplicación a verdaderos delitos de resultado) permite descartar el blanqueo omisivo de las modalidades típicas de posesión y utilización y de aquella otra consistente en la realización de cualquier otro acto con las finalidades típicamente previstas.

## XXV

Además de la posición de garante, para poder atribuir la responsabilidad penal al omitente por la producción del resultado típico, el artículo 11 CP impone otro requisito: es preciso que la no evitación del resultado equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación. La omisión ha de ser material y estructuralmente equivalente en el plano normativo a la producción activa del resultado típico y, en este sentido, resulta preciso que en el comportamiento omisivo concorra el mismo contenido del injusto que el que posee el tipo activo con cuya pena pretende conminarse al que omite, y que la expresión contenida en el tipo activo admita, sin forzar su literalidad, la posibilidad de que la lesión del bien jurídico pueda tener lugar también a través de comportamientos omisivos. El requisito de la equivalencia permitirá descartar la modalidades comisivas de adquisición, conversión y transmisión, toda vez que dichas conductas sólo pueden desplegarse a través de un comportamiento externo, corporal, voluntario, dirigido a un fin, y no pueden realizarse por tanto de forma omisiva. De acuerdo con esta idea, el ámbito del blanqueo omisivo queda reducido a la modalidad típica prevista en el artículo 301.2 CP.

## XXVI

Restringido el ámbito del blanqueo omisivo a los supuestos de ocultación y encubrimiento previstos en el artículo 301.2 CP, las condiciones para que dichas formas típicas sean penalmente relevantes cuando tienen lugar a través de comportamientos omisivos son, de acuerdo con el artículo 11 del Código penal, las siguientes:

a) *Posición de garante*: El sujeto activo ha de tener especiales deberes de asegurar la indemnidad del bien jurídico y, con ello, de evitar que se produzca el resultado típico conjurado en el artículo 301.2 -la efectiva ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los de los bienes o capitales ilícitos-, en virtud de la fuente de garantía a la que en cada caso esté vinculado. En materia de blanqueo de capitales, la fuente principal de garantía deriva de la normativa de prevención del blanqueo, si bien nada impide que el origen del especial deber de actuar se halle en otra fuente, por ejemplo, una norma distinta u obligaciones asumidas contractualmente.

b) La *equivalencia valorativa y estructural*. La concreta conducta omisiva ha de ser material y estructuralmente equivalente a la producción activa del resultado de blanqueo, y debe estar dotada de un desvalor de injusto igualado a aquélla. Para afirmar la equivalencia legal, no es suficiente que la omisión no evite la realización de un riesgo preexistente para el bien jurídico, sino que es preciso que sea la propia omisión la que cree dicho peligro o lo incremente y que, en todo caso, el omitente domine el curso de su realización habiendo asumido previamente dicho control.

c) Verificación de que *la acción omitida hubiera evitado el resultado “con una probabilidad rayana en la certeza”*.

## XXVII

El objeto material del tipo básico de blanqueo de capitales está constituido por *bienes* que tengan su *origen* (art. 301.1) o *procedencia* (art. 301.2) en un *delito*. Son pues tres los elementos que definen el objeto material del delito de blanqueo: los bienes, el delito y su nexo de unión: su origen o procedencia.

Un correcto entendimiento del término *bien* exige una interpretación holgada del mismo, que abarque no sólo el bien directamente obtenido con la comisión delictiva, sino también las ganancias o beneficios obtenidos de aquel, entendiéndose por bienes los indicados en el art. 1.q) del Convenio de Viena de 1988. En cualquier caso, el bien ha de tener valor económico y aptitud para circular en el tráfico económico legal.

Si bien no se exige una cuantía mínima en el valor del bien, entendemos que, de acuerdo con el principio de insignificancia, han de quedar fuera del campo aplicativo del artículo 301 CP aquellos actos de bagatela referidos a bienes de mínimas cuantías, no idóneos para poner en peligro el orden socioeconómico, bien jurídico protegido por el delito.

El *hecho delictivo previo* del cual proceden los bienes puede ser tanto doloso como imprudente, y puede haber sido cometido total o parcialmente en el extranjero. Únicamente es necesaria la realización de un hecho anterior típico y antijurídico (no amparado por una causa de justificación), siendo irrelevante, a efectos de tipicidad del blanqueo, la culpabilidad y punibilidad de su autor (o partícipe), así como que exista o no una condena por el delito previo.

## XXVIII

Es posible que el delito contra la Hacienda Pública constituya el hecho previo del delito de blanqueo. El delito fiscal constituye una actividad delictiva generadora de beneficios económicamente cuantificables: la cuota tributaria, que conforma, en este caso, el objeto material del delito de blanqueo. El hecho de que la cuota tributaria no haya ingresado en el patrimonio del contribuyente como consecuencia de la defraudación no impide admitir que la elusión del tributo supone un incremento de dicho patrimonio. Se trata en todo caso de un beneficio procedente directamente de la actividad delictiva desarrollada, idóneo por tanto como objeto material del delito de blanqueo de capitales.

La prescripción del delito fiscal no descontamina la cuota tributaria defraudada, que podrá integrar el objeto del delito de blanqueo aun cuando el delito contra la Hacienda Pública haya prescrito. Sin embargo, la institución de la regularización de la situación tributaria del contribuyente sí permitirá la descontaminación de la cuota inicialmente no ingresada.

## XXIX

Son bienes sustitutivos aquéllos que no proceden directamente de la comisión del delito, sino que son fruto alguna transformación sobre el bien o capital originario, en virtud de cualquier negocio jurídico. Los bienes sustitutivos son también idóneos como objeto del delito de blanqueo, si bien resulta preciso establecer unos límites que marquen la interrupción de la conexión entre los bienes objeto de blanqueo y la infracción previa, de manera que se impida una suerte de *regresus ad infinitum*.

## XXX

En materia de tipicidad subjetiva, las tres modalidades dolosas del delito de blanqueo de capitales, contenidas en los números 1 y 2 del artículo 301 CP, precisan tanto el conocimiento de la ilícita procedencia como, en ciertos supuestos, determinados elementos intencionales. El *conocimiento de la procedencia delictiva* de los bienes es exigencia común a todas las modalidades de comportamiento bajo las que puede presentarse el tipo doloso de blanqueo. En la modalidad típica consistente en la realización de cualquier otro acto, prevista en el segundo inciso del artículo 301.1 CP, ha de concurrir, además, un segundo elemento subjetivo: el ánimo o finalidad de *ocultar o encubrir* el origen ilícito del bien o de *ayudar* a las personas responsables del delito previo a eludir las consecuencias legales de sus actos.

## XXXI

Las modalidades de conducta previstas en el primer inciso del artículo 301.1 CP y en el número 2 del precepto admiten tanto dolo directo de primer grado como dolo directo de segundo grado y el dolo eventual. En cambio, en la conducta indeterminada contenida en el segundo inciso del artículo 301.1 CP, la necesaria presencia del elemento intencional impide admitir otra forma de dolo que no sea el dolo directo de primer grado.

## XXXII

El elemento intelectual del dolo típico (conocimiento), además de abarcar el objeto del delito (bien procedente de una actividad delictiva), también ha de recaer sobre la conducta típica, esto es, sobre los propios comportamientos contenidos en el artículo 301 CP, y alcanzar a los elementos que condicionan la relevancia penal del hecho: el resultado típico *ex post*, la relación de causalidad y la imputación objetiva (creación de un riesgo penalmente relevante por la conducta y la actualización de éste en el resultado lesivo para el bien jurídicamente protegido).

En cuanto a la determinación del conocimiento de la procedencia delictiva de los bienes, es preciso que el sujeto activo conozca de forma cierta la procedencia delictiva del bien (sin ser suficientes, por tanto, meras sospechas o presunciones), si bien es suficiente que dicho conocimiento se refiera a que el bien tiene origen en un hecho típico y antijurídico, no siendo necesario que abarque la calificación jurídica del delito precedente.

El conocimiento de la naturaleza delictiva del bien integrado en el dolo ha de existir en el momento en el que el agente realice la conducta típica, rechazándose cualquier forma de *dolus subsequens* o posterior al hecho delictivo.

## XXXIII

Como se sabe, son los elementos subjetivos del tipo los que habitualmente presentan mayor dificultad probatoria. Tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional han admitido el recurso a la prueba de indicios o indirecta para considerar acreditado el conocimiento, por parte del sujeto activo, de la procedencia delictiva del bien sobre el que recae la conducta típica, si bien se precisa un plus de motivación y la observancia de una serie de requisitos determinados jurisprudencialmente. El Tribunal Supremo ha establecido como principales indicios que apuntan al conocimiento de la procedencia delictiva de los bienes, los siguientes: el incremento inusual del patrimonio o el manejo de cantidades de dinero que por su elevada cantidad, dinámica de las transmisiones o tratarse de efectivo, pongan de

manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias; la inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias; y la constatación de algún vínculo o conexión con actividades delictivas o con personas o grupos relacionados con las mismas. Asimismo, operarían como indicios adicionales, entre otros, la falta de justificación lícita de los ingresos que permiten la realización de las operaciones realizadas, la existencia de sociedades “pantalla” o entramados financieros que no se apoyen en actividades económicas acreditadamente lícitas, o la debilidad de las explicaciones del sujeto activo acerca del origen lícito de los bienes o capitales con los que ha operado.

Con todo, no deben confundirse los indicios con las meras sospechas o conjeturas, y en ningún caso es admisible la inversión de la carga de la prueba, de tal modo que se traslade al acusado el deber de acreditar el origen regular de los bienes o fondos sobre los que ha desplegado su conducta.

#### XXXIV

Si bien el Tribunal Supremo admite el dolo eventual respecto a las tres modalidades que integran el tipo doloso de blanqueo, ha de rechazarse aquél respecto a la forma comisiva consistente en la realización de cualquier acto para ocultar, encubrir o ayudar. En el resto de casos, colmaría el tipo subjetivo la representación, por parte del autor, de la posibilidad de la procedencia delictiva del bien sobre el que opera (dolo eventual). En todo caso, ha de censurarse la invocación por parte de la jurisprudencia de la doctrina de la ignorancia deliberada. La condena a título de dolo eventual exige alguna forma de conocimiento de los elementos objetivos del tipo, y no es jurídicamente admisible sustituir dicho conocimiento, en el ámbito de lo que en definitiva es una modalidad dolosa, por un conocimiento potencial, por lo que el sujeto debió o pudo conocer. El dolo precisa que resulte efectivamente probado el conocimiento, o al menos la representación, de uno de los elementos esenciales que definen el tipo objetivo -la procedencia delictiva de los fondos sobre los que recaen las conductas penalmente reprochables-, máxime cuando el propio tipo penal expresamente prevé la exigencia de dicho conocimiento a través de las expresiones “sabiendo” y “a sabiendas”.

Si se pretende acudir a un título de imputación que incorpora el conocimiento de determinados elementos típicos, dicho conocimiento ha de probarse, si quiera a través de la prueba de indicios. En el ámbito del delito que blanqueo, el hecho de que el sujeto se haya colocado voluntariamente en una situación de desconocimiento respecto al origen de los fondos con los que opera puede ser un indicio de gran peso para considerar acreditado el conocimiento, o la representación al menos, de la naturaleza delictiva de los fondos a través de la llamada prueba indirecta, siempre que concurran los requisitos que al respecto la jurisprudencia exige. Dicho indicio, relacionado con otros que apunten en la misma dirección, podrá servir para inferir el efectivo conocimiento o la representación, por parte del autor, del origen delictivo de los bienes. Sin embargo, en los supuestos en los que ni siquiera a través de esa prueba indiciaria sea posible considerar acreditado el conocimiento -o al menos una alta representación- del origen delictivo de los bienes, el desconocimiento provocado por el agente no será *per se* suficiente para fundamentar una condena a título de dolo eventual, habiéndose de valorar en ese caso si el referido desconocimiento trae causa en una actitud negligente que pueda calificarse como grave, en orden a considerar la imputación al sujeto de un delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave.

### XXXV

Cualquier *error sobre un elemento típico*, ya sea de naturaleza descriptiva o normativa, ha de ser tratado como un error de tipo que excluye el dolo: si el error es invencible, la conducta será atípica por desconocimiento de un elemento del tipo; y si se trata de un error vencible, será de aplicación el tipo imprudente de blanqueo del artículo 301.3 CP siempre que la imprudencia sea grave y sean colmadas las demás exigencias típicas. En materia de blanqueo, se presentará con mayor frecuencia el error respecto al origen delictivo del bien. La creencia errónea de que los bienes tienen origen legal ha de considerarse un error de tipo relevante.

El *error de subsunción* (aquel referido al delito del cual provienen los bienes) es irrelevante, salvo en aquellos supuestos en los que el sujeto activo sepa que el bien tiene origen en un delito pero desconozca que realmente provienen de uno de los delitos que determinan la aplicación de los subtipos agravados de los párrafos 2º y 3º del artículo 301.1 CP. En estos casos, el error de subsunción determinará la aplicación del tipo

básico de blanqueo, y no del subtipo agravado. Y ello con independencia de que el error se considere vencible o invencible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 CP. El error respecto a la relación entre el objeto y el delito previo (aquel referido a las sucesivas transformaciones o conversiones intermedias que haya sufrido el bien respecto al producto delictivo originario) ha de considerarse en general irrelevante.

El *error de prohibición*, aquél derivado del desconocimiento del carácter delictivo de la propia conducta blanqueadora (el sujeto desconoce o yerra sobre la antijuridicidad propia del delito de blanqueo) o por creencia errónea de concurrencia de una causa de justificación, ha de considerarse generalmente vencible. Para resolver sobre la vencibilidad del error, ha de acudirse a la fórmula de la valoración en la esfera del profano. De acuerdo con los criterios generales previstos en el artículo 14.3 CP, el error de prohibición invencible excluye la responsabilidad criminal, y el error vencible determinará la aplicación de la pena inferior en uno o dos grados.

### XXXVI

El artículo 301.3 CP incrimina el delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave a través de una escueta remisión a los “hechos” (dolosos) descritos en los números 1 y 2 del precepto. La configuración del blanqueo imprudente, al no incorporar una descripción precisa de los comportamientos culposos ni ofrecer pautas para determinar en qué consiste, en su ámbito específico, la infracción del deber de cuidado o diligencia, plantea importantes problemas interpretativos. Sirviéndonos de los criterios dogmáticos relativos a la infracción del deber de cuidado generalmente asumidos por la doctrina para definir el tipo culposo, y considerando que la imprudencia ha de ser grave y recaer sobre el conocimiento del origen delictivo del bien, podemos afirmar que el blanqueo imprudente se conforma a partir de la inobservancia de las normas elementales de cuidado que, en la situación concreta en la que se encuentra el sujeto, observaría una persona prudente y sensata del mismo círculo social o profesional para detectar el origen delictivo de los bienes con los que se dispone a operar, y evitar así realizar o contribuir a la realización de un delito de blanqueo en las formas previstas en los números 1 y 2 del precepto que admitan la comisión imprudente.



Para la determinación del deber de cuidado exigible al sujeto deben ser tenidos en cuenta los criterios objetivos de prudencia estándar que habría observado el hombre medio diligente situado en el ámbito al que pertenezca el sujeto. Cuando éste se encuentre vinculado por determinadas obligaciones impuestas por la normativa de prevención de blanqueo, el incumplimiento de aquéllas será concluyente en buena parte de los casos, si se quiere, a modo de indicio, para considerar infringida la norma objetiva de cuidado. En aquellos otros supuestos en los que el sujeto opere en actividades respecto a las que no se han establecido normas de cuidado, debe recurrirse al criterio del hombre medio: la imprudencia se considerará grave cuando el agente no haya observado las cautelas que observaría una persona prudente, diligente y sensata de equivalentes aptitudes y de la misma profesión o entorno social.

Además de la infracción del deber objetivo de cuidado, núcleo esencial del blanqueo de capitales por imprudencia grave, han de concurrir determinados requisitos adicionales para la imputación del delito a título culposo. En primer lugar, la previsibilidad del riesgo o peligro de que la conducta del agente contribuya a materializar una concreta operación de blanqueo; y en segundo lugar, que la infracción del deber objetivo de cuidado haya ocasionado la efectiva producción de ese resultado de blanqueo de capitales. La relación entre la infracción de la norma objetiva de cuidado y la producción del resultado lesivo para el bien jurídico ha de analizarse, del mismo modo que ocurre en el tipo doloso, desde la perspectiva de la teoría de la imputación objetiva, que, como es sabido, opera como “correctivo normativo” de las teorías clásicas de la causalidad. Conforme a los criterios normativos que integran la imputación objetiva, ha de verificarse que la conducta imprudente ha creado o incrementado el riesgo de facilitar la realización de una operación de blanqueo; y en caso afirmativo, que dicho riesgo se concrete en la efectiva materialización de la concreta operación de blanqueo, de tal modo que si dicha operación trae causa en motivos ajenos al riesgo provocado por el sujeto, ha de negarse la imputación objetiva de dicho resultado a la conducta imprudente.

## XXXVII

A pesar de que el artículo 301.3 CP remite, sin hacer distinción alguna, a las modalidades dolosas previstas en los números 1 y 2 del precepto, sólo determinadas formas comisivas podrán ser cometidas a título de imprudencia grave. Ha de descartarse la extensión de la imprudencia a la modalidad consistente en la realización de actos indeterminados con las finalidades de ocultar, encubrir o ayudar, previstos en el segundo inciso del artículo 301.1 CP. Dichas conductas presuponen el conocimiento delictivo del bien y revelan una clara intencionalidad sólo compatible con el delito doloso. La modalidad imprudente de blanqueo resulta, por tanto, sólo acomodable a los comportamientos expresamente previstos en el primer inciso del párrafo 1º del artículo 301.1 CP y a los comportamientos descritos en el número 2 del precepto señalado.

## XXXVIII

Como hemos visto, las modalidades dolosas previstas en el primer inciso del párrafo 1º del artículo 301.1 CP y en el número 2 de dicho artículo admiten el dolo eventual. En este caso, resulta preciso que el agente se haya representado como altamente probable que los fondos con los que opera provienen de un hecho delictivo. En el plano fáctico, el dolo eventual se encuentra muy próximo a la culpa consciente, y en muchos casos no es fácil determinar la calificación de supuestos límite, a caballo entre ambos títulos de imputación. Con carácter general, cuando el sujeto *ex ante* se represente como altamente probable que los bienes respecto a los que se dispone a operar tienen origen delictivo y, aun así realice la conducta, responderá a título de dolo eventual. Responderá por culpa consciente cuando prevea su hipotética contribución a un resultado de blanqueo sin considerar probable que éste finalmente se produzca, confiando en que los bienes o activos no procedan de un hecho delictivo o en que su conducta sea inidónea para que se materialice un resultado de blanqueo.

### XXXIX

El tipo de blanqueo por imprudencia grave se configura como un delito común. El artículo 301.3 CP no prevé ninguna restricción en cuanto al sujeto activo, y en ningún caso lo asocia a los sujetos obligados por la normativa de prevención del blanqueo.

Ha de tenerse en cuenta que para la apreciación de cualquier delito imprudente, el Código penal precisa que concorra imprudencia grave y, ciertamente, dicho grado imprudencia se apreciará con mayor facilidad en aquellos casos en los que la infracción del deber de cuidado sea llevada a cabo por sujetos obligados u otras personas que, por razón de su oficio o actividad, queden especialmente vinculadas por especiales normas de cuidado. En cualquier caso, al no establecer el artículo 301.3 CP ninguna restricción subjetiva, el precepto también vincula a cualesquiera otros sujetos, respecto a los que la determinación del deber objetivo de cuidado dependerá del ámbito socio-cultural o profesional al que pertenezca el agente. Para ello, se tomará como modelo el ciudadano medio al que la jurisprudencia suele acudir en estos casos (la diligencia que habría observado, en esa situación concreta, una persona inteligente y sensata de la misma profesión o círculo social para evitar operar con fondos de origen delictivo).





## **INDICE JURISPRUDENCIAL**

### **SENTENCIAS Y AUTOS DE AUDIENCIAS PROVINCIALES**

SAP Madrid 95/2002, Sección 15ª, de 19 de abril.  
SAP Madrid 448/2014, Sección 1ª, de 29 de octubre.  
SAP Málaga 200/2011 (Caso Ballena Blanca), Sección 2ª, de 31 de marzo.  
SAP Málaga 179/2013, (Sección 2ª), de 16 de abril.  
SAP Málaga 535/2013 (Caso Malaya), Sección 2ª, de 4 de octubre.  
SAP San Sebastián 203/2014, Sección 1ª, de 24 de julio.

AAP Palma de Mallorca 627/2014, Sección 2ª, de 7 de noviembre.

### **SENTENCIAS Y AUTOS DE LA AUDIENCIA NACIONAL**

SAN 20/1999, Sección 1ª, de 1 de junio.  
SAN 12/2002, Sección 2ª, de 8 de abril.  
SAN 47/2011, Sección 2ª, de 23 de noviembre.

AJCI nº 6, de 22 de julio de 2015.

### **SENTENCIAS Y AUTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO**

STS de 10 de julio de 1986.  
STS de 24 de enero de 1994.  
STS de 31 de octubre de 1994.  
STS 649/1996, de 7 de diciembre (caso Nécora).  
STS 217/1999, de 15 de febrero.  
STS 1493/1999, de 21 de diciembre (caso Roldán).  
STS 1637/1999, de 10 de enero de 2000.  
STS 1583/2000, de 16 de octubre.  
STS 20/2001, de 28 de marzo (caso Urralburu).  
STS 1293/2001, de 28 de julio.  
STS 1704/2001, de 29 de septiembre.  
STS 2207/2001, de 19 de noviembre.  
STS 946/2002, de 22 de mayo.  
STS 1061/2002, de 6 de junio.  
STS 1090/2002, de 11 de junio.  
STS 1697/2002, de 19 de octubre.  
STS 499/2003, de 4 de abril.  
STS 575/2003, de 14 de abril.  
STS 755/2003, de 20 de mayo.  
STS 977/2003, de 4 de julio.  
STS 1070/2003, de 22 de julio.  
STS 1287/2003, de 10 de octubre.

STS 1501/2003, de 19 de diciembre.  
STS 57/2004, de 22 de enero.  
STS 220/2004, de 20 de febrero.  
STS 1113/2004, de 9 de octubre.  
STS 131/2005, de 19 de enero.  
STS 163/2005, de 10 de febrero.  
STS 233/2005 de 24 de febrero.  
STS 467/2005, de 14 de abril.  
STS 781/2005, de 9 de junio.  
STS 860/2005, de 22 de junio.  
STS 924/2005, de 17 de junio.  
STS 1034/2005, de 14 de septiembre.  
STS 1113/2005, de 15 de septiembre.  
STS 1597/2005, de 21 de diciembre.  
STS 31/2006, de 13 de enero.  
STS 202/2006 de 2 de marzo.  
STS 449/2006, de 17 de abril.  
STS 550/2006, de 24 de mayo.  
STS 560/2006, de 19 de mayo.  
STS 586/2006, de 29 de mayo.  
STS 797/2006, de 20 de julio.  
STS 863/2006, de 13 de septiembre.  
STS 928/2006, de 5 de octubre.  
STS 1012/2006, de 19 de octubre.  
STS 1133/2006, de 21 de noviembre.  
STS 1261/2006, de 20 de diciembre.  
STS 34/2007, de 1 de febrero.  
STS 115/2007, de 22 de enero.  
STS 483/2007, de 4 de junio.  
STS 959/2007, de 23 de noviembre.  
STS 145/2008, de 8 de abril.  
STS 183/2008, de 29 de abril.  
STS 801/2008, de 26 de noviembre.  
STS 960/2008, de 26 de diciembre.  
STS 16/2009, de 27 de enero.  
STS 19/2009, de 7 de enero.  
STS 53/2009, de 26 de enero.  
STS 57/2009, de 2 de febrero.  
STS 155/2009, de 26 de febrero.  
STS 545/2009, de 22 de mayo.  
STS 1061/2009, de 26 de octubre.  
STS 1089/2009, de 27 de octubre.  
STS 1246/2009, de 30 de noviembre.  
STS 1257/2009, de 2 de diciembre.  
STS 28/2010, de 28 de enero.  
STS 69/2010, de 30 de enero.  
STS 303/2010, de 22 de marzo.  
STS 637/2010, de 28 de junio.  
STS 796/2010, de 17 de septiembre.  
STS 801/2010, de 23 de septiembre.

STS 1080/2010, de 20 de octubre.  
STS 1139/2010, de 24 de noviembre.  
STS 15/2011, de 28 de enero.  
STS 68/2011, de 15 de febrero.  
STS 151/2011, de 10 de marzo.  
STS 1345/2011, de 14 de diciembre.  
STS 1415/2011, de 23 de diciembre.  
STS 162/2012, de 15 de marzo.  
STS 234/2012, de 16 de marzo.  
STS 542/2012, de 21 de junio.  
STS 557/2012, de 9 de julio.  
STS 561/2012, de 3 de julio.  
STS 801/2012, de 30 de octubre.  
STS 811/2012, de 30 de octubre.  
STS 857/2012, de 9 de noviembre.  
STS 884/2012, de 8 de noviembre.  
STS 888/2012, de 22 de noviembre.  
STS 908/2012, de 19 de noviembre.  
STS 974/2012, de 5 de diciembre (caso Ballena Blanca).  
STS 987/2012, de 3 de diciembre.  
STS 79/2013, de 8 de febrero.  
STS 120/2013, de 20 de febrero.  
STS 165/2013, de 26 de marzo.  
STS 228/2013, de 22 de marzo.  
STS 279/2013, de 6 de marzo.  
STS 325/2013, de 2 de abril.  
STS 341/2013, de 9 de abril.  
STS 360/2013, de 1 de abril.  
STS 479/2013, de 2 de junio.  
STS 598/2013, de 28 de junio.  
STS 601/2013, de 11 de julio.  
STS 684/2013, de 3 de septiembre.  
STS 858/2013, de 19 de noviembre.  
STS 901/2013, de 26 de noviembre.  
STS 942/2013, de 11 de diciembre.  
STS 979/2013, de 23 de diciembre.  
STS 997/2013, de 19 diciembre.  
STS 1022/2013, de 11 de diciembre.  
STS 41/2014, de 29 de enero.  
STS 42/2014, de 5 febrero.  
STS 83/2014, 13 de febrero.  
STS 91/2014, de 7 de febrero.  
STS 157/2014, de 5 de marzo.  
STS 182/2014, de 11 de marzo.  
STS 245/2014, de 24 de marzo.  
STS 257/2014, de 1 de abril.  
STS 487/2014, de 9 de junio.  
STS 534/2014, de 27 de junio.  
STS 586/2014, de 23 de julio.  
STS 597/2014, de 30 de julio.



STS 624/2014, de 23 de septiembre.  
STS 659/2014, de 15 de octubre.  
STS 723/2014, de 30 de octubre.  
STS 809/2014, de 26 de noviembre.  
STS 839/2014, de 2 de diciembre.  
STS 870/2014, de 18 de diciembre.  
STS 877/2014, de 22 de diciembre.  
STS 900/2014, de 26 de diciembre.  
STS 907/2014, de 30 de diciembre.  
STS 910/2014, de 2 de enero de 2015.  
STS 42/2015, de 28 de enero.  
STS 54/2015, de 11 de febrero.  
STS 77/2015, de 4 de febrero.  
STS 135/2015, de 17 de febrero.  
STS 220/2015, de 9 de abril.  
STS 247/2015, de 28 de abril.  
STS 265/2015, de 29 de abril.  
STS 286/2015, de 19 de mayo.  
STS 338/2015, de 2 de junio.  
STS 413/2015, de 30 de junio.

ATS 145/2014, de 23 enero.

## **SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

STC 2/1981, de 30 de enero.  
STC 159/1987, de 26 de octubre.  
STC 154/1990, de 15 de octubre.  
STC 221/1997, de 4 de diciembre.  
STC 177/1999, de 11 de octubre.  
STC 2/2003, de 16 de enero.  
STC 229/2003, de 18 de diciembre.  
STC 180/2004, de 2 de noviembre.  
STC 61/2005, de 14 de marzo.  
STC 188/2005, de 7 de julio.  
STC 300/2005, de 21 de noviembre.  
STC 26/2010, de 27 de abril.  
STC 128/2011, de 18 de julio.  
STC 189/2013, de 7 de noviembre.

## ÍNDICE BIBLIOGRÁFICO

**ABEL SOUTO, Miguel,**

- “Blanqueo, innovaciones tecnológicas, amnistía fiscal de 2012 y reforma penal”, *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 2012, núm. 14-14, disponible en el siguiente enlace: [criminnet.ugr.es/recpc/14/recpc14-14.pdf](http://criminnet.ugr.es/recpc/14/recpc14-14.pdf).
- “Conclusiones: Jurisprudencia penal reciente sobre el blanqueo de dinero, volumen del fenómeno y evolución del delito en España”, *IV Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2014.
- “Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español”, *I Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed: Tirant lo Blanch, Valencia, 2009.
- “Década y media de vertiginosa política criminal en la normativa penal española contra el blanqueo: análisis de los tipos penales contra el blanqueo desde su incorporación al Texto punitivo español en 1988 hasta la última reforma de 2003”, *La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario*, nº 20, 2005.
- *El blanqueo de dinero en la normativa internacional*, Monografías da USC, nº 209. Universidad de Santiago de Compostela, 2002.
- *El delito de blanqueo en el Código penal español*. Ed. Bosch. Barcelona, 2005.
- “Jurisprudencia penal reciente sobre el blanqueo de dinero, volumen del fenómeno y evolución del delito en España”, *IV Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2014.
- “La expansión penal del blanqueo de dinero operada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio”, *La Ley Penal*, Nº 79, Sección Estudios, Febrero 2011, Ed. La Ley, 2011.
- “La reforma penal española de 2010 sobre blanqueo, las nuevas técnicas de comisión delictiva y el uso de las telecomunicaciones para el blanqueo”, *III Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.
- “La reforma penal, de 22 de junio de 2010, en materia de blanqueo de dinero”, *II Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed: Tirant lo Blanch, Valencia, 2011.

- *Normativa internacional sobre el blanqueo de dinero y su recepción en el ordenamiento penal español* (Tesis doctoral dirigida por José Manuel Lorenzo Salgado, presentada en Santiago de Compostela en enero de 2.001).

- “Ocultación de dinero procedente del narcotráfico en una caja de seguridad (Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo nº 155/2002, de 19 de febrero”, *Revista de derecho y Criminología*, 2ª época, nº 13 (2004). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2004.

- “Volumen mundial del blanqueo de dinero, evolución del delito en España y jurisprudencia reciente sobre las últimas modificaciones del Código penal”, *Revista General de Derecho Penal*. Nº. 20, 2013. Ed. IUSTEL, disponible en el siguiente enlace: [http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle\\_revista.asp?id\\_noticia=413920](http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=413920).

**AGUILAR LÓPEZ, Miguel Ángel**, “Delitos de Peligro e Imputación Objetiva”, *Revista Iter Criminis*, Mayo - Junio, 2008, disponible en el siguiente enlace: [portal.uclm.es/portal/page/portal/IDP/.../delitos%20de%20peligro.pdf](http://portal.uclm.es/portal/page/portal/IDP/.../delitos%20de%20peligro.pdf).

**ALCÁCER GUIRAO, Rafael**, “El juicio de adecuación de la conducta. Consideraciones sobre la teoría de la imputación objetiva y sobre la tentativa”, *ADPCP*, XXXIX, 1986.

**ALCALE SÁNCHEZ, María,**

- *El tipo de injusto en los delitos de mera actividad*. Ed. Comares. Granada, 2000.

- “Los delitos de mera actividad”, *Revista de derecho penal y criminología*, nº 10, 2002.

**ALCALDE GUTIÉRREZ, Eduardo/ RODRÍGUEZ SOLER, Luis**, “Las personas expuestas políticamente y la prevención del blanqueo de capitales”, *Boletín de Información Comercial Española*. ICE-Ministerio de Economía y Competitividad. Madrid, 2014.

**ALCARAZ LAMANA, Carlos,**

- “Derecho Administrativo Sancionador”, *Auditoría, prevención y represión del blanqueo de capitales*, Ed. Liber Factory. Madrid, 2014.

- “Examen y evaluación de la prevención del blanqueo de capitales”, *Auditoría, prevención y represión del blanqueo de capitales*, Ed. Liber Factory. Madrid, 2014.

- “La investigación del blanqueo de capitales”, *Auditoría, prevención y represión del blanqueo de capitales*, Ed. Liber Factory. Madrid, 2014.

**ALFONSO LASO, Daniel de,**

- *El abogado ante la comisión imprudente de blanqueo de capitales*. Diario La Ley, nº 7020, año XXIX, 25 sep. 2008, ref.<sup>a</sup> D-269.

- “La modificación del delito de blanqueo de capitales (arts. 301 y 302)”, *La Reforma Penal de 2010: Análisis y comentarios*. Dir.: Gonzalo Quintero Olivares; Ed. Aranzadi, 2010.

**ALIAGA MÉNDEZ, Juan Antonio,**

- *Normativa comentada de prevención del blanqueo de capitales*, Ed. La Ley. Madrid, 2010.

**ALIAGA MÉNDEZ, Juan Antonio/ BLANCO CORDERO, Isidoro**, “La política contra el blanqueo en España: cómo nos ven los expertos”, *Escritura pública*, nº 91, 2015, disponible en el siguiente enlace: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4970887>.

**ALONSO CARBAJO, José Miguel**, “Evolución normativa del delito de blanqueo de capitales a tenor de su tratamiento en los ámbitos internacional, comunitario y nacional”, *La Ley* 19196/2011, Año XXXII. Nº 7736, 15 de noviembre de 2011.

**ALONSO PÉREZ, Francisco**, “Conductas afines a la receptación”, *Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico*. Ed. Colex. Madrid, 2003.

**ÁLVAREZ FEIJOÓ, Manuel**, *Delito fiscal y blanqueo de capitales*, Legal today.com, publicado en el siguiente enlace: [http://www.legaltoday.com/practica-juridica/penal/blanqueo\\_capitales/delito-fiscal-y-blanqueo-de-capitales](http://www.legaltoday.com/practica-juridica/penal/blanqueo_capitales/delito-fiscal-y-blanqueo-de-capitales)

**ÁLVAREZ GARCÍA, Francisco Javier**, “Bien jurídico y Constitución”, *Cuadernos de Política Criminal*, nº 43, Madrid, 1991.

**ÁLVAREZ PASTOR, Daniel/ EGUIDAZU PALACIOS, Fernando**, *Manual de prevención del blanqueo de capitales*. Ed. Marcial Pons. Madrid, 2007.

**ÁLVAREZ-SALA WALTER, Juan**, *El blanqueo de capitales y las profesiones jurídicas*. Editado por el Consejo General del Notariado. Madrid, 2004, disponible en [http://www.sepblac.es/espanol/informes\\_y\\_publicaciones/documentos\\_sobre\\_blanqueo.htm](http://www.sepblac.es/espanol/informes_y_publicaciones/documentos_sobre_blanqueo.htm).

**AMBOS, Kai**, “Internacionalización del Derecho penal: el ejemplo del “lavado de dinero”, *II Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011.

**AMELUNG, Knut**, “El concepto de «bien jurídico» en la teoría de la protección penal de bienes jurídicos”, *La teoría del bien jurídico* (VV.AA). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2007.

**ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos**, *El delito de blanqueo de capitales*. Ed. Marcial Pons. Madrid, 2000.

**ARIAS HOLGUÍN, Diana Patricia**, *Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales*. Ed. Iustel. Madrid, 2011.

**ARIAS MERLANO, Johanna Carolina**, “El sistema democrático y la seguridad interior como bien jurídico protegido por el delito de blanqueo de dinero”, *III Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.

**ÁVILA SOLANA, Esteban**, “Las tipologías del blanqueo en España (II): Casos prácticos específicos del blanqueo”, *Prevención y represión del blanqueo de capitales, Estudios de Derecho Judicial* n° 28, 2000. CGPJ. Madrid, 2000.

**BACIGALUPO SAGESSE, Silvina**,

- *Ganancias ilícitas y derecho penal*, Editorial Universitaria Ramón Areces. Madrid, 2004.

- “La prueba del perjuicio en el delito fiscal mediante el régimen tributario de estimación indirecta: presunción de inocencia e *in dubio pro reo*”, *Homenaje al Profesor Dr. Gonzalo Rodríguez Mourullo*. Ed. Civitas, Madrid, 2005.

- “Principio de legalidad y fraude a la ley tributaria”, *Liber amicorum en Homenaje al Profesor Antonio González-Cuellar García*, Ed. Colex. Madrid, 2006.

**BACIGALUPO ZAPATER, Enrique**,

- “Conducta precedente y posición de garante en el Derecho penal”, *Nuevos trabajos sobre los delitos de omisión, Delitos impropios de omisión*. Ed. Dykinson. Madrid, 2005.

- *Delitos impropios de omisión*. Ed. Dykinson. Madrid, 2005.

- *Derecho Penal, Parte General*, 2ª ed. Ed. Hammurabi. Buenos Aires, 1999.

- “Estudio comparativo del Derecho Penal de los Estados Miembros de la Unión Europea sobre la represión del reciclaje o blanqueo de dinero ilícitamente obtenido”, *España en la Europa Comunitaria: balance de diez años*, 1995.
- “Falsedad imprudente en documentos públicos”, *Judicatura y notariado ante los delitos económicos (Estudios de Derecho Judicial nº 73)*. CGPJ. Madrid, 2006.
- “La posición de garante en el ejercicio de funciones de vigilancia en el ámbito empresarial”, *Nuevos trabajos sobre los delitos de omisión, Delitos impropios de omisión*. Ed. Dykinson. Madrid, 2005.
- “La regulación de las conductas omisivas en el nuevo Código penal”, *Nuevos trabajos sobre los delitos de omisión, Delitos impropios de omisión*. Ed. Dykinson. Madrid, 2005.
- *Manual de Derecho Penal, Parte General*. Ed. Temis. Santa Fe de Bogotá, 1996.
- “Problemas actuales del dolo”, *Homenaje al Profesor Dr. Gonzalo Rodríguez Mourullo*. Ed. Civitas, Madrid, 2005.
- *Sobre el concurso de delito fiscal y blanqueo de dinero*. Ed. Civitas. Cizur Menor, 2012.

**BAIGÚN, David**, “El bien jurídico orden económico”, *Estudios sobre justicia penal. Homenaje a Julio B.J. Maier*. Editores del Puerto, Buenos Aires, 2005.

**BAJO FERNÁNDEZ, Miguel,**

- “Política criminal y reforma penal. Delitos patrimoniales económicos”, *Política criminal y reforma penal, Libro homenaje a la memoria del Profesor Dr. Juan del Rosal*. Edersa, Madrid, 1993.
- “El desatinado delito de blanqueo de capitales”, *Política criminal y blanqueo de capitales*, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2009.
- “Los delitos económicos como manifestación característica de la expansión del Derecho Penal”, *Libro homenaje al Prof. Luis Rodríguez Ramos*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.

**BAJO FERNÁNDEZ, Miguel/ BACIGALUPO SAGESSE, Silvina,**

- “Blanqueo de capitales”, *Derecho penal económico*. Colección CEURA. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, 1ª Edición. Madrid, 2001.

- “Blanqueo de capitales”, *Derecho penal económico*. Colección CEURA. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, 2ª Edición. Madrid, 2010.

- “Las medidas administrativas y penales para la prevención del blanqueo de capitales”, *Política criminal y blanqueo de capitales*, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2009.

**BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio/ FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo A.**, “La emancipación del delito de blanqueo de capitales en el Derecho penal español”, *Un derecho penal comprometido: libro homenaje al prof. Dr. Gerardo Landrove Díaz*. (VV. AA.) Francisco José Muñoz Conde (dir.), José Manuel Lorenzo Salgado (dir.), Juan Carlos Ferré Olivé (dir.), Emilio Cortés Bechiarelli (dir.), Miguel Ángel Núñez Paz (dir.). Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2011.

**BERMEJO, Mateo G./ AGUSTINA SANLLEHÍ, José Ramón**, “El delito de blanqueo de capitales”, *El nuevo Código Penal. Comentarios a la reforma* (Jesús-María Silva Sánchez (director) Nuria Pastor Muñoz (coordinadora). Ed. La Ley. Madrid, 2012.

**BLANCO CORDERO, Isidoro,**

- “Delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social”, *Eguzkilore. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología*, nº 14, San Sebastián, 2000.

- “Eficacia del sistema de prevención del blanqueo de capitales. Estudio del cumplimiento normativo (compliance) desde una perspectiva criminológica”, *Eguzkilore. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología*, nº 23, San Sebastián, 2009.

- *El Delito de Blanqueo de Capitales*, Ed. Aranzadi, 2ª edición, Cizur Menor, 2002.

- *El Delito de Blanqueo de Capitales*, Ed. Aranzadi, 3ª edición, Cizur Menor, 2012.

- “El delito fiscal como actividad delictiva previa del blanqueo de capitales”, *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología* (en línea). 2011, núm. 13-01, p. 01:1-01:46, disponible en el siguiente enlace: <http://criminet.ugr.es/recpc/13/recpc13-01.pdf>.

- “La cuota tributaria defraudada como objeto material del delito de blanqueo de capitales”, *II Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011.

- “La lucha contra el blanqueo de capitales procedentes de las actividades delictivas en el marco de la U.E.”, *Eguzkilore. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología*, nº 15, San Sebastián, 2001.

- *Límites a la participación delictiva. Las acciones neutrales y la cooperación con el delito*. Ed. Comares. Granada, 2001.

- “Negocios socialmente adecuados y delito de blanqueo de capitales”, ADPCP, L, 1997.

- “Penalización de lavado de dinero: aspectos sustantivos, principios y recomendaciones internacionales”, *Combate del lavado de activos desde el sistema judicial*. 3ª edición. Washington, DC: Organización de los Estados Americanos, República Bolivariana de Venezuela, y Banco Interamericano de Desarrollo, 2007, disponible en el enlace [http://www.cicad.oas.org/lavado\\_activos/pubs/Combate\\_Lavado\\_3ed.pdf](http://www.cicad.oas.org/lavado_activos/pubs/Combate_Lavado_3ed.pdf).

- “Principales instrumentos internacionales (de Naciones Unidas y la Unión Europea) relativos al crimen organizado: la definición de la participación en una organización criminal y los problemas de la aplicación de la Ley Penal en el espacio”, *Criminalidad organizada : reunión de la sección nacional española preparatoria del XVI Congreso de la AIDP en Budapest*, Castilla La Mancha, 1999, disponible en el siguiente enlace: [aidpespana.uclm.es/pdf/criminalidad/iblanco.pdf](http://aidpespana.uclm.es/pdf/criminalidad/iblanco.pdf).

**BLANCO LOZANO, Carlos**, “El blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas en el ordenamiento penal español”, *Comentarios a la legislación penal. Delitos contra la salud pública. (Reformas sobre el tráfico de drogas, secreto de las comunicaciones y conducción de ciclomotores)*, Revista de derecho Público, Tomo XVII, Dir. M. Cobo del Rosal, Coord. M. Bajo Fernández. Edersa. Madrid, 1996.

**BLASCO DÍAZ, José Luis**, “Diligencia debida”, *Régimen Jurídico de la Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales*. Ed. Tirant lo Blanch. Madrid, 2015.

**BÖHM, María Laura**, “Políticas de seguridad y neoliberalismo”, *Delincuencia, finanzas y globalización*. CIS. Madrid, 2013.

**BOIX REIG, Javier**, “Delito fiscal vs. blanqueo de capitales”, *Intercambio de información, blanqueo de capitales y lucha contra el fraude fiscal*. Instituto de Estudios Fiscales. Madrid, 2014.

**BOLEA BARDÓN, Carolina**, “Interrupción de la imputación objetiva por intervención de terceras personas”, ADPCP, 1994.

**BÖSE, Martin**, “Derechos fundamentales y Derecho penal como «Derecho coactivo»”, *La teoría del bien jurídico* (VV.AA). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2007.

**BOTTKE, Wilfried**, “¿Roma locuta causa finita? ¿Adiós a la exigencia de protección de los bienes jurídicos?”, *Derecho penal del estado social y democrático de derecho*.



*Libro homenaje a Santiago Mir Puig*. Diego Manuel Luzón Peña (dir.). Ed. La Ley. Madrid, 2010.

**BUNZEL, Michael**, “La fuerza del principio constitucional de proporcionalidad como límite de la protección de bienes jurídicos en la sociedad de la información”, *La teoría del bien jurídico* (VV.AA). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2007.

**CABALLERO SÁNCHEZ-IZQUIERDO, José María**, “El delito imprudente de blanqueo de capitales”, *La Ley* 19196/2011, Año XXXII. Nº 7736, 15 de noviembre de 2011.

**CADENAS CORTINA, Cristina**, “Problemas de la penalidad en los delitos de receptación y blanqueo de dinero”, *Cuadernos de Derecho Judicial*, 1994. CGPJ. Madrid, 1994.

**CALDERÓN CEREZO, Ángel**,

- “Algunos aspectos críticos del blanqueo de capitales. Legislación y jurisprudencia”, *Las últimas reformas penales II*, *Cuadernos de Derecho Judicial*, X 2006. CGPJ. Madrid, 2006.

- “Análisis sustantivo del delito (I): Prevención y represión del blanqueo de capitales”, en *Prevención y represión del blanqueo de capitales*, *Estudios de Derecho Judicial* nº 28, 2000. Consejo General del Poder Judicial. Madrid, 2000.

- *Comentarios al código penal*, vol. 3, Cándido Conde-Pumpido Tourón (dir.) Jacobo López Barja de Quiroga (coord.). BOSCH. Comte d’Urgell, 2007.

- *Delitos contra el orden socioeconómico* (Coord. Juan Saavedra Ruiz). Ed. La Ley. Madrid, 2008,

- “El marco jurídico del blanqueo de capitales: aspectos penales y administrativos”, esquema de ponencia publicado en [datadiar.com](http://www.datadiar.com), disponible en el siguiente enlace: [http://www.datadiar.com/actual/novedades\\_05/penal/blanqueo/d\\_may\\_02c.htm](http://www.datadiar.com/actual/novedades_05/penal/blanqueo/d_may_02c.htm).

**CALDERÓN CEREZO, Ángel/ CHOCLÁN MONTALVO, José Antonio**, *Manual de derecho Penal II. Parte especial*. Ed. Deusto. Barcelona, 2005.

**CAMPOS NAVAS, Daniel**, “Lavado de dinero y delito fiscal. Posibilidad de que delito fiscal sea el delito precedente al de blanqueo”, *La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*, nº 5, 2005.

**CANCIO MELIÁ, Manuel**,

- “Algunas reflexiones sobre lo objetivo y lo subjetivo en la teoría de la Imputación Objetiva”, *Imputación objetiva y dogmática penal*, Bolaños González, Mireya (Compiladora). Universidad de los Andes. Mérida, 2005.

- “Aproximación a la Teoría de la Imputación Objetiva”, *Imputación objetiva y dogmática penal*, Bolaños González, Mireya (Compiladora). Universidad de los Andes. Mérida, 2005.

- “La teoría de la adecuación social en Welzel”, ADPCP, XLVI, 1993.

- “De nuevo: ¿“derecho penal” del enemigo?”, *Derecho penal del enemigo* (JAKOBS, Günther/CANCIO MELIÁ, Manuel), Ed. Thomson. 1ª ed. Madrid, 2003.

**CANESTRARI, Stefano**, “La estructura del dolo eventual y las nuevas fenomenologías de riesgo”, *Anales de derecho*, nº 21. Universidad de Murcia, 2003, disponible en el siguiente enlace:

[http://new.pensamientopenal.com.ar/sites/default/files/2014/04/doctrina03\\_0.pdf](http://new.pensamientopenal.com.ar/sites/default/files/2014/04/doctrina03_0.pdf).

**CARBONELL MATEU, Juan Carlos**, “Sobre tipicidad e imputación: reflexiones básicas en torno a la imputación del dolo y la imprudencia”, *Estudios penales en recuerdo del Profesor Ruiz Antón* (coord. Emilio Octavio de Toledo y Ubieto, Manuel Gurdíel Sierra, E. Cortés). Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2003.

**CÁRDENAS, Javier**, “Algunas cuestiones sobre el riesgo permitido”, *Los Desafíos del Derecho Penal en el Siglo XXI: Libro Homenaje al Profesor Dr. Günther Jakobs* (Dir. Yacobucci, Guillermo Jorge). Ara Editores. Lima, 2005.

**CARDONA TORRES, Juan**, *Derecho Penal. Parte Especial*. Editorial Bosch, Barcelona, 2010.

**CARO JOHN, José Antonio**, “La impunidad de las conductas neutrales. A la vez, sobre el deber de solidaridad mínima en el derecho penal”, *Nueva doctrina penal*, nº 2. Editores del Puerto, 2005, disponible en el siguiente enlace: [www.alfonsozambrano.com/doctrina\\_penal/conductas\\_neutrales.doc](http://www.alfonsozambrano.com/doctrina_penal/conductas_neutrales.doc).

**CARPIO DELGADO, Juana del,**

- *El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal*. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 1997.

- “La posesión y utilización como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales”, *Revista General de Derecho Penal*, nº 15, 2011, disponible en el enlace: <http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/upo/profesores/jcardel/profesor/135359>

1812163 2011-la posesion y utilizacion como nuevas conductas en el delito de blanqueo de capitales-revista general de derecho 15.pdf.

**CASTRO MORENO, Abraham,**

- “Consideraciones críticas sobre la aplicación e interpretación del tipo subjetivo de los delitos de blanqueo de capitales”, *Libro homenaje al Prof. Luis Rodríguez Ramos*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.
- “Reflexiones críticas sobre las nuevas conductas de posesión y utilización en el delito de blanqueo de capitales en la reforma del anteproyecto de 2008”, *La Ley*, nº 7277, 2009.

**CESANO, José Daniel,**

- “Error de tipo, criminalidad económica y delito de lavado de activos de origen delictivo: su tratamiento en la dogmática penal argentina”, *ADPCP Tomo 60, Fasc/Mes 1*, 2007.
- *La política criminal argentina: ¿últimas imágenes del naufragio?*, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, 2008, disponible en el siguiente enlace <http://www.acaderc.org.ar/doctrina/articulos/la-politica-criminal-argentina.-ultimasimagenes?searchterm=Cesano>.

**CID GÓMEZ, Juan Miguel del**, “Detección del blanqueo y sus efectos socioeconómicos”, *III Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.

**COBO DEL ROSAL, Manuel**, “La recepción de las normas de la Comunidad Europea en la legislación penal contra el blanqueo de capitales”, *Cuadernos de política criminal* nº 85, 2005. Edersa, Madrid, 2005.

**COBO DEL ROSAL, Manuel/ ZABALA LOPEZ-GOMEZ, Carlos,**

- *Blanqueo de capitales: abogados, procuradores y notarios, inversores bancarios y empresarios*. Ed. Marcial Pons. Madrid, 2005.
- “Conclusiones críticas a la jurisprudencia contradictoria de la Audiencia Nacional y confirmatoria del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal)”, *Blanqueo de capitales*.

*Abogados, procuradores y notarios, inversores, bancarios y empresarios*. CESEJ, Centro de Estudios Superiores de Especialidades Jurídicas, 2005.

## COMISIÓN EUROPEA,

- Comunicado de prensa de fecha 17 junio 2015, disponible en el enlace: [http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-15-5188\\_es.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5188_es.htm).
- Informe sobre la aplicación de la Directiva 2005/60/CE de 11 de abril de 2012, disponible en el siguiente enlace: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/company/docs/financial-crime/20120411\\_report\\_es.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/financial-crime/20120411_report_es.pdf).

**CONSEJO FISCAL**, Informe sobre el anteproyecto de Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, de 28 de septiembre de 2009, disponible en el siguiente enlace:

[https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/documentos/documentos\\_consejo\\_fiscal/!ut/p/a1/04\\_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9HT0cDT2DDbzcSzcDBzdPYOdTD08jIO9DYAKIpEVHv4GgEVGPqGmli6GBu4G5KoH1WBRZAJcfoNcABHA0L6wWjUJvG8QEM8BOBCvA44aC3NDQCINMTwDQkuWM/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?ckInformes=1&txtFechaDesde=&txtFechaHasta=&palabraBuscar=blanqueo&btnBuscar2=Buscar&paginaDestino=2](https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/documentos/documentos_consejo_fiscal/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9HT0cDT2DDbzcSzcDBzdPYOdTD08jIO9DYAKIpEVHv4GgEVGPqGmli6GBu4G5KoH1WBRZAJcfoNcABHA0L6wWjUJvG8QEM8BOBCvA44aC3NDQCINMTwDQkuWM/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?ckInformes=1&txtFechaDesde=&txtFechaHasta=&palabraBuscar=blanqueo&btnBuscar2=Buscar&paginaDestino=2).

**CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Comisión de Estudios e Informes)**, Informe al anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, de 18 de febrero de 2009, disponible en el enlace <http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-al-Anteproyecto-de-Ley-Organica-por-la-que-se-modifica-la-Ley-Organica-10-1995--de-23-de-noviembre--del-Codigo-Penal>.

**CONTELL LLIBEROS, Arturo José**, “Panorámica sobre el blanqueo de capitales”, *III Curso de Alta Especialización en Fiscalidad Financiera celebrado en la Escuela de la Hacienda Pública del Instituto de Estudios Fiscales*, 2007, disponible en el enlace [http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/revistas/cuadernos\\_formacion/07\\_2009/03.pdf](http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/revistas/cuadernos_formacion/07_2009/03.pdf).

## CORCOY BIDASOLO, Mirentxu,

- “Crisis de las garantías constitucionales a partir de las reformas penales y de su interpretación por los tribunales”, *Constitución y sistema penal*, Mir Puig, S./ Corcoy Bidasolo, M. (dirs.). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2012.

- *Revista de Derechos Fundamentales*, nº 8, 2012. Ed. Universidad Viña del Mar, 2008, disponible en el enlace <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4334611>.

**CÓRDOBA, Fernando J.**, “Imputación objetiva y teoría de la acción”, *Estudios sobre justicia penal. Homenaje a Julio B.J. Maier*. Editores del Puerto, Buenos Aires, 2005.

**CÓRDOBA RODA, Juan,**

- *Abogacía, secreto profesional y blanqueo de capitales*. Ed. Marcial Pons. Madrid, 2006.

- “Abogacía, secreto profesional y blanqueo de capitales”, *I Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2009.

**CORTÉS BECHIARELLI, Emilio,**

- “Ejercicio de las profesiones sanitarias y delitos imprudentes”, *La imprudencia. Cuadernos de Derecho Judicial*, XVI, 2005. CGPJ. Madrid, 2005.

- “Protección del secreto profesional del abogado en España y ejercicio del derecho de defensa a la luz de las directivas 2001/97 y 2005/60 del Parlamento Europeo y del Consejo”, *Financiación del terrorismo, blanqueo de capitales y secreto bancario: un análisis crítico* (dir. José Luis González Cussac; coord. Antonio Fernández Hernández). Ed Tirant lo Blanch. Valencia, 2009.

- “Secreto profesional del abogado y ejercicio del derecho de defensa a la luz de la Directiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo”, *Anuario de la Facultad de Derecho (Universidad de Extremadura)*, nº 21, 2003.

**CUADRADO RUIZ, María Ángeles**, “La comisión por omisión como problema dogmático”, ADPCP, L, 1997.

**CUESTA AGUADO, M<sup>a</sup> Paz de la**, *Tipicidad e imputación objetiva*, Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 1996.

**CUESTA ARZAMENDI, José Luis de la**, “El derecho penal ante la criminalidad organizada. Nuevos retos y límites” *La cooperación internacional frente a la criminalidad organizada*, F. Gutiérrez-Alviz Conradi, M. Valcárce López (Dirs.), Sevilla, 2001, disponible en el siguiente enlace: [http://www.ivac.ehu.es/p278-content/eu/contenidos/informacion/ivckeijose\\_luis\\_delacuesta/eu\\_joseluis/adjuntos/07UIMPSevilla\\_JLCuesta.pdf](http://www.ivac.ehu.es/p278-content/eu/contenidos/informacion/ivckeijose_luis_delacuesta/eu_joseluis/adjuntos/07UIMPSevilla_JLCuesta.pdf).

**CUESTA MERINO, José Luis**, “La instrucción de las insolvencias punibles”, *Estudios de Derecho Judicial. La instrucción de los delitos económicos y contra la Hacienda Pública*, 2004, nº 64. CGPJ, 2004.

**CUGAT MAURI, Miriam/ BAÑERES SANTOS, Francisco**, “Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social”, *Derecho Penal Español. Parte Especial (II)*. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011.

**CHOCLÁN MONTALVO, José Antonio**,

- “¿Puede ser el delito fiscal delito precedente de blanqueo de capitales?”, *Revista Jurídica General, Blanqueo de Capitales*. Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, nº 37, Madrid, 2007.

- “Sobre el fundamento del injusto del delito fiscal desde los principios constitucionales de legalidad y proporcionalidad”, *Las últimas reformas penales, Estudios de Derecho Judicial nº 138*. CGPJ. Madrid, 2007.

**DELGADO GARCÍA, Dolores**,

- *Configuración Jurisprudencial del delito de blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas. ¿Inversión de la carga de la prueba?*, publicado en el siguiente enlace: <http://www.cej.justicia.es/pdf/publicaciones/fiscales/FISCAL05.PDF>.

- *La prueba indiciaria en el Delito de Lavado de Activos -Perspectiva del Fiscal*, publicado en el enlace: [www.cej.justicia.es/pdf/publicaciones/fiscales/FISCAL07.pdf](http://www.cej.justicia.es/pdf/publicaciones/fiscales/FISCAL07.pdf).

**DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, Miguel**, “El castigo del autoblanqueo en la reforma penal de 2010. La autoría y participación en el delito de blanqueo de capitales”, *III Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.

**DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, Julio**,

- “El blanqueo de capitales”, *Estudios sobre las reformas del Código Penal* (coord. Gonzalo Rodríguez Mourullo). Ed. Civitas. Madrid, 2011.

- *El blanqueo de capitales en el Derecho español (Texto provisional)*, disponible en el enlace [http://www.ac-firma.com/biblioteca/opac\\_css/doc\\_num.php?explnum\\_id=7](http://www.ac-firma.com/biblioteca/opac_css/doc_num.php?explnum_id=7).

- *El delito de blanqueo de capitales en Derecho Español*. Ed. Dykinson. Madrid, 1999.

- “Recepción de las propuestas del GAFI de las Directivas europeas sobre el blanqueo de capitales en el derecho español”, *Política criminal y blanqueo de capitales*, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2009.

**DÍEZ NICOLÁS, Juan**, “Actitudes hacia la corrupción”, *Delincuencia, finanzas y globalización*. CIS. Madrid, 2013.

**DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis**,

- *De la sociedad del riesgo a la seguridad ciudadana: un debate desenfocado*, RECPC 07-01 (2005).

- “El blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas. La recepción de la legislación internacional en el ordenamiento penal español”, *Cuadernos de derecho Judicial I*, 1994. CGPJ. Madrid, 1994. También disponible en *Actualidad Penal*, nº 34, septiembre de 1994.

**DOMINGUEZ PUNTAS, Antonio**,

- *Memento de Autor Blanqueo de Capitales y Delito Fiscal*. Instituto de Estudios Fiscales, Ed. Francis Lefebvre. Madrid, 2011.

- “Novedades en materia de la lucha contra el blanqueo de capitales, (I, II, III y IV), *Actum fiscal*, nº 28 (junio de 2009) y nº 31 (septiembre de 2009).

**DONINI, Massimo**, “Principios constitucionales y sistema penal”, *Derecho penal del estado social y democrático de derecho. Libro homenaje a Santiago Mir Puig*. Diego Manuel Luzón Peña (dir.). Ed. La Ley. Madrid, 2010.

**DOPICO GÓMEZ-ALLER, Jacobo**,

- *Omisión e injerencia en derecho penal*. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2006.

- *Si todo es blanqueo, nada es blanqueo (I)*, Legaltoday.com, publicado en el siguiente enlace: <http://www.legaltoday.com/practica-juridica/penal/economico/si-todo-es-blanqueo-nada-es-blanqueo-i>.

**ESCOBAR JIMÉNEZ, Rafael**, “El delito de blanqueo de capitales, delito fiscal y contra la Seguridad Social tras la reforma de la LO 5/2010, de 22 de junio”, *La nueva reforma del Código Penal. Cuadernos de derecho para ingenieros*. Ed. La Ley, Madrid, 2011.

**ESCRIBANO ÚBEDA-PORTUGUÉS, José**,

- “Análisis de los efectos negativos de la delincuencia organizada en la sociedad internacional”, *Anales de la Universidad Metropolitana*, Vol. 9, nº 2 (Nueva Serie), 2009, disponible en el enlace [dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3623992.pdf](http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3623992.pdf).

- “La lucha contra el blanqueo de capitales a nivel internacional”, *Tiempo de Gestión*, año 6, nº 9, 2010, disponible en [dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4013226.pdf](http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4013226.pdf).

**ESCRIHUELA CHUMILLA, F. Javier**, “La Receptación y el Blanqueo de Capitales”, *Todo Penal*. Ed. La Ley, Madrid, 2011.

**ESER, Albin**, “La Adecuación social” ¿Figura legal superflua o necesaria? Reflexiones respecto a la concesión de ventajas socialmente habituales”, *Revista de Derecho Penal*, 2002, disponible en el enlace <https://www.freidok.uni-freiburg.de/dnb/download/3716>.

**ESTEBAN, Rosario**, “El delito imprudente”, *La imprudencia. Cuadernos de Derecho Judicial*, XVI, 2005. CGPJ. Madrid, 2005.

**FABIÁN CAPARRÓS, Eduardo A.**,

- “Consideraciones de urgencia sobre la LO 8/1992 de modificación del CP y LECr en materia de tráfico de drogas”, ADPCP, 1993.

- “El blanqueo de capitales (Contexto, razones de su penalización, evolución en nuestro entorno de las iniciativas supranacionales)”, *El Sistema Penal frente a los retos de la nueva sociedad*. Coords. M<sup>a</sup> Rosario Diego Díaz Santos / Eduardo A. Fabián Caparrós. Ed. Colex. Madrid, 2003.

- *El delito de blanqueo de capitales*. Ed. Colex. Madrid, 1998.

- “Relaciones entre blanqueo de capitales y corrupción. Algunas valoraciones a propósito de las previsiones contenidas en la convención de la OCDE sobre soborno de funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales”, *Blanqueo de dinero y corrupción en el sistema bancario*, Ediciones Universidad de Salamanca, 2002.

- “Tipologías y lógica del lavado de dinero”, *Combate del lavado de activos desde el sistema judicial*. 3ª edición. Washington, DC: Organización de los Estados Americanos, República Bolivariana de Venezuela, y Banco Interamericano de Desarrollo, 2007, disponible en el siguiente enlace:  
[http://www.cicad.oas.org/lavado\\_activos/pubs/Combate\\_Lavado\\_3ed.pdf](http://www.cicad.oas.org/lavado_activos/pubs/Combate_Lavado_3ed.pdf).

**FABRA VALLS, Modesto**,

- “El control interno”, *Régimen Jurídico de la Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales*. Ed. Tirant lo Blanch. Madrid, 2015.

- “La lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales”, *Régimen Jurídico de la Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales*. Ed. Tirant lo Blanch. Madrid, 2015.



- “Las obligaciones de información”, *Régimen Jurídico de la Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales*. Ed. Tirant lo Blanch. Madrid, 2015.

- “Otras disposiciones”, *Régimen Jurídico de la Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales*. Ed. Tirant lo Blanch. Madrid, 2015.

**FAKHOURI GÓMEZ, Yamila**, *Teoría del dolo vs. teoría de la culpabilidad. Un modelo para afrontar la problemática del error en Derecho penal*, InDret Penal, nº 4, octubre 2009, disponible en el siguiente enlace  
<http://www.raco.cat/index.php/InDret/article/download/141389/192900>.

**FARALDO CABANA, Patricia**,

- “Antes y después de la tipificación expresa del autoblanqueo de capitales”, *Estudios penales y Criminológicos*, vol. XXXIV, 2014. Disponible en el siguiente enlace:  
<http://www.usc.es/revistas/index.php/epc/article/view/1898>.

- “Aspectos básicos del delito de blanqueo de bienes en el Código Penal de 1995”, *Estudios Penales y Criminológicos*, nº XXI, 1998.

- “Cuestiones relativas a la autoría de los delitos de blanqueo de bienes”, *Criminalidad organizada, terrorismo e inmigración. Retos contemporáneos de la política criminal*, PUENTE ABA, L. M. (Dir.). Ed. Comares. Granada, 2008. Versión digitalizada disponible en el enlace [http://www.ecrim.es/publications/2008\\_AutoriaBlanqueo.pdf](http://www.ecrim.es/publications/2008_AutoriaBlanqueo.pdf).

- “El blanqueo de capitales tras la reforma de 2010”, *Revista de Inteligencia*. Nº 0, Primer trimestre, 2012, disponible en el enlace  
[www.ecrim.es/publications/2011/BlanqueoCapitales2010.pdf](http://www.ecrim.es/publications/2011/BlanqueoCapitales2010.pdf).

- “Los autores del delito de blanqueo de bienes en el Código Penal español de 1995. Especial alusión a los proveedores de bienes y/o servicios: el caso de los abogados y asesores fiscales”, *ADPCP*, LIX, 2006.

- “Los profesionales del derecho ante el blanqueo de bienes, prevención del blanqueo y secreto profesional: el ejercicio de la profesión como conducta típica de blanqueo”, *Revista de derecho y proceso penal*, nº 16, 2006.

**FARIA COSTA, José de**, “A protecção penal contra o branqueamento de capitais em Portugal”, *IV Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2014.

**FATF**,

- *Las nuevas 40 recomendaciones*, disponible en el siguiente enlace:  
<http://www.gafisud.info/pdf/NUEVASRECOMENDACIONESDELGAFI-esp.pdf>.
- Las 40 Recomendaciones revisadas el 16 de febrero de 2012, disponible en el enlace:  
[www.aranzadi.es/blanqueodecapitales/pdf/4.40recomendacionesgafi.pdf](http://www.aranzadi.es/blanqueodecapitales/pdf/4.40recomendacionesgafi.pdf).
- *Memoria anual 2011 - 2012*, disponible en el siguiente enlace:  
<http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/brochuresannualreports/FATF%20annual%20report%202011%202012%20website.pdf>.
- *Public Statement*, 26 de junio de 2015, disponible en el siguiente enlace:  
<http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-june-2015.html>.

**FEIJÓO SÁNCHEZ, Bernardo,**

- *Derecho penal de la empresa e imputación objetiva*, Ed. Reus. Madrid, 2007
- “Imputación objetiva en el Derecho penal económico y empresarial: Esbozo de una teoría general de los delitos económicos”, publicado por la *Revista Electrónica InDret* con fecha de mayo de 2009, disponible en el siguiente enlace:  
[http://www.indret.com/es/derecho\\_penal/8/?&sa=10&fc=137&sn=80](http://www.indret.com/es/derecho_penal/8/?&sa=10&fc=137&sn=80).
- *Límites de la participación criminal: ¿Existe una prohibición de regreso como límite general del tipo en derecho penal?* Ed. Comares. Granada, 1999.
- “Sobre la “administrativización del Derecho penal en la “sociedad del riesgo”. Un apunte sobre la política criminal a principios del siglo XXI”, *Liber amicorum en Homenaje al Profesor Antonio González-Cuéllar García*, Ed. Colex. Madrid, 2006.
- “Sobre la crisis de la teoría del bien jurídico”, publicado por la *Revista Electrónica InDret* en febrero de 2008, disponible en el siguiente enlace:  
<http://www.raco.cat/index.php/InDret/article/view/124256>.

**FERNÁNDEZ BAUTISTA, Silvia**, “La adscripción de un hecho a su autor: la pertenencia del hecho. Especial referencia al administrador”, *Derecho penal del estado social y democrático de derecho. Libro homenaje a Santiago Mir Puig*. Diego Manuel Luzón Peña (dir.). Ed. La Ley. Madrid, 2010.

**FERNÁNDEZ DE CEVALLOS Y TORRES, José,**

- *Blanqueo de capitales y principio de lesividad*, Ratio Legis Ediciones. Salamanca, 2014.

- *Blanqueo de capitales y principio de lesividad*. (Tesis doctoral dirigida por Eduardo A. Fabián Caparrós, presentada en Salamanca en 2013), disponible en el enlace <http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/122959>.

**FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Juan Manuel**, “Un Código Penal en continua reforma”, *Las últimas reformas penales II, Cuadernos de Derecho Judicial* nº X, 2006. CGPJ. Madrid, 2006.

**FERNÁNDEZ ROS, Juan Francisco**, *Algunas notas sobre la Reforma del Código Penal sobre el comiso y el blanqueo de capitales*, Publicación online Noticias Jurídicas, Marzo 2011, disponible en el enlace <http://noticias.juridicas.com/articulos/55-Derecho-Penal/201103-8257512545215963.html>.

**FERNÁNDEZ STEINKO, Armando**,

- “Blanqueo, narcotráfico y desregularización financiera”, *Delincuencia, finanzas y globalización*. CIS. Madrid, 2013.

- “Delito y criminalización en una sociedad global”, *Delincuencia, finanzas y globalización*. CIS. Madrid, 2013.

**FERNÁNDEZ TERUELO, Javier Gustavo**,

- “Blanqueo de capitales”, *Memento Penal Económico y de la Empresa 2011-2012* (coord. Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno). Ed. Francis Lefebvre. Madrid, 2011.

- “El comiso con particular referencia a su incidencia en el delito del blanqueo de capitales (a raíz de la reforma del código penal operada por LO 5/2010)”, *II Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011.

- “El nuevo modelo de reacción penal frente al blanqueo de capitales (los nuevos tipos de blanqueo, la ampliación del comiso y la integración del blanqueo en el modelo de responsabilidad penal de las empresas)”, *Diario La Ley*, Sección Doctrina, 22 Jun. 2011, Año XXXII. Nº 7657. Ed. La Ley, 2011.

**FERRÉ OLIVÉ, Juan Carlos**,

- “Corrupción, crimen organizado y blanqueo de capitales en el mercado financiero”, *Blanqueo de dinero y corrupción en el sistema bancario*, Ediciones Universidad de Salamanca, 2002.

- “El nuevo tipo agravado de blanqueo cuando los bienes tengan su origen en delitos relativos a la corrupción”, *III Congreso de prevención y represión del blanqueo de*

*capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.

- “Política criminal europea en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo”, *Financiación del terrorismo, blanqueo de capitales y secreto bancario: un análisis crítico* (dir. José Luis González Cussac; coord. Antonio Fernández Hernández). Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2009. También en *I Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2009.

**FERRO VEIGA, José Manuel**, *Delito fiscal y blanqueo de capital*. Ed. Formación Alcalá. Jaén, 2013.

**FISICARO, Emanuele**, “La propuesta de la cuarta directiva de la UE y las recomendaciones GAFI”, *IV Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2014.

**FMI**, *Technical note Anti-money laundering and combating the financing of terrorism (aml/cft)*, julio de 2015, disponible en el siguiente enlace: <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:s1NyZxJMZhJ:www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15174.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=es>.

**FOFFANI, Luigi**,

- “Bienes jurídicos de relevancia comunitaria y protección penal: el caso de las falsedades en las cuentas de sociedades mercantiles”, *Derecho penal del estado social y democrático de derecho. Libro homenaje a Santiago Mir Puig*. Diego Manuel Luzón Peña (dir.). Ed. La Ley. Madrid, 2010.

- “La evolución del Derecho penal europeo”, *IV Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2014.

**FRIEYRO ELÍCEGUI, Sofía**, “Las conductas neutrales de intervención en el delito y el delito de tráfico de drogas”, *Diario La Ley, Sección Doctrina*, 12 enero 2015, Año XXXVI. Nº 8456. Ed. La Ley, 2011.

**FRISCH, Wolfgang**,

- “Bien jurídico, Derecho, estructura del delito e imputación en el contexto de la legitimación penal estatal”, *La teoría del bien jurídico* (VV.AA). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2007.

- “La imputación objetiva: estado de la cuestión”, *Sobre el estado de la teoría del delito*, Ed. Civitas. Madrid, 2000.

**FUENTES GONZÁLEZ, Gabriel**, “El proceso económico del tráfico de drogas”, *Prevención y represión del blanqueo de capitales. Estudios de derecho judicial* nº. 28, 2000 (Javier Alberto Zaragoza Aguado (dir.). CGPJ. Madrid, 2000.

**FUENTES MARTÍNEZ, Jesús Julián**, “El alcance del control de la legalidad de los actos y negocios jurídicos por parte del notario. (La “posición de garantía” del notario)”, *Judicatura y notariado ante los delitos económicos. Estudios de Derecho Judicial* nº 73. CGPJ. Madrid, 2006.

**GAEDE, Karsten**, “Puntos fuertes y puntos flacos de la función legitimadora de la teoría del bien jurídico inmanente al sistema en el ejemplo del fraude de subvenciones”, *La teoría del bien jurídico* (VV.AA). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2007.

**GALLEGRO SOLER, José Ignacio**, *Comentarios al Código Penal. Reforma LO 5/2010*. Dir. Mirentxu Corcoy Bidasolo, Santiago Mir Puig. Ed. Tirant lo Blanch 2011. Valencia, 2011.

**GARCÍA-PABLOS MOLINA, Antonio**, *Introducción al derecho penal*. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, 4ª edición, Madrid, 2.006.

**GARCÍA NORIEGA, Antonio**, *Cómo se lava el dinero. Cómo se combate el lavado*. Ed. Difusión Jurídica. Madrid, 2010.

**GARCÍA RAMONES, Asunción/ SANTAMARÍA CARRERAS, Gabriel**, “Proceso de eliminación de paraísos fiscales”, *Cuadernos de formación. Escuela de la Hacienda Pública. Instituto de Estudios Fiscales*, 2ª época, vol. 11/2010. Ministerio de Economía y Hacienda. Madrid, 2010.

**GARCÍA VALDECASAS, José Ángel**, *Resumen del Reglamento de la Ley sobre Blanqueo de Capitales*, publicado en el siguiente enlace: <http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/resumenes/2014-blanqueo-reglamento.htm>.

**GARCÍA VALDÉS, Carlos**, “Dos aspectos de la represión penal del tráfico de drogas: la teoría del agente provocador y del delito provocado y el blanqueo del dinero procedente del delito”, *Política criminal y reforma penal: homenaje a la memoria del Prof. Dr. D. Juan del Rosal*, Ed. Edersa. Madrid, 1993.

**GARRIDO JUNCAL, Andrea**, “La transparencia de la vida pública en Francia. A propósito del caso Jérôme Cahuzac”, *IV Congreso de prevención y represión del*

*blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2014.

**GARZÓN REAL, Baltasar**, “Cooperación jurídica internacional en el ámbito del blanqueo de dinero y espacio de seguridad, libertad y justicia en la Unión Europea” *Prevención y represión del blanqueo de capitales. Estudios de derecho judicial* nº 28, (Javier Alberto Zaragoza Aguado (dir.). CGPJ. Madrid, 2000.

**GAYÁ I ARJALAGUER, Miquel/ MOYANO BENITO, Jesús M.**, *Evolución de los delitos subyacente al blanqueo en el ámbito penal y en la normativa preventiva*, II Curso de Alta Especialización en Fiscalidad Financiera, Instituto de Estudios Fiscales, publicado en el siguiente enlace: [http://www.ief.es/Publicaciones/Revistas/Cuadernos/05\\_2008/Colab\\_06\\_08.pdf](http://www.ief.es/Publicaciones/Revistas/Cuadernos/05_2008/Colab_06_08.pdf).

**GIL DE LA FUENTE, Juan**, “La criminalidad organizada y el delito de asociación ilícita: referencia al delito de blanqueo de capitales”, *La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario*, nº 20, 2005.

**GIL MARTÍNEZ, Antonio**, “Instrucción de los delitos fiscales y contra la Hacienda Pública”, *La instrucción de los delitos económicos y contra la Hacienda Pública. Estudios de Derecho Judicial*, nº 64. Consejo General del Poder Judicial. Madrid, 2004.

**GIMBERNAT ORDEIG, Enrique**,

- “A vueltas con la imputación objetiva, la participación delictiva, la omisión impropia y el Derecho penal de la culpabilidad”, ADPCP, LXVI, 2013.

- “Cursos causales irregulares e imputación objetiva”, ADPCP, LXIII, 2010.

- “Imputación objetiva, participación en una autopuesta en peligro y heteropuesta en peligro consentida”, *Estudios penales en recuerdo del Profesor Ruiz Antón*, Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2004.

- “La causalidad en la omisión impropia y la llamada omisión por comisión”, ADPCP, L, 2.000.

- “La omisión impropia en la dogmática penal alemana. Una exposición”, ADPCP, LIII, 1997.

- “La reforma del Código Penal”, *Diario El Mundo*, artículo publicado el 24/04/2015, disponible en el siguiente enlace: <http://www.elmundo.es/opinion/2015/04/23/5539383be2704ed1158b4582.html>.

- “Los orígenes de la teoría de la imputación objetiva”, *Libro homenaje al Prof. Luis Rodríguez Ramos*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.
- “Presentación”, *La teoría del bien jurídico* (VV.AA). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2007.
- “¿Qué es la imputación objetiva?”, *Estudios penales y criminológicos*, nº 10, 1985-1986.

**GÓMEZ BENÍTEZ, José Manuel,**

- “El concepto de dolo en la moderna dogmática penal”, *Nuevas posiciones de la dogmática jurídica penal. Cuadernos de Derecho Judicial* nº 7, 2006. CGPJ. Madrid, 2006.
- “Reflexiones técnicas y de política criminal sobre el delito de blanqueo de bienes”, *Cuadernos de política criminal* nº 91, 2007. Edersa, 2007.

**GÓMEZ INIESTA, Diego J.**, *El delito de blanqueo de capitales en Derecho Español*. Ed. Cedecs. Barcelona, 1996.

**GÓMEZ PAVÓN, Pilar**, “El bien jurídico protegido en la receptación, blanqueo de dinero y encubrimiento”, *Estudios de Derecho Judicial* nº 1. CGPJ. Madrid, 1994.

**GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos**, “El criterio de los honorarios profesionales "bona fides" como barrera del abogado defensor frente al delito de blanqueo de capitales: un apunte introductorio”, *Política criminal y blanqueo de capitales*, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2009.

**GÓMEZ-REINO CARNOTA, Enrique**, “Aspectos administrativos de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo”, *IV Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2014.

**GONZÁLEZ CUÉLLAR SERRANO, Nicolás,**

- “Blanqueo de capitales y secreto profesional del abogado (I)”, *Actualidad jurídica Aranzadi*, nº 546, septiembre 2002.
- “Blanqueo de capitales y secreto profesional del abogado (II)”, *Actualidad jurídica Aranzadi*, nº 547, octubre 2002.

**GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis**, *El renacimiento del pensamiento totalitario en el seno del estado de Derecho: la doctrina del derecho penal enemigo*, Revista Penal, nº 19 (año 2007), disponible en el siguiente enlace: [www.uhu.es/revistapenal/index.php/penal/article/viewFile/304/295](http://www.uhu.es/revistapenal/index.php/penal/article/viewFile/304/295).

**GONZÁLEZ RUS, Juan José**, “Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico”, *Sistema de derecho penal español* (coord. Lorenzo Morillas Cueva). Ed. Dykinson. Madrid, 2011.

**GRACIA MARTÍN, Luis**,

- *Consideraciones críticas sobre el actualmente denominado “Derecho penal del enemigo”*, RECPC 07-02 (2005), disponible en el siguiente enlace: [criminnet.ugr.es/recpc/07/recpc07-02.pdf](http://criminnet.ugr.es/recpc/07/recpc07-02.pdf).

- “El Finalismo como método sintético real-normativo para la construcción de la Teoría del Delito”, *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*. 2004, núm. 06-07, disponible en el siguiente enlace: <http://criminnet.ugr.es/recpc/06/recpc06-07.pdf>.

- “Los delitos de comisión por omisión. (Una exposición crítica de la doctrina dominante)”, *Modernas tendencias en la ciencia del derecho penal y en la criminología*. UNED. 1ª edición, Madrid, 2001.

**GRAMATICA BOSCH, Gerard**, “Conductas neutrales: estado de la cuestión”. Centro de Investigación interdisciplinaria en Derecho Penal Económico, 2009, disponible en el siguiente enlace: <http://ciidpe.com.ar/area1/conductas%20neutrales.gramatica.pdf>.

**GUÉREZ TRICARICO, Pablo**, “Consecuencias accesorias y blanqueo de capitales”, *Política criminal y blanqueo de capitales*. Ed. Marcial Pons, Madrid, 2009.

**GUINARTE CABADA, Gumersindo**,

- “La política criminal de la Unión Europea en materia de blanqueo de capitales. Especial referencia a las nuevas propuestas de directivas de 2013”, *IV Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2014.

- “La reforma de 2010 del comiso en el blanqueo”, *III Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.

**GUTIERREZ FRANCÉS, Mariluz**, “Las altas tecnologías de la información al servicio del blanqueo de capitales trasnacional”, *Blanqueo de dinero y corrupción en el sistema bancario*, Ediciones Universidad de Salamanca, 2002.



**HASSEMER, Winfried,**

- “Bienes jurídicos en el derecho penal”, *Estudios sobre justicia penal. Homenaje a Julio B.J. Maier*. Editores del Puerto. Buenos Aires, 2005.
- “Líneas de desarrollo del Derecho penal alemán desde la época de posguerra hasta la actualidad”, *Estudios penales en homenaje a Enrique Gimbernat*. Ed. Edisofer. Madrid, 2008.
- *Persona, mundo y responsabilidad. Bases para una teoría de la imputación en Derecho penal*. Ed. Temis. Santa Fe de Bogotá, 1999.
- “¿Puede haber delitos que no afecten a un bien jurídico penal?”, *La teoría del bien jurídico* (VV.AA). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2007.

**HEFENDEHL, Roland,**

- *¿Debe ocuparse el derecho penal de Riesgos futuros?, Bienes jurídicos colectivos y delitos de peligro abstracto*, RECCP 04-14 (2002), disponible en el siguiente enlace: [criminnet.ugr.es/recpc/recpc\\_04-14.pdf](http://criminnet.ugr.es/recpc/recpc_04-14.pdf)
- “De largo aliento: el concepto de Bien Jurídico”, *La teoría del bien jurídico* (VV.AA). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2007.
- “El bien jurídico como eje material de la norma penal”, *La teoría del bien jurídico* (VV.AA). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2007.
- “El bien jurídico: imperfecto, pero sin alternativa”, *Estudios penales en homenaje a Enrique Gimbernat*. Ed. Edisofer, Madrid, 2008.
- “Las jornadas desde la perspectiva de un partidario del bien jurídico”, *La teoría del bien jurídico* (VV.AA). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2007.

**HERNÁNDEZ PARDO, Raúl**, “Prevención del blanqueo de capitales: respuestas a las dudas de los profesionales jurídicos”, *Diario La Ley-Actualidad*, Año XXIX, nº 7020, 2008.

**HIRSCH, Hans Joachim**, “Sobre lo injusto del delito imprudente”, *Revista de derecho penal y criminología*, nº 16, 2005, disponible en el siguiente enlace: [portal.uclm.es/descargas/idp\\_docs/doctrinas/hirsch.pdf](http://portal.uclm.es/descargas/idp_docs/doctrinas/hirsch.pdf).

**HORMAZÁBAL MALARÉE, Hernán,**

- “Consecuencias político criminales y dogmáticas del principio de exclusiva protección de bienes jurídicos”, *Serta: in memoriam Alexandro Baratta*, Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca, 2004.

- “Imputación objetiva en los delitos calificados por el resultado”, ADPCP, XLII, 1987.

**HÖRNLE, Tatjana**, “La protección de sentimientos en el StGB”, *La teoría del bien jurídico* (VV.AA). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2007.

**HUERTA TOCILDO, Susana,**

- “Aproximación crítica a la nueva regulación del delito de receptación y otras conductas afines”, *Cuadernos de Derecho Judicial* n° XX, 1996. CGPJ. Madrid, 1996.

- *Principales novedades de los delitos de omisión en el Código Penal de 1995*. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1997.

**IGLESIAS RÍO, Miguel Ángel/ MEDINA ARNAIZ, Teresa**, *Herramientas preventivas en la lucha contra la corrupción en el ámbito de la Unión Europea*, disponible en el siguiente enlace: [www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/.../pr23.pdf](http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/.../pr23.pdf).

**JAKOBS, Günther,**

- *Derecho Penal. Parte General. Fundamentos y teoría de la imputación*. Ed. Marcial Pons, 2ª ed. Madrid, 1997.

- “Derecho penal del ciudadano y Derecho penal del enemigo”, *Derecho penal del enemigo* (JAKOBS, Günther/CANCIO MELIÁ, Manuel), Ed. Thomson. 1ª ed. Madrid, 2003.

- *Dogmática de Derecho Penal y la Configuración Normativa de la Sociedad*, Ed. Thomson. Madrid, 2004.

- *La imputación objetiva en el Derecho penal*. Ed. Ad Hoc, Buenos Aires, 1997.

- *La imputación penal de la acción y la omisión*, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1996.

**JESCHECK, Hans-Heinrich**, *Tratado de Derecho Penal. Parte General*. Ed. Comares. Granada, 1993.

**JIMÉNEZ-VILLAREJO FERNÁNDEZ, Francisco**, “Propuestas para mejorar la eficacia de la recuperación de activos criminales en un contexto de crisis económica”, *Revista de Derecho Penal*, nº 37, 2012. Ed. Lex Nova, 2012.

**JORGE BARREIRO, Agustín**, “El delito de alzamiento de bienes. Problemas prácticos”, *Derecho Penal Económico. Cuadernos de Derecho Judicial* nº2, 2003. CGPJ, 2003.

**JUAN SÁNCHEZ, José Ricardo**, “Derecho Procesal Penal”, *Auditoría, prevención y represión del blanqueo de capitales*, Ed. Liber Factory. Madrid, 2014.

**KAHLO, Michael**, “Sobre la relación entre el concepto de bien jurídico y la imputación objetiva en Derecho Penal”, *La teoría del bien jurídico* (VV.AA). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2007.

**KAUFMANN, Armin**, *Dogmática de los delitos de omisión*. Traducción de la segunda edición alemana (Gotinga, 1980). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2006.

**KIERSZENBAUM, Mariano**, “El bien jurídico en el derecho penal. Algunas nociones básicas desde la óptica de la discusión actual”, *Lecciones y Ensayos*, nº 86, 2009. Disponible en el siguiente enlace: <http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/86/07-ensayo-kierszenbaum.pdf>.

**LAGODNY, Otto**, “El Derecho penal sustantivo como piedra de toque de la dogmática constitucional”, *La teoría del bien jurídico* (VV.AA). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2007.

**LAMPE, Ernst-Joachim**, “El nuevo tipo penal de blanqueo de dinero”, *Estudios penales y criminológicos*, XX, Universidad de Santiago de Compostela, 1997.

**LANDECHO VELASCO, Carlos María**, *Derecho Penal Español. Parte General*. Ed. Tecnos. 8ª ed., Madrid, 2010.

**LANDROVE DÍAZ, Gerardo**, “El blanqueo de capitales de procedencia delictiva”, *I Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2009.

**LASCURAÍN SÁNCHEZ, Juan Antonio**, “Salvar al oficial Ryan: (sobre la responsabilidad penal del oficial de cumplimiento)”, *Responsabilidad de la Empresa y Compliance. Programas de prevención, detección y reacción penal*, Ed. Edisofer. Madrid, 2014.

**LOBO GONZÁLEZ, Raquel/ ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, Mabel**, *Código Penal. Parte especial. Tomo II. Vol.II*. Coord. Sergio Amadeo Gadea. Editorial: Factum Libri Ediciones, Madrid, 2011.

**LOMBARDERO EXPÓSITO, Luis Manuel de**, “La perspectiva penal”, *Blanqueo de capitales: prevención y represión del fenómeno desde la perspectiva penal, mercantil, administrativa y tributaria*. Ed. Bosch. Barcelona, 2009.

**LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo**,

- “La omisión en la jurisprudencia del Tribunal Supremo”, *Dogmática y ley penal. Libro homenaje a Enrique Bacigalupo* (coord. por José Miguel Zugaldía Espinar, Jacobo López Barja de Quiroga). Marcial Pons. Madrid, 2004.

- *Tratado de Derecho Penal. Parte General*. Ed. Civitas, 1ª edición. Madrid, 2010.

**LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo/ ALONSO GONZÁLEZ, Anabel/ ENCINAR DEL POZO, Miguel Ángel**, *Código Penal comentado con jurisprudencia sistematizada y concordancias* (Dir. Juan Saavedra Ruiz). Ed. El Derecho. 1ª edición, Madrid, 2010.

**LORENZO SALGADO, José Manuel**,

- “El tipo agravado de blanqueo cuando los bienes tengan su origen en el delito de tráfico de drogas”, *III Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.

- “La modificación penal de 2010 en sede de organizaciones criminales internacionales, la justificación de la reforma en los medios de comunicación y sus conexiones con las drogas y el blanqueo de capitales”, *IV Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2014.

**LUZÓN CUESTA, José María**,

- *Compendio de derecho Penal. Parte Especial*. 17ª ed. Dykinson. Madrid, 2010.

- *Compendio de Derecho Penal. Parte General*. 21ª ed. Dykinson., Madrid, 2011.

**LUZÓN PEÑA, Diego Manuel**, *Lecciones de Derecho Penal. Parte General*. Ed. Tirant lo Blanch, 2ª ed. Valencia, 2012.

**MADRIGAL MARTÍNEZ-PEREDA, Consuelo**, “Soluciones jurisprudenciales a los problemas de prueba en el delito de blanqueo de capitales”, *Blanqueo de Capitales*. Boletín del ICAM nº 37. Madrid, 2007.

**MALLADA FERNÁNDEZ, Covadonga**,

- *Blanqueo de capitales y evasión fiscal*. Ed. Lex Nova. Valladolid, 2012.

- *Fiscalidad y blanqueo de capitales* (Tesis doctoral, publicada en 2012), Repositorio de la Universidad de Oviedo (tesis doctorales) disponible en el enlace: <http://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/12737>.

**MANJÓN-CABEZA OLMEDA, Araceli,**

- “Delito fiscal como delito antecedente de conductas de blanqueo de capitales”, *Revista de Derecho Penal*, Lex Nova, nº 37, 3/2012, disponible en el siguiente enlace <http://online.lexnova.es/servicesLXOL/visordoc?signatura=19AFA294BFB9502F77F738AC2FAA9A61C0DDEAA583539A0F2602532813C0E14F>

- “Ganancias criminales y ganancias no declaradas (El desbordamiento del delito fiscal y del blanqueo)”, *Libro homenaje al Prof. Luis Rodríguez Ramos*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.

- “Prevención y sanción del blanqueo de capitales”, *Delincuencia, finanzas y globalización*. CIS. Madrid, 2013.

- “Receptación y blanqueo de capitales (arts. 301 y 302)”, *Comentarios a la reforma penal de 2010*. Dirs. F. J. Álvarez García / J. L. González Cussac. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2010.

- “Un matrimonio de conveniencia: blanqueo de capitales y delito fiscal”, *Revista de Derecho Penal*. Nº 37, 2012. Ed. Lex Nova, 2012.

- “Venta de cantidades mínimas de droga: insignificancia y proporcionalidad. Bien jurídico y (des)protección de menores e incapaces”, *ADPCP*, Tomo 56, Fasc/Mes 1, 2003.

**MANTOVANI, Ferrando**, “La obligación de garantía reconstruida a la luz de los principios de legalidad, de solidaridad, de libertad y de responsabilidad personal”, *Modernas tendencias en la ciencia del derecho penal y en la criminología*. UNED. 1ª edición, Madrid, 2001.

**MANZANARES SAMANIEGO, José Luis**, *Código penal (adaptado a la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de julio)*. *Comentarios y jurisprudencia*. Editorial Comares. Granada, 2010.

**MAQUEDA ABREU, María Luisa**, *Derecho Penal. Parte General*. (dir. J. María Zugaldía Espinar). Ed. Tirant lo Blanch, 2ª edición, Valencia, 2004

**MARAVÉ GÓMEZ, Mario**, “El principio de confianza en el Derecho penal”, *Derecho penal del estado social y democrático de derecho. Libro homenaje a Santiago Mir Puig* (Dir. Diego Manuel Luzón Peña). La Ley. Madrid, 2010.

**MARTÍN PALLÍN, José Antonio**, “Blanqueo de dinero, secreto profesional y criminalidad organizada”, *Liber amicorum en Homenaje al Profesor Antonio González-Cuéllar García*. Ed. Colex, Madrid, 2006.

**MARTÍN QUERALT, Juan**,

- “La idoneidad del delito de defraudación tributaria como presupuesto del delito de blanqueo de capitales. Una cuestión inquietante”, *Tribuna Fiscal*, nº 266, Sección La opinión, mayo-junio 2013. Ed. CISS, 2013.

- “Delito fiscal y delito de blanqueo de capitales”, *Intercambio de información, blanqueo de capitales y lucha contra el fraude fiscal*. Instituto de Estudios Fiscales. Madrid, 2014.

**MARTÍN VELASCO, Laureano**, “La investigación policial en el blanqueo de capitales”, *Financiación del terrorismo, blanqueo de capitales y secreto bancario: un análisis crítico* (dir. José Luis González Cussac; coord. Antonio Fernández Hernández). Ed Tirant lo Blanch. Valencia, 2009.

**MARTÍNEZ ARRIETA, Andrés**, “El encubrimiento”, *Cuadernos de Derecho Judicial*, 1994. CGPJ. Madrid, 1994.

**MARTÍNEZ DE SALINAS, Luis**, “Últimas tendencias jurisprudenciales en materia de blanqueo de capitales”, *II Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011.

**MARTINEZ ESCAMILLA, Margarita**,

- *La imputación objetiva del resultado*, Edersa, Madrid, 1992.

- “La imputación objetiva del resultado. Una primera aproximación”, *Causalidad e imputación objetiva. Cuadernos de Derecho Judicial*. CGPJ. Madrid, 1994.

**MARTÍNEZ JIMÉNEZ, José Ramón**,

- “La gestión del riesgo en la propuesta de la IV directiva”, *IV Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2014.

**MARTÍNEZ RINCONES, José Francisco**, “Causalidad y Derecho Penal: Una Reflexión Hermenéutica”, *Imputación objetiva y dogmática penal*, Bolaños González, Mireya (Compiladora). Universidad de los Andes. Mérida, 2005.

**MARTÍNEZ-ARRIETA MÁRQUEZ DE PRADO, Ignacio**, *El autoblanqueo. El delito fiscal como antecedente del blanqueo de capitales*. Tirant lo Blanch. Valencia, 2014.

**MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ, Carlos**,

- “Algunas reflexiones sobre la moderna teoría del *big crunch* en la selección de bienes jurídico-penales (especial referencia al ámbito económico)”, *La Ciencia del Derecho Penal ante el nuevo siglo. Libro homenaje al Profesor Dr. D. José Cerezo Mir*. Ed. Tecnos, Madrid, 2002.

- “Blanqueo de Bienes”, *Derecho penal económico y de la empresa. Parte especial*. 2ª ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2005.

- “Blanqueo de Capitales”, *Derecho penal económico y de la empresa. Parte especial*. 3ª ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2011.

- *Derecho penal económico y de la empresa. Parte General*, 4ª ed. Ed. Tirant lo Blanch. Madrid, 2014

- “El concepto “*significativo*” del dolo: un concepto volitivo normativo”, *Problemas actuales de Derecho penal y Criminología. Libro Homenaje a la Profesora Mª del Mar Díaz Pita*. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2008.

- “La dimensión internacional del blanqueo de dinero”, *Estudios de Derecho Judicial* n°61, 2004. CGPJ. Madrid, 2004.

- “Los delitos de peligro en el derecho penal económico y empresarial”, *Un derecho penal comprometido: libro homenaje al Prof. Dr. Gerardo Landrove Díaz*. (VV. AA.) Francisco José Muñoz Conde (dir.), José Manuel Lorenzo Salgado (dir.), Juan Carlos Ferré Olivé (dir.), Emilio Cortés Bechiarelli (dir.), Miguel Ángel Núñez Paz (dir.). Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2011.

**MARTINOT, Sabrina**, “Tráfico de drogas y blanqueo de dinero ¿una política criminal europea?”, AP n°42, 1997-2.

**MARTOS NÚÑEZ, Juan Antonio**, “Receptación y blanqueo de capitales”, *Lecciones de Derecho Penal. Parte Especial. Tomo II*. Dir. Miguel Polaino Navarrete. Ed. Tecnos. Madrid, 2011.

**MATA BARRANCO, Norberto de la,**

- “Criminalidad Organizada en la Unión Europea: criminalidad económica y criminalidad sexual”, *Eguzkilore. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología*, nº 15, San Sebastián, 2001.
- “Límites de la sanción en el delito de receptación: la receptación sustitutiva y la teoría del mantenimiento. El art. 546 bis f) CP”, Madrid, 1989.

**MATALLÍN EVANGELIO, Ángela,**

- “Cooperación internacional en materia penal”, *Auditoría, prevención y represión del blanqueo de capitales*, Ed. Liber Factory. Madrid, 2014.
- “Delitos conexos”, *Auditoría, prevención y represión del blanqueo de capitales*, Ed. Liber Factory. Madrid, 2014.
- “Derecho penal español”, *Auditoría, prevención y represión del blanqueo de capitales*, Ed. Liber Factory. Madrid, 2014.
- “Derecho penal internacional y de la Unión Europea en la Prevención y Represión del blanqueo de capitales”, *Auditoría, prevención y represión del blanqueo de capitales*, Ed. Liber Factory. Madrid, 2014.
- “El "autoblanqueo" de capitales”, *Revista General de Derecho Penal*, nº. 20, 2013. Ed. Iustel, 2013.
- “Políticas de la Unión en la prevención y represión del blanqueo de capitales”, *Auditoría, prevención y represión del blanqueo de capitales*, Ed. Liber Factory. Madrid, 2014.

**MENDOZA BUERGO, Blanca**, “Gestión del riesgo y política criminal de seguridad en la sociedad del riesgo”, *Liber amicorum en Homenaje al Profesor Antonio González-Cuéllar García*, Ed. Colex, Madrid, 2006.

**MERINO ESCARTÍN, José Félix**, *Resumen de la Ley sobre blanqueo de capitales y prevención del terrorismo*, publicado en el siguiente enlace  
<http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/resumenes/2010-blanqueo.htm>.

**MESTRE DELGADO, Esteban,**



- “Delitos y sospechas”, *La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario*, nº 20, 2005.
- “Las campañas mediáticas sobre el blanqueo”, *III Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2013.
- “Las eximentes de ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, y de cumplimiento de un deber, y el blanqueo de capitales”, *I Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2009.

**MILANS DEL BOSCH, Santiago,**

- “Algunas cuestiones procesales en la investigación del delito de blanqueo de capitales”, *I Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2009.
- “El abogado, sujeto obligado de la normativa antiblanqueo”, *Blanqueo de Capitales*. Boletín del ICAM nº 37. Madrid, 2007.
- “El abogado como sujeto obligado de la normativa sobre medidas preventivas del blanqueo de capitales y del secreto profesional”, *La ley penal. Revista de derecho penal, procesal y penitenciario*, nº 20, 2005.
- “Principales novedades que introduce la ley 10/2010, de 28 de abril, sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo”, *II Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011.
- “Régimen sancionador en materia de blanqueo de capitales. Conclusiones”, *III Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.

**MILITELLO, Vincenzo**, “Hacia un Derecho penal europeo contra el crimen organizado”, *IV Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2014.

**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD**, *Lista Actualizada GAFI de las jurisdicciones no cooperadoras en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo*, disponible en el siguiente enlace <http://www.tesoro.es/sites/default/files/JURISDICCIONES%20NO%20COOPERADORAS%20Feb%202015%20.pdf>.

**MIR PUIG, Santiago,**

- *Derecho Penal. Parte General*, PPU, 4ª edición. Barcelona, 1996.
- *Derecho Penal. Parte General*, Ed. Reppertor, 9ª edición. Barcelona, 2010.
- “Límites del normativismo en Derecho penal”, *Derecho penal del siglo XXI, Cuadernos de Derecho Judicial* nº VIII, 2007. CGPJ. Madrid, 2007.
- “Significado y alcance de la imputación objetiva en Derecho penal”, *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*. 2003, núm. 05-05. Disponible en Internet, <http://criminet.ugr.es/recpc/05/recpc05-05.pdf>.

**MIRANDA ESTRAMPES, Manuel**, “Blanqueo de capitales, presunción de inocencia y prueba indiciaria”, La Ley 19196/2011, Año XXXII. Nº 7736, 15 de noviembre de 2011.

**MIRÓ LLINARES, Fernando**, “Intervención en actividades económicas ilícitas y conductas ¿neutrales?”, *ADPE*, 2011.

**MODELELL GONZÁLEZ, Juan Luis**, “Consideraciones teóricas sobre la posibilidad de extensión de la imputación objetiva a los delitos de mera actividad”, *Imputación objetiva y dogmática penal*, Bolaños González, Mireya (*Compiladora*). Universidad de los Andes. Mérida, 2005.

**MOLINA FERNÁNDEZ, Fernando,**

- “¿Qué se protege en el delito de blanqueo de capitales?: reflexiones sobre un bien jurídico problemático, y a la vez aproximación a la participación en el delito”, *Política criminal y blanqueo de capitales*, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2009.
- “La cuadratura del dolo problemas irresolubles, sorites y derecho penal”, *Homenaje al profesor Dr. Gonzalo Rodríguez Mourullo*. Ed. Civitas, Madrid, 2005.

**MOLINA MANSILLA, María del Carmen,**

- “El delito básico de blanqueo de capitales del artículo 301 del Código Penal”, *La ley penal. Revista de derecho penal, procesal y penitenciario*, nº 42, 2007.

**MOLINA MANSILLA, Mª del Carmen/ MOLINA MANSILLA, Luis**, *El blanqueo de dinero*. Ed. Bosch. Barcelona, 2008.

**MORENO, Fernando**, “Peligrosidad y daño directo del crimen organizado”, *Delincuencia, finanzas y globalización*. CIS. Madrid, 2013.

**MORENO CÁNOVES, Antonio/ RUIZ MARCO, Francisco,** *Delitos socioeconómicos*, Zaragoza, 2006.

**MORENO VERDEJO, Jaime**, “Aspectos concursales del delito de blanqueo”, *Revista Jurídica General*, Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, nº 37, 2007.

**MORILLAS CUEVA, Lorenzo,**

- “Aspectos dogmáticos y político-criminales del delito de blanqueo de capitales”, *Revista Foro FICP*, nº 2, septiembre 2013, disponible en el siguiente enlace <http://www.ficp.es/wp-content/uploads/Foro-FICP-2013-2.pdf> .

- *Reflexiones sobre el Derecho penal del futuro*, RECCP 04-06 (2002), disponible en el siguiente enlace [http://criminnet.ugr.es/recpc/recpc\\_04-06.html](http://criminnet.ugr.es/recpc/recpc_04-06.html) .

**MORSELLI, Elio**, “Observaciones críticas acerca de la teoría de la imputación objetiva”, *Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos: in memoriam*. (Vol. 1). Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2001.

**MUÑOZ CONDE, Francisco,**

- “Análisis de algunos aspectos del Anteproyecto de Reforma del Código Penal español de 14 noviembre 2008”, *Revista Penal.com*, nº 24 (2009), pág. 109, disponible en el enlace <http://www.uhu.es/revistapenal/index.php/penal/article/view/403/393>.

- “Consideraciones en torno al bien jurídico protegido del blanqueo de capitales”, *I Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2009.

- “De nuevo, sobre el «derecho penal del enemigo»”, *Revista penal*, nº 16, 2005, disponible en <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1202746>

- *Derecho Penal. Parte Especial*. Ed. Tirant lo Blanch. 19ª edición, Valencia, 2013.

- “¿Dominio de la voluntad en virtud de aparatos de poder organizados en organizaciones “no desvinculadas al Derecho”?”, *Revista penal* nº6, 2000.

- “El delito de blanqueo de capitales y el derecho penal del enemigo”, *III Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.

- “El Derecho penal en tiempos de cólera”, *Un derecho penal comprometido: libro homenaje al Prof. Dr. Gerardo Landrove Díaz*. (VV. AA.) Francisco José Muñoz

Conde (dir.), José Manuel Lorenzo Salgado (dir.), Juan Carlos Ferré Olivé (dir.), Emilio Cortés Bechiarelli (dir.), Miguel Ángel Núñez Paz (dir.). Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2011.

- “El nuevo Derecho penal autoritario”, *Estudios penales en recuerdo del profesor Ruiz Antón*. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2004.

- “¿Es el Derecho penal internacional un “Derecho penal del enemigo”?”, *Derecho penal del siglo XXI, Cuadernos de Derecho Judicial* n° VIII, 2007. CGPJ. Madrid, 2007.

**MUÑOZ CONDE, Francisco/ GARCÍA ARÁN, Mercedes**, *Derecho Penal. Parte General*. Ed. Tirant lo Blanch, 7ª edición, Madrid, 2007.

**MUÑOZ CUESTA, Javier**, “Blanqueo de capitales imprudente: una figura más que discutible. Comentario a la STS, Sala 2ª, de 14 septiembre 2005”, *Repertorio de jurisprudencia Aranzadi*, n° 7, 2005.

**NOREÑA SALTO José Ramón**, “Estructura del delito de blanqueo de capitales y su relación con el delito antecedente”, *La Ley* 19196/2011, Año XXXII. N° 7736, 15 de noviembre de 2011.

**NÚÑEZ CASTAÑO, Elena**, “Las transformaciones sociales y el derecho penal: del estado liberal al derecho penal de enemigos”, *Problemas actuales de Derecho penal y Criminología. Libro Homenaje a la Profesora Mª del Mar Díaz Pita*. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2008.

**NÚÑEZ PAZ, Miguel Ángel**,

- “Criminalidad, capital y corrupción. Orígenes delincuenciales y precisiones contemporáneas”, *I Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2009.

- “Delincuencia organizada y blanqueo de dinero. Algunos aspectos criminológicos (especial referencia a la situación española)”, *Blanqueo de dinero y corrupción en el sistema bancario*, Ediciones Universidad de Salamanca, 2002.

- “El tipo agravado de blanqueo de dinero procedente de delitos urbanísticos”, *III Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.

- “THE LONG AND WINDING ROAD: De un Derecho penal de los delincuentes a un derecho penal de los enemigos”, *Un derecho penal comprometido: libro homenaje al Prof. Dr. Gerardo Landrove Díaz*. (VV. AA.) Francisco José Muñoz Conde (dir.), José

Manuel Lorenzo Salgado (dir.), Juan Carlos Ferré Olivé (dir.), Emilio Cortés Bechiarelli (dir.), Miguel Ángel Núñez Paz (dir.). Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2011.

**OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, Emilio,**

- “Función y límites del principio de exclusiva protección de bienes jurídicos”, ADPCP, Tomo 43, Fasc/Mes 1, 1990.

- “Repercusión de la “responsabilidad penal por el producto” en los principios garantizadores y la dogmática penales (O de cómo sobrevive el “viejo” Derecho Penal cuando se quiere, y se sabe, aplicar a la “nueva” realidad social)”, *Nuevas posiciones de la Dogmática Jurídica Penal, Cuadernos de Derecho Judicial* nº VII, 2006. CGPJ. Madrid, 2006.

**OITANA, Carolina/ YRURE, Fausto,** *Posiciones tradicionales y actuales sobre el Dolo Eventual*, Revista Jurídica, Universidad Católica de Guayaquil, disponible en [http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=101&Itemid=34](http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=101&Itemid=34).

**OLIVA GARCÍA, Horacio,** “La defensa ante la acusación por blanqueo de dinero”, *I Congreso de prevención y represión del blanqueo de dinero* / coord. por Miguel Abel Souto, Nielson Sánchez Stewart. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2009.

**OLMO GÁLVEZ, Juan del,** “El blanqueo desde la perspectiva del juez instructor”, *Prevención y represión del blanqueo de capitales*, Estudios de Derecho Judicial nº 28, 2000. CGPJ. Madrid, 2000.

**OLLER RUBERT, Marta,** “Régimen sancionador en la prevención y represión del blanqueo de capitales”, *Régimen Jurídico de la Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales*. Ed. Tirant lo Blanch. Madrid, 2015.

**OMAR PLÉE, Raúl,** “El lavado de dinero: un fenómeno transnacional de política criminal contemporánea”, *Derecho penal empresario*. Dir. Guillermo J. Yacobucci. BdeF Editorial. Buenos Aires, Montevideo, 2010.

**Organización de Inspectores de Hacienda del Estado.** *Fraude, corrupción y blanqueo de capitales en España. Noviembre de 2007*, publicado en el siguiente enlace: <http://www.inspectoresdehacienda.org/>.

**ORTIZ VIDAL, María Dolores,** *Espacio Judicial Europeo y Tratado De Lisboa: Hacia un nuevo Derecho Internacional Privado*, publicado en el enlace siguiente: <http://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/viewFile/109/107>.

**ORTS BERENGUER, Enrique**, “Delimitación entre encubrimiento, receptación y blanqueo respecto a las modalidades de posesión y uso incorporadas en el artículo 301 por la L.O. 5/2010”, *III Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.

**PALACIOS CRIADO, M<sup>a</sup> Teresa**, “Blanqueo de Capitales. Agentes intervinientes: el deber de colaboración. Especial mención de los notarios”, *Judicatura y notariado ante los delitos económicos. Estudios de Derecho Judicial n° 73*. CGPJ. Madrid, 2006.

**PALMA HERRERA, José Manuel**,

- *Comentarios al Código Penal*. Tomo IX (dir. Manuel Cobo del Rosal). Ed. Edersa, 1999.

- *Los delitos de blanqueo de capitales*. Edersa. Madrid, 2000.

**PALOMO DEL ARCO, Andrés**,

- “Lavado de dinero y corrupción bancaria en la praxis. Problemas de investigación y prueba”, *Blanqueo de dinero y corrupción en el sistema bancario*, Ediciones Universidad de Salamanca, 2002.

- “Receptación y figuras afines”, *Estudios de Derecho Judicial*, 2 (1996). *Estudios sobre el Código Penal de 1995 (Parte Especial)*. Dir. Tomás Vives Antón Y J. Luis Manzanares Samaniego. CGPJ. Madrid, 1996.

**PAOLI, Letizia**, “Las paradojas del crimen organizado”, *Delincuencia, finanzas y globalización*. CIS. Madrid, 2013.

**PAREDES CASTAÑÓN, José Manuel**, “La determinación del nivel de riesgo permitido: un caso de derecho penal económico”, *Revista de Derecho y Proceso penal*, 12, 2004.

**PAREDES GÁZQUEZ, Juan Diego/ RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, José Miguel/ CUESTA GONZÁLEZ, Marta de la**, “Los paraísos fiscales a discusión”, *XIV Jornadas De Economía Crítica*. Valladolid, 2014, pág. 73, disponible en el enlace [www5.uva.es/jec14/comunica/A\\_FEC/A\\_FEC\\_3.pdf](http://www5.uva.es/jec14/comunica/A_FEC/A_FEC_3.pdf).

**PELÁEZ MARTOS, José María**, “El blanqueo de capitales en el sector inmobiliario”, *Fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción en el sector inmobiliario*, Valencia, Ediciones CISS. Valencia, 2009.

**PELLUZ ROBLES, Luis Carlos**, “Blanqueo de capitales: presupuestos del tipo penal, legislación interna-comunitaria y regulación en otros países”, *Judicatura y notariado ante los delitos económicos, Estudios de Derecho Judicial* nº 73. CGPJ. Madrid, 2006.

**PERALS CALLEJA, José**, “Blanqueo de capitales y actividad de los abogados”, *Blanqueo de Capitales*. Boletín del ICAM nº 37. Madrid, 2007.

**PÉREZ CEPEDA, Ana Isabel**, “De la sociedad neoliberal del riesgo a la expansión del Derecho penal”, *Problemas actuales de Derecho penal y Criminología. Libro Homenaje a la Profesora M<sup>a</sup> del Mar Díaz Pita*. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2008.

**PÉREZ MANZANO, Mercedes**,

- “Los Derechos Fundamentales al ejercicio de la profesión de abogado, a la libre elección de abogado y a la defensa y las "conductas naturales". La Sentencia del Tribunal Constitucional Alemán de 30 de marzo de 2004”, *Homenaje al Profesor Dr. Gonzalo Rodríguez Mourullo*. Ed. Civitas, Madrid, 2005.

- “El tipo subjetivo en los delitos de receptación y blanqueo de dinero”, *Estudios de Derecho Judicial* I, 1994. CGPJ. Madrid, 1994.

- “Neutralidad delictiva y blanqueo de capitales: el ejercicio de la abogacía y la tipicidad del delito de blanqueo de capitales”, *Política criminal y blanqueo de capitales*, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2009.

**PÉREZ DEL VALLE, Carlos**,

- “El delito de receptación: los elementos objetivos de la infracción”, *Cuadernos de Derecho Judicial* I, 1994. CGPJ. Madrid, 1994.

- “En el punto de mira. La crítica a la Teoría de los bienes jurídicos”, *Los desafíos del derecho penal en el siglo XXI. Libro homenaje al Profesor Dr. Gunter Jakobs*. ARA Editores, 2005.

**POLAINO NAVARRETE, Miguel**, *Lecciones de Derecho Penal. Parte General. Tomo II*. Ed. Tecnos. Madrid, 2013.

**PÓRFILO TRILLO NAVARRO, Jesús**, *Delitos económicos. La respuesta penal a los rendimientos de la delincuencia económica*. Ed. Dykinson. Madrid, 2008.

**PORRES ORTIZ DE URBINA, Eduardo de**, “Técnicas de blanqueo de capitales”, *Judicatura y notariado ante los delitos económicos, Estudios de Derecho Judicial* nº 73. CGPJ. Madrid, 2006.

**PRIETO DEL PINO, Ana María/ GARCÍA MAGNA, Deborah Isabel/ MARTÍN PARDO, Antonio**, *La deconstrucción del concepto de blanqueo de capitales*, publicado en formato electrónico por la Revista para el Análisis del Derecho (InDret), 3/2010, disponible en el siguiente enlace [www.indret.com/pdf/747\\_es.pdf](http://www.indret.com/pdf/747_es.pdf).

**QUERALT JIMÉNEZ, Joan Josep**, *Derecho Penal Español. Parte Especial*. Ed. Atelier. Barcelona, 2010.

**QUINTERO OLIVARES, Gonzalo**,

- *Comentarios a la parte especial del Derecho penal*. Ed. Aranzadi. 7ª edición, 2008.

- *Comentarios al Código Penal. Tomo II. Parte especial (artículos 138 a 318)* Ed. Aranzadi, Cizur Menor, 2008.

- “El delito fiscal y el ámbito material del delito de blanqueo”, *Actualidad jurídica Aranzadi*, nº 698. Febrero 2006.

- *Parte General del Derecho Penal*. Ed. Aranzadi. 2ª edición, 2007.

- “Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil” *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología* (en línea). 2010, núm.12-r2, p. r2:1-r2:20, disponible en el enlace <http://criminnet.ugr.es/recpc/12/recpc12-r2.pdf>.

**QUIRK, Peter J.**, “El blanqueo de dinero: repercusiones macroeconómicas”, *Ekonomiaz: Revista vasca de economía*, nº 39, 1997, disponible en el enlace siguiente: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=273774>.

**RAGUÉS I VALLÈS, Ramón**,

- “Blanqueo de capitales y negocios standard. Con especial mención a los abogados como potenciales autores de un delito de blanqueo”, *¿Libertad económica o fraudes punibles?: Riesgos penalmente relevantes e irrelevantes en la actividad económico-empresarial* (coord. por Jesús María Silva Sánchez). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2003.

- *De nuevo, el dolo eventual: un enfoque revolucionario para un tema clásico*, publicado en formato electrónico por la Revista para el Análisis del Derecho (InDret), 3/2012, disponible en el siguiente enlace: <http://www.indret.com/pdf/899.pdf>.

- *La atribución del conocimiento en el ámbito de la imputación dolosa* (Tesis doctoral), 1998, disponible en el siguiente enlace: <http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CEQQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.tdx.cat%2Fbitstream%2F10803%2F7299%2F5%2FTRRV3de9.pdf&ei=sTYUrmnKsfLywPy>



**REBOLLO VARGAS, Rafael**, “Receptación y blanqueo de capitales”, *Derecho Penal Español. Parte Especial (II)*. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011.

**REQUENA JULIANI, Jaime**, *Intercambiabilidad de acción y omisión en los delitos de dominio: Posición de garante e imputación objetiva*, Ed. Dykinson. Madrid, 2010.

- “Intervención delictiva e imputación objetiva”, ADPCP, LX, 2007.

- “Normatividad e imputación objetiva: respuesta a la recensión de Feijóo Sánchez a Frisch/Robles Planas, Desvalorar e imputar (2005)”, *Revista Electrónica para el*

*Análisis del Derecho (InDret)* 3/2006, disponible en el siguiente enlace: [www.raco.cat/index.php/InDret/article/download/121392/167840](http://www.raco.cat/index.php/InDret/article/download/121392/167840).

**ROBLES PLANAS, Ricardo/ PASTOR MUÑOZ, Nuria**, *Lecciones de Derecho Penal. Parte Especial*. Dir. Jesús María Silva Sánchez. Ed Atelier. Barcelona, 2009.

**RODRÍGUEZ MESA, María José**, *La atribución de responsabilidad en comisión por omisión*. Ed. Aranzadi. Cizur Menor, 2005

**RODRÍGUEZ MOURULLO, Gonzalo**,

- *Derecho Penal. Parte General. Tomo I*. Ed. Civitas. Madrid, 1977.

- “El bien jurídico protegido en los delitos societarios con especial referencia a la administración desleal”, *Cuadernos de derecho judicial*, 1999. CGPJ, 1999.

- “La cláusula general sobre la comisión por omisión”, *Política Criminal y Reforma Penal. Homenaje a la memoria del Profesor Dr. D Juan del Rosal*, Ed. Edersa, 1.993.

- “Nuevas reflexiones sobre la cláusula general de la comisión por omisión”, *Estudios de Derecho Penal Económico*. Ed. Civitas. Cizur Menor, 2009.

**RODRÍGUEZ RAMOS, Luis**, *Código Penal comentado y con Jurisprudencia*. Editorial La Ley. 4ª edición. Madrid, 2011.

**ROLDÁN, José María**, “La cooperación en materia de lucha contra el blanqueo a nivel internacional: el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)”, *Prevención y represión del blanqueo de capitales, Estudios de Derecho Judicial* nº 28, 2000. CGPJ. Madrid, 2000.

**ROSADO DOMÍNGUEZ, Fernando**,

- “El blanqueo de dinero. Deficiencias en zonas internacionales de riesgo”, *Prevención y represión del blanqueo de capitales, Estudios de Derecho Judicial* nº 28, 2000. CGPJ. Madrid, 2000.

- *España y el informe de evaluación GAFI: riesgos y oportunidades*, disponible en el enlace <http://www.controlcapital.net/noticia/2969/actualidad/espana-y-el-informe-de-evaluacion-gafi:-riesgos-y-oportunidades.html>.

**ROXIN, Claus**,

- *Derecho Penal Parte General. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito*. Ed. Civitas. 2ª ed. Madrid, 1997.

- “El concepto de bien jurídico como instrumento de crítica legislativa sometido a examen”, *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 2013, núm. 15-1, disponible en el siguiente enlace: <http://criminet.ugr.es/recpc/15/recpc15.html>.

- “¿Es la protección de bienes jurídicos una finalidad del Derecho penal?”, *La teoría del bien jurídico* (VV.AA). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2007.

- “Las formas de intervención en el delito: estado de la cuestión”, *Sobre el estado de la teoría del delito*, Ed. Civitas. Madrid, 2000.

**RUEDA MARTÍN, M<sup>a</sup> Ángeles,**

- “Consideraciones acerca de la relevancia penal de las acciones cotidianas en la comisión de un hecho doloso”, *Revista penal*, nº 9, 2002, disponible en el enlace <http://www.uhu.es/revistapenal/index.php/penal/article/viewArticle/132>.

- “La concreción del deber objetivo de cuidado en el desarrollo de la actividad médico-quirúrgica curativa”, *InDret Penal*, nº 4, 2009, disponible en el enlace siguiente: [www.raco.cat/index.php/InDret/article/download/141388/192899](http://www.raco.cat/index.php/InDret/article/download/141388/192899).

- *La Teoría de la imputación objetiva del resultado en el delito doloso de acción*. Ed. Bosch, Madrid, 2001.

**RUIZ RODRÍGUEZ, Luis Ramón**, “Encubrimiento y receptación. Los específicos elementos subjetivos del injusto”, *Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos: in memoriam*, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2001.

**SÁEZ PONTE, E.**, *La Energía oscura del dinero*. Ed. Netbiblo, Oleiros, 2007.

**SALAZAR ARÉVALO, José Luis**, “Cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia organizada”, *Terrorismo y delincuencia organizada: un enfoque de derecho y economía*, Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas UANM. México, 2006.

**SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, María Isabel**, *El moderno derecho penal y la anticipación de la tutela penal*, Secretariado de publicaciones e intercambio científico Universidad de Valladolid, Valladolid, 1999.

**SÁNCHEZ GARRIDO, José Antonio,**

- “Jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo sobre el régimen disciplinario en materia de blanqueo de capitales”, *La Ley* 19196/2011, Año XXXII. N° 7736, 15 de noviembre de 2011.

- “Marco legal previsor de las infracciones administrativas en materia de blanqueo”, La Ley 19196/2011, Año XXXII. Nº 7736, 15 de noviembre de 2011.

**SÁNCHEZ STEWART, Nielson,**

- “Abogados y blanqueo de capitales”, *II Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011.

**SÁNCHEZ TOMÁS, José Miguel,** *Comisión por omisión y omisión de socorro agravada*. Ed. Bosch, 1ª ed., Barcelona, 2.005.

**SÁNCHEZ ULLED, Emilio Jesús,** “Blanqueo de capitales en el sector bancario y corrupción. Aspectos prácticos”, *Blanqueo de dinero y corrupción en el sistema bancario*, Ediciones Universidad de Salamanca, 2002.

**SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, Javier,** “Blanqueo de Capitales y abogacía: un necesario análisis crítico desde la teoría de la imputación objetiva”, *Blanqueo de Capitales*. Boletín del ICAM nº 37. Madrid, 2007.

**SANZ MULAS, Nieves,** “El Derecho penal del enemigo y la obstinación de justificar lo injustificable”, *Un derecho penal comprometido: libro homenaje al Prof. Dr. Gerardo Landrove Díaz*. (VV. AA.) Francisco José Muñoz Conde (dir.), José Manuel Lorenzo Salgado (dir.), Juan Carlos Ferré Olivé (dir.), Emilio Cortés Bechiarelli (dir.), Miguel Ángel Núñez Paz (dir.). Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2011.

**SCHULENBURG, Johanna,** “Relaciones dogmáticas entre bien jurídico, estructura del delito e imputación objetiva”, *La teoría del bien jurídico* (VV.AA). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2007.

**SCHÜNEMANN, Bernd,**

- “El llamado delito de omisión impropia o la comisión por omisión”, *Estudios penales en homenaje a Enrique Gimbernat*. Ed. Edisofer. Madrid, 2008.

- “El principio de protección de bienes jurídicos como punto de fuga de los límites constitucionales de los tipos penales y de su interpretación”, *La teoría del bien jurídico* (VV.AA). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2007.

- *Fundamentos y límites de los delitos de omisión impropia*, Ed. Marcial Pons. Madrid, 2006.

- “La llamada crisis financiera: ¿fracaso del sistema o crimen organizado global?”, *Delincuencia, finanzas y globalización*. CIS. Madrid, 2013.

**SEELMANN, Kurt**, “El concepto de bien jurídico, el *harm principle* y el modelo de reconocimiento como criterios de merecimiento de pena”, *La teoría del bien jurídico* (VV.AA). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2007.

**SEHER, Gerard**, “La legitimación de normas penales basada en principios y el concepto de bien jurídico”, *La teoría del bien jurídico* (VV.AA). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2007.

**SERRANO GONZÁLEZ, Alfonso/ SERRANO MAÍLLO, Alfonso**, *Derecho Penal. Parte Especial*. Ed. Dykinson. 15ª ed., Madrid, 2010.

**SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, José Luis**, “Algunas cuestiones relativas a la regulación penal del blanqueo de capitales”, *Estudios Jurídicos en memoria del Profesor Dr. D. J. Ramón Casabó Ruiz; vol. II. Institut de Criminologia*. Valencia, 1997.

**SERVICIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALS E INFRACCIONES MONETARIAS**, *Guía para la prevención del riesgo de blanqueo de capitales en banca de correspondencia*, disponible en el siguiente enlace: [http://www.sepblac.es/espanol/informes\\_y\\_publicaciones/otra\\_documentacion.htm](http://www.sepblac.es/espanol/informes_y_publicaciones/otra_documentacion.htm).

**SILVA SÁNCHEZ, Jesús María**,

- “Aberratio ictus e imputación objetiva”, ADPCP, XXXVII, 1994.

- *Aproximación al Derecho penal contemporáneo*. Ed. Bosch. Barcelona, 1992.

- *El delito de omisión. Concepto y sistema*. Ed. BdeF. 2ª ed. Buenos Aires, 2006.

- “Expansión del derecho penal y blanqueo de capitales”, *II Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011.

- “Hacia el derecho penal del estado de la prevención. La protección penal de las agencias administrativas de control en la evolución de la política criminal”, *¿Libertad económica o fraudes punibles?: Riesgos penalmente relevantes e irrelevantes en la actividad económico-empresarial* (Coord. Jesús María Silva Sánchez). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2003.

- “Informe sobre las discusiones. V. Acciones neutrales y otras cuestiones. La discusión sobre la ponencia del Profesor Roxin”, *Sobre el estado de la teoría del delito*, Ed. Civitas. Madrid, 2000.
  - “Ingeniería financiera y derecho penal”, en *Fenómenos delictivos complejos, Cuadernos de derecho judicial*, nº 9, 1999. CGPJ, 1999.
  - “Introducción”, *¿Libertad económica o fraudes punibles?: Riesgos penalmente relevantes e irrelevantes en la actividad económico-empresarial*. (coord. por Jesús María Silva Sánchez). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2003.
  - *La expansión de Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales*. Ed. Civitas. 1ª ed., Madrid, 1999.
  - *La expansión de Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales. Segunda edición, revisada y ampliada*. Ed. Civitas. 2ª ed., Madrid, 2001.
  - “La intervención de los notarios en la comisión de delitos patrimoniales y económicos”, *Judicatura y notariado ante los delitos económicos, Estudios de Derecho Judicial* nº 73. CGPJ. Madrid, 2006.
  - “La receptación específica”, *Comentarios a la legislación penal, tomo XII. Delitos contra la salud pública* (dir. Cobo del Rosal), Madrid, 1990.
  - “Los delitos patrimoniales y económico-financieros”, *Diario La Ley, Sección Tribuna*, 23 Dic. 2010, Año XXXI. Nº 7534. Ed. La Ley, 2010.
  - “¿«Pertenencia» o «Intervención»? Del delito de «pertenencia a una organización criminal» a la figura de la «participación a través de organización en el delito»”, *Estudios penales en recuerdo del Profesor Ruiz Antón*, Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2004.
  - “Política criminal y reforma legislativa en la comisión por omisión. (El artículo 10 del Proyecto del Código penal de 1.992)”, *Política Criminal y Reforma Penal. Homenaje a la memoria del Profesor Dr. D Juan del Rosal*. Ed. Edersa. Madrid 1993.
- SOTO NAVARRO, Susana**, *La protección penal de los bienes colectivos en la sociedad moderna*. Ed. Comares, Granada, 2003.
- STERNBERG-LIEBEN, Detlev**, “Bien jurídico, proporcionalidad y libertad del legislador penal”, *La teoría del bien jurídico* (VV.AA). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2007.

**STRATENWERTH, Günter**, “La criminalización en los delitos contra bienes jurídicos colectivos, *La teoría del bien jurídico* (VV.AA). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2007.

**SUÁREZ GONZÁLEZ, Carlos J.**,

- “Blanqueo de capitales y merecimiento de pena: consideraciones críticas a la luz de la legislación española”, *Cuadernos de Política Criminal* nº 58, 1996.

- “Organización delictiva, comisión concertada u organizada”, *Homenaje al Profesor Dr. Gonzalo Rodríguez Mourullo*. Ed Thomson. Madrid, 2005.

**SUÁREZ-MIRA RODRÍGUEZ, Carlos**, *Manual de Derecho penal. Tomo II. Parte especial*. Ed. Thomson. 2º edición, 2004.

**TATO RODRÍGUEZ, Mercedes**,

- “Estadísticas sobre la aplicación de la normativa administrativa en España hasta la Ley de 2010 de prevención del blanqueo”, *III Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.

- “Estadísticas sobre la aplicación de la normativa administrativa de prevención del blanqueo en el campo internacional”, *IV Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2014.

**TENA ARAGÓN, María Félix**, “La imprudencia profesional y la imprudencia del profesional”, *La imprudencia. Cuadernos de Derecho Judicial*, XVI, 2005. CGPJ. Madrid, 2005.

**TIEDEMANN, Klaus**, *Manual de Derecho Penal Económico. Parte General y Especial*. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2010.

**TOMÁS-VALIENTE LANUZA, Carmen**, “El delito de blanqueo de capitales”, *Auditoría, prevención y represión del blanqueo de capitales*, Ed. Liber Factory. Madrid, 2014.

**TORÍO LÓPEZ, Ángel**,

- “Cursos causales no verificables en derecho penal”, ADPCP, XXXVI, 1983.

- “Límites político criminales del delito de comisión por omisión”, XXXVII, ADPCP, 1984.

- “Naturaleza y ámbito de la teoría de la imputación objetiva”, ADPCP, XXXIX, 1986.
- “Racionalidad y relatividad en las teorías jurídicas del delito”, ADPCP, XLII, 1989.
- “Teoría cognitiva del dolo y concepto de temeridad (Recklessness)”, *Universitas vitae: homenaje a Ruperto Núñez Barbero*. Coord. por Fernando Pérez Álvarez, Miguel Ángel Núñez Paz, Isabel García Alfaraz. Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca, 2007.

**TORRES-DULCE LIFANTE, Eduardo**, “El blanqueo de dinero en paraísos fiscales”, *Fenómenos delictivos complejos. Cuadernos de derecho judicial*, nº IX, 1999, CGPJ, 1999.

**URBANO CASTILLO, Eduardo de**, “Sobre las distintas modalidades del «blanqueo de dinero»”, *La Ley. Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*, nº 5, 2004.

**URIOL EGIDO, Carmen**, “De los medios de pago”, *Régimen Jurídico de la Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales*. Ed. Tirant lo Blanch. Madrid, 2015.

**VARELA CASTRO, Luciano**,

- “Los delitos contra la vida y la integridad física de los trabajadores”, *La protección penal de los trabajadores: tipos, instrucción y enjuiciamiento, Cuadernos de Derecho Judicial*, V, 2008.
- “Últimas líneas jurisprudenciales en sede de blanqueo”, *III Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.

**VEGA SÁNCHEZ, María Victoria**, *Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Nueva Ley 10/2010, de 20 de abril*. Editorial Universitaria Ramón Areces. Madrid, 2011.

**VELASCO NÚÑEZ, Eloy**, *Crimen organizado, internet y nuevas tecnologías*, disponible en el enlace [ruc.udc.es/dspace/.../1/ponencias\\_13\\_Velasco\\_Nunez\\_245-282.pdf](http://ruc.udc.es/dspace/.../1/ponencias_13_Velasco_Nunez_245-282.pdf).

**VICENTE REMESAL, Javier de**, “La Regulación de la Imprudencia en el Código Penal”, *Revista Xurídica Galega*, nº. 23, 1999, disponible en el enlace <https://www.rexurga.es/pdf/COL098.pdf>.

**VIDALES RODRÍGUEZ, Catalina**,



- “Blanqueo, ¿qué es blanqueo? (Estudio del artículo 301.1 del Código Penal Español tras la reforma de la LO 5/2010)”, *Revista General de Derecho Penal*, nº 18, 2012. Ed. Iustel, 2013.
- “El delito de blanqueo de capitales”, *Régimen Jurídico de la Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales*. Ed. Tirant lo Blanch. Madrid, 2015.
- “El fenómeno asociativo como actividad delictiva previa al delito de blanqueo de capitales (reflexiones a propósito de la Sentencia 25191/14, de 27 de febrero, de las Secciones Unidas Penales de la Corte Suprema de Casación italiana)”, *Estudios penales y criminológicos*, nº 35, 2015, disponible en el enlace <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5016367>.
- “Introducción”, *Régimen Jurídico de la Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales*. Ed. Tirant lo Blanch. Madrid, 2015.
- “La ley de prevención del blanqueo en la legislación española: disposiciones generales”, *Régimen Jurídico de la Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales*. Ed. Tirant lo Blanch. Madrid, 2015.
- “La última reforma del Código Penal en materia de drogas. (Novedades introducidas por la Ley Orgánica de 12 de noviembre de 1992)”, *Revista General de Derecho*, nº 583, 1993.
- *Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el Código penal de 1995*. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 1997.

**VILABOY LOIS, Lotario**, “Aspectos procesales de la persecución penal del blanqueo de dinero”, *III Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.

**VILLEGAS GARCÍA, M.<sup>a</sup> Ángeles**, “El autoblanqueo y el delito fiscal como delito antecedente del delito de blanqueo: la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo n.º 974/2012, de 5 de diciembre”, *Revista del Poder Judicial*, nº 95, año 2013. GCPJ.

**VIVES ANTÓN, Tomás Salvador**,

- “Acción y omisión. Tres notas a un *status questionis*”, *Estudios penales en recuerdo del Profesor Ruiz Antón*, Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2004.

- “Reexamen del dolo”, *Problemas actuales de Derecho penal y Criminología. Libro Homenaje a la Profesora M<sup>a</sup> del Mar Díaz Pita*. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2008.

**VIVES ANTÓN, Tomás Salvador/ GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis**, *Comentarios al Código Penal de 1995, I*. Valencia, 1996.

**VON HIRSCH, Andrew**, “El concepto de bien jurídico y el principio del daño”, *La teoría del bien jurídico* (VV.AA). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2007.

**VON HIRSCH, Andrew/ WOHLERS, Wolfgang**, “Teoría del bien jurídico y estructura del delito. Sobre los criterios de una imputación justa”, *La teoría del bien jurídico* (VV.AA). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2007.

**WITTIG, Petra**, “Teoría del bien jurídico, *harm principle* y delimitación de ámbitos de responsabilidad”, *La teoría del bien jurídico* (VV.AA). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2007.

**WOHLERS, Wolfgang**, “Las jornadas desde la perspectiva de un escéptico del bien jurídico”, *La teoría del bien jurídico* (VV.AA). Ed. Marcial Pons. Madrid, 2007.

**ZARAGOZA AGUADO, Javier Alberto**,

- “Artículo 301”, *Comentarios al Código Penal* (Coord. Manuel Gómez Tomillo). Ed. Lex Nova. Madrid, 2010.

- “Análisis sustantivo del delito (I): Cuestiones de interés sobre el delito de blanqueo de bienes de origen criminal: la prueba indiciaria. La comisión culposa. Nuevas orientaciones en derecho comparado”, *Prevención y represión del blanqueo de capitales*, Estudios de Derecho Judicial nº 28, 2000. CGPJ. Madrid, 2000.

- Artículo 301”, *Comentarios al Código Penal* (Coord. Manuel Gómez Tomillo). Ed. Lex Nova. Madrid, 2010.

- “Aspectos legales de la prevención del blanqueo de capitales”, *Curso Superior Universitario en Derecho Penal Económico. Un diálogo entre Jueces, Fiscales, Abogados y Profesores (Cátedra de Investigación Financiera y Forense KPMG-URJC)*, Ed. Universidad Rey Juan Carlos. 1ª ed., Madrid, 2009. Versión digitalizada disponible en el siguiente enlace: <http://www.kpmg.com/ES/es/ActualidadNovedades/ArticulosyPublicaciones/Documents/Curso-Superior-Derecho-Penal-Economico.pdf>.

- “Aspectos probatorios y técnicas de investigación en los procesos por lavado de dinero: medidas preventivas y cautelares, recomendaciones internacionales”, *Combate del lavado de activos desde el sistema judicial*. 3ª edición. Washington, DC:

Organización de los Estados Americanos, República Bolivariana de Venezuela, y Banco Interamericano de Desarrollo, 2007, disponible en el siguiente enlace [http://www.cicad.oas.org/lavado\\_activos/pubs/Combate\\_Lavado\\_3ed.pdf](http://www.cicad.oas.org/lavado_activos/pubs/Combate_Lavado_3ed.pdf).

- “Cooperación Judicial Internacional en la Lucha contra el Lavado de Dinero”, *Combate del lavado de activos desde el sistema judicial*. 3ª edición. Washington, DC. Organización de los Estados Americanos, República Bolivariana de Venezuela y Banco Interamericano de Desarrollo, 2007, disponible en el siguiente enlace [http://www.cicad.oas.org/lavado\\_activos/pubs/Combate\\_Lavado\\_3ed.pdf](http://www.cicad.oas.org/lavado_activos/pubs/Combate_Lavado_3ed.pdf).

- “El blanqueo de bienes de origen criminal”, *Derecho penal económico. Manuales de Formación Continuada*, nº 14 (año 2001). CGPJ. Madrid, 2001.

- "El blanqueo de dinero. Aspectos sustantivos. Su investigación", *Cuadernos de Derecho Judicial I*, 1994. CGPJ. Madrid, 1994.

- “La prevención del blanqueo de capitales. La comisión culposa y las profesiones jurídicas”, *I Congreso de prevención y represión del blanqueo de capitales* (coords. Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart). Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2009.

**ZUGALDÍA ESPINAR, José Miguel**, “Seguridad ciudadana y Estado Social de Derecho”, *Estudios penales en recuerdo del Profesor Ruiz Antón*, Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2004.